

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO, MORAL Y POLÍTICA I



TESIS DOCTORAL

**La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de
autodeterminación de los pueblos:**

Una exploración a la luz del caso yugoslavo

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Isidro García Mingo

Directora

María José Falcón y Tella

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO, MORAL Y POLÍTICA I



TESIS DOCTORAL

LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO AL DESARROLLO Y EL
DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.
UNA EXPLORACIÓN A LA LUZ DEL CASO YUGOSLAVO

AUTOR: ISIDRO GARCÍA MINGO
DIRECTORA: MARÍA JOSÉ FALCÓN Y TELLÁ

2015

Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento por el apoyo y la confianza de mi directora, Dra. María José Falcón, cuyas correcciones y observaciones me han ayudado inestimablemente a dar la forma final a este trabajo.

Asimismo debo agradecer el apoyo constante e incondicional de Blanca Mingo y del Pf. Dr. Javier García Guinea.

Tras seis años de trabajo y vivencias en los Balcanes, se me hace complicado, en tan poco espacio, agradecer lo suficiente a todos los que me han ayudado a comprender el alcance y la naturaleza de las distintas fronteras que se levantan y derriban entre las personas. Debo, por ello, agradecer especialmente la inspiración inestimable de mis compañeros y amigos de Movimiento por la Paz (MPDL) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), particularmente a aquellos que trabajaron en la Oficina Técnica de Cooperación con los Balcanes.

Debo agradecer también el apoyo del con cariño recordado Dr. Vojin Dimitrijević, Director del *Beogradski centar za ljudska prava*. Siempre me resultará amargo que el manuscrito completo de esta tesis no llegara a sus manos. No puedo olvidar a los compañeros y amigos, con con quienes he compartido incontables horas de discusión constructiva, útiles para limar los argumentos presentados, con especial mención a: Erma Mulabdić, Francisco Segovia, Asteris Huliaras, Cinzia Tarletti, Davor Marko, Jordi Martín, Fermín Córdoba, Alina Trkulja, Mikel Córdoba, Miguel G. Lázaro, Milena Šošić, Miguel Rodríguez Andreu, Ivana Stepanović, David Ruiz Crespo, José Luis Mingo, Gonzalo Luque, David Torres, Jasmina Milenković, Jesús Gago, Bojan Gavrilović y Juliane Mertsching.

Quisiera extender mi agradecimiento a todos los que me han ayudado a reunir la información y bibliografía relevante, muy especialmente a: Nina Karać y todo el personal de la Biblioteca del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, Mirjana Mirosavljević, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia y al personal de Arhiv Jugoslavije, Belgrado, Serbia, y a William McKinney, responsable de la Biblioteca del European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg, Alemania.

A todos aquellos que se quedaron al otro lado de la frontera



Índice

§1 Introducción	1
§1.1 Objeto y justificación del trabajo	1
§1.2 Estructura	3
§1.3 Metodología (i). Enfoque y consideraciones generales	4
§1.4 Metodología (ii). Técnicas metodológicas y fuentes bibliográficas	8
§2 El derecho humano al desarrollo	10
§2.1 Fuentes del derecho al desarrollo	11
§2.2 Fundamentación del derecho al desarrollo	31
§2.2.1 Fundamentación moral del derecho al desarrollo	33
§2.2.2 Fundamentación política del derecho al desarrollo	53
§2.3 Definición, contenido, sujetos titulares del derecho al desarrollo	55
§2.3.1 Definición y contenido del derecho al desarrollo	55
§2.3.2 Sujetos titulares del derecho al desarrollo	67
§2.3.3 Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho al desarrollo	70
§2.4 Validez jurídica del derecho al desarrollo	76
§2.5 Eficacia del derecho al desarrollo	86
§2.6 Influencia del Movimiento de Países no Alineados en la conformación del derecho al desarrollo	94
§2.7 La contribución yugoslava al derecho al desarrollo.	107
§2.7.1 Aportación de la República Socialista Federal de Yugoslavia al desarrollo del Derecho Internacional	107
§2.7.2 La contribución yugoslava al derecho al desarrollo como derecho humano	112
§2.7.3 La doctrina yugoslava y el derecho al desarrollo	116
§3 El derecho de autodeterminación de los pueblos	122
§3.1 Génesis histórica del derecho a la autodeterminación	123
§3.1.1 La nueva sociedad internacional y las teorías contractualistas	123
§3.1.2 Revolución y nacionalismo en el siglo XIX	137
§3.1.3 La autodeterminación de los pueblos en el período de entreguerras	166
§3.2 Fuentes del derecho a la autodeterminación	190
§3.3 Fundamentos y contenido del derecho de autodeterminación	207
§3.3.1 La autodeterminación de los pueblos como derecho humano	208
§3.3.2 Contenido del derecho de autodeterminación (i). Consideraciones generales, dificultades para definir el contenido y definiciones propuestas	226
§3.3.3 Contenido (ii). Autodeterminación interna y externa. Diferentes concepciones de autodeterminación interna	238
§3.3.4 Contenido (iii). Autodeterminación externa, prohibición del colonialismo y debate sobre el derecho a la secesión	246
§3.3.5 Contenido (iv). Críticas a la distinción entre autodeterminación interna y externa	268
Distinción entre substancia y remedios. Aspecto constitutivo y aspecto continuo del derecho de autodeterminación	

§3.3.6	Contenido (v). En búsqueda de un núcleo de certeza	271
§3.3.7	Contenido (vi). El derecho de autodeterminación económica. Autodeterminación y políticas de desarrollo político, social, económico, cultural	275
§3.4	Sujetos del derecho de autodeterminación	287
§3.4.1	Sujetos titulares del derecho de autodeterminación	287
§3.4.2	Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho de autodeterminación	320
§3.5	El derecho de autodeterminación en la República Socialista Federal de Yugoslavia en su conformación, evolución y desintegración	324
§3.5.1	Génesis y evolución de concepciones antagonistas del derecho de autodeterminación durante el período de entreguerras	326
§3.5.2	El derecho de autodeterminación de los pueblos, incluido el derecho a la secesión, en la República Socialista Federal de Yugoslavia: entre el nacionalismo y el socialismo	334
§3.5.3	La desintegración de Yugoslavia. Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración	351
§3.5.3.1	La desintegración de Yugoslavia (I). Causas y relación con los procesos de desarrollo	351
§3.5.3.2	La desintegración de Yugoslavia (II). Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración	358
§3.5.4	Los Acuerdos de Sucesión de 2001: una visión patrimonialista, un enfoque de derechos humanos limitado	372
§3.5.4.1	Los Acuerdos de Sucesión. Su contenido en relación con la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983	374
§3.5.4.2	Los Acuerdos de Sucesión de 2001 en relación con la sucesión de Estados en materia de tratados de derechos humanos	380
§3.5.4.3	Sucesión de Estados y nacionalidad	387
§3.5.4.4	El derecho de opción de nacionalidad en relación con la nacionalidad como criterio de distribución de recursos y derechos	392
§3.5.5	Notas adicionales acerca de la interpretación del derecho de autodeterminación tras los Acuerdos de Sucesión de 2001: los casos de Montenegro y Kosovo	399
§3.5.5.1	Montenegro: la advertencia de los efectos de su independencia sobre los derechos de grupos sociales vulnerables	401
§3.5.5.2	Kosovo: la incorporación parcial de un enfoque de derechos humanos en un proceso inacabado	404
§4	La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos	415
§4.1	Introducción. La relación entre desarrollo y autodeterminación como relación de dos derechos humanos.	415
§4.1.1	Antecedentes (i): de la autarquía eudaimónica de la polis al progreso de las naciones	416
§4.1.2	Antecedentes (ii): expansión de los significados de autodeterminación y desarrollo en el marco internacional de derechos humanos	432
§4.2	Fundamentos y premisas para el estudio de la relación entre dos derechos humanos	438
§4.2.1	Dos derechos humanos distinguibles relacionados entre sí	438
§4.2.2	Características básicas de la relación entre los derechos en cuanto derechos humanos: universalidad, indivisibilidad e interdependencia	439
§4.2.3	Límites y delimitación de dos derechos humanos	443
§4.2.4	Relación entre dos derechos en cuanto procesos	446
§4.2.5	Relación entre dos derechos multidimensionales, proyectados en procesos expansivos como fines y causas	448
§4.2.6	Formulación acorde con la relación en las fuentes normativas	451

§4.3 Análisis de la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir de las fuentes	451
§4.4 La relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir del análisis de compatibilidad de la definición de derecho al desarrollo con las diferentes definiciones y contenido esencial del derecho de autodeterminación	463
§4.4.1 Introducción	363
§4.4.2 El derecho de autodeterminación como elemento del vector de desarrollo	465
§4.4.3 El derecho de autodeterminación como definición del conjunto de personas al que se aplica el vector de desarrollo	469
§4.4.3.1 Aplicación analítica o especulativa del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas	470
§4.4.3.2 Aplicación material del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas	473
§4.4.3.3 Criterio esencial de aplicación del vector de desarrollo a diferentes conjuntos de personas: mantener su incremento progresivo o al menos no negativo en todos los casos, conforme al principio de fraternidad humana	484
§4.4.3.4 Aplicación mínima del criterio esencial en los procesos de autodeterminación constitutiva: desarrollo del marco normativo internacional en materia de sucesión de estados y negociación integrativa con un enfoque de derechos humanos	508
§4.5 Relación fáctica entre la autodeterminación constitutiva externa y el nivel de realización del derecho al desarrollo. Estudio de caso. El desarrollo humano de Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia: una brecha de desarrollo creciente	515
§5 Resumen y conclusiones	535
§6 Bibliografía	535
§6.1 Bibliografía. Introducción y Parte I. El derecho humano al desarrollo	558
§6.2 Bibliografía. Parte II. El derecho de autodeterminación de los pueblos	567
§6.3 Bibliografía. Parte III. La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos	581
§7 Thesis summary	585

§1 Introducción

§1.1 Objeto y justificación del trabajo

La presente tesis explora la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos en cuanto derechos humanos.

Por separado, ambos derechos han sido descritos y definidos como principios, como requisitos para el ejercicio del conjunto de derechos humanos, pero también ellos mismos como derechos humanos. Es esta la postura que han adoptado las Naciones Unidas y una gran parte de la doctrina iusinternacionalista. Ambos derechos han sido descritos como derechos de tercera generación o derechos de la solidaridad, y como derechos de naturaleza autónoma cuya realización cuenta con una dimensión progresiva, en cuanto procesos. El artículo 1 común a los dos Pactos Internacionales de 1966, adoptados y abiertos a firma antes de la definición del desarrollo como derecho humano autónomo, ya dejaba claro que, en virtud del derecho de autodeterminación de los pueblos, éstos “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El artículo 1.2 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, por su parte, estableció que la adopción y realización del derecho al desarrollo implica también la plena realización del derecho de autodeterminación de los pueblos lo que incluye, a su vez, “con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.

Los estudios sobre el derecho al desarrollo no son, a la fecha, tan abundantes como lo es la literatura académica en materia de derecho de autodeterminación de los pueblos, y a pesar de que la relación entre ambos derechos es invocada con cierta asiduidad, no existen estudios monográficos sistemáticos dedicados a tal relación desde una perspectiva teórico jurídica. La presente tesis, por tanto, se presenta como un paso en la exploración de la misma.

Como saben quienes han indagado en la naturaleza de cualquiera de estos dos derechos en cuanto derechos humanos, su estudio no está exento de dificultades, en parte fruto de cierta indefinición. En el caso del derecho al desarrollo, se han descrito distintos problemas de validez, de eficacia, e incluso de delimitación y definición del contenido mismo del derecho. El derecho de autodeterminación, como es bien sabido, también ha sido objeto de múltiples debates en torno a su contenido, naturaleza, sujetos, alcance y forma de ejercicio. Así, la aspiración de describir la relación entre ambos derechos con cierta precisión o, al menos, de hacer algún aporte significativo al estudio de tal relación, requiere un profundo análisis previo de ambos derechos, particularmente respecto a su definición, sujetos y delimitación de su alcance y contenido.

La aceptación de un derecho humano al desarrollo, que gana creciente apoyo desde la aprobación de la Declaración de 1986, y la consideración del derecho de autodeterminación como un derecho humano, abre la puerta a estudiar la relación entre ambos como aquella que existe entre dos derechos humanos. En el marco de la teoría

general de los derechos humanos, si consideramos ambos derechos como derechos humanos, la relación misma entre ambos ha de existir, pues como se proclama en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Si aceptamos la existencia de tal relación, ésta estará, en principio, marcada por los rasgos adjetivos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.

A su vez, el estudio de la relación entre ambos derechos puede ayudarnos a profundizar en las implicaciones recíprocas de la aceptación de tales rasgos adjetivos respecto a la interpretación del contenido y definición de cada uno de los derechos.

Desde el punto de vista del estudio de la justicia global, especialmente desde las perspectivas contractualistas o neocontractualistas, el estudio de la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo se relaciona con los criterios de justicia distributiva de bienes y derechos a nivel global, y los distintos niveles o círculos de solidaridad, pues su concepción afecta a la fundamental cuestión de quiénes conforman las distintas e interconectadas unidades políticas en cuanto conjuntos solidarios de autodistribución de bienes y derechos, y el fin de las mismas, esto es, “entre quiénes” nos hemos de distribuir “qué”, bienes y derechos, y con “qué fin”, así como las distintas obligaciones mínimas de redistribución que se establecen entre dichos conjuntos.

A nadie se escapa que la cuestión de la redistribución de bienes y derechos entre distintos conjuntos de personas y, por tanto, de la definición de unos y otros, es objeto principal y habitual de disputa, tanto dentro de los estados como a nivel internacional. Tales disputas, intrínsecas a los sistemas democráticos en los que, en principio, se garantizan espacios abiertos de debate y discusión de las instituciones sociales, pueden encontrarse también, sin embargo, en la base de conflictos armados cuando se rompe el estado de derecho y, en consecuencia, de violaciones masivas de derechos humanos. Entre los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas se encuentran precisamente, como establece la Carta, “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz” así como “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”, requiriéndose que el desarrollo progresivo del Derecho Internacional sea coherente con dichos propósitos.

En este sentido, tal y como Robert McCorquodale defiende que un enfoque de derechos humanos de la autodeterminación proporciona un marco internacional de normas claras, que pueden apoyar la resolución pacífica de conflictos¹, la justificación del presente trabajo, exploratorio, se fundamenta en la convicción de que el desarrollo de normas internacionales claras que permitan la mejor realización simultánea tanto del derecho de autodeterminación como del derecho al desarrollo en cuanto derechos humanos, así como su efectiva aplicación, puede contribuir a los propósitos generales de paz, seguridad y

¹ McCorquodale, R., “Self-determination: a Human Rights Approach”, *International & Comparative Law Quarterly*, 1994, 43, n. 4, pp. 857–885.

salvaguarda del conjunto de los derechos humanos. El desarrollo de tales normas y su efectiva aplicación requieren, a su vez, tener presente la relación que guardan ambos derechos entre sí.

§1.2 Estructura

El presente trabajo contiene una introducción, un análisis del problema en tres partes, y finaliza con un capítulo de conclusiones. Siendo el objetivo principal el análisis de la relación del derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos, las tres partes referidas se corresponden con: un análisis del derecho al desarrollo, un análisis del derecho a la autodeterminación y un análisis de la relación entre los dos derechos en cuanto derechos humanos. El estudio de caso acompaña el análisis teórico en cada una de sus partes.

En la introducción, he incluido un acercamiento general al tema de discusión, objeto general del trabajo y justificación de la relevancia actual del tema y la metodología de investigación. En el apartado metodológico, he distinguido por un lado, el enfoque general metodológico, algo que creo relevante dados los malentendidos que pudieran originarse en torno a la intención de la tesis, de las técnicas metodológicas de investigación y una descripción general de las fuentes bibliográficas utilizadas.

La primera parte de las tres partes de esta tesis está dedicada al estudio del derecho humano al desarrollo. A su vez, esta parte está dividida en dos: primero se realiza un análisis general de las fuentes del derecho, fundamentación, definición, contenido, sujetos activos y pasivos, obligaciones derivadas del derecho, validez y eficacia jurídica; seguidamente, se incluye una reflexión sobre la parte especial, analizando la interpretación y aplicación del derecho al desarrollo como derecho humano en nuestro caso de estudio.

De esta primera parte es de especial relevancia la delimitación del contenido y la definición del derecho al desarrollo que utilizaremos para analizar su relación con el derecho de autodeterminación. Además, mostraremos la implicación y compromiso teórico de la antigua Yugoslavia con este derecho, que justificará parcialmente la elección de nuestro caso de estudio.

La segunda parte de la tesis está dedicada al estudio del derecho de autodeterminación. Como en el apartado anterior, esta parte está a su vez dividida en un análisis general del derecho, y un análisis especial respecto al caso de estudio. Puede argüirse, como ha hecho James Summers, que la definición del derecho de autodeterminación se encuentra marcada por la tensión entre el Derecho Internacional de estados y la doctrina nacionalista de los pueblos², por lo que he incluido además de las fuentes de derecho internacional, un repaso de la génesis histórica y conceptual del derecho de

² Summers, J., "The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law", *International Journal on Minority and Group Rights*, n. 12, 2005, pp. 325-354.

autodeterminación y su relación con la doctrina nacionalista, que hará esta parte justificadamente más extensa que la primera.

El estudio del derecho de autodeterminación de esta segunda parte se completa con su análisis teórico y jurídico en cuanto derecho humano, con especial énfasis en las cuestiones de sujetos, contenido y definición del derecho. Seguidamente, se repasa la concepción del derecho de autodeterminación en la República Socialista Federal de Yugoslavia, desde su conformación hasta su desintegración, prestando atención a la evolución doctrinal, jurídica y resultados en su aplicación fáctica de la interpretación del derecho de autodeterminación.

Una vez analizados ambos derechos, la tercera parte de la tesis aborda la relación misma entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación.

Trataremos de distinguir las características de la relación entre los dos derechos con un enfoque tridimensional dinámico. Primero abordaremos la cuestión a partir de la letra misma de las fuentes de Derecho Internacional y luego a partir de las definiciones y contenido de los derechos estudiados por la doctrina iusinternacional relevante. Finalmente, se considerará la dimensión fáctica de la relación a partir de nuestro caso de estudio.

La tesis concluye con un capítulo de resumen y conclusiones.

§1.3 Metodología (i). Enfoque y consideraciones generales

El filósofo alemán Rudolf Hermann Lotze (1817-1881), en su obra *Microcosmos*, describía tres formas elementales de conocimiento, alertando al tiempo de la importancia y de la dificultad de aunarlas todas en una sola noción comprehensiva: “todo nuestro análisis del orden cósmico termina por conducir nuestro pensamiento a una conciencia de las verdades necesariamente válidas, nuestra percepción a la intuición de los hechos inmediatamente dados, nuestra conciencia al reconocimiento de un estándar absoluto de todas las determinaciones de valor”³.

Aunque Lotze no legó una escuela como tal o discípulos que defendieran su sistema filosófico, como explica Frederick C. Beise, “muchas de sus ideas resultaron sugerentes y fructíferas para muchos de los que vinieron después de él”⁴.

Entre los influidos por su legado, podemos contar con el jurista Miguel Reale (1910-2006) cuya “teoría tridimensional del Derecho”⁵ se basa en la consideración de tres

³ Lotze, H., *Microcosmos: an essay concerning man and his relation to the world*. Scribner & Welford, 743-745, Broadway, Nueva York, 1887, B. IX, C. 1, p. 571. La cita la he traducido del inglés, original en alemán.

⁴ Beiser, F. C., *Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze*. Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 313.

⁵ Reale, M., *Teoría tridimensional del Derecho: una visión integral del Derecho*, Tecnos, Madrid, 1997.

dimensiones en el fenómeno jurídico, correspondientes con los elementos hecho, norma y valor: eficacia, validez y legitimidad, así como en la importancia de analizar las relaciones que se establecen entre ellas. En dicha teoría, según Carlos de la Torre, “se ponen de manifiesto algunos de los elementos que la Filosofía del Derecho iberoamericana ha aportado al desarrollo de la Filosofía del Derecho, particularmente al ámbito axiológico”⁶. He considerado útil la teoría tridimensional como enfoque para abordar tanto el estudio de los dos derechos como de la relación que guardan entre sí de una manera comprehensiva. En consecuencia, he procurado considerar, tanto respecto del derecho al desarrollo como del derecho de autodeterminación por separado, sus dimensiones de validez, legitimidad y eficacia, pero no como dimensiones estancas sino como partes dinámicamente relacionadas de un todo.

Debido a las particularidades de los dos derechos en cuestión, en el análisis de la validez se habrá de considerar el estado de desarrollo del Derecho Internacional y la regulación de ambos derechos en el ámbito internacional,

En el análisis de la justificación o legitimidad será fundamental la teoría general de los derechos humanos. Nuestro análisis de legitimidad partirá de la premisa de que todos “los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, tal y como establece el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El examen de la dimensión fáctica, es decir, el análisis de la eficacia de ambos derechos y de la relación entre ambos, se abordará a partir del caso de estudio que hemos seleccionado.

La elección de nuestro estudio de caso se debe a dos razones de idoneidad: la primera responde a la variedad de concepciones de autodeterminación y desarrollo que se han dado durante el proceso de formación y destrucción de Yugoslavia (término que ha dado nombre hasta a tres estados diferentes) y la formación de las repúblicas resultantes. No sólo se da la circunstancia de que los más grandes teóricos del nacionalismo y la autodeterminación hayan nombrado el sudeste europeo antes o después en alguno de sus escritos, (que encontramos desde los textos clásicos de Mazzini, J.S. Mill, Bauer, Wilson o Lenin hasta los tratados más recientes), sino que la evolución de los acontecimientos históricos han influido en la construcción normativa internacional (baste recordar las comentadísimas conclusiones de la Comisión Badinter, particularmente en relación con el principio *uti possidetis juris*, o de la Corte Internacional en el caso de Kosovo, por ejemplo), sin hablar de los numerosísimos estudios en materia de etnicidad, derechos de minorías, acomodos de poder en sociedades divididas, etc., que han tomado como referencia las evoluciones políticas, sociales y jurídicas de los Balcanes.

Por otro lado, el debate sobre la realización del derecho al desarrollo, tanto su naturaleza

⁶ De la Torre Martínez, C., *La recepción de la Filosofía de los Valores en la Filosofía del Derecho* Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D. F., 2005, p. 302 y ss.

como su relación con la no injerencia y la cooperación, y un orden mundial más justo, presente siempre en la política exterior yugoslava, que lo enarbó como uno de los objetivos de su política de liderazgo de los no alineados, incluyendo políticas de ayuda exterior, continuó ocupando una posición central tras la desintegración del estado, cuando las distintas repúblicas independientes resultantes recibieron una gran cantidad de ayuda exterior: humanitaria durante los conflictos, de cooperación para el desarrollo y para la integración europea en los años posteriores. Así pues, la compleja historia de la región y su relación con ambos conceptos, por tanto, la convierten en un caso de estudio excepcional para tratar la compleja relación entre la autodeterminación y el desarrollo de los pueblos.

La segunda razón, secundaria, no es de idoneidad del caso sino de aptitud personal. Mi experiencia laboral durante varios años trabajando en cooperación internacional para el desarrollo –proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo institucional- en países de la antigua Yugoslavia me han permitido adquirir experiencia sobre el terreno y conocimiento del entorno social y cultural, permitiéndome observar directamente los efectos en los procesos de desarrollo tanto del proceso de desintegración estatal como de reinstitucionalización.

He de resaltar que, a pesar de recorrer la evolución histórica de los conceptos y de requerir un marco sociopolítico de cierta extensión, no es esta una tesis histórica, política o sociológica, sino teórico-jurídica; no pretenderé entrar en todos los detalles de la desintegración de Yugoslavia ni mucho menos describir con detalle sus causas políticas, económicas o sociológicas. Se han escrito bibliotecas enteras al respecto y no espero poder aportar detalles significativos más allá de los estrictamente circunscritos al objetivo de nuestra tesis. La narración de los acontecimientos pues, cuando sea necesario, subrayará las cuestiones conectadas con el objeto de estudio.

No esperemos, por tanto, una tesis exhaustiva sobre las causas de la desintegración de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, sino sobre la relación entre dos derechos humanos. En cuanto derechos humanos habremos de considerar en todo momento las consecuencias de su aplicación en las personas, no sólo en los colectivos –nación, nacionalidad, pueblo, minoría-, lo que resulta de gran interés cuando precisamente tratamos derechos con una dimensión colectiva. El caso de estudio, por consiguiente, será abordado con el fin de encontrar respuesta a las cuestiones teórico-jurídicas que nos planteamos respecto a la relación entre dos derechos, esperando que nos aporte la dimensión fáctica para nuestro análisis comprensivo. El estudio de caso nos ha de servir como bastón para analizar la relación entre el derecho al desarrollo y el de autodeterminación, a modo de ejemplo, pero también porque el mismo Derecho Internacional se construye en gran medida con los repetitivos actos de los sujetos internacionales. Nos servirá como apoyo el caso estudiado pero no será este nuestro objeto principal de estudio, presentándose, por tanto, como un apoyo para ilustrar de manera práctica diferentes aspectos de la relación teórica del desarrollo y la autodeterminación como derechos humanos.

Respecto al enfoque general para abordar la relación entre los dos derechos, quisiera hacer las siguientes consideraciones adicionales con el objeto de dejar constancia de mis propias limitaciones:

En primer lugar, he pretendido analizar la relación de conceptos normativos desde un punto de vista no historicista, aunque tomando en consideración su evolución histórica. El enfoque adoptado desecha una solución fija y última a la aplicación de los derechos en un futuro por lo demás incierto, pero pretende aportar cierta reflexión sobre el marco normativo en el que se desarrollan los procesos de desarrollo o de autodeterminación de los pueblos, sin inclinarse por un resultado holístico *a priori* en un futuro histórico. Creo que es posible inferir, de las normas ya existentes en Derecho Internacional y de una reflexión crítica sobre ellas, ciertos argumentos legítimos para la protección progresiva adicional de los derechos humanos. Parafraseando a Popper, en vez de intentar descubrir las normas del desarrollo social, trataremos de buscar esas normas o uniformidades que imponen limitaciones a la construcción de ciertas instituciones sociales (aunque como recuerda el mismo autor, ciertos historicistas niegan paradójicamente que puedan existir tales uniformidades)⁷. La elección misma de abordar el tema de la relación conceptual entre desarrollo y autodeterminación como la relación entre dos derechos humanos y no como principios políticos o valores es, debo decir, por sí misma, una parte importante de esta tesis, pues encuadra los objetos en un marco universal de seres iguales en dignidad y sujetos de derechos humanos, sin pretender concretos o particulares resultados políticos finales establecidos *a priori* de asociación y redistribución, que no hayan sido validados en procesos participativos y racional críticos, en los espacios abiertos de discusión que proporcionan los sistemas democráticos.

Nuestro enfoque será deontológico en este sentido, no pretenderemos partir de la preferencia predefinida del resultado político de ejercer el derecho de desarrollo o autodeterminación en forma de concretas organizaciones políticas o sociales ideales a nivel global o local, ni abogaremos por unos modos o formas de distribución material de recursos y derechos particulares sino por la consideración de la dignidad humana en todo proceso de construcción institucional y el emplazamiento de la persona crítica como sujeto de derechos humanos en el centro de estos procesos de autodeterminación y desarrollo. Existe, por lo demás, un límite a nuestras consideraciones, que se escapan de lo académico, que podríamos denominar, si se me permite la expresión, el límite de la razón política. Más allá de este límite se encuentran las especulaciones político-sociales de cada cual, los sentimientos de identidad, la proyección imaginaria del desarrollo perfecto, cómo cada cual imagina su sociedad ideal, su posición dentro de ella y la posible satisfacción de intereses. En fin, *cómo* concretamente deberíamos idealmente repartir los recursos, hacia donde deberíamos ir para asegurarnos un estado de progreso o felicidad, esto es el *fin* del desarrollo que queremos, *entre quiénes* repartimos los recursos, son ideologías, ideales de la imaginación colectiva proyectadas en un futuro indefinido. Considero que esas especulaciones no son ni racional ni empíricamente tratables y no forman parte de nuestro objeto de discusión.

⁷ Popper, K., *La miseria del historicismo*, Alianza / Taurus, Madrid, (3ª reimpr), 2010, p. 60.

Nuestro acercamiento deontológico se enfoca en el marco teórico-jurídico de la relación entre autodeterminación y desarrollo, es decir, hasta los límites de los ideales de la imaginación. Contiene, sin embargo, elementos axiológicos que se incorporan al tratar los conceptos como derechos humanos (dignidad, libertad, igualdad, democracia) y teleológicos (conservación de los mismos en todos los procesos y en cualquier resultado). En mi defensa diré que creo quedar metodológicamente a salvo en este punto si aceptamos que esos elementos axiológicos están incluidos también en el contenido de las normas en discusión –desarrollo y autodeterminación–, así como en el marco general de derechos humanos.

Finalmente, aunque no es ésta una tesis específica sobre justicia global o justicia distributiva internacional, salta a la vista su innegable relación. En este sentido, el enfoque del trabajo ha adoptado por lo general, una perspectiva cosmopolita de raíz rawlsiana o crítica rawlsiana, teniendo en cuenta los trabajos de autores como el propio John Rawls, Thomas Pogge, Charles Beitz, Joseph Carens, Brian Barry o Amartya Sen.

§1.4 Metodología (ii). Técnicas metodológicas y fuentes bibliográficas

La presente tesis es un estudio teórico-jurídico de dos derechos y la relación que guardan. En consecuencia, las técnicas metodológicas empleadas han sido fundamentalmente el análisis racional crítico de fuentes secundarias. El análisis de validez y legitimidad se ha basado principalmente, por tanto, en fuentes normativas de Derecho Internacional y doctrina relevante. Para la reunión de las fuentes relevantes he contado con el apoyo del personal de la Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, así como del personal de la Biblioteca del Centro Europeo para las Minorías de Flensburg, Alemania.

En relación con el caso de estudio que nos ha servido como apoyo para estudiar el ámbito de eficacia, que a su vez ha influido en las consideraciones sobre la validez y legitimidad, para la primera parte, realicé una entrevista con Vojin Dimitrijević en Belgrado, que conoció a los miembros de la misión de Yugoslavia en Naciones Unidas y sus motivaciones para apoyar el derecho al desarrollo, y me introdujo a Milan Sahović, para completar la perspectiva de la doctrina yugoslava.

El texto completo de la Declaración de Belgrado de 1961, que a pesar de su relevancia normalmente se encuentra solamente en extractos, me fue proporcionado por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia y el Archivo de Yugoslavia en Belgrado.

Para completar el estudio comparativo de la tercera parte, las fuentes cuantitativas se han basado en cifras obtenidas de las Oficinas Estadísticas de la República de Eslovenia, Antigua República Yugoslava de República de Macedonia, Eurostat, Banco Mundial y PNUD.

Finalmente, aunque no forma parte la metodología específica de esta tesis, quisiera apuntar que, para el enfoque, se ha tomado en cuenta las experiencias acumuladas durante una estancia en el terreno de relevancia, completada con visitas a las fronteras y entrevistas personales a miembros de colectivos vulnerables sobre los efectos de los procesos de transición en la efectiva realización de sus derechos humanos.

§2 El derecho humano al desarrollo

§2.1 Fuentes del derecho al desarrollo

§2.2 Fundamentación del derecho al desarrollo

§2.2.1 Fundamentación moral del derecho al desarrollo

§2.2.2 Fundamentación política del derecho al desarrollo

§2.3 Definición, contenido, sujetos titulares del derecho al desarrollo

§2.3.1 Definición y contenido del derecho al desarrollo

§2.3.2 Sujetos titulares del derecho al desarrollo

§2.3.3 Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho al desarrollo

§2.4 Validez jurídica del derecho al desarrollo

§2.5 Eficacia del derecho al desarrollo

§2.6 Influencia del Movimiento de Países no Alineados en la conformación del derecho al desarrollo

§2.7 La contribución yugoslava al derecho al desarrollo.

§2.7.1 Aportación de la República Socialista Federal de Yugoslavia al desarrollo del Derecho Internacional

§2.7.2 La contribución yugoslava al derecho al desarrollo como derecho humano

§2.7.3 La doctrina yugoslava y el derecho al desarrollo

§2. El derecho humano al desarrollo

A lo largo de este primer capítulo repasaremos, en primer lugar, las fuentes y principales características del derecho humano al desarrollo. Seguidamente, analizaremos su fundamentación, definición y contenido, los sujetos del derecho al desarrollo y los deberes que pueden derivarse. Repasaremos también el estado de la cuestión en torno a su validez y eficacia en el ámbito jurídico internacional.

La estrecha relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación de los pueblos será tan solo apuntada de momento ya que, en cuanto objeto principal de estudio de esta tesis, será tratada en profundidad más adelante. Si que procuraremos, sin embargo, armarnos de un enfoque adecuado del derecho al desarrollo -y de la concepción misma del desarrollo- que sirva para analizar adecuadamente dicha relación.

El largo y doloroso proceso de disolución de la República Socialista Federal de Yugoslavia, nos acompañará como caso de estudio a lo largo de todo nuestro trabajo, debido a la coincidencia de la especial aplicación tanto del derecho al desarrollo como del derecho de autodeterminación en un período histórico y un ámbito geográfico concreto, ofreciendo una variedad de matices de reflexión nacidas fruto de la extrema complejidad teórica y práctica del proceso mismo de disolución. Por ello, no sólo recorreremos también en este primer capítulo las características, fundamentación y génesis del concepto del derecho al desarrollo como derecho humano, vinculadas, como es bien

conocido, con el proceso de descolonización de mediados del pasado siglo y auspiciada, sobre todo, por los países no alineados comprometidos con el establecimiento de un nuevo orden económico mundial, sino que subrayaremos, finalmente y concluyendo el capítulo, la fundamental aportación a la conformación conceptual del derecho al desarrollo tanto de las posiciones jurídico-políticas de los países no alineados como, en particular, de la República Socialista Federal de Yugoslavia, cuyos representantes políticos y doctrinales participaron en la definición de los contornos teóricos del derecho al desarrollo como derecho humano y en el nacimiento de la Declaración sobre derecho al desarrollo de 1986.

La importancia de la aportación yugoslava -hoy prácticamente olvidada- se puede apreciar en el hecho de que parte de la más relevante doctrina y construcción teórica del derecho al desarrollo partió de aquel país durante los años ochenta del pasado siglo: Danilo Türk o Milan Bulajić, por ejemplo, ampliamente citados todavía hoy, se desvincularon progresivamente del estudio del derecho al desarrollo, para enfocar su trabajo y vida profesional en otras cuestiones. La retrospectiva de sus actividades también nos aportará pistas acerca del estado de la cuestión doctrinal de la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación.

No en vano, si queremos utilizar como caso de estudio la desintegración de Yugoslavia para reflexionar acerca de la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación, hemos de dejar claro primero qué es el derecho al desarrollo, despejar dudas en cuanto a su naturaleza y validez, y argumentar la relevancia de nuestro ejemplo teniendo en cuenta que ningún país tenía -hasta el momento de su desintegración- más presente el derecho al desarrollo que su principal promotor.

§2.1 Fuentes del derecho al desarrollo

El 24 de febrero de 2011, durante el Simposio Internacional sobre el Derecho al Desarrollo, organizado en Berlín por la fundación política alemana Friedrich-Ebert-Stiftung y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de conmemorar el 25avo. aniversario de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, la Alto Comisionado de Derechos Humanos, Navanethem Pillay invitó a los asistentes a reflexionar acerca de los “obstáculos encontrados y las lecciones aprendidas” así como los modos de avanzar en la realización de este “derecho crucial” recordando que:

“[...] los elementos constitutivos del derecho al desarrollo hunden sus raíces en las previsiones de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros instrumentos de Naciones Unidas”⁸

Los orígenes del derecho al desarrollo pueden ser, por tanto, rastreados hasta los

⁸ El discurso completo se puede encontrar (en inglés) en la página web del Alto Comisionado. <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10759&LangID=e>. Acceso: 02/06/2012

instrumentos mencionados.

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 en San Francisco, recoge en su preámbulo que los signatarios, resueltos “a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y a crear “condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional”, deciden asimismo “emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. En consecuencia, el artículo 1 de la Carta, prevé como uno de los cuatro propósitos de las Naciones Unidas:

“[...]realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

El artículo 55 de la Carta reconoce también la estrecha relación existente entre la consolidación de las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones y el incremento de los niveles de desarrollo, relaciones que, a su vez, han de estar basadas “en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”, recogiendo asimismo la voluntad de la organización de promover:

- “a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
- b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
- c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”

Conscientes de la dificultad de alcanzar estos objetivos sin un esfuerzo común de todas las naciones, se establece en el artículo 56 de la Carta que “todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55”.

La relación entre la promoción del desarrollo y la cooperación internacional puede encontrarse también en otras provisiones de la Carta, como el artículo 13.1, en el que recoge, como una de las funciones de la Asamblea General, promover estudios y realizar recomendaciones para, entre otros *fines*, “fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación”.

Resaltemos que, en el texto de la Carta, el desarrollo no se presenta como un derecho humano pero sí se establece como un fin o propósito de los signatarios. Aunque lo veremos con detenimiento más adelante, cuando analicemos el contenido y fundamentos del derecho al desarrollo, merece la pena apuntar ahora que la relación entre el desarrollo como fin -común- y la necesaria cooperación internacional para alcanzarlo remite necesariamente a los conceptos de solidaridad y fraternidad. Percatémonos asimismo de que, en la Carta, aunque no se mencionan expresamente, estos conceptos están

claramente implícitos en el texto: al reconocer la necesidad de cooperar para alcanzar un fin o propósito -palabras que sí son usadas- común a todos y cada uno de los signatarios se reconoce la adhesión de cada uno a los fines de los demás.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece también en su preámbulo que ésta fue proclamada “[...] considerando que los pueblos de las Naciones Unidas [...] se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.

En relación con el bienestar, el artículo 25 prevé, en su primer inciso, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” y en el artículo 28 se reconoce el derecho “a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”, vinculando así la realización de los derechos humanos individuales con la arquitectura global.

Aunque relacionado con el progreso social, el desarrollo era concebido entonces esencialmente como desarrollo económico, incluyendo el aumento de la renta de los países, incremento en la productividad o inclusión en acuerdos comerciales globales, como se desprende, por ejemplo, de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en enero de 1952: 519 (VI) “Programa ampliado de asistencia técnica para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados”, 520 (VI) “Financiamiento del desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados”, 521 (VI) “Desarrollo económico integrado”, 522 (VI) “Métodos para aumentar la productividad en el mundo” y 523 (VI) “Desarrollo económico integrado y acuerdos comerciales”.

La Resolución 642 (VII) adoptada por la Asamblea General al final del mismo año, el 20 de diciembre de 1952, sobre “Desarrollo económico y social integrado” reconoció ya que las “condiciones necesarias para el bienestar social son numerosas y de carácter diverso, y está ligadas entre sí, así como también con los factores del desarrollo económico” y abrió la puerta a la cooperación internacional ejecutada a través de “programas integrados”, que tengan en cuenta las diversas condiciones y factores económicos y sociales y su interdependencia. Esta Resolución llamó la atención a los Estados Miembros sobre la conveniencia de llevar a cabo estos programas a fin de promover “el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos”. Los “programas integrados” han sido hasta el día de hoy -teniendo en cuenta su notable evolución técnica- probablemente la herramienta más utilizada en cooperación internacional para el desarrollo.

Podemos incluir en este “origen remoto”, utilizando la terminología de Gómez Isa⁹, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados ambos por separado en 1966¹⁰,

⁹ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, p. 21 y ss.

¹⁰ Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16
© Isidro García Mingo

para facilitar, como es bien conocido, su adopción en un mundo por entonces dividido en bloques ideológica y geoestratégicamente antagónicos. Ambos pactos coinciden, sin embargo, en sus respectivos artículos 1, en los que se dispone que:

“1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2.- Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”

También en virtud del artículo 4 del PIDESC los Estados Partes “reconocen que [el Estado] podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática”.

Estas primeras referencias a los fundamentos del derecho al desarrollo, han de ser tomadas con cautela, como recuerdan autores como Stéphane Pellet¹¹, ya que por aquel entonces no se podía hablar todavía de un derecho humano al desarrollo como tal. Sí que empezó, sin embargo, a incrementarse el interés por lo que vino a ser denominado por algunos autores como Derecho Internacional del Desarrollo¹². Si consideramos lo dispuesto en la importante Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, la cual recoge en su preámbulo el convencimiento de que “la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos” y de que los pueblos pueden “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del derecho internacional”, declarando finalmente que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, que marcó el comienzo de la vinculación fundamental entre libre determinación y desarrollo, y si consideramos además que, como veremos, el principio de libre determinación comenzó a percibirse como derecho humano en 1952, pero fue consagrado como tal a partir de su inclusión en los Pactos Internacionales de 1966, no es de extrañar que empezara a debatirse la misma fórmula de relación entre libre determinación y desarrollo, en cuanto derechos, para construir el derecho al desarrollo como derecho humano en la Declaración de 1986.

de diciembre de 1966. EL PIDCP entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y el PIDESC el 3 de enero de 1976.

¹¹ Pellet, S., *Le droit au développement. Genèse et concept*, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Ginebra, 1990.

¹² El primero fue André Philip, en el Coloquio Internacional de Niza sobre “La adaptación de la ONU al mundo de hoy” publicado en París en 1964, seguido por Virally, Michel *Vers un droit international du développement* en *Annuaire Français de Droit Internationale*, 1965, pp 4-12, como referencia Ezquiaga Ganuzas en “Soberanía, autodeterminación y derecho al desarrollo”, *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, n. 41, 1995, pp. 795-817.

En palabras de Gómez Isa, se produce en la década de los sesenta un “cambio trascendental de la percepción de los problemas de carácter internacional [...] producido por la explosión descolonizadora”¹³. Considerando la evidente situación de subdesarrollo en el que se encontraban la mayor parte de esta multiplicidad de nuevos estados respecto a sus antiguas metrópolis y la evolución de su situación en los años siguientes, pronto se llegó a la conclusión de que el acceso a la independencia política y a la soberanía sobre los propios recursos naturales, no bastaban para disminuir la brecha de desarrollo socioeconómico existente. No es de extrañar que la mayoría de estos países intentaran aunar fuerzas constituyéndose como un tercer bloque - un *tercer mundo* opuesto al bloque occidental y al soviético- organizado como Movimiento de Países No Alineados. Este grupo de países, conscientes de su inferior poder económico y militar respecto a las superpotencias, buscarían hacer de contrapeso político global en el escenario propicio para sus capacidades e intereses, en el seno de las Naciones Unidas, convirtiéndose así en grandes impulsores del desarrollo de la legislación internacional en general, y del reconocimiento del derecho al desarrollo en particular, como veremos más adelante.

Como explica Daniel Oliva, el Derecho Internacional al Desarrollo “agruparía el marco jurídico especializado y el conjunto de reglas y obligaciones llamadas a garantizar que el derecho al desarrollo [...] pudiera hacerse efectivo” de manera que “el derecho al desarrollo no sería posible sin el respaldo, normativo e institucional necesario que estaría integrado en el Derecho Internacional del Desarrollo”¹⁴.

Para la doctrina mayoritaria, si bien el Derecho Internacional al Desarrollo se configura cronológicamente antes del derecho al desarrollo, éste mantiene un “relación lógica de anterioridad”¹⁵ respecto a aquél. La evolución del Derecho Internacional al Desarrollo” habría llevado históricamente a una toma de conciencia del derecho humano al desarrollo, pero éste sería un derecho lógicamente preexistente que dota de sentido al Derecho Internacional del Desarrollo.

Para Pellet, el derecho al desarrollo “constituye el fundamento común de ciertos derechos humanos y del Derecho Internacional del Desarrollo en su conjunto [...] Sería como una norma implícita pero necesaria para toda la construcción del Derecho Internacional del Desarrollo. Gómez Isa, siguiendo a estos autores, concluye que “el Derecho Internacional del Desarrollo sería aquella rama del Derecho Internacional que trata de hacer efectivo el derecho al desarrollo”¹⁶.

Destaca entre los primeros textos internacionales en recoger explícitamente la relación entre desarrollo y derechos humanos la Proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán de 1968¹⁷ la cual exhorta, en su inciso final, “a todos los

¹³ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 13.

¹⁴Oliva, Daniel, J., *El derecho al desarrollo y la cooperación internacional. Especial atención a la práctica española*, CIDEAL, Madrid, 2011, p. 25.

¹⁵ Israël, J-J., *Le droit au développement*, Revue Générale de Droit International Public, Tome 86, n° 1, Paris, 1983.

¹⁶Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 41.

¹⁷Proclamada el 13 de mayo de 1968. Anexa al Acto Final de la Conferencia (A/CONF.32/41) y adoptada,

pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual”.

La concepción de la relación entre el respeto a los derechos humanos, el nivel de desarrollo económico y la desigualdad para los signatarios queda reflejada en el punto 12 de dicha Proclamación:

”La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países en desarrollo impide la realización de los derechos humanos en la comunidad internacional. Dado que el Decenio para el Desarrollo no ha alcanzado sus modestos objetivos, resulta aún más necesario que cada país, en particular los países desarrollados, procure por todos los medios eliminar esa disparidad”.

Por desarrollo entienden todavía los signatarios un crecimiento económico, solamente como medio necesario material para realizar efectivamente los derechos humanos. Más que desentrañar cuáles son los medios suficientes o necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo, la preocupación recae en la necesidad de eliminación de las desigualdades a nivel global, entendiendo, por tanto, que el desarrollo no existe en abstracto, sino solamente en relación con el nivel de desarrollo alcanzado por los demás y que, dado que existen desigualdades, la realización de los derechos humanos desde un punto de vista global no será alcanzada de manera completa¹⁸.

La reducción de la desigualdad a escala global para alcanzar un estado de bienestar para todos coexiste en el mismo texto con los conceptos de solidaridad (“son más que nunca necesarias la solidaridad y la interdependencia del género humano”), justicia (“para la realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales son indispensables la paz y la justicia”) y la obligación de cooperación (“10. [...] es obligación de la comunidad internacional cooperar para erradicar tales azotes”).

Precisamente esta última “obligación de cooperar” queda fijada, como principio de Derecho Internacional, en la “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” de 1970¹⁹.

Dicha Declaración, recordando resoluciones anteriores²⁰ en las que se afirmaba “la

ese mismo año, por la Asamblea General, Resolución 2442 (XXIII) de 19 de diciembre de 1968.

¹⁸ Contemporáneamente, Amartya Sen ha abogado por reducir las desigualdades a nivel global desde un punto de vista también teleológico, persiguiendo el desarrollo a partir de la reducción de desigualdades, para lo que no hace falta un pacto social a nivel global. Vid. Sen, A., *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2009.

¹⁹ Aprobada por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970.

²⁰ Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1966 (XVIII) de 16 de diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 1965, 2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966, 2327 (XXII) de 18 de diciembre de 1967, 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 y 2533 (XXIV) de 8 de diciembre de 1969, en las que afirmó la importancia del desarrollo progresivo y la codificación de los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

importancia del desarrollo progresivo y la codificación de los principios de Derecho Internacional referentes a [...] la cooperación entre los Estados” contiene siete principios generales de Derecho Internacional que incluyen el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados y la obligación de los Estados de cooperar entre sí “de conformidad con la Carta”.

Esta obligación de cooperación existe independientemente de las diferencias en los sistemas políticos, económicos y sociales -es decir, independientemente de los sistemas que los Estados eligen en virtud de su derecho de autodeterminación para alcanzar su propio progreso económico y social- inciso fundamental incluido en el contexto político de la Guerra Fría pero con plena validez conceptual, con limitaciones, en nuestros días, a fin de “[...] promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias”.

Concretamente, prevé la Declaración de 1970, dentro de esta obligación general de cooperación, que los Estados deben colaborar “para promover el respeto universal a los derechos humanos, y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades” y “para promover el crecimiento económico en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo”.

Es importante destacar el llamamiento al modo de interpretación y aplicación de estos principios: prevé la Declaración que todos ellos “están relacionados entre sí” y “cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes”. Así, por ejemplo, la obligación de cooperación entre estados, como principio, debe entenderse compatible con la no injerencia y con la libre determinación de los pueblos, que eligen su propio sistema social y económico.

Poco antes, en 1969, el principio de cooperación entre estados había sido contemplado en la “Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social” como una “condición primordial del progreso y el desarrollo en lo social”²¹. En este documento, que para algunos autores anticipa el derecho humano al desarrollo²², se prevé que el ser humano sólo puede “satisfacer plenamente sus aspiraciones” -utilizando un lenguaje teleológico ciertamente ambiguo que encontraremos en otros textos- en un “orden social justo” y de que, por consiguiente, es necesario “acelerar el progreso social y económico en todas las partes del mundo” .

Ya prevé esta Declaración que “el desarrollo social *puede* promoverse mediante [...] la cooperación de los Estados con diferentes sistemas sociales, económicos o políticos”

²¹ Artículo 3 de la “Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social”, aprobada por resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1969. Nótese que en inglés el título de la Declaración es “Declaration on Social Progress and Development”, por lo que el adjetivo “social” refiriéndose tanto al progreso como al desarrollo.

²² Doebller Curtis F. J., *Introduction to International Humanitarian Law*, CD Publishing, Washington DC, 2006, p. 160 y Brownlie, I., *The Human Right to Development*, Human Rights in Development series, Commonwealth Secretariat, Londres, noviembre, 1989, p. 11.

consagrando al mismo tiempo la interdependencia del desarrollo económico y del desarrollo social.

La misma declaración reconoce también en su preámbulo que Estados Miembros “deben tener la *responsabilidad* de aplicar políticas internas y externas destinadas a promover el desarrollo social en todo el mundo y, en particular, asistir a los países en desarrollo a acelerar su crecimiento económico”, preparando el camino para poder hablar de ciertas obligaciones internacionales relacionadas con la asistencia y la cooperación en el ámbito social.

También establece en su artículo uno que todos los seres humanos y *también* todos los pueblos “tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir a él”, en una fórmula muy parecida a la que se recogerá en el artículo 1.1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 donde se establece que “todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

Según la Declaración de 1969, (artículo 2), el progreso y el desarrollo social -fundados en la dignidad humana- deben “asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia social”. Este vínculo necesario entre los derechos humanos, la justicia social y el progreso y desarrollo social se mantendrá conceptualmente, aunque con variaciones, hasta hoy en día, del derecho al desarrollo como derecho humano hasta un “enfoque de derechos humanos del desarrollo” (*human rights approach to development*)²³.

Si el desarrollo social y económico debe asegurar la promoción de los derechos humanos, ésta a su vez requiere “la eliminación inmediata y definitiva de todas las formas de desigualdad y de explotación de pueblos e individuos” y “el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna”, como recogen los dos últimos incisos del artículo 1 de la Declaración, en una fórmula de derechos como medios y fines que recuerda a la “expansión de libertades como fin y medio del desarrollo” que presentaría años más tarde Amartya Sen, en una línea de pensamiento claramente aristotélica²⁴. Recordemos que si para Sen el desarrollo requiere la expansión de capacidades, se cuida expresamente, sin embargo, de no identificar derechos humanos con capacidades²⁵.

Entre las *condiciones* primordiales para el desarrollo se mencionan además, en el artículo 3 de la Declaración, el derecho de los pueblos a la libre determinación, la soberanía permanente de cada nación sobre sus riquezas y recursos naturales y la cooperación entre los Estados, “cualesquiera que sean las diferencias existentes entre sus sistemas sociales,

²³Peter Uvin hace una revisión crítica de la evolución de este concepto en Uvin, P., “From the Right to Development to the Rights-based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development”, *Development in Practice*, vol. 17, n.4, 2007.

²⁴Sen, A., *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

²⁵Sen, A., “Human Rights and Capabilities”, *Journal of Human Development*, vol. 6, n. 2, julio, 2005.

económicos o políticos”, -resaltamos como este requisito se aceptaría, como hemos visto, en principio de derecho internacional- concluyendo asimismo que (artículo 9) “el progreso y el desarrollo en lo social son de interés general para la comunidad internacional, que debe complementar, mediante una acción internacional concertada, los esfuerzos emprendidos en el plano nacional para elevar los niveles de vida de las poblaciones”.

Sin concebirse todavía un derecho humano al desarrollo como tal, las demandas materiales inmediatas necesarias y los métodos para la realización del progreso y desarrollo social coinciden en gran medida con las demandas materiales del cumplimiento del derecho humano al desarrollo en su forma actual. Los medios previstos para obtener ambos fines, diríamos, son coincidentes. La Declaración de 1969 prevé, por ejemplo, la movilización de medios y recursos para la promoción del desarrollo social que incluyen (artículo 23), “el suministro de un mayor volumen de asistencia en condiciones más favorables [...] la aplicación del objetivo en materia de volumen de ayuda de un mínimo del 1% del producto nacional bruto a precios de mercado de los países económicamente adelantados” -en una formulación más que optimista si la ponemos en relación con el hecho de que el 0,7% de PIB destinado a asistencia internacional que se sugeriría en 1970 y se plasmaría en los Objetivos del Milenio de 2000 no ha sido hasta la fecha alcanzando por la inmensa mayoría de países donantes²⁶-, “la provisión de asistencia técnica, financiera y material, tanto de carácter bilateral como multilateral, [...] así como una mejor coordinación de la asistencia internacional con miras a la realización de los objetivos sociales de los planes nacionales de desarrollo” -tan insistentemente solicitadas en los medios de cooperación internacionales especialmente tras las Declaraciones de París y Accra-, o la “rectificación de la posición de los países en desarrollo en el comercio internacional por medio de una relación de intercambio equitativa”.

El mencionado Primer Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo²⁷ había concluido con resultados decepcionantes y la Asamblea General adoptó en 1970 la “Estrategia internacional para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo”²⁸ reforzándose la idea de que mayores esfuerzos debían ser realizados para promover el desarrollo y disminuir la desigualdad en el mundo.

Fue en 1972, tal y como recordaba la Alto Comisionado de Derechos Humanos, Navanethem Pillay en su intervención en Berlín, cuando el prestigioso jurista senegalés Keba M'Baye²⁹ propuso concebir el desarrollo como un derecho humano, un derecho diferenciado de otros derechos humanos y del Derecho Internacional del Desarrollo que a mediados de los sesenta impulsaran André Philip y Virally, ya que éste se referiría a los

²⁶ El objetivo del 0,7% reafirmado por los Objetivos del Milenio, sólo ha sido cumplido hasta la fecha por cinco países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia.

²⁷ Aprobada por la Resolución 1710(XVI), de 19 de diciembre de 1961.

²⁸ Resolución 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970.

²⁹ Keba M'Baye (1924-2007) había sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Senegal, y años más tarde sería vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, magistrado de la Corte Constitucional de Senegal, miembro del Comité Olímpico Internacional y uno de los cinco miembros del grupo de expertos internacionales nombrados en 1992 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia.

medios materiales necesarios para realizar el derecho humano al desarrollo³⁰.

La propuesta de M'Baye cristalizó y el derecho al desarrollo fue mencionado por primera vez de manera oficial en 1977, cuando la Comisión de Derechos Humanos en su 33a sesión, entonces bajo presidencia senegalesa, a propuesta precisamente de la delegación de ese país, aprobó la Resolución 4 (XXXIII), de 21 de febrero de 1977, llamando al estudio del derecho al desarrollo como derecho humano.

Tal estudio, realizado por Philip Alston³¹, fue concluido en 1979 y tomado como base teórica del primer Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo, establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 36 (XXXVII), de 11 de marzo de 1981, encargada de presentar un borrador de instrumento internacional sobre la materia.

Mientras que el derecho al desarrollo tomaba forma como derecho humano todavía en ambientes académicos, la Crisis del Petróleo, que estalló en octubre de 1973, ponía el acento en la vinculación del desarrollo con el crecimiento económico, la autodeterminación, el control sobre los recursos naturales, y el convencimiento de los países no alineados de su posibilidades de incrementar su peso político en la escena internacional y garantizar su desarrollo económico a través de dicho control. Recordemos que, si bien la crisis estalló a raíz de la estrategia de embargo energético de los países árabes en el conflicto árabe-israelí conocida como Guerra del Yom Kippur, en el trasfondo existía la disminución de las ganancias del petróleo de los países de la OPEP producidas por la devaluación del dólar estadounidense y la reclamación de realizar un nuevo reparto más equitativo de los beneficios de los recursos naturales. Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, se encontraba en una difícil situación económica, entre otras razones por los gastos bélicos en Vietnam y se hallaba, por primera vez en el siglo XX, en situación de déficit comercial. La devaluación de la divisa en la que se pagaba el petróleo, hasta un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971, se produjo a partir de las políticas de impulso económico de los Estados Unidos que el presidente Nixon había puesto en marcha ese año y abandonó el patrón oro finiquitando el sistema de Bretton Woods, puesto en marcha en 1944. El embargo árabe -con la excepción de Libia- terminó en marzo de 1974.

En este contexto histórico, apenas finalizado el embargo, fueron aprobados un simbólico 1º de mayo de 1974, mediante las resoluciones 3201(SVI) y 3202 SVI de la Asamblea General, la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

La defensa de la aprobación del derecho al desarrollo como derecho humano estuvo fuertemente vinculada desde entonces al Nuevo Orden Económico Internacional y a sus

³⁰ M'Baye, K., "Le Droit au Développement Comme un Droit de L'Homme, Leçon inaugurale de la Troisième Session d'enseignement de l'Institut International des droits de l'Homme", 3/07/1972, *Revue des droits de l'homme*, 1972, pp. 503 y ss.

³¹ *The International Dimensions of the Right to Development As a Human Right in Relation with Other Human Rights Based on International Co-Operation, Including the Right to Peace, Taking into Account the Requirements of the New International Economic Order and the Fundamental Human Needs*, Report of the Secretary-General, UN doc. E/CN. 4/1334, 2 de enero de 1979.

países promotores, el Movimiento de Países No Alineados, que impulsaron el desarrollo como derecho humano en la forma que finalmente fuera adoptada en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986.

Para Gómez Isa³² debemos considerar la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional como un avance significativo hacia la consideración del desarrollo como derecho humano porque supone “un cambio de orientación en el modo de entender el subdesarrollo y los procesos de desarrollo” ya que, hasta ese momento, se entendía el desarrollo en el marco de la teorías de la modernización como un proceso por etapas temporales, por el que todos los países habrían de alcanzar antes o después -¿quién no ha oído nunca ese “estamos tantos años por detrás de tal país...?”- mientras que a partir de los años setenta, el subdesarrollo se empieza a concebir ya ampliamente como un fenómeno cuyo origen se encuentra en la estructura económica global.

A la construcción de concepto de vinculación del fenómeno del subdesarrollo con la estructura socioeconómica global y no sólo con las políticas nacionales, podríamos añadir, contribuyeron en gran medida los debates llevados a cabo en el seno la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en torno a la *teoría de la dependencia*.

La Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional recoge la necesidad de promover el progreso económico y social de los pueblos y la pone en relación con un proceso inconcluso de descolonización -en sentido amplio, afirmando que “los últimos vestigios de la dominación extranjera y colonial,[...] y el neocolonialismo en todas sus formas siguen contándose entre los mayores obstáculos para la plena emancipación y el progreso de los países en desarrollo”- resaltando la desigualdad imperante en términos de progreso tecnológico y económico, en línea, como asegura Robert W. Cox³³ con la ideología que había comenzado a gestarse en la Conferencia de países no alineados de Argelia en 1973.

Mientras que, en general, esta Declaración pretendía convertirse en “una de las bases más importantes para las relaciones económicas entre todos los pueblos y todas las naciones” apoyándose en principios sólidamente fundamentados en documentos internacionales anteriores, el lenguaje combativo y ciertos puntos controvertidos y hasta cierto punto subversivos se granjearon la desconfianza cuando no la hostilidad de los países más desarrollados, y es que durante los setenta, como recuerda Ramírez Cendrero³⁴ “es innegable el protagonismo y relevancia de un enfoque que marcará [...] un punto de inflexión en la comprensión y el tratamiento del subdesarrollo, más orientado a partir de ahora hacia la acción que hacia la reflexión”.

³² Gómez Isa siguiendo a la tesis de Rostow.W., “Las etapas de crecimiento: un manifiesto no comunista”. *Fondo de Cultura Económica*, México, 1976, en Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 28.

³³ Cox, R. W., “Ideologies and the New International Economic Order: reflections on some recent literature”, *International Organization*, vol. 33, n. 2, 1979, pp. 257-302.

³⁴ Ramírez Cendrero, J.M., *Génesis y evolución de la idea de desarrollo*. En *Economía para el desarrollo. Lecturas desde una perspectiva crítica*. Ed. Luis Miguel Puerto Sanz. Catarata, Madrid, 2008.

La Declaración, recordando que por aquel entonces el 70% de la población mundial recibía únicamente el 30% de los ingresos mundiales concluye que “ha resultado imposible lograr un desarrollo uniforme y equilibrado de la comunidad internacional con el actual orden económico internacional” y que el mismo “está en contradicción directa con la evolución de las relaciones políticas y económicas internacionales en el mundo contemporáneo”.

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), según la Declaración de 1974 debe basarse en los “principios de igualdad soberana, cooperación, no discriminación y libertad” para adoptar un sistema económico y social más apropiado para su desarrollo. Todos estos principios, que forman la mayor parte del texto, habían sido consensuados, como hemos visto, en otros documentos internacionales anteriormente. Sin embargo, la Declaración establece también otros puntos que fueron obvias causas de fricción con los países más desarrollados. La plena soberanía permanente de los Estados, tal y como se preveía en el texto, incluía respecto a los recursos naturales “incluso el derecho de nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales”, así como “la reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas transnacionales mediante la adopción de medidas en beneficio de la economía nacional de los países donde esas empresas realizan sus actividades”, “el trato preferencial y sin reciprocidad a los países en desarrollo, siempre que sea factible, en todas las esferas de la cooperación económica internacional cuando ello sea posible”, “la creación de condiciones favorables para la transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo”, “la necesidad de que los países en desarrollo consagren todos sus recursos a la causa del desarrollo” o “la garantía de que uno de los principales objetivos del sistema monetario internacional reformado será promover el progreso de los países en desarrollo y asegurarles una corriente suficiente de recursos reales”.

Las principales discusiones sobre el NOEI giraron en torno al reparto de los beneficios de los recursos naturales y el comercio a escala global, con los países más desarrollados promoviendo una mayor liberalización para un desarrollo de todos los países. Autores como el canadiense Herbert G. Grubel, por ejemplo, consideraron que el NOEI no presentaba tanto un problema de motivaciones, arraigadas en una evidente desigualdad global, sino en el método de implementación de ese nuevo sistema mundial, arguyendo por ejemplo que la redistribución de riqueza a escala global a través del incremento de los precios de la materia prima acabaría empobreciendo aún más a los países menos desarrollados³⁵.

Asimismo, la Declaración de 1974 prevé en su punto 6 convertirse en “una fuente adicional de inspiración” para la elaboración de una Carta que recoja los derechos y deberes económicos de los estados.

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados fue adoptada en diciembre

³⁵ Grubel, H.G., “The Case Against the New International Economic Order”, *Weltwirtschaftliches*, vol. 113, n. 2, 1977, pp. 284-307.

de 1974³⁶ y reafirma el principio de cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico y social, aunque reconociendo la necesidad de *consolidar* la cooperación internacional para el desarrollo. Pretendiendo en su texto contribuir a la creación, por parte de toda la comunidad internacional, de condiciones favorables a la promoción “del progreso económico y social de todos los países, especialmente de los países en desarrollo” y “la eliminación de los principales obstáculos al progreso económico de los países en desarrollo”, establece una serie de *principios fundamentales* de las relaciones económicas internacionales que incluyen, además de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, el respeto de los derechos humanos, el fomento de la justicia social internacional y la cooperación internacional para el desarrollo.

En base a estos principios establece la Carta una serie de derechos y deberes: a ejercer libremente su plena soberanía sobre su recursos naturales, a reglamentar las inversiones extranjeras y las actividades de empresas transnacionales dentro de su jurisdicción nacional, o a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros - pagando la apropiada compensación- etc. El artículo 9 establece de nuevo el deber - llamado aquí *responsabilidad*- “de cooperar en las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo”. Y es que a pesar del importante peso que la Carta da a la mejora de las relaciones económicas y comerciales-presentes en todo el texto-, no renuncia a la vinculación entre el crecimiento económico y el progreso y desarrollo social.

Así, el artículo 17 establece que la “cooperación internacional para el desarrollo es objetivo compartido y deber común de todos los Estados” y que “todo Estado debe cooperar en los esfuerzos de los países en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y *social*” asegurándoles condiciones externas favorables y dándoles una asistencia activa, compatible con sus necesidades y objetivos de desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana de los Estados y libre de cualesquiera condiciones que menoscaben su soberanía”. El artículo 31, disposición final de la Carta, nos recuerda que “la prosperidad de la comunidad internacional en su conjunto dependen de la prosperidad de sus partes constitutivas”.

Con esta base normativa como trasfondo, con la evolución doctrinal de teóricos del desarrollo centrándose en el ser humano como sujeto central del desarrollo y en la satisfacción de sus necesidades primarias, más las aportaciones teóricas de los mencionados juristas M'Baye y Alston, en marzo de 1979 la Comisión de Derechos Humanos aprueba las resoluciones 4 (XXXV) y 5 (XXXV) en las que se subraya el deber que tienen todos los estados de crear las condiciones necesarias para la realización del derecho al desarrollo y se recomienda que el Consejo Económico y Social solicite un estudio sobre el derecho al desarrollo como derecho humano.

La primera resolución sobre el derecho al desarrollo de la Asamblea General fue la Resolución 34/46, de 23 de noviembre de 1979, en la que se subraya que el derecho al

³⁶ Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU de 12 de diciembre de 1974.

desarrollo es un derecho humano. Esta resolución fue poco después seguida por la resolución 35/174 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1980, en la que se solicitaba a la Comisión de Derechos Humanos la adopción de medidas necesarias para promover el derecho al desarrollo como uno de los derechos humanos, incluyendo la organización de un seminario sobre la relación entre derechos humanos, paz y desarrollo a celebrar en 1981, que dio pie a que la Comisión de Derechos Humanos aprobara a su vez la resolución 36 (XXXVII), de 11 de marzo de 1981, en la que se establecía un grupo de trabajo de expertos para el estudio de alcance y contenido del derecho al desarrollo y los medios más eficaces de garantizar su realización. Repasaremos en detalle más adelante las vicisitudes del Grupo de Trabajo y la decisiva aportación de la delegación de Yugoslavia.

Aunque el derecho humano al desarrollo no sería proclamado hasta 1986, fruto de este trabajo empezó a manifestarse en documentos internos internacionales y regionales. Así, en 1981 fue por primera vez proclamado -a nivel regional- el derecho al desarrollo como tal en la Declaración en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, conocida también como la Carta de Banjul³⁷, la cual prevé en su preámbulo que “es esencial prestar especial atención al derecho al desarrollo”, y en su artículo 22, específicamente dedicado a este derecho, se establece que “1. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia común de la humanidad” y que “2. Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo”.

Resaltemos como la Carta de Banjul deja claro que garantizar la libertad e identidad de los pueblos no se opone a la realización colectiva del derecho al desarrollo. Si el “deber de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo” ha de ser ejercido no solo individual sino colectivamente, la cooperación nace como requisito previo necesario de ese deber. Así la cooperación colectiva que se requiere necesariamente para cumplir con el derecho al desarrollo no supone una injerencia en su soberanía.

En su relación con el derecho de autodeterminación, expresa la Carta de Banjul en su artículo 20:

“Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. Decidirán libremente su estatus político y procurarán su desarrollo económico y social según la política que ellos mismos hayan escogido libremente”.

El derecho al desarrollo como derecho humano fue proclamado finalmente de manera universal el 4 de diciembre de 1986, por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando esta adoptó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en su Resolución 41/128, con 146 votos a favor, el único voto negativo de los Estados Unidos y tan sólo cinco abstenciones: las de Dinamarca, Finlandia, la República Federal de Alemania, Islandia, Israel, Japón, Suecia y Gran Bretaña.

³⁷ Aprobada en Banjul el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya) siguiendo la Decisión 115, XVI de la Asamblea de jefes de Estado de gobierno, celebrada en Monrovia, Liberia, del 17 al 20 de julio de 1979.

La Declaración de 1986 es el texto de referencia del derecho humano al desarrollo, es el que lo proclama por primera vez universalmente y alrededor del cual se reunió el consenso necesario para comenzar a fijarlo como norma de Derecho Internacional. En este texto encontraremos la definición y contenido del derecho al desarrollo sobre el que se han elaborado las reflexiones posteriores del desarrollo como derecho humano, y por ello en los próximos apartados nos detendremos a analizarlo, sirviéndonos como punto de partida para comprender la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación.

A la Declaración de 1986 le siguieron múltiples estudios sobre el derecho al desarrollo, apoyados por las actividades de Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que intentaban resolver dudas en torno a diversos interrogantes acerca de su alcance y contenido, provocando interesantes debates -en los que los teóricos yugoslavos como Danilo Türk o Milan Bulajić desempeñaron nuevamente un papel muy activo- que desembocaron en la Consulta Mundial sobre la Realización del Derecho al Desarrollo, celebrada en Ginebra del 8 al 12 de enero de 1990, y su correspondiente Informe Final elaborado a solicitud del Secretario General³⁸. A la Consulta Mundial asistieron una veintena de expertos invitados, representantes de agencias y programas de Naciones Unidas y de más de medio centenar de gobiernos, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, intentando enfocar la Consulta a cuestiones prácticas, esto es, a los modos y medios de realización del derecho al desarrollo y no tanto a disquisiciones acerca de su naturaleza y contenido³⁹.

En febrero de 1992⁴⁰, la Comisión de Derechos Humanos, reafirmando los principios contenidos en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y recordando el mencionado informe acerca de la Consulta Global, pidió al Secretario General propuestas concretas sobre la aplicación y promoción efectivas de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que fueron plasmadas en dos informes del Secretario General uno dirigido al “reforzamiento de los mecanismos existentes para la promoción y la protección de los derechos humanos”⁴¹ y un segundo informe con “propuestas concretas para la eficaz aplicación y promoción del derecho al desarrollo”⁴², cuyas conclusiones se recogerían en 1993, como preparación de la Conferencia de Viena sobre derechos humanos, en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre la “Cuestión de la realización del derecho al desarrollo. Propuestas concretas para la eficaz aplicación y promoción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo”⁴³.

A partir de la Consulta Mundial, el derecho al desarrollo fue reiteradamente proclamado en múltiples documentos internacionales, incidiendo en la necesidad de su cumplimiento más allá de los debates en torno a su contenido, contrastando con algunas reticencias

³⁸ E/CN.4/1990/9/Rev.1

³⁹ Barsh, R. L., “The Right to Development as a Human Right: Results of the Global Consultation”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 13, No. 3, 1991, pp. 322-33.

⁴⁰ Resolución 1992/13, de 21 de febrero.

⁴¹ E/CN.4/1992/12 y Add.1

⁴² E/CN.4/1992/10

⁴³ E/CN.4/1993/16

encontradas en medios políticos y doctrinales.

En 1992, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, alumbró la conocida como Declaración de Río, cuyo principio número 3 establece que: “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. El desarrollo adquiere entonces, a la luz de esta Declaración, un adjetivo, “sustentable”, que lo aleja de nuevo del puro incremento de ingresos económicos, si bien desde ese momento muchos economistas insistirán en la conveniencia -precisamente económica- de un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y con los derechos de generaciones futuras. Establece el principio 4 que “a fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada”. El principio de cooperación vuelve a aparecer en relación con el desarrollo cuando se afirma (principio 5) que “todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sustentable, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo”. Por eso, el principio 6 dice que “se deberá dar especial prioridad a la situación y necesidades especiales de los países en desarrollo”.

Poco después, la Declaración de Viena y Programa de Acción, aprobada el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos⁴⁴, reafirma definitivamente el derecho al desarrollo tal y como se formuló en la Declaración de 1986. Es para la gran mayoría de autores -destacando Marks o Sengupta- el momento de consolidación y consagración del derecho al desarrollo como derecho humano. Establece su punto 10 que: “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. Como se dice en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la persona humana es el sujeto central del desarrollo. El desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Los Estados deben cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. La comunidad internacional debe propiciar una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo. El progreso duradero con miras a la aplicación del derecho al desarrollo requiere políticas eficaces de desarrollo en el plano nacional, así como relaciones económicas equitativas y un entorno económico favorable en el plano internacional”.

En su relación con el derecho de libre determinación de los pueblos, es de notar que el punto 2 de la Declaración de Viena recoge exactamente la misma fórmula que los mencionados artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Dice el punto 2 de la Declaración de Viena que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

⁴⁴La Declaración y el Programa de Acción de Viena fue aprobada el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada entre los días 14 a 25 de junio de ese mismo año. Vid. doc. 12 de julio de 1993 A/CONF.157/23

Es muy destacable además, y así lo recoge la mayoría de la doctrina, el avance que supuso la Declaración de Viena en una cuestión concreta. Se proclama que (punto 5) “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”. Esta fórmula, además de ser muy importante para la reflexión que haremos más adelante sobre el derecho al desarrollo en relación con el derecho a la autodeterminación, supuso la superación de ciertos debates en torno al derecho al desarrollo: cualquiera que sea la concepción de desarrollo que se maneje, sea esta relacionada con el incremento de los medios económicos o más amplia, debe ponerse en relación con todos los demás derechos humanos.

Por último, mencionemos que, recogiendo la herencia de la Declaración de Río, el punto 11 de la Declaración de Viena recuerda que “el derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y futuras”.

Tras la reafirmación del derecho al desarrollo como derecho humano -y tal vez impulsado por la declaración de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos- los años 90 contemplaron la ascensión, por un lado, del concepto de generalización de derechos humanos en las políticas públicas (*mainstreaming of human rights in public policies*) y por otro, aunque de manera estrechamente relacionada, del enfoque de derechos humanos en los procesos de desarrollo (*human rights approach to development*). No entraremos por el momento en la relación entre estos conceptos y el derecho al desarrollo, objeto de múltiples debates, para algunos autores complementarios⁴⁵ para otros, conceptos nacidos de la poca operatividad del derecho al desarrollo pero conducentes a similares resultados prácticos⁴⁶. Baste decir que el impulso de éstos no impidió que se siguiera proclamando al desarrollo como derecho humano.

Así, el derecho al desarrollo fue de nuevo recogido en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 (“el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable, que es parte integrante de los derechos humanos”) y en la Cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995.

Mientras tanto, en el seno de Naciones Unidas, se estableció por resolución de la Comisión de Derechos Humanos un Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. El primer período de sesiones se celebró en Ginebra en noviembre de 1993, produciendo un informe⁴⁷ enfocado a cuestiones prácticas de realización del derecho al desarrollo.

⁴⁵Ver, por ejemplo, Sitta, A., *The Role of the Right to Development in the Human Rights Framework For Development*, Human Development and Capabilities Approach Association, disponible en www.capabilityapproach.com/pubs/5_1_Sitta.pdf). No ha sido publicado pero ha tenido repercusión en Naciones Unidas y ha sido citado en documentos de la Asamblea General como el informe del Relator Especial Anand Grover. Vid doc. A/HRC/17/25

⁴⁶Uvin, P., “From the Right to Development to the Rights-based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development”, *Development in Practice*, vol. 17, n.4, 2007.

⁴⁷E/CN.4/1994/21

Durante los siguientes años, tras sucesivas renovaciones, el Grupo de Trabajo mantuvo sus actividades informativas -a partir de 2006 reportando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- y ese enfoque práctico hasta el, por ahora, último Informe sobre el Derecho al Desarrollo⁴⁸ presentado por la actual presidenta, la esrilanquesa Tamara Kunanayakam, fruto de 12º período de sesiones celebrado también en Ginebra, entre los días 14 a 18 de noviembre de 2011.

De manera paralela, la Comisión de Derechos Humanos nombró un Experto Independiente⁴⁹, el economista Arjun K. Sengupta, profesor de la Universidad Nehru de Nueva Delhi, quien produjo una serie de informes sobre el derecho al desarrollo⁵⁰ en los que, si bien trató de su fundamentación y contenido -cuestiones que él daba por superadas tras la Declaración de Viena-, prefirió orientarse a la búsqueda de vías para el efectivo reconocimiento y realización de este derecho. Este enfoque práctico, que en realidad puede resumirse en su mayor parte en la búsqueda del incremento de acuerdos internacionales para aumentar la ayuda y cooperación internacional financiera y técnica orientada al desarrollo -aquí sí definido de manera amplia incluyendo derechos- ha sido la visión predominante desde entonces en los textos que recogen el derecho al desarrollo como derecho humano.

Cuando los jefes de estado se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en 2000, del 6 al 8 de septiembre, para firmar la Declaración de la Cumbre del Milenio, se incluyeron dos referencias directas al derecho al desarrollo: “estamos comprometidos a hacer del derecho al desarrollo una realidad para todos (...)” y “no ahorraremos ningún esfuerzo en la promoción de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho, así como el respeto para todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, *incluyendo el derecho al desarrollo*”. Recordemos que unos meses antes, el 15 de febrero de 2000, la Asamblea General había reforzado su compromiso con el derecho al desarrollo plasmado en su Resolución 54/175.

El compromiso internacional alcanzado con el desarrollo con la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio continuó, por tanto, un período de debates y encuentros centrados no ya tanto en la naturaleza del desarrollo o del derecho al

⁴⁸A/HRC/19/52

⁴⁹Vid. Resolución 1998/72, de 22 de abril de 1998

⁵⁰Vid. Sengupta, A., *Primer Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/1999/WG.18/2;

Segundo Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, UN Doc. E/CN.4/2000/WG.18/CPR.1; *Tercer Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/2001/WG.18/2;

Cuarto Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, UN Doc. E/CN.4/2002/WG.18/2;

Quinto Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo: Marco para la Cooperación al Desarrollo y el Derecho al Desarrollo UN Doc. E/CN.4/2003/WG.18/6;

Estudio preliminar del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo en el impacto de las cuestiones económicas y financieras en el disfrute de los derechos humanos. UN Doc. E/CN.4/2003/WG.18/2;

Sexto Informe del Experto Independiente sobre el derecho al desarrollo: implementando el derecho al desarrollo en el actual contexto global, UN Doc. E/CN.4/2004/WG.18/2;

desarrollo, sino en cómo alcanzar unas metas más o menos definidas de reducción de pobreza y desigualdad, haciendo buenas las reflexiones de Sengupta o Marks, quienes, ante las evidentes urgencias ante las que nos hayamos, sugieren que nos esforcemos en pensar *cómo* hacer posible el desarrollo más que en la justificación teórica de su existencia como derecho humano.

En 2003 se celebró en Roma el Foro sobre Armonización, y en 2005, el Foro de Alto Nivel, que culminó con la Declaración sobre Eficacia de la Ayuda de París. Dicha Declaración, documento de referencia en la práctica de la cooperación internacional para el desarrollo, proclama los principios de alineación (compromiso de los donantes de apoyar a los países beneficiarios basándose en las instituciones y estrategias de desarrollo de estos últimos), armonización (cooperación entre países donantes), apropiación (coordinación y liderazgo de los países en desarrollo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo), resultados (enfoque de resultados medidos por indicadores medibles) y mutua rendición de cuentas entre países donantes y socios.

La Declaración de París fue seguida por la Agenda de Acción de Accra, adoptada el 4 de septiembre de 2008 en el III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, que profundiza en las medidas para aumentar la eficacia de la ayuda para contribuir al logro de los Objetivos del Milenio y fortalece el papel de la sociedad civil en la cooperación internacional para el desarrollo, y por la Alianza de Busán para la Cooperación Eficaz al desarrollo, aprobada en el IV Foro de Alto Nivel celebrado en Corea en 2011. No se recoge en estos documentos específicamente el desarrollo como derecho humano al desarrollo pero sí el respeto a los derechos humanos en su conjunto. En el punto 3 de la Declaración de Accra, por ejemplo, se afirma que “el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un efecto duradero sobre las vidas y el potencial de mujeres, hombres y niños pobres”. En el punto 13. c) se consagra el denominado “enfoque de derechos humanos del desarrollo”. Asimismo encontramos referencias a la solidaridad como principio básico para el desarrollo y un compromiso con los resultados de la cooperación internacional sobre los que, afirman los signatarios, “rendiremos cuentas entre nosotros y ante nuestros respectivos parlamentos y órganos de gobierno”.

La Alianza de Busán de 2002 reconoce en su declaración final que está basada en “principios compartidos, metas comunes y compromisos diferenciales, con miras a un desarrollo internacional eficaz” -asomando el principio de solidaridad-, que “la pobreza y la desigualdad siguen siendo el desafío principal” y que la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza son parte integral del [...] desarrollo”.

Mientras tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas ha seguido apoyando el reconocimiento del derecho al desarrollo y solicitando medios y estudios, como por ejemplo la Resolución sobre el derecho al desarrollo de 27 de febrero de 2003⁵¹.

Paralelamente, y de manera relacionada, se celebraron cumbres internacionales sobre cómo financiar el desarrollo. Han destacado las cumbres de Monterrey de 2002 y Doha

⁵¹ A/RES/57/223

en 2008. El Consenso de Monterrey es el resultado de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada del 18 al 22 de marzo de 2002 en esta ciudad mexicana, organizada por Naciones Unidas⁵². El Consenso de Monterrey pretende hacer frente a los problemas de la financiación para el desarrollo en el mundo, en particular en los países en desarrollo, con la meta de “erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico sostenido y promover un desarrollo sostenible al tiempo que avanzamos hacia un sistema económico mundial basado en la equidad y que incluya a todos”.

El documento final del consenso de Monterrey contiene compromisos generales sobre movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo, movilización de recursos internacionales para el desarrollo, inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales privados, comercio internacional como promotor del desarrollo, aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo, reducción de deuda externa y tratamiento de cuestiones sistémicas. Se trata de fortalecer, por tanto, todas las vías de financiación de desarrollo que no incluyan una redistribución obligatoria, manteniendo el *status quo*, aunque reconociendo la necesidad de aumentar y mejorar la cooperación.

Es destacable que el documento recoja en su punto 1 que “cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social, y nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo”. A pesar de lo cual reconoce que “no obstante, las economías nacionales están ahora interrelacionadas con el sistema económico mundial”. Al respecto, comentaba entonces el profesor José Antonio Alonso que dicha interdependencia “ha puesto en evidencia, con más claridad que nunca, que es difícil la gobernabilidad de un mundo crecientemente integrado, en el que rigen intensas desigualdades”, resaltando que “incluso una ayuda acrecentada será poco eficaz si se preservan los obstáculos que el sistema internacional impone a los países en desarrollo”⁵³.

En este contexto, prevé el punto 11 del Consenso de Monterrey que “la libertad, la paz y la seguridad, la estabilidad interna, el respeto de los derechos humanos, *incluido el derecho al desarrollo*, y el estado de derecho, la igualdad entre los géneros, las políticas con orientación de mercado y el compromiso general de crear sociedades justas y democráticas, son también condiciones esenciales que se refuerzan mutuamente”.

Por su parte, la Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo⁵⁴, documento final de la Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, celebrada en Catar en 2008, reafirma en su Introducción los objetivos y compromisos del Consenso de Monterrey “en su integridad y enfoque holístico”.

La Declaración de Doha se reafirma en la idea de que cada país es responsable de su desarrollo pero considerando que “es necesario que los esfuerzos de desarrollo nacional

⁵² A/CONF.198/3

⁵³ Alonso, J.A., “Sin respuestas de Monterrey”, *El País*, 22 de marzo de 2002.

⁵⁴ A/CONF.212/L.1/Rev.1

se sustenten en un entorno económico internacional propicio”. El adjetivo “propicio”, de nuevo, no aporta cambios significativos en el modo de entender la distribución de bienes globales, sino que se refiere a una mayor eficiencia del sistema actual basado en la voluntariedad de los actores de desarrollo y a un incremento en el volumen de asistencia. La comunidad internacional expresa en este documento su consideración de que el contexto internacional “ha cambiado profundamente” desde que fuera proclamada la Declaración de Monterrey, registrándose “avances en algunas esferas” pero lamentando que, de modo global, “la desigualdad ha aumentado”. Como en aquélla, la Declaración de Doha recoge en su punto 2 la reafirmación de “la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, *incluido el derecho al desarrollo*”.

Por último, podemos mencionar también el artículo 23 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el cual recoge explícitamente el derecho al desarrollo, nuevamente vinculado con el derecho a la autodeterminación de los pueblos:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”.

§2.2 Fundamentación del derecho al desarrollo

Es posible analizar el derecho humano al desarrollo desde una perspectiva tridimensional, examinando su validez en sentido estricto, correspondiente con su dimensión normativa (fundamentación jurídica), la justificación de su legitimidad en su dimensión axiológica (fundamentación moral) y su eficacia en el plano fáctico (fundamentación política), y podemos considerar todo ello en relación a un espacio y un tiempo histórico determinados.

El amplio consenso alcanzado en la proclamación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, con tan sólo un voto en contra, más la reiterada proclamación del derecho al desarrollo como derecho humano en los textos descritos anteriormente, ha sido, para la mayoría de autores estudiosos del derecho al desarrollo, la piedra angular del fundamento de su existencia y de su reconocimiento a nivel internacional.

En palabras del que fuera Experto Independiente de Naciones Unidas Arjun Sengupta “[...] los derechos humanos son aquellos derechos que la gente se da a sí misma. [...] Son derechos humanos porque así están reconocidos por una comunidad de personas, fluyendo desde su propia concepción de dignidad humana, a la cual estos derechos le son inherentes. Una vez que han sido aceptados a través de un proceso de construcción de consenso, éstos obligan al menos a aquellos que son parte del proceso de aceptación”⁵⁵.

⁵⁵ Sengupta, A., “Realizing the Right to Development”, *Development and Change*, vol. 31, n. 3, 2000 p. 557.

Siguiendo esta idea, el Experto Independiente expresa, en otro lugar⁵⁶, que “como resultado de ese amplio apoyo, del derecho al desarrollo puede decirse que goza de reconocimiento general internacional”, si bien es cierto que reconoce seguidamente que “quedan todavía grandes diferencias en la interpretación de la Declaración sobre el contenido exacto del derecho al desarrollo” y es por ello que “lo que queda ahora es establecer programas y medidas para implementarlo en la práctica”. Así, el Experto Independiente urge en sus escritos a dar por cerrados los debates en cuanto a la justificación del derecho al desarrollo como derecho humano y a buscar en cambio definir su contenido, las vías y métodos más adecuados para su realización.

Sin embargo, los argumentos de Sengupta, siendo legítimos, transmiten cierta impaciencia si conocemos además la multitud de debates y críticas que el derecho al desarrollo suscitó en su encaje en la teoría general de derechos humanos durante los años setenta y principios de los ochenta y también, aunque de manera más atenuada, precisamente por el consenso al que alude Sengupta, tras la Declaración de 1986, hasta quedar casi cerrado el debate, en algunos puntos tal vez en falso, durante los noventa.

En el caso del derecho al desarrollo, la cuestión del contenido a la que alude Sengupta, por ejemplo, afecta directamente a su validez normativa porque si es considerado, como algunos autores han señalado, nada más que un derecho síntesis de una lista *numerus clausus* de derechos humanos ya reconocidos en los Pactos Internacionales -que son tratados y no proclamaciones-, es posible extraer la fuerza normativa de cada uno de los elementos del contenido, es decir de cada uno de los derechos por separado sin necesidad de argumentar el todo, la fuerza normativa del derecho al desarrollo como tal. Además, de manera relacionada, el problema de las obligaciones inespecíficas -imperfectas- asociadas al derecho al desarrollo, mencionadas en la Declaración pero sin instituciones coercitivas asociadas, afecta a la eficacia fáctica del derecho al desarrollo pero también a la validez normativa en cuanto que desdibuja los perfiles del mismo derecho. Por ello, para algunos autores, el derecho al desarrollo, siendo legítimo y pudiendo ser justificado moralmente, e incluso siendo imperfectamente efectivo, como demuestran los hechos -miles de millones se destinan cada año a proyectos en aras del cumplimiento de tal derecho, pero las desigualdades a nivel global continúan siendo abrumadoras y crecientes- está, sin embargo, “en proceso de positivación, en vías de adquisición de normatividad internacional”⁵⁷.

Estas imprecisiones nos conducen a pretender una clara fundamentación del derecho al desarrollo de manera detallada, sobre la cual continuar comprendiendo o precisando otros problemas, dando sentido por ejemplo a los debates sobre cuestiones de contenido y obligaciones, en determinados contextos históricos y sociales, ya que en palabras de Peces-Barba: “la correcta relación entre razón e historia (...) puede permitir la aparición de los valores (...) como construcción racional del hombre en la historia derivada de sus

⁵⁶ Sengupta, A., “The Human Right to Development”, *Oxford Development Studies*, vol. 32, n. 2, 2004, pp. 197-203.

⁵⁷ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998, p. 41.

finés y de sus necesidades”⁵⁸.

En el caso que nos ocupa, la fundamentación del derecho al desarrollo es un paso previo inevitable para estudiar su relación con el derecho a la autodeterminación, porque cuanto más delimitados sean los conceptos que queremos poner en relación, más inteligible será la naturaleza de esa relación.

Así, en las próximas líneas nos centraremos en la fundamentación moral del derecho al desarrollo sin pretender una fundamentación absoluta pero sí fundamentaciones posibles, pasando seguidamente a realizar algunas consideraciones adicionales en torno a su fundamentación política. Tras la fundamentación, analizaremos la definición del derecho al desarrollo, el contenido, titulares y obligaciones del derecho al desarrollo, para concluir con una ampliación de las consideraciones en torno a la validez normativa, teniendo en cuenta las fuentes mencionadas y concluyendo con la eficacia del derecho al desarrollo. Por último, pondremos todo ello en relación con la concepción del derecho al desarrollo en la antigua Yugoslavia, con el fin de ofrecer un contexto geográfico e histórico determinado.

§2.2.1 Fundamentación moral del derecho al desarrollo

La fundamentación moral del derecho al desarrollo parte, en cuanto derecho humano, del principio universalmente reconocido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Siguiendo a Norberto Bobbio⁵⁹, desde un punto de vista de análisis racional o crítico, podemos plantear el presupuesto de que los derechos humanos son deseables, es decir, “finés que deben ser perseguidos y que, pese a su deseabilidad, aún no han sido reconocidos todos en todo lugar y en igual medida”, y por ello nos vemos compelidos a encontrar motivos para justificar la elección de esos finés, elección que quisiéramos fuese tomada también por los demás, especialmente por aquellos capaces de producir normas jurídicamente válidas.

Sin pretender encontrar un fundamento absoluto —pretensión seguramente ilusoria—, podemos, sin embargo, encontrar fundamentos suficientes, legítimos, y relacionarlos con condiciones, medios y situaciones en las que, en este caso el derecho al desarrollo, pueda realizarse, considerando que los derechos humanos son “condiciones para la realización de valores últimos que, a su vez, no se justifican sino que se asumen”. En el caso del derecho al desarrollo, su realización facilitaría un valor último que no necesita ulterior justificación: que todos los pueblos se desarrollen y todas las personas participen en esos procesos de desarrollo.

⁵⁸ Peces-Barba Martínez, G., *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 122.

⁵⁹ Bobbio, N., “Sul fondamento dei diritti dell' uomo”. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, n. 42, 1965, pp. 301-109.

En el caso del derecho al desarrollo, tal y como está definido en el artículo 1.1 de la Declaración de 1986 (como “derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”), no se presenta, a mi juicio, mayor problema de asunción en su valor último, sin entrar a debatir en qué consiste exactamente ese desarrollo, más allá del hecho de que, como es generalmente aceptado, los valores últimos pueden presentarse contingentes en la práctica, en cuyo caso, hallaremos soluciones casuísticamente.

El valor último que defiende el derecho al desarrollo, llamémosle el núcleo irreducible, es compartido incluso por los detractores de la formulación del derecho al desarrollo como derecho humano. Efectivamente, desde una posición abstracta, ¿quién no está de acuerdo en que todos los pueblos se desarrollen y en que todos los seres humanos participen de ese desarrollo sea cual sea el contenido exacto de este desarrollo? Solo posiciones anti-igualitarias (no todos los pueblos o personas tienen derecho a desarrollarse, solo yo o los míos así sea a expensas de los demás) o totalitarias antiliberales (el derecho al desarrollo es exclusivo de los pueblos o naciones en su conjunto y de sus líderes y no de las personas⁶⁰) justificarían una oposición al valor último. Descartando estas posiciones, contrarias a la premisa que hemos indicado arriba de respeto a la libertad e igualdad en dignidad, base de los derechos humanos y, por tanto, posiciones sin fundamento moral para nosotros aceptable, podemos llegar a la conclusión de que la llamémosle vertiente negativa del derecho al desarrollo no presenta problemas mayores de justificación: todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse y todas las personas a participar en los procesos de desarrollo y nadie puede ilegítimamente impedir externamente ese desarrollo o esa participación en tal proceso.

La primera objeción al reconocimiento del derecho al desarrollo como derecho humano provino, así las cosas, no de ese valor último que no necesita justificación, de ese núcleo irreducible mencionado (todos, pueblos y personas, tenemos derecho al desarrollo), sino de su doble naturaleza en cuanto derecho colectivo y derecho individual. La primera crítica no es, por tanto, al derecho al desarrollo, sino al concepto de existencia misma de derechos colectivos. La posición de los representantes de Estados Unidos durante las deliberaciones previas a la adopción de la Declaración de 1986 quedó expresada de la siguiente manera: “las referencias a los derechos humanos de los pueblos están en contradicción con el concepto adecuado de derechos humanos como derechos individuales (...). Cabe temer que la Declaración sobre el derecho al desarrollo tienda a diluir y confundir el programa existente de derechos humanos de las Naciones Unidas”⁶¹.

Opuesta a esta visión, se sitúan los defensores de la existencia de derechos colectivos en perfecta compatibilidad con la existencia de derechos humanos individuales. En lo que respecta al derecho al desarrollo en cuanto derecho también colectivo, autores como

⁶⁰ La noción de la persona como sujeto central del desarrollo fue expresamente incluida en la Declaración de 1986 para prevenir que líderes de regímenes totalitarios justificaran la opresión a sus pueblos en el derecho al desarrollo.

⁶¹ AIC.3/41/SR.61, p. 35 (Sra. Byrne)

Bedjaoui consideran que “el derecho al desarrollo puede ser un derecho del ser humano como individuo sólo si es, en primer lugar, un derecho del pueblo o del Estado”⁶², ya que para Bedjaoui, siguiendo un razonamiento de inspiración marxista, existen hoy estados o pueblos proletarios y las plusvalías de la producción de éstas es aprovechada por otras naciones que ejercen un poder fáctico sobre ellas.

Para autores como Ezquiaga Ganuzas (partidario de una concepción instrumental del derecho al desarrollo), “la naturaleza de los problemas y de las soluciones ligados al derecho al desarrollo son colectivos y no individuales” y así “el derecho al desarrollo es un derecho colectivo, al menos en cuanto a su ejercicio, aunque (...) de la actividad de sus sujetos activos se deben desprender necesariamente ventajas para los individuos que son (...) sus beneficiarios”⁶³.

El problema fue superado por la doctrina y también en el texto de la Declaración de 1986 mediante la doble consideración del derecho al desarrollo como derecho colectivo y derecho individual, poniendo al sujeto individual en el centro de los procesos de desarrollo y como beneficiario último. La persona sólo puede desarrollarse y formar parte de procesos de desarrollo si las condiciones se lo permiten, tanto las condiciones internas en su comunidad -es decir si existe un proceso de desarrollo en su pueblo y estado en el cual formar parte que repercuta en los beneficios en derechos del sujeto individual- como las condiciones externas a su pueblo y estado -es decir si su estado en representación de su pueblo puede participar en procesos globales de desarrollo-.

Esta doble naturaleza implica, en el fondo, la aceptación de que las causas de subdesarrollo de los pueblos que afectan a individuos concretos no provienen *solamente* de dentro de los estados, sino también de una determinada arquitectura global que favorece procesos de desarrollo excluyentes afectando al individuo en cuanto ciudadano del estado y en cuanto miembro del pueblo o comunidad al que pertenece. Dicho de otra manera, si una persona puede ser víctima de discriminación en procesos de desarrollo por su razón de su situación individual (por razón de sexo, religión, edad), discriminada en cuanto perteneciente a un pueblo (en cuanto a su pertenecía a un grupo étnico o nacional determinado) o en cuanto ciudadana de un estado (a través de, por ejemplo, el ilegítimo aislamiento de un estado en el comercio o relaciones internacionales), bien podemos argumentar derechos que protejan a la persona, al miembro del grupo étnico o nacional o pueblo y al ciudadano representado en su estado contra discriminaciones ilegítimas y exclusiones de procesos de desarrollo.

De manera parecida, se ha criticado el derecho al desarrollo en cuanto derecho de los denominados derechos de tercera generación o derechos de la solidaridad, criticando así la parte (el derecho al desarrollo) por el todo (la conveniencia de reconocer tal grupo de derechos, argumentando sobre todo la pérdida de fuerza de los demás derechos por una inflación de derechos humanos). Esta crítica tampoco ataca los fundamentos del núcleo

⁶² Bedjaoui, M., “The Right to Development”, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Paris, 1991

⁶³ Ezquiaga Ganuzas, F.J., “Soberanía, autodeterminación y derecho al desarrollo”, *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, n. 41, 1995, p. 804

irreductible del derecho al desarrollo mismo⁶⁴.

Podemos sostener así que si ninguna de las objeciones o problemas interpretativos que se han formulado respecto al derecho al desarrollo tiene como objeto el núcleo irreductible, pocas se han formulado respecto a la lectura de la vertiente negativa del derecho al desarrollo, que puede verse de la siguiente manera: si el desarrollo, sea cual sea su contenido exacto, es algo deseable, en términos de Bobbio, y lo quisiéramos para nosotros, entonces, asumiendo que todos los seres humanos nacemos *libres*, no quisiéramos que nadie ilegítimamente nos impidiera su consecución; si todos los seres humanos son *iguales* en dignidad, lo que es deseable para nosotros bien lo han de querer los demás; si no quisiéramos que nadie impidiese nuestro desarrollo, no habremos de querer ni impedirselo a nadie ni que a nadie sea impedido por terceros. Si este razonamiento es legítimo para personas, también lo es para comunidades de personas y para estados -como ha sido plasmado reiteradamente en textos internacionales-, de manera que pronto se ve la profunda vinculación entre la vertiente negativa del derecho al desarrollo y las cuestiones relativas a la autodeterminación, soberanía y límites a la injerencia en los sistemas políticos y económicos elegidos por cada unidad política para alcanzar ese objetivo de naturaleza borrosa que es el desarrollo. Por lo tanto, la única objeción a la vertiente negativa del derecho al desarrollo que podría establecerse sería relativa a si existen causas legítimas para limitar o impedir los procesos de desarrollo *ajenos*.

En principio, debido al carácter teleológico del derecho al desarrollo, es muy difícil argumentar a favor de tales causas. Se podría argumentar como única causa legítima para limitar el derecho al desarrollo del otro el derecho al desarrollo propio: nadie puede reclamar un derecho al desarrollo ilimitado para sí, que impida o viole el derecho al desarrollo de otro, que tiene el mismo derecho. Siendo esto cierto, cabe preguntarse si más que en una cuestión de límites nos encontramos en una situación externa al derecho al desarrollo, si realmente habría un conflicto de derechos o si por el contrario un desarrollo que perjudique el desarrollo de otro estaría fuera del ámbito de cobertura del derecho al desarrollo.

Esta espinosa cuestión puede apreciarse claramente en el caso, por ejemplo, de un estado que respetando internamente los derechos de sus ciudadanos tenga una industria altamente contaminante, una industria que sea básica para su desarrollo económico y social, y que vierta sus residuos cerca de una frontera afectando los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de otro estado.

Es difícil encontrar otras razones para la limitación en los procesos de desarrollo ajenos. Incluso en los casos extremos en los que se debate la injerencia de la soberanía de terceros estados -por ejemplo en argumentos relacionados con la “guerra justa”, etc.- es común que los que aboguen por una intervención tienden a hacer suya la causa del desarrollo del país intervenido, ya que no se ha de intervenir para afectar negativamente

⁶⁴ Véase por ejemplo, la reflexión de Gómez Isa en Gómez, F.: *Los derechos de la solidaridad: el derecho al desarrollo y el derecho a la paz*, Tiempo de Paz, n. 80, Madrid, 2006, p. 62 y ss.

el derecho al desarrollo de otro. Incluso aunque se argumentara una suspensión momentánea del desarrollo de un país -pensemos en un embargo, por ejemplo- los argumentos del o los intervinientes sin duda incluirían precisamente que se está apoyando el desarrollo, presente o seguramente futuro del país intervenido. La intervención con el solo fin de afectar negativamente el desarrollo de un país tercero, es decir, la violación de la vertiente negativa del derecho al desarrollo, sería simplemente opresión ilegítima y la fuerza empleada para alcanzarla, guerra prohibida.

También a aquellos que conciben las relaciones económicas a escala global como una relación de “suma cero” (quienes creen que para que un estado se desarrolle, necesariamente otro tiene que estar subdesarrollado) les sería difícil argumentar a favor de impedir activamente el desarrollo de un determinado pueblo, estado, etc., para favorecer el desarrollo de los más subdesarrollados con miras a alcanzar una igualdad global.

Otra cosa, bien distinta, es si las obligaciones internacionales para asistir el desarrollo de terceros, es decir las obligaciones derivadas del derecho al desarrollo, son interferencias o legítimas trabas a la vertiente negativa del derecho al desarrollo, trabas que impedirían el desarrollo de estados donantes. Si un estado hubiera de proveer ayuda para el desarrollo a otro, de manera obligatoria, sin ninguna ganancia política o económica como contrapartida, lo que se conoce como *ayuda no ligada*, podría argumentar que se está afectando no solo su soberanía, sino también su propio derecho a desarrollarse. No es tal el caso, como veremos cuando analicemos las obligaciones vinculadas al derecho al desarrollo, pero sí muestra la importancia de examinar la vertiente positiva del derecho al desarrollo. Concluamos por ahora que, en general, no se ofrece mayor resistencia teórica a considerar que todas las personas y pueblos tienen derecho a desarrollarse, siendo muy difícil encontrar -me inclino por pensar que no existe- una causa moralmente legítima para impedirlo, más allá del derecho al desarrollo de los demás, en cuyo caso bien podríamos pensar que estamos fuera del ámbito de protección del derecho.

La mayoría de los debates relacionados con la fundamentación del derecho al desarrollo han estado relacionados, no ha de sorprendernos, con la vertiente positiva de este derecho.

Recordemos que la doctrina distinguió durante mucho tiempo entre derechos negativos (aquellos que se basan en la no interferencia) y positivos (de realización progresiva, que requieren actuación positiva). Hoy esta distinción tiene poco relevancia para autores como Henry Shue⁶⁵, quienes han extendido la consideración de que todos los derechos tienen una vertiente positiva y una negativa: el derecho a participar en unas elecciones democráticas incluye no solo que el estado no pueda impedir ilegítimamente votar o presentarse a cualquier ciudadano a una selección de manera conforme a la ley, sino que provea presupuestos adecuados y suficientes para que las elecciones sean realizadas en condiciones de seguridad, libertad e igualdad; de manera parecida, el derecho a la salud tiene esa vertiente negativa (evitar que cualquiera dañe la salud de otro) como la

⁶⁵ Shue, H., *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press, 2nd ed., New Jersey, 1996

vertiente positiva (actuación para la mejora de los sistemas y servicios sanitarios, etc.) Esta falsa dicotomía, de orígenes políticos, puede considerarse definitivamente superada, especialmente desde que en Viena se declarase la interrelación e interdependencia de todos los derechos humanos. Así, podemos examinar que el derecho al desarrollo tiene también una doble vertiente, negativa y positiva.

El derecho al desarrollo, formulado con una clara vocación de transformación social, es en su raíz un derecho cuya progresiva realización requiere también de medidas positivas y no una mera abstención de su obstrucción. La cuestión es de tal importancia que, a menudo, los autores se refieren solo a la vertiente positiva cuando tratan la fundamentación del derecho al desarrollo. En palabras de Ezquiaga Ganuzas⁶⁶: “pasando a las cuestiones verdaderamente complicadas, es preciso responder a la pregunta de ¿por qué los países en desarrollo tienen derecho a reclamar de los países desarrollados que tomen las medidas necesarias para garantizarles el disfrute de su derecho al desarrollo?, es decir cuál es el fundamento del derecho al desarrollo?”. La cuestión así planteada nos remite directamente al corazón del problema, ya que el derecho a recibir no puede concebirse sin preguntarnos acerca de los deberes de hacer o dar.

Si el contenido exacto del desarrollo es, como veremos, al menos desdibujado, supone un esfuerzo mayor saber qué hay que hacer y quién debe hacer qué para realizarlo, que abstenerse de su violación, lo que no es extraño si lo ponemos en términos eudaimónicos: tal vez no podamos saber exactamente todo lo que es necesario para una vida buena (lo que para Kant exigiría una sabiduría absoluta⁶⁷) pero podemos bien saber algunas de las cosas que nos impiden esa vida buena.

Para Henry Shue, de cada derecho podemos derivar tres tipo de deberes: el deber de no privar a los titulares de un derecho del objeto de ese derecho (que coincidiría con la vertiente negativa analizada anteriormente), el deber de proteger a los titulares del derecho contra tales privaciones y, por último, el deber de ayudar a aquellos que han sido privados de tal derecho determinado (que caerían dentro de la vertiente positiva del derecho).

El problema en el caso del derecho al desarrollo, siendo los titulares -como hemos adelantado- colectivos e individuales, es evidente y de una extrema complejidad la cuestión de quién debe hacer o dar qué a quién, y cuánto hacer o dar en el contexto internacional para satisfacer el derecho al desarrollo del otro, lo que supone en realidad el corazón de todos los debates existentes en la actualidad acerca de la Justicia Global y remiten directamente a la arquitectura de la sociedad internacional y a la responsabilidades de justicia distributiva entre estados y pueblos, una cuestión más que abierta, cuyas principales líneas perfilaremos en un capítulo dedicado a ello.

Una muestra más de la complejidad del análisis de la vertiente positiva del derecho al desarrollo es que, una vez planteada la cuestión de los deberes y obligaciones, muchos

⁶⁶Ezquiaga Ganuzas, FJ., “Soberanía, autodeterminación...”, op. cit, p. 806.

⁶⁷Kant, I., *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, col. Austral, Espasa Calpe, Madrid, 2009, p. 91.

autores fundamentan, sin embargo, en su lugar, por qué un estado o pueblo menos desarrollado debe poder reclamar recibir ayuda de los demás. En términos más sencillos, dentro de la vertiente positiva del derecho al desarrollo, podemos distinguir entre la cuestión de por qué un país o pueblo tiene derecho a reclamar ayuda para su desarrollo y la cuestión de por qué uno más desarrollado ha de prestar tal ayuda a otro menos desarrollado. Estando ambas cuestiones íntimamente relacionadas, creo que merece la pena distinguirlas en su fundamentación moral.

Respecto a la primera cuestión, podemos afirmar, simplemente, que el que persigue un fin legítimo -el desarrollo- quiere también los medios que están para ello en su poder, en cuyo caso sólo restaría saber qué es lo necesario para alcanzar tal fin, algo de por sí, como hemos apuntado, de perfiles borrosos. En este punto podíamos enmarcar como una de las fundamentaciones posibles del derecho al desarrollo el argumento que Gómez Isa⁶⁸ ha extraído de un informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo⁶⁹, a la que llamó “carácter fundamental del derecho al desarrollo”. Argumenta este autor que “el desarrollo es un objetivo esencial para toda persona y todo pueblo”, y en este sentido, cita a Domenach: “(...) el desarrollo no es una meta que nuestras sociedades puedan adoptar o rechazar libremente; es su propia sustancia y el vínculo entre generaciones pasadas, presentes y futuras [...] rechazar el desarrollo como obligación primordial equivaldría a rechazar la humanización del hombre y a negar, por lo tanto, la posibilidad misma de un sistema moral”⁷⁰.

La interesante posición de Domenach permite pensar en el desarrollo como principio además de como derecho. En esencia, la posición de Domenach coincide con el propósito que alberga toda persona en cuanto miembro de una comunidad y el fin último de toda comunidad política, que es la vida mejor, cuyo incremento se correspondería con el desarrollo. O como diría Aristóteles, “la ciudad existe no sólo por la simple vida, sino sobre todo por la vida mejor”⁷¹.

Así las cosas nos planteamos ahora la segunda cuestión, relativa a la vertiente positiva del derecho al desarrollo, la más difícil de responder, pero clave para comprender el conjunto del problema que se nos presenta y la que más implicaciones tiene para nuestra fundamentación moral: *¿por qué deben unos pueblos prestar ayuda para el desarrollo de otros?*

Si tenemos en consideración las legítimas preocupaciones de evitar una visión paternalista y asistencialista acerca de la cuestión e integrar el principio de cooperación

⁶⁸ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998, p. 2.

⁶⁹ *The International Dimensions of the Right to Development As a Human Right in Relation with Other Human Rights Based on International Co-Operation, Including the Right to Peace, Taking into Account the Requirements of the New International Economic Order and the Fundamental Human Needs*, Report of the Secretary-General, UN doc. E/CN. 4/1334, 2 de enero de 1979.

⁷⁰ Domenach, J-M., “Our moral involvement in development”, *The Case for Development: six studies*, United Nations Center for Economic and Social Information, Praeger, Nueva York, 1973, p. 131 y ss, citado por Gómez Isa, F., en *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 23 y ss.

⁷¹ Aristóteles, *Política*, Libro III. Ed. Aristóteles: *Ética Nicomaquea. Política*, Editorial Porrúa, México, 2010. P. 273

de los pueblos, subrayando su igualdad en el plano internacional, otro principio ampliamente aceptado en los textos y doctrina internacionales, podemos reformular la pregunta así: *¿por qué deben los pueblos cooperar entre sí para su desarrollo?*

Esta reformulación no es baladí, porque nos permite referirnos a ese principio internacional de cooperación entre pueblos y estados como fundamento adicional del derecho al desarrollo. Apelar a un deber asumido y acordado ampliamente de manera previa a los debates acerca del desarrollo, como es el deber genérico de cooperación entre pueblos, es la base del argumento que Gómez Isa presenta como “el deber internacional de solidaridad para el desarrollo”⁷², invocado por el Secretario General en el informe mencionado: “hemos visto como el principio de cooperación se ha convertido en uno de los principios estructurales del moderno Derecho Internacional. El deber internacional de solidaridad para el desarrollo sería una manifestación de ese principio (...)”. Notemos que aquí el término *solidaridad* está usado de manera amplia, poco precisa, equivalente a una asistencia voluntaria y desligada. Así vemos que, llegados a este punto, la fundamentación moral del derecho al desarrollo ha de ser completada con una reflexión acerca de dos conceptos clave: *deber y solidaridad*.

Comenzando con el deber, grandes teóricos del desarrollo como Stephen Marks y Amartya Sen ya se valieron de un argumento de inspiración kantiana⁷³ en torno al deber para defender el derecho al desarrollo como derecho mismo cuando ante éste se presentó lo que se ha denominado la “crítica de la coherencia”, la cual consiste en la duda de la existencia de un derecho si no tiene una correspondencia con una obligación determinada, de hacer o dar algo a alguien determinado, titular de tal derecho.

Amartya Sen considera que no es necesario insistir en la absoluta necesidad de una correlativa específica obligación perfecta para considerar un derecho como verdadero derecho, ya que “los derechos humanos son considerados como derechos compartidos por todos (...) y todos deberían gozar de sus beneficios. Las reivindicaciones son dirigidas generalmente -en lenguaje kantiano “imperfectamente”- a cualquiera que pueda ayudar”⁷⁴

Recogiendo esta tradición kantiana, dice Marks, la idea de Sen es aplicable al derecho al desarrollo⁷⁵. Según este autor, la Declaración sobre el derecho al desarrollo es un “catálogo de obligaciones imperfectas” que podrían ser perfeccionadas por vía convencional: un tratado internacional podría concretar esas obligaciones imperfectas, incluyendo un seguimiento de la implementación del mismo adaptado a la estructura legal de los países signatarios, pasando de una obligación imperfecta a una perfecta.

⁷² Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 24.

⁷³ Aunque recoja esta idea de Kant, su influencia –y la de Rawls– en Sen es más limitada de lo que él mismo proclama, en mi opinión. Como veremos la posición de Sen en relación a la justicia global tiene una fuerte inspiración aristotélica, apoyándose fuertemente en una ética teleológica y una justicia correctiva más que distributiva (reconocimiento de las desigualdades y corrección de las mismas mediante procesos abiertos de discusión razonada para la identificación de tales desigualdades y formas de paliarlas).

⁷⁴ Sen, A.K., “Consequential Evaluation and Practical Reason,” *The Journal of Philosophy*, Vol.XCVII, No. 9, septiembre, 2000, p. 497

⁷⁵ Marks, S.P., *Implementing the Right to Development, The Role of International Law*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginebra, 2008, p. 74

Alcanzado este punto, acerca del deber de ayudar al otro, conviene recordar, qué es lo que sostenía el mismo Kant en torno a las obligaciones imperfectas. Aclaremos que no fue el primero en hacer esta distinción, autores precedentes como Johann Gottlieb Heinecke, *Heineccio*⁷⁶ trataron el tema con cierta extensión.

Sin embargo, es a la línea de pensamiento de Kant a la que expresamente se refieren Marks y otros. Distingue el filósofo de Königsberg, como es bien sabido, entre obligaciones perfectas e imperfectas y obligaciones para sí y para con los demás, presentando en su conocida “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” cuatro ejemplos que él procura resolver dos veces, primero con el imperativo categórico *obra según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal* y poco después, con el imperativo práctico, *obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio*.

Sobre las obligaciones imperfectas para con nosotros mismos, Kant propone el siguiente ejemplo (al que denominaremos “tercer ejemplo”, por referirse el primer y el segundo ejemplo a obligaciones perfectas que no trataremos aquí): una persona encuentra cierto talento en su interior, lo que con trabajo y educación podría hacer de él un hombre útil, pero se encuentra en una situación cómoda que le permite dedicarse al ocio y no necesita desarrollar dicho talento. Aplicando el imperativo categórico, Kant resuelve que, no siendo deber perfecto, tal persona *no puede querer* que actuar así responda a una ley impresa en nosotros por algún instinto natural, siendo así un deber imperfecto⁷⁷. Respecto al mismo ejemplo, aplicando el imperativo práctico, resuelve con respecto al deber meritorio para con uno mismo que “no basta con que la acción no contradiga a la humanidad como fin en sí misma contenida en nuestra persona, sino que tiene que concordar positivamente con ella”, ya que descuidar las capacidades de perfeccionamiento pueden “muy bien compatibilizarse con el mero mantenimiento de la humanidad como fin en sí misma, pero no con el *fomento* de tal fin”⁷⁸.

Sobre las obligaciones imperfectas para con los demás, Kant propone el siguiente ejemplo, a menudo considerado en las reflexiones acerca del deber de ayuda al otro, (al que denominaremos “cuarto ejemplo”). En este ejemplo, Kant se pregunta acerca de lo que Rawls denominaría “máxima de la indiferencia”⁷⁹: una persona a quien le van bien las cosas ve a otros luchando contra grandes dificultades y, pudiendo ayudar, no lo hace, pensando “¿a mí qué me importa? ¡que cada uno sea lo feliz que el cielo le conceda o él mismo quiera hacerse; nada voy a quitarle, y ni si quiera le tendré envidia; no tengo ganas de contribuir a su bienestar o a su ayuda en la necesidad!”⁸⁰. En contra de esta

⁷⁶ Johann Gottlieb Heineccius “Chapter VIII: Concerning our imperfect duties towards others”, *A Methodical System of Universal Law: Or, the Laws of Nature and Nations*, 1738.

⁷⁷ Kant, I., *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, col. Austral, Espasa Calpe, Madrid, 2009, p. 97.

⁷⁸ Kant, I., *Fundamentación...*, op. cit., p. 109.

⁷⁹ Sobre la interpretación de Rawls acerca de la máxima de indiferencia ver Budde, K. *Rawls on Kant: Is Rawls a Kantian or Kant a Rawlsian?* European Journal of Political Theory, 2007, p. 339.

⁸⁰ Kant, I., *Fundamentación...*, op. cit., pp. 97-98.

máxima primero arguye el filósofo alemán que, si bien pudiera sostenerse como ley universal y la raza humana podría subsistir pese a ella, es imposible *querer* que valga siempre y en todo lugar, porque nosotros mismos querríamos en algún momento ser recipientes de amor o ayuda en caso de necesidad y no perder la esperanza de recibirlos. Más adelante en la *Fundamentación*, Kant arguye sobre el mismo ejemplo, que “con respecto al deber meritorio para con los demás, el fin natural que tienen todos los hombres es su propia felicidad. Es bien cierto que podría mantenerse la humanidad aunque nadie contribuyera a la felicidad de los demás, con tal de no sustraerle nada, pero es una concordancia meramente negativa y no positiva con la humanidad como fin en sí el que nadie se esfuerce en lo que pueda por fomentar los fines ajenos. En efecto, siendo el sujeto un fin en sí mismo, sus fines deben ser, en la medida de lo posible, también míos, si es que aquella representación ha de ejercer sobre mí todo su efecto”⁸¹.

Veamos el argumento de Kant presentado en un fragmento de otra obra suya, *Metafísica de las Costumbres*, donde queda bien reflejada su posición: “la razón por la que es un deber ser benevolente es la siguiente: ya que nuestro amor propio no puede ser separado de nuestra necesidad de ser amados (ayudados en caso de necesidad) también por los demás, nos hacemos fines para los demás; y el único modo de que esta máxima pueda ser vinculante es a través de su cualificación como ley universal, a través de nuestra voluntad de hacer de los otros también nuestros fines. La felicidad de los otros es, por tanto, un fin que es también un deber.”⁸²:

Desarrollo y felicidad no son términos equivalentes -entre otras razones porque felicidad incluye elementos puramente subjetivos- si bien el desarrollo comparte con ella, como hemos sugerido anteriormente, sus características indefinidas y teleológicas. Esa característica de fin deseable es la que permite mantener en pie nuestros argumentos respecto al deber de ayuda para el desarrollo del otro.

Onora O'Neill describe tres formas en las que un deber, en este caso el deber de ayudar al otro, puede considerarse imperfecto: porque las acciones a realizar no estén completamente especificadas, porque no sean exigibles y carezcan de sanción, y porque no se describan específicamente los titulares de los derechos⁸³.

Estas tres especificidades son aplicables en el caso de los deberes derivados del derecho al desarrollo, lo cual no invalida el argumento de que tales deberes existan. Así, siendo loables los esfuerzos en la definición del contenido exacto del derecho al desarrollo para poder acercarnos a su realización, asunto que trataremos en profundidad, los debates en torno a él no afectarán al deber -imperfecto- de intentar lograr su consecución.

Hay así un límite mínimo de tal deber, que permite su existencia como tal, pero es difícil encontrar el límite máximo del mismo. El deber de ayudar no es, por supuesto, ilimitado. El límite del deber imperfecto de atender legítimas demandas de ayuda puede encontrarse en el bienestar del propio agente moral, no exactamente porque el agente moral deba buscar su interés -algo que busca de todas maneras sin que esto forme parte del deber-, sino porque el interés de todo el mundo incluye de manera lógica no ir contra uno mismo (ya que uno entra dentro de “todo el mundo”). En palabras de Kant:

⁸¹Kant, I., *Fundamentación...*, op. cit., pp. 109 y ss.

⁸²Kant, I., *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, 1991, pp. 196-197

⁸³O'Neill, O., *Constructions of reason. Explorations of Kant's Practical Philosophy*. University of Cambridge, 1989, pp. 224-225.

“Debo sacrificar una parte de mi riqueza para los otros sin esperanza de recobrarla porque es un deber, y es imposible asignar límites específicos a la extensión de tal sacrificio. Cuán lejos debe extenderse depende, en gran parte, en cuáles son las verdaderas necesidades de cada persona a la vista de sus sensibilidades, y debe ser dejado a cada cual decidir esto por sí mismo. Una máxima de promoción de la felicidad de los otros a expensas del sacrificio de la propia felicidad, de las propias verdaderas necesidades, entraría en conflicto consigo misma si fuera hecha ley universal. Por ello, tal deber es solamente un deber amplio; el deber tiene en sí una laxitud de hacer más o menos, y no se pueden asignar límites específicos a qué debe hacerse. La ley sirve solo para máximas, no para acciones específicas”.

El deber de ayudar cesa, por tanto, en este límite racional, las verdaderas necesidades propias. Más allá de este límite se encontrarían las acciones supererogatorias, más allá del deber, no fundadas en la moral de la razón. Por supuesto, el problema emerge en torno a cuáles son esas necesidades propias, su naturaleza y, por supuesto, su alcance.

Peter Singer se ha preguntado si junto al deber de ayudar no ha de encontrarse también el deber de evitar el sufrimiento de los otros, lo que jurídicamente conocemos como la descalificación de la omisión del deber de socorro, concluyendo que: “si está en nuestro poder prevenir que algo malo suceda, sin sacrificar nada de comparable importancia moral, debemos, moralmente, hacerlo”⁸⁴.

Singer hace una analogía con un niño que se ahoga en un estanque y al que podríamos salvar sin peligro para la propia vida y sin una reducción significativa en nuestro bienestar material, argumentando que al igual que la respuesta moral sería sin duda ayudar a tal niño -prevenir su desgracia-, nada se opone a que hagamos lo mismo -a través de transferencia de recursos- con un niño desconocido que sufre de similar manera al otro lado del planeta -lo que él llama el deber de ayudar a los “otros distantes”-. El ejemplo de Singer puede llevarnos, sin embargo, a cierta confusión. Un niño sufriendo delante de nuestros ojos desata en cualquiera con capacidad de empatía -descartemos aquellos de naturaleza clínicamente psicopática-, una reacción emocional que se da con mayor dificultad ante el sufrimiento de alguien desconocido. Asimismo, el ejemplo de Singer obvia que la responsabilidad para con uno mismo es distinta cuando sabe que es la única persona que puede ayudar. No obstante, el ejemplo de Singer pone de relevancia la importancia del deber en sí, de nuevo a la manera kantiana, de ayudar, pues no existen racionalmente diferencias en la cualidad moral del primer niño y del otro distante.

Por otro lado, el ejemplo de Singer llama la atención sobre los distintos niveles de responsabilidad que aceptamos los unos con los otros. Singer habla de un niño al que vemos y de otros distantes, más allá de las fronteras. Sin embargo, en realidad, hay más niveles de responsabilidad de ayuda. Podemos ayudar a un niño delante de nuestros ojos, y podemos ayudar -transfiriendo recursos- a un niño desconocido dentro de la misma comunidad en la que vivimos, y podemos ayudar también a otro niño más allá de nuestras fronteras -éste sí, otro distante-. La cualidad moral de los niños es obviamente la misma, y en presencia del niño es presumible que la empatía desatada sea igual en presencia de

⁸⁴ Singer, P., *Famine, Affluence, and Morality*, *Philosophy and Public Affairs*, vol. 1, 1972, pp. 229-243.

Ver también Singer, P., “Outsiders: Our Obligations to Those Beyond Our Borders”, *The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 11-32.

cualquiera de ellos. Si me encuentro ante al niño distante, sentiré seguramente el mismo sentimiento, el mismo impulso de ayuda que aquel niño miembro de mi comunidad. Cuando no estamos frente al niño necesitado hemos de hacer un esfuerzo de racionalización del deber, a la manera descrita. Cuando la ayuda que podemos prestar a ese niño no es una mano amiga sino una transferencia de recursos, la razón manda hacer una priorización de asignación de los mismos.

Dado que el niño se vuelve un niño desconocido e inespecífico, hemos de utilizar distintos criterios de prioridad. Un criterio puede ser la urgencia de nuestra ayuda, o la severidad de su necesidad. Otro de los criterios de priorización son, utilizando el término de Anderson, las “comunidades imaginarias”, como este autor llamaría a las naciones, a las que nos adscribimos, tendiendo a asignar más recursos a los seres más cercanos. Recordemos en este punto el famoso caso del fuego planteado filósofo utilitarista inglés William Godwin en su *Justicia política*, quien nos planteaba el dilema ético de a quién salvar en el caso de un terrible incendio en el que tan sólo podemos rescatar a una de las dos personas que quedan atrapadas en la casa: el piadoso arzobispo Fenelon, cuya vida hace un gran bien al conjunto de la humanidad, o nuestro propio padre.

Singer menciona la opción de donar recursos a través de organizaciones no gubernamentales y fundaciones internacionales para la ayuda de los más distantes, pero pronto vemos que estas donaciones son voluntarias -en la práctica, no respecto al deber moral- a diferencia de los impuestos que pueden destinarse a un fin parecido. Por ello, aunque la calidad moral de los sujetos receptores de ayuda sea la misma, cuando ayudamos a un miembro de la comunidad se está ejerciendo un deber adicional, no de ayuda, sino de cumplimiento de unas obligaciones contraídas en virtud de la pertenencia a la comunidad.

Ahora bien, para poder completar nuestra reflexión en torno a los deberes imperfectos derivados aplicados al derecho al desarrollo tal y como defiende Stephen Marks debemos llamar la atención sobre un importante punto: las consideraciones morales que se hacen Kant o Singer en torno al deber de ayuda se refieren a una ética individual. También al individuo se referían los antiguos; “no es malo dar la mano al caído: es un derecho común al género humano” (Séneca, el viejo)⁸⁵. El agente moral, vemos, está perfectamente definido, es cada ser humano no sus conjuntos -Kant, específicamente se refiere a cualquier ser racional-. Los otros son todos aquellos que no son el agente moral. Es preciso, por tanto, preguntarse si la moral kantiana individual puede aplicarse en la fundamentación moral del derecho al desarrollo, en cuanto que el problema no solo se presenta en torno a los otros, sino en relación al agente moral mismo, que es un colectivo de seres racionales y no sólo un ser racional individual.

Referirnos a la moral kantiana y entender el deber de ayudar a otro como exigencia de la razón y no del amor o de la simpatía, como Aristóteles entendía la ayuda sólo entre amigos o Santo Tomás la relacionaba con la caridad como virtud teologal, puede permitarnos tratar el problema del deber de ayudar al otro como fenómeno colectivo y

⁸⁵En el original, *Iniquum est collapsis manum non porrigere: commune hoc ius generis humani est*. En Controversias. Libro I.

relacionarlo con el deber de pueblos y estados. El amor es un sentimiento puro y exclusivamente individual y no colectivo. La empatía es una característica humana, no de los estados o de los pueblos, aunque sean éstos una creación humana. Los colectivos, incapaces de sentir, pueden compartir a lo sumo ideologías entendidas como formas de percibir la sociedad, incluyendo sus valores, y su proyección futura -ideales de la imaginación-, de naturaleza tan voluble como las inclinaciones afectivas, y en todo punto incompatibles con una fundamentación basada en un razón crítica. Por ello, la posible distinción de intensidades del deber de ayudar entre los cercanos y los lejanos, -ayudando más a los más cercanos-, un criterio muy intuitivo a nivel individual, imbuido de simpatía, pierde parte de su significado a nivel colectivo, que se sustituye a menudo por criterios prácticos o políticos. Y es que “el amor es una problema de sentimiento, no de voluntad, y no puedo amar porque quiera, mucho menos porque deba (no puedo ser obligado a amar); así que un deber de amor es absurdo. Pero la benevolencia (*amor benevolentiae*), como conducta, puede ser sujeta a la ley del deber”⁸⁶. Si los colectivos no pueden sentir, sí pueden estar, sin embargo, sujetos a deberes y obligaciones.

No se excluye con esto totalmente la posibilidad de que podamos considerar los colectivos como agentes morales, en cuanto construcciones del hombre, colectivos sujetos a deberes racionales. Del mismo modo que podemos considerar que el derecho que ordena esos colectivos no es moral pero se inspira en ella, podemos racionalmente encontrar un vínculo volitivo entre la moral del colectivo y el deber moral de los individuos que lo componen. Podría argumentarse que, si los seres individuales pueden sentir empatía, a diferencia del colectivo, en democracia pueden proyectar su empatía en los poderes de decisión, forzándolos mediante su voto a actuar frente a las inaceptables diferencias de desarrollo que afligen nuestro mundo. Por otro lado, si la “máxima de la indiferencia” es inmoral desde la razón crítica para cada uno de los individuos que componen una sociedad, estos individuos que comparten fines en una sociedad no han de querer que su sociedad vaya en contra de sus propios fines ni se oponga a su deber y moral individual.

La consideración de la colectividad del agente moral tiene otras aristas. La más importante es quién es esa colectividad, quién la conforma. Pasar de “por qué debo ayudar a otro” a “por qué nosotros debemos ayudar a otros”, no puede hacerse sin una reflexión en torno a quiénes son esos *nosotros*.

De este punto podemos derivar dos argumentos para la fundamentación moral del derecho al desarrollo, dependiendo de a quienes consideremos ese *nosotros*. El primero, inmediato, es si consideramos que el nosotros es aquella comunidad al interno de la cual se distribuyen recursos y derechos, que puede ayudar o no, de acuerdo con sus criterios internos, ayudar a otra comunidad distinta a ella. Una comunidad puede ser una familia, una asociación, una comunidad de vecinos, una región. Pero la unidad por excelencia que tiene la mayor potestad de redistribución de recursos y derechos en la sociedad actual es el estado, sea coincidente o no con una nacionalidad, un pueblo o una nación. Es por ello, lógicamente, que el responsable de hacer efectivo los deberes derivados del derecho al desarrollo sean los estados, tal y como se recoge en el texto de la Declaración sobre el

⁸⁶ Kant, I., *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, 1991, p. 203.

derecho al desarrollo de 1986. El “nosotros” sería un estado y “los otros” serían los demás -sean estados o no lo sean, de ahí que el beneficiario puedan ser los pueblos o las personas individuales-.

Ahora bien, si podemos distinguir un *nosotros* de seres racionales y solidarios -en cuanto que comparten fines como aquellos de vivir en una sociedad y distribuir entre sí recursos y derechos- podemos distinguir también un *nosotros* basado en distintos niveles de solidaridad, distintos criterios por los cuales adherirnos a los fines de los otros: en cuanto miembros de un pueblo o nacionalidad, en cuanto ciudadanos de un estado y en cuanto seres humanos. Lo que es más difícil de distinguir enteramente a través de la razón son los distintos criterios para conformar los distintos grupos de solidaridad mismos que existen *de facto* a nivel infra-humano, pues estos criterios son contingentes, mutables, pueden ser múltiples y traslapables, son ideológicos.

El “cuarto ejemplo” kantiano, como hemos visto, es el más usado cuando abordamos la cuestión del deber imperfecto de ayudar al otro, usándose en al considerar la relación entre grupos solidarios diferenciados. Pero podemos superponer un nivel superior, el nivel humano, en el que no ayudamos o otros porque no existen tales otros: nos ayudamos a nosotros mismos, nos desarrollamos nosotros mismos. Sigue siendo una obligación imperfecta, pero más relacionada con el “tercer ejemplo” de Kant. Así, considerando el concepto de solidaridad en al menos dos niveles, “nosotros-los otros” y “nosotros-todos”, podemos extraer un argumento adicional para la fundamentación moral del derecho al desarrollo.

En torno a esta cuestión, quisiera en este punto compartir con el lector, de manera meramente exploratoria, la siguiente reflexión: la concepción solidaria de un nosotros-todos, aplicado al conjunto de los seres humanos, lleva, por otro lado, directamente a reconsiderar los problemas de redistribución de bienes y derechos a nivel humano, y por tanto a cuestiones directamente relacionados con la justicia global, ya que si los deberes son para con nosotros, y no existen ellos, esos deberes serían imperfectos del tercer ejemplo. Aquí la pregunta: ¿por qué deben los pueblos cooperar entre sí para *su* desarrollo? adquiriría el significado del desarrollo de *todos*. Pero sería interesante dar un paso más allá y preguntarse, no solamente sobre los deberes imperfectos para con nosotros, sino si puede haber adicionalmente deberes perfectos para con nosotros mismos (si podemos sustituir el yo por el nosotros). Kant pone como ejemplo de su moral individual el deber perfecto de mantenernos con vida, de no cometer suicidio. Sustituyendo el yo por el nosotros-todos, ¿no nos recuerda acaso a los argumentos morales expuestos por los ecologistas, cuando advierten de los grandes peligros a los que nos enfrentamos de seguir dañando el planeta? Ellos se refieren a una concepción solidaria de nivel humano, no ciudadano, y a un deber no imperfecto, no de desarrollo futuro, sino a uno de a la simple y llana supervivencia como especie.

Volviendo al comienzo de nuestra disquisición, veamos como el deber y la solidaridad -fraternidad- se vinculan en la DUDH, nuestro punto de partida. La DUDH, tras proclamar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, añade que “dotados como están de *razón y conciencia*, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Podríamos reconocer aquí un problema entre el *ser* y el *deber ser*, aquel problema sobre el que llamara la atención por primera vez David Hume, ya que podría argumentarse que porque *son* los seres humanos libres e iguales en dignidad no necesariamente *deben* comportarse *fraternalmente*. Sin embargo, este problema es solo aparente, y puede ser superado por dos vías: en primer lugar, si bien el primer enunciado del problema, el *son*, es un principio que no necesita ulterior justificación, el segundo puede asumirse como un valor que ha sido acordado por todo el mundo con la firma del documento. Además, por otro lado, como ya hemos visto siguiendo los pasos argumentativos de Kant, la propia razón a la que apela la DUDH es la que nos permite distinguir el deber de comportarse fraternalmente. Sin pretender repetirnos, es la razón la que permite distinguir que si los seres humanos, libres e iguales en dignidad, que comparten iguales fines y ese compartir fines los hacen partes de un todo, solidarios en su fin último -ya sea bienestar, ya sea supervivencia, etc.-. Siendo todos los seres humanos iguales en dignidad, somos todos iguales partes de un solo todo evidente, la raza humana. Se refiere así la DUDH a la llamada solidaridad antropológica, una solidaridad isométrica a la que si añadimos la consideración del componente animal, como descendientes todos de un tronco común, relacionamos con el concepto de fraternidad⁸⁷.

Recordemos que en la Teoría de la Justicia de una muy concreta concepción de fraternidad, como tipo especial de solidaridad, ocupa un lugar destacado: “el principio de la diferencia parece corresponder con el significado natural de la fraternidad: es decir, con la idea de no querer tener mayores ventajas a menos que sean en beneficio de otros que están en peor situación. La familia, en su concepción ideal y a menudo en la práctica, es un lugar donde el principio de maximizar la suma de ventajas es rechazada. Miembros de una familia comúnmente no desean ganar más a menos que puedan hacerlo de manera que apoye los intereses del resto”⁸⁸, lo que en su mínimo significaría que, al menos, no los perjudique de manera ilegítima.

Del mismo modo que el término solidaridad como “compartir fines” puede referirse a compartir fines dentro de distintos niveles: familiares, sociales o internacionales -a nivel humano-, una concepción de solidaridad en su vertiente axiológica, como valor en sí, en sentido en el que se usa en el lenguaje común (como ayuda al otro, podríamos decir en virtud de los deberes imperfectos que hemos analizado en relación con la vertiente positiva del derecho al desarrollo) puede trasladarse también al nivel humano.

De ahí que Peces Barba, para quién la solidaridad “es un valor moral asumido, como valor político específico, por el Estado social de Derecho y convertido, desde él, en valor jurídico a través de su ordenamiento jurídico”, dejara escrito que la reflexión en torno a este valor, trasladado al nivel internacional y “vinculado a conceptos como el derecho al desarrollo, se está convirtiendo en un elemento de reflexión ética para la comunidad internacional, y el reflejo político y jurídico de esa situación es potenciar la necesidad

⁸⁷Bueno, G., “Proyecto para una trituration de la Idea general de Solidaridad” *El Catoblepas, revista crítica del presente*, número 26, abril 2004.

Publicado online. Accesible en <http://www.nodulo.org/ec/2004/n026p02.htm>

⁸⁸Rawls, J., *A Theory of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 2005, p. 105.

organizaciones internacionales públicas y sociales, a la espera del Estado social, mundial o regional, lo que está aún en el plano de la utopía”⁸⁹.

La solidaridad internacional en cuanto valor permite junto con su característica de derecho de los pueblos- enmarcar el derecho al desarrollo en los denominados derechos de tercera generación, según la -en ocasiones controvertida- clasificación de Karel Vasak, que incluyen también otros como el derecho a la paz o el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Como explica María José Falcón y Tella: “el valor típico de los derechos de tercera generación ya no es la libertad o la igualdad, sino la *solidaridad internacional*. Se produce la paradoja de que el hombre es el ser de la creación “más solitario y más solidario”. Al mismo tiempo que el individualismo feroz de las sociedades de nuestros días enfrenta al ser humano en las grandes urbes a problemas de aislamiento y falta de comunicación crecientes, creando seres inhumanamente solitarios, asistimos en todos los confines del mundo a fenómenos que dan testimonio de cómo el hombre es también capaz de grandes muestras de solidaridad con sus semejantes”⁹⁰.

La solidaridad, en conclusión, puede ser entendida como aquel valor en virtud del cual realizamos ese deber imperfecto de ayuda al otro (de ahí tal vez la confusión en el lenguaje común entre solidaridad en su sentido de unión en la consecución de iguales fines y solidaridad como acto liberal de ayuda al otro). Para Victoria Camps y otros, la solidaridad sería una virtud condición de justicia y cuya realización como valor “compensa las deficiencias de la justicia”. En una línea de pensamiento aristotélica, la *compensación* de las deficiencias de la justicia nos llevaría a un estado de justicia superior, sería cercana a la realización de una *justicia correctiva*.

Por último, concluir que la apelación que hemos hecho a la DUDH no es gratuita desde el punto de vista de nuestra fundamentación moral, porque nos ofrece el último puntal para consolidar nuestros argumentos anteriores. Obedecer a una norma *a priori* que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos forma parte no sólo de una fundamentación de la validez sino también de la fundamentación moral. Obedecer a una norma, de la que sólo puedan derivarse deberes imperfectos, que nos hemos impuesto a nosotros mismos libre y voluntariamente, puede ser en sí mismo un acto moral. El argumento de Sengupta que vimos antes, aquel de respetar el derecho que nosotros nos damos, adquiere en este punto de vista su máxima fuerza.

Hasta aquí llega nuestra fundamentación moral del derecho al desarrollo. Naturalmente, no son estos los únicos argumentos que se han esgrimido para fundamentar moralmente el derecho al desarrollo. Mientras que nosotros hemos pretendido presentar argumentos con una base *deontológica*, pues consideramos que el derecho al desarrollo tiene que ser realizado universalmente como medio y como fin en sí mismo, hay quien ha defendido la realización del derecho al desarrollo desde posturas llamémoslas *teleológicas*, en las que la defensa de un derecho al desarrollo tiene sentido en cuanto medio para alcanzar fines

⁸⁹ Peces-Barba Martínez, G., *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 313.

⁹⁰ Falcón y Tella, M.J., *Estudios de Filosofía jurídica y política*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Serie Doctrina Jurídica, Núm. 507, México, 2009, p. 157.

axiológicos distintos al desarrollo en sí, aunque sean legítimos. Esta distinción que hacemos, somos conscientes, puede ser considerada espuria, si esos fines son considerados iguales al desarrollo en sí -por ejemplo identificando paz positiva o cualquiera de estos otros fines con desarrollo-, pero intentaremos mantener esta postura a la vista del contenido del derecho al desarrollo que veremos en el próximo apartado: los fines distintos al desarrollo pueden ser *parte* aunque no el *todo* del fin que es el desarrollo.

Destaca, entre estos argumentos teleológicos esgrimidos, el argumento recogido por Gómez Isa de *mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales*. Para este autor, que se hace eco de las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, “las diferencias crecientes en los niveles de ingresos y en el acceso a condiciones que permitan lograr el derecho al desarrollo son incompatibles con el mantenimiento de la paz mundial”⁹¹, el derecho al desarrollo es un elemento esencial, un requisito *sine qua non*, de la paz en sentido amplio y positivo no sólo como ausencia de guerra. No podemos negar el carácter legítimo del mantenimiento de la paz como fin. Es más, es el propósito primero de las Naciones Unidas y un principio internacional plenamente aceptado. Pero la realización del derecho al desarrollo ha de realizarse en sí mismo, de modo que también ha de realizarse el principio del mantenimiento de la paz. La vinculación es lógica: sin paz no hay desarrollo, pero la realización de la paz es un argumento legítimo añadido, ya que tiene un valor en sí mismo. En el caso de que existiera, siquiera un instante, la paz en el mundo, el derecho al desarrollo seguiría teniendo una justificación autónoma.

Otros argumentos presentados en esta línea teleológica son los que hacen del derecho al desarrollo el instrumento para alcanzar una igualdad *material* mundial o la plena autodeterminación de los pueblos. Para Ezquiaga Ganuzas, quien sostiene una postura instrumental del derecho al desarrollo como requisito y complemento del derecho a la autodeterminación, “quienes mantienen que el derecho al desarrollo es un derecho humano, es lógico que intenten explicar un fundamento común de ambos, pero no me parece teóricamente correcto afirmar que los derechos humanos son el fundamento del derecho al desarrollo y que éste es el fundamento de aquellos”, añadiendo seguidamente que “mi postura estaría más cerca de considerar que el derecho tiene un carácter instrumental en relación con los derechos humanos (...) en la medida que es la premisa para disfrutar de todos ellos”⁹².

Consideramos, sin embargo, que del ofrecer un fundamento común a los derechos humanos y al derecho al desarrollo (como derecho humano) no se sigue necesariamente que uno sea el fundamento del otro ni viceversa. Mientras que nosotros consideramos el derecho al desarrollo como un derecho humano, y por tanto nos basamos en los mismos fundamentos que los demás derechos humanos, no creemos que unos sean los fundamentos de los otros. Por otro lado, estando de acuerdo con que el derecho al desarrollo es también un medio, creemos que es también un fin en sí. La consideración del derecho al desarrollo *sólo* como un instrumento para la consecución de ulteriores

⁹¹Informe del Secretario General en Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 24

⁹²Ezquiaga Ganuzas, F.J., “Soberanía, autodeterminación...”, op. cit., p. 807

finos -menciona entre estos los derechos humanos, igualdad internacional y autodeterminación -lleva a este autor a concluir que: “*creo que en el plano internacional el derecho al desarrollo debe reconocerse únicamente a los países en desarrollo y a los países que sufren una dominación colonial que, reformulando el clásico derecho a la autodeterminación, deberá incluir no sólo la independencia política, sino también la económica. De otro modo, se produciría una universalización del derecho al desarrollo que desvirtuaría su función de instrumento para la igualdad material y no solo formal de todos los países del planeta, es decir, perdería su carácter de medida de discriminación positiva*”⁹³.

Disentimos de esta postura por varias razones: la universalización de un derecho, característica básica de todo derecho humano, no desvirtúa su función: es la incorrecta o deficiente aplicación la que lo hace, del mismo modo que consideramos, por ejemplo, que no sólo los enfermos tienen derecho a la salud, sino todas las personas. Los enfermos lo son, desgraciadamente, en relación a los sanos, pero también en relación a sí mismos, a su potencialidad de estar sanos -el sentimiento de dolor así lo muestra, no sentimos dolor en nuestra reacción al sano sino en nosotros mismos-. La igualdad -en salud, si se me permite-, como fin utópico, sería que todos alcanzáramos, por ejemplo, en perfectas condiciones de salud la mayor edad *conocida* dentro de unos parámetros racionales. Los enfermos tienen derecho a estar sanos y los sanos a no enfermar, y a pretender alargar su vida saludable en condiciones de dignidad lo que puedan, no en relación a los demás sino en relación a sí mismos. La pretensión de atender sanitariamente a todos los enfermos no puede impedir la pretensión de los sanos de seguir siéndolo o de alcanzar su máxima potencialidad. Otra discusión bien distinta es los criterios de distribución social de los recursos necesarios para alcanzar el fin utópico-racional que hemos presentado, esto es los criterios de justicia distributiva entre sanos y enfermos, porque en realidad no existen tales dos categorías, sino que hay innumerables grados intermedios entre el malherido y el hombre más sano del mundo. Y esos innumerables grados son, además, cambiantes y circunstanciales.

De manera relacionada, el desarrollo es un medio pero *también* un fin, un fin inseparable de la misma naturaleza humana como dijera Domenech. Podemos conocer mediante ciertos parámetros el nivel de desarrollo de unos países en relación a otros -lo que refiere a la igualdad internacional y a criterios de justicia global- pero no conocemos un modelo de perfección de desarrollo en abstracto, no sabemos hasta dónde podemos llegar, un modelo frente al cual medir nuestro nivel de progreso hacia tal fin. Sin embargo la pretensión de tal fin existe aunque sea en una forma difusa. Existe la legítima pretensión de querer estar mejor y no peor de lo que estábamos antes en el mismo centro de la naturaleza humana y en la misma funcionalidad de la sociedad humana. ¿Cómo negar un fin legítimo a ningún pueblo o persona? Otra cosa es que los modos de realizar el desarrollo de unos se articulen en función de los derechos de los otros. El derecho al desarrollo, en cuanto derecho humano, no puede ser sólo de los pobres, categoría contingente, sino que sólo puede ser universal.

Por último, expondré dos argumentos principales para la justificación del derecho al

⁹³Ezquiaga Ganuzas, F.J., “Soberanía, autodeterminación...”, op. cit., p. 805

desarrollo, que en mi opinión merece la pena repasar y que son asumibles y muy legítimos a mi entender desde el plano individual, pero que escaparían de una fundamentación con pretensiones universales como la que he tratado de exponer anteriormente:

El deber moral de reparación. Recoge Gómez Isa que “otro argumento al que se alude con frecuencia para fundamentar el derecho al desarrollo es el deber moral de reparación que recae sobre los países desarrollados por el pasado colonial y los excesos que se cometieron durante esa etapa histórica, excesos que ayudarían a explicar la situación actual de muchos países en desarrollo”⁹⁴. Este argumento, defendido en el pasado por autores de países socialistas o no alineados, entre los que destaca el propio M'Baye⁹⁵, ha sido en mi opinión correctamente acusado de carecer de la universalidad requerida para que el desarrollo sea considerado un desarrollo humano. En palabras del Secretario General de las NNUU “la aceptación de este deber [moral de reparación] no es en absoluto universal”⁹⁶.

En fin, un pueblo no tiene derecho a desarrollarse porque antes haya sido usurpado de la posibilidad del mismo, sino que tiene derecho por sola condición, en cuanto pueblo, pues *todos* los pueblos tiene derecho a desarrollarse, en abstracto y en relación a otros.

La fundamentación religiosa del derecho al desarrollo. Coincidiendo con Gómez Isa en los problemas de universalidad del argumento anterior, debemos discrepar parcialmente con él por las mismas razones cuando sostiene que “las diferentes religiones, con su progresiva convergencia hacia unos mínimos comunes a todas ellas, ofrecen una buena base para la afirmación del derecho humano al desarrollo”⁹⁷. Ha hecho Gómez Isa un estudio extenso y pormenorizado acerca de la fundamentos que podemos encontrar en las principales religiones del mundo -por número de creyentes- para justificar el derecho al desarrollo. Bajo el epígrafe de “Grandes Religiones” analiza este autor los argumentos del Cristianismo -aunque haciendo una injustificada identificación entre el Cristianismo Católico y el Cristianismo-, el Islam y el Budismo en favor del derecho al desarrollo. Además, recoge como fundamentos los resultados de la Conferencia Mundial de las religiones para la Paz de Kyoto de 1970 y el Manifiesto de Principios de una Ética Mundial, firmado por el “Parlamento de las Religiones del mundo” de 1993, que reunió a una gran cantidad de representantes de un buen número de religiones.

En nuestra opinión, mientras que la fundamentaciones basadas en sistemas morales heterónomos son perfectamente legítimas y respetables *desde el punto de vista individual*, es decir, del creyente, pudiendo constituirse en las justificaciones por la cual las personas se adscriben a la realización del derecho al desarrollo, no puede conformarse

⁹⁴Gómez Isa, F.: *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 29

⁹⁵Gómez Isa, F.: *El derecho al desarrollo como derecho humano...*, op. cit., p 522 y ss

⁹⁶Informe del Secretario General de las Naciones Unidas *Las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como derecho humano en relación con otros derechos humanos basados en la cooperación internacional, incluido el derecho a la paz, teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden económico internacional y las necesidades humanas fundamentales* EC/CN.4/1334, de 11 de diciembre de 1978” p. 66. Recogido en Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 30

⁹⁷Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 39

desde ellas un fundamento universal, pues la universal debe a alcanzar a todos los seres humanos y no sólo a los creyentes de las religiones con mayor número de fieles.

La fundamentación del derecho al desarrollo como derecho humano requiere una fundamentación moral análoga a los demás derechos humanos, una fundamentación que pueda ser universal y, por tanto, humana, basada en la razón crítica. Es por eso mismo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que sus impulsores tuvieran o no sus propias convicciones religiosas, no se basa en ellas, con el propósito, precisamente, de hacerla universal. Es a través de la razón y la común creencia en una dignidad humana en sí, como se ha permitido la tolerancia religiosa en cuanto derecho humano, no al revés. Por tanto, mientras que las convicciones religiosas sí pueden ser legítimo fundamento moral del derecho al desarrollo para cada cual, en algunos casos el quizá el mayor impulso, cuando pasamos al espacio público de discusión, si queremos que sea un derecho universal y, por tanto, humano, la religión ha de quedarse en ese plano individual de moralidad (Thomas Paine diría “my own mind is my own church”⁹⁸).

La suma de los valores religiosos, o más bien, el mínimo común denominador de las mayores religiones que propone Gómez Isa no *puede* garantizar una ética universal, ni siquiera sumando -cosa harto difícil- todas y cada una de las religiones del mundo, y no solo las “grandes” -teniendo en cuenta que el valor intrínseco de cada creencia religiosa es igual, incluyendo la no creencia, sea grande o pequeña, tenga más o menos número de fieles, además de ser heterónoma y contingente-. Por todo ello preferimos una fundamentación universal que no dependa heterónomamente de la voluntad de representantes de religiones presentes o futuras, o de los no creyentes, que conforman otra manera de creer.

Parecida reflexión hemos de hacernos para otros sistemas heterónomos de la moralidad, que incluyen no solo religiones, sino ideologías políticas o de cualquier otro tipo, que incluyen valores pretendidamente universales solo desde la óptica del practicante.

Estas consideraciones que propongo son de extrema importancia para el desarrollo posterior de toda nuestra tesis, especialmente en el caso de considerar las posturas que sobre el desarrollo y la autodeterminación puedan darse en su relación con las iglesias autocéfalas cuyo rango de acción es coincidente con los límites físicos de un estado o imbricadas esencialmente con el nacionalismo (piénsese en las iglesias autocéfalas cristianas ortodoxas como la serbia, la rusa o la búlgara, el Anglicanismo o el Sintoísmo japonés).

En el caso de la antigua Yugoslavia, además, fueron precisamente comunidades ordenadas por las líneas marcadas por los nacionalismos basados en identidades conformes a distintos sistemas morales heterónomos (ortodoxo, musulmán, católico) las que rompieron un concepto amplio de fraternidad (el lema yugoslavo *bratsvo i jedinstvo*⁹⁹) sustituyéndolo por conceptos más restrictivos de la solidaridad coincidentes con sus identidades nacionales.

⁹⁸ Paine, T., *Age of reason*. Primera parte. Sección 1.

⁹⁹ En castellano significa, literalmente, “fraternidad y unidad”.

§2.2.2 Fundamentación política del derecho al desarrollo

La importancia de reconocer y aplicar el derecho al desarrollo ha sido sostenida a menudo, tanto en círculos políticos como periodísticos o académicos, sobre la base del argumento del interés propio, lo que se ha venido en llamar “solidaridad egoísta” o, como recoge Gómez Isa, “interdependencia económica”. Para este autor, el argumento de la solidaridad egoísta propone “promover el desarrollo del Tercer Mundo no por consideraciones de tipo ético o humanitario, sino porque ello también puede suponer beneficios para los países desarrollados”¹⁰⁰.

Podría discutirse si no hay en el egoísmo del beneficio propio consideraciones éticas, ya que no es sencillo desligar el uno de las otras, a la vista de las discusiones en torno a la *ética del egoísmo* que iniciara ya en el s. XIX el utilitarista británico Henry Sidgwick y que ha continuado hasta nuestros días a través de debates en torno a la obra de autores como James Rachels o Ayn Rand.

Nuestra posición, en cualquier caso, es mantener esta línea argumental fuera de la fundamentación moral expuesta anteriormente, ligándola, sin embargo, a esa serie de argumentos legítimos o buenas razones de las que hablara Bobbio en relación con el fundamento del derecho que se desearía tener, buenas razones “para convencer a la mayor cantidad posible de personas, y sobre todo a quienes tienen el poder directo o indirecto de producir normas válidas en dicho ordenamiento, sobre la necesidad de reconocerlo [tal derecho]”. La desligamos no sólo porque podamos disentir con la eticidad del egoísmo – para nosotros solo el límite del deber de ayuda-, sino porque los mismos agentes morales lo hacen cuando arguyen no valores sino puros intereses y así los llaman. Aclaremos también que nos referimos en este apartado todavía al deber ser, a la fundamentación de derecho al desarrollo, no a la eficacia del mismo, es decir, a la realización práctica del derecho, así sea o no realizado, en qué medida o cuáles son los obstáculos prácticos para su realización.

El argumento principal del beneficio propio o solidaridad egoísta adopta diversas formas, algunas de ellas ligadas a los argumentos teleológicos mencionados anteriormente, como la paz mundial, que redundaría en beneficio propio. Bajo esta perspectiva, el derecho al desarrollo serviría para fomentar la estabilidad mundial y la paz, lo que redundaría en crecimiento y paz para el país que ayuda. Pero hay otras: el fortalecimiento de la marca país, el fomento de determinadas políticas migratorias o la consolidación de políticas de acción exterior orientadas a determinados objetivos geoestratégicos.

Veamos, por ejemplo -uno entre innumerables-, las conclusiones y recomendaciones del reciente informe “Hacia un Libro Blanco de la Cooperación Española”, publicado por el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE) de la Fundación Salvador Soler Mundo¹⁰¹. En él, los autores arguyen que “para muchos

¹⁰⁰ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo: entre la justicia...*, op. cit., p. 29.

¹⁰¹ Pérez González, J., Fanjul, G., et al., *Informe Hacia un Libro Blanco de la Cooperación Española*.

ciudadanos españoles, la lucha contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad en el mundo son imperativos morales de nuestra sociedad, a los que se les debería dar la máxima prioridad política. Lamentablemente, esta perspectiva no ha sido capaz de movilizar suficientemente la voluntad social y política de nuestro país (...) Este informe va especialmente dirigido (...) a aquellos que necesitan argumentos añadidos para estar dispuestos a invertir, legislar o apoyar medidas que sienten las bases de un sistema global más justo, sostenible e igualitario. Cada una de las propuestas políticas del informe – escogidas exclusivamente por su aportación al desarrollo – crearán empleo en España, fortalecerán nuestra posición en el escenario internacional o contribuirán a la construcción de un entorno más seguro y estable para España”.

Para Daniel Oliva, los argumentos fácticos no son solamente actuales, sino que pertenecen además a la *explicación* o motivación histórica del nacimiento de un derecho al desarrollo: “Tres son las circunstancias históricas, ampliamente interrelacionadas, que habrá que tener muy presentes a la hora de analizar el origen del derecho al desarrollo: a) la consolidación y puesta en práctica del principio y derecho de libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial b) la creación del sistema de cooperación internacional y c) *la toma de conciencia en torno a la amenaza que para la seguridad conllevaba la persistencia de la pobreza y el subdesarrollo*”¹⁰².

Gran parte de los recursos que se destinan al cumplimiento del derecho al desarrollo tiene su fundamento en puros intereses políticos y geoestratégicos. Los ejemplos son variadísimos y los argumentos raramente se presentan puros sino entremezclados con los argumentos morales. Pensemos en contingentes bélicos en algún país remoto protegiendo proyectos de cooperación a caballo entre la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y la propaganda bélica para ganar adeptos o desvincular afecciones de la población local o la presión de la cooperación sobre las élites locales para conseguir contratos o ventajas comerciales, entre decenas de ejemplos. Pero los intereses no tienen por qué ser políticos militares, sino de interés político internacional puro, bien de las élites gobernantes, bien de los estados. Pensemos en ayuda exterior a cambio de votos en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo.

El auge del concepto de *codesarrollo* es, a mi entender, otro buen ejemplo de ello. Introducido por el politólogo francés Sami Naïr a finales de los noventa¹⁰³, se ha convertido en un nuevo enfoque de trato de los flujos migratorios en el que la persona migrante se convierte en el centro de las políticas de migración, dando prioridad a la cooperación activa entre países que reciben y sirven migrantes, para construir políticas entre ellos y asegurar un provecho mutuo y un trato más humano a los migrantes. En la Cumbre de Tampere (1999) se utilizó por primera vez el término de manera oficial: “ (...)

Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE), Fundación Salvador Soler Mundo Justo, 2012.

¹⁰² Oliva, D., *El derecho al desarrollo y la cooperación internacional. Especial atención a la práctica española*, CIDEAL, Madrid, 2011, p. 23

¹⁰³ Naïr, S., *Informe de balance y orientación de la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios*. Misión Interministerial sobre Migración y Codesarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 1997. [Disponible en: http://www.cities-localgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/informesaminair.pdf](http://www.cities-localgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/informesaminair.pdf)

La Unión Europea necesita un enfoque global de la migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen y tránsito. Para ello es necesario luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conflictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar el respeto de los derechos humanos (...) Otro elemento clave para lograr el éxito de esta política será la colaboración con terceros países interesados, con objeto de fomentar el codesarrollo”.

El concepto de codesarrollo ha servido para superar una idea de fronteras fortaleza y ha sido promovido para proteger los derechos humanos de los migrantes, pero entre sus argumentos se ha hallado siempre, junto a los éticos, aquel que sugiere que el desarrollo del otro es imprescindible para que exista menos migración, o que ésta no dañe los intereses del país receptor. Entre los argumentos a favor del codesarrollo se encuentra el argumento de que, fácticamente, las políticas de cierre de fronteras y expulsión no han sido provechosas. Relacionado con la cooperación al exterior y los intereses de la acción exterior de los estados, basta ver la concentración de ayuda exterior en países que sirven migrantes en contraste con los países más pobres del planeta para comprender el eco que han encontrado los argumentos fácticos en este sentido.

El tercer argumento, como hemos avanzado, es el beneficio económico propio. Si el ejemplo histórico de referencia es el Plan Marshall, bien podemos pensar en decenas de ejemplos más en los que los proyectos de cooperación están basados en el futuro beneficio económico del país donante. En ocasiones, es la ayuda ligada (en el caso de los antiguos créditos FAD españoles, por ejemplo) la que lleva implícita el interés económico: ayuda ligada en forma de créditos a cambio de contratos con empresas del país benefactor. El interés en este caso es tan obvio que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo no lo contabiliza, como tampoco admite contar como Ayuda al Desarrollo el gasto militar.

Estos argumentos fácticos, por tanto, rara vez se presentan aislados, por lo que argumentos acerca de la conveniencia de cooperar por razones de conveniencia derivadas de políticas geoestratégicas, militares, migratorias o económicas, o de cualquier otro tipo, suelen ir acompañadas de otras consideraciones morales e ideológicas.

§2.3 Definición, contenido, sujetos titulares del derecho al desarrollo

§2.3.1 Definición y contenido del derecho al desarrollo

Sostiene el Experto Independiente de las Naciones Unidas Arjun Sengupta que si bien el derecho al desarrollo es “uno de los derechos aceptados más recientemente por el sistema internacional”, todavía “permanece irrealizado”¹⁰⁴, ya que, para Sengupta, es un derecho de realización progresiva. El hecho de que el derecho al desarrollo haya reunido reconocimiento general a nivel internacional no significa que exista un amplio consenso sobre su contenido exacto o las maneras de realizarlo. Al contrario, como ya Sengupta

¹⁰⁴ Smith, Rhona K. M., *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 342.

hizo notar, quedan todavía importantes “diferencias en la interpretación de la Declaración y el contenido y naturaleza de este derecho”. Admite así Sengupta que han existido importantes debates en torno a la validez normativa y la eficacia del derecho al desarrollo presentándose un aparente problema circular: para realizar plenamente el derecho al desarrollo es necesario definir bien su contenido pero no podemos afirmar que el derecho al desarrollo permanece irrealizado y que tiene plena validez si no sabemos previamente el contenido.

Sin embargo, si Sengupta puede abordar en estos términos el problema del contenido, no es tanto porque no exista una definición que nos permita saber si no se ha cumplido plenamente el derecho al desarrollo, sino, como hemos mencionado, por la vaguedad de la definición. Esta definición mínima del derecho al desarrollo es, sin embargo, a la que más sólidamente podemos aferrarnos si consideramos el valor universal que otorga el consenso alcanzado en torno a ella: la definición del derecho al desarrollo contenida en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986. De acuerdo con Sengupta, la vaguedad de la definición viene dada porque la Declaración de 1986 se caracteriza por estar redactada en “forma de acuerdo, con el compromiso y ambigüedades del lenguaje usado en un documento negociado”¹⁰⁵, debido, naturalmente, a sus potencialmente enormes implicaciones políticas y económicas.

Los estados, por ejemplo, deben según la Declaración “promover y proteger un orden político, económico y social apropiado para el desarrollo”, una referencia en absoluto inintencionada, ya que permitió alcanzar, en el momento de la adopción del texto internacional, un consenso más amplio, admitiendo el voto del bloque comunista, los países no-alineados y casi todos los países del bloque occidental. Esta ambigüedad de algunos términos de la Declaración no ha merecido una consideración negativa por parte de algunos autores, como el que fue Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ibrahim Salama, quien declaró que “la realidad política de las negociaciones diplomáticas sólo pueden producir compromisos que reflejen las relaciones de poder, ocultando desacuerdos fundamentales mediante una ambigüedad positiva y limitada al mínimo común denominador como precio por el consenso (...) las definiciones rígidas son, en esencia, incompatibles con la verdadera naturaleza del derecho al desarrollo”¹⁰⁶.

Arjun Sengupta, sin embargo, bien vio que sin una definición del derecho al desarrollo nos encontramos con problemas evidentes para su realización. La indefinición del objetivo final del desarrollo no es incompatible con una definición mínima del mismo, de igual modo que no sabemos cual es la óptima salud a que el ser humano puede aspirar, pero podemos dar una definición de salud que nos permita trabajar para su mejoramiento, que nos permita medir la situación actual y la pasada, compararla con situaciones de los otros, y establecer objetivos parciales. Es por ello que Sengupta, en ejercicio de su cargo se propuso analizar el contenido del derecho al desarrollo de manera que pudiera ser

¹⁰⁵ Sengupta, A., “The Human Right to Development”, *Oxford Development Studies* 32, n. 2, 2004, pp.179-203.

¹⁰⁶ Salama, I., “The Right to Development. Towards a new approach?”, *Perceptions: Journal of International Affairs*, Verano, 2005, pp. 49-68.

operativo.

La definición del derecho al desarrollo contenida en la Declaración de 1986 es la siguiente:

Art.1

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Esta definición del derecho al desarrollo no nos dice sin embargo en qué consiste el desarrollo al que se da derecho, más allá de que puede ser económico, social, cultural y político. Tampoco da una medida de tal desarrollo. Tanto es así que ha generado una de las críticas fundamentales al derecho humano al desarrollo, expuesta por Jack Donnelly¹⁰⁷, directamente relacionada con el contenido del derecho en sí. Para Donnelly, el derecho al desarrollo no es sino un “derecho al disfrute” de los demás derechos humanos ya contenidos en los Pactos Internacionales. El derecho humano al desarrollo es así concebido por él como una mera síntesis de los derechos humanos ya reconocidos, una cómoda manera de referirse a un conjunto de derechos o incluso como un instrumento para incorporar el desarrollo en un discurso de derechos humanos. La concepción del derecho al desarrollo como mero derecho síntesis lo vacía de contenido, sería un derecho a todo (convirtiéndose así en un derecho a nada) peligroso incluso por la distracción que supondría de la efectiva realización de todos los demás derechos humanos ya ampliamente reconocidos. Para este autor el derecho al desarrollo es poco más que un brindis al sol -él dice una habitación oscura en la que no había nada que revisar- producto de un inflación de derechos humanos nacidos tras la aprobación de los Pactos Internacionales.

Existen así, en torno al contenido del derecho al desarrollo, como dice Gómez Isa, críticas referidas a su identidad y a su utilidad¹⁰⁸, siendo las primeras relacionadas con el contenido mismo del derecho al desarrollo y las segundas respecto a si es deseable en base a su utilidad un derecho al desarrollo. A nuestro entender, los problemas de utilidad dependen de los de su definición y contenido. Dependiendo de qué hablemos, podremos concluir su utilidad. Si el derecho al desarrollo es lo que supone Donnelly, un mero conjunto de derechos previamente reconocidos, los debates sobre la utilidad tienen sentido y sus críticas son admisibles. En cambio, si el contenido otorga autonomía conceptual al derecho al desarrollo, conformándolo como un derecho humano independiente, postura ampliamente sostenida y que compartimos, entonces los debates

¹⁰⁷ Donnelly, J., “In Search of the Unicorn: the Jurisprudence and Politics of the Right to Development”, *California Western International Law Journal*, vol. 15, 1985, pp. 473-509.

¹⁰⁸ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo como derecho humano...*, op. cit., p. 169

sobre la utilidad carecen de sentido, pudiéndonos referir en cambio a las reflexiones que hiciéramos en torno a su fundamentación en apartados anteriores.

Para responder adecuadamente habremos de saber si el contenido del derecho es ese que dice Donnelly. Para ello, a su vez, tenemos primero que analizar el concepto mismo de desarrollo, el objeto al que se refiere el derecho al desarrollo.

Como hemos bosquejado anteriormente, en §2.1, el mismo concepto de desarrollo ha sufrido una importante evolución en los últimos años. Ya Kant se había planteado la cuestión de progreso en su “Replanteamiento de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor” (1798), pero el progreso se planteaba desde el *destino moral* del ser humano. Convencido de que la naturaleza del hombre no cambiaría, en sus naturales características positivas entremezcladas con sus características negativas de manera constante en la historia, los beneficios que cabrían esperarse al género humano del progreso hacia lo mejor *no* serían una “cantidad siempre creciente de moralidad en la intención, sino un aumento de los efectos de su legalidad en las acciones conforme al deber, sea cual fuere el móvil que las ocasione; y es que el resultado del empeño de la humanidad por mejorar sólo podemos compulsarlo en las buenas acciones de los hombres -que cada vez sean más acertadas y numerosas (...)”¹⁰⁹.

Pero fue el materialismo histórico marxista el que constituyó las bases de reflexión en torno a la conexión entre las condiciones económicas y el progreso humano. En marzo de 1883, en el entierro de Karl Marx, su amigo Engels explicaba a los presentes el concepto de materialismo histórico: “Marx descubrió la *ley del desarrollo de la historia humana*. El hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse; antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos y materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo”.

La profunda influencia del materialismo histórico resonó en lo referente al desarrollo durante todo el siglo XX. Con la descolonización, los países recién emancipados pronto se dieron cuenta de las diferencias de desarrollo social y económico y de la necesidad de contar con los medios materiales necesarios, con los recursos naturales, para disminuir la brecha de desarrollos respecto a los países más avanzados. El premio Nobel de Economía Sir Arthur Lewis, responsable de la “Teoría del Crecimiento Económico”¹¹⁰, en su artículo “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, publicado en 1954¹¹¹, fue decisivo para el establecimiento de la disciplina académica conocida como

¹⁰⁹ En su ensayo de 1797, “*Revisión de la pregunta: si el género humano progresa continuamente hacia lo mejor*”. Kant, I., *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*, Cátedra, Madrid, 2009, p. 208

¹¹⁰ Lewis, W.A., *The Theory of Economic Growth*. Taylor and Francis, Londres, 2003.

¹¹¹ Lewis, W. A., “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, *Manchester School of Economic and Social Studies*, vol. 22, 1954, pp. 139-91.

Economía del Desarrollo.

El nacimiento de la disciplina específica de la Economía del Desarrollo brindó nuevos instrumentos para el análisis de las desigualdades a nivel global que hasta entonces se achacaban, como expone Ramírez Cendrero, “al diferente ritmo de evolución del progreso material o del desarrollo capitalista que, antes o después, llegaría a todo el mundo. Las diferencias entre los países (...) se asociaban a las diferentes “edades” de los países (...) las leyes de desarrollo, en definitiva, se consideraban las mismas para todos los territorios y países aunque resultara inevitable la existencia de desfases temporales”¹¹².

Durante los siguientes años se multiplicaron los estudios sobre la economía del desarrollo, tomando fuerza la asociación entre el concepto de desarrollo económico y el crecimiento económico relacionado con el conocido como “paradigma de la modernización”. Por otro lado, surgirían otras dos aproximaciones adicionales al fenómeno: el estructuralismo de la CEPAL y ese grupo heterogéneo de contribuciones conocido como “escuela de la dependencia”. A nivel político, como hemos adelantado anteriormente y veremos un poco más detenidamente con posterioridad, los países organizados en torno al Movimiento de Países No Alineados presionarían para alcanzar un Nuevo Orden Económico Internacional inspirados por el impulso académico de la economía del desarrollo.

A partir de los años setenta, el automatismo del paradigma de la modernización se mostró insuficiente y fallido: el crecimiento económico no había traído consigo la mejora de los niveles de vida de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Como acertadamente resume Ramírez Cendrero, los *medios* activados se habían mostrado incapaces para garantizar los *finés* del desarrollo¹¹³. Los años siguientes vieron el incremento de los estudios sobre cómo cubrir las “necesidades básicas”, satisfacción hacia la cual tiene que estar dirigido el desarrollo.

En torno a los medios y los fines se articularon igualmente las reflexiones del también Nobel en Economía, Amartya Sen, que dio un paso más respecto en el estudio del desarrollo respecto a la satisfacción de las “necesidades básicas”. “Es claro que no es la riqueza el bien que aquí buscamos, porque es un bien útil, que por respecto de otro bien se desea” dejó escrito Aristóteles en su *Ética nicomáquea*¹¹⁴. Amartya Sen, fuertemente influenciado por el estagirita, en colaboración con la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, estudiosa también del pensamiento aristotélico, trabajaron extensamente la cuestión del desarrollo durante los años ochenta (de manera relacionada, el estudio del desarrollo, en cuanto que supone el análisis de redistribución de recursos, ha llevado a ambos autores a desarrollar sus propias ideas en torno a la concepto de justicia y a realizar distintas críticas a los trabajos relativos a la justicia distributiva, especialmente de Rawls). Ciñéndonos a nuestro tema, Amartya Sen influyó notablemente en los debates en tono a la naturaleza del desarrollo al proponer “la libertad como medio y fin del

¹¹² Ramírez Cendrero, J.M., “Génesis y evolución de la idea de desarrollo. De la inevitabilidad del desarrollo al debate sobre su pertinencia”, en Puerto Sanz, L.M., (ed), *Economía para el Desarrollo*, Catarata, Madrid, 2008, p. 28

¹¹³ Ramírez Cendrero, J.M., “Génesis...”, op. cit., p. 67.

¹¹⁴ Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro I, Sección V., Ed. Porrúa, México, 2010, p. 7.

desarrollo”. Distanciándose de la concepción de desarrollo como crecimiento económico, Sen concluye que el aumento del conjunto de libertades son conducentes a mayor desarrollo, también económico, de manera que tales libertades, en realidad, pueden concebirse como “elementos constituyentes” del desarrollo¹¹⁵.

Para Sen “las libertades no son sólo los fines primarios del desarrollo, sino que éstas son también sus principales medios”¹¹⁶. Clasifica Sen estas libertades en cinco tipos distintos desde una perspectiva “instrumental”: libertades políticas, económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad. Estas libertades, arguye, se complementan y se refuerzan unas a otras. Así la gran aportación de Sen, que partió de la demostración empírica de que es infinitamente más difícil que las hambrunas puedan darse en asentados sistemas democráticos que en sistemas políticos totalitarios, es que si el crecimiento económico puede coadyuvar en cuanto medio al respeto a los derechos y libertades, esta relación se da también de manera inversa: la consolidación de la democracia y la protección de las libertades individuales –para la que no son tan necesarios los recursos como el fomento del orden social- son conducentes al desarrollo económico. Sen propuso así, junto con Nussbaum, un enfoque de capacidades del desarrollo, distinto de la satisfacción de las necesidades básicas, que propugna garantizar las funcionalidades del individuo aumentando sus capacidades, un enfoque en las potencialidades de la persona. Los trabajos de Sen respecto a la concepción del fenómeno del desarrollo influyeron necesariamente, como veremos, en el concepto del derecho a tal desarrollo y su contenido.

Veamos a continuación algunas de las posiciones teóricas que se han adoptado respecto al contenido del derecho al desarrollo.

Para autores como el mencionado Jack Donnelly, el derecho al desarrollo es simplemente la síntesis de todos los derechos preexistentes, lo que le lleva a su consabida posición crítica. Para Ezquiaga Ganuzas, como hemos visto, el derecho al desarrollo puede concebirse como un derecho instrumental que aseguraría los medios y recursos para la plena realización del derecho de autodeterminación. También para Gros Espiell, el derecho humano al desarrollo es un derecho síntesis –que incluye incluso el derecho a la libre determinación-¹¹⁷. Para la mayoría de los autores, hoy en día, siguiendo la estela de Sengupta y otros, el contenido del derecho es compuesto, como para Donnelly, pero a diferencia del norteamericano, sí consideran que el derecho al desarrollo posee autonomía conceptual.

Los elementos contenidos en el derecho al desarrollo son comúnmente enumerados en una lista *numerus apertus*. Para Gómez Isa, por ejemplo, los elementos constitutivos más importantes del derecho al desarrollo, pero no los únicos, son: el respeto de todos los derechos humanos, su conexión con el resto de derechos de tercera generación, el

¹¹⁵ Sen, A., *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 5

¹¹⁶ Sen, A., *Development as Freedom*, op cit, p.10

¹¹⁷ Gros Espiell, H., “El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, vol. XIII, no. 37, 1980, p. 52.

desarme, la participación popular, etc.¹¹⁸. García Amador incluye como elemento del derecho al desarrollo el derecho a la autodeterminación, el derecho a vivir en paz, el derecho a escoger su modelo de desarrollo¹¹⁹. La inclusión de determinados conceptos dentro del contenido del derecho al desarrollo puede, por otro lado, confundirse con las *condiciones* necesarias para la realización de tal derecho. Es el caso del principio de cooperación entre estados -el artículo 3.2 de la Declaración de 1986 establece que “la realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados (...)” o el fortalecimiento de la paz -el artículo 7 de la Declaración establece que “todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz (...)”.

Para Philip Alston, la inclusión de todos los derechos y libertades en el contenido del derecho al desarrollo le otorgaría autonomía conceptual si consideramos que el todo no es la mera suma de las partes. Estos autores consideran el conjunto de derechos contenidos como elementos dispuestos en un proceso de desarrollo dinámico y expansivo en el que los distintos elementos interactúan entre sí y se proyectan en un proceso positivo de fin indefinido.

Entre los elementos constitutivos del derecho al desarrollo, finalmente, cabe añadir también el elemento de los medios para la realización del resto de sus elementos, elemento resaltado por el profesor Pérez González, para quien la autonomía conceptual del derecho al desarrollo “reside en su carácter de derecho a los medios para la realización del ser humano”¹²⁰.

La apertura del contenido del derecho al desarrollo ha provocado a mi entender cierta confusión teórica. Destaca, por ejemplo, el caso de la inclusión del derecho a la autodeterminación como elemento y como requisito del derecho al desarrollo, cuestión que trataremos aquí, considerando lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Declaración de 1986.

Teniendo en cuenta las distintas posturas mantenidas en torno al contenido del derecho al desarrollo, hasta aquí brevemente reflejadas, así como los resultados de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, en la que se establece el derecho al desarrollo como un derecho humano distinto que a su vez, propicia el disfrute de todos los demás derechos humanos (si bien establece que “la falta de desarrollo no puede ser invocada como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente reconocidos”), el Experto Independiente Arjun Sengupta analizó también el contenido del derecho al desarrollo, fuertemente influenciado por el trabajo de Amartya Sen y en estrecha consulta, debate y colaboración con otros autores como Stephen Marks, o

¹¹⁸ Gómez Isa, F. *El derecho al desarrollo como derecho humano...*, op. cit., p. 175 y ss.

¹¹⁹ García Amador, F.V., *El Derecho Internacional del Desarrollo. Una nueva dimensión del Derecho Internacional Económico*, Civitas, Madrid, 1987, p. 75 y ss.

¹²⁰ Pérez González, M., “El derecho al desarrollo como derecho humano”, *El derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos sociales*. Ed. Complutense. Madrid, 1991, pp 79-97.

Margot Solomon.

En las próximas líneas analizaremos la posición de Arjun Sengupta referente a la definición y contenido del derecho al desarrollo, ya que será ésta la que tomaremos como punto de partida y referencia en toda nuestra disertación, por parecernos, dentro de lo posible, la más precisa y sistemática.

Para Arjun Sengupta, el desarrollo es un proceso, un proceso en el que nos hallamos inmersos y que es, en cuanto tal, no finito. La infinitud del proceso de desarrollo está en su propia naturaleza; no existe o no conocemos tal situación en la que el desarrollo sea perfectamente cumplido. El desarrollo es un proceso comprensivo que va más allá de lo económico y que incluye lo social, lo político y lo cultural en un progreso entendido como mejora del bienestar. Sengupta entiende que el desarrollo es más que el crecimiento económico, la industrialización y el incremento de los flujos económicos, y debe ser un proceso participativo, en el que la distribución de la riqueza sea equitativa y se produzca una mejora constante, no vale el estancamiento, de los niveles de bienestar de todas las personas. El derecho al desarrollo es un derecho humano, por tanto, inalienable, un derecho distinto -siguiendo a Alston- dotado de autonomía conceptual y no una mera síntesis de derechos, un derecho universal a ese proceso particular de desarrollo en el cual todos los derechos y libertades fundamentales pueden ser realizados de manera progresiva.

Distingue nuestro autor, sin embargo, el derecho al desarrollo como tal de los conceptos de “enfoque de derechos humanos del desarrollo” o “proceso de desarrollo basado en derechos”, tan populares entre los actores de la cooperación internacional para el desarrollo a partir de mediados de los años 90, especialmente tras el auge del “human rights mainstreaming” propiciado por las Naciones Unidas y apoyado también por la Unión Europea. Es el proceso de desarrollo el objeto mismo del derecho al desarrollo. Como proceso de desarrollo sólo ha de entenderse aquel que incluya la realización de todos los derechos humanos. El desarrollo es así para Sengupta un proceso de mejora constante del bienestar humano, un bienestar consistente con el cumplimiento de todos los derechos humanos. No ha de concebirse, por tanto, un incremento del bienestar fuera del marco de los derechos humanos.

En consecuencia, las políticas de desarrollo deben orientarse a incrementar tanto el crecimiento económico como a cubrir las necesidades básicas de las personas y cumplir y asegurar el cumplimiento de sus derechos humanos. Sengupta, siguiendo a Sen, adopta también el enfoque de derechos humanos y capacidades, y considera que es necesario aportar una serie de indicadores sociales para medir el desarrollo, indicadores que dan no sólo una perspectiva de las necesidades cubiertas y del crecimiento económico, sino también dan idea, por un lado, del nivel de respeto de derechos humanos, y por otro, del aumento de las capacidades de los individuos en una determinada sociedad para actuar, capacidades que son consideradas, a su vez, bienes de realizable valor económico.

Con todo ello, y teniendo en cuenta la definición contenida en la Declaración de 1986,

Sengupta propone una definición “operativa” del derecho al desarrollo¹²¹ :

El derecho al desarrollo es el derecho a un proceso de desarrollo, consistente en la realización progresiva y por fases de todos los derechos humanos reconocidos, como los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales (y otros derechos admitidos en la legislación internacional) así como el proceso de crecimiento económico coherente con los estándares de derechos humanos.

Para que sea totalmente operativa, esta definición ha de dotar de indicadores medibles del incremento de cada uno de los derechos al que se añadiría el incremento de los indicadores de crecimiento económico. Es bien conocida la dificultad práctica de construir indicadores respecto a la realización de derechos sociales, como demuestran los trabajos de campo en cooperación para el desarrollo, pero esta dificultad está siempre recompensada por la capacidad de lectura de la realidad social que da el análisis de los incrementos respecto a las líneas de base de estudios previos y por su imbatibilidad como herramienta para las políticas públicas. Cuando hablamos del derecho al desarrollo además, el incremento de los indicadores es lo que justifica la existencia del progreso positivo, parte del concepto mismo de desarrollo.

Veamos con detenimiento el análisis que hace Sengupta de la cuestión para alcanzar la definición operativa del contenido del derecho al desarrollo, con el objeto de facilitar su estudio y realización¹²²:

Propone nuestro autor que supongamos que hay “n” derechos, que califican para ser reconocidos como derechos reconocidos a través de los debidos procesos internacionales y nacionales de creación de normas válidas. Siguiendo a Bulajić y a toda la doctrina mayoritaria, se “debe incluir la promoción y protección de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales”¹²³. Si R_i es un indicador para el nivel de disfrute del derecho i , un bienestar basado en derechos (W_R) puede ser definido como un vector $(R_1, R_2, \dots, R_n, y^*)$, donde y^* simboliza el estándar de vida general, medido por el ingreso real per cápita ajustado a normas basadas en derechos. Si consideramos el incremento de los indicadores (d) más el incremento de y^* , que pasaría a ser g^* , el desarrollo como derecho humano puede ser así descrito como el vector:

$$D_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, \dots, dR_n, g^*)$$

dR_i es el incremento (d) del derecho R_i en un período temporal determinado, g^* es un proceso de crecimiento económico coherente con los derechos humanos durante tal período, y D_R es el proceso de desarrollo como mejora progresiva de un bienestar $d(\text{incremento})$ del bienestar (W_R) basado en derechos (aquí vemos de nuevo el fin aristotélico de la comunidad política, que “existe no solo por la simple vida sino por la vida mejor”)¹²⁴.

¹²¹ Sengupta, A., “The Human Right to Development”, *Oxford Development Studies*, vol. 32, n. 2, 2004, 179-203.

¹²² Este análisis puede encontrarse en Sengupta, A., “The Human Right to Development”, op. cit., p.182

¹²³ Bulajić, M., *Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

¹²⁴ Aristóteles *Política*. Op cit.

Podemos considerar que, mientras otros elementos de D_R son derechos humanos, g^* no necesita ser reconocido como derecho humano. En efecto, g^* representaría el incremento de todos los demás elementos del bienestar no cubiertos por los derechos reconocidos, es decir, todas las otras libertades que no pueden ser consideradas derechos. En este punto, Sengupta se refiere al trabajo de Arthur Lewis, para quien el incremento de los medios económicos otorga al hombre mayor control sobre su entorno y, por tanto, incrementa su libertad.

Podríamos considerar g^* como un elemento simplemente facilitador de los demás elementos, como medio para la realización de cada uno de los derechos, pero sería una definición muy limitada de su función social. En primer lugar porque R_n puede considerarse como parte de una lista abierta variable de derechos pero *numerus clausus*, o también como un lista siempre creciente de derechos, los que conocemos y los que están todavía por ser reconocidos (¿quién hubiera imaginado hace treinta años un supuesto derecho de acceso al mundo digital?) y segundo, porque se puede aspirar a medios para la realización de fines legítimos que no son específicamente derechos pero que forma parte de una concepción amplia de libertad. Así, podemos considerar g^* tanto como medio de realización de los derechos, como su valor en sí mismo como elemento del vector.

A partir de esta definición, Sengupta acomoda las tres características de inviolabilidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos consagrados en la Convención de Viena de 1993 y ampliamente aceptados en la comunidad internacional, política y académica:

- *Inviolabilidad* quiere decir que ningún derecho individual puede ser violado en el curso de la realización del derecho al desarrollo. Esto es, $D_R > 0$ implica $dR_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, o los incrementos de los indicadores de los derechos deben ser no negativos.
- *Interdependencia* significa que el nivel de realización de un derecho depende del otro, es decir, uno está en función del otro $R_i = f(R_j)$ $i \neq j$.
- *Indivisibilidad*. Dos derechos son indivisibles o integrados, si la violación de un derecho lleva a la violación de otro, es decir, $dR_i / dR_j > 0$, $i \neq j$.

Sengupta concluye de aquí que estas dos últimas condiciones, interdependencia e indivisibilidad, pueden ser expresadas en términos de la definición dada del derecho al desarrollo como:

$$R_i = f(R_j, g), \quad j=1, 2, \dots, n, \quad i \neq j \quad \text{y} \quad \delta R_i / \delta g \geq 0, \quad \text{y} \quad \delta R_i / \delta R_j \geq 0, \quad j \neq i$$

Cuando se cumplen estas condiciones, hay un incremento en el vector del proceso de desarrollo, considerado como derecho al desarrollo, es decir, $D_R > 0$ ó $(dR_1, dR_2, \dots, dR_n, g) > 0$ implica que $g > 0$, y que hay al menos un i , tal como $dR_i > 0$, y que todos los demás derechos $dR \geq 0$, $j=i$. Aún más, si por cada derecho i , $dR_i < 0$, implicando que tal derecho es violado, entonces $D_R < 0$, es decir el derecho al desarrollo sería vulnerado. Esto se deriva

de la *integridad o indivisibilidad* del derecho al desarrollo.

Así, concilia Sengupta las tres características de inviolabilidad, interdependencia e integridad (o indivisibilidad) consagradas en la Conferencia de Viena de 1993 y concluye que el conjunto de cada uno de los elementos es superior a la mera suma de las partes, pudiendo ver la perspectiva colectiva del derecho sin necesidad de agregar uno a uno todos los derechos. Una visión tal del derecho al desarrollo implica que no puede violarse una de sus partes para favorecer otra, y concilia la superada división entre derechos económicos, culturales y sociales, por un lado, y derechos civiles y políticos, por otro.

Se llenan de sentido también así las palabras con las que Gros Espiell concluía un conocido estudio sobre el derecho al desarrollo en 1980: “todos los derechos del hombre son interdependientes y cada uno condiciona a los restantes. Esta simple verdad encuentra en el caso del derecho del hombre al desarrollo una nueva y definitiva demostración”¹²⁵.

El incremento de los elementos del vector, naturalmente, se entiende a lo largo de un período temporal. Sengupta propone que el incremento en la realización de los derechos en un período T , la representación los indicadores sería R_{it} ($t=1, 2, \dots T$).; quitando t y usando simplemente dR_i como indicador de la mejora de un derecho, significaría que dR_i se referiría al incremento medio de R_i durante el período temporal señalado¹²⁶.

Es muy importante mencionar, por último, que Sengupta no olvida conciliar asimismo el derecho al desarrollo en cuanto medio y en cuanto fin en sí mismo. Argumenta que el derecho al desarrollo tiene una dimensión instrumental y otra substantiva como otros derechos (él pone el ejemplo del valor instrumental del derecho a la salud respecto al derecho a la educación teniendo a su vez el derecho a la salud un valor substantivo, en sí mismo).

La definición del contenido del derecho al desarrollo aportada por Sengupta nos ayudará enormemente, gracias a la delimitación de sus contornos, y será de gran importancia para poder ponerlo en relación con el derecho de autodeterminación.

Sin embargo, hemos de notar que la definición de Sengupta se refiere solamente a un proceso de desarrollo en abstracto y no entra a considerar a qué grupo se aplica o ha de aplicarse. Tampoco considera la interacción entre los distintos resultados de la aplicación de su definición a distintos grupos o conjuntos (pueblos). La definición de Sengupta,

¹²⁵ Gros Espiell, H., “El derecho al desarrollo...”, op. cit., p. 52.

¹²⁶ Comenta Sengupta que los R_i podrían representarse más precisamente R_{ijt} cuando hay “ n ” derechos, $i=1, 2, \dots, n$, para “ m ” número de individuos, $j=1, 2, \dots, m$, en un período T ($t=1, 2, \dots T$). Así, R_{ijt} representaría un indicador agregado para todos los individuos $j=1, 2, \dots, m$, abstrayendo los problemas de la agregación. Para Sengupta, una asunción sería que R_i es la suma de los derechos, i para todos los individuos, j . El incremento en la realización de derechos, en un período T , sería dR_{it} ($t=1, 2, \dots T$).

Quitar el subíndice t usando dR_i como el indicador de la mejora del derecho, significaría que dR_i es la tasa media de incremento de R_i en un periodo determinado.

extremadamente útil como punto de partida, no da una respuesta a la relación entre distintos vectores cuando se concretan al aplicarse a unidades políticas o grupos predefinidos. Esto es evidente al reflexionar sobre la interacción entre derecho al desarrollo y derecho de autodeterminación, que por su misma definición –auto- “crea”, en cualquiera de sus muy diferentes definiciones, unos “otros”. Sin embargo, a su favor, nos proporciona un utilísimo límite lógico en su abstracta universalidad: en cualquier aplicación de la definición de derecho al desarrollo a grupos concretos se tiene que respetar $d(W_R) \geq 0$.

Sin pretender adelantarnos demasiado, para no causar confusión, vemos a primera vista que cuando la Declaración de 1986 establece (art.1.) que el derecho al desarrollo *implica* el derecho a la autodeterminación, esta implicación puede significar cosas distintas dependiendo de la definición y contenido que demos al derecho de autodeterminación.

Por ejemplo, podríamos entender que siendo dR_A el incremento de la vertiente interna del derecho de autodeterminación *interna* o *continuada*, $D_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, dR_A \dots dR_n, g^*)$. Entonces, de manera que aunque el derecho al desarrollo implique el derecho de autodeterminación, $d(D_R) \Rightarrow d(R_A)$, al contrario se puede argumentar $dR_A \not\Rightarrow d(D_R)$, necesariamente, teniendo en cuenta por ejemplo el caso de $g^* \leq 0$.

Alternativamente, tal vez, en otra interpretación del derecho de autodeterminación *constitutiva* (no necesariamente *externa*), primero tenemos que establecer un grupo o conjunto de personas, es decir, un *pueblo* concreto, P, al que aplicaremos la definición de Sengupta. Esto significa, primero establecemos políticamente el grupo P (a través de la reificación de un ideal imaginario o político más allá del ámbito de nuestras pesquisas) y luego estudiamos dR_i en un espacio temporal (medio) t. Es decir, la realización del derecho de autodeterminación sería la aplicación de los parámetros definidos por Sengupta al conjunto P, o la definición misma de P como pueblo relevante al que aplicar D_R , momento a partir del cual podemos referirnos a $D_R(P)$. A su vez si este acto constitutivo es conectado con la autodeterminación interna o externa (es decir, si nos referimos a la creación de unidades estatales o infraestatales) los contenidos esperados de los elementos de $D_R(P)$ pueden variar.

Por último, tal vez sea posible, como argumentaremos, incorporar las distintas definiciones de autodeterminación al esquema de Sengupta y, a partir de ahí, reflexionar sobre las implicaciones de una relación entre desarrollo y autodeterminación así definida.

Abordaremos estas cuestiones, a las que Sengupta no da respuesta, en su apartado correspondiente, por ser necesario primero analizar cuidadosamente el contenido y definición o definiciones del derecho de autodeterminación y por ser aquellas objeto principal de nuestra disertación.

§2.3.2 Sujetos titulares del derecho al desarrollo

En los debates en torno a la formulación del derecho humano al desarrollo, ha ocupado

un lugar preeminente aquél acerca de la titularidad del mismo, esto es, si había de incluirse entre los derechos colectivos o entre los derechos individuales. Como hemos visto anteriormente, la discusión de la existencia misma de derechos colectivos como categoría, por aquellos quienes defendían la exclusiva titularidad individual de los derechos humanos, afectó directamente a los debates en torno a la validez del derecho humano al desarrollo. Para algunos autores, en contraste con los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el derecho al desarrollo pesa una “confusión o diferencia de opinión sobre la cuestión de los sujetos de derechos y obligaciones”¹²⁷. A día de hoy es aceptado por la mayoría de la doctrina que los sujetos beneficiarios del derecho al desarrollo así como los sujetos de las obligaciones derivadas son en realidad múltiples. Esta postura doctrinal está además sostenida por el mismo texto de la Declaración de 1986, que proclama que “todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político” (art.1.1), y que “la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo” (art.2.1).

Esto no quiere decir que el texto de la Declaración sea clarísimo en este punto. El preámbulo también recoge paralelamente ambos conceptos (multiplicidad de sujetos titulares y centralidad del individuo como sujeto del desarrollo) de manera que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones” (párrafo ¶16 del Preámbulo) reconociendo también que “la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del desarrollo” (párrafo ¶13 del Preámbulo). Respecto a la primera idea, vemos que si en el preámbulo se utiliza el término “nación”, en el articulado se opta por “pueblo”, si bien no se define ni uno ni otro. Los estados, como vemos, no son sujetos titulares del derecho al desarrollo, pero sí tienen el deber de hacerlo cumplir.

Sobre la *multiplicidad de sujetos titulares*, hay quien lo ha visto como un problema. Kenig Witkowska considera que la “multifacética y heterogénea definición de los sujetos del derecho al desarrollo no es lo bastante clara y puede poner en peligro su implementación”¹²⁸. Sin embargo, la doctrina mayoritaria lo ha considerado positivo, ya que ayuda a una percepción comprensiva del derecho al desarrollo. No importa tanto la definición de pueblo, ya de por sí controvertida en Derecho Internacional, como que todos tienen derecho a su desarrollo. Los estados como sostén político y jurídico de pueblos y estados reclaman y hacen valer ese derecho. No existe estado que no contenga un pueblo o nación, puede contar cuantos sea, todos habrán de tenerlo. Además, los individuos, en cuanto ciudadanos de un estado, en cuanto miembros de un pueblo, pero también en su universal dimensión humana, tienen derecho a su desarrollo y a participar

¹²⁷ Buitengeweg, R., “The Right to Development as a Human Right?”, *Peace and Change*, n. 4, 1993, pp. 414 – 431.

¹²⁸ Kenig-Witkowska, M.M., “The UN Declaration on the right to development in the light of its travaux préparatoires” en De Waart, Paul Peters, (ed.) *International Law and Development*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 381 y ss.

de procesos de desarrollo (no podemos uno sin lo otro), si bien, dice Bedjaoui, “el derecho al desarrollo puede ser un derecho del ser humano como individuo sólo si es, en primer lugar, un derecho del pueblo o del Estado”¹²⁹. Así podemos distinguir dos dimensiones del derecho al desarrollo, una internacional y otra nacional¹³⁰. En su dimensión nacional, los ciudadanos reclaman a su estado que se cumplan las condiciones de desarrollo. En su dimensión internacional, ya hemos comentado que hay quien sostiene, como Ezquiaga Ganuzas, que solo los pueblos subdesarrollados pueden reclamar el derecho al desarrollo, pero disintimos de esta posición: todos los pueblos tienen tal derecho, también los desarrollados, y la modulación de los derechos de todos ha de hacerse según criterios de justicia. Coincidimos con él en que no es posible concebir el derecho al desarrollo en su mera dimensión individual.

El derecho al desarrollo pone, por tanto, al individuo en relación con su entorno. No es un derecho individual pero tampoco solamente colectivo. Se ha considerado así un derecho de tercera generación o un derecho de solidaridad¹³¹. Vale la pena destacar que la bidimensionalidad colectiva/ individual de los titulares del derecho al desarrollo es una característica que encontraremos también en el derecho a la autodeterminación, aunque con matices. La multiplicidad de titulares del derecho al desarrollo, a pesar de que así se planteara desde un punto de vista para satisfacer todas las tendencias y fácticamente sacar la Declaración adelante, tiene consecuencias ineludibles.

En primer lugar, el derecho al desarrollo del colectivo es el de todas sus partes, por lo que no podemos hablar de un desarrollo global si sus partes son ilegítimamente afectadas. Este discurso, hace perfectamente compatible el derecho al desarrollo con el lenguaje de la DUDH. De paso, el valor de cada individuo se pone de relevancia frente a posiciones morales en extremo utilitaristas.

En segundo lugar, hemos de considerar que los pueblos en cuanto comunidades culturales rara vez tienen sus contornos perfectamente definidos en realidad. Para los miembros de un pueblo que se adscriben a tal comunidad imaginada, ésta tiene una identidad perfectamente definida. Pero la realidad humana es más compleja así como las identidades de los individuos. En los contornos imaginarios de los pueblos viven personas que pueden considerarse parcialmente miembros de un pueblo, grupo étnico o comunidad, miembros de varios, o de ninguno en absoluto (recordemos, como dice Anderson, que es solo el ideal nacionalista el que considera que todas las personas deben tener por fuerza una nación a la que adscribirse). La multiplicidad de la titularidad del derecho al desarrollo permite, en nuestra opinión, salvar esta cuestión, al hacer universal el derecho a desarrollarse, independientemente de a qué grupo se adscriban las personas y quién tenga el deber de realizarlo.

Con estas reflexiones está relacionado el segundo concepto: la centralidad del individuo como sujeto principal del desarrollo. La Declaración subraya que no es el colectivo -el

¹²⁹ Bedjaoui, M., “The Right to Development”, op. cit., p. 1179.

¹³⁰ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo como derecho humano...*, op. cit., p. 151

¹³¹ Udombana, N.J., “The Third World and the Right to Development: Agenda for the Next Millennium”, *Human Rights Quarterly*, n.22, 2000, pp. 753-787.

estado, la nación, el pueblo-, sino el individuo el sujeto principal del derecho al desarrollo. El artículo 2.1, hemos visto, establece que “la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”, si bien se reconoce que solo en comunidad esta afirmación tiene sentido; establece el artículo 2.2 que “todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano”.

La consideración de la persona humana como sujeto central de desarrollo pudiera parecer una redundancia si ya se ha establecido la multiplicidad de titulares del derecho al desarrollo pero en realidad se constituye como un refuerzo para desechar posiciones extremadamente utilitaristas, aquellas que sostienen que el desarrollo de la mayoría de una comunidad puede llevarse a cabo a costa del desarrollo y los derechos de una minoría. La mera referencia al derecho de los pueblos y de los individuos en cuanto pertenecientes a esos pueblos no garantizaba suficientemente que los estados no arguyeran un derecho al desarrollo para al mismo tiempo negar a sus ciudadanos otros derechos humanos, o para aspirar a un desarrollo económico que dejara aparcada la realización de otros derechos hasta un futuro indeterminado.

La referencia explícita a la centralidad de la persona humana como sujeto del desarrollo tuvo una fuerte motivación política. En una entrevista que sostuve con el profesor Vojin Dimitrijević, quien estuvo en estrecho contacto con miembros de la delegación yugoslava en las Naciones Unidas que participó en la redacción de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986¹³², me confirmó la intencionalidad de que el texto evitara asimismo una interpretación del concepto de “desarrollo” que beneficiara a élites y regímenes totalitarios sin la más mínima intención de trasladar a su pueblo los beneficios del desarrollo económico o de los recursos naturales a los que se refiere la Declaración como medios para el fin del desarrollo. Pensemos en este punto, por ejemplo, en la solicitud de un régimen totalitario de eliminar un obstáculo internacional a su comercio internacional en el nombre del derecho al desarrollo; podría solicitar una medida así en nombre del principio de igualdad de estados, pero tendría dificultades para invocar el derecho al desarrollo. Si es claro que el beneficiario de la medida comercial son solamente las élites gobernantes de un estado sin alcanzar los sujetos individuales, no podemos decir que la medida ha sido tomada para cumplir con el derecho al desarrollo.

Los estados no son considerados beneficiarios directos del derecho al desarrollo, pero se entiende que tienen derecho a poder cumplir con su deber de realizar el derecho al desarrollo, como mejor consideren. En este sentido, el artículo 2.3 de la Declaración establece que “los Estados tienen el *derecho* y el deber *de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera* y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y

¹³² Entrevista realizada personalmente a Vojin Dimitrijević en la sede del Centro Belgradense de Derechos Humanos, *Beogradski Centar za Ljudska Prava*, Belgrado, 21 de julio de 2011.

significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”. Recoge así el articulado la vertiente negativa del derecho al desarrollo vinculada con el derecho de autodeterminación.

La adecuada concepción de la multiplicidad de titulares beneficiarios del derecho al desarrollo, así como, de la centralidad del individuo como sujeto del desarrollo, será de máxima importancia para poner en relación el derecho al desarrollo con el derecho de autodeterminación.

§2.3.3 Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho al desarrollo

La realización del derecho al desarrollo requiere satisfacer el deber de su cumplimiento. Como veremos, la Declaración de 1986, a pesar de la ambigüedad en su redacción, atribuida habitualmente a su carácter de documento negociado para la consecución del más amplio consenso para su aprobación, es clara al establecer quiénes son los sujetos obligados a cumplir con el derecho al desarrollo, y aunque no define exactamente en qué consisten los deberes, establece inequívocamente que éstos *existen*.

El artículo 2.2 de la Declaración establece genéricamente que “todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la *responsabilidad* del desarrollo, (...) y, (...) *deben* promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo”.

La universalidad del deber así planteado no plantea más problema que cualquier deber imperfecto para consigo del conjunto de los seres humanos como uno, pero no es posible extraer de esta aserción una mayor conclusión que la universalidad del desarrollo como fin humano. Por ello, es el artículo 3 de la Declaración el que establece los principales sujetos pasivos del derecho al desarrollo:

“Artículo 3. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.”

No podría ser de otra manera teniendo en cuenta el orden internacional post-westfaliano vigente. Los estados son, aún hoy, la principal unidad de distribución de recursos y derechos. En general, como diría Donnelly, “tenemos un sistema nacional de implementación de los derechos humanos internacionales”¹³³. A nivel nacional son los estados soberanos los que tienen la responsabilidad de establecer políticas y distribuir recursos y derechos entre sus ciudadanos. A nivel internacional, son los estados las unidades principales componentes de la sociedad internacional; las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo realizan su labor gracias a las aportaciones de los estados.

La Declaración es cuidadosa al no establecer el deber de los estados de alcanzar el desarrollo, sino de crear condiciones favorables, ya que éste, sin ser un mero ideal de la imaginación, sí se plantea como un proceso de final indefinido. Las “condiciones favorables” no pertenecen a una lista cerrada y perfecta, pues es difícil saber *todo* lo

¹³³ Donnelly, J., *International Human Rights*, Westview Press, Colorado, 2007, p. 28

necesario para incrementar los niveles de desarrollo. Sin embargo, la Declaración sí que refiere a algunas de estas “condiciones favorables”, condiciones en torno a las cuales se ha logrado un consenso y cuyo cumplimiento bien sirve a la realización del contenido del derecho al desarrollo que hemos analizado anteriormente.

A nivel interno, (art.2.3) “los Estados tienen [...] el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera [...]”, entendiéndose naturalmente con pleno respeto a su soberanía. A nivel internacional las “condiciones favorables” para la realización del derecho al desarrollo exigen (art.3.2) “el pleno respeto de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados”, dado que éstos (art. 3.3) “tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo”. En el mismo sentido (art. 3.3 ¶ 2) “los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común (...) y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos”.

Asimismo, los Estados (art.4.1) “tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional”, requiriéndose para ello (art.4.2) “una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo”, la cual adquiere la forma, a nivel internacional, de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo. La Declaración (art.4.2 ¶2) considera la cooperación internacional para el desarrollo específicamente: “Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global”.

De igual manera, el artículo 7 recuerda que “todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz”, una alusión a la clarísima relación entre desarrollo y paz. Si para algunos autores la paz forma parte del contenido, para otros bien pudiera ser una *conditio sine qua non* para el desarrollo. En cualquier caso, en una concepción de la paz como algo más que la ausencia de guerra, esto es una paz concebida como la garantía de un entorno estable y seguro en el que los derechos humanos puedan ser realizados (una paz activa) la vinculación entre desarrollo y paz es evidente. Llama la atención, sin embargo, la confusa redacción del segundo párrafo (art. 7¶ 2) en el que la Declaración de 1986 pretende “lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo”, que debe ser entendido como una recomendación general, pues a ningún otro destino pueden ser dedicados los recursos liberados de manera compatible con el desarrollo, ya que los recursos que no se destinan a fines bélicos pueden destinarse de manera legítima al desarrollo (propio y tal vez ajeno); no puede entenderse como una medida directa que afecte a rubros exactos e interfiera con la soberanía (y el derecho de libre determinación) de las naciones. Y es que a nivel nacional, los Estados son requeridos a respetar los derechos humanos y establecer órdenes justos, requerimiento perfectamente compatible

con su soberanía. En este sentido, recoge el artículo 8.1 : “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos [...]” recomendando y alentando asimismo (art.8.2) “la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos”.

Es explícita la referencia al respeto de los derechos humanos, incluyendo superar “la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación” para lograr la realización del derecho al desarrollo (art.5): “los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos [...]”.

Por último, se establecen dos deberes generales para el fomento y la progresiva realización del derecho al desarrollo. La primera es una negativa, referida a eliminar obstáculos para el desarrollo (art.6.3): “los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales”. Vemos así más claramente la relación directa entre el cumplimiento de todos los derechos humanos y el desarrollo. La segunda es general, casi redundante y conclusiva, refiriéndose a la obligación general de actuar positivamente por el derecho al desarrollo (art.10): “deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional”.

A nadie escapa el lenguaje de grandes intenciones y pocas medidas prácticas contenido en la Declaración. Para algunos autores como Ibrahim Salama o Arjun Sengupta la causa es esencialmente política, sacar un documento negociado, un acuerdo de mínimos adelante con el mayor consenso posible. La falta de medidas concretas sirvió para alimentar la así llamada, “crítica de la coherencia” consistente en preguntarse si podemos formular coherentemente derechos sin especificar de manera *concreta* obligaciones y obligados. Sengupta, Marks y otros siguiendo a Amartya Sen, recurren a la distinción de Immanuel Kant entre “obligaciones perfectas” y “obligaciones imperfectas”¹³⁴, como hemos comentado en la fundamentación moral del derecho al desarrollo. La realización del derecho al desarrollo es responsabilidad de los estados pero también de cualquiera que pueda ayudar a alcanzar sus fines. Los derechos formulados de esta manera, como dice Sen, podrán quedar insatisfechos pero aún así nos es seguramente posible “distinguir entre un derecho que una persona tiene pero que no ha sido satisfecho y el derecho que una persona no tiene”¹³⁵. Este argumento nos permite asegurar que el derecho existe sin identificar la obligación o el obligado concreto. El deber de los Estados

¹³⁴ Sen, A., *Development as Freedom*, op. cit., pp. 230-231.

Ver también Gready, P., Ensor, J., (eds.), *Reinventing Development? Translating Rights-based Approaches from Theory to Practice*, Zed Books, Londres, 2005, pp. 12 y ss.

¹³⁵ Sen, A., *Development as Freedom* Oxford University Press, 1999, p. 231.

de realizar el derecho al desarrollo se entendió evidente porque, como hemos comentado, tenemos un sistema esencialmente nacional de implementación de los derechos humanos internacionales¹³⁶.

La falta de concreción ha provocado que la mayoría de la literatura referente al derecho al desarrollo se haya concentrado en cómo concretar esos deberes o como eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo. Autores como Stephen Marks, por ejemplo, han tratado de sistematizar también los obstáculos a la realización del derecho al desarrollo. Concretamente, Marks ha identificado: obstáculos políticos, obstáculos de ignorancia y falta de práctica en el ejercicio del derecho al desarrollo¹³⁷.

La adecuada definición del desarrollo, cuestión que hemos tratado en apartado anterior, ha facilitado enormemente la comprensión de la naturaleza de los deberes derivados del derecho al desarrollo: así los deberes de realización del derecho al desarrollo no son otros que los deberes de realizar todos los derechos humanos incrementando un crecimiento económico consistente con esos derechos en cualquier sociedad, nacional e internacional, de manera que recursos y derechos sean distribuidos de acuerdo a criterios de justicia.

Hoy en día, teniendo en cuenta el orden internacional existente, los deberes derivados del derecho al desarrollo son perfectibles a nivel nacional, como sucede con los derechos humanos que a nivel nacional son considerados fundamentales. A nivel nacional, huelga decir que no hay países que no deseen crecer económicamente -ese otro componente del desarrollo-, aunque sea debatible el cómo se redistribuyan los beneficios del crecimiento y sus recursos a nivel interno, modo que ha de ser de justicia y consistente con los demás derechos humanos si ha de respetarse el derecho al desarrollo.

A nivel internacional, la cuestión es diferente. Hemos hecho antes una distinción entre la vertiente negativa del derecho al desarrollo, fuertemente vinculada a la libre determinación, y otra, a la vertiente positiva, en la que la cuestión problemática gira en torno al deber de ayudar a terceros. *Solamente aquí reside la imperfectibilidad*. Los deberes derivados del derecho al desarrollo existen, pero son, hoy por hoy, imperfectos, como analizaremos con detalle cuando veamos la validez jurídica del derecho al desarrollo, ya que no se han establecidos mecanismos obligatorios de distribución de recursos a nivel internacional.

Pudiendo parecer desalentador, la mera aceptación de la existencia de deberes imperfectos para con otros a nivel internacional, supone un avance en el sentido de que impide, en teoría, una concepción global de la sociedad internacional en la que sea legítimo que un país impida activamente, aunque no por inacción, el desarrollo de otro para defender intereses propios. La obligación genérica de cooperar para el desarrollo de todos puede, en su extremo mínimo, que unos países apenas aporten para el desarrollo de

¹³⁶ Donnelly, J., *International Human Rights*, Westview Press, Colorado, 2007, p.28

¹³⁷ Marks, S.P., *Obstacles to the Right to Development*, Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University, 2003.

Puede encontrarse online en: http://www.harvardfxbcenter.org/resources/working-papers/FXBC_WP17--Marks.pdf

© Isidro García Mingo

otros, pero no que pretendan afectar negativamente el desarrollo de ninguno. Esta delgada línea roja, pudiendo parecer obvia, no era concebible a nivel internacional no hace demasiado tiempo.

Siendo los deberes de ayudar a otros imperfectos, hemos de desechar discursos excesivamente optimistas respecto a una más justa distribución de recursos mientras continúe el mismo orden mundial de imperfecta redistribución. De ahí el llamamiento de la Declaración al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Sin embargo, hemos de desechar también aquellos discursos tremendistas que, asociando el derecho al desarrollo sólo a la consecución de un orden económico internacionalmente igualitario, ven en la evidente desigualdad global la absoluta vulneración del derecho al desarrollo. Siendo el derecho al desarrollo un derecho de realización progresiva, lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar niveles de desarrollo aceptables. Pero también, por esa misma progresividad no podemos decir que los deberes no puedan ser cumplidos o no hayan sido cumplidos en absoluto en el sistema actual.

Por otro lado, los debates en torno a si el derecho al desarrollo es un principio de desarrollo internacional se originaron precisamente por la reducción del debate del derecho al desarrollo a los deberes de ayudar a terceros, asimilando la imperfecta obligatoriedad de estos deberes a la negación del desarrollo como principio (en cuanto que los principios internacionales son obligatorios para todos los miembros de la comunidad internacional). El malentendido es fácilmente superable si consideramos que puede ser principio, por el momento, que los deberes son imperfectos pero que existen y distinguiendo, como hemos hecho hasta ahora, los distintos escenarios, a nivel nacional y a nivel internacional: todo estado tiene entre sus fines incrementar el nivel de bienestar del pueblo o pueblos a los que se debe jurídicamente, a desarrollarse, y esto solo puede darse trasladando al ciudadano los beneficios del crecimiento económico, alentando la participación popular (art.8.2 de la Declaración) y garantizando sus derechos fundamentales. Que los pueblos y ciudadanos quieran incrementar su bienestar está impreso en la naturaleza humana, tanto como su capacidad de querer ayudar a otros a cumplir sus fines o su ancestral capacidad para preferir su desarrollo, llegado el extremo, a costa del desarrollo de los demás. A nivel internacional, los estados proyectan ese deber de desarrollo para consigo protegiendo sus intereses. El respeto al desarrollo de cada pueblo, la vertiente negativa del derecho al desarrollo, en su relación con el respeto a la igualdad y soberanía de los pueblos, puede considerarse también un principio plenamente aceptado a nivel internacional, aunque sean debatibles los límites y formas. También podemos considerar un principio la cooperación internacional para el bien común. Sin ánimo de querer ser redundante, que la vertiente positiva sea imperfecta no significa que no exista.

Por ello, mientras el desarrollo puede considerarse un principio universal al que tienden los pueblos y el derecho al desarrollo, el inalienable derecho a alcanzar tal fin y a los medios necesarios para ello, como dijera Mohammed Bedjaoui, que nadie impida ilegítimamente tal fin es parte del principio, si bien la actual arquitectura mundial no permite concebir la cooperación para el desarrollo más allá de la voluntariedad de los estados soberanos que han de sopesar sus propios intereses con sus obligaciones

internacionales.

Los deberes imperfectos de ayudar a terceros para alcanzar sus fines de desarrollo que originan la amplitud de términos y vaguedad de la Declaración puede concretarse como deberes perfectos, llamémosles obligaciones, a través de tratados específicos como sugiere Stephen Marks. Si existe un deber general de remover los obstáculos al desarrollo como se contiene en la Declaración, por ejemplo, ese deber imperfecto en cuanto que no se especifica el obstáculo concreto o el estado que debe actuar, se concreta, perfecciona, se hace obligación a través de tratados específicos -supongamos un acuerdo de cooperación en un sector determinado entre dos países concretos-.

La voluntariedad ha marcado la cooperación internacional para el desarrollo recogida entre los deberes (en el mencionado art.4.2 de la Declaración), un deber meritorio que se perfecciona a través de acuerdos específicos con los estados, cuando éstos permiten a organizaciones internacionales y terceros estados, a través de la cooperación bilateral o multilateral, a actuar en el ámbito de su soberanía nacional. Respecto a esta cuestión, del mismo modo que cada estado es libre de elegir el sistema sociopolítico más apropiado para su desarrollo, podemos reflexionar hasta qué punto es legítima la condicionalidad en la ayuda al otro. La cuestión no ha causado sin embargo tantos problemas teóricos como prácticos. Tanto la doctrina mayoritaria, como la comunidad y normativa internacional, siempre han sido muy favorables a permitir explorar el desarrollo en muy variados sistemas sociopolíticos -muy acorde con el sistema westfaliano existente en la sociedad internacional - intentando limitar la injerencia exterior.

Ya desde la Conferencia de Belgrado en 1961 hasta la Declaración de París, y de manera compartida por todos los actores de desarrollo y doctrina, se ha considerado que incluso cuando un estado solicita y acepta cooperación exterior para su desarrollo, *es el estado beneficiario el que debe liderar las estrategias de desarrollo*, lo que incluye la coordinación de asistencia exterior con políticas nacionales en el ejercicio de su soberanía. La cuestión ha causado, por supuesto, roces diplomáticos cotidianos, en los que los intereses políticos de unos estados intentan promover determinados sistemas de desarrollo a otros estados, aunque generalmente, con mayor o menor grado de éxito, sí se ha procurado promover el liderazgo del país receptor y la coordinación de coordinación de donantes y gobiernos.

Ahora bien, ha de conjugarse el liderazgo del país receptor con la voluntad de los estados donados, que no habrán de proporcionar recursos para fines que no consideren de acuerdo a los criterios generales de desarrollo. De ahí que la OCDE no contabilice como ayuda al desarrollo acuerdos que no tengan que ver con el crecimiento económico y la defensa de los derechos humanos, como es el caso del desarrollo armamentístico, por ejemplo.

Una vez acordados los criterios de cooperación, ámbitos, sectores, tiempos y cantidades alocadas para los programas y proyectos de cooperación entre el/los estado/s donantes así como organizaciones internacionales y aquellos receptores de ayuda, es decir, una vez concretadas y aceptadas las condiciones, los deberes imperfectos se perfeccionan y no cabe duda de que ambas partes han de cumplir con un tratado de plena validez jurídica

según el Derecho Internacional. Estos acuerdos pueden contener ayudas directas presupuestarias globales, sectoriales, proyectos y programas bilaterales, créditos bajo determinadas condiciones o simplemente el permiso para que las organizaciones no gubernamentales puedan operar en el país receptor respetando los criterios estratégicos de desarrollo del Estado y, naturalmente, la legislación local.

El perfeccionamiento de los deberes para con el otro derivados del derecho al desarrollo es, por tanto, gradual, sectorial y sujeto a la voluntariedad soberana de las naciones.

El problema que hemos de plantearnos en este punto es, precisamente, si es posible *imperfecionar* obligaciones perfectas como las que existen dentro de los estados y, en caso afirmativo, cómo hacerlo sin vulnerar el derecho al desarrollo.

§2.4 Validez jurídica del derecho al desarrollo

Una vez analizado el fundamento del derecho al desarrollo, en su plano de validez ideal, normativo-filosófica y axiológica, así como su definición y contenido, procede estudiar, conforme a la perspectiva tridimensional que nos habíamos propuesto, su validez lógico-formal o jurídica, esto es la validez en sentido estricto del derecho al desarrollo¹³⁸.

Hemos avanzado al comienzo de nuestra disertación la relación de las fuentes normativas del derecho al desarrollo, que algunos autores rastrean hasta la misma Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales. Sin embargo, es ampliamente convenido que la fuente principal del derecho al desarrollo es la Convención del derecho al desarrollo de 1986 y la Proclamación de Viena de 1993, si bien el único instrumento convencional, tratado internacional, que lo ha reconocido expresamente es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida como la Carta de Banjul de 1981.

La validez jurídica del derecho al desarrollo ha sido objeto de controversia a distintos niveles, pero trataremos aquí sólo el valor normativo que la delimita. Hemos creído conveniente analizar primero, como hemos hecho, la definición y contenido del derecho, pues afecta a la validez normativa, dada la importancia del derecho consuetudinario en el Derecho Internacional. Por ejemplo, una concepción del derecho al desarrollo que se enfoque únicamente en los deberes de la vertiente positiva del derecho al desarrollo para construir un mundo de rentas más iguales, a través de transferencias o redistribución más o menos obligatoria de recursos a nivel global, está mucho más alejada de constituirse como norma válida de Derecho Internacional por vía consuetudinaria que una concepción del derecho al desarrollo como fin de todos los pueblos y derecho a los recursos naturales (medios) para alcanzarlo en un entorno de cooperación internacional y paz global. Considerar que los derechos humanos son parte constitutiva del contenido del derecho al desarrollo, y que la violación de los mismos, sí son protegidos por vía convencional en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos les otorga fuerza normativa, deriva de

¹³⁸ Siguiendo el enfoque explicado en Falcón y Tella, M.J., *Concepto y fundamento de la validez del Derecho*, Editorial Civitas, Madrid, 1994, pp. 29-30.

los mismos de una manera, si queremos, secundaria.

Entre nosotros, el profesor Gómez Isa ha estudiado pormenorizadamente las vías de consagración jurídica del derecho al desarrollo¹³⁹. Distingue cuatro vías propuestas para dicha consagración:

- i) Vía inducción, mediante una interpretación sistemática de los derechos humanos ya reconocidos.
- ii) Vía consuetudinaria, analizando el valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (dado que la Declaración de 1986 es un documento de esta naturaleza) y la práctica de los Estados en este ámbito.
- iii) Vía Principios Generales de Derecho Internacional y
- iv) Vía convencional, considerando que el único instrumento convencional en el que el derecho al desarrollo ha sido reconocido expresamente es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

La vía inductiva (i) es sostenida por autores y estados que consideran que el derecho al desarrollo ya forma parte del Derecho Internacional positivo, siendo posible inducirlo del conjunto de instrumentos jurídicos internacionales ya aprobados, por nosotros repasados en las fuentes del derecho al desarrollo. Esta opción es favorecida por aquellos autores que consideran el derecho al desarrollo un derecho síntesis de los derechos humanos preexistentes. La vía inductiva es apoyada por distintos autores, que enfocan la cuestión de distinta manera. Unos, como el propio Keba M'Baye, consideran que el derecho al desarrollo, propuesto por él mismo, era preexistente a los textos que lo reconocen explícitamente. Como él mismo admitió, solamente le dio nombre al desarrollo. En sus palabras, “sería un derecho descubierto”¹⁴⁰. Autores como Chueca Sancho consideran la positivación como un fenómeno plenamente consolidado¹⁴¹ mientras que para otros, como Daniel Oliva, estaría en estado imperfecto e embrionario pero ya existente.

Entre las opiniones vertidas por los estados en esta línea, resaltamos, por su importancia con el conjunto de la tesis, la opinión de Yugoslavia respecto a la Declaración de 1986, expresada por su representante Zagorka Ilić: “la Declaración sobre el derecho al desarrollo emana de derechos ya previstos en varios documentos”¹⁴².

Si un buen número de autores hablan de una síntesis de derechos humanos, otros destacan el derecho a la vida como fuente o, como bien recoge Gómez Isa, el derecho de autodeterminación. En este sentido, durante las deliberaciones de la Declaración de 1986, los representantes de algunos estados, como Ecuador, China o Pakistán¹⁴³, consideraron el derecho al desarrollo como una consecuencia lógica del derecho de los pueblos a la

¹³⁹ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 76 y ss.

¹⁴⁰ M'Baye, K., “Le Droit au développement comme un droit de l’homme”, *Revue des droits de l’homme*, 1972, pp. 503-534.

¹⁴¹ Chueca Sancho, A. G., “El derecho al desarrollo en el ámbito internacional”, en Pignatelli (Ed): *Desarrollo, Maldesarrollo y Cooperación al Desarrollo*, Seminario de Investigación para la Paz-Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1997, pp. 30 y ss.

¹⁴² A/C.3/41/SR.37, p. 3

¹⁴³ A/C.3/41/SR.37

libre determinación, opinión que suscribirían, con matices, como hemos mencionado con anterioridad, autores como el profesor Ezquiaga Ganuzas.

Si bien los documentos internacionales en los que se basa el derecho al desarrollo son de diversa naturaleza jurídica (declaraciones o proclamaciones, tratados...) la consideración del derecho al desarrollo como un derecho síntesis de derechos humanos reconocidos en documentos convencionales de fuerza vinculante como los Pactos Internacionales (a diferencia de la DUDH, por ejemplo) permite extraer validez jurídica de los derechos humanos singularmente en estos documentos reconocidos, de manera que si son vinculantes las partes pudiera considerarse vinculante el conjunto.

La vía consuetudinaria (II) explora este modo de positivación del derecho internacional. Recordemos que la costumbre sigue siendo una de las fuentes principales del derecho internacional. Para que la costumbre se considere vinculante, ésta ha de tener un contenido jurídico, ha de gozar de una aceptación general de la comunidad internacional, así sea tácita, de una práctica frecuente y uniforme en un período de tiempo, y ha de gozar de una *opinio juris*, es decir, que la repetición de la práctica debe realizarse bajo la convicción de hallarse ante una obligación jurídica, una conciencia de obligatoriedad que no existe en la mera reiteración de acciones¹⁴⁴. Para Gómez Isa, dado que el principal documento que contempla el derecho al desarrollo, la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, es precisamente una declaración emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas y no tiene la fuerza vinculante de un tratado internacional, cabe preguntarse si esta declaración, cuyo contenido ha sido reiterado en otros documentos internacionales, ha pasado a formar parte del Derecho Internacional consuetudinario. Para ello analiza: a) la intención de enunciar principios jurídicos, b) el grado de consenso alcanzado, c) el grado de precisión de la Declaración, d) los mecanismos de implementación previstos, e) la reiteración en otras resoluciones y declaraciones posteriores y f) la práctica posterior de los Estados.

Respecto al contenido jurídico y a la intención de enunciar principios jurídicos, Gómez Isa concluye que el lenguaje de “la Declaración sobre el derecho al desarrollo muestra una clara intención de enunciar principios jurídicos”¹⁴⁵. El consenso alcanzado para la aprobación fue casi unánime, con un único voto negativo de los Estados Unidos y cinco abstenciones -como hemos detallado, las de Dinamarca, Finlandia, la República Federal de Alemania, Islandia, Israel, Japón, Suecia y Gran Bretaña-. Para autores como Arjun Sengupta, la abrumadora mayoría en torno al consenso es un argumento de gran peso para admitir el derecho al desarrollo como un derecho humano reconocido, si bien Gómez Isa hace notar que deberíamos admitir que “sin el beneplácito de los países desarrollados el derecho humano al desarrollo permanecerá en el terreno de las declaraciones programáticas, sin entrar en el mundo de lo jurídico”¹⁴⁶. La Declaración, es, sin embargo, como recordaba Ibrahim Salama, imprecisa, en su contenido y, especialmente falta de instrumentos o mecanismos concretos para su implementación. Si

¹⁴⁴Ver, por ejemplo, Carrillo Salcedo, J.A., *Curso de Derecho Internacional Público*, ed. Tecnos, Madrid, 1991, pp. 85-102

¹⁴⁵Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 98.

¹⁴⁶Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 102.

para Ibrahim Salama, esto no es un problema, para Gómez Isa es uno de los defectos más preocupantes de la Declaración, ya que haciéndose eco de la opinión de la profesora Victoria Abellán¹⁴⁷, el grado de obligatoriedad de una norma jurídica puede depender más de su contenido y del carácter institucional que garantice su aplicación que del instrumento en el que se formalice.

Para Danilo Türk, en realidad, “la importancia de la Declaración sobre el derecho al desarrollo reside en el hecho de que hace el debate sobre el desarrollo y la cooperación internacional y económica un tema legítimo en el contexto de los derechos humanos”¹⁴⁸. Desde este punto de vista, se podría argumentar, la Declaración de 1986 pone de relieve la sumisión de los elementos económicos al marco de los derechos humanos. Por todo ello, Gómez Isa considera que “podríamos establecer que, en relación con la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, existe una *opinio iuris* en *statu nascendi*, es decir, los Estados, aun con serias reservas y opiniones divergentes por parte de los países desarrollados, son cada vez más conscientes de que está emergiendo un derecho humano al desarrollo como norma de Derecho Internacional consuetudinario”.

Además de la *opinio iuris*, examina Gómez Isa la reiteración en declaraciones y otros documentos internacionales posteriores, reiteración que, como hemos visto en el apartado de las fuentes al comienzo de nuestra disquisición, se ha recogido ampliamente en la Declaración de la Conferencia de derechos humanos de Viena en 1993, en la Declaración de Río de 1992 o la de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, entre otros documentos internacionales, así como muchos otros sectoriales y regionales. Merece la pena detenernos en la segunda cuestión, esto es, en si ha existido una práctica continuada del derecho al desarrollo, elemento indispensable para considerar la vía consuetudinaria. Gómez Isa recoge la opinión del diplomático australiano e internacionalista Roland Rich, quién a principios de los ochenta hacía una defensa de la necesidad de reconocer el derecho al desarrollo afirmando que “la práctica estatal proporciona evidencia de los elementos esenciales del derecho al desarrollo”¹⁴⁹.

Aunque Gómez Isa considera esta opinión “tajante”, hemos de decir que ciertamente la opinión de Rich fue matizada con posterioridad¹⁵⁰ aclarando que, a diferencia de la opinión de Philip Alston y otros, que consideran el reconocimiento del derecho al desarrollo un *fait accompli*, opinaba que el derecho al desarrollo era todavía, antes de la emisión de la Declaración, un derecho putativo, *lege ferenda* respecto al derecho internacional, todavía “una cuestión política”. En cualquier caso, el argumento que propone Gómez Isa para nuestra consideración se mantiene: la cooperación internacional para el desarrollo se ha convertido en una práctica universal. Desde principios de los ochenta, cuando las disquisiciones de Rich, Alston y Brownlie tenían lugar, hasta hoy en

¹⁴⁷ En Abellán Honrubia, V. “Codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional del Desarrollo”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. XXIX, 1976, pp. 370 y ss.

¹⁴⁸ De Waart, Peters, Denters et al., *International Law and Development*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 391.

¹⁴⁹ Rich, R., “The Right to Development as an emerging Human Right”, *Virginia Journal of International Law*, vol. 23, 1983.

¹⁵⁰ Rich, R., “The Right to Development: A Right of Peoples?” en Crawford, J., *The Rights of Peoples*, Oxford University Press, New York, 1988.

día, han pasado treinta años de cooperación internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria como práctica frecuente y estable de los estados a nivel global. Objeta Gómez Isa que no se ha alcanzado el 0,7% del PIB de los países ricos propuesto por las Naciones Unidas en los setenta para acabar con la pobreza en el mundo, pero este dato no es tan relevante como lo es la obligatoriedad. Entonces, como ahora, la ayuda al desarrollo sigue estando modulada por la voluntad de los estados. ¿Pero es ésta una objeción a la existencia del derecho al desarrollo? En mi opinión, y como hemos sostenido hasta ahora, siguiendo a Sengupta, Alston, Sen y otros, el derecho al desarrollo persiste a pesar de la imperfección del deber de ayudar. Desde este punto de vista, la existencia continuada de ayuda internacional, si bien no toda la que desearíamos ni habiendo alcanzando los resultados óptimos, muestra el reconocimiento de la necesidad de la ayuda, del deber imperfecto de la misma y de la cooperación, y del derecho de los más pobres a dejar de serlo.

Según la OCDE¹⁵¹, la ayuda total internacional al desarrollo en los últimos años ha alcanzado unos cien mil millones de dólares americanos al año. En 2008, los países con más recursos dedicaron 119,8 mil millones de dólares a ayuda internacional (incluyendo desarrollo y ayuda humanitaria). La media entre los países donantes ha sido dedicar entre el 0,2 y el 0,3 % de su producto interior bruto, si bien algunos países han alcanzado la meta propuesta de Naciones Unidas de participar con al menos un 0,7%. En 2004 países como Noruega (0,87%), Dinamarca (0,84% en 2004), Suecia (0,77% en 2004) u Holanda (0,74%) lo superaron con creces, mientras que el mayor donante en términos absolutos, Estados Unidos, que dedicó mil novecientos millones de dólares a ayuda internacional también en 2004, aportó un 0,16% de su PIB. España, que llegó a alcanzar el 0,46% del PIB destinado a ayuda en 2009, fue uno de los países miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE que más drásticamente ha reducido su aportación en los últimos años, hasta el 0,29% en 2011 y el 0,17% en 2014.

Empíricamente queda demostrado, por tanto, que si la práctica de cooperar tanto para el desarrollo de terceros países más desfavorecidos, así como prestar ayuda en casos de emergencia humanitaria, es una práctica extendida, aceptada, consolidada y estable, ésta ha sido mayor en términos absolutos cuanto más grande fuera el PIB del país donante, pero proporcionalmente más elevada cuanto mayor renta per cápita tenga el país donante. A partir de ciertos niveles de desarrollo, como los alcanzados por los países nórdicos, desarrollo en sentido amplio, es decir, incluyendo una democracia estable con amplios derechos, se ha alcanzado y sobrepasado el nivel del 0,7%.

La misma práctica demuestra que en momentos de recesión o cuando los estados no han alcanzado niveles de desarrollo propios adecuados, han modulado la ayuda internacional, sin dejar de hacerlo de manera absoluta. Por ello creo que la práctica demuestra tanto que se reconoce que los más pobres tienen derecho a desarrollarse, como que los deberes positivos de dar derivados del derecho al desarrollo son hoy imperfectos, no inexistentes. La objeción de la baja ayuda al desarrollo no afecta a la vertiente negativa del derecho al

¹⁵¹ Los datos los he extraído del blog de estadística especializado de Filip Spagnoli, tomados a su vez de la OCDE <http://filipspagnoli.wordpress.com/stats-on-human-rights/statistics-on-poverty/statistics-on-international-development-aid/> (acceso 17/10/2012)

desarrollo. Así, a pesar de las críticas a la *cantidad* o la *calidad*, la cuestión clave es la obligatoriedad. La práctica ha demostrado objeciones a la obligatoriedad, y también la vertiente negativa del derecho ha sido vulnerada, pero la práctica continuada tanto de la ayuda internacional como de la remoción de obstáculos al desarrollo, como el respeto a los modelos de desarrollo de los países menos favorecidos, hacen pensar que la *opinio juris* ha sido avalada con una práctica continuada, pudiendo considerarse que la vía consuetudinaria avala la existencia de un derecho cuya realización ha sufrido y sufre de graves imperfecciones. La persistencia de los problemas en la ejecución de un derecho ha llevado a múltiples autores a hablar de un “derecho al desarrollo en vías de desarrollo”, pero esto puede llevar a confusión: la existencia del derecho al desarrollo no puede depender de los resultados, esto sería algo así como aceptar que hasta que no se hayan alcanzado determinadas cotas de equidad social en el plano internacional no podremos hablar de que exista un derecho al desarrollo. La existencia del derecho al desarrollo es preexistente a su plena realización, que se da necesariamente de manera progresiva. Asegurar que el derecho al desarrollo es un derecho en vías de desarrollo tiene sentido sólo respecto al avance en la obligatoriedad de la cooperación entre los estados para su desarrollo, para asegurar, por un lado, el desarrollo en sí de cada pueblo respecto a sí mismo, pero también de unos en relación a los otros. El enfoque sólo en el desarrollo respecto de sí o solamente respecto a otros hace perder la perspectiva del significado completo del derecho al desarrollo.

La práctica ha demostrado también, respecto a la vertiente negativa, que la afección ilegítima de manera nociva en el desarrollo de terceros países es considerada una práctica inaceptable en el derecho internacional actual. Por último, recordemos que la violación de una norma no supone que la norma no sea válida, sino solamente ineficaz.

Otros indicadores de prácticas generalizadas que han llevado a autores a considerar que acompañando a la *opinio juris* hace del derecho al desarrollo un derecho internacionalmente válido por la vía consuetudinaria son algunos cambios en la legislación internacional, especialmente la comercial, favoreciendo a países en vías de desarrollo (como la incorporación del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE, el más importante instrumento comercial de la política comunitaria de ayuda al desarrollo, un acuerdo comercial autónomo que proporciona acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos manufacturados y algunos agrícolas de 176 países y territorios en desarrollo, a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios¹⁵²) o la importante actividad diaria de las Organizaciones Internacionales, especialmente las Naciones Unidas a través de sus agencias UNDP, UNHCR, UNIFEM, etc.

Así, mientras que para parte de la doctrina, como Gómez Isa, “aún con serias reservas y opiniones divergentes por parte de los países desarrollados, (...) está emergiendo un derecho humano al desarrollo como norma de Derecho Internacional consuetudinario”, para otros, como Sengupta, Alston o Marks, la práctica no afecta a la validez jurídica del

¹⁵² Información detallada sobre los mismos en <http://www.comercio.mityc.es/es-es/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-arancelarias/paginas/sistema-de-preferencias-generalizadas-spg.aspx> (accedido el 19/10/2012)

derecho al desarrollo, para ellos un *fait accompli*, sino con su eficacia en el plano fáctico: cumplir con una norma que es moralmente justificada y jurídicamente válida conforme al Derecho Internacional.

La vía de los Principios Generales de Derecho Internacional (iii) se ha mostrado especialmente tortuosa. Al debate en torno a si el derecho al desarrollo es un derecho o bien un principio de Derecho Internacional, debate que se dio a finales de los ochenta, acerca del cual Danilo Türk reclamaba como área de urgente necesidad de estudio, mientras que De Waar no consideraba el tema principal “salvo si uno piensa en términos de justiciabilidad a través de cortes de justicia”¹⁵³, se añade el debate general en torno a los principios generales del derecho como fuente autónoma del Derecho Internacional.

Recordemos que el artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia considera a los principios generales del derecho una fuente formal del Derecho Internacional, junto con la costumbre internacional y los tratados internacionales. Ninguna fuente del Derecho Internacional ha causado tanta polémica doctrinal, en relación a su función, su importancia, su aplicación o su papel como fuente autónoma o subsidiaria del Derecho Internacional. Por principios internacionales se ha entendido en el Derecho Internacional no sólo esos principios normativos nacidos de la lógica abstracta, comunes a nivel nacional, sino también los principios plasmados en distintos documentos internacionales, causando cierta confusión teórica y terminológica. Explica el profesor Velázquez Elizarrarás, para quien no hay duda de que los principios constituyen una fuente autónoma y sustantiva del Derecho Internacional, en la medida en que “pueden ser invocados como derecho aplicable para regular y resolver el fondo de un acto jurídico o una controversia internacional”, que existen dos clases de principios con posibilidades de ser aplicados a las relaciones internacionales”: a) los principios generales de derecho en su calidad de encarnaciones de las ideas de derecho y Justicia (razonamientos abstractos puros), y b) los principios generales desarrollados en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales como normas de derecho positivo”¹⁵⁴, si bien, a pesar de su origen y naturaleza, los principios de Derecho Internacional consagran igualmente “la idea de derecho y de justicia, en este caso, en el ámbito internacional”.

También Michel Virally advierte que deben distinguirse los principios generales de derecho de los principios del Derecho Internacional puesto que “estos últimos en realidad no son más que aquellas normas del Derecho Internacional que derivan de la costumbre o de los tratados (...) Es indudable que estos “nuevos principios de Derecho Internacional” tienen la mayor importancia política, y sin duda alguna en forma apreciable pueden influir en la formulación de nuevas reglas de Derecho Internacional. Sin embargo, no poseen el mismo valor como principios de derecho”¹⁵⁵.

De aquí se extrae la complejidad de la consideración del desarrollo como principio

¹⁵³De Waart, Peters, Denters, et al., *International Law and Development* Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 381

¹⁵⁴Velázquez Elizarrarás, J.C., “Reflexiones generales en torno a la importancia de los principios del derecho internacional”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XII, 2012, pp. 407-453.

¹⁵⁵Virally, M., *El devenir del derecho internacional*, México, FCE, 1998, pp. 221-241.

internacional. Si bien en nuestra opinión la mera aserción de que los pueblos buscan su propio desarrollo podría constituirse como principio, extraído de la propia lógica y de la naturaleza humana, como diría el citado Domenach, -porque ¿qué pueblo aspira a su subdesarrollo-, el principio del desarrollo en su segunda acepción es algo más difícil de sostener, pues no se encuentra como tal entre los redactados en los documentos internacionales, principalmente en la Carta de las Naciones Unidas, pero también en otros como en la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, proclamada en 1970.

Como uno de los cuatro *Propósitos* de las Naciones Unidas establecidos en la Carta de las Naciones Unidas está, sin embargo, “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”, junto con los otros tres propósitos de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Para lograr estos propósitos se establecieron una serie de principios en la Carta (tales como que “los Miembros de la Organización (...) cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”, “(...) arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” o que “los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva”).

Así, para la profesora María Magdalena Kenig-Witkowska la formación de un principio legal internacional del derecho al desarrollo “es una consecuencia lógica de la evolución de la idea y la ideología del desarrollo, el cual ha estado presente en las relaciones internacionales y en su sistema normativo por un largo tiempo”¹⁵⁶. Para ella tanto los derechos humanos como lo que ella llama derechos del nuevo orden económico internacional son vehículos potenciales para la concreción de este principio y la Declaración de 1986 un primer paso para la plena realización de tal principio.

En parecido sentido se expresa Subrata Roy Chowdhury, para quien “el deber legal de los estados de tomar acciones conjuntas e individuales para el progreso social y el desarrollo en interés de los derechos humanos se refleja en el derecho al desarrollo como un principio de Derecho Internacional de los derechos humanos”¹⁵⁷. Abundando en la materia, en relación con los estados, debido a que estos deben cooperar para crear la

¹⁵⁶ Kenig-Witkowska, M.M., “The UN Declaration on the right to development in the light of its *travaux préparatoires*” en De Waart, Peters, Denters et al. *International Law and Development* Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 381

¹⁵⁷ Roy Chowdhury, S y Denters E, “The Right to Development in International Law”, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 10

estabilidad y el *bienestar* necesarios para una relaciones pacíficas de amistad entre las naciones basadas en el principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, para este autor “por tanto, el derecho al desarrollo de los estados ubica el desarrollo no como un nuevo derecho de los estados sino como un principio del Derecho Internacional que urge a los estados a cooperar”.¹⁵⁸ Recoge Gómez Isa la opinión sostenida por autores como De Vey Mestdagh o Dikanrrao Desai, para quienes la formulación del derecho al desarrollo como principio General de Derecho Internacional es el comienzo del proceso de su positivación, que requiere además ser concretada mediante instrumentos convencionales. Siguiendo esta reflexión, concluye Gómez Isa que “el principio de cooperación y la solidaridad como un valor emergente estarían contribuyendo de una forma muy importante a la afirmación progresiva del derecho al desarrollo como principio general de Derecho Internacional”¹⁵⁹.

Por supuesto, las opiniones están divididas y hay parte de la doctrina que, considerando el derecho al desarrollo un derecho humano, no lo considera principio de Derecho Internacional. Daniel Oliva, por ejemplo, afirma que “el derecho al desarrollo como tal no constituye hasta la fecha, en mi opinión, un principio de Derecho Internacional, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque a pesar de los avances (...) y de las resoluciones o declaraciones (...) no existe un consenso generalizado en la materia a nivel mundial debido a la heterogeneidad de actores y visiones (...). En segundo lugar, porque a pesar de que el derecho al desarrollo como tal ya ha sido recogido en algunos ordenamientos internos, aún no se ha generalizado de tal manera ese reconocimiento como para que podamos afirmar que el derecho al desarrollo es ya un principio general de Derecho común a todos los ordenamientos nacionales extrapolable al Derecho Internacional”¹⁶⁰. Daniel Oliva, sin embargo, considera que en la comunidad internacional se ha abierto paso el principio general que obliga a unos Estados a cooperar unos con otros para asegurar la protección de los derechos humanos, entre los que incluye el derecho al desarrollo.

Por último, la vía convencional (iv), explora si el derecho al desarrollo puede ser considerado válido en cuanto derecho contenido en un instrumento convencional, una de las principales fuentes del Derecho Internacional. No existe hasta la fecha un tratado internacional de ámbito universal que recoja el derecho humano al desarrollo de manera explícita. El único instrumento de esta naturaleza, de obligado cumplimiento para las partes signatarias, es hasta la fecha, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, conocida como Carta de Banjul. Recordemos que en su artículo 20 establece, vinculado con el derecho a la autodeterminación de los pueblos que “Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. Decidirán libremente su status político y procurarán su desarrollo económico y social según la política que ellos mismos hayan escogido libremente”. Relacionado con este artículo bien se ve la vinculación de la vertiente negativa del desarrollo con la autodeterminación y la consideración del desarrollo como un fin que los

¹⁵⁸Roy Chowdhury, S y Denters E, op. cit., p. 13

¹⁵⁹Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo...*, op. cit., p. 125

¹⁶⁰Oliva, D., *El derecho al desarrollo y la cooperación internacional. Especial atención a la práctica española*, CIDEAL, Madrid, 2011, p.44

pueblos procuran para sí, de manera incuestionable, como decía el ya citado Domenech, por fuerza de la misma naturaleza humana.

El derecho al desarrollo como tal, está sin embargo explícitamente recogido en el artículo 22 de la Carta de Banjul:

“1.- Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia común de la humanidad.

2.- Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo”

El interés de la inclusión del derecho al desarrollo en la Carta de Banjul reside principalmente en que podemos ya constatar la existencia del derecho al desarrollo como un derecho normativamente válido en virtud de al menos un documento convencional de fuerza vinculante, a diferencia de declaraciones y proclamaciones, si bien es sólo de ámbito regional y no universal. El paso es gigantesco pues, al menos respecto de los miembros signatarios de la Carta, el problema del derecho al desarrollo se restringiría *solamente* a la definición de contenido concreto y a las vías para hacerlo efectivo: estaríamos, sin lugar a dudas, en el escenario descrito por Sengupta sin necesidad de extraer el derecho al desarrollo ni de normas preexistentes, ni de la costumbre internacional ni de principios generales de derecho.

Para Gómez Isa “un reconocimiento tan explícito del derecho al desarrollo se puede concebir como un paso más en el proceso de positivación de este derecho, un derecho muy importante para el continente africano, como hemos visto, y un derecho que debería llegar a alcanzar el mismo grado de importancia si queremos garantizar la supervivencia del conjunto de la Humanidad”.

Por otro lado, la redacción de la Carta de Banjul nos permite especular teóricamente y distinguir la mera vertiente negativa vinculada al desarrollo (art. 20) del derecho al desarrollo que incluiría la vertiente positiva (art. 22). Un artículo más, el artículo 24 prevé que “todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo”, y apoya tácitamente la cooperación entre los estados para crear ese entorno general. Sin embargo, como vemos, la vaga redacción de la Carta no afecta al corazón del problema, esto es, al deber de satisfacer el derecho al desarrollo. La llamada a realizar el derecho al desarrollo en los términos de la Carta de Banjul mantiene los deberes de unos estados con otros en el terreno de los deberes imperfectos a los que nos hemos referido con anterioridad. Concluamos que la Carta de Banjul hace buena la reflexión de Amartya Sen acerca de la crítica de la coherencia: aunque no se establezca claramente una correspondencia de ayudas entre estados, aunque las obligaciones de ayudar sean imperfectas, aunque en la norma sea a día de hoy también de dudosa eficacia, el derecho al desarrollo existe, y es normativamente válido al menos para los pueblos africanos en cuya representación firman los estados signatarios.

§2.5 Eficacia del derecho al desarrollo

En este apartado trataremos, conforme al análisis tridimensional que nos hemos propuesto, la eficacia del derecho humano al desarrollo. Ya dejó escrito Norberto Bobbio que “el problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no tanto el de justificarlos, como el de protegerlos. No es un problema filosófico, sino político”¹⁶¹. Es por ello que, en el caso del derecho al desarrollo, para Sengupta, Marks y tantos otros autores, las disquisiciones en torno a los fundamentos del derecho al desarrollo o su existencia o validez en sentido estricto, aún superadas, quedan empequeñecidas en comparación con la abrumadora tarea de lograr su efectiva realización. La eficacia del derecho al desarrollo, es decir, la correlación verdadera entre lo jurídicamente establecido y el hecho social, la realización del derecho mismo, ha sido controvertida en las discusiones doctrinales principalmente respecto a tres puntos: por un lado, (a) su relativa realización práctica a la vista de la situación de la pobreza y las desigualdades en el mundo, (b) la cuestionable justiciabilidad del derecho al desarrollo y los efectos de ésta sobre la eficacia del derecho al desarrollo, y (c) los obstáculos existentes para la plena realización del derecho humano al desarrollo.

Sobre la primera cuestión, (a) en el caso del derecho al desarrollo, el consenso doctrinal y político arroja resultados inequívocos: estamos muy lejos de alcanzar un nivel satisfactorio de realización del derecho al desarrollo a nivel global. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el avance en la consecución de los Objetivos del Milenio de 2011¹⁶² vivimos en un mundo en el que debido a conflictos y persecuciones, existen 43 millones de personas desplazadas en una sociedad internacional de estados en la que 12 millones de personas no son ciudadanas de estado alguno. Vivimos en un mundo donde 67 millones de niños están sin escolarizar, la mortalidad infantil, de niños menores de cinco años (gran parte evitable), ronda los 8,1 millones, 60 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos, donde la proporción de gente en las zonas más desfavorecidas del mundo que fueron víctimas del hambre en el período 2005-2007 se estancó en el 16%, donde un cuarto de los niños menores de cinco años de los países menos desarrollados sufre malnutrición.

Sin embargo, el desarrollo es un *proceso*. Si hoy son 67 millones de niños sin escolarizar, en 1999 eran 106 millones. En términos absolutos la situación es mejor para algunos indicadores, aunque no lo consideremos suficiente. La tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años se ha incrementado. La mortalidad infantil se ha reducido de 12.4 millones en 1990 a 8.1 millones en 2009. Por ello, autores como Evan Hillebrand aseguran que “la pobreza global ha caído dramáticamente en los dos últimos siglos, y esta caída se ha intensificado en las últimas décadas”¹⁶³.

Ahora bien, la cuestión del desarrollo puede considerarse en sí, en si un nivel de

¹⁶¹ Bobbio, N., “Sul fondamento dei diritti dell' uomo”, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, n. 42, 1965, pp. 301-109

¹⁶² *The Millennium Development Goals Report, 2011*, Naciones Unidas, Nueva York, 2011

¹⁶³ Hillebrand, E., “Poverty, growth, and inequality over the next 50 years”, *FAO Expert Meeting on How to feed the World in 2050*. Food and Agriculture Organization of the United Nations Economic and Social Development Department. Junio, 2009.

desarrollo es adecuado, o en relación a otros. Para autores como Amartya Sen, podemos conocer mejor el nivel de desarrollo al que aspiramos en comparación con otros niveles de desarrollo alcanzados, lo que nos acerca a cuestiones relativas a la distribución de recursos a nivel global y a los criterios para distribuir esos recursos, tema acerca del que reflexionan los autores dedicados a la justicia global.

Aunque en términos absolutos y globales los indicadores de desarrollo hayan mejorado, nos encontramos con un mundo profundamente desigual. El 20% de la población mundial controla más del 70% de los ingresos mundiales, en contraste con sólo un insignificante 2% que tiene el quintil inferior en 2007 con tasas de cambio ajustadas por PPP. Bajo tasa de cambio de mercado, el 20% más rico de la población mundial recibe el 83% del ingreso total mundial, y solo un 1% llega a aquellos en el quintil más pobre¹⁶⁴. No solo vivimos en un mundo desigual, sino que como han demostrado los estudios que han analizado los índices Gini en series temporales de largo plazo (índice nombrado por el estadístico italiano Corrado Gini que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos por familia en un determinado país), vivimos en un mundo que, desde el siglo XIX ha visto incrementada de manera constante esa brecha entre ricos y pobres, notándose una aceleración en el crecimiento de tal desequilibrio a partir de 1980¹⁶⁵.

Independientemente de la cuestión de la desigualdad global entre estados, se requiere considerar especialmente la desigualdad, todavía mayor, en el interior de los estados. Como bien demostró Sen, determinados grupos sociales en países desarrollados pueden tener sus capacidades y derechos más mermados que regiones o grupos sociales en países más desfavorecidos¹⁶⁶. Atendiendo a las desigualdades medidas con el mencionado índice Gini, los Estados Unidos de América, en 2007, según CIA World Factbook¹⁶⁷, tenía un Gini de 45.0, peor que países como Tanzania (Gini 37.6) o Bosnia y Herzegovina (Gini 36.2). Sin embargo, existe un consenso entono al hecho de que n Estados Unidos tenía ese año niveles de desarrollo superiores, hasta el punto de que Estados Unidos prestó ayuda internacional a esos países. Bosnia y Herzegovina, en concreto, con un mejor índice Gini recibía importantes ayudas de cooperación internacional de Estados Unidos, encontrándose inmersa en una crónica crisis política, produciéndose importantes vulneraciones en los derechos de las personas, especialmente económicos y sociales de retornados y desplazados internos.

Si consideramos el desarrollo un proceso y el derecho al desarrollo como un derecho a tal proceso, hemos de ver la proyección temporal del proceso y a tender a su constante incremento, siendo solo su decrecimiento la vulneración del derecho al desarrollo. Los procesos de desarrollo son medibles respecto a distintas unidades político-administrativas en las que se redistribuyen bienes y derechos: ciudades, regiones, provincias y, principalmente, estados. Podemos considerar las diferencias entre los niveles de

¹⁶⁴ Ortiz, I., Cummins, M., *Global Inequality: Beyond the Bottom Billion – A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries*. United Nations Children's Fund (UNICEF), Nueva York, abril, 2011.

¹⁶⁵ Milanović, B., "Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: The Story of the Past Two Centuries", *Policy Research Working Paper 5044*, World Bank, Washington D.C., 2009.

¹⁶⁶ Ver, por ejemplo, Sen, A., *Development as Freedom*, op. cit.

¹⁶⁷ Se puede consultar online en:

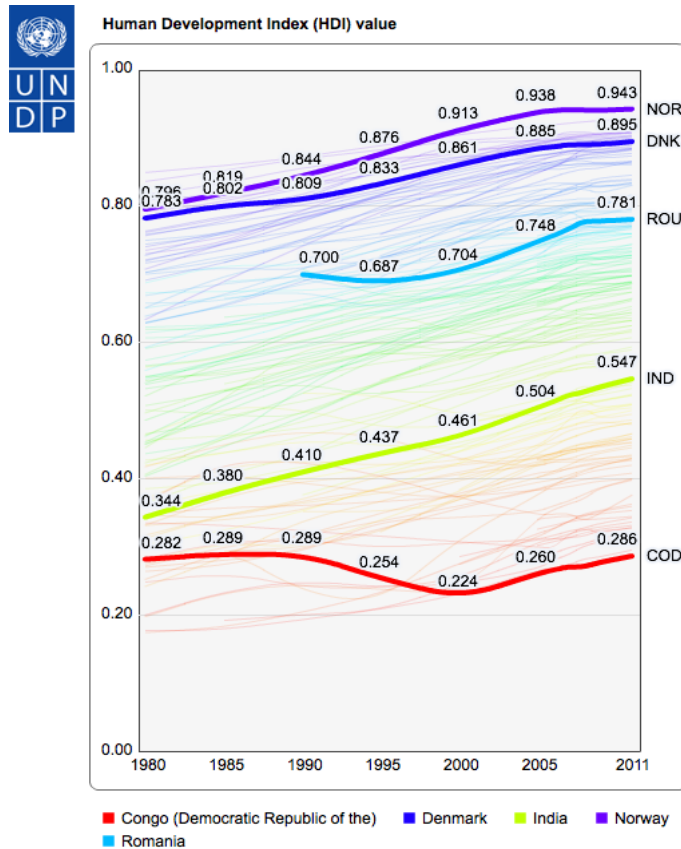
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html> Acceso: 29/10/2012

realización de los procesos globales de desarrollo de distintos países como injusta o como vulneración del derecho al desarrollo a nivel global, o podemos considerar que el derecho al desarrollo puede ser vulnerado en un determinado país -u otra unidad de distribución de recursos y derechos- no cuando es inferior respecto a otros sino también respecto de sí mismo y su potencial positivo.

Veamos estas consideraciones en el siguiente gráfico elaborado a partir de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo¹⁶⁸, en el que podemos apreciar las curvas de desarrollo de distintos países, usando el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH combina no sólo ingresos per cápita sino la realización de derechos económicos y sociales, como sanidad o educación. Siguiendo una metodología consistente con el enfoque de capacidades de Amartya Sen, el índice más cercano disponible del que disponemos para medir el contenido del derecho al desarrollo expresado por Sengupta.

En el siguiente gráfico se recogen los niveles absolutos de desarrollo sin incluir índices de desigualdad de distribución de recursos y derechos al interno de cada país. Cada línea representa el vector de desarrollo proyectado en el tiempo de cinco países escogidos: Noruega, Dinamarca, Rumanía, India, y la República Democrática del Congo.

¹⁶⁸ Extraído de la base de datos del Índice de Desarrollo Humano de PNUD <http://hdr.undp.org/en/data/trends/> Accedido en 28/10/2012



Claramente podemos apreciar que, indudablemente, el nivel de desarrollo de Noruega es superior al de India. Pero no podemos negar tampoco que India, al igual que Noruega, ha incrementado su nivel de desarrollo de manera estable en los últimos veinte años. Así, mientras que podemos afirmar que el nivel de satisfacción del derecho al desarrollo es más alto en Noruega que en India, no podemos afirmar claramente que, según estos datos, el derecho al desarrollo de India *en su conjunto* no haya sido realizado en absoluto, si consideramos el desarrollo como proceso, a pesar de los alarmantes niveles de pobreza que todavía sufre. Entre Noruega y Dinamarca, aunque existe una diferencia de desarrollo a nivel absoluto, siendo ambos procesos positivos, el nivel de realización de uno respecto a otro no lo consideraríamos relevante, máxime cuando la posibilidad de comparación incluye el resto de los países, pues el nivel de realización de derechos y las capacidades que se garantizan a sus ciudadanos son similares. Por otro lado, Rumanía, un país con niveles absolutos de desarrollo superiores a los de India, ha contemplado como su proceso de desarrollo sufría una tendencia claramente negativa durante los noventa - por cierto compartida con la mayoría de los países de economías en transición de economías comunistas o socialistas a economías de libre mercado-. Si el contenido del derecho al desarrollo es el sugerido por Sengupta, los valores negativos supondrían que estamos ante una violación del derecho al desarrollo como proceso.

Por último, en el caso de la República Democrática del Congo, que ha sufrido y sufre severísimas violaciones de derechos humanos en un entorno de serias dificultades económicas, debido a la serie de terribles conflictos que lo asolaron, como la Primera

Guerra del Congo (1996-1997), Segunda Guerra del Congo (1998-2003) y episodios de violencia posterior (enfrentamientos en Kinshasha en 2006, en el este del país a partir de mediados de 2007), no sólo tiene el índice de desarrollo humano más bajo, sino que además ha sufrido desarrollo negativo, se ha producido una violación del derecho al desarrollo como proceso. Cabe destacar que Congo no es el país del mundo con menor PIB, ni PIB per cápita. Así, en Congo podemos distinguir los dos criterios que hemos visto antes a la hora de considerar la vulneración del derecho al desarrollo: el nivel de su realización respecto a otros, y respecto de sí mismo, en cuanto proceso.

Distingamos, por tanto, entre las diferencias entre nivel de desarrollo absoluto (Noruega respecto a India) y nivel de desarrollo relativo respecto de sí (India superior a Rumanía durante los noventa). El derecho al desarrollo es el derecho a un proceso de incremento del bienestar. Si solo se entiende la realización del derecho al desarrollo como un derecho al resultado de la igualdad global, tendremos una visión parcial de los procesos de desarrollo.

Por último, respecto a la relativa realización del derecho, hemos de reincidir en parecida reflexión a la que nos hacíamos acerca de la vía consuetudinaria de validez jurídica del derecho al desarrollo. Por supuesto, tenemos fundadas razones para considerar tanto la actual situación de distribución de recursos y derechos como los procedimientos para tal distribución profundamente desigual a nivel global -para algunos autores injusta, siendo desigualdad entre iguales-, pero no que el derecho al desarrollo no sea realizado en absoluto, ni tanto desde el punto de vista de su vertiente negativa ni desde el punto de vista de su vertiente positiva, ya que, aunque no se hayan alcanzado los niveles de cooperación internacional al desarrollo deseables, de cumplimiento de los deberes imperfectos de ayudar, éstos nunca han dejado de darse, constatándose en los últimos veinte años un incremento constante de los recursos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo a nivel global, sólo disminuida aunque no interrumpida, con la última crisis económica.

En lo concerniente a la segunda cuestión que nos planteábamos (b), esto es, acerca de la justiciabilidad del derecho humano al desarrollo, la cuestión ha sido cuanto menos controvertida. Para algunos autores, el derecho al desarrollo será efectivo en cuanto que sea justiciable. Jack Donnelly argumenta que los derechos humanos deben tener obligaciones legales y sujetos pasivos identificables, sin tales no puede existir justiciabilidad¹⁶⁹. Si no puede exigirse el cumplimiento del derecho al desarrollo ante tribunales de justicia, argumentan diversos autores, no podemos asegurar la existencia misma del derecho. Para otros autores, como Noel Villaromán, por el contrario, “las esencias nucleares que componen el derecho al desarrollo están firmemente ancladas en el derecho positivo internacional y, por tanto, la violación de cualquiera de ellos resulta en la responsabilidad del estado que los vulnere. Habiendo dicho esto, no hay razón por la que la vulneración del derecho al desarrollo, como cualquier otro acto incorrecto, no pueda llevar a acciones reparadoras, para buscar una corrección del daño causado a un estado o a su pueblo”¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Donnelly, J., “In Search of the Unicorn...”, op. cit., pp. 473-509.

¹⁷⁰ Villaroman, N. G., “The Right to Development: Exploring The Legal Basis of a Supernorm”, *Florida*
© Isidro García Mingo

Para la mayoría de la doctrina, sin embargo, el problema de la justiciabilidad y ausencia de sanción en el caso de incumplimiento del derecho al desarrollo no afecta a su existencia misma en cuanto derecho, sino sólo a las posibilidades de su mayor implementación. Como dice Gómez Isa: “como es perfectamente constatable, el problema de la coercibilidad es un problema que afecta al Derecho Internacional en su conjunto, no sólo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”¹⁷¹ y por tanto, no solo al derecho al desarrollo. De parecida manera se expresa Alston, para quien la falta de sanción o de coercibilidad no afecta a la consideración del derecho al desarrollo como derecho humano¹⁷².

Esta postura no debe extrañarnos si recordamos los argumentos planteados respecto a derechos económicos y sociales. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico se recogen derechos que no son directamente exigibles ante tribunales de justicia y que no por ello dejamos de considerar derechos. En la Constitución Española de 1978, bajo el Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”, se recoge el Capítulo III, “De los principios rectores de la política social y económica”, el cual incluye prescripciones como (art.40.1) que “*los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo*”. Veamos que, aunque el derecho al desarrollo haya sido recogido de alguna manera en una norma nacional, éste puede mantener su carácter no sancionador, pero no por ello dejaría de ser un derecho. En el caso más claro del artículo 47 de la CE, por ejemplo, se establece que “*todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada*”, pero este derecho no es directamente exigible al estado, quien sólo está obligado a poner las condiciones necesarias para su consecución. No negamos que una vivienda sea un derecho, solo encontramos limitaciones a su aplicación. Habitados como estamos a ello, nos puede causar extrañeza que el derecho a la vivienda pudiera ser de alguna manera directamente exigible al estado como era, con limitaciones, en los sistemas comunistas y socialistas.

Respecto a la eficacia del derecho al desarrollo no debemos perder de vista que, aunque su exigibilidad sea débil y no existan a día de hoy tribunales a nivel internacional ante los cuales pueda ser exigido el cumplimiento del derecho al desarrollo como tal, la cooperación internacional para el desarrollo se lleva a cabo a nivel bilateral y multilateral en virtud precisamente del derecho al desarrollo de todos, por lo que no podemos argumentar su absoluta inexistencia: no es el caso habitual de una norma perfectamente válida que no se cumple en la práctica, sino más bien al contrario, una norma que se cumple aunque no se hayan definido todos sus elementos de obligatoriedad y justiciabilidad.

Journal of International Law 22, n. 2, 2010.

¹⁷¹ Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo como derecho humano...*, op. cit., p. 219.

¹⁷² Alston, P., “Making Space for New Human Rights: the Case of the Right to Development”, *Harvard Human Rights Yearbook*, vol. 1, primavera, 1988, p. 35.

Queda por último, para completar nuestra reflexión acerca de la eficacia del derecho al desarrollo, analizar (c) cuales son los obstáculos para la plena realización del derecho humano al desarrollo.

Recordemos que la Declaración de 1986 recoge como una de las obligaciones de los estados (art. 3.3) “cooperar mutuamente para (...) eliminar los obstáculos al desarrollo”. La Declaración no describe de manera precisa cuáles son esos obstáculos ni mucho menos elabora una lista cerrada de los obstáculos que deben ser superados o removidos por los estados para cumplir con el derecho al desarrollo. Por ello, ha quedado en manos de la doctrina la identificación y sistematización teórica de estos obstáculos y en manos de las políticas de desarrollo y de los trabajadores del sector trabajar para la superación de los mismos.

Stephen Marks clasifica los obstáculos para la realización del derecho al desarrollo, para él formidables pero no insuperables, en tres grandes grupos¹⁷³: el primero está relacionado con las políticas del derecho al desarrollo, esto es, el inevitable interés de los estados de usar el derecho al desarrollo para lograr objetivos de su propia agenda de política internacional. Una vía para superar este obstáculo es, para este autor, desarrollar y extender un conocimiento base para que la implementación del derecho al desarrollo pueda darse en situaciones concretas sin que esté a expensas de los intereses geoestratégicos de terceros. Por ello, el segundo grupo de obstáculos es, según Marks, de carácter epistemológico: es necesario seguir construyendo el marco teórico del derecho al desarrollo, estudiando casos para “establecer una base empírica para hacer del derecho al desarrollo una dimensión con sentido en las tomas de decisión a nivel nacional e internacional acerca de la financiación y las prioridades del desarrollo”¹⁷⁴. El tercer grupo de obstáculos está relacionado, para Marks, precisamente con la ausencia de práctica del derecho al desarrollo, lo que “resulta de la ausencia de políticas a nivel nacional e internacional que vayan más allá de declaraciones de boquilla (sic) y que establezcan prioridades y dediquen recursos basados en el derecho al desarrollo”.

Por su parte, Gómez Isa distingue entre obstáculos de carácter internacional y obstáculos internos al derecho al desarrollo. Entre los obstáculos de carácter internacional al derecho al desarrollo, menciona el actual orden económico internacional, la carga excesiva de la deuda externa, los programas de ajuste estructural auspiciados por instituciones de Bretton Woods o la carrera de armamentos. Entre los obstáculos internos, recoge la desigual distribución de los beneficios del desarrollo, la falta de gobernabilidad, el crecimiento demográfico excesivo, el militarismo y de modo más general las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

Pero la relación de obstáculos para la plena realización del derecho humano al desarrollo no es ni puede ser una lista cerrada. Muchos autores identifican los obstáculos del derecho al desarrollo con los obstáculos del desarrollo mismo. Ya en los sesenta, Albert

¹⁷³ Marks, S. P., *Obstacles to the Right to Development*, Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University, 2003.

¹⁷⁴ Marks, S. P., *Obstacles to the Right to Development*, op. cit., p.13

O. Hirschman¹⁷⁵, para quien el listado de obstáculos nunca podría ser un listado finito, debatía las distintas clasificaciones de obstáculos al desarrollo: naturales / artificiales, objetivos / subjetivos, externos / internos, etc. Si realizar el derecho al desarrollo es realizar el desarrollo, los obstáculos habrían de identificarse. Pero la referencia a un derecho a tal desarrollo conlleva también el componente jurídico, por lo que los obstáculos para la realización práctica del derecho al desarrollo también se encontrarían en el reconocimiento mismo del derecho a tal desarrollo.

Arjun Sengupta ha considerado el problema de los obstáculos directamente relacionado con el problema del contenido. Sengupta, que se propuso “analizar adecuadamente el contenido del derecho al desarrollo de modo que pueda ser operativo (...) y discutir lo que es el derecho al desarrollo, cómo puede ser implementado” así como las ventajas de implementarlo en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, defendió que “observar el proceso de desarrollo en términos de derecho al desarrollo añade un valor significativo al discurso actual del desarrollo”.¹⁷⁶

La lista pues de obstáculos es siempre abierta y prácticamente interminable, pero en términos generales encontramos entre la doctrina una correlación entre las propias concepciones, definiciones y contenidos específicos del derecho al desarrollo y los obstáculos para alcanzarlo. Hemos convenido que utilizaremos la definición y contenido del derecho al desarrollo elaborada por Sengupta a partir de la declaración de 1986, concepción que aporta un mínimo común denominador a todos los textos internacionales y a toda la doctrina: derecho a un proceso de realización de los derechos humanos y crecimiento económico para dotar de recursos a la realización de tales derechos y a los que estén por reconocer. Coherentemente, los obstáculos del derecho al desarrollo serían todos aquellos técnicos y políticos, naturales y artificiales, o cualquier otra clasificación que se quiera manejar para el cumplimiento de tal contenido. Si el derecho al desarrollo de manera operativa es $D_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, \dots, dR_n, g^*)$, los obstáculos serían las causas por las que cualquiera de los elementos del vector alcanzarían un valor negativo.

Esta reflexión será importante cuando veamos el derecho de autodeterminación en su relación con el derecho al desarrollo, pues nos hará considerar el derecho a la autodeterminación en su doble perspectiva como derecho que ha de ser realizado en determinadas circunstancias o como posible obstáculo para la realización de los demás derechos. Sin pronunciarnos todavía en este sentido, notemos respecto a la remoción de obstáculos del vector, que si consideramos este a nivel global, es decir, el vector del desarrollo de todos los seres humanos en su conjunto, éstos serán coincidentes con la remoción de obstáculos para la plena realización de cada uno de los derechos del vector más la remoción de obstáculos de un crecimiento económico global. Si hemos de respetar el principio internacional de igualdad de todos los pueblos y estados, la remoción de los obstáculos debe ser realizada en equidad para todos. Esto implica, necesariamente, tener en cuenta tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

¹⁷⁵ Hirschman, A.O., “Obstacles to Development: A Classification and a Quasi-Vanishing Act”, *Economic Development and Cultural Change*, vol. 13, n. 4, part 1, julio, 1965, pp. 385-393

¹⁷⁶ Sengupta, A., “The Human Right to Development”, op.cit., pp. 179-203.

y su implementación a nivel nacional e internacional, como las cuestiones relativas a la justicia global y un orden internacional económico que garantice el crecimiento económico sostenible compatible con la expansión progresiva de todos los derechos humanos (g*) de manera consistente con el principio de igualdad de los pueblos.

§2.6 Influencia del Movimiento de Países no Alineados en la conformación del derecho al desarrollo

Durante su intervención en el simposio internacional “25 años de derecho al desarrollo. Logros y retos”, organizado en Berlín entre los días 24 y 25 de febrero de 2011, por la Friedrich-Ebert-Stiftung y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navanethem Pillay, Alta Comisionada, más allá de recordar la importancia del derecho al desarrollo como derecho humano, tuvo algunas palabras para el origen de su concepción: “la inspiración para la moderna articulación del derecho al desarrollo viene del Juez Keba M'Baye de Senegal, quien en 1972 argumentó, como hemos visto anteriormente, que el desarrollo debería ser visto como un derecho”. Keba M'Baye, jurista de reconocido prestigio, consiguió dar forma a la exigencia de desarrollo y justicia global reclamada por numerosos países nacidos del proceso de descolonización. Esto no significa que antes de la conocida propuesta de M'Baye no existiera la conciencia de la necesidad de cooperar internacionalmente para su desarrollo, o que no existiera la aspiración de construir una sociedad internacional más justa en la que los estados pudieran desarrollarse para ofrecer una vida mejor a sus ciudadanos. Simplemente, el concepto de “desarrollo” no había sido concebido como un derecho humano.

Hasta entonces, por desarrollo se entendía principalmente un crecimiento económico desligado del respeto a los derechos humanos o, a lo sumo, considerado como medio para hacer posibles los derechos, asumiendo que los estados, al ejercitar su soberanía sobre los recursos naturales, aumentarían la disponibilidad de su riqueza material, lo que se suponía traería *per se* un desarrollo social y cultural. Esta concepción fue cambiando hasta la instauración de una visión distinta desde los setenta, una visión en la que el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos está necesariamente unida, decisivamente influenciada por autores como Amartya Sen¹⁷⁷, quien consiguió demostrar la relación en la práctica entre el respeto a las libertades y el crecimiento económico y no sólo al revés. Los países nacidos de la descolonización y los más desfavorecidos apoyaron decididamente concebir el desarrollo como un derecho humano y no sorprende que tanto su primer impulsor, M'Baye, como algunos de sus más destacados pioneros, como el argelino Mohammed Bedjaoui, fueran precisamente teóricos provenientes de países interesados en el desarrollo como derecho universal.

En un mundo profundamente polarizado políticamente como el de entonces, en el que la DUDH hubo de ser desarrollada en dos Pactos Internacionales diferentes para satisfacer políticamente las posiciones de las dos grandes superpotencias, los países no alineados en torno a estos dos polos, los que vinieron a ser conocidos como Tercer Mundo,

¹⁷⁷ Sen, A., *Development as Freedom*, op. cit.

coincidentes en su mayor parte con países que compartían un pasado colonial y un presente y un futuro con unos retos de desarrollo importantísimos, encontraron en las Naciones Unidas el espacio político adecuado para impulsar avances en el Derecho Internacional acorde con sus intereses y como defendían los intereses de todos incluyendo los de los dos principales bloques geopolíticos. Como defendía a finales de los setenta el embajador Susanta de Alwis, ex Representante Permanente de Sri Lanka en las Naciones Unidas y Jefe de la Oficina Coordinadora de los Países No Alineados y del Grupo de los 77 en Ginebra: “al echar una mirada a sus orígenes, evolución y posibilidades para el futuro de la No Alineación, uno puede concluir que ha representado un rol histórico y catalítico en el moldeamiento de las relaciones internacionales contemporáneas”¹⁷⁸.

El desarrollo entendido como derecho humano fue decididamente apoyado por el Grupo de los 77, la organización intergubernamental de países que fuera fundada en el seno de Naciones Unidas en 1964 con el fin de proveer “los medios para los países del Sur para articular y promover sus intereses económicos colectivos e impulsar su capacidad de negociación conjunta en los temas de mayor importancia económica dentro del sistema de Naciones Unidas, y promover la cooperación para el desarrollo”¹⁷⁹. El Grupo de los 77, fuertemente vinculado al Movimiento de los países No Alineados (de aquí en adelante, MNA), fue creado por la Declaración Conjunta de Setenta y Siete Países, adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés). Fue precisamente en el seno de la UNCTAD donde más activamente se impulsó el conocido como Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), entre cuyos objetivos estaba incrementar la justicia en los términos del comercio mundial e incrementar la asistencia para el desarrollo. El NOEI, concebido como un paquete comprehensivo de medidas multilaterales dirigidas a mejorar la situación económica de los países menos desarrollados, se perfiló definitivamente a su vez en la Conferencia de Países No Alineados celebrada en Argelia en septiembre de 1973. Los líderes del MNA, tras solicitar una Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir el comercio internacional de materias primas, aseguraron la adopción de la Declaración y el Programa de Acción para un Nuevo Orden Económico Internacional en la sesión del Grupo de los 77 celebrada en abril de 1974.

El derecho al desarrollo ha sido así considerado “hijo de la ideología del Nuevo Orden Económico Internacional”¹⁸⁰. De hecho, podemos encontrar referencias explícitas al NOEI en el texto de la Declaración de 1986: el artículo 3.3 dice que “[...] Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un *nuevo orden económico internacional* basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos” y en el Preámbulo ¶15 encontramos que la Asamblea General, “consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un

¹⁷⁸ Alwis, S., *La No-Alineación, un acercamiento evaluativo*, Nueva Sociedad, n 31-32, julio-octubre, 1977, pp. 176-183.

¹⁷⁹ Página oficial del Grupo de los 77 <http://www.g77.org/>

¹⁸⁰ Türk, D., “The Right to Development”, *Interights Bulletin*, n. 43, 1998/1999.

nuevo orden económico internacional’.

Los orígenes del Movimiento de los Países No Alineados, sin embargo, se remontan a unos años antes. Como es bien sabido, la división en bloques geopolíticos se produjo muy poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y con ella el nacimiento del bloque de países no dispuestos a caer en el área de influencia de ninguna de las superpotencias. Ya en 1954, en Colombo, el primer Primer Ministro de India, Jawaharlal Nehru, propuso al Primer Ministro chino Zhou Enlai cinco principios sobre los que fundamentar las relaciones indo-chinas¹⁸¹, que sirvieron como base para un encuentro preparatorio realizado poco después en Bogor, Indonesia, entre los días 28 y 29 de diciembre de ese mismo año, al que fueron invitados una treintena de países para consolidar las políticas internacionales del bloque afroasiático. Así, bajo el liderazgo de Nehru y del presidente anfitrión Sukarno, con el apoyo de Burma, Pakistán y Sri Lanka, se celebró en Indonesia, en 1955, entre los días 18 de abril y el 24 de abril, la conocida como Conferencia de Bandung, en la que participaron veintinueve países, básicamente del área afroasiática¹⁸². En ella se aprobaron los conocidos como principios de Bandung, que incluían: el respeto para los derechos humanos y los fines y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto por la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, el reconocimiento de los movimientos de independencia nacional, el reconocimiento de igualdad de razas y naciones, la abstención de interferencia en políticas domésticas, la promoción de los intereses mutuos y la cooperación, y el respeto por la justicia y las obligaciones internacionales.

Yugoslavia¹⁸³ no participó en la Conferencia de Bandung, pero desde que rompiera con la Unión Soviética en la época del Informbiró¹⁸⁴, se acercó, de la mano de Josip Broz *Tito*, a posiciones políticas cercanas con los países de Bandung. El 19 de julio de 1956, reunidos en la residencia presidencial de Brioni, en la costa adriática yugoslava, Tito, Nasser y Nehru emitieron la conocida como Declaración de Brioni¹⁸⁵, en la que se confirmaban los principios de Bandung, insistían en la coexistencia pacífica y activa, además de posicionarse en cuestiones como la aceptación de China en las Naciones Unidas o la consideración de que la política de enfrentamiento ente bloques contribuía a que no se alcanzara una solución al conflicto en Oriente Medio.

La Declaración de Brioni sirvió para acercar visiones y posiciones políticas entre estos países, que pronto se materializarían en acciones concretas. En septiembre de 1960, en la 15ª. Sesión Anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes de Egipto, India, Yugoslavia, Indonesia y Ghana presentaron, en una resolución separada, la

¹⁸¹ Los cinco puntos enunciados por Nehru fueron: respeto mutuo a la integridad territorial y a la soberanía de los estados, no agresión, no interferencia en asuntos domésticos, igualdad y mutuo beneficio y coexistencia pacífica.

¹⁸² Participaron Afganistán, Arabia Saudita, Camboya, Ceilán, China, Chipre, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, México, Nepal, Pakistán, Siria, Sudán, Tailandia, Turquía, Vietnam del norte, Vietnam del sur y Yemen

¹⁸³ Cambiaría oficialmente su nombre a República Socialista Federal de Yugoslavia el 7 de abril de 1963.

¹⁸⁴ Tras la ruptura con Stalin, no se normalizarían las relaciones hasta 1955, con Khrushchev ya en el poder.

¹⁸⁵ El texto completo se puede encontrar en http://www.znaci.net/00001/138_87.pdf (en serbocroata).
Accedido el 12 de noviembre de 2012).

conocida como Iniciativa de los Cinco, convencidos de que las grandes potencias eran incapaces de solucionar los problemas más urgentes que amenazaban la seguridad y la paz mundiales. Si bien la Iniciativa de los Cinco no consiguió una amplia votación -37 países del bloque occidental votaron en contra y los 17 del bloque comunista se abstuvieron-, los 41 votos a favor otorgaron cierta legitimidad a las posiciones de estos países no alineados, quienes, no considerándose como un bloque ellos mismos sino más bien un espacio de acercamiento o mediación entre bloques, comenzaron a verse a sí mismos como un decisivo factor positivo y pacífico en el escenario político mundial¹⁸⁶. Alentado por este relativo éxito de la Iniciativa de los Cinco y a la vista de las obstrucciones encontradas por las grandes potencia en las Naciones Unidas, Tito propuso celebrar una gran conferencia de líderes convencido de la necesidad de impulsar la coordinación política de los países no alineados, para lo cual se realizó un encuentro preparatorio en El Cairo, en junio de 1961, en el que se acordaron temas y participantes y se seleccionó Belgrado como sede de la conferencia.

La primera Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de Países no Alineados, celebrada en Belgrado del 1 al 6 de septiembre de 1961, marcó el nacimiento oficial del Movimiento de Países No Alineados. Participaron veinticinco países¹⁸⁷, además tres países observadores¹⁸⁸ y representantes de movimientos de liberación nacional y otras entidades. Sin ánimo de encontrar soluciones concretas a todos y cada uno de los conflictos internacionales, “particularmente disputas entre los dos bloques”, se posicionaron en todos los temas de gran interés internacional del momento, alcanzándose una alto grado de consenso que fue plasmado en dos documentos: el comunicado “Peligro de guerra y llamamiento en favor de la paz” y la más extensa “Declaración de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de Países No Alineados”. En la conferencia se apoyó el derecho al libre determinación y a la libre disposición de riquezas y recursos naturales y las declaraciones de independencia de los pueblos coloniales, además de insistir en el desarme, el respeto a la integridad territorial de los estados, la cooperación y la paz. En lo relacionado con el desarrollo, los países participantes reafirmaban su convicción de que:

“a) todas las naciones tienen el derecho a la unidad, autodeterminación, e independencia, en virtud de los cuales pueden determinar su estatus político y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural sin intimidación ni rémora;

b) todos los pueblos pueden, para sus propios fines, *disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de cualesquiera obligaciones surgidas de la cooperación económica internacional*, basadas en el principio de beneficio mutuo y el derecho internacional. Bajo ninguna circunstancia puede un pueblo ser privado de sus propios medios de subsistencia”.

Los miembros del MNA, en su mayoría países menos avanzados económicamente,

¹⁸⁶ Dimić, L. en Milošević, M (ed), “Prva konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd 1961” Archivos de Yugoslavia. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia. Belgrado, 2011.

¹⁸⁷ Afganistán, Argelia, Burma, Ceilán, Etiopía, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Yemen, Yugoslavia, Camboya, Chipre, Congo, Cuba, Líbano, Marruecos, Malí, Nepal, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Túnez y República Árabe Unida (unión de Egipto y Siria entre 1958 y 1961; el nombre siguió siendo el oficial de Egipto hasta 1971).

¹⁸⁸ Bolivia, Brasil y Ecuador

compartían la visión de que el desarrollo económico y social era una prioridad en sus estrategias geopolíticas, y que el imperialismo y la intervención de potencias extranjeras era la causa de subdesarrollo, además de un peligro para disfrutar de una paz duradera, que podría alcanzarse a través del desarme y el apoyo a la cooperación internacional entre estados.

En este sentido, durante el tercer día de la Conferencia, el Emperador de Etiopía Haile Selassie, especialmente consciente de la relación entre colonialismo, cooperación internacional y la lucha contra la pobreza, así como de los peligros de la cooperación bilateral para la independencia de los países menos favorecidos, declaró que:

Para acelerar nuestro desarrollo económico, la mayoría de nosotros requiere una considerable asistencia financiera externa. No debemos avergonzarnos de este hecho, particularmente cuando la pobreza y la ignorancia que sufren nuestros pueblos ha sido perpetuada a través de las deliberadas y prolongadas políticas de otros. (...). [Existe] el miedo de que dos programas de asistencia llevados a cabo en el mismo área por distintos grupos de poder opuestos entre sí resulte finalmente en la importación a nuestros países de la misma guerra fría de la cual queremos desligarnos, una argumento potente e irresistible a favor de la asistencia multilateral en detrimento de la bilateral. (...). Afortunadamente, existe en las Naciones Unidas, los medios efectivos para canalizar y administrar enormes programas de ayuda libres de estos peligros. Se ha logrado un considerable progreso en este área, y todos tenemos razones para alentarnos por el creciente papel que las Naciones Unidas está asumiendo en este campo (...). Al agrandar el propósito de las operaciones de Naciones Unidas en este campo de desarrollo económico, también fortalecemos su posición y aumentamos su estatura como fuerza internacional para la preservación de la paz (...).

Es una de las tragedias de nuestros días que mientras la mitad de la población del mundo es sacudida por un hambre nunca satisfecha y permanece golpeada por la pobreza, enferma e ignorante, las grandes potencias gastan enormes cantidades en armamento, dinero que, si fuera dirigido a satisfacer las necesidades humanas básicas de la gente más pobre del mundo podría transformar sus vidas y restaurar su dignidad humana (...).

La influencia de esta visión, compartida por los demás líderes presentes, configurará posiciones posteriores y, como veremos, influenciará decisivamente la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986. He aquí la coincidencia de la reflexión de Selassie respecto a la conveniencia de destinar al desarrollo los recursos destinados a la carrera armamentística en el Preámbulo de la Declaración de 1986: “reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo”.

Comparemos también el deseo expresado por los signatarios en el artículo 7 de la Declaración: “Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, *así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo*”.

Los términos de la Declaración de Belgrado afectaron como veremos a la concepción del desarrollo, de la cooperación y, eventualmente a la articulación del derecho al desarrollo como derecho humano, como veremos con detalle más adelante. Los problemas de

desarrollo de la mayoría de los países no alineados pusieron el desarrollo económico en el centro de su agenda. Así, a la Conferencia de Belgrado siguió otra de nivel ministerial y de expertos, celebrada en El Cairo en julio de 1962, precisamente de nombre "Conferencia sobre problemas del desarrollo económico", que concluyó con una elaboración de las propuestas de la Conferencia de Belgrado que incluían recomendaciones para incrementar el desarrollo y la cooperación técnica y financiera internacional para el desarrollo, paliar problemas del comercio internacional y apoyar el papel de Naciones Unidas. Poco después, en 1964, tuvo lugar en Ginebra la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que como hemos visto antes, fue impulsada por los países en vías de desarrollo, coincidentes con los miembros del MNA y firmes defensores de un nuevo orden económico internacional.

La segunda Conferencia Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados se celebró también en El Cairo, entre los días 5 y 10 de octubre de 1964, registrándose un importante incremento de países participantes: cuarenta y siete, además de observadores, diez, así como representantes de otros movimientos y organizaciones.¹⁸⁹ Como resultado de la Conferencia se aprobó el "Programa para la paz y la cooperación internacional". En dicho documento se analizan, entre otras, cuestiones relativas al desarme, la coexistencia pacífica y el papel de las Naciones Unidas, dedicándose un capítulo específico, el capítulo X, al "Desarrollo económico y cooperación", y otro, el capítulo XI, a la "cooperación cultural científica y educativa y consolidación de las organizaciones internacionales y regionales que trabajan por este fin". Ambos están estrechamente conectados, pues como explicitaron los signatarios del documento "los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de la humanidad están interrelacionados y requieren una acción concertada"¹⁹⁰, ya que "la cooperación en los campos de la cultura, la educación y la ciencia es necesaria para la consolidación de la libertad, la justicia y la paz, y para el progreso y el desarrollo". La íntima relación entre el MNA, la UNCTAD y el Grupo de los 77, así como el interés de fomentar el papel de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional como contrapeso al poder de los bloques, se hace patente a lo largo de todo el documento.

Los países del MNA consideraron entonces que, "mientras que la Conferencia de Ginebra marca el primer paso en la evolución de una nueva política económica internacional para el desarrollo y ofrece una sólida base para el progreso en el futuro", los resultados todavía no cubrían "los requerimientos esenciales de los países en vías de desarrollo"¹⁹¹ y por ello apoyaron la Declaración Conjunta del Grupo de los 77 emitida en la conclusión de la UNCTAD llamándolos a "fortalecer su solidaridad", a trabajar juntos en la siguiente sesión de la Asamblea General y a armonizar política y esfuerzos de cara a la siguiente Conferencia de la UNCTAD. Es interesante resaltar el compromiso de los participantes en la Conferencia de El Cairo con los procesos democráticos, que sin otorgar posiciones de privilegio, "son tan esenciales en la esfera económica como en la política" así como con la vinculación entre desarrollo económico y desarme, "convencidos de que el

¹⁸⁹ NAC-II/HEADS/5 El texto puede encontrarse (en inglés) en:

http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/2nd_Summit_FD_Cairo_Declaration_1964.pdf

¹⁹⁰ NAC-II/HEADS/5 p. 33

¹⁹¹ NAC-II/HEADS/5 p. 30

progreso hacia el desarme incrementa los recursos disponibles para el desarrollo económico”, apoyando la idea de que los recursos destinados entonces a armamento fueran destinados al “desarrollo de las menos desarrolladas partes del mundo y a la promoción de la prosperidad de la humanidad”¹⁹².

La cooperación internacional en el ámbito económico se consolida aquellos años como un instrumento de política internacional pero también apoyado en posiciones ético humanistas. Con el precedente del European Recovery Program, conocido como Plan Marshall, que había durado cuatro años desde su puesta en marcha en julio de 1947, y el Plan de Ayuda y Rehabilitación de las Naciones Unidas, para ayuda de los refugiados (1944-1947), se reforzaban ahora tanto las posiciones humanistas como las defensoras de una justicia global y, sobre todo, la cooperación sur-sur, fomentándose un sentimiento de solidaridad entre los países menos desarrollados, muchos de ellos de pasado colonial reciente. Desde este punto de vista, como ejemplo de cooperación internacional, podemos decir que, hacia 1967, Yugoslavia, como uno de los líderes del MNA, había facilitado a países menos desarrollados económicamente de Asia y África unos 600 millones de dólares de entonces en forma de ayuda o donaciones -lo que ahora llamaríamos ayuda bilateral no reembolsable- y créditos, lo que, según Tito, ponía a Yugoslavia en una posición de “fuerte factor político-moral en el mundo”¹⁹³.

También a iniciativa de Tito se lleva a cabo la siguiente Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, que tuvo lugar entre los días 8 y 10 de Septiembre de 1970, en Lusaka, Zambia¹⁹⁴. Registró un incremento de participantes: hasta cincuenta y cuatro, más ocho miembros observadores y un buen número de representantes de movimientos de liberación nacional y otras organizaciones. La Conferencia de Lusaka concluyó con una serie de resoluciones que abarcaban todos los temas más candentes del escenario internacional del momento. Destacamos, en lo relacionado con el nuestro, la primera, “Declaración de Lusaka sobre la paz, la independencia, el desarrollo, la cooperación y la democratización de las relaciones internacionales” y la resolución número 14, “Declaración de Lusaka sobre el no alineamiento y el progreso económico”.

Respecto a la primera, los países no alineados convenían en ella acerca de “la necesidad de realizar el derecho fundamental de todos los pueblos a su autodeterminación, así como la democratización de las relaciones internacionales, la promoción de un rápido crecimiento económico de los países en desarrollo y considerar las posibilidades de una mayor consulta y cooperación entre países no alineados y el fortalecimiento de las Naciones Unidas”. Resaltaban asimismo que la diferencia económica entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se estaba incrementando, “los ricos se hacen más ricos, los pobres permanecen pobres”. Es destacable la vinculación que hacen entre el desarrollo y la igualdad entre estados en el plano internacional: en su opinión, a

¹⁹² NAC-II/HEADS/5 p. 32

¹⁹³ Stanković, S., *Tito and Non-Alignment*. Radio Free Europe Research, 1967. Se puede encontrar en Open Society Archives <http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/133-5-9.shtml> (accedido el 12 de septiembre de 2012)

¹⁹⁴ Los textos completos pueden encontrarse en:

<http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/32710/1/SAIIA%20RESOLUTIONS%20OF%20THE%20THIRD%20CONFERENCE%20OF%20NON-ALIGNED%20STATES.pdf?1>

los países en desarrollo “se les niega su derecho a la igualdad y a la efectiva participación en el progreso internacional. La revolución tecnológica, que es ahora el monopolio de los ricos, debería constituir una de las principales oportunidades para el progreso de los países en desarrollo. La solidaridad mundial no es sólo un llamamiento, sino una necesidad primordial” ya que “es intolerable que hoy algunos disfruten una existencia confortable y sin problemas a expensas de la pobreza y el infortunio de los otros”. Para paliar esto, proponían una serie de medidas, que incluían “salvaguardar la paz internacional y la seguridad a través del desarrollo de las fortalezas sociales, económicas, políticas y militares de cada país”, asegurar “el derecho de todos los países a participar en las relaciones internacionales en pie de igualdad, lo cual se consideraba “imperativo para la democratización” de las mismas, intensificar los esfuerzos coordinados “entre los países en desarrollo para llevar a cabo cambios estructurales en la economía mundial y para el establecimiento de una cooperación internacional que reduzca la diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo”, y fortalecer y expandir progresivamente “los ámbitos dentro de marcos internacionales, regionales y bilaterales”.

Por otro lado, la resolución intitulada “Declaración de Lusaka sobre el no alineamiento y el progreso económico” expresa “la determinación de los países no alineados de alcanzar la emancipación económica, fortalecer su independencia y contribuir a la paz mundial y al progreso económico y social para el beneficio de toda la humanidad” conscientes de la “rápida ampliación de la brecha entre las economías de los países ricos y pobres, lo que constituye una amenaza a la independencia de los países en desarrollo y a la paz internacional y a la seguridad”.

Para los estados declarantes, no sólo el creciente flujo financiero desde países menos desarrollados a los más desarrollados en forma de deuda, dividendos, royalties y servicios comerciales y financieros, es causa de dependencia de los primeros respecto de los segundos, sino que esa misma dependencia constituye una “debilidad estructural” del presente orden económico mundial. Esta desigualdad tiene para ellos un origen colonial, por lo que no es raro que vieran esta dependencia como la continuación del colonialismo por otros medios, por medios de presión económica y financiera en vez de exclusivamente político-militar. También la relación expresa entre estas dos vertientes del colonialismo fue plasmada en el documento afirmando que la “ocupación de partes de territorios de los países no alineados en vías de desarrollo les priva de sus recursos naturales y constituye una rémora para su desarrollo”. De manera relacionada, identificando la creciente brecha tecnológica como una de las causas de subdesarrollo (debemos añadir, tanto desde el punto de vista comparativo, no como causa directa del subdesarrollo, como desde el punto de vista de la dependencia que se podría generar de unos respecto a otros) es interesante notar que los signatarios identificaban la necesidad de prever un emergente “colonialismo tecnológico”.

A partir de éstas y otras consideraciones adicionales, la Conferencia de Lusaka propone una serie de medidas para paliar las inequidades económicas a nivel global –que incluyen desde disminución de tarifas aduaneras y otras barreras comerciales, hasta condonaciones o quitas de deuda, pasando por la distinción entre la transferencia de recursos destinados al desarrollo de las inversiones de motivos meramente comerciales-, insistiendo en la

importancia del papel de Naciones Unidas, (ya hemos dicho que éste era el escenario más apropiado para el fomento de las políticas de los no alineados habida cuenta de la presión de los bloques de las superpotencias) y estableciendo cuatro objetivos finales: (a) la cooperación internacional para el desarrollo económico, siendo éste “no un proceso de relación unilateral donante-donado”, ya que “el desarrollo de los países en desarrollo es en beneficio de todo el mundo, incluyendo las naciones más avanzadas”; (b) una cooperación económica internacional para promocionar una división racional del trabajo y un reparto humano de sus frutos, así como fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de ejercitar plenamente su soberanía sobre sus recursos naturales; (c) una rápida transformación del sistema económico mundial a través de la adopción de políticas convergentes y concomitantes y medidas para que los países desarrollados y en desarrollo se asocien, sobre la base de la igualdad y el mutuo beneficio; (d) dado que “el propósito esencial del desarrollo es proveer una oportunidad igual para una vida mejor a todos”, el cuarto fin propuesto “debería ser, por tanto, acelerar significativamente el crecimiento del producto bruto per cápita para que sea posible asegurar para todos un mínimo estándar de vida consistente con la dignidad humana”.

Es en este contexto en el que poco después de Lusaka, en 1972, M’Baye formularía el desarrollo como un derecho humano, un año antes de que en la Conferencia de Argelia de 1973 se formulara el NOEI. La influencia del MNA es evidente no sólo en la construcción del contexto y la base discursiva sobre la que M’Baye formula el derecho al desarrollo en 1972 sino que los mismos conceptos establecidos en los textos de las conferencias de los países no alineados desde sus inicios, sobre los que se había alcanzado consenso, influenciaron la misma letra de la declaración de 1986.

Para ilustrar de modo orientativo la influencia de las posturas de los países del MNA en la concepción del derecho al desarrollo, he elaborado una tabla comparativa con algunos de los conceptos principales que podemos encontrar en la Declaración de la Conferencia de Belgrado de 1961 y en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 :

Concepto	Declaración sobre el derecho al desarrollo adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986	Declaración de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Alineados, Belgrado, 1-6 de septiembre de 1961.
Derecho a la autodeterminación de los pueblos	<p>Preámbulo.- Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural (...)</p> <p>Artículo 1.2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.</p> <p>Artículo 5. Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la</p>	<p>El mundo de hoy en día está caracterizado por la existencia de distintos sistemas sociales. Los países participantes no consideran que estas diferencias constituyan un obstáculo insalvable para la estabilización de la paz, en el caso de que se eliminen los intentos de dominación e interferencia en el desarrollo internacional de otros pueblos.</p> <p>Todos los pueblos y naciones tienen que resolver los problemas de sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, de acuerdo con sus propias condiciones, necesidades y potencialidades</p> <p>Además, cualquier intento de imponer a los pueblos, por fuerza y desde el exterior, un</p>

	<p>negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.</p>	<p>sistema social o político u otro es una amenaza directa a la paz mundial.</p> <p>Los países participantes consideran que bajo estas condiciones los principios de la coexistencia pacífica son la única alternativa a la Guerra fría, y a una posible catástrofe nuclear. Además estos principios –que incluyen el derecho a la autodeterminación, a la independencia, y a la libre determinación de las formas y métodos de desarrollo económico, social y cultural– deben ser la única base de todas las relaciones internacionales.</p> <p>La cooperación internacional activa en los campos de intercambio material y cultural entre los pueblos es el medio esencial para el fortalecimiento de la confianza en la posibilidad de una coexistencia pacífica entre estados con diferentes sistemas sociales.</p> <p>...las políticas de coexistencia equivale al esfuerzo colectivo hacia la eliminación de las injusticias históricas y la liquidación de la opresión nacional, garantizando, al mismo tiempo, a cada pueblo su desarrollo independiente.</p> <p>...los gobiernos deben abstenerse del uso de ideologías con el fin de la guerra fría, ejerciendo presión o imponiendo su voluntad.</p> <p>(...)</p> <p>a) Todas las naciones tienen derecho a la unidad, auto-determinación, e independencia en virtud de cuyo derecho pueden determinar su estatuto político y proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural sin intimidación o impedimento.</p> <p>(...) expresan su determinación de que no se produzca intimidación, interferencia o intervención alguna en el ejercicio del derecho de auto determinación de los pueblos, incluido su derecho a seguir políticas constructivas e independientes para el logro y conservación de su soberanía.</p>
<p>Respeto a los sistemas internos de desarrollo y liderazgo de los países receptores</p>	<p>Artículo 2.3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.</p> <p>Artículo 8.1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.</p>	<p>(...)Declaran que los países receptores deben determinar libremente el uso de las asistencia económica y técnica que reciban, y diseñar sus propios planes y asignar prioridades de acuerdo a sus necesidades.</p>

Soberanía sobre las propias riquezas y recursos naturales	<p>Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales,</p> <p>Art1.2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.</p>	<p>b) Todos los pueblos pueden para sus propios fines, disponer libremente de su riqueza y recursos naturales sin perjuicio de cualesquiera obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional, basada sobre el principio de beneficio mutuo y en el Derecho Internacional. En ningún caso puede un pueblo ser privado de sus propios medios de subsistencia. Los países participantes creen que el derecho de Cuba como el de cualquier otro país a elegir libremente su sistema político y social de acuerdo con sus propias condiciones, necesidades y posibilidades debe ser respetado.</p>
Responsabilidad conjunta nacional e internacional del desarrollo	<p>Artículo 2.2 todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.</p> <p>Artículo 4.1 Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo.</p> <p>Artículo 10. Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional.</p>	<p>“Los participantes en la Conferencia consideran que se deben realizar esfuerzos para suprimir el desequilibrio económico heredado del colonialismo y del imperialismo.</p> <p>Es necesario cerrar, a través de un desarrollo económico, industrial y agrícola acelerado, la siempre creciente brecha en los estándares de vida entre los pocos países más avanzados económicamente y los numerosos países menos desarrollados.</p> <p>Los participantes en la Conferencia recomiendan el establecimiento inmediato y la operatividad del Fondo de Desarrollo del Capital de Naciones Unidas.</p> <p>Además acuerdan exigir justos términos de comercio para los países menos desarrollados y, en particular, esfuerzos constructivos para eliminar las excesivas fluctuaciones en el comercio primario de mercancías y las medidas restrictivas y prácticas que adversamente afectan el comercio y los beneficios de los nuevos países en desarrollo. En general reclaman que los frutos de la revolución tecnológica y científica sea aplicada en todos los campos del desarrollo económico para acelerar el logro de la justicia social internacional.”</p>
Desarrollo como instrumento para la paz	<p>(...)Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,</p> <p>(...)</p>	
Desarme, paz, lucha contra el colonialismo	<p>(...) Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de racismo y</p>	<p>(Observando) que erradicar básicamente la fuente de conflicto es erradicar el colonialismo en todas sus manifestaciones y</p>

<p>mo, derecho integridad territorial, respeto a los derechos humanos para lograr el desarrollo (condicion es del desarrollo)</p>	<p>discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial y las amenazas de guerra, contribuirá a <i>establecer circunstancias propicias para el desarrollo</i> de gran parte de la humanidad. (...)</p> <p>(...) Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales para la realización del derecho al desarrollo (...)</p> <p>(...)Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo, (...)</p> <p>(...)Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos Estados, (...)</p> <p>Artículo 3.1 Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.</p> <p>Artículo 7</p> <p>Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo.</p>	<p>aceptar y realizar una política de coexistencia pacífica en el mundo.</p> <p>Que, si se guía por estos principios, el período de transición y conflicto puede establecer unas bases de cooperación y hermandad entre las naciones(...)</p> <p>(...)</p> <p>Los participantes en la Conferencia están Convencidos de que la emergencia de países recién liberados ayudará a estrechar el área entre los bloques antagonistas, fomentando así todas las tendencias que fortalecen la paz y promueven una cooperación pacífica entre naciones independientes e iguales. (...)</p> <p>(...) Los grandes cambios sociales que están teniendo lugar en el mundo provocan necesariamente empeoramientos periódicos en el mundo; se acelera el fin de la época de la opresión extranjera de los pueblos, y ello hace que la cooperación pacífica entre los pueblos, basada en los principios de independencia e igualdad de derechos, sea condición esencial para su igualdad y progreso.</p> <p>Se han conseguido grandes progresos en el desarrollo de la ciencia, la técnica y en los medios de desarrollo económico. (...)</p> <p>“Los participantes en la Conferencia consideran que el desarme es una necesidad imperativa y la tarea más urgente de la Humanidad”</p>
<p>Cooperación internacional como instrumento de desarrollo</p>	<p>Artículo 3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.</p> <p>Artículo 3.3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.</p> <p>Art. 4.2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global.</p>	<p>“Invitan a todos los países en vías de desarrollo a cooperar efectivamente en los terrenos económico y comercial así como afrontar las políticas de presión en la esfera económica, así como los resultados dañinos que puedan ser creados por los bloques económicos de los países industrializados.</p> <p>Invitan a todos los países implicados que consideren convenir, lo antes posible, una conferencia internacional para discutir sus problemas comunes y alcanzar un acuerdo sobre las vías y medios para repeler todo daño que pueda dificultar su desarrollo; y discutir y acordar las medidas más efectivas para asegurar la realización de su desarrollo económico y social.”</p> <p>“Los grandes cambios sociales que están teniendo lugar en el mundo provocan necesariamente empeoramientos periódicos en el mundo; se acelera el fin de la época de la opresión extranjera de los pueblos, y ello hace que la cooperación pacífica entre los pueblos, basada en los principios de independencia e igualdad de derechos, sea condición esencial para su igualdad y progreso.</p> <p>Se han conseguido grandes progresos en el desarrollo de la ciencia, la técnica y en los medios de desarrollo económico.”</p>

Nuevo orden mundial	(...) Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo orden económico internacional (...)	Observando que existen crisis que llevan hacia un conflicto mundial en la transición de un viejo orden basado en el dominio a un orden nuevo basado en la cooperación entre las naciones, fundado en la libertad, igualdad y justicia social para la promoción de la “prosperidad;
Llamamiento a remover los obstáculos al desarrollo (Condiciones del desarrollo II)	Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa realización del ser humano y de los pueblos (...) Artículo 6.3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.	“Invitan a todos los países en vías de desarrollo a cooperar efectivamente en los terrenos económico y comercial así como afrontar las políticas de presión en la esfera económica, así como los resultados dañinos que puedan ser creados por los bloques económicos de los países industrializados.

A estas coincidencias no casuales podríamos sin duda añadir las referencias explícitas al NOEI que pueden encontrarse en la Declaración de 1986¹⁹⁵ a las que nos hemos referido anteriormente. Podemos concluir que algunos de los objetivos perseguidos por el MNA han sido aceptados globalmente como líneas guía en la concepción actual de la Cooperación Internacional al Desarrollo, ya que no solamente influenciaron la Declaración sobre el derecho desarrollo de 1986, sino, consecuentemente, todos los textos internacionales relacionados adoptados posteriormente. Por supuesto hay importantísimos conceptos que se recogen en la Declaración de 1986 y no en la de 1961, como el reconocimiento que encontramos en el Preámbulo de la Declaración de 1986 de que “el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”, concepto de desarrollo como proceso participativo que encontramos también en el artículo 8.3 de la Declaración de 1986: “los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos”.

Aunque encontramos referencias a la Carta de Naciones Unidas y a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no podía recordarse “las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ya que éstos no habían sido todavía adoptados. Tampoco por último encontraremos referencias, obviamente, al desarrollo como derecho humano y, por tanto, a su interdependencia e indivisibilidad con los demás derechos humanos como sí encontramos en la Declaración de 1986. Pero aún así, la

¹⁹⁵ Vid. Preámbulo y artículo 3.3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986

influencia es evidente. Tal vez la falta de conocimiento general sobre este hecho haya contribuido, por otro lado, a mantener estos principios promovidos por el MNA una vez que el movimiento ha ido decayendo en importancia política como tal tras la desaparición del mundo polarizado de la Guerra Fría.

En cualquier caso, es posible trazar una línea de influencia política y conceptual desde los inicios del MNA en la cooperación al desarrollo en su forma actual con el derecho al desarrollo de trasfondo. Desde el punto de vista de políticas, en la Conferencia de Belgrado, por ejemplo, se recomendó “el inmediato establecimiento y operación de un Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización”. Este organismo, vinculado a PNUD, fue creado por resolución de la Asamblea General en 1966 para asistir al desarrollo de la economía de los países en desarrollo, apoyando financieramente con donaciones y préstamos, mandato que fue modificado en 1974 para enfocarse exclusivamente a la inclusión financiera en los países más pobres¹⁹⁶. Hoy trabaja en 40 de los 48 países más pobres del mundo y en zonas de conflicto y post-conflicto. Desde el punto de vistas conceptual, por ejemplo, cuando en 2005 la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda -instrumento fundamental de la actual Cooperación Internacional para el Desarrollo- proclamaba como uno de sus principales indicaciones que “los países en desarrollo deben liderar sus propias políticas de desarrollo y estrategias y gestionar su propio trabajo de desarrollo sobre el terreno”, ya que “esto es esencial si la ayuda debe contribuir a un desarrollo verdaderamente sostenible”, esto, en realidad, no era sino una reelaboración de uno de los principios proclamados por el MNA durante la Conferencia de Belgrado en 1961: “Los países participantes en esta Conferencia declaran que los países receptores deben ser libres para determinar el uso de la asistencia económica y técnica que reciban y elaborar sus propios planes y asignar prioridades de acuerdo con sus necesidades”.

§2.7 La contribución yugoslava al derecho al desarrollo

§2.7.1 Aportación de la República Socialista Federal de Yugoslavia al desarrollo del Derecho Internacional

La República Socialista Federal de Yugoslavia¹⁹⁷ fue muy activa en sus relaciones exteriores, tanto en el seno de las Naciones Unidas y del Grupo de los 77 como en el Movimiento de Países No Alineados, siendo miembro fundador de todos ellos. Tanto desde el punto de vista doctrinal como político, Yugoslavia contribuyó significativamente al avance del Derecho Internacional, destacando su actitud pacífica y constructiva.

Para el profesor Milan Šahović, conocido jurista serbio, estudioso de la historia y evolución de la doctrina de Derecho Internacional yugoslava, ex director del Instituto de Política Internacional y Economía en Belgrado, y miembro entre 1974 y 1981 de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la explicación para la

¹⁹⁶ Para más información: www.uncdf.org

¹⁹⁷ Nombre oficial desde el 7 de abril de 1963

excepcional implicación de la antigua Yugoslavia en el desarrollo del Derecho Internacional “debe buscarse fundamentalmente en el proceso histórico de su constitución. Creado durante la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra la ocupación nacionalsocialista y fascista, combinada con una guerra civil interna, el joven estado federado de Yugoslavia, como uno de los miembros originales de las Naciones Unidas, vio en la Carta de las Naciones Unidas la fundación de un nuevo orden legal internacional (...). Yugoslavia comprendió que el estricto respeto de la Carta y el Derecho Internacional general proveían algunas garantías fundamentales de su integridad territorial e independencia política”¹⁹⁸.

La política exterior yugoslava estuvo así caracterizada por promover una cooperación amplia en el nivel internacional junto con un progresivo avance tanto en las normas de Derecho Internacional como en la eficacia de dichas normas. A partir de los años sesenta mantuvo abiertos canales diplomáticos tanto con los países no alineados como con los países de los bloques, y su pasaporte era aceptado sin visado en la mayoría de los estados del mundo —excluyendo Estados Unidos, Albania, China, Israel, Grecia o España—. Con España las relaciones se empezaron a normalizar tras la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, con la visita a Belgrado del director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aguirre de Cárcer, en 1976¹⁹⁹.

Además de promover una más amplia cooperación a nivel global, Yugoslavia promovió el consenso y la resolución pacífica de las disputas internacionales, oponiéndose firmemente a todo intervencionismo. En lo referente al desarrollo, como hemos visto, promovió la progresiva regulación de las relaciones económicas internacionales y la extensión de los avances científicos y técnicos para el beneficio de todas las naciones. Convencida de la relación entre el desarrollo y la paz, en ambos sentidos, promovió tanto un uso pacífico de la tecnología, el desarme como condición de la paz y del desarrollo, como el desarrollo como medio para alcanzar una paz sostenible. Esta visión, producto de sus propias necesidades de política interna y geoestrategia internacional, se proyectó con fuerza en las Naciones Unidas ya que era en este escenario donde se hacía especialmente fuerte, contando con el apoyo numérico de los países no alineados, por lo que no ha de sorprendernos su insistencia en el respeto estricto de la Carta de las Naciones Unidas como principal fuente formal del Derecho Internacional y en el desarrollo del mismo a partir de los principios consagrados en la Carta. Yugoslavia se interesó particularmente en el desarrollo del principio de coexistencia pacífica consagrado en la Carta, especialmente, como recuerda Šahović²⁰⁰, a partir de la 47ª sesión de la Asociación de Derecho Internacional, celebrada en 1956 en Dubrovnik, en la que se iniciaron más detalladamente los análisis doctrinales respecto a este tema y que desembocó en la participación activa en el Comité Especial del Sexto Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la elaboración de los principios básicos de la Carta, usando los métodos de codificación y desarrollo progresivo. Uno de los logros más sobresalientes fue la adopción de la mencionada “Declaración sobre los principios de derecho internacional

¹⁹⁸ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija i međunarodno pravo“, *Međunarodni problemi*, vol. 46, n. 3, 1994, pp 437-451.

¹⁹⁹ El País. Edición impresa. Jueves, 13 de mayo de 1976.

²⁰⁰ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija...”, op. cit., pp. 437-451.

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” adoptada en la Sesión de la Asamblea General celebrada con ocasión del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas en 1970.

También es destacable la aportación de Yugoslavia a la definición del concepto de agresión y a la adopción de la “Declaración sobre la definición de agresión”²⁰¹, cuando presidía la sesión del Sexto Comité en 1974, así como su trabajo para la adopción de la “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales” de 1982²⁰² reafirmando la relación de interdependencia entre los principios de prohibición de la amenaza o uso de la fuerza y el arreglo pacífico y el principio de autodeterminación. Si analizamos los principios aprobados en el Acta Final de Helsinki de 1975 (como culminación de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, cuyas sesiones se sostuvieron desde 1973 hasta 1975), veremos una reafirmación de los principios hasta ahora repetidos hasta la saciedad en el seno de las Naciones Unidas y entre los países del MNA: igualdad soberana y respeto de los derechos inherentes a la soberanía; abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza; inviolabilidad de las fronteras; integridad territorial de los estados; arreglo de las controversias por medios pacíficos; no intervención en los asuntos internos; respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; igualdad de derechos y derecho a la autodeterminación de los pueblos; cooperación entre los estados; y cumplimiento de buena fe de las obligaciones del Derecho Internacional. Respecto a la seguridad colectiva, Šahović considera destacable²⁰³ las propuestas de la República Socialista Federal de Yugoslavia a la Asamblea General de las Naciones Unidas de las resoluciones sobre “Deberes de los Estados en caso de ruptura de hostilidades”²⁰⁴ y el “Establecimiento de una comisión permanente de buenos oficios”²⁰⁵.

De manera relacionada con la actividad diplomática en favor del principio de coexistencia pacífica y las políticas de seguridad, no es de extrañar que Yugoslavia estuviera también activa en el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, pudiendo mencionar su participación en la Conferencia de Ginebra que tuvo lugar entre 1974 y 1977, siendo uno de los primeros países en firmar y ratificar los Protocolos Adicionales I y II de 1977 junto con el Convenio de 1949.

Respecto a los derechos humanos, a pesar de ser Yugoslavia uno de los quince miembros de la Comisión de Derechos Humanos encargado de los trabajos preparatorios del borrador de la DUDH, se abstuvo en la votación de la Comisión del 18 de junio de 1948, absteniéndose también en la votación para la adopción del texto final el 10 de diciembre del mismo año²⁰⁶. Tras superar lo que Šahović ha descrito como “un corto período de escepticismo, manifestado en forma de abstención de la aceptación de la Declaración

²⁰¹ Resolución 3314 (XXIX), adoptada el 14 de diciembre de 1974

²⁰² A/RES/37/10 15 de noviembre de 1982

²⁰³ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija...”, op. cit., pp. 437-451.

²⁰⁴ 378 (V), 17 de noviembre de 1950

²⁰⁵ Ídem. 379 (V), 17 de noviembre de 1950

²⁰⁶ Los otros países que se abstuvieron fueron la Unión Soviética, Ucrania SSR, Bielorusia SSR, República Popular de Polonia, Checoslovaquia, Unión Sudafricana y el Reino de Arabia Saudí. No hubo votos en contra. España ingresó en las Naciones Unidas en 1955.

Universal de Derechos Humanos”²⁰⁷, Yugoslavia pasó a ser muy activa en los órganos relacionados con la protección de los derechos humanos, participando en el borrador de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York de 1966²⁰⁸, que entraron en vigor en 1976 y Yugoslavia ratificó en 1971²⁰⁹. Firmó y ratificó la mayoría de las convenciones de derechos humanos: veintidós convenciones con una excepción²¹⁰: la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961²¹¹.

En la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” adoptada por la Asamblea General en 1979, que entró en vigor en 1981, Yugoslavia contó en los grupos de trabajo con la activa participación de Zagorka Ilić, que también participó en el proceso de adopción de la Declaración sobre el derecho al desarrollo. Si se permite la digresión, podemos apreciar la coherencia en el discurso de la vinculación entre desarrollo y derechos humanos en todos los textos en los que participó Yugoslavia. Recoge la CEDAW en su preámbulo que: “convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz”

En sus últimos años, Yugoslavia apoyó decisivamente la redacción de otras convenciones para protección de los derechos humanos, como la “Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas”, finalmente adoptada en 1992²¹², en cuyo Grupo de Trabajo participó también, por cierto, Danilo Türk²¹³, así como en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, que analizaremos con más profundidad.

La delegación yugoslava en las Naciones Unidas fue también activa en otros ámbitos, como el Derecho del Mar, participando con interés en las Conferencias de Ginebra sobre Derecho del Mar, o en la redefinición de los privilegios diplomáticos, cuya propuesta, presentada en 1952 ante la Asamblea General desembocó en la adopción en 1961 en Viena de la “Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos”, fue adoptada en 1961 en Viena como resultado de esta iniciativa, y en 1969 la “Convención sobre misiones especiales”, preparada por el profesor Milan Bartoš, entonces representante de Yugoslavia en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.

Por último quisiera destacar, aunque habremos de volver sobre este tema más adelante, el

²⁰⁷ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija i međunarodno pravo“, *Međunarodni problemi*. Vol. 46, N. 3, 1994. Pp 437-451.

²⁰⁸ Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

²⁰⁹ Puede encontrarse (en lengua serbocroata) los instrumentos de derechos humanos ratificados por Yugoslavia en http://www.b92.net/specijal/ljudska_prava/dokumenti.php Accedido el 4/12/2012

²¹⁰ Convención para reducir los casos de apatridia

²¹¹ Adoptada el 30 de agosto de 1961, en cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1954, por una Conferencia de Plenipotenciarios reunida en 1959 y en 1961. Entró en vigor el 13 de diciembre de 1975.

²¹² Adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1992 (A/RE/47/135)

²¹³ Yearbook of the United Nations. 45.1991(1992). Página 1056.

activo interés de Yugoslavia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado²¹⁴ y que concluyó con aprobación de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado el 7 de abril de 1983. La representación yugoslava presidió el Comité del Todo (Committee of the Whole), órgano de trabajo plenario de la Conferencia, y firmó la Convención. Sin embargo, la Convención de Viena de 1983 no entró en vigor. A pesar de requerir sólo quince estados para hacerlo, todavía no lo ha hecho. Según el diplomático británico Anthony Aust²¹⁵ fueron varias las causas para su fallida entrada en vigor, incluyendo el hecho de que, a pesar de tratarse del desarrollo progresivo del derecho y, por tanto, no coincidente totalmente con el derecho consuetudinario internacional, el texto era demasiado vago y carente de practicidad, inclinándose este autor, muy en la línea tradicional británica, por las soluciones casuísticas. Subrayemos que, a pesar de los esfuerzos de Yugoslavia para la adopción de este tratado, no fue aplicado en el caso de su propia desintegración.

La República Socialista Federal de Yugoslavia tuvo, por tanto, un papel activo y coherente en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Sin embargo, como destaca el profesor Šahović²¹⁶, éste “fue aplicado en el ordenamiento jurídico interno. La posición declarativa era la predominante. La aceptación de las obligaciones internacionales no era seguida de la adaptación sistemática de la legislación interna. Las garantías legales para su implementación por parte de los órganos estatales, y particularmente los órganos administrativos no eran suficientemente precisas y sólidas”²¹⁷.

Las reticencias a perder soberanía le hicieron oponerse a mecanismos internacionales de control: no se declaró sobre la adopción del art. 90 del Protocolo Adicional sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados (I), en base al cual se fundó la Comisión para establecimiento de hechos sobre las violación del derecho humanitario internacional, ni aceptó nunca la cláusula facultativa sobre la competencia obligatoria del art. 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, podemos decir que, paradójicamente, a nivel constitucional se produjo una evolución tendente al fortalecimiento del Derecho Internacional al interno del ordenamiento jurídico yugoslavo. Las reformas constitucionales 1963 y 1974 incluyeron el deber de respeto e implementación de los tratados internacionales y los Principios Generales de Derecho Internacional²¹⁸. El Art. 210 de la Constitución de 1974 preveía la aplicación directa de los tratados internacionales por parte de tribunales después de su entrada en vigor y publicación, y el artículo 271 de la Constitución del 1974 otorgó a las repúblicas federadas el derecho de establecer relaciones con comunidades similares en otros países,

²¹⁴ Celebrada en Viena del 1 de marzo al 8 de abril de 1983

²¹⁵ Aust, A. “Comentario a la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado”.

Puede consultarse en http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/vcssrspad/vcssrspad_s.pdf
Acceso 04/12/2012.

²¹⁶ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija...”, op. cit., pp. 437-451.

²¹⁷ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija...”, op. cit., pp. 437-451.

²¹⁸ Ver Capítulo VII de la Constitución de 1974. El Art. 210 de la Constitución preveía la aplicación directa de los tratados internacionales por parte de tribunales después de su entrada en vigor y publicación

si bien la competencia de representación exterior siempre fue exclusiva de la administración central del estado.

En conclusión, Yugoslavia participó activamente en el desarrollo del Derecho Internacional particularmente en el desarrollo progresivo de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, pero esta actitud constructiva en torno a principios como la autodeterminación, la integridad territorial, la coexistencia pacífica, el desarrollo, etc. o derechos como el derecho de las minorías y grupos étnicos, no fueron aplicados a nivel interno. Por diversas razones, y de manera cruelmente irónica, si se me permite, a nivel interno este trabajo fue devorado por el monstruo de la guerra, dejando tras de sí una serie de países que en su política exterior más concentrados en sus intereses que en el desarrollo del Derecho Internacional global, más escépticos si se quiere, pero al mismo tiempo con menos peso diplomático a escala internacional.

Esta triste ironía se dio también, como veremos, respecto al derecho al desarrollo: mientras Yugoslavia trabajó decisivamente por el concepto del desarrollo como derecho humano y la expansión de la cooperación internacional para el desarrollo, esta aportación yugoslava se perdió en el tiempo y en la historia doctrinal del Derecho Internacional. En la práctica, muy poco tiempo después de la Declaración de 1986, los países de la ex Yugoslavia pasaron a raíz de la desintegración y los conflictos a ser receptores de una ayuda internacional, en virtud de un derecho que había ayudado a declarar como derecho humano universal. En mis años trabajando en cooperación al desarrollo sobre el terreno en los países de la antigua Yugoslavia, pude observar, si se me permite la licencia, que entre locales y extranjeros, pocos en el sector de la cooperación sabían de ello.

Si hemos analizado la aportación yugoslava al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, enfoquémonos a continuación en nuestro objeto de estudio y analicemos la contribución de la República Socialista Federal de Yugoslavia a la declaración del derecho al desarrollo como derecho humano.

§2.7.2 La contribución yugoslava a la declaración del derecho al desarrollo como derecho humano

Como miembro del MNA y del Grupo de los 77, Yugoslavia apoyó firmemente el reconocimiento del derecho al desarrollo. De hecho, Yugoslavia presidió el Grupo de los 77 entre los años 1985 y 1986, cuando su implicación se hizo fundamental para la adopción de la Declaración sobre el derecho al desarrollo. Como contexto recordemos que para Šahović²¹⁹, en su participación “en la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, las delegaciones y los juristas yugoslavos tuvieron una posición equilibrada, teniendo en cuenta los intereses de la economía mundial y la necesidad de fortalecimiento de los componentes universalistas dentro del derecho económico internacional”.

Como veremos a continuación, las posiciones yugoslavas tuvieron una fuerte influencia

²¹⁹ Šahović, M., “Bivša jugoslovenska federacija...”, op. cit., pp. 437-451.

tanto en la génesis como en la forma del derecho al desarrollo: su documento principal, la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, estuvo basada en el borrador elaborado por su delegación en Nueva York.

A comienzos de los años ochenta del pasado siglo, la propuesta de M'Baye de considerar el desarrollo como un derecho humano comenzó su andadura para tomar forma legal. En marzo de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “expresó una profunda preocupación sobre la situación relacionada con la consecución de los objetivos de la Declaración de la Asamblea General de 1974 y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Mundial”²²⁰ y acordó crear un Grupo de Expertos para el estudio del derecho al desarrollo²²¹. El Comité Económico y Social nombró entonces²²² quince expertos internacionales –uno de ellos de Yugoslavia– liderados por el Embajador Akoune Sene de Senegal, para conducir un estudio sobre “los problemas especiales a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales”²²³.

Entre los años 1981 y 1984, el Grupo de Trabajo sostuvo nueve sesiones, sobre las que se basó un Informe sobre el derecho al desarrollo que fue enviado para consideración de la Comisión durante su 41era²²⁴. Durante este tiempo, la delegación de Yugoslavia fue muy activa.

En 1981, Danilo Türk, el que fuera después Presidente de Eslovenia (diciembre 2007 a diciembre de 2012), fue elegido Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, puesto que mantuvo hasta 1984. Fue también miembro alterno entre 1984 y 1988. El mismo Türk presentó un borrador no oficial del Preámbulo de la Declaración sobre el derecho al desarrollo en una fecha tan temprana como el 6 Julio 1982²²⁵.

El 7 de marzo de 1985, el representante de Yugoslavia en la Comisión, Ivan Tosevski, envió una carta a nombre del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, adjuntando en nombre de su delegación un borrador de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, para que fuera considerada para la 41era Sesión, solicitando también publicar y circular ambos documentos, el borrador y la carta, como documentos oficiales durante la sesión.

El 8 de marzo del mismo año, el representante observador de Cuba presentó una Resolución sobre el derecho al desarrollo, apoyada por varios miembros de la Comisión. Sin embargo, el 13 de marzo la Delegación de Senegal presentó un borrador de

²²⁰ UN Yearbook 1981, P. 921

²²¹ Resolución 36 (XXXVII)

²²² Resolución 1981/149

²²³ UN Doc: E/DEC/1981/149

²²⁴ E/CN.4/1985

²²⁵ Preámbulo de la Declaración sobre el derecho al desarrollo : borrador no oficial UN Doc. Symbol: E/CN.4/AC.39/1982/7 UN Doc: E/CN.4/AC.39/ 4

resolución²²⁶ para cambiar la composición del Grupo, proponiendo que el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el derecho al desarrollo se reuniera durante tres semanas en enero de 1986 para estudiar las maneras de promover este derecho y presentar finalmente un proyecto de Declaración sobre el derecho al desarrollo.

Durante la 55ª reunión, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1985, los representantes se encontraron con tres documentos encima de la mesa: dos resoluciones que no contenían ningún proyecto de Declaración y el documento yugoslavo, que aunque sí contenía un proyecto de Declaración, desde el punto de vista formal solo se podía considerar, según el experto francés Claude-Albert Colliard, que ha estudiado pormenorizadamente el proceso, como un “simple documento”²²⁷.

El debate sobre la adopción de la resolución fue arduo, y al final la Comisión decidió enviar a la Asamblea General los siguientes documentos a través del ECOSOC²²⁸: el informe del Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, la parte del Informe de la Comisión de Derechos Humanos que trataba sobre el derecho al desarrollo, las actas o ayuda memoria de las discusiones de la Comisión sobre la cuestión durante su 41ª sesión y cualquier otro documento relevante, para permitir a la Asamblea “adoptar una declaración sobre el derecho al desarrollo”²²⁹. Esta última frase, propuesta por el observador cubano tuvo un resultado inesperado: privilegió el texto yugoslavo haciéndolo llegar a la Asamblea General.

El proyecto yugoslavo no había sido discutido en la Comisión y había tenido hasta entonces un status menor de simple documento. En este punto, el consenso era la clave para producir la Declaración. La República Federal de Alemania expresó que “el consenso es esencial si el derecho al desarrollo ha de ser reconocido como un derecho universal”, añadiendo que “el concepto de un derecho al desarrollo es relativamente nuevo tanto en el derecho como en la práctica nacional e internacional, y se debe tomar un extremo cuidado para alcanzar una definición precisa de su naturaleza y fin”. Una visión similar era compartida por países como Reino Unido o Japón, quienes aceptaron que tal “importante instrumento como una declaración sobre el derecho al desarrollo requiere amplias consultas y no tiene valor a menos que sea adoptado por consenso”.

La Asamblea General, en su decisión 40/425 adoptada el 13 de diciembre, decidió transmitir a su sesión de 1986 el borrador de declaración²³⁰ y todos los documentos relevantes, incluyendo una enmienda hecha por Pakistán (la cual incluía un nuevo artículo que preveía que la realización del derecho al desarrollo requería “esfuerzos nacionales e internacionales concertados para eliminar las privaciones económicas, el hambre y la enfermedad en todas las partes del mundo sin discriminación, e identificando los objetivos de cooperación internacional a este respecto”). La decisión ya había sido

²²⁶ E/CN.4/1985/L.5

²²⁷ Colliard, C-A., “L’adoption par l’Assemblée Générale de la Déclaration sur le droit au développement (4 décembre 1986)”, *Annuaire Français de Droit International*, Vol. 33, 1987, pp. 614-628

²²⁸ 14 de marzo de 1985

²²⁹ UN Yearbook, 1985

²³⁰ A/C.3/41/L.4

© Isidro García Mingo

aprobada por el Comité el 29 de noviembre, sin voto, propuesto por Yugoslavia en nombre de un grupo de patrocinadores de la iniciativa.

El trabajo en busca de consenso fue intenso, pero el borrador no cambió mucho. Además de la enmienda mencionada, Francia y Países Bajos propusieron otra que incorporaría el artículo 1, párrafo 2, del Pacto Internacional y Derechos Civiles y Políticos, en una previsión que establecería que el derecho al desarrollo, que implicaba la total realización del derecho a la autodeterminación, incluyera la inalienable soberanía sobre los propias riquezas y recursos naturales.

Durante la 37^a reunión del Tercer Comité, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1986 en Nueva York, la señora Zagorka Ilić, representante de Yugoslavia –mujer de gran reputación, conocida además por ser la primera mujer diplomático en la historia de su país- remarcó de nuevo la importancia del consenso alcanzado y de adoptar la Declaración sobre el derecho al desarrollo:

“La adopción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo debe ser parte del continuo proceso internacional de definición de los derechos humanos. El fin último del desarrollo es la mejora constante del bienestar de toda la población sobre la base de su completa participación en el proceso de desarrollo y la equitativa distribución de sus beneficios. El ritmo de desarrollo en los países en vía de desarrollo debe ser sustancialmente acelerado para asegurar la consecución de su meta y, para ello, la cooperación internacional es esencial”.

El borrador de Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha sido concebido como un texto consensuado y su adopción por consenso contribuirá substancialmente al futuro trabajo y cooperación en ese campo e impulsará la causa de los derechos humanos. Se han expresado algunas dudas acerca de quién se beneficiará de la Declaración. Mi delegación desea señalar que la Declaración proviene de derechos ya consagrados en varios documentos y proveerá una mejor y más significativa vida para todos”.

El 4 de diciembre de 1986, actuando bajo recomendación del Tercer Comité, la Asamblea General adoptó finalmente -con solo un voto en contra, el de los Estados Unidos de América- la Declaración sobre el derecho al desarrollo, que incluía en su texto referencias directas al derecho de autodeterminación, al Nuevo Orden Económico Internacional, a la necesidad de mantener la paz y la seguridad internacional como requisito de desarrollo y la obligación de cooperar internacionalmente para alcanzar los objetivos de la misma.

El compromiso de Yugoslavia con el reconocimiento universal del derecho al desarrollo, gran éxito de la representación diplomática de aquel país, se mantuvo firme hasta su desintegración. Durante la Consulta Global sobre la realización del derecho al desarrollo²³¹, organizada en Ginebra entre los días 8 y 12 de enero de 1990 en la oficina de Naciones Unidas, según lo dispuesto en resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos²³², ECOSOC²³³, y la Asamblea General²³⁴, Yugoslavia asumió un indudable papel de liderazgo. Como coordinador de los países no alineados, Yugoslavia apoyó las

²³¹ E/CN.4/1990/9

²³² Resolución 1989/45 de 6 de marzo de 1989

²³³ Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 1989/141, de 24 de mayo de 1989.

²³⁴ Resolución 44/62 de 8 de diciembre de 1989

conclusiones y las recomendaciones finales del Informe sobre la Consulta Global “en su totalidad” y enfatizó la propuesta de establecer un Comité de Alto Nivel de Expertos para controlar la implementación de la Declaración²³⁵.

De acuerdo con Stephen Marks, durante la Consulta Global “se alcanzaron numerosas conclusiones agudas y bien informadas, que continúan siendo validas veinte años después”.²³⁶ Es notable, por ejemplo, el acuerdo alcanzado para usar “formas de medición cuantitativas y cualitativas” para analizar el nivel de desarrollo, tal y como expresó el mismo Danilo Türk,²³⁷ quien estuvo presente también durante la Consulta Global de 1990.

Unos meses después de la Consulta Global, el 23 de diciembre de 1990, Eslovenia celebró un referéndum de independencia de la República Socialista Federal de Yugoslavia, un evento que, junto con la Declaración de Brioni del 7 de julio de 1991, por el que se decidía la retirada del Ejército Federal de la República de Eslovenia, completado el 25 Octubre 1991, marca el comienzo de la disolución de Yugoslavia⁴⁷.

Así, podemos concluir brevemente que, desde los primeros trabajos relacionados hasta el último momento de su existencia, Yugoslavia apoyó decisivamente la existencia de un derecho humano al desarrollo en la forma que adoptó finalmente en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986.

§2.7.3 La doctrina yugoslava y el derecho al desarrollo

Por lo que hemos visto hasta ahora, Yugoslavia influyó políticamente en el nacimiento del derecho al desarrollo como parte del Movimiento de Países no Alineados y también desde el punto de vista individual, siendo coincidente con sus posiciones ideológicas, políticas y geoestratégicas. Asimismo, a través de sus representantes internacionales y su doctrina, también influyó conceptualmente en la forma final que el derecho al desarrollo adquirió en virtud de la Declaración de 1986.

Quisiera concluir repasando brevemente el papel de la doctrina yugoslava al respecto, por dos razones: la primera, metodológica, para ayudar a la comprensión de la problemática general desde todos los puntos de vista relevantes, la segunda, porque nos ayudará a comprender, parcialmente, una cuestión relacionada con tema central de nuestra tesis, esto es, por qué, como sostenemos, la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación no fue exhaustivamente estudiada tras la adopción de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986.

²³⁵ Barsh, R. L., “The Right to Development as a Human Right: Results of the Global Consultation”, *Human Rights Quarterly*, vol. 13, n. 3, 1991, pp. 322-38.

²³⁶ Marks, S., “The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality”, *Harvard Human Rights Journal*, vol. 17, 2004.

²³⁷ Türk, D., *The New International Economic Order and the promotion of Human Rights. Realization of Economic, Social and Cultural Rights*. Progress Report prepared by Special Rapporteur. 6 julio de 1990. ECOSOC. E/CN.4/Sub.2/1990/19

Como sostiene Šahović, aunque Yugoslavia era un estado socialista, la subordinación política e ideológica de la doctrina internacionalista yugoslava no fue como en otros estados más en la órbita comunista soviética:

“(…) la aceptación de una interpretación marxista del Derecho Internacional nunca fue obligatoria. Al mismo tiempo, el gobierno y la teoría yugoslava nunca mostraron ninguna simpatía por la idea de la existencia del así llamado “Derecho Internacional Socialista”. La apertura y el pragmatismo de la política exterior de la antigua Federación de Yugoslavia dieron total libertad a los juristas internacionalistas para estudiar los problemas del Derecho Internacional en base a sus propios puntos de vista y convicciones teóricas e ideológicas. Consecuentemente, puede concluirse, que el eclecticismo y el positivismo prevalecieron en la doctrina del Derecho Internacional durante la vida de la antigua Federación de Yugoslavia”.

Esta posición, sin embargo, es moderada por el mismo autor que reconoce a su vez la influencia ideológica del socialismo yugoslavo en la doctrina y, como es inevitable, siempre desde su propio marco conceptual y cultural. Aún así, más allá de los intereses exteriores de Yugoslavia, en cuanto a la construcción teórica y especulación académica, sí hubo apertura en el campo del estudio del Derecho Internacional, algo perfectamente compatible con la forma de estado a nivel interior pues, como hemos visto, se consideraban ámbitos políticos perfectamente definidos y separados. El desarrollo progresivo del Derecho Internacional debería ser considerado perfectamente independiente de los procesos internos y de los sistemas políticos particulares de los estados.

El fortalecimiento de la política exterior yugoslava tras la Segunda Guerra Mundial vino acompañando no sólo de una generación de diplomáticos activos, sino también de un desarrollo de la doctrina internacionalista. Se crearon revistas de Derecho Internacional y se multiplicaron los textos especializados, estudios y monografías, se crearon instituciones científicas y se fortalecieron los estudios universitarios. La revalorización de la doctrina iusinternacionalista yugoslava se tradujo en un incremento de citas bibliográficas e invitaciones a conferencias académicas internacionales.

En el campo del estudio del derecho al desarrollo, la doctrina yugoslava durante los ochenta y especialmente en su segunda mitad y hasta la desintegración de Yugoslavia ha sido muy apreciada. Basta ver por ejemplo, las referencias doctrinales de los principales manuales y monografías.

En nuestro país, por ejemplo, Felipe Gómez Isa, que es probablemente el autor que más exhaustivamente ha estudiado el derecho al desarrollo como derecho humano, cita en repetidas ocasiones²³⁸ los estudios de dos conocidos autores de esa generación de autores de juristas yugoslavos: Danilo Türk y Milan Bulajić, quienes han sido citados también en nuestro país por autores como Ezquiaga Ganuzas o Nicolás Angulo.

²³⁸ Nos referimos aquí a su obra sobre el tema más detallada: Gómez Isa, F., *El derecho al desarrollo como derecho humano...* op. cit. Milan Bulajić es citado, al menos, en páginas 53, 99, 119 y 174.

Danilo Türk es citado en al menos páginas 27, 50 (en cuanto miembro de la delegación yugoslava ante las Naciones Unidas), 244, 249, 272, 280, 283, 303 y 308.

Ahora bien, estos estudios citados son prominentes obras durante los ochenta, década en la que estos autores, que eran al mismo tiempo representantes yugoslavos y estudiosos del Derecho Internacional, dedicaron sus esfuerzos al estudio del derecho al desarrollo, lo que no es de extrañar dado su influyente papel en la conformación del derecho al desarrollo mismo, desde las discusiones a principios de los ochenta, pasando por la redacción del borrador de la Declaración de 1986 hasta los estudios posteriores.

Sin embargo, a partir del inicio de los noventa, con la desintegración de Yugoslavia, las citas bibliográficas se silencian. ¿Qué sucedió? En general podemos decir que quienes compartían delegación, pasaron a representar a sus diferentes (nuevos) países. Hemos de subrayar que nuestros autores eran al mismo tiempo representantes oficiales y conocidos autores de la doctrina sobre el derecho al desarrollo, por lo que por fuerza las condiciones externas afectaron el curso de su trabajo.

El dr. Danilo Türk, al que nos hemos referido con anterioridad por sus aportaciones al borrador del preámbulo de la Declaración de 1986 a principio de los ochenta, estudió ampliamente el derecho al desarrollo y participó en la Consulta de 1990. Conocido internacionalista, el profesor Türk obtuvo su doctorado con una tesis sobre el *Principio de No Intervención en el Derecho Internacional* (1982) y fue profesor de la Universidad de Ljubljana y director del Instituto de Derecho Internacional de dicha Universidad. En Naciones Unidas, la carrera de Türk comenzó precisamente como vicepresidente del Grupo de Trabajo para el derecho al desarrollo (1981-1984), continuando como miembro alterno y miembro de la Comisión para la Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías (1984-1992). Entre 1986 y 1992 fue Relator Especial para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. A principios de los noventa participó en la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional de Eslovenia y participó en la redacción del capítulo de derechos humanos de la Constitución Eslovena. De 1992 a 2000 continuó trabajando en la Representación Permanente de Eslovenia en las Naciones Unidas. De 2007 hasta 2012, como independiente, fue Presidente de la República de Eslovenia.

El dr. Milan Bulajić (1928-2009) colaboró todavía niño con los partisanos de Tito. Se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado y obtuvo su doctorado en 1953 con una tesis sobre el derecho a la autodeterminación. Diplomático (en servicio desde 1949 hasta 1987), escribió extensivamente sobre el derecho a la libre determinación²³⁹ y los principios internacionales de Derecho Internacional. A pesar de que siempre estuvo interesado en el destino de los serbios a manos de los *ustasha*, fascistas croatas, es a partir de los noventa cuando su bibliografía sufre un giro, a mi parecer, sustancial: desde la desintegración de Yugoslavia y hasta su muerte, Bulajić se dedicó casi exclusivamente al estudio del genocidio de los serbios en Jasenovac, Croacia, escribiendo numerosas obras al respecto y dirigiendo un instituto dedicado al estudio del tal tema. En el contexto político e ideológico de entonces, nos arriesgamos poco si decimos que poco sorprende que fuera acusado de negacionista de Srebrenica y considerado generalmente más un nacionalista serbio que un internacionalista yugoslavo.

²³⁹ Bulajić, M., *Pravo na samoopredeljenje*, Naucna Knjiga, Beograd, 1964.

Los demás miembros de la delegación yugoslava en las Naciones Unidas también pasaron a formar parte de las delegaciones de sus nuevos países. Zagorka Ilić, recientemente fallecida (2008), fue la primera mujer diplomático de la historia de Yugoslavia, y aunque participó como hemos mencionado, en el proceso de declaración del derecho al desarrollo, ha sido mucho más conocida por su labor como del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, desde su formación en 1980 hasta 1994, siendo vicepresidenta de 1980 a 1982, siendo citada sobre todo en temas relacionados con la CEDAW²⁴⁰; durante los noventa pasó a formar parte del servicio diplomático de la República de Yugoslavia, sucesora de la República Socialista Federal de Yugoslavia.

El también mencionado Ivan Tosevski (1929-2008), Embajador de Yugoslavia en Nueva Zelanda y Finlandia y jefe de la delegación de derechos humanos de Yugoslavia en las Naciones Unidas, fue presidente de Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y, ya como miembro del cuerpo diplomático macedonio, sirvió hasta 2003 como representante en las conversaciones en Naciones Unidas con la República de Grecia sobre sus diferencias acerca del nombre constitucional de la ARY de Macedonia.

Así, los principales autores yugoslavos sobre el derecho al desarrollo de finales de los ochenta, cuya doctrina era apreciada internacionalmente, pasaron a defender las posiciones de sus nuevos países, lo que incluye particulares posiciones en torno al derecho de autodeterminación, condiciones de sucesión, etc. Podríamos especular acerca de las razones de cada cual para no tratar más el derecho al desarrollo, desde, como diría Dimitrijević, las razones de urgencia de las violaciones masivas de derechos humanos en territorio yugoslavo que hicieron cambiar el orden de prioridades de estudio y activismo. Recordemos que tanto el conocido profesor Vojin Dimitrijević, que había estudiado los derechos de tercera generación y concretamente el derecho a la paz durante los ochenta como la profesora Vesna Rakić-Vodinelić, que también se había interesado por los derechos de tercera generación en aquella época²⁴¹, se dedicaron al activismo y se distinguieron en la lucha contra el autoritarismo y la defensa de los derechos humanos. Podríamos especular también que, como diría Šahović, se produjo un cambio sustancial en la concepción de Derecho Internacional, como la defendida en la Yugoslavia socialista, y un cambio en los intereses de los nuevos estados, hasta otras preferencias políticas. Recordemos que tal estudio estaba todavía en ciernes, y el derecho al desarrollo pronto pasó a formar parte del lenguaje internacionalista de la Yugoslavia socialista, considerándose en el mejor de los casos una mera vertiente económica del derecho a la autodeterminación y en el peor un derecho inexistente o vacío. El caso del derecho al desarrollo formaría parte así de esos principios y derechos que para Šahović se quedaron en la esfera internacional pero que no pudieron ser trasladados adecuadamente al ordenamiento interno yugoslavo.

A modo de ejemplo de la dificultad de trasladar los principios y derechos internacionales

²⁴⁰ Ver por ejemplo, Ilić, Zagorka y Corti, Ivanka. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. United Nations Manual on Human Rights Reporting*. U.N. Doc. HR/PUB/91/1. (1991) 153-76

²⁴¹ Rakić-Vodinelić, V.R *Prava treće generacije*. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 39, n. 5-6 1989

a la práctica, veamos el siguiente pasaje del diplomático alemán Ahrens Geert-Hinrich, con amplísima experiencia en el Sudeste Europeo, quien describe el ambiente que se respiraba en una de las sesiones del breve Grupo de Trabajo de los derechos de todos (en referencia a la declaración de 7 de septiembre de 1991) establecido por Carrington en la Conferencia de Paz para Yugoslavia. Lo apasionante de la descripción, aún considerando el contenido lenguaje diplomático, me impulsa a reproducirlo entero a pesar de su extensión²⁴²:

“La primera fase de las actividades del Grupo de Trabajo estuvo marcada por las sesiones plenarias. Los participantes eran en su mayor parte los mismos profesores y diplomáticos que habían atendido la sesión presidida por Barkman. El gobierno federal estaba representado por Budimir Vukas y **Zagorka Ilić**. Los dos se mantuvieron en la tradición de la eficiente diplomacia de la República Socialista Federal de Yugoslavia, eran muy entendidos, hicieron contribuciones valiosas y eran a menudo la voz de la razón. Su eventual desaparición fue una pérdida para el grupo. **Serbia envió a Smilja Avramov, quien trabajaba en un libro sobre el genocidio contra los serbios, típica aserción de los serbios en aquellos tiempos**, y Milenko Kreca. Los dos eran expertos creíbles, pero se hacían eco de las posiciones del gobierno de Milosević, lo cual frecuentemente les aislaba del grupo. El participante croata permanente era Djuro Degan, también un entendido especialista. Como era el tiempo de los horrores de Vukovar y de los ataques de artillería sobre Dubrovnik, el temperamento volátil de Degan le llevó en repetidas ocasiones a pelearse a gritos con los más calmados serbios. Bosnia y Herzegovina envió un miembro de cada una de sus naciones constituyentes a cada uno de los tres grupos de trabajo. El grupo de las minorías fue atendido por el serbio Radomir Lukić, que actuó con moderación. El representante macedonio era un diplomático con experiencia y un experto legal, el embajador **Ivan Tosevski**, quien, parcialmente por sus calmadas maneras, ejerció una influencia de moderación en las discusiones. Él era el único entre los miembros del Grupo de Trabajo con quien trabajé hasta el final de la Conferencia Internacional sobre la Antigua Yugoslavia en 1996, lo cual nos llevó a una excelente relación personal. Eslovenia no tenía ni conflictos armados en curso ni minorías de tamaño relevante, pero hizo contribuciones cualificados a través de su delegado **Danilo Türk**. El delegado montenegrino era, la mayor parte del tiempo, Milan Gajović, quien trató visiblemente de evitar las peores consecuencias del enfoque de la línea dura serbia, como su gobierno parecía hacer. En la apertura de la sesión plenaria de 9 de octubre de 1991, pude definir los términos de referencia de nuestro trabajo. Los participantes acordaron que trataríamos con todos los grupos étnicos y nacionales que vivían en una república llamada con el nombre de otra nación, que nos apoyaríamos en el censo de 1991, ignorando las consecuencias de la reciente “limpieza étnica”, y que nos abstendríamos de discutir fronteras. También hubo acuerdo sobre el derecho humanitario en tiempos de guerra, en la inaceptabilidad de la “limpieza étnica” y las expropiaciones, y en el derecho de retorno de los refugiados y las personas expulsadas. **Como en todas las siguientes sesiones plenarias, las teorías eran normalmente fáciles de manejar, pero cuando se trataba la implementación o la situación sobre el terreno, las pasiones se desataban y llegar a un acuerdo era difícil**”.

Por último, podríamos especular también, esta vez respecto a nuestra tesis, que las condiciones políticas y el papel que les tocó jugar a nuestros autores habrían seguramente impedido, de todos modos, contar con un espacio objetivo para seguir tratando la idea del derecho al desarrollo especialmente en su relación con el derecho a la autodeterminación, como instrumento integrador y articulador, como el que propondremos en nuestra tesis.

En cualquier caso, lo único constatable es que el estudio del derecho al desarrollo por la doctrina yugoslava decayó tras la desintegración de Yugoslavia. Se registraron, es cierto, esporádicas colaboraciones hasta recientes fechas. En la Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional de 2002, sobre “Aspectos legales del desarrollo sostenible”,

²⁴² Geert-Hinrich, Ahrens. *Diplomacy on the Edge: Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working Group of the Conferences on Yugoslavia*, Woodrow Wilson Center Press, 2007. Pág 68.

participaron como miembros del comité tanto Danilo Türk como Milan Bulajić, además de Srećko Jelinić (profesor de la Universidad J.J. Strossmayer de Osijek, Croacia) y otros.

Pero, en general, ya pasadas las crisis de los noventa, el estudio del derecho al desarrollo como derecho humano ha recibido poca atención en los círculos académicos de los países de la antigua Yugoslavia, a pesar del espectacular incremento de la cooperación internacional para el desarrollo, concentrándose la atención en temas relacionados como democratización, justicia transicional, fortalecimiento de la sociedad civil o cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la DUDH.

En estos últimos años podemos mencionar los trabajos de Marina Janjić-Komar, de la Facultad de Derecho de Belgrado²⁴³, o Vida Čok²⁴⁴, pero, en general, no han tenido la repercusión internacional que tuvieron en su día las aportaciones de Bulajić o Türk durante los años ochenta del pasado siglo.

Concluamos, por tanto, que la importante doctrina yugoslava en materia de derecho al desarrollo, citada aún hoy en día, interrumpió sus actividades con la desintegración de Yugoslavia, y así también su aportación a este respecto a la evolución del DI, y no inició su tímida recuperación hasta finales de los noventa; asimismo, los autores, también actores políticos, no trasladaron el lenguaje internacional del desarrollo al escenario político u jurídico interno; y concluyamos también afirmando que las circunstancias objetivas de los principales autores (dejando la mera suposición de las preferencias políticas o ideológicas) hacían extraordinariamente difícil un imparcial estudio de las relaciones entre el derecho de autodeterminación y el derecho humano al desarrollo.

²⁴³ Janjić-Komar, M. "Pravo na razvoj =right to development," *Pravni život: list za pravna pitanja i praksu* Vol. 52, n. 9 (2003), Pp. 815-820

²⁴⁴ Čok, V., *Pravo čoveka na životnu sredinu i pravo na razvoj* Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 44, n. 1, 1997, pp. 7-19

§3 El derecho de autodeterminación de los pueblos

§3.1 Génesis histórica del derecho a la autodeterminación

- §3.1.1 La nueva sociedad internacional y las teorías contractualistas
- §3.1.2 Revolución y nacionalismo en el siglo XIX
- §3.1.3 La autodeterminación de los pueblos en el período de entreguerras

§3.2 Fuentes del derecho a la autodeterminación

§3.3 Fundamentos y contenido del derecho de autodeterminación

- §3.3.1 La autodeterminación de los pueblos como derecho humano
- §3.3.2 Contenido del derecho de autodeterminación (i). Consideraciones generales, dificultades para definir el contenido y definiciones propuestas
- §3.3.3 Contenido (ii). Autodeterminación interna y externa. Diferentes concepciones de autodeterminación interna
- §3.3.4 Contenido (iii). Autodeterminación externa, prohibición del colonialismo y debate sobre el derecho a la secesión
- §3.3.5 Contenido (iv). Críticas a la distinción entre autodeterminación interna y externa. Distinción entre substancia y remedios. Aspecto constitutivo y aspecto continuo del derecho de autodeterminación
- §3.3.6 Contenido (v). En búsqueda de un núcleo de certeza
- §3.3.7 Contenido (vi). El derecho de autodeterminación económica. Autodeterminación y políticas de desarrollo político, social, económico, cultural

§3.4 Sujetos del derecho de autodeterminación

- §3.4.1 Sujetos titulares del derecho de autodeterminación
- §3.4.2 Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho de autodeterminación

§3.5 El derecho de autodeterminación en la República Socialista Federal de Yugoslavia en su conformación, evolución y desintegración

- §3.5.1 Génesis y evolución de concepciones antagonistas del derecho de autodeterminación durante el período de entreguerras
- §3.5.2 El derecho de autodeterminación de los pueblos, incluido el derecho a la secesión, en la República Socialista Federal de Yugoslavia: entre el nacionalismo y el socialismo
- §3.5.3 La desintegración de Yugoslavia. Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración
 - §3.5.3.1 La desintegración de Yugoslavia (I). Causas y relación con los procesos de desarrollo
 - §3.5.3.2 La desintegración de Yugoslavia (II). Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración
- §3.5.4 Los Acuerdos de Sucesión de 2001: una visión patrimonialista, un enfoque de derechos humanos limitado
 - §3.5.4.1 Los Acuerdos de Sucesión. Su contenido en relación con la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983
 - §3.5.4.2 Los Acuerdos de Sucesión de 2001 en relación con la sucesión de Estados en materia de tratados de derechos humanos
 - §3.5.4.3 Sucesión de Estados y nacionalidad
 - §3.5.4.4 El derecho de opción de nacionalidad en relación con la nacionalidad como criterio de distribución de recursos y derechos
- §3.5.5 Notas adicionales acerca de la interpretación de derecho de autodeterminación tras los Acuerdos de Sucesión de 2001: los casos de Montenegro y Kosovo
 - §3.5.5.1 Montenegro: la advertencia de los efectos de su independencia sobre los derechos de grupos sociales vulnerables

§3.5.5.2 Kosovo: la incorporación parcial de un enfoque de derechos humanos en un proceso inacabado

§3 El derecho de autodeterminación de los pueblos

§3.1 Génesis histórica del derecho de autodeterminación

§3.1.1 La nueva sociedad internacional y las teorías contractualistas

El principio o derecho de autodeterminación de los pueblos es conocido entre nosotros también como principio o derecho de libre determinación de los pueblos. El término “autodeterminación” es un neologismo relativamente reciente conformado por el prefijo griego *autos* (“por sí mismo”), y el latino *determinatio* (*determinatio* significa límite o linde, *determinator*, regulador, el que pone los límites y de ahí *determino*, en el sentido de limitar o regular²⁴⁵). Como el término inglés *self-determination*, la determinación o regulación de sí mismo proviene, según el profesor Malcolm Anderson²⁴⁶, de la traducción del vocablo alemán *Selbstbestimmungsrecht*, acuñado en el siglo XIX.

Recordaba el Relator Especial de Naciones Unidas Aureliu Cristescu en 1981 que: “(...) durante las consideraciones del Comité Especial de la Resolución 1514 sobre la substancia del principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, varias delegaciones sostienen que los orígenes históricos y políticos del principio estaban íntimamente relacionados con la historia nacional de la mayoría de los Estados Miembros y con su lucha por ganar o defender su libertad e independencia. Se observó que el principio había sido aceptado desde el final del siglo XIX como uno de los elementos básicos de la democracia moderna”²⁴⁷.

A pesar de haber sido relacionado con el colectivismo frente al individualismo liberal, el origen del concepto de autodeterminación de los pueblos no puede entenderse, tanto para el mencionado Anderson, como para Griffiths y otros autores, sin, por un lado, los efectos políticos de la Reforma Protestante, que establecía la primacía de la conciencia individual y el eventual surgimiento de la nueva sociedad internacional tras el Tratado de Westfalia, y, por otro lado, sin las teorías liberales contractualistas nacidas con la Ilustración.

El Relator Especial de las Naciones Unidas Héctor Gros Espiell, que recibió el encargo de estudiar el derecho de autodeterminación, recuerda un lejano antecedente de Francisco de Vitoria, quien al estudiar los títulos legítimos para la conquista de América, partiendo de que el gobierno propio es trasunto de la gran conquista cristiana, de esa *universitas christiania*, reflexionaba que “la posesión de sí, hace a los hombres, y también a los

²⁴⁵ Diccionario Esencial Latino. Latino-Español/ Español-Latino. Vox, 2008.

²⁴⁶ Anderson, M., *Frontiers, territory and state formation in the modern world*. Polity Press, Cambridge, Oxford, 1996, p. 37.

²⁴⁷ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*. Nueva York, 1981, p. 11.

pueblos que se poseen, más grandes que cuando se lanzan a la conquista de los demás”²⁴⁸.

Sin embargo, para la doctrina mayoritaria, los orígenes de la idea de un principio de autodeterminación como la conocemos hoy en día encuentra uno de sus pilares, como hemos anotado, precisamente en el declive de la aspiración imperial de la *universitas christiania*, en la Paz de Augsburgo de 1555 primero y definitivamente en la Paz de Westfalia de 1648.

Carlos V aceptó en la Paz de Augsburgo que los diferentes estados del Sacro Imperio pudieran estar gobernados por protestantes o católicos, excluyendo del acuerdo a calvinistas y anabaptistas. Los complejos términos de la Paz de Absburgo fueron poco más tarde resumidos en la célebre expresión latina *cuius regio, eius religio* (la religión del reino será aquella de quien en él reine) acuñada en 1586 por Joachim Stephani (1544–1623) de la Universidad de Greifswald²⁴⁹.

Según el profesor Joachim Whaley, la religión era entonces todavía percibida como parte de la estructura de autoridad en un determinado territorio, además de como marcador de identidad de un grupo, por lo que la coincidencia entre la religión del grupo y la del señor habría de evitar rebeliones o atentados contra su poder. Es por ello “difícil distinguir clara y decisivamente entre las preocupaciones seculares y las convicciones religiosas”²⁵⁰. La Paz de Augsburgo, como es bien conocido, no pudo evitar nuevos conflictos que concluyeron con esa serie de tratados firmados entre mayo y octubre de 1648 en las ciudades de Osnabrück y Münster, conocidos como Paz de Westfalia, que dieron fin a la Guerra de los Treinta Años (1618–1648) en los territorios germánicos y a la Guerra de los Ochenta Años (1568–1648) en las Provincias Unidas de los Países Bajos.

Los términos de la Paz de Westfalia, entre otras cuestiones, incluían el respeto entre protestantes y católicos y reconocían libertad religiosa a los calvinistas: el concepto de *Universitas Christiania* comenzó a declinar, por tanto, en el momento en que se reconocía que era legítimo para unos que otros territorios, gobernantes y pobladores, pudieran someterse a otras religiones diferentes a la propia, y que en el plano internacional todos disfrutaran de cierta igualdad, cada cual dentro de sus fronteras, inaugurando así, para la mayoría de la doctrina internacionalista, la sociedad internacional moderna.

Como explica Martin Griffiths, con la Paz de Westfalia se constituía el germen de una sociedad internacional en la cual las pretensiones jerárquicas de Emperadores y Papas propias de la sociedad feudal cedían ante el ascenso del concepto de estados soberanos que se relacionaban entre sí a través de instrumentos formales internacionales y

²⁴⁸ Gros Espiell, H., “El derecho a la libre determinación de los pueblos y los derechos humanos”, *Estudios sobre derechos humanos I*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, p. 196.

²⁴⁹ Whaley, J., *Germany and the Holy Roman Empire. Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493-1648*, Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 2012, p. 479

²⁵⁰ Whaley, J., *Germany and the Holy Roman Empire...*, op. cit., p. 479

diplomáticos²⁵¹.

Para este autor, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros estados que, aunque no todavía totalmente conformada, nació de la Paz de Westfalia, se ha convertido con el tiempo en un principio normativo de suma importancia en el Derecho Internacional²⁵². Así, la importancia de la Reforma reside no tanto en el aporte teológico del Protestantismo que incide en la conciencia individual y la propia interpretación de los textos religiosos y responsabilidad espiritual como de la nueva arquitectura de poder que nació de Westfalia, un nuevo esquema internacional de estados soberanos propio de la Edad Moderna.

Nacieron entonces, en relación con este contexto, algunas de las primeras reflexiones en torno a la nacionalidad y el gobierno. Es destacable la obra *Gentis Felicitas* del moravo Jan Amos Komenský, *Comenius*, (*moravus ego natione, lingua Bohemus*, dice de sí mismo al inicio de su *Schola Ludus*), conocido entre nosotros como Comenio (1592–1670). *Gentis Felicitas*, publicada en 1654 y escrita en forma epistolar, fue dedicada al príncipe György Rákóczi II (1648–1660). La conocida definición de nación contenida en su obra (“número de personas de la misma estirpe que comparten lugar en el mundo, lengua y están ligadas entre sí por vínculos de mutuo amor, concordia y deseos de bien común”) ha servido para que algunos autores la consideraran como una precursora de las teorías nacionalistas decimonónicas.

Si bien esta visión es tentadora, autores como Urbanek la rechazan de plano²⁵³, ya que la visión de Comenio se centra todavía en una construcción de pueblos elegidos y la convivencia o no de pueblos y lengua se haya subordinada a la elección divina de un líder. Para Comenio, que consigue separar sin embargo las dimensiones etnoculturales y políticas de la nación, la mezcla de lenguas y gentes de Hungría es causa de barbarismo e infelicidad. Una de las condiciones de la felicidad del pueblo (cita hasta dieciocho, entre las que encontramos el cumplimiento de deberes de los súbditos, la paz o el florecimiento económico) es ser gobernado por un líder autóctono, pero éste será otorgado por providencia divina²⁵⁴.

El segundo pilar sobre el que comprender el nacimiento del concepto de autodeterminación nacional es el surgimiento del liberalismo y las teorías contractualistas sociales y la noción de soberanía popular. Podemos, como resumiría Clyde Eagleton, “remontarnos al ‘consentimiento de los gobernados’ de la Declaración de Independencia

²⁵¹ Griffiths, M., “Self-determination, international society and world order,” *Macquarie Law Journal*, vol. 3, 2003, p. 32

²⁵² Griffiths, M., “Self-determination...”, op. cit., p. 32

²⁵³ Urbanek, V., “The idea of state and nation in the writings of bohemian exiles after 1620” en Linas / Müller, Leos (eds.), *Statehood before and beyond ethnicity: minor states in Northern and Eastern Europe, 1600-2000*, Europe plurielle / Multiple Europes, vol. 33, Berlin, Frankfurt am Main, Nueva York, Oxford, 2005, p. 74 y ss.

²⁵⁴ Trencsényi, B. “Patriotism and elect nationhood in early modern Hungarian political discourse” en Trencsényi, B. y Zászkaliczky, M. *Whose love of which country?: composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe*, Koninklijke Brill NV, Leiden, Países Bajos, 2010, p. 526 y ss

Americana; al ‘divino derecho del pueblo’ de la Revolución Francesa; al nacionalismo democrático de Mazzini”²⁵⁵.

Afirma rotundamente Benyamin Neuberger que “el principio de autodeterminación ha perseguido al mundo desde la Revolución Francesa”²⁵⁶. Tras ella, explica Griffiths, “la soberanía dinástica -el divino derecho de los monarcas- dejó paso a las justificaciones de exclusividad territorial basadas en la idea de un estado-nación, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular”²⁵⁷.

El contractualismo inaugurado por el Leviatán (1651) de Hobbes, seguido de obras como los *Dos Tratados sobre el Gobierno Civil* (1689) de John Locke o *El contrato social* (1762) de Rousseau incorporaban al pensamiento filosófico político la analogía de los contratos privados que por aquel entonces liberaban sus formas con el *laissez faire, laissez passer*. Para celebrar un contrato social en su forma ideal se requerían partes con capacidad para ello, esto es con autonomía para obligarse en los términos del acuerdo. El lenguaje de los contractualistas era un lenguaje jurídico, que habiendo nacido del racionalismo, se desembarazaba de los argumentos anteriores de legitimidad divina del poder.

La autonomía individual estaba en la base del derecho privado, en un sistema que permite a los individuos establecer relaciones jurídicas de acuerdo a su libre voluntad y con el legítimo fin de su mejor interés, individuos que dictan sus propias normas para gobernar sus relaciones privadas, su deber para consigo y para con los demás. Para los contractualistas, en resumen, los hombres, siendo iguales en un estado natural, por cualquiera que fuera su motivación para llevar a cabo el pacto originario (la vida mejor, la perfección de su naturaleza, el miedo, la conveniencia o la protección común...), sin vicios en la voluntad, acordaban someterse a un poder soberano (desde el monarca absoluto de Hobbes hasta la voluntad general de Rousseau). Siguiendo la lógica de los contratos privados de la tradición iusnaturalista, en la que la ley natural reconoce la validez y eficacia de cualquier contrato siempre que el consentimiento respete la legalidad vigente, en el caso del pacto social es una suerte de legislación universal concebible desde la razón, algo posible gracias a la independencia epistemológica iniciada por Descartes.

El paralelismo del pacto social de los contractualistas con los criterios contractuales privados es de sobra conocido: para Hobbes los hombres son fundamentalmente iguales – en el estado de naturaleza, aunque sean los hombres diferentes, esta diferencia nunca será tal que el más débil no pueda confabularse con otros o emboscarse para dañar al más fuerte- y por libertad entiende “de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos: impedimentos que pueden, a menudo, arrebatar parte del poder de un hombre de hacer lo que quisiera; pero que no pueden hacer que use el

²⁵⁵ Eagleton, C., “Excesses of self-determination”, *Foreign Affairs*, vol. 31, n. 4, julio, 1953.

²⁵⁶ Neuberger, B., “National self-determination: a theoretical discussion”, *Nationalities Papers*, vol.29 n.3, 2001.

²⁵⁷ Griffiths, M., “Self-determination...”, op. cit., p. 32

poder que le resta, de acuerdo con lo que le dicten su juicio y la razón”²⁵⁸, por lo que el acuerdo se entiende como renuncia a la libertad del estado natural y por injusto la ruptura de tal pacto.

Rousseau desarrollaría de otro modo la idea del pacto social, de manera que aún en su forma ideal, los fundamentos de la sociedad podían hallarse en la voluntad libre de personas –para ellos, en aquel entonces, sólo varones- con capacidad de acordar entre sí darse normas y gobernarse reconociéndose como agentes que quieren y pueden darse normas a sí mismos. Rousseau considera la libertad no sólo como la libertad externa de Hobbes. Rousseau, para quien el hombre, de natural libre –y que por todas partes se halla encadenado- pierde la libertad natural obteniendo en sociedad la libertad civil, arguye que el individuo autónomamente se somete al ordenamiento jurídico conformándose una *volonté générale* que legítimamente emite normas que todos los miembros de la sociedad han de acatar. Para Rousseau la voluntad *de todos* ha de distinguirse de la voluntad general, ya que esta última “considera sólo el interés común, mientras que la anterior, tiene en cuenta el interés privado, y no es más que la suma de voluntades particulares”.²⁵⁹ La idea de la voluntad general como concebida por Rousseau ha sido en ocasiones, como es sabido, duramente criticada posteriormente por considerarse precursora de la justificación de una suerte de tiranía de la mayoría, que sólo puede evitar una adecuada concepción de los derechos como títulos que protegen a los individuos y minorías frente a la mayoría, en una tensión democrática, si bien esta crítica ha sido a su vez también certeramente cuestionada por quienes no han visto tal relación.

El legado del trabajo de Rousseau es, sin embargo, de un valor incuestionable, y se ha descrito la influencia sobre el gran teórico de la autonomía que fue Kant, de quien se ha dicho que incluso rompió la estricta rutina que regía sus días para quedarse en casa, sin salir, para leer el *Emile*²⁶⁰. Más allá de la anécdota, lo cierto es que Kant fue influido por Rousseau tanto en sus consideraciones acerca de la educación como al construir su definición de autonomía. La autonomía de la voluntad está en la base de la ética deontológica kantiana. No es posible pensar en nada “que pueda ser considerado bueno sin ninguna restricción excepto una buena voluntad”²⁶¹.

La voluntad buena lo es porque por ella el sujeto moral actúa por deber, con independencia de su interés o inclinación. La voluntad debe ser para Kant, como bien sabemos, incondicionada respecto a todos los objetos, siendo su principio un imperativo categórico. La voluntad sólo puede ser buena si es autónoma y no puede ser buena si es heterónoma, porque si lo fuera, lo sería por mera coincidencia. Sólo puede ser la voluntad absolutamente buena si por medio de la razón distinguimos qué debemos hacer y seguimos tal comportamiento, por sí mismo, por deber, y no meramente conforme a ese deber. Seguir esa norma por nosotros mismos percibida y dada es la base de la autonomía

²⁵⁸ Hobbes, T., *Leviathan*, ed. Gaskin, J.C.A., Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 1998, cap. XIV, p. 86

²⁵⁹ Rousseau, J.J., *El contrato social*. Ed Alba, Madrid, 1996, L.II, pp 43 y ss.

²⁶⁰ Henrich, D., *Between Kant and Hegel: Lectures on German Idealism*, Harvard University Press, 2003, p. 55

²⁶¹ Kant, I. *Fundamentación...*, op.cit., p. 53

kantiana, vocablo precisamente construido de los dos términos griegos “autos” y “nomos” (norma, regla). La libertad es concebida en relación al hombre que sigue las normas halladas y dadas por y en sí mismo. La razón como fundamento de la moral del deber kantiana excluye así, necesariamente, la heteronomía.

La autonomía como base de la ética kantiana se proyecta en el plano político a través del republicanismo constitucionalista. Difiere Kant con Rousseau sin embargo en el modo de expresión externa de la voluntad. Mientras el ginebrino era un vehemente defensor de la expresión volitiva, -para él el pueblo ha de expresarse regularmente sin representación mediante- Kant sí admite cierta laxitud en la representación: “[el contrato social] se trata de una mera idea de la razón que tiene sin embargo, su indudable realidad práctica, a saber, la de obligar a todo legislador a que dicte sus leyes *como si* éstas pudieran haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo (...)”²⁶².

La naturaleza de la voluntad para la suscripción de un contrato-idea como es el pacto social atrajeron las primeras dificultades para los contractualistas. Como explica Waldron²⁶³, los liberales establecieron dos vías para explicar tal consentimiento: la vía del consentimiento *tácito*, sujeto a las clásicas críticas de quienes arguyen que por azar han nacido en una sociedad y no en otra, y la vía, más robusta teóricamente, siguiendo la estela de Kant, del consentimiento *hipotético* –habrías accedido y, por tanto, estás obligado- que, sin embargo, como recuerda el propio Waldron, no establece tampoco una relación entre esta voluntad y la naturaleza de las obligaciones contraídas por esa voluntad. El consentimiento hipotético, por supuesto, se hallaría en cualquier caso constreñido dentro de ciertos límites distinguibles por la razón²⁶⁴.

Hemos visto que la libertad podía ser concebida a la hora de suscribir el contrato social como una libertad natural originaria que se agota al crear la sociedad, por lo que una vez constituido el pueblo quedaba sometido a la extensa voluntad del soberano obligado (libertad externa de Hobbes) o concebida también una libertad civil que se gana con la suscripción del contrato social (Rousseau). Para Kant, ninguna voluntad particular puede ser legisladora para una comunidad, lo que es especialmente cierto a la hora de constituirla. En el pacto originario, Kant distingue la necesidad de libertad externa, igualdad y una “unidad de la voluntad de todos”, y para esta última “es condición la independencia, pues se requiere una votación cuando se dan las dos primeras”²⁶⁵. Distingue así Kant esa independencia de la libertad externa. Kant consideraría que “el estado civil (...) como estado jurídico, se funda en los siguientes principios *a priori*: la *libertad*, de cada miembro de la sociedad, en cuanto hombre, la *igualdad* de éste con cualquier otro, en cuanto súbdito, la *independencia* (*sibiufficientia*) de cada miembro de una comunidad, en cuanto ciudadano”²⁶⁶, adelantando o sentando las bases, de alguna

²⁶² Kant, I., “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica’ (1793)” en *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*. Ed. Cátedra. Madrid, 2009, p. 120.

²⁶³ Waldron, J., “Theoretical foundations of liberalism”, *Liberal Rights. Collected Papers (1981-1991)*. Cambridge University Press, Cambridge, Nueva York, Victoria, 1993, p. 48.

²⁶⁴ Waldron, J., “Theoretical...”, op. cit., p. 49.

²⁶⁵ Kant, I., “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto...’”, op. cit., p. 118.

²⁶⁶ Kant, I., “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto...’”, op. cit., p. 112.

manera, de la distinción teórica entre la libertad negativa y la libertad positiva que contemporáneamente desarrollara memorablemente Isaiah Berlin²⁶⁷.

Desde el punto de vista político, para Kant, el hombre autónomo suscribe la vida en sociedad por necesidad, pero caracteriza al ser humano como un ser de cierta insociable sociabilidad: el ser humano es sociable porque no puede desarrollar todas sus capacidades, ni alcanzar todos los fines que podría de manera aislada; pero el ser humano es al mismo tiempo insociable porque busca satisfacer ante todo su inclinación personal, su interés, a pesar de las inclinaciones e intereses de sus congéneres. Las sociedades en las que los seres humanos se organizan, los países, replican la sociable insociabilidad del ser humano y en su camino por satisfacer sus propios intereses o inclinaciones, entran necesariamente en conflicto y llegan eventualmente a hacerse la guerra. No es raro que concluya así Kant que “la naturaleza humana en ninguna otra parte se muestra menos digna de ser amada que en las relaciones mutuas entre pueblos”²⁶⁸, pueblos que, por otro lado, están necesariamente destinados, ya que la tierra es finita, a vivir unos al lado de los otros.

La paz sólo será posible para Kant en la comunión de intereses entre los pueblos y en el sometimiento de los intereses particulares de los países a un marco normativo (llevando su esquema ético al ámbito político) en forma de Derecho Internacional²⁶⁹. Lamentablemente, este desarrollo del Derecho Internacional no podrá venir de la voluntad del hombre mismo ni de su educación, sino de la necesidad nacida de la guerra, de las guerras que traiga el propio devenir de la historia y los intereses en conflicto de los pueblos, de manera que el desarrollo del derecho internacional vendrá indefectiblemente para salvaguardar al ser humano de su propia destrucción²⁷⁰. Así, la libertad de los países no podrá ser identificada con la irrestricta capacidad de los países de actuar libremente en persecución de sus propios intereses sino todo lo contrario, ya que seguir sólo sus intereses les llevaría a su destrucción. Los países, como los hombres, han de restringirse porque viven necesariamente unos junto a los otros en una sociedad necesaria, la restricción de sí es necesaria para libertad de los otros y propios, siguiendo normas necesariamente creadas *a priori*.

La sujeción al deber emanado de la observación del Derecho Internacional sería la única vía de supervivencia última también en el plano internacional. Partiendo como hace de una posición *abderitista* de la naturaleza humana, cuando Kant se cuestiona, como veremos en adecuada perspectiva más adelante en la relación entre autodeterminación y desarrollo: ¿qué beneficio le reportará al género humano el progreso hacia lo mejor?, se responderá: “no una cantidad siempre creciente de *moralidad* en la intención, sino un aumento de los efectos de su *legalidad* en las acciones conforme al deber, sea cual fuere

²⁶⁷ Berlin, I., “Two concepts of liberty”, *Liberty: Incorporating four essays on liberty*, Hardy, H. (ed.), Oxford University Press Oxford, Nueva York, 2002.

²⁶⁸ Kant, I., “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto...’”, op. cit., p. 138

²⁶⁹ Kant, I., “Sobre la paz perpetua (1795)”, *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*. Ed. Cátedra. Madrid, 2009, p. 141

²⁷⁰ Kant, I., “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto...’”, op. cit., pp. 135-136

el móvil que las ocasione”²⁷¹. No esperamos, por tanto, que las personas nazcan mejor dispuestas moralmente en el futuro, pero podemos esperar mejorar nuestros sistemas jurídicos para que sus acciones sean más adecuadas, conforme al deber, equivalentes en efectos prácticos externos a un incremento de la moralidad. La proyección de Kant de la autonomía del individuo en el plano político se puede entender extendida hasta la relación entre estados, en una analogía de la autonomía entre individuos y estados, que le lleva a concluir, celeberrimamente, en su *Sobre la paz perpetua*, por un lado, que “ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro” (haciendo algunas matizaciones en torno a caso de guerra civil y desintegración del estado)²⁷² y por otro, que si son como individuos, la relación debería ordenarse, como hemos visto, respetando el Derecho Internacional, relación de la que deriva su conocida propuesta de crear una “Federación de estados”. Veamos la analogía:

“Los pueblos pueden considerarse, en cuanto Estados, como individuos que en su estado de naturaleza (es decir, independientes de leyes externas) se perjudican unos a otros por su mera coexistencia y cada uno, en aras de su seguridad, puede y debe exigir del otro que entre con él en una Constitución semejante a la Constitución civil, en la que se pueda garantizar a cada uno su derecho. Esto sería una federación de pueblos que, sin embargo, no debería ser un Estado de pueblos. Habría en ello, no obstante, una contradicción porque todo Estado implica la relación de un superior (legislador) con un inferior (el que obedece, es decir, el pueblo) y muchos pueblos en un Estado vendrían a convertirse en un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis”²⁷³.

El moderado cosmopolitismo o cosmopolitismo kantiano de estados tendría una gran influencia posterior, en pensadores y líderes políticos como Mazzini o Wilson, alcanzando nuestros días (esta analogía estado-individuo, adelantemos, sería utilizada por John Rawls en su conocido *El derecho de gentes*). Concluyendo sobre el deber racional de respetar la libertad externa de sí y de los otros, Kant alerta explícitamente de considerar *peccatum philosophicum*, “considerar como una bagatela, fácilmente perdonable, que un Estado pequeño sea conquistado por otro mucho mayor para un supuesto mundo mejor”²⁷⁴.

Los contractualistas dejaron así extensas y diversas reflexiones en torno a la naturaleza de un pacto originario y de la voluntad de contraer tal pacto, y también sobre los derechos y deberes de los contrayentes, en su estado natural y en su estado civil y su relación con el poder soberano constituido. La aproximación al problema de las fronteras fue, sin embargo, básicamente de naturaleza fáctica -dando por supuesto su existencia como herencia de la conformación histórico material dada del mundo (bien por características prepolíticas comunes de los signatarios, bien por la tradición de un gobierno común). Aunque por fuerza habrían de crearse unos *otros* si el pacto se da sólo entre una *parte* de los hombres iguales, estos no fueron objeto de detallado interés como sí lo fueron cuestiones como la voluntad, los derechos o las obligaciones derivadas del pacto social.

²⁷¹ Kant, I., “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor (1798)”, *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*. Ed. Cátedra. Madrid, 2009, p. 208

²⁷² Kant, I., “Sobre la paz...”, op. cit., Secc 1ª, art. 5, p. 9

²⁷³ Kant, I., “Sobre la paz...”, op. cit., 2º Artículo definitivo, p. 21

²⁷⁴ Kant, I., “Sobre la paz...”, op. cit., p. 67

En la construcción teórica de la sociedad a través de un pacto social y, por tanto, en la lógica construcción de unos límites en su relación con otros, en la construcción misma de los otros, quedaron confusas tres cuestiones íntimamente relacionadas entre sí (aunque ya hemos dado unos apuntes respecto a la posición kantiana), que debemos analizar para comprender la evolución del concepto de autodeterminación en relación con los contractualistas: la primera, si los hombres nacen iguales, ¿por qué habrían de adscribirse a una sociedad y no a otra, esto es cuáles son los criterios para conformar una sociedad?; segundo, ¿cómo se relacionarían las diversas sociedades en el caso de que hubiera más de una, universal, de manera que cumplan los objetivos para los que los pactos fueron suscritos?; y tercero, una vez conformada una sociedad, ¿sería legítima la secesión de una de sus partes? Estas cuestiones sólo empezaría a ser objeto de más detallado análisis teórico a partir precisamente de los problemas de la aplicación en la práctica política de los sistemas democráticos liberales, históricamente, por tanto, a partir de las revoluciones liberales. Veamos estas cuestiones en la obra de los prominentes contractualistas Hobbes, Locke y Rousseau.

Para Hobbes, como es bien sabido, los seres humanos en el estado de naturaleza viven presumiblemente en un estado de guerra constante; “la buena convivencia (...) de los hombres, lo es sólo por pacto, que es artificial”²⁷⁵. Siendo el pacto artificial entre los hombres, dice Hobbes, “no es extraño que se requiera algo más (...) para hacer su acuerdo constante y duradero; esto es el poder común, para mantenerlos a raya, y para dirigir sus acciones al beneficio común”²⁷⁶. La comunidad se instituye por tal pacto: “dícese que una comunidad ha sido instituida cuando una multitud de hombres acuerdan, y pactan, todos con todos, que a cualquier hombre o asamblea de hombres le será dada, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos”²⁷⁷. Siendo el pacto artificial, poco habría de importar qué hombres se asocien con qué hombres, con tal de que procure su seguridad, que es el fin último del pacto. El criterio principal para crear un estado es la efectiva liberación de la competencia, la desconfianza y las ansias de gloria, de la liberación de la guerra.

El único impedimento para que el gobernante sea extranjero sería de orden pragmático: los extranjeros “comúnmente subestiman unos a otros, lo que puede dar lugar a la opresión de los súbditos, algo que es, en efecto, un gran inconveniente; pero no procede necesariamente de la sujeción a un gobierno extranjero, sino de la falta de habilidad de los gobernantes, ignorantes de las verdaderas reglas de la política”²⁷⁸. Por lo que considera conveniente que el gobernante sea de la misma nación que los súbditos.

No especifica Hobbes cualidades añadidas a un hombre para pactar, sólo ser hombre. Sin embargo, define explícitamente que los extranjeros son “los hombres que no acostumbran a vivir bajo el mismo gobierno ni a hablar el mismo lenguaje”²⁷⁹. Asumiendo una

²⁷⁵ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., p. 113

²⁷⁶ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., pp. 113-114

²⁷⁷ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., p. 115

²⁷⁸ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., p. 131

²⁷⁹ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., p. 131

definición tan vaga como amplia, se cura en salud y no abunda en el tema. Cualquier razón de afinidad sería así válida para concluir el pacto, que validaría las fronteras actuales, históricamente creadas (válidas así hubieran sido creadas por conquista), bastando para no ser extranjero haber compartido ser súbdito de un mismo soberano, bajo la fórmula “vivir bajo el mismo gobierno”. El extranjero, delineado con anterioridad, pero creado definitivamente tras un pacto que sólo incluye a una parte de los hombres y no a todos los hombres del mundo, se convertiría en una amenaza constante. Como explica Newey, “algunos aspectos del estado de naturaleza persisten en la sociedad política. Existe siempre que alguien sea enemigo del soberano, el cual incluye no sólo a los extranjeros y aquellos sin estado, sino también a todos los que se enfrentan con la elección entre sumisión y resistencia”²⁸⁰.

Por ello, el soberano al que los hombres encargaron su protección mediante el pacto tendría también la responsabilidad hacer frente, en su caso, a los extranjeros-enemigos: “el único modo de erigir tal poder común, que pueda defenderlos de la invasión de los extranjeros (...) es conferir todo su poder y fuerza a un hombre, o a una asamblea de hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por medio de una pluralidad de voces, en una sola voluntad”²⁸¹.

Por su parte, John Locke también asume que, si bien los hombres son “libres por naturaleza, iguales e independientes”, conforman una pluralidad de comunidades: “cuando un grupo de hombres ha consentido en hacer una comunidad o gobierno, quedan de inmediato incorporados y forman un cuerpo político”²⁸². Todos aquellos que quedan fuera de la comunidad política serían, además de hombres, extranjeros.

El consentimiento, como hemos visto, es un elemento central de su pensamiento. Por ello, propone Locke respecto a las guerras de conquista argumentos muy parecidos a los que veremos respecto a la autodeterminación de los pueblos como libertad negativa, que “muchos han confundido la fuerza de las armas con el consentimiento del pueblo” y así, del mismo modo que cuando un agresor “se pone en estado de guerra con otro hombre e injustamente invade sus derechos, nunca pueda, por semejante guerra injusta, llegar a tener derecho sobre el conquistado” algo que seguramente será “fácilmente aceptado por todos los hombres”²⁸³, de manera que no habremos de aceptar la conquista de agresores externos a la comunidad de hombres conformada por el pacto. Es el mismo Locke el que lleva el razonamiento del plano individual al colectivo:

“Si un ladrón entrara en mi casa y, poniéndome una daga en la garganta, me hiciera sellar documentos para entregarle mis propiedades a él, ¿le daría eso algún derecho? Idéntico derecho tiene un conquistador injusto que me fuerza a la sumisión por la fuerza de las armas. La injuria y el crimen serían idénticos, lo cometiera quien lleva un a corona o un pequeño villano. El derecho de un ofensor y el número de sus seguidores no modifican la ofensa más que para agravarla de manera idéntica”²⁸⁴.

²⁸⁰ Newey, G., *Routledge philosophy guidebook to Hobbes and Leviathan*, Routledge. Taylor & Francis Group, London, New York, 2008, p. 102

²⁸¹ Hobbes, T., *Leviathan*, op. cit., p. 114.

²⁸² Locke, J., *Segundo ensayo sobre el gobierno civil*, Ed. Losada, Buenos Aires, 2002, p. 70.

²⁸³ Locke, J., *Segundo ensayo...*, op. cit., p. 127.

²⁸⁴ Locke, J., *Segundo ensayo...*, op. cit., p. 127

Vemos aquí, por tanto, un precedente razonado fundamental para la construcción de la autodeterminación como libertad negativa, como exclusión de la injerencia ilícita en los asuntos internos de un estado constituido justamente.

En relación al problema del consentimiento, Locke responde además a las dos grandes críticas en torno a la falta de pruebas históricas con las que sostener su teoría de un consenso originario y a la falta de opciones que tendrían los hombres que “al haber nacido bajo un gobierno, deben someterse a él y no tienen libertad para iniciar uno nuevo”²⁸⁵. Sobre esta última cuestión, Locke reflexiona que :

“En los Estados que no permiten que ninguna parte de sus dominios sea desmembrada, ni que la disfrute nadie que no pertenezca su comunidad, el hijo normalmente no puede disfrutar de las posesiones de su padre sino bajo los mismos términos en que su padre lo hizo, es decir, convirtiéndose en miembro de la sociedad, por lo cual se pone al punto bajo el gobierno ya establecido, al igual que cualquier otro súbdito de ese Estado. Y así el consentimiento de los hombres libres que nacen bajo un gobierno, y que es lo único que los convierte en súbditos de éste, al darlo separadamente cada individuo cuando le llega al turno –es decir, cuando llega a la mayoría de edad- y no todos juntos, la gente no repara en ello y piensa que dicho consentimiento no se ha dado o que no es necesario, por lo cual concluye que ser súbdito es tan natural como ser hombre”²⁸⁶.

Y es que para Locke la tierra, propiedad del hombre, es lo que garantiza su subsistencia, en ningún caso es lo que marca su identidad, algo irrelevante respecto al consentimiento. La propiedad de la tierra salvaguarda al hombre del hambre y de la injusticia. Son los hombres los que dan el consentimiento del pacto, no las tierras en las que viven. Los gobiernos tienen jurisdicción “sólo sobre la tierra y alcanza a quien la posee (...) sólo en la medida en que la habite y disfrute de ella”. Por ello, para Locke,

“cada vez que el dueño, que no ha dado nada más que un consentimiento tácito al gobierno, deje por donación, venta u otro procedimiento, la susodicha posesión, está en libertad de ir e incorporarse en cualquier otro Estado, o acordar con otros hombres el comienzo de uno nuevo in *vacuis locis*, es decir, en cualquier parte del mundo que encuentren libre y sin dueño”²⁸⁷.

También para J.J. Rousseau “el Estado lo hacen los hombres, y éstos son nutridos por el terreno”, en una relación entre tamaño del terreno y número de habitantes que no ha de poder ser precisada con exactitud²⁸⁸, pero no son esos “terrenos” los entes que hacen el consenso, sino los hombres, pero sí conforman éstos, sin embargo, parte de los condicionantes pre-políticos. La creación del Estado es llevado a cabo por un acto consensual, pero Rousseau concibe una serie de condiciones de asociación pre-políticas, por las cuales unos hombres habrían de asociarse con unos y no con otros: “¿qué pueblo es apto para la legislación? Aquel que, encontrándose ya ligado por algún vínculo de origen, de interés o de convención, no ha soportado aún el verdadero yugo de las leyes (...)”²⁸⁹.

²⁸⁵ Locke, J., *Segundo ensayo...*, op cit., pp. 72 y 73

²⁸⁶ Locke, J., *Segundo ensayo...*, op cit., p. 85

²⁸⁷ Locke, J., *Segundo ensayo...*, op cit., p. 87

²⁸⁸ Rousseau, J.J., *El contrato social*, Alba, Madrid, 1996, p. 69

²⁸⁹ Rousseau, J.J., *El contrato...*, op. cit., p. 71

Entre las condiciones pre-políticas, recibiendo las reflexiones de Montesquieu, resaltarían las geográficas, pues “no siendo la libertad fruto de todos los climas, su importancia no es la misma para todos los pueblos”²⁹⁰. Así, el azar geográfico, la inercia histórica, esto es las condiciones fácticas *ex ante*, pero también el interés –como en cualquier contrato– harían nacer una *pluralidad* de pactos.

Rousseau asume que no es tanto el Estado (uno) el creado por el contrato social, sino los estados (todos) los que son creados por diversos pactos, cada cual con el sistema político que mejor se adapte a sus condiciones prepolíticas. Describe, como hiciera antes Aristóteles, las formas de gobierno, pero sin decantarse claramente por una como hiciera el estagirita, considerando por contrario que cada una se adaptará mejor a las condiciones prepolíticas de quienes lleven a cabo el contrato social: “se ha discutido siempre acerca de la mejor forma de gobierno, sin considerar que cada una es la mejor en ciertos casos y la peor en otros”²⁹¹. Esta reflexión de Rousseau abre la puerta a la tolerancia de diversas formas de gobiernos que habitan la misma tierra como iguales, muy en la línea del nuevo sistema político internacional postwestfaliano.

No podemos dejar de hacer nuevamente referencia a la voluntariedad de la tales pactos, aunque los contornos de sus signatarios queden por ahora difusos, una voluntariedad que es continuada, que no cesa con el pacto, una idea ésta que abriría más tarde la puerta a aquella de la autodeterminación de los pueblos entendida en su sentido más amplio, de manera que, como pensarán Mazzini y otros más tarde, no pueda concebirse adecuadamente la autodeterminación de los pueblos sin democracia, en un binomio conceptualmente inseparable. En una comparación histórica, Rousseau deja escrito que “ni los mismos *decemviri* se arrogaron nunca el derecho de imponer una ley por su exclusiva autoridad. «Nada de lo que proponemos –decían al pueblo– puede convertirse en ley sin vuestro consentimiento. Romanos: sed vosotros mismos los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad»”²⁹².

Podemos distinguir, como hemos bosquejado anteriormente y ha estudiado Patrice Canivez²⁹³ tres concepciones de *pueblo* en Rousseau: la concepción *política*, la concepción *histórica y cultural*, para la que preferirá usar el término “nación” (pero no siempre, en el Libro II de *El contrato social* utilizará el término en este sentido), y finalmente, pueblo como concepto *social*, refiriéndose a las clases más bajas de la sociedad del siglo XVIII. En cualquiera de las concepciones, la referencia a *un* pueblo implica la existencia de hombres que *no* forman parte de tal pueblo.

No sabemos en sus detalles y a ciencia cierta cómo habían de ser, para Rousseau, las relaciones entre la pluralidad de pueblos que (así asume) por fuerza han de existir –como entes políticos– porque nunca llegó a escribir sobre ello: su *El contrato social* fue una obra concebida como parte de una obra de teoría política más extensa que nunca llegó a finalizar. Pero si en algo ha sido controvertida es en la relación teórica del hombre libre

²⁹⁰ Rousseau, J.J., *El contrato...*, op. cit., p. 101

²⁹¹ Rousseau, J.J., *El contrato...*, op. cit., p. 88

²⁹² Rousseau, J.J., *El contrato...*, op. cit., p. 61

²⁹³ Canivez, P., “Jean Jacques Rousseau’s concept of people”, *Philosophy and Social Criticism*, vol. 30, n. Junio, 2004, pp. 393–412

en su estado de naturaleza y la del ciudadano con libertades y deberes civiles.

En palabras de Canivez, considerando los para él aparentemente contradictorios puntos de vista adoptados por las diferentes obras del ginebrino, en la obra de Rousseau “parece haber una estricta dicotomía entre educar a un hombre y educar a un ciudadano. Educar a un hombre significa preservar su independencia natural y su benevolencia. Educar a un ciudadano, por el contrario, significa hacer al individuo sentirse parte de una comunidad a la cual debe estar totalmente dedicado. Educar a un hombre significa dejarlo desarrollar ciertos sentimientos humanitarios. Educar a un ciudadano significa desarrollar un patriotismo que favorece la comunidad sobre el resto de la humanidad”²⁹⁴. La difícil disyuntiva es ejemplificada, de un lado, por el *Emile*, el hombre para ser educado hombre y no ciudadano frente a los hombres que dejan de ser sólo hombres y pasan a ser ciudadanos con libertades civiles en *El contrato social*, aparentemente concluyendo que habremos eventualmente de elegir entre el hombre –cosmopolitismo o humanismo- y el ciudadano, -patriotismo o nacionalismo-, y a que, en fin, “todo patriota es duro con los extranjeros”. Aceptando la general crítica al respecto, Canivez intenta superar esta dicotomía argumentando que Rousseau no elige entre ambas posturas, estando ambas más sutilmente imbricadas.

Del mismo modo que la virtud no es un bien natural, porque sólo puede emerger con la auto-restricción y la conciencia nacida del enfrentamiento al otro, propia de la vida en sociedad, el hombre sólo puede ser completamente hombre en su fin último, esto es hombre virtuoso, si vive en sociedad, es decir, viviendo en sociedad, aunque sea ésta la fuente, *también*, de sus males. Aunque *Emile* renuncie a ser ciudadano y se declare cosmopolita, simplemente hombre, quién le ha permitido así sentirse es precisamente la vida en sociedad. El hombre educado como *Emile* habrá de desarrollar virtudes cívicas que incluyen entre ellas la compasión y solidaridad humana. En palabras de Canivez, el *Emile* se convierte en sí mismo en un milagro, una legítima aspiración: “el hombre ordinario que consigue ser ciudadano en un estado imperfecto y permanece todavía hombre”.

Ahora bien, para reconciliar hombre y ciudadano se hace necesario “reconciliar la pertenencia a un estado concreto y el sentido de humanidad en el marco de un orden internacional pacífico”. Desafortunadamente, éste es el límite de la argumentación, porque Rousseau no llegó a escribir mucho más en este sentido, siendo su *El contrato social*, como hemos dicho, una obra inacabada que no incluyó lo referente a las relaciones externas de los estados, en relación a lo cual sugiere Canivez que, tal vez, no supiera Rousseau cómo resolver el problema.

A pesar de los esfuerzos de Canivez de explicarnos la reconciliación doctrinal y teórica de hombre y ciudadano en la obra de Rousseau, en un entorno internacional primitivo y aún en constante peligro de guerra, las diferencias entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano son evidentes, diferencias éstas difícilmente explicables entre los que se quedan a uno y otro lado de la frontera. Quedándonos aún en este momento

²⁹⁴ Canivez, P., “Jean Jacques Rousseau’s concept of...”, op. cit., pp. 393–412.

histórico, recordemos que la obra de Rousseau tuvo una grandísima influencia política. Ya en la Revolución Francesa podemos observar la semilla de la tensión teórica hombre-ciudadano roussoniano de la que después la tradición francesa, y podíamos añadir la nuestra, llegaría a diferenciar entre derechos humanos (universales) y derechos fundamentales (los derechos dentro de unas fronteras constitucionales). Sin referirme aquí a la exclusión de mujeres o la esclavitud -institución despreciada por Rousseau y por cierto abolida por la Convención Nacional francesa en 1794- mantenía esta dificultosa relación entre la proclamación de la igual dignidad universal y la diferencia asumida fácticamente por fronteras dibujadas por los regímenes anteriores. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, muestra en su mismo título la diferencia entre los derechos del hombre universal y los derechos, añadidos, de personas que por el azar prerrevolucionario quedaron dentro de la frontera francesa.

El liberalismo contractualista, como ese segundo pilar que abre la puerta a la autodeterminación de los pueblos, dejaría, por tanto, importantes cuestiones sin resolver en el camino. Las reflexiones de los contractualistas partían de posiciones universalistas, de lo común a todos los hombres. Aún poniendo la voluntad en el centro de sus teorías del origen del estado la aproximación al problema de las fronteras, la cuestión de hasta dónde se extendía esa voluntad, era fáctica: allá donde antes hubiera habido un rey legitimado por gracia divina, en ese espacio, en ese territorio, delimitado *a priori*, había un pueblo con derecho a ejercer su soberanía popular. Hemos visto que, con diferencias, Hobbes, Locke o Rousseau se enfrentarían al problema del consentimiento hacia dentro del estado, primer problema que exigía solución. Kant abogaría por el patriotismo frente al paternalismo, pero no explicaría el porqué adscribirse a una patria y no a otra. Kant consideró que igualmente sería mejor desde un punto de vista práctico una federación de estados que un gran estado mundial. pero ¿por qué habrían de adscribirse unos hombres a uno de esos estados y no a otro? La insuficiente respuesta y solución a tal problema resalta las diferencias entre, por ejemplo, un cosmopolita resignado a la existencia de fronteras como Kant y sus discípulos nacionalistas Fichte y Herder.

Así hasta este momento, las características culturales del pueblo que ha de conformarse como ente político no eran de relevancia para la legitimidad del ejercicio del poder político: es el consenso la base del contrato social, que se extiende a los hombres que deseen adherirse, bien porque tengan unas características comunes, bien porque hayan de hecho vivido bajo el mismo gobierno, aunque ilegítimo, con anterioridad.

Quedó así también irresoluta con los contractualistas una cuestión adicional. La tradición liberal clásica, como recuerda Allen Buchanan, quedó asimismo ensordecedoramente callada ante el problema de la secesión²⁹⁵. Las fronteras, concebidas fácticamente, no encontraban razones para ser legítimamente modificadas y sólo más tarde, con la reflexión en torno a qué es *pueblo*, esto es, quiénes son concretamente, en sus definidos contornos, los que conforman los miembros de la unidad con soberanía popular, pudo ser

²⁹⁵ Buchanan, A., "Self-Determination and the Right to Secede", *Journal of International Affairs*, vol. 45, n. 2, 1992, p. 350.

concebido políticamente el cambio de esas mismas fronteras basado en justificaciones (etno)nacionalistas. Salvo aisladas menciones, como por ejemplo la rebeldía en tierras remotas del estado en *El contrato social* de Rousseau o sobre la injerencia extranjera en asuntos internos durante procesos de desintegración expuesto en *Sobre la paz perpetua* de Kant²⁹⁶, la cuestión de la secesión de partes del territorio o de grupos fue una cuestión ampliamente ignorada: el acto se realizaba al inicio de la vida en sociedad y las revoluciones más tenían que ver con el cambio de la forma de gobierno.

Cuando Thomas Paine y otros defendían la independencia de territorios frente a regímenes injustos, apelaban del mismo modo al pueblo, pero las razones tenían hasta cierto punto más que ver con la rebeldía contra un gobierno injusto de otro, en este caso la monarquía británica, que con la secesión de un pueblo de otro por sus características sociales o étnicas en sí. Algo parecido sucedió en las colonias americanas españolas, de las que nacieron estados delimitados por las fronteras administrativas del antiguo imperio, con unos argumentos predominantemente liberales en los que las naciones que aspiraban a la independencia no coincidían con los grupos étnicos o pueblos.

§3.1.2 Revolución y nacionalismo en el siglo XIX

A comienzos del siglo XIX veremos surgir con fuerza las teorías nacionalistas basadas en las características prepolíticas de los hombres que han de conformar la unidad política: si no eran las fronteras de los reyes antiguos las que habían de definir el grupo de hombres a sí mismos gobernados, habrían de ser otras razones, ciertas características culturales o étnicas comunes de los hombres que quisieran gobernarse y, en fin, oponerse al gobierno de *otros* hombres *extranjeros*.

Si a partir del triunfo de las revoluciones liberales es el pueblo el que debe de repartir conforme a su voluntad democrática los recursos entre sí, queda definir idealmente el pueblo en cuanto grupo objeto de tal reparto.

El comienzo del siglo XIX y las guerras napoleónicas marcan el inicio del florecimiento del nacionalismo en Europa. Sin pretender ahondar excesivamente en la teoría del nacionalismo, por su obvia importancia en la construcción del concepto del derecho de autodeterminación, recordemos brevísimamente algunas líneas de reflexión ya clásicas acerca del mismo.

Hans Kohn, uno de los pioneros del estudio moderno del nacionalismo, lo definía en su

²⁹⁶ Para Kant, ningún estado debe inmiscuirse en los asuntos internos de otro. “ (...) Sin embargo, no resulta aplicable al caso de que un Estado se divida en dos partes a consecuencia de disensiones internas y cada una de las partes represente un Estado particular con la pretensión de ser el todo; que un tercer Estado preste entonces ayuda a una de las partes no podría ser considerado como injerencia en la constitución de otro Estado (pues sólo existe anarquía). Sin embargo, mientras esta lucha interna no se haya decidido, la injerencia de potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo independiente que combate una enfermedad interna; sería, incluso, un escándalo y pondría en peligro la autonomía de todos los Estados”. Kant, I., “Sobre la Paz Perpetua (1795)” en *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*, Cátedra. Madrid, 2009, p. 9

influyente obra *Nacionalismo: su significado e historia*, de esta manera: “El nacionalismo es un estado de la mente, en el cual el individuo siente que su lealtad suprema se debe al estado-nación. Ha existido a lo largo de la historia, con distinta fortaleza, una adhesión profunda a la propia tierra nativa, a las tradiciones locales y a la autoridad territorial establecida – Pero no fue sino hasta finales del siglo XVIII que el nacionalismo en el sentido moderno de la palabra se convirtió en un sentimiento generalmente reconocido que de manera creciente moldeaba la vida pública y privada. Sólo desde tiempos muy recientes se ha cuestionado que cada nacionalidad debería formar un estado, su propio estado, y que el estado debería incluir a toda la nación”²⁹⁷.

Fue Hans Kohn, como explica en su reciente análisis Krzysztof Jaskułowski, el “responsable de introducir en el estudio anglófono del nacionalismo uno de sus temas más básicos y dilatados en el tiempo, aquel de la distinción fuertemente moralista entre un nacionalismo “bueno”, que asociaba con Occidente, y un nacionalismo “malo” típico del mundo no-occidental”, una dicotomía que ha llevado a distinguir muy comúnmente entre un nacionalismo cívico y occidental y un nacionalismo étnico y oriental.

Tal dicotomía entre nacionalismo “cívico” y “étnico”, adelantemos, ha sido fuertemente contestada por autores del prestigio de Rogers Brubaker, quien la considera “conceptualmente ambigua, empíricamente engañosa, y normativamente problemática”, proponiendo la distinción entre concepciones de nación y formas de nacionalismo en el marco del estado (*state-framed*) y contra el estado (*counter-state*)²⁹⁸.

Elie Kedourie, en su obra *Nacionalismo*, de 1960, lo definía así: “El nacionalismo es una doctrina inventada en Europa al comienzo del siglo XIX. Pretende proveer un criterio para la determinación de la unidad de población adecuada para disfrutar de un gobierno exclusivamente suyo, para el ejercicio legítimo del poder en el Estado, y para la correcta organización de una sociedad de estados. Brevemente, la doctrina sostiene que la humanidad está naturalmente dividida en naciones, que las naciones son conocidas por ciertas características que pueden ser determinadas con certeza, y que el único tipo de gobierno legítimo es el autogobierno nacional”²⁹⁹.

Ernest Gellner, otro importante teórico del nacionalismo, lo definiría así en su conocida obra *Naciones y nacionalismo*:

“El nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política. Ya sea como sentimiento, ya como movimiento, la mejor manera de definir el nacionalismo es atendiendo a este principio”³⁰⁰.

La definición de nacionalismo de Gellner, como él mismo explica, está supeditada a los conceptos de estado y nación³⁰¹. Partiendo de la visión weberiana del estado, Gellner considera que “el nacionalismo sólo emerge en situaciones en las que la existencia del estado se da ya por supuesta. Condición necesaria, aunque no suficiente en absoluto, del nacionalismo es la existencia de unidades políticamente centralizadas y de un entorno

²⁹⁷ Kohn, H. *Nationalism: its meaning and history*, Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1965, p. 9

²⁹⁸ Brubaker, R., *Ethnicity without groups*. Harvard University Press. Harvard, 2004, p. 5 y pp. 132 y ss

²⁹⁹ Kedourie, E., *Nationalism*, Hutchinson University Library, Hutchinson & Co, London. 1961, p. 9

³⁰⁰ Gellner, E. *Naciones y nacionalismo*, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 13

³⁰¹ Gellner, E. *Naciones...*, op. cit., p. 15

político-moral en que tales unidades se den por sentadas y se consideren norma”³⁰², de manera que “cuando no hay estado, no surge el problema del nacionalismo. Ello no quiere decir que surja en todos y cada uno de los estados. Por el contrario, sólo lo hace en algunos”.³⁰³ Es por ello que el fenómeno nacionalista está histórica y geográficamente determinado, entendido por Gellner en relación con la creación de estados y la necesidad de las burguesías de mano de obra identitariamente y lingüísticamente homogénea para la más eficiente realización de las tareas propias de la sociedad nacida de la revolución industrial.

Benedict Anderson, en su clásico *Comunidades Imaginadas* de 1983, describe la nacionalidad y el nacionalismo como “artefactos culturales” y trata en su obra de “demostrar que la creación de estos artefactos, a fines del siglo XVIII, fue la destilación espontánea de un “cruce” complejo de fuerzas históricas discretas; pero que, una vez creados, se volvieron “modulares”, capaces de ser trasplantados, con grados variables de autoconciencia, a una gran diversidad de terrenos sociales, de mezclarse con una diversidad correspondientemente amplia de constelaciones políticas e ideológicas”³⁰⁴. Para Anderson, el nacionalismo ha de ser asociado a conceptos identitarios más cercanos a “parentesco” o “religión” más que a ideologías políticas conscientes como “fascismo” o “liberalismo”, subrayando su vacuidad teórica: “no ha producido jamás sus propios grandes pensadores: no hay por él un Hobbes ni un Tocqueville, ni un Marx o un Weber”. Habría de comprenderse la construcción de las identidades en Europa a partir de la invención de la imprenta, que comienza con la difusión de textos en términos geográficos y grupos humanos determinados, construyendo comunidades lingüísticas de personas que conciben pertenecer a la misma comunidad aunque no se conozcan personalmente entre ellos. Alejándose de Gellner, en cuanto que adopta una postura más alejada de la concepción de falsedad y fabricación de la comunidad y se inclina por una postura más neutra, Anderson define la nación como “una comunidad políticamente imaginada como inherentemente limitada y soberana”³⁰⁵.

Anderson llamó la atención, como otros, sobre la incapacidad del liberalismo y del marxismo decimonónico de adecuarse teóricamente a los movimientos nacionalistas, de manera que tuvieron que adaptarse a las exigencias de estos, en una inercia que ha llegado hasta nuestros días: “Eric Hobsbawm tiene toda la razón cuando afirma que “los movimientos y los Estados marxistas han tendido a volverse nacionales no sólo en la forma sino también en la sustancia, es decir, nacionalistas. Nada sugiere que esta tendencia no continuará”³⁰⁶.

Eric Hobsbawm, por su parte, en *Naciones y nacionalismo desde 1788*, se muestra partidario de no entender la nación como una “entidad social primaria e invariable”³⁰⁷.

³⁰² Gellner, E., *Naciones...*, op. cit., p. 17

³⁰³ Gellner, E., *Naciones...*, op. cit., p. 18

³⁰⁴ Anderson, B., *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, Colección Popular. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1993, p. 21

³⁰⁵ Anderson, B., *Comunidades...*, op. cit., p. 23

³⁰⁶ Anderson, B., *Comunidades...*, op. cit., p. 19

³⁰⁷ Hobsbawm, E., *Naciones y nacionalismo desde 1788*. Crítica. Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998,

Aclara utilizar el término nación en el mismo sentido que Gellner, recalcando “el elemento de artefacto, invención e ingeniería social que interviene en la construcción de naciones”³⁰⁸, (si bien se aleja de él al proponer un enfoque “desde abajo”). Para Hobsbawn el principio nacionalista exige que el deber político para con la organización política que representa a la nación se imponga a todas las demás obligaciones públicas, pudiendo llegar a imponerse, en casos extremos, a cualquier obligación. Esto distingue para Hobsbawn “el nacionalismo moderno de otras formas menos exigentes de identificación nacional o de grupo”³⁰⁹.

En coincidencia con los autores anteriormente mencionados, Hobsbawn critica la visión primordialista de la nación y la relaciona “exclusivamente a un período concreto y reciente desde el punto de vista histórico” y con el surgimiento de la entidad política del estado moderno, de manera que han de entenderse nación y estado como conceptos que han nacido de manera conceptualmente interrelacionada.

Con estas consideraciones de fondo, regresemos ahora a finales del siglo XVIII y recorramos la evolución del concepto de nación en los autores contemporáneos y el surgimiento del concepto relacionado de autodeterminación de los pueblos.

La obra de los autores brevemente mencionados, Johann Gottlieb Fichte (1762 –1814) o Johann Gottfried von Herder (1744 –1803), marcaron un hito en el desarrollo teórico de la visión *primordialista* de la nación, autores para los que la nación es percibida como un fenómeno natural, fuera del ámbito de manufacturación del hombre, como algo eterno, sagrado.

Fichte, estudiante de Kant, pero alejado considerablemente de su doctrina, ha sido considerado por algunos como el verdadero iniciador del movimiento idealista alemán. Implicado políticamente, pronunció en el invierno de 1807-1808 una serie de discursos en Berlín conocidos como los *Discursos a la nación alemana*, en los que se ocupa tanto de definir las características de la nación alemana como la educación que los jóvenes alemanes habían de recibir, de la nación para la nación, pues a Fichte “formarse en cuanto hombre le parecía la única y auténtica forma de educar para la nación, para el sentido comunitario”³¹⁰. Con la ocupación francesa y las guerras napoleónicas de fondo, Fichte se convierte en el iniciador de un movimiento teórico nacionalista, que comienza por la división conceptual, precisamente, del Estado y la nación: “de todo esto se deduce que el Estado, como mero gobierno de la vida humana que se desarrolla en el regular camino de la paz, no es algo primero y existente para sí (...)”³¹¹, escribiría, como sí sucede para Fichte con la nación, algo que de todos modos, había sucedido ya históricamente: “al igual que ocurrió con los antiguos griegos, el Estado y la nación estaban incluso

p.18.

³⁰⁸ Hobsbawn, E., *Naciones y nacionalismo...*, op. cit., p. 18.

³⁰⁹ Hobsbawn, E., *Naciones y nacionalismo...*, op. cit., p. 17.

³¹⁰ Abellán, J., *Nación y nacionalismo en Alemania. La “cuestión alemana” (1815-1990)*, Tecnos, Madrid, 199, p. 31.

³¹¹ Fichte, J. G., *Discursos a la nación alemana*, Ed. María Jesús Varela/Luis Acosta, Editora Nacional, Madrid, 1977, p. 218.

separados, representándose cada cual a sí mismo (...)”³¹².

En el caso alemán, esto había sido así también históricamente de modo que “quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era considerado ciudadano por partida doble; por una parte era ciudadano del Estado en que había nacido, a cuya protección era encomendado; por otra, era ciudadano de toda la patria común de la nación alemana (...)”³¹³ de modo que “nunca un príncipe alemán ha podido acotar para sus súbditos las fronteras de su patria dentro de las montañas y ríos en que gobernaba ni considerarlos siervos de la gleba”³¹⁴.

En su Discurso cuarto, *Diferencia fundamental entre los alemanes y demás pueblos de origen germánico* comienza definiendo a los alemanes, como primer paso para distinguirlos de otros, con unos criterios a la vista pseudocientíficos. Para Fichte, los alemanes “se quedaron en sus lugares de asentamiento primitivos (...) mantuvieron y continuaron desarrollando la lengua originaria del pueblo primitivo”³¹⁵, y es por ello la lengua la que define a un pueblo, no la sangre ni cualquier otra característica: “la mezcla de sangre no afectó a la germanización o al mantenimiento de las características germanas”³¹⁶, la lengua “es de mayor importancia” para Fichte porque “si se llama pueblo a un grupo de hombres que viven juntos, que sufren las mismas influencias externas en sus órganos de fonación (...)”³¹⁷ y, por tanto, comparten *logos* como lengua, conceptos y cosmovisión, que además evoluciona coordinadamente en el tiempo, “cuán grande es la influencia que la condición de una lengua puede ejercer sobre el desarrollo humano total de un pueblo (...)”³¹⁸.

El nacionalismo primordialista de Fichte requiere la distinción entre unos grupos humanos y otros como se ve en el *Discurso sexto. Exposición de los rasgos característicos alemanes en la Historia*, en el que marca la clara distinción entre los alemanes y “el extranjero”. Abunda en las características distinguibles en su *Discurso séptimo. Concepción mas profunda de la originalidad y germanidad de un pueblo*.

Una vez que el *pueblo* es distinguible como nación por características extrapolíticas como diferente del Estado, el siguiente paso es *otorgarle derechos* a este nuevo ente, derechos que hoy llamaríamos colectivos: “los rasgos fundamentales de los alemanes, como los de un pueblo originario que tiene *derecho* a llamarse pueblo por antonomasia frente a otras estirpes que se separaron de él (...)”³¹⁹.

El ente político independiente del individuo, con derechos, puede ser amado por cada individuo que lo compone. El *Discurso octavo. Qué es un pueblo en el sentido superior*

³¹²Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 218

³¹³Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 218

³¹⁴Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 219

³¹⁵Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 125

³¹⁶Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 126

³¹⁷Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 127

³¹⁸Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 138

³¹⁹Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 181

de la palabra y qué es amor a la patria nos explica cuestiones que se harían de uso común en los años venideros. Aclara Fichte que por amor a la patria entiende “con mayor exactitud: ¿qué es amor del individuo a su nación?”³²⁰ Algo que se ama ha de ser amado en su *unicidad*, ¿cómo se va amar algo vulgar y corriente, menos aún dar la vida por ello? Para amar, se necesita un agente capaz de hacerlo. Así, para Fichte, refiriéndose a la nación alemana, no tiene empacho en afirmar que “si hasta ahora, a lo largo de nuestro análisis, hemos procedido de modo adecuado, de ello tiene que inferirse que sólo el alemán -el hombre originario y no muerto en un estatuto arbitrario- tiene verdaderamente un pueblo y tiene derecho a contar con un pueblo, y que sólo él es capaz de amor verdadero y racional a su nación”³²¹.

Aún más, para poder amar a un pueblo, éste ha de ser eterno, su existencia no puede ser contingente. “El amor que es verdadero amor y no simplemente una concupiscencia pasajera, nunca se adhiere a lo transitorio”³²². Esta característica será constante en todas las concepciones nacionalistas primordialistas, que requieren la eternidad histórica, la continuidad mitológica entre un origen legendario del pueblo y una situación actual, en una línea ininterrumpida de eventos sucesivos y personas, con un carácter distinguible e inmutable, que por sus distintivas cualidades puede ser amado hoy como lo pudo ser de igual manera desde sus inicios.

En la característica de eternidad del pueblo que requiere el amor del individuo late una idea anterior ya profundamente arraigada: el amor a Dios. En efecto, nación y deidad comparten paternidad del hombre, eternidad de su naturaleza, dan identidad a unos hombres frente a otros; la sustitución de Dios por nación no habría de ser demasiado difícil. En Fichte, a pesar de las acusaciones que se le hicieron de ateísmo, bien vemos el enlace argumental en lo divino de la nación: “(...) Éste es un pueblo en el sentido superior de la palabra y desde el punto de vista de un mundo espiritual: el conjunto total de hombres que conviven en sociedad y que se reproducen natural y espiritualmente de manera continuada, que está sometido en su totalidad a una determinada ley especial del desarrollo de lo divino a partir de él”³²³.

Un amor tal se aparece así ante nosotros totalmente opuesto a la racionalidad de los contractualistas liberales; un amor tal es comprendido por el noble y virtuoso, y quien no lo sea habrá de ser forzado a lo que debiera hacer, a amar, a sentir tal amor: “(...) no el espíritu del sereno amor cívico a la constitución y a las leyes, sino la llama ardiente del amor superior a la patria que entiende la nación como envolvente de lo eterno y a la que el noble se entrega con alegría y el no noble, que sólo está ahí por amor al primero, debe entregarse quiera o no”³²⁴. El amor a la patria, por último, se presenta como algo glorioso, y así exhorta Fichte a los alemanes, en el nombre de sus antepasados y por sus hijos: “haced que también nosotros nos podamos vanagloriar de vosotros y que, a través de vosotros, pasemos a formar parte como eslabón intachable, de la misma gloriosa

³²⁰Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 203

³²¹Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 203

³²²Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 209

³²³Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 207

³²⁴Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 213

sucesión”³²⁵.

La tozuda realidad de la mezcla de gentes presente en la sociedad alemana de entonces –y de todas- hizo que la encendida defensa de la nación alemana arrastrara a Fichte, en un punto de su carrera, arguye Jonathan M. Hess³²⁶, a revelar una tendencia antisemita, objetando vehementemente lo que Fichte consideraba la creación de un estado dentro de un estado o una nación dentro de una nación.

En conclusión, durante los años 1806-1815, hasta la paz de 1815, considerada una decepción para los alemanes, “se había intensificado fuertemente la conciencia nacional de los alemanes”³²⁷. A pesar de que Fichte se ve a sí mismo como pionero de la lucha nacional alemana, responsable moral del despertar de los alemanes, lo cierto es que el origen de sus ideas y posiciones políticas es más fácilmente entendible si conocemos la obra de otro alumno de Kant, poco más mayor y ciertamente no demasiado aventajado, que habría de convertirse en otro símbolo del nacimiento del romanticismo nacionalista en Europa: Johann Gottfried von Herder.

Herder, conocido más por sus estudios lingüísticos y poéticos que filosóficos, había sugerido ya en su obra las diferencias existentes entre los pueblos, y la relación entre el espíritu de esos pueblos y sus diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas. Cada pueblo era distinguible y tenía un destino diverso. Conocido por su *Tratado sobre el origen del lenguaje* de 1772, Herder vincula la lengua al carácter de la gente, de manera que hablar un idioma extranjero es, en cierto modo, llevar una vida artificial, por lo que si un hombre es forzado a cambiar su idioma materno no cumple con el destino o fin de su nacimiento. Alejado del racionalismo kantiano, Herder fue más influido por Johann Georg Hamann, considerado ideólogo del movimiento artístico literario *Sturm und Drang* (tormenta y pasión).

Cedoaria ha resaltado como Herder se opone al cosmopolitismo, suponiendo en el edulcorado salvaje de su imaginación romántica –que vive en una cabaña, con su familia, relatando historias, transmitiendo así oralmente la mitología y la esencia de su pueblo, en su propio idioma, disfrutando, en suma, de su cultura distinta- una hospitalidad con el extranjero de la que no es capaz de mostrar un hombre cosmopolita, corrompido al habersele arrancado su cultura, en unas particulares resonancias roussonianas³²⁸. Herder reflexiona sobre la idea de gente como pueblo (*Volk*) concluyendo que cada pueblo cuenta con un espíritu distinto (*Volksgeist*), un espíritu que supera al individuo y que es expresado de manera distinta a través de los hechos culturales. Las ideas del *Volksgeist* herderiano tuvieron una gran influencia posterior, comenzando por los hermanos Schlegel, extendiéndose en los años posteriores por Europa –a España llegó de la mano de Böhl de Faber- y convirtiéndose en el símbolo de lo que luego ha venido en llamarse, como hemos mencionado, nacionalismo primordialista. El surgimiento del fenómeno

³²⁵ Fichte, J. G., *Discursos...*, op. cit., p. 343

³²⁶ Hess J. *Antisemitism. An encyclopedia of prejudice and persecution*, Ed. Richard S. Levy, ABC-Clio, Santa Barbara, California, 2005. Pp. 227 y ss / Pp. 681 y ss.

³²⁷ Abellán, J., *Nación y nacionalismo en Alemania...*, op. cit., p. 31.

³²⁸ Kedourie, E., *Nationalism*, Hutchinson University Library, Hutchinson & Co, London, 1961, p.57

nacionalista en cuanto fenómeno histórico, cultural y político no fue, naturalmente, homogéneo ni geográfica ni temporalmente, registrándose sustanciales variaciones en su acomodo político y teórico.

En 1814 se celebró el Congreso de Viena, que extendió su celebración desde el primero de octubre de ese año, hasta el nueve de junio de 1815, con el fin de reorganizar la paz y las fronteras europeas tras las guerras napoleónicas. En cuanto conferencia internacional, la primera de una serie que marcó las relaciones internacionales en un esquema conocido bajo el nombre de sistema Metternich (por el canciller austrohúngaro), predominó un cierto cuidado conservadurismo diplomático, en el que Wellington incluso propuso mantener una Francia fuerte para el equilibrio geoestratégico de Europa mientras se retornaba a principios monárquicos propios del Antiguo Régimen. El Congreso de Viena no sólo retornaba a principios monárquicos sino que frenaba las aspiraciones nacionalistas con la intención de salvaguardar en cierto sentido la dinámica imperial pluriétnica propia del absolutismo preliberal. Naturalmente, el resultado del Congreso de Viena no frenó ni la extensión de las ideas liberales, ni socialistas ni nacionalistas. Resume Griffiths que “el Congreso de Viena de 1815 no aceptó la autodeterminación como base para redibujar el mapa de Europa, pero demandas similares formuladas por pueblos oprimidos de los imperios austro-húngaro y ruso recibieron después un trato más favorable. También, tras las revoluciones de 1848, los movimientos nacionales llevaron a la formación de dos nuevos estados unificados, Alemania e Italia”³²⁹.

Las revoluciones se sucedieron a lo largo de todo un siglo convulso: revoluciones liberales como la de 1820 en España, la guerra de independencia de Grecia de 1821, los procesos de independencia de colonias americanas, la revolución de Julio de 1830 (*Trois Glorieuses*) de París que llevó a la independencia de Bélgica, los procesos nacionalistas de unificación de Italia y Alemania, etc. Los procesos de independencia de marcado signo nacionalista en los años posteriores a la Conferencia de Viena en Europa fueron llevados a cabo, a diferencia de las anteriores revoluciones republicanas americana y francesa, bajo la influencia del principio monárquico lo que produjo una transición del modelo absolutista que se había tratado de reinstaurar con las nuevas ideas, tratando de conciliar la herencia histórica y la modernidad, dando lugar así a las monarquías constitucionales, la conocida Europa de la Restauración, principios que comenzarían a declinar a partir de los procesos revolucionarios de 1848, los cuales, a su vez, también prepararían el terreno para los movimientos socialistas.

Aquel año, el 21 de febrero de 1848, se publicaba en Londres el *Manifiesto del Partido Comunista*, escrito por Karl Marx y Engels para la Liga de los Comunistas, en el que se presentaban las grandes líneas de su pensamiento, fruto del trabajo teórico y político que habían venido desarrollando desde unos años antes. La revisión crítica de Marx de la filosofía hegeliana (introducción de 1844 en “Anales francoalemanes”, la *Tesis sobre Feuerbach* (1845), en la que Marx reflexiona sobre el materialismo desde un punto de vista del sujeto subrayando la capacidad transformadora del hombre de su propia

³²⁹ Griffiths, M., “Self-determination, international society and world order”, *Macquarie Law Journal*, vol. 3, 2003, p.32

realidad, o los por entonces inéditos textos que conformaban *La ideología alemana* (Marx y Engels, 1846) cristalizaron en un texto del que no es necesario aclarar su influencia histórica, un texto de tono exaltado como corresponde al fin por el que fue escrito, un texto programático que no agotaba todas las aristas del pensamiento político marxista, que evolucionó durante toda la vida de Marx y Engels –la idea de la plusvalía, por ejemplo, fue expresada bastante más tarde, la *Contribución a la crítica de la economía política* se publicaría en 1859 y el primer volumen de *El capital* en 1867- y continuó evolucionando con el impulso de los pensadores marxistas posteriores. No se encuentra una tesis definitiva sobre el nacionalismo en el trabajo de Marx y Engels, y los debates sobre el difícil encaje entre el internacionalismo socialista y la pragmatidad del reconocimiento del nacionalismo han sido continuos en toda la literatura marxista.

Horace B. Davis, autor abiertamente marxista, justificaba la gestión de su obra *Hacia una teoría marxista del nacionalismo* de 1978 porque: “ni Marx ni Lenin llegaron muy lejos en su desarrollo y presentación de una teoría política sistemática [del nacionalismo] y sus seguidores también evitaron la cuestión (...) Si bien para ambos, Lenin y Marx la teoría del estado se presentaba como de gran importancia. Marx en la década de 1840 proyectó un libro sobre la nación, y Lenin durante la I Guerra Mundial comenzó el trabajo de escribir un libro sobre el mismo tema pero divergió hacia otras cuestiones. El resultado es que los escritos de ambos hombres en la materia están relacionados con situaciones particulares; tienden a faltar las amplias generalizaciones, aplicables a todo el espectro de la materia”³³⁰.

Podemos reconocer claramente, sin embargo, las bases teóricas que influyeron la evolución de la relación entre nacionalismo y socialismo presentes en el pensamiento de Marx y Engels. En lo que respecta al tema que nos ocupa, la construcción moderna del derecho de autodeterminación no puede entenderse sin el aporte teórico marxista, tanto en la concepción de autodeterminación entendida como autodeterminación de clase frente a la autodeterminación nacionalista, por un lado, como por la aproximación al problema sistemático de la explotación, primero entre clases dentro de un país y después, en una analogía más propia del siglo XX, entre gentes de distintos países y entre distintas naciones.

El enfoque de Marx y Engels respecto al problema nacionalista -dejaremos la aproximación de Lenin por ahora, cuando veamos el nacimiento del concepto de autodeterminación como tal en el siglo XX- fue un enfoque predominantemente pragmático, ya que para ellos la opresión se hallaba principalmente en las diferencias de clase social: “la historia de las sociedades hasta el día de hoy es historia de luchas de clase”³³¹.

Como sucedía con las doctrinas liberales anteriormente, el internacionalismo humanitarista marxista encontró cierta contradicción con la existencia fáctica de las fronteras, fronteras que delimitan de hecho situaciones sociopolíticas, culturales y económicas diversas, fronteras que de hecho condicionan seres humanos en variadas situaciones, que causan diferencias en los niveles de vida. Marx y Engels, preocupados por los modos de explotación obrera, concebían la construcción nacional, como es bien

³³⁰ Davis, H.B., *Toward...*, op. cit., Prólogo.

³³¹ Marx K., Engels F., *Manifiesto comunista*. Alianza Editorial. Trad. Pedro Ribas, Madrid, 2012, p. 49.

sabido, esencialmente como la realización de las aspiraciones de la clase burguesa sobre el poder del Antiguo Régimen, realizándose el estado en un instrumento de opresión al servicio de la burguesía, formado, sin embargo, por otro lado, precisamente gracias a la indispensable y sacrificada ayuda de la clase trabajadora, que indefectiblemente habría de ser la gran damnificada –en vidas humanas- por este proceso.

La eventual emancipación de la clase obrera era lo que importaba para Marx y Engels, el cambio de las condiciones materiales, de la titularidad de los medios de producción, y para ello bien se podían llevar a cabo alianzas transitorias. La injusticia del sistema económico capitalista era consustancial a este sistema, por lo que la etnicidad – nacionalidad- era irrelevante para una revolución en esencia internacionalista.

Como explicaba Engels, en el Prólogo de la edición italiana del *Manifiesto* de febrero de 1893, las revoluciones nacionales son burguesas, llevadas a cabo por la clase obrera pero elevando a la burguesía al poder: “la revolución era entonces, en todas partes, obra de la clase obrera: ésta era la que levantaba las barricadas y ponía en juego su vida”³³². La independencia nacional es condición para el establecimiento del dominio burgués: “(...) En otros países (...) no hicieron otra cosa los obreros que elevar al poder a la burguesía. Pero en ningún país es posible el dominio de la burguesía sin independencia nacional”³³³.

La respuesta marxista al nacionalismo fue, por tanto, esencialmente pragmática: los movimientos de liberación nacional no entendían para estos pensadores que la opresión estaba realmente en la diferencia de clases, pero debían ser apoyados eventualmente, en un momento y en un lugar determinado, si eso ayudaba al eventual triunfo de la clase obrera, con el fin último de la realización de la revolución a nivel internacional. Para Marx y Engels lo importante era el cambio de paradigma, la revolución, lo importante era promover la sucesión de las inevitables etapas históricas, por lo que no encontraban problema incluso en apoyar invasiones si eran “civilizadoras”, o si constituían lo que ellos consideraban una momentánea victoria de la burguesía. Engels escribía en el año 1848 que:

“(...) en América hemos presenciado la conquista de México y nos hemos congratulado por ello. Es también un avance cuando un país que se ha visto hasta ahora envuelta exclusivamente en sus propios asuntos, perpetuamente desgarrada con guerras civiles, y completamente entorpecida en sus desarrollo -un país cuyas mejores perspectivas han sido convertirse industrialmente súbdita de Gran Bretaña- que un país tal sea arrastrado por la fuerza al proceso histórico. Es en el interés de su propio desarrollo que México se posicione en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. La evolución de toda América se beneficiará del hecho de que Estados Unidos, con la posesión de California, obtenga el dominio del Pacífico. Pero de Nuevo nos preguntamos: “¿Quién se va a beneficiar inmediatamente de la guerra? Sólo la burguesía”³³⁴.

³³² Marx K., Engels, F., *Manifiesto*..., op. cit., p. 121.

³³³ Marx K., Engels, F., *Manifiesto*..., op. cit., p. 122.

³³⁴ Pedro Ribas Ribas, en el prólogo de su traducción del Manifiesto Comunista publicado por Alianza de 2001, reimpresa en 2012, atribuye esta cita a Marx, como parte de un artículo publicado en el *New York Daily Tribune* (sin más datos bibliográficos), pero yo creo que realmente pertenezca al artículo *Los Movimientos de 1847* escrito por Engels y publicado en *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* el 23 de enero de 1848. Esta traducción es mía, no de Pedro Ribas, de la versión del artículo disponible en <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/23.htm> a su vez traducido de la recopilación alemana MECW Vol. 6, p. 520

La revolución nacional burguesa era considerada transitoria, necesaria para establecer en el poder perentoriamente a una clase burguesa que también habrá de desaparecer con el triunfo final de la clase obrera. La alianza temporal de clases se deriva de la creencia de Marx en las inevitables fases por las que ha de evolucionar la sociedad humana hasta alcanzar el ideal comunista. La evolución por etapas históricas es lo que llevo a Marx y a Engels a apostar incluso por la conquista, en determinados casos como en el caso de México, si esta tenía una labor “civilizadora”.

En el mencionado prólogo al *Manifiesto* de 1893, Engels subrayaba tres condiciones favorables a la revolución socialista: la revolución de 1848, que si bien “no fue (...) una revolución socialista, sí allanó a ésta el camino, le preparó el terreno”, el crecimiento de un proletariado numeroso y fuerte a partir de la industrialización impulsada por los gobiernos burgueses y, por último, el triunfo de las independencias nacionales: “sin la restauración de la independencia y unidad de cada una de las naciones europeas no se habría podido llevar a cabo ni la unión internacional del proletariado, ni una colaboración serena, razonable, de esas naciones para conseguir objetivos comunes”³³⁵.

La restauración de la unidad y la independencia habían de ser conjugada a su vez con dos ideas adicionales: el mencionado progreso por etapas históricas, como en el caso visto de la conquista de México, y la expansión del capital que llevaría a la unión y expansión de mercados y, por tanto, a una mayor unión entre los hombres, idea marxista precedente de ciertas concepciones actuales del fenómeno “globalización”: “La burguesía, con su explotación del mercado mundial, ha configurado la producción y el consumo de todos los países a escala cosmopolita (...) en lugar de la antigua autarquía y aislamiento locales surge un intercambio universal, una interdependencia universal entre todas las naciones. Y no sólo en la producción material, sino también en la intelectual. Los productos intelectuales de cada nación se convierten en propiedad común. La peculiaridad y limitación nacionales se van tornando imposibles de día en día (...)”³³⁶.

El determinismo histórico marxista percibía así las fronteras como elementos felizmente transitorios, divisiones aleatorias creadas por el poder opresivo, del feudalismo primero y redibujado por los nacionalismos burgueses, fenómenos que habrían de desaparecer irremediabilmente en un futuro tan indeterminado como inexorable, por la misma naturaleza de la dinámica mundializadora del capitalismo burgués. Esta mundialización impulsada por el capitalismo no solo borraría para Marx las fronteras económicas sino también, consecuentemente, los antagonismos, esto es, los enfrentamientos nacidos de la competencia, en una idea de raíz cosmopolita kantiana: “(...) los particularismos nacionales y los antagonismos de los pueblos desaparecen cada día más, simplemente con el desarrollo de la burguesía, con la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad de la producción industrial y las formas de vida que a ella corresponden”³³⁷.

La idea de que la intensificación de las relaciones comerciales lleva a la paz (Kant) y de la inevitable intensificación de tales relaciones provocadas por la expansión del capital (Marx) ha sido una idea recogida en numerosas ocasiones e influyó notablemente, como

³³⁵ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 122

³³⁶ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 55

³³⁷ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 75

es bien sabido, desde el idealismo internacionalista de Wilson hasta la construcción europea como la concibieron Schuman, etc, una idea recogida más tarde, por cierto, también por Cedoaria, para quien las diferencias de lengua y religión, en cuanto que representan dificultades y previenen a la gente de mezclarse, implican en sí mismas un impulso a la incomprensión, al odio y los pretextos de guerra, “pero el progreso de la civilización y la aproximación gradual de los hombres a una mayor armonía en sus principios finalmente lleva a una acuerdo pacífico”³³⁸.

Por otro lado, la “globalización” –no usaría este término Marx– producida inevitablemente por la expansión del capital, que desdibujaría las fronteras nacionales, vendría acompañada, confiaba Marx, de la superación de la competencia entre estados a raíz de la previa abolición de la explotación de clases al interno de cada país: “en la medida en que se suprime la explotación de un individuo por otro, se suprime la explotación de una nación por otra. Acabado el antagonismo de las clases dentro de la nación, se acaba la hostilidad de las naciones entre sí”³³⁹. Ambas ideas, la indefectible mundialización mercantil y la centralidad de la lucha de clases, se hayan imbricadas en el internacionalismo marxista.

El internacionalismo se convertiría en pilar doctrinal y seña de identidad del marxismo, y como tal sería duramente atacado por los detractores de Marx y Engels desde el comienzo, crítica que se convertiría eventualmente, conviene recordar, en uno de los ejes centrales de la doctrinas fascistas y nacionalsocialistas del siglo XX. Ya en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels se harían eco de esta crítica:

“Se ha reprochado también a los comunistas el querer suprimir la patria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria. No se les puede quitar lo que no tienen. Sigue siendo nacional el proletariado en la medida en que ha de conquistar primero la hegemonía política, en que ha de elevarse a clase nacional, en que ha de elevarse a clase nacional, en que ha de constituirse a sí mismo en nación, pero de ningún modo en el sentido de la burguesía”³⁴⁰.

Sin embargo, conviene recordar que el acercamiento pragmático marxista al problema del nacionalismo dejaba la lucha en manos de las organizaciones proletarias locales sin mostrar un criterio fijo de quién compone esa localidad o nacionalidad. Marx y Engels dejarían escrito en el Manifiesto que: “aunque no por su contenido, la lucha del proletariado es, por su forma, una lucha nacional. El proletariado de cada país tiene que arreglárselas primero con su propia burguesía”³⁴¹.

Siguiendo esta idea, en el prólogo de la edición polaca del mismo en 1892: “(...) el renacimiento de una fuerte Polonia independiente es un asunto que no sólo concierne a los polacos, sino a nosotros todos. Un sincera colaboración internacional de las naciones europeas sólo es posible si cada una de esas naciones es enteramente autónoma en su propia casa”³⁴².

No sólo el socialismo marxista presentó cuestiones irresueltas en torno al nacionalismo.

³³⁸ Kedourie, E., *Nationalism*, Hutchinson University Library, Hutchinson & Co, London, 1961, p. 53

³³⁹ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 75

³⁴⁰ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 75

³⁴¹ Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 65

³⁴² Marx K., Engels, F., *Manifiesto...*, op. cit., p. 120

Como ha analizado Peter Marshall en su detallada historia de los movimientos anarquistas, otros movimientos sociales decimonónicos presentaron similares problemas teóricos³⁴³. Como recuerda este autor, algunos de los más influyentes pensadores y revolucionarios socialistas y anarquistas no sólo no ignoraron la fuerza movilizadora de la nueva doctrina nacionalista sino que algunos, de manera notable Proudhon y Bakunin, “sucumbieron a ella”, si bien, los anarquistas “en general, apoyaron los esfuerzos de liberación nacional como parte de una lucha más amplia por la libertad, pero oponiéndose a las aspiraciones estatistas y lealtades exclusivas de los nacionalistas. Ellos [los anarquistas] eran particularmente críticos del patriotismo que hace identificarse a los gobernados identificarse con sus gobernantes y convertirse en obediente carne de cañón. Reconocen también la rivalidad entre las naciones-estado como una de las principales causas de guerra”³⁴⁴.

Las primeras teorías anarquistas decimonónicas tampoco llegaron a ser exhaustivas en su tratamiento de quiénes y bajo qué criterio habrían de formar las comunas más allá de las llamadas al voluntarismo anti-estatalista de personas libres, y dejando más en el aire todavía las relaciones entre tales organizaciones cuando entre ellas hubiera diferencias o los criterios para abandonarlas. Es paradigmática la postura de Bakunin, quien habiéndose posicionado en un nacionalismo paneslavista, pasó a ser líder destacado del anarquismo. Tras fundar en Nápoles la (secreta) Hermandad Internacional, plasma su postura en el Catecismo Revolucionario, el documento publicado en 1865 como manifiesto fundacional de la Hermandad –documento que no hay que confundir, como se ha hecho tantas veces, con aquellas *Normas que deben inspirar al revolucionario* en las que se dice que colaboró Bakunin en 1869 durante su breve asociación con el desequilibrado ruso Nechayev-. En el Catecismo de 1865 expone Bakunin el modelo de organización que pretende, y aunque asumiendo que es imposible determinar una norma universal, concreta y obligatoria para el desarrollo político de todas las naciones, propone que las organizaciones políticas deben articularse de forma federada desde la base: comunas formando provincias y regiones en asociación coordinada en cada país o nación.

La organización interna de cada país debía basarse, para Bakunin, en “la absoluta libertad de los individuos, de las asociaciones productivas, y de las comunas”, reconociendo “la necesidad del derecho a la secesión, a asociarse o no asociarse (...) una vez que el derecho de secesión es establecido, la secesión ya no será necesaria”. Para Bakunin, la consagración de la absoluta libertad haría a las organizaciones políticas indisolubles. Si bien la voluntariedad quedaba en la base de la organización política, la visión de Bakunin sobre la conformación de una nación seguía marcada por la visión primordialista de Fichte, a quien había leído concienzudamente, de manera que quedaba de alguna manera predefinida, un criterio de unión solidaria *natural* de algunos frente a otros.

Así, Bakunin no llegaría a explicar satisfactoriamente la relación entre la voluntariedad a la hora de conformar las unidades políticas y el determinismo de pertenecer primordialmente a un grupo etnopolítico, y más llamativamente, no se llegaría a preocupar de las relaciones entre unidades federadas en el caso de que sus niveles de

³⁴³ Marshall, P., *Demanding the impossible: a history of anarchism*, Harper Prennial, London, New York, Toronto, Sydney, 1992.

³⁴⁴ Marshall, P., *Demanding the imposible...*, op. cit., pp. 32 y ss.

riqueza fueran fuertemente desiguales -¿compartirían obligatoriamente las distintas unidades sus desiguales recursos?- Bakunin daba por supuesto que sí, confiando las soluciones, sin más explicación, a la inclinación natural de los hombres a la solidaridad entre ellos, una vez que la revolución anarquistas hubiera triunfado en el mundo.

Paralelamente al desarrollo de las doctrinas socialistas, comunistas y anarquistas, el liberalismo fue dando respuestas a los movimientos nacionalistas con las guerras napoleónicas toda vez que a este respecto las teorías del estado de los primeros contractualistas se veían insuficientes. Tengamos en cuenta que el siglo XIX es rico en creación ideológica y que, como es bien sabido, las tajantes divisiones y clasificaciones taxonómicas posteriores de las corrientes políticas nacionalistas, socialistas, liberales, etc. y de sus pensadores son cuanto menos discutibles.

El influyente revolucionario nacionalista italiano Giuseppe Mazzini (1805-1872), proveniente de una familia favorable a los postulados de la Revolución Francesa -su padre, Giacomo Mazzini, era un profesor que apoyaba la doctrina jacobina- se haría eco tanto de la tradición liberal de soberanía popular de las revoluciones burguesas como de los problemas denunciados por los nuevos movimientos socialistas.

Su trabajo teórico y su arrojo revolucionario le valieron el respeto de autores tan dispares como el mencionado Bakunin (quien en su panfleto de 1871 *La theologie politique de Mazzini et l'internationale* escribiría: “si hay un hombre respetado en Europa (...) dedicado únicamente al servicio de una gran causa, que haya merecido este respeto, ese es Mazzini”), Thomas Carlyle (a pesar de sus diferencias ideológicas se tenían gran respeto profesional y afecto personal) o John Stuart, y las críticas de otros, como Marx, a quien, por su lado, Mazzini acusaba de actitud despótica.

En su ensayo *Europa: su condición y prospectiva*, publicado en 1852, Mazzini expresa así su punto de vista respecto a las dimensiones social y nacional de la revolución:

“Hay en Europa dos grandes cuestiones; o más bien, la cuestión de la transformación de la autoridad, es decir, de la Revolución, ha asumido dos formas: la cuestión que todos han acordado llamar social, y la cuestión de las nacionalidades.

(...) Nos equivocáramos, sin embargo, si separásemos las dos cuestiones, indisolublemente conectadas. Los hombres que defienden la causa de las nacionalidades bien saben que las revoluciones, apoyadas ellas mismas necesariamente en las masas, deben satisfacer sus legítimos deseos: ellos saben que una revolución es sagrada siempre que tenga por objeto el progreso de millones, pero es un crimen imperdonable cuando tiene por solo objeto el interés de una minoría. (...) Ellos saben que el problema ahora a resolver es la asociación de todas las facultades y de todas las fuerzas de la humanidad hacia un fin común, y que ningún movimiento puede ser hoy simplemente político”³⁴⁵.

Para Mazzini, por tanto, toda gran revolución implica, necesariamente, la cuestión social, ya que la sociedad mucho no puede cambiar sin afectar “las relaciones sociales, las

³⁴⁵ Mazzini, G., “Europe: its condition and prospects. (First published in in the *Westminster Review*, April 2, 1852)”, *Essays: selected from the writings, literary, political, and religious, of Joseph Mazzini*. William Clarke (ed), Walter Scott, Londres 1887 (V. digital. Internet Archive/Microsoft Corp., 2008), p. 278.

fuentes y la distribución de la riqueza”. La resolución de tal cuestión social pasa para Mazzini por “establecer mejores relaciones entre el trabajo y el capital”. Sin embargo, para el nacionalista italiano “la emancipación de los productores de la tiranía del capital concentrado en un pequeño número de manos”, no es ni una idea francesa ni exclusivamente socialista, y debe ser realizada a través de vías no violentas, lejanas a la forzada transferencia de riqueza de unas clases a otras. Las vías de resolución de la cuestión social para Mazzini incluirían, por ejemplo, extender “el círculo de consumidores aumentando consecuentemente la producción”, mejorar el pago a los productores y abrir las posibilidades de acceso de todos a la riqueza y a la propiedad privada; para Mazzini se trata, en definitiva, de “poner el capital y los medios de trabajo al alcance de todo hombre que ofrezca garantía de buena voluntad, capacidad y moralidad”³⁴⁶.

Ahora bien, la cuestión social para Mazzini, si bien es indistinguible de la cuestión nacional, sí está de alguna manera, como no podía de ser de otro modo, supeditada a la realización de ésta:

“Así como es imposible soñar con el progreso moral e intelectual de la gente sin proveerles [medios] para sus mejora física –como es absurdo decir “instrúyete a ti mismo” a un hombre que trabaja para ganarse el pan de catorce a dieciséis horas al día, o decirle que ame cuando nada ve alrededor suyo más que los fríos cálculos del especulador y la tiranía del legislador capitalista- la cuestión social se encuentra inevitablemente injertada en la cuestión del progreso político. De esto sigue que solo puedan ser separadas destruyendo ambas”³⁴⁷.

Para Mazzini, si hay una diferencia fundamental en el acercamiento a ambas cuestiones es precisamente en la responsabilidad de su resolución. La cuestión social ha de ser resuelta por cada pueblo aisladamente, de acuerdo a sus condiciones materiales coyunturales, mientras que la cuestión nacional sólo puede ser resuelta implicando a todos los demás pueblos: “La cuestión social puede, en efecto, aunque con dificultad, ser parcialmente resuelta por un solo pueblo; es una cuestión interna de cada cual (...) la cuestión de la nacionalidad sólo puede ser resuelta destruyendo los tratados de 1815, y cambiando los tratados de 1815, y cambiando el mapa de Europa y su Derecho Internacional”³⁴⁸. Apuntemos que hoy en día, como hemos visto en el capítulo anterior, si bien estamos lejos de los ideales de unidad política que imaginara Mazzini, hoy las responsabilidades de desarrollo social internas y externas han llegado en ocasiones, dentro del marco del Derecho Internacional contemporáneo a extremos de colaboración económica y social no supuestos por el pensador italiano.

Ahora bien, en cuanto nacionalista, Mazzini no duda en desvincular la causa de liberación política de la cuestión social si ésta ha de entenderse como búsqueda del interés material propio del pueblo, algo que, a nadie escapa salvo a los propios seguidores de la causa nacionalista, emborronaría la virtud inmaculada de su lucha: “No fue por un interés material que la gente luchó en Viena en 1848; en debilitar al imperio sólo podían

³⁴⁶ Mazzini, G., “Europe: its condition...”, op. cit., p. 279

³⁴⁷ Mazzini, G., “Europe: its condition...”, op. cit., p. 283

³⁴⁸ Mazzini, G., “Europe: its condition...”, op. cit., p. 280.

perder poder. No fue por un incremento de riqueza que la gente de Lombardía luchó aquel mismo año (...)”³⁴⁹.

Respecto a la cuestión nacional, hemos de reconocer, sin embargo, que Mazzini no es perfectamente coherente en todos sus escritos y sí llega a expresar, como lo hace en el prefacio de 1850 a su ensayo *La fe y el futuro*, escrito en 1835, que la resolución de la cuestión social sí ha de ser colectiva de todos los pueblos y no de cada uno por separado reconociendo los errores de un nacionalismo en exceso egocéntrico que no tenga en cuenta la convivencia humana en su conjunto:

“Es en el espíritu estrecho del Nacionalismo suplantando el espíritu de la Nacionalidad; en la estúpida presunción de los pueblos de ser capaces de resolver por ellos mismos sus problemas políticos, sociales y económicos; en el olvido de la gran verdad de que olvidando que la causa de los pueblos es una sola; que la causa de la Patria debe apoyarse en la Humanidad; que las revoluciones, cuando no son declaradamente una forma de sacrificio por aquellos que luchan y sufren, están condenadas a consumirse ellas mismas (...) y a sucumbir; y que el fin de nuestra guerra, la única fuerza que puede prevalecer sobre la liga de estos poderes, el tema del privilegio y el interés, es la Santa Alianza de las Naciones”³⁵⁰.

Por ello, concluye Mazzini, entre otras razones, fracasaron las revoluciones francesa, alemana e italiana. Así pues, para el italiano la cuestión de las nacionalidades, “entendida adecuadamente, es la Alianza de pueblos del mundo”. Para el revolucionario italiano, los movimientos nacionalistas han de entenderse desde una perspectiva humana, abierta, de manera que la realización de su ideario nacionalista no sea considerada un fin en sí mismo sino un paso hacia una comunión más amplia.

En 1847, en su ensayo *Nacionalidad y cosmopolitismo*, tras mostrar sus reticencias hacia todos aquellos que se consideraban cosmopolitas y renegaban de las ideas nacionalistas tachándolas de retrógradas o anticuadas, admitía, sin embargo, que: “somos todos cosmopolitas si entendemos amor y hermandad para todos y la destrucción de las barreras que separan a los pueblos y les confieren intereses opuestos”³⁵¹.

Consciente, con todo, de la tensión individuo-sociedad, preocupación natural entre quienes se debaten entre el colectivismo nacionalista y el ideario individualista liberal, Mazzini carga tanto contra lo que él considera el egoísmo de Bentham como los movimientos comunistas y socialistas y contra ciertas concepciones de Renan. A pesar de su encendida defensa del colectivismo, por la que tantas veces discutió con su amigo Carlyle –conocidos son sus estudios sobre el papel de los héroes en la evolución social e histórica-, y de la superación de la mera individualidad afirma (en *Europa...*) que:

“La vida es una: el individuo y la sociedad son sus dos manifestaciones necesarias; la vida considerada singularmente y la vida en relación con los demás (...). La verdad se encuentra en su punto de intersección.

³⁴⁹ Mazzini, G., “Europe: its condition...” op. cit., p. 291

³⁵⁰ Mazzini, G., “Faith and the future”, *Essays: Selected from the Writings, Literary, Political, and Religious, of Joseph Mazzini*, William Clarke (ed), Walter Scott, Londres 1887 (V. digital. Internet Archive/Microsoft Corp., 2008). Prefacio a la edición de 1850 del texto de 1835, p. 5

³⁵¹ Mazzini, G., “Nationality and cosmopolitanism (1847)” en *Cosmopolitanism of nations. Giuseppe Mazzini's writings on democracy, nation building and international relations*. Stefano Recchia y Nadia Urbinati (eds), University Press, Princeton, Oxford, 2009, pp 57-58

Ha de ser prohibido, por tanto, al individuo emanciparse del objeto social que constituye su misión en la Tierra; y prohibido a la sociedad aplastar o tiranizar al individuo”³⁵².

Su activismo nacionalista orientado a la unificación y liberación de Italia no le impedía así ver ésta como un paso natural hacia otros estados superiores de unidad humana, hacia unos Estados Unidos de Europa por ejemplo –idea por él propuesta y defendida por los partidarios de la *Joven Europa*- y una eventual Santa Alianza de todos los pueblos. Eso sí, el cosmopolitismo de Mazzini es un cosmopolitismo de pueblos más que de personas, un cosmopolitismo que pasa primero por una realización completa de la libertad y la igualdad entre los pueblos por separado, todavía lejos de la centralidad teórica del ser humano propia de nuestro actual sistema internacional de derechos humanos. Estos pueblos, a su vez, no podrían ser libres e iguales en un régimen no democrático, por lo que el ideario de Mazzini se apoya tanto en el nacionalismo como en los ideales democráticos liberales. Mazzini alertó en diversas ocasiones con confundir su ideario con la mera unificación bajo cualquier tipo de gobierno. Como diría en el mencionado ensayo suyo, *La Fe y el Futuro*, “del mismo modo en el que creemos en la libertad y la igualdad de los pueblos, así creemos también en la libertad e igualdad de los hombres de cada pueblo”³⁵³.

Por ello, del mismo modo que exige igualdad y democracia a nivel interno, a nivel individual, defiende la libertad e igualdad a nivel colectivo, entre los pueblos, y el respeto por las fronteras nacionales, condenando la dominación extranjera y abriendo la puerta (en términos actuales) a la condena a la injerencia en las políticas de desarrollo locales que se derivaría de la autodeterminación negativa tal y como la entenderíamos hoy. Como expresaría en su ensayo *Contra la imposición extranjera de las instituciones domésticas* de 1851:

“Estamos en contra de la dominación de los hombres como estamos en contra de la dominación de los pueblos. Si un pueblo impusiera su propia solución a los problemas sociales específicos de otro país, estarían cometiendo un acto de usurpación”³⁵⁴.

Ahora bien, Mazzini procura aclarar que la libertad, la igualdad o la fraternidad no constituyen el progreso en sí mismo, sino que son condiciones del progreso, medios necesarios para un fin de la humanidad, una idea sobre la que regresaremos cuando analicemos la relación entre la autodeterminación y el desarrollo. Para Mazzini: “La Fraternidad es indudablemente la base de toda sociedad, la primera condición del progreso social, pero no es el progreso; lo hace posible –es un elemento indispensable- pero no es su definición”.

La forma más amplia de fraternidad sería la Alianza de Naciones, una fraternidad que no podría existir, a su vez, sin libertad e igualdad entre los pueblos, pueblos conscientes de sí, siendo tal *conciencia* de sí la “nacionalidad”. Sin esta conciencia, no sería posible ni la igualdad ni la libertad de los pueblos ni, por tanto, la relación fraternal entre ellos. La

³⁵² Mazzini, G., “Europe: its condition...” op. cit., p. 28.

³⁵³ Mazzini, G., “Faith and the future”, op. cit., p. 47.

³⁵⁴ Mazzini, G., *Cosmopolitanism of...*, op. cit., p. 140.

“patria” sería, para Mazzini, sin embargo, la cuna de la nacionalidad, de esa conciencia de los pueblos, “altar y taller de los individuos que componen un pueblo” .

La influencia de Mazzini en el desarrollo teórico de la autodeterminación fue muy importante. Como recuerdan Recchia y Urbinati (y detallaremos más adelante), podemos trazar su influencia desde sus contemporáneos (sugiriendo la influencia directa ejercida en John Stuart Mill en su ensayo *Unas palabras sobre la no intervención* de 1859, en el que trata la legitimidad de las revueltas populares y el rechazo a la ilegítima intervención extranjera) hasta la influencia directa en el pensamiento político de Woodrow Wilson, quien había estudiado y admiraba el trabajo teórico de Mazzini.

Giuseppe Mazzini y John Stuart Mill se conocieron en septiembre de 1837 a través de Thomas Carlyle, el filósofo escocés, a la llegada del italiano a Inglaterra, donde estuvo largamente exiliado. Como describe el autor D. M. Smith, dijo J.S Mill que Mazzini era uno de los hombres que más admiraba, respeto mutuamente profesado³⁵⁵. Por ello, no es raro que cuando, en 1861, Mill publicara sus conocidas *Consideraciones sobre el Gobierno Representativo*, dedicara un capítulo, el Capítulo XVI, al tema de la nacionalidad (obsérvese que es el mismo término usado por Mazzini) y a su conexión con el gobierno representativo.

En esta obra, Mill se refiere a las nacionalidades como una porción de la humanidad unida por “simpatías comunes” que les hace cooperar entre ellos en un fin común de buen gobierno para sí –solidaridad- habida cuenta de una *voluntariedad* que no existe para con otros hombres.

Distinguiéndose de los primeros contractualistas, Mill se preocupa de las condiciones prepolíticas del pacto social. Mill refiere distintas causas posibles de este “sentimiento de nacionalidad”: “la identidad de raza y los ancestros” , “la comunidad de lengua”, la “comunidad de religión,, los “límites geográficos”. Sin embargo, la más importante de entre todas estas motivaciones para llegar a crear una comunidad política es, para Mill, “la identidad de antecedentes políticos”, esto es la tradición de haber pertenecido con anterioridad a una misma comunidad política, haber compartido en suma, soberano.

La identificación de una herencia o historia política común ofrece a Mill la posibilidad de no alejarse de la tradición liberal sin ignorar los movimientos nacionalistas. Al fin y al cabo, Suiza, argumenta Mill, tiene un fuerte sentimiento nacional sin que sus ciudadanos compartan homogéneamente una sola religión ni una sola lengua, mientras que Sicilia y Nápoles, de misma religión y casi idéntica habla, han mantenido fuertes sentimientos diferenciadores. Para Mill, allá donde existe tal sentimiento de nacionalidad en cualquier intensidad hay razones “*prima facie* para unir a todos los miembros de la nacionalidad bajo el mismo gobierno” por el sencillo y robusto argumento liberal de que el gobierno tiene que ser elegido libre y voluntariamente por los gobernados.

³⁵⁵ Smith, D. M., *Mazzini*, Yale University Press, New Haven, 1994, p. 24.

Ahora bien, es muy importante destacar el utilitarismo que impregna todo el razonamiento de Mill, del que las reflexiones en torno a la nacionalidad no son ajenas. Mill defiende que “en general, es una condición necesaria de las instituciones libres que las fronteras de los gobiernos coincidan con aquellas de las nacionalidades”. Esta conclusión de Mill está basada en la mayor facilidad de gobierno de personas que comparten el mismo sentimiento de nacionalidad, propiciada por la similar facilidad de dispersión de ideas entre gentes de la misma lengua y tradición literaria, su mayor adherencia a la sociedad y a la lucha contra la tiranía, y el mayor compromiso de sus ejércitos en comparación con aquellos multiculturales (argumentos todos ellos muy parecidos a los que esgrimían, en negativo, los socialistas para criticar el apoyo del estado nación como instrumento de dominación burguesa). Es un argumento práctico nacido del principio democrático: el pueblo debe gobernarse a sí mismo, lo que Mill llama instituciones libres, y la implantación de éstas será más sencilla si coinciden las fronteras con las de la nacionalidad, no porque exista un principio absoluto político-moral de coincidencia entre factores culturales y políticos. El caso de Suiza es ejemplar en este sentido.

Es destacable que Mill reconoce las debilidades teóricas de los primeros contractualistas que llevaron a la distinción de los derechos del hombre y del ciudadano, que hemos analizado con anterioridad; desde una postura más práctica asume el inglés que en el presente estado de civilización poco podemos hacer a este respecto:

“Si se dice que el marcar claramente una distinción entre lo que se debe a un conciudadano y lo que simplemente se debe a un ser humano, es algo más propio de un pueblo salvaje que de seres civilizados, que es algo que debe ser enérgicamente condenado, nadie estará más de acuerdo con ello que yo mismo. Pero esto, uno de los más valiosos objetivos al que puede dirigirse el esfuerzo humano, no puede nunca ser promovido, en el presente estado de la civilización, manteniendo a diferentes nacionalidades de fuerza equivalente bajo el mismo gobierno”³⁵⁶.

La explicación que propone J.S. Mill es que es probable que los gobiernos imperiales de territorios plurinacionales pretendan utilizar las diferencias entre los distintos pueblos de parecido tamaño en su provecho, promoviendo la insidia y los enfrentamientos entre ellos para mantenerse en el poder o para procurar la dominación de una particular nacionalidad sobre otras, estrategia seguida, según Mill, por el Imperio Austro-húngaro³⁵⁷. Por todo esto, por cuestiones de utilidad, es generalmente preferible para Mill hacer coincidir los límites del estado y los de la nacionalidad.

Ahora bien, es necesario subrayar que, en algunos casos, esto es para Mill a todas luces imposible, por lo que, por las mismas razones de utilidad, lo conveniente será precisamente no trazar artificialmente fronteras insostenibles:

“Hay partes de Europa, en las cuales las diferentes nacionalidades están tan entremezcladas localmente, que no es posible para ellos estar bajo gobiernos separados. La población de Hungría está compuesta de

³⁵⁶ Mill, J. S., “Considerations on representative government (1861)” en *Collected Works of John Stuart Mill. Volume XIX. Essays on Politics and Society*, Ed. JM Robson. Vol. XIX. University of Toronto Press. Routledge & Kegan Paul, 1977, p 548.

³⁵⁷ Mill, J. S., “Considerations...”, op. cit., p. 548

húngaros, eslovacos, croatas, serbios, rumanos, y en algunos distritos, alemanes, tan mezclados que son incapaces de una separación local; y no hay otra salida para ellos que hacer de la necesidad virtud, y reconciliarse entre ellos para vivir juntos bajo los mismos derechos y leyes”³⁵⁸.

El utilitarismo de Mill se plasma también en otro argumento que podría considerarse inasumible para los nacionalistas primordialistas: para el inglés, las identidades pueden ser subsumidas unas en otras, y puede ser voluntariamente *elegida* la identidad superior como principal por razones de conveniencia individual, de manera que, por ejemplo, un escocés se identificaría con la nación británica para participar de los beneficios derivados de su “prestigio” y su poder.

Y es que, si para Mill la mezcla de nacionalidades es en general positiva, “como las razas cruzadas de animales (pero en un mayor grado porque las influencias son morales además de físicas”, no siempre son posibles, dependiendo de las características particulares de número, fortaleza política y militar, y de sus combinaciones, de las nacionalidades puestas juntas bajo el mismo gobierno, cuyos resultados pueden ser positivos o negativos.

Para Mill si un pueblo es más grande y avanzado que otro bajo el mismo gobierno, uno asimilará al otro, y si el grande es menos avanzado, tal asimilación será un infortunio. Es destacable que el intento de Mill de explicar aparentemente de una manera empírica cómo las distintas nacionalidades y pueblos se fusionan o no, está mezclada con consideraciones morales que tienen su origen en la asunción inexplicada del concepto -indefinido- de nivel de progreso o de civilización, confundiendo el avance tecnológico, con el militar, con el moral. Esta indefinición le permite –cometiendo un error abiertamente ideológico -defender al mismo tiempo la libertad de los pueblos en abstracto y las políticas colonialistas de su tiempo, específicamente las prácticas colonialistas inglesas. Así, Mill no duda en escribir que:

“Si la nacionalidad más pequeña es capaz de *derrotar* a la más grande, como los ingleses a la India, se da frecuentemente una victoria de la civilización; pero conquistadores y conquistados no pueden en este caso vivir juntos bajo las mismas instituciones libres no pueden en este caso. La absorción de los conquistadores por gente menos avanzadas sería un mal: estos [los menos avanzados] deben ser gobernados como súbditos, y el estado de cosas es o un beneficio o un infortunio, según las gentes subyugadas han o no alcanzado el estado en el que sería una injuria no estar bajo un gobierno libre”³⁵⁹.

La aspiración a unas instituciones libres viene con el progreso histórico, según Mill, quien asume la historia reciente europea prácticamente como una corriente unidireccional inevitable para todos los pueblos, siendo tales instituciones más resultado del progreso que su causa³⁶⁰. Por ello, aduce que en lo que hoy llamaríamos sociedades profundamente divididas, cuando pueblos de similar fuerza y tamaño, entre los que existe animadversión política, son dispuestos bajo un mismo gobierno despótico pero no favorable especialmente a ninguno de los dos, la igualdad de trato acabará causando la fusión de ambos pueblos.

³⁵⁸ Mill, J. S., “Considerations...”, op. cit., pp. 548-549.

³⁵⁹ Mill, J. S., “Considerations...”, op. cit., p. 550.

³⁶⁰ Según Karl Popper, podemos encontrar tendencias historicistas en el sentido que él le dio al término, en el pensamiento de Mill. Vid. Popper, K., *La miseria del historicismo* Alianza /Taurus 1961, 2010, p.86 y ss.

Esta unión o fusión de pueblos no sucederá según Mill si “la era de las aspiración a un gobierno libre llega antes de que la fusión haya sido efectuada (...)”. Desde este momento ambos pueblos se acabarán probablemente separando, especialmente si están geográficamente separados y no comparten intereses económicos. Contempla Mill la posibilidad de mantener ciertos vínculos federativos, pero éstos no se darán si cada pueblo tiene vecinos más interesantes con los que establecer vínculos nuevos.

Las posiciones de Mill fueron muy criticadas por Lord Acton en su famoso ensayo *Nacionalidad* (1862). Para Lord Acton, las teorías de la nacionalidad como defendidas por Mazzini o Mill eran, incluso más que el socialismo, “absurdas y criminales” porque su objetivo no era la libertad ni la prosperidad material de las personas. Lord Acton veía en la multiculturalidad de los imperios un mayor marco para la convivencia proporcionando mayor libertad y más oportunidades de crecimiento económico y cultural³⁶¹.

El nacionalismo de Mazzini y las consideraciones de Mill incluyen, cada uno con sus matices, la constitución de instituciones libres, lo que no quiere decir que no advirtieran el surgimiento de un nacionalismo antidemocrático, ese que antepone el sentimiento de pertenecía a una cultura, lengua o religión a un régimen de gobierno legítimo. Como hemos comentado, Mazzini, quien admiraba la obra de Fichte y otros nacionalistas alemanes, al mismo tiempo temía acertadamente que el nacionalismo devorase la construcción liberal de derechos.

Por ello, Mazzini rechazó actitudes como la de Schlegel cuando glorificaba los valores de la Edad Media –romántica cuna del alma de la nación– defendiendo el racionalismo ilustrado y criticando esa época oscura de retraso científico y cultural, llegando en su momento, de hecho, al rechazo de un asiento en el Parlamento por ser contrario a la idea de una Italia, que aunque unificada, no fuera la Italia republicana con la que él había soñado.

Advertencias como las de Mazzini, sin embargo, no impidieron el avance del proceso que el profesor de la Universidad de Princeton, Maurizio Viroli, ha denominado certeramente “nacionalización del patriotismo”³⁶²: la identificación entre nación y derechos políticos fue cambiando hacia un discurso de unificación de clases en el que la nación se distinguía por la protección de sus características culturales frente a otros, un proceso más conveniente a las élites.

De hecho, hacia 1870, ya podemos identificar en Inglaterra la apropiación de la idea de defensa de la nación prácticamente en exclusiva por los conservadores³⁶³, proceso identificable en toda Europa y que permanecería hasta hoy en la idea corrupta de que el deseable mantenimiento de la pureza de las supuestas características prepolíticas que

³⁶¹ Kurelic, Z., ‘What can we learn from Lord Acton’s criticism of Mill’s concept of nationality?’, *Politička misao*, XLIII, 2006.

³⁶² Viroli, M., *For love of country: an essay on patriotism and nationalism*. Clarendon Press, Oxford, Nueva York, 1995, pp.140 y ss.

³⁶³ Viroli, M., *For love of country...*, op. cit., p. 157

definen una nación -y, por tanto, de la propia identidad- implica, llegado el caso, la eliminación de los valores democráticos.

En ese mismo año se desató la guerra franco-prusiana, que llevó a la derrota de Francia y a la proclamación de la Tercera República francesa, a la incorporación de Alsacia-Lorena al proceso de unificación alemana y la proclamación del Imperio alemán el 18 de enero de 1871. En este marco histórico, se destaca la obra del pensador francés Ernest Renan (el mismo al que Mazzini dedicó su últimas páginas públicas en el ensayo *M. Renan y Francia* de 1872³⁶⁴).

Renan es autor de uno de los textos más influyentes en la concepción de la nación, en el estudio del nacionalismo y en la construcción histórica del derecho de autodeterminación de los pueblos, el conocido discurso *Qu'est-ce qu'une nation?*, (*¿Qué es una nación?*), presentado en la Sorbona el 11 de marzo de 1882. El valor del trabajo de Renan viene dado tanto por su ánimo académico -plasmado en su intención de abordar el tema de la manera más objetiva posible sistematizando, al mismo tiempo su pensamiento y clasificando las distintas concepciones de nación existentes- como su propuesta en sí, referencia clásica en la concepción *voluntarista* de la nación frente a las concepciones nacionalistas primordialistas.

Renan se pregunta, como lo hicieron antes que él, cual es el principio sobre el que sostener una nación una vez que el principio dinástico ha sido eliminado. Rebate consecutivamente cinco principios: de raza, lengua, religión, comunidad de intereses y límites geográficos o fronteras naturales. Una vez rechazados estos principios, propone el suyo en forma de voluntad pura de pertenencia a un proyecto común, como veremos, según el cual un grupo de personas que habiendo hecho grandes cosas en el pasado están dispuestas a seguir colaborando, validando así su voluntad en el conocido “plebiscito diario”.

Renan rechaza en primer lugar la *raza* como elemento definitorio de la nación. “Para el verdadero progreso, tanto es legítimo el principio de las naciones, como angosto y plagado de peligros resulta el derecho primordial de las razas”³⁶⁵. Perseguir la identificación entre estado y pura etnicidad es para Renan una quimera, tan inalcanzable como peligrosa, ya que ni existe una raza pura ni considera que ninguna nación moderna es monoétnica: “los países más nobles (...) son los países donde la sangre está más mezclada”³⁶⁶. Ridiculizando magistralmente tal principio de raza -“la historia humana difiere esencialmente de la zoología”, “nada autoriza a ir por el mundo palpando los cráneos de las personas, para luego agarrarles por el cuello y decirles: eres nuestra sangre; ¡nos perteneces! (...) la razón, la justicia, la verdad, lo bello (...) son iguales para todos”-, nos sugiere asimismo Renan su preocupación, observemos, con las guerras de

³⁶⁴ Publicado por Mazzini el 3 de marzo de 1872, una semana antes de morir. Vid. Mazzini, G., “M. Renan and France”, *Essays: Selected from the Writings, Literary, Political, and Religious, of Joseph Mazzini*, ed. by William Clarke, Walter Scott, Londres 1887 (V. digital. Internet Archive/Microsoft Corp., 2008). Nota al pie de página, p. 299

³⁶⁵ Renan, E., *¿Qué es una nación?* Ed Sequitur, Madrid, 2010, p. 51

³⁶⁶ Renan, E., op. cit, p. 57

conquista o expansionistas presentes en los debates del momento.

Bajo el mismo epígrafe, hace Renan, además, dos interesantes consideraciones adicionales. Por un lado, si el criterio fuera la raza, y la clasificación de la misma dependiente de la etnografía, el patriotismo dependería de un discurso contingente, dependiente de los cambiantes criterios o de los nuevos descubrimientos inevitables con el progreso. Haciendo gala de la misma ironía exclama: “estabais equivocado; derramaba usted su sangre por tal causa; creía ser celta, pero, no, sois germano”³⁶⁷. Por ello dice Renan que “estimo la etnografía, se trata de una ciencia de raro interés; pero como la quiero libre, la quiero sin aplicación política”³⁶⁸. De manera relacionada con este argumento, critica también nuestro autor la vinculación del principio de la raza con los argumentos historicistas, consciente de que en los avatares de la Historia no sólo no existen las razas puras, sino que no siempre ocuparon la misma posición, por lo que la discusión histórica carece de sentido.

Renan rechaza, en segundo lugar, la *lengua* como principio definitorio de la nación por razones parecidas a las anteriores referidas a la raza. Indica Renan como existen naciones distintas que comparten la misma lengua mientras que otras, como la Suiza, es indiscutiblemente una sola a pesar de que sus ciudadanos, unidos por la voluntad, disfruten de distintas lenguas, religiones y razas. Insistamos en que la preocupación mayor de Renan es la invasión amparada en el nacionalismo expansivo, más que la secesión, por lo que incide en que la lengua invita a reunirse pero no obliga a ello, en clara alusión a la ilegítima trasgresión de fronteras para unificar pueblos que comparten el mismo idioma. Las lenguas diferenciadas por la filología no tienen porqué coincidir en diferencias entre personas que afecten a su convivencia si las mismas ideas pueden ser expresadas en distintos idiomas y al revés. Además, arguye Renan, la lengua es históricamente mutable –en un mismo territorio sus habitantes hablaban ayer una lengua y hoy otra-, por lo que es absurdo asociar indefectible una lengua a un territorio o a un grupo étnico. Por ello, la “consideración excluyente de la lengua tiene, como la atención excesiva a la raza, sus peligros e inconvenientes. Cuando se procede con exageración, uno se encierra en una determinada cultura (...) Se renuncia al aire abierto que se respira en el vasto campo de la humanidad (...) Nada peor para el espíritu; nada más molesto para la civilización”³⁶⁹.

Sobre la *religión* como principio no reflexiona con tanto detalle Renan pues, al igual que el principio dinástico, lo considera agonizante, un principio que tuvo más aplicación en el pasado que en su presente. Si en la Antigüedad, recuerda Renan, la religión podía constituir tanto una creencia como un ley fundacional del estado –v.gr: el culto a Atenea o jurar en el altar de Aglauro marcaba la pertenencia a Atenas, la reverencia a su símbolo, como hoy las banderas, y no lo hacían ni esclavos ni nadie que no fuera ateniense-, hoy carecía de sentido. Reconoce su inclusión entre los principios a estudiar, imprescindible porque, como recuerda Renan, ha sido el fundamento del nacimiento de países como Bélgica. Pero este principio, que fue principio de organización pública, ha pasado al

³⁶⁷ Renan, E., op. cit, p. 67.

³⁶⁸ Renan, E., op. cit, p. 65.

³⁶⁹ Renan, E., op. cit, pp. 72 y 73.

ámbito privado. Para Renan, tras las sucesivas revoluciones liberales y la más amplia proclamación de la libertad de religión y pensamiento, “ya no hay masas que crean de manera uniforme. Cada uno cree y practica a su antojo, lo que puede y como quiere. Ya no hay religión de estado (...)”³⁷⁰.

El principio de *comunidad de intereses* es, sorprendentemente, despachado por Renan en un sólo párrafo con un sólo argumento: los intereses, por sí solos, no crean una nación. Para Renan: “la comunidad de intereses hace tratados de comercio. Hay en la nacionalidad una parte de sentimiento; es alma y cuerpo al mismo tiempo; una *Zollverein* no es una patria”³⁷¹.

Observemos que el principio no es rechazado en su totalidad; simplemente asegura Renan que no es suficiente. No podría ser de otro modo, pues lo contrario, la unión de hombres contra sus propios intereses, es esencialmente absurda y contraria al primer principio político que ya enunciara Aristóteles –la vida en común en la polis para la vida mejor- así como las teorías contractualistas ilustradas, que no pretende derribar. Sencillamente acepta parcialmente las tesis nacionalistas del sentimiento de pertenencia. No lo desarrolla, pero sugiere que el sentimiento es anterior al principio nacional, lo que no es de extrañar en un contexto de construcciones nacionales como en el que se vivía la vida política contemporánea, pero este sentimiento tampoco es suficiente por sí. En resumen, para Renan los intereses comunes entre naciones pueden ser positivos –como para Kant llevarían a la paz- y estos intereses comunes de hombres son requisitos no suficientes para constituir una nación.

Con más detalle rechaza Renan el principio de *las fronteras geográficas o naturales*, doctrina para nuestro autor funesta y arbitraria, pues si bien las montañas tienden a separar y los ríos a unir, no se da el caso ni siempre ni en todos los casos, la vinculación apriorística de pueblo a determinado territorios (y por tanto a intereses estratégicos, a recursos) es, ni más ni menos, que el fundamento de la guerra sin fin.

Renan defiende la desvinculación de lo material como fundamento de la nación. Los condicionamientos materiales son para él requisitos, como lo intereses comunes, no necesarios; es necesario algo más, un *principio espiritual*. Este principio fundamental de la nación está constituido, por un lado, por un pasado común, esto es, los recuerdos de la gloria, las grandes hazañas y grandes hombres y, sobre todo, los recuerdos de ese sufrimiento colectivo que establece lazos de solidaridad entre las personas. Por otro lado, el principio espiritual se compone de un presente que no es otra cosa que el consentimiento actual y continuado de las personas que componen la nación para seguir haciendo grandes cosas juntos pero sobre todo para seguir sufriendo juntos, enfatizando así no tanto los derechos que se obtienen de pertenecer a la nación, sino los deberes. Por tanto, para Renan “una nación es (...) una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios”³⁷².

³⁷⁰ Renan, E., op. cit, p. 77.

³⁷¹ Renan, E., op. cit, p. 79.

³⁷² Renan, E., op. cit, p. 89.

El elemento volitivo de la constitución de esa gran solidaridad que es la nación ocupa un lugar central en la teoría de Renan. La voluntad ha de ser clara, expresada en su misma existencia continuada, lo que él llama –metafóricamente– un “plebiscito diario”. El consentimiento emana de cada ciudadano individualmente, y no puede ser suplantado. Para Renan, “el deseo de las naciones es, en definitiva, el único criterio legítimo”³⁷³. No existe un derecho metafísico de la nación por encima del ser humano desnudo y libre. “El hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su religión, ni del curso de los ríos, ni de la dirección de las cadenas montañosas”³⁷⁴. Siendo la nación un colectivo de hombres iguales a cualquier otro, tiene tan poco derecho de tomar a otros hombres como tenían los reyes. La centralidad del hombre adquiere en Renan una expresión máxima: “Hemos echado de la política las abstracciones metafísicas y teleológicas. ¿Qué queda después? Queda el hombre, sus deseos, sus necesidades”³⁷⁵.

De la centralidad del hombre y sus deseos y necesidades, del consentimiento continuado y de las instituciones libres deduce Renan que las naciones son necesariamente de naturaleza voluble y no eterna como pretendieran los nacionalismos primordialistas. Con los progresos de unificación y secesión nacional europeos como trasfondo, Renan propone que las fronteras cambien de acuerdo con la voluntad de los habitantes, ya sea para unificarse en unidades mayores, ya sea para consumir la secesión de sus partes. “Si sus fronteras [de la nación] suscitan dudas, consúltese a las poblaciones”. Ahora bien, como hiciera Mazzini, Renan vincula la existencia de diferentes naciones (por el momento “buena, e incluso necesaria”³⁷⁶) a un ideal universal, a mejorar la convivencia humana; todas las naciones, asegura, “aportan una nota al gran concierto de la humanidad, que es en definitiva, la más alta realidad ideal a la que podemos llegar”, un ideal colaborativo, “aisladas, todas las partes se debilitan”³⁷⁷.

Respecto a la voluntariedad orientada a la secesión, Renan considera que ésta ha de ser expresada por los habitantes de las provincias. Una de las críticas principales hecha a menudo a la tesis de Renan referida a este punto en concreto es, por supuesto, la definición apriorística de los habitantes: Renan aclara que hay que preguntar a los habitantes de las provincias, no de la nación en su conjunto, pero ya establece tácitamente un criterio –territorial– y, en cierto modo, contradictorio con su tesis. ¿Dónde trazar la frontera de la solicitud de voluntad? La definición *a priori* de la unidad a quien preguntar por sus deseos no está marcada por el elemento volitivo.

Respecto a la voluntariedad orientada a la unificación, Renan se atreve a sugerir la idea presentada por Mazzini y compartida por su compatriota Victor Hugo en 1848, ésa que simbolizara con una bellota plantada en su jardín de Guernesey: la futura unión de las naciones de Europa. “Las voluntades humanas cambian (...). Las naciones no son algo eterno. Tuvieron su inicio, tendrán su fin. Probablemente la confederación europea las

³⁷³ Renan, E., op. cit, p. 89.

³⁷⁴ Renan, E., op. cit, p. 90.

³⁷⁵ Renan, E., op. cit, p. 91.

³⁷⁶ Renan, E., op. cit, p. 93.

³⁷⁷ Renan, E., op. cit, p. 93.

sustituirá. Pero esta no es la ley del siglo en que vivimos”.³⁷⁸

Las críticas realizadas a su trabajo han sido de diversa índole. Para algunos primordialistas, Renan no avanza demasiado respecto de los primeros contractualistas, para los que la voluntad está implícita en el pacto social, mientras que las características religiosas, lingüísticas, étnicas... son las auténticas *objetivas* definidoras del grupo nacional y la voluntad es un elemento añadido; Otros primordialistas podrían criticar la cierta confusión entre lo que *es* y lo que *debiera ser*.

Alguien tan alejado del nacionalismo primordialista como Eric Hobsbawm, en su obra *On History*, criticó la contradicción que supone la invitación de Renan a olvidar la historia poniendo como ejemplos hitos precisos –Matanza de San Bartolomé– que por el contrario sí recordaba. El clásico problema mencionado en la secesión, la predeterminación no voluntaria del grupo al que aplicar la voluntariedad, tampoco es resuelta, lo que es entendible si consideramos que sobre este problema sólo se empezó a poner el foco a mediados del siglo XX.

A pesar de todas las críticas, sin embargo, el elemento central de la tesis de Renan, que no es sino la voluntariedad entendida como subyugación de esos elementos que los primordialistas consideran indisponibles a la voluntad humana (raza, religión, lengua...), es decir, más allá del mero nacionalismo que objetiviza y otoriza, y la consideración del ser humano libre y emancipado de sí mismo pero sin olvidar su dimensión colectiva, le otorgan un papel imprescindible en la construcción del derecho de autodeterminación como derecho humano.

Concluyamos este apartado con algunas reflexiones que se hicieran los autores estudiados J. S. Mill, J. Mazzini y E. Renan respecto a la situación política contemporánea en los Balcanes. Sus construcciones teóricas estuvieron influenciadas por reflexiones en torno al desarrollo político de los dos imperios que durante el siglo XIX se disputaron el control de la región: el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano.

Recordemos que por aquel entonces, los dominios del Imperio austrohúngaro se extendían hasta Eslovenia, Dalmacia, Eslavonia y Voivodina, delimitando el Danubio la frontera con el Imperio otomano. Los sucesivos alzamientos desde comienzos del diecinueve al interior del cada vez más debilitado Imperio otomano, sumido en una larga decadencia, consolidaron su independencia tras la guerra ruso-turca de 1877–1878. Tras la denominada Guerra de Oriente, se celebró el Congreso de Berlín de 1878, presidido por el Canciller Otto von Bismarck, que revisaba los términos del Tratado de San Estéfano para equilibrar el incremento de la fortaleza rusa. En Berlín se formalizó la independencia soberana de los territorios de Rumanía, Serbia y Montenegro, y se dividió el control de Bulgaria en tres partes: Bulgaria, Rumelia oriental y Macedonia. Grecia se ampliaba, Sandjak y Bosnia y Herzegovina quedaban bajo control austriaco, -aunque formalmente otomana- y el valiato³⁷⁹ de Kosovo bajo control del Sultán (lo que causó la

³⁷⁸ Renan, E., op. cit, p. 91.

³⁷⁹ Unidad administrativa del Imperio otomano

decepción de Serbia que aspiraba a la soberanía de ambos territorios como parte de su territorio nacional). Los países balcánicos, aún con presencia en Berlín, no tuvieron voz ni voto en una repartición que se hizo siguiendo el modelo de los congresos coloniales. A pesar de la creciente fuerza de los complejos y múltiples movimientos nacionales en la región desde principios del siglo XIX, movimientos de similares características al resto de la Europa de entonces, los imperios se mantuvieron en pie hasta su caída final en la Primera Guerra Mundial.

J. S. Mill, en 1861, ponía como ejemplo al Imperio austrohúngaro, frente a las construcciones nacionales predominantes en Occidente, de régimen que utilizaba de manera consciente el mantenimiento de las diferencias étnicas entre súbditos para controlarlos mejor, una política de enfrentamiento, variante del clásico *divide et impera*, por aquel entonces bien conocido pero que ha sido, en nuestra opinión, en demasiadas ocasiones ignorado en historiografías recientes no demasiado serias sobre la región (cuando no directamente xenófobas) en las cuales no es infrecuente encontrarse referencias a la belicosidad y los enfrentamientos entre los grupos étnicos como consustanciales a sus “extremas” diferencias y características “naturales”:

“(…) El gobierno puede estar interesado en suavizar las antipatías de las razas, en que la paz sea preservada, y en que el país sea gobernado más fácilmente. Pero cuando hay instituciones libres, o un deseo de tenerlas, en uno de los pueblos artificialmente unidos, el interés del gobierno reposa exactamente en la dirección opuesta. Está entonces interesado en mantener y emponzoñar sus antipatías; para prevenir que se coaliguen, y así poder utilizar a unos como instrumentos para esclavizar a los otros. La corte austríaca, durante una generación entera ya, ha usado estas tácticas como su principal forma de gobierno”³⁸⁰.

De la misma opinión era Renan, que llamaba la atención sobre las políticas de diferenciación desarrolladas por los Habsburgo y por el Imperio otomano:

“Lejos de mezclar los distintos elementos de sus dominios, la casa de Habsburgo los ha mantenido diferenciados y a menudo enfrentados unos con otros. En Bohemia, el elemento checo y el alemán se superponen como el aceite y el agua en un vaso. La política turca de separar de las nacionalidades según la religión ha tenido consecuencias mucho más graves: ha causado la ruina del Oriente (...)”³⁸¹.

Maticemos que la convivencia de grupos étnoculturales y religiosos, respecto al Imperio otomano había sido, a la vez, origen de buena parte de la fortaleza de un imperio caracterizado por ser precisamente tolerante con los distintos grupos religiosos: no en vano gran parte de los judíos sefardíes expulsados en 1492 se acogieron a la hospitalidad del Sultán y un considerable número de sus súbditos eran cristianos, si bien las élites gobernantes eran musulmanas. También el Imperio austrohúngaro se vio beneficiado de una riqueza multicultural que no presentó tantos problemas de convivencia entre súbditos cuando no fueron propiciados por el régimen.

Por último, resulta interesante repasar la visión de Mazzini respecto a la situación de los pueblos súbditos de estos imperios. Es pertinente por tres razones: la primera porque la reflexión sobre los mismos coadyuvó a la construcción del argumentario nacionalista de

³⁸⁰ Mill, J. S., “Considerations...”, op. cit., p. 548.

³⁸¹ Renan, E., op. cit., p. 37.

Mazzini; segundo, porque, como veremos, Mazzini influyó a su vez en Woodrow Wilson cuando ayudó a establecer el derecho de autodeterminación de los pueblos en sus catorce puntos, en los cuales tiene una fuerte presencia el fin de estos imperios; tercero, ayuda a comprender lo complejo del imaginario nacionalista, siempre voluble, que incluía contingentemente distintas opciones, como eran el nacionalismo paneslavista o la creación de una Gran Iliria, o la unión de los eslavos del sur en torno a una Gran Serbia o en torno a una Yugoslavia, con mayor o menor fuerza o presencia de Bulgaria, etc.

Mazzini en *A los Patriotas de Serbia y Hungría* (1863), manteniéndose en su línea argumental de pueblos libres para una eventual unidad o federación en Europa, tratando de congeniar lo nacional y lo universal, dice:

“Vosotros sois nuestros hermanos. Como nosotros, buscáis establecer vuestra propia Patria; y como a nosotros, la contraseña que levanta vuestros espíritus es la Nacionalidad. Habéis sufrido y luchado por ella, con vuestros propios héroes y mártires. Ahora debemos extender nuestras manos a través del mar Adriático para ayudarnos mutuamente. Los pueblos italianos están mezclados con los vuestros a lo largo de la costa este de ese mar, el cual los dos consideramos un derecho, y que debe estar abierto al libre intercambio de nuestros bienes. Es en vuestro beneficio que haya una Italia unida, tal y como es en nuestro interés que haya una gran Iliria, así como una Hungría libre como centro de una Federación del Danubio (...) ¡Oh, hermanos serbios, no está la mitad de vuestro pueblo desperdigado y arrancado de su madre común bajo la dominación austríaca? ¿Podéis acaso existir sin liberaros de su gobierno? (...) Compartimos el mismo objetivo (...) Dos imperios diferentes, el Turco y el Austríaco, pesan mucho en el corazón de Europa y deniegan cualquier derecho, cualquier conciencia y vida a los pueblos. Son dos diferentes encarnaciones del Espíritu del Mal y representan nada más que la tiranía de la conquista. Debemos deshacerlos (...) Así que lleguemos a un acuerdo y preparémonos. Una Liga fraternal bajo una bandera común de acción, extendiéndose desde Polonia hasta Hungría, Serbia, Italia, será un hecho en Europa. Llegados a este punto, ninguna otra fuerza podrá denegarnos la victoria”³⁸².

Tres años más tarde, en *Por una verdadera guerra nacional* (1866), Mazzini mantendría la propuesta de unión por la libertad de todos los pueblos oprimidos por los imperios “(...) Escribamos en nuestra bandera las siguientes palabras sagradas: ‘por nuestro propio bien y por el vuestro’. Protejamos esa bandera con todas las espadas que puedan ser desenvainadas en Italia y ondeémosla delante de los ojos de los húngaros, de los bohemios, serbios, rumanos, eslavos del sur, y todos los otros pueblos gobernados por el Imperio austríaco o el Imperio turco. La fortuna de Europa y la nuestra propia dependen de la formación de tal Alianza con los pueblos oprimidos de Europa”³⁸³.

El Imperio austrohúngaro, regido de 1848 a 1916 por el Emperador Francisco José I, con cerca de cincuenta millones de habitantes y una quincena de nacionalidades, se convertiría, como vemos, en el epicentro de reflexiones sobre la dimensión política de la nacionalidad y su relación con los distintos movimientos como los socialismos. También el Imperio otomano fue objeto de reflexión, pero “el enfermo de Europa” se hallaba inmerso en su largo proceso de decadencia y los pensadores más influyentes se encontraban más en Viena que en Estambul. Allí se acuñó el término *Völkerkerker* (prisión de naciones) por los eslavos con aspiraciones nacionalistas. Viena, hacia finales del s. XIX y principios del XX, entonces una de las seis ciudades más grandes del

³⁸² Mazzini, G., *A cosmopolitanism of nations. Giuseppe Mazzini's writings on democracy, nation building and international relations*. Ed., Stefano Recchia y Nadia Urbinati, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2009, p. 141 y ss

³⁸³ Mazzini, G., *A cosmopolitanism...*, op. cit., p. 148.

mundo, era uno de los grandes centros de creación artística y cultural. Una Viena multicultural con fuerte presencia de tensiones nacionalistas y también una comunidad judía ilustrada plenamente integrada: Freud, Kelsen o Wittgenstein formaron parte de una élite intelectual de influencia indiscutible. En esa Viena nacería también más tarde Karl Popper. Era común en esa élite una mentalidad abierta cercana comprometida más con una suerte de patriotismo civil y una inclinación hacia el socialismo que hacia los nacionalismos. Es en esta atmósfera en la que en 1906 el socialista de origen judío Otto Bauer escribe su influyente obra *La cuestión de las nacionalidades y la social-democracia*.

Para Otto Bauer, líder de los socialdemócratas austríacos, el principio de nacionalidad se había convertido en una fuerza política de tal magnitud que no podía ser ignorada, una fuerza que había destruido estados de Europa. La nación puede ser definida para Bauer como una “comunidad de carácter” nacida de una “comunidad de destino”, no como sujeción al mismo “sino a la experiencia común del mismo destino en el contexto de relaciones constantes, de interacción continua”³⁸⁴. Rechazando de plano el *Volkgeist* de Herder, propone una integración de las nacionalidades en una sociedad socialista que tenga en cuenta la realidad multicultural, considerando que las diferencias entre las naciones no son invariables ni naturales, sino culturales y cambiantes. La autonomía nacional era deseable pero cuestiona su relación con el territorio, algo que no es sorprendente en un imperio de tal mezcla cultural y una tradición de definición del grupo nacional más cercana a características etnoculturales que al *jus loci*.

Propone Bauer lo que él denomina el “*principio de la personalidad*”, cuyo fin es constituir la nación “no como una corporación territorial, sino como una asociación de personas”³⁸⁵, que en su visión se articularían a través del derecho público dentro de cada país, asignación de personas a grupos a través de un registro de adscripción voluntaria³⁸⁶. El socialismo había nacido en los grandes estados nación de Europa occidental, lo que según Bauer habría influido en la posición del socialismo respecto de la cuestión nacional. En su opinión, la autonomía nacional habría de funcionar mejor en un estado multinacional que en un estado nación, y sería en realidad más sencillo satisfacer las necesidades culturales de las minorías. Estos puntos de vistas harían que años más tarde Lenin tildara su trabajo, por un lado, de “teoría psicológica” –en contraposición con el más historicista economicista trabajo de Karl Kautsky, gran teórico marxista con el que más tarde también polemizaría Lenin– y, por otro lado, de “oportunistas nacional”, enfocado como estaba en la “defensa de una autonomía nacional cultural”³⁸⁷.

Desde un punto de vista jurídico formal, argumenta Bauer, el estado moderno constituía una “corporación territorial soberana”, que no cambiaría cuando la clase trabajadora

³⁸⁴ Bauer, O., *The question of nationalities and social democracy*, ed. Ephraim J. Nimni, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2000, p. 100.

³⁸⁵ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 282.

³⁸⁶ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 283.

³⁸⁷ Lenin, V.I., “El derecho de las naciones a la autodeterminación”. *Prosveshcheniye* Nos. 4, 5 y 6. abril-junio, 1914, (vid. Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Vol 20, Moscú, 1972, pp. 393-454). Puede consultarse en Marxists.org.

tomara el poder y se apropiara de los medios de producción. “La unidad política del futuro será también inviable sin el atributo de la soberanía; en este caso, soberanía significará que la unidad política es la forma más alta de autoridad en relación con toda la producción y distribución”³⁸⁸. Preocupado por la relación entre la distribución y la nacionalidad, se cuestiona Bauer la pregunta fundamental de si la nacionalidad ha de determinar también los límites de la unidad política³⁸⁹.

El principio del umbral está muy presente en su obra, por lo que no aboga por una multiplicidad de micro estados sino más bien en una realización cultural y política dentro de estados viables bajo un sistema socialista. El imperialismo podría traer para Bauer “la desintegración de Austria en la época de la sociedad capitalista”. Sólo el enfoque socialista de la cuestión nacional evitaría la desintegración del estado. La implementación del principio de nacionalidad en su forma más pura, arguye, “está también obstaculizada por el hecho de que el estado moderno es también una zona económica”³⁹⁰.

Para Bauer, si bien las relaciones internacionales entre países socialistas habrían de ser reguladas por pactos internacionales, estos crecerían irremediabilmente gracias al progresivo avance del socialismo. La división internacional del trabajo crearía nuevas estructuras intraestatales y supraestatales, produciéndose integraciones desde su principio de individualidad hasta un estado de estados, augurando famosamente que entonces “los Estados Unidos de Europa no serán más un sueño, sino el fin ultimo inevitable de un movimiento que las naciones comenzaron hace mucho tiempo”³⁹¹.

§3.1.3 El principio de autodeterminación de los pueblos en el período de entreguerras

Los disparos de la FN modelo 1910 de calibre 9 mm de Gavrilo Princip frente al *Latinski most* de Sarajevo, el 28 de junio de 1914, acabaron con la vida del Archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro y la de su esposa, Sofía Chotek, Duquesa de Hohenberg, y se convirtieron en el famoso *casus belli* de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser consciente del peligroso ambiente revolucionario que se respiraba en Bosnia, el Archiduque hizo coincidir su visita con San Vito, *Vidovdan*, fecha en la que los serbios conmemoraban la Batalla de Kosovo de 1389. Gavrilo Princip era un joven nacionalista yugoslavo (serbio de Bosnia) -apenas contaba con diecinueve años el día del asesinato-, perteneciente al movimiento conocido como *Mlada Bosna*, la Joven Bosnia, nombre que nos refiere inconfundiblemente a los movimientos nacionalistas europeos iniciados por Mazzini, Joven Italia, Joven Europa, Joven Polonia, etc. *Mlada Bosna* estaba relacionada con la organización nacionalista *Crna Ruka*, Mano Negra, a la que pertenecían militares del gobierno de Serbia. El 29 de junio de 1914 el periódico británico *Manchester Guardian*, en la noticia sobre el asesinato explicaba que:

³⁸⁸ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 405.

³⁸⁹ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 406.

³⁹⁰ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 408 y ss.

³⁹¹ Bauer, O., *The question of nationalities...*, op. cit., p. 414.

“Bosnia y Herzegovina ha estado bajo ocupación austríaca desde 1878, cuando el Tratado de Berlín autorizó la sujeción de las dos porvicias a la monarquía dual. En 1908, Austria sin consultar a al as demás partes del tratado, se anexionó el territorio ocupado. Austrohungria está gobernada, como resultado de las divisiones territoriales y las diferencias constitucionales, parcialmente por alemanes y parcialmente por los magiares. Los eslavos, que son la gran mayoría del pueblo, en un número de 22.500.000 contra 11.000.000 de alemanes y 9.000.000 de magiares, permanecen idignantemente hostiles a tal sistema político”³⁹².

La controvertida implicación gubernamental de Belgrado en el atentado y los también controvertidos intereses del Imperio austrohúngaro de afianzar su poder en la región, junto con el complejo entramado de tratados secretos, condujeron a la declaración de guerra del Imperio austrohúngaro a Serbia el 28 de julio de ese mismo año, tras la negativa de Serbia a aceptar policías austríacos en su territorio.

La historiografía popular occidental suele comenzar de una manera parecida el relato de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a la Triple Entente con la Triple Alianza. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que la región balcánica se hallaba ya inmersa en un largo proceso de conflictos de construcción nacional contra los imperios que habían dominado la región. Desde su punto de vista, el inicio de la Primera Guerra Mundial se ubica temporalmente entre la expulsión de un imperio y el comienzo de la lucha por la liberación de otro. Los nacionalistas serbios veían a Serbia liderando el proceso de liberación de los pueblos eslavos del sur, movimiento que ponía en peligro la cohesión de la monarquía austríaca, lo que llevó a Viena a convencerse de la conveniencia de someter totalmente a los serbios, lanzando un ultimátum que nos les daba otra salida que “reconocer la hegemonía austríaca o someterse a guerra de conquista”³⁹³. La construcción nacional estaba basada así sobre todo en la oposición al poder imperial, por lo que no es de extrañar que se entremezclaran la aspiración nacionalista serbia y el paneslavismo, una idea que más tarde se impondría como pan –eslavismo yugoslavo, que bebía del paneslavismo del XIX y que fue adoptado oficialmente por las autoridades serbias con el discurso en Niš del Primer Ministro serbio Nikola Pašić en 1914: los eslavos del sur se unían para hacer frente a los imperios-.

Recordemos que tan sólo hacía dos años que el Imperio otomano había sido finalmente expulsado de la península balcánica. La Primera Guerra de los Balcanes (octubre de 1912 a mayo de 1913) había enfrentado al Imperio otomano con la Liga de los Balcanes, conformada por Serbia, Montenegro, Rumanía, Grecia y Bulgaria. La Liga de los Balcanes venció y los aliados ampliaron su territorio con el Tratado de Londres. Albania nació como estado independiente en noviembre de 1912. La Segunda Guerra de los Balcanes (junio y julio de 1913) enfrentó a Bulgaria, descontenta con el resultado del Tratado de Londres, con sus antiguos aliados, además de Rumanía y el Imperio otomano.

Una vez que el Imperio otomano había perdido la práctica totalidad de sus territorios europeos, sólo quedaba el Imperio austrohúngaro como potencia colonial en la región, que controlaba todavía la actual Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y la Voivodina. Desde el punto de vista del Sudeste Europeo, por tanto, la Primera Guerra

³⁹² “Archduke Franz Ferdinand shot dead by student”, *Manchester Guardian*, 29 de junio de 1914. Accesible en: <http://www.theguardian.com/world/2008/nov/08/first-world-war-franz-ferdinand-sarajevo>

³⁹³ Howard, M., Louis, R., *Historia Oxford del siglo XX*, Ed. Planeta, Barcelona, p. 178

Mundial puede considerarse que forma parte de un proceso más amplio de consolidación de los procesos de construcción nacionales.

La derrota de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial supuso, como es bien sabido, la caída del Imperio alemán de Guillermo II y la satisfacción de Francia tras la pérdida de Alsacia y Lorena, derrotada en la Guerra Franco-prusiana de 1870, el fin definitivo del Imperio otomano, el desmantelamiento del Imperio austrohúngaro–nacieron Austria, Hungría y Checoslovaquia– y la creación del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que aunque conocido popularmente como Yugoslavia desde su creación el 1 de diciembre de 1918, no cambió su nombre oficialmente a Reino de Yugoslavia hasta octubre de 1929, manteniéndose con esta denominación hasta la II Guerra Mundial.

Hasta aquí, brevemente, los hechos históricos a modo introducción de los eventos que marcaron la introducción de la autodeterminación de los pueblos en el marco del Derecho Internacional. Efectivamente, como recuerda Griffiths, “sólo tras la Primera Guerra Mundial, cuando el anterior sistema europeo comenzó a desintegrarse, comenzó el principio de autodeterminación a adquirir un apoyo destacado a través de figuras internacionales tan diversas ideológicamente como Vladimir Lenin y el presidente Wilson”³⁹⁴.

Ambos líderes tuvieron una influencia fundamental en la aceptación de la libre determinación de los pueblos como principio de Derecho Internacional, herederos de las tradiciones de pensamiento explicadas en páginas anteriores. En las próximas líneas nos aproximaremos a ambos puntos de vista, contruidos de alguna manera complementariamente en torno a un diálogo político cuyo inicio podríamos situar en la entrada de Estados Unidos en la guerra, de parte de la Triple Entente, el 6 de abril de 1917.

Poco después, en Rusia, que había entrado en la guerra como aliado de Serbia en 1914 contra el Imperio austrohúngaro en la misma coalición que Estados Unidos, triunfa la revolución en octubre de 1917. Prácticamente de inmediato, Lenin promueve el retiro de Rusia de la guerra con el llamado *Decreto sobre la Paz* publicado en noviembre de ese mismo año, 1917. Como respuesta, apenas dos meses después, Wilson enuncia sus célebres *Catorce puntos*, que con objeto de lograr la paz enumera los objetivos a alcanzar con la guerra.

El discurso de los *Catorce puntos*, pronunciado ante el Congreso el 8 de enero de 1918, fue decisivo para la deriva histórica de la guerra y muy influyente para el desarrollo del Derecho Internacional. En su introducción, el presidente Wilson recordaba a los miembros del Congreso que las motivaciones de los Estados Unidos para entrar en la guerra no tenían nada que ver con la conquista imperialista, la cual debía pasar a ser definitivamente cosa del pasado, sino con el mantenimiento de la paz.

³⁹⁴ Griffiths, M., “Self-determination, international society and world order,” *Macquarie Law Journal*, vol. 3, 2003, p. 32

Frente al *Discurso de la Paz* de Lenin, Wilson aseguró que el objetivo de entrar en la guerra era, una paz sustentada en la autodeterminación de los pueblos, “que el mundo sea adecuado y seguro para vivir en él; y particularmente que sea seguro para todas aquellas naciones amantes de la paz que, como la nuestra, deseen vivir su propia vida, determinar sus propias instituciones, asegurarse la justicia y el equitativo trato de otros pueblos contra la fuerza y la agresión egoísta. Todos los pueblos del mundo comparten en efecto este interés, y por nuestra parte vemos claramente que a menos que la justicia sea hecha efectiva a los demás, no lo será tampoco a nosotros. El programa de la paz mundial es, por tanto, nuestro programa”³⁹⁵.

La autodeterminación de Wilson, fuertemente influida por Mazzini, no es una autodeterminación a cualquier precio sino una *autodeterminación democrática* (del mismo modo que la autodeterminación para Lenin estaría supeditada a los principios socialistas). Como recuerdan Recchia y Urbinati, el internacionalismo liberal que Woodrow Wilson propuso aplicar como doctrina política estuvo muy influenciada por el pensamiento de Mazzini³⁹⁶. No es casualidad que en 1919, en su camino a París para participar en la conferencia que alumbraría el tratado de Versalles, -firmado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles también el día de *Vidovdan*-, Wilson visitara Génova y rindiera homenaje al italiano³⁹⁷. Bajo esta influencia no es de extrañar tampoco que en el pensamiento de Wilson paz y autodeterminación democrática estuvieran estrechamente relacionadas.

Como recuerda Arend Lijphart “el objetivo de Woodrow Wilson de *hacer un mundo seguro para la democracia* también incluía la idea de que un mundo más democrático sería necesariamente un mundo más seguro y pacífico”³⁹⁸. También Iglar considera que Wilson “esperaba que teniendo en consideración los deseos de los grupos nacionalistas minoritarios, los Aliados podrían reestructurar Europa y asegurar una paz mundial duradera”. Y extendiendo algo más el argumento, aventura este autor que Wilson “creía que la satisfacción de las demandas nacionalistas podría impedir el tipo de violencia nacionalista que hizo estallar la Primera Guerra Mundial”³⁹⁹.

En relación con el problema de la paz, en cuanto propuesta para finalizar la Guerra y respuesta al Decreto de Lenin, los *Catorce puntos de Wilson* reflejan asimismo una innegable influencia de Kant. El primer punto, que trata acerca de la conveniencia de

³⁹⁵ Link, A.S. et al., (eds). *The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 45: November 11, 1917-January 15, 1918*, Princeton University Press, 1984, p. 536.

Puede accederse el texto completo de los Catorce Puntos (en inglés) en <http://usa.usembassy.de/etexts/democrac/51.htm> La traducción es mía.

³⁹⁶ Mazzini, G., *A cosmopolitanism...*, op. cit., p. 3.

³⁹⁷ El 6 de junio de 1919, frente al monumento a Mazzini en esa ciudad, Wilson diría: “Al otro lado del mar hemos estudiado la vida de Mazzini (...) Es un placer para mí sentir que estoy tomando parte en el cumplimiento de la realización de sus ideales (...) espero recibir inspiración de este volumen [trabajos de Mazzini entregados como regalo del municipio de Génova a Wilson] de igual manera que ya me han servido de guía los principios que Mazzini expresó tan elocuentemente”.

³⁹⁸ Lijphart, A., *Thinking about democracy: power sharing and majority rule in theory and practice*. Routledge. Taylor & Francis Group, Londres, Nueva York, 2007, p. 232.

³⁹⁹ Iglar, R. F., “The constitutional crisis in Yugoslavia and the international law of self-determination: Slovenia’s and Croatia’s right to secede”, *Boston College International and Comparative Law Review*, vol. 15, n. 1, 1992, pp. 221-222.

desterrar la práctica de los tratados y alianzas internacionales secretas (que estaba directamente relacionado con el sistema que había sido práctica normal desde Bismarck y había sido causa de la rápida expansión de la guerra), hunde sus raíces claramente en el tratado *Sobre la Paz Perpetua* del filósofo de Königsberg, como lo son los puntos II y III, referidos a la libertad de navegación y la libertad de comercio respectivamente, así como el punto IV sobre la reducción de armamento. De clarísima inspiración kantiana es también el punto XIV: “Debe ser formada una sociedad general de naciones mediante tratados específicos con el objetivo de permitir garantías mutuas de independencia política e integridad territorial a estados grandes y pequeños por igual”.

La Sociedad de Naciones propuesta por Wilson en el punto catorce fue creada con el Tratado de Versalles, y tuvo su primera reunión en Ginebra el 15 de noviembre de 1920, pero Estados Unidos nunca llegó a formar parte de ella. Wilson veía en sus propuestas de paz unas propuestas liberales como respuesta a las de Lenin (Rusia se hallaba en unas circunstancias muy diferentes) y a la Sociedad de Naciones como parte de esas respuestas. Según Lloyd Ambrosius, el presidente Wilson compartía la preocupación del Primer Ministro británico Lloyd George, quien temía la expansión de movimientos revolucionarios una vez finalizada la guerra y por ello, “para prevenir que el Bolchevismo se extendiera hasta el corazón de Europa, apoyó unos términos moderados para la paz con Alemania de acuerdo con el principio de autodeterminación nacional. Él veía la Liga como la más viable alternativa al Bolchevismo”⁴⁰⁰.

La influencia kantiana en Wilson le hizo ganarse la fama de *idealista* en su doctrina internacional, frente a lo que otros autores posteriores han presentado una doctrina pretendidamente opuesta (invocando a Hobbes como inspiración), doctrina *realista* de las relaciones internacionales. No podemos ni debemos entrar ahora en una discusión tangencial alejada del hilo principal de nuestra disquisición, pero consideramos que es mencionable la habitual confusión entre el idealismo wilsoniano entendido como doctrina influida por el idealismo alemán y, por otro lado, entendido como pretendido alejamiento de los hechos o supuesta interpretación ingenua de las naturaleza humana y sus circunstancias políticas. De hecho, el pensamiento de Wilson ha sido considerado pragmático, especialmente a nivel de política interna, por autores como Pestritto, quien ha llamado la atención, por otro lado, sobre el alejamiento de Wilson del liberalismo jeffersoniano y la influencia en su pensamiento del historicismo hegeliano⁴⁰¹.

En Estados Unidos la iniciativa de Wilson de crear una Sociedad de Naciones fue percibida por algunos grupos como, precisamente, contraria al principio de libre determinación. Algunos norteamericanos, entre ellos de manera destacable aquellos de ascendencia irlandesa, veían en la Sociedad de Naciones un peligro de continuación del imperialismo británico, un imperialismo que podría afectar directamente a la independencia y a los intereses norteamericanos⁴⁰².

⁴⁰⁰ Ambrosius, L.E., *Woodrow Wilson and the American diplomatic tradition. the treaty fight in perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. 110.

⁴⁰¹ Pestritto, R.J., *Woodrow Wilson and the roots of modern liberalism*. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Oxford, 2005

⁴⁰² Ambrosius, L.E., *Woodrow Wilson and...*, op. cit., pp. 143 y ss

Senadores como William Borah, de Idaho, Henry Cabot Lodge, de Massachusetts o Hiram W. Johnson, de California, lideraron un grupo de oposición a Wilson. El 19 de noviembre de 1919, en un famoso discurso en el Senado, Borah dejaría clara su posición sobre el peligro que la conjunción de intereses con estados como el Imperio Británico en la Sociedad de Naciones suponía un peligro para la independencia de los pueblos sometidos por los imperios⁴⁰³:

¿Cómo puede albergar esperanzas de paz cuando el amor al país es ignorado en su esquema? ¿cuándo el espíritu de la nacionalidad es rechazado, es incluso objeto de mofa? (...) Con una crueldad sin igual su tratado en una docena de ocasiones embiste contra la divina ley de la nacionalidad. Pueblos que hablan el mismo idioma, se arrodillan ante las mismas tumbas ancestrales, son conmovidos por las mismas tradiciones, animados por una esperanza común, son separados desgarradamente, rotos en pedazos, divididos, y parcelados en naciones antagonistas. Y a esto usted llama justicia, esto, exclama, significa la paz. (...) No; su tratado significa injusticia. Significa esclavitud. Significa guerra.”

Pero también suponía un peligro para la independencia de los propios Estados Unidos de América⁴⁰⁴:

(...) Hay otra razón, más imperiosa incluso, por la cual votaré contra este tratado. Pone en peligro lo que yo concibo como base, verdadero principio fundamental de esta República. Está en conflicto con el derecho de nuestra gente a gobernarse a sí mismos, libre de toda restricción, legal o moral, de los poderes extranjeros.

Observemos así que la autodeterminación de los pueblos era entonces enarbolada tanto por Wilson y los que lo apoyaban como por sus detractores (dentro y fuera de los Estados Unidos). Wilson perfila la libre determinación de los pueblos en el quinto punto de sus *Catorce Puntos*, en el que el presidente propone:

“Un ajuste libre, abierto de mente y absolutamente imparcial de todas las reivindicaciones coloniales, basadas en una estricta observancia del *principio* que dicta que determina todas las cuestiones de soberanía, los intereses de las poblaciones implicadas deben tener igual peso que las equitativas reivindicaciones del gobierno cuyo título ha de ser determinado”⁴⁰⁵.

Quedan distinguidos, por tanto, para Wilson los intereses del pueblo, sus necesidades como colectivo distinto de la representación política, del gobierno, otorgando a uno y a otro intereses distintos pero ambos políticamente legítimos.

Según Colin Warbrick, fue “la inclusión de la autodeterminación como principio guía para la creación de Estados y el dibujo de sus fronteras al final de la Gran Guerra las que le dieron un papel en relación con la estatalidad”.⁴⁰⁶ Este papel –criticado también por

⁴⁰³ El texto completo puede encontrarse en la página web del Senado de los Estados Unidos.

La traducción es mía. <http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/BorahLeague.pdf>

⁴⁰⁴ El texto completo puede encontrarse en la página web del Senado de los Estados Unidos.

La traducción es mía. <http://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/BorahLeague.pdf>

⁴⁰⁵ Link, A.S et al., (eds). *The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 45: November 11, 1917-January 15, 1918*, Princeton University Press, 1984, p. 536.

Puede accederse al texto completo de los Catorce Puntos (en inglés) en <http://usa.usembassy.de/etexts/democrac/51.htm> La traducción es mía.

⁴⁰⁶ Warbrick, C., “States and Recognition in International Law”, Evans, M.D. (ed), *International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York, 2003, p. 214 y ss.

etnificador- no fue, por supuesto, aplicado de manera inmediata y general. Como opina este autor, el principio de autodeterminación fue considerado eminentemente como una coyuntural directriz política, por lo que las potencias europeas vencedoras en la I Guerra Mundial se resistieron a aplicarlas a sí mismas, arguyendo que sólo era aplicable al desmantelamiento de los imperios enemigos derrotados. Concluye así Colin Warbrick que sólo los movimientos independentistas en las colonias y el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Soviética a los procesos de descolonización cambiarían la situación, obligando a ceder a países como Gran Bretaña o Francia y consolidando la libre determinación de los pueblos como principio de Derecho Internacional⁴⁰⁷.

La propuesta de Wilson, remarcen ciertos autores como Faruk Birtek, creó definitivamente un nuevo paradigma de preeminencia de la doctrina nacionalista según la cual las nuevas fronteras debían delimitar entidades colectivas socio-culturales o étnicas. Este nuevo paradigma acabó con el modelo imperial que implicaba, según este profesor turco de la Universidad Bogazici de Estambul, un cosmopolitismo multiétnico frente a los nuevos estados de aspiración monoétnica. A pesar de la más que obvia y muy discutible lenidad de la que hace gala el autor turco al tildar al Imperio otomano de “liberal”, la explicación de Birtek es contundente:

“(…) la Declaración de Wilson en 1918 (…) selló la victoria en la Primera Guerra Mundial como la victoria de la ideología del estado étnico. De acuerdo con los Catorce Puntos de Wilson, el Imperio otomano se partiría a lo largo de líneas étnicas y la hegemonía política sería dada en cada región a la mayoría étnica prevalente. Es fácil imaginar como esto fue una poderosa luz verde para la limpieza étnica. De hecho, una buena parte de la etnicidad debía ser creada en el mismo proceso de esa limpieza; fue la luz verde de Wilson la que así creó la etnicidad (…)”⁴⁰⁸.

El cambio de paradigma no se dio sólo respecto de los imperios sino también respecto de los estados liberales creados el siglo anterior no en función de las etnicidades. Notemos como en América, las líneas de los nuevos estados habían sido creadas siguiendo las líneas administrativas de los imperios (el territorio de la República del Ecuador era el de la Presidencia y Real Audiencia de Quito, etc.), no las líneas étnicas. A partir de ahora la relevancia de la etnicidad será prácticamente indiscutible. El cambio de paradigma en el trazo de fronteras indicado por Wilson, esa asociación entre etnicidad y derecho de representación política, ha sido objeto de análisis.

Para Lea Brilmayer, el presidente Wilson hizo una analogía “entre el principio de los ideales americanos de democracia, promocionando la autodeterminación de los pueblos como una extensión extranjera de las normas americanas de equidad política. Redibujando el mapa de Europa tras la guerra, los vencedores trataron de respetar las fronteras étnicas - al menos respecto a los imperios de las naciones vencidas. La autodeterminación no tuvo virtualmente ningún impacto en los imperios coloniales de los poderes victoriosos.”⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ Warbrick, C., “States and recognition...”, op. cit., p. 214 y ss

⁴⁰⁸ Birtek, F., “From affiliation to affinity: citizenship in the transition from empire to the nation-state” en Benhabib, S., Shapiro, I., and Petranovic D., (eds) *Identities, affiliations and allegiances*, Cambridge University Press, 2007, pp. 31 y 32.

⁴⁰⁹ Brilmayer, L., “Secession and Self-determination: A Territorial Interpretation”, *Yale Journal of International Law*, vol. 16, n. 177, 1991, p. 180.

Dejando de un lado la incoherencia en la aplicación del principio sólo a los imperios derrotados y no a los vencedores, manteniéndolos así en el poder, como denunciaron los senadores contrarios al Tratado de Versalles en 1919, es llamativo ese malentendido o diferencia de interpretación entre la idea de libertad de Wilson y la interpretación europea a la que se refiere Lea Brilmayer.

Ellie Kedourie consideró que el profundo rechazo de Wilson a los gobiernos que el presidente consideraba no representativos, y su firme apuesta en favor del derecho de autodeterminación, provenían de su propia condición estadounidense y su propia concepción de la Revolución Americana: “él estaba transponiendo las lecciones de la experiencia americana al contexto europeo. La Revolución Americana, creía, se produjo para asegurar el derecho de la gente tener voz sobre su gobierno. (...) La doctrina de Wilson es el whiggismo, que tenía a Locke como Biblia, la que proclamaba *No taxation without representation*, y reivindicaba los derechos de los ingleses libres. Para tal doctrina, lo importante es que los hombres sean capaces de decidir libremente quiénes han de ser sus gobernantes, para mantener el control de sus acciones, y preservar el los derechos de los ciudadanos de sus libres de su usurpación. Es bastante fácil confundir los límites de esta doctrina, y creer que implica proposiciones que no implica de ninguna manera”⁴¹⁰.

Como resume el profesor Benyamin Neuberger, hubo un malentendido entre lo que Wilson entendía por el binomio autodeterminación nacional y lo que en el Este de Europa se entendía, esto es, subrayando más lo *nacional* que lo *autodeterminativo*: “para los anglosajones, un gobierno dictatorial era un gobierno ajeno a la gente, ya fueran extranjeros o locales los gobernantes que hubieran usurpado el poder (...) Para los alemanes nacionalistas, la libertad consistía en la soberanía nacional y no en la democracia occidental”⁴¹¹.

Para Neuberger, la autodeterminación entendida sólo desde el punto de vista nacionalista abría la puerta a los regímenes autoritarios que vendrían después, “esto completa el círculo de un sistema estatal arbitrario basado en reyes y ejércitos, por la vía de la autodeterminación nacional y un sistema estatal basado en la voluntad popular, a un “determinismo nacional” por las autoproclamadas élites nacionales. La confusión sobre que constituye la autodeterminación nacional tiene sus raíces en la pasada asociación entre democracia y nacionalismo, ya que ambos tenían en común los objetivos de soberanía y participación popular”⁴¹².

Por otro lado, Ronald J. Pestritto defiende que a pesar de ser la doctrina internacional de Wilson, en particular en su relación con los Catorce Puntos y el resultado político final de la Primera Guerra Mundial, la más estudiada por la academia a nivel global, el presidente norteamericano no tenía mucha experiencia en la arena internacional en contraste con la política interna americana, a la que había dedicado la mayor parte de sus reflexiones.

⁴¹⁰ Kedourie, E., *Nationalism*, Hutchinson University Library, Hutchinson & Co, London, 1961, p. 132.

⁴¹¹ Neuberger, B., “National self-determination: a theoretical discussion”, *Nationalities Papers*, vol.29 n.3, 2001, pp. 394-395.

⁴¹² Neuberger, B., “National self-determination...”, op. cit., pp. 394-395.

Pestritto defiende que la doctrina política y constitucional de Wilson era profundamente historicista, influida por autores como Hegel, Darwin o Herbert Spencer, convencido como estaba de que la verdadera democracia en América no llegó en 1787 sino con la práctica democrática desarrollada durante los cien años posteriores, y que dicha democracia no podía ser desligada del grado de preparación de un pueblo para incorporarla y practicarla. El alejamiento de este pragmatismo historicista a nivel internacional, que Pestritto considera innegable, debe ser pues matizado. Para Wilson, según nuestro autor, las ideas universales debían ser conformadas a las realidades concretas de los pueblos y, en particular, a su relativo estado de progreso histórico: había gentes más avanzadas y otras menos, unas más preparadas que otras para el sistema democrático, por lo que ese entrar en la guerra para hacer un mundo más seguro, sin interés particular para Estados Unidos pero con un idealismo humanista, debe ser entendido para Wilson, según Pestritto, en ese marco realista-historicista⁴¹³.

Además de los anteriormente descritos (puntos I-V y punto XIV), los *Catorce Puntos* de Wilson incluían medidas coyunturales geoestratégicas de aplicación a territorios concretos (puntos VI-XIII). El punto VI, referido a Rusia, trataba de la evacuación de todo su territorio, con la intención de acomodar la situación del aliado que se había retirado de la guerra. Proclamando su libertad para la “independiente determinación de su propio desarrollo político y política nacional”, invitaba al mismo tiempo a Rusia a seguir la incitativa de Wilson, esto es, a ingresar en la Sociedad de Naciones y a respetar la autodeterminación de otros pueblos. Los puntos VII, VIII y IX trataban de garantizar la evacuación y restauración de la soberanía de Bélgica, Francia (a la que se reconocía derecho de reocupar la Alsacia-Lorena) e Italia. El punto XII se refería exclusivamente a Polonia, a la que se trataba de garantizar su territorio con acceso al mar.

En el caso de Italia, se dejó claro el cambio de paradigma a la hora de trazar las fronteras, utilizando la nacionalidad como criterio para la estatalidad. El reajuste de las mismas, debía ser efectuado, según Wilson, “a lo largo de líneas de nacionalidad claramente reconocibles”, una claridad que, como bien sabemos y ha dejado la Historia patente en las disputas de la península de Istria (que pasó de Austria a Italia en 1919, y de Italia a Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial y es hoy parte de Croacia), es cuanto menos discutible de alcanzar pacíficamente.

A los pueblos del Imperio austrohúngaro, en general, se refería ambiguamente el punto décimo, previendo que debería acordarse para ellos “la oportunidad más libre de desarrollo autónomo”. La falta de mayor detalle en una parte del mundo donde las nacionalidades y pueblos son decenas, podría indicar que Wilson tenía en mente, el “principio de umbral”, por el cual los nuevos estados nacidos, a pesar de nacer a lo largo de líneas étnico-culturales, debían poder ser estados viables. Así, se originó el nacimiento de Checoslovaquia, Austria y Hungría como estados independientes. El punto XI preveía también la evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, también especificando que las líneas habían de ser trazadas “amigablemente” de acuerdo a un criterio histórico de “alianza y nacionalidad”, lo que originó el nacimiento de Albania. También se preveía el

⁴¹³ Pestritto, R.J., *Woodrow Wilson and the Roots of Modern Liberalism* Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Oxford, 2005, pp 253-265.

acceso de Serbia al mar, lo que fue logrado con su integración en el reino de Serbios, Croatas y Eslovenos. El “principio de umbral” combinado con el reconocimiento del principio nacionalista de la estatalidad originó estados que en su denominación oficial definían de manera compuesta las nacionalidades que las componían: Checoslovaquia, Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (al que popularmente, sin embargo, se conocía como Yugoslavia desde el principio).

Como se hiciera con el disuelto Imperio austrohúngaro, el Imperio otomano también fue desmembrado, como se preveía en el punto XII, identificándose, no obstante, la nacionalidad turca, separada de su identidad imperial otomana, “a las porciones turcas del presente Imperio otomano a las que deberá asegurarse soberanía”. Del mismo modo que nacieron Austria y Hungría, nació la República de Turquía en Asia menor, una Turquía libre del Imperio otomano emergida tras la Guerra de Independencia Turca (mayo de 1919 - julio de 1923), proclamada por la Gran Asamblea Nacional de Turquía el 29 de octubre de 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk.

Las fronteras trazadas en la región tras la Primera Guerra Mundial con el apoyo de Wilson gozaron de cierta estabilidad, salvando la modificación de la posesión de Istria y los recientes cambios tras las guerras de desintegración de Yugoslavia. Eric Hobsbawm recuerda al respecto que “con todo, el sistema *wilsoniano* también produjo algunos otros resultados significativos y no del todo esperados. Primeramente demostró, sin que ello causara gran sorpresa, que el nacionalismo de las naciones pequeñas era tan impaciente con las minorías como lo que Lenin llamó *el chauvinismo de las grandes naciones* (...). Más novedoso, y más significativo, fue el descubrimiento de que la *idea nacional* tal como la formulaban sus paladines oficiales no coincidía por fuerza con la autoidentificación real del pueblo interesado”⁴¹⁴.

Parecida reflexión a la que hiciera Bartuk sobre la fractura de los imperios a lo largo de líneas étnicas puede hacerse acerca de la construcción y destrucción de los estados comunistas. En este sentido Eric Hobsbawm reflexiona: “(...) la definición de «la nación» y sus aspiraciones, que, paradójicamente, Lenin compartía con Woodrow Wilson, creó de forma automática las líneas de fractura a lo largo de las cuales se romperían las unidades multinacionales construidas por los estados comunistas, del mismo modo que las fronteras coloniales de 1880-1950 formarían las fronteras de los estados poscoloniales, toda vez que no había otras. (La mayoría de sus habitantes no sabían qué eran las fronteras, o no les hacían caso.) En la Unión Soviética podemos ir más lejos: fue el régimen comunista quien deliberadamente se propuso crear «unidades administrativas nacionales» de signo etno-lingüístico y territorial, es decir, «naciones» en el sentido moderno de la palabra, donde antes no existían o no se pensaba en ellas, como entre los pueblos musulmanes de Asia o, para el caso, los bielorrusos”⁴¹⁵.

Así, a pesar de las disensiones ideológicas obvias entre Lenin y Wilson, como veremos, ambos compartían algunas características que hicieron posible la extensión de la autodeterminación como se entendía entonces como criterio para la estatalidad, en particular, por un lado, el historicismo del progreso de las naciones y, por otro, la conveniencia de la delimitación etnocultural de las fronteras-, a lo que se refiere Hobsbawm cuando llama la atención sobre la común “definición de la nación y sus

⁴¹⁴ Hobsbawm, E. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Crítica. Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998. 1998, p. 144

⁴¹⁵ Hobsbawm, E. *Naciones y nacionalismo...*, op. cit., p. 176

aspiraciones” de ambos líderes.

Veamos a continuación la construcción teórica del principio de autodeterminación que se había dado paralelamente en la tradición socialista, a partir del influyente Vladimir Ilić *Lenin*.

La cuestión de la autodeterminación había sido tratada profusamente en círculos socialistas con anterioridad, como hemos visto, con las reflexiones de Marx, Engels, Kautsky y Otto Bauer. En el seno de la Segunda Internacional la autodeterminación, objeto de intenso debate, la autodeterminación de los pueblos fue finalmente declarada con su denominación actual, “derecho de autodeterminación” (*Selbstbestimmungsrecht*) en el Congreso Internacional Socialista de Trabajadores y Cámaras Sindicales Obreras organizado en Londres entre los días 26 y 31 de julio de 1896.

La aplicación del derecho de autodeterminación y su encaje en la teoría marxista no estuvo, sin embargo, ni mucho menos exenta de polémica. La posición de Lenin, tan influyente tras la Primera Guerra Mundial, no surgió incontestada en los círculos marxistas y merece ser mencionado que el líder socialista había sostenido diversas discusiones en torno al tema con figuras del socialismo contemporáneo como Rosa de Luxemburgo, o el líder de los socialistas ucranianos Lev Rybalka. Frente a las interpretaciones restrictivas del derecho de autodeterminación, bajo la excusa de no apoyar a las burguesías locales, o interpretaciones del derecho de autodeterminación como un derecho más cercano a derechos culturales de minorías que a un derecho a la secesión política, Lenin propone una interpretación amplia, el derecho de autodeterminación de todos los pueblos por igual, entendiendo tal autodeterminación como derecho a la secesión o independencia política.

El impulso al derecho de autodeterminación de los revolucionarios socialistas cristalizó en la Declaración de los Derechos para los Pueblos de Rusia del 2 de noviembre de 1917, en la que el gobierno bolchevique proclamaba la igualdad y autodeterminación incluido el derecho a la secesión de los pueblos. Esta declaración fue firmada por Lenin, que por aquel entonces había ya mostrado su firme apoyo al derecho de autodeterminación en varios escritos desde 1913, incluido su *El derecho de las naciones a la autodeterminación* de 1914⁴¹⁶ y por Stalin, que también había publicado en 1913 sobre la

⁴¹⁶ En 1913, Lenin había publicado las breves notas *Los cadetes* y “*El derecho de las naciones a la autodeterminación*” (Lenin, V. I. *Proletarskaya Pravda*, 4, 11 de diciembre, 1913. Lenin Collected Works, vol. 19, Progress Publishers, 1977, Moscú. Pp 525-527), *El nacional-liberalismo y el derecho de las naciones a la autodeterminación* (Lenin, V. I., *Proletarskaya Pravda*, 12, 20 de diciembre de 1913. Lenin Collected Works, Progress Publishers, vol. 20, Moscú, 1972, Pp 56-58), *Novoye Vremya y Rech sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación* (*Proletarskaya Pravda*, 16, 25 de diciembre de 1913. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Vol 20, Moscú, 1972, Pp 65-66.).

En 1914 publicó su fundamental *El derecho de las naciones a la autodeterminación* (Lenin, V.I. *Prosveshcheniye* Nos. 4, 5 y 6. Abril-junio, 1914, vid. Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Vol 20, Moscú, 1972, Pp. 393-454) un texto más elaborado en el que expone las principales líneas de su pensamiento. El mismo año publicó la nota *Corrompiendo a los trabajadores con nacionalismo refinado* *Put Pravdy* No. 82, 10 de mayo de 1914 (*Lenin Collected Works*, Progress Publishers, Vol. 20, Moscú,

cuestión⁴¹⁷ y llegó a presidir desde 1918 a 1922 el Comisariado Popular de las Nacionalidades (*Narkomnats*), parte del Consejo de Comisarios del Pueblo⁴¹⁸.

El derecho a la secesión fue incorporado en la Constitución de 1918 de la República Socialista Federativa Soviética y luego en la Constitución de la Unión Soviética de 1924 y en las otras dos constituciones posteriores, de 1936 y de 1977. El artículo 4 de la Constitución Soviética de 1924 establecía claramente que “cada una de las Repúblicas mantiene el derecho de retirarse libremente de la Unión”. El equivalente artículo 72 de la Constitución soviética de 1977 fue aplicado para la disolución de la URSS.

Notemos que el derecho a la autodeterminación, entendido como derecho a la secesión por Lenin, podía ser ejercido constitucionalmente por las repúblicas, esto es por las unidades administrativas establecidas, dando por supuesto que el principio de nacionalidad ya había sido satisfecho con esa delimitación geográfico-administrativa, asumiendo también en cierto sentido la equivalencia o identidad pueblo-territorio –si bien había reconocimiento también para minorías-. La equivalencia entre secesión y autodeterminación en el pensamiento de Lenin, que tanto influyó en la conformación político constitucional de la Unión Soviética y en su aproximación a la realidad internacional (que pasó de una *Revolución Permanente* hasta el *Socialismo de un sólo país* a partir de 1925) no puede, sin embargo, pasar sin ser matizada y debidamente contextualizada, tanto en el pensamiento marxista como en la situación histórica.

El *Decreto sobre la Paz* promovido por Lenin y aprobado por el Congreso de Soviets de Diputados Obreros, Campesinos y Soldados de Rusia el 8 de Noviembre de 1917 (Wilson lo respondería con sus *Catorce Puntos* sólo un par de meses después) recogía específicamente el rechazo a las políticas anexionistas imperiales.

“(…) el Gobierno entiende -conforme a la concepción del derecho de la democracia en general y de las clases trabajadoras en particular- toda incorporación a un Estado grande o poderoso de una nacionalidad pequeña o débil, sin el consentimiento o deseo formales, clara y libremente expresados por esta última, independientemente de la época en que esta incorporación violenta haya sido efectuada, **independientemente también del grado de desarrollo o retraso de la nación anexionada** o retenida por fuerza en los límites del Estado en cuestión; independientemente, en fin, del lugar donde esta nación resida, en Europa o en los lejanos países transoceánicos”.

1972, pp. 289-291).

Posteriormente, Lenin escribió en 1915 *El proletariado revolucionario y el derecho de las naciones a la autodeterminación* publicado en 1927, (Lenin Collected Works, Progress Publishers, Vol 21, Moscú, Pp 407-414.) y el mismo año 1915, *La socialdemocracia alemana y el derecho de las naciones a la autodeterminación*, un texto publicado en 1937 que es seguramente, tan sólo el comienzo de un artículo que Lenin nunca llegó a concluir. En 1916 Lenin escribió *La Revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación*, escrito entre enero y febrero de 1916 □ y publicado en 1937 (Vid. Lenin, V.I. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Vol. 41, Moscú, 1977, P. 366)

⁴¹⁷ Stalin, J., “Marxism and the national question”. Originalmente publicado en *Prosveshcheniye*, Nos. 3-5, marzo-mayo, 1913. Transcripción de Kavanagh, C. Puede consultarse en “Marxists Internet Archive”, <http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm>

⁴¹⁸ Smith, J., “Stalin as Commissar for Nationality Affairs, 1918–1922”, Davies, S., Harris, J., (eds). *Stalin: a new history*. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 45 y ss.

Para aquel entonces, como hemos apuntado, Lenin ya había desarrollado su posición en torno al derecho de autodeterminación, una posición ideológica que era además compatible con los intereses de Rusia (y de la revolución socialista), que reganaría control sobre los territorios perdidos a favor de las potencias centrales en virtud de los términos del Tratado Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918. Lenin también había desarrollado respecto a Marx y Engels un enfoque más centrado en el fenómeno amplio del colonialismo y del imperialismo, lo que no le impedía afirmar que sólo el análisis de las circunstancias de cada caso concreto podrían definir la conveniencia y forma del derecho de autodeterminación, postura clásica en los autores socialistas.

El estudio del caso concreto permitía asegurar la supeditación de la aplicación de la autodeterminación al ideal socialista, a los intereses de la clase proletaria. Resaltemos, por tanto, que dicha supeditación estaba justificada no sólo porque los intereses de clase de los trabajadores fueran superiores sino porque instrumentalmente la solidaridad proletaria serviría de llave para solucionar el problema nacional, lo que sería resumido por Stalin —que en esto seguía a Lenin— en su conclusiva última frase de su ensayo sobre *El Marxismo y la cuestión nacional*: “el principio de la solidaridad internacional de los trabajadores es un elemento esencial en la solución de la cuestión nacional”⁴¹⁹.

La clase trabajadora deberá estar atenta, sin embargo, en no caer en lo que para Lenin son las trampas manipuladoras de la burguesía, que trata de utilizar la nación para su beneficio. En la nota, de 1914, *Corrompiendo a los trabajadores con nacionalismo refinado*, por ejemplo, Lenin reafirma la voluntad unificadora del respeto a los pueblos iguales : “(...) los trabajadores conscientes de clase (...) apoyan la *igualdad de las naciones e idiomas*, pero también la *amalgama* de los trabajadores de diferentes nacionalidades en organizaciones de proletarios *unidos* de todo tipo”.

El profesor Antonio Cassese concluye que tanto Lenin como otros líderes soviéticos consideraban que la autodeterminación constaba de tres componentes: como capacidad de grupos étnicos o nacionales para decidir libremente su destino, como principio o criterio para decidir la redistribución de territorios tras un conflicto armado entre estados y, tercero, como un postulado alrededor del cual articular el proceso de liberación de las colonias. Para Cassese, mientras que el segundo está relacionado con los principios liberales presentes ya en la Revolución Francesa, los otros dos revestían cierta novedad⁴²⁰.

En *El derecho de las naciones a la autodeterminación*⁴²¹ publicado en 1914, Lenin había expuesto las líneas básicas de su pensamiento sobre el asunto. Partiendo de la concepción

⁴¹⁹ Stalin, J., “Marxism and the national question”. Originalmente publicado en *Prosveshcheniye*, Nos. 3-5, marzo-mayo, 1913. Transcripción de Kavanagh, C. Puede consultarse en “Marxists Internet Archive”, <http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm>

⁴²⁰ Cassese, A. *Self-Determination of peoples: a legal reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 16.

⁴²¹ Lenin, V.I. “El derecho de las naciones a la autodeterminación”. *Prosveshcheniye* Nos. 4, 5 y 6. Abril-junio, 1914, (vid. Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Vol 20, Moscú, 1972, Pp. 393-454). Puede consultarse en Marxists.org. Los siguientes entrecomillados se refieren a esta nota.

de inexorable progreso histórico marxista, Lenin considera una etapa inevitable la victoria completa del capitalismo sobre el sistema feudal: “la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada en todo el mundo a movimientos nacionales”. Para esta victoria es necesaria la conquista del mercado interior, lo que se alcanza a través de la cohesión estatal a través del idioma y la literatura. Así, “Los estados nacionales (...) son los que mejor cumplen estas exigencias del capitalismo contemporáneo”. La autodeterminación sería la existencia política independiente de estos grupos etnolingüísticos con sus propios mercados: “por autodeterminación se entiende su separación de las colectividades de otra nación, se entiende la formación de un estado nacional independiente”. La autodeterminación política de las naciones es para Lenin indistinguible de la independencia económica. Considera un fenómeno global que la realización de la independencia política y económica nacional independiente de los estados naciones impulsan una forma capitalista burguesa: “El estado nacional es el que ofrece, sin duda alguna, las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo”.

Respecto a este punto, Lenin recuerda la evolución política histórica reciente de los Balcanes. “El ejemplo de los Estados balcánicos [muestra que] a medida que se crean en esta península Estados nacionales independientes se van dando las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo en ella”.

No podemos desligar la concepción leninista, por tanto, de su concepción en la dinámica histórica materialista de la creación del estado nacional como fase del desarrollo capitalista. Precisamente por ello Lenin remarca que la clase proletaria apoyará o no la reivindicación burguesa del estado nacional no de manera absoluta, sino de acuerdo y de manera supeditada a sus intereses de clase. Esto implica el análisis coyuntural y estratégico de cada proceso de construcción nacional: “la política del proletariado en el problema nacional (...) sólo apoya a la burguesía en una dirección determinada, pero nunca coincide con su política. La clase obrera sólo apoya a la burguesía (...) en beneficio de la igualdad de derechos”.

Ahora bien, esto no quiere decir que la cuestión nacionalista fuera para Lenin exclusivamente económica, y subraya el aspecto político de la revolución social, aspecto condicionado por la herencia histórica, lo que refuerza la aproximación casuística para la resolución de los problemas nacionales.

Esta posición estratégica no era considerada, sin embargo, “pragmática” por Lenin, muy al contrario, sino una posición de principios alejada del oportunismo de los intereses, justificándola así con un argumento de que recuerda al anclaje moral deontológico kantiano, intentando superar la mera persecución de intereses. El principio respecto a la practicidad reside, según Lenin, en precisamente superar ese juego de espejos de la reivindicación nacional: no se trata de apoyar o no la separación en sí, sino en apoyar siempre los intereses del proletariado. La posición de Lenin, en línea con la argumentada por Marx y Engels, advierte, por tanto, que la mera creación de un estado nuevo no garantiza nuevos derechos, punto fundamental en la discusión general del derecho de autodeterminación:

“Teóricamente no puede garantizarse de antemano que la separación de una nación determinada o su igualdad de derechos con otra nación ponga término a la revolución democrática burguesa. Al proletariado le importa, en ambos casos, garantizar el desarrollo de su clase; a la burguesía le importa dificultar este desarrollo, supeditando las tareas de dicho desarrollo a las tareas de “su” nación. Por eso el proletariado se limita a la reivindicación negativa, por así decir, de reconocer el derecho de autodeterminación sin garantizar nada a ninguna nación ni comprometerse a dar nada a expensas de otra nación”.

Es fundamental para entender la conciliación entre la autodeterminación de los pueblos y los intereses de la clase proletaria en el pensamiento de Lenin la igualdad entre las naciones y la sensibilidad hacia el estado fáctico de desarrollo de los otros. Mientras que la burguesía usa la nación en su propio beneficio, la clase trabajadora buscará la satisfacción de todas las naciones: “la burguesía de cada nación necesita garantías de sus ventajas, sin tener en cuenta la situación de otras naciones”.

Esta igualdad es recalcada en varias ocasiones por Lenin, para quien el nacionalismo no es un concepto sinónimo de autodeterminación de los pueblos, sino la íntima creencia de la superioridad de un (propio) pueblo respecto a otro. Por ello recalca que los proletarios “enemigos de todo nacionalismo, exigen la igualdad abstracta”.

Por esta razón, puede resultar llamativa, si no se interpreta correctamente, esa difícil relación entre propugnar la autodeterminación de los pueblos y la oposición radical al nacionalismo que hace Lenin, para quien la satisfacción del derecho de autodeterminación no se puede alcanzar “sin luchar contra todos los nacionalismos y sin propugnar la igualdad de todas las naciones”.

Para Lenin, el respeto a la igualdad de los pueblos y a su derecho a la autodeterminación entendida como secesión conlleva, en la práctica, no tanto la secesión efectiva sino, eventualmente, una unión más estable, precisamente por estar basada en justos términos. La clave está en el adecuado equilibrio del reparto de bienes materiales que determinan la realidad política: “Las masas de población saben perfectamente, por la experiencia cotidiana, lo que significan los lazos geográficos y económicos, las ventajas de un gran mercado y de un gran Estado y sólo se decidirán a la separación cuando la opresión nacional y los roces nacionales hagan la vida en común absolutamente insoportable, frenando las relaciones económicas de todo género”.

Maticemos que si bien Lenin consideraba la autodeterminación como secesión política y no era partidario de la autonomía cultural nacional (como propuesta por Bauer en el contexto austriaco y otros), descalificada por él como aproximación burguesa al problema de las minorías nacionales, también consideraba que eventualmente, con el devenir histórico, las diferencias irían desapareciendo y veía aceptable, como signo de progreso, la asimilación cultural, voluntaria, eso sí, de las minorías en el torrente cultural de las mayoría. De manera relacionada, la secesión de pequeños territorios era admitida en teoría por Lenin, en su convencimiento de la conveniencia en el mercado mayor, la secesión siempre vendría acompañada de una reconcentración en un mercado mayor pero bajo criterios democráticos no opresivos.

Stalin recogería, más en su aproximación teórica que en la práctica, las idea de Lenin de

que el triunfo comunista arrinconaría y superaría históricamente el nacionalismo en cuanto fenómeno burgués. En la práctica, sin embargo, como es bien conocido, el nacionalismo (en el sentido chauvinista que denunciara Lenin) pervivió y creció de parecido modo en los países comunistas, lo que obligo a una revisión de las tesis clásicas marxistas a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX.

Para Stalin, la redacción en 1913 de su ensayo *El marxismo y la cuestión nacional*⁴²², texto muy elogiado en su día por Lenin, supuso la fama de gran conocedor del problema nacional en Rusia, lo que le abrió las puertas del Comisariado de las Nacionalidades, punto de partida de su imparable ascenso político. En dicho ensayo, Stalin define nación como: “Una nación es un comunidad de personas estable, históricamente constituida, formada sobre la base de una lengua común, territorio, vida económica, y características psicológicas manifestadas en una cultura común”.

Todas estas características eran necesarias e interdependientes para la conformación de una nación en la concepción estalinista. La proyección territorial es específicamente defendida por Stalin para distinguir, como él dice, la nación de la tribu, de la concepción étnica de nación, especialmente a la hora de aproximarse a la cuestión judía o gitana. Resulta llamativo asimismo que Stalin no mencionara, como si hicieran los voluntaristas antes que él, el elemento subjetivo de la voluntad más allá del psicológico-cultural, esto es, que una nación se considere a sí misma una nación. Así para él la existencia de una nación es definida por una serie de elementos o características externamente observables y objetivamente verificables, lo que no implicaba, necesariamente, su eventual mutabilidad histórica.

En la práctica política, como recordaba el norteamericano marxista Horace B. Davis, Stalin se fue alejando de manera patente de las propias posiciones teóricas hasta “pervertir las políticas sobre la nacionalidad de Lenin, tan groseramente como para ser privado de poder ser llamado leninista”, a pesar de que Stalin siempre hablara de su teoría como coherente con la visión leninista⁴²³ -probablemente por meros intereses propagandísticos-. La teoría nacionalista, como era entendida por Stalin, pasó a formar parte del discurso oficialista en la Unión Soviética, hasta el punto de que “aquellos que persistían en expresar toda explotación en términos de clase corrían el peligro de ser acusados de no-marxistas”⁴²⁴. A pesar de las divergencias entre los líderes en torno a la cuestión, su especial preocupación y sensibilidad hacia la cuestión nacional como problema político a resolver coadyuvó, según Davis, a la consolidación de la revolución bolchevique y a la construcción de la Unión Soviética.⁴²⁵

En el período de entreguerras, por tanto, el principio de autodeterminación de los pueblos recibió un importante impulso a nivel internacional. Apoyado igualmente por Estados Unidos y por la Unión Soviética, y utilizado como criterio para la reordenación política

⁴²² Stalin, J., “Marxism and the national question”, op. cit.

⁴²³ Davis, H.B., *Toward a Marxist Theory of Nationalism*. Monthly Review Press, New York, London, 1978, p 82.

⁴²⁴ Davis, H.B., *Toward a Marxist...*, op. cit. p. 83.

⁴²⁵ Davis, H.B., *Toward a Marxist...*, op. cit. p. 88.

de las potencias perdedoras de la guerra, se convirtió así en un nuevo paradigma prácticamente indiscutible.

El apoyo al principio de autodeterminación se entendió generalmente como la coincidencia de fronteras políticas de los grupos étnicos o culturales lo que conllevó un impulso de legitimidad de los movimientos nacionalistas de distinta intensidad y naturaleza. En palabras de Kohn “el nacionalismo fue considerado una panacea para resolver todos los problemas”⁴²⁶ y el derecho a la autodeterminación, podemos añadir, se convirtió en la traducción jurídica de este fenómeno.

Los antiguos imperios centrales se descomponían en líneas nacionales y sólo los imperios aliados en la Primera Guerra Mundial, como el Imperio Británico, se resistían al avance del principio de autodeterminación entendido en su sentido más amplio, pero incluso esta resistencia se reveló débil. El nuevo paradigma sirvió de fuelle para la Revolución de Egipto de 1919 liderada por Saad Zaghlul y sus compañeros del partido Wafd en 1919 contra la ocupación británica de Egipto y Sudán, para la Rowlatt Satyagraha (resistencia iniciada por Gandhi el 6 de abril de 1919 contra la conocida como Rowlatt Act de 10 de marzo de aquel año que extendía indefinidamente las medidas de emergencia de la Defence of India Regulations Act en vigor durante la Primera Guerra Mundial) y que llevaría eventualmente a la independencia de India. Los movimientos de independencia se extendieron, como son muestra también el movimiento Cuatro de Mayo, también conocido como Movimiento Nueva Cultura, esas protestas de los estudiantes en la Plaza de Tian'anmen en 1919 como protesta contra los términos del Tratado de Versalles (a pesar de haber estado con los aliados los términos no eran favorables para China) que fueron marcadas por el surgimiento del nacionalismo chino, o el levantamiento del Primero de Marzo de 1919 (Movimiento de Independencia de Samil) en el Parque Pagoda de Seúl para proclamar la independencia de Corea del colonialismo japonés. El auge del etnicismo como principio político relacionado con la autodeterminación se extendió así tanto en países socialistas, colonias, como en las democracias liberales.

Sirva como muestra que, en los Estados Unidos, -clásico ejemplo junto con Francia del llamado nacionalismo civil frente al étnico- fue aprobada la *Indian Reorganization Act* en 1934, lo que da una idea del clima comunitarista del momento. Tal ley pretendía la protección de los nativos americanos, reforzar su autonomía (las reservas ya existían) y frenar el proceso de privatización de tierras comunales propiciado por la *General Allotment Act* de 1887, en una línea coherente con la autodeterminación de las pueblos en la concepción de entonces, haciendo coincidir el criterio étnico con las fronteras de autodeterminación política en el interior de los Estados Unidos (cierto que no como frontera internacional o plena soberanía, pero si como definitoria de la capacidad para manejar un presupuesto). El criterio para ser afectado por la norma era étnico en su manifestación extrema, biológico racial, regulándose el porcentaje de sangre indígena necesario para poder pertenecer a tal o cual comunidad política y, por tanto, poder decidir sobre las normas de la comunidad y sus presupuestos (todavía, a día de hoy, es necesario

⁴²⁶ Kohn, H., *Nationalism: its meaning and history*. Robert E. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, 1965, pp. 81 y 82.

tener 1/8 de sangre apache para participar en la vida política de esa comunidad, lo que ha implicado obvios problemas en la práctica y teoría jurídica).

A lo largo del período de entreguerras, la etnicidad como criterio de definición de la unidad política ganó progresivamente apoyos por encima de los valores democráticos o socialistas, que antes habían servido como requisitos *sine qua non*. La autodeterminación democrática de Wilson o Mazzini o la autodeterminación supeditada al socialismo de Lenin fueron dejando paso a la autodeterminación deslimitada, a la supeditación absoluta de los principios demócratas en su expresión liberal o socialistas a la conformación política del ideal de estado-nación. No es baladí contextualizar este proceso en el marco de la brutal crisis económica de la Gran Depresión, la evolución social de creciente adhesión popular a los movimientos nacionalistas pudo observarse desde la tolerancia a los grupúsculos radicales cuyo crecimiento fue visto con ingenua miopía desde el final de la Primera Guerra mundial hasta el final asentamiento en el poder de los movimientos fascistas en los años treinta.

El Partito Nazionale Fascista italiano nació en 1921 del movimiento Fasci Italiani di Combattimento. Los fundamentos de su programa se hacían eco de la tradición misticista de los nacionalistas primordialistas decimonónicos, asegurando que la nación no es “la simple suma de los individuos vivos”, sino una “síntesis suprema de todos los valores materiales e inmateriales de la stirpe”, una enredada manera de someter el individuo al colectivo y proyectar esta sumisión en lo político-jurídico: “El Estado es la encarnación jurídica de la Nación”⁴²⁷. El fascismo italiano influyó notablemente en otra serie de movimientos y regímenes por todo el mundo (que se autodenominaban de distinto modo). El fascismo español, igualmente caracterizado por un enardecido chauvinismo, dejaba también clara la supeditación todos los intereses (y derechos individuales) al colectivo nacional, la nación como ente claramente diferenciado y ajeno de los individuos que la componen. En el primero de los veintiséis puntos del programa de Falange Española de las J.O.N.S se podía leer: “Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esa tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. (...)”. La supeditación de los derechos individuales se exigía en nombre de la libertad, de esa concepción de libertad que hemos apuntado antes, esa libertad como mera independencia política de una concepción primordialista de nación y no como la libertad democrática wilsoniana. Baste recordar aquel apunte de Carl Schmitt, simpatizante del nacionalsocialismo, respecto a la Guerra Civil española, sobre la que el autor alemán diría: “(...) en aquellos años España estaba defendiéndose en una *guerra de liberación nacional* de ser conquistada por el comunismo internacional”⁴²⁸. También el régimen de António de Oliveira Salazar (1933-1974) inaugurado tras las dictaduras que habían suspendido la Constitución de 1911 (1926-1928 y 1928- 1933) presentaba similares características. La influencia del fascismo italiano y los socialismos nacionalistas militaristas autoritarios se extendió a muchos

⁴²⁷ “Programma del Partito Nazionale Fascista”. *Instoria. Rivista online si storia e informazione*. Disponible en http://www.instoria.it/home/programma_partito_nazionale_fascista.htm

⁴²⁸ Schmitt, C. *Theory of the Partisan: a commentary/remark on the concept of the political*, Duncker & Humblot, Berlin, 1963. Ed. inglés. Michigan State University Press, 2004, p. 39.

otros países de todo el mundo, bien por influencia ideológica, bien por fuerza. Buena prueba son el partido de Cruz Flechada de Ferenc Szálasi, en Hungría (fundado como Partido da Vontade Nacional en 1935), la Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado o las Falanges (Kataeb), fundado por Pierre Gemayel en Líbano en 1936, por mencionar algunos.

También en los Balcanes se extendió la nueva doctrina política. El Partido Fascista Albanés (Partia Fashiste e Shqipërisë) fue fundado en 1939 tras la conquista de Italia. El partido de los Ustaše de los croatas fundado en 1929 bajo el liderazgo de Ante Pavelić fue muy influenciado también por el fascismo de Mussolini, adaptando su retórica, claro está, a las características sociohistóricas locales.

El fascismo apoyaba su nacionalismo tanto sobre la raza y la concepción étnica de la nación como sobre la idea de imperio, (el punto 3 del programa de la Falange afirmaba, por ejemplo, que “tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio”, el artículo 25 de los Estatutos da *União Nacional* portuguesa establecía el “fomento de la colonización correspondiente al destino de su Imperio”⁴²⁹), asumiendo que la superioridad etnocultural de la nación/estado propia confería legitimidad para someter a otras.

El *destino* de la nación en lo universal, esa proyección del pasado (glorioso) en un futuro que necesariamente tiene que suceder, y ante el cual una vez más los derechos deben plegarse, concepto de fuerte presencia en el ideario fascista, denota la fuerte influencia del historicismo de Hegel, Marx, Spengler, Croce o el fascista Giovanni Gentile y que, ya en 1920, Karl Popper criticara en su clásico *Misericordias del historicismo*.

El nacionalsocialismo alemán utilizó, además, el argumento de la autodeterminación de los pueblos, utilizando precisamente ese término.

Antes de analizar qué entendió el nacionalsocialismo por autodeterminación en comparación con otras concepciones anteriores y contemporáneas, recordemos que se dio durante el proceso de entreguerras un proceso de radicalización social facilitado por una profunda crisis económica que permitió un clima político que pasó de la aceptación popular de plebiscitos para solucionar cuestiones nacionales a la guerra, que pasó de someter la idea de nación a criterios democráticos a ponerla por encima de todo.

En la nortea región de Schleswig-Holstein, disputada por alemanes y daneses, donde de forma muy destacada, como recuerda Eric Hobsbawm, “desde el decenio de 1840 la lengua había empezado a desempeñar un papel significativo en los conflictos territoriales internacionales, (...) aun cuando antes del siglo XIX los estados no habían utilizado argumentos lingüísticos para respaldar sus pretensiones territoriales”⁴³⁰, se había celebrado, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, un plebiscito para solucionar la

⁴²⁹ Decreto nº 21608. *Diário do Governo*, Número 195, 20 de agosto de 1932. Puede consultarse en la página web del *Diário da República*. <http://dre.pt/pdf1sdip/1932/08/19500/17531756.pdf>

⁴³⁰ Hobsbawm, E. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Barcelona: Crítica. Grijalbo Mondadori, 1998, p. 107

cuestión nacional. En el norte de Schleswig, el plebiscito se celebró el 10 de febrero de 1920, con un resultado de 75% de los votos a favor de la reunificación con Alemania. En el centro de Schleswig, la consulta se realizó un mes más tarde, el 14 de marzo, y el 80% de los votos, casi todos concentrados en la costera ciudad de Flensburg, fueron en favor de pertenecer a Alemania. En el sur nunca llegó a celebrarse el plebiscito previsto. Fue Schleswig-Holstein, región de mayoría rural y protestante, por cierto, la que contempló un mayor ascenso del partido nacionalsocialista a medida que los efectos de la crisis económica afectaban más intensamente a la población.

Unos años después, ya en 1938 con la anexión de Austria y la invasión de los Sudetes de Checoslovaquia, ni los plebiscitos, esa democrática manera de expresar el sentir popular apoyado en las tesis de Ernest Renan, ni el respeto a la legislación internacional, eran tan ampliamente considerados necesarios para cumplir con el derecho de autodeterminación. Es bien conocido, y no lo trataremos aquí por exceder nuestro tema, que el triunfalismo o superioridad y el victimismo son las dos caras de la misma moneda en el argumentario nacionalista, que en su extremo político justificaban la mayor fortaleza de un gobierno, la reducción de derechos individuales y el militarismo. Esto tiene relevancia a la hora de considerar el enfoque que dieron los nacionalsocialistas al concepto de autodeterminación de los pueblos, referido especialmente al alemán. Recordemos asimismo que, como argumenta Neuberger, para entonces, “para los nacionalistas alemanes, la libertad consistía en la soberanía nacional y no en la democracia occidental. Cuando los Sudetes alemanes en 1938 apoyaron masivamente un regreso del Reich en el nombre de la autodeterminación nacional, ellos de hecho optaron por dejar la democrática Checoslovaquia, donde tenían todos los derechos democráticos, para unirse a la Alemania nazi de Hitler. Para ellos, la autodeterminación nacional significaba ser gobernados por hermanos alemanes más que vivir en un estado democrático”⁴³¹.

Para entender la tergiversación del derecho de autodeterminación por los nacionalsocialistas podemos volver la mirada, y analizar cuidadosamente el Programa de los 25 Puntos del Partido, leídos por Hitler el 24 de febrero de 1920 en la Hofbräuhaus de Múnich, en un mitin del Partido de los Trabajadores Alemanes, que desde aquel momento pasó a llamarse Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores⁴³².

El primer punto de su programa establecía textualmente: “Exigimos la unificación de todos los alemanes en una Gran Alemania sobre la base del derecho de autodeterminación de los pueblos”⁴³³.

El segundo punto proclamaba la igualdad de derechos los pueblos: “el pueblo alemán

⁴³¹ Neuberger, B., “National self-determination: a theoretical discussion”, *Nationalities Papers*, vol.29 n.3, 2001, p. 395.

⁴³² El programa puede ser consultado (en inglés) en la página web de la Universidad de Yale. <http://avalon.law.yale.edu/imt/nsdapappro.asp>
En alemán puede consultarse en la página web del Deutsches Historisches Museum. <http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/>

⁴³³ “1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Deutschland”

tiene iguales derechos que otras naciones (...). Por lo que lógicamente todos los pueblos tendrían, sobre el papel, el mismo derecho de autodeterminación. Esta lógica se rompía con la simultánea apelación retórica a la supremacía nacional, por lo que no es de extrañar que buscaran fundamentos pseudocientíficos históricos y raciales que ayudaran psicoideológicamente a cubrir la falacia. Ahora bien, en su doctrina hay dos características interrelacionadas del derecho de autodeterminación que hay que resaltar: la absoluta identificación estado/pueblo y su proyección territorial.

Para los nacionalsocialistas el derecho de autodeterminación tenía necesariamente una proyección territorial. Por ello en el punto 3 se establecía que “Exigimos tierra y territorio (colonias) para el mantenimiento de nuestro pueblo y el establecimiento de nuestro exceso de población”. Es el conocido *Lebensraum*, ese “espacio vital” cuya ocupación implica, en principio, la conexión tierra-pueblo por encima de las fronteras jurídico-políticas, y segundo, combinado con la supremacía nacional/racial, la posibilidad de desplazar a otros si es necesario. La inclusión del término “colonias” ya daba una idea de la contradicción con la igualdad de pueblos proclamada en el punto 2. Por ello la invasión de Checoslovaquia o Polonia o la llamada a los alemanes de la Slavonia yugoslava a participar en la guerra no puede entenderse sin la concepción de nacionalidad adquirida por *ius sanguis* y el objeto de unificación territorial que, en una justificación supremacista/victimista, no invadía el espacio de otros sino que recuperaba el propio.

El *Lebensraum* se acompañaba ideológicamente de la identificación absoluta nación/estado en un territorio. El hilo argumental nacionalsocialista era el siguiente: en virtud del derecho de autodeterminación, un pueblo (el nuestro) tiene derecho a vivir en un territorio (su territorio) y formar en él un estado, convirtiéndose así en ciudadanos de tal estado. En él (punto 9) “todos los ciudadanos deben poseer iguales derechos y deberes” y, punto 6, “el derecho a elegir el gobierno y determinar las leyes del estado pertenecerán solo a los ciudadanos (...)”. Todos los que no son ciudadanos son extranjeros (punto 5), y si los ciudadanos no tuvieran una “vida digna” los extranjeros deberían ser expulsados para garantizar la vida digna a los ciudadanos (punto 7). Este último punto, por cierto, nos puede indicar la conexión entre el rápido auge ideológico en el contexto de la brutal crisis socioeconómica (proponiendo una nueva redistribución de bienes y derechos típica del discurso revolucionario, en un ambiente de restricción, para atraer a las clases deprimidas, pero reduciendo a la vez de manera populista la base beneficiaria (el nosotros) mediante la crucial eliminación teórica del internacionalismo marxista, reducción que, por su propia perversa lógica interna, exigía la eliminación de demócratas, liberales, internacionalistas, o los no étnicamente alemanes residentes en el territorio).

La tergiversación del derecho de autodeterminación tiene su origen general en que la realización de un ideal de la imaginación, en este caso la proyección futura imaginaria de una sociedad (ideología) uniforme, monoétnica, con una base de redistribución de riquezas reducida, y económicamente próspera para sí, no es siempre compatible con las premisas de la razón. La compatibilización exigía necesariamente la elaboración de intrincadas falacias.

Bien conocida es la absoluta etnificación política, en la radicalización del *jus sanguinis*:

sólo los de cierto grupo étnico o racial (en este caso alemán) podían ser ciudadanos. El punto 4 del programa nazi establecía claramente que “sólo un miembro de la raza puede ser un ciudadano. Un miembro de la raza sólo es uno que es de sangre alemana. Consecuentemente ningún judío puede ser miembro de la raza”. La justificación racista no intenta evitar la idea de que todos los ciudadanos son iguales, sino redefinir al ciudadano, y no pudiendo contravenir este axioma, bastaba con reducir quién era ciudadano. Si para admitir extranjeros y otorgar la nacionalidad no es infrecuente que se exija aún hoy el *jus sanguinis*, basta aplicar, en la falacia final, tal principio a personas que *ya eran ciudadanos* en el territorio. Esto por supuesto trae como consecuencia, no la negación de nuevos derechos, como sucede cuando un extranjero decide asentarse en un nuevo país, sino la reducción de los derechos de ciudadanos. El criterio absoluto del *jus sanguinis* así aplicado tiene, por supuesto, unas consecuencias desastrosas en una sociedad donde culturalmente existían grupos nacionales, como judíos o romaníes, cuya identidad nacional no se entendía necesariamente adscrita a un territorio concreto, sino a la adscripción étnica, transmitida familiarmente, sin que esto interfiriera con su capacidad para cumplir perfectamente, obviamente, con sus deberes ciudadanos. La justificación de la persecución etnoracista a través del concepto de ciudadanía fue en su lógica interna la misma a aquella que más tarde usaría el régimen del Apartheid sudafricano: basándose en las reservas creadas por los británicos durante el diecinueve se establecieron unos “estados” dentro del país, los “batustanes”, territorios asignados a determinados grupos étnicos, como vemos otra vez coincidiendo absolutamente territorio/etnia. Así el racismo se justificaba contra los negros, no por ser de distintas etnias o razas sino por no ser “ciudadanos”.

Como recuerda Rogers Brubaker, la ilusión de hallar la “gran arquitectura” definitiva como solución a los problemas relativos a las cuestiones nacionales, esto es, el convencimiento de que encontrar la reorganización adecuada del espacio político a lo largo de líneas étnicas en un determinado esquema preconcebido satisfaría los movimientos nacionalistas y proporcionaría por sí misma paz y estabilidad, se probó en este caso, como en tantos otros, decepcionante. En los albores de la Segunda Guerra mundial, la controvertida aceptación inicial de las nuevas fronteras alemanas solo llevaron a un reposicionamiento de las pretensiones del Tercer Reich:

“Es una verdad incómoda que, alrededor del año del acuerdo de Múnich de 1938, el desmembramiento de Checoslovaquia por la separación de los territorios de los Sudetes alemanes del resto del país era presentada y justificada en Gran Bretaña –y no solo en Alemania- en nombre de la autodeterminación nacional”⁴³⁴.

La Sociedad de Naciones no consiguió hacer efectiva una posición internacional definitiva a la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación no se encontraba en el tratado constitutivo de la Sociedad de Naciones y fue considerado, sobre todo, un principio político general más que una norma de Derecho Internacional. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no tuvo más remedio que reflexionar acerca del mismo, habida cuenta de las cuestiones territoriales planteadas tras

⁴³⁴ Brubaker, R., “Myths and misconceptions in the study of nationalism”, Moore, M., (ed). *National self-determination and secession*. Oxford University Press, 1998, p. 236 y nota 6 al pie de página, p. 261.

el Tratado de Versalles, como la que hemos visto anteriormente, respecto al caso Schleswig-Holstein.

En el estudio de la evolución del derecho de autodeterminación, es relevante el caso de las Islas de Åland, territorio bajo soberanía finesa pobladas por minoría lingüística sueca. Recordemos que tras la independencia de Finlandia de Rusia, el 6 de diciembre de 1917, se produjo un movimiento en Åland con amplio apoyo en las islas de anexión a Suecia. El mismo derecho que invocaba Finlandia era invocado por los alandeses, lo que ha hecho de este caso ejemplo de lo que muchos autores denominan fenómeno de la “muñeca rusa”. En 1919, representantes de Åland en la conferencia de paz en París expresaron su voluntad de integrarse en Suecia “sobre la base del derecho a la autodeterminación de los pueblos como enunciado por el Presidente Wilson”⁴³⁵.

En 1920, las tropas finesas enviadas a las islas arrestaron a dos líderes alandeses, que fueron acusados de traición⁴³⁶. La cuestión fue sometida al escrutinio de la Sociedad de Naciones, que en 1921 declaró la soberanía de Finlandia sobre las islas, pero garantizando la autonomía política y cultural de Åland incluyendo el derecho de utilizar el idioma sueco sin limitaciones.

El Informe del Comité de Relatores de la Sociedad de Naciones estableció lo siguiente:

“(…) el principio [de autodeterminación] no es, propiamente hablando, una norma de Derecho Internacional (…) es un principio de justicia y de libertad (…) Conceder a las minorías, ya sean de lengua o religión, o a cualquier fracción de una población, el derecho a retirarse de una comunidad a la que pertenecen, por su deseo o su buena voluntad, destruirían el orden y la estabilidad en los Estados e inaugurarían la anarquía en la vida internacional”⁴³⁷.

La posición de la Sociedad de las Naciones del principio de autodeterminación entendido como secesión se enmarcaría dentro de lo que Allan Buchanan llamaría hoy en día teoría de un derecho sólo de remedio (*remedial right only*):

“(…) la separación de una minoría del Estado del que forma parte y su incorporación a otro Estado solo puede ser considerado como una solución excepcional, un último recurso cuando el Estado carece de voluntad o de poder para promulgar y aplicar garantías justas y efectivas [de libertades religiosas, lingüísticas y sociales]”⁴³⁸.

⁴³⁵ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*. Kluwer Law International. The Hague, London, New York, 2002, p. 328.

⁴³⁶ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law”, *International Journal on Minority and Group Rights*, N.12, 2005, p. 338.

⁴³⁷ Consejo de la Sociedad de Naciones, Informe del Comité de Relatores B7/21/68/106[VII]27-28. 1921. Extracto en Smith, Rhona K. M., *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 2007, p. 256.

Para más detalle, puede consultarse Barros, J., *The Åland Islands question: its settlement by the League of Nations*, New Haven, Yale University Press, 1968.

⁴³⁸ Consejo de la Sociedad de Naciones, Informe del Comité de Relatores B7/21/68/106[VII]27-28. 1921. Extracto en Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*. Kluwer Law International. The Hague,

Concluamos, por tanto, que el período de entreguerras se caracterizó por el auge del derecho de autodeterminación como nuevo paradigma de Derecho Internacional, entendido, sin embargo, de las más variopintas maneras pero bajo la misma denominación, ampliamente aceptado y defendido, cada uno desde su visión, por líderes liberales demócratas, socialistas, comunistas y fascistas y no fue, desde luego, aplicado de manera uniforme: los plebiscitos de Schleswig-Holstein basados en la etnicidad se conjugaban con la prohibición de la unificación de Austria y Alemania contenida en los tratados de Saint Germain y Versalles. La autoridad de la Sociedad de Naciones respecto al desarrollo del principio de autodeterminación, entendido, recalquemos, como principio político y no como norma de Derecho Internacional, de indudable interés en la resolución de casos como el de Schleswig-Holstein o las islas Åland, se fue diluyendo con el deterioro de la situación económica y política, incapaz de hacer frente ni política ni doctrinalmente a los retos nacionalistas que desembocaron en la guerra. Así, no es de extrañar que, tras la Segunda Guerra Mundial, si bien el principio de autodeterminación de los pueblos fue indubitadamente proclamado universalmente en la Carta de las Naciones Unidas, al igual que tras finalizar la Gran Guerra, este principio fuera considerablemente matizado tanto en el marco del derecho internacional -con el contrapeso del respeto a la integridad territorial de los estados y la prohibición de la guerra como instrumento político internacional- como por parte de académicos y políticos de todo el mundo.

Para el norteamericano Clyde Eagleton, que escribía a mediados del siglo pasado, preocupado por lo que él denominaba los “excesos de la autodeterminación,” tras la traumática experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando reflexionaba sobre las tesis de Wilson, consideraba que sus palabras habían sido perversamente manipuladas notablemente durante el período de entreguerras. Para Eagleton, las palabras de Wilson “encontraron albergue en cada corazón humano; se convirtieron en el fundamento del pensamiento y deseo de millones de personas. Había verdaderos ejemplos en los acuerdos de paz de 1919 a los cuales podían mirar; y hubo una “fiebre salvaje” de nacionalismo después de la Primera Guerra Mundial, que pronto se perdió en otras cosas”⁴³⁹.

El Emperador de Etiopía Haile Selassie I, que en 1935 había acudido infructuosamente a la Sociedad de Naciones para frenar la agresión de las tropas de Mussolini durante la Segunda Guerra Italo-Etíope (1935 - 1936), resumía durante la Conferencia de Belgrado de 1961 la reflexión todavía necesaria en torno a la realización del derecho de autodeterminación de los pueblos con las siguientes palabras:

“(…) Vamos a discutir, durante esta Conferencia, el derecho de los pueblos y las naciones a la autodeterminación, un derecho que es un tema [de interés] en varias regiones del mundo hoy en día. Se nos requiere también reafirmar nuestro respeto por la soberanía y la integridad territorial de los estados y el principio de no injerencia y no intervención en los asuntos internos, principios que han demostrado su valor esencial y validez en el campo de las relaciones internacionales muchas veces y a los que, creemos, estamos todos aquí consagrados. Nos atrevemos a sugerir que hay cierta inconsistencia, cierta contradicción interna entre estos cuando se conectan, mientras que considerados por separado y aparte, nadie los negaría

London, New York, 2002, p. 329.

⁴³⁹ Eagleton, C., “Excesses of self-determination”, *Foreign Affairs*, vol. 31, n. 4, julio, 1953, p.1.

© Isidro García Mingo

para no quedar mal.

¿Puede un gobierno que abierta o subrepticamente apoya la violación de la integridad territorial de otro estado justificar sus acciones sobre la base de que solamente pretende aplicar el principio de autodeterminación para todos o una porción de la gente de esa nación? Nosotros pensamos que no. Sostener lo contrario es adoptar la tesis de Adolf Hitler, quien consideraba que, al apoyar las acciones del Tercer Reich al incorporar Austria en Alemania, “es obvio que una idea de abrazar a todo el pueblo alemán y levantarlo de sus profundidades no puede detenerse en las fronteras de un país”⁴⁴⁰.

§3.2 Fuentes del derecho de autodeterminación de los pueblos

El principio de autodeterminación de los pueblos fue proclamado, como hemos visto, ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial por líderes de todos los bandos y bloques políticos e ideológicos en conflicto; liberales, comunistas y fascistas, así como los líderes de los movimientos de liberación nacional activos en los territorios sometidos a los viejos imperios, lo enarbolaron como parte de sus respectivos programas políticos.

Su consolidación como principio de Derecho Internacional en su forma actual llegaría con la nueva Sociedad Internacional establecida con la creación de las Naciones Unidas. Como antecedentes inmediatos, podemos mencionar que las provisiones dispuestas en la Carta del Atlántico, firmada frente a las costas de Terranova por Churchill y Roosevelt el 14 de agosto de 1941, así como la Declaración de la Conferencia de Moscú de 1943, tuvieron una considerable influencia en los trabajos preparatorios de la Conferencia de San Francisco de 1945, en la que el concepto de libre determinación de los pueblos fue incorporado a la Carta de las Naciones Unidas, texto alumbrado como conclusión de dicha conferencia.

La Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 -entró en vigor el 24 de octubre – recoge en su preámbulo la voluntad de sus signatarios de reafirmar “la igualdad de las naciones” así como su intención de promover a nivel global “el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, y con tal finalidad “emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. Para ello, en su Capítulo 1 se recogen los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas; el artículo 1 está dedicado a los Propósitos y el artículo 2 a los Principios.

Pues bien, entre los cuatro Propósitos de las Naciones Unidas se encuentra (punto 2) aquel de “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el *respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos*, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”, junto con otros, como el mencionado propósito de “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales

⁴⁴⁰ Selassie, H., *Selected Speeches of His Imperial Majesty Haile Selassie I 1918-1967*, Imperial Ethiopian Ministry of Information, Addis Ababa, Etiopía, 1967, p. 183.

de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

Para la realización de los cuatro Propósitos consignados, se establecieron unos Principios en el artículo 2, que incluyen el arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos y la abstención, por parte de los miembros de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales, de amenazar o usar “la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Además, según el art. 2.7, “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (...)”.

De esta manera, el principio de libre determinación o autodeterminación de los pueblos⁴⁴¹ se encuentra explícitamente contenido en los cimientos de la normativa internacional, vinculando su respeto a la consecución de la paz, a la integridad territorial y a la independencia política.

El Capítulo IX de la Carta, dedicado a la Cooperación Internacional Económica y Social, en su artículo 55 recoge nuevamente el principio de autodeterminación, prescribiendo que con “el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto *al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos*” las Naciones Unidas promoverán, entre otros, niveles de vida más elevados, condiciones de progreso y desarrollo económico y social, así como “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”. Así vemos como son recogidas la cooperación y el desarrollo como medios para la promoción de condiciones de estabilidad y bienestar (un desarrollo final) necesarias para la paz, a su vez basadas en la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Esta relación será analizada con detenimiento en su apartado correspondiente.

Se recoge también, de manera implícita, el principio de autodeterminación en el artículo 73 del Capítulo XI (declaración relativa a territorios no autónomos), en el cual los miembros de las Naciones Unidas que todavía tuvieran responsabilidad de administrar territorios “cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”— en clara referencia a potencias coloniales o imperialista- reconocen “como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible (...) el bienestar de los habitantes de esos territorios” obligándose, no sólo a tratar justamente a esos pueblos, a proteger sus culturas y a promover su desarrollo, sino también a “(...) desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto”.

⁴⁴¹ En castellano se usan ambos términos, autodeterminación y libre determinación, indistintamente.

Si bien con fecha de uno de noviembre de 1994 finalizó el último Acuerdo de Administración Fiduciaria, por cuyo cumplimiento velaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas⁴⁴², merece la pena recordar que el artículo 76 (b) de la Carta, contenido en el Capítulo XII referente al régimen internacional de administración fiduciaria, proclama que entre los objetivos básicos de dicho régimen se encuentra “promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicomitidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria”.

El principio de autodeterminación de los pueblos en el sistema de las Naciones Unidas, como hemos visto anteriormente, fuertemente apoyado por el Movimiento de los países no alineados, adquirió un nuevo impulso el 14 de diciembre de 1960 con la adopción en Nueva York, sin votos en contra, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

La Resolución 1514 (VX), adoptada sin ningún voto en contra y con tan sólo nueve abstenciones –entre las que, por supuesto, se encontraban las de potencias coloniales como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Bélgica o Portugal- se hacía eco de lo dispuesto en la Carta, reconociendo tanto la voluntad de “promover el progreso social (...) dentro de un concepto más amplio de la libertad”, como la vinculación entre la paz y la estabilidad mundial, propósito principal de las Naciones Unidas, y el reconocimiento del “apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes”. En el preámbulo de la Declaración, se deja claro el reconocimiento de que “los pueblos desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones”, y en lo relacionado con nuestra reflexión general respecto al desarrollo, se admite que “la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes”, afirmando asimismo que los pueblos “pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del derecho internacional”.

Es interesante resaltar que ya en el preámbulo de esta Resolución se subraya que la autodeterminación debe realizarse en armonía con el principio de integridad territorial de los Estados, lo que para algunos supone una aparente contradicción: “todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de sus soberanía y a la integridad de su territorio nacional”.

La Resolución 1514 contiene siete puntos referentes a: 1) la declaración genérica de la dominación extranjera como contraria a los derechos humanos, a la paz y la Carta; 2) la

⁴⁴² Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (Palaos), administrado por los Estados Unidos de América.

declaración de que todos los pueblos, sin distinción, tienen derecho a su libre determinación; 3) la advertencia de no utilizar “la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo” –algunos dirían hoy tal vez el nivel de desarrollo– como pretexto para denegar la independencia; 4) el cese de la violencia armada o de cualquier otro tipo y el respeto a la integridad del territorio nacional; 5) toma de medidas inmediatas para territorios en fideicomiso y no autónomos; y dos puntos genéricos relacionados con la observancia de la buena fe, condenando los intentos de quebrantar la unidad nacional o territorial de los pueblos aspirantes, su independencia así como la necesidad de observar los principios contenidos en la Carta y respetar los derechos soberanos de todos los pueblos.

La significación de la Resolución 1514 reside en su consideración como la base de las políticas de descolonización, que fueron elaboradas en los años posteriores. En el seno de las Naciones Unidas se estableció en 1961 el “Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, conocido comúnmente como Comité de los 24⁴⁴³. La Declaración, que fue seguida de la aprobación, por parte de la Asamblea General, de tres resoluciones sobre “La situación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” (1654 (XVI), de 27 de noviembre de 1961, 1810 (XVII), de 17 de diciembre de 1962 y 1956 (XVIII), de 11 de diciembre de 1963), fue a partir de 1965 reafirmada con la aprobación anual de una serie de resoluciones intituladas “Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”⁴⁴⁴, complementadas con las más

⁴⁴³ Originalmente compuesto por 17 miembros, el Comité Especial fue ampliado en 1962 ampliado a 24 miembros.

⁴⁴⁴ Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” son:

2105 (XX) de 20 de diciembre de 1965; 2189 (XXI) de 13 de diciembre de 1966; 2326 (XXII) de 16 de diciembre de 1967; 2465 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968; 2548 (XXIV) de 11 diciembre de 1969; 2708 (XXV) de 14 diciembre de 1970; 2878 (XXVI) de 20 Diciembre de 1971; 2908 (XXVII) de 2 de noviembre de 1972; 3163 (XXVIII) de 14 Diciembre 1973; 3328 (XXIX) de 16 de diciembre de 1974; 3481 (XXX) de 11 diciembre de 1975; A/RES/31/30 de 29 noviembre de 1976; A/RES/32/36 de 28 de noviembre de 1977; A/RES/33/44 de 13 de diciembre de 1978; A/RES/34/94 de 13 de diciembre de 1979; A/RES/35/119 de 11 de diciembre de 1980; A/RES/36/68 de 1 de diciembre de 1981; A/RES/37/35 de 23 de noviembre de 1982; A/RES/38/54 de 7 de diciembre de 1983; A/RES/39/91 de 14 de diciembre de 1984; A/RES/40/57 de 2 de diciembre de 1985; A/RES/41/41A-B de 2 de diciembre de 1986; A/RES/42/71 de 4 de diciembre de 1987; A/RES/43/45 de 22 de noviembre de 1988; A/RES/44/101 de 11 de diciembre de 1989; A/RES/45/34 de 20 de noviembre de 1990; A/RES/46/71 de 11 de diciembre de 1991; A/RES/47/23 de 25 de noviembre de 1992; A/RES/48/52 de 10 de diciembre de 1993; A/RES/49/89 de 16 de diciembre de 1994; A/RES/50/39 de 6 de diciembre de 1995; A/RES/51/146 de 13 de diciembre de 1996; A/RES/52/78 de 10 de diciembre de 1997; A/RES/53/68 de 3 de diciembre de 1998; A/RES/54/91 de 6 de diciembre de 1999; A/RES/55/147 de 8 de diciembre de 2000; A/RES/56/74 de 10 de diciembre de 2001; A/RES/57/140 de 11 de diciembre de 2002; A/RES/58/111 de 9 de diciembre de 2003; A/RES/59/136 de 10 de diciembre de 2004; A/RES/60/119 de 8 de diciembre de 2005; A/RES/61/130 de 14 de diciembre de 2006; A/RES/62/120 de 17 de diciembre de 2007; A/RES/63/110 de 5 de diciembre de 2008; A/RES/64/106 de 10 de diciembre de 2009; A/RES/65/117 de 10 de diciembre de 2010; A/RES/66/91 de 9 de diciembre de 2011; A/RES/67/134 de 18 de diciembre de 2012.

específicas resoluciones, también anuales, sobre la “Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas”⁴⁴⁵, y la resolución de 1980, “Plan de acción para la completa aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”⁴⁴⁶. De manera adicional, la Asamblea General consideró pertinente reconocer “la importancia de la difusión de información como instrumento para promover los objetivos de la Declaración (...) consciente del papel de la opinión pública mundial en la prestación de una asistencia eficaz a los pueblos de los territorios no autónomos para que logren la libre determinación” para lo cual se aprobó primero la Resolución 1848 (XVII), de 19 de diciembre de 1962, “Difusión en los Territorios no Autónomos de Información acerca de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”, que fue seguida por la larga lista de resoluciones anuales sobre “Difusión de Información sobre la Descolonización”⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas” son las siguientes:

2311 (XXII) de 14 de diciembre de 1967; 2426 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968; 2555 (XXIV) de 14 de diciembre de 1969; 2704 (XXV) de 14 de diciembre de 1970; 2874 (XXVI) de 20 de diciembre de 1971; 2980 (XXVII) de 14 de diciembre de 1972; 3118 (XXVIII) de 12 de diciembre de 1973; 3300 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974; A/RES/3421 (XXX) de 8 de diciembre de 1975; A/RES/31/30 de 29 de noviembre de 1976; A/RES/32/36 de 28 de noviembre 1977; A/RES/33/41 de 13 de diciembre de 1978; A/RES/34/42 de 4 de diciembre de 1979; A/RES/35/29 de 11 de noviembre de 1980; A/RES/45/18 de 20 de noviembre de 1990; A/RES/46/65 de 11 de diciembre de 1991; A/RES/47/16 de 16 de noviembre de 1992; A/RES/48/47 de 22 de marzo de 1994; A/RES/49/41 de 9 de diciembre de 1994; A/RES/50/34 de 6 de diciembre de 1995; A/RES/51/141 de 13 de diciembre de 1996; A/RES/52/73 10 de diciembre de 1997; A/RES/54/85 de 6 de diciembre de 1999; A/RES/55/139 de 8 de diciembre de 2000; A/RES/56/67 de 10 de diciembre de 2001; A/RES/57/133 de 11 de diciembre de 2002; A/RES/58/104 de 9 de diciembre de 2003; A/RES/59/129 de 10 de diciembre de 2004; A/RES/60/112 de 8 de diciembre de 2005; A/RES/61/231 de 22 de diciembre de 2006; A/RES/62/114 de 17 de diciembre de 2007; A/RES/63/103 de 5 de diciembre de 2008; A/RES/64/99 de 10 de diciembre de 2009; A/RES/65/110 de 10 de diciembre de 2010; A/RES/66/84 de 9 de diciembre de 2011; A/RES/67/127 de 18 de diciembre de 2012.

⁴⁴⁶ A/RES/35/118 de 11 de diciembre de 1980

⁴⁴⁷ Las resoluciones de la Asamblea General sobre “Difusión de información sobre la Descolonización” son:

2009 (XXVII) de 2 de noviembre de 1972; 3164 (XXVIII) de 14 de diciembre de 1973; 3329 (XXIX) de 16 de diciembre de 1974; A/RES/3482 (XXX) de 11 diciembre de 1975; A/RES/31/144 de 17 de diciembre de 1976; A/RES/32/43 de 7 de diciembre de 1977; A/RES/33/45 de 13 de diciembre de 1978; A/RES/34/95 de 13 de diciembre de 1979; A/RES/35/120 de 11 de diciembre de 1980; A/RES/36/69 de 1 de diciembre de 1981; A/RES/37/36 de 23 de noviembre de 1982; A/RES/38/55 de 7 de diciembre de 1983; A/RES/39/92 de 14 de diciembre de 1984; A/RES/40/58 de 2 de diciembre de 1985; A/RES/41/42 de 2 de diciembre de 1986; A/RES/42/72 de 4 de diciembre de 1987; A/RES/43/46 de 22 de noviembre de 1988; A/RES/44/102 de 11 de diciembre de 1989; A/RES/45/35 de 20 de noviembre de 1990; A/RES/46/72 de 11 de diciembre de 1991; A/RES/47/24 de 25 de noviembre de 1992; A/RES/48/53 de 10 de diciembre de 1993; A/RES/49/90 de 16 de diciembre de 1994; A/RES/50/40 de 6 de diciembre de 1995; A/RES/51/147 de 13 de diciembre de 1996; A/RES/52/79 de 10 de diciembre de 1997; A/RES/53/69 de 3 de diciembre de 1998; A/RES/54/102 de 9 de diciembre de 1999; A/RES/55/145 de 8 de diciembre de 2000; A/RES/56/73

Así, al día siguiente de la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la independencia..., el día 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General aprobó otra resolución, la Resolución 1541 (XV), en la cual se contiene una lista de principios establecidos por la Asamblea General, a modo de guía para decidir qué territorios habrían de ser considerados bajo el ámbito definido en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, los artículos 73 y 74 de la Carta, concluyendo que los territorios no autónomos dejan de serlo cuando: se consolidan como un nuevo Estado independiente y soberano, cuando se convierten en estado libre asociado a un Estado independiente o cuando se integran en un estado independiente.

Si los fideicomisos hoy en día se han dado por concluidos, quedan todavía, sin embargo, dieciséis territorios no autónomos listados por las Naciones Unidas⁴⁴⁸. Las medidas previstas tanto en la Carta como en la Resolución 1541 incluyen no sólo aquellas relacionadas con el desarrollo de un “gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos”, sino también a asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso” y también promover “medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros (...)”.

Por otro lado, en 1962, considerando la Resolución 1314 (XIII) de 12 de diciembre de 1958, (que creaba la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales con el objetivo de realizar “un estudio completo de la situación en lo que respecta a la soberanía permanente sobre recursos y riquezas naturales como elemento básico del derecho a la libre determinación”), fue aprobada la Resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962, continente de la “Declaración sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales”, la cual recoge que “1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” y que “2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades”. La Resolución 1803 (XIII) nació así, por un lado, de los debates suscitados en la Asamblea General en torno a la promoción y la financiación del desarrollo económico en los países insuficientemente desarrollados (resoluciones de la Asamblea General 523 (VI), de 12 de enero, y 626 (VIII), de 21 de diciembre de 1952, y por otro, de los trabajos preparatorios de los Pactos Internacionales.

de 10 de diciembre de 2001; A/RES/57/139 de 11 de diciembre de 2002; A/RES/58/110 de 9 de diciembre de 2003; A/RES/59/135 de 10 de diciembre de 2004; A/RES/60/118 de 8 de diciembre de 2005; A/RES/61/129 de 14 de diciembre de 2006; A/RES/62/119 de 17 de diciembre de 2007; A/RES/63/109 de 5 de diciembre de 2008; A/RES/64/105 de 10 de diciembre de 2009; A/RES/65/116 de 10 de diciembre de 2010; A/RES/66/90 de 9 de diciembre de 2011; A/RES/67/133 de 18 de diciembre de 2012;

⁴⁴⁸ Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.

Poco después, la libre determinación de los pueblos recibiría un impulso importante con su inclusión *como derecho humano* tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁴⁴⁹ como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁴⁵⁰, aprobados el 16 de diciembre de 1966 en la Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General.

La inclusión del derecho de libre determinación en los Pactos no se dio fácilmente. Pero el impulso recibido de los países latinoamericanos y del bloque comunista, habían llevado a la aprobación, primero, de la Resolución 545 (VI) de 1952, en la que se definía por primera vez la libre determinación como derecho además de cómo principio –lo que fue ampliamente criticado-. Esta resolución dio pie tanto a la mencionada Resolución 1514 (XV) como a la incorporación del derecho de autodeterminación como derecho humano en los Pactos Internacionales de 1966⁴⁵¹.

Ambos Pactos coinciden en la redacción idéntica de su primer artículo: “1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Los otros dos apartados complementan éste: “2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. Y recogiendo lo dispuesto anteriormente en la Carta y en las resoluciones mencionadas sobre territorios bajo administración exterior: “3 Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.

La inclusión de la libre determinación de los pueblos en los Pactos Internacionales y documentos relacionados la vincula definitivamente con el marco general de los derechos humanos, tanto como derecho colectivo como en cuanto requisito para la realización de todos los derechos, ya que unos no pueden ser realizados sin la adecuada observancia de los otros.

Puntualicemos que el derecho de autodeterminación no había sido recogido en la Declaración Universal de 1948, como propuso en su momento la Unión Soviética. Recordemos que, siguiendo la doctrina de Lenin, la Constitución de la República Soviética de Rusia de 1918 y las Constituciones de la Unión Soviética inspiradas en ella,

⁴⁴⁹ Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

⁴⁵⁰ Entró en vigor el 3 de enero de 1976.

⁴⁵¹ Gros Espiell, H., “El derecho a la libre determinación de los pueblos y los derechos humanos”, *Estudios sobre derechos humanos I*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, pp. 193–211.

recogían el derecho de secesión⁴⁵², senda que siguió momentáneamente la República Popular China en 1931. En 1955, sin embargo, el mundo había cambiado y cuando la URSS propuso nuevamente la inclusión del derecho de autodeterminación en los Pactos, encontró el apoyo de los países no alineados, de manera que esta iniciativa fue finalmente aprobada.

De manera relacionada, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.

La relación del artículo 27 con la vertiente cultural del derecho de determinación es evidente, aunque si bien, como veremos, esta vertiente es hasta cierto punto distinguible de una concepción de la autodeterminación como autogobierno político. A pesar de que el artículo 27 está redactado de manera negativa, el Comité General expresó en su Comentario General número 23 de 1994 que éste: “sin embargo, reconoce la existencia de un derecho y requiere que éste no sea denegado. Consecuentemente, un Estado parte está bajo la obligación de asegurar que la existencia y el ejercicio de este derecho son salvaguardados contra su negación o violación. Las medidas positivas de protección son, por tanto, requeridas no sólo contra los actos del Estado parte mismo, así sea a través de sus autoridades administrativas, judiciales o legislativas, sino también contra los actos de otras personas dentro del Estado parte”⁴⁵³.

Se incluye en el ámbito de protección de dicho artículo a los pueblos indígenas. El Comité de Derechos Humanos observó, en el mencionado Comentario General, que la cultura se manifiesta por distintas vías, y una de ellas es precisamente el especial uso de los recursos naturales asociados con las formas de vida indígenas. Así, vemos que hay una conexión entre el ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artículo 27 y la vertiente económica del derecho de autodeterminación, que examinaremos con detenimiento: la protección de una cultura y una forma de vida indígena puede estar íntimamente relacionada con la tradicional explotación de determinados recursos: en el caso de los Sami escandinavos, por ejemplo, la noción de autonomía territorial ha sido expresamente rechazada por los líderes indígenas para satisfacer su derecho de autodeterminación⁴⁵⁴.

A pesar de que los pueblos indígenas cuentan con la general protección del artículo 27, su derecho a la autodeterminación ha sido manifestado en diversas ocasiones, siendo de especial relevancia la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada

⁴⁵² El artículo 17 de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aprobada el 5 de diciembre de 1936 establecía que: “Cada república federada conserva el derecho de separarse libremente de la URSS”.

⁴⁵³ CDH. Comentario General, no. 23 (50) en UN doc. HRI/GEN/1/Rev.5, pp. 147–150.

⁴⁵⁴ Henriksen, J.B., “The continuous process of recognition and implementation of the Sami people’s right to self-determination”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 21, no. 1, pp. 27-40, marzo, 2008.

por la Asamblea General en Nueva York el 13 de septiembre de 2007⁴⁵⁵. Poco después, en 2008, el Consejo de Derechos Humanos de NNUU nombró en su resolución 15/14 al profesor James Anaya Relator Especial para la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Partiendo de que “los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos [...]” (artículo 1) y de que “son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos [...]” (artículo 2), el artículo 3 de esta Declaración expresamente recoge que:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”

Siguiendo la estela de lo dispuesto en el artículo 27 del PIDCP, la Asamblea General aprobó el 18 de diciembre de 1992 la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas⁴⁵⁶. En su artículo 1, la Declaración recoge que:

“1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos objetivos”.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos fue seguidamente recogido en la Resolución VIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, afirmando la relación entre la consagración de este derecho y la observancia de los demás derechos humanos. La Proclamación de Teherán, además, reafirmaba la idea del colonialismo como factor negativo que impide el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos.

La inclusión de la autodeterminación como *derecho* en los Pactos fue acompañada más tarde con su reafirmación como *principio* de Derecho Internacional. En este sentido, recordemos que el 24 de octubre de 1970 fue aprobada por consenso la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, continente de la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.

Queda establecido ya en el preámbulo de dicha Declaración que la Asamblea General considera que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye “una importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo” y que su efectiva aplicación es fundamental para fomentar esas relaciones de amistad entre Estados basadas en el principio de igualdad soberana que constituye el objeto principal de la Declaración.

La Declaración de 1970 fija siete principios sobre los que sustentar las relaciones

⁴⁵⁵ Con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.

⁴⁵⁶ Resolución A/RES/47/135, de 18 de diciembre de 1992

internacionales. En el apartado dedicado al derecho al desarrollo ya mencionamos el principio de cooperación: “d) La obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta”. La libre determinación, como principio, está indirectamente mencionada en relación con el principio de prohibición general de uso de la fuerza: “a) El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” y relacionado con el principio de no injerencia: “c) La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta”. Pero de manera explícita y refiriéndose a pueblos y no estados, el principio de libre determinación está también explícitamente recogido. “La Asamblea General (...) solemnemente proclama los siguientes principios: (...) e) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos”.

Bajo el epígrafe dedicado exclusivamente al principio de libre determinación de los pueblos de la Resolución 2625 encontramos la más importante pormenorización del contenido de tal principio recogida por un documento internacional aprobado por la Asamblea con ese -tan amplio- nivel de consenso, matizado naturalmente, por el hecho de ser precisamente eso, sólo una Declaración. Recoge la Resolución 2625 que, en virtud de este principio: “todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta”, distinguiendo así claramente entre Estado y pueblo con respecto a los deberes, pero, como veremos, lo que no aclara definitivamente los problemas de los sujetos.

A partir de ahí, se establecen una serie de deberes generales para los Estados, que son obligados en cuanto miembros de la sociedad internacional:

“Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad soberana de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de:

- a) fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y
- b) poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos a la subyugación de que se trate; y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas.

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación de presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

Respecto a los territorios no autónomos mencionados anteriormente, la Declaración

especifica que:

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios.

Ahora bien, el principio de libre determinación está importantemente matizado seguidamente, mostrando la tensión existente con el principio de integridad territorial de los Estados que analizaremos más adelante:

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Y por ello (párrafo 7), “todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país”.

La Resolución 2625 establece una relación entre el principio de integridad territorial de los estados y el derecho de libre determinación (párrafo 7): “la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos (...) y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Como recuerda David Raič, el texto de la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional..., en lo referente al principio de autodeterminación, incluyendo el párrafo 7 “fue sujeto de mucha discusión en el Comité Especial (...) durante sus sesiones entre 1966 y 1970. Como indica el título de la Declaración, ésta está primordialmente dirigida a las relaciones de amistad y cooperación entre *estados*. Por ello, sostiene este autor, “debe asumirse que la formulación negativa del párrafo 7 (...) estaba dirigida a terceros Estados” y que, por ello, puede argumentarse, por tanto, “*a contrario* que terceros estados tendrían derecho a apoyar al pueblo que intenta secesionarse incluso si tal apoyo llevara eventualmente a infringir la integridad territorial de un Estado objetivo”. “Pero esto” –concluye Raič– “sólo sería permisible si el Estado objetivo no se comporta de manera que cumpla con el derecho de autodeterminación del pueblo implicado, y tal apoyo debería ser de acuerdo con otros principios contenidos en la Declaración”⁴⁵⁷. Esta posición, como veremos, nos remite a las teorías de la secesión como *remedy right only* de autores como Buchanan y otros.

Hasta el día de hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido aprobando desde 1981, anualmente y de manera ininterrumpida, resoluciones complementarias a las

⁴⁵⁷ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination. Developments in International Law*. Kluwer Law International Vol 43. The Hague/London/New York, 2002, p. 317.

mencionadas anteriormente sobre la “Realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación”⁴⁵⁸, y desde 1970 hasta 1994 una serie de resoluciones sobre la “Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos”⁴⁵⁹.

Además, la Asamblea General ha reafirmado el derecho de autodeterminación a pueblos en distintas resoluciones específicas sobre casos particulares, que en su conjunto refuerzan la idea de ser parte del *jus cogens*. Entre ellas podemos mencionar las resoluciones de la Asamblea General sobre Namibia⁴⁶⁰, las Malvinas⁴⁶¹, Seychelles⁴⁶², Belize⁴⁶³, Samoa Americana⁴⁶⁴, Palestina⁴⁶⁵, Bermudas⁴⁶⁶ o Brunei⁴⁶⁷, etc.

⁴⁵⁸ Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación” son las siguientes:

A/RES/36/10 de 28 de octubre de 1981; A/RES/37/42 de 3 de diciembre de 1982; A/RES/38/16 de 22 de noviembre de 1983; A/RES/39/18 de 23 de noviembre de 1984; A/RES/40/24 de 29 de noviembre de 1985; A/RES/41/100 de 4 de diciembre de 1986; A/RES/42/94 de 7 de diciembre de 1987; A/RES/43/105 de 8 de diciembre de 1988; A/RES/44/80 de 8 de diciembre de 1989; A/RES/45/131 de 14 de diciembre de 1990; A/RES/46/88 de 16 de diciembre de 1991; A/RES/47/83 de 16 de diciembre de 1992; A/RES/48/93 de 20 de diciembre de 1993; A/RES/49/148 de 23 de diciembre de 1994; A/RES/50/139 de 21 de diciembre de 1995; A/RES/51/84 de 12 de diciembre de 1996; A/RES/52/113 de 12 de diciembre de 1997; A/RES/53/134 de 9 de diciembre de 1998; A/RES/54/155 de 17 de diciembre de 1999; A/RES/55/85 de 4 de diciembre de 2000; A/RES/56/141 de 19 de diciembre de 2001; A/RES/57/197 de 18 de diciembre de 2002; A/RES/58/161 de 22 de diciembre de 2003; A/RES/59/180 de 20 de diciembre de 2004; A/RES/60/145 de 16 de diciembre de 2005; A/RES/61/150 de 19 de diciembre de 2006; A/RES/62/144 de 18 de diciembre de 2007; A/RES/63/163 de 18 de diciembre de 2008; A/RES/64/149 de 18 de diciembre de 2009; A/RES/65/201 de 21 de diciembre de 2010; A/RES/66/145 de 19 de diciembre de 2011; A/RES/67/157 de 20 de diciembre de 2012.

⁴⁵⁹ Las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la “Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos” emitidas anualmente desde 1970 hasta 1994 son las siguientes:

Resoluciones 2649 (XXV) de 30 de noviembre de 1970; 2787 (XXVI), de 6 de diciembre de 1971; 2955 (XXVII) de 12 de diciembre de 1972; 3070 (XXVIII) de 30 de noviembre de 1973; 3246 (XXIX) de 29 de noviembre de 1974; 3382 (XXX) de 10 de noviembre de 1975; A/RES/33/24 de 29 de noviembre de 1978; A/RES/34/44 de 23 de noviembre de 1979;

A/RES/35/35 (A-B) de 14 de noviembre de 1980; A/RES/36/9 de 28 de octubre de 1981; A/RES/37/43 de 3 de diciembre de 1982; A/RES/38/17 de 22 de noviembre de 1983; A/RES/39/17 de 23 de noviembre de 1984;

A/RES/40/25 de 29 de noviembre de 1985; A/RES/41/101 de 4 de diciembre de 1986; A/RES/42/95 de 7 de diciembre de 1987; A/RES/43/106 de 8 de diciembre de 1988; A/RES/44/79 de 8 de diciembre de 1989; A/RES/45/130 de 14 de diciembre de 1990; A/RES/46/87 de 16 de diciembre de 1991; A/RES/47/82 de 16 de diciembre de 1992; A/RES/48/94 de 20 de diciembre de 1993; A/RES/49/151 de 23 de diciembre de 1994.

⁴⁶⁰ Resoluciones 1564(XV), 1568(XV), 1899(XVIII), 2074(XX), 2145(XXI), 2324(XXII), 2403(XXIII), 2498(XXIV), 2517(XXIV), 2518(XXIV), 2679(XXV), 2871(XXVI), 3031(XXVII), 3111(XXVIII), 3295(XXIX), 3296(XXIX), 3299(XXIX), 3400(XXX)

⁴⁶¹ Resolución 2065(XX)

⁴⁶² Resoluciones 2866(XXVI), 2984(XXVII), 3158(XXVIII), 3287(XXIX), 3430(XXX)

⁴⁶³ Resolución 3432(XXX)

Con objeto de analizar el alcance y contenido del derecho de autodeterminación, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encomendó en 1974⁴⁶⁸ a la Subcomisión de Protección de Minorías y Prevención de Discriminaciones la designación de un Relator Especial -el elegido fue el uruguayo Héctor Gros Espiell- para la realización de un estudio sobre “El derecho de autodeterminación: implementación de las resoluciones de Naciones Unidas”⁴⁶⁹. Paralelamente, la Subcomisión nombró también Relator Especial a Aureliu Cristescu, de Rumania, para la realización de otro estudio complementario, “El derecho a la autodeterminación: desarrollo histórico y actual sobre la base de los instrumentos de las Naciones Unidas”⁴⁷⁰, que fue enviado a la Asamblea General, y aprobado en 1979 para su máxima difusión por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social⁴⁷¹. Ambos informes, a pesar de ser realizados de manera independiente y desde enfoques distintos, fueron realizados de manera coordinada entre sí⁴⁷².

A partir de los ochenta, se adoptaron también una serie de resoluciones (que comenzaron a aprobarse tras aquellas relacionadas con la elaboración de un borrador de Convención internacional contra el reclutamiento, uso, financiamiento y entrenamiento de mercenarios⁴⁷³) sobre el “Uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”⁴⁷⁴.

⁴⁶⁴ Resolución 3429(XXX)

⁴⁶⁵ Resoluciones 2672C(XXV), 2649(XXV), 2787(XXVI), 2792D(XXVI), 2963(XXVII), 3089D(XXVIII)... Recientemente la Resolución A/RES/64/150 de 26 de marzo de 2010 dice que :”1. Reafirma el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado de Palestina independiente; 2. Insta a todos los Estados y a los organismos especializados y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que continúen prestando apoyo y asistencia al pueblo palestino para la pronta realización de su derecho a la libre determinación”.

⁴⁶⁶ Resoluciones 3157(XXVIII), 3289(XXIX), 3427(XXX).

⁴⁶⁷ Resolución 3159(XXVIII).

⁴⁶⁸ Resoluciones 5 (XXX) y 4 (XXVII) del 16 de agosto de 1974

⁴⁶⁹ E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1

⁴⁷⁰ E/CN.4/Sub.2/404

⁴⁷¹ Vid Decisión 3 (XXXV), de la Comisión de Derechos Humanos, apoyada por la Decisión 1979/39 de 10 de mayo de 1979 del Comité Económico y Social

⁴⁷² Gros Espiell, H., “En torno al derecho a la libre determinación de los pueblos”. Anuario Español de Derecho Internacional, vol. III, pp. 49–74, 1976. P. 50.

⁴⁷³ Ver, por ejemplo, A/RES/40/74 de 11 de diciembre de 1985

⁴⁷⁴ Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General sobre uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación son las siguientes:

A/RES/41/102 de 4 de diciembre de 1986; A/RES/42/96 de 7 de diciembre de 1987; A/RES/43/107 de 8 de diciembre de 1988; A/RES/44/81 de 8 de diciembre de 1989; A/RES/45/132 de 14 de diciembre de 1990; A/RES/46/89 de 16 de diciembre de 1991; A/RES/47/84 de 16 de diciembre de 1992; A/RES/48/92 de 20 de diciembre de 1993; A/RES/49/150 de 23 de diciembre de 1994; A/RES/50/138 de 21 de diciembre de 1995; A/RES/51/83 de 12 de diciembre de 1996; A/RES/52/112 de 12 de diciembre de 1997; A/RES/53/135 de 9 de diciembre de 1998; A/RES/54/151 de 17 de diciembre de 1999; A/RES/55/86 de 4 de diciembre de 2000; A/RES/56/232 de 24 de diciembre de 2001; A/RES/57/196 de 18 de diciembre de 2002; A/RES/58/162 de 22 de diciembre de 2003; A/RES/59/178 de 20 de diciembre de 2004;

Siendo éstas las principales fuentes del principio de autodeterminación de los pueblos, éste ha sido recogido desde entonces, naturalmente, en otros múltiples documentos internacionales, como la anteriormente mencionada Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 o la Declaración de 1986. Si la relación del principio de autodeterminación con el desarrollo ya estaba apuntada en la Carta o en la Resolución 1803 (XVII) de 1962 y explicitada en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, es subrayable el reconocimiento de dicha relación en declaraciones posteriores como la estudiada Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, en la que se dispone que el derecho al desarrollo *implica* el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, relación que analizaremos pormenorizadamente.

El derecho de autodeterminación fue asimismo recogido -como lo fue también el derecho al desarrollo- en la conclusión de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, tanto en su preámbulo, como más precisamente, en su artículo 2:

“2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho.

Con arreglo a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna.”

Recordemos en este punto que, como veremos, la misma Declaración de Viena establece que (art.5) “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso (...)”, lo que incluye, tanto al derecho al desarrollo, como hemos visto anteriormente, como al derecho de autodeterminación de los pueblos.

A/RES/61/151 de 19 de diciembre de 2006; A/RES/62/145 de 18 de diciembre de 2007; A/RES/63/164 de 18 de diciembre de 2008; A/RES/64/151 de 18 de diciembre de 2009; A/RES/65/203 de 21 de diciembre de 2010; A/RES/66/147 de 19 de diciembre de 2011; A/RES/67/159 de 20 de diciembre de 2012;

Para más información, puede consultarse los trabajos de los Relatores especiales: Shaista Shameem, de Fiji (2004-2005) y Enrique Bernal Ballesteros, de Perú (1987-2004).

Por otro lado, el derecho de autodeterminación ha sido reflejado también en documentos regionales, como la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta de Banjul, aprobada el 27 de julio de 1981, tanto de manera indirecta en su artículo 19: “Todos los pueblos serán iguales; todos disfrutarán del mismo respeto y tendrán los mismos derechos. Nada justificará la dominación de un pueblo por otro”, como expresamente en su artículo 20:

“1. Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. Decidirán libremente su status político y procurarán su desarrollo económico y social según la política que ellos mismos hayan escogido libremente.

2. Los pueblos colonizados u oprimidos tendrán derecho a liberarse de las ataduras de la dominación recurriendo a cualquier medio reconocido por la comunidad internacional.

3. Todos los pueblos tendrán derecho a la ayuda de los Estados firmantes de la presente Carta en su lucha por la liberación de la dominación extranjera, ya sea política, económica o cultural.”

Es de especial relevancia mencionar que también el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa o Acta de Helsinki, de 1975, incluyó la libre determinación entre los principios recogidos. Puntualicemos que aunque el Acta de Helsinki se encuentra fuera del sistema de Naciones Unidas, ésta se vincula a sí misma a través de múltiples referencias en el texto, tanto a la Carta como a la DUDH, mostrando la indudable intención de los Estados signatarios de someter el texto a los mismos principios de Derecho Internacional, de la misma manera entendidos e interpretados.

Como parte del Acta de Helsinki, los Estados signatarios suscribieron una “Declaración sobre los Principios que rigen las relaciones entre los Estados Participantes”. Los diez principios contenidos en la misma son: i) Igualdad soberana y respeto de los derechos inherentes a la soberanía, ii) Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, iii) Inviolabilidad de las fronteras, iv) Integridad territorial de los Estados, v) Arreglo de las controversias por medios pacíficos, vi) No intervención en los asuntos internos, vii) Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, viii) Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, ix) Cooperación entre los Estados y, x) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según el Derecho Internacional.

Como observamos rápidamente, no sólo la libre determinación de los pueblos está recogida explícitamente como principio (viii), sino que otros principios refuerzan éste, siendo parte, de su contenido y difícil concebirlos de manera aislada, tal es el caso de los principios de integridad territorial de los estados, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la igualdad soberana o la inviolabilidad de las fronteras.

Respecto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, que explícitamente se refiere a pueblos y no a estados, el Acta conmina a los Estados participantes a respetar tal principio “obrando en todo momento de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho internacional, incluyendo las que se refieren a la integridad territorial de los Estados”.

Resaltemos, por tanto, la vinculación con la Carta, vinculación mencionada en reiteradas ocasiones en el texto del Acta de Helsinki y su modulación, en el mismo texto, como hemos visto en otros documentos, por los demás principios, como el principio de integridad territorial de los Estados.

Además, siguiendo lo dispuesto en otros documentos internacionales, el Acta de Helsinki especifica que en virtud del principio de libre determinación de los pueblos, “todos los pueblos tienen siempre el derecho, con plena libertad, a determinar cuando y como lo deseen, su condición política interna y externa, sin injerencia exterior, y a proseguir, como estimen oportuno, su desarrollo político, económico, social y cultural”. Finalmente, los Estados participantes, extienden su declaración de manera general, reafirmando que “la importancia universal del respeto y del ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos para el desarrollo de relaciones amistosas, tanto entre ellos como entre todos los Estados” y por ello “recuerdan la importancia de eliminar cualquier forma de violación de este principio”.

En el ámbito de la Unión Europea, el derecho de autodeterminación no ha sido explícitamente declarado en sus tratados constitutivos, pero la suscripción de todos sus miembros de los documentos descritos anteriormente, incluida la Carta de Naciones Unidas, los Pactos Internacionales y el Acta de Helsinki, no dejan lugar a dudas de su compromiso.

La aprobación anual de una Declaración sobre la realización universal del derecho de los pueblos a su autodeterminación

Tampoco la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza, reconoce explícitamente el derecho de autodeterminación como tal, pero establece en su Preámbulo (párrafo 1) que “los pueblos de Europa al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes”, asumiendo así la voluntad de los *pueblos* y no de los estados. El párrafo 3 del Preámbulo indica que la UE, con la intención de contribuir a la preservación y al fomento de los valores comunes de dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad “dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos en el plano nacional, regional y local; trata de fomentar un desarrollo equilibrado (...)”.

La posición de la Unión Europea y de los países que la componen ante los demás miembros de las Naciones Unidas siempre ha sido claramente favorable al reconocimiento de la libre determinación de los pueblos como una norma de *jus cogens* de Derecho Internacional, si bien quedan, como veremos, claroscuros en su aplicación o en la interpretación de su alcance. Esto queda patente en las intervenciones de los representantes de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en los procesos de aprobación de las sucesivas declaraciones anuales sobre la realización universal del

derecho de los pueblos a su libre determinación.

Mencionemos, a modo de ejemplo, la intervención de Chipre, en nombre de la Unión Europea, el día 13 de noviembre de 2012, en la 36ª Reunión del Tercer Comité⁴⁷⁵ que aprobaba el texto reafirmando la importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a su libre determinación. Chipre, reafirmó que “el derecho de autodeterminación es un principio fundamental de Derecho Internacional”, así como un “importante pilar del sistema internacional”. Asimismo, Chipre expresó que el respeto de tal derecho requiere “la celebración de elecciones libres y equitativas en el marco de derechos democráticos”. Reprochando la “estrecha perspectiva” actual del derecho de autodeterminación, concluye que todos tienen el “derecho de autodeterminación que debe ser ejercido de acuerdo con el Derecho Internacional”, si bien precisa que éste se refiere “a los pueblos, no a las naciones”. De modo especialmente controvertido, a nuestro juicio, sugirió que el derecho de autodeterminación “es una precondition para otros derechos humanos”. En la misma sesión, el representante de España presentó su apoyo al texto y a la “autodeterminación como condición para la plena realización de los derechos humanos”, advirtiendo seguidamente de que la comunidad internacional está en la actualidad presenciando situaciones en las que las autoridades establecen relaciones “en su propio interés y denegando su condición de relaciones coloniales, en contra de lo dispuesto en la Carta”⁴⁷⁶.

En términos similares se habían expresado con anterioridad los distintos representantes de la Unión Europea. La explicación del voto de la Presidencia de la UE a la Declaración sobre la realización universal...⁴⁷⁷ ante el Tercer Comité el 16 de noviembre de 2006⁴⁷⁸, presentada por Jane Anttila, Consejera de la Misión Permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas, dejaba claro que “la unión europea considera el derecho de los pueblos a su autodeterminación un principio fundamental de Derecho Internacional”, siendo todavía un “tema muy relevante en el contexto internacional de hoy”. La autodeterminación está “estrechamente asociada con el respeto de todos los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, incluyendo el principio de igualdad entre los ciudadanos”. Por ello, remarcaba Anttila que “el respeto del derecho de autodeterminación requiere la celebración de elecciones libres, regulares y equitativas en el marco de una sociedad democrática. El pleno respeto del derecho de autodeterminación y las libertades fundamentales es también esencial. Los derechos civiles y políticos pueden contribuir al disfrute de los individuos de sus derechos económicos sociales y culturales, subrayando así que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes”.

Como hiciera Chipre en el ejemplo anterior, la Presidencia de la UE recordó que el

⁴⁷⁵ GA/SHC/4054

⁴⁷⁶ Naturalmente, respecto a este último punto, el representante de España tenía en mente la situación de Gibraltar: “en el caso de Gibraltar, la población original abandonó el territorio y los (actuales) habitantes fueron instalados por el poder ocupante. La situación colonial en Gibraltar afecta la integridad territorial de España”.

⁴⁷⁷ A/C3/61/L.46

⁴⁷⁸ PRES06-322EN.

© Isidro García Mingo

derecho mismo, tal y como está redactado en los Pactos Internacionales, es aplicable “*solamente a los pueblos, no a las naciones*”. Por ello, concluyó que “La Unión Europea cree firmemente que la autodeterminación está estrechamente relacionada con el respeto de todos los derechos humanos, *no es correcto sugerir que la autodeterminación como tal es una precondition para el disfrute de otros derechos humanos*”.

En 2009, la explicación de la posición de la Unión Europea ante el Tercer Comité sobre la Declaración sobre la realización universal...⁴⁷⁹ presentada en su representación por la Misión Permanente de Suecia en las Naciones Unidas coincidía con las posiciones expuestas: la Unión Europea considera que el derecho de autodeterminación “es un principio fundamental de Derecho Internacional”, relevante en el contexto actual, estrechamente asociado con el respeto de todos los derechos humanos, que requiere elecciones libres en el marco de sociedades democráticas, reafirmando, como en el caso anterior, que “no es correcto sugerir que la autodeterminación como tal es una precondition para el disfrute de otros derechos humanos”, subrayando después el interés de la UE de desarrollar la calidad teórica del debate incorporando los avances de la doctrina para el bien del interés general⁴⁸⁰.

En resumen, si bien la posición de la Unión Europea es clara respecto al reconocimiento general del derecho de autodeterminación de los pueblos como principio internacional y su consideración del mismo como norma de *jus cogens* de Derecho Internacional, quedan todavía espacios de discusión en cuanto a su alcance, contenido y naturaleza, como prueba que sus representantes afirmen esporádicamente que la autodeterminación es precondition para el cumplimiento de los derechos humanos entre las habituales indubitadas afirmaciones de lo contrario.

§3.3 Fundamentos y contenido del derecho de autodeterminación

Plantearemos a continuación nuestro análisis inicial del derecho de autodeterminación de los pueblos, partiendo de la reflexión sobre cada uno de los tres componentes del término, esto es: sobre si la autodeterminación es un “derecho”; en tal caso, sobre qué contiene el derecho, es decir, qué es “autodeterminación”; y, por último, sobre qué entendemos por “pueblos”, como sujetos de derecho.

Como pronto nos damos cuenta, las respuestas a cada una de las tres cuestiones, que juntas bien conforman una suerte de definición del derecho, no son en absoluta unívocos ni sencillas: por poner algunos ejemplos, los debates acerca de la autodeterminación han tenido por objeto si había de ser considerada principio y/o derecho, por autodeterminación se han entendido desde la no injerencia en los asuntos internos de un estado hasta secesión política, por ejemplo, y distinguido la autodeterminación interna y externa; por pueblos se ha entendido entes asimilables a nacionalidades étnicas, minorías, o incluso estados, y se ha extendido también a la autodeterminación a las personas como

⁴⁷⁹ Resolución A/C.3/64/L.51, de 12 de noviembre de 2009.

⁴⁸⁰ Vid. Doc. PRES09-331EN.

fundamento de la autodeterminación colectiva. La indefinición de los contornos ha afectado obviamente a su eficacia, y su aplicación o su invocación en determinadas situaciones ha ido definiendo, a su vez, el derecho dentro del marco del Derecho Internacional.

Las dificultades señaladas y las controversias doctrinales generadas, entendemos, no nos impedirán establecer unas líneas mínimas de entendimiento de la definición o definiciones del derecho de autodeterminación, que nos habilitarán, en la tercera parte de nuestra disertación, a estudiar la relación del derecho de autodeterminación con el derecho al desarrollo.

El análisis de los tres componentes (derecho-norma, autodeterminación-contenido, pueblos-sujeto), no implica que no mencionemos, con cada uno, los otros dos, pues no es posible estudiar cada uno por separado sin aludir a los demás. Este análisis, además, vendrá acompañado del mismo enfoque tridimensional utilizado en la primera parte de nuestra disertación, acerca del derecho humano al desarrollo, de manera que no quede sin considerarse la justificación, la validez y la eficacia del derecho de autodeterminación de los pueblos.

§3.3.1 La autodeterminación de los pueblos como derecho humano

Si hemos de estudiar, como es nuestra voluntad, la relación entre el desarrollo en cuanto derecho humano y el derecho de autodeterminación, primero hemos de abordar la cuestión de si puede considerarse la autodeterminación también un derecho humano. La comparación entre dos elementos y el estudio de la relación entre ambos, si existiese, tendrá sentido y mayor relevancia cuando los dos elementos comparables pertenezcan a la misma categoría conceptual.

En relación a esta cuestión debemos aclarar, en primer lugar, su naturaleza normativa, si la autodeterminación de los pueblos es un principio o un derecho y, en caso de que sea un derecho, qué tipo de derecho, en concreto, si es un derecho humano. En caso afirmativo, podremos tratar de definirlo, y finalmente estudiar su relación con el derecho humano al desarrollo.

En el apartado anterior hemos visto que al comienzo de la Carta de las Naciones Unidas ya se recoge la autodeterminación de los pueblos como principio, algo novedoso respecto al documento fundacional de la Sociedad de Naciones, que no lo mencionaba, y como principio ha sido declarado e invocado en numerosas ocasiones, siendo destacable su inclusión en los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales, como el Acta de Helsinki. Pero también a partir de la Resolución 545 (VI) de 1952, la autodeterminación ha sido definida como derecho además de principio incorporándose, como hemos ya visto, como derecho humano en los Pactos Internacionales de 1966, de una manera no exenta de críticas, tal y

como describe Gros Espiell⁴⁸¹.

Louis Shon recuerda que “en contraste con la Carta, que habla de un “principio” de autodeterminación, los Pactos hablan de un “derecho” acercándonos así a la controversia sobre si la autodeterminación es un principio o un derecho. Algunos partidarios de la autodeterminación como principio político perciben la autodeterminación como un término nebuloso, argumentando que requeriría una definición más precisa para poder transformarlo en un derecho. De acuerdo con este punto de vista, el principio de autodeterminación debería reconciliarse con otros principios políticos contenidos en la Carta, especialmente aquellos de mantenimiento de la paz internacional y la seguridad⁴⁸²”.

La aceptación de la autodeterminación de los pueblos como *principio* de Derecho Internacional no fue aceptado sin la oposición, desde el punto de vista político, por parte de los representantes de los imperios, una oposición derivada de su propio interés, que lo consideraba peligroso para la propia supervivencia de un sistema político ya en decadencia. Pero tampoco la misma definición de “principio” es, como sabemos, sencilla. No es nuestro interés entrar en un debate acerca de la naturaleza de principios como los sostenidos por Dworkin y Hart. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la inclusión de la autodeterminación como principio en la Carta y los otros instrumentos mencionados, sumado a su constante invocación como norma consuetudinaria internacional, fuentes de Derecho Internacional reconocidas en el artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, le ha otorgado cierta validez, pero condicionada por una imprecisa definición en sus contornos, lo que nos remite a la naturaleza misma de los principios.

Como recuerdan Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, el término “principio” en su relación con el Derecho, es un término polisémico, pudiendo hacer referencia a conceptos diferentes, al menos como: a) norma muy general, b) norma redactada en términos muy vagos, c) norma programática o directriz política, d) norma que expresa los valores superiores de un ordenamiento jurídico, e) norma especialmente importante aunque su grado de generalidad sea bajo, f) norma de elevada jerarquía g) norma dirigida a los órganos de aplicación jurídicos, h) máxima de ciencia jurídica que permite la sistematización del ordenamiento⁴⁸³. Los autores mencionados, considerando que los Derechos están formados por normas y otras entidades como definiciones, y que las normas pueden ser principios o reglas, se propusieron sistematizar las definiciones de principios en una triple clasificación en su dinámica interna, distinguiendo entre: (i) principios en sentido estricto y directrices programáticas; (ii) principios en el contexto de un sistema primario (dirigidos a guiar los comportamientos de la gente), y en el contexto secundario (guiando el ejercicio de los poderes normativos); (iii) principios implícitos y

⁴⁸¹ Gros Espiell, H., “El derecho a la libre determinación de los pueblos y los derechos humanos”, *Estudios sobre derechos humanos I*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, pp. 193–211.

⁴⁸² Sohn, L. B., “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals rather than States”, *The American University Law Review*, Vol. 32, n.1, 1982, p. 49

⁴⁸³ Atienza, M., Ruiz Manero, J., “Sobre principios y reglas”, DOXA, *Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 1991, pp. 101–120.

principios explícitos.

Si para Robert Alexy los principios exigen una optimización de su realización y las normas una realización plena, para Atienza y Ruiz Manero, esto sería cierto respecto de los principios en cuanto directrices programáticas pero no en lo relativo a los principios en sentido estricto. Poniendo el interesante ejemplo de la prohibición de discriminación del art. 14 de la CE, estos autores explican que ésta adquiere todo su sentido en la dimensión negativa de la norma: “la indeterminación característica de los principios la encontramos aquí únicamente en la configuración abierta de las condiciones de aplicación, pero no en la descripción de la conducta prohibida: discriminar”.

De manera parecida, el principio de autodeterminación de los pueblos, vinculado desde su nacimiento con el principio de igualdad de los pueblos, presenta una configuración abierta en su aplicación, con todos los problemas de eficacia y definición de sujeto, etc. que conocemos, y en los que profundizaremos. Pero en su “configuración cerrada”, esto es, respecto a la subyugación de unos pueblos por otros, una vez estos son bien definidos, sería una conducta claramente prohibida. La noción de autodeterminación de los pueblos está íntimamente vinculada, como vemos, y así lo recoge toda la doctrina relevante, con el principio de igualdad de los pueblos. No es concebible una sin la otra en una sociedad internacional como la planteada por la Carta, en la que pueblos libres e iguales son legisladores y sujetos de derecho al mismo tiempo. Como en el ejemplo del principio en sentido estricto del art.14, la dimensión positiva requiere una acción positiva de difícil definición en su alcance, objeto sujeto, etc., pero en su dimensión negativa o en su configuración cerrada, en palabras de Atienza y Ruiz Manero, su alcance es mucho más visible. Esto es especialmente cierto, como veremos, si tenemos en cuenta la dificultad de la definición del sujeto de autodeterminación, que a su vez influencia las configuraciones abierta y cerradas del principio en sentido estricto: mientras que la definición en positivo de un pueblo –que cuando supera el número de personas que los componen que pueden conocerse entre sí puede considerarse un ideal político de la imaginación- la definición es mucho más sencilla cuando un determinado grupo de personas es perseguida por ciertas características étnicas, culturales o religiosas. Dicho de otro modo, mientras que es difícil establecer los límites de un determinado pueblo, estos pueden ser más fácilmente definidos por la persecución ilegítima de un contrario. La definición negativa de un pueblo podría así coadyuvar así identificar la configuración “cerrada” del principio.

La importancia se aprecia claramente cuando recordamos que, históricamente, hasta el fin de la justificación de la legitimidad de la base jurídica de los imperios, que fue liquidada definitivamente con la Carta, la configuración “abierta” era igualmente vaga, pero la “cerrada”, esto es, la prohibición del derecho de conquista y colonización de pueblos/estados pretendidamente inferiores, no estaba claramente asentada, como hoy en día, en el Derecho Internacional, consideraciones sobre su definición, alcance y eficacia aparte.

En cuanto a su naturaleza, el principio de autodeterminación como norma de Derecho Internacional, según el profesor James Summers, se encuentra a su vez definida por dos

doctrinas en tensión⁴⁸⁴, tensión provocada por la interacción entre la autodeterminación como principio de Derecho Internacional y la autodeterminación como principio nacionalista. Esta tensión, según Summers, a su vez “define el contenido de la norma” un contenido que siempre se encuentra retenido entre dos estándares de legitimidad en competencia mutua, lo que significa que la satisfacción de uno dificulta la satisfacción del otro. Para Summers, la autodeterminación asume, por un lado, que la base para la legitimidad política del estado es la nación o el pueblo, entendido como grupo unido por vínculos de auto-identificación, lengua, religión, vida política e historia, por lo que el “cómo identificamos una nación o pueblo también conforma qué entendemos por autoridad política legítima y la cuestión de la definición del pueblo se convierte en una cuestión inherentemente política”, pero, por otro lado, es una norma de Derecho Internacional, que es definida y reconocida por estados, es decir, encuentra su legitimidad en los estados, no en los pueblos.

Los estados, recuerda Summers “son lo sujetos centrales del Derecho Internacional y el nacionalismo es central para legitimar los estados”⁴⁸⁵. El Derecho Internacional, sabemos, tiene sus propios estándares de legitimidad -tratados como se indica en la Convención de Viena, costumbre internacional, etc.-, pero que nacen de los estados. Así, podríamos decir que “la autodeterminación es un derecho de pueblos, pero (...) *también un producto de los estados*”. Por ello, según la doctrina nacionalista, habría unos pueblos –o nacionalismos - con control de un estado y otros sin estados, siendo aquellos que controlan estados los que decidirían sobre otros sin estado, algo que estos últimos considerarían, por supuesto, “perverso”, oponiendo estado a pueblo, rechazando de plano el control estatal sobre el principio en el marco del Derecho Internacional, y finalmente arrinconando al Derecho internacional como instrumento legítimo respecto de sus intereses políticos.

La doble y contradictoria fuente de legitimación nacionalista/iusinternacionalista tiene como resultado, siempre según Summers, que el principio de autodeterminación pueda ser criticado, por un lado, por no ser universal y no haber sido aplicado a todos los “auténticos” pueblos del mundo, sea cual sea su definición, y a la vez, ser criticado por no poder definir a quién aplicarse, ya que los estados son los que definen de acuerdo a sus intereses, lo que resulta en una incoherencia que resta credibilidad a la misma norma.

Además, mientras que la doctrina nacionalista apuesta por una aplicación universal sin restricciones de los “auténticos pueblos”, la autodeterminación como principio de Derecho Internacional, por el contrario, sí que admite una ponderación con otros principios: “el Derecho Internacional (...) está compuesto de principios legales y la manera cómo estos principios encajan entre sí determina su contenido. Esto sucede especialmente en el caso de la autodeterminación, que ha sido invariablemente definida por una serie de equilibrios entre diferentes principios (autodeterminación vs. integridad territorial, autodeterminación vs. soberanía estatal, autodeterminación vs. inviolabilidad de las fronteras, etc.)”.

⁴⁸⁴ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law”, *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005, pp. 325-354.

⁴⁸⁵ Summers, J., “The Right of Self-Determination...”, op. cit., pp. 325-354.

Esta ponderación de principios es distinta de la ponderación de los criterios de legitimidad pueblo/nacionalismo y estado/Derecho Internacional: “el método preferido de navegación entre estos dos estándares ha sido el equilibrio de principios que se presenta [distinto a la ponderación de principios de Derecho Internacional], bajo esta perspectiva, muy problemático”⁴⁸⁶.

Por otro lado, para James Crawford la “autodeterminación fue un grito de batalla mucho antes que un principio legal, y algunos dirían que sólo de manera precaria es un principio legal hoy en día”⁴⁸⁷. La autodeterminación encuentra problemas en su manifestación jurídica: no es directamente justiciable, pero ha sido invocada para alcanzar acuerdos y resoluciones. Para Crawford, en los sistemas normativos pueden existir normas o estándares que tienen meras funciones directivas. “Estas normas *blandas* forman parte del discurso legal, pueden ser capaces de influenciar los resultados, pero no obligan en sus propios términos. Las máximas de derecho [principios generales] (...) son de este tipo. Son principios directivos. Puede ser que la autodeterminación sea también de este tipo; un valor legal pero no una regla jurídica. Aunque esto sea así, sin embargo, esto no puede decidirse en abstracto. Debemos ver como una norma putativa funciona en un determinado sistema legal y, especialmente en el caso de la autodeterminación, requiere una indagación histórica tanto como analítica”. Según Crawford no podemos decir que la autodeterminación como norma se encuentre necesariamente “en un estado de incoherencia, pero sí que se ha desarrollado desde luego de una manera contingente y a menudo parcial e incompleta”, concluyendo con lo que él percibe como paradoja: que el principio de autodeterminación es una norma que existe pero que no se conoce a que se refiere, su contenido, la paradoja *lex lata, lex obscura*: “nadie tiene muy claro qué significa, al menos fuera del contexto colonial (...) ¿cómo puede existir un concepto legal, nada menos que un derecho, que es generalmente admitido que existe, cuando nadie sabe qué significa?”⁴⁸⁸. En otra parte, sin embargo, Crawford distingue el principio político, el principio jurídico y el derecho, y arguye que la autodeterminación es encuadrable en las tres categorías, según Karen Knop⁴⁸⁹.

Karen Knop considera, por su parte, que podemos preguntarnos sobre si la autodeterminación es un principio o una regla. Distingue que esta cuestión es diferente a la de si es un principio político o una norma jurídica. Se refiere así a “la menos advertida cuestión de qué tipo de norma jurídica es (...)” aclarando que “tampoco estamos en el terreno de “principios generales de derecho”, reconocidos como fuente de Derecho Internacional en el art. 28 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (...)”⁴⁹⁰. Para esta autora, en la literatura iusinternacionalista “la tendencia es a proceder como si la

⁴⁸⁶ Summers, J., “The Right of Self-Determination...”, op. cit., pp. 325-354.

⁴⁸⁷ Crawford, J., “The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future” en Alston, P. (ed), *People's Rights*, Academy of European Law, European University Institute, Oxford University Press, Oxford, New York, 2001, p. 8

⁴⁸⁸ Crawford, J., “The Right of Self-Determination...”, op. cit., p. 10.

⁴⁸⁹ Knop, K., *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 33.

⁴⁹⁰ Knop, K., *Diversity and Self-Determination...*, op. cit., p. 29 y nota pie de pág. n.9

autodeterminación sólo pudiera ser una regla. El resultado es o bien la formulación de una norma bien definida, a menudo estableciendo que sólo las colonias tienen derecho a la autodeterminación, o la consternación porque no puede derivarse una norma precisa capaz de guiar igualmente a los estados y a los nacionalistas, por lo que el Derecho Internacional es marginado en los conflictos nacionalistas”⁴⁹¹.

Contra la seguridad interpretativa de una regla como norma bien definida, Knop cree que si la autodeterminación es considerada un principio así como, o en vez de, una regla, “hay más espacio para su interpretación que si es considerada una regla solamente”⁴⁹². Por otro lado, si la autodeterminación es entendida sólo como una regla, una regla referente a las colonias, entonces “cualquier interpretación alternativa de la regla debe poder responder a todos los casos de independencia o intentos de independencia en todo el mundo en los últimos cincuenta años y las reacciones de los estados hacia ellos”. Por ello, si interpretamos la autodeterminación como un principio que se equilibra con otros, como el de la integridad territorial, “la interpretación no se basa en la consideración exhaustiva de la práctica de los estados. Mientras los principios ayudan a ampliar la participación y a situar a los participantes en el mismo nivel, los principios no son normas duras y de rápida aplicación, mientras que las reglas sí lo son. Por tanto, parecería preferible una democratización de las reglas (...). En este sentido, el debate acerca del valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General (...) trata precisamente sobre el reconocimiento de las normas basadas en el voto mayoritario de todos los estados”⁴⁹³. Vemos así que la consideración de regla parece, según esta autora, que fuera directamente exigible y no requiriera, como los principios, ser equilibrada con otras.

El profesor Summers, mencionado anteriormente, se pregunta, sin embargo, si la autodeterminación, en cuanto norma, “es adecuadamente expresada en Derecho Internacional como un principio o como un derecho. Esta cuestión, a cambio, requiere dos adicionales: ¿cuál es la diferencia entre autodeterminación como principio y como derecho; y cuál es la importancia de que sea uno u otra? (...) Una escuela de pensamiento sostiene que la autodeterminación es mejor expresada como un principio de Derecho Internacional. Sin embargo, otra (...) propone que la autodeterminación ha sido transformada de un principio en un derecho”⁴⁹⁴.

Según Summers, la idea de que la autodeterminación es tanto un principio como un derecho “sugiere que podemos dibujar una clara distinción entre los dos”, lo que para él, en la práctica, se ha demostrado difícil. En distintos instrumentos y documentos internacionales, así como en los distintos borradores y discusiones de los mismos, y tribunales internacionales en numerosas ocasiones⁴⁹⁵, ambos términos han sido utilizados

⁴⁹¹ Knop, K., *Diversity and Self-Determination...*, op. cit., p. 30

⁴⁹² Knop, K., *Diversity and Self-Determination...*, op. cit., p. 32

⁴⁹³ Knop, K., *Diversity and Self-Determination...*, op. cit., p. 44

⁴⁹⁴ Summers, J. *Peoples and International Law: How Nationalism and Self-Determination Shape a Contemporary Law of Nations*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Holanda, 2007, p 379 y ss.

⁴⁹⁵ Recuerda Summers que la Corte Internacional de Justicia ha usado tanto “principio” como “derecho” en los casos Sáhara, Timor Oriental, Disputa Fronteriza Burkina Faso/Mali e indirectamente en el Namibia. También los tribunales canadienses y rusos en los casos sobre las secesiones de Quebec, Tatarstán y Chechenia, y la Comisión Badinter en su Opinión n. 2, y el Comité para la Eliminación de la

indistintamente y, a menudo, de manera combinada en la expresión “principio de derecho de autodeterminación”, haciendo sospechar a nuestro autor que este uso indistinto “por gente tan preparada y tan cuidadosa con las palabras sugiere que hay algo más que un simple descuido lingüístico (...). Las descripciones de un principio y de un derecho también tienden a apuntar a que la diferencia entre ellas reside en el énfasis y la perspectiva (...)”⁴⁹⁶. India, recuerda Summers, durante los debates de redacción del borrador de los Pactos Internacionales en 1955 argumentaba en el Tercer Comité que principio y derecho “son dos aspectos de la misma realidad: lo que era un principio y una obligación para los gobernantes era un derecho para los gobernados”⁴⁹⁷.

De manera similar, para Summers podría considerarse *principio* en cuanto que la autodeterminación *es aplicada* a pueblos, como objetos, de manera sopesada con otros principios, mientras que la autodeterminación como *derecho* es *sostenida* por pueblos como sujetos que son los titulares del derecho, *contra* los estados, que tienen obligaciones hacia estos sujetos derivadas del derecho, percibiéndose así el derecho de manera activa respecto al principio, de manera que la autodeterminación es “exigida por un pueblo más que aplicada a ellos, y la palabra misma se carga de significado emocional y político”. Por otro lado, como hemos indicado anteriormente, la tensión entre la doctrina nacionalista de derechos de los pueblos y el Derecho Internacional de los estados, siendo los estados y los pueblos categorías diferentes, de intereses a menudo contrapuestos, condiciona su contenido y la consideración de principio o derecho.

La definición del sujeto se perfila, por tanto, fundamental, como veremos con más detalle en el apartado correspondiente, no sólo para definir el contenido o el alcance -¿pertenece sólo a un proceso de descolonización?- sino que afecta también a la consideración de la naturaleza de la autodeterminación como norma. Tanto las consideraciones de principio como de derecho de autodeterminación son dependientes de la identificación del pueblo, pero según Summers, la consideración de la autodeterminación como derecho pone mucho más énfasis en la identificación del sujeto, porque “un grupo no puede ejercitar un derecho a menos que sea un pueblo, y así la identificación del pueblo es un prerequisite para su goce (...) un principio no podría posiblemente existir por un largo tiempo en su forma general, identificando a los pueblos sólo en su aplicación”.

Así, mientras que, por un lado, la autodeterminación podría expresarse mejor como principio ante la “casi insuperable dificultad de definir o identificar la categoría de personas en posesión del derecho”⁴⁹⁸, por otro lado, la consideración de la autodeterminación como derecho o la “transformación de un principio en un derecho” ha

Discriminación Racial en la Recomendación General XXL (48). El uso combinado de principio y derecho se registra ya en la reunión de la Comisión de Juristas de 1920 en la que se expresó que “el principio de que las naciones deben tener un derecho a la autodeterminación”.

⁴⁹⁶ Summers, J., *Peoples and International Law: How Nationalism and Self-Determination Shape...*, op. cit. p. 379 y ss.

⁴⁹⁷ Doc n. A/C3/SR651

⁴⁹⁸ Posición de Gran Bretaña plasmada en Uk, A/AC.125/SR.69 (1976). P. 18, recogida por Summers, J. *Peoples and International Law: How Nationalism and Self-Determination Shape a Contemporary Law of Nations*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Holanda, 2007, p. 383.

permitido el histórico proceso de descolonización.

Por ello, concluye Summers, “no sería irrazonable decir que *el reconocimiento del principio* de autodeterminación *potencialmente implica* un *derecho* para los pueblos y *obligaciones* para los estados, cada uno conteniendo distintos aspectos del otro. Esto definitivamente respondería al uso intercambiable de los términos”⁴⁹⁹.

Además de por los sujetos, la naturaleza normativa de la autodeterminación parece poder depender también de su contenido. Pensemos en los debates sostenidos en 1955 en el Tercer Comité de Naciones Unidas en torno a la inclusión del derecho en los borradores de los Pactos Internacionales: aquellos que defendían la autodeterminación como principio y no como derecho argüían que, si bien un principio tenía una gran fuerza moral, era demasiado complicado trasladarlo a una norma de obligado y directo cumplimiento. Así, paradójicamente, cierta indeterminación de la norma y una limitación como es no incluir la secesión en el concepto de autodeterminación de forma general fue decisivo para lograr un acuerdo de la autodeterminación como derecho y no sólo como principio.

Esto no acabó, naturalmente, con los debates. Recordemos que desde el período de entreguerras al menos cuatro doctrinas básicas se enfrentaban en torno a la autodeterminación: la autodeterminación entendida en el sentido democrático wilsoniano, la tradición nacionalista primordialista europea, la variante marxista leninista y la doctrina de los imperios que defendían posturas preliberales, que no reconocía derecho ni principio de autodeterminación alguna en ningún sentido, sino el derecho de los más fuertes o de las “civilizaciones más avanzadas”. Es en el sentido anti-imperial y anti-colonizador en el que existe un consenso que permite hablar de un derecho a la autodeterminación, no respecto a las demás doctrinas.

Así, por ejemplo, mientras que en la tradición europea es común encontrar quien entienda la autodeterminación de los pueblos exclusivamente en el sentido de la doctrina nacionalista primordialista, indicando la legitimidad y conveniencia de hacer coincidir los límites de una comunidad étnica, lingüística o religiosa (nacional en el sentido primordialista) con los límites de la comunidad política, en particular la estatal (esto es, la comunidad en la que se reparten recursos y derechos), esta posición ha debido convivir, a partir de la Segunda Mundial, con la autodeterminación entendida como la norma que proscribe la invasión y limita la injerencia extranjera, es decir, de fuera de la unidad político-constitucional, independientemente de su composición étnica, una acepción que ha sido también fundamental durante el proceso de descolonización (pensemos en la riquísima multiculturalidad de los nuevos estados africanos, por ejemplo) extendida gracias al apoyo político y doctrinal presente en países multiculturales con fuerte presencia y larga tradición de patriotismo civil, como los países americanos.

Así, hoy en día, esta acepción de autodeterminación –veremos otras-, este mínimo

⁴⁹⁹ Summers, J., *Peoples and International Law: How Nationalism and Self-Determination Shape...*, op. cit., p. 382

consensuado que prohíbe la colonización y la guerra de conquista, la subyugación de unos pueblos por otros, pueblos que son fundamentalmente iguales en dignidad, puede ser considerado *jus cogens*; una norma que complementada con la obligación de mantenimiento de la paz se considera incuestionable, según la doctrina mayoritaria, en el actual marco de Derecho Internacional. Es este el punto de partida desde el que tantos autores hablan de un indubitado “derecho” de autodeterminación.

Esto es así porque el siglo XX nos ha legado la enseñanza de que una concepción exclusivamente nacionalista primordialista de la autodeterminación no formaría parte esencial del derecho de autodeterminación: una que considera el estado mero instrumento y la democracia sólo una forma de gobierno de una mayoría que ignora la minoría, una en relación con la superior identidad de la etno-nación que trasciende al individuo y eventualmente sus derechos, una que debe aspirar a sus territorio a pesar de la integridad territorial de otros, no es compatible con un mundo multicultural y con aspiraciones de un creciente respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de una paz estable.

Pudieran algunos nacionalistas primordialistas defender desde su punto de vista la autodeterminación como un *principio* político o directriz a equilibrar con otros principios, como otros no nacionalistas han hecho, porque tal consideración puede ser entendida como cesión de parte de un bien por otro bien, -la paz, digamos- pero difícilmente podrían considerar la autodeterminación como un *derecho ilimitado* de *todos* los pueblos (aunque sí del propio, naturalmente), y mucho menos un derecho con el ser humano como sujeto central, pues la máxima realización del ideal según su doctrina requeriría forzosamente la frustración de la realización de la máxima aspiración ideal de otro.

En los casos más extremos, debido precisamente a que la máxima aspiración de uno no coincide con las fronteras de la máxima aspiración ideal de otro, puede defenderse, como así han hecho históricamente los más exaltados defensores de la doctrina nacionalista de la congruencia etnocultura/estado, la subyugación de otros pueblos para alcanzar su propio ideal, pues una de las consecuencias de la máxima realización del ideal sería precisamente la posibilidad de traspasar fronteras –sólo instrumentos- en nombre de la reificación de la nación propia, un ente superior trascendente. El valor meramente instrumental tanto del estado y como de la democracia, concebida por ellos como mera mayoría, permite situarlos por debajo de cualquier acción encaminada a la reificación de sus ideal de congruencia estado/realidad etnocultural, en conformidad a una suerte de derecho eterno –puro ideal-, que está en la base precisamente de la ideología en nombre de la cual se violaron fronteras, se forjaron imperios y consumaron guerras durante todo el siglo XX.

El consenso general en torno a la prohibición del imperialismo y el colonialismo, doctrinas civilizadoras defendidas hasta no hace tanto tiempo-, como piedra angular del contenido de la autodeterminación, que permite hablar de un derecho autodeterminación como tal, fue descrito por Gros Espiell⁵⁰⁰:

⁵⁰⁰ Gros Espiell, H., “En torno al derecho a la libre determinación de los pueblos”, *Anuario Español de Derecho Internacional*, III, Universidad de Navarra, 1976, p. 52.

“Para determinar la naturaleza actual de la libre determinación es preciso valorar y comprender el enorme cambio producido en este concepto en los últimos años. Lo que en el Pacto de la Sociedad de Naciones y en el Derecho Internacional de aquella época era un principio vinculado directamente al de las nacionalidades, con aplicación preferente, o mejor dicho casi exclusiva en Europa, que no implicaba la negación del colonialismo en África, Asia y América Latina (...) se transformó (...) especialmente después de 1960, en un principio fundamental de necesaria aplicación universal, en un derecho de todos los pueblos y en un criterio imperativo de Derecho Internacional que determinó, con el fin del colonialismo tradicional (...) un cambio completo de la sociedad internacional”.

La conexión entre la autodeterminación y los derechos y libertades de la persona humana (idea según Gros Espiell prácticamente ignorada en 1948 al comprobar que la Declaración Universal de Derechos Humanos no hace referencia a la autodeterminación de los pueblos) está articulada para este autor como *principio* de Derecho Internacional, como prerrequisito o condición necesaria, esto es como *medio* para la realización de los otros derechos, además de cómo fin, como *derecho* por sí mismo: “la libre determinación se conceptualiza hoy como un derecho de la persona humana, como una condición o prerrequisito necesario para la existencia real de los demás derechos y libertades del hombre y como un derecho de los pueblos sometidos a una dominación colonial extranjera. Todo ello sin perjuicio de que sea asimismo un principio fundamental de Derecho Internacional de carácter imperativo”⁵⁰¹.

En otro artículo suyo, Gros Espiell remarca que, además de ser la libre determinación un presupuesto o condición ineludible para la posibilidad de existencia de todos los demás derechos humanos, puede ser un principio pero también un derecho: “(...) hoy la libre determinación es no sólo un principio (...) sino que es además un derecho, es decir, que constituye el objeto de una relación jurídica, que puede tipificarse como un derecho subjetivo, cuyos titulares, en cuanto derecho colectivo, son actualmente los pueblos sometidos a una dominación colonial y extranjera, y en cuanto derecho individual, todos los seres humanos”⁵⁰². Y es que para el autor la dicotomía derechos colectivos o de los pueblos / derechos individuales ha sido teóricamente superada. Como derecho individual, la autodeterminación sería también “un derecho humano, en cuanto que en el Derecho Internacional de hoy todo hombre posee el derecho a que el pueblo al que él pertenece, si está sometido a una dominación colonial y extranjera, pueda actuar y luchar para conseguir un status que sea la consecuencia de la consagración de este derecho a la libre determinación”⁵⁰³, entendiendo independencia u otras formas políticas.

Aún coincidiendo en general con la postura de Gros Espiell, podemos, sin embargo, llamar la atención sobre lo siguiente: la alternativa a (un) tradicional punto de vista, típicamente europeo, de entender la autodeterminación sólo en relación con las nacionalidades en suelo europeo a partir de la desmembración de los imperios obviando el atroz sistema imperial fuera de Europa, a nivel mundial, no puede dejar sin respuesta la

⁵⁰¹ Gros Espiell, Héctor, “En torno al derecho a la libre determinación...”, op. cit., p. 54.

⁵⁰² Gros Espiell, Héctor, “El derecho a la libre determinación de los pueblos y los derechos humanos”, *Estudios sobre derechos humanos I*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, p. 204.

⁵⁰³ Gros Espiell, Héctor, “El derecho a la libre determinación...”, op. cit., p. 194.

cuestión original. Como vaciando de contenido un vaso para llenar otro, Gros Espiell no aborda el problema de la secesión de las nacionalidades, lo que no sorprende en el ambiente político americano, en el que el nacionalismo civil es especialmente fuerte, pero que sigue exigiendo respuesta en otros lugares, especialmente en Europa. Si bien considera el imperialismo como doctrina occidental, no son menos occidental algunas versiones de la doctrina nacionalista primordialista que considera la autodeterminación como un derecho que sólo ha de aplicarse a pueblos predefinidos por características culturales específicas, de manera que sean tales límites coincidentes espacio-temporalmente con el de la soberanía política.

Además, no sólo se han llevado a cabo ocupaciones y subyugaciones *a pesar* del derecho de autodeterminación de otros (caso de guerras imperiales iniciadas en nombre de la civilización del otro), sino *en nombre de* tal derecho de autodeterminación propia (caso de justificación inicial para la guerra de la Alemania nacionalsocialista), en el primer caso obviando o despreciando la existencia del derecho de autodeterminación, en el segundo excediendo el propio a pesar del ajeno, en contra de la legislación internacional, y obviando los derechos individuales. En ambos casos vulnerando todos los derechos humanos hoy reconocidos. Por ello coincidimos con Gros Espiell cuando admite que “esta relación necesaria entre los derechos humanos y el derecho a la libre determinación es hoy algo evidente y universalmente aceptado, aunque continúan existiendo, naturalmente, diferencias de enfoque y zonas en las que no se ha llegado a un claro consenso conceptual”⁵⁰⁴.

Leyendo a nuestro autor, pudiera parecer sencillo delimitar quién es “extranjero”, cuando en realidad, en nuestras ampliadas comunidades actuales, tal delimitación nunca puede ser algo más que aproximada, a menos que obviemos la posibilidad de las identidades mezcladas o múltiples (desde el punto de vista identitario) o bien nos refiramos a “extranjero” desde un punto de vista estrictamente civil, respecto a comunidades puramente políticas definidas *a priori* (estados u otros territorios). El extranjero del estado es cognoscible respecto a una realidad jurídico-administrativa material, mientras que el extranjero de la nacionalidad es incognoscible en sus contornos ya que depende de ideales imaginarios, culturas susceptibles de entrelazarse y la actividad volitiva del sujeto (actividad que puede ser también voluble). De hecho, la multiplicidad de identidades, que son contingentes y evolutivas, la proyección imaginaria (ideológica) de las comunidades culturales en unidades políticas, hace pocas cosas más difíciles que acordar quién es “extranjero”, el “otro”, especialmente en sociedades multiculturales, aunque en la sociedades étnicamente divididas y en conflicto se tienda a marcar las diferencias y a evitar, siquiera forzosamente, las zonas grises de las identidades múltiples. Si consideramos “extranjero” sólo al que tiene nacionalidad civil diferente, al de distinto pasaporte, los argumentos de Gros Espiell no admiten hoy discusión en la óptica del Derecho Internacional, pero es incompleto respecto al problema de las nacionalidades en sociedades con fuerte presencia del primordialismo y/o redistribución de recursos cuando la autodeterminación (incluyendo secesión) se plantea fuera de los casos de colonialismo clásico de pueblos oprimidos. Si consideramos, por el contrario, que el extranjero puede

⁵⁰⁴ Gros Espiell, H., “El derecho a la libre determinación...”, op. cit., p. 204.

ser delimitado solamente por su identidad cultural y es irrelevante la nacionalidad civil/ciudadanía, tendremos problemas con la delimitación del sujeto de derecho y con seguir planteando la cuestión dentro del marco del Derecho Internacional. Una variación de esta posición, que veremos más adelante, es cuando las entidades están no (sólo) cultural sino jurídicamente delimitadas en el interior de un estado, lo que permite una identificación relevante del sujeto/pueblo en oposición al estado, algo presente claramente en el sistema colonial, pero no tan claro en situaciones en las que entidades culturales jurídicamente establecidas en el interior de un estado (constitucional), en virtud del derecho de autodeterminación, evolucionan en sus aspiraciones conforme a sus intereses particulares sin que hubiera mediado un proceso de colonización imperial previo (en este caso los debates se enmarcarían, como sabemos, en lo justo o pertinente de las obligaciones comunes derivadas de la redistribución de derechos y recursos, pero difícilmente podría utilizarse la expresión “dominación extranjera” como argumento más allá de la retórica emocional política, ya que hubo una expresión de voluntad libre anterior expresada en un proceso constitucional).

Este pequeño excursus es relevante porque una afirmación tan vehemente sobre la autodeterminación como derecho y no como principio se entiende por una concepción concreta del sujeto y del contenido del derecho.

Coincidimos con Gros Espiell en que hoy es indubitavelmente un derecho que un pueblo se encuentre libre de la colonización por parte de otro, que es considerada por todas las partes implicadas como “colonial” y “extranjero”, pero no soluciona el problema de la definición precisa de la “extranjería” más allá de:

- (a) la estatalidad o nacionalidad civil como unidades políticas relevantes (estados, territorios no autónomos, etc.) para el Derecho Internacional.
- (b) los casos de colonialismo o imperialismo, en que los distintos sujetos bajo el mismo poder imperial tienen distintos derechos, están jurídicamente bien delimitados, son distintos y unos son obviamente subyugados por los otros.

En ambos casos, el estatus jurídico puede delimitar los límites máximos de la pertenencia a la comunidad, hasta el último individuo, si se me permite la expresión, de una manera tajante y precisa imposible de realizar en una aproximación cultural e identitaria, sin caer en graves violaciones de derechos individuales.

Dicho de otro modo, podríamos decir, la definición identitaria cultural “positiva” (decir quién es qué cosa) del individuo es extremadamente compleja por la natural multiplicidad identitaria que gozamos, pero la definición “negativa” de la identidad (quien es discriminado de ciertos derechos o perseguido) es más sencilla y apta para la identificación de los sujetos.

Por su parte, Aureliu Cristescu, Relator Especial de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías⁵⁰⁵, sin embargo, aborda brevemente el

⁵⁰⁵ Creada en 1947 con 12 miembros, fue renombrada en 1999 como “Subcomisión de Promoción y
© Isidro García Mingo

problema de la secesión en su conocido estudio de 1981, a diferencia de Gros Espiell. Para Cristescu, de tradición identitaria tan diferente al uruguayo (a pesar de que ambos defiendan la autodeterminación como derecho y estén en contra del imperialismo), la referencia a la secesión es obligada y la cuestión nacional imposible de ignorar, como es imposible obviar que en nombre de la autodeterminación se invadieron fronteras y derribado regímenes constitucionales durante la Segunda Guerra Mundial, aunque “en el momento presente, el objetivo del principio [de autodeterminación] es la liberación de los pueblos coloniales”⁵⁰⁶. Este principio es también un derecho de autodeterminación: “es claro que las provisiones relevantes de la Carta han sido interpretadas con los años con un espíritu cada vez más progresista. Hoy es reconocido de manera general que el concepto de autodeterminación conlleva derechos y obligaciones legales internacionales y que definitivamente existe un derecho de autodeterminación”⁵⁰⁷.

*La consideración de la autodeterminación como principio, como derecho, como ambos, depende, por consiguiente, tanto de la definición de su contenido como de la de los sujetos titulares, dado que la norma ha sido “interpretada de diferentes maneras en diferentes lugares, levantando problemas sensibles como el de las minorías o el derecho de secesión”*⁵⁰⁸. Así notemos como Cristescu, al reflexionar sobre el derecho de secesión (que abordaremos en el apartado correspondiente), lo relaciona con el principio y no con un derecho de autodeterminación: “El principio de iguales derechos y autodeterminación, tal y como está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, no garantiza un ilimitado derecho de secesión a las poblaciones viviendo en un territorio de un estado soberano e independiente, y un derecho tal no puede ser considerado como un provisión *lex lata*. Un derecho de secesión apoyado o animado por estados extranjeros estaría claramente en patente contradicción con el respeto a la integridad territorial de los estados sobre la que se basa la igualdad soberana de los Estados (...)”⁵⁰⁹.

En resumen, notablemente influida por las consideraciones en torno al sujeto y el contenido, la norma que establece la autodeterminación es considerada por Cristescu un principio establecido en el Derecho Internacional por vía convencional –véanse las fuentes- y por vía de derecho consuetudinario que ningún instrumento le confiera un carácter perentorio como *jus cogens*.

Otros autores, sin embargo, como Ian Brownlie y Gros Espiell, sí consideran la norma de *jus cogens*, aunque en un significado limitado⁵¹⁰.

Antonio Cassese, por su parte, defiende que existen razones para considerar el principio de autodeterminación parte del *jus cogens*, si bien merece la pena recordar que “no es coincidencia que siempre que los Estados se han referido a la autodeterminación como

Protección de los Derechos Humanos”.

⁵⁰⁶ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981. Informe: E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1. Pár. 173, p. 26

⁵⁰⁷ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., Párrafos 94 y 95, p.18

⁵⁰⁸ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 8

⁵⁰⁹ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 26

⁵¹⁰ Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination. The accommodation of conflicting rights*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996, p. 45

parte del *jus cogens*, no han especificado las áreas de aplicación de la autodeterminación, lo medios o métodos de su implementación, o el resultado permitido de la autodeterminación. Los estados se han referido generalmente al “principio” (*latu sensu*) o sencillamente, a la autodeterminación. De esto se sigue que todo el conjunto de estándares legales (el principio general y las normas consuetudinarias) sobre autodeterminación deberían ser considerados como pertenecientes al cuerpo de normas perentorias⁵¹¹.

En cuanto principio, la autodeterminación se interrelaciona y equilibra con los demás principios de Derecho Internacional: buena fe en las relaciones internacionales, cooperación internacional, igualdad soberana, no intervención, etc.

Para Cristescu y otros autores, cuando hablamos de la autodeterminación como derecho (creo para mantenerse en línea y no contradecir sus características no perentorias como principio), hablamos de un derecho *colectivo* explícitamente diciendo: “el derecho de los pueblos a la autodeterminación no es un derecho individual; es un derecho colectivo, el cual, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ha sido distinguido de otros derechos individuales establecidos anteriormente y ha sido proclamado como derecho perpetuo y universal”⁵¹².

Como vemos, la solución del europeo Cristescu es diferente de la del americano Gros Espiell; el primero, en su preocupación por la secesión, reconoce el principio general pero intuye los problemas del paso de la abstracción a la concreción, mientras que Gros Espiell, reconociendo la interdependencia individuo/colectividad que se consagraria en el Congreso de Viena de 1993, obvia o ignora en su mayor parte los problemas subjetivos que la doctrina nacionalista plantea, típica pero no exclusivamente, presente en Europa. Ambos, sin embargo, coinciden en considerar la importancia de reconocer la autodeterminación como un derecho humano. Reflexiona Cristescu que: “el reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación como uno de los derechos humanos (...), está ligado con el reconocimiento de la dignidad humana de los pueblos, ya que hay una conexión entre el principio de igualdad de y la autodeterminación de los pueblos, por un lado, y el respeto de los derechos humanos y la justicia por el otro. El principio de la autodeterminación es el corolario natural del principio de libertad individual, y la subyugación de pueblos a dominación extranjera constituye una negación de los derechos humanos fundamentales... El derecho de los pueblos a su autodeterminación y otros derechos humanos (...) tienen el mismo fundamento: el reconocimiento de la dignidad humana”⁵¹³.

Aunque la inclusión de la autodeterminación como derecho humano en los Pactos Internacionales, ampliamente apoyada por la doctrina, supuso un impulso al proceso descolonizador, no se ha aceptado su reivindicación directa por particulares como pudiera entenderse de la lectura del artículo 2 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el cual estipula que (...)) “todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una

⁵¹¹ Cassese, A., Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. 140

⁵¹² Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981. Informe: E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1, p. 30

⁵¹³ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current...*, op. cit., p. 31

comunicación escrita”). Las peticiones particulares han sido excluidas como el Comité de Derechos Humanos ha dejado claro en una serie de casos, (vid. i.e. *Lubicon Lake Band v. Canadá*⁵¹⁴ o *Ms. Gillot v. Francia*⁵¹⁵) de nuevo por el problema de identificación del sujeto titular del derecho de autodeterminación. Para algunos autores, como Virally, estas imprecisiones no implican la inexistencia de la autodeterminación como derecho, sino que muestra simplemente un estado de construcción: “un derecho que es impreciso, o incluso marcado por la contradicción, es también una norma eminentemente evolutiva”⁵¹⁶.

La consideración del derecho de autodeterminación como un derecho colectivo, a pesar de su no justiciabilidad o directa exigibilidad por individuos, no ha excluido para otro sector de la doctrina, como hemos visto, su caracterización como derecho individual y humano.

Esta caracterización, en cualquier caso, ha requerido una argumentación adicional. Recordemos que la autodeterminación fue excluida expresa y conscientemente como derecho de la Declaración Universal de 1948, manteniéndose como principio. Estos argumentos adicionales se han realizado a través de diversas vías (además de los emanados de su positivación como derecho en la regulación iusinternacional aprobada la DUDH, como es muestra su inclusión como derecho humano, no sin debate, en los Pactos Internacionales), pero podemos mencionar aquí dos vías complementarias: por un lado, (i) considerando los derechos colectivos como derechos humanos en su conjunto, y por otro, (ii) considerando al ser humano como sujeto destinatario principal del derecho de autodeterminación y centro y fin último del Derecho Internacional. Aunque las conclusiones puedan parecer parecidas, las vías argumentativas son distintas. Resumamos que la inclusión del derecho de autodeterminación como derecho humano, tal y como se prevé en los Pactos internacionales, hubo de requerir un nuevo paradigma histórico propiciado sólo tras la Segunda Guerra Mundial, un escenario en el que: los derechos humanos se hicieron relevantes a nivel internacional para los estados, en el que los derechos colectivos e individuales comenzaron a intuirse como complementarios, y en el que a través de los derechos colectivos los derechos individuales se proyectaron en los grupos, los derechos humanos escaparon del único control de la soberanía estatal y las personas se situaron en la centralidad del Derecho Internacional. El profesor Louis Sohn describió de manera hermosa y sencilla el proceso histórico:

“Las modernas prescripciones del Derecho Internacional sobre los derechos humanos son el resultado de una revolución silenciosa de los años cuarenta, una revolución que ocurrió casi inadvertida en aquel

⁵¹⁴ *Lubicon Lake Band v. Canada*, Communication No. 167/1984 (26 de marzo de 1990), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/45/40) at 1 (1990). Accesible online en la página web de la biblioteca del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. <http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session45/167-1984.htm>

⁵¹⁵ *Ms. Marie-Hélène Gillot v. France*, Communication No. 932/2000, U.N. Doc. A/57/40 at 270 (2002). Accesible online en la página web de la biblioteca del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. <http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/932-2000.html>

⁵¹⁶ Virally, M., “Panorama du droit international contemporain”, RCADI, 1983-V, vol. 183, Citado en Knop, K. *Diversity and Self-Determination in International Law* Cambridge, University Press, Cambridge, 2004, p. 29.

momento. Sus efectos se han extendido alrededor del mundo, destruyendo ídolos a los que la humanidad rendía pleitesía durante siglos.

Tal y como la Revolución Francesa terminó con los derechos divinos de los reyes, la revolución de los derechos humanos que comenzó en la Conferencia de las Naciones Unidas de San Francisco de 1945 ha privado a los estados soberanos del privilegio señorial de ser los únicos poseedores de derechos bajo el Derecho Internacional, de manera que los individuos ya no son meros objetos, meros peones en las manos del estado”⁵¹⁷.

Así, coincidimos, la inclusión de la autodeterminación de los pueblos como derecho humano no responde tanto a una pretendida “inflación de derechos”, tal y como se ha sugerido con el nacimiento de nuevos derechos, especialmente a partir de los años setenta y la insistencia en la clasificación de tres generaciones de derechos, ni el consecuente lenguaje de inclusión de cualquier deseo indefinido en una lista de derechos humanos, sino más con esa revolución silenciosa que describe Sohn y con la posterior aceptación de la doble vertiente individual y colectiva digna de protección (recordemos aquí las palabras de Mazzini: “la vida es una: el individuo y la sociedad son sus dos manifestaciones necesarias; la vida considerada singularmente y la vida en relación con los demás (...) la verdad se encuentra en su punto de intersección”), una reflexión sobre el individuo, que para poder ejercer ciertos derechos a título individual requiere del reconocimiento de los derechos del grupo y al revés.

La superación de la tensión individuo-grupo, como sabemos, se ha hecho por la vía a nuestro entender más razonable, y a favor del principio humanista, esto es, reconociendo ambos, entendiendo grupo también como espacio de realización de derechos individuales, considerando acertadamente, en mi opinión, la multidimensionalidad humana. Esto, por supuesto, como veremos en el caso de los sujetos titulares del derecho de autodeterminación, ha pasado por el reconocimiento del derecho a nivel colectivo y *también* individual. Efectivamente, el reconocimiento del derecho de autodeterminación como derecho humano ha requerido partir de la dignidad humana, punto de partida de justificación de todos los derechos humanos, dignidad de la que es titular cada persona, independientemente de que se considere o se debata sobre si los grupos gozan de dignidad autónoma o prestada de los individuos que los componen.

Esa cadena de respeto, esta concepción de autodeterminación zahiere el chauvinismo nacionalista, pues sin negar la dimensión colectiva del hombre, la somete a la igualdad radical entre seres humanos y, por tanto, entre pueblos, así como a la igualdad de cualquier otro colectivo humano, igualdad que obliga racionalmente a rechazar la sumisión de unos a otros, lo enmarca en el lenguaje de los derechos humanos y tiene como consecuencia que ninguna protección de una dignidad colectiva pueda ser completa sin, o ser realizada a pesar de, la dignidad de la persona individual, de igual manera que la dignidad de la persona no puede permanecer incólume a nivel individual en su todo, si hubiera daño en la dimensión colectiva de su dignidad.

⁵¹⁷ Sohn, L.B., “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals rather than States”, *The American University Law Review*, vol. 32, n.1, 1982, p. 1.

Incluso para los autores de cierta tradición, fundamentalmente norteamericana, que consideran derechos humanos sólo los derechos individuales, se han planteado las consecuencias de la humanización del derecho. Cindy Holder, con un argumentario de tradición individualista, defendiendo “la inclusión de al menos un derecho colectivo en la lista de derechos humanos: el derecho de los pueblos a la autodeterminación”, defiende que:

“La creencia popular sugiere que promover la autodeterminación de los pueblos y proteger los derechos humanos de los individuos son prioridades en competencia. Que asegurar los derechos humanos de los individuos requiere limitar los derechos colectivos y viceversa. Sin embargo, muchos documentos internacionales recientes han incluido derechos que son tradicionalmente considerados como derechos colectivos en sus listas de derechos humanos. Estos documentos consideran que los derechos colectivos y los derechos individuales no sólo se apoyan mutuamente sino que son mutuamente necesarios”⁵¹⁸.

La humanización del derecho de autodeterminación tiene como consecuencia necesaria una reflexión multidimensional en torno a la dignidad de la persona, no sólo en el sentido de que proteger las características etnoculturales fundamentales o modos de vida de un pueblo, forma parte de la dignidad de los individuos que la componen, y de la necesidad de proteger derechos que sólo pueden ser ejercidos colectivamente. La reflexión sobre la totalidad de la dignidad humana incorpora este punto de vista pero se ve obligada a reflexionar sobre otras dimensiones de la dignidad adicionales, superando este punto de vista, y rápidamente poniendo en entredicho definiciones estrechas de los sujetos, especialmente de los “pueblos”. Holder reflexiona que “el argumento a favor de un derecho humano a la autodeterminación (...) es compatible con los puntos de vista que limitan el término “pueblos” a grupos de personas que están vinculadas de una manera particular (por ej., por una historia común, una lengua común, o una percepción común de sí), pero no *requiere* tal punto de vista”⁵¹⁹.

De una manera parecida el profesor Robert McCorquodale defiende que “el único marco legal apropiado en el que considerar el derecho de autodeterminación (...) es uno basado en las normas legales desarrolladas en el Derecho Internacional de Derechos Humanos”⁵²⁰. Notemos que aunque McCorquodale habla de un “derecho de autodeterminación”, no alcanza a denominar exactamente “derecho humano” a la autodeterminación, pero sí defiende que sea “enmarcado” en ellos, en lo que él denomina “enfoque de derechos humanos de la autodeterminación” en contraposición a un “enfoque de pueblos de la autodeterminación” o un “enfoque territorial de la autodeterminación”. Para McCorquodale “a pesar de estos factores, tanto el objetivo del derecho de autodeterminación como su integración en la protección de los derechos individuales permiten al derecho ser considerado dentro del marco de los derechos humanos.”⁵²¹

⁵¹⁸ Holder, C., “Self-Determination as a Universal Human Right,” *Human Rights Review*, vol. 7, no. 4, 2006, pp. 5-18.

⁵¹⁹ Holder, C., op. cit., pp. 5-18.

⁵²⁰ McCorquodale, R., “Self-Determination: a Human Rights Approach”, *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 43, n. 4, 1994. pp. 857-885.

⁵²¹ McCorquodale, R., “Self-Determination...”, op. cit. pp. 857-885.

La posiciones de Holder o McCorquodale se suman así a la de tantos otros, abandonando la autodeterminación tal y como la entendían las doctrinas nacionalistas (obviando la justicia distributiva de recursos y derechos, y aspirando idealmente a hacer coincidir los mitológicamente perfectamente delimitados límites de grupos socioculturales definidos apriorísticamente con fronteras político-económicas en las que proyecta su poder el estado soberano).

La realización de la autodeterminación como derecho humano implica asumir que la dignidad de la persona humana está en el centro del proceso y de la reivindicación, y no las entidades ideales de la imaginación que son, por su misma naturaleza, contingentes. Se debe realizar o ejercer de manera que todos los involucrados salgan ganando. Esto se distingue del ideal nacionalista clásico en que, como diría Ernest Gellner, “la realización de uno, significa la frustración de otros. Este razonamiento se ve enormemente reforzado por el hecho de que la mayor parte de estas naciones potenciales que existen en el globo viven, o han vivido hasta hace poco, no en unidades territoriales homogéneas, sino entremezcladas unas con otras en moldes complejos”⁵²².

La consideración del derecho a la autodeterminación como derecho humano requiere una reflexión en torno al sujeto que forzosamente debe ser humano, y especialmente a su dignidad como tal. Aunque volvamos a esta reflexión cuando estudiemos específicamente la cuestión de los sujetos titulares del derecho de autodeterminación, esto es, la cuestión de los “pueblos”, quedémonos con que el derecho de autodeterminación puede ser derecho humano porque el sujeto no son instituciones administrativas o instrumentos sin más, ni tampoco entes imaginarios trascendentes a los individuos, sino las personas, proyectadas ciertamente en la colectividad a través de su pertenencia a estados, pueblos, etc., pero siempre emanando indefectiblemente de la dignidad humana.

Por otro lado, si el contenido y definición del derecho de autodeterminación ha de ser el de un derecho humano, deberá ser necesariamente compatible con todos los demás derechos humanos.

Suscribiendo la postura de James Anaya a este respecto, si la autodeterminación “es un derecho humano como todos los derechos humanos y como los derechos de los estados, su contenido estará limitado por los requerimientos de coherencia con el resto de derechos humanos internacionales”⁵²³.

Siguiendo una lógica parecida, McCorquodale llega a la conclusión de que el aplicar un marco de derechos humanos al derecho de autodeterminación implica que:

- a) la autodeterminación tiene limitaciones en su ejercicio,
- b) encuentra limitaciones en el ejercicio de otros derechos, en concreto en la

⁵²² Gellner, E., *Naciones...*, op. cit., p. 15.

⁵²³ Anaya, S. J., “A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination”, *Transnational Law & Contemporary problems*, vol.3, primavera, 1993, pp. 131–161.

protección de derechos individuales y

c) la autodeterminación está limitada también por la protección de los intereses generales de la sociedad. McCorquodale no se refiere a la sociedad reclamante del derecho de autodeterminación sino al conjunto de la sociedad internacional.

El interés general de la sociedad internacional es mantener la paz internacional y la seguridad. Este interés se manifiesta de dos modos: en el principio de integridad territorial de los estados y en el principio *possidetis juris* de mantenimiento de las fronteras salvo acuerdo de todas las partes. Así, el ejercicio del derecho estará limitado por estos dos principios.

Como reflexionamos anteriormente respecto al derecho humano al desarrollo –siguiendo el razonamiento de Sengupta apoyado en la Declaración de Viena de 1993- apuntemos que la consideración de la autodeterminación como derecho humano por sí mismo implicaría que cualquiera que sea el contenido del derecho –veremos en el siguiente apartado que se ha entendido de maneras muy diversas- éste debería cumplir al menos con los requisitos de:

- a) *Inviolabilidad* (que ningún derecho individual pueda ser violado en el curso de la realización del derecho).
- b) *Interdependencia* (que el nivel de realización de un derecho dependa de la realización de otro, es decir, un derecho está función de otro)
- c) *Indivisibilidad* (los derechos son indivisibles o integrados, la violación de un derecho lleva a la violación de otro).

En conclusión, la consideración del derecho a la autodeterminación como derecho *humano* y el enmarcarlo como tal dentro del marco de la teoría general de los derechos humanos, nos lleva a acotar su contenido y a reconsiderar su sujetos, de manera que, cualesquiera que consideremos sean éstos, habremos de descartar, como veremos a continuación, cualquier interpretación de la norma que atente contra los valores de libertad e igualdad en dignidad de todos los seres humanos.

§3.3.2 Contenido del derecho de autodeterminación (i). Consideraciones generales, dificultades para definir el contenido y definiciones propuestas

La autodeterminación o libre determinación de los pueblos es hoy considerada un derecho humano, además de principio de Derecho Internacional y además de como prerequisite para la realización de otros derechos, si bien, como hemos visto, tal consideración está matizada por las distintas aproximaciones al contenido y a los sujetos del derecho. Los argumentos para considerar la autodeterminación un derecho dependen de éstas.

Así, aunque en las páginas anteriores hayamos abordado ya algunos de los puntos

relevantes acerca de su contenido, podemos repasar más sistemáticamente en este apartado qué se considera hoy “autodeterminación”, en qué consiste este derecho de los pueblos o más bien, cuáles son las distintas posturas e interpretaciones del contenido y las diferentes definiciones del derecho, ya que, como diría Cristescu, este derecho ha sido interpretado “de diferentes maneras en diferentes lugares, levantando problemas sensibles”⁵²⁴.

Estamos utilizando el término “autodeterminación”, extendido desde la proclamación del *Selbstbestimmungsrecht* en distintos documentos y conferencias decimonónicas, tal y como se recoge en los documentos internacionales. En nuestro idioma se traduce comúnmente también como “libre determinación”, para referirnos al mismo concepto. Si autodeterminación incide en el sujeto (que luego se refuerza con “de los pueblos”), “libre determinación” incide en su relación con la libertad. En cualquier caso, podríamos hablar de una “libre autodeterminación” y no variaría el contenido esencial del concepto. En las distintas traducciones de la Carta de Naciones Unidas encontramos “libre determinación”, “self-determination”, “droit (des peuples) à disposer d'eux-mêmes” o “самоопределения народов”. Observemos que en ruso es prácticamente el mismo término que en serbocroata *samoopredjeljenje* / *самоопредељење*. Nosotros usamos “autodeterminación” exactamente en el mismo sentido.

En cualquier caso, tal determinación se refiere precisamente a la imposición de reglas, esto es a legislarse por sí mismo, es un derecho de auto-regulación. Este núcleo esencial, considerando que las normas son emitidas por órganos concretos con destinatarios definidos, crea inmediatamente un “otro” indefinido. La “libre” determinación implica la existencia de una determinación “no libre”, la “auto” determinación, implica la posibilidad de una determinación no autónoma, dirigida desde fuera.

Como es sabido, es en la definición del “otro”, del “extranjero”, tanto jurídica como empíricamente, donde reside gran parte de la dificultad de la definición positiva *a priori* del contenido y, por tanto, del derecho. La autodeterminación implica consideraciones diversas acerca de la universalidad, de la parcelación del género humano, de la inevitable multiplicidad de grupos autogobernados o unidades de gobierno, y por tanto de una forma particular de organizar políticamente el mundo y una manera de entender la justicia global.

Siendo normas jurídicas las que regulan en cada sociedad los diferentes criterios y formas de distribución de recursos y derechos, aceptar un derecho de autodeterminación es aceptar el derecho a la multiplicidad de formas de gobierno, a la multiplicidad también de sistemas normativos que rigen diferentes criterios de redistribución, implica aceptar, por tanto, unos criterios o un ámbito de legitimidad de la desigualdad, esto es, aceptar que existan grupos humanos o unidades que autogobernándose distribuyan entre sí los recursos y derechos de maneras diferentes a otros grupos humanos.

Esto a su vez implica aceptar, en fin, que unos seres humanos (ellos mismos, de sí,

⁵²⁴ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current...*, op.cit., p. 8

legisladores) ordenarán, distribuirán y asignarán recursos y derecho de maneras diferentes a otros y que, por tanto, unos seres humanos (ellos mismos, de sí, *súbditos*) recibirán recursos y ejercerán sus derechos de maneras diferentes a otros. Sólo la diferencia legítima podrá formar parte del derecho de autodeterminación.

Pero, por otro lado, también implica aceptar la diversidad social y cultural humana y la autonomía de la voluntad de distintos seres humanos para establecer distintas sociedades que mejor se adapten a su conveniencia, distintas sociedades que, utilizando la terminología de Kymlicka, permitan ofrecer también la pertenencia y los bienes culturales como bienes primarios.

En algún punto entre la legítima diferencia de distribución de recursos y derechos entre grupos humanos que en principio son iguales en dignidad y conformados libremente, y una desigualdad inevitable que se refleja en los desiguales derechos y recursos que sus miembros recibirán, pero que todos consideremos dentro de un razonable área de equidad y justicia, se encuentra el contenido de la autodeterminación como derecho, independientemente de si esta diversa gobernabilidad y asignación de recursos está basada o no exclusivamente en diferencias culturales o si es plasmada o no en instituciones de gobierno estatales o subestatales.

Podemos, por otro lado, considerar prácticamente indiscutido hoy en día el consenso sobre la irrefutable igualdad de los pueblos y su derecho a la autodeterminación, ambos conceptos indisolublemente unidos, toda vez que considerar lo contrario de modo general, esto es, que hay unos pueblos que son “naturalmente” superiores en su diferencia y que esto podría justificar la dominación de unos por otros está, obviamente, en contra de los valores de dignidad humana hoy comúnmente aceptados, que compartimos y que, por su evidencia, no discutiremos aquí.

Ahora bien, estar de acuerdo en la idea general, que todos los pueblos son iguales y que todos han de poder libremente determinarse, esto es, poder ser autónomos normativamente, no soluciona, como veremos, los problemas de definición cuando descendemos a su aplicación en la realidad sociopolítica. Como diría Diderot, “las grandes abstracciones sólo admiten un oscuro resplandor. El acto de la generalización tiende a despojar los conceptos de todo lo que tienen de sensible”⁵²⁵.

Así, el Relator Especial Aureliu Cristescu explicaba que ya en 1952, durante el transcurso de la preparación de los borradores de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, durante su octava sesión, en el momento de examinar la cuestión de definir el derecho de autodeterminación, se expresaron distintas definiciones y opiniones en cuanto al contenido del derecho⁵²⁶, recogiendo, al menos: autodeterminación como autogobierno (contra esto se arguyó que la Carta ya diferenciaba autodeterminación en relación a la soberanía y autogobierno

⁵²⁵ Diderot, D., *Sobre la interpretación de la naturaleza*. Anthropos, Barcelona, 1992, p. 89

⁵²⁶ Registros Oficiales del Consejo Económico y Social, 14a Sesión, Supl. N. 4 (E/2256), párrafos. 34 y ss. citado en Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981. Informe: E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1. P. 43 y ss

del desarrollo de autogobierno en determinados supuestos); como derecho de un pueblo a decidir su estatus internacional (independencia, asociación, secesión, unión), mientras que autogobierno significaría autonomía en el interior de un estado, como autonomía de todos los pueblos, particularmente Territorios No Autónomos; como apoyo a movimientos separatistas con distinto alcance; como respeto a la soberanía de los estados ya existentes, es decir, a los pueblos que ya habían formado estados nacionales y cuya independencia podía ser amenazada por otros estados; como derecho de los pueblos a determinar libremente por sí mismos sus estatus políticos, económicos y sociales, y por tanto independencia económica y limitación de condiciones abusivas de acuerdos internacionales y libertad de interferencias externas para determinar políticas económicas y sociales por parte de otros pueblos, nacionalidades o naciones, etc.

Estas diversas posiciones fueron debatidas y, como sabemos, eventualmente se consensuó un texto final de los Pactos, pero no se recogió una definición concreta del derecho de autodeterminación. De hecho, esto no fue fruto de la casualidad, sino un producto conscientemente buscado.

Las sugerencias de definición del derecho de autodeterminación “no fueron aceptadas, porque se temía que cualquier enumeración de los elementos constitutivos del derecho de autodeterminación fuera incompleto. *Se pensó que era mejor afirmar el derecho de una forma abstracta*”⁵²⁷. Si bien, puntualicemos, para esta autor “en el momento presente, el objetivo del principio [de autodeterminación] es la liberación de los pueblos coloniales”⁵²⁸.

¿Pero por qué se consideró *mejor*? En general, la indefinición de una norma afecta a su eficacia. La indefinición consciente y buscada de “pueblo” en la legislación internacional puede ser tildada por nacionalistas primordialistas de treta que merma la efectiva realización de la norma, porque, por ejemplo, no define claramente cuáles son las características positivamente relevantes para establecer una frontera política que pueda incluir la estatalidad. Sin embargo, esa misma indefinición puede ser muy útil para proteger grupos perseguidos y reprimidos en derechos que los nacionalistas no consideran relevante para la definición de un sujeto “pueblo”, abriendo por ejemplo la posibilidad de proteger pueblos indígenas, que no encajarían en teorías nacionalistas como las europeas decimonónicas o que no podrían aspirar fácticamente a un estado (piénsese en grupos tribales de unas decenas o centenas de personas). Por otro lado, la autodeterminación en su forma abstracta fue el mínimo común denominador en torno al que construir el consenso que permitió incluir la autodeterminación como derecho en los Pactos Internacionales.

No es lugar éste para ahondar mucho más sobre la relación entre lo abstracto y lo concreto, cuestión que tan influyentemente abordara Hegel y tantos otros tras él. Sin embargo, es evidente que en la cuestión de la autodeterminación de los pueblos ese proceso de concreción, esa contextualización en un espacio y tiempo determinado, ha originado toda suerte de controversias, algunas de resultados funestos: todos los pueblos

⁵²⁷ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 44

⁵²⁸ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., párrafo 94, p. 18.

tienen derecho a la autodeterminación, pero ¿quiénes son esos todos?, ¿qué deciden esos todos por sí y/o para sí?

La concreción espacio-temporal del contenido abstracto del derecho de autodeterminación somete la cuestión a los vaivenes de los intereses geopolíticos y económicos, por lo que han sido trazadas y apoyadas un gran número de definiciones con la idea de alcanzar un resultado político *a priori*, unas relaciones de poder concretas, una distribución de recursos y derechos determinada *ex ante*.

Por ello, el profesor sudafricano John Dugard afirmaba en 1987 que “gran parte del apoyo al principio de autodeterminación como derecho legal y como norma perentoria se asienta en generalizaciones y se han hecho muy pocos intentos de definir el contenido del derecho con cierta precisión”⁵²⁹.

Gros Espiell deja patente también lo consolidado de la autodeterminación como derecho abstracto así como las dificultades de su definición concreta. En un estudio suyo para NU⁵³⁰ afirma que el derecho a la autodeterminación es un derecho colectivo de los pueblos bajo dominación colonial y extranjera, pero considera que precisamente la caracterización de la autodeterminación como derecho colectivo produce problemas técnicos por la dificultad de definir el concepto de pueblo y de establecer una distinción entre este concepto y otros similares. Tras su definición: “la autodeterminación es un derecho de pueblos, en otras palabras, de un *tipo específico de comunidad humana* que comparte un deseo común de establecer una entidad capaz de funcionar para asegurar un futuro común”, inmediatamente admite la dificultad de aislar el sujeto y de concretar el contenido o forma de tal entidad. Y aunque considera que el derecho de autodeterminación está reservado a los pueblos y no a las minorías ni a los estados, Gros Espiell no tiene más remedio que admitir que “no hay duda de que las dificultades teóricas y prácticas que implican estos conceptos son muy grandes y el Relator Especial no puede realizar un análisis exhaustivo y concluyente de estos conceptos. Todo lo que puede hacer es dejar claras sus ideas en la materia, incluso si éstas son solo primeros pensamientos y están presentados de una manera resumida. Aparte de estas dificultades, sin embargo, es evidente que, tanto política como prácticamente, el derecho de los pueblos a la autodeterminación es una de las mayores realidades hoy en día y la invocación y reconocimiento de este derecho ha cambiado radicalmente la sociedad internacional respecto a como era hasta hace unos pocos años”⁵³¹. Es interesante observar que, según Cristescu, se consideró incluso incluir dos restricciones del contenido: la primera, exigir que el ejercicio del derecho fuera “de acuerdo con los procesos constitucionales” y la segunda, observar el adecuado “respeto de los derechos de otros Estados y pueblos”. Ambas, en principio razonables, fueron desechadas, lo que significa que no fueron incluidas, con el objetivo de evitar malentendidos –esa

⁵²⁹ Dugard, J., *Recognition and the United Nations*. Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, vol.3, Cambridge University Press, 1993, p. 160.

⁵³⁰ Gros Espiell, H., *The Right to Self Determination: Implementation of United Nations Resolutions. Study Prepared by Hector Gros Espiell, Special Rapporteur of the Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 20 junio de 1978.

⁵³¹ Gros Espiell, H., *The Right to Self Determination*..., op. cit.

concreción de lo abstracto- no por estar en contra del contenido mismo del derecho. La primera restricción propuesta fue desechada no tanto por estar en contra de que los procesos tengan que llevarse a cabo por métodos pacíficos y de acuerdo a principios de derecho, sino para evitar que las metrópolis coloniales utilizaran sus Constituciones en contra de los derechos de los Territorios No Autónomos. La segunda, una restricción que hoy en día podría ser aceptada de manera general (de hecho es defendida explícitamente por autores como James Anaya o de otra manera, en su marco de derechos humanos, MacCorquodale) fue, sin embargo, criticada “sobre la base de que subordinaba el ejercicio de un derecho fundamental a la observancia de todos los derechos de otros Estados y pueblos, incluso derechos secundarios y adquiridos”⁵³².

De manera parecida reflexiona Hurst Hannum, “quizá ninguna norma contemporánea de Derecho Internacional haya sido tan vigorosamente promovida o ampliamente aceptada como el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Sin embargo, el significado y el contenido de este derecho permanece tan vago e impreciso como cuando fue enunciado por el Presidente Woodrow Wilson y otros en Versalles”⁵³³, y que “(...) a pesar de la limitada definición contemporánea del derecho de autodeterminación –una definición creada principalmente por los estados- el principio de autodeterminación continuará siendo una importante fuerza política (...)”⁵³⁴.

Hecha esta aclaración, veremos las múltiples definiciones a la autodeterminación entre las que ha sido imposible, hasta día de hoy, encontrar o consensuar una única y totalmente definitiva, una que satisfaga sin fisuras a toda la doctrina. No obstante, sí creo que nos podemos permitir intentar sistematizar las diferentes posturas que se han ido planteando de manera racional, sin decantarnos en este punto por una, precisamente para evitar posicionarnos en un resultado predefinido concreto, esto es, definir la autodeterminación de tal manera que resulte compatible con un resultado político esperado. No en vano, las distintas definiciones afectan eventualmente de manera muy diferente a la justicia distributiva y, por tanto, a la diversa distribución de bienes y recursos, por lo que posicionarse respecto a un resultado preestablecido bien pudiera ser entendido como admitir una aproximación ideológica o un interés particular.

Veamos algunos de los últimos intentos de clasificación de las distintas definiciones que se ha dado al derecho de autodeterminación:

Antonio Cassese resume que la autodeterminación “ha sido entendida en varios sentidos”:

- a) Como criterio a ser usado en el caso de cambios territoriales de Estados soberanos (las poblaciones interesadas deberían elegir a través de un plebiscito elegir a qué estado querían pertenecer, pero no un derecho a crear su propio estado), [como el caso de Schleswig-Holstein].
- b) Un principio democrático que legitima a los gobiernos de estados modernos (el

⁵³² Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 44

⁵³³ Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination...*, op. cit., p. 27.

⁵³⁴ Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination...*, op. cit., p. 49.

pueblo debería tener la posibilidad de elegir a sus propios gobernantes).

c) Un postulado anti-colonialista (los pueblos sujetos a gobierno colonial deberían tener el derecho a asegurar su independencia o a (...) elegir libremente su estatus internacional).

d) Un principio de libertad para las “naciones” o grupos étnicos o religiosos que constituyan minorías en estados soberanos (estos grupos deberían tener el derecho a crear un Estado independiente o a unirse a grupos existentes en otro Estado)⁵³⁵.

Para Marc Weller hay al menos cinco modos de entender la autodeterminación, que son⁵³⁶:

(a) Un derecho individual, a participar en el sistema político, social y cultural de un estado, extensible al derecho a alguna forma de gobierno democrático;

(b) Un derecho perteneciente a miembros de grupos y tal vez a los propios grupos, concepción congruente con derechos de minorías de grupos nacionales, religiosos, étnicos o lingüísticos. Esto incluiría un derecho a una autonomía cultural y, para algunos, una autonomía territorial allá donde el grupo sea mayoría local, algo que para nuestro autor “no es aceptado en la práctica general”;

(c) Un derecho con un significado particular en el caso de pueblos indígenas;

(d) Un derecho asociado con un cambio territorial limitado, refiriéndose a cuando el derecho de autodeterminación es invocado en casos como el de la devolución de Hong Kong, en los que la decisión principal recae en los estados y por “pueblo” se entiende los habitantes o “población” de los territorios, que no tienen más opciones de autogobierno que las acordadas por los estados y,

(e) Un derecho la autodeterminación externa de los pueblos, lo que implica un derecho a la secesión unilateral.

Rhona Smith, de la Universidad de Northumbria, ha resumido así las siguientes definiciones que se han dado del derecho de autodeterminación⁵³⁷:

a) El derecho de un pueblo a la independencia y a determinar su estatus internacional.

b) El derecho de la población de un estado a determinar la forma de gobierno y a participar de ese gobierno.

c) El derecho de un estado a su integridad territorial y el derecho a la inviolabilidad de sus fronteras y a gobernar sus asuntos internos sin interferencia.

d) El derecho de una minoría con presencia dentro de un estado o transfronteriza a disfrutar derechos especiales, incluyendo el derecho a una autonomía económica y cultural.

e) El derecho de un estado al desarrollo cultural, económico y social.

Para esta autora, a diferencia de los autores que escribían en los años setenta y ochenta,

⁵³⁵ Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. 32.

⁵³⁶ Weller, M., *Escaping the Self-determination Trap* Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, p. 24

⁵³⁷ Smith, Rhona K. M., *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 254 y ss.

para quienes la descolonización era el objeto principal del derecho de autodeterminación, es el alcance potencial del derecho de autodeterminación fuera del marco tradicional de descolonización el que, según Rhona Smith, está atrayendo mayor interés hoy en día. Sin embargo, es precisamente este ejercicio fuera de la descolonización el más problemático. Serían ejemplo de esta forma de ejercicio las desintegraciones de Checoslovaquia o Yugoslavia, o la creación de Namibia.

Para Daniele Archibugi, el derecho subjetivo a la autodeterminación puede interpretarse al menos de tres formas diferentes⁵³⁸:

- a) El derecho de los pueblos coloniales a convertirse en estado;
- b) El derecho de un pueblo a la secesión del estado [añadamos, a elegir su estatus internacional incluida la unión o libre asociación].
- c) El derecho de los pueblos como minorías dentro de un estado.

Para Archibugi, estas tres categorías están íntimamente relacionadas y un pueblo determinado puede reivindicar sus derechos utilizando cualquiera de los tres significados, en función de las circunstancias. Por ejemplo, un pueblo puede demandar ciertos derechos colectivos a su propio estado y, si se ignoran o reprimen estas demandas, puede reivindicar la independencia política como medio de lograr estos derechos.

Richard Falk, por su parte, distingue dos grandes tipos de reivindicaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de autodeterminación, dependiendo del contexto histórico y del carácter de la entidad que efectúa la reivindicación, algunas derivan de procesos colectivos que exigen secesión, autonomía, autogobierno, etc., y otras se derivan de exigencias de derechos humanos, que resume así⁵³⁹:

a) Reivindicaciones de Secesión y Autonomía

Primer orden:	Descolonización; eliminación de gobierno extranjero (p.ej. Indonesia, India, Túnez)
Segundo orden:	Secesión de unidades federales en relación a un gobierno central (p.ej. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Cachemira, Aceh, y Quebec)
Tercer orden:	Subunidades administrativas (p.ej., Chechenia, Kosovo, Dagestán)
Cuarto orden:	Comunidades indígenas o naciones (p.ej., Cree, Navajo, Zapatistas)

b) Reivindicaciones de Derechos Humanos y Democracia

⁵³⁸ Archibugi, D., “Un análisis crítico de la autodeterminación de los pueblos” en Mesa, M., y González Bustelo, M., (eds.) *Anuario CIP 2004: Escenarios en conflicto. Irak y el desorden mundial*. Centro de Investigación para la Paz (CIP), Fundación Hogar del Empleado (FUHEM), Icaria, Barcelona, 2004, pp. 270-300.

⁵³⁹ Falk, R., “Self-Determination Under International Law: The Coherence of Doctrine Versus the Incoherence of Experience”, *The Self-Determination of Peoples: Community, Nation, and State in an Interdependent World*, ed. Wolfgang Danspeckgruber, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2002, p. 62.

Primer Orden:	La opción de estado colonial (p.ej. Malvinas)
Segundo Orden:	La opción del federalismo
Tercer Orden:	La opción de regímenes legales de garantía y protección que confieren derechos de acceso, e igualdad
Cuarto Orden:	La opción de acuerdos fiduciarios de administración por parte de los tradicionales soberanos del territorio, con un mandato de preservar los derechos tradicionales de tierras sagradas (incluyendo derechos de caza y pesca), y los modos de vida de minorías y pueblos indígenas

Sobre las *dificultades de definición del derecho de autodeterminación*, hemos mencionado las dificultades de aplicación concreta de una norma conscientemente enunciada de forma abstracta para llegar a grandes acuerdos que permitieran reforzar su validez y eficacia, una concreción que, de darse, tendría diferentes repercusiones en la vida política de los estados, y en los sistemas de distribución de recursos y derechos a nivel global. Buena prueba de ello son las diferentes definiciones que hemos visto.

James Summers relaciona la falta de consenso en torno al contenido con la casuística resultante del contenido entendido como resultado de ponderar diferentes principios: “el Derecho Internacional (...) está compuesto de principios normativos y *el cómo* esos principios se acoplan determina *el contenido de la norma*. Esto es especialmente cierto en el caso del derecho de autodeterminación, que ha sido invariablemente definido como una serie de equilibrios entre diferentes principios”⁵⁴⁰.

La mayoría de la doctrina entiende que la indefinición del contenido de la autodeterminación viene explicada por la evolución histórica del concepto y las distintas líneas de pensamiento que han influido en su construcción, hasta el punto de que Peter Hilpold ha llegado a plantearse que “el así llamado derecho de autodeterminación es quizá nada más que el grito de batalla y la imagen en el espejo de las grandes ideas que han cambiado el paisaje político del mundo en los últimos cien años”⁵⁴¹.

Hemos visto en páginas anteriores, por ejemplo, como para Woodrow Wilson, en una posición muy parecida a la de Mazzini, la autodeterminación tenía que ver con la libertad de un pueblo –predefinido– de gobernarse a sí mismo y, por tanto, la ligaba indisolublemente al principio democrático y a la lucha contra el tirano. Sin embargo, en la vieja Europa, dependiendo del momento y lugar, la autodeterminación también ha sido entendida, no tanto con la instauración de un régimen que permita al pueblo darse leyes a sí mismo dentro del marco de las teorías liberales, como con que éstas leyes no fueran dictadas por un “extranjero”. Las leyes se las da el pueblo soberano a sí mismo, y no otro, pero ese otro podía ser el rey o el emperador del Antiguo Régimen, las élites

⁵⁴⁰ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law,” *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005, pp. 325-354.

⁵⁴¹ Hilpold, P., “The Right to Self-determination: Approaching an Elusive Concept Through a Historic Iconography,” *Austrian Review of International and European Law*, vol.11, 2006, pp. 23-48.

privilegiadas, los extranjeros invasores, etc., de forma que esos “otros” iban definiendo de distinta manera el sujeto del “auto”. Así, explica Patrick Thornberry que “a través de su historia, la autodeterminación ha exhibido elementos de “nacionalismo” y elementos de “democracia” y el cambio político puede demostrar ambos”⁵⁴².

De manera relacionada, Martti Koskenniemi, como ha recogido y parece compartir Joshua Castellino, dice que hemos de identificar dos escuelas de pensamiento en relación con el derecho de autodeterminación:

- (i) Una, que denomina clásica, que identifica el estado con nación y parte de la asunción hobbesiana de que los estados son necesarios para prevenir la *bellum ominum*, y que considera que es la presencia o ausencia de procedimientos participativos de decisión en un estado es lo que está en el núcleo de la autodeterminación, y la otra
- (ii) Una que entiende la autodeterminación como el fin de la nación concebida como un ente trascendente, un fin en el que el gobierno es compatible con una creencia en la existencia de una comunidad preexistente auténtica o natural. Para este autor, la primera visión se centra en la forma de participación y reconoce a los estados y sólo a los estados como sujetos legítimos de los varios bienes de la personalidad colectiva, mientras que la segunda “valora el estado sólo en cuanto que representa la identificación comunal del pueblo o nación”⁵⁴³.

Para Koskenniemi el conflicto entre estas dos concepciones es el origen de la ambigüedad de la norma y de la dificultad de aplicación de la autodeterminación. Por un lado, es la estatalidad la base del orden jurídico internacional que da validez a la norma de autodeterminación y da razones para la inviolabilidad de las fronteras internacionales, pero, por otro lado, la autodeterminación puede ser interpretada de manera que la estatalidad *per se* no encarne ninguna virtud en particular y que incluso, aunque fuera de utilidad como presunción de autoridad de gobierno sobre un territorio particular, esta presunción podría ser desautorizada en favor de un grupo o unidad que se encuentre excluida en ese momento de posiciones de autoridad⁵⁴⁴.

Por ello el mencionado James Summers considera también que la autodeterminación se encuentra definida por dos doctrinas contradictorias en tensión: un Derecho Internacional de estados y la doctrina nacionalista de los pueblos⁵⁴⁵.

Su contenido, por tanto, está según Summers en tensión entre, por un lado,

⁵⁴² Thornberry, P., “The Democratic or Internal Aspect of Self-Determination with some Remarks on Federalism” en Tomuschat, C. (ed), *Modern Law of Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993, pp.105.

⁵⁴³ Koskenniemi, M., “National Self-determination today: problems of legal theory and practice”, ICLQ, 43, 1994, p.241, citado por Joshua Castellino en *International Law and Self-Determination*, Martinus Nijhoff, vol 38, Dordrecht, 2000, p.9 y ss

⁵⁴⁴ Koskenniemi, M., op cit., p.9 y ss.

⁵⁴⁵ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law”, *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005, pp. 325-354.

- (i) la pragmaticidad de los intereses estatales, lo que significa que los estados pueden invocar el derecho de autodeterminación para, por ejemplo, evitar la injerencia extranjera o para controlar los recursos naturales en su territorio y, por otro lado,
- (ii) la reivindicación del derecho por colectivos étnicos, religiosos, lingüísticos, culturales, etc. con aspiración de autogobierno definido por la doctrina nacionalista, grupos con aspiraciones no necesariamente coincidentes con la de los estados, que pueden llegar a ser incluso contrarias a éstos.

Esta tensión marca dos concepciones radicalmente diversas del contenido, a menudo incluso contrapuestas y excluyentes, planteando la cuestión de que una teoría de la autodeterminación completa debería idealmente responder satisfactoriamente a ambas.

La confluencia de distintos acercamientos al concepto de autodeterminación, a la regulación del contenido y a su significado, además, como hemos visto, ha ido matizándose con el tiempo de acuerdo a los resultados fácticos de las distintas concepciones. Tras los efectos devastadores del auge en el período de entreguerras de un nacionalismo incompatible con una concepción adecuada del derecho de autodeterminación, por un lado, se consolidó ésta en la Carta de Naciones Unidas pero, por otro lado, a la vista de los excesos cometidos, las interpretaciones de su contenido fueron limitados en alcance y significado, extremando la relevancia de la igualdad de los pueblos, la integridad territorial de los estados y los derechos humanos, con el fin de evitar que en nombre de la autodeterminación de pueblos, en una interpretación nacional chauvinista, se volvieran a violar fronteras externas internacionalmente consolidadas, tal y como hicieran los regímenes nacionalsocialistas y fascistas.

Para autores como Antonio Cassese, no sólo el estado basado en una identidad cívica y otro en una etno-cultural son diferentes, sino que la primera concepción parece ser más avanzada que la segunda:

“Merece especial consideración la necesidad de separar las diferencias etno-culturales del Estado como entidad política. Así, la siguiente fase en la evolución de la autodeterminación, la más radical de todas, puede ser una en la que los Estados se vayan convirtiendo progresivamente en entidades políticas pertenecientes a sus ciudadanos definidos en términos “cívicos”, más que en términos “etno-nacionales”. La separación de Estado y “nacionalidad” implicaría que dentro de los “no nacionales” o en los verdaderos Estados “multinacionales” (...) los ciudadanos serían libres de agruparse en torno a su herencia cultural y sus símbolos (...) tal y como en el estado liberal secular (...) todos gozan de total libertad religiosa (...). La naturalización implicaría un compromiso con una “constitución plural” y las políticas de inmigración serían funcionales y no dependerían de la nacionalidad. Para algunos estados como los estados Unidos, esto no significaría formalmente un gran cambio, para otros, como por ejemplo, Alemania, este enfoque constituiría un cambio radical en la autoimagen de la sociedad y del estado”⁵⁴⁶.

Y es que para Cassese, como para la mayoría de la doctrina, autodeterminación y democracia –así los significados de democracia sean también diversos– están indefectiblemente unidas, entendiendo la autodeterminación también como derecho permanente y en proceso.

⁵⁴⁶ Cassese, A., *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 365.

A la vista de las diferentes teorías Alexandra Xanthaki ha propuesto una clasificación de las diferentes aproximaciones al derecho de autodeterminación en teorías de *enfoque minimalista* y *enfoque maximalista*⁵⁴⁷.

Las teorías enmarcadas en un enfoque minimalista son las que:

- a) Rechazan aceptar el derecho de autodeterminación como derecho (su reconocimiento como derecho lo invalida como principio).
- b) Igualan derecho de autodeterminación a derecho de secesión.
- c) Definen el derecho por sus modos de ejercicio o aplicaciones pasadas.

Las teorías desarrolladas bajo un enfoque maximalista son las que definen la autodeterminación como el derecho de los pueblos a perseguir o proveer para su desarrollo económico, social y cultural, enfoque que parece apoyar la textualidad de los Pactos Internacionales e incluye todos los derechos que coadyuven a ese desarrollo económico, social y cultural, incluyendo, según los autores, también democracia y derechos políticos.

Ambos enfoques ofrecen ventajas; los minimalistas aportan seguridad y claridad, y los maximalistas, espacio para la evolución y ajuste del ejercicio del derecho. Por ello, dado que “es necesario encontrar un equilibrio que use las ventajas de ambos enfoques y que se deshaga de sus debilidades”. Xanthaki propone buscar un *enfoque alternativo* que pasaría por mantener, por un lado, un enfoque maximalista, concibiendo la autodeterminación asumiendo las virtudes de un enfoque que se centra en “las libertades que ‘un pueblo’ puede tener (...) dando a la gente la libertad de determinar sus vidas y destinos (...) [que] incorpora reivindicaciones políticas, económicas, culturales y sociales de todo tipo”. Esta manera de entender el derecho de autodeterminación genéricamente sería “mejor dejarlo como principio, más que como derecho”. Este enfoque intersecciona con el ámbito de ejercicio de otros derechos, por lo que propone Xanthaki referirse al *principio de subsidiariedad* para articular el ejercicio de la autodeterminación como derecho, esto es, reclamar el derecho de autodeterminación cuando la reivindicación “no pueda ser acomodada por otro derecho más relevante (...) si las reivindicaciones basadas en la autodeterminación pueden ser acomodadas por otros derechos y conceptos, deberían ser transferidas bajo su protección”. Así, pone como ejemplos la reivindicación de derechos culturales antes que la autodeterminación cultural, o el art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para el derecho de reunión que la autodeterminación política. Sin embargo, reflexiona, “más difícil es la cuestión de la autodeterminación económica” y propone tentativamente el derecho al desarrollo. Como veremos con el debido detenimiento, esta cuestión no es sencilla por la misma naturaleza compleja y compuesta del derecho al desarrollo cuando no se entiende solo económicamente.

⁵⁴⁷ Xanthaki, A., “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, en Ghanea Nazila y Alexandra Xanthaki, eds., *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005, p.15.

Por último concluyamos en esta primera aproximación que podemos entender estas relaciones o listas de diferentes definiciones y modos de ejercicio del derecho de autodeterminación como listas abiertas o no definitivas. Así, Gudmundur Alfredsson considera que realizar un listado de las distintas formas o expresiones del derecho de autodeterminación sólo puede arrojar un resultado indudablemente no exhaustivo: “en definitiva, la autodeterminación no ha sido y no debe ser un fenómeno estancado. Una evolución posterior es probable y debemos admitir que (...) el resultado es incierto”⁵⁴⁸.

De parecida opinión es Alexandra Xanthaki, para quien a la vista de las diferentes aplicaciones que el derecho de autodeterminación ha tenido históricamente “identificar el conjunto del derecho con las aplicaciones de la autodeterminación que hemos ya experimentado limita su fin y convierte en imposible la futura inclusión de nuevas aplicaciones. El significado de la autodeterminación debe permanecer abierto a la incorporación de nuevos aspectos en el concepto”⁵⁴⁹.

§3.3.3 Contenido (ii). Autodeterminación interna y externa. Diferentes concepciones de autodeterminación interna

Las diferentes herencias ideológicas y políticas que influyeron en la construcción del concepto de autodeterminación llevaron históricamente, a su vez, al esfuerzo de intentar sistematizarlas o aunarlas, a formular explicaciones que las hicieran compatibles, al menos teóricamente. Esta ha sido una tarea que, como ha mostrado Summers, ha sido cuanto menos ardua. Así, ya desde el período de entreguerras encontramos la clásica y controvertida distinción, también la más extendida y aceptada, entre el ejercicio externo e interno del derecho de autodeterminación, distinción ya expresada en su día por la Comisión Internacional de Juristas de la Sociedad de Naciones. Para recalcar que no son distintas definiciones algunos autores les han llamado *aspectos* o expresión equivalente: aspecto interno y aspecto externo del derecho de autodeterminación.

Ya en 1952, en el seno de las Naciones Unidas, los representantes de los Países Bajos en el Tercer Comité declararon que :

“La idea de autodeterminación es un conjunto de ideas más que un solo concepto. Así, el principio de autodeterminación interna, o autodeterminación a nivel nacional, debería distinguirse de la autodeterminación externa, o autodeterminación a nivel internacional. Aquel es el derecho de la nación, ya constituida en Estado, a elegir su forma de gobierno y a determinar las políticas que quiere seguir. Éste es el derecho de un grupo que considera a sí mismo una nación a formar su propio Estado”⁵⁵⁰.

⁵⁴⁸ Alfredsson, G., “Different Forms of and Claims to the Right of Self-Determination”, D. Clark and R. Williamson (eds.) *Self-determination: International Perspectives*, Macmillan Press, London, 1996, p. 79.

⁵⁴⁹ Xanthaki, A., “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, en Ghanea Nazila y Alexandra Xanthaki, eds., *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005, p.25.

⁵⁵⁰ Debates sobre la Resolución de la Asamblea General 637 (VII) ,1952 A/C.3/SR.447 citado en: Summers, J., “Internal and external Aspects of Self-Determination” en French, Duncan (ed) *Statehood and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge University Press, 2013, nota, 56, p. 246.

Tal distinción fue recogida por la doctrina que empezó a elaborar sobre ella, según relata Cassese, desde 1957 con los trabajos de W. Wengler, seguidos por varios autores incluidos A.V. Lombardi y otros⁵⁵¹.

La división entre los aspectos internos y externos de la autodeterminación, división que ha alcanzado una gran popularidad entre algunos autores y puede encontrarse también en múltiples documentos políticos, tiene, por tanto, un origen histórico en la evolución de las ideas que influyeron en el concepto.

Sin embargo, no existe una identificación total entre las distintas herencias ideológicas – nacionalistas, liberales, socialistas, etc.- y el contenido que luego se le ha dado a los términos autodeterminación interna y externa.

Esto tiene que ver, creo, con que, a menudo, el contenido del derecho se ha querido dividir en numéricamente *dos* aspectos, aunque la definición de cada uno de los aspectos no fuera pacífica y unánime. Así, aunque distintos autores coincidan en dividir la autodeterminación en sus dos aspectos interno y externo, han entendido por cada uno de los aspectos cosas diferentes, por lo que, en realidad, la división ha sido en múltiples aspectos y no solamente en los dos aspectos nominales.

Por ejemplo, también Louis Sohn considera que la autodeterminación tiene dos aspectos o partes, pero les da una definición ligeramente diferente respecto a la que dieran los Países Bajos en el Tercer Comité: “han surgido dos *partes* del concepto de autodeterminación: autodeterminación interna, o el derecho de los individuos a seleccionar su propio gobierno, y autodeterminación externa, o el derecho de ser libre de la dominación extranjera”⁵⁵².

Salvatore Senese escribía a finales de los ochenta que el derecho de los pueblos a la autodeterminación reconocido hoy en día en la jurisprudencia internacional consiste esencialmente en el derecho de todos los pueblos a liberarse de la dominación extranjera, colonial o racista. “Este derecho comprende lo que ha venido a llamarse *autodeterminación externa*: aquello que tiene ver con el estatus internacional de un pueblo. Puede resumirse como el reconocimiento de que cada pueblo tiene el derecho de constituirse en nación estado, o integrarse en, o federarse con, un estado existente (...) En otra interpretación, el derecho de autodeterminación significa lo que se ha denominado *autodeterminación interna*: el derecho de un pueblo a elegir libremente su propio sistema político, económico y social. Este es el derecho de los pueblos a la autodeterminación una vez que han alcanzado la estatalidad (o la formación de un estado) (...) El derecho a la autodeterminación interna significa sólo que otros estados no deberían, a través de llamados o presión, tratar de prevenir un pueblo de elegir libremente su propio sistema político, económico y social”⁵⁵³.

Para algunos autores, como Hurst Hannum, “el aspecto interno de la autodeterminación significa que los estados y sus pueblos tienen el derecho a la independencia de dominación extranjera. Así, los

⁵⁵¹ Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. nota al pie n.6, p. 70.

⁵⁵² Sohn, L. B., “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals rather than States”, *The American University Law Review*, vol. 32, n.1, 1982. p. 48.

⁵⁵³ Senese, S., “External and Internal Self-Determination”, *Social Justice*, n. 16, 1989, pp. 19–25.

estados existentes que han sido invadidos o que de alguna otra manera son claramente controlados por poderes extranjeros tiene derecho a la autodeterminación, es decir, derecho a deponer a los invasores y reestablecer la independencia”⁵⁵⁴.

Con tal variedad, casi no sorprende que, por ejemplo, Louis Sohn, Hurnst Hannum o Salvatore Senese coincidan en que “ser libres de la dominación extranjera” es parte del contenido del derecho de autodeterminación, pero uno lo relaciona más con el aspecto externo, otro con el interno y otro con la definición general del derecho.

Respecto a la autodeterminación interna, explica Michael van Walt van Praag que por autodeterminación interna distintos autores entienden:

“[i] democracia participativa: el derecho a decidir la forma de gobierno y la identidad de los gobernantes por el conjunto de la población de un estado y el derecho de un grupo de población dentro de un estado a participar en la toma de decisiones a nivel estatal. La autodeterminación interna puede significar también

[ii] el derecho a ejercitar autonomía cultural, lingüística, religiosa o política (territorial) dentro de las fronteras de un estado existente. Por autodeterminación externa (descrita por algunos como autodeterminación “completa”) se entiende el derecho a decidir sobre el estatus político de un pueblo y su lugar en la comunidad internacional en relación con otros estados, incluyendo el derecho a separarse del estado actual del cual el grupo en cuestión es parte, y formar un nuevo estado”⁵⁵⁵.

Otros autores, como el representante de la etnia de los Shan, Sai Myo Win, ignorando la autodeterminación interna en el sentido democrático, consideran que “de manera general, los resultados de implementar el derecho de autodeterminación se enmarcan más o menos en *dos* categorías”, de manera que el derecho de autodeterminación puede entenderse, fijémonos, de *dos* maneras: “puede entenderse en un sentido fuerte o débil. Mientras que el sentido fuerte insiste en que a la nación le debe ser otorgada la estatalidad, el sentido débil sólo requiere de alguna forma de autogobierno. La autodeterminación nacional en sentido débil es así compatible con un estado multinacional en el cual a las naciones le es dada cierta autonomía política”⁵⁵⁶.

De manera parecida, Tomis Kapitan considera que “en términos generales, la autodeterminación es la autonomía de una entidad, concretamente, de gestión de sus propios asuntos como crea conveniente independientemente de interferencias externas. (...). En el estricto sentido que normalmente se le otorga, la autodeterminación es una cuestión de estatalidad, esto es, que una comunidad política posea y ejercite soberanía sobre su territorio (...). Hay grados menores de autonomía que no llegan a la completa soberanía (...) y pueden tomar varias formas de autogobierno restringido y localizado,

⁵⁵⁴ Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination...*, op. cit. p. 48.

⁵⁵⁵ Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation of the Right to Self Determination as a Contribution to Conflict Prevention Report of the International Conference of Experts held in Barcelona from 21 to 27 November 1998*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace, Centre UNESCO de Catalunya, 1999, p. 26

⁵⁵⁶ Sai Myo Win, “Secession as an ethnic conflict resolution: the case of the Shan states” en Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation of the Right to Self Determination as a Contribution to Conflict Prevention Report of the International Conference of Experts held in Barcelona from 21 to 27 November 1998*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace, Centre UNESCO de Catalunya, 1999, p. 124.

como por ejemplo, provincial, municipal, vecinal o de minorías definidas cultural y económicamente⁵⁵⁷.

Para el ya mencionado, Antonio Cassese, cuyo trabajo ha sido de una notable influencia, “la autodeterminación interna significa el auténtico derecho de autogobierno, esto es el derecho de un pueblo de real y libremente elegir su propio régimen político y económico –que es mucho más que elegir entre lo que hay en oferta quizá desde solo una única posición económica o política. Es un derecho en curso. A diferencia del derecho de autodeterminación externa para los pueblos coloniales –que cesa de existir bajo el derecho consuetudinario una vez que ha sido implementado- el derecho a la autodeterminación internacional no se destruye ni disminuye por haber sido una vez invocado y hecho efectivo”⁵⁵⁸.

Para este autor, respecto a los modos de ejercitar la autodeterminación interna, debemos considerar que “las normas consuetudinarias del derecho de autodeterminación (...) no especifican cómo este derecho debería ser implementado”, aunque se podrían deducir algunas indicaciones de la práctica de los estados, como:

- a) que los grupos etnoculturales tiene derecho a participar en los procesos de toma de decisión
- b) y que estos grupos no poseen derecho a su secesión⁵⁵⁹.

La profesora norteamericana Diane Orentlichner, muy crítica con la acepción nacionalista etnocultural de autodeterminación, considera que la acepción democrática es el instrumento a utilizar para solventar los problemas que parecieran poder ser sólo resueltos por la vía de acomodo de minorías nacionales en forma de autogobierno. La prioridad a la realización de la autodeterminación interna en su acepción democrática se deriva lógicamente de las consideraciones que hace en torno al origen de conflictos etnonacionalistas:

“los conflictos étnicos -incluyendo aquellos asociados con reclamaciones separatistas- son sobretudo el producto de la deliberada manipulación de la diferencia por parte de las élites. Mientras que las afrentas históricas a menudo proveen una raíz primaria para las aserciones contemporáneas de etnonacionalismo, es incorrecto asumir que las recientes explosivas manifestaciones no son sino la inevitable la ebullición de unas tensiones que se cocían durante mucho tiempo a fuego lento, y que son, por tanto, intratables. Esta explicación demasiado a menudo sirve para condonar la aquiescencia de la sociedad internacional con las depredaciones de los movimientos nacionalistas y para justificar su auto-infligida impotencia para enfrentarlos”⁵⁶⁰.

Así, para Orentlichner, cuando asistimos a demandas nacionalistas de autogobierno a nivel interno, en democracia, basadas en identidades culturales o étnicas preexistentes, en realidad nos encontramos antes demandas de poder por parte de élites y la autodeterminación bien entendida debería estar orientada a evitar esa manipulación de las élites locales que menoscaban la sana convivencia entre todos los integrantes del *demos*.

Kristina Roepstorff considera también, por su parte, que el significado de la

⁵⁵⁷ Kapitan, T, “Self-determination and International Order”, *The Monist*, n.89, 2006. Pp 356–370

⁵⁵⁸ Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. 101

⁵⁵⁹ Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. 124.

⁵⁶⁰ Orentlichner, D.F., “Separation Anxiety: International Responses to Ethno-Separatist Claim”, *Yale Journal of International Law*, n. 23, 1998, pp. 1–89.

autodeterminación interna es doble: “primero, se refiere al derecho de un pueblo en un estado a decidir libremente sobre la forma de gobierno sin interferencias externas; segundo, se refiere también a las reivindicaciones de las minorías étnicas dentro de un estado a su autogobierno”. Para esta autora, en relación con este doble significado, la cuestión fundamental reside en dilucidar hasta qué punto puede un gobierno reclamar la subordinación de una minoría si esta subordinación tiene como consecuencia una restricción en el autogobierno de la minoría, y al contrario, cuánto autogobierno debe conceder un estado a una minoría nacional.

Otra cuestión diferente es para esta autora “la relación entre autodeterminación y democracia”, (comentamos antes que muchos autores, como Cassese, inciden en que ambos conceptos van indisolublemente unidos), que para Roepstorff permite distinguir que el contenido de la autodeterminación interna puede ser dividido, siguiendo a Alfredsson, en dos categorías: autogobierno y democracia.

El autogobierno se correspondería con el derecho de un pueblo “a determinar su constitución incluyendo su estatus autónomo”, mientras que la segunda categoría sería el derecho a gobernarse democráticamente. Para esta autora, mientras que la autodeterminación externa está íntimamente relacionada con la soberanía y la territorialidad, “la autodeterminación interna puede ser separada de las reivindicaciones territoriales (...) alcanzar la autodeterminación no conlleva necesariamente un derecho territorial”⁵⁶¹.

La no necesaria vinculación entre autodeterminación y derechos territoriales a los que se refiere Roepstorff, ha sido estudiada por Lea Brilmayer en relación con los movimientos separatistas que invocan el derecho de autodeterminación, llegando a la conclusión de que “cada movimiento separatista está construido sobre la base de la reclamación de un territorio, normalmente en relación con alguna disputa histórica, y que sin una consistente demanda desde un punto de vista normativo, los argumentos de autodeterminación de un territorio no conforman una base plausible para la secesión (...) La autodeterminación prueba ser un camino equívoco para caracterizar la cuestión porque enfoca su atención exclusivamente en la gente, no en los lugares. (...) Si una minoría experimenta discriminación o sufre de violaciones de sus derechos humanos, entonces con seguridad sufre una agravio incluso aunque no reclame ningún derecho histórico sobre un territorio en particular. Lo que distingue las demandas separatistas de otras demandas de minorías es el hecho de que un grupo desee establecer un nuevo estado en un trozo de tierra particular (...) la integridad territorial entendida adecuadamente acomoda el principio de autodeterminación. Cualquier conflicto que exista no es sobre principios, sino por la tierra”⁵⁶².

Para Patrick Thornberry, la autodeterminación es un derecho de todos los pueblos a gobernarse a sí mismos y es ese autogobierno el que presenta más de una dimensión: “la dimensión o aspecto externo define el estatus de un pueblo en relación con otro pueblo, estado o imperio, mientras que la dimensión interna o democrática debería tratar de la relación entre un pueblo y “su propio” estado o gobierno”⁵⁶³.

⁵⁶¹ Roepstorff, K., *The Politics of Self-Determination: Beyond the Decolonisation Process*, Routledge, 2012, pp. 33-34.

⁵⁶² Brilmayer, Lea, “Secession and Self-determination...”, op. cit.

⁵⁶³ Thornberry, P., “The Democratic or Internal Aspect of Self-Determination with some Remarks on

Concluye, por otro lado, que “es posible interpretar la autodeterminación no como un mandato de secesión ni tampoco como la homogenización artificial de los estados, sino como un a síntesis potencial de respeto y mutuo interés entre sociedades en su conjunto y sus grupos componentes que encuentra su expresión a través del discurso y la práctica de derechos humanos”⁵⁶⁴.

Una visión parecida defiende Kristin Henrard, que ve relación entre las distintas formas de entender la autodeterminación interna, como democracia y como articulación de grupos humanos en un estado, de manera que las distintas definiciones que se han dado de la dimensión interna del derecho de autodeterminación “subrayan de modo bastante vehemente la conexión entre democracia y el derecho a la autodeterminación interna”. Por tanto, ésta es “generalmente relacionada con el derecho de un pueblo a elegir su propio gobierno y a la necesaria participación de todos (incluyendo, por tanto, a los miembros de las minorías) en el proceso de decisión de un estado. Para esta autora, “el derecho a la participación política de (miembros de) las minorías puede ser situado en el límite entre los derechos de minorías y el derecho a la autodeterminación (interna) de las minorías”⁵⁶⁵.

La ampliamente aceptada relación entre democracia y autodeterminación interna ha sido falazmente utilizada en múltiples ocasiones, tal y como recuerdan Asim Mujkić y otros, por representantes de distintos movimientos etnonacionalistas, que llegan a argumentar que si un pueblo decide su estatus o autogobierno en ejercicio de su derecho de autodeterminación, *entonces* necesariamente estamos en un escenario democrático. Este argumentario normalmente ignora selectivamente algunos aspectos de la dimensión individual de la autodefinición que debe acompañar una adecuada concepción de la autodeterminación, especialmente aquellas autodefiniciones que no cuadran con categorías establecidas *a priori* por la doctrina nacionalista.

En relación con el ejemplo concreto de un sistema político como el actual de Bosnia y Herzegovina surgido tras los acuerdos de Dayton, Mujkić explica que “la representación exclusivamente colectivista, y el énfasis en la afiliación étnica [nacional], disuade de cualquier iniciativa cívica y (...) proscribe al individuo (o ciudadano) cualquier poder político” constituyéndose una suerte de “democracia de oligarquías étnicas”, no una “democracia de ciudadanos”⁵⁶⁶. El derecho de las naciones a su autodeterminación ha de dejar paso a un “derecho del ciudadano a su auto-definición”⁵⁶⁷. Sin ese derecho individual a la autodefinición del individuo, nos encontramos ante un tipo de sociedad que Mujkić define como *etnopolis*:

Federalism” en Tomuschat, C. (ed), *Modern Law of Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 101

⁵⁶⁴ Thornberry, P., “The Democratic or Internal Aspect...”, op. cit., p. 138.

⁵⁶⁵ Henrard, K., *Devising an Adequate System of Minority Protection: Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2000, p. 299

⁵⁶⁶ Mujkić, A., *We, The Citizens of Ethnopolis*, Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina, Human Rights Centre, University of Sarajevo, Sarajevo, 2008, p. 18.

⁵⁶⁷ Mujkić, A., *We, The Citizens....*, op. cit., p.112.

”Una comunidad caracterizada por dar prioridad política a los grupos étnicos sobre el individuo, (...) una comunidad caracterizada por dar prioridad política al derecho de autodeterminación del grupo sobre el derecho del ciudadano a su autodefinición, en el que la pertenencia del ciudadano a la comunidad política está predeterminada por su pertenencia a una comunidad étnica”⁵⁶⁸.

La reflexión de Mujkić, aunque formulada respecto a las categorías de grupos étnicos tal y como se denominan en Bosnia y Herzegovina, es también válida para cualquier otro tipo de etnonacionalismo cultural basado en categorías igualmente aleatorias, primordialistas y ajenas a la libre voluntad del individuo: raza, lengua, religión, nacionalidad, etc.

Por ello, hemos de remarcar que -también en mi opinión- es la democracia en su sentido completo y no parcial la que forma parte del derecho de autodeterminación junto con el autogobierno: esto es, la democracia que incluye los derechos de las minorías y los derechos civiles de los ciudadanos individuales, ciudadanos que en ejercicio de su autonomía puedan siempre autodefinirse identitariamente y puedan modificar tal autodefinición, que les sea permitido tener identidades múltiples, interseccionadas, si así es su voluntad y fuera de acuerdo a la razón, la posibilidad y las leyes; una democracia en la que los individuos, en cuanto ciudadanos, puedan incluso permanecer indefinidos si así lo quisieran en sus identidades culturales, sin que esa definición no menoscabe el ejercicio de sus derechos fundamentales; una democracia en la que los ciudadanos/súbditos puedan ser ciudadanos/legisladores sin la mediación impuesta de su identidad, pero que a la vez permita que esa identidad esté reflejada en las instituciones de gobierno. Ni el ejercicio extralimitado de derechos individuales puede servir como excusa para acabar con identidades que son protegidas en cuanto derechos de ejercicio colectivo ni el ejercicio de derechos culturales colectivos puede extenderse hasta el punto de, o servir de excusa para, menoscabar la realización de derechos individuales

En este sentido, para David Raič los distintos aspectos de la autodeterminación se referirían a distintos “modos de ejercicio”. Para este autor “es claro que la autodeterminación no es igual a “creación de un Estado”, que es una posición (...) que tiene un efecto extremadamente negativo en la implementación de la autodeterminación (...)”. La autodeterminación interna sería una forma alternativa de ejercicio del derecho de autodeterminación, que según él: “se extiende más allá de la descolonización, en forma de autodeterminación interna (...). También se ha mostrado que bajo el Derecho Internacional contemporáneo esta dimensión interna es reconocida como un derecho de las naciones (en el sentido de toda la población entera de un Estado) y de los subgrupos dentro de un Estado, esto es, los pueblos en un sentido social y cultural o antropológico (la definición “étnica”)”⁵⁶⁹.

Respecto a la autodeterminación interna, para Raič se ha demostrado que su ejercicio es importante en varios aspectos:

⁵⁶⁸ Mujkić, A., *We, The Citizens*..., op. cit., p.134

⁵⁶⁹ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*. Developments in International Law, vol. 43, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, pp. 305-306

“Primero, el derecho a la autodeterminación interna ha sido subrayado como *conditio sine qua non* para el efectivo ejercicio y disfrute de los derechos humanos individuales.

Segundo, la obligación de respetar el derecho a la autodeterminación interna se ha convertido en un factor crucial en la evaluación de la legitimidad y representatividad del gobierno de un Estado. Y finalmente, se observó que el respeto por la dimensión interna de la autodeterminación es una *conditio sine qua non* para un ejercicio legal de la autodeterminación externa”⁵⁷⁰.

Por ello, resume que es claro que la autodeterminación no es igual a la “creación de un Estado”, que es el punto de partida que todavía puede escucharse en ciertos sectores y que tiene un efecto extremadamente negativo en la implementación de la autodeterminación dentro de los Estados existentes”⁵⁷¹.

La división entre los aspectos externo e interno de la autodeterminación también se ha hecho eco en los organismos internacionales, percibiéndose a menudo esta dualidad como perfectamente reflejada en textos como el art. 1 de los Pactos Internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, por ejemplo, hacía suya la distinción en una Recomendación General en 1996:

(...) El derecho a la libre determinación de los pueblos tiene un aspecto interno, es decir, el derecho de todos los pueblos a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior.⁵⁷² A este respecto, existe un vínculo con el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos en todos los niveles (...). Por consiguiente, los gobiernos deben representar a toda la población sin distinción alguna por motivos de raza, color, ascendencia o nacionalidad u origen étnico.

El aspecto externo de la libre determinación significa que todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición política y el lugar que deben ocupar en la comunidad internacional sobre la base del principio de igualdad de derechos y tomando como ejemplo la liberación de los pueblos del colonialismo y la prohibición de someter a los pueblos a toda sujeción, dominio y explotación del extranjero”⁵⁷³.

Las Naciones Unidas encontraron también en esta división conceptual una manera de articular la interpretación del contenido del derecho aplicado durante el proceso de descolonización con la preservación de la integridad territorial en estados multiétnicos, consciente de los peligros que para la paz mundial acarrearía una interpretación únicamente (etno)nacionalista del derecho de autodeterminación, especialmente en países de extraordinaria diversidad y en proceso de consolidación democrática (recordemos que la inmensa mayoría de los estados son multiétnicos). Con este enfoque, el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali defendía en su informe “Un Programa de Paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz”⁵⁷⁴, de junio de 1992, tanto el

⁵⁷⁰ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*..., op. cit., pp. 305-306.

⁵⁷¹ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*..., op. cit., pp. 305-306

⁵⁷² Como veremos en detalle, mientras que la versión en inglés del documento utiliza la expresión “to pursue freely”, algo así como buscar, perseguir o llevar adelante el desarrollo. En castellano ha sido traducido a menudo como “proveer” que parece hacer más a referencia a reunir los recursos para tal desarrollo.

⁵⁷³ Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD. *General Recommendation No. 21: Right to Self-Determination*. 23/08/1996. para. 4. La versión en castellano utilizada se puede consultar en la web de la Universidad de Minnesota <http://www1.umn.edu/humanrts/country/spanish/Scerd-genrecomm.html>

⁵⁷⁴ Informe del Secretario General. A/47/277 17 de junio de 1992.

derecho de libre determinación, como la integridad de los estados, como su oposición a las pretensiones de estatalidad de cada grupo étnico, religioso o lingüístico, como amenaza para la paz, favoreciendo así una multiplicidad de maneras de aplicar el derecho de autodeterminación.

La terminología autodeterminación interna / externa ha sido recogida también por cierta jurisprudencia como en aquella famosa sentencia de la Corte Constitucional de Canadá en el caso de Quebec, en la que la autodeterminación interna se define de esta manera:

“ (...) las fuentes reconocidas de Derecho Internacional establecen que el derecho de autodeterminación es normalmente satisfecho a través de la autodeterminación interna –la búsqueda de un pueblo de su desarrollo político, económico, social y cultural en el marco de un estado existente (...)”⁵⁷⁵.

Es de resaltar, por tanto, la multiplicidad de significados que se le ha dado a ambos aspectos. Hemos resaltado que por autodeterminación *interna* se ha entendido, al menos:

- (a) Autonomía política dentro de un estado –autorregulación-, bien con
 - (a’) proyección territorial intra-estatal en forma de distintos modelos de organización estatal (federaciones, confederaciones, etc.) o
 - (a’’) sin proyección territorial (como reconocimiento de derechos de determinados de grupos étnicos, culturales, religiosos, dentro de un estado, con variantes en lo referente a derechos indígenas o minorías).
- (b) Principio democrático, según el cual ciudadanos iguales dentro de un estado son en su conjunto a la vez súbditos y legisladores, y eligen a sus representantes políticos (derecho a derrocar al tirano, sea o no cultural o jurídicamente “extranjero”).
- (c) Garantía y ejercicio de derechos sociales y culturales de
 - (c’) las minorías culturales, étnicas, nacionales, o indígenas, que deciden sobre cuestiones relativas a su especificidad, aunque no tengan una representación política en el parlamento regional o nacional (como el caso de la minoría Frisia en Schleswig-Holstein, Alemania).
 - (c’’) los ciudadanos individualmente en cuanto personas con capacidad de auto-definición.
- (d) Derecho de un pueblo (sea estado, sea nacionalidad o nación) a establecer sus políticas de desarrollo, culturales, sociales o económicas...
 - (d’) sin injerencia exterior (mayoritaria) o bien
 - (d’’) sin injerencia exterior ni interior (algunas posiciones marxistas argumentando dialéctica de clases, clase burguesa contra el pueblo)

§3.3.4 Contenido (iii). Autodeterminación externa, prohibición del colonialismo y debate sobre el derecho a la secesión

Pero por autodeterminación *externa* tampoco la definición es perfectamente unánime y

Disponible en <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/47/277>

⁵⁷⁵ Supreme Court of Canada, “*Secession of Quebec*” ILM, Vol. 37, 1998, p. 1340, Pp. 1370-1372, Paras. 123-124, 129.

pacífica entre la doctrina, aunque sí podemos afirmar la existencia de un núcleo de certeza universal en torno a la prohibición del colonialismo, el imperialismo y la intervención extranjera.

La práctica totalidad de la doctrina actual y todos los textos internacionales, como hemos mencionado brevemente con anterioridad, coinciden en que los procesos históricos de independencia de las colonias o descolonización pueden ser enmarcados en la realización del derecho de autodeterminación externa. Dicho de otro modo, el colonialismo y el imperialismo, la invasión extranjera, están prohibidos por la legislación internacional. No debemos dejar de mencionar y recalcar que esto es un gran triunfo para el orden internacional moderno: puede sorprendernos, pero hasta hace relativamente poco tiempo, todavía durante el período de entreguerras, era común encontrar en el discurso político internacional la justificación del colonialismo por parte de oficiales de las fuerzas coloniales y los restos de los antiguos imperios, bajo el pretexto de “civilizar” otros pueblos, con ecos incluso de discursos liberales y utilitaristas anteriores -había sido común encontrar este argumento en autores como J. Stuart Mill, por ejemplo-.

Esta doctrina desterrada concibe la “civilización” como una etapa de “progreso” (en términos historicistas) que contrariamente a un estado de “desarrollo” (en su acepción de nivel económico o en términos de incremento de derechos o de capacidades) puede ser traído, impulsado o impuesto externamente a pesar de la expresión de la voluntad popular, algo que así expresado muestra y subraya la inconsistencia de una doctrina que justifica la democracia dentro de las fronteras, para sí, pero se enfrenta abiertamente a sus principios fuera de ellas -ignorando la diferencia entre lo controvertido de permanecer o no indiferente, ante lo que suceda en otras fronteras, cuestión que no abordaremos, y lo claramente ilegítimo de intervenir en asuntos de otros sin su consentimiento o directamente en contra de su voluntad-.

La doctrina “civilizadora” está íntimamente relacionada con el colonialismo y el imperialismo, a través de esa heteronomía del poder tan propia del Antiguo Régimen –representado, todavía entonces, por los restos de los antiguos imperios- frente a la autonomía democrática. La heteronomía propia del Antiguo Régimen a la que me refiero no significa otra cosa sino que el poder del emperador/rey/régimen era el que decidía, desde fuera del pueblo, cómo y entre quienes repartir recursos y derechos –*aplicaba* la decisión a los *súbditos*-. Todas las justificaciones de la legitimidad de la heteronomía del Antiguo Régimen servían para justificar el imperialismo. Esta doctrina dejó mayoritariamente paso, al menos teóricamente, a la autonomía de la voluntad soberana del pueblo –el pueblo mismo decide por sí mismo cómo y entre quiénes repartir recursos y derechos- independientemente de las distintas concepciones de “pueblo” o de “democracia” (ya fuera liberal, socialista, etc.) que se sucedieron.

La inclusión del principio de autodeterminación en la Carta de las Naciones Unidas marca el fin de cualquier anclaje en el Derecho Internacional de la doctrina colonialista e imperialista, el fin en realidad de los restos del Antiguo Régimen y, en cierto modo, la universalización de los principios compartidos por los regímenes que vencieron en la Segunda Guerra Mundial.

Así, mientras que existe consenso internacional respecto a la prohibición del colonialismo y del imperialismo, de la ilegítima intervención extranjera, hoy en día son los menos los que defienden un derecho de autodeterminación externo que incluya otras acepciones como la inclusión de un derecho a la secesión ilimitado fuera de tal contexto colonial. Recordemos que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, aceptada la presunción de autodeterminación de los miembros de las Naciones Unidas, la integridad de los estados es considerada la llave de la paz mundial, máximo objetivo del orden jurídico internacional. Como resume James Crawford, “fuera del contexto colonial permanece una fuerte presunción a favor de la integridad territorial y en contra de la secesión”⁵⁷⁶.

Distinguir adecuadamente qué entendemos por “contexto colonial” o “intervención extranjera” tiene consecuencias importantes. Si consideramos que la independencia sólo es aceptable en un contexto colonial, será importante saber qué entendemos por “contexto colonial”. Dependiendo, por tanto, de qué se considere “colonialismo” se encontrará más o menos apoyo argumentativo en causas de ejercicio de autodeterminación externa. Veamos cómo, para James Crawford, contrario a un derecho a la secesión unilateral, “fuera del contexto colonial o cuasi-colonial, tanto la autodeterminación como el relacionado derecho al autogobierno democrático no son inherentemente ejecutables por sí mismos”.

Para este autor, sin embargo, “hay estándares críticos: no determinan por sí mismos instituciones o resultados particulares. Pueden ser usados para descalificar instituciones o resultados que son evidentemente inconsistentes con la autodeterminación o el gobierno democrático, y para justificar los intentos de remediarlos”⁵⁷⁷. Las consecuencias teóricas de qué consideramos “colonial” son múltiples. A modo de ejemplo, recordemos que no es raro encontrar, bien sabemos, que los miembros de movimientos secesionistas argumenten colonialismo para dar legitimidad al resultado de su ideal político.

Archibugi, por ejemplo, advierte contra la alegación de colonización para reclamar una aplicación del derecho de autodeterminación como secesión para parte de movimientos independentistas. Para este autor, como para otros, es obvia la diferencia entre una minoría étnica dentro de un estado y un pueblo colonizado: mientras que en el caso de las minorías, el estado reconoce los mismos derechos y obligaciones a la minoría étnica que a la mayoría, en el segundo, existen dos regímenes jurídicos diferenciados dentro del estado, manifestándose en una desigualdad de derechos y obligaciones, una para los “colonizados” y otros para los “colonizadores”.

Para los autores que consideran el colonialismo como un proceso histórico delimitado y finalizado, esta vía argumentativa está cerrada. Para los demás es debatible si nos encontramos ante situaciones político-jurídicas que repliquen situaciones pasadas.

⁵⁷⁶ Crawford, J., “The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future”, Alston, P. (ed), *People's Rights*, Academy of European Law, European University Institute, Oxford University Press, Oxford, New York, 2001, p. 64.

⁵⁷⁷ Crawford, J., “The Right of Self-Determination...”, op. cit., p. 66.

Llamada la atención sobre la gran importancia de definir adecuadamente qué entendemos por proceso o contexto colonial y su distinción de un hipotético derecho de secesión, podemos distinguir qué se ha entendido generalmente por “colonialismo” o “imperialismo colonial”:

- a) Período histórico concluido y definido temporalmente, relacionado con un sistema imperial de gobierno y de legitimidad del poder.
- b) Período histórico inconcluso, en el que todavía pueblos (definidos bien como estados o bien etnonacional o culturalmente) se hayan sometidos al imperialismo. Una variante es quienes consideran la existencia actual de un neo-imperialismo o neo-colonialismo económico que subyuga a los pueblos, imperialismo bien de estados más fuertes, bien de otros poderes fácticos.
- c) Como definición de un tipo concreto de relación político-jurídica de subyugación, prohibida por la normativa internacional independientemente del período histórico.

Respecto a esta última opción, expliquemos que, independientemente de lo que se haya entendido por “colonialismo” o “imperialismo” como fase histórica, se puede argüir que la aplicación del principio de autodeterminación a las colonias no fue llevado a cabo porque éstas fueran así denominadas –“colonias”- sino para corregir el fondo de una situación injusta, para eliminar una relación de sometimiento con una expresión jurídica concreta. Esto nos permite decantarnos por la tercera opción y liberar la definición de su connotación historicista aunque no histórica, y centrarnos en la relación jurídica prohibida: el colonialismo como relación jurídica está prohibida y aunque como fenómeno histórico se de por terminado, queda prohibido que se vuelva nunca a establecer una situación o relación jurídica análoga.

Dos requisitos han sido necesarios para entender la aplicación del principio de autodeterminación a las colonias o territorios no autónomos y no a cualquier otra reclamación:

- (1) La clara separación social y jurídica de al menos dos entes delimitados bajo un mismo poder (imperial): metrópolis y colonia o colonias, es decir, la existencia de una perfecta delimitación territorial y jurídica *a priori* del *self*, del sujeto al que se refiere el prefijo auto, cualquiera que sea el criterio histórico seguido para tal delimitación, y que esta delimitación tenga una proyección territorial.
- (2) La existencia de una situación de clara, manifiesta discriminación jurídica y, eventualmente, continuada opresión económica y/o social de uno de los entes (metrópoli) respecto a los demás (colonias). Aunque no exista opresión económica la discriminación puede manifestarse simplemente al discriminar a los habitantes del territorio no autónomo no permitiendo participar en los procesos democráticos de representación política.

Estos dos requisitos, en mi opinión, pueden no darse hoy, al menos en los mismos términos heterónomos con los que se justificaba la intervención exterior en el Antiguo

Régimen, pero nada impide teóricamente que pudieran darse en el futuro histórico, por desgracia, independientemente de que usemos el término “colonialismo” o “descolonización” para referirnos también a un modelo geopolítico particular que se dio en un determinado período histórico o no.

En parecida línea de pensamiento se han desarrollado, por ejemplo, las teorías *remedial right only* de la secesión, probablemente las más aceptadas en relación con este problema, como ha defendido famosamente Allen Buchanan, quién ha defendido un derecho moral de secesión encuando sea la única manera de evitar graves violaciones de derechos humanos.

Llegamos así a encontrarnos ante uno de los fundamentos más sólidos, en mi opinión, del derecho de la autodeterminación de los pueblos en su aspecto externo entendido en la capacidad de reorganizarse como autogobierno de una unidad política, basado no en la doctrina nacionalista (derecho de un pueblo definido culturalmente a que sean coincidentes sus contornos con los políticos), sino en la mejor protección de derechos humanos. En relación a esto, la profesora Alexandra Xanthaki, por ejemplo, subraya que debemos entender la autodeterminación en el contexto actual de disminución de protagonismo de los estados en el Derecho Internacional, de manera que “igualar autodeterminación con secesión también ignora la razón de ser de los derechos humanos: los derechos humanos se establecieron para proteger a los seres humanos, más que a los estados. Es importante afirmar que la autodeterminación es un derecho de los pueblos y no un derecho de un gobierno”⁵⁷⁸.

Frente a la posiciones nacionalistas que tradicionalmente buscan unas características prepolíticas estables de manera apriorística para definir grupos de personas que voluntariamente pueden eventualmente establecer un estado, el derecho de autodeterminación puede alternatively considerarse como una protección jurídica de la dignidad humana. Bajo este punto de vista la secesión pierde importancia frente a lo fundamental de defender los derechos humanos, porque no sería ésta la culminación de un proceso teleológico de un pueblo definido *a priori* sino un instrumento de último recurso de protección de un grupo perseguido o discriminado arbitrariamente y para la protección de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos perseguidos.

Para mostrar este *problema de información*, si se me permite la tosquedad, veamos la diferencia entre: (a) un escenario de autodefinición *positiva* en que todos los rubios o budistas de un país tienen derecho preestablecido (sin adscripción voluntaria a ser budista o rubio) a acceder a un hospital gestionado por sí mismos, por el mero hecho de ser rubios o budistas (observemos que el hospital poco tiene que ver con ser rubio o con ejercer un derecho de libertad religiosa). En este escenario, el ideal predominante es que una identidad prepolítica sea coincidente con el grupo político, con el demos. Es casi imposible saber, y cada vez menos, quiénes son los rubios o los budistas porque siempre habrá contornos de mestizaje, de identidad múltiple, siempre habrá un tono de rubio más

⁵⁷⁸ Xanthaki, A. “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, Nazila, G., Xanthaki, A., eds., *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005, p. 23.

oscuro, siempre habrá un rubio budista y un rubio no budista, etc. La única solución para crear estados estables con esta premisa, como promueve el nacionalismo clásico primordialista, pasa por crear estados mononacionales donde todos sean rubios o budistas, algo intrínsecamente antidemocrático, pues requiere la activa intromisión en las características siempre cambiantes y mestizas de los ciudadanos; y (b) un escenario en el que el punto de partida ideal es la igualdad de derechos de los ciudadanos sean rubios o budistas (incluyendo los medios para que rubios y budistas puedan seguir siéndolo). Si este ideal es roto cuando los budistas o los rubios (que tienen múltiples identidades, unos son mezclados, unos un poco menos rubios otros son budistas no practicantes, etc.) son sistemáticamente perseguidos y discriminados arbitrariamente, son los perseguidores los que definen al perseguido –cuán rubio ha de ser un rubio, quién es el verdadero budista– son los discriminadores los que, al diferenciar ilegítimamente entre iguales, otorgan el derecho de secesión al discriminado, que encuentra en el orden jurídico interno menos justicia de la que encontraría en otra sociedad, una también ciertamente injusta pero para ellos menos, como es la sociedad internacional.

Esta segunda interpretación, pronto se ve, es bien diferente del punto de vista del nacionalismo clásico de la primera, aunque pueda ser confundido, porque los nacionalismos se caracterizan por manifestar a menudo, entre una de sus características, junto con las glorias presentes y/o pasadas propias del chauvinismo, un victimismo histórico, verdadero o no, para justificar sus aspiraciones políticas. El victimismo nacido de la víctima cierta es coincidente con nuestro segundo argumento, pero no es igual; lo acompaña, lo refuerza, es *conforme a* pero no *por o según el* argumento. El victimismo como argumento nacido para justificar una mejora de las condiciones materiales cuando la doctrina nacionalista es aplicada a grupos más privilegiados, más ricos o poderosos, de la media estatal, a manera de argumento para evadir responsabilidades de justicia distributiva es un ejemplo de ello y un fenómeno muy conocido.

Los aparentemente coincidentes argumentos y resultados políticos de separación político-económica de hombres iguales pero legítimamente diversos culturalmente de los dos argumentos no pertenecen en absoluto a la misma dinámica mental: la doctrina nacionalista predefine los sujetos y “otrofica” a los demás seres humanos –en realidad iguales–, crea grupos y homogeneiza imaginariamente a los miembros en grupos e ignora o expulsa *idealmente* –en la máxima expresión de una ideal aspiración– a los diferentes (la sociedad perfecta en la que viven sería idealmente una en la que todos sus habitantes cuentan con tales y tales características socioculturales y no otras) y en el extremo de su voluntad de hacer coincidir la realidad compleja, multicultural, voluble, mestiza con la idea prefijada, tanto la limpieza étnica en sus múltiples variantes o la asimilación cultural llegan a presentarse en sus casos más extremos como instrumentos aceptables, por encima, necesariamente, de los derechos individuales de los ciudadanos.

En cambio, según el segundo argumento, todos somos iguales en dignidad como punto de partida –sólo, sencillamente humanos–, sus características culturales no son perfectamente delimitables y su relevancia para repartir recursos variable y sometida a examen crítico. Acepta la existencia de la diferencia y de la colectividad pero asigna recursos y derechos relevantes a esa identidad. Acepta que la definición de un grupo

perseguido viene ilegítimamente impuesta por otro perseguidor, a su vez autodefinido, un poder fáctico que no otorga derechos de ciudadano a hombres que sí son iguales y conviven en la misma unidad política, pero que son de características culturales legítimamente diferentes a la de los perseguidores, manteniéndolos así en situación de inaceptable indignidad.

Así pues, la definición perfecta de un grupo basado en un ideal nacionalista siempre es, por fuerza, inaplicable en sus contornos (en la realidad, los individuos que no casan con el ideal de la imaginación, los mestizos, pero también teóricamente chocando con la libre autodefinición de los ciudadanos) y cuando ésta se traslada a la realidad en su máxima expresión produce las consecuencias nefastas que conocemos. Por el contrario, la definición de un grupo basado en su discriminación es mucho más sencilla, porque no se hace a sí mismo, sino que viene dado por quienes discriminan. La definición antinatural de hombres iguales con igual derecho a manifestarse culturalmente diversamente la hace el perseguidor. Si un grupo de personas es discriminado y perseguido arbitraria e injustamente por ser o declarar ser rubio o budista, no hace falta preguntarse si cree verdaderamente, si su tono de rubio es adecuado como sí requiere quien busca una característica prepolítica: bastará con atender al criterio de los perseguidores, de los que discriminan o persiguen a esos rubios y/o budistas, para distinguir quiénes tienen el derecho a que tal persecución o discriminación cese. Precisamente porque *todos* tiene derecho a no ser perseguidos ni discriminados.

No es exacto afirmar, por supuesto y como ya hemos dicho, que las identidades están exclusivamente construidas positivamente por persecuciones. Sabemos de la diversidad del mundo, pero sí podemos distinguir, por un lado, entre las identidades positivamente definidas que por fuerza siempre serán fluidas, indefinidas en sus contornos, cambiantes, (a menos que estemos completamente aislados del mundo o no permitamos la disposición volitiva individual sobre la identidad), y las identidades negativamente definidas por el perseguidor, que reduce las múltiples identidades y la complejidad humana a unos rasgos básicos para poder completar su caza al último hombre.

Esta distinción permite valorar de distinta manera la relevancia de las características culturales para formar unidades políticas que afecten a la distribución de recursos y derechos de las múltiples identidades interseccionadas.

Según la primera acepción, nacionalista primordialista clásica, las características culturales son perfectamente relevantes para repartir recursos y derechos hasta la última persona. Según la segunda postura, la relevancia sólo es aplicable en cuanto que hay unos derechos culturales que deben ser satisfechos, pero éstos no tienen porqué afectar el cumplimiento de otros derechos; habría que distinguir los derechos y recursos relevantes para ejercer libremente la realidad cultural propia y las que no, permitiendo, por tanto, la convivencia de distintas realidades culturales dentro de la misma unidad política. Las distintas manera de acomodar las diferentes realidades culturales bajo un paraguas democrático, no es de extrañar, está en la base de gran parte de la teoría política contemporánea.

Las diferentes consecuencias prácticas psico-sociales, políticas y jurídicas de ambas posturas son a mi entender muy importantes, y forman parte del corazón de la presente tesis. La primera postura, nacionalista clásica, primordialista, permitiría eventualmente, por ejemplo, la secesión absoluta e ilimitada, también de los ricos no discriminados, sin importar las consecuencias para los diferentes ni las repercusiones en la justicia distributiva de una determinada sociedad. La segunda posiciona la autodeterminación en un marco de derechos humanos, obliga a pensar en el otro como un igual en dignidad en diferente situación.

Por todo ello, incluso aquellos autores clásicos que, como Lenin, consideraban el derecho de autodeterminación sólo en el sentido de “secesión”, trataron bien pronto de distinguirlo de la doctrina nacionalista. En el ejemplo específico de Lenin, éste distinguía, ya lo hemos visto, entre “chauvinismo nacionalista” y “autodeterminación de los pueblos”, fundamental apra entender el fin del colonialismo.

Si para los autores liberales contractualistas clásicos las características etnoculturales o nacionales eran como mucho una explicación de la multiplicidad de contratos pero no definitoria de la voluntad de constituir una sociedad, si para voluntaristas como Renan la voluntad era específicamente la cuestión relevante y no la naturaleza de los signatarios, o si para liberales utilitaristas como Stuart Mill la unidad cultural era en todo caso conveniente, pero no siempre, para la prosperidad de la unidad cultural, hoy en día muchos liberales igualitarios tratan de acomodar de diferentes maneras el ejercicio de la identidad y los derechos culturales en un marco diferente del nacionalista clásico, en un marco de democracia liberal que garantice todos los derechos de los ciudadanos.

Partiendo de las ideas de justicia distributiva de Rawls, por ejemplo, se ha planteado considerar las características culturales de colectivo no como elementos definitorios necesarios de la unidad política, sino alternativamente o adicionalmente como bienes que deben ser distribuidos y derechos que deben ser ejercidos por los ciudadanos, de acuerdo a criterios de justicia. Buen ejemplo es la conocida postura de Will Kymlicka. Para este autor, los individuos “necesitan también acceso a la cultura de la sociedad. Las medidas diferenciadas por grupos orientadas a asegurar y promover este acceso pueden, por tanto, tener un papel legítimo en una teoría liberal de la justicia”⁵⁷⁹. Como el propio Kymlicka refiere, en terminología rawlsiana, podemos decir que el acceso a tal cultura es un “bien primario” –es decir, un bien que la gente necesita, con independencia de su particular elección de estilo de vida, dado que provee el contexto dentro del cual realizarán esas elecciones particulares”⁵⁸⁰.

Así pues, la autodeterminación externa entendida como derecho ilimitado de pueblos predefinidos propio de la doctrina nacionalista es radicalmente diferente del origen de las teorías remediales de la secesión, aunque ambas coincidan eventualmente en la prohibición del colonialismo.

⁵⁷⁹ Kymlicka, W., *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1995, p. 84

⁵⁸⁰ Kymlicka, W., *Multicultural...*, op. cit., nota 11, cap. 5, p. 214. Kymlicka profundiza en este argumento en Kymlicka, W., *Liberalism, Community, and Culture*, Oxford University Press, Oxford, 1989, cap. 7.

Esto ha permitido, por un lado, diferenciar los casos de colonialismo y los de secesión, y en consecuencia incluir la prohibición del colonialismo en el contenido del derecho de autodeterminación, manteniendo fuera el derecho de secesión.

La desvinculación entre autodeterminación y secesión es para autores como Lee Seshagiri no sólo pragmáticamente positiva, como argumentaba Boutros Ghali para prevenir previsibles conflictos bélicos, sino que “desconectar la secesión de la autodeterminación permite una mayor flexibilidad en la conceptualización de lo que significa el ejercicio del derecho a la autodeterminación”⁵⁸¹.

De parecida opinión es Thomas M. Franck, para quien la autodeterminación es “el derecho de un pueblo organizado en un territorio establecido a determinar su destino político colectivo de una manera democrática”⁵⁸². También para Franck el derecho de autodeterminación tiene dos aspectos, interno y externo, pero resalta que estamos siendo testigos de la transformación de una manera de entender la autodeterminación como derecho a la independencia de las colonias en un derecho de todos a participar en el gobierno democrático que excluye por ahora un derecho a la secesión.

Este autor considera que, dado que la secesión tiene grandes implicaciones de todo tipo, tanto para los estados como para la comunidad internacional, así como consecuencias de largo alcance para individuos y grupos en todos los estados resultantes, parece razonable que la secesión se dé sólo si no hay disponibles otros medios menos drásticos. Al menos hoy por hoy, concluye Franck, la autodeterminación ha dejado de ser entendida como un *principio de exclusión* (derecho de secesión) para convertirse en un *principio de inclusión* (derecho de participación). Admite Franck que tal vez en el futuro “la opción de la secesión puede reemerger como un derecho iusinternacional”, pero este aspecto, sin embargo, es “de largo, menos claro en el presente que el derecho a la participación democrática en el gobierno”⁵⁸³.

Esta desconexión o la consideración de que hoy por hoy el derecho a la secesión no sea aceptado no ha impedido que algunos autores debatan sobre la conveniencia o no de promover la aceptación a nivel internacional de un derecho a la secesión unilateral bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, algunos enmarcan el derecho a la secesión como una parte o una manera de ejercitar el derecho a la autodeterminación externa y otros no, considerándolo un derecho diferente.

Para explicar la autodeterminación externa entendida como independencia en el contexto colonial y la oposición a un derecho a la secesión en el contexto post-colonial, algunos autores han argumentado que el caso de la independencia política o la estatalidad de las antiguas colonias es históricamente diferente de la secesión, porque, como hemos

⁵⁸¹ Seshagiri, L., “Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at International Law”, *Harvard International Law Journal*, vol. 51, n. 2, 2010, pp. 554-589 en Conclusiones, p. 598.

⁵⁸² Franck, T. M., “The Emerging Right to Democratic Governance”, *The American Journal of International Law*, Vol. 86, n.1, 1992, pp. 46-91.

⁵⁸³ Franck, T. M., “The Emerging Right...”, op. cit., pp. 46-91

explicado, en las colonias los sujetos están jurídicamente definidos, delimitados y discriminados respecto a la metrópoli⁵⁸⁴ independientemente de que, para evitar fraudes de ley, como hemos indicado con anterioridad, se obviara su inclusión o no en los textos constitucionales de los imperios.

Durante algún tiempo, tuvo cierto éxito la conocida como “doctrina del agua salada”, para tratar de distinguir los pueblos que podían ser considerados coloniales y acceder a la estatalidad y los que no (considerando “pueblo” como grupo de personas con características culturales o nacionales autodefinidamente diferentes). Por ejemplo, en 1975, el profesor Modesto Seara Vázquez, defendía que:

“El derecho de autodeterminación en sentido propio, como derecho supuestamente reconocido en Derecho Internacional, no podría significar la facultad de un grupo humano con características nacionales (autodefinidas por ese mismo grupo) para establecer su propio estado (...) El examen de la realidad internacional revela que el derecho de secesión no se encuentra reconocido ni aceptado, y no tiene una protección internacional, excepto en caso de los territorios sometidos a dominio colonial. Incluso en este caso, un examen riguroso de la realidad internacional prueba que su aplicación es real sólo en parte, pues está condicionada por factores geográficos. (...) Por ejemplo, muchos de los pueblos que forman parte de la Unión Soviética tienen una identidad nacional indiscutible y fueron sometidos de acuerdo con las más puras técnicas coloniales; sin embargo, nadie reclama la aplicación a ellos de la Resolución 1514, no pudiendo encontrarse otra explicación para ello que no sea el de la contigüidad geográfica (...). La separación geográfica (y ningún otro factor) es el que determina en la práctica internacional, la diferencia en la calificación a una relación de dominio de un pueblo por otro, como relación colonial (con su correlativo derecho a la independencia) o como la relación existente entre una minoría nacional y el Estado multinacional)”⁵⁸⁵.

La desintegración de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, como sabemos, obligó a la doctrina a replantearse la doctrina del agua salada como único criterio para la aplicación del derecho de autodeterminación.

A nadie resulta extraño que el contenido de la autodeterminación externa en general, y en particular el problema del derecho a la secesión, es el que ha acaparado la mayor atención por parte de la doctrina y en la cotidianeidad política. El problema de la secesión más que los aspectos relacionados con la unión en unidades supranacionales u otros modos de reorganización política que también pueden ser relacionados con el aspecto externo de la autodeterminación externa, entendida como el derecho de un pueblo a establecer su estatus político. No resulta tampoco difícil llegar a la conclusión de que la intensidad y, a veces, la belicosidad de los debates, tienen que ver con que hoy por hoy son los estados las unidades básicas dentro de las cuales se produce la distribución básica de derechos y recursos. Cualquier posición sobre la estatalidad, como diría Franck, tiene un impacto máximo en la justicia distributiva, no sólo en la distribución de recursos y poder de las élites económicas y políticas, sino en los modos y niveles de realización de derechos humanos.

⁵⁸⁵ Seara Vázquez, M., “Los límites del principio de autodeterminación de los pueblos”, en *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G. E, Pamplona, 1974, pp. 473–478.

El estado es la unidad política donde principalmente se reparten derechos y recursos, por lo que intervención extranjera, secesión y mantenimiento de la paz son conceptos absolutamente interrelacionados. Ya Immanuel Kant reflexionaba sobre ello en su tratado “Sobre la Paz Perpetua”: “Un Estado (...) es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer. Injertarlo en otro Estado, (...) significa eliminar su existencia como persona moral y convertirlo en una cosa, contradiciendo, por tanto, la idea del contrato originario sin el que no puede pensarse ningún derecho sobre un pueblo. Todo el mundo conoce a qué peligros ha conducido a Europa, hasta los tiempos más recientes, este prejuicio sobre el modo de adquisición. (...) Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. Pues, ¿qué le daría derecho a ello? ¿quizá el escándalo que dé a los súbditos de otro Estado? Sin embargo, no resulta aplicable al caso de que un Estado se divida en dos partes a consecuencia de disensiones internas y cada una de las partes represente un Estado particular con la pretensión de ser el todo; que un tercer Estado preste entonces ayuda a una de las partes no podría ser considerado como injerencia en la constitución de otro Estado (pues sólo existe anarquía). Sin embargo, mientras esta lucha interna no se haya decidido, la injerencia de potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo independiente que combate una enfermedad interna; sería, incluso, un escándalo y pondría en peligro la autonomía de todos los Estados”⁵⁸⁶

La fusión de dos estados, el cambio de relación entre dos estados (una relación de estado libre asociado, etc.), la desintegración, la secesión, etc., afectan de manera distinta, necesariamente, a la distribución de recursos. Pero además, cada una de estas variaciones de formas de ejercitar diversamente el derecho de autodeterminación externa –si es que en verdad forman parte del derecho- son también diferentes respecto a la expresión de la *voluntariedad*.

La unión o fusión de estados no plantea tantos problemas teóricos o prácticos porque los pueblos en cualquiera de sus acepciones son coincidentes (tanto para quienes definan pueblo culturalmente como para quienes lo definan civilmente o estatalmente). Tampoco en los casos de cambio, de reforma de soberanía o en la desintegración voluntaria y pacífica, en este caso porque la voluntariedad de todos los actores supera cualquier dificultad o inconsistencia en la definición de los sujetos. La unión o fusión voluntaria acerca a la natural igualdad humana y la expresión popular de un acuerdo es sencilla de distinguir y la unión o fusión forzosa esta prohibida por el Derecho Internacional.

La secesión requiere, sin embargo, argumentar suficientemente que no existe tal igualdad, y que esa no igualdad es relevante para modificar la distribución de recursos y crear unos ciudadanos con distintos derechos –por pertenecer a un estado- y otros con menos –por pertenecer a otro-. La secesión, sabemos, presenta mayores problemas tanto para establecer el cómo dividir recursos, como para determinar la voluntariedad. Por ello, no es extraño que la cuestión de la secesión haya acaparado la mayor parte de la atención de la doctrina y que Allen Buchanan diga que:

“Una teoría comprensiva de la autodeterminación (...) debe incluir, no sólo una explicación del derecho a la secesión sino un marco normativo más amplio para evaluar y responder a las reivindicaciones de autodeterminación, y una que no asuma que la estatalidad independiente es el fin natural o la inevitable culminación de las aspiraciones de autodeterminación”.⁵⁸⁷

⁵⁸⁶ Kant, I., “Sobre la paz...”, op. cit., p. 141 y ss.

⁵⁸⁷ Buchanan, A., *Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York., 2007, p. 332 y ss.

Como resume David Raič, “la autodeterminación externa, si es ejercitada por la nación a través de medios tales como la disolución, fusión o unión no entra en conflicto con el derecho de la integridad territorial del Estado. Esto es, por supuesto, diferente en relación con un supuesto derecho a la secesión unilateral. La tensión entre tal “derecho” y el derecho de los estados a preservar su estatus territorial es evidente (...)”⁵⁸⁸.

En resumen, podemos distinguir en la doctrina, en principio, los siguientes tres grandes acercamientos a la autodeterminación externa en su relación con la estatalidad más allá de los casos de descolonización, concretamente con el derecho a la secesión, teniendo en cuenta que todos ellos consideran la independencia en un contexto de descolonización como un ejercicio legítimo de autodeterminación externa o constitutiva:

1.- La de aquellos autores que entienden que el *derecho de secesión unilateral no forma parte del derecho de autodeterminación externa*.

Normalmente consideran la autodeterminación externa como la no injerencia en asuntos propios de cada pueblo o estado, la prohibición de colonización, o de invasión externa por parte de otro pueblo o estado, o también el derecho de un estado a reorganizarse políticamente de manera distinta internamente o a nivel estatal, a establecer su estatus internacional, incluyendo fusionarse o unirse con otros, distinguiéndolo de un derecho unilateral a la secesión, considerado inexistente en el Derecho Internacional.

La doctrina que ha estudiado la cuestión tras la oleada descolonizadora de los sesenta hasta hoy en día, incluyendo a Crawford, Cassese, Cristescu, etc. Entre estos autores, como hemos visto, los argumentos varían entre quienes consideran la autodeterminación como un principio y no derecho y, en cuanto principio, puede y debe ser equilibrado en igualdad con otros principios como la integridad territorial de los estados, y los que lo consideran un derecho.

También se puede distinguir entre quienes se oponen a su reconocimiento y entre los que simplemente niegan que hoy exista como tal. Tal y como considera Hurst Hannum: “aunque algunos autores han argumentado que algún tipo de “derecho a la secesión” *debería* reconocerse como parte del derecho de autodeterminación, (...) la práctica constante de los estados y el peso de la autoridad requieren la conclusión de que tal derecho no existe todavía [en el Derecho Internacional]”⁵⁸⁹.

La visión predominante hoy en día es que el Derecho Internacional es un Derecho de estados –que son, también, expresión jurídica de los pueblos- y los derechos de los pueblos definidos etnoculturalmente debe acomodarse a este marco jurídico-político internacional.

La secesión fuera de los casos de colonización o imperialismo, no está expresamente permitida a nivel internacional aunque nada se opone a que se regule internamente; nada se opone a una declaración unilateral pero sí a sus efectos efectivos sobre las fronteras,

⁵⁸⁸ Raič, D., *Statehood and the Law...*, op. cit., pp. 305-306

⁵⁸⁹ Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination...*, op. cit. p. 49.

que no pueden modificarse sin acuerdo. Para mantener intacto el principio de integridad territorial y soberanía de los estados, una secesión sólo puede realizarse mediando un consentimiento que se articula desde el ámbito competencial interno de los estados.

Partidarios o no de recoger el derecho a la secesión en las Constituciones nacionales, resaltan que esta regulación pertenece precisamente al ámbito exclusivo de la soberanía de los estados y, por tanto, al libre ejercicio de su autodeterminación. Así, en la autodeterminación de un pueblo entendido como realidad nacional frente a pueblo como estado, se presume la integridad territorial del estado, en nombre del mismo derecho de autodeterminación, especialmente cuando podemos distinguir el interés de terceros en la desintegración de un estado para sus propios intereses. Así, según Cristescu:

“El principio de iguales derechos y autodeterminación, tal y como está recogido en la Carta de las Naciones Unidas, no garantiza un ilimitado derecho de secesión a las poblaciones viviendo en un territorio de un estado soberano e independiente, y un derecho tal no puede ser considerado como un provisión *lex lata*. Un derecho de secesión apoyado o animado por estados extranjeros estaría claramente en patente contradicción con el respeto a la integridad territorial de los estados sobre la que se basa la igualdad soberana de los Estados.(...)”

Para este autor sería peligroso reconocer en el derecho internacional un general e ilimitado derecho a la secesión, ya que los derechos de una población viviendo en un territorio de un estado dado son regulados por la legislación constitucional de ese estado. El derecho de secesión sólo podría darse si mediara una subyugación en violación del Derecho Internacional, es decir, si hubiera precisamente una previa violación del derecho de autodeterminación. Para Cristescu, “en tales casos, los pueblos en cuestión tienen el derecho de recobrar su libertad (...) la comunidad internacional es hoy suficientemente madura para ser capaz de distinguir entre la genuina autodeterminación y la autodeterminación usada para disfrazar un acto de secesión”⁵⁹⁰.

Podemos señalar, por último, que tras la irrupción de las teorías remediales de la secesión, que describiremos a continuación, los críticos de las mismas han renovado los argumentos de las posturas contrarias a la existencia de un derecho a la secesión en el Derecho Internacional.

Thomas Christiano ha argumentado contra la idea de Allen Buchanan de que una redistribución discriminatoria consituya una base para la secesión o incluso descentralización, considerando que la sola existencia de un estado liberal democrático debe hacer desistir a la Comunidad Internacional de aceptar intentos no consensuados de secesión de los mismos⁵⁹¹.

Katherine del Mar, por ejemplo, ha concluido que la secesión remedial es un mito, que es tan sólo una construcción teórica y que no forma parte del Derecho Internacional⁵⁹².

⁵⁹⁰ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981. Informe: E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1., p. 26

⁵⁹¹ Christiano, T., “Secession, Democracy and Distributive Justice”, *Arizona Law Review*, vol 37, n.1 1995, pp. 65 y ss

⁵⁹² del Mar, K., “The myth of remedial secession” en French, D., (ed) *Statehood and Self-Determination*:

2.- La de los autores que interpretan *el derecho a la secesión unilateral limitado* como una forma de ejercicio extrema del derecho de autodeterminación externa.

El derecho unilateral ilimitado a la secesión no formaría parte del contenido del derecho de autodeterminación.

Esto no significa necesariamente que estos autores apoyen la secesión en todo caso. Allen Buchanan explica que: “la secesión es la forma más dramática de afirmación que puede tomar la autodeterminación. Sin embargo, (...) enfocarse exclusivamente (...) en la secesión distorsiona la teoría que impide progresar en la práctica. Lograr la estatalidad independiente es, en muchos casos, la menos factible o apropiada manera de ejercer la autodeterminación”⁵⁹³. La secesión unilateral forma parte de la autodeterminación externa pero de una manera limitada, como derecho remedial o derecho de justa causa, relacionado con la violación de la dimensión interna del derecho.

Allen Buchanan, favorable a las que él mismo denomina Teorías Remediales de la Secesión, reflexiona que: “El Derecho Internacional debería reconocer un derecho remedial a la secesión pero no un derecho general a la autodeterminación que incluya un derecho a la secesión para todos los pueblos o naciones. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, *el derecho unilateral a la secesión –el derecho a la secesión sin consentimiento o una autorización constitucional- debería ser entendido sólo como un derecho remedial, una respuesta como último recurso contra serias injusticias*. En consecuencia, el orden legal internacional debería apoyar los esfuerzos de los estados de mantener su integridad territorial mientras hagan un trabajo creíble de protección de derechos humanos básicos (...) El orden legal internacional debería promover alternativas a la secesión, trabajando por un mayor cumplimiento de las normas de derechos humanos internacionales existentes que prohíban la discriminación étnico-nacional y religiosa y, en algunos casos, mediante el apoyo a los regímenes de autonomía dentro de los estados, es decir, de acuerdos de autogobierno que no alcanzan la plena soberanía (...)”⁵⁹⁴.

Allen Buchanan, partidario de un cualificado derecho remedial a la secesión, considera que las condiciones para ejercer este derecho son, o bien:

- (a) Serias violaciones a gran escala de derechos humanos, autodefensa.
- (b) Redistribución discriminatoria continuada y grave de recursos dentro de un Estado.
- (c) Preservación de la cultura
- (d) Rectificación de injusticias pasadas, como una anexión injusta de un territorio de un Estado soberano,
- (e) Vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada”⁵⁹⁵.

Reconciling Tradition and Modernity, Cambridge University Press, 2013, p. 79 y ss.

⁵⁹³ Buchanan, A., *Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York., 2007, p. 332 y ss.

⁵⁹⁴ Buchanan, A., *Justice, Legitimacy, and Self-Determination...*, op. cit., p. 331 y ss.

⁵⁹⁵ Buchanan, A., *Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec*. Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1991, p. 29 y ss.

Un límite fundamental que encontramos en estos autores está relacionado con la justicia distributiva a la que hacía referencia Christiano. Allen Buchanan, partidario de la secesión como derecho remedial, se manifiesta, sin embargo, contrario a la secesión por razones meramente económicas de territorios más ricos que no vayan acompañados de una discriminación clara y grave o de una teórica compensación económica⁵⁹⁶. Y es que “hay amplia evidencia histórica” de que el nacionalismo y el compromiso con la redistribución de riqueza dentro de un grupo nacional a menudo no van de la mano⁵⁹⁷.

Favorable a este argumento se encuentran autores preocupados por la justicia distributiva a nivel global que, como Thomas Pogge, han advertido que no es lo mismo, desde un punto de vista de afección a la justicia distributiva, la independencia o el acceso a la estatalidad de pueblos oprimidos y discriminados, como los coloniales, que la secesión unilateral que incluye la independencia de grupos o territorios ricos para eludir obligaciones de justicia distributiva adquiridos con anterioridad⁵⁹⁸.

Oscar Schachter considera que el reconocimiento de un derecho remedial de secesión es ya un hecho, e identifica de entre la tradición recogida por los textos internacionales de las Naciones Unidas tres estándares para la secesión⁵⁹⁹:

- (i) La comunidad que reclama secesión tiene una identidad cultural diferenciada del resto del país y habita un territorio delimitado cuyos habitantes apoyan ampliamente la separación política dadas las circunstancias coyunturales.
- (ii) La comunidad en cuestión ha sido sometida a una discriminación política y económica sistemática.
- (iii) El gobierno central ha rechazado toda propuesta razonable de autonomía y derechos de las minorías de la comunidad reclamante.

Como explica Raič, “casos como el de Bangladesh o Croacia reafirman la posición de que si el derecho de autodeterminación interna es persistente y seriamente violado, y si (...) ya no hay una perspectiva realista de encontrar una solución para la situación dentro de las fronteras de un estado, el aspecto interno de la autodeterminación se convierte en aspecto externo del derecho que puede ejercitarse a través de una secesión unilateral. Se ha argumentado (...) que la autodeterminación interna puede ser violada de varias maneras (...):

- (a) una conducta gubernamental que constituya una denegación formal del derecho de los pueblos a su autodeterminación interna (...) o
- (b) una política de discriminación indirecta que denote una situación en la que a un pueblo se le reconozca formalmente un derecho de autodeterminación interna, pero que su ejercicio sea denegado en la práctica (...) o

⁵⁹⁶ Buchanan, A., *Secession: The Morality of...*, op. cit., p. 114 y ss.

⁵⁹⁷ Buchanan, A., *Justice, Legitimacy, and Self-Determination...*, op. cit., p. 390

⁵⁹⁸ Pogge, T., *World Poverty and Human Rights*, Polity, Cambridge, 2004, p. 191.

⁵⁹⁹ Schachter, O., “Sovereignty – Then and Now” en R. St J. Macdonald (ed.), *Essays in Honour of Wang Tieya*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1994, pp. 671–688 en p. 684. Citado por Knop, K., *Diversity and Self-Determination in International Law* Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 81.

(c) la extensión de serias violaciones de derechos humanos, especialmente del derecho a la vida (...)“⁶⁰⁰.

De similar opinión parecen ser, como hemos visto, Thomas Franck, Daniele Archibugi⁶⁰¹ y otros, cuando argumentan que la violación de la autodeterminación interna puede conllevar el ejercicio de la autodeterminación externa.

Las limitaciones interpretativas de la secesión para autores como Brownlie, Schachter o McCorquodale deben comprenderse, finalmente, en los distintos intentos de hacer una interpretación coherente con el Derecho Internacional y los derechos humanos.

Por último, es común encontrar en este apartado quienes, proclamando la inexistencia de un derecho general de secesión, dan explicaciones políticas o justificaciones jurídicas parciales de hechos consumados en casos de secesión (una declaración de independencia reconocida internacionalmente) tildándolos de “casos especiales”⁶⁰².

Además deberíamos incluir posiciones marxistas clásicas, como la leninista, que aunque apoya en teoría un *derecho unilateral de secesión* (aunque lo denomine ilimitado) en realidad lo limita sometiéndolo:

- i) teórica y políticamente; a una función instrumental de la secesión con el objetivo de ser más eficaces en la liberación del proletariado y en alcanzar a la mayor brevedad una sociedad comunista.
- ii) jurídicamente; al incluir la secesión en la Constitución comunista, la somete a un marco legal predefinido.

Aunque el fondo ideológico es muy diferente, la conclusión a la que han llegado algunos autores demócratas liberales hoy en día, por otros caminos, reúne ciertas semejanzas con esta postura en dos sentidos:

- por un lado, hay autores liberales que sustituyen la función instrumental de alcanzar un estado comunista por un marco de derechos humanos, que sería una limitación *externa* que sí puede encontrarse en el Derecho Internacional;
- por otro lado, la propuesta de inclusión de un derecho de secesión en las constituciones liberales. La regularización interna de un proceso de secesión –si no constitucional, al menos legal, como la *Clarity Act* canadiense de 29 de junio de 2000- sería una forma de limitación que, sin embargo, no forma parte del Derecho Internacional.

⁶⁰⁰ Raič, D., *Statehood and the Law...*, op. cit., p. 368

⁶⁰¹ Archibugi, D., “Un análisis crítico de la autodeterminación de los pueblos” en Mesa, M., y González Bustelo, M., (eds.) *Anuari o CIP 2004: Escenarios de conflicto. Irak y el desorden mundial*. Centro de Investigación para la Paz (CIP), Fundación Hogar del Empleado (FUHEM), Icaria, Barcelona, 2004, pp. 270-300.

⁶⁰² Ver, por ejemplo, para el caso de Kosovo, Ker-Lindsay, J., “Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo ‘Unique Case’ Argument”, *Europe-Asia Studies*, vol. 65, n. 5, 2013, pp. 837-856.

3.- La de los autores que consideran que el derecho a la secesión unilateral e ilimitada sí forma parte del derecho de autodeterminación.

Para estos autores ésta sería una manera más de ejercer legítimamente el derecho de autodeterminación, sería una interpretación de autodeterminación externa, independientemente de lo que suceda con los derechos de aquellos fuera del grupo vinculado. Estas posiciones normalmente son defendidas desde perspectivas teóricas hostiles o escépticas al estado como entidad en la que se distribuyen recursos y derechos:

- i) Libertarias (anarquistas, anarcocapitalistas, libertarios-liberales, etc.) - La voluntad de asociación de hombres en unidades políticas es totalmente incondicionada de otros acuerdos y no puede ser detenida por nada, ni siquiera los derechos adquiridos de los otros. Esta voluntad puede, pero no necesariamente debe, estar definida por alguna característica etnocultural previa.
- ii) Nacionalistas, primordialistas - La nación etnocultural trasciende a sus miembros, a las personas que la componen, y no le rinde cuentas a nada ni a nadie. El Estado democrático se convierte en :
 - (a) el fin último al que necesariamente ha de tender o debe aspirar la nación predefinida, de manera que ambas fronteras coincidan y/o
 - (b) sólo un medio o instrumento de la nación etnocultural, sin otro valor en sí mismo.

La relación entre la doctrina nacionalista y la estatalidad en el marco del derecho de autodeterminación ha sido, por otro lado, analizada por James Summers, quien la considera “bastante irónica”:

“El nacionalismo es una doctrina construida alrededor de y obsesionada con los estados y la forma que deberían tomar. Esta obsesión, no obstante, está escondida por su ambivalencia exterior hacia el estado como institución. Los estados sólo son legítimos si representan una nación. Si no lo hacen, son desechables y deben desecharse en favor de estados nacionales. Sin embargo, aunque desechable para el nacionalismo, el estado es la unidad básica de Derecho Internacional. Las dos principales fuentes de Derecho Internacional, los tratados y la costumbre internacional, dependen de las intenciones y práctica de los estados soberanos”⁶⁰³.

Rainer Bauböck resume memorablemente el ideal nacionalista primordialista en cuatro características que nos permiten distinguirlo como doctrina autónoma y comprender los peligros que entraña. En primer lugar, tal y como señaló Gellner, recuerda Bauböck que los nacionalistas defienden “la idea de que las naciones son unidades políticas tanto como culturales y las fronteras de ambas deben ser congruentes. Este principio es violado por los estados multinacionales uniendo bajo un mismo gobierno a diferentes comunidades con una reivindicación de independencia, así como por las fronteras que separan a la misma cultura en diferentes estados. El nacionalismo étnico (...) solicita que las fronteras de los estados sean redibujadas (...)”. En segundo lugar “puede lograr su objetivo de hacer coincidir las fronteras políticas con las étnicas ajustando ya unas u otras. Si las fronteras territoriales no pueden ser cambiadas para satisfacer este impulso en favor de la homogeneidad, entonces

⁶⁰³ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law”, *International Journal on Minority and Group Rights*, 2005, pp 325–354

las fronteras de los grupos serán atacadas (...) Las [tácticas] más extremas son eliminar quitar físicamente la población que declara ser ajena a la nación mediante su expulsión en masa o genocidio. La segunda opción es la segregación interna que excluye de manera efectiva a las minorías de la comunidad política, mientras que las priva de los recursos necesarios para construir su propia comunidad autónoma. La tercera característica del nacionalismo, según Bauböck, es que promueve una concepción particular de patriotismo que va más allá del sentimiento de simpatía y familiaridad que los individuos desarrollan por el lugar donde han nacido y crecido y de la simpatía por sus compatriotas, añadiendo un elemento de obligación incondicional, que debe ser enseñado y promovido, una obligación que no puede ser renunciada voluntariamente, que refleja una “lealtad a la comunidad nacional que debe trascender todos los demás intereses y obligaciones”. El cuarto elemento, resultado del anterior, es que “los nacionalistas desestiman generalmente las obligaciones positivas con las personas o sociedades que no son reconocidos como miembros de su propia nación. Aquellos que quieren presentar una defensa moral del nacionalismo rechazarán los puntos de vista chovinistas, racistas o imperialistas rechazarán, opiniones racistas e imperialistas que reniegan incluso las obligaciones negativas de abstenerse de invadir otros países o las obligaciones contractuales derivadas de los tratados. Aún así insistirán en que ninguna de las siguientes son obligaciones morales para los gobiernos y estados: asegurar un derecho a la subsistencia básico para todos los seres humanos (Shue), asistir a otros estados para desarrollar su economía o sus instituciones democráticas o redistribuir los beneficios de los recursos naturales entre estados (Pogge), proteger a los refugiados en el extranjero y admitirlos en el propio país (Gibney), garantizar la ciudadanía a largo plazo a los inmigrantes residentes (Walzer, Carens). En la visión nacionalista, tales obligaciones positivas son limitadas a nuestros compatriotas”⁶⁰⁴.

En la naturaleza teleológica de la doctrina nacionalista primordialista, que incluye en su máxima expresión la estatalidad o reificación del entemetafísico nación por encima de los derechos de las personas, es común encontrar argumentos como los defendidos por Buchanan entremezclados con los clásicos nacionalistas, lo que resulta en el fenómeno victimista, cierto o mitológico, mencionado con anterioridad.

El choque inevitable y a menudo excluyente entre las diferentes concepciones de pueblo, como veremos, se manifiesta aquí con más claridad que en otras ocasiones. No coinciden la nación en cuanto ideal de la imaginación, generalmente, pero no sólo, apoyado y promovido consciente o inconscientemente por las élites (en la Tungusia ideal, la nación tungusa se compone de tungusos valientes y rubios) y el pueblo “real” entendido como conjunto de personas cuyas características identitarias pueden o no cumplir individualmente con el ideal nacional (en Tungusia hay cobardes, valientes, rubios y morenos, también budistas).

El peligro cierto que entraña emprender acciones para hacer coincidir a la fuerza el ideal imaginario de la nación y la realidad del pueblo como conjunto heterogéneo de seres humanos – hacer coincidir cómo “debe ser” el pueblo que, sin embargo, “es”, a pesar de los derechos individuales de los individuos que lo componen – es un fenómeno social descrito y denunciado innumerables veces aunque lamentablemente la especie humana siga todavía siendo su víctima.

⁶⁰⁴ Bauböck, Rainer, “Why Stay Together? A Pluralist Approach to Secession and Federation”, Kymlicka W., y Norman W., (eds) *Citizenship in Diverse Societies*, Oxford University Press, Oxford. 2001, pp. 366–94.

Es por ello que Paul Gilbert –partiendo del concepto de comunidades imaginadas de Anderson- ha defendido que, en todo caso, el derecho de secesión dependerá de la existencia de una comunidad real y no meramente imaginada. Para este autor la constatación de esta comunidad real es distinguible de la existencia de un nacionalismo civil, de una ciudadanía democrática leal a la unidad política o del sentimiento de pertenencia comunitaria primordialista que una inextricablemente cultura y comunidad. Es decir, la secesión sólo puede ser legítima partiendo de una comunidad política preexistente y no de un movimiento nacionalista ya sea voluntarista ya sea primordialista⁶⁰⁵. Aunque Gilbert plantea en mi opinión correctamente el problema del ideal de la imaginación y su difícil trasposición a la realidad, se enfoca solamente en la construcción positiva de la comunidad sin dar respuesta al problema al que hemos hecho referencia anteriormente: no deja claro el caso de la definición negativa como derecho remedial, si un grupo es perseguido arbitrariamente en el seno de un estado. Un grupo que no constituya un tipo de comunidad con todos los elementos de realidad que demanda Gilbert –que no tenga las estructuras jurídicas y políticas preparadas para la estatalidad- no podría aspirar a la secesión como último recurso.

El proceso de reificación jurídica del ideal nacional -a pesar de los derechos de cada uno de los ciudadanos y, por tanto, del pueblo, aunque cuente eventualmente con su connivencia- tiende a crear estados monoculturales –mononacionales, monoétnicos, monolingüísticos, etc.-, un proceso que en el infructuoso intento de eliminar a largo plazo la diversidad identitaria –nunca fue ni será posible alcanzarlo de manera estable sino sólo de manera temporal y terrible-, se ha llevado históricamente por delante libertades individuales y colectivas de los individuos, víctimas del proceso, que no se ajusten con el ideal nacionalista.

Para Salvatore Senese el proceso de reificación de un ideal nacionalista (uno de los posibles) se ha producido a pesar de o al menos sin tener en cuenta los derechos de los individuos que componen el pueblo al que se refiere el ideal:

“El vínculo entre la idea de pueblo y aquella de la soberanía política reposa en el papel de intermediario del concepto político de nación, que triunfó bajo el romanticismo. Pero la idea de nación se ha desarrollado de maneras bastante diferentes, eventualmente llevando a conceptos que son mutua e implacablemente opuestos.

Por un lado, la idea de nación llegó a significar que las características físicas y naturales de un agregado humano y su entorno –tradiciones del pasado, de la tierra y sangre, e incluso la raza- han nutrido un concepto de nación que trasciende a los seres humanos. El pueblo, incluyendo la nación, ve ésta como una colectividad abstracta e indivisible, más allá del individuo, que no puede estar sujeta a la voluntad de nadie, que puede por sí misma ser el pueblo: una colectividad que existe a través del tiempo, es auto-contenida, e independiente de sus miembros temporales.

Esta abstracción facilita la expropiación de un pueblo; a través de ésta, el poder se despersonaliza, aunque se mantiene ajeno, sin embargo, a aquellos que son sometidos a ella. Esta versión casi naturalista y trascendente de una nación anula totalmente a su pueblo cuando deja paso a conformarse un estado. El

⁶⁰⁵ Gilbert, P., “Communities real and imagined: good and bad cases for national secession” en Lehning B., Percy, (ed.), *Theories of Secession, Philosophy & Public Affairs*, Taylor & Francis Group, Routledge, London, New York, 2005, p. 205 y ss

estado entonces se convierte en la personificación de la nación.”⁶⁰⁶

Así las cosas, el primer grupo de teorías (1.- la secesión unilateral no es parte del Derecho Internacional-) es el que tiene una mayor aceptación entre la doctrina iusinternacionalista, habida cuenta de que el Derecho Internacional es un Derecho de estados, presentando, como es esperable, una gran variabilidad ideológica y una multiplicidad de matices en los argumentos que responden en general a distintos acercamientos a la cuestión de la justicia global.

El segundo grupo de teorías (2.-la secesión unilateral puede ser parte del Derecho Internacional con importantes limitaciones-), sin embargo, tiene también una amplia aceptación a nivel internacional, especialmente *a posteriori* para justificar la estatalidad de nuevos estados (secesiones o desintegraciones) una vez que han sido las independencias consumadas *de facto*.

Ambas teorías se hacen compatibles al explicar el acceso a la estatalidad tras los resultados fácticos políticos como son las desintegraciones estatales que se hayan producido después del período histórico de descolonización, unas considerando que el estado desintegrado ya no existía y las otras porque la autodeterminación interna fue violada. Y es que fuera del contexto colonial se han creado en la práctica nuevos estados unilateralmente, como es el caso de los estados nacidos de Yugoslavia, y es razonable esperar que las fronteras que hoy conocemos se lleguen a modificar en algún momento en un futuro indeterminado.

¿Cómo se ha explicado este fenómeno jurídicamente (y no sólo político-sociológicamente) desde las diferentes y principales posturas teóricas que hemos descrito que no defienden un derecho ilimitado de secesión unilateral?. ¿Cómo hacer compatible una situación fáctica como es una secesión unilateral consumada con el Derecho Internacional?

Para poder argumentar a la vez que el derecho a la secesión no es parte del DI y en cambio aceptar nuevos estados nacidos *de facto* de secesiones, se ha recurrido fundamentalmente, pero no sólo, a tres vías:

1) *La desintegración del estado*: Argumentando que los territorios que formaban un nuevo estado en el ejercicio de la autodeterminación externa lo hacían no secediéndose de un estado, i.e., no se trataba en realidad de una secesión unilateral, consentida o no consentida-, sino tras la constatación de una “desintegración” previa del estado. Esta es la vía que utilizó, como veremos, la Comisión Badinter en la desintegración de Yugoslavia.

Esta vía argumentativa es compatible con las doctrinas mayoritarias del tipo a) que niegan que la secesión unilateral forme parte del Derecho Internacional.

La desintegración previa del estado puede darse por hechos políticos, por una situación

⁶⁰⁶ Senese, S., “External and Internal Self-Determination”, *Social Justice*, n. 16, 1989, pp. 19–25
© Isidro García Mingo

fáctica que acaba con el Estado precedente y, por tanto, no está contemplada en el marco del Derecho internacional. En este sentido, por ejemplo, Modesto Seara Vázquez, contrario a la derecho de secesión salvo para casos de colonialismo, reflexionaba que:

“El derecho internacional actual tiende al mantenimiento del *status quo*, en materia de los estados llamados nacionales, y sólo acepta la formación de los Estados nuevos cuando son hechos que se han consolidado, independientemente de la forma en que los mismos se hayan producido, ya sea por la vía violenta o de cualquier otro modo. No debe olvidarse, al reflexionar acerca de esto, que prácticamente todos los estados actuales deben su existencia o, por lo menos, su configuración actual a actos de fuerza”.⁶⁰⁷

2) *La violación del derecho de autodeterminación interna o serias violaciones de derechos humanos*: Argumentando que la seria violación del derecho de autodeterminación interna desencadena (políticamente) la aspiración de independencia y otorga (jurídicamente) el derecho a ejercer la autodeterminación en su aspecto externo en línea con las teorías de derecho remedial de la secesión que hemos mencionado anteriormente. Es decir, se aplican las teorías remediales como justificación *a posteriori*.

Teniendo en cuenta que las secesiones, en la práctica, o bien se han producido de manera negociada o bien ha mediado un conflicto armado –y por tanto, se han producido violaciones de derechos humanos- no es difícil sostener la causalidad entre la práctica y las consecuencias jurídicas. Este es un argumento que ha sido defendido por diferentes estados (según Summers “para algunos estados, el derecho de autodeterminación interna estaba ligado a un derecho remedial a la autodeterminación externa (...)”⁶⁰⁸ y por parte de la doctrina, cuyos más prominente autores hemos mencionado con anterioridad (refiere Karen Knop que algunos académicos interpretan que es conforme al Derecho Internacional la autodeterminación externa ejercida como secesión cuando el derecho a la autodeterminación interna sea violado “(...) dependiendo del punto de vista de cada académico sobre la autodeterminación interna”.⁶⁰⁹

Una importante objeción formulada contra esta posición es la paradoja de la violencia, que ha recibido distintos nombres. Esto es, que ofrecer la secesión como solución a un conflicto violento puede tener el contraproducente efecto de alentar la violencia como camino para obtener la secesión.

3) *La desobediencia civil* – Lee Seshagiri adopta una posición intermedia interesante. Para este autor es importante reflexionar en torno al problema de la secesión, porque si bien dice no apoyar ni llamar a su apoyo “en ningún caso particular”, es legítimo dudar “que las fronteras internacional vayan a permanecer estáticas de hoy adelante”. Por ello

⁶⁰⁷ Seara Vázquez, M., “Los límites del principio de autodeterminación de los pueblos”, en *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, Serie G. E, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pamplona, 1974, pp. 473–478.

⁶⁰⁸ Summers, J., *Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011, p. 202

⁶⁰⁹ Knop, K., *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p 18.

considera el derecho a la secesión dentro de un marco de desobediencia civil, que debería limitarse –y en esto coincide con autores como Buchanan, Anaya, etc. - a los casos “de clara y sustancial injusticia” lo que para este autor formaría parte de la evolución hacia una sociedad internacional democrática⁶¹⁰.

Por último, mencionemos una posición algo más escéptica y realista respecto a la secesión, como es la de Eisuke Suzuki, quien no ve otra salida, por el momento, que la resolución casuística: “la complejidad de los factores implicados en las reivindicaciones de secesión hace imposible recomendar normas que automáticamente determinen la aplicación del derecho de autodeterminación”⁶¹¹.

Estas son las vías principales que se han utilizado para explicar jurídicamente (y también ética y políticamente) el establecimiento de *nuevas* fronteras en el marco de procesos de disolución. Esto ha dejado sin respuesta, al observador perspicaz, sobre la naturaleza de las fronteras *ya existentes*. ¿Cómo negar el principio étnico del nacionalismo primordialista o el imperialismo para crear nuevas fronteras si ya existen y consideramos legítimas fronteras que fueron dibujadas bajo estos criterios?, ¿cómo defender estados multiétnicos basados en derechos e identidades civiles de ciudadanos autodefinidos frente a la idea de que a cada pueblo le ha de corresponder necesariamente un estado, si hay regímenes nacionalistas privilegiados por controlar un estado y otros movimientos nacionalistas que no?

Esta cuestión ya se la planteó, en parecidos términos, Leo Strauss, a comienzo de los años sesenta. En su obra *La ciudad y el hombre* planteaba que la inclusión en la Carta de las Naciones Unidas del principio de autodeterminación junto con el respeto a la integridad territorial de los estados estaba basado en un “fraude piadoso”: el sistema internacional actual está basado en “la asunción de que todas las fronteras presentes son justas, es decir, de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, pero esta asunción es un fraude piadoso en el que lo fraudulento es más evidente que la piedad”⁶¹².

Así, el mantenimiento de la actual arquitectura internacional, que incluye estados con fronteras que son al tiempo mayoritariamente aceptadas y estables y herencia de reinos, de imperios, de guerras étnicas, religiosas, nacionalistas, en suma, de criterios arbitrarios desde el punto de vista de justicia, es considerado, sin embargo, fundamental para mantener la paz. Por ello, cosmopolitas como Joseph Carens, (usando el “velo de ignorancia rawlsiano), argumentan que nacer tras una frontera es tan arbitrario como la raza, la edad, el sexo, etc., y que, sin embargo, esta arbitrariedad es causa de discriminación, tanto como sería ser discriminado por alguna de estas otras causas. La arbitrariedad y la discriminación no es sólo en los bienes y derechos que se reciben en cuanto súbdito sino en el ámbito de decisión del individuo en cuanto auto-legislador.

⁶¹⁰ Seshagiri, L., “Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at International Law”, *Harvard International Law Journal*, Vol. 51, n. 2, 2010.

⁶¹¹ Suzuki, E., “Self-Determination and World Public Order: Community Response to Territorial Separation”, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 16, 1976.

⁶¹² Strauss, Leo, *The City and Man*, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1964. (ed. 1978). Pp 5-6

En otras palabras mantener esas fronteras supone mantener una distribución de derechos y recursos a nivel global discriminatorio y una arbitrariedad en la definición de los grupos en el seno de los cuales se toman las decisiones. Es un esquema que no sigue ningún criterio de justicia. Esta reflexión fundamentalmente ética lleva a Joseph Carens a concluir que las democracias liberales deberían conducir sus políticas de manera que éstas fueran compatibles con aquellas que se darían en un mundo sin fronteras⁶¹³. En definitiva, para autores como Carens, es el debate mismo sobre el cambio de fronteras el que está viciado en su fundamento.

§3.3.5 Contenido (iv). Críticas a la distinción entre autodeterminación interna y externa. Distinción entre substancia y remedios. Aspecto constitutivo y aspecto continuo del derecho de autodeterminación

El mencionado Michael van Walt van Praag ha recogido algunos argumentos del debate surgido entre contrarios a establecer una distinción entre una autodeterminación interna y externa, una distinción que, sin embargo, podría ser útil, según este autor, en las discusiones acerca de las formas particulares de implementación del derecho. La oposición a la división conceptual es especialmente fuerte, cuando tal distinción conduce a “la discriminación de derechos entre categorías de pueblos”. Mientras que la tendencia general es a no apoyar un derecho de autodeterminación externa de manera general sino a favorecer una aplicación interna de la autodeterminación (en cualquiera de sus significados), especialmente respecto a indígenas o minorías recoge este autor que algunos autores se han mostrado contrarios, argumentando que tal enfoque “es equivalente a decir que hay diferentes categorías de “pueblos”: una primera clase que posee el derecho total de autodeterminación, y una clase inferior que posee solo una limitada derecho de autodeterminación interna. La distinción es arbitraria, limita el derecho de elección y va contra el simple significado de todos los instrumentos que establecen que “todos los pueblos” tienen derecho a la autodeterminación, incluyendo el derecho a “determinar libremente su estatus político”⁶¹⁴.

Otra línea de argumentación crítica con la división consiste en aquellos que opinan que “incluso utilizando un enfoque positivista (...) uno llega a la conclusión de que no hay hoy en día un instrumento internacional válido en vigor que haga tal distinción o afirme un derecho a la autodeterminación interna”⁶¹⁵.

Ambos aspectos, externo e interno, son indiferenciables para autores como Antonio Cassese, que considera, sin embargo, que la diferenciación aporta una utilidad metodológica para el estudio de la autodeterminación⁶¹⁶.

⁶¹³ Carens, J., “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, *The Review of Politics*, Vol. 49, n. 2., 1987, pp. 251–273

⁶¹⁴ Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation of the Right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention Report of the International Conference of Experts held in Barcelona from 21 to 27 November 1998*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace, Centre UNESCO de Catalunya. 1999.

⁶¹⁵ Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation...*, op. cit.

⁶¹⁶ Cassese, A., *Self-Determination of Peoples...*, op. cit., p. 70

Marc Weller también considera controvertida la división misma de las categorías autodeterminación interna/externa, definiéndolas así: “la autodeterminación externa incluye el derecho a la secesión. La autodeterminación interna trata de la elección de un sistema de gobierno y la administración de las funciones de gobierno de acuerdo con la voluntad de los gobernados”⁶¹⁷.

Duda de la conveniencia de esta división “en cuanto implica que la autodeterminación no es un derecho continuo que se aplica igualmente en todas las circunstancias que tengan que ver con la identidad de un estado o su gobierno (...)”⁶¹⁸.

En resumen, la división entre autodeterminación interna y externa es utilizada por la mayoría de la doctrina por razones de utilidad pero no está exenta de críticas.

El Relator Especial de Naciones Unidas James Anaya ha propuesto una definición contemporánea del derecho de autodeterminación⁶¹⁹. Considera Anaya que una teoría de la autodeterminación que no tenga en cuenta “un amplio contexto de múltiples patrones de asociación humana e interdependencia es en el mejor de los casos incompleta”.

Asimismo, distingue Anaya entre la *substancia* de la norma, su contenido, y los *remedios*, prescripciones que se derivan de la violación de la norma. En línea con la interpretación de la autodeterminación en un marco de derechos humanos frente al enfoque soberanista de la doctrina nacionalista que mencionábamos con anterioridad, explica, respecto a los preceptos de integridad territorial estatal y unidad política que se restringirá adecuadamente, los remedios de autodeterminación en la medida en que tales preceptos sirvan “para promover un mundo pacífico, estable y humano”. Anaya, que no se declara partidario de la secesión como derecho, considera que, “sin embargo, puede ser una opción remedial apropiada en contextos limitados”⁶²⁰, acercando su postura a las teorías remediales de la secesión como la de Buchanan.

Para Anaya, el contenido del derecho de autodeterminación, base para considerar ilegítimo el colonialismo, comprende dos elementos. En vez de aspecto externo e interno, los denomina aspecto constitutivo y continuo:

a) Aspecto constitutivo (*constitutive aspect*), que ordena los “procedimientos episódicos por las cuales se produce el orden institucional de gobierno”, aplicándose a “distintos episodios de nacimiento o cambio institucional”. Atendiendo a este aspecto del contenido del derecho de autodeterminación, “los valores centrales de libertad e igualdad se traducen en requerimientos de individuos y de grupos de que se les conceda una

⁶¹⁷ Weller, M., *Escaping the Self-determination Trap*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008. P 24 y ss.

⁶¹⁸ Weller, M., *Escaping the...*, op. cit., p. 24 y ss.

⁶¹⁹ Anaya, J.S., “A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination”, *Transnational Law & Contemporary problems*, vol.3, primavera, 1993, pp. 131–161.

⁶²⁰ Anaya, J.S., *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, (ed.) 2000, p. 84

participación significativa, acorde con sus intereses, en procedimientos que conduzcan a la creación o modificación de las instituciones de gobierno en las que viven”.

El resultado del proceso de ejercicio no está predeterminado pero se exige que los requerimientos de participación sean establecidos de manera que el resultado del proceso refleje la voluntad colectiva del pueblo, o pueblos, implicados en tal proceso.

Para James Anaya, el aspecto constitutivo del derecho de autodeterminación se corresponde con la disposición común de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos que disponen que en virtud del derecho de la autodeterminación los pueblos “establecen libremente su condición política”.

Respecto al aspecto constitutivo, Anaya distingue también, como hicimos anteriormente, en las diferentes consecuencias entre *procesos de integración* y *procesos de desintegración*. Respecto a los procesos de reforma no necesariamente de integración o desintegración, dentro del ámbito de soberanía de cada estado: “(...) pueden ser discernidos además los estándares mínimos de participación en el contexto de una reforma constitucional doméstica (...)”.

Consciente de los problemas de definir el grupo constitutivo, siguiendo la línea de tantos autores anteriores, admite que “no es posible identificar con precisión los límites del consenso internacional en relación con los niveles requeridos y medios de participación individual o colectiva en todos los contextos de nacimiento o cambio institucional” , si bien, asegura, sin embargo, que “son evidentes ciertos estándares mínimos (...)”.

Estos estándares mínimos se refieren, claro está, al colonialismo y el imperialismo. Respecto a los *procesos de integración* recuerda que “la comunidad internacional ha rechazado las bases teóricas de la colonización en su sentido clásico, (...) Hoy, los procedimientos hacia la creación o extensión territorial de la autoridad gubernamental son regulados por preceptos de autodeterminación que requieren niveles mínimos de participación de parte de todos los afectados, como se evidencia en el contexto de la integración europea (...)”⁶²¹.

Respecto a los *procesos constitutivos de desintegración*, Anaya parece apoyar las tesis de Thomas Franck admitiendo que, hoy por hoy, el Derecho Internacional no prevé un derecho independiente de secesión como tal.

Sin embargo, la realidad política se impone, y ante estas situaciones de secesión y desintegración considera que existe un mínimo de certeza, un núcleo de consenso internacional, de manera que es “cada vez más obvio que (...) la comunidad internacional espera que estén mínimamente basados en procedimientos democráticos que puede decirse que refleja las aspiraciones de los pueblos implicados”. Para Anaya, el reconocimiento internacional de estados nacidos fuera de los contextos de imperialismo y colonialismo los que nacieron de la disolución de la antigua Unión Soviética, Yugoslavia, y Checoslovaquia, tuvo como base los referéndums u otras expresiones de apoyo popular (La disolución de Checoslovaquia no fue sometida a referéndum) de los estados

⁶²¹ Anaya, J.S., “A Contemporary...”, op. cit., p. 131–161.

nacientes.

Por ello concluye que: “mientras que el apoyo popular de un movimiento secesionista no es por sí mismo suficiente para la comunidad mundial de actuar a favor de tal movimiento, es al menos una condición necesaria”.

b) Aspecto continuo (*ongoing aspect*), que se refiere a la aplicación continuada de la autodeterminación para “ordenar la forma, contenido, y funcionamiento de orden de gobierno mismo”. La autodeterminación regula de manera continuada la forma y funcionamiento del orden de gobierno institucional, requiriendo “un orden de gobierno bajo el cual los individuos y grupos pueden realizar elecciones con un sentido significativo en asuntos concernientes a todas las esperas de la vida de una manera continuada”.

Anaya equipara este aspecto continuado de la autodeterminación con la parte de la provisión común a los dos Pactos Internacionales, y otros instrumentos internacionales, que recoge que los pueblos han de libremente buscar o proveer para su desarrollo, económico social y cultural.

Completa James Anaya -en otra obra suya- su reflexión en torno al contenido describiendo cinco características fundamentales para él comprendidas en la autodeterminación:

- no discriminación;
- respeto a la integridad cultural;
- bienestar social y desarrollo;
- tierra y recursos naturales;
- y autogobierno⁶²².

§3.3.6 Contenido (vi). En búsqueda de un núcleo de certeza

Ante este complejo panorama, no es de extrañar que diferentes autores hayan tratado de encontrar un mínimo común cierto en el contenido del derecho. Entre ellos, James Anaya, desde su división entre aspectos constitutivos y continuos del derecho. Respecto al *aspecto constitutivo*, Anaya reflexiona: “la condena internacional del colonialismo representa un estándar mínimo. La comunidad mundial ha llegado a considerar el colonialismo clásico como una forma opresiva de gobierno independientemente de sus orígenes”⁶²³. En su aspecto constitutivo la autodeterminación “comprende un estándar que se impone en los procesos ocasionales o episódicos que llevan a la creación o cambio de instituciones de gobierno (...) cuando las instituciones nacen o se fusionan con otras o cuando trata de ampliar el alcance de su autoridad (...) la autodeterminación constitutiva no dicta por ella misma el resultado de tales procesos; pero allá donde ocurran impone

⁶²² Anaya, J. S., *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, (ed.), 2000. Pp. 97-110.

⁶²³ Anaya, J. S., *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, (ed.), 2000. P. 82

requerimientos de participación y consentimiento tales que el fin resulte en un orden político del que pueda decirse que refleje la voluntad colectiva del pueblo, o de los pueblos, implicados. Este aspecto de autodeterminación corresponde con la provisión común a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que establece que los pueblos “determinan libremente su estatus político” en virtud del derecho de autodeterminación.⁶²⁴ El muy concreto caso de la secesión no forma parte del núcleo de certeza, en cuanto autodeterminación constitutiva con fronteras internacionales, si bien Anaya es capaz de distinguir, en todo caso que, “mientras que el apoyo popular a un movimiento secesionista no es suficiente por sí mismo para que la comunidad mundial actúe a favor de tal movimiento, es al menos una condición necesaria”⁶²⁵.

Respecto al *aspecto continuado*, defiende que éste requiere “un orden de gobierno bajo el cual los individuos y grupos puedan hacer elecciones con sentido para ellos en asuntos que toquen todas las esferas de su vida de manera continuada”⁶²⁶. El aspecto continuado se correspondería con la parte de las provisiones comunes “...y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Esta última parte de su reflexión sobre ese mínimo de certeza en el aspecto continuado está, a su vez, tomado de Ian Brownlie. A la vista de las múltiples definiciones, también Brownlie optó por buscar lo que denominó un “núcleo razonable de certeza” en el principio de autodeterminación:

“El principio [de autodeterminación] parece tener un núcleo de razonable certeza. Este núcleo consiste en el derecho de una comunidad que tiene una carácter diferenciado a ver este carácter reflejado en las instituciones de gobierno bajo las cuales vive”⁶²⁷.

Obsérvese cómo la opinión de Brownlie difiere de la doctrina clásica nacionalista entendida como la pertinencia o “naturalidad” de la coincidencia entre límites políticos (unidad de redistribución de derechos no sólo culturales y de recursos económicos). Para Brownlie, el ejercicio de la autodeterminación puede ser ejercido de manera muy diversa, en distintos niveles de autogobierno y de maneras muy diferentes. Otros autores, como James Tully parecen ser de una opinión parecida. En este sentido, Tully, para quien el autogobierno es un bien público primordial, considera que este gobierno está relacionado con el deseo de un pueblo de “gobernarse a sí mismo de acuerdo con sus tradiciones y sus modos de hacer”⁶²⁸.

La propuesta de Brownlie es amplia y flexible y lleva igualmente a separar conceptualmente la cuestión del respeto de identidades culturales con el respeto de otros derechos y con el de distribución de recursos, por lo que en la práctica pueden ser o no coincidentes, de manera que se abre la puerta a ejercer ese derecho a ver reflejado el

⁶²⁴ Anaya, J. S., *Indigenous Peoples...*, op. cit., pp. 81 - 82

⁶²⁵ Anaya, J. S., *Indigenous Peoples...*, op. cit., p. 94. Nota. 70.

⁶²⁶ Anaya, J. S., *Indigenous Peoples...*, op. cit., p. 82

⁶²⁷ Brownlie, I., “The Rights of Peoples in Modern International Law”, en Crawford, J., (Ed.) *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, 1988, p.1 y ss.

⁶²⁸ Tully, J., *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*. Cambridge University Press. Cambridge, 1995, p. 4.

carácter propio en las instituciones políticas de maneras muy diversas, más allá de la visión estatalista postwestfaliana.

MacCorquodale, que comparte ese mismo núcleo de certeza de Brownlie –así lo manifiesta expresamente-, hace un paralelismo entre el objetivo del derecho de autodeterminación y los derechos encuadrados en el marco de derechos humanos: “el objetivo del derecho [de autodeterminación] es proteger a las comunidades o los grupos de la opresión y así empoderarlos. De manera similar el marco del Derecho Internacional de los derechos humanos busca la protección de los individuos de la opresión, y haciendo esto, protege también a las comunidades o grupos de los cuales el individuo forma parte”⁶²⁹.

Alcanzamos así un elemento adicional del núcleo de certeza del derecho de autodeterminación, esto es, su realización conforme a la igualdad de los pueblos –que resulta necesariamente también en la ponderación con el principio de integridad territorial- y el respeto a la legalidad internacional, concretamente a los derechos humanos. Aunque MacCorquodale ha desarrollado pormenorizadamente la concreta cuestión de la inclusión de la autodeterminación en un marco de derechos humanos, otros muchos autores son de esta misma opinión. Por ello, aunque en múltiples ocasiones se ha proclamado que “el derecho de autodeterminación es un proceso sin un resultado predeterminado”⁶³⁰, esto debe entenderse en el sentido de que “la autodeterminación es un proceso más que un resultado” pero no en el sentido de que cualquier resultado es admisible, como es defendido en ocasiones desde las filas del nacionalismo primordialista. Es cierto que de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, “el requerimiento esencial es que el resultado corresponde con la libre y voluntaria elección del pueblo implicado”. Sin embargo, la vulneración de derechos humanos y de otras normas de Derecho Internacional son indisponibles, no están sometidas a la libre disposición a la que se refiere la norma de autodeterminación.

Para el mencionado James Anaya, por ejemplo: “la doctrina de la soberanía y sus afirmaciones en la Carta están condicionadas por los valores de derechos humanos también expresados en la Carta y aceptados por la comunidad internacional”⁶³¹.

Sabemos de los múltiples flecos y dificultades de conciliar soberanía y la naturaleza universal de derechos hasta el punto que gran parte de la tradición jurídica española y europea, por influencia francesa, distinguen entre derechos humanos y derechos fundamentales. La frontera nacional se erige en elemento articulador entre derechos humanos y soberanía, con los problemas teóricos y prácticos que supone, hasta el punto de que, hoy por hoy, como decía Jack Donnelly, es en el estado nacional donde se realizan principalmente los derechos humanos.

Resume Seyla Benhabib, para quien “todos los modernos movimientos separatistas que aspiran a la formación de estados enfrentan la tensión y (...) contradicción entre sus reclamaciones de soberanía

⁶²⁹ McCorquodale, R., “Self-Determination...”, op. cit., pp. 857–885.

⁶³⁰ Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation of...*, op. cit., p. 13.

⁶³¹ Anaya, J. S., *Indigenous Peoples...*, op. cit., 109

democrática y el respeto de los derechos humanos”, que “los conflictos entre los derechos *universales* y la autodeterminación *soberana* son intrínsecos a las formas de estado democráticas. Las democracias postnacionales deben enfrentarse a un cuestionamiento autoreflexivo de sus propias prácticas de inclusión y exclusión”⁶³².

Al hilo de esta idea de conflicto entre lo universal de los derechos y la soberanía nacional, David Chandler ha argumentado que pueden encontrarse “problemas de extender el concepto de derechos más allá de las fronteras del estado soberano, sin los mecanismos para garantizar esos nuevos derechos a sus titulares (...), mientras los nuevos derechos permanecen tenues, existe un peligro de que el marco cosmopolita pueda legitimar la abrogación de los derechos democráticos de autogobierno ya existentes, codificados en el marco de la Carta de las Naciones Unidas”. Una suerte de conflicto entre derechos de autogobierno relacionado con el derecho de autodeterminación y los demás derechos humanos. Esto resulta en la práctica, para Chandler, en que en la búsqueda de la mayor realización de derechos humanos a nivel global las potencias justifiquen la extensión ilegítima de su injerencia, despreciando el autogobierno de países menos poderosos, violando el derecho de autodeterminación, ya establecidos, en el nombre de la protección de otros derechos⁶³³.

Sin extendernos más en esta cuestión, subrayemos ahora que la limitación del derecho de autodeterminación por los derechos humanos adquiere obviamente matices diferentes cuando se considera al interior de una frontera establecida o en las relaciones internacionales de los estados, cuando se refiere al aspecto continuado o constitutivo de ejercicio.

Respecto al aspecto constitutivo, en terminología de Anaya, pero en su dimensión exterior –esto es, en el establecimiento de una unidad política con fronteras internacionalmente reconocidas por otros estados, aunque la constitución no nazca necesariamente de una secesión- tengamos en cuenta que aunque la autodeterminación presupone que un pueblo puede elegir su forma de estado, los demás estados pueden en su mismo ejercicio reconocer o no la estatalidad del nuevo estado. Es en la fuerza del reconocimiento por otros estados y en la universalidad de los derechos humanos donde autores como John Dugard y David Raič ponen el acento de su reflexión. Para estos autores, si bien los criterios tradicionales para la estatalidad, tal y como fueron descritos en la Convención de Montevideo de 1933, son: población permanente, territorio definido, un gobierno que tiene control efectivo de su territorio de manera independiente a cualquier otra autoridad, y una capacidad para entrar en relaciones con otros Estados,

“más recientemente, desde que los derechos humanos y la autodeterminación han adquirido importancia en el Derecho Internacional, ha sido sugerido que para que una nueva entidad logre su aspiración de estatalidad, debería alcanzar los estándares y expectativas de la comunidad internacional en estas materias.

Este desarrollo fue apoyado por la Declaración de los Doce sobre las líneas directrices referidas al

⁶³² Benhabib, S., *The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2002, pp 21- 22.

⁶³³ Chandler, D., “The Limits of Human Rights and Cosmopolitan Citizenship”, *Rethinking Human Rights. Critical Approaches to International Politics*, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2002, pp 115 y ss.

reconocimiento de nuevos Estados en Europa del Este y Unión Soviética en 1991 y después extendida a Yugoslavia, que pretendía hacer depender el reconocimiento de Estados del cumplimiento de normas internacionales relativas a la autodeterminación, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías”⁶³⁴.

Finalmente, para autores como Peter Hilpold (con una visión en este particular punto muy parecida a los argumentos presentados por el mencionado Asim Mujkić) la autodeterminación colectiva comienza desde el individuo, “un derecho a la autodeterminación individual provee flexibilidad a los sistemas de gobierno y permite una mejor identificación del individuo con el conjunto (...)”⁶³⁵. Esto implica respecto al contenido del derecho que la autodeterminación colectiva está compuesta también por el respeto a las capacidades de autonomía del individuo y por ende a sus derechos.

Cuando hablamos del ejercicio del derecho de autodeterminación en el marco de derechos humanos incluimos, claro está, los derechos individuales, pero también ese derecho de autodefinición individual de la identidad que tiene distintas manifestaciones, entre ellas, la de adscripción a una identidad o pueblo etnoculturalmente definido pero también, en determinados casos, el derecho de elección de estado del que ser ciudadano, cuestiones no necesariamente coincidentes.

Así las cosas, el derecho de autodeterminación está doblemente condicionado por los derechos humanos. Por un lado, porque puede ser considerado como un derecho humano además de cómo principio y prerequisite, como hemos indicado al comienzo del capítulo, en cuyo caso ha de cumplir con las características de todo derecho humano. Pero además, tanto si se considera principio como derecho, tiene en todo caso límites a su ejercicio, los límites del marco de derechos humanos. Los derechos humanos forman parte así del núcleo de certeza del ejercicio de derecho de autodeterminación, pues no es posible la concepción legítima de su ejercicio fuera de este marco.

§3.3.7 Contenido (vi). El derecho de autodeterminación económica. Autodeterminación y políticas de desarrollo político, social, económico, cultural

Por derecho de autodeterminación económica o vertiente económica de la autodeterminación se ha hecho referencia a las disposiciones normativas e interpretaciones doctrinales referentes a la relación entre las riquezas y recursos naturales y la titularidad de las mismas y la capacidad de autogobierno o autodeterminación política de los pueblos. Explica Malcolm Shaw, de la Universidad de Leicester, que el surgimiento de los estados postcoloniales tuvo un gran impacto en el desarrollo del Derecho Internacional, la preocupación por su reconocimiento internacional apoyada por las Naciones Unidas y su Carta y complementada por su deseo de una

⁶³⁴ Dugard J., Raič, D., “The role of recognition in the law and practice of secession”, en Kohen M.G. (ed), *Secession. International Law Perspectives*, Cambridge University Press, 2006, pp. 94-137.

⁶³⁵ Hilpold, P., “The Right to Self-determination: Approaching an Elusive Concept Through a Historic Iconography”, *Austrian Review of International and European Law*, vol. 11, 2006, pp 23-48.

“autodeterminación económica”. Para Shaw “esta expansión del Derecho Internacional en el campo de la economía fue un gran desarrollo del siglo XX y es evidente en una miríada de maneras, por ejemplo, por la creación de los Acuerdos Generales sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el establecimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial”⁶³⁶.

Tras la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto anteriormente, el concepto de autodeterminación se consolidó en la Carta, pero hubo necesariamente de expandir su significado y abandonar definitivamente su concepción como equivalencia con el nacionalismo chauvinista que había asolado el mundo. No podía significar ya, como fue popular en el período de entreguerras, concebirlo como derecho ilimitado sobre el territorio –efectivamente ejercido o no- de un pueblo definido etnoculturalmente de manera apriorística, uno en particular, por encima de la integridad territorial de los estados y otros principios de Derecho Internacional. Esta apertura conceptual del derecho de autodeterminación fue la puerta de entrada al replanteamiento del contenido del derecho de autodeterminación, a través de la cual entraron otros conceptos provenientes del fuerte movimiento mundial a favor de la descolonización que comenzó poco después de la guerra, a la muy diversa influencia del materialismo marxista y de sus respuestas, de las oportunas puntualizaciones de los movimientos feministas, etc., que aportaron nuevos puntos de vista al desarrollo conceptual del derecho de autodeterminación.

Respecto a la autodeterminación de los pueblos, planteada hasta entonces en términos mayoritariamente políticos, la doctrina y líderes políticos comenzaron a destacar los aspectos económicos de la misma hasta el punto de que hoy, como resume Cristescu, “un elemento esencial del derecho de los pueblos a la autodeterminación es el derecho a perseguir su desarrollo económico”⁶³⁷.

Recordemos que la doctrina nacionalista imperante en el período de entreguerras hacía hincapié en un derecho vinculado a características culturales o étnicas por lo que la cuestión económica era mencionada como accesoria a la etnocultural, y la doctrina liberal anterior había nacido para hacer frente a los privilegios de clase del Antiguo Régimen. No es que no se hubieran tenido en cuenta anteriormente los factores económicos –¿cómo ignorar las revoluciones que acompañaron a cada crisis económica, las motivaciones del Motín del Té de Boston de 1733, las implicaciones económicas del *Lebensraum* nazi y el auge del nacionalismo con la recesión del período de entreguerras en Alemania, la autodeterminación de los pueblos como instrumento de liberación obrera como concebida por los marxistas?- sino que la influencia de todos los antecedentes y la lucha descolonizadora de territorios oprimidos por un sistema imperial ya obsoleto hizo que, tras la guerra, el componente económico pasara a un primer plano de discusión. No es casualidad, en mi opinión, que esto fuera coincidente con el fin de los restos de los imperios que supuso la Segunda Guerra Mundial (la Primera ya había terminado con los Imperios Austrohúngaro y Otomano), con el enterramiento de la doctrina imperial como legítimo instrumento de las relaciones internacionales. Recordemos que con la irrupción del liberalismo democrático dos siglos antes se había ido la idea de que es el pueblo

⁶³⁶ Shaw, M. N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 40

⁶³⁷ Cristescu, A., *The Right to Self-determinatio...*, op. cit., p. 53

autónomamente el que se reparte para y entre sí derechos y recursos, frente a la heteronomía del sistema de privilegios del Antiguo Régimen; si es el pueblo el que se otorga y financia derechos y distribuye recursos, queda responder quién es ese pueblo y cómo efectuará esa distribución. La respuesta a estas cuestiones está en perpetua discusión en un sistema democrático, cuya permanencia reside en el inestable equilibrio constante del diálogo social, que crece en cantidad y calidad a medida que la sociedad se hace mas abierta, a diferencia del sistema de privilegios que promueve su permanencia a través de la solo aparente estabilidad que proporciona la forzada paz de la represión social.

Si en el Antiguo Régimen la distribución de recursos y privilegios estaba determinada heterónomamente, al ser otorgados por el soberano, frente a la (*aspiración de*) distribución autónoma del sistema democrático liberal, el fin de los imperios dio un impulso global a la legitimidad del debate prendido acerca de entre quiénes distribuir recursos y derechos a todos los niveles, debate que se sumó al sinfín de cuestiones de acomodo identitario. En todo caso, resulta interesante observar que, a pesar de la indudable importancia del factor económico, tanto actores políticos como doctrina intentaron, por un lado, separarlo –en el discurso- de la discusión política. Esta división entre factores económicos y políticos de la autodeterminación (bien es cierto que mayor en el discurso que en la realidad), una división para mí con poco o ningún sentido, podría ser achacada, además de al gran cambio de paradigma sociopolítico que supuso la caída del Antiguo Régimen, a por un lado, quien sabe si al rechazo de la idea –de aparente vileza- de que sean las condiciones materiales las que impregnen toda la vida política y configuren de manera determinante las ideologías, un rechazo que tal vez provenga, tanto de reparos éticos (con fundamento religioso o no), como de la consideración de esta idea como marxista y por tal hecho descartable sin reflexión y en todos sus puntos.

Pero también se deriva lógicamente su, hasta cierto punto, incompatibilidad con un nacionalismo primordialista que ha influido una concreta manera de entender la autodeterminación: al enfocar toda su legitimidad en unas características prepolíticas –mitológicas y culturales- considera los factores materiales, incluidos los económicos, sólo como estado o circunstancia contingente por la que pueblo, no como característica definitoria del pueblo mismo. Por ello, por ejemplo, en las discusiones acerca del derecho a la secesión, para el nacionalismo primordialista es generalmente irrelevante si la secesión es de los ricos, mientras que para un enfoque de derechos humanos esta circunstancia sí es relevante, la opresión constatable es fundamental como elemento justificativo.

Al respecto, Karen Knop, haciéndose eco de esta división, señala que:

“(…) el discurso dominante de la autodeterminación, que se concentra en la autodeterminación política, deja de lado importantes críticas feministas y del Tercer Mundo basadas en la interdependencia de la autodeterminación política y económica. Tanto feministas como autores del Tercer Mundo han observado que la expresión política de la autodeterminación recibe mucha más atención en el Derecho Internacional que su expresión económica, social o cultural. Esta observación es incluso más pertinente desde que las revoluciones “liberales” en Europa del Este han llevado a un número de juristas internacionalistas a fijar su atención en la autodeterminación política interna, a menudo usada como sinónimo de un derecho a una

democracia liberal, mientras que la desaparición concomitante del bloque comunista se ha sustraído de las voces que argumentan que la autodeterminación económica, tanto como la política, es necesaria para que un pueblo lleve a cabo una estatalidad independiente”⁶³⁸.

Dejando de lado la cuestión de que las voces a las que se refiere Knop -feministas o del Tercer Mundo- reciben la misma influencia y muchas parten del mismo tronco de pensamiento socialista marxista –cambiar el nombre de los portavoces de las ideas para reciclar el concepto- pudiera parecer que sin estas aportaciones la autodeterminación política fuera distinguible de la económica, cuando, en realidad, la cuestión material siempre estuvo en el fondo de la cuestión. Por otro lado, es un error conceptual intentar asimilar estas críticas (por ejemplo, que no basta la independencia política o estatalidad tras la descolonización sin control sobre los propios recursos y un sistema internacional más justo) con una categoría teórica distinta, “autodeterminación económica”, para intentar diferenciarla de una autodeterminación supuestamente solo política, tal vez con el objetivo final interesado de obviar o sencillamente ignorar que la autodeterminación política, en nuestros sistemas políticos actuales, se *fundamenta* en el debate de cómo y *entre quiénes* distribuir derechos y recursos.

Benjamin Neuberger muestra parte de esa genealogía ideológica que ha intentado separar autodeterminación económica y política, aunque incidiendo en la gran importancia de la económica: “los socialistas hablarán de autodeterminación económica interna —la emancipación de la clase trabajadora de la explotación de los propietarios capitalistas de los medios de producción — mientras que los nacionalistas podrán hablar sobre la autodeterminación económica externa (...)” Un ejemplo de la concepto de autodeterminación económica externa es la cláusula en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que “el derecho de un pueblo deberá incluir también la soberanía permanente sobre los recursos y las riquezas naturales”.

Los conceptos de autodeterminación económica interna o externa tienen implicaciones de mayor alcance que la “autodeterminación política”, que tiene como único objetivo establecer la soberanía externa o una autonomía interna sin insistir en los cambios socio-económicos. La China de Mao fue identificada en el pasado con la autodeterminación económica –tanto interna (por ejemplo, la expropiación de las clases terrateniente y burguesa) como externa (por ejemplo, la “construcción del socialismo”, independiente del capitalista Occidente y de la comunista Unión Soviética)⁶³⁹.

Con las salvedades propuestas, si tuviéramos que trazar un esquema general de cómo se ha retratado lo que algunos han denominado vertiente económica del derecho de autodeterminación, de esas críticas a la autodeterminación meramente política que Knop adjudica a “feministas y autores del Tercer Mundo”, tal vez pudiera tentativamente quedar resumido de la siguiente manera:

Una parte del contenido indiscutible del derecho de autodeterminación es, como hemos

⁶³⁸ Knop, K., *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.19.

⁶³⁹ Neuberger, B., “National Self-determination: a Theoretical Discussion”, *Nationalities Papers*, vol. 29, n. 3, 2001, pp. 392 y 393.

apuntado, el fin del colonialismo y la injerencia extranjera. De ello se ha argumentado, con cierta oposición, que el fin de la autodeterminación en su dimensión económica significaría el fin de cualquier manifestación del imperialismo y el colonialismo económico, incluyendo su continuación por otros medios, incluyendo el control ilegítimo de recursos y riquezas naturales y la opresión estructural de los habitantes de las antiguas colonias (por supuesto que el debate está en cuál es la intervención ilegítima extranjera y qué pertenece al ámbito del libre comercio). De ello se deriva la voluntad de expulsión de remanentes coloniales, control sobre propios recursos, traslado a la población de los beneficios de la descolonización, y propuesta de desarrollo del Derecho Internacional para que la igualdad de los pueblos sea efectiva, con el fin de lograr un mundo en el que las transacciones comerciales y financieras sean más justas. Desde el punto de vista interno, la autodeterminación económica se ha asimilado a la efectiva disposición de recursos naturales, incremento de recursos para el efectivo disfrute de derechos, a la plena libertad de un pueblo para elegir el sistema sociopolítico y económico o para establecer políticas públicas sin injerencia extranjera, de manera que se garantice la convivencia en igualdad en la sociedad internacional de estados y pueblos con diferentes sistemas con mayor planificación económica o mayor libre mercado, etc. Además, se ha utilizado la autodeterminación económica interna en el acomodo de las demandas de pueblos indígenas y minorías de explotación de territorios ancestrales y recursos naturales y métodos de explotación tradicionales.

En el caso de los Sami de Finlandia, por ejemplo, tal y como describe John Henriksen, es paradigmática la vinculación entre cultura tradicional y explotación de recursos como medio de ejercicio del derecho de autodeterminación, compatibilizando los derechos tradicionales de un grupo con los derivados de la ciudadanía finesa⁶⁴⁰.

Las críticas o apuntes descritos fortalecen para algunos autores la percepción de la importancia del elemento económico en el derecho de autodeterminación. Por ello han distinguido entre estas críticas y una autodeterminación política. En mi opinión, estos apuntes no tienen que hacernos perder de vista que lo que se ha llamado autodeterminación política es, también, indistinguible de la económica. Aunque nos hagamos eco de la crítica de los países surgidos del proceso de descolonización –la autodeterminación es un proceso continuo y la independencia incluye la independencia económica, la independencia de la pobreza, el acceso a la riqueza y recursos naturales para que la igualdad de los pueblos y su autodeterminación sea efectiva–, hemos de resaltar que todos los debates sobre autodeterminación política *son en sí mismos* también económicos. No son distinguibles los enfoques políticos y económico del derecho de autodeterminación no sólo porque (a) los efectos económicos de un proceso de autodeterminación están siempre presentes –sea cual sea el ejercicio del derecho afectarán a la distribución de bienes primarios–, sino también porque (b) los elementos económicos forman parte de los procesos de toma de decisión del pueblo acerca del contenido y modo de ejercicio del derecho mismo (los resultados esperados en la justicia distributiva afectan a la toma de decisiones).

⁶⁴⁰ Henriksen, J.B., “The Continuous Process of Recognition and Implementation of the Sami People’s Right to Self-determination”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 21, n. 1, 2008.

La autodeterminación está vinculada con el autogobierno, esto es, con el diseño y aprobación de presupuestos, quién asignará o no recursos para la defensa de bienes primarios, incluidos los derechos culturales, etc. La autodeterminación como derecho político es, *también*, en su fundamento, un derecho económico, porque está relacionado con la decisión de distribución de bienes escasos.

Dos argumentos pueden intentar oponerse a esta idea: a) un argumento liberalista –la autodeterminación como mero deseo de autogobierno–, que debemos desechar por superficial, porque el autogobierno no es otra cosa que la distribución por sí y para sí de recursos económicos escasos y derechos; la mejor distribución hará la sociedad más justa, que es el máximo valor social en términos de Rawls, y b) un argumento nacionalista –pueblo predefinido etnoculturalmente tiene derecho ilimitado a autogobernarse, sin importar los demás; la cuestión económica nada tiene que ver con ello, sus miembros están idealmente dispuestos incluso a pasar penurias a cambio de esa libertad–. Este argumento lo debemos rechazar por falso, empírica y racionalmente. Empíricamente, porque todo movimiento de autodeterminación se ha puesto en marcha alentado por el deseo de mejorar la situación sociopolítica del propio pueblo, sea cual sea su definición, no de empeorarlo, o dicho al revés, toda lucha está orientada a que el grupo definido esté mejor, es decir, vea sus derechos y sus recursos asignados incrementados –lo que incluye el cese de la opresión–, aunque se esperen esfuerzos o sacrificios pasajeros. Por otro lado, los derechos socioculturales son también bienes primarios que han de ser de alguna manera repartidos entre la sociedad –por ejemplo, la reacción a la opresión por razones lingüísticas para confirmar una nueva entidad tiene consecuencias en la distribución de derechos, pero también en la distribución de recursos destinados a la protección de tal lengua, u a otros conceptos–.

Mientras los estados sigan siendo la unidad principal de distribución de recursos y derechos, la autodeterminación se verá reflejada, dentro de ellos, en la distribución de bienes primarios y, externamente, en la definición que marque entre quiénes se reparten esos bienes.

Usando la terminología de Anaya, la autodeterminación constitutiva mostrará entre *quiénes* respecto a otros pueblos, mientras que la continua también el *cómo*. Cualquier interpretación del derecho de autodeterminación, en cualquier sentido creo, tendrá consecuencias socioeconómicas inevitables, entendiendo el impacto fundamental tanto en los recursos disponibles como en la consecuente capacidad de ejercer sus derechos a los individuos. Y es que, como recuerdan Holmes y Sustain, cualquier derecho que pueda ser ejercido, cuesta dinero⁶⁴¹.

Hecha esta aclaración, resulta más obvia la indisoluble conexión entre la autodeterminación de unos pueblos respecto a la autodeterminación de otros, independientemente de qué se entienda por pueblos o cómo haya de ejercerse el derecho.

⁶⁴¹ Holmes, S. y Sunstein, C. R., *El costo de los derechos. Porqué la libertad depende de nuestros impuestos*. Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2011.

Desde el mismo momento en que existe una multiplicidad de unidades políticas autónomas que distribuyan bienes primarios y dado que los recursos son escasos, la cuestión de cómo distribuir recursos y derechos dentro de cada unidad y entre ellas es fundamental. Es la escasez natural de recursos y por tanto también de los medios para hacer efectivos los derechos humanos, así como la discrepancia en torno a su distribución, la que conecta la autodeterminación de unos pueblos con otros, pues, aunque no se comparta totalmente la teoría de suma cero, es de sentido común que el bienestar infinito de uno no puede disfrutarse, hoy por hoy, y con el estado actual de la técnica, sin malograr las posibilidades de bienestar de otro.

Así, la forma que adquiera la limitación legítima del bienestar propio forma parte de los criterios de justicia distributiva.

Es esta escasez de recursos y la igualdad en dignidad de los pueblos la que conecta, por tanto, indisolublemente, la autodeterminación de los pueblos con distintas concepciones de justicia distributiva, tanto a nivel subestatal como a nivel mundial, cuestión que así llamada de justicia global (distributiva, correctiva) –para distinguirla de la cuestión de la justicia universal (correctiva-retributiva)-.

La relación entre la justicia distributiva y la autodeterminación es clara para autores como Allen Buchanan, quien se declara partidario de incluir la justicia distributiva en una teoría ideal del Derecho Internacional, al contrario que John Rawls, David Miller o Michael Walzer, Buchanan, y siguiendo en este punto más a Charles Beitz, Thomas Pogge o Henry Shue. Es consciente, sin embargo, de que, “debido a la actual incapacidad institucional internacional (...) existen serias limitaciones del papel que el Derecho Internacional puede desempeñar hoy para contribuir a la justicia distributiva”, las cuales implican que “una teoría moral *no ideal* del Derecho Internacional debe reconocer que por ahora los Estados deben ser los principales árbitros y agentes de la justicia distributiva”⁶⁴².

A pesar de las limitaciones que presenta hoy en día en la práctica, Buchanan defiende que el Derecho Internacional puede y debe interpretar un papel, beneficioso pero en su mayor parte indirecto, para incrementar la justicia distributiva:

- “(i) apoyando otros derechos humanos, incluyendo el derecho contra la discriminación de género, así como el gobierno democrático dentro de los estados, en cuanto condiciones esenciales para el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para el crecimiento económico.
- (ii) promoviendo relaciones comerciales más equitativas, normas laborales, regulación del medio ambiente, ayuda al desarrollo, y esfuerzos para preservar bienes comunes globales como un Patrimonio Común (...) para toda la humanidad, incluyendo a las generaciones futuras;
- (iii) mediante la creación de un régimen global de derechos de propiedad intelectual para preservar los incentivos a la innovación y, al mismo tiempo, contribuir a una distribución más equitativa de los beneficios de la biotecnología, especialmente en la medida en que estos beneficios tengan un impacto positivo en la salud de las personas en los países más pobres ;

⁶⁴² Buchanan, A., *Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York., 2007, pp 193-196

(iv) mediante el apoyo a los esfuerzos de liberalización de políticas de inmigración que incrementen las oportunidades económicas de los más desfavorecidos del mundo;

(v) **adoptando principios relativos al derecho de secesión que no exacerbén los problemas de justicia distributiva al permitir a las partes más ricas de los países secesionarse simplemente para mejorar sus perspectivas económicas;**

(vi) ayudando a garantizar que los Estados cumplen con sus obligaciones de corregir las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas dentro de sus fronteras, y, quizás lo más importante de todo,

(vii) el fomento del desarrollo de las capacidades institucionales necesarias para la eventual formulación y puesta en práctica de principio comprensivos de justicia distributiva transnacional e internacional”⁶⁴³.

La dimensión económica de la autodeterminación, que forma parte consiguientemente de la definición misma y contenido básico del derecho, está plasmada expresamente en el art.1 común a ambos Pactos Internacionales, además de en múltiples textos internacionales mencionados con anterioridad.

La segunda parte del art.1.1 de los Pactos Internacionales establece que “en virtud de este derecho [de autodeterminación, los pueblos] establecen libremente su condición política y proveen⁶⁴⁴ asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El segundo apartado de la provisión común a ambos Pactos establece que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como en el Derecho Internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Para James Anaya, como hemos visto, estas dos provisiones de los Pactos Internacionales son equivalentes a lo que él mismo ha denominado *aspecto continuado* de la autodeterminación, aspecto complementado con un aspecto constitutivo. Llamemos la atención sobre el hecho que bajo este punto de vista el derecho a la autodeterminación es un derecho a un determinado *proceso*. Como también el derecho al desarrollo era considerado, como vimos en la primera parte, un derecho *a un proceso de desarrollo*.

Así, en ambos casos podría decirse que estamos ante derechos cuyo contenido en su parte o en su totalidad son procesos. Esta perspectiva explica que no se defina exhaustiva y totalmente su contenido, porque precisamente son imperfectos en su temporalidad; su resultado final es indefinido también en su contenido y en su realización espacial y temporal.

Si ambos, en su totalidad o en parte, son procesos y ambos son derechos, derechos a procesos, podremos compararlos entre sí, y analizar, si existiera, la relación entre ambos, como haremos en la tercera parte de esta tesis.

⁶⁴³ Buchanan, A., *Justice, Legitimacy...*, op. cit., pp.193-196

⁶⁴⁴ Merece la pena observar que la traducción en castellano de esta provisión del art 1.1 es “...proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” mientras que en inglés, se lee “and freely pursue their economic, social and cultural development” y en francés” ...et assurent librement leur développement économique, social et culturel”. Aunque el punto de llegada, el fin, pueda ser parecido –alcanzar un fin o buscar medios para el fin o asegurar el fin- conviene llamar la atención, de los matices que se observan en las distintas traducciones.

Respecto al aspecto constitutivo, en el caso concreto de las colonias, el aspecto constitutivo del derecho de autodeterminación pudo apreciarse en el momento de su independencia. Así, se suma a la consideración de la autodeterminación económica como parte de la sustancia esencial misma del derecho.

La equivalencia entre aspecto continuado y las provisiones de los Pactos referentes a la libertad de establecer las políticas propias de desarrollo y el control sobre los propios recursos, que explicita Anaya, no debe, sin embargo, en mi opinión, ocultar el hecho de que el aspecto constitutivo tiene también una dimensión económica tanto a la hora de reivindicar su efectiva aplicación, como cuando consideremos los efectos de una determinada manera de ejercer ese aspecto constitutivo sobre la gente, ya que la constitución de los unos deja, por fuerza, a otros fuera del círculo de distribución de bienes y derechos.

Joshua Castellino ha comentado ambas provisiones de los Pactos también por separado. Respecto a la primera, referida a que los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, Castellino opina que “la autodeterminación garantizada a los pueblos no se detiene en la mera representación política. Incluye determinar su propia forma de desarrollo, así sea económica, social o cultural”. Poniendo como ejemplo el proceso de independencia de Bangladesh de Pakistán de 1971⁶⁴⁵, completa su reflexión planteándose algunas cuestiones que aparecen, según el autor, bien destacadas en este caso, en el que “se alegó una explotación económica cuasi-colonial y la prevención del desarrollo social y cultural; a pesar de que políticamente los entonces bengalíes del Este eran mayoría en el Parlamento que pronto habría de conformarse. Un aspecto destacado (...) que se repetirá (...) es la idea de neocolonialismo”⁶⁴⁶.

Respecto a la segunda provisión, “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, comenta Castellino que fue precisamente esta cuestión la que estaba, por ejemplo, en el corazón de la secesión de Katanga, “un región rica en recursos del Congo,” que “decidió que no quería ser más explotada y (...) buscó secesionarse del estado. (...). Esta sería una opción válida bajo el Derecho Internacional a la vista de la cláusula arriba mencionada. Sin embargo, las cláusulas restrictivas en el documento, podría argumentarse, implican que la secesión no debería dejar el estado remanente desmembrado, obstaculizando su integridad territorial y su autodeterminación. Si bien esta disposición está principalmente para evitar la explotación colonial de los recursos de los colonizados, su desarrollo se ve perjudicada, ya que podría poner en marcha precedentes peligrosos. Es decir, cada parte de un país que tuviera recursos podría optar por la secesión, alegando que sus recursos sostienen todo el país. Esto podría tener efectos desastrosos para el sistema internacional”⁶⁴⁷.

Podríamos añadir por nuestra parte que, en base a parecidas circunstancias, la comunidad

⁶⁴⁵ Castellino estudió este caso aparte en otro artículo: Castellino, J., "The Secession of Bangladesh in International Law", *Asian Yearbook of International Law*, n.7, 2000, pp 83-104.

⁶⁴⁶ Castellino, J., *International Law and Self-Determination: The Interplay of the Politics of Territorial Possession with Formulations of Post-Colonial 'National' Identity*, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 38, Dordrecht, 2000, pp. 32 y 33

⁶⁴⁷ Castellino, J., *International Law and...*, op. cit., pp. 32 y 33

internacional rechazó la independencia (1967 - 1970) de los Igbo, la región nigeriana de Biafra, al sureste del país, si bien tal estado fue reconocido por algunos países y Charles de Gaulle, aun no reconociendo la estatalidad, sí habló de un derecho de autodeterminación de ese pueblo. Añadamos que es en este territorio donde se encuentra el delta del Níger y las reservas de petróleo del país.

Sin embargo, no era esta la idea originaria, naturalmente, sino hacer efectiva la descolonización, evitar una independencia meramente formal mientras el sistema imperial continuara mediante gobiernos títeres o puro control extranjero. En contraposición, la doctrina de las potencias coloniales había defendido que el derecho de autodeterminación en el nombre del cual a las colonias alcanzarían su independencia no podía ser ejercido si no existía una posibilidad razonable de progreso o de viabilidad en el proyecto estatal de los nuevos estados. Una doctrina paternalista que buscaba obviamente prolongar indefinidamente la situación de dependencia. Esta doctrina se apoyaba en los criterios de estatalidad de la Convención de Montevideo de 1933, pero a nadie escapa que escondía en realidad los intereses propios de las metrópolis. El argumento contrario era, precisamente, que si las colonias no disponían de recursos suficientes para manejar su propio estado, era por la misma subyugación imperial. Es en este contexto en el que la Resolución 1514 de 1960, “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” explicita que no se ha de invocar “la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo” como pretexto para retrasar o denegar la independencia y estatalidad de las colonias. Por eso, en la misma Declaración se explicitó que “la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes”.

Llegados a este punto, es de suma importancia llamar la atención sobre una cuestión a menudo ignorada. Hemos visto que si hay un consenso en torno al contenido del derecho de autodeterminación es la prohibición del colonialismo. Además hemos visto que la mayoría de las críticas posteriores a la formulación del derecho que han hecho aumentar el enfoque en la cuestión económica provinieron de voces de países del tercer mundo, de países colonizados y de sectores feministas, como dice Karen Knop. Esto nos muestra que la construcción teórica del derecho de autodeterminación actual ha estado liderada por y pensada para los oprimidos, en ningún caso para los opresores o los privilegiados. No coincide con las teorías nacionalistas primordialistas predominantes antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, como la construcción teórica ha sido influida por y dirigida a situaciones de opresión, también la redacción de la normas están dirigidas a combatir la opresión. No se creyó necesario especificar cómo abordar la cuestión de la autodeterminación o de la secesión de los ricos.

Una de las razones de que esto fuera así, tal vez ha esta conectada con la histórica asociación entre riqueza y tierra, entre la extensión de la misma y las riquezas naturales. El territorio era la medida del poder y de la riqueza, de manera que los poderosos aspiraban generalmente a mayor control sobre mayor territorio, no a menos territorio. Esta es una visión muy propia del Antiguo Régimen, en el que las secesiones estaban fundamentalmente vinculadas a la voluntad y necesidades políticas del soberano. Podían

darse casos de secesión no forzosas por pérdidas en guerra y por razones muy concretas (por ejemplo, dotes matrimoniales, ventas por precio dinerario, o cesiones estratégicas como la cesión del territorio de Neum al Imperio otomano por parte de Ragusa para protegerse del avance de la República de Venecia). La progresiva pérdida de importancia de la cantidad o superficie de tierra como fuente absoluta de riqueza constatada durante el siglo XX a favor de otras fuentes y el asentamiento de sistemas democráticos, junto a la permanencia de ideales nacionalistas primordialistas, han ayudado a la proliferación del fenómeno de movimientos nacionalistas y secesionistas de territorios ricos y pueblos con mayor nivel de desarrollo que la media estatal, acompañados de una reivindicación de mantenimiento o ensanchamiento de mercados. La falta de respuesta explícita del Derecho Internacional a este fenómeno ha llevado a muchos autores y a actores políticos a intentar hacer equivalentes, contra la doctrina mayoritaria y el obvio espíritu de la norma, las muy diferentes reivindicaciones territoriales de los ricos y la de los pobres y oprimidos.

En relación a esto, Thomas Pogge, experto en Justicia global y discípulo de John Rawls, al apoyar una “dispersión vertical de la soberanía” para reducir la intensidad de los conflictos sobre las fronteras, explica que:

“en nuestro mundo, muchos (...) conflictos están motivados por consideraciones moralmente inapropiadas –especialmente las siguientes dos. Hay una competencia sobre territorios valiosos o estratégicamente importantes y grupos porque el control sobre ellos afecta de manera importante la distribución del poder internacional de negociación (...) en un futuro indefinido. Y hay intentos de los más ricos (blancos sudafricanos, eslovenos, italianos del norte) de separarse del resto del pueblo más pobre para eludir deberes ampliamente reconocidos de justicia distributiva entre compatriotas”⁶⁴⁸.

Por otro lado, centrándonos en los oprimidos, la idea de que “la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes”, ha sido la predominante en la doctrina desde entonces, y ha hecho abandonar definitivamente una concepción “civilizadora” externa, siendo sustituida por un enfoque de cooperación entre pueblos y estados para su mutua ayuda y desarrollo; la pobreza, la debilidad institucional, los conflictos, no son características del ser mismo de los pueblos, o de determinados pueblos –argumento primordialista en extremo xenófobo-, sino circunstancias diferentes de pueblos iguales, ya no es posible racionalmente colocar los niveles de desarrollo en una línea temporal de comparación –historicista y falsa-. La colaboración entre pueblos iguales con circunstancias diferentes marca los flujos de ayuda técnica y financiera, de manera que la intervención externa ha de ser siempre solicitada, consentida y compartida. Este enfoque, aceptado, de que la libertad política de los pueblos en su conjunto y de los estados es el camino para su desarrollo ha sido coadyuvado por la idea de que sólo sistemas democráticos traen desarrollo al interno de esos países, estableciéndose eventualmente un vínculo entre democracia y desarrollo, recordemos, definido como agregado indisoluble de incremento de derechos, libertades y del crecimiento económico.

En este sentido, como bien recuerda Thomas Franck, -señalemos a modo de ejemplo- los

⁶⁴⁸ Pogge, T., *World Poverty...*, op. cit., p. 191

jefes de estado y de gobierno europeos ya concluyeron en 1991 que “la supresión de las libertades individuales impiden al individuo participar en y contribuir al “proceso de desarrollo”⁶⁴⁹. Para Franck, “el desarrollo económico, tal y como debe reconocer incluso el liderazgo chino, está inextricablemente unido con la libertad política. Un mercado económico libre no puede florecer por un largo tiempo sin crear presión en favor de un mercado libre de ideas. Al mismo tiempo, los problemas de subdesarrollo sólo pueden ser abordados de manera satisfactoria en un mundo de naciones estables y pacíficas, las cuales, a cambio, también presuponen un mundo de democracias abiertas”⁶⁵⁰.

Considera Antonio Cassese que, históricamente, “el logro de la independencia política por parte de los países coloniales pronto resultó ser solo un paso más hacia la verdadera independencia, planteándose dentro de las naciones la cuestión de la reivindicación del derecho de los nuevos Estados independientes a disponer libremente de sus recursos naturales”. Teniendo en cuenta el contexto histórico, el problema se planteó principalmente *como una cuestión que afecta a los Estados soberanos en lugar de a los pueblos como tales*. De hecho, el debate que se produjo dentro de las Naciones Unidas giraba en torno a la posibilidad de lograr una fórmula capaz de salvaguardar y conciliar dos principios esenciales: el respeto a la soberanía nacional de los países del Tercer Mundo en necesidad de desarrollo (...), y la provisión de garantías para los potenciales inversores extranjeros”⁶⁵¹.

Según Antonio Cassese, respecto a la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, la “soberanía permanente sobre los recursos naturales” no ha podido ser considerada por sí misma y en su totalidad, ni como enunciativa de normas de costumbre internacional preexistentes ni como generadora de las mismas, defendiendo, por el contrario, que el punto de vista adecuado es el que considera que “sólo algunos principios establecidos en la Declaración han llevado gradualmente a la formación de las correspondientes normas legales (...)”. Según Cassese, podría decirse que, “en lo que concierne los derechos de los pueblos, la Declaración puede ser considerada como sancionadora del Derecho Internacional general. En este nivel, esto supone que un pueblo sometido a dominación colonial o a dominación extranjera, tiene derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Es evidente que este derecho individual no es más que una especificación y corolario del derecho general a la autodeterminación pertenecientes a los pueblos en cuestión. Puesto que el derecho específico en discusión se ha de ejercer “en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo” (...) cualquier uso o explotación de los recursos naturales de un territorio bajo la dominación colonial o extranjera, llevadas a cabo por la potencia colonial o extranjera sin actuar en el interés exclusivo del pueblo en cuestión, constituye una infracción grave del derecho de los pueblos a la autodeterminación”⁶⁵².

Por último, debemos subrayar que son los supuestamente diferenciables aspectos económicos de la autodeterminación los que han llevado a algunos autores a plantearse la conflictiva relación de los mismos con el derecho al desarrollo, relación objeto de esta tesis y que elaboraremos en la tercera parte.

Alexandra Xanthaki ha hecho una interesante reflexión en torno a tal relación que

⁶⁴⁹ Consejo Europeo, *Conclusiones de la Presidencia*, Doc. SN 151/2/91 (Ann. V) at 27 (1991).

⁶⁵⁰ Franck, T. M., “The Emerging Right to Democratic Governance”, *The American Journal of International Law*, Vol. 86, n.1, 1992. Pp 46–91.

⁶⁵¹ Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., pp. 99 y 100.

⁶⁵² Cassese, A., *Self-Determination...*, op. cit., p. 100

adelantamos a efectos de claridad expositiva, aunque lo abordaremos con detalle más adelante. Hemos mencionado que, en su opinión, el contenido del derecho de autodeterminación debería ser sometido al principio de subsidiariedad respecto a otros derechos más apropiados, al “reflexionar sobre su significado, es importante recordar que la autodeterminación es a la vez un principio y un derecho en el Derecho Internacional. Como principio, atraviesa varios derechos, en cuanto derecho, gira esencialmente en torno al poder político, la participación y el control (...). La alternativa a la autodeterminación económica, a saber, el derecho al desarrollo, se enfrenta a muchas de las mismas críticas que la autodeterminación. Sin embargo, se sugiere que es más adecuado para dar cabida a las reivindicaciones relacionadas con los recursos naturales”.

Aunque algunos autores han señalado el gran parecido entre los dos derechos, positivamente como Abi-Saab⁶⁵³ o muy negativamente como Anthony Cart⁶⁵⁴, Alexandra Xanthaki argumenta su distinción de la siguiente manera: “contrariamente a la autodeterminación, las reivindicaciones de desarrollo económico y la distribución de beneficios están en el corazón del derecho al desarrollo. En esencia, la validez de las reivindicaciones sigue siendo la misma, o incluso se ve fortalecida; es su base la que cambia”.

Aunque estoy de acuerdo en lo posible, y conveniente, de realizar una distinción, este particular enfoque no convence del todo, no sólo porque el derecho al desarrollo no es un derecho meramente económico –ha de incluir el incremento de realización de derechos y libertades-, sino porque, aunque ignorásemos las críticas clásicas economicistas del derecho de autodeterminación presentadas por autores feministas o de países no alineados, y nos quedásemos sólo en una supuesta vertiente política, la autodeterminación trata en última instancia también sobre distribución de recursos y derechos –incluyendo sociales y culturales identitarios- al definir la naturaleza política de la unidad y el modo en el que se efectuará de tal distribución.

La distinción entre ambos derechos, de autodeterminación y al desarrollo, es posible y comúnmente aceptada, y la relación entre ambos derechos es innegable, pero requiere, sin embargo, un cuidadoso examen que llevaremos a cabo en la tercera y última parte de la presente disertación.

§3.4 Sujetos del derecho de autodeterminación

§3.4.1 Sujetos titulares del derecho de autodeterminación

⁶⁵³ Abi-Saab, G., “Technological Development and the Right to Development’ en Sicilianos, L-A., y Gavouneli, M., (eds.) *Scientific and Technological Developments and Human Rights*, Ant. N. Sakoulas Publishers, Athens, 1990. P. 266. Citado por Alexandra Xanthaki en “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, en Ghanea Nazila y Alexandra Xanthaki, (eds.), *Minorities, Peoples and Self-Determination*. Essays in Honour of Patrick Thornberry, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005. P. 32.

⁶⁵⁴ Carty, A., “From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory”, *Third World Legal Studies*, Vol. 3, Article 5, 1984.

Hemos debatido el derecho de autodeterminación de los pueblos, su consideración como “derecho”, cuál es el contenido, esto es, qué es “autodeterminación”, y restaría analizar “de los pueblos” para completar una aproximación a su completa definición. Sin embargo, como hemos reiterado, es difícil analizar cada uno de los elementos sin los demás, por lo que hasta ahora hemos debido mencionar, ya por fuerza, aunque no de manera sistemática, diferentes acepciones de “pueblo”, pues estas diferentes acepciones afectan de manera fundamental tanto al contenido como a su naturaleza jurídica. El objeto de este apartado será, por tanto, tratar de sistematizar las diferentes concepciones de “pueblo” y subrayar cómo estas diferentes concepciones afectan al contenido y definición del derecho de autodeterminación.

Dependiendo de cómo se defina “pueblo”, el concepto de autodeterminación, como prerequisite, como principio, como derecho, como derecho humano, etc., adquiere distinta dimensión. Cada definición de “pueblo” afecta igualmente al contenido mismo y a la extensión de su aplicación –pensemos en como se ha utilizado, por ejemplo, para justificar a la vez la secesión de un territorio contenido o la integridad del continente, esto es, la autodeterminación de los estados, al mismo tiempo y en el mismo lugar-.

La cuestión, ya sabemos, no es nueva en absoluto. Hemos mencionado de pasada anteriormente, al hilo de otra cuestión, que autores clásicos como Rousseau, por poner un ejemplo, utilizaban el término “pueblo” en sentidos diferentes. El ginebrino, en concreto, distinguía “pueblo” como concepto político –personas unidas por un contrato social para garantizar su libertad y seguridad-, como concepto histórico y cultural y como concepto social, esto es “las clases bajas (...) la aplastante mayoría de obreros, granjeros y artesanos”.

Giovanni Sartori ha hecho un recorrido a lo largo de las diferentes acepciones de pueblo, por su relevancia en el estudio teórico de la democracia. A pesar de su longitud, me he permitido traducir y transcribir parte de su introducción al problema:

“(…) ¿Quién es el pueblo? (...) Nuestro “pueblo” parte del *demos* de los griegos. Y al *demos* se daban, ya en el siglo V a.C., varias interpretaciones. Dejando de lado (por ahora) a Aristóteles, para quién *demos* denotaba los pobres, la palabra podía reconducirse de varias maneras a: 1) *plethos*, es decir al *plenum*, al cuerpo entre de ciudadanos 2) *hoi polloi*, los muchos, 3) *hoi pleiones*, los más 4) *ochlos*, la muchedumbre. La noción se torna más compleja cuando el *demos* griego se convierte en *populus* latino, toda vez que los romanos, pero todavía más la elaboración medieval del concepto, hicieron de *populus* en parte un concepto jurídico y en parte una entidad orgánica. En definitiva, ¿es el pueblo un singular o un plural? (...) Haciendo las sumas, alcanzamos hoy un mínimo de seis posibles desarrollos interpretativos del concepto:

- 1.- Pueblo, como literalmente todos.
- 2.- Pueblo como pluralidad aproximativa: un mayor número, los más.
- 3.- Pueblo como populacho, clases inferiores, proletariado.
- 4.- Pueblo como totalidad orgánica e indivisible.
- 5.- Pueblo como principio mayoritario absoluto.
- 6.- Pueblo como principio mayoritario atemperado.

La primera acepción es la más intuitiva, si no fuese porque “todos” no son nunca verdaderamente “todos”, ¿todos son solamente los ciudadanos, o todos los que viven en un territorio dado?, ¿quién vota?, ¿los ciudadanos o también los residentes? En segundo lugar, cuando decimos todos siempre se sobreentiende:

todos menos los menores (se puede descender de 21 años a 18 años, y hasta los 16 y todavía más, pero nunca hasta los cuatro años), menos los incapaces, menos los criminales. Al final resulta que, los susodichos “todos” son algunos millones o decenas de millones menos (depende del total) de los literalmente todos. De la misma manera, [si pueblo significara] literalmente todos, la democracia nunca sería tal. La segunda acepción –los más- no provee un criterio. De igual manera deberíamos establecer cada vez qué cantidad hace un “pueblo”, cuál es el mayor número que vale por todos. Y de este modo ninguna democracia podría funcionar nunca. La tercera interpretación –se puede sostener- da substancia a las dos primeras. Si los literalmente todos son demasiados, y si los más son una aproximación demasiado indefinida e indefinible, ¿por qué no reconducir pueblo al “pueblo flaco”, a las clases inferiores y, en la versión marxista, al proletariado? La objeción es doble. En principio, el pueblo entendido como proletariado pone una exclusión fija: declara para siempre no pueblo al no proletariado. Ahora bien, es cierto que a también el pueblo entendido como conjunto de los ciudadanos “excluye” (los todos, hemos visto, no son nunca verdaderamente todos) : pero excluye pro tempore o por razones específicas o fundadas. En este caso, por contrario, la exclusión es ontológica e inmutable la que la hace inaceptable. La segunda objeción es en los hechos. Aparte de la dificultad práctica de establecer quién es pobre o no, trabajador o no, proletario o no, está el hecho de que las sociedades contemporáneas avanzadas (en clave socioeconómica) ya no tienen una configuración piramidal (...). La cuarta acepción –el pueblo como totalidad indivisible- es todavía menos aceptable para la teoría de la democracia, que la tercera. Pero se debe precisar que el *populus* medieval no es el *Volk* de los románticos. Tanto uno como otro pueden ser adscritos a concepciones “orgánicas” de la sociedad. Pero el organicismo medieval (que llega hasta la revolución francesa y a la primera revolución industrial) era corporativo, y metía al individuo en nichos que eran inmovilizantes pero también protectores. Por contrario, el organicismo viene resumido en el “espíritu del pueblo”, en el *Volkgeist* o en la *Volkseele*, y de verdad disuelto en el impersonal fluir de la Historia.

Así, la “fusión orgánica” que lleva a concebir al pueblo como una totalidad indivisible y de cuño romántico; y es en esta versión que la noción de pueblo ha legitimado el totalitarismo del siglo XX. En nombre de la totalidad y a cubierto de la fórmula “todos como uno sólo”, todos pueden ser aplastados y oprimidos uno a la vez. En las dos últimas acepciones el pueblo se transforma en una unidad operativa calificada por sus reglas de decisión. El pueblo *sub specie* de principio mayoritario absoluto (ilimitado) decide según el criterio de que los más cuentan por todos, los menos por ninguno. Por el contrario, el pueblo *sub specie* de principio mayoritario temperado (limitado) decide según el criterio de que los más prevalecen sobre los menos en el respeto de los menos. En ambos casos el pueblo se cuenta con precisión. Pero los dos casos son muy diferentes entre sí. Y si bien estas son las nociones *operativas* de pueblo, aquellas que efectivamente unen *demos* y *kratos*, importa entenderlas bien y examinarlas a fondo”⁶⁵⁵.

Parecida confusión encontramos con términos como “nación”, utilizado en Europa para hacer referencia a una comunidad de uniformes características étnicas o culturales, pero también, como en otros rincones del mundo, Estados Unidos por ejemplo, para referirse a unidades políticas, como sinónimo de “estado”. También el término “nacionalidad” se ha prestado a confusión; mientras que para pensadores del s. XIX y XX era asimilable a la acepción etnocultural de “nación”, acepción que se ha mantenido en la actualidad, para otros, como entre nosotros en la actualidad, bien pareciera hacer referencia además a una “nación” sin los atributos de importancia para ser coincidente con un estado, o una nación inferior, algo muy distinto a su acepción original, como si existieran “naciones” de diversas categorías morales, unas que puedan aspirar a controlar estados y otras que no.

Y es que también en nuestra tradición jurídico-política la polisemia ha sido constante, y los contenidos atribuidos a los términos han evolucionado con los desarrollos políticos. La acepción de nacionalidad del art.2 de la CE de 1978, “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la *Nación* española, *patria* común e indivisible de todos los

⁶⁵⁵ Sartori, G. *Democrazia. Cosa è*, Rizzoli. Milano, 2007, p. 20 y ss.

españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las *nacionalidades* y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, difiere y convive con su sentido civil en relación con el estado como comunidad política; art.11 de la CE, (“la *nacionalidad* española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley”). También la *patria* tiene parece adquirir un sentido trascendente en el art. 2, mientras que puede ser asimilable a Estado en otras partes del texto constitucional: art. 13.4: “la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los *apátridas* podrán gozar del derecho de asilo en España”.

Respecto al “pueblo”, también una expresión que puede hacer referencia tanto a su sentido cívico democrático como a un sentido nacionalista primordialista como el del artículo 1.2 de la CE: “la soberanía nacional reside en el *pueblo español*, del que emanan los poderes del Estado” convive con la acepción claramente etnocultural del artículo 46: “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los *pueblos de España* y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad...”.

Los debates en torno a la confusión terminológica del “pueblo” se sucedieron con la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, como es de imaginar tras la fuerte reacción contra el principio nacionalista que se vivió al concluir la Segunda Guerra Mundial, que llevó, tanto desde sectores liberales como socialistas, a entender que el autogobierno no tienen por qué significar que los estados hayan de coincidir por fuerza exactamente con líneas culturales o étnicas, y que el principio nacionalista tal y como se generalizó en el período de entreguerras puede tener terribles repercusiones para la paz mundial, especialmente si se considera como base ilimitada para cualquier acción o estructura política. Consecuencia de esta motivación, sabemos, fue el interés en el desarrollo del Derecho Internacional, en cuanto que fortalece el principio de legalidad frente a los intereses parciales, y la creación de instituciones supraestatales, incluyendo el apoyo a las iniciativas de integración regional como el resurgir del europeísmo y la fundación de las Comunidad Económica Europea, etc. La “autodeterminación de los pueblos”, término antiguo, perdió así su sentido clásico prestado y fuertemente influenciado por el nacionalismo clásico que había tenido durante el período de entreguerras.

Sin embargo, por otro lado, la situación de colonialismo promovía la independencia de unidades políticas que coincidían con pueblos etnoculturalmente diferentes a los de las metrópolis, aunque estas unidades estuviesen compuestas, a su vez, por uno o múltiples pueblos etnoculturales diferentes entre sí. Además, era necesario dar una respuesta al problema de las minorías y, eventualmente, a los derecho de los pueblos indígenas. Ambas situaciones no podían solucionarse con un principio estatalista puro y sin reparos. En fin, la adecuada acepción de “pueblo” y de “autodeterminación” se presentaba entonces, como ahora, como aquella que fuera compatible con ambas tendencias en apariencia contradictorias y con un mundo en paz, principal objetivo de las Naciones Unidas. Consecuencia de ello, como hemos visto anteriormente, resultó la consciente indefinición del contenido del derecho en general y de sujeto titular del derecho en particular.

Al respecto, recuerda Aureliu Cristescu que la dificultad de la definición de “pueblo”, de la que dependen consecuencias geopolíticas de toda índole, resulta clara desde los trabajos preparatorios de la Carta, cuando el Primer Comité de la Primera Comisión de la Conferencia de San Francisco observaba que “lo que se pretende en el párrafo 2 es proclamar los iguales derechos de los pueblos como tales, y consecuentemente su derecho de autodeterminación. La igualdad de derechos, por tanto, se extiende en la Carta a estados, naciones y pueblos”⁶⁵⁶. Al entrar a debatir el contenido del primer artículo de la Carta, el Comité de Coordinación discutió los significados de los términos “pueblos”, “naciones” y “estados”. Como relata Cristescu, “un miembro del Comité objetó el uso de la palabra “naciones”, particularmente cuando sea usado en una aparente diferenciación de la palabra “pueblos”. A petición del Comité de Coordinación, el Secretariado preparó un memorándum que contenía una lista de palabras y expresiones que aparecían frecuentemente en la Carta, entre las cuales se encontraban los términos “naciones”, “Estados” y “pueblos”⁶⁵⁷. El Secretariado consideró que mientras que “Estado” tenía un significado bien perfilado referido a una unidad política con unas características concretas, el término “nación” es más “amplio y suficientemente general para incluir colonias, mandatos, protectorados y cuasi-estados además de a los estados, además de tener, según el Secretariado, un sabor poético que no tiene el término “estado”. Es por ello que se prefirió el término “nación” “en el artículo 1, párrafo 2, y en el antiguo Artículo 58 que trata de los propósitos generales del Consejo Económico y Social. Donde el término “nación” fue usado incorrectamente es en el antiguo artículo 60X. El Secretariado cambió correctamente el término por el de “estado”. Para Cristescu, parece deseable, por tanto, mantener el término “nación” en el Preámbulo”⁶⁵⁸.

Entre las cuestiones planteadas en relación con esta cuestión también destacó aquella de si la “yuxtaposición de las “relaciones de amistad entre las naciones” y “autodeterminación de los pueblos” era correcta, respondiendo que “no parece que haya dificultad en esta yuxtaposición dado que “naciones” se usa [en la Carta] en el sentido de todas las entidades políticas, estados y no estados, mientras que “pueblos” se refiere a grupos de seres humanos que pueden, o no, englobar estados o naciones”⁶⁵⁹. Al problema no resuelto de los titulares ideales del derecho (todavía se mantienen incluso los debates entre nacionalistas primordialistas, que debaten si deben prevalecer unas sobre otras características étnicas, culturales, históricas, cada uno con su criterio y siguiendo su propio interés particular, por no hablar de las visiones opuestas de voluntaristas y nacionalistas cívicos, socialistas, etc.), se ha de sumar el hecho de que el mundo nacido de la Segunda Guerra Mundial está conformado por Estados cuyas fronteras han sido dibujadas históricamente bajo distintas ideologías (hemos recogido al respecto la opinión de Leo Strauss, que explica el fraude “piadoso” que supone esa aceptación tácita, de que

⁶⁵⁶ Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981 Párf 267 y ss, p. 39 y ss.

⁶⁵⁷ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit. p. 38.

⁶⁵⁸ Documents of the United Nations Conference on International Organization, I/I/A/19 (vol. XVIII, pp. 657-658). Citado por Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, New York, 1981. Informe: E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1. Par. 262, p. 38.

⁶⁵⁹ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit. p. 38

las fronteras actuales son legítimas aunque no sigan ningún criterio o las reflexiones de Joseph Carens en torno a la arbitrariedad de las fronteras que al ser creadas bajo distintas ideologías no siguen ningún criterio de justicia distributiva consistente desde el punto de vista del ser humano individual y universal).

Así, en 1956, Jennings formuló famosamente la paradoja de la identificación del pueblo, “el pueblo no puede decidir hasta que alguien decida quién es el pueblo”⁶⁶⁰, fórmula que es especialmente cierta en los debates que tienen como objeto distintas definiciones de pueblo entre etnonacionalistas o culturales (i.e. debates entre nacionalistas de distintos bandos, cuando consideran los límites de su pueblo), pero que es *también* aplicable al debate general de quién es pueblo entre nacionalistas primordialistas y aquellos que usan otro criterio no etnocultural o histórico para definir pueblo, es decir, el debate general para delimitar el “pueblo” en cuanto titular de un derecho de autodeterminación.

Antonio Cassese se preguntó también “¿quién es exactamente el titular de este derecho?, ¿son todos los pueblos titulares de este derecho?” Para el italiano, “estos son los problemas cruciales en el derecho consuetudinario internacional de autodeterminación. Por supuesto, la respuesta a esta cuestión sólo puede encontrarse en la práctica internacional. Sin embargo, si uno analiza esta práctica, rápidamente se da cuenta de que muy rara vez han tomado los Estados una posición firme en este tema en declaraciones “unilaterales”, declaraciones o comportamiento real”⁶⁶¹.

La falta de definición de “pueblo”, tanto en la Carta de las Naciones Unidas, como en la falta de consistencia de criterio en la práctica internacional, a la que se refiere Cassese, ha propiciado la defensa de la “obviedad” de su significado, con el objetivo de hacer prevalecer una visión concreta, sin que eso cierre el debate, naturalmente. Michael C. van Walt van Praag, se apoya en que “es una máxima bien establecida de Derecho Internacional, contenida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y afirmada por la Corte Internacional de Justicia, que los términos de los instrumentos legales internacionales *deben ser interpretados de acuerdo con* sus significado corriente”⁶⁶². Desafortunadamente, tampoco existe un sentido corriente unívoco de “pueblo” ni siquiera en el lenguaje coloquial.

Las dificultades descritas anteriormente, no nos impiden, sin embargo, intentar sistematizar racionalmente las distintas acepciones políticamente relevantes que se le ha dado al término “pueblo” en relación con la autodeterminación –obviamente dejando fuera otras acepciones como el sentido geográfico de localidad- y reflexionar sobre las consecuencias de la autodeterminación de cada acepción. La aseveración de que la igualdad de derechos se extiende en la Carta a estados, naciones y pueblos, abre la puerta a considerar si la autodeterminación puede ser concebida, como efectivamente creemos, de manera que su respeto satisfaga distintas acepciones de “pueblo”, a pesar de que estas

⁶⁶⁰ Jennings, I., *The Approach to Self-Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1956, p. 56

⁶⁶¹ Cassese, A., *Self-Determination of Peoples...*, op. cit., p. 101.

⁶⁶² El artículo 31 de la Convención de Viena establece que: “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.

distintas acepciones parezcan o sean irreconciliables.

Veamos a continuación las principales acepciones políticamente relevantes de “pueblo” en relación con el derecho de autodeterminación:

1. Pueblo como comunidad definida étnica o culturalmente con conciencia de pertenencia y solidaridad entre sus miembros.

“Pueblo” puede ser, en primer lugar, definido etnoculturalmente, identitariamente, históricamente. Michael C. van Walt van Praag se refiere a esta acepción cuando, tras constatar la falta de definición en la Carta, se apoya en la definición de la UNESCO, una organización que promueve la protección cultural: “Una descripción más detallada fue desarrollada en 1989 específicamente con el objetivo de identificar los titulares del derecho de autodeterminación por el Encuentro Internacional de Expertos para la de los Conceptos de los Derechos de los Pueblos”. Esta descripción (...) identifica un pueblo como un grupo de seres humanos individuales que gozan de algunas o todas de las siguientes características comunes:

- (a) una tradición histórica común,
- (b) una identidad racial o étnica,
- (c) homogeneidad cultural,
- (d) unidad lingüística,
- (e) afinidad religiosa o ideológica,
- (f) conexión territorial,
- (g) vida económica común”.⁶⁶³

En un esfuerzo de conjugar estos elementos de definición de pueblo basados en características no sistemáticas establecidas *a priori* (que cuando usadas como fundamento último de legitimación del estado conforman ni más ni menos que el nacionalismo primordialista) con elementos voluntaristas *à la* Renan, es decir, unos elementos aparentemente identificables externamente con el elemento de autodefinition, los expertos de la UNESCO añadieron que: “el grupo en su conjunto debe tener la voluntad de ser identificado como un pueblo o la conciencia de ser un pueblo”, lo que para van Walt van Praag “es el elemento subjetivo clave común a otras definiciones legales de los pueblos”.

El elemento subjetivo puede ser a su vez desmenuzado en dos partes, el elemento volitivo (la voluntad de querer ser, como diría Renan) y el elemento de “conciencia” a la que se refiere van Walt van Praag, que no es sino la autopercepción, en torno a la que conviene recordar la tesis de “comunidades imaginadas” de Anderson.

Asimismo, los expertos de la UNESCO llegaron a la conclusión de que “las personas deben ser de un cierto número, el cual no necesita ser grande, pero debe ser algo más que “una mera asociación de los individuos dentro de un estado”, considerando también de importancia la existencia de “instituciones u otros medios de expresar sus comunes características y voluntad de identidad”.

⁶⁶³ Van Walt van Praag, M., Serroo, O., (eds.) *The Implementation of the....*, op. cit.

Para van Walt van Praag este significado “corriente” de la expresión “todos los pueblos” – en referencia a los términos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados-, incluye los pueblos sometidos a dominación o la dominación colonial o extranjera, los pueblos bajo la ocupación, los pueblos indígenas y otras comunidades que reúnan los criterios generalmente aceptados para determinar la existencia de un pueblo.

A nadie se escapa que esta definición etnocultural y casuística de “pueblo” es preferida por los nacionalistas, por al menos, dos razones: por el primordialismo identitario etnocultural y por lo no sistemático de la acepción. James Summers explica la estrecha relación –aunque subrayemos su no total identificación- entre esta acepción de “pueblo” y la doctrina nacionalista: “el nacionalismo utiliza el término “nación” como la unidad básica de la política. (...) Sin embargo, el nacionalismo no busca ninguna definición general de nación, dejando a los nacionalismos individuales rellenar los detalles relevantes. Esto deja a la doctrina nacionalista conceptualmente muy resbaladiza, pero también muy flexible y dinámica. El nacionalismo tiene quizás dos principios básicos -que el mundo está dividido en naciones y que la nación es la base para el estado- pero tiene poco más bagaje, lo que le permite combinarse libremente con doctrinas de todo el espectro político (...). Esta idea de que las naciones proveen la base para el estado es muy similar al derecho de autodeterminación, que propone los pueblos como base para determinar cualquier estatus político. La palabra “pueblo” es típicamente usada como sinónimo de “nación” (...) Esta estrecha relación entre nacionalismo y autodeterminación tiene implicaciones importantes para el concepto de “pueblo”. Mediante la elevación de la nación o el pueblo a la base de toda autoridad política legítima, el nacionalismo y el derecho la autodeterminación inevitablemente usan estos conceptos como ideas políticas. (...) Es la idea de una nación o de un pueblo, el que es usado como medida de legitimidad de cualquier estructura o acción política. Cómo se define los pueblos define que es y qué no es legítimo”⁶⁶⁴.

Así, aunque el nacionalismo se apoya conceptualmente en esta definición de “pueblo”, vaga pero siempre etnocultural, coincidir con esta acepción puede comportar aunque no necesariamente, comulgar con la doctrina nacionalista. La doctrina nacionalista puede identificarse por las implicaciones que obtiene de esa definición o acepción de “pueblo”: no es lo mismo defender los derechos de un pueblo, definido por un hecho cultural -digamos por su lengua-, a ejercer su hecho cultural –a hablar su lengua- que a utilizar ese hecho -la lengua- como criterio fundamental para legitimar una unidad política como es el estado, con el monopolio de violencia que implica, y por tanto a distribuir derechos y recursos diferentes que en nada están relacionados con el hecho diferencial entre personas que no pertenecen al “pueblo”, pero que comparten territorio –los que hablan la lengua, gobiernan y deciden por sí solos sobre sanidad y carreteras de todos, por ejemplo-. El derecho a preservar y disfrutar de la propia identidad y cultura no tiene porqué necesariamente ser relevante para decidir en la distribución de otros derechos o recursos, es decir, para constituir una unidad política determinada (construir un hospital, diseñar una carretera, aportar gastos de defensa militar, etc.).

Gellner llama la atención sobre la particularidad de la realización de la ideología nacionalista primordialista (me refiero a que todos los miembros de una unidad política tengan unas determinadas características etnoculturales), esto es, de la reificación de un ideal de la imaginación compartido: la realización efectiva de un ideal nacionalista implica forzosamente la frustración de la realización de otros; para hacer coincidir

⁶⁶⁴ Summers, J., “The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law”, *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005, p. 326

forzosamente la unidad política con un grupo etnocultural particular, otros individuos residentes en el mismo espacio y tiempo tienen que ver su propio ideal frustrado. Al respecto, reflexiona Gellner, “este razonamiento se ve enormemente reforzado por el hecho de que la mayor parte de estas naciones potenciales que existen en el globo viven, o han vivido hasta hace poco, no en unidades territoriales homogéneas, sino entremezcladas unas con otras en moldes complejos”⁶⁶⁵.

Concluyamos que la acepción etnocultural de pueblo se enfrenta, por tanto, a un doble problema de definición. El primero, que tiene que definir quién es el pueblo frente a otros etnoculturalmente definidos con las consabidas dificultades, (¿es la lengua?, ¿es la religión?, ¿cuál de ellas?, ¿qué prevalece?, ¿es la Historia?, ¿de quién?), a menudo haciendo distinciones controvertidas especialmente en poblaciones culturalmente heterogéneas. La segunda acepción contra la que tiene que enfrentarse, es al pueblo concebido de otras maneras diferentes (democrática, como clase, etc.).

Existe, sin embargo, un punto de común acuerdo para la definición de un pueblo etnoculturalmente a pesar de la amplitud y vaguedad de criterios (¿es la lengua?, ¿es la raza?, ¿es la etnicidad, la religión, tal vez?). Este común denominador es que el conjunto de personas sea “políticamente relevante”. Para ser “pueblo” un grupo de personas que en abstracto pudiera ser cualquiera –podríamos analizar la expansión de derechos y económica de personas con gafas o sólo de las mujeres- cuando se aplica materialmente se requiere, en su máxima expresión, que el conjunto sea políticamente relevante, es decir, capaz de cierta autonomía en una gestión completa de recursos y derechos, incluida la posibilidad de crecer, desarrollarse, perpetuarse, etc. (requisito que no cumplen las personas con gafas sólo por tener gafas, o sólo las personas de una determinada edad, o que sólo los mujeres o sólo los hombres). Por eso los criterios para definir esa relevancia política que define “pueblo” han sido la lengua, etnicidad, religión, territorio, o la sola voluntad de los constituyentes o la mera inercia histórica, criterios tan arbitrarios desde el punto de vista humano como llevar gafas o el sexo, pero que permiten imaginar comunidades funcionales autónomas sostenidas en el tiempo, sin prejuicio de otros conceptos de “pueblo” de los que damos cuenta. Esta característica mínima de viabilidad autónoma, así sea en lo referente a su cultura y no en todos los aspectos de la vida social, puede aplicarse a otras concepciones de pueblo, inclusive el demos.

2. *Minorías nacionales y pueblos indígenas.*

Así, no es de extrañar que se haya extendido el término “minorías” en el lenguaje jurídico internacional, para referirnos a grupos titulares de derechos, que aunque definidos de parecida manera etnocultural, no aspiran a un estado exclusivo, no se convierten en fundamento legitimador del Estado a nivel internacional y ni siquiera tienen por qué aspirar a gobernar un territorio a todos los niveles competenciales más allá de lo necesario para proteger su hecho cultural. Por ejemplo, los frisios o frisonos de Alemania ven su cultura protegida por la Constitución de Schleswig-Holstein y tienen su propio

⁶⁶⁵ Gellner, E., *Naciones y...*, op. cit., p. 15.

Consejo para los Asuntos Frisios formado en 1988, que vela por la educación, cultura y la lengua frisona, pero no tienen asientos específicos reservados ni partido específico a nivel regional. Las autoridades de los Sami regulan una actividad económica como es la explotación del reno, pero sólo en cuanto que esta explotación económica forma parte de su cultura, de su modo tradicional de vida. Toda vez que un grupo étnico o cultural no tiene porqué coincidir con los límites de soberanía y gobierno de un estado, nos encontramos frente al problema del acomodo de la minorías nacionales dentro del mismo (minorías que nuestra Constitución, podría argüirse, denomina “nacionalidades” o “pueblos”).

No existe ninguna definición acordada internacionalmente sobre qué grupos constituyen minorías étnicas o minorías nacionales, como tampoco existe ninguna definición universalmente acordada de “pueblos indígenas”⁶⁶⁶, indefinición que comparten con el concepto de “pueblos”.

Según la conocidísima definición de 1977 de Francesco Capotorti, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, una minoría es: “un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en una posición no dominante, cuyos miembros —siendo nacionales de dicho Estado— poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas distintas de aquellas del resto de la población y muestran, al menos implícitamente, un sentido de solidaridad, dirigido a la preservación de su cultura, tradiciones, religión o lengua”⁶⁶⁷.

Así, desde cierta perspectiva, la diferencia entre pueblo/nación y pueblo/minoría no se diferencian tanto en su *cualidad*, que sigue siendo etnocultural, histórica pero ciertamente casuística y autodefinida, sino en su *cantidad* o tamaño relativo en un respectivo territorio, en su relación de *poder* y en la proyección territorial de ese poder. Por ello, desde la perspectiva nacionalista, es la *cantidad* la que define la relación con el territorio y con el estado, validando generalmente una idea predefinida de pertenencia a un territorio concreto, en un juego de poder en el que las mayorías simplemente tienen más legitimidad para controlar un territorio y eventualmente un estado, pues se acercan al ideal imaginario de estado /nación (por ejemplo, en la visión nacionalista la minoría propia tiene derechos históricos sobre un territorio hasta que son mayorías, y entonces tienen legitimidad en cuanto mayoría).

El nacionalismo llega así a un concepto de “mayorías” y, por tanto, a un concepto de “pueblo” distinguible del concepto de mayoría democrática y del *demos* o “pueblo” democrático, aunque en el discurso político sea común encontrar ambas “mayorías” confundidas como equivalentes. Esta confusión es fácilmente distinguible cuando se considera el concepto de “interés general”: la mayoría democrática incorpora el interés general mientras que la mayoría nacional primordialista, por general, no lo hace.

⁶⁶⁶ Oficina Alto Comisionado Derechos Humanos Naciones Unidas, *Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación*. Nueva York y Ginebra, 2010. Doc. HR/PUB/10/3

⁶⁶⁷ Capotorti, F., *Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, United Nations, New York, 1991, pár. 568.

La obsesión ideológica por la composición demográfica es constatable como sabemos, en los conflictos donde el elemento nacionalista es muy fuerte. Sin ir más lejos, pensemos en la batalla dialéctica y sinsentido -salvo para los nacionalistas primordialistas- en torno a si los musulmanes de Bosnia y Herzegovina eran o no originariamente serbios o croatas o lo contrario, o la controversia sobre lo mitológico o real de la explosión demográfica de albaneses en Kosovo durante la segunda mitad del siglo XX.

Las implicaciones sociopolíticas del reconocimiento de minorías son radicalmente distintas fuera de una perspectiva nacionalista porque la protección de minorías no tiene porqué entrañar una aspiración sobre miembros no pertenecientes a tal minoría en una pugna por el control de todos, a lo que sí aspira el pueblo/nación en cuya máxima expresión está la identificación con el estado, pleno soberano sobre todo lo que hay en un determinado territorio.

Es posible, por tanto, una aproximación democrática, y no exclusivamente primordialista al acomodo de las minorías nacionales si se tiene en cuenta el conjunto de las funciones complejas del estado y de la multiplicidad de derechos en juego. Aunque una minoría se identifique etnoculturalmente (externamente) y autodefinidamente (internamente los miembros se identifican como tales y expresan solidaridad para cuidar su cultura), debe existir tanto el elemento de cantidad (ser grupo minoritario), como un elemento fundamental de *respeto del interés general*, e integración en la estructura institucional del estado, en una relación solidaria, (o en lenguaje liberal tradicional la fraternidad), con los demás componentes del estado integrantes del demos, que une a todos en torno a la consecución de un mismo fin en la empresa común del estado civil.

La protección de las minorías nacionales, según Patrick Thornberry, ha pasado por tres fases históricas:

- 1) La protección de grupos de personas mediante tratados internacionales entre estados⁶⁶⁸.
- 2) La protección bajo el sistema de la Sociedad de Naciones, a partir de 1919, acordada entre las grandes potencias.
- 3) La protección bajo el sistema de las Naciones Unidas, vigente en la actualidad.

Según Louis Shon, el sistema de protección de la Sociedad de Naciones se reveló disfuncional al no establecer un criterio igualitario. “Tras la Segunda Guerra Mundial (...) no prosperó el intento de revivir los tratados de protección de minorías y de conferir a las Naciones Unidas la autoridad para garantizar los derechos en virtud de estos tratados. En vez de ello, se estableció un sistema más amplio de protección de derechos humanos, con la expectativa de que se aplicara a todos los seres humanos, tanto en países grandes como pequeños”⁶⁶⁹.

⁶⁶⁸ Vid. p. ej. Convención de 1881 para el asentamiento de la frontera entre Grecia y Turquía o Convención de Constantinopla de 1879 que garantiza las libertades del pueblo de Bosnia y Herzegovina en la ocupación de las fuerzas austrohúngaras.

⁶⁶⁹ Sohn, L.B., “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals rather than States”, *The American University Law Review*, vol. 32, n.1, 1982, p. 6

Ahora bien, concluidos los grandes procesos de descolonización, y tal vez al calor de ese cierto resurgir del nacionalismo primordialista que se vivió a finales de los años ochenta y principios de los noventa, con la reunificación de Alemania –el pueblo alemán etnoculturalmente definido se unía, encontrándose con su destino histórico-, la caída de los regímenes socialistas y comunistas etc., se aprobó la *Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas* de 1992⁶⁷⁰. La protección de las minorías nacionales en cuanto grupos se sumó conceptualmente a la protección de cada individuo miembro de las minorías en sus derechos humanos, pero esto no ha significado desde la perspectiva iusinternacionalista una vuelta al sistema del período de entreguerras. Por el contrario, como explica Gudmundur Alfredsson, en líneas generales, en el Derecho Internacional actual, los derechos de minorías y grupos indígenas se reconocen con la idea de “mantener a los grupos felices dentro de los Estados. Esto es evidente, por ejemplo, en el creciente énfasis en el respeto por los derechos de las minorías como herramientas para la prevención y resolución de violentos conflictos étnicos”⁶⁷¹.

Habida cuenta de la falta de definición universal de “pueblo” y “minoría” trazar una clara línea diferencial adicional con el concepto de “pueblo indígena” se revela, en mi opinión, todavía más difícil. Al igual que ocurre con las minorías, no existe ninguna definición internacional universalmente aceptada de “pueblos indígenas”, aunque se han realizado aproximaciones en algunos textos internacionales. Podemos mencionar como principales, además de la orientación que podemos obtener de los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, las disposiciones relevantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional vinculante, hasta ahora ratificado por una veintena de países. De estos textos podríamos extraer, según un estudio de Naciones Unidas⁶⁷², que “los pueblos indígenas son descendientes de los pueblos que habitaban en las tierras o en el territorio en cuestión antes de la colonización o del establecimiento de fronteras estatales; poseen sistemas sociales, económicos y políticos, idiomas, culturas y creencias distintos, y están resueltos a mantener y desarrollar esa identidad distinta; muestran un fuerte apego a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales existentes en ellas, y/o pertenecen a los grupos no dominantes de la sociedad y se identifican a sí mismos como pueblos indígenas.

Como podemos apreciar, se han realizado reiterados intentos de diferenciación, pero cuando no son tautológicos –los pueblos indígenas son los que tienen derechos indígenas, tiene derechos indígenas los indígenas, etc.- no pasan de referencias ciertamente vagas a las “características o “necesidades especiales” de los pueblos indígenas. Estas

⁶⁷⁰ Resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992

⁶⁷¹ Alfredsson, G., “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples, and Peoples: Definitions of Terms as a Matter of International Law”, Ghanea, N., Xanthaki, A., (eds.) *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005, p. 164

⁶⁷² Oficina Alto Comisionado Derechos Humanos Naciones Unidas, *Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación*. Nueva York y Ginebra, 2010. Doc. HR/PUB/10/3 P.4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf

características o necesidades especiales no están descritas, más allá de alusiones genéricas a relaciones especiales con tierras ancestrales, en especial con los recursos naturales (llama la atención el “especial apego a los recursos naturales” porque ¿quién no tiene apego a los recursos naturales?), medio ambiente o derechos históricos (estaban *antes* que los colonizadores). De la lectura del art. 33 de la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* de 2007⁶⁷³, “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven”, podemos extraer la conclusión de que en la construcción de la identidad de “pueblo indígena” el elemento más importante para su distinción no es otro que el elemento subjetivo *autoreferenciado*: un pueblo indígena lo es cuando así se consideran sus miembros.

En la Declaración de 2007, artículo 3, se declara el derecho de autodeterminación de estos pueblos (“los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”), como el artículo 4, (“los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas *con sus asuntos internos y locales*, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”). Así, vemos que los signatarios de la Declaración de 2007 se cuidan muy mucho de circunscribir el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas en el ámbito local, esto es, dentro del ámbito de soberanía del estado: no es un derecho de autodeterminación ilimitado. Esta limitación es relevante en todas las facetas del derecho. Por ejemplo, el especial apego a la tierra ancestrales “y a los recursos naturales” se entiende en relación con las tradiciones y modos de vida tradicionales indígenas (pensemos de nuevo en la explotación del reno por los nortños Sami), pero es cuestionable su extensión a la explotación de recursos naturales que redunden en el beneficio de todos los ciudadanos del estado, a la luz de la Declaración (si se encontrara petróleo debajo de tierras ancestrales, por ejemplo, quedaría dentro del ámbito del estado la solución del problema de compatibilización con los modos de vida ancestrales indígenas).

Así, bien pareciera que a “minorías nacionales” y “pueblos indígenas” les une una relación género-especie, dejando a los miembros de las comunidades la autodefinición como pueblo indígena cuando reunieran las características históricas y de especial relación con la tierra ancestral. Por ello, los “pueblos indígenas” pueden gozar teóricamente de la protección como “minorías” sin mayor problema”. En lo sustantivo, sean minorías nacionales o pueblos indígenas, la forma de ejercicio del derecho de autodeterminación para ambos grupos previstos en las Declaraciones son prácticamente iguales, porque están igualmente sometidos al estado a la luz del Derecho Internacional. Aunque substancialmente no apreciamos más diferencia con las minorías nacionales, desde un punto de vista jurídico, y no en una descripción antropológica o histórica para quienes parece más evidente describir quiénes son pueblos indígenas, desde luego podemos considerar siempre la Declaración de 2007 –que tiene insistimos mero valor de

⁶⁷³ Doc. A/RES/61/295

Declaración- como un poderoso instrumento de sensibilización ante las especiales necesidades de las comunidades indígenas y un refuerzo a la norma general de derecho internacional consuetudinario de protección de todas las minorías nacionales, incluyendo los pueblos indígenas.

Ahora bien, aunque se haya declarado el derecho de autodeterminación en los mismos términos de minorías nacionales y de pueblos indígenas, para determinados autores es distinguible del derecho genérico de la autodeterminación de los pueblos. Autores como Gudmundur Alfredsson subrayan la importancia de distinguir “pueblos”, por un lado, y “minorías” y “pueblos indígenas” por otro, pues son solamente los “pueblos” los que tienen acceso a instrumentos de Naciones Unidas diseñados para el proceso de descolonización⁶⁷⁴.

Por último hemos de mencionar que, en el marco de la concepción etnocultural de “pueblo”, hay quien defiende, como Kathleen McVay, la extensión de la autodeterminación a otros pueblos que sean así definidos. Para esta autora:

“los migrantes forzosos y los refugiados que residen en asentamientos permanentes pueden tener derecho a su autodeterminación”. Se ha argumentado que “la etnicidad confirma un elemento crítico de la definición de “pueblos” sujeto a ciertas limitaciones”. Así, si una comunidad de refugiados posee una identidad étnica diferente podría ser calificada como “pueblo”⁶⁷⁵.

La doble dificultad de identificar “el pueblo” bajo criterios etnoculturales o históricos a la que se refería Gellner (¿es el pueblo relevante como nación de “los germanos” incluyendo alemanes, frisonos o daneses, o acaso “los alemanes”, o tal vez “los bávaros”?) sumado además al problema de si, como veremos, debe ser en cualquier caso el pueblo definido etnoculturalmente el relevante y no el definido democráticamente el destinatario del derecho de autodeterminación ha llevado a autores como R.S. Bhalla a reinterpretar la autodeterminación como un derecho de restauración del poder de determinación que le pertenece y que ha sido tomado ilegítimamente del *self*. Para Bhalla la ilegalidad de la colonización proviene de la fuerza ilegítima que hace que un pueblo deje de ejercer su libre voluntad. Considerando así el derecho de autodeterminación desde el punto de vista de justicia restaurativa Bhalla distingue entre los pueblos colonizados, que tienen un derecho a la autodeterminación como independencia, y los grupos nacionales que encontramos en estados ya establecidos, que no tienen tal derecho⁶⁷⁶.

Ahora bien, como sabemos, la definición etnocultural de “pueblo” no es la única posible. Tomando el argumento de van Wart van Praag, de que hemos de usar el sentido del término en su uso corriente, podemos replicar que no tiene porqué significar pueblo en sentido etnocultural, aunque se complete con un “elemento subjetivo” que puede

⁶⁷⁴ Alfredsson, G. “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples...”, op. cit., p.171.

⁶⁷⁵ McVay, K., “Self-determination in New Contexts: the Self-determination of Refugees and Forced Migrants in International Law”, *Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law*, vol. 28 n.75, 2012, pp. 36–52

⁶⁷⁶ Bhalla, R. S., “The Right of Self-Determination in International Law”, Twining, William., (ed.), *Issues of Self-Determination* Aberdeen University Press, Aberdeen, 1991, pp. 91-97.

coincidir con una voluntad de tradición contractualista liberal o puede ser simplemente una “conciencia de pertenencia a la comunidad” que nada tiene de voluntarista.

3. *Pueblo como súbditos, pueblo como ciudadanía.*

Por pueblo se entiende también en su sentido corriente al titular legítimo de la soberanía democrática. Esta titularidad se construye a partir del

(3.1) “Pueblo” como conjunto de personas sometidas a un mismo poder, político, independientemente de su trasfondo cultural, su lengua, su etnicidad o su voluntad.

Las revoluciones liberales democráticas, como hemos visto en páginas anteriores, buscaban el autogobierno del pueblo frente a un poder injusto, frente a la heterogeneidad del poder propia del Antiguo Régimen. En estrecha relación, se entiende

(3.2) “Pueblo” como conjunto de personas sometidas al mismo poder y leyes, que en democracia se regula a sí mismo, es el “pueblo” también legislador, “pueblo” en su sentido democrático liberal.

El “pueblo” se define simultáneamente así tanto en el sentido de conjunto de personas que deben obedecer unas normas de las que el estado es responsable de hacer valer, es decir, la ciudadanía frente a los poderes del estado, como en el sentido de comunidad de personas que libre y voluntariamente (aunque tácitamente) establecen un vínculo solidario de convivencia y se gobiernan, esto es, se distribuyen autónomamente bienes y derechos.

El sentido liberal clásico contractualista distingue la voluntad de suscribir el contrato social de cada individuo abstracto en cuanto ser humano de las características étnicas o culturales que, a lo más, pueden servir de motivación empático-simpática para la suscripción del acuerdo, pero que no forman parte por sí mismas de la expresión de la voluntad, que principalmente debe ser incondicionada y sin vicios que la afecten. El “pueblo” democrático puede ser multicultural y pluriétnico porque no está definido, idealmente, por parámetros etnoculturales que son, por sí, indisponibles por los sujetos – nacen con ellos – sino, idealmente, por la suscripción libre y voluntaria de individuos iguales en dignidad, no étnica ni culturalmente. Que la identidad se construya, modifique, mute, después con la convivencia democrática no afecta al origen ideal del acuerdo que tiene en su fondo la distribución de recursos y derechos de individuos independientes.

El demos, como se entiende hoy en sentido democrático, el pueblo sometido a las normas que se da a sí mismo, no es ya el demos en aquel sentido clásico, como

(3.3) “Pueblo” como la mera mayoría de las personas de una unidad política.

Este sentido, que, al contrario que el demos de las democracias liberales, no necesariamente implica el interés general no es compatible con una sociedad en la que el

disenso y la existencia de minoría es consustancial. Este sería el equivalente al principio mayoritario absoluto (no temperado) al que hacía referencia Sartori.

Como bien explica Sartori, democracia es el mandato de la “mayoría” entendida en cuanto “*regla* mayoritaria”, ya que “en democracia se someten las decisiones a la regla mayoritaria” pero no en el sentido de “mayor número”, por el que una mayoría gobierna y otra es gobernada. “Una mayoría es simplemente una cantidad y una cantidad no legitima nada”, y es que la teoría de la democracia debe acomodar el principio de mayoría moderada que supone respetar los derechos y libertades de las minorías. Sartori distingue entre la función *procedimental* de la mayoría entendida en el primer sentido, en cuanto método de decisión, de su dimensión *sustantiva* ⁶⁷⁷. Y es que, como repetía Popper, “la democracia no puede definirse cabalmente como el gobierno de la mayoría, si bien la institución de las elecciones generales es de suma importancia. En efecto, podría darse el caso de una mayoría que gobernase tiránicamente...” ⁶⁷⁸

La mayoría en sentido sustantivo, por contra, es el sentido que le atribuye a menudo la doctrina nacionalista primordialista, demasiado a menudo confundiendo este principio mayoritario con la mayoría como regla, la mayoría democrática que trata de distinguir el interés general, que incluye a las minorías.

4. “Pueblo” como Estado –

El “pueblo” puede ser definido en cuanto conjunto de individuos sometidos a un mismo ordenamiento jurídico, a una misma unidad política, situación entre la que destacaría la condición de nacionales de un mismo estado.

Esto puede ser distinguible de la unidad política o del estado mismo en cuanto institución o conjunto de instituciones con monopolio de la violencia y autoridad para hacer efectivas las normas que regulan el funcionamiento de una sociedad en un determinado territorio: es la ciudadanía frente al estado.

Pero al mismo tiempo el estado, puede también considerarse una identificable reificación jurídica de un “pueblo” y, por tanto, *también* titular del derecho de autodeterminación.

Esta reificación epítomica del pueblo encuentra su raíz en el *populus* romano, el mismo origen de la palabra “pueblo”. Escribía Cicerón que la república, literalmente la cosa pública, “es la cosa del pueblo, siendo ”el pueblo”, no cualquier conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino una asociación numerosa de individuos, agrupados en virtud de un derecho por todos aceptado y de una comunidad de intereses” ⁶⁷⁹. El pueblo, por tanto, no hacía referencia a una parte de la sociedad, sino al conjunto de los

⁶⁷⁷ Sartori, G., *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1987 (ed) 1995, pp. 53-54

⁶⁷⁸ Popper, K., *La sociedad abierta y sus enemigos*, Paidós, Barcelona, (2ª reimpr) 2012, p. 337

⁶⁷⁹ Cicerón, *De Republica*, LI, XXV, 39. He utilizado la traducción de la edición de Akal, Madrid, 2012. El original dice: “*res publica res populi*, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus (...)”.

ciudadanos. El *populus romanus* tampoco hacía referencia solamente al origen de la legitimidad de la unidad política sino también a la unidad política misma, en cuanto colectividad que “podía adquirir propiedades, suscribir contratos y ser designado heredero, la propiedad pública incluía la propiedad del tesoro”⁶⁸⁰. A diferencia del *demos* aristotélico, que se refería al gobierno de una parte sobre el todo, por *populus* se denominaba el conjunto de los ciudadanos.

Para el insigne jurista Hans Kelsen, según cita Allen Rosas, la libre determinación de los pueblos sólo podía hacer referencia a los estados⁶⁸¹.

Hurst Hannum, respecto a un derecho de autodeterminación de los estados, recuerda que: “los estados africanos, que se encontraban entre los líderes del desarrollo del (...) “derecho” de autodeterminación en el contexto de la descolonización, han adoptado [por el contrario] una interpretación muy restrictiva del derecho en el contexto de independencia post-descolonizador. Debido a la extrema heterogeneidad étnica de la mayoría de los estados y las dificultades encontradas en el desarrollo de un sentido de estado en el período inmediatamente posterior a su independencia, los principios de integridad territorial y de unidad nacional han resultado ser más fundamentales que el de autodeterminación. (...) Puede ser que África sea simplemente más honesta que el resto del mundo al admitir que la autodeterminación *del estado* ha reemplazado la teórica autodeterminación de los pueblos (...)”⁶⁸².

Por supuesto, la consideración de los estados como sujetos titulares del derecho de autodeterminación se encuentra de frente con el mismo lenguaje de la Carta, que reserva a pueblos y estados lugares diferentes en su articulado, por lo que una autodeterminación de estados o considerar a los estados “pueblos” requiere una explicación adicional. Autores como la mencionada Alexandra Xanthaki, por ejemplo, reflexionan que si el derecho de autodeterminación es un derecho humano, éste debe proteger a los seres humanos frente a las instituciones, subrayando que “es importante afirmar que la autodeterminación es un derecho de los pueblos y no un derecho de un gobierno”⁶⁸³.

Es cierto que desde una perspectiva interna sea distinguible, como hemos dicho, “el pueblo” de “el estado”, (pueblo como conjunto de personas sometidos al poder del estado) pero “el estado”, en cuanto reificación jurídica de esa particular relación solidaria que une a una determinada comunidad de personas, puede ser para los miembros de terceros estados, asimilable a los pueblos a los que representan en la Sociedad Internacional, regulada, a su vez, por un Derecho al que están sometidos.

⁶⁸⁰ Powell, R., “Roman Law, Populus Romanus”, *Encyclopaedia Britannica*.

Acceso; <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/470503/populus-Romanus>

⁶⁸¹ Kelsen, H., “The Law of the United Nations: a Critical Analysis of Its Fundamental Problems”, 1951, pp. 51-53 citado por Rosas, Allan, “Internal Self-Determination”, Tomuschat, C. (ed), *Modern Law of Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993, p. 225.

⁶⁸² Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination...*, op. cit., pp. 46-47

⁶⁸³ Xanthaki, A., “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, Nazila G., Xanthaki, A., (eds.), *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005, p. 23.

Así, a nivel *interno* en lo que respecta al estado, el pueblo se define como la comunidad de individuos sometidos al ordenamiento jurídico, la ciudadanía, frente a las instituciones que hacen efectivas las normas, pero a nivel *externo*, el estado *representa* a esa ciudadanía frente a otros conjuntos de ciudadanos, que nada pueden saber sobre sus particulares o heterogéneas características étnicas o culturales ni sobre las discusiones internas acerca de los vínculos de solidaridad, por lo que esa ciudadanía, para terceros, se asimila también a “pueblo”. Y así, sabemos, se usa también en el lenguaje corriente, identificando el pueblo con los nacionales que un estado que, se presupone, legítimamente representa, y las acciones del pueblo con las acciones exteriores políticas y diplomáticas del Estado.

Por otro lado, la reificación de la entidad del pueblo en cuanto estado provee una seguridad de identificación de los miembros del “pueblo”, una identificación débil en otras acepciones de “pueblo” (los tungusianos son, si los definimos como la reificación del estado, los nacionales de Tungusia, ni uno más ni uno menos). La definición étnica o cultural de los tungusianos es mutable, histórica, sujeta a vaivenes ideológicos, inaprehensible y vulnerable a la manipulación de las élites (¿son los que hablan tunguso?, ¿y los mestizos?, ¿hasta qué grado?). Y esto es válido, con matices sobre derecho de la nacionalidad sobre los que no nos extenderemos aquí, tanto a nivel interno como externo.

La idea de estado como reificación jurídica del “pueblo” puede ser considerada una idea que, por un lado, alienta el ideal nacionalista, convirtiendo la estatalidad en fin último de un pueblo etnoculturalmente definido –y cualquier otro acomodo, una mera eventualidad en un tránsito histórico marcado por una situación particular o intereses puntuales-, de manera que el pueblo etnocultural sólo en el estado nación estará en situación de igualdad con otros pueblos.

Sin embargo, por otro lado, esta idea de reificación jurídica pone coto y freno, paradójicamente, a ese mismo ideal nacionalista. Esto es porque, mientras que el ideal nacionalista es, precisamente, un ideal de la imaginación, mutable con el los vaivenes ideológicos sobre el “deber ser”, el estado “es” una institución jurídica sometida a sus propias normas internas y al Derecho Internacional. Ese sometimiento al Derecho Internacional en cuanto norma externa *protege* al estado frente al ideal nacionalista, que como movimiento teleológico puede amenazar su integridad territorial y los derechos de los individuos que viven en un determinado territorio si sus características etnoculturales no coinciden con el ideal nacionalista⁶⁸⁴. Los estados en cuanto reificación de pueblos tienen una presunción de su carácter de pueblo frente a las disquisiciones ideológicas, manipulables y mutables del nacionalismo sobre las características etnoculturales o prepolíticas de una determinada comunidad. Así, respetar responsablemente el estado democrático en cuanto reificación de pueblo es respetar un principio de legalidad, imperativo *a priori* que el nacionalismo irrespete a menos que sea coincidente con sus intereses. Por eso el nacionalismo desprecia el estado como institución a menos que sea

⁶⁸⁴ Recordemos cómo, por ejemplo, la Anschluss Österreichs y la invasión de los Sudetes estaba fundamentada ideológicamente en el artículo 1 del Programa del NSDAP, que proclamaba el derecho de autodeterminación del pueblo alemán, concebido naturalmente como un derecho ilimitado frente a las fronteras de los estados.

el propio, ya sea alcanzado o como fin. El estado entendido como reificación del pueblo puede alejarlo también, digamos, del terreno de los ideales de la imaginación que supone el ideal nacionalista y lo convierte en un ideal de la razón, una entidad jurídica sometida a unas normas que la ideología, por definición, no tiene. Desde el punto de vista nacionalista clásico, naturalmente, considerar el estado como reificación de un pueblo es una falacia que sólo sirve como excusa de opresión para los *otros*, a menos que el estado sea el coincidente con su propio ideal.

Así, el Relator Especial de las Naciones Unidas Aureliu Cristescu considera que el derecho de autodeterminación es aplicable *también* a los estados, en cuanto reificación soberana de pueblos para los demás miembros de la Sociedad Internacional:

“Los Estados –esto es, los pueblos constituidos como Estados- son los titulares de un derecho de igualdad y autodeterminación, y no pueden ser privados de ello porque hayan formado un Estado independiente; esto significa que tales pueblos tiene la libertad de elegir sus instituciones, llevar sus asuntos domésticos y extranjeros libremente y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. El objeto del ejercicio del derecho de autodeterminación es alcanzar la total soberanía y completa independencia, y todos los Estados deberían tratar de asegurar que los pueblos que han ejercitado este derecho puedan elegir vivir bajo un régimen que es verdaderamente soberano y totalmente independiente, ya que solo entonces puede ser alcanzado el fin de la igualdad soberana de los Estados”⁶⁸⁵.

Para Cristescu, hemos de reiterar, que se aplique a los estados, no significa que no haya de aplicarse también a pueblos y naciones, como veremos un poco más adelante, una compatibilidad que, bajo su punto de vista, es tan posible como deseable.

5. Territorios no autónomos, territorios fideicometidos, pueblos dependientes, países y pueblos coloniales -

Si hay un titular del derecho de autodeterminación en el que hayan convenido la gran mayoría de doctrina y estados son, sin duda, los pueblos coloniales y sometidos a ocupación extranjera. Recordemos que el sistema de las Naciones Unidas de la Segunda Guerra Mundial nació procurando conciliar, por un lado, la protección de la integridad territorial de los estados miembros de la Sociedad Internacional frente a los excesos del nacionalismo primordialista, que había demostrado ser un peligro para la paz mundial, así como prevenir la guerra de conquista, prohibida por el Derecho Internacional con, al mismo tiempo, la vocación de acabar con el colonialismo.

Los pueblos coloniales, en cuanto pueblos titulares del derecho de autodeterminación, han recibido diferentes nombres. El artículo 73 del Capítulo XI de la Carta contiene la “Declaración relativa a territorios no autónomos”, que son descritos como “pueblos” que no han alcanzado “todavía la plenitud del gobierno propio”. Además, el artículo 75 de la Carta prevé el establecimiento de un régimen internacional de administración para la administración y vigilancia de los denominados “territorios fideicometidos” (en la actualidad, los once territorios en fideicomiso han alcanzado su autodeterminación mediante la declaración de su independencia o la libre asociación con otros Estados).

⁶⁸⁵ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 42

La mencionada Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 1960, que contiene la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, se refiere a los mismos territorios no autónomos. En el título, vemos, se mencionan “países y pueblos coloniales”, y el art. 1 deplora la situación de los pueblos sujetos a “subyugación, dominación y explotación extranjeras”, el art. 4 promueve la independencia completa de los “pueblos dependientes” y el artículo 5 menciona los “territorios en fideicomiso y no autónomos y todos los demás *territorios*⁶⁸⁶ que no han logrado aún su independencia”.

“Territorios no autónomos”, “pueblos dependientes”, “países y pueblos coloniales”, son distintas expresiones para referirse a los mismos pueblos sujetos a dominación colonial o extranjera. Ya hemos descrito, en §3.3.4, que por “colonialismo” o “imperialismo colonial” podemos entender, además de un período histórico relacionado con un sistema imperial de gobierno y de legitimidad del poder, un tipo concreto de relación político-jurídica de subyugación, prohibida por el Derecho Internacional independientemente del período histórico. También hemos concluido que para considerar un pueblo como colonial debemos encontrarnos ante una clara separación social y jurídica de al menos dos entes delimitados bajo un mismo poder (imperial): metrópolis y colonia o colonias, es decir, la existencia de una perfecta delimitación territorial y jurídica *a priori* del *self*, del sujeto al que se refiere el prefijo “auto”, cualquiera que sea el criterio seguido para tal delimitación, y que esta delimitación tenga una proyección territorial. Esta separación debe además reflejar una situación de clara, manifiesta discriminación jurídica y, eventualmente, continuada opresión económica y/o social de uno de los entes (metrópoli) respecto a los demás (colonias). Aunque no exista opresión económica la discriminación puede manifestarse simplemente al discriminar a los habitantes del territorio no autónomo no permitiendo participar en los procesos democráticos de representación política.

El proceso de descolonización se produce mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación que conlleva: a) la independencia política, b) la integración dentro de un poder administrativo o dentro de otro estado, o c) mediante el establecimiento de un estatus de libre asociación (optaron por esta opción las Islas Cook y Niue, asociándose a Nueva Zelanda, Islas Marianas del Norte y Puerto Rico, asociándose a los Estados Unidos).

El proceso de descolonización ha sido considerado como uno de los grandes éxitos de las Naciones Unidas: “Cuando se establecieron las Naciones Unidas, en 1945, 750 millones de personas —casi una tercera parte de la población del mundo— vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. En la actualidad, menos de 2 millones de personas viven en esos territorios”.⁶⁸⁷

⁶⁸⁶ Observemos que se mencionan “territorios” y no “pueblos” definidos étnica o culturalmente como titulares.

⁶⁸⁷ De la página oficial de las Naciones Unidas. <http://www.un.org/es/decolonization/history.shtml> Acceso enero 2014.

Según el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas –también conocido como Comité Especial de los 24-, creado en 1961 para controlar e impulsar el proceso de descolonización, quedan 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización⁶⁸⁸.

Además de los territorios no autónomos, existen para algunos autores ciertos “territorios dependientes” que, por diversos motivos, ni son soberanos ni están integrados plenamente en el estado que los administra, en igualdad de condiciones que otros territorios, pero que no están incluidos ni en las listas de territorios no autónomos ni como estados libres asociados, ni tampoco como fideicomisos –son territorios externos asociados, territorios y colectividades de ultramar, territorios no incorporados y no organizados, etc.- pero su clasificación cae en la complicada disputa sobre la organización territorial de los estados, que es parte de la soberanía de los mismos. Por ello, no entraremos en esta polémica clasificación que, no estando reconocida en la Carta de las Naciones Unidas, existe fuerte presunción a favor del principio de soberanía y organización territorial interna de los estados.

Agotada la clasificación, concluyamos que los pueblos bajo ocupación extranjera, fuera de la clasificación de Territorios no autónomos, pueblos que deben poder ejercer sus derecho de autodeterminación, se refieren a estados con fronteras reconocidas internacionalmente que han sido unilateralmente violadas por uno o más estados, no son considerados jurídicamente colonias. Es el caso de los Territorios Ocupados de Palestina (como se denominan en la Resolución 2426 de 1967 del Consejo de Seguridad), que no son considerados jurídicamente colonias israelíes, sino territorios bajo ocupación extranjera, independientemente de la legitimidad de tal ocupación militar, que no trataremos aquí.

6. “Pueblo” como clase -

Por “pueblo” también entendemos generalmente, en su sentido habitual y corriente, a la *mayoría* de la población de un determinado territorio. Pero también es habitual y corrientemente compartida la conocida observación de Aristóteles que vincula empíricamente la dimensión numérica de la mayoría, independientemente de su etnicidad y contexto histórico o cultural, con los recursos económicos. En su *Política*, el estagirita asevera:

“(…) Porque los ricos constituyen en todas partes la minoría, como los pobres constituyen dondequiera la mayoría. Y así, las diferencias indicadas más arriba no existen verdaderamente. Lo que distingue esencialmente la democracia de la oligarquía es la pobreza y la riqueza”⁶⁸⁹.

La taxonomía política de Aristóteles se basa en dos criterios: el número y su interés por el bien de la *polis* en su conjunto. Los sistemas que velan solo por el interés propio son los corruptos⁶⁹⁰. Teóricamente, puede darse democracia (en sentido aristotélico) con una

⁶⁸⁸ Samoa Americana, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Polinesia Francesa, Gibraltar, Guam, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, Tokelau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Sáhara Occidental

⁶⁸⁹ Aristóteles, *Política*, Capítulo V.

⁶⁹⁰ i.e., tiranía, oligarquía, democracia, en oposición a monarquía, aristocracia, politeia.

mayoría de la población rica, pero no se da en la práctica. Así el *demos* de la democracia aristotélica (en oposición a *politeia*) no sólo hacía referencia a la mayoría de los miembros de una comunidad, sino a una comunidad de individuos sometida a unas circunstancias concretas, una mayoría más pobre que la minoría, y también menos educada, vulnerable al ímpetu de las pasiones. Pero no era la vulnerabilidad al ímpetu lo condenable sino dejarse llevar por él, es decir, el triunfo del interés de una parte por encima del interés general, que es tanto como el triunfo de la pasión sobre la razón. Así, la *politeia* se diferencia de la democracia por el interés general y el ejercicio de la razón virtuosa. Por ello, no consideraba que el gobierno de la mayoría fuese, necesariamente, *mejor* que otros tipos de gobierno.

En la Antigua Roma, el *populus*, hemos visto cuando citábamos a Cicerón, no hacía referencia a esta acepción. Como explicaba Justiniano:

“la plebe difiere del pueblo como especie de un género: se entiende por pueblo el conjunto de toda la ciudadanía, incluyendo también a los patricios y senadores: el resto de la ciudadanía excluyendo senadores y patricios es conocido por el término plebe”⁶⁹¹.

Tito Livio, en su Historia, relataba que: “el cónsul Apio afirmó que el tribuno no tenía derecho sobre nadie excepto sobre los plebeyos, pues no era magistrado del pueblo, sino de la plebe; que ni a la propia plebe puede expulsa en virtud de su autoridad, según la costumbre de los antepasados, puesto que su texto es el siguiente: si os parece bien, retiraos, quirites”. Discutiendo sobre derecho podía fácilmente desconcertar con menosprecio a Letorio”⁶⁹², una escena que indica, no sólo la diferencia que se marcaba entre *populus* y *plebs*, sino el mismo desconcierto que la distinción jurídica podía causar entonces, tal y como puede causar hoy en día.

Recorrer la historia de la antigua Roma nos permite apreciar el proceso de consolidación de los diferentes grupos sujetos a diferentes condiciones económicas en grupos con diferentes estatus sociales. Es cierto que los patricios –sólo ellos podían ocupar el Senado y llegar a ser cónsules, gozaban de *ius suffragii*, *ius honorum*, *ius militae*, etc.- justificaban sus privilegios en su noble origen en cuanto descendientes de las treinta curias primitivas, pero la estratificación económica regía toda la sociedad y la desigual distribución de recursos, los conflictos. La orden de los équites tenía su origen en las centurias formadas por los hijos de hombres libres que tuvieran las más grandes fortunas, elegidos de entre los más ricos, según orden del sexto Servio Tulio. La orden ecuestre se consolidó en clase propia con diferentes privilegios. A su vez, la asignación de determinadas actividades a la clase les ayudó a enriquecerse –por ejemplo las *societates publicanorum* mineras eran generalmente dirigidas por ecuestres-. Por último, la plebe no sólo era una parte del pueblo, una parte con menos recursos, sino también con diferentes –menos- derechos. Así se ha convertido en clásico ejemplo de lucha interna entre partidos de un mismo estado, representando diferentes clases con diferentes intereses económicos, la pugna entre el partido de los populares dirigidos por los hermanos Tiberio

⁶⁹¹ Justiniano, *Instituciones*, Lib.1. Tit 2. Par 4: “Plebs autem a populo eo differt, quo species a genere; nam appellatione populi universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis et senatoribus: plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur”.

⁶⁹² Tito Livio, Historia. *Los orígenes de Roma*. Akal, Madrid, 1989 (ed. 2000). Libro II, 56- 236

y Cayo Sempronio Graco y el partido de los optimates entre los años 133 a. C. y 121 a. C.

En el fundamento del concepto de clase está la distribución primaria de: a) recursos económicos, b) derechos y privilegios y c) funciones o tareas, en amplios grupos dentro de una sociedad –como los sistemas de castas-, y la adscripción involuntaria y apriorística de los individuos a esos grupos de desigual distribución. Por tanto, en principio y sin entrar en consideraciones adicionales, las fuerzas externas a la voluntad del individuo son las que condicionan la clase.

El “pueblo”, bien sabemos todos, en su sentido corriente, se ha usado también para referirse a la *plebs*, a las clases con menos recursos económicos, menos derechos o ningún privilegio, o funciones o tareas sociales consideradas más bajas. Las revoluciones liberales se concentraron en la abolición de derechos y privilegios, así como en la predeterminación del individuo para realizar una determinada tarea o función.

Con ardor revolucionario y sin votación previa, Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, espetó al Marqués de Dreux- Brézé el 23 de junio de 1789, refiriéndose al rey, que: “¡Vaya a decir a su señor que estamos aquí por la voluntad del *pueblo*, y que no saldremos sino por la fuerza de las bayonetas!”. Poco después, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 proclama la igualdad de derechos en nombre del “pueblo”; “Los representantes del *pueblo* francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos...”. Las revoluciones liberales no daban respuesta, sin embargo, a la adscripción involuntaria de los individuos a las fuerzas socioeconómicas, base de las críticas socialistas posteriores.

La crítica marxista, fuertemente influenciada a este respecto por Aristóteles, parte del mismo punto que aquella constatación que tan vehemente expuso el estagirita: en todas partes los pobres son los más y los ricos los menos. Esta conclusión de su análisis histórico junto con la concepción de clase como adscripción involuntaria a fuerzas externas, lleva a Marx, Engels y a tantos pensadores socialistas y comunistas a criticar las revoluciones liberales como insuficientes y/o meramente formales: tras las revoluciones los individuos todavía están adscritos involuntariamente a grupos, clases, que son distintamente afectadas por una desigual distribución de recursos, aunque formalmente se haya acabado con la distinción por castas o privilegios.

En el análisis marxista las clases persisten históricamente en todo lado. Como defendiera Aristóteles, sólo cambia su forma con el contexto concreto; en la sociedad capitalista, la clase obrera se opone a la burguesía y los terratenientes que controlan los medios de producción. Del mismo modo que el conde de Mirabeau no necesitó haber sido elegido para considerarse parte y portavoz del “pueblo” en la constatación de la percibida existencia de grupos de hombres iguales con diferentes privilegios y derechos, los marxistas se adscriben a un grupo o clase, autorreferenciada, el pueblo, frente a otro que esta igualmente sometido involuntariamente a la fuerza de las condiciones materiales del sistema capitalista. En este contexto, es el más común el uso terminológico de “pueblo”

como identificación con las clases proletarias y campesinas, las oprimidas por el sistema capitalista en los textos socialistas y comunistas, pero también para hacer referencia al conjunto de los ciudadanos, todos, una vez que la clase autorreferenciada se reifica a través de su instalación en el poder de un estado a sí mismo denominado socialista o comunista conforme a la ideología marxista.

La coincidencia entre los autores marxistas de enfocar su preocupación en el “pueblo”, como clase proletaria, no llevó a una coincidencia de opiniones en torno al titular del derecho de autodeterminación. Al incidir en la importancia de las fuerzas materiales en la definición de grupos humanos, el enfoque etnocultural de “pueblo”, como el de los nacionalismos decimonónicos, perdía mucho de su sentido, es más, se asociaba fuertemente al otro, es decir, a los intereses de la clase burguesa apoyada en el nacionalismo para consolidar su poder e intereses.

La aproximación casuística de Marx y Engels a los conflictos nacionales se transformó posteriormente en agrias disputas al intentar establecer una regla constante o una interpretación unívoca de la autodeterminación, como observamos aquella clásica actitud sostenida entre Lenin y Rosa de Luxemburgo, Kokoshkin y otros.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, es muy importante observar que estos autores reservaban el término “pueblo” para la acepción socialista no para la etnocultural del término. Para la acepción etnocultural reservaban entonces comúnmente el término “nación” o “nacionalidad” (aunque entre nosotros “nacionalidad” ha sido tradicionalmente utilizada en el sentido de ciudadanía, no la democrática sino la adscripción a un estado). Por eso Lenin no habla de autodeterminación de las pueblos (народ) o gentes (люди) sino de autodeterminación de las naciones (нация), -véase “la autodeterminación de las naciones” de 1914-, tal vez para dejar claro su diferencia con la definición marxista de pueblo y concentrarse en el problema identitario entocultural. Aunque es cierto que, más adelante, los términos acabaran confundándose igualmente. La traducción del texto de Lenin 1914 en serbocroata fue “O pravu *nacija* na samoopredeljenje”, aunque en Yugoslavia se utilizaría “pravo *naroda* na samoopredeljenje”. Al fin y al cabo, el adjetivo “internacional” se traduce como международный, entre pueblos o gentes y entre naciones. Así la autodeterminación de Lenin se ha traducido en castellano como respecto de las “naciones”, coadyuvando a la acepción de nación como nacionalidad o pueblo etnocultural, y no como estado, dejando “pueblo” en sentido de clase. Y es que Lenin taxativamente negó entender autodeterminación como la autodeterminación de clase, y especificó referirse a pueblo o nación en sentido etnocultural; sólo más tarde se extendería masivamente la metonimia en el discurso comunista, toda vez que triunfó la visión particular de Lenin y Stalin.

Sin embargo, hay otra importante idea que fue reforzada por la influencia de este acercamiento a la relación entre pueblo, clase y sus reificaciones en estados. Me refiero a los siguiente: al tratar las colectividades humanas como cuerpos orgánicos monolíticos, tal vez por economía del lenguaje, tal vez por la agilidad y brío del lenguaje político, es común encontrarse con el recurso lingüístico de la “personificación”. El mismo Lenin usa extensamente, como tantos otros, el recurso del divorcio para referirse a la secesión y

menciona una cita de Goldblatt⁶⁹³: “...si Polonia no quiere contraer matrimonio legal con Rusia, hay que dejarla en paz”.

Una particular aplicación de la teoría general marxista a colectivos “personificados” permitió la extensión de la teoría o teorías de la dependencia, durante la segunda mitad del siglo XX: ya que los estados eran como personas, una teoría de personas podía ser aplicada a una teoría de estados. La percepción de mayor globalización junto con el nacimiento de los nuevos estados ex coloniales fortaleció una sencilla comparación que podría resumirse como sigue: “al igual que dentro de los estados existían básicamente dos clases, explotadores (burgueses y terratenientes) y explotados (obreros y campesinos) en lucha dialéctica, a nivel internacional existían estados explotadores (el centro) y estados explotados (la periferia)”.

Así, podemos observar la evolución entre el marxista “¡trabajadores del mundo uníos!”, pasando por la reflexión leninista, para quién la conexión indisoluble entre el “pleno derecho de todas las naciones a la autodeterminación; por otra parte, (...) la unidad internacional de su lucha de clase” como “única directriz acertada de política proletaria de clase en el problema nacional” conducía a una especie de “¡pueblos (o estados) trabajadores del mundo uníos!” de las teorías de la dependencia, que exhortan a los estados periféricos a unirse frente a los explotadores, esto es, el llamado “*neoimperialismo*”. El Grupo de los 77, el Movimiento de los No Alineados, nació, según mi parecer, fortalecidos en parte por esta comparación, trabajadores/estados explotados/perifera vs. burguesía/estados explotadores/centro.

Sin embargo, a pesar de su indudable conexión e inspiración marxista, a nadie se le escapa que esa “adaptación” de la teoría marxista a estados “personificados” modificaba el discurso marxista originario que se enfocaba en la clase y no consideraba a los trabajadores de un país explotadores de otros por su mera nacionalidad. Es cierto que, como recuerda la crítica de Popper, para Marx la explotación colonial era “un método de transmitir la presión económica al proletariado colonial, grupo que, tanto económicamente como políticamente, es más débil aún que el proletariado industrial interno”⁶⁹⁴. Tampoco la teoría del “imperialismo moderno” era en absoluto nueva y que “puede remontarse a más de ciento sesenta años atrás, hasta Adam Smith, que había dicho del comercio colonial que “contribuye forzosamente a mantener el cociente de beneficio”⁶⁹⁵. Pero la preocupación de Marx, y especialmente de Engels, se enfocó en lo que fue denominado “aburguesamiento del proletariado”, (también “personificando” en un sentido retórico: “pareciera que Inglaterra, la más burguesa de todas las naciones...”), pero la perspectiva era siempre de clase.

Por neoimperialismo o neocolonialismo, por supuesto, se entiende el tipo de explotación colonial conectada con el sistema de estructura económica mundial, haciendo referencia a las condiciones estructurales y materiales tomadas de la teoría marxista. El prefijo usado,

⁶⁹³ Vladimir Davidovich Medem (1879-1923), teórico del Bund (Unión General de Obreros Hebreos de Lituania, Polonia y Rusia). Marxista, apoyó a los mencheviques.

⁶⁹⁴ Popper, K., *La sociedad abierta y sus enemigos*, Paidós, Barcelona, (2ª reimpr) 2012., p. 360

⁶⁹⁵ Popper, K., *La sociedad abierta...*, op. cit., p. 360

“neo”, nuevo, tenía que ver con su percepción temporal asociada a un determinado período histórico postcolonial, en línea con todo el historicismo marxista. Así, aunque el concepto de “imperialismo moderno” es antiguo, las teorías de la dependencia aportaron una nueva perspectiva a partir del concepto de explotación marxista pero alejado de la teoría originaria. Es destacable que la teoría de la dependencia, con sus deficiencias, consiguieron poner en evidencia el funcionamiento de un mundo profundamente injusto, aportando una visión global y estructural de sus problemas.

En resumen, aunque por pueblo se ha entendido también “clase”, la autodeterminación de los pueblos no se ha entendido generalmente, ni siquiera en el discurso comunista, como la mera autodeterminación de los trabajadores, (reservado según diferentes autores a estados y pueblos definidos etnoculturalmente), aunque sí permitió la concepción de lucha contra el neoimperialismo, es decir, no sólo la invasión política, sino la sola explotación económica, como parte del contenido del derecho de los pueblos a la autodeterminación.

7.- “Pueblo” como conjunto de seres humanos identificables singularmente con derechos.

Es común considerar la autodeterminación de los pueblos reflejo de la autodeterminación de la persona, que hunde sus raíces en la libertad contractualista y en la autonomía de la voluntad kantiana. Una perspectiva pluralista se opone a la concepción de “pueblo” como un cuerpo orgánico monolítico, y tiene en cuenta las diferentes y mutables voluntades, intereses y perspectivas que lo componen. La concepción de mayoría como regla decisonal en democracia, por ejemplo, y no como una mayoría substantiva, está relacionada con esta perspectiva, porque asume que un individuo autónomo puede cambiar de opinión. Es decir, que puede ser mayoría y minoría consecutivamente y a la vez. Esta perspectiva pluralista puede ser relacionada con lo que Sartori, como hemos mencionado anteriormente, denominaba una concepción de pueblo entendido como mayoría temperada, o una mayoría que respeta a la minoría.

Prefiero incidir en que es un conjunto de seres humanos con derechos que una mayoría temperada simplemente para dejar claro que la mayoría es la regla decisonal, pueblo son todos. La distinción de esta concepción de “pueblo”, que en principio bien podría ser englobada en “pueblo” como ciudadanía, la hago en relación a lo que Louis Sohn denominaba “la revolución silenciosa”, ésa que se ha producido partir de la consagración en los años cuarenta de los derechos humanos universales.

El pueblo (ciudadanía) no es sólo un conjunto de personas sometidas a un poder (súbditos de un estado) o con capacidad legisladora de sí (demos), sino con derechos humanos por su naturaleza independientemente de su vinculación con el estado. Los seres humanos se hacen pueblo, si se quiere, pueblo humano cuando a sí se dan los derechos. La perspectiva pluralista de derechos humanos abre un nuevo/viejo campo en el que la consideración del pueblo como colectivo ha de respetar a cada individuo que lo compone. La “novedad” reside en la universalidad.

La universalidad de los derechos humanos que los desvincula de los estados/nación permite cambiar el sentido de una abstracción: si decimos que “el pueblo no puede pasar hambre”, *cada uno* de los humanos no ha de pasar hambre. En un estado de gobernanza global en construcción, el conjunto de los seres humanos empieza a considerarse pueblo a través del reconocimiento de sus derechos.

La “revolución silenciosa” de los derechos humanos es una carga de profundidad en los pilares mismos de la asunción de la radical multiplicidad de los pueblos, poniendo el énfasis en el común denominador, en lo humano, y en los pueblos como contingente situación o manifestación de la potencialidad de humanos iguales en dignidad.

Los derechos humanos aportan esa otra vía de fácil manejo como solución a los intereses teleológicos nacidos de la percibida multiplicidad de pueblos. No hace tanta falta hacer el ejercicio de buscar una norma universal definitoria de “pueblo” (la lengua, la raza, etc.,) ni saber qué es el pueblo o sus límites si, en definitiva, somos todos “pueblo”. En fin, aunque pensemos en satisfacer solamente los intereses propios, de nuestro pueblo, estos coincidirían con la regla universal y actuaríamos conforme al deber (si no por deber), lo que supone un grandísimo avance en relación al progreso que podemos esperar, no como cambio de la naturaleza humana, sino en las normas externas que nos hacen comportarnos conforme al deber.

Realizada esta larga pero necesaria introducción, puedo sugerir, según mi parecer, que para abordar el tema de las diferentes acepciones del término “pueblo” partamos de un núcleo común a todas ellas. Me refiero a pueblo como multiplicidad de seres humanos, conjunto de seres humanos. La relación entre estos y el criterio de establecimiento de la relación es lo que origina las distintas concepciones de “pueblo”.

Podríamos también decir que la variedad de concepciones de “pueblo” nace de la multiplicidad de facetas de la igual naturaleza humana. La proyección plural en un colectivo de cada una de las facetas del ser humano permite hablar de colectivos en plural. Cada colectivo mantiene una relación solidaria en relación con esa faceta determinada. Determinados colectivos reciben además el nombre de pueblo, en el uso corriente del término, parafraseando el criterio establecido en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Para que un colectivo reciba el término “pueblo” la faceta proyectada en su multiplicidad deber ser *políticamente relevante*.

Recordemos cómo Kant, al reflexionar sobre el estado civil, considerado como estado jurídico, lo fundaba en los tres principios *a priori* de libertad, igualdad e independencia, de cada miembro de la sociedad, *en cuanto hombre, en cuanto súbdito y en cuanto ciudadano*, respectivamente⁶⁹⁶.

Inspirados en su aproximación, podríamos decir que las distintas concepciones de pueblo nacen de las múltiples dimensiones de la misma persona, que se considera en plural proyectadas en la sociedad. Cuando considerados como conjuntos de individuos con la

⁶⁹⁶ Kant, I., “En torno al tópico...”, op. cit., pp. 95 y ss.

misma faceta que se autodeterminan, es decir, que deciden por sí, alcanzamos distintos resultados de redistribución de bienes y derechos. Estas múltiples dimensiones o facetas del ser humano en relación con sus consideración como pueblo han de ser políticamente relevantes.

Un mismo ser humano es, por ejemplo, al mismo tiempo, un sujeto cultural e histórico, en un lugar y tiempo determinado, es un sujeto sometido a una situación material o a determinados poderes fácticos, es también un ciudadano o súbdito de un estado, sometido a legislación internacional respecto de otros ciudadanos de otros estados y sometido a la ley del propio estado, siendo receptor de bienes y derechos, y es también co-legislador de tal estado si es democrático (demos), aspirando a codecidir sobre la mejor distribución de derechos y recursos. Cuando multiplicamos cada una de esas facetas por una multiplicidad de personas obtenemos diferentes significados de “pueblo”, que a su vez incidirán en las distintas definiciones del derecho de autodeterminación.

De igual manera que las distintas facetas de una persona conviven al tiempo en ella, y que cada una toma relevancia en diferentes momentos -recuerdo al hilo de esto el comportamiento análogo de las identidades múltiples de Amin Maaluf-, las distintas acepciones de pueblo conviven en nuestra vida política y social. A modo de ejemplo, recordemos las protestas iniciadas en Tuzla (Bosnia y Herzegovina) a comienzos de 2014; los manifestantes, especialmente en la Federación de Bosnia y Herzegovina, pero también en menor medida en República Srpska, protestaban contra instituciones de gobierno y políticos en nombre del “pueblo”. En un país donde la concepción prevalente de “pueblo” es todavía marcadamente nacionalista primordialista, el “pueblo” al que se referían los manifestantes nada tenía que ver con los “pueblos” representados por partidos nacionalistas. Tampoco se referían al “pueblo” / clase socialista, a pesar de algunas proclamas, sino al “pueblo” como conjunto de personas sometidas al mismo poder, al “pueblo” súbdito, pero también al pueblo “demos”, a la definición cívica de “pueblo”.

Así podemos bosquejar el siguiente esquema de las principales concepciones que tradicionalmente se le ha dado al término “pueblo”, las mismas que hemos visto antes, pero resaltando que nacen a partir de distintas dimensiones del ser humano, insistimos, políticamente relevantes:

Dimensiones de la persona. Persona como...	Multiplicidad de la dimensión proyectada en el colectivo. “Pueblo” significa:	La identificación de un pueblo, implica automáticamente la identificación de “los otros”. La libertad se invoca frente a la ilegítima de “los otros” en la faceta particular :
1.- Sujeto con realidad cultural particular, miembro de una comunidad étnica, religiosa, lingüística, cultural, acompañado de conciencia de pertenencia y sentimiento solidario en cuanto miembro.	<i>Grupo con características etnoculturales diferenciables</i> i.e étnicas, religiosas, culturales o lingüísticas diferentes de otros grupos y cuyos individuos manifiestan, aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad. También llamados “nacionalidades”,	Injerencia ilegítima de otros grupos identificables como diferentes culturas, etnias, religiones, lenguas etc., mayorías o minorías. Aculturización. Imposición de culturas ajenas, lengua, religión / ateísmo.

	<p>“naciones”.</p> <p>Si es un grupo dentro de un estado es también llamado “minoría nacional”, siguiendo la definición de Capotorti. Autores como Gudmundur Alfredsson subraya la importancia de distinguir “pueblos” de “minorías y “pueblos indígenas”, pues “pueblos” tienen acceso a instrumentos de Naciones Unidas diseñados para el proceso de descolonización⁶⁹⁷.</p> <p>En el mismo sentido se refiere a pueblos indígenas.</p>	
2.- Sujeto sometido a ordenamientos jurídicos concretos.	<p>2.1.1 Estado – Todos los individuos sometidos a las leyes de una unidad política conforman una comunidad identificable (nacionalidad) respecto a otros individuos sometidos a otros ordenamientos diferentes de otros estados (extranjeros). El estado es así la reificación identificable de un vínculo solidario y una metonimia jurídicopolítica en cuanto representación de una comunidad frente a otras.</p> <p>El estado tiene plena soberanía por lo que es además la unidad de redistribución de recursos de máxima relevancia, por lo que se ha distinguido distinguir entre: ciudadano de un estado ciudadano de otra unidad política subestatal ciudadano de otra unidad política supraestatal (como la ciudadanía europea) para determinar la diferencia entre autodeterminación interna (dentro del estado) y autodeterminación interna (dentro del estado).</p> <p>A los estados también se les ha llamado “naciones”.</p> <p>2.1.2 Conjunto de ciudadanos sometidos al ordenamiento de otras unidades subestatales o supraestatales legítimamente constituidas.</p> <p>2.1.3 Territorios no autónomos. Conjunto de ciudadanos en situación de colonialismo, sometidos a un ordenamiento jurídico dentro de un estado diferenciado de la metrópoli, discriminados jurídica y/o</p>	<p>2.1: (Autodeterminación externa)</p> <p>Otros estados. Invasión extranjera / intervención extranjera no legítima o no aprobada por el Derecho Internacional</p> <p>Otras unidades políticas de igual rango.</p> <p>Imperialismo.</p> <p>Colonialismo</p> <p>Otros ciudadanos de otros estados incluidas personas jurídicas, empresas multinacionales, etc.</p>

⁶⁹⁷ Alfredsson, G. “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples...”, op. cit. p. 171.

	económicamente respecto a otros ciudadanos.	
	<p>2.2 <i>Ciudadanía</i> (como ciudadanos vs. Estado)-</p> <p>2.2.1 Todos los individuos sometidos al mismo ordenamiento jurídico son identificables o distinguibles como comunidad del propio estado, responsable de ejecución de las normas y titular del monopolio de la violencia.</p> <p>2.2.3 En casos de debilidad del Estado, cuando mafias, bandas, cárteles, etc. , es distinguible la mayoría “pueblo” sometida a la opresión del poder ilegítimo</p>	<p>2.2: (autodeterminación interna).</p> <p>El Estado - Los ciudadanos conservan derechos frente al estado al que pertenecen.</p> <p>Otros grupos de poder que ocupan el lugar del Estado y</p>
3.- Sujeto legislador, que codecide sobre la distribución de derechos y recursos en su comunidad	<p><i>Demos</i>. El individuo es también, en democracia, y de acuerdo a la Constitución y las leyes, legislador directo o indirecto mediante representantes. El conjunto de personas, independientemente de su hecho cultural, que conforman una unidad política y se dan normas a sí mismas, conforma la nación en sentido cívico.</p> <p>El demos aspira en democracia a darse normas que incluyen la organización política interna, el establecimiento de políticas económicas, sociales y culturales sin injerencia de otros grupos.</p>	<p>(Autodeterminación interna #2, principio democrático)</p> <p>Tiranías, dictaduras.</p> <p>Oligarquías políticas.</p> <p>Otras fuerzas que afecten a la expresión de la voluntad y capacidad para autolegislar (terrorismo, violencia organizada, manipulación informativa, corrupción, etc.)</p> <p>Injerencia ilegítima de otros demos análogos.</p>
4.- Sujeto sometido a condiciones materiales, económicas y sociales.	<p><i>Clase trabajadora</i>. El pueblo en el sentido aristotélico (la mayoría de individuos de una unidad política, que además es, en toda sociedad, más pobre que la minoría)⁶⁹⁸, o marxista (la clase obrera, los desposeídos de los medios de producción).</p> <p>En el Antiguo Régimen, el Tercer Estado.</p>	<p>Poderes fácticos /económicos dentro del Estado. Oligarquías, los poderes fácticos, la burguesía, las élites económicas, y conceptos asimilables.</p> <p>Neoimperialismo y neocolonialismo económico de estados y multinacionales, a nivel global.</p> <p>El rey, la aristocracia –en sentido</p>

⁶⁹⁸ Aristóteles, *Política*, Capítulo V.: “(…) Porque los ricos constituyen en todas partes la minoría, como los pobres constituyen dondequiera la mayoría. Y así, las diferencias indicadas más arriba no existen verdaderamente. Lo que distingue esencialmente la democracia de la oligarquía es la pobreza y la riqueza”.

		medieval y moderno-.
5.- <i>Ser Humano</i>	<i>Humanidad</i>	<i>Nosotros mismos</i>

Si aplicamos un derecho de autodeterminación entendida como autogobierno –autolímite– a cada uno de estos grupos resultantes de distintas acepciones de “pueblo”, aunque sean sabemos coincidentes, se multiplican los resultados del contenido posible del derecho, como hemos visto en las relaciones que los distintos autores han propuesto en páginas anteriores:

Acepción de “pueblo”:	Contenidos derivados de autodeterminación aplicada a distintas acepciones de pueblo. La mayoría son coincidentes con contenidos propuestos históricamente del derecho de autodeterminación. El pueblo, al regularse a sí mismo tiene derecho a:
Comunidad étnica, religiosa, cultural, lingüística cuyos individuos manifiestan, aunque sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad entre ellos.	<p>Derecho de los miembros de la comunidad a regular su propio hecho cultural (su cultura, su lengua, su religión) o a disfrutar o ejercer sin injerencias su hecho cultural. Derecho a contar con instituciones estatales que permitan preservar y disfrutar de su hecho cultural. Incluye derechos de minorías, pueblo entendido como “minoría” dentro de un estado.</p> <p>Derecho de autogobierno limitado, derecho a establecer normas generales de la comunidad étnica, religiosa o cultural en áreas no directamente relacionadas con el hecho cultural, con o sin proyección territorial. (Puede o no afectar a otros fuera de la comunidad. Un derecho de minorías)</p> <p>Derecho de autogobierno, incluido a establecer una unidad política y ordenamiento jurídico propio. Proyección territorial. Algunos autores incluyen un derecho a la secesión. (Principio etnonacionalista. Afecta de manera relevante a miembros de fuera de la comunidad pero que ocupan mismo espacio temporal, territorial y político. Un derecho de mayorías.).</p>
Estados u otras unidades de organización políticas.	<p>Derecho de Estados a no injerencia ilegítima de terceros estados.</p> <p>Derecho de unidades políticas subestatales o supraestatales de no injerencia ilegítima por entes análogos.</p> <p>Integridad territorial de los estados y otras unidades políticas.</p> <p>Derecho de los Estados y otros estados a establecer políticas económicas, culturales sociales.</p> <p>Derecho de Estado a aplicar la distribución de recursos y derechos entre los individuos sujetos a su ordenamiento.</p>
Ciudadanía (i) sometida a ordenamiento jurídico y poder de unidad política	Derecho de ciudadanos a mantener un ámbito de libertad y privacidad frente al Estado propio, otras unidades políticas y terceros estados.
Clase trabajadora.	<p>Derecho de autogobierno de clase trabajadora. Autogestión, Socialismos, Comunismos.</p> <p>(La aspiración de coincidencia de los límites de la unidad con los de la clase implicaba históricamente la necesaria eliminación de otras clases, como la coincidencia forzada de los límites de la unidad política con una comunidad etnocultural implica la eliminación de otras etnias).</p> <p>Incremento de la igualdad material y de oportunidades de miembros de una unidad política.</p>
Ciudadanía (ii) Demos	<p>Principio democrático. Derecho de autogobierno de los miembros de una unidad política.</p> <p>Derecho de una comunidad de personas iguales y libres, independientemente de su hecho cultural, a establecer una unidad política solidaria y proveerse de seguridad y oportunidades de desarrollo, decidiendo por sí sobre la redistribución</p>

	de derechos y recursos sin injerencias externas y sin vicios de la voluntad internas.
--	---

Del mismo modo, concluiríamos, no respetar el derecho de los pueblos correspondiente a cada una de las acepciones resultaría en distintas terribles consecuencias. La ilimitada defensa de una concepción mina las demás. La ilimitada defensa de una concepción a pesar de otra cuando no está claro por qué concepción inclinarnos es origen de los más terribles conflictos: un exagerado derecho de un estado frente a pueblos sin derechos origina imperialismo, colonialismo; un derecho de pueblos que no respete estados origina guerras nacionalistas de anexión o secesión; un estado que no respeta a sus súbitos y legisladores es un estado tiránico, etc.

Así, no queda sino concluir que la concepción que hayamos de usar tiene que ser la más respetuosa con todas las posibles. Precisamente por no existir una definición de pueblo escrita en piedra ni otorgada mágicamente por los dioses, ni tampoco perfectamente distinguible por la razón sobre la que todos tengamos la misma visión, como hemos demostrado. Lo que sí distingue la razón es la evidente necesidad de evitar en lo posible el dolor y la guerra.

Es por ello que el Relator Especial Aureliu Cristescu (favorable, por otro lado, en cierto modo, a una visión más bien pro-estatalista), explica que las Naciones Unidas defienden prácticamente *todas* las opciones sin inclinarse claramente por una acepción única. Siguiendo lo dispuesto en el informe del Primer Comité de la Comisión I de la Conferencia de San Francisco, observa que: “Los documentos de la Conferencia de San Francisco sugieren que los autores de la Carta concibieron el principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos **como una sola norma aplicable a los Estados, naciones y pueblos**, dado que por “Estados” en el sentido internacional de la palabra son obviamente “pueblos”. Sin embargo, el término “pueblos” se aplica no sólo a Estados, sino también a otras entidades tales como naciones”⁶⁹⁹.

El hecho de que el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos se aplique tanto a Estados como a pueblos ha sido confirmado en muchas resoluciones adoptadas sobre la materia por la Asamblea General. Consecuentemente, los Estados están obligados a aplicar el principio en sus relaciones tanto con los demás Estados independientes como con los pueblos que todavía no se han constituido en los propios Estados independientes⁷⁰⁰.

Para concluir, pudiéramos reflexionar de parecida manera lo siguiente: Si cada una de las acepciones de “pueblo” puede ser relacionada con la multiplicidad de seres humanos definidos por una de sus facetas, ¿cuál es la multiplicidad de seres humanos sin tener en cuenta esas facetas o teniendo en cuenta todas ellas?, ¿no sería acaso también otra acepción de pueblo? Dos dificultades se presentan; en primer lugar, no es su uso normal, el ser humano multiplicado en todas y cada una sus facetas es, sencillamente, la Humanidad. La segunda, un pueblo, también se define por su multiplicidad, por su

⁶⁹⁹ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 2, p. 38, p. 39

⁷⁰⁰ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., pár. 266, p. 39.

pluralidad, existen pueblos, no uno sólo. También se define pueblo, como hemos visto, por sus antagonistas –gobernantes vs. pueblo, por ejemplo-.. ¿Quiénes serían esos *otros*? ¿y los antagonistas que lo definen? La ciencia define a la Humanidad en contraposición a otros géneros animales y a otros reinos vivientes, y la imaginación nos permite conceptualizarla en oposición a seres de otros mundos. Pero el aparente requerimiento de unicidad –decimos pueblos, en plural- no es igual al requerimiento de antagonista para definirlo. El antagonista del “pueblo” humano no es solo la naturaleza u otros seres, incluso seres imaginarios, es, ante todo, el “pueblo” humano mismo. El ser humano enfrentado, en última instancia, consigo mismo, ante el reto de distribuir de manera justa recursos y derechos.

En definitiva, cada uno de nosotros, además de ser: sujetos con una cultura, lengua, etnicidad, religión, concretas, sujetos sometidos al poder de un unidad política, sujetos legisladores, sujetos sometidos unas condiciones socioeconómicas (que en su multiplicidad dan las distintas acepciones de pueblo)... también somos (fundamentalmente) seres humanos, sujetos titulares de derechos humanos. Si la proyección en la multiplicidad de cada una de las facetas que representan las demás acepciones de pueblo tienen que ser respetadas todas ellas, como dice Cristescu, (como una sola norma aplicable a los Estados, naciones y pueblos), nada nos impide teóricamente, parece evidente, incluir esta otra dimensión del ser humano (sujeto de derechos humanos) proyectado en su multiplicidad como pueblo humano, y que sea igualmente respetada la relación, sin que el reconocimiento de la autodeterminación de una acepción menoscabe teóricamente otra acepción.

Asimismo, y de manera complementaria, podemos argumentar lo siguiente: si el derecho de autodeterminación de los pueblos es considerado, como hemos sostenido, un *derecho humano*, los titulares, en línea de la argumentación presentada por Xanthaki, han de ser también humanos. Es decir, que podemos debatir sobre la definición de pueblos, pero habrá una línea no traspasable que es la humanidad de esos colectivos. Y nada impide defender, al mismo tiempo, la autonomía o autodeterminación individual de la autodeterminación de los pueblos, toda vez que los colectivos están compuestos de individuos. Aunque la definición positiva es, como hemos visto, la definición negativa de pueblo que ofrecen los derechos humanos, es sumamente interesante, pues cualquier derecho que se asocie a cualquier definición de un colectivo no puede realizarse de manera ilimitada contra los derechos humanos individuales de cada elemento que compone el colectivo.

Así, queda de otro modo razonada la relación entre la adecuada concepción del derecho de autodeterminación no sólo como derecho humano, sino en función del respeto de todos los derechos humanos individuales y queda encontrado aquí el punto de unión entre la/s definición/es de pueblo con el núcleo de certeza del contenido del derecho de autodeterminación que hemos descrito en §3.3.6., constituyéndose el marco de derechos humanos como único marco legítimo para la adecuada concepción del derecho de autodeterminación.

§3.4.2 Sujetos pasivos y deberes derivados del derecho de autodeterminación

La cuestión de los sujetos pasivos responsables de cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de los pueblos a la autodeterminación difiere del problema de la titularidad, pero se relaciona con él también a través de las múltiples definiciones de pueblo. Sin embargo, como sucede con otros derechos colectivos -lo vimos también en el caso del derecho de los pueblos al desarrollo-, aunque siga vivo el debate en torno a los titulares, es ampliamente aceptado que son los estados los responsables principales de cumplir positivamente con el derecho de los pueblos a la autodeterminación, en sus distintos sentidos independientemente de consideraciones sobre su contenido y titularidad. Y es que al fin y al cabo, todavía hoy son los estados sobre los que recae el gran peso de hacer cumplir con derechos humanos internacionales.

Por otro lado, recuerda Cristescu que, a su vez, “la aplicación del principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos es requerida por el principio de cumplimiento en buena fe de las obligaciones asumidas por los estados. Este principio es la piedra angular de todo el edificio del Derecho Internacional contemporáneo y su aplicación es un prerequisite vital para el establecimiento de la confianza mutua entre Estados. (...)”⁷⁰¹.

Tampoco está claro que los estados sean todos requeridos en igual medida cumplir del mismo modo. El deber general de respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos es igual para todos. Pero las obligaciones que se derivan de las distintas posiciones en relación con ese deber son diferentes. Así, aunque el Derecho Internacional obligue a todos los estados por igual a abstenerse de conductas coloniales o imperialistas, la Carta de las Naciones Unidas establece obligaciones específicas para los estados de los que dependan territorios no autónomos reconocidos por las mismas Naciones Unidas. El artículo 73 de la Carta establece que:

“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:

- a) a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;
- b) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;
- c) a promover la paz y la seguridad internacionales;
- d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo;
- y
- e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier

⁷⁰¹ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 158. p. 24

otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta”.

Esta norma es completada con el artículo 74, que establece que la política con respecto a estos territorios “no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial”.

Del mismo modo, la Carta de Naciones Unidas establece obligaciones específicas en relación con el régimen internacional de administración fiduciaria (artículo 75 y siguientes) sobre las que no nos extenderemos por no quedar hoy “territorios fideicometidos”.

Así, son identificables en la Carta ciertas obligaciones perfectas en ella contenidas como son identificables sus sujetos pasivos. También la obligación imperfecta de promocionar en la medida de lo posible la autodeterminación de los pueblos es sujeta a amplio consenso, como lo es la obligación inexcusable de abstención de conductas imperialistas y colonialistas por parte de los estados.

A pesar de estos consensos, innegablemente existen ciertas dificultades conceptuales en torno a los deberes de los Estados relacionadas con las disquisiciones en torno al contenido y los titulares del derecho de autodeterminación. La tensión del principio del derecho de autodeterminación al que se refería Summers, y que hemos visto con detalle anteriormente —esa tensión interna de la norma entre el principio nacionalista y el derecho de los estados—, es buen ejemplo de ello.

Hoy por hoy, el sistema internacional pretende ser un sistema de estados jurídicamente iguales en derechos, y siendo ellos los responsables del derecho de autodeterminación, no es posible interpretarlo de manera que sea causa de su propia destrucción. La solución de los eventualmente antagónicos intereses de estados y pueblos etnoculturalmente definidos ha de conjugarse, de manera respetuosa con la prohibición del imperialismo y el colonialismo, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados. Esto sirve de igual modo con las otras definiciones de “pueblo” que hemos analizado anteriormente.

El hecho de que bajo la actual arquitectura de la Sociedad Internacional sean los estados tanto la principal unidad política de distribución de recursos y derechos como los principales responsables de hacer cumplir con los derechos humanos y con el derecho de autodeterminación, coloca la estatalidad en el centro del problema que nos planteamos, así como su control se presenta como último fin del deseo político y máxima aspiración de identificación de las distintas acepciones de “pueblo” que hemos descrito anteriormente, con las oportunidades y peligros que eso supone (pensemos en los peligros para los derechos individuales de la total identificación entre estado-nación cultural o estado-clase).

En resumen, el manejo y acomodo de minorías dentro de los estados, desde el punto de vista del Derecho Internacional, es responsabilidad principal de los estados, esperando que se respeten los derechos de las minorías de manera análoga a como esperamos que se respete el reto de los derechos humanos. Igualmente queda dentro del ámbito de soberanía de los estados la expresión democrática de la voluntad popular (pueblo-demos), la regulación de la adquisición y pérdida de la nacionalidad, la regulación de sus propios asuntos (pueblo-súbditos) o el diálogo de clases para incrementar la igualdad y justicia social (pueblo-clase). Incluso la autodeterminación de los pueblos aplicada a los casos de descolonización como expresamente se recoge en la Carta (pueblos-territorios no autónomos, fideicomisos), a pesar del tutelaje internacional, depende de la buena administración de los estados responsables. Incluso el respeto de la autodeterminación de la reificación jurídica de los pueblos con subjetividad internacional (pueblos-estados) está en manos de los estados mismos tal como es la arquitectura jurídica internacional, pero con las limitaciones, eso sí, del Derecho Internacional. Así, la regulación del respeto a la autodeterminación de los pueblos-estado no está asignada a cada uno de ellos singularmente sino a los estados en su conjunto, esto es, a la Sociedad Internacional. La integridad de los estados, reflejo de este principio, puede ser interpretada adicionalmente como respeto a la autodeterminación de los pueblos entendidos como estados. Así, velar por el respeto a esa integridad (salvo acuerdo claramente voluntario de todas las partes implicadas en un proceso de desintegración) es tarea del conjunto de estados de la Sociedad Internacional (independientemente de cómo se organice decisionalmente la voluntad de ese conjunto, hoy articulada a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

Aunque la responsabilidad principal es de los estados individualmente –*ad internum*– y de los estados en su conjunto –entre sí–, se entiende extendida esta responsabilidad a los demás miembros de la Sociedad Internacional, a las Organizaciones Internacionales como sujetos con personalidad jurídica propia, así como a los demás sujetos de Derecho Internacional. Naturalmente, esta responsabilidad será limitada por sus competencias, por lo que en general hablaremos de una responsabilidad entendida como obligaciones imperfectas de promoción, apoyo o defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos, en pleno respeto de la soberanía de los estados.

Una cuestión relacionada, que debatiremos en la tercera parte, es la interrelación de las obligaciones derivadas del derecho al desarrollo y del derecho a la autodeterminación, en cuanto procesos, particularmente en casos de desintegración y secesión. Es un problema que definiremos en su momento como problema del “*proceso de imperfectibilidad de obligaciones perfectas*”, con el que me referiré al problema de legitimar el proceso de conversión de las obligaciones perfectas que todo ciudadano tiene con sus compatriotas, organizados en un estado soberano, en deberes imperfectos de contribuir al desarrollo humano.

Concluymos esta sección, por tanto, con una breve reflexión en torno a la *eficacia* de la norma. Hasta ahora hemos analizado pormenorizadamente tanto la dimensión normativa (fundamentación jurídica) como la justificación de su legitimidad en su dimensión axiológica (fundamentación moral) del derecho de autodeterminación de los pueblos.

Completa el análisis del derecho de autodeterminación de los pueblos desde la misma perspectiva tridimensional que utilizamos para analizar el derecho humano al desarrollo, un análisis de la eficacia en el plano fáctico (fundamentación política).

La eficacia de la norma, a nadie se escapa, está profundamente relacionada con el hecho de que la responsabilidad fundamental de hacer valer el derecho de autodeterminación de los pueblos sea de los estados. La misma norma ha sido invocada y aplicada históricamente con diferentes resultados políticos, resultado de factores extrajurídicos, sociológicos, históricos, antropológicos, que aquí no se analizan, por lo que la trayectoria de su eficacia es variable. A esto se une el hecho de que las fronteras estatales dadas por legítimas con la aprobación de la Carta fueron establecidas históricamente de acuerdo a principios jurídico-políticos e ideológicos de lo más variados: hay fronteras establecidas durante el Antiguo Régimen, creadas bajo criterios imperialistas olvidados en el tiempo, o siguiendo doctrina liberales o amparadas bajo criterios socialistas o justificadas por aspiraciones nacionalistas, etc. Sin embargo, no debemos confundir los problemas de eficacia de la norma, su diferente aplicación en distintos casos fruto de un imperfecto sistema de gobernanza de la Sociedad Internacional y de las debilidades del Derecho Internacional con sus deficiencias siempre mencionadas, con la legitimidad de un relativismo radical.

Advirtamos que el relativismo radical y la casuística absoluta respecto a la aplicación del derecho de autodeterminación forman parte de la columna vertebral de alguna de las doctrinas debatidas, no de todas, y es característico, en particular, de la doctrina del nacionalismo primordialista, para cuyos defensores cada caso es totalmente diferente al anterior, como exige su clara orientación teleológica. La advertencia merece ser subrayada a pesar de lo obvio: si el criterio para la legitimidad de una unidad política es, digamos, la religión (y no la lengua, la raza, la voluntad) por ejemplo, y éste es un criterio legítimo para entender pueblo y no otros, como la clase o el demos, la única manera de evitar la universalización del principio y, por tanto, evitar aplicárselo a sí mismo, propiciando la posible disgregación de la propia unidad hasta el infinito –efecto Matrioska- o la invasión y la anexión por parte de otros estados, es apelar en el discurso a la singularidad absoluta de cada caso, en naturaleza e historia, con el único fin de hacer imposible cualquier generalización mas allá de los propios intereses, esto es para los defensores de esta doctrina, de la deseable coincidencia absoluta entre un ideal imaginario con unas características etnoculturales y la realidad de una unidad política conformada por personas que, inevitablemente, habrá de incluir mestizos e impuros. Pero ya conocemos los peligros de intentar hacer coincidir un ideal imaginario con la impura pero digna realidad: o por fuerza se modifican las fronteras o se “modifica” a los habitantes para que coincidan.

Así, nos adherimos en este punto a la reflexión del defensor del “universalismo blando” (*soft universalism*) Sten Schaumburg-Müller, para quien “los relativistas suponen, correctamente, que el Derecho está conectado con la cultura, pero, incorrectamente, que las culturas existen como fenómenos aislados y que existen como dados inmutables”⁷⁰².

⁷⁰² Schaumburg-Müller, S., “In Defense of Soft-Universalism: a Modest, yet Presumptuous Position”,
© Isidro García Mingo

Los relativismos niegan la universalidad y la posibilidad de emergencia de una identidad global, una identidad que, sin embargo, comprobamos que está, de hecho, en construcción. La identidad del humano universal, que fue distinguible para la razón ilustrada, que es titular de los derechos contenidos en la DUDH y en los Pactos es, además, un hecho político en construcción.

§3.5 El derecho de autodeterminación en la República Socialista Federal de Yugoslavia en su conformación, evolución y desintegración

En las próximas secciones examinaremos las distintas interpretaciones que se han dado al derecho de autodeterminación de los pueblos y cómo han repercutido en su efectiva aplicación en nuestro caso de estudio, como hicimos con el derecho humano al desarrollo. Esto nos permitirá no sólo profundizar en la reflexión sobre la eficacia de la norma de autodeterminación, sino proveer la base comparativa adecuada y completa en nuestro caso de estudio para ponerlo en relación con el derecho al desarrollo que analizamos anteriormente, y poder completar así la reflexión sobre el tema que nos ocupa, esto es, la relación del derecho de autodeterminación con el derecho al desarrollo.

Pudiera aducirse que un completo análisis de la eficacia de la autodeterminación como norma requeriría recorrer cómo se ha interpretado y/o aplicado la norma en la realidad iusinternacional, caso a caso, en cada rincón del planeta. Sin embargo, esta aproximación requeriría bibliotecas enteras y existen ya obras dedicadas específicamente a la cuestión. De esta objeción podría deducirse otra adicional, esto es, que corramos el peligro de realizar impropias generalizaciones sobre diversos aspectos de la eficacia del derecho de autodeterminación por enfocarnos en un solo caso de estudio sin referirnos a todos los casos del mundo. En defensa de esta posible objeción diré que, por un lado, como ya hemos visto, el ejemplo de la aplicación del derecho de autodeterminación en los Balcanes ha marcado el debate acerca del derecho, así como ha influenciado el estudio de las teorías de la identidad y del nacionalismo desde sus inicios (hemos visto como los más variados autores, desde J.S. Mill, Mazzini, Wilson hasta socialistas como Bauer o todos los especialistas contemporáneos han mencionado los Balcanes occidentales en sus consideraciones). Además, en la complejidad del caso de la creación, organización y desintegración de Yugoslavia han concurrido todos los grandes acercamientos teóricos recientes del problema de autodeterminación (sumándose a las consideraciones anteriores sobre la cuestión nacional, nacidas del acomodo de nacionalidades en el Imperio austrohúngaro y en el Imperio otomano en Yugoslavia, su implicación en el enfoque de los conflictos mundiales, y su situación en la Yugoslavia socialista), posiciones que han marcado profundamente la evolución del Derecho Internacional. Las más diversas posturas imperialistas, nacionalistas, socialistas, liberales, etc. han tenido su cabida y debate teórico en este complejo caso, por lo que podemos asegurar un amplio abanico argumental. Pero además de las distintas ideas, el catálogo de diferentes aplicaciones que han resultado en múltiples resultados históricos y políticos es también amplísimo, encontrando en los Balcanes todo tipo de ejemplos desde la formación y disolución de

imperios, hasta la conformación y disolución de estados socialistas, y liberales, pasando por desintegraciones, secesiones, etc. (una media docena de países nacieron de la desintegración de Yugoslavia produciendo una extensísima literatura doctrinal abarcando prácticamente todos los actuales puntos de vista existentes acerca del derecho de autodeterminación). Nuestro caso de estudio pues, no es un caso singular sino, en realidad, un conjunto de casos, en los que históricamente se han plasmado las distintas evoluciones y concepciones teóricas en torno a la autodeterminación, que ha inspirado ideas y que ha visto aplicarse en su suelo esas ideas. Como ha afirmado Raymond Detrez al estudiar el proceso de disolución de Yugoslavia, éste provee múltiples ejemplos de las varias maneras en las que el derecho de autodeterminación ha sido invocado como principio legal y moral por las diferentes comunidades nacionales así como el inconsistente acercamiento a la cuestión por parte de la comunidad internacional⁷⁰³.

Por ello, las conclusiones que saquemos no serán fruto de la generalización de un caso concreto sino de la reflexión de la norma del derecho de autodeterminación, apoyadas ejemplarmente en un caso de estudio complejo. El caso de estudio, como hicimos con el derecho al desarrollo, será nuestro bastón para apoyar las conclusiones que saquemos, para probar o testar las distintas conclusiones que vayamos obteniendo con el objeto de completar o de ayudarnos en este trabajo que, por otro lado, es eminentemente teórico.

Por ello, advierto también que, no siendo este un trabajo ni politológico ni histórico, ni monográfico sobre Yugoslavia, no entraré en un detalladísimo nivel descriptivo de los sucesos históricos como en otros trabajos históricos o políticos, pues es mi interés enfocarme en el debate de ideas relevantes en juego, con independencia de las múltiples formas que pudieran tomar. Es esta una decisión consciente, pues creo además firmemente que el ruido documental en el caso de Yugoslavia ha sido extraordinario –a menudo impulsado por evidentes intereses políticos– produciendo a menudo efectos muy perjudiciales de los que quisiera guardarme; por ejemplo, el debate sobre detalles de actos concretos de líderes nacionalistas en conflicto puede desviar la atención del hecho de que todo ellos participaban de un mismo sistema de pensamiento (más interesante para el objeto de nuestro trabajo) y aunque enfrentados políticamente en pos de diferentes fines, tenían más en común entre sí que con pensadores contemporáneos no primordialistas, liberales o socialdemócratas. Por ello, haré un repaso histórico lineal de la historia no exhaustivo sin detenerme en los conflictos que asolaron los Balcanes, centrándome sólo en los sucesos relevantes para ilustrar las distintas concepciones de autodeterminación que ya hemos visto anteriormente y mostrar cómo fueron aplicadas o entendidas en nuestro caso de estudio. Sirva esto como advertencia para quien pueda precipitadamente percibir una imagen de fragmentación en las secciones que siguen.

A pesar de la importancia que tuvieron los sucesos acaecidos en la región para la construcción de teorías imperialistas y nacionalistas, así como de la noción de autodeterminación con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como ya sucintamente

⁷⁰³ Detrez, R., “The Right to Self-Determination and Secession in Yugoslavia: A Hornets' Nest of Inconsistencies”, Coppieters B., y Sakwa R., (eds.), *Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective*, Oxford University Press, 2003, p. 112 y ss.

repasamos en §3.1.3, a efectos de lo que nos preocupa, la norma contemporánea de derecho de autodeterminación, trazaremos nuestro breve recorrido desde la Carta de Naciones Unidas, que es cuando se instauró el moderno principio del derecho de autodeterminación de los pueblos en el Derecho Internacional contemporáneo hasta la actualidad. Veremos en las próximas páginas las distintas maneras relevantes para nuestro tema de enfocar y aplicar el derecho de autodeterminación en relación con nuestro caso de estudio.

Por último, debido a lo amplísimo del tema, en la última parte de esta sección, cuando me centre en las interpretaciones que se dieron al derecho de autodeterminación más cercanas en el tiempo en relación con los debates en torno a desintegración, secesión y sucesión en el caso de los territorios que conformaron Yugoslavia, iré mostrando al mismo tiempo cómo estas interpretaciones fueron dadas en su mayoría fuera de un marco amplio de derechos humanos y, concretamente, sin tener en cuenta las interacciones con el derecho al desarrollo como derecho humano, derecho reconocido e impulsado por la propia Yugoslavia.

§3.5.1 Génesis y evolución de concepciones antagonistas del derecho de autodeterminación durante el período de entreguerras

Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, las distintas aproximaciones al derecho de autodeterminación, sostenidas desde las más diversas posiciones, como la de los partidarios de una visión liberal de la nación como la de Wilson, los partidarios de una visión leninista hasta los defensores de tesis como las primordialistas sostenidas por los nacionalistas fascistas y nacionalsocialistas, estuvieron en el corazón ideológico de las partes en conflicto. Estas diversas visiones encontraron también su reflejo, como no podía ser de otra manera, en los desarrollos políticos en Yugoslavia. Así, encontramos, por un lado, que la salvaguarda del derecho de autodeterminación fue esgrimido como uno de los argumentos por los nacionalsocialistas alemanes para intentar unificar a los miembros de la nación, entendida primordialmente, presentes en distintos estados, así como para justificar un pretendido derecho al *Lebensraum* conexo al derecho de autodeterminación. En la concepción nazi, el derecho a la autodeterminación y a un *Lebensraum* estaba igualmente relacionado con una lucha por la supervivencia vital del pueblo – *Lebenskampf*-, que, como resume el profesor de la Universidad de Trento Gustavo Corni, debía ser iniciada en primer lugar contra pueblos más débiles o inferiores, como los eslavos⁷⁰⁴. Además se encuentran argumentos parecidos entre los nacionalistas locales, y el mismo derecho de autodeterminación fue esgrimido por la resistencia contra la ocupación de Yugoslavia. Además, entre los distintos grupos de resistencia, la concepción del derecho de autodeterminación tampoco fue, como veremos, monolítica.

Permitámonos recordar, como telón de fondo, los acontecimientos históricos relevantes para la evolución de las distintas concepciones del derecho de autodeterminación en

⁷⁰⁴ Corni, G., “Volk, Nation, Rasse, in Theory and in Practise in National Socialism”, Henry Huttenbach, Francesco Privitera (eds.), *Self-Determination. From Versailles to Dayton. Its Historical Legacy*, Longo, Ravenna, 1999, p- 52

nuestro caso de estudio a partir del período de entreguerras. El Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos nació tras la Primera Guerra Mundial apoyado en el nacionalismo paneslavo presente en la región desde el siglo XIX y el nacionalismo yugoslavo, del que hiciera gala Gavrilo Princip durante su juicio por el asesinato de Franz Ferdinand y su esposa, ideales fortalecidos con la lucha común de los pueblos sometidos a los imperios otomano y austrohúngaro –en el que la amplia mayoría de los habitantes eran eslavos aunque no tuvieran representación en las esferas de poder como alemanes austriacos o húngaros–.

De hecho, definir las líneas diferenciadoras entre distintas nacionalidades o grupos identitarios no se percibía generalmente como una tarea ni tan urgente ni tan relevante en comparación con la tarea de luchar contra la subyugación imperial. Las fuerzas centrífugas que existían entre las diferentes aspiraciones de los distintos grupos identitarios eslavos eran con mucho superadas por el recuerdo de los regímenes imperiales y los nuevos peligros exteriores para minorías o nacionalidades etnoculturales (recordemos cómo en el Imperio austrohúngaro la amplia mayoría de los súbditos eran culturalmente eslavos en una posición de subyugación política). Por ejemplo, tras el colapso del Imperio austrohúngaro en 1918 se intensificó la crisis política entre italianos y eslavos residentes en Dalmacia impulsando a los croatas a buscar apoyo militar en los serbios. En Istria, en la ciudad de Pula, en un discurso pronunciado por Benito Mussolini el 24 de septiembre de 1920, el régimen se reveló como especialmente agresivo con los eslavos⁷⁰⁵. El nacimiento del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos no se produjo, por tanto, sin agrios debates acerca de cómo debía ser la relación entre los distintos pueblos o nacionalidades que habrían de conformar el nuevo estado ni su modelo de administración y de gobierno.

De hecho, la Constitución de Vidovdan, aprobada por la Asamblea Constitucional el 28 de junio de 1921, fue fuertemente criticada por su carácter centralista y unitario, frente a quienes hubieran preferido un modelo confederal inspirado en el Imperio austrohúngaro. A partir de 1922 el territorio se organizó en treinta y tres unidades administrativas (*oblasti*), que no coincidían ni con divisiones anteriores ni con grupos étnicos o nacionales. A pesar de este intento de superar las divisiones políticas de índole nacionalista, el espectro político permaneció atado a la diversidad identitaria, y los miembros de los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional se mantuvieron distribuidos a lo largo de líneas étnicas de una manera evidente, más que agrupados en torno a otras tendencias ideológicas⁷⁰⁶.

El Partido Comunista de Yugoslavia, fundado como tal en Vukovar en 1920, estaba excluido de la Asamblea. Por otro lado, como recuerda John Lampe, el nuevo reino se encontró con enormes problemas prácticos de integración social y económica, sin tener en cuenta las pérdidas de la guerra; la rivalidad austro-húngara al interior de la

⁷⁰⁵ Sus palabras fueron: “(...) frente a una raza inferior y bárbara como la eslava, no se debe seguir la política de dar el azúcarillo, sino aquella del bastón. Las fronteras de Italia deben ser el Brennero, el Nevoso [Snežnik], y los Dináricos: creo que se pueden sacrificar 500.000 eslavos bárbaros por 50.000 italianos”.

⁷⁰⁶ Lampe, J., *Yugoslavia as History. Twice There Was a Country*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 159.

Monarquía Dual había fomentado la creación de “dos redes ferroviarias separadas. A lo largo del futuro estado, había cuatro sistemas ferroviarios diferentes, cinco monedas, y seis áreas aduaneras y sistemas legales, todos anteriores a 1914”⁷⁰⁷. Los esfuerzos de modernización tuvieron un gran impacto en las balanzas públicas, pero la industrialización fue mínima durante esos años. Las diferentes áreas comerciaban más con terceros países que entre sí. Aún así, se registró un positivo incremento del comercio exterior durante los años veinte, lo que no evitó cierto deterioro de las relaciones con los países vecinos al final de la década⁷⁰⁸.

El incremento de la inestabilidad internacional, especialmente el deterioro de las relaciones con Italia, ahondaron las divisiones internas entre representantes políticos de distintas nacionalidades. Los disparos del serbio Puniša Račić, del Partido Radical (de mayoría parlamentaria) el 20 de junio de 1928 en la Asamblea Nacional, que acabaron con la vida de cinco miembros del Partido Campesino Croata, incluyendo su dirigente Stjepan Radić, fueron excusa o detonante para el rey Alexander disolviera la Asamblea, y suspendiera la Constitución de Vidovdan el 6 de enero de 1929, prohibiendo todos los partidos políticos y organizaciones cuya pertenecía estuviera definida por la etnicidad. El 3 de octubre de ese año, en un ambiente fuertemente marcado por la débil situación económica, nació el Reino de Yugoslavia. El nuevo régimen, dictatorial (la conocida como dictadura del 6 de enero, *Šestojanuarska diktatura*), otorgaba, como describe Lampe, el poder al rey Aleksandar Karađorđević para intentar hacer prevalecer, en palabras del propio rey, el “Yugoslavismo sobre el federalismo”⁷⁰⁹.

Con esa idea de fortalecer el Yugoslavismo o la identidad nacional yugoslava (como una nueva identidad nacional o tal vez como identidad civil frente a las etnoidentidades), en cualquier caso como identidad política frente a los nacionalismos regionales, el nuevo estado fue de nuevo reorganizado administrativamente en nueve *banovinas*, que seguían criterios geográficos, no históricos ni lingüísticos ni religiosos, esto es, no nacionales.

Las nuevas unidades administrativas tomaron sus nombres predominantemente de ríos (Vrbas, Sava, Danubio... evitando adrede otras denominaciones históricas ligadas originalmente a ríos como Bosnia) o situación geográfica (Litoral). Como excepción, la banovina de Zeta tenía su origen en un reino medieval pero no coincidía con los límites ni con el sentir de los habitantes de la zona que ocupaba la actual Montenegro y zonas adyacentes. Sin embargo, estos esfuerzos no frenaron las aspiraciones nacionalistas dentro del nuevo estado, en consonancia con los movimientos políticos que durante esa época se registraron en otros lugares, como ya hemos visto. Esta visión estaba reforzada por la resistencia a lo que era percibido por algunos como una asimilación a una posición preferente de los serbios dentro de Yugoslavia. Por otro lado, los nacionalistas serbios pretendían la unión de las banovinas con población serbia incluyendo Vardar (en la actual Macedonia) y Montenegro. Los líderes croatas, por su lado, pretendían, cuanto menos, la reorganización del estado siguiendo criterios nacionalistas, esto es, de manera que

⁷⁰⁷ Lampe, J., *Yugoslavia as History...*, op. cit., p. 118.

⁷⁰⁸ Lampe, J., *Yugoslavia as History...*, op. cit., p. 154

⁷⁰⁹ Lampe, J., *Yugoslavia as History...*, op. cit., p. 168

identidad etnocultural y administración política fueran congruentes. Pero no eran los únicos movimientos nacionalistas. Fue Vlado Černozemski, miembro de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia (OIRM, que tenía vínculos con otros grupos como los Ustaša y que aspiraba a la secesión de Vardar Macedonia), el que malherió mortalmente al rey Aleksandar I de Yugoslavia el 9 de octubre de 1934 en Marsella, durante una visita de estado.

La realización de los nacionalismos primordialistas fue ganando terreno político a partir de la muerte del rey Aleksandar, si bien para nacionalistas croatas o macedonios esto no sería percibido así, pues el unionismo yugoslavista no era para ellos sino una forma de opresión de la nacionalidad serbia sobre el resto. En cualquier caso, el nacionalismo como principio o doctrina política de cualquier signo prosiguió su avance, hasta la consideración por la mayoría del espectro político de la conveniencia y naturalidad de la congruencia entre una unidad política, un grupo identitario etnocultural y su proyección territorial.

En 1938, la culminación de la Anschluss Österreichs había acercado a la Alemania Nazi hasta la frontera misma de Yugoslavia, pero la cercanía ideológica era, si cabe, todavía mayor. El principio nacionalista y la visión de razas y pueblos jerarquizados y en conflicto era muy presente y predominante, así como la idea de que la congruencia entre territorio y pueblo definido etnoculturalmente debía ser absoluta, idea reforzada por un clima de inestabilidad y crisis que promovía la voluntad de anteponer los intereses propios a los ajenos a toda costa. Era este un lugar común, para cada uno desde su trinchera ideológica, mientras se extendía el absoluto convencimiento de la necesidad de líderes fuertes para llevar a cabo esta congruencia entre territorio y gentes, que habría de alcanzarse bien cambiando las fronteras, bien cambiando a la gente.

Tras las elecciones de 1938, ascendió al poder Dragiša Cvetković, quien, tras seis meses de negociaciones secretas concluyó el 26 de agosto de 1939 el Acuerdo Cvetković-Maček por el que se otorgaba autonomía a los croatas, uniendo las banovinas de Sava y Litoral, más algunos territorios adicionales para formar la Banovina de Croacia (*Banovina Hrvatska*). A partir de entonces, mientras en tierras croatas se presenciaba el ascenso de la ideología de los Ustaše liderados por Ante Pavelić, ideología inspirada y apoyada políticamente por el régimen fascista italiano, que propugnaba la creación de un estado croata independiente y étnicamente puro, promoviendo las ideas que poco después llevarían a la sistemática y violentísima purga genocida contra judíos y serbios, entre los serbios se extendían, paralelamente, ideales diferentes en su forma pero iguales en su fondo.

Durante los años veinte, líderes como el mencionado Puniša Račić, a la cabeza del Partido Radical *Nacional* (*Народна радикална странка*) y de la Asociación de Chetniks Serbios Petar Mrkonjić por el Rey y la Patria, movimientos prohibidos del rey Alexander en 1929, promovían igualmente un ideario nacionalista. La ideología chetnik fue plasmada famosamente en junio de 1941 por Stevan Moljević en su “*Serbia Homógena*”, obra en la que se recoge gran parte del ideario común del nacionalismo radical serbio de la época.

Como muestra, y teniendo el concepto de *Lebensraum* presente, Moljević, que favorecía que, a diferencia de lo que sucedía en el Reino de Yugoslavia de entreguerras, todos los serbios estuvieran agrupados en un mismo territorio, en federación (eso sí, profundamente asimétrica) con análogos territorios nacionales croata y esloveno (los musulmanes, recordemos, no eran considerados, por entonces, una nacionalidad). Moljević afirmaba en su escrito de 1941 la necesidad de:

“(…) crear y organizar una Serbia homogénea que debe consistir en un territorio étnico entero en el que los serbios vivan, y asegurar los centros y líneas de transporte estratégicas necesarias, así como las áreas económicas que permitan y aseguren una vida económica, política y cultural libre y desarrollo en todo momento”⁷¹⁰.

Por supuesto, las fronteras máximas de las aspiraciones ideales territoriales étnicamente puras de unos y otros nacionalistas no eran compatibles entre sí; como es común e inevitable en las ideologías nacionalistas, la absoluta realización del ideal de unos significaba forzosamente la frustración de la máxima realización del ideal de los otros.

El 25 de marzo de ese año, el gobierno del mencionado Dragiša Cvetković firmó la incorporación de Yugoslavia a las fuerzas del Eje, decisión que fue contestada, dos días más tarde, por el golpe de estado liderado por Dušan Simović. El golpe de estado fue respondido violentamente por Hitler, que firmó ese mismo día la “Weisung n. 25”: “El golpe militar en Yugoslavia ha cambiado la situación política en los Balcanes. Yugoslavia debe ser por lo tanto, aunque primero emita declaraciones de lealtad, considerada como un enemigo y aplastada a la mayor brevedad posible (...)”⁷¹¹. El 6 de abril se inició la invasión de Yugoslavia con un intenso bombardeo de Belgrado, que paralizó el sistema de comunicaciones de manera que la campaña fue completada rápidamente y con una débil oposición inicial. Poco después, el 16 de abril, Pavelić declaró en Zagreb el nuevo Estado Independiente de Croacia, y en mayo a sí mismo su *Poglavnik*, un estado que consolidó definitivamente sus vínculos ideológicos con el Eje tras la reunión de Hitler y Pavelić el 6 de junio de 1941, vínculos que fueron asentados en la misma terrible política de limpieza étnica. En el resto del territorio, la situación a mediados de 1941, resume Tom Gallagher, era que “todos los estados balcánicos (con la excepción de Turquía) estaban bajo el control del Eje de una manera u otra. Yugoslavia había sido partida entre Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria. La mayoría de Eslovenia había sido incorporada a Alemania (...) Macedonia estaba dividida entre Italia y Bulgaria. Montenegro fue incorporada por los italianos que anexionaron grandes partes de Bosnia y Dalmacia (...) Serbia, cuyas fronteras se habían reducido a las de 1912 era efectivamente controlada por el ejército alemán a pesar de la existencia del gobierno títere del general Milan Nedić”⁷¹².

⁷¹⁰ Se puede consultar el texto completo, en inglés, en <http://www.hic.hr/books/greatserbia/moljevic.htm>

⁷¹¹ En el original, “*Der Militärputsch in Jugoslawien hat die politische Lage auf dem Balkan geändert. Jugoslawien muss auch dann, wenn es zunächst Loyalitätserklärungen abgibt, als Feind betrachtet und daher so rasch als möglich zerschlagen werden.(...)*”. Puede consultarse en <http://www.96id.de/geschichte/ixanhang/weisungenfuerdiekriegsfuehrung/weisungnr25.php>

Último acceso: 29/04/2014

⁷¹² Gallagher, Tom, *Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989. From the Ottomans to Milosevic*, Taylor & Francis Group, Routledge, London, New York, 2001, p.127

El nacionalismo serbio se fraccionó políticamente ante la invasión, entre los que prefirieron adherirse al gobierno colaboracionista de Nedić (que aunque mantenía las formas con un retrato de Petar II colgando en su despacho, como muy bien indica Sabrina P. Ramet, a diferencia de Pavlević en Croacia, no intenta presentar el régimen como la final “satisfacción de las aspiraciones nacionales serbias”⁷¹³), la guerrilla colaboracionista chetnik liderada Konstantin “Kosta” Milovanović Pećanac, y los chetniks rivales del nacionalista serbio Dragoljub “Draža” Mihailović, que se refugiaron en Ravna Gora, para resistir la ocupación de las fuerzas alemanas -combatieron también a Milovanović-, enfrentándose, al poco, con los partisanos de Tito, con quienes las grandes diferencias ideológicas hicieron fracasar los intentos iniciales de unir fuerzas contra los invasores.

De manera paralela, durante el período de entreguerras se habían desarrollado en la región movimientos socialistas y comunistas antagonistas a movimientos nacionalistas, considerados por ellos burgueses y contrarios a los intereses de los trabajadores, y particularmente hostiles a los nacionalistas fascistas. Las diferentes percepciones del “pueblo” relevante para hablar de un derecho a la autodeterminación resultaban en visiones radicalmente diferentes del concepto del derecho de autodeterminación – recordemos la polémica en el seno de los comunistas en torno a un derecho de autodeterminación de los trabajadores y/o un derecho autodeterminación de las *naciones* de Lenin-.

El profesor Francesco Privitera ha estudiado la cuestión en “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II”⁷¹⁴. El Partido Comunista de Yugoslavia (*Komunistička partija Jugoslavije*) nació con ese nombre en el Congreso de Vukovar de 1920, del anterior Partido de los Trabajadores Socialistas de Yugoslavia- Comunista” (*Ujedinjena socialistička radnička partija Jugoslavije-komunistička*) y sostuvo en sus inicios la visión de un estado yugoslavo unificado pero garantizando un alto nivel de autogobierno a las unidades regionales.

Ya en 1918, los socialdemócratas croatas habían afirmado que los “eslovenos, croatas y serbios son uno, y el mismo pueblo”⁷¹⁵. Llevándolo incluso al plano etnocultural, los socialdemócratas serbios habían afirmado el mismo año que “los serbios, los croatas y los eslovenos son una nación, pues tienen un idioma y por lo demás idénticas características étnicas”⁷¹⁶. Sabina P. Ramet ha descrito la evolución ideológica del Partido Comunista en

⁷¹³ Ramet, S. P., *The Three Yugoslavias: State-building and Legitimation, 1918-2005*, Indiana University Press, 2006, p.132

⁷¹⁴ Privitera, F., “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II” en Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999, p. 93 y ss.

⁷¹⁵ Banac, I., *The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics*, Cornell University Press, 1984, pp. 333 y ss.

⁷¹⁶ Privitera, F., “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II”, Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999. P 95, citando a Shoup, Paul, *Communism and the Yugoslav National Question*, New York, 1968. Hoy en día, llama poderosamente la atención no tanto que el croata y el serbio fueran considerados el mismo idioma (con distintas variedades) pues persiste la diatriba entre

el período de entreguerras, mostrando que no siempre fue consistente con esa visión unitaria y centralista, pues, mientras que en el período del Comintern (1928-1934) prevaleció brevemente la idea apoyada desde el exterior de que Yugoslavia debía ser dividida en estados nación, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial prevaleció, por un lado, el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación junto con el deseo de preservar la unidad territorial de una Yugoslavia socialista⁷¹⁷. Según Privitera “la persistente fuerza del nacionalismo, especialmente en Croacia y Serbia, probaba a los comunistas que la burguesía yugoslava era incapaz de llevar a cabo la unificación nacional yugoslava. Culpaban de esto al “atraso” de la burguesía yugoslava, y la decepción con su pobre actuación hizo concluir a algunos comunistas que sólo una revolución comunista podría llevar a cabo una tarea tal”⁷¹⁸.

Como sucedía en el seno de otras corrientes ideológicas, la cuestión de la organización interna del nuevo estado yugoslavo no era pacífica entre los comunistas. Explica el profesor Privitera que, mientras que un sector del partido, como el representado en las ideas del serbio Sima Marković, apostaba por un estado yugoslavo unitario comunista, en el la cuestión nacional no era sino una cuestión constitucional superable si se garantizaba la “completa democracia interna” y opinaba que la cuestión de si las naciones eslovena, croata y serbia eran una sola o tres diferenciadas no revestía importancia práctica, toda vez que debía supeditarse a la lucha de clases, en su visión de la ortodoxia marxista, para otro sector del partido –apoyado por el bolchevismo del Comintern– había de apostarse por un acercamiento más radical a la cuestión nacional yugoslava, acusando al unitarismo de burgués⁷¹⁹. Las distintas visiones marxistas en relación a la autodeterminación de los pueblos fueron consolidándose en torno a un punto de vista predominantemente leninista, adquiriendo con el paso del tiempo un fuerte pragmatismo político que les permitió ir sumando voluntades. Baste como ejemplo la incorporación, en 1936, de la OIRM en la Federación Comunista Balcánica tras una resolución del Comintern que reconocía la nacionalidad macedonia⁷²⁰.

La Gran Purga acabó en 1937 con la vida de Sima Marković, pero también con el entonces líder del Partido, Milan Gorkić, quien, como miembro del Comintern, representaba el ala contraria, así como a muchos otros miembros del Partido Comunista de Yugoslavia. Josip Broz, Tito, se convirtió entonces en Secretario General. Fue entonces, según la reciente biografía de Geoffrey Swain, cuando Tito se vio forzado “a clarificar sus pensamientos en la relación entre el estado leninista y el estalinista”⁷²¹.

lingüistas nacionalistas y yugoslavistas, sino que el esloveno fuera considerado también una variedad de la misma lengua, cuando fue considerado diferente ya en la Yugoslavia socialista, por no hablar de nuestros días.

⁷¹⁷ Ramet, P., *Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1963-1983*, Bloomington, Indiana University Press, 1984. P.48. Citado por Privitera, F. “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II” Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999, p. 96

⁷¹⁸ Privitera, F., “Yugoslav Communists Between the National Question...”, op. cit., p. 96

⁷¹⁹ Privitera, F., “Yugoslav Communists Between the National Question...”, op. cit., p. 99

⁷²⁰ Banac, I., *The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics*, Cornell University Press, 1984, pp. 307-328

⁷²¹ Swain, G., *Tito: A Biography*, I.B.Tauris, New York, 2011., p. 20

Sugiere este autor que, a pesar de que las circunstancias como hombre del Comintern situaron a Tito en una posición *a priori* más cercana a las indicaciones de Moscú, las inclinaciones identitarias de Tito fueron siempre favorables a la construcción yugoslava. La influencia de Lenin en el pensamiento pasaba por intentar superar la cuestión nacional supeditándola a la lucha de clases, reconociendo derechos políticos a las nacionalidades y un derecho a la secesión que con su reconocimiento lo despojaba de sentido al mismo tiempo, a menos que fuera sólo un instrumento político transitorio pues, en consonancia con el inevitable devenir presente en la historicista ideología marxista, la secesión era incompatible, en el futuro histórico por venir, con una unión internacional de los trabajadores.

Así las cosas, como es bien sabido, la resistencia a la ocupación nazi y a los regímenes títeres estuvo liderada por los partisanos liderados por Tito y representada también, aunque de una manera mucho menos activa, por los chetniks de Draža Mihailović. Las profundas diferencias ideológicas, estratégicas y tácticas entre unos y otros hizo imposible, como hemos apuntado, la colaboración entre ambos movimientos, y los tímidos amagos de colaboración iniciales se convirtieron con la evolución del conflicto, en abiertos enfrentamientos bélicos entre ellos. Mientras los chetniks se inclinaban inicialmente por una resistencia pasiva que resultaba en una inacción a la espera de la llegada de los Aliados, inacción que llegó a convertirse en colaboracionismo con el invasor –bajo la excusa de ser táctica–, los partisanos de Tito fueron más resolutivos. La relativa inacción de los chetniks atrajo a muchos serbios a las filas multiétnicas partisanas. Por otro lado, los chetniks aprovecharon la situación bélica para poner en marcha su propia agenda nacionalista registrándose terribles matanzas contra civiles no serbios y serbios no dispuestos a cooperar con ellos⁷²². Los partisanos pasaron a liderar la resistencia y el programa político postbélico, de manera que la derrota del Eje significó, además, una derrota de ustase y chetniks, esto es, de los nacionalismos fascistas locales, y la victoria del yugoslavismo de los partisanos socialistas.

En un discurso de Tito, pronunciado el 8 de septiembre de 1941, obtenemos una idea de la percepción de identidad compleja que favorecían los partisanos durante la guerra: “El salvaje asesinato de serbios, croatas y eslovenos continua. No son sólo los verdugos de las fuerzas de ocupación las que están participando en este exterminio de los eslavos del sur, sino también colaboracionistas de aquí (...) el despreciable [general] Nedić se equivoca si piensa que sus planes tendrán éxito. El pueblo serbio le dará una respuesta digna de ellos, el tipo de respuesta que han dado a todos los traidores a lo largo de su historia. Los partisanos serbios, al igual que los partisanos en las demás partes de Yugoslavia, continuarán con creciente vigor su lucha contra aquellos que han invadido nuestro país, contra los varios Pavelićes, Nečićes, Ljotićes, Aćimovićes, y todos los traidores del pueblo. Los Serbios y otras nacionalidades están ayudando, y continuarán ayudando incluso más, la heroica lucha de los partisanos, hasta la victoria final sobre los invasores y sus lacayos”⁷²³.

⁷²² Ramet, S., P., *The Three Yugoslavias: State-building and Legitimation, 1918-2005*, Indiana University Press, 2006, p. 146

⁷²³ “Terror by the Fascist Bandits, September 8, 1941”, Tito: Selected Military Works. Fuente original Vojnoizdavački Zavod, Belgrade, 1966, pp. 52-54. Obtenido de Marxists Internet Archive, www.marxists.org

Así, en lo referente a la cuestión que nos ocupa, la confrontación entre los nacionalistas, colaboracionistas y partisanos representaba también la confrontación y triunfo de diversas maneras de entender la autodeterminación. La victoria de los partisanos significó la derrota del principio nacionalista y el triunfo de una manera particular de entender la autodeterminación de las naciones, y de cómo ésta debía ser implementada políticamente, supeditada a la igualdad de clases y el triunfo de la lucha obrera en una nueva Yugoslavia multiétnica, federal y socialista.

§3.5.2 El derecho de autodeterminación de los pueblos, incluido el derecho a la secesión, en la República Socialista Federal de Yugoslavia: entre el nacionalismo y el socialismo

Como hemos mencionado brevemente con anterioridad, Tito se había posicionado a finales de los años treinta en el seno del partido Comunista en esa vía intermedia que reconocía el derecho de las nacionalidades pero en el marco de un proyecto yugoslavo. En palabras de Francesco Privitera, Tito compartía con Marković la idea de un estado yugoslavo pero, a diferencia de éste, “consideraba el sistema federal en un país comunista sólo como una fase en el camino de la unificación final de los proletarios de todos los países. Así, una federación yugoslava no está destinada a ser un acuerdo permanente, sino un paso progresivo hacia un sistema confederal: la federación Balcánica como parte de una Federación Soviética Mundial”⁷²⁴. Y es que si el plan de Moscú era “redirigir el proyecto de una Federación Comunista Yugoslava hacia una Balcánica, consistente en pequeños estados soviéticos (...), el programa de Tito estaba dirigido a una fuerte federación yugoslava que, en cambio, llevaría a una federación balcánica con Albania y Bulgaria”⁷²⁵.

La victoria de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial permitió poner en marcha la visión de Tito y sus colaboradores. En 1942, Tito comunicó al Comintern la creación del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia (*AVNOJ*, *Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije*). Ya el 12 de octubre de 1943, bajo la influencia de Tito, en la segunda sesión del Partido Comunista de Croacia, que dependía de la AVNOJ, se había resuelto establecer “una nueva Yugoslavia democrática de pueblos libres e iguales” en la que “una nueva y libre Croacia democrática puede ser erigida de nuevo”. En noviembre de ese año, en Jajce, Bosnia y Herzegovina, la AVNOJ nombró a Tito Mariscal y Primer Ministro de un nuevo Comité Nacional para la Liberación de Yugoslavia (*NKOJ*, *Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije*). En Jajce se acordó también que la nueva Yugoslavia, entonces denominada Yugoslavia Democrática Federal (*Demokratska Federativna Jugoslavija*), habría de ser, precisamente, un estado democrático y federal, compuesto por seis repúblicas iguales –acabando así, entre otras

⁷²⁴ Privitera, F. “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II” en Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999. P 105.

⁷²⁵ Privitera, F. “Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II” en Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999. Introducción. P 11

cosas, con las antiguas aspiraciones de los nacionalistas serbios y croatas sobre Bosnia y Herzegovina, que pasó a ser una de esas seis repúblicas-.

Confirmando su visión de la cuestión nacional yugoslava y de las distintas acepciones del concepto de “pueblo” que se manejaban, el 9 de mayo de 1945, Tito se dirigía así en una parte de su discurso del Día de la Victoria: “(...) ¡Pueblos de Yugoslavia! ¡Serbios, Croatas, Eslovenos, Macedonios, Musulmanes!. Ha amanecido el día tan largamente deseado, ese que habíais estado esperando con tanto anhelo (...) El mayor poder fascista en Europa ha sido vencido, Alemania, ese que infligió tanto sufrimiento a nuestro pueblo y se cobró tantas víctimas. Los poderes que trataron de esclavizaros han sido vencidos. Los fascistas alemanes e italianos os ofrecieron alicientes con el fin de exterminaros los unos a los otros. Pero sus mejores hijos e hijas, inspirados en el amor por su patria y por vosotros, sus pueblos, frustraron este plan diabólico del enemigo. En lugar de la discordia y la hostilidad mutua, estáis hoy unidos en una nueva y más feliz Yugoslavia. En vez de la vieja Yugoslavia, podrida por la corrupción y la injusticia, hoy tenemos la Federal Yugoslavia Democrática de pueblos iguales (...) ¡Larga vida a la hermandad y unidad de los *pueblos* yugoslavos!, ¡gloria a la memoria de aquellos que cayeron por la liberación de nuestra patria!, ¡muerte al fascismo, libertad para el *pueblo*!”⁷²⁶.

El 6 de junio de 1945, Yugoslavia firmó la Carta de Naciones Unidas, ratificándola el 19 de octubre de 1945, convirtiéndose así en uno de sus miembros fundadores. El 11 de noviembre de 1945 se celebraron elecciones, ganadas por una aplastante victoria del Frente Popular, –cerca al 90%–, no sin registrarse un duro boicot político a la débil oposición, liderada por el Partido Democrático de Milan Grol, cuyas opiniones, como recuerda Lampe, consistentes en que Bosnia y Macedonia eran patrimonio serbio le dejaron expuesto a una “justificada crítica”⁷²⁷.

El 29 de noviembre de ese año, la nueva Constitución abolió definitivamente la monarquía y el estado adoptó el nombre de República Federal Popular de Yugoslavia (*Federativna Narodna Republika Jugoslavija*), nombre que mantendrá hasta abril de 1963, cuando se adoptará el nombre de República Socialista Federal de Yugoslavia (*Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija*). Resalto ahora, como antes y más adelante, la relación completa de las denominaciones en el original serbocroata, para continuar mostrando los distintos usos del término “pueblo” o “nación” –*narod*– que fueron utilizados simultáneamente, como vamos viendo, para conceptos muy distintos.

Cada una de las repúblicas que conformaban Yugoslavia fueron denominadas repúblicas populares o nacionales (*narodne republike*), las mismas que luego pasarían a denominarse repúblicas socialistas (*socijalističke republike*). La nueva Yugoslavia intentaba así superar los problemas identificados en la Yugoslavia de entreguerras respecto a la cuestión nacional.

Por un lado, la nueva Yugoslavia proponía la unidad (sobre la base del existente movimiento o pretensión nacional yugoslava nacida de la lucha antimperial, como lo hicieron los nacionalismos étnicos⁷²⁸). Sin embargo, a diferencia de la solución propuesta

⁷²⁶ “Tito: Selected Speeches and Articles, 1941-1961”; Collected Works, Book I, Naprijed, 1963. Pp. 260-263. Disponible en Marxists Internet Archive. www.marxists.org

⁷²⁷ Lampe, John, *Yugoslavia as History...*, op. cit., p. 230

⁷²⁸ Gavril Princip, durante su juicio proclamó que: “la unión política de los yugoslavos siempre estuve

por los nacionalistas serbios, que pasaba por una Yugoslavia unida pero bajo el liderazgo de los serbios, la nueva Yugoslavia proponía un sistema socialista federal bajo el nuevo lema, *Bratstvo i jedinstvo*, hermandad y unidad, un sistema que garantizara la igualdad entre las nacionalidades, hermandad y unidad que, a su vez, sólo podía existir entre aquellos iguales.

En relación con esto, Aleksa Djilas, el sociólogo serbio hijo del líder socialista Milovan Djilas, ha distinguido cuatro “igualdades” que trataron de ser garantizadas en la nueva Yugoslavia socialista: La primera, respecto a los *ciudadanos* entre sí, prohibiendo la discriminación, entre otras, por razón de *nacionalidad*; la segunda, la igualdad de competencias entre las seis *repúblicas*; la tercera, la igualdad entre las naciones o *nacionalidades*; la cuarta, referida a las responsabilidades de las distintas nacionalidades y éxitos contra el invasor, de manera que la victoria fuera atribuida a todos los yugoslavos sin distinción.

La intención de crear un estado en el que prevaleciera la igualdad entre los pueblos, extendió la opinión, que ha llegado hasta nosotros especialmente a través del nacionalismo serbio, de que Tito se inclinaba por una Serbia débil para una lograr una fuerte Yugoslavia. Algunos autores, como Paul Shoup, se han opuesto a este punto de vista tan extendido, argumentando que no era antiserbio oponerse a una hegemonía serbia como la de entreguerras, y que de hecho, Tito se sentía más cómodo en Belgrado que entre las élites locales croatas o eslovenas⁷²⁹. En cualquier caso, la organización territorial de la nueva Yugoslavia no hacía coincidir exactamente las repúblicas con los grupos étnicos, lo que habría supuesto seguir el principio nacionalista.

Respecto al gobierno del pueblo yugoslavo como *democracia*, relata Sabrina P. Ramet que, ya en enero de 1945, Tito expresó que no era tiempo de reinstaurar el multipartidismo, sino de confiar en un Frente Popular como movimiento en el que pudieran integrarse todos, comunistas y no comunistas, ya que era esa la “única fuerza que puede sacar al país del horror y la miseria y llevarlo a la completa libertad”⁷³⁰.

Entre los días 5 y 7 de agosto de 1945 tuvo lugar en Belgrado el primer congreso del Frente Popular de Yugoslavia (*Narodni front Jugoslavije*), que habría de sustituir al Frente de Liberación Popular Unido (*Jedinstveni narodnooslobodilački front*, JNOF) activo durante la guerra. El Frente Popular, fue constituido como plataforma o movimiento político que agrupaba a varios partidos de distinto signo activos antes de la guerra, como el mencionado Partido Campesino Croata, el Partido Campesino Nacional de Dragoljub Jovanović, el Partido Socialista de Yugoslavia o el Partido Social

delante de mis ojos, y esa era mi idea principal. Yo soy un yugoslavo nacionalista, mi objetivo es la unificación de todos los yugoslavos, y no me importa qué tipo de estado sea, pero debe ser libre de Austria”. Andjelic, N., *Bosnia-Herzegovina: The End of a Legacy*. Routledge, 2003, p. 11. A su vez referenciado como Dedijer Dedijer, V., *The Road to Sarajevo*, MacGibbon & Kee, London 1967, p. 341

⁷²⁹ Shoup, P., “Titoism and the national question in Yugoslavia: a reassessment” en van den Heuvel, M., G. Siccama, J., (eds) *The Disintegration of Yugoslavia*, Rodopi B.V., Amsterdam, Atlanta, 1992. P 59.

⁷³⁰ Ramet, S., P., *The Three Yugoslavias: State-building and Legitimation, 1918-2005*, Indiana University Press, 2006, p. 167 y p. 168.

Demócrata, liderado por el Partido Comunista de Yugoslavia (*Komunistička partija Jugoslavije*). En 1952 el Partido Comunista pasó a denominarse Alianza o Liga de los Comunistas de Yugoslavia (*Savez komunista Jugoslavije*) y en 1953 el Frente Popular cambió su nombre a Alianza Socialista del Pueblo Trabajador de Yugoslavia (*Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije*). La lógica detrás de la instauración de un Frente Popular era su consideración, para sus promotores, como una representación misma del pueblo yugoslavo. Esta idea es la que hizo desechar la idea de un partido único en sentido estricto.

Así emergió un nuevo concepto de “yugoslavismo” diferente del yugoslavismo del rey Aleksandar I, un concepto de yugoslavismo nacido de la doctrina internacionalista comunista. En relación con este término, Aleksa Djilas opina que si la doctrina comunista prescribía la prevención de la lucha entre naciones, la unión de los trabajadores sin importar su origen, en la práctica esto significaba en este contexto yugoslavismo, “el internacionalismo de los comunistas yugoslavos fue transformado en yugoslavismo”. Djilas resume que el “yugoslavismo” era concebido de tres maneras: “yugoslavismo era *antinacionalismo*, oposición a todos los nacionalismos de las naciones que constituirían Yugoslavia; Yugoslavismo era *patriotismo* –primordialmente, lucha por la liberación de Yugoslavia de alemanes, italianos, y otros que la habían ocupado; y “yugoslavismo” era también *internacionalismo* -unidad de los trabajadores, que no tendrían en consideración la nacionalidad en la lucha por una revolución social-”⁷³¹.

El internacionalismo del ideario socialista se planteaba en el caso yugoslavo asumiendo que la creación de la nueva federación era sólo un paso histórico hacia una futura unión de pueblos balcánicos y una posterior unión mundial de trabajadores, en línea con el historicismo marxista. Esto era, por un lado, un posicionamiento y una estrategia política: Leonid Gibianskii entre otros, ha estudiado los distintos intentos de integración balcánica iniciados por Tito más allá de los territorios que conformaron Yugoslavia, frustrados por distintas razones. Destaca, por ejemplo, los intentos de federación con Bulgaria, frustrados por las expectativas búlgaras, favorecidas por Stalin, de unirse confederalmente con Yugoslavia y no de integrarse como una más de las repúblicas federadas, o la integración de Albania en Yugoslavia, opuesta por Moscú, procesos que estuvieron en el centro de las disputas que llevarían a la ruptura entre Tito y Stalin en 1948⁷³².

Pero el internacionalismo yugoslavista que concebía Yugoslavia como una fase histórica era además una solución teórica al problema de la unión de distintas nacionalidades en una federación concreta sin tener que pasar por un nacionalismo primordialista yugoslavo que no habría tenido apoyo identitario. Esta solución encajaba además perfectamente con el historicismo del ideario marxista, una fase necesaria en el camino del socialismo mundial. Curiosamente, Stalin acusó precisamente a Tito de “nacionalismo”, por no

⁷³¹ Djilas, A., *The Contested Country. Yugoslav Unity and Communist Revolution 1919-1953*, Harvard University Press, Cambridge, London, 1991, p. 165.

⁷³² Gibianskii, L., “Tito and Regional Balkan Arrangements”, in Henry Huttenbach and Francesco Privitera (eds.), *Self-Determination from Versailles to Dayton. Its Historical Legacy*, Longo, Ravenna, 1999, pp. 93-120.

plegarse a las indicaciones de Moscú resultando, en junio de 1948, en la expulsión de Yugoslavia del Cominform.

El problema del patriotismo yugoslavo no sólo se tenía que enfrentar, por un lado, con la cuestión nacional y con el problema y solución al mismo tiempo de la construcción progresiva internacionalista, sino con un tercer problema inscrito en los mismos fundamentos del comunismo, que abogaba por la destrucción del estado en un futuro incierto; esta idea podía redundar en el escepticismo en torno a la construcción de una Yugoslavia basada en un estado pues si el estado habrá de desaparecer, Yugoslavia habrá de desaparecer también necesariamente si tan solo es un estado, lo que dejaba, sin embargo, los argumentos nacionales intactos (para los primordialistas las nacionalidades no desaparecerán con la desintegración del estado).

Poco después, el 26 de noviembre de 1948 Tito analizó su postura acerca de la cuestión nacional en un importante discurso “Sobre la Cuestión Nacional y el Patriotismo Social”, pronunciado en la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias de Liubliana. El siguiente extracto del discurso es algo largo pero creo merece mucho la pena ser incluido en nuestra disertación, pues contiene las líneas ideológicas maestras de la postura de Tito acerca de la cuestión:

“ (...) La cuestión nacional aquí ha sido resuelta, (...), para la satisfacción general de todos nuestros pueblos. Ha sido resuelta en línea con las enseñanzas de Lenin. Y la solución de la cuestión nacional en este país refleja el carácter de nuestra revolución. El éxito que estamos logrando en la construcción del socialismo es la prueba mas solida de la corrección de nuestra solución de la cuestión de las nacionalidades en este país. (...) Ningún país democrático popular tiene tantas nacionalidades como tiene este país. (...) Consecuentemente en [otros] países de democracia popular no ha habido necesidad de solucionar estos serios problemas como los hemos solucionado aquí. Para ellos el camino al socialismo es menos complicado que aquí. Para ellos el factor básico es el cuestión de clase, nosotros hemos resuelto tanto la cuestión de las nacionalidades como la cuestión de clase. La razón por la que hemos sido capaces de resolver la cuestión de las nacionalidades tan a fondo se encuentra en el hecho de que había comenzado a ser resuelta de una manera revolucionaria en el transcurso de la Guerra de Liberación, en la que todas las nacionalidades en el país participaron, en la que cada grupo nacional hizo su contribución al esfuerzo general de liberación del ocupante de acuerdo a sus capacidades. (...) Lucharon por su liberación rifle en mano. El papel del Partido Comunista descansa en primer lugar en el hecho de que lideró esa lucha, lo que fue una garantía de que tras la guerra la cuestión nacional se resolvería decisivamente de la manera en la que los comunistas la habían concebido mucho antes de la guerra y hacer que los factores nacionales sean positivos como estímulo para, y no como freno, del desarrollo del socialismo en nuestro país.

El papel del Partido Comunista hoy descansa en la necesidad de mantener el ojo avizor para cuidar de que el chauvinismo nacional no aparece y se desarrolla entre cualquiera de las nacionalidades. El Partido Comunista siempre debe esforzarse (...) en asegurar que todos los fenómenos negativos del nacionalismo desaparecen y que el pueblo es educado en el espíritu del internacionalismo. ¿Cuáles son los fenómenos del nacionalismo? He aquí algunos de ellos:

1) Egoísmo nacional, del que se derivan muchos otros rasgos negativos de los nacionalismos, como por ejemplo - un deseo de conquista extranjera, un deseo de oprimir a otras naciones, un deseo de imponer la explotación económica sobre otras naciones, y así sucesivamente;

2) Chauvinismo nacional, que también es una fuente de muchos otros rasgos negativos del nacionalismo, como por ejemplo el odio nacional, el menosprecio de otras naciones, el menosprecio de su historia, cultura y actividades y logros científicos, (...), la glorificación de los momentos de su propia historia que fueron negativos y que desde nuestro punto de vista marxista son considerados negativos (...) guerras de conquista, subyugación y opresión de otras naciones (...), explotación económica (...) la esclavitud colonial (...) todos estos fenómenos pueden ser explicados pero (...) no pueden ser nunca justificados. En una sociedad socialista tales fenómenos deben y habrán de desaparecer. En la vieja Yugoslavia la opresión

nacional por la camarilla de la Gran Serbia significó el fortalecimiento de la explotación económica de los pueblos oprimidos. (...) En la nueva Yugoslavia socialista la igualdad de derechos existente para todas las nacionalidades ha hecho imposible para un grupo nacional imponer la explotación económica sobre otro. Esto es porque la hegemonía de un grupo nacional sobre otro ya no existe en este país. Cualquier hegemonía tal debe inevitablemente traer, en algún grado, de una forma u otra, explotación económica; y esto sería contrario a los principios sobre los que se asienta el socialismo (...). Durante el período de la Guerra de Liberación, hemos situado las relaciones entre los grupos nacionales en otras, nuevos, fundamentos. Nos hemos separado formalmente para que en verdad podamos estar mejor unidos. Y en nuestra comunidad presente los derechos de los grupos nacionales más pequeños gozan de igual reconocimiento que aquellos grupos más grandes. (...) Si miramos los presupuestos, puede verse que no se han ahorrado esfuerzos en elevar los estándares de las repúblicas más atrasadas lo más posible y los más rápido posible; puede verse, por ejemplo, que Eslovenia, Croacia, y Serbia están ayudando, tanto como pueden, las repúblicas más atrasadas como Macedonia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina (...) Nuestros pueblos (...) se han percatado ya de que no pueden vivir unos sin otros. Se han dado cuenta de que nuestra comunidad provee un desarrollo comprehensivo –económico, cultural, social (...). La cuestión de la unificación de los países socialistas es una cuestión complicada. (...) Es un proceso largo. Debe madurar en las mentes de al menos la mayoría de la gente trabajadora, de manera que vean la necesidad y las ventajas de ella, tanto desde su propio punto de vista nacional como internacional. En materia de unificación, las relaciones económicas juegan un importante papel, esto es, en las bases sobre las que se fundan y cómo se desarrollan. (...) El internacionalismo no es una abstracción. Debe fundarse en hechos, no en meras palabras. El internacionalismo se basa en los actos: es un problema de cómo la clase más progresista, la clase trabajadora, o los países que están (...) construyendo el socialismo, interpretan sus intereses: los consideran como parte del bien general o como su propio estrecho interés estatal o nacional. (...) Es también importante en qué grado la ayuda o el apoyo es dado. El internacionalismo en su significado real de la palabra implica dar ayuda a los movimientos progresistas en el mundo o en otros países socialistas donde se necesite urgentemente, de acuerdo a la capacidades de cada cual. Se nos acusa continuamente de ser nacionalistas; pero ni una sola evidencia se ha podido presentar para apoyar tales irresponsables aseveraciones. ¿Cuál fue nuestra actitud en este respecto durante la Guerra de Liberación? Fue obviamente internacionalista, porque en la guerra cumplimos conscientemente, nos sólo con nuestro deber nacional, sino con nuestro deber internacional. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud en este respecto desde el final de la guerra? Ha sido obviamente internacionalista, porque hemos asistido hasta el límite de nuestra capacidad a los países de democracias populares que han necesitado nuestra ayuda, sin importar si solicitaban nuestra ayuda o no. Nunca hemos hecho oídos sordos y rechazado ofrecer toda la asistencia posible a los movimientos progresistas de otros países que ha necesitado de nuestra ayuda, sin importar si solicitaban nuestra ayuda o no. Y hasta el mismo día de hoy no nos hemos movido de esta posición. Sobre la cuestión de si somos nacionalistas o no, puedo decir lo siguiente: somos nacionalistas en el exacto grado necesario para desarrollar un sano patriotismo socialista entre nuestro pueblo, y el patriotismo socialista es en esencia internacionalismo. El socialismo no nos requiere que renunciemos a nuestro amor por nuestro país socialista, que renunciemos al amor por nuestro propio pueblo. El socialismo no nos requiere que no debamos hacer todo esfuerzo posible para nuestro país socialista lo más rápidamente posible, para que podamos crear las mejores condiciones de vida posibles para nuestros pueblo trabajador. Nuestro impulso creativo en la construcción de nuestro país es la fuerza creativa de nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, los intelectuales de nuestro pueblo, y todos nuestros campesinos trabajadores y ciudadanos, aportando voluntariamente su parte a ese trabajo de construcción dentro del Frente Popular, — ninguna de estas cosas necesitan, o verdaderamente ni pueden, ser estigmatizadas como algún tipo de desviación nacionalista. No, esto es patriotismo socialista, que en su esencia es profundamente internacional, y por esa razón estamos orgullosos de él”⁷³³.

Podría ser matizado tal vez por algunos que era este su discurso *público*. En cuanto a sus inclinaciones privadas, puede citarse al que fuera uno de sus más íntimos colaboradores,

⁷³³ Tito, Josip Broz, “Concerning the National Question and Social Patriotism Speech held at the Slovene Academy of Arts and Sciences. November 26, 1948” *Tito: Selected Speeches and Articles, 1941-1961* pp. 96-105; Publicado Originalmente en *Collected Works, Book IV*, Naprijed, 1963 p. 36-47. Obtenido en Marxists Internet Archive www.marxists.org

y luego disidente del régimen, Milovan Djilas, quien aseguraba, tras la muerte de Tito, que allá por abril de 1953, el mariscal comentó, en el funeral del prominente partisano esloveno Boris Kidrič, que “las nacionalidades de Yugoslavia algún día se fundirán en una verdadera nación”. Djilas replicó que el rey Aleksandar había pensado lo mismo, a lo que Tito respondió “ah, pero no había socialismo entonces”⁷³⁴.

Aunque presentado como cierto nacionalismo yugoslavo, esta afirmación era conforme a la ortodoxia marxista y leninista que consideraba la república federativa un paso adelante para superar la cuestión nacional en los casos en los que la república democrática centralizada es temporalmente políticamente inviable. Esto tendría cierta coherencia con las sugerencias de Geoffrey Swain, para quien Tito habría sido influenciado por haber crecido en un ambiente, fronterizo entre Croacia y Eslovenia, ya proclive al yugoslavismo como identidad. Pero dejando las especulaciones psicológicas de lado, fueran cuales fueran sus inclinaciones, aspiraciones o especulaciones identitarias, Tito sostuvo siempre públicamente la solución yugoslava socialista a la cuestión nacional.

Así, conforme a la teoría marxista, se supeditaba el interés nacional a los intereses de la clase trabajadora, descartando, tal y como ya había descartado Lenin, la expresión “autodeterminación para la clase trabajadora”⁷³⁵. El término “autodeterminación” quedó restringido al pueblo entendido como nacionalidad, no a pueblo como clase o a pueblo entendido como conjunto de personas sometidas al poder de un ordenamiento jurídico determinado o al demos legislador.

La Constitución de Yugoslavia de 1946 se modeló hasta cierto punto a imagen de la Constitución de la Unión Soviética de 1936, que preveía en su artículo 13 una organización de estado federal, constituido sobre la base de la agrupación voluntaria de las diferentes repúblicas federadas y en su artículo 17 el derecho a la libre secesión de las repúblicas⁷³⁶. Los dos primeros artículos de la Constitución de 1946⁷³⁷ establecían que:

“1. La República Federativa⁷³⁸ Popular de Yugoslavia es un estado federal *popular* de forma republicana, una comunidad de *pueblos* de iguales derechos los cuales, en base a su derecho de autodeterminación, incluyendo el derecho a la secesión, han expresado su voluntad de vivir juntos en un estado federativo.

2. La República Federativa Popular de Yugoslavia está compuesta por la República Popular de Serbia,

⁷³⁴ Djilas, M., *Tito the story from the inside*. New York, 1980, p. 134

⁷³⁵ Davis, H. B., *Toward a Marxist Theory...*, op. cit., p. 66

⁷³⁶ Constitución de la Unión Soviética de 1936. Puede encontrarse en castellano en <https://www.marxists.org/espanol/tematica/histsov/constitucion1936.htm>

⁷³⁷ Disponible (en serbio cirílico) en la página oficial del Archivo de Yugoslavia, Republica de Serbia. http://www.arhivyu.gov.rs/active/en/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_fnrj.html

⁷³⁸ He preferido traducir en esta ocasión “federativna” por federativa, y “*savezna*” por federal (en serbocrata para Bundesrepublik Deutschland se traduce por *Savezna Republika Njemačka*). La elección del adjetivo *federativna*, en vez de *federalna* o *savezna*, fue entonces y es en esta traducción más estilístico que de fondo, aunque hay quien puede argumentar que el adjetivo *federativno* se puede referir más a una descripción de la forma del estado para dejar *federalno* para el nivel federal de gobierno respecto de los niveles federados de las distintas repúblicas dentro del estado. En cualquier caso no afecta al significado.

República Popular de Croacia, República Popular de Eslovenia, la República Popular de Eslovenia, la República Popular de Bosnia y Herzegovina, República Popular de Macedonia y la República Popular de Montenegro.

La República Popular de Serbia incluye la provincia autónoma de Vojvodina y la provincia autónoma de Kosovo-Metohija”.

Hemos de resaltar del texto dos puntos. Primero, el empleo de los términos “pueblo” y “popular”, como venía siendo habitual, para designar conceptos relacionados pero distinguibles entre sí: pueblo como clase, pueblo como grupo de personas sometidas a un poder en un tiempo y territorio, pueblo / demos, (englobados en el término “república popular”) y pueblo etnoculturalmente definido o nacionalidad.

En segundo lugar, la evidente confusión (que resonaría hasta las discusiones en el seno de la Comisión Badinter durante la desintegración de Yugoslavia y aún hasta nuestros días), sobre si el estado estaba compuesto eminentemente por pueblos, independientemente de su distribución territorial, como parece indicar el punto 1, de manera que las repúblicas fueran meras distribuciones administrativas respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación y, en concreto, respecto del derecho de secesión, o si eran las repúblicas concreciones jurídico-administrativas con proyección territorial de esos “pueblos” con derecho de autodeterminación incluyendo secesión. Es decir, si el derecho a la secesión había de ser ejercido por pueblos etnoculturalmente definidos o por las repúblicas como reificación político-administrativa de los pueblos.

La diferencia no es en absoluto baladí y estuvo, como es bien sabido, en el corazón mismo de las argumentaciones en torno a la legitimidad de las reclamaciones independentistas y los conflictos bélicos de los años noventa. Esto es así, naturalmente, porque no coincidían, ni en 1946 ni en los noventa, las fronteras de las repúblicas con los límites de los grupos etnoculturalmente definidos. En el caso yugoslavo, la creación de repúblicas que llegaron a simbolizar una suerte de *kinstate* para el nacionalismo de cada uno de los más relevantes grupos identitarios no se llevó a cabo, en absoluto, de manera que fueran perfectamente coincidentes territorios con grupos étnicos (tampoco es que fuera posible en mi opinión); importantes comunidades de una nacionalidad vivían en otras repúblicas (serbios en Kninska krajina en la Republica Popular de Croacia, en Bosnia y Herzegovina, croatas en Vojvodina y en Bosnia y Herzegovina, etc.). Esto creó en el imaginario colectivo dos categorías de pueblos, aquellos que eran pueblos constituyentes del estado (serbios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos y más tarde los musulmanes, luego denominados bosníacos) y minorías o nacionalidades (gitanos, judíos, judíos, albaneses, húngaros y eslovacos de Vojvodina, etc), algo hasta cierto punto difícil de comulgar con la idea de igualdad de los pueblos.

Por otro lado, como hemos reiterado en páginas anteriores, si algo caracteriza la doctrina nacionalista es precisamente lo contrario, la identificación de un territorio y de un poder proyectado en el territorio delimitado con una cultura o etnicidad concreta predominante y, en ultimo caso, homogénea. Y si no es así en la realidad presente, existe la voluntad de que así llegue a ser en un futuro en cuanto ideal de la imaginación. Cuando esta identificación no coincide con la realidad, algo que sucede a menudo, dada la terca

naturaleza humana y su dinámica cultural tendente siempre a mezclarse y mutar, la solución, para los más exaltados, pasa por “corregir” las fronteras para adaptarlas al grupo o “corregir” los grupos para adaptarlos a las fronteras definidas por otros criterios, normalmente la Historia, con las eventuales terribles consecuencias que eso puede conllevar para las personas.

Seguir la evolución institucional de los principales órganos constitucionales de representación de los pueblos y repúblicas tampoco aclara todas las dudas en torno a la cuestión. Por ahora describamos solamente que el artículo 52 de la Constitución de 1946 dividía el órgano supremo, la Asamblea Nacional (o Asamble Popular, *Narodnu skupštinu*) de la República Federativa Popular de Yugoslavia, en dos cámaras, el Consejo Federal (*Savezno veće*) y el Consejo de los Pueblos (o Consejo de las Nacionalidades, *Veće naroda*).

La ruptura entre Tito y Stalin en 1948 abrió un período de incertidumbre política marcado por la amenaza soviética. Con la muerte de Stalin el 16 de octubre de 1952 y la sucesión de Khrushchev se rehabilitarían las relaciones yugo-soviéticas. Es en ese contexto que se aprobó la Ley Constitucional que entró en vigor en enero de 1953. Aunque formalmente enmendaba la Constitución de 1946 la reforma era de gran calado y reforzaba sustancialmente, por un lado, la figura de Tito y, por otro lado, sentaba la bases institucionales para emprender un camino, ya anunciado con la aprobación el 26 de marzo de 1950 de la Ley sobre la gestión de empresas por las colectividades de trabajo, alejado por un lado del unitarismo de la Yugoslavia de entreguerras, pero también alejado del centralismo descentralizado soviético. Este camino sociopolítico propio hacia un modelo de autogestión socialista cristalizaba constitucionalmente con un simbólico golpe sobre la mesa ya sin la amenaza exterior del fallecido Stalin, alejándose de las bases del centralismo soviético.

El artículo 1. De la Ley Constitucional de 1953 mantenía el nombre del estado pero la descripción aclaraba que se trataba de un “estado federal democrático *socialista* de pueblos soberanos iguales en derechos”. Mientras que la Constitución anterior clamaba que todo el poder era del pueblo, el nuevo texto constitucional lo transformaba en “pueblo trabajador”.

Se incidió en el “autogobierno” de los productores en la economía, que según el art. 6 consistía “particularmente en el derecho de los colectivos trabajadores a gestionar sus unidades económicas directamente y a través de los Consejos de trabajadores, asambleas (...)”, de manera que los productores habrían de ejercitar “los derechos de autogobierno sobre la base de la constitución y las leyes y dentro del marco de los planes económicos”. Institucionalmente, el nuevo texto dividía la Asamblea en el Consejo Federal y el Consejo de Productores, de manera que el Consejo de las Nacionalidades fue diseñado como una cámara separada en el Consejo Federal, en el que las repúblicas y unidades autónomas tenían derechos de veto sobre decisiones que el Consejo Federal pudiera adoptar en detrimento de las relaciones constitucionalmente protegidas entre federación y repúblicas.

Edvard Kardelj (que volvió a presidir las sesiones constituyentes del texto de 1953 como

haría de nuevo en 1963 y en 1974) consideraba, según nos indica Ana S. Trbovich, que los cambios constitucionales procuraban prevenir la aplicación de la autodeterminación para fines “reaccionarios y antisocialistas que minen la amistad o extiendan el odio entre los pueblos, impidiendo su cooperación natural”⁷³⁹.

En el famoso discurso pronunciado por Tito en Split, el 7 de mayo de 1962, el mandatario mantenía la misma visión que explicó algo menos pormenorizadamente respecto a su discurso en Ljubljana y más emocionalmente; el auditorio era obviamente otro. En relación con las debilidades o retos a los que se enfrentaba la sociedad, Tito declamó: “(...) En los últimos tiempos ha habido no pocos de [estos] fenómenos nocivos, tales como el localismo o el chovinismo, que parecen deberse a razones materiales y a la bajada de guardia de los comunistas. Algunos comunistas han olvidado de los intereses más amplios de la comunidad entera. Algunos comunistas miran sólo por su círculo más cercano, lo que ha conducido al descontento político y a ciertas irregularidades en algunas repúblicas.

Hemos derramado un mar de sangre por la fraternidad y la unidad de nuestros pueblos y no vamos a permitir que nadie toque o destruya desde dentro esta hermandad y unidad.

Estas debilidades políticas e irregularidades son el resultado del desarrollo cultural en nuestro país. (...) La gente está regresando a su Historia de nuevo y han comenzado a picotear en ella, olvidando el futuro desarrollo de nuestra comunidad socialista en su conjunto. ¡Ninguna de nuestras repúblicas sería nada si no estamos todos juntos!. Tenemos que crear nuestra propia historia, nuestra historia socialista yugoslava, única también en el futuro, sin perjuicio del derecho nacional de las repúblicas individuales de cultivar sus propias tradiciones, pero no a expensas de los intereses de toda la comunidad, sino para complementarse entre sí. Este es nuestro camino, el que queremos, y no romper nuestra unidad por cualquier cosa. No creemos, como hacen algunos elementos burgueses que no han confluido con el pensamiento socialista en nuestro desarrollo, que debemos volver a los viejos derroteros. Son ellos los que influyen a algunos comunistas (...). Tenemos que mantener nuestro mayor logro, la fraternidad y la unidad de nuestros pueblos, ya que nos permite poder seguir avanzando en un camino creativo, para crear una fuerte comunidad socialista y hacer la vida más feliz a nuestro pueblo. Incluso hoy en día, quince años después de la guerra, todavía tenemos que hablar de hermandad y unidad, incluso aunque hoy esto ya debería ser la carne y sangre de cada ciudadano de Yugoslavia (...). La descentralización entre nosotros existe para desarrollar iniciativas a la creatividad, para gestionarnos más fácilmente, pero no para que cada ventanilla⁷⁴⁰ haga lo que le de la gana. Cada uno de nosotros tiene que mirar por el bien del conjunto de nuestra comunidad, por todo lo que es en interés de la comunidad, porque aquello que es en el interés de la comunidad, sin duda es también en interés de cada individuo, de cada unidad local y de cada comuna (...).⁷⁴¹

Reflexionando sobre la cuestión y las internas contradicciones del régimen, el marxista estadounidense Horace B. Davis comentaba a final de los setenta que: “Tito condena “todo” nacionalismo en Yugoslavia -él hace una especial referencia al nacionalismo “estrecho” de varias repúblicas (...) La lealtad a Yugoslavia en su conjunto, por el contrario, es ensalzada como patriotismo. De nuevo, algunos marxistas condenan “todo” nacionalismo sobre la base de que la clase trabajadora, en la cual ponen su confianza, es internacional. Esta manera de pensar fue extendida antes de la Primera Guerra Mundial; aquellos que todavía la mantienen sesenta años más tarde son culpables de ensoñamiento. La clase

⁷³⁹ Trbovich, A.S., *Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration*, Oxford University Press, 2008, p.157

⁷⁴⁰ En el original utiliza la palabra *čepetak*, palabra de origen turco que significa ventana o escaparate de una tienda. Es una metáfora peyorativa del localismo chauvinista.

⁷⁴¹ Tito, Broz, J., *Govor na narodnom mitingu u Splitu*, mayo, 1962.

El original en serbocroata puede encontrarse en http://www.znaci.net/00001/138_88.pdf

trabajadora hoy no es más internacional que cualquier otra clase”⁷⁴².

Solo un año más tarde, el 7 de abril de 1963, se promulgó una nueva Constitución. Resaltemos que la intensa actividad constituyente y la dirección que debía tomar dominaba la vida política doméstica yugoslava. Además el historicismo propio de la ideología marxista favorecía esa evolución constitucional, pues la forma de estado era sólo transitoria en el camino hacia el estado comunista y cada constitución llegaba a entenderse obsoleta por el avance histórico del socialismo. Por eso, para justificar la necesidad de un nuevo texto constitucional, Edvard Kardelj afirmaba que los “textos constitucionales en vigor (...) no reflejaban ya el estado real del desarrollo socialista en Yugoslavia”⁷⁴³. La Constitución de 1963, además, supuso la definitiva adopción del modelo propio y la definitiva introducción del modelo autogestionario yugoslavo impulsado por Kardelj. El principio fundamental de este modelo era el derecho del ciudadano yugoslavo, de todo trabajador, a la autogestión de su propia organización de trabajo, incluyendo organizaciones productoras o sociales, de educación, sanitarias, etc.

Para Kardelj y los demás impulsores del modelo yugoslavo, la centralización por un lado y la burocracia como aparato del gran estado eran contrarias al socialismo, y la instauración de un modelo propio no era sólo un distanciamiento del modelo soviético y de su órbita de poder para consolidarse en el liderazgo de los No Alineados, sino un acercamiento al verdadero socialismo: “al analizar las causas de la aparición del imperialismo soviético en el campo internacional y de su posición agresiva contra nuestro país, hemos constatado que provenían de las relaciones del capitalismo de Estado que han triunfado en la Unión Soviética. Hemos constatado también que la degeneración de la revolución soviética era el resultado del despotismo del aparato estatal, que ahogaba la iniciativa social de los trabajadores, el resultado del triunfo del burocratismo sobre la revolución proletaria”⁷⁴⁴.

Además, en el sistema de autogestión yugoslavo, diseñado principalmente por Edvard Kardelj (con el apoyo inicial de Milovan Djilas, antes de que éste emprendiera su senda disidente), la cuestión nacional era considerada inseparable de la autogestión productiva de los trabajadores, como derecho de los trabajadores a decidir sobre sus propias plusvalías. Respecto al caso de Eslovenia, por ejemplo, sobre el que Kardelj había escrito un libro en 1939, “El desarrollo de la cuestión nacional eslovena”, éste consideraba que “la burguesía eslovena no estaba preocupada por los intereses de los eslovenos (...) sino por sus propios intereses de clase. Lo mejor que podían ofrecer era una autonomía cultural dentro de Yugoslavia. Pero la cuestión nacional (...) era también una cuestión política. Consecuentemente, la cuestión eslovena podría resolverse sólo cuando los eslovenos formaran su propio estado con un completo derecho de autodeterminación (...) en un estado más amplio multinacional como Yugoslavia (...). Podrían permanecer como parte de Yugoslavia sólo si y mientras no fueran explotados, sino tratados como un pueblo igual en su propio estado”⁷⁴⁵.

Si por un lado el estado descentralizado aspiraba a acabar con todas las estructuras de

⁷⁴² Davis, H. B, *Toward a Marxist Theory...*, op. cit. p. 52.

⁷⁴³ Ferrando Badía, J., “Los principios socio-económicos y socio-políticos del régimen político yugoslavo”, *Revista de estudios políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, n. 163, 1969, pp. 31-80, p.32

⁷⁴⁴ Ferrando Badía, J., “Los principios socio-económicos...”, op. cit., p. 34

⁷⁴⁵ Jović, D., *Yugoslavia: A State that Withered Away*. Purdue University Press, 2009, p. 56

opresión históricas, incluyendo las de clase y las de opresión nacional, ésta deslizó la idea de que la unidad yugoslava era en *interés* de los pueblos que conformaban el estado, dejando de lado las similitudes étnicas o culturales, como parte del proceso de internacionalización, por lo que, para autores como Jović, latía de fondo la idea de que la unión duraría lo que durara el interés.

Encontramos plasmada en el Preámbulo de la Constitución de 1963 la relación entre desarrollo y autodeterminación en la terminología propia de aquel tiempo, tan parecida al Congreso de Belgrado de 1961: “Considerando el hecho histórico de que el pueblo trabajador de Yugoslavia, bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo trabajador de Yugoslavia, derrocó la antigua sociedad de clases basada en la explotación, la opresión política y la inequidad nacional mediante su lucha en la Guerra de Liberación Popular y la Revolución Socialista para fundar una comunidad en la que el trabajo humano y el hombre sean liberados de la explotación y arbitrariedad **y cada pueblo de Yugoslavia y todos ellos juntos encontrarán las condiciones para un desarrollo libre y comprehensivo**”.

El primero de los “Principios básicos” de la Constitución de 1963 establecía que “los pueblos de Yugoslavia, en base al derecho de todos los pueblos a su autodeterminación, incluyendo el derecho de secesión, en base a su lucha común y su voluntad libremente declarada en la Guerra de Liberación Popular y Revolución Socialista, y de acuerdo con sus aspiraciones históricas, conscientes de que una mayor consolidación de su hermandad y unidad es de su común interés, se han unido en una república federal de pueblos y nacionalidades libres e iguales y han fundado una comunidad socialista federal de trabajadores, la República Socialista Federal de Yugoslavia, en la cual, en los intereses de cada pueblo y de todos ellos juntos, están logrando y desarrollando: (...) libertad nacional e independencia, hermandad y unidad entre los pueblos y solidaridad entre los trabajadores (...) unidad y coordinación de esfuerzos para desarrollar las bases materiales de la comunidad social y la prosperidad de la gente (...)”

Institucionalmente, con la Constitución de 1963, la Asamblea pasó a llamarse *Federal*, y estaba dividida en cinco consejos; el Consejo Federal, el Consejo Económico, el Consejo Educacional-Cultural, el Consejo Socio-Sanitario y el Consejo de Organización – Político. Para Juan Ferrando Badía, que entre nosotros estudió el sistema constitucional yugoslavo en 1969, “la unidad y solidez del federalismo yugoslavo procede —formalmente al menos, del sistema socio-económico y socio-político común a todas las Repúblicas federadas; pero de hecho depende, fundamentalmente, de la existencia de una sola ideología política cristalizada en dos organizaciones sociopolíticas: la Liga de los Comunistas y la Alianza Socialista del Pueblo Trabajador”⁷⁴⁶.

Cuenta Swain que en 1966 Tito se distanció de Ranković en 1966 y de Vukmanović Tempo en 1967, como rompió con Djilas a principios de los años cincuenta, de manera que de sus más cercanos colaboradores desde la guerra en 1968 sólo quedaba Edvard Kardelj. Sin embargo, fue entonces cuando Tito decidió “detener la autogestión de los trabajadores en lo que se percibía como una deriva hacia una dirección sindicalista, lo que resultó en que el poder fuera transferido a las élites de las repúblicas, lo que reencendió las pasiones nacionalistas”⁷⁴⁷.

Las manifestaciones de los albaneses en 1968 y la presión de eslovenos y croatas, que demandaban más derechos culturales (la llamada “primavera croata” demandaba desde el año anterior entre otras cosas el reconocimiento del croata como lengua distinta) y políticos, llevaron a la introducción ese año de distintas enmiendas en la Constitución;

⁷⁴⁶ Ferrando Badía, J., “Los principios socio-económicos...”, op. cit., p. 76

⁷⁴⁷ Swain, G., *Tito: A Biography*, op. cit, p. 3

Yugoslavia paso de tener seis a ocho partes constituyentes: seis repúblicas y dos provincias autónomas, Kosovo y Vojvodina, a las que se dio más autonomía. Kosovo-Metohija pasó a llamarse Kosovo, y a tener una Constitución en vez de Estatutos. El término minoría nacional fue reemplazado por el término nacionalidades –en aras de la igualdad de los pueblos- y se reintrodujo el Consejo de los Pueblos o Consejo de las Nacionalidades. Esto no detuvo en absoluto el debate sobre la cuestión nacional. En marzo de 1971 se introdujeron veintitrés enmiendas constitucionales que no satisficieron a los nacionalistas de distintas repúblicas. Estas enmiendas trataban de devolver tanto poder político a las repúblicas como se consideraba consistente con el mantenimiento de la federación”⁷⁴⁸. El gobierno central se quedó solamente las competencias de defensa nacional, asuntos exteriores, organización de comercio interno y ayuda a lugares subdesarrollados. “La tendencia descentralizadora afectó incluso a la Liga de los Comunistas, que fue dividida en ocho partidos regionales”⁷⁴⁹. Sin embargo, a pesar del gran calado de estas reformas, “los cambios constitucionales de 1971 no sofocaron la explosión nacionalista”⁷⁵⁰.

El 14 de mayo de 1971, en una entrevista concedida al periódico de la minoría húngara yugoslava *Magyar Szo*, Tito seguía manteniendo su posición socialista:

“(…) mucho se habla estos días acerca de si le deberíamos dar prioridad al interés nacional o al interés de clase, yo todavía doy prioridad a la clase”⁷⁵¹.

La organización cultural Matica Hrvastka, que había propuesto enmiendas constitucionales para formar un estado nacional soberano, en el que se asegurase el derecho a que los reclutas croatas del ejército yugoslavo sólo sirvieran en Croacia, un estado con su propio Banco Nacional, total competencia en el ámbito tributario y solo contribuciones voluntarias a la federación, aumentó sus demandas, que fueron creciendo registrándose en verano incluso demandas de anexión de la Herzegovina bosnia. El nuevo nacionalismo croata se revelaba tradicionalista y separatista.

Como relata Beata Huszka, que investiga la relación entre la retórica nacionalista y el surgimiento de la violencia étnica, la represión de estos brotes dejó solamente la Iglesia como foro de libre expresión nacionalista, fortaleciendo la relación entre religión/identidad nacional. Este argumento, naturalmente, es válido también para la evolución de los nacionalismos serbio y musulmán, luego denominado bosníaco. Las protestas y manifestaciones se sucedieron. En verano se registraron manifestaciones en Eslovenia. En noviembre una gran manifestación reunió a unos treinta mil estudiantes nacionalistas croatas y en diciembre, tras la subsiguiente destitución forzosa de líderes croatas del Partido Comunista Croata, se registraron disturbios en las calles de Zagreb⁷⁵². Las acciones de Tito para reprimir la deriva nacionalista de las élites regionales entre

⁷⁴⁸ Singleton, F., *A Short History of the Yugoslav Peoples*, Cambridge University Press, 1989, p. 265

⁷⁴⁹ Davis, H. B., *Toward a Marxist Theory...*, op. cit. p. 152

⁷⁵⁰ Trbovich, A. S., *Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration*, Oxford University Press, 2008, p. 162

⁷⁵¹ Swain, G., *Tito: A Biography*, op. cit., p. 171

⁷⁵² Huszka, B., *Secessionist Movements and Ethnic Conflict: Debate-Framing and Rhetoric in Independence Campaigns*, Routledge, 2014, p. 69

1971 y 1972 no acabó con el descontento y el auge de los discursos nacionalistas que se extendía en sectores de las distintas repúblicas.

En 1974 se produjo el último intento constitucional de acomodar el sistema a las reivindicaciones nacionales y adaptar el sistema yugoslavo a las nuevas condiciones económicas, críticas a raíz de la crisis del petróleo que golpeó con gran dureza a Yugoslavia. La Constitución de 1974 entró en vigor en febrero de aquel año, incorporando las últimas enmiendas. Fue una Constitución excepcionalmente larga -406 artículos-, lo que da una idea de la complejidad de los debates en torno a la redistribución competencial y equilibrios institucionales que trataban de superarse. Como en ocasiones anteriores, los ejes en torno a los cuales giraba la nueva Constitución fueron la consolidación de la autogestión, el fortalecimiento de la figura de Tito y la cuestión nacional. Respecto a la primera cuestión se establecieron disposiciones para fortalecer la descentralización económica definiéndose más pormenorizadamente el sistema de autogestión para protegerlo de la centralización estatal, aumentando ciertos derechos; respecto a la segunda cuestión, Tito fue nombrado a título vitalicio Presidente de la República y Comandante Supremo. Respecto a la cuestión nacional, opinaba el ya fallecido profesor norteamericano Dennison Rusinow, el nuevo texto constitucional no cambió el panorama “tanto como muchos estaban temiendo o deseando al final de 1972”⁷⁵³.

La Asamblea Federal volvió al bicameralismo, distinguiéndose el Consejo Federal (*Savezno vijeće*), el Consejo de Repúblicas y Provincias (*Vijeće republika i pokrajina*). Cabe subrayar que se otorgó mayor autonomía a Kosovo y Vojvodina, las dos provincias de la República Socialista de Serbia, que pasaron a denominarse Provincias Socialistas Autónomas, incluyendo derecho de veto en la Asamblea de Serbia, consagrándose el consenso entre repúblicas y provincias en procesos de decisión, incluyendo la modificación constitucional.

Artículo 1. La República Socialista Federativa de Yugoslavia es un estado federal en cuanto comunidad estatal de pueblos y sus repúblicas socialistas voluntariamente unidos, así como también sus provincias autónomas socialistas de Vojvodina y Kosovo que forman parte de la República Socialista de Serbia, está fundada en el gobierno y la autogestión de la clase trabajadora y toda la gente trabajadora, y es una comunidad democrática autogestionada de trabajadores y ciudadanos, y naciones [*naroda*] y nacionalidades [*narodnosti*] de iguales derechos⁷⁵⁴.

El reconocimiento del derecho de autodeterminación de los *pueblos*, o *naciones*, no de las nacionalidades, incluido el derecho a la secesión, pasó a plasmarse en la primera parte del prólogo, principios básicos, de la Constitución:

⁷⁵³ Rusinow, D., *The National Question in Yugoslavia: Oblique Insights and Observations*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2008, p. 308

⁷⁵⁴ El original dice: “Art .1. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je savezna država kao državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika, kao i socijalističkih autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova koje su u sastavu Socijalističke Republike Srbije, zasnovana na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, i socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnih ljudi i građana i ravnopravnih naroda i narodnosti”

“Los *pueblos* de Yugoslavia, en base al derecho de cada pueblo a su autodeterminación, incluyendo el derecho a la secesión, sobre la base de la voluntad libremente expresada en la lucha común de todas las naciones y nacionalidades en la Guerra de Liberación Nacional y la Revolución Socialista, de acuerdo con sus aspiraciones históricas, conscientes de que el mayor fortalecimiento de la fraternidad y la unidad es en su interés común, así como en el de las nacionalidades con las que viven, se han unido en una República Federal de naciones y nacionalidades libres e iguales para crear una comunidad federal socialista de los trabajadores - la República Federal socialista de Yugoslavia (...)”

Observemos que el derecho de autodeterminación se reservaba a las naciones/pueblos, no a las nacionalidades/minorías. La distinción era de gran importancia para la teoría política yugoslava.

Raymond Detrez, profesor de la Universidad de Amberes, en su reflexión con el significativo título “el derecho a la libre determinación y a la secesión de Yugoslavia: un nido de avispones de inconsistencias”⁷⁵⁵, subraya que “la palabra “nación” (*nacija*) o “pueblo” (*narod*) tenían al menos tres significados diferentes:

- i) “Nación Yugoslava”, basada en una concepción cívica de la nación, y en una aceptación de los principios normativos del socialismo Yugoslavo.
- ii) “Nación” como “proletariado”, los agentes del sistema yugoslavo de autogestión de los trabajadores.
- iii) “Nación” como comunidad etnocultural. Desde este punto de vista, la “nación Yugoslava” consistía en un número de “naciones étnicas”.

Pero además de esta polisemia, que ya hemos visto en constituciones anteriores, se plasmó en la Constitución de 1974 una referencia diferenciada expresa a dos conceptos relacionados: pueblo (*narod*) y nacionalidad (*narodnost*), diferencia que no se había hecho en 1946.

Se puede distinguir la relación entre pueblo (*narod*) y nacionalidad (*narodnost*) básicamente en dos niveles que dependen de la polisemia de “pueblo”. (i) Si pueblo significa A, nacionalidad significa X (ii) si pueblo significa B, nacionalidad significa Y.

(i) Así, cuando *narod* (nación o pueblo), se entendía desde el punto de vista civil, *narodnost* (nacionalidad) se entendía como nacionalidad, pueblo, nación, etnocultural. Tengamos en cuenta que, *también* se llegó a aceptar, de manera limitada, la identidad yugoslava como una nacionalidad etnocultural, especialmente reivindicada por descendientes de matrimonios mixtos, o por miembros del Partido Comunista. El sistema de cuotas en base a la etnicidad en el partido y gobiernos, sin embargo, no facilitaba el crecimiento de lo yugoslavo como identidad nacional etnocultural, y se mantuvo minoritario hasta el último censo de 1991.

Pero *también*, (ii) cuando pueblo o nación (*narod*) se entendía etnoculturalmente, nacionalidad (*narodnost*) adquiría otro significado. Según Ana Trbović el término

⁷⁵⁵ Detrez, R., “The Right to Self-Determination and Secession in Yugoslavia: A Hornets' Nest of Inconsistencies” en Coppeters, Bruno, Richard Sakwa, (eds.) *Contextualizing Secession. Normative Studies in a Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 112 y ss

nacionalidad (*narodnost*) era un término diminutivo, “una invención comunista. Tenía un significado diferente que el término legal, mejor conocido, “minoría”, y no significaba la ciudadanía de alguien en el contexto yugoslavo⁷⁵⁶. La cuestión de las minorías había sido abordada por el Comité Central de la Liga de los Comunistas en marzo de 1959, concluyendo que “las minorías nacionales son (...) un hecho de la vida y no puede ser resuelta redibujando fronteras o intercambiando población, sino que se les tiene que garantizar derechos totales”⁷⁵⁷.

Sin embargo, fue con el tiempo el término *narodnost*, nacionalidad, el que según Jović se acuñó como término políticamente correcto para referirse a minoría (*manjina*), término políticamente incorrecto⁷⁵⁸, tal vez porque podía inducir a pensar que existían diferentes categorías morales de pueblos.

La búsqueda de un término políticamente correcto respondía a que la distinción entre *tipos* de pueblos, que era lo que habían hecho, precisamente, los regímenes imperiales, que distinguían entre pueblos “civilizados” y “no civilizados”, entre aquellos conquistadores y conquistados; también una señal de identidad del fascismo y del nacionalsocialismo que distinguían entre pueblos superiores e inferiores. Por ello, la Constitución Yugoslava de 1974 recogió expresamente que:

“Art. 245. En la República Socialista Federativa de Yugoslavia, pueblos y nacionalidades son iguales.”

Una igualdad a la que se hacía referencia también en el preámbulo y en el art. 1. La aparente contradicción se intentaba justificar no por la calidad del pueblo sino por su situación coyuntural en Yugoslavia, especialmente en relación a su identificación o no con una de las repúblicas federadas.

Así, explica Raymond Detrez, “en la práctica, una nación era una comunidad nacional que tenía su propio estado-nación o “patria” dentro de Yugoslavia, mientras que una nacionalidad era una comunidad nacional con su estado-nación o “patria” fuera de Yugoslavia”⁷⁵⁹.

El uso del término *nacionalidad* en vez de *minoría* también estaba justificado por el sencillo hecho de que en Yugoslavia no había una mayoría etnocultural aplastante respecto a la que definir minorías. En la Hungría de hoy, parece claro que los eslovacos son una minoría nacional respecto a la mayoría húngara, y Rusia se ha listado ciento veinte minorías respecto a la mayoría rusa. Pero esta apreciación era algo más difícil en Yugoslavia, donde incluso los grupos mayoritarios eran minoritarios respecto al conjunto.

Así, esta nueva acepción de “nacionalidad”, entendida como “minoría nacional”, (recordemos que tradicionalmente se había destinado a pueblo etnoculturalmente definido independientemente de su número y de si controlaba un estado), se opuso a la

⁷⁵⁶ Trbovich, A. S, *Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration*, Oxford University Press, 2008, p. 168

⁷⁵⁷ Davis, H. B, *Toward a Marxist Theory...*, op. cit. p. 154

⁷⁵⁸ Jović, D., *Yugoslavia: A State that...*, op. cit. p. 139

⁷⁵⁹ Detrez, R., “The Right to Self-Determination and Secession in Yugoslavia: A Hornets' Nest of Inconsistencies”, Coppieters, Bruno, Richard Sakwa, (eds.) *Contextualizing Secession. Normative Studies in a Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 115

equivalencia entre “pueblo” (*narod*) y “nación” (*nacija*), aunque completó el escenario de confusión terminológica al que nos hemos referido en páginas anteriores.

A pesar de proclamar en repetidas ocasiones la igualdad de los pueblos, se creó cierta jerarquía entre los pueblos y nacionalidades. Esta distinción, corrobora Raymond Detrez, se hacía visible de dos maneras: En primer lugar, “las unidades federales de los pueblos o naciones eran llamadas “repúblicas”; aquella de las nacionalidades, “provincias autónomas”, (...) territorialmente y constitucionalmente partes de la república de Serbia”⁷⁶⁰. En segundo lugar, como ya hemos indicado, aunque en términos de competencias atribuidas, repúblicas y provincias autónomas tenían un grado de autonomía muy similar con la nueva Constitución, se mantenía la diferencia simbólica de que sólo los pueblos (o naciones) y no las nacionalidades, tenían derecho a ejercitar el derecho de autodeterminación, incluido el derecho a la secesión.

Con este trasfondo, se entiende, por ejemplo, la fundamental importancia del reconocimiento progresivo de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina como *narod*, es decir, nación/pueblo, un caso que ha sido alguna vez descrito como particular por la conformación de una nacionalidad a partir de una identidad religiosa, aunque no del todo extraño cuando se conoce la evolución de la construcción identitaria de los nacionalismos croata y serbio, pero también por el fomento de su construcción por parte de un régimen ateo como contrapeso a movimientos nacionalistas no deseados. Los musulmanes de Bosnia y Herzegovina habían sido incluidos en el censo de 1948 como “musulmanes indeterminados” (*neopredeljeni muslimani*), en el de 1953 como “yugoslavos indeterminados” (*neopredeljeni jugoslavi*). En 1961 como “musulmanes en sentido étnico” (*muslimani u etnickom smislu*). En 1963 se mencionaron en la Constitución de la República de Bosnia y Herzegovina, no en la federal, junto con serbios y croatas. En el censo de 1971 se les describió como “musulmanes en el sentido de nacionalidad” (*muslimani u smislu narodnosti*). En 1974 se hicieron nominalmente equivalentes nacionalidades y naciones en derechos, como hemos dicho, y en el censo de 1981 fueron finalmente incluidos como pueblo (*narod*) musulmán: Musulmanes (*muslimani*)⁷⁶¹. Podemos mencionar que ya al menos desde los años sesenta algunos miembros de este grupo aspiraban a que su comunidad pasara a ser reconocida como bosnia o bosniaca, haciendo una equivalencia entre el reconocimiento como pueblo / nación y el reconocimiento de una República federada madre, un *kinstate* para esa nación como la tenían serbios, croatas, eslovenos o macedonios. La diversidad etnocultural de Bosnia y Herzegovina desaconsejó esta vía.

Así las cosas, desde un punto de vista constitucional, la Constitución de 1974, que fue la última en vigor hasta la disolución de Yugoslavia, mantenía la tradición de reconocimiento del derecho de autodeterminación pero no aclaraba ni su contenido ni agotaba del todo el cómo debía ser implementado, propiciando el debate posterior sobre

⁷⁶⁰ Detrez, R., “The Right to Self-Determination and Secession in Yugoslavia: A Hornets' Nest of Inconsistencies” en Coppeters, Bruno, Richard Sakwa, (eds.) *Contextualizing Secession. Normative Studies in a Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2003, p.115.

⁷⁶¹ Allcock, J. B., *Explaining Yugoslavia*, Columbia University Press, New York, 2000, nota 21, p. 335.

si los sujetos eran las repúblicas o los pueblos –lo que cambiaba el panorama radicalmente-.

§3.5.3 La desintegración de Yugoslavia. Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración

§3.5.3.1 La desintegración de Yugoslavia (I). Causas y relación con los procesos de desarrollo

Así, como explica el profesor Stefano Bianchini, la autodeterminación y la secesión fueron dos conceptos incluidos en las constituciones comunistas, “aunque sólo fuera de una manera declarativa”. A pesar de su inclusión, “no se establecieron normas para hacer este derecho accesible. El mismo Lenin estableció que la secesión no era en interés de la clase trabajadora. No obstante, el sistema de reparto de poder comunista estaba basado en territorio, ratio étnico y co-optación sobre una base étnica; resultado de ello, los etno-intereses locales se hicieron cada vez más relevantes en la legitimación de las élites locales, mientras que la ideología comunista iba perdiendo relevancia. Por tanto, el etno-nacionalismo –alimentado por el comunismo- se convirtió en una fuente de relegitimación del estado y de partición del estado, a pesar de las limitadas provisiones constitucionales”⁷⁶².

En el caso de Yugoslavia, la cuestión de la autodeterminación era políticamente inseparable de la descentralización económica y la autogestión. Ambos conceptos, autodeterminación y autogestión, como hemos visto, formaban parte de los fundamentos constitucionales del país. Esto implicó que la grave crisis económica de los años ochenta (entre 1979 y 1984 se redujo el poder adquisitivo de los yugoslavos un ochenta por ciento⁷⁶³) puso en entredicho la idoneidad de la evolución constitucional yugoslava, pues los diferentes avances constitucionales en el sistema autogestionario no habían logrado detener o evitar la degradación del escenario económico.

Pero al poner en entredicho el particular sistema de autogestión yugoslavo así como el sistema de distribución de recursos, bienes y derechos entre unidades territoriales constitucionales, se cuestionaban los mismos fundamentos del sistema constitucional, incluyendo los modelos de distribución de recursos y derechos entre grupos identitarios. Cuestionar la idoneidad del modelo constitucional llegó a ser equivalente a cuestionar el mismo concepto identitario yugoslavo, lo más cercano a la identidad civil como oposición a las diferentes identidades primordialista promocionadas por las tesis nacionalistas.

Como muy bien explica Michael Hechter: ” (...) los estándares de vida comenzaron a decaer. El desempleo y la inflación se dispararon. Al requerirse la revisión constitucional, el régimen de amortización de la deuda transformó las normales disputas entre el gobierno central y los gobiernos regionales en conflictos constitucionales. Las repúblicas más capaces a adaptarse a las reformas políticas y económicas

⁷⁶² Bianchini, S., “Partitions: categories and destinies” en Bianchini, Stefano et al., *Partitions. Reshaping States and Minds*. Frank Cass. Taylor and Francis Group, Oxon, New York, 2006, p. 44

⁷⁶³ Moneo Lain, A., “La desintegración del régimen titista (1986-1989)”, *Balkanica. Revista de estudios balcánicos* n. 2. Embajada de España en Belgrado. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011, p. 97

del paquete de medidas de amortización de la deuda –Eslovenia y Croacia– buscaron incrementar su autonomía respecto al centro. Aquellos que estaban en desventaja por estas reformas defendían la recentralización. El resultado fue una crisis constitucional que se llevó a cabo entre los líderes republicanos que buscaban aumentar su control sobre los recursos económicos y políticos dentro de cada uno de sus territorios”⁷⁶⁴.

En relación con las causas mismas de la desintegración de Yugoslavia, si existe algo de consenso en la comunidad académica es que las causas fueron complejas y que es difícil adherirse a una sola explicación. Dejan Jović ha identificado, *grosso modo*, ocho diferentes tipos de argumentos a los que se han adscrito las múltiples teorías y explicaciones que se han propuesto acerca de la desintegración de Yugoslavia⁷⁶⁵:

- (1) El argumento económico;
- (2) El odio étnico atávico;
- (3) El argumento nacionalista;
- (4) El argumento cultural;
- (5) La política internacional y los intereses geoestratégicos de terceros países (ya sean intereses o incompetencia);
- (6) El papel de las personalidades (especialmente de Tito y Slobodan Milosević);
- (7) La caída de los imperios;
- (8) El orden institucional y constitucional.

Explica adicionalmente Jović, que defiende el papel de las ideologías de las élites en un marco de causas complejas interrelacionadas, que algunos autores, en un intento de defender su propia teoría, tienden a representar un escenario en que las causas de la desintegración fueron singulares en vez de múltiples. Pero todo apunta, precisamente, a un escenario complejo en el que las causas de la desintegración no fueron ni mucho menos únicas.

Sin embargo, es importante mencionar que si existe un tipo de argumento que ha sido especialmente desechado por la mayoría de los autores de los signos más dispares, incluyendo de los mencionados Jović o Bianchini, Florian Bieber, Javier Veiga (que incide en el papel desastroso de la intervención internacional en *la trampa balcánica*) y tantos y tantos otros, es sin duda el (2) de los odios soterrados y antiguos, esos latentes y atávicos, presente entre las etnias desde tiempos inmemoriales y absolutamente inevitables, una “avispero balcánico” que de manera recurrente enfrenta a sus naturalmente beligerantes habitantes. Este argumento, especialmente preferido por los nacionalismos locales, fue comprado sin rechistar por medios de comunicación y comunidad internacional. Sin embargo, este argumento, popularizado con cierto éxito durante e inmediatamente tras los conflictos de los años noventa, favorecido por el orientalismo y el desconocimiento de la realidad sociopolítica yugoslava, ha sido lamentablemente uno de los argumentos más repetidos a nivel periodístico y popular.

⁷⁶⁴ Hechter, M., “Containing Ethnonationalist Violence” en Wimme Rowman, A (ed). *Facing Ethnic Conflicts: Toward a New Realism*, Littlefield Publishers, Lanham, USA, pp 295 y ss.

⁷⁶⁵ Jović, D., *Yugoslavia: A State that...*, op. cit., p. 13.

Contrariamente, si hay un argumento o familia de argumentos cuyo peso ha sido creciente y ha ido adquiriendo peso con la distancia histórica es el conjunto de argumentos más racionalistas y “materialistas”, entre los que destacan los ya avanzados argumentos de la circunstancia económica y la arquitectura constitucional e institucional con la que contaba Yugoslavia para enfrentarse a estas circunstancias socioeconómicas. En este sentido, en opinión de un gran grupo de poder, para entender la disolución de la Yugoslavia socialista, como hemos mencionado, debemos dirigir nuestra atención “a la segunda mitad de los años ochenta, cuando la cohabitación de las naciones de la República Socialista Federativa de Yugoslavia no parecía ser posible por más tiempo, antes que nada por razones económicas”⁷⁶⁶.

Pero el grupo de argumentos materialistas no se acaban en la crisis económica –reducción de recursos disponibles-, sino que se extienden a todo el marco de condicionalidades de intereses de los individuos que pasan a convertirse en argumentos ideológicos emocionales. Así han ganado peso también las voces que advierten de que las causas económicas no fueron causas únicas aunque sí necesarias. La crisis económica, muy fuerte, debe ser enmarcada en un escenario de altísimo desequilibrio económico territorial y constitucional, con repúblicas ricas geográficamente cerca de las zonas más ricas de la entonces Comunidad Europea, que hacía de fuerza atrayente, y unas zonas pobres geográficamente colindantes con regiones desfavorecidas de Europa, la desaparición de amenazas exteriores que justificaran la unión en un contexto de final de la Guerra Fría, etc.

Todo esto favorecido por la arquitectura constitucional e institucional de la propia Yugoslavia. En esta tesis no defendemos que las causas económicas y materiales sean las únicas responsables de la desintegración, pero sí su más que evidente relevancia. También defendemos la compatibilidad e interrelación de causas: por ejemplo, es compatible el argumento económico e institucional con el déficit democrático en la antigua Yugoslavia y la ausencia de una sociedad civil desarrollada que pudiera actuar eficazmente para impedir los conflictos o para oponerse a una identidad meramente primordialista o con el relevante papel de las élites políticas a la hora de conducir las crisis tras el fallecimiento de Tito el 4 de mayo de 1980.

Por supuesto, también son distinguibles, y merecen cuidadosa reflexión y consideraciones aparte, -aunque estén indefectiblemente relacionadas-, las *causas* y *argumentos* de la disolución del estado con las causas de la *forma* de disolución, en particular que se llegara al terrible límite del conflicto armado, concentrándonos en las primeras.

Ahora bien, aceptando la complejidad de las causas, son este grupo de teorías o de explicaciones de la desintegración de Yugoslavia basadas en explicaciones racionales y materialistas, obviamente las que mayor relevancia tienen y explicaciones ofrecen a la hora de comprender la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo en el específico contexto yugoslavo.

⁷⁶⁶ Mrak, M., Rojec M., Silva-Jáuregui, C., (eds). *Slovenia: From Yugoslavia to the European Union*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2004, p. 34

Si Aristóteles reflexionaba que los hombres se reúnen en comunidades políticas para la vida mejor, bien podríamos decir que, desde un punto de vista de procesos de desarrollo, no sorprende que cuando la vida les sea peor, quieran cambiar las bases constitucionales de su unidad política (sea esa o no la causa del empeoramiento de sus condiciones de vida). Con esta reflexión de fondo, observemos la evolución de los procesos de desarrollo (desarrollo como proceso de expansión de libertades y derechos y crecimiento económico) durante los años ochenta en Yugoslavia: un proceso no sólo en regresión por la crisis económica en el conjunto del país, sino con diferentes estados y perspectivas en cada una de las repúblicas.

Pero no sólo es un problema de proceso de desarrollo a nivel estatal –i.e reducción de derechos y recursos por la crisis económica-, sino la divergencia de diversos procesos de desarrollo distinguibles por la descentralización del estado y las perspectivas de mejora relativa de unos procesos respecto a otros, pues ninguna ideología puede sobrevivir si propone un empeoramiento de las condiciones de vida como objetivo final –aunque si como fase hacia un final feliz-.

En el caso la Yugoslavia, a pesar de ser un estado socialista, las diferencias de desarrollo entre las diferentes unidades federadas eran muy considerables, diferencias que se fueron agravando con el tiempo y con la crisis económica, que se inició al fin de los años setenta, tras una década de crecimiento económico. Las respuestas descentralizadoras para hacer frente a las dificultades económicas se acompañaban de un sistema corrector a nivel federal de redistribución de bienes y recursos.

Para David Raič, la década que siguió al fallecimiento de Tito se caracterizó por otro decrecimiento económico. La segunda crisis del petróleo y la recesión mundial en la primera parte de los años ochenta resultó en un decrecimiento de la habilidad de Yugoslavia de obtener crédito extranjero. La situación económica alimentó los sentimientos antifederalistas y anti-redistributivos tanto en Croacia como en Eslovenia⁷⁶⁷.

Vesna Bojicić considera que “Yugoslavia se convirtió en la víctima de una crisis económica aún más seria que en los años anteriores. (...) El gobierno federal había estado preocupado con la distribución de riqueza con el fin de (más) unidad nacional. Sin embargo, los costes relacionados con las políticas de redistribución regional fueron a costa de las repúblicas relativamente más ricas y desarrolladas, es decir, en particular Eslovenia y Croacia, las cuales se sintieron explotadas”⁷⁶⁸.

Antonio Moneo Laín, para quien “la crisis yugoslava tuvo mucho que ver con su propia estructura económica y política”⁷⁶⁹, explica cómo es imposible ignorar la creciente

⁷⁶⁷ Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination...*, op. cit., p. 346

⁷⁶⁸ Bojicić, V., “The Disintegration of Yugoslavia: Causes and Consequences of Dynamic Inefficiency in Semi-Command Economies”, en Dyker D., Vejvoda I.,(eds) *Yugoslavia and After - A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth*, Longman. London, New York, 1996, pp. 28-47.

⁷⁶⁹ Moneo Laín, A., “La desintegración del régimen titista (1986-1989)”, *Balkania. Revista de estudios balcánicos* n. 2. Embajada de España en Belgrado. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011, p. 91

fractura territorial que “había comenzado a sentirse en 1964 (...) para tratar de solucionarla, se creó un Fondo de Cohesión territorial (FADURK)”. Como bien explica este autor, siguiendo a Sabrina Ramet, “con el avance de la crisis económica, el distanciamiento entre unas y otras regiones se transformaría también en una cuestión política porque, dados los malos resultados obtenidos hasta el momento, no quedaba claro si una mayor descentralización podría contribuir a resolver el problema o si, por el contrario, se debían centralizar más los recursos para distribuirlos en función de las necesidades de la Federación. Las posiciones comenzaron a quedar claras a finales de 1978 cuando Eslovenia y Croacia comenzaron a plantear la posibilidad de reformar la estructura del FADURK para intentar dejar solo a Kosovo como potencial receptor de ayuda económica. El legado más claro de esta coyuntura fue la aparición de una nueva forma de hacer política basada en el recurso continuo de mensajes populistas de corte nacionalista y a la movilización de las masas (...)”⁷⁷⁰.

A la vista de este escenario, los exaltados sentimientos nacionales no aparecieron sin motivo ni inconexos de un escenario en el que las condiciones materiales favorecían estas actitudes; lo que podrían considerarse como elecciones racionales de los individuos tomados de uno en uno, cada uno en relación con su identidad –sus intereses conformando ideologías-, llegaron a convertirse en irracionalidad colectiva.

Así, los problemas de los procesos de desarrollo en su sentido más amplio (a nivel estatal y de las unidades subestatales) pueden ser hoy incluidos sin ninguna duda entre los factores o *causas* que condujeron a la desintegración de Yugoslavia. Sin embargo, en el momento histórico de la desintegración, la miopía que supuso creer solamente en un conjunto de explicaciones místico-emocionales e historicistas típicas del primordialismo nacionalista, que como cortinas de humo desviaban la atención de cualquier otra causa, no sólo entorpecieron durante un tiempo el asumir las causas materiales de la desintegración, sino que también evitaron que el desarrollo de todos fuera tenido en cuenta en la aplicación del derecho de autodeterminación, tanto en la fase negociadora como en la fase de efectiva sucesión de estados e implementación de acuerdos.

Por otro lado, paradójicamente, hasta comienzos de los años noventa, como hemos visto en la primera parte de esta tesis, el derecho al desarrollo estaba en lo más alto de la agenda de política internacional de Yugoslavia. Sin embargo, no se reconocieron totalmente las implicaciones de la total realización de ese derecho al desarrollo a nivel local al considerar la ampliación del derecho de autodeterminación.

Así, si desde el punto de vista de las causas que llevaron a la desintegración del país no se aceptaron tan ampliamente como se haría hoy en día los problemas y divergencias de los procesos de desarrollo, desde el punto de vista jurídico tampoco se consideraron las interrelaciones del desarrollo como derecho con la autodeterminación como derecho.

Al considerar el derecho de autodeterminación, incluyendo la secesión, tal y como se planteaba en la Constitución, los debates políticos, jurídicos y académicos ignoraron ampliamente los efectos de ésta sobre el desarrollo de los pueblos y ciudadanos de Yugoslavia y aún menos sobre el derecho al desarrollo como derecho humano. Tampoco se consideró al intentar bordear la cuestión de la secesión y abogar, como hizo la

⁷⁷⁰ Moneo Laín, A., “La desintegración...”, op. cit., p. 98

Comisión Badinter, por una desintegración. De todas las definiciones de autodeterminación que hemos estudiado, sólo algunas se tomaron en consideración, pero minoritariamente aquellas que contemplan la autodeterminación como un proceso relacionado con la expansión de derechos de pueblos e individuos interrelacionados.

El desarrollo –menos aún el desarrollo como derecho humano- no fue considerado como una parte fundamental del debate sobre el derecho de autodeterminación, sino como algo accesorio, y cuando lo fue, se hizo sobretudo en su sentido más estrecho –como un mero crecimiento económico y no como un proceso de expansión de libertades- o como una herramienta política para alcanzar un tercer objetivo (paz, independencia...). Se registraron, bien es cierto, consideraciones y debates sobre los beneficios que las repúblicas más desarrolladas o que ciertos pueblos podrían eventualmente conseguir de su secesión o de la desintegración, y también se tomaron en cuenta los factores económicos tras las demandas de autodeterminación externa de los pueblos, dado que Yugoslavia sufría de esa severa crisis económica durante los años ochenta combinada con importantes desequilibrios territoriales⁷⁷¹.

De manera relacionada, cuando los conflictos armados comenzaron, las conversaciones de paz incluyeron medidas económicas como herramienta para promocionar el alto el fuego o para amenazar a las partes implicadas en el conflicto.

Por ejemplo, los firmantes de la Declaración sobre Yugoslavia adoptada en la Reunión Extraordinaria de Cooperación Política Europea de 6 agosto de 1991 en La Haya, invitaron a la Comisión a “informar a los Doce sobre qué medidas económicas y financieras podrían tomarse contra aquellas partes que rechacen un alto el fuego y no acaten los principios mencionados y cómo mejorar las relaciones económicas y financieras con aquellas que efectivamente cooperen en este respecto”⁷⁷². Aunque estas razones materiales fueran consideradas de primer orden como explicaciones o factores que llevaron a la crisis política y humanitaria o incluso como instrumentos políticos de presión y negociación, no fueron, sin embargo, consideradas relevantes al debatir sus implicaciones con las secesiones o desintegración, ni mucho menos fue considerado el derecho al desarrollo de todas las partes implicadas (incluyendo el enfoque individual) entendido en el amplio sentido de Sen, Sengupta y otros (si se daba una expansión de libertades individuales).

Si las razones materiales detrás de la disolución del estado, o de la cadena de secesiones, en cuanto *causas* de la crisis, no fueron ampliamente consideradas al discutir el derecho a la autodeterminación incluyendo secesión desde un punto de vista legal, en comparación con su dimensión como razones para justificar una secesión (junto con otras más preferidas, de orden irracional, emocional o primordialista), los consecuentes *efectos* que la disolución de Yugoslavia tendría en las condiciones de desarrollo de todos los pueblos fue aún menos tenido en consideración y, cuando se hizo, el punto de vista fue

⁷⁷¹ Chandler, D. “Western Intervention and the Disintegration of Yugoslavia”, 1989-99, Herman, E. and Hammond, P. (eds) *Degraded Capability: The Media and the Kosovo Crisis*, Pluto Press, London, 2000.

⁷⁷² Trifunovska, S., *Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution*, Kluwer Academic, Amsterdam, 1994, p. 328

fuertemente colectivista, republico-céntrico o etno-céntrico, como si las eventuales secesiones o desintegración del estado no fueran a tener un impacto entre ellos desde el punto de vista del desarrollo, como si la disolución fuera a tener parecidas consecuencias para todos los pueblos en Yugoslavia.

Los efectos de la desintegración como mucho eran analizados como si de un divorcio se tratara, lo que los economistas llamarían un *análisis* estático (que no tiene en cuenta la proyección en el tiempo) en contraposición con un mucho más apropiado *análisis dinámico*, más adecuado a procesos tales como el desarrollo o la misma autodeterminación (desde un punto de vista comprehensivo). Esto es especialmente cierto para las primeras de esa cadena sucesiva de secesiones a comienzos de años noventa - como diría Francisco Veiga-, las de Eslovenia y Croacia. A medida que fue pasando el tiempo, y las secesiones de esa cadena, encontramos algunos análisis correctores.

En el caso yugoslavo, los impactos de la desintegración del estado, o de la cadena de sesiones, sobre los procesos de desarrollo fueron considerados sobre todo *después* los conflictos armados, desde los puntos de vista de impacto de la guerra en el desarrollo y de impacto de las secesiones mismas, esto es, el impacto de la creación de fronteras internacionales y limitaciones en la circulación de personas y bienes, apertura y cierre de mercados, etc. en la redistribución de bienes y derechos de los ciudadanos.

El 3 de agosto de 1994, en respuesta a la solicitud del Secretario General de Naciones Unidas de diciembre de 1993 a la Comisión de Derechos Humanos⁷⁷³, el Gobierno de la República Federal de Yugoslavia emitió el documento "*Informe de los obstáculos a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo*"⁷⁷⁴, en el cual se confirmaba que el proceso de desarrollo social y económico se había detenido:

"Aunque legalmente en vigor e institucionalizado, tanto a nivel federal como de repúblicas, la implementación del derecho al desarrollo en la República Federal de Yugoslavia ha sido frustrado en los pasados años dado que el ambiente internacional ha provisto un obstáculo absoluto al desarrollo".

El segundo tipo de impacto, el de las nuevas fronteras estatales sobre los diferentes procesos de desarrollo, fue analizado más pormenorizadamente una vez que dichas fronteras fueron evidenciadas y vividas por los ciudadanos. Pero sólo tras el establecimiento de las primeras fronteras, es decir, sólo tras la constatación de que los derechos individuales fueron afectados para bien o para mal, de diversas formas, encontramos documentos complejos y elaborados que previenen sobre estos efectos.

No encontramos documentos muy detallados sobre el efecto de nuevas fronteras sobre procesos de desarrollo sobre las gentes de Yugoslavia *antes* de las independencias de Eslovenia y Croacia (efecto en pensiones y otros derechos sociales, educación, sanidad, régimen matrimonial, propiedades, etc.), pero sí *después*. Esto se plasmó también en

⁷⁷³ Resolución 1993/22

⁷⁷⁴ Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías E/CN.4/Sub.2/1994/47

documentos de advertencia sobre fronteras futuras, pero de impacto social limitado –dado que los procesos de secesión fueron en cadena–.

Analizaremos, un poco más adelante, a modo de ejemplo, un documento elaborado por Naciones Unidas poco antes del referéndum de independencia de Montenegro en 2006. Este documento, veremos, trata precisamente de las posibles consecuencias para grupos vulnerables y para los derechos de la población en general del establecimiento de nuevas fronteras estatales. Pero es un documento aislado y de alcance limitado. Aunque utiliza un enfoque de derechos humanos, no aborda una perspectiva de derecho humano al desarrollo. No es posible encontrar un análisis de estas características de finales de los años ochenta.

§3.5.3.2 La desintegración de Yugoslavia (II). Interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración

Dicho esto, dado lo gigantesco de la cuestión, la abundantísima literatura y nuestro limitado espacio, en la presente sección intentaré resumir dos cuestiones:

- (i) por un lado, cómo se interpretó y aplicó el principio de autodeterminación durante el proceso de desintegración de Yugoslavia
- (ii) por otro lado, cómo esas interpretaciones y aplicación del derecho de autodeterminación se realizaron dentro de un marco ideológico identitario y de debate sobre grupos con derecho a una ilimitada soberanía y fuera de un marco comprensivo de derechos humanos, no teniendo en cuenta sus efectos o interrelaciones con el desarrollo ni de pueblos ni repúblicas, y mucho menos con el derecho al desarrollo como derecho humano (independientemente de las causas que hoy se den académicamente para explicar la desintegración o de las motivaciones que se presentaron en su día). Es decir, cómo el derecho al desarrollo de pueblos y ciudadanos de Yugoslavia en su conjunto fue ignorado por todas las partes, incluyendo la comunidad internacional y la mayoría de la academia, al interpretar el derecho de autodeterminación, incluyendo la secesión. Esta cuestión es la más relevante para esta tesis.

Abordaré ambas cuestiones al mismo tiempo. Asimismo, me distanciaré conscientemente, y esto es importante, de la legitimidad o no del resultado final de disolución de Yugoslavia. Sí que mantendré firmemente, como he indicado, la importancia de las causas materiales, especialmente de la desigualdad de desarrollo entre repúblicas en un marco fuertemente descentralizado y en un contexto de grave crisis económica. Pero no entraré, en absoluto, en considerar la legitimidad o conveniencia del resultado histórico de disolución de mantener el estado incólume o juzgar la soberanía de pueblos/repúblicas. En concreto tampoco entraré en la cuestión del derecho de pueblos / repúblicas a la aplicación efectiva de una autodeterminación constitutiva (en términos de Anaya) o autodeterminación externa, i.e. establecimiento de nuevas fronteras estatales.

Esta aclaración es de suma importancia porque lo contrario, posicionarse ante la

legitimidad o no legitimidad jurídica (en un momento anterior al estallido del conflicto), puede distraer la atención sobre la cuestión fundamental que quiero tratar más adelante: si se afectó y cómo pudo afectarse el derecho / los derechos al desarrollo de pueblos e individuos con las interpretaciones que se dieron y formas de aplicación del derecho de autodeterminación en el caso de Yugoslavia.

Entiendo la dificultad de separar estas cuestiones si tenemos en cuenta la importancia de las teorías remediales de la secesión (a pesar de que en el caso de Yugoslavia se declaró una desintegración). Esto es especialmente difícil cuando se trata un caso en concreto, no en abstracto —una cosa es estar de acuerdo con una teoría remedial y otra reconocer que las condiciones se dieron efectivamente en un caso concreto—. La cuestión se complica porque las causas y justificaciones difieren desde antes del estallido de los conflictos a cuando ya los derechos humanos fueron masivamente vulnerados, incluyendo su relación con la autodeterminación interna. Pero, por otro lado, hemos de incorporar la idea de que la guerra es la destrucción total de cualquier proceso desarrollo, pero es también un instrumento prohibido por el Derecho Internacional. Por eso las reflexiones aceptadas y aceptables para momentos anteriores al conflicto difieren tras el estallido bélico, pero esto no puede convertirse en una excusa para promocionar la guerra como instrumento para el logro de metas políticas (en este caso forzar la vía de la secesión o desintegración de último recurso o remedial).

Nuestra preocupación general no se dirige a precluir si la disolución puede y cómo puede constatar, o diferenciarse de las secesiones (dada su vinculación con el concepto más amplio de autodeterminación), si éstas deben o no prohibirse, etc., sino a si es posible y cómo hacerlo en un marco de derechos humanos, y más concretamente respetando el derecho humano al desarrollo. Nuestra investigación se encuentra en un marco de derechos humanos, esto es aceptando que la defensa de cualquier solución no es legítima si no se respetan los derechos humanos en general, y en particular el derecho al desarrollo de *todos* pueblos e individuos. La perspectiva pretende ser deontológica, por lo que nuestra posición, si se mira desde una perspectiva teleológica respecto a objetivos políticos prefijados puede gustar o ser detestada, dependiendo de esos intereses contingentes.

En las próximas líneas veremos como **las interpretaciones que se manejaron del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración de Yugoslavia no incluyeron ni un enfoque general de derechos humanos ni el respeto al derecho al desarrollo de los pueblos como derecho humano.**

En el caso de Yugoslavia, como bien sabemos, la Comunidad Internacional fue inicialmente reacia a reconocer las aspiraciones secesionistas de Eslovenia o Croacia (de los eslovenos y croatas desde el punto de vista de pueblos), refiriéndose al Acta de Helsinki de 1975 y otros documentos internacionales, los cuales, además de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos a la autodeterminación, proclamaban, como hemos visto, el principio de integridad territorial y la modificación de las fronteras por medios pacíficos y consensuados.

El 23 de diciembre de 1990 se celebró el referéndum de independencia de la República Socialista Federal de Yugoslavia, un evento que, junto con la Declaración de Brioni de 7 de julio de 1991, por el que la Presidencia Federal de República decidió la retirada del ejército de Eslovenia, completada el 25 de octubre de 1991, marca el comienzo de la disolución de Yugoslavia.

En enero de ese mismo año, 1990, se había realizado la Consulta Global de Naciones Unidas sobre la Realización del Derecho al Desarrollo⁷⁷⁵ en Ginebra, en la que Yugoslavia, liderando a los no alineados, tuvo un papel muy activo. Es importante para la evolución del derecho al desarrollo como derecho humano, en la Consulta Global se alcanzaron, según Marks “interesantes y bien informadas, que seguirán siendo válidas más de veinte años después”⁷⁷⁶. En la Consulta Global participó también el futuro Presidente de Eslovenia Danilo Türk.

Hago esta mención porque quiero ir mostrando hasta qué punto las reflexiones en torno a la realización del derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación discurrieron por cauces distintos: no se plantearon en ese momento las múltiples interrelaciones, tanto políticas, económicas, sociales, como jurídicas entre reconocer un derecho al desarrollo de todos los pueblos y un derecho de autodeterminación. Como veremos en los próximos párrafos, la autodeterminación se planteó sobre todo en términos identitarios y nacionalistas, y el derecho al desarrollo como un derecho relacionado con la arquitectura económica global. Prácticamente la única relación planteada entonces, además de su coincidencia en la lucha contra el imperialismo, era que la autodeterminación de los pueblos es un prerequisite para su desarrollo, interpretado por los nacionalistas como un derecho ilimitado de los pueblos etnoculturalmente definidos a la estatalidad y a partir de ahí a mejorar sus condiciones socioeconómicas, independientemente de las *consecuencias* sobre los derechos de los demás.

Tras el referéndum, la mayor parte de la Comunidad Internacional se posicionó inicialmente a favor de mantener la integridad territorial de Yugoslavia. En abril de 1991, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Alexander Bessmertnykh, declaró que la integridad territorial de Yugoslavia era “una de las precondiciones esenciales para la estabilidad de Europa”⁷⁷⁷. El 21 de junio de 1991, durante una visita a Yugoslavia, el Secretario de Estado James Baker declaró que los Estados Unidos no reconocería las declaraciones de independencia anunciadas por las autoridades de Eslovenia y Croacia. El 8 de julio de 1991, el Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, sin embargo, declaró no descartar la posibilidad de reconocer las nuevas repúblicas empezando a inclinarse por las tesis alemanas.

El 27 de agosto de 1991, la Comunidad Europea, en su “Declaración sobre Yugoslavia” adoptada en la Reunión Ministerial Extraordinaria de Cooperación Política Europea

⁷⁷⁵ E/CN.4/1990/9

⁷⁷⁶ Marks, S., “The Human Right to Development Between Rhetoric and Reality”, *Harvard Human Rights Journal*, vol.17, 2004

⁷⁷⁷ Radan, P., *The Break-up of Yugoslavia and International Law*. Routledge. Taylor & Francis Group, London, New York, 2002, p. 171

celebrada en Bruselas, comunicó claramente su “determinación de no reconocer nunca cambios de fronteras que no hayan sido producidos mediante medios pacíficos”. Se estableció asimismo una Conferencia de Paz sobre Yugoslavia cuya Presidencia fue encargada al antiguo titular de la cartera de exteriores británico Lord Carrington, cuyo mandato incluía el “no reconocimiento de ninguna de las repúblicas yugoslavas hasta que no se hubiera alcanzado un acuerdo general aprobado por las seis repúblicas”⁷⁷⁸.

El debate político fue así enfocado a las tensiones entre el principio de integridad territorial y el derecho de autodeterminación de los pueblos, sobre las consecuencias de la crisis para la comunidad internacional y, eventualmente, en preservar la paz y evitar una catástrofe humanitaria. Cuando el conflicto armado efectivamente estalló, finalmente prevaleció en la comunidad internacional el punto de vista de Alemania, favorable a una interpretación del derecho de autodeterminación tendente a favorecer una concepción etnocultural de pueblo, firmemente apoyada por su opinión pública tras la reciente reunificación (que subrayaba la importancia del pueblo etnocultural sobre las fronteras estatales). Sin embargo, los efectos que estas secesiones tendrían eventualmente sobre el desarrollo de todos los pueblos y ciudadanos de Yugoslavia a largo plazo fueron, una vez más, no tomados en consideración al debatir el alcance del derecho de autodeterminación.

Es importante mencionar que podemos encontrar intentos de paliar los efectos de la secesión –aunque no se adoptó el enfoque de derecho al desarrollo de todos– en documentos como la “Conferencia de Paz sobre Yugoslavia: acuerdos para una solución general”, más conocida coloquialmente como el borrador de Convención de Carrington (*Carrington Draft Convention*), presentado durante las conferencias de paz en La Haya el 18 de octubre de 1991⁷⁷⁹. La propuesta de Carrington incluía el reconocimiento de “repúblicas soberanas e independientes con personalidad internacional para aquellas que lo deseen” y el “reconocimiento de la independencia, dentro de las fronteras existentes, a menos que se acuerde de diferente manera”, pero también “una libre asociación de las repúblicas con personalidad internacional”. Se incluía la propuesta de que la asociación cooperarse en algunas áreas enumeradas en el acuerdo así como en otras “sin impedir formas de cooperación más estrechas en aquellas áreas (...) que deseen”. La propuesta preveía un compromiso con los derechos humanos y derechos de los grupos nacionales y étnicos, que debían ser cumplidos dentro de las fronteras de las repúblicas y la cooperación internacional entre repúblicas en las áreas de relaciones económicas (unión aduanera con una tarifa común exterior, mercado común interno, libertad de movimiento, aunque con limitaciones, cooperación en materias de competencia, transporte e infraestructuras), asuntos exteriores y seguridad (consultas en cuestiones de interés común, cooperación en acuerdos de defensa) y cooperación jurídica (control de crimen internacional, terrorismo, tráfico de drogas), y finalmente previendo la creación de instituciones para aplicar los términos de la convención.

El plan de Lord Carrington eventualmente no llegó a buen término, rechazado por Slobodan Milošević, quien consideró inaceptable la propuesta, muy en línea con los

⁷⁷⁸ Hannum, H., “Self-Determination in the Twenty-First Century” en Hannum, H., Babbitt, E., (eds) *Negotiating Self-determination*, Lexington Books, 2006, p. 63

⁷⁷⁹ El País, 20/09/1991 http://elpais.com/diario/1991/09/20/internacional/685317612_850215.html

intereses de Croacia y Eslovenia, que querían mantener sólo los vínculos que fueran convenientes para ellas en cuanto repúblicas más desarrolladas, y declaró que los temas más importantes sobre una Comisión de Arbitraje debería pronunciarse eran: en primer lugar, quién era el sujeto que tenía derecho de autodeterminación, si el pueblo o la unidad federal; en segundo lugar, la legalidad de la secesión en el derecho Internacional y las condiciones bajo las cuales esta secesión puede ser realizada; y en tercer lugar, el estatus de las fronteras internas y externas de acuerdo al Derecho Internacional⁷⁸⁰. El plan de Lord Carrington no logró un compromiso para evitar el conflicto y construir una paz duradera, una posición intermedia en la cual, aunque se garantizara soberanía a las repúblicas, algunos ámbitos competenciales se mantuvieran compartidos. Sin embargo, estas competencias compartidas no tendrían nada directamente relacionado con el mantenimiento o la mejora del nivel de realización de los derechos humanos o el aumento del desarrollo en su sentido más amplio (como expansión de derechos humanos y crecimiento económico).

El plan de Lord Carrington no incluía, por ejemplo, acuerdos entre las repúblicas en cuestiones educativas, de salud, servicios sociales, o medio ambiente. Pudiera no sorprender si consideramos estas cuestiones por un lado precisamente del ámbito exclusivo de decisión (política y presupuestaria) soberana de las repúblicas y, por otro, ignoradas ampliamente en la tradición histórico-política de la humanidad. Pero sin embargo, si se incluían instrucciones muy específicas sobre qué tipo de sistema económico deberían tener las repúblicas (“las repúblicas basarán sus políticas en los principios de economía de mercado, propiedad privada y libre empresa, y apertura al comercio mundial”), en una clara y abierta contradicción, podríamos sin duda decir, con el derecho de autodeterminación que estaba siendo considerado y debatido.

Aunque el plan de Carrington no llegó a buen puerto a finales de 1991, los documentos generados sirvieron como base de la posición internacional respecto a la crisis yugoslava. El 16 de diciembre de 1991, los Doce declararon unas “Líneas directrices referidas al reconocimiento de nuevos Estados en Europa del Este y Unión Soviética”, aprobadas en Reunión Ministerial Extraordinaria en Bruselas el 16 de diciembre de 1991. Estas directrices recogían:

“(…) La Comunidad y sus Estados miembros confirman su adhesión a los principios del Acta Final de Helsinki y de la Carta de París, en particular al principio de autodeterminación. Afirman su voluntad de reconocer, de conformidad con las normas aceptadas por la práctica internacional y teniendo en cuenta las realidades políticas en cada caso concreto, a estos nuevos Estados que, como consecuencia de las modificaciones históricas ocurridas en la región, se constituyan sobre una base democrática, acepten las obligaciones internacionales pertinentes y se comprometan de buena fe en un proceso pacífico y negociado. Por consiguiente, adoptan una posición común sobre el proceso del reconocimiento de estos nuevos Estados, que implica:

- el respeto de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de los compromisos suscritos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Humanos.

⁷⁸⁰ Trifunovska, S., *Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution*, Kluwer Academic, Amsterdam, 1994, p. 363

- la garantía de los derechos de los grupos étnicos y nacionales, así como de las minorías, de conformidad con los compromisos suscritos en el marco de la CSCE.
- el respeto de la inviolabilidad de los límites territoriales que sólo pueden ser modificados por medios pacíficos y de común acuerdo.
- la reanudación de todos los compromisos pertinentes relativos al desarme y a la no proliferación nuclear, así como a la seguridad y a la estabilidad regional.
- el compromiso de solucionar mediante acuerdo, en particular, recurriendo, en su caso, al arbitraje, todas las cuestiones relativas a la sucesión de Estados y a las controversias regionales.

La Comunidad y sus Estados miembros no reconocerán aquellas entidades que resultaran de una agresión. Tendrán en cuenta los efectos del reconocimiento sobre los Estados vecinos.

El compromiso en favor de estos principios abre la vía al reconocimiento por parte de la Comunidad y sus Estados miembros y al establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que podría quedar consignado en acuerdos”⁷⁸¹.

Es preciso referirse también a la Declaración de los Doce sobre Yugoslavia, aprobada también en Reunión Ministerial Extraordinaria el 16 de diciembre de 1991, en la que se adoptaba una posición común respecto del reconocimiento de las repúblicas yugoslavas, concluyendo que

“(…) la Comunidad y sus Estados miembros acuerdan reconocer la independencia de todas las repúblicas yugoslavas que cumplan la totalidad de las condiciones que se detallan a continuación. La puesta en práctica de esta decisión tendrá lugar el 15 de enero de 1992. En consecuencia, invitan a todas las repúblicas yugoslavas a manifestar antes del 23 de diciembre si:

- desean ser reconocidas como Estados independientes,
- aceptan los compromisos contenidos en las directivas antes mencionadas,
- aceptan las disposiciones estipuladas en el proyecto de Convención que está siendo estudiado por la Conferencia sobre Yugoslavia, en especial aquellas del Capítulo II sobre derechos humanos y derechos de minorías nacionales o grupos étnicos,
- los esfuerzos del Secretario General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
- la continuidad de la Conferencia sobre Yugoslavia.

Las solicitudes de aquellas repúblicas que contesten positivamente serán sometidas, por medio de la Presidencia de la Conferencia, a la Comisión de Arbitraje que informará antes de la fecha de aplicación”.

La Comisión de Arbitraje de la Conferencia sobre Yugoslavia (conocida comúnmente como la Comisión Badinter) había sido establecida al crear la Conferencia sobre Yugoslavia, y a ella debían dirigirse las diferencias entre los participantes en la Conferencia. La Comisión estaba conformada por cinco presidentes de tribunales constitucionales de la Comunidad Económica Europea⁷⁸² y sería presidida por el francés Robert Badinter de Francia. Ninguno era especialista en Derecho Internacional⁷⁸³.

⁷⁸¹ Se pueden consultar en la página web de la Universidad de Murcia. Fecha último acceso 08/07/2014 .

Pag 2 y ss.<http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-2-declaracion-ministros-aaee-comunidades-recomocimiento-ex-republicas-sovieticas.pdf>

⁷⁸² Robert Badinter de Francia, Aldo Corasaniti, de Italia, Roman Herzog, de Alemania, Francisco Tomás y Valiente, de España e Irene Petry, de Bélgica.

⁷⁸³ Hannum, H., “Self-Determination in the Twenty-First Century” en Hannum, H., Babbitt, E., (eds)

La Comisión emitió quince Opiniones entre fines de 1991 y mediados de 1993, y abordó distintas cuestiones. En su primera opinión, emitida el 29 de noviembre de 1991, se decantó por considerar que "la República Socialista Federal de Yugoslavia está en un proceso de disolución". La definición jurídica de desintegración se diferenciaba de la secesión en que el antiguo estado soberano permanecía, mientras que en caso de disolución el antiguo estado cesaba su existencia. La consideración jurídica de la extinción de Yugoslavia como un caso de disolución del estado de Yugoslavia, más que una cadena de secesiones, enmarcaba la cuestión fuera del problema no resuelto en Derecho internacional de la secesión, autodeterminación y del principio de integridad territorial como hemos visto en secciones anteriores.

Esta constatación de la desaparición del estado no ha estado exenta de polémica en el ámbito académico. Sobre la afirmación de la Comisión "en el caso de un Estado de tipo federal, que abarca comunidades con cierta autonomía y, más aún, participan en el ejercicio del poder político en el marco de las instituciones comunes de la Federación, la existencia del Estado implica que los órganos federales representan a los componentes de la Federación y ejercen un poder efectivo". Antonio Remiro Brotons y otros, por ejemplo, consideran que es "una novedad en DI, deslizada tal vez sin demasiada meditación por servir la coyuntura. De aplicarse esta doctrina (...) Bosnia y Herzegovina no habría llegado a nacer"⁷⁸⁴.

Explica Matthew Craven, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, que "la Comisión de Arbitraje no consideró directamente la aplicabilidad del principio de autodeterminación en relación con los actos de independencia de varias repúblicas. De hecho, parece que rechazó implícitamente la relevancia de la autodeterminación como un factor determinante en la adquisición de estatalidad. Sin embargo, sí hizo un número de amplios pronunciamientos sobre la materia que fueron al tiempo cautelosos y controvertidos"⁷⁸⁵.

Se daba así una salida jurídica a una normativa adversa y una salida política a una situación de difícil retorno, pero factualmente y en su descripción político-histórica se ha considerado en su desarrollo y efectos sociales y percepciones políticas una cadena de secesiones. Francisco Veiga llama directamente a los conflictos acaecidos "guerras de secesión yugoslavas", llamando la atención sobre el poco explicado hecho de que se sucedieran concatenadamente "ordenadamente, una detrás de otra; y no todas al mismo tiempo, como podría sugerir la hipótesis de unos pueblos que se odiaban intensamente los unos a los otros y sólo habían convivido, forzados, bajo la bota de Tito"⁷⁸⁶. Este escenario, en fin, simplificaba considerable la labor de la Comisión, pues a partir de ella sólo se tenía que pronunciar sobre *cómo* debía realizarse la *sucesión* de los nuevos

Negotiating Self-determination, Lexington Books, 2006, p. 64

⁷⁸⁴ Remiro Brotons, A., et. al., *Derecho Internacional*, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 49.

⁷⁸⁵ Craven, M., "The European Community Arbitration Commission on Yugoslavia", *British Year Book of International Law*, n 66, 1996, p. 381

⁷⁸⁶ Veiga, F., "A veinte años vista del 25 de junio de 1991", *Balkania. Revista de estudios balcánicos* n. 2. Embajada de España en Belgrado. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011, p. 17.

estados y no acerca de los criterios de *secesión*, porque legalmente tales secesiones nunca se dieron.

Se dio además la circunstancia de que la solución de la definición jurídica de desintegración previa del estado en contraposición a una cadena de secesiones fue usada por algunos como una explicación total, no sólo jurídica, sino también política y sociológica. A pesar de que la Comisión Badinter diera esta salida jurídica, las repúblicas secesionistas habían argumentado su independencia, tanto jurídica como políticamente, básicamente sobre –su interpretación de– el derecho de autodeterminación, incluyendo de secesión, como se recogía en la Constitución yugoslava inspirada en la tradición de autodeterminación en el sentido leninista, no sobre la desintegración previa del estado.

Así, no es de extrañar que autores como Peter Radan hayan considerado que el verdadero papel de la Comisión de Arbitraje fue dar una cobertura legal a la decisión política de reconocer las repúblicas yugoslavas como estados independientes⁷⁸⁷. La definición de la cuestión como un caso de desintegración, “podía justificar un enfoque diferente a la cuestión de las fronteras tras la creación de nuevos estados”⁷⁸⁸.

La Comisión Badinter, sin embargo, “no trató explícitamente con la cuestión de si los principios que rigen la determinación de las fronteras de los nuevos estados que surjan de la secesión se diferencian de aquellos que rijan la disolución de los estados”⁷⁸⁹. En lo tocante a nuestra tesis principal, veremos, podría uno preguntarse si la disolución puede ser argumentada o no como justificación para la ruptura de la continuidad de obligaciones de los nuevos estados entre sí, (en el caso de que se considera que si no hay secesión sino una disolución del estado anterior, todas las relaciones entre ciudadanos pueden caer en el olvido, mientras que una secesión obliga de una manera más directa a plantearse qué sucede con la cambiante naturaleza de derechos y obligaciones de excompatriotas).

Aceptada la disolución, la Comisión Badinter se pronunció sobre las fronteras que debían dibujar los nuevos estados, proclamando la vigencia del principio *uti possidetis juris*, principio o doctrina que, según explica Castellino, “ha sido, de una forma u otra, el mayor contribuidor a la constitución de aproximadamente el ochenta por cierto de los estados que actualmente existen”, fundamentalmente debido a cómo se llevó a cabo el proceso descolonizador, pero también de otros estados⁷⁹⁰. Explica este autor que: “una de las primeras manifestaciones de esta doctrina, tal y como fue desarrollada en el Derecho Internacional, fue la retirada española de América Latina. Aquí, vemos también los primeros signos de diferentes acepciones en la aplicación del *uti possidetis*. [Por un lado] “*Uti possidetis juris*” referida a una línea de frontera legal basada en un título legal, fue la norma adoptada por los estados sucesores del Imperio Español. *Uti possidetis juris*, por otro lado, se interpretó sobre la base en la posesión fáctica mantenida por Brasil

⁷⁸⁷ Radan, P., “The Badinter arbitration commission and the partition of Yugoslavia” *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*, vol. 25, n. 3, 1997.

⁷⁸⁸ Radan, P., *The Break-up of Yugoslavia and International Law*. Routledge. Taylor & Francis Group, London, New York, 2002, p. 226

⁷⁸⁹ Radan, Peter. *The Break-up of Yugoslavia...*, op. cit. p. 225

⁷⁹⁰ Castellino, J., *International Law and Self-Determination: The Interplay of the Politics of Territorial Possession with Formulations of Post-Colonial ‘National’ Identity*, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 38, Dordrecht, 2000, pp. 109 y 110.

(...)”⁷⁹¹.

Sin embargo, no era entonces obvia la aplicación del principio de *uti possidetis*, una vez concluido el proceso de descolonización. Como apunta además Enver Hasani, éste no había sido tampoco aplicado con regularidad en la historia reciente de la región: “el período entre 1912–1945 consistió en una total falta de respeto por las fronteras administrativas previas”⁷⁹². El principio de *uti possidetis* en el caso de Yugoslavia era equivalente a respetar las fronteras de las repúblicas dando una respuesta indirecta al dilema de si la autodeterminación estaba basada territorial o etnoculturalmente. Al haber aceptado la disolución como descripción factual, sobre las nuevas fronteras se habría de aplicar el principio de integridad territorial e inamovilidad de las (nuevas) fronteras sin acuerdo previo. Además implicaba, ya que no coincidían los pueblos etnoculturalmente definidos con las fronteras de las repúblicas, la exigencia del respeto de las minorías nacionales en cada uno de los territorios resultantes.

Esta exigencia de protección de las minorías al interior de las repúblicas resultantes -en línea con la mencionada reflexión de Rawls en *El derecho de gentes* -es especialmente relevante para el desarrollo del Derecho Internacional si tenemos en cuenta que, por aquel entonces, se debatía este tema a nivel internacional, que resultaría en la “Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas”, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992⁷⁹³.

La definición de la situación como desaparición fáctica del estado, como hemos dicho, enfocó el trabajo de la Comisión Badinter en la sucesión del estado. En este sentido, las últimas opiniones de la Comisión estuvieron directamente relacionadas con el problema de sucesión, aunque no fue, sin embargo, exhaustivamente tratado.

En la Opinión n.9 de 4 de julio de 1992, la Comisión consideró que los estados sucesores debían “resolver todos los aspectos de la sucesión mediante acuerdo” de acuerdo con “el principio de igualdad de derechos y deberes entre estados en respeto al Derecho Internacional”. Ninguno de los estados sucesores podría ser considerado único estado sucesor, por lo que se daban por terminadas todas las membresías en organismos internacionales. Los bienes y deudas del desaparecido estado yugoslavo, así como las propiedades de titularidad localizadas en terceros estados, debían ser repartidas equitativamente entre los estados sucesores. Es muy importante señalar a *qué bienes* se hacía referencia.

Entre estos *bienes públicos* importantes durante el proceso de sucesión, sólo se mencionan los derechos de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas al interior de los nuevos estados (se reafirma en la Opinión n.10), es decir, derechos colectivos identitarios

⁷⁹¹ Castellino, J., *International Law and Self-Determination...*, op. cit., pp 112.

⁷⁹² Hasani, E, *Self-determination, Territorial Integrity and International Stability. The Case of Yugoslavia* Viena National Defence Academy Institute for Peace Support and Conflict Management / PFP-Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes, Viena, 2003, p. 301.

⁷⁹³ A/RES/47/135

conectados con la autodeterminación. Entre los bienes públicos sobre los que acordar el proceso sucesorio no se encuentran otros bienes públicos –ni bienes primarios en el amplio sentido rawlsiano–, no se encuentran derechos civiles ni se considera el impacto en los ciudadanos individualmente considerados ni en el diferimiento de los colectivos procesos de desarrollo.

Este punto de vista se mantendrá en las últimas opiniones. La Opinión n.12 de 16 de julio 1993 volverá a incidir sobre la importancia de la equitativa redistribución de activos, pasivos y archivos. La Opinión n.14 de 13 de agosto de 1993 declaró que la lista de propiedades estatales preparada por el Grupo de Trabajo de 1993 debería constituir una base para definir la propiedad del estado yugoslavo. La Opinión n. 15 de 13 de agosto de 1993 limitó las actividades del Banco Nacional de Yugoslavia relacionadas con derechos y obligaciones financieras, enfatizando que *de facto* ya estaban siendo gestionados por los bancos nacionales sucesores.

Resume Craven, a la vista de las Opiniones de la Comisión, que “en la distribución de bienes y responsabilidades, la propiedad de bienes inmuebles en el territorio de los estados sucesores está sujeta al principio *de locus in quo*. Este es también el caso, aunque de manera más dudosa, de los bienes muebles. En cuanto a otros bienes, archivos y deudas estatales, incluyendo aquellos en el territorio de terceros Estados, deben distribuirse entre los Estados sucesores de acuerdo con el principio de distribución equitativa. Ese principio en sí no requiere la división de acuerdo a proporciones iguales, sino simplemente que la división debe ser ampliamente equitativa”⁷⁹⁴.

Aunque no exenta de controversia en torno a cómo habían de repartirse los bienes, la definición misma de bienes (propiedades estatales, archivos, deudas) tuvo todo el tiempo y para todas las partes una fuerte orientación patrimonial. El estado y los estados resultantes eran vistos como personas jurídicas con pasivos y activos, concibiendo en fin el estado como un mero ente poseedor, propietario y deudor de bienes, no una concepción de estado como ente que es, además, garante de derechos de ciudadanos.

La sucesión así vista, como argumentaré con más detalle al final de este capítulo, es compatible incluso con el antiguo régimen, el que la distribución de bienes es heterónoma y los ciudadanos son súbditos. Cumple con los requisitos de Montevideo –un estado como territorio con gobierno, con bienes, con ejército– pero no cumple con los requisitos adicionales que el desarrollo del Derecho internacional ha ido proveyendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La sucesión de estados democráticos no puede obviar los derechos de los ciudadanos, pues estos no son propiedad del estado sino conformantes de éste. Si el estado además es garante de los derechos de los ciudadanos, la sucesión debe cuidar de que todos los derechos fundamentales sean respetados, incluyendo, pero no sólo, los derechos identitarios de minorías.

Ha sido reconocido que la Comisión Badinter dio un paso adelante al tener en cuenta los

⁷⁹⁴ Craven, M., “The European Community Arbitration Commission on Yugoslavia”, *British Year Book of International Law*, n 66, 1996, p. 412.

derechos de las minorías al interior de las resultantes nuevas repúblicas, en línea con aquellas consideraciones que hiciera al respecto John Rawls en su *El derecho de gentes*⁷⁹⁵. Sin embargo, no previó los diversos efectos sobre el desarrollo en sentido amplio que la disolución de Yugoslavia tendría entre repúblicas y pueblos, solo al interior de cada república.

El debate académico inmediato siguió por lo general como era de prever, simultáneamente las circunstancias y preocupaciones del devenir político. Si, como hemos visto, de acuerdo con Allen Buchanan, existen dos cuestiones a las que una teoría de la secesión debe responder (en primer lugar, las razones dadas por un grupo que desea secesionarse justifican de manera suficiente la secesión, y segundo, bajo qué condiciones deberían las constituciones reconocer el derecho a la secesión y con qué limitaciones debería este derecho ser ejercitado⁷⁹⁶), por aquel entonces el debate académico sobre la autodeterminación y la secesión estaba enfocado principalmente a cuestiones tales como si el derecho de autodeterminación podía o debía ser o no ser aplicado, o si abarcaba sólo los pueblos/ naciones inmersos en un proceso de descolonización, o si incluía un derecho a la secesión ilimitada, si debería ser aplicada a pueblos o a territorios /unidades políticas, y en qué situaciones o bajo qué justificaciones podría ejercerse un derecho de secesión. Los debates se enfocaban también en las tensiones entre el derecho de autodeterminación y secesión y el principio de integridad territorial y si la secesión rompe la regla de la mayoría democrática, los principios de justicia distributiva y si estas consideraciones han de ser aplicadas en estados democráticos o no-democráticos. Siguiendo la segunda cuestión de Buchanan, fue también objeto de controversias qué sentido daba la Constitución yugoslava al derecho de autodeterminación y cómo habría de ser interpretado y aplicado, es decir, si estas cuestiones estaban resueltas con el reconocimiento del derecho de autodeterminación, incluida la secesión de pueblos o repúblicas de la Constitución yugoslava de 1974 y su relación con el Derecho Internacional.

Al mismo tiempo, la escena política dentro de Yugoslavia ignoraba de igual manera los efectos que las secesiones tendrían sobre el desarrollo, tal vez incluso menos que los actores internacionales y la academia: la retórica nacionalista creció rampante, y la autodeterminación, si una vez fue considerado un derecho que debe ser reconocido como prerequisite para cumplir con otros derechos o un derecho humano interdependiente con otros, eventualmente, fue convirtiéndose en el discurso político en un derecho cercenado en sus múltiples dimensiones, pero absoluto en su exigencia, un derecho al que debían someterse todos los demás derechos y deberes de los ciudadanos. El nacionalismo como doctrina no sólo subyugaba los derechos de los ciudadanos a una causa, sino que no permitía considerar a los otros como sujetos con intereses similares y aspiraciones de bienestar, mucho menos sujetos de derechos fundamentales o humanos. El paroxismo agregado a este discurso, por supuesto, sirvió de justificación para la guerra.

Dubravka Stojanović argumenta que esta visión ha estado presente, de una u otra manera,

⁷⁹⁵ McCorquodale, R., "Self-Determination...", op. cit., pp. 857-885.

⁷⁹⁶ Buchanan, A., "Self-Determination and the Right to Secede". *Journal of International Affairs* 45, no. 2, 1992, p. 352.

en el discurso político local desde el s. XIX y de alguna manera ha sobrevivido hasta hoy, e irónicamente asegura que “nos ocuparemos fácilmente de la democracia, los ferrocarriles, las carreteras, la educación, la salud, la calidad de vida, ... en cuanto resolvemos la cuestión de todas las cuestiones, una vez que tracemos claramente las fronteras de nuestro país”⁷⁹⁷. Una reflexión que, aunque aplicable a la región, no es ni mucho menos exclusiva de ella.

Los beneficios materiales esperados que unos pueblos o repúblicas obtendrían de la secesión y su (previsible) integración en Europa ayudó a promover el concepto de que el desarrollo es responsabilidad exclusiva de cada estado, y que la cooperación internacional para el desarrollo es un mero deseo o expresión de buena voluntad. Se extendió la idea de que el derecho de autodeterminación era ilimitadamente reconocido, la secesión posible constitucionalmente y una vez consumada, habría de terminar todas las obligaciones de solidaridad y justicia distributiva habrían, siendo entonces posible redibujar las condiciones relacionales entre pueblos de una manera más conveniente (y más ventajosa para los promotores de la secesión).

Es esta modificación a la baja de las obligaciones de redistribución que acompaña al redibujo de las fronteras a la que hemos hecho referencia con la expresión “proceso de imperfectibilidad de las obligaciones”.

Podemos rastrear, sin embargo, algunas maneras aparentemente conciliadoras y cierta preocupación en las formas futuras de relación recíproca, más allá de las mencionadas, en textos como la *Declaración sobre la Soberanía e Independencia de la República de Macedonia*, emitida en Skopje el 17 de septiembre de 1991⁷⁹⁸, tras el referéndum del 8 de septiembre, que expresaba la estatalidad y soberanía del país “con derecho a unirse a una futura unión de estados soberanos de Yugoslavia”, tal y como fue formulado en la pregunta del referéndum de independencia.

Se declaró en dicho documento que la nueva república independiente habría de comprometerse con “el desarrollo de cooperación general con todos los países y pueblos en interés mutuo”. Es más, el artículo 3 concluía que la república debería inscribirse “en el proceso de integración en Europa así como incrementar la participación en modalidades de cooperación bilateral y multilateral (...) para el beneficio de todos los países que viven en este espacio”.

Sin embargo, esta apertura de posibilidades a alguna asociación futura con otras ex repúblicas yugoslavas ha sido considerada como sólo una posición política para lograr mayor apoyo de la población de Macedonia, tradicionalmente más proyugoslava, a la estatalidad independiente de la república, para evitar conflictos, mientras que la integración europea ha sido vista como una estrategia clave de país.

Consideremos que sugerencias similares de cooperación mutua futura se pueden

⁷⁹⁷ Stojanovic, D., “O Kosovu, malinama i gej parade”, *Peščanik*, Belgrado, 2011.

⁷⁹⁸ Trifunovska, S., *Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution*, Kluwer Academic, Amsterdam, 1994, p. 345.

encontrar en otros textos como la *Declaración de la Independencia de la República de Eslovenia*, firmado en Liubliana el 25 de junio de 1991⁷⁹⁹. De hecho, la Declaración insiste repetidamente en estas posibilidades. La Declaración recordaba que, antes del referéndum de independencia, Eslovenia había propuesto, junto con Croacia, un proyecto de acuerdo para crear una Confederación con otras repúblicas yugoslavas, a fin de "seguir cooperando en las esferas de la economía, de la política exterior y en otras áreas", y expresó en consecuencia, su "disposición a los acuerdos sobre interrelaciones en el caso de una comunidad confederal o económica yugoslava, o alguna otra forma de asociación adecuada que beneficie a todos los pueblos y ciudadanos".

Una vez más, el posible acuerdo futuro previsto en la Declaración de Independencia de Eslovenia que "beneficiaría a todos los pueblos y ciudadanos" no incluía expresamente derechos como la servicios sociales, salud, educación o medio ambiente. La Comisión no los excluyó de forma explícita. Es cierto que se habían previsto "otras áreas" de la cooperación, pero cuidar de los retos sociales de los otros no estaba, claramente, en el espíritu del texto. Sin embargo, hasta por tercera vez, la Declaración mencionó la posibilidad de un acuerdo: "sobre la base del reconocimiento mutuo, la República de Eslovenia se prepara inmediatamente para iniciar conversaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre una asociación de Estados soberanos en el territorio de la ex Yugoslavia. Dentro de esta asociación, los Estados miembros tendrían libertad para perseguir sus conjuntos intereses económicos, políticos, internacionales y de otro tipo". El modelo propuesto estaba claramente inspirado en lo que en aquel momento eran las Comunidades Europeas. De hecho, la integración europea de Eslovenia estaba descrita en el texto "en conformidad con los principios de unificación de los estados soberanos en Europa" añadiendo su pretensión de "membresía de la Comunidad Europea y la participación en otras alianzas de estados o naciones". Una vez más, en el siguiente párrafo, la Declaración dicta que: "la soberanía y la independencia de la República de Eslovenia debe ser entendida como una condición para entrar en un nuevo proceso de integración dentro del marco de la antigua Yugoslavia y dentro del marco europeo". Finalmente, encontramos una llamada a la cooperación con la comunidad internacional en su conjunto, más allá de las menciones a las repúblicas yugoslavas o la Comunidad Europea, "para mejorar los lazos económicos, culturales, políticos, financieros y de otro tipo con la comunidad internacional".

Ahora bien, a pesar de estos múltiples llamamientos generales a la cooperación en un período posterior a su independencia, la Declaración de Independencia de Eslovenia dejó bien claro que, una vez resueltas las cuestiones de la situación del Ejército Popular Yugoslavo en la República de Eslovenia, las competencias en el ámbito de las relaciones internacionales y la cuestión de la división de los bienes comunes, Eslovenia no tendría más obligaciones con las otras repúblicas, más allá de compartir las "obligaciones financieras internacionales hacia otros estados y organizaciones internacionales", lo que de hecho no era sino una partición de bienes comunes, ofreciendo "libre circulación de bienes, servicios y personas a través de las fronteras".

⁷⁹⁹ Declaración de Independencia de la República de Eslovenia - Declaration of Independence. Republic of Slovenia. Official website of the Government of Slovenia. Public Relations and Media Office. <http://www.slovenija2001.gov.si/10years/path/documents/declaration/>

Así, estas dos Declaraciones de Independencia preveían una posible asociación de cooperación futura con otros estados de la ex Yugoslavia para beneficio mutuo y ambos documentos prevén acuerdos sobre distintos temas a nivel regional, europeo e internacional, rompiendo de manera aparente esa concepción westfaliana de fronteras-muro. Sin embargo, una mirada más cercana revela una fuerte perspectiva autocéntrica de las repúblicas y una forma de entender la cooperación regional parecida a lo que estaba ofreciendo la Comunidad Europea en ese momento: una cooperación limitada sobre la base de un crecimiento económico y de seguridad común en un contexto pacífico, pasando por alto que la Comunidad Europea estaba en esos momentos avanzando en dirección contraria, hacia una mayor integración como Unión Europea (que por fin nació en Maastricht en 1992); las declaraciones de independencia preveían en realidad una visión de la cooperación regional con las fronteras internacionales más fuertes, abiertos a la libre circulación de bienes, servicios y personas por el bien propio en relación con el crecimiento económico y la seguridad, pero no una cooperación que tuviera en cuenta los intereses del otro, ni el mayor o mejor cumplimiento de los derechos humanos bajo el principio de equidad.

La autodeterminación entendida como autodeterminación constitutiva externa fue entendida así, por sus partidarios, como un nuevo punto de partida justo, a partir de la cual hacer nuevos acuerdos, abriéndose incluso a cooperación en ciertos ámbitos, pero ignorando en general si los derechos de los individuos iban a ser afectados y cómo, por el dibujo de las nuevas fronteras internacionales. Sí se consideraban, no obstante, sucesores para bienes y activos que fueran sujetos a reparto.

La Declaración de Independencia de Eslovenia proclamó la “igualdad” y “libertad” de los pueblos: “[Eslovenia] se compromete asimismo a resolver todos los contenciosos internos y externos de forma pacífica, no violenta y a tratar de mejorar la cooperación, en igualdad de condiciones, con todos los pueblos y ciudadanos de Europa, donde el pueblo, regiones, naciones y estados son libres e iguales”.

Como hemos apuntado, “libertad” significaba, en realidad, cambio en las obligaciones (decrecimiento o imperfectibilidad de obligaciones con ex compatriotas en determinados rubros presupuestarios mientras se pretendían mantener esferas de cooperación en interés propio, que en justa reciprocidad, sería interés mutuo), e “igualdad”, se refería más bien al principio de no-discriminación, una igualdad ante el Derecho internacional, provista por su interpretación del derecho de autodeterminación, además de ser una igualdad colectiva, no una igualdad de resultado ligada a la obligación a cooperar para el desarrollo fuera de sus fronteras, ni una igualdad de seres humanos distinguible y compatible de la solidaridad entre ciudadanos o entre miembros de una nacionalidad.

La referencia ideológica socialista contenida en el pensamiento de Lenin: “La burguesía de cada nación necesita garantías de sus ventajas, sin tener en cuenta la situación (las posibles desventajas) de otras naciones”, parecía no aplicar, pues no se consideraba que hubiera burguesía en un país socialista.

Ninguna interpretación relevante del derecho de autodeterminación en los años inmediatamente anteriores a las declaraciones de independencia y contenida en las mismas, –por no hablar durante la guerra-, preveía en su implementación ni consideraba, ya fuera para favorecer o detener la disolución, ni la protección ni la mejor realización de los derechos civiles de los ciudadanos en su conjunto, ni la forma e intensidad de afectación de las nuevas fronteras a sus niveles de salud, educación, servicios sociales, sistemas de protección del medio ambiente, etc., es decir, su derecho humano al desarrollo.

Los impactos de la desintegración en los procesos de desarrollo sólo empezaron a plantearse de una manera comprensiva tras la guerra y la culminación de la desintegración, desde dos puntos de vista: el impacto de la guerra y el impacto de la disolución misma, esto es, de la creación de fronteras internacionales que limitaban el flujo de bienes y personas, cerraban mercados y limitaban la redistribución de la riqueza.

El 3 de agosto de 1994, como respuesta a la solicitud planteada por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 1993/22 de 4 de marzo de 1993 de información sobre los obstáculos identificados para la realización del derecho al desarrollo⁸⁰⁰, el Gobierno de la República Federal de Yugoslavia emitió un “Informe sobre los obstáculos a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo” en la cual se admitía explícitamente cómo el cumplimiento del derecho al desarrollo se había detenido, aunque quedaban en intencional nebulosa las causas de la misma, englobadas en un ambiguo “medio internacional” en línea con los propios intereses:

“Aunque legalmente promulgada e institucionalizada, tanto a nivel federal como de las repúblicas, la aplicación del derecho al desarrollo en la República Federal de Yugoslavia ha sido frustrada en los últimos años a medida que el medio internacional ha provisto un obstáculo absoluto para el desarrollo”⁸⁰¹.

En resumen, los problemas de desarrollo en su concepción más amplia, como expansión de libertades y derechos más crecimiento económico, no se reconocieron ampliamente en los primeros debates acerca de la implementación del derecho de autodeterminación, especialmente considerando el ilimitado derecho a la secesión solamente con la pura identidad nacional. No se reconoció el desarrollo de todos (en sus partes y en su conjunto) como elemento relevante durante los debates en torno a la desintegración del estado o las secesiones, y sólo de una manera limitada se llegó a abordar, como veremos, en la fundamental cuestión de la sucesión del estado.

§3.5.4 Los Acuerdos de Sucesión de 2001: una visión patrimonialista, un enfoque de derechos humanos limitado

Las limitadas consideraciones llevadas a cabo *antes* de la disolución de Yugoslavia sobre

⁸⁰⁰ Resolución 1993/22

⁸⁰¹ Commission on Human Rights. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities-. E/CN.4/Sub.2/1994/47

los efectos sobre el desarrollo, aún menos sobre el desarrollo como derecho humano, al debatir y exigir el derecho de autodeterminación, incluyendo el derecho a la secesión, encuentran su reflejo también en los debates y negociaciones sobre la sucesión estatal, tras constatarse la disolución legal del estado.

En general, respecto a la cuestión de la sucesión de estados, debemos decir que, como bien indica Patrick Dumberry, es ésta un “área de investigación vasta y compleja, y es indudablemente una de las más controvertidas y disputadas en Derecho Internacional”⁸⁰².

En el caso de Yugoslavia, los Acuerdos de Sucesión tomaron su tiempo en hacerse realidad; fueron finalmente firmados en Viena, el 29 de junio de 2001, por los representantes de los entonces estados sucesores de Yugoslavia: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia y la República Federal de Yugoslavia (a partir de febrero de 2003, Serbia y Montenegro), y entraron en vigor el 2 de junio de 2004⁸⁰³.

En las negociaciones de los Acuerdos las partes tuvieron en cuenta, pero siguieron de una manera limitada, tanto las opiniones de la Comisión Badinter, como las disposiciones de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de Tratados, de 23 de agosto de 1978, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, como la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983, que hasta la fecha no ha entrado en vigor⁸⁰⁴.

Advirtamos que, a pesar de las críticas que realicemos al concluir el análisis de los Acuerdos de Sucesión de los estados sucesores de Yugoslavia en relación con el tema que nos ocupa, estos han sido valorados positivamente en algunos aspectos, como, por ejemplo, por el mismo hecho de que los estados sucesores yugoslavos se consideraran responsables y abiertos y dispuestos a negociar y que efectivamente llevaran a cabo esos acuerdos, como ha defendido Andreas Zimmermann, teniendo en cuenta la tradición histórica de los estados sucesores, particularmente los nacidos de secesión y los nuevamente independientes nacidos del proceso de descolonización, de intentar evitar responsabilidades respecto del estado predecesor: “teniendo en cuenta las circunstancias (...) y la falta de claridad jurídica en cuanto a las normas aplicables, es de suma importancia que los Estados interesados hagan esfuerzos de buena fe para llegar a soluciones acordadas (...) Los acuerdos de sucesión entre cinco estados sucesores yugoslavos podrían en este sentido servir como un modelo útil. Demuestra también, sin embargo, que a veces puede llevar no solo años, sino también pasar experiencias muy amargas antes de poder alcanzar un acuerdo”⁸⁰⁵.

⁸⁰² Dumberry, P., *State Succession to International Responsibility*, Graduate Institute of International Studies Geneva. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2007, p. 3.

⁸⁰³ Accesible en: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIX-1&chapter=29&lang=en

⁸⁰⁴ Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts, vol. II (United Nations publication, Sales No. E.94.V.6. El texto completo puede consultarse del Tratado en http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/et/172.pdf

⁸⁰⁵ Zimmermann A., “Secession and the law of State succession”, Marcelo G. Kohen (ed.), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 230

Por otro lado, sobre los Acuerdos mismos, Patrick Dumberry ha alabado que se estableciera un órgano de arbitraje: “una característica interesante del Acuerdo es el hecho de que establece un mecanismo para la solución de controversias mediante el cual el Comité Permanente Conjunto, integrado por representantes de alto nivel de cada Estado sucesor, no sólo hace el "seguimiento de la aplicación efectiva del Acuerdo", sino también resuelve cualquier "diferencia" que pueda surgir entre los Estados sucesores por la "interpretación y aplicación" de los Acuerdos”⁸⁰⁶.

Advirtamos asimismo sobre el contenido de los Acuerdos de Sucesión que “las cuestiones relacionadas con los daños de guerra fueron deliberadamente excluidas de otros temas relacionados con la sucesión de estados”⁸⁰⁷.

Por ello, de manera análoga, analizaré la sucesión por el contenido de los Acuerdos, llamando la atención sobre la limitada inclusión del destino de los derechos humanos en general en las negociaciones de sucesión, pero excluyendo seguidamente la específica cuestión de las responsabilidades derivadas de actos criminales cometidos durante la guerra (aunque se incurriera, junto con la violación del Derecho Internacional Humanitario, en serias violaciones de derechos humanos), abordando la cuestión al final de esta sección por ser diferenciable y diferenciada, tanto por los Acuerdos como por la doctrina.

§3.5.4.1 Los Acuerdos de Sucesión. Su contenido en relación con la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983

La Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983 requiere quince ratificaciones para su entrada en vigor. A día de hoy, la han firmado siete estados y la han ratificado otros siete. La antigua Yugoslavia había firmado la Convención el 24 de octubre de 1983, en línea con su larga tradición de impulso del desarrollo del Derecho Internacional.

Ratificaron la Convención antes de la firma de los Acuerdos Croacia (el 11 de abril de 1994) y la ex República Yugoslava de Macedonia (2 de septiembre de 1997). Eslovenia habiendo firmado previamente, ratificó el 15 de agosto de 2002. Yugoslavia (no la República Socialista Federal de Yugoslavia) firmó el 12 de marzo de 2001 (entre el 4 de febrero de 2003 a junio de 2006 fue Serbia y Montenegro). A partir del 23 de octubre de 2006, Montenegro figura como firmante (no ratificó) del Tratado⁸⁰⁸.

Según el retirado diplomático británico Anthony Aust, la firma de esta Convención por

⁸⁰⁶ Dumberry, P., *State Succession to International Responsibility*, Graduate Institute of International Studies Geneva. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2007, pp. 121 y 122

⁸⁰⁷ Dumberry, P., *State Succession to International Responsibility*, Graduate Institute of International Studies Geneva. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2007, p. 29

⁸⁰⁸ Información sobre tratados de Naciones Unidas en:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-12&chapter=3&lang=en

parte de las ex repúblicas yugoslavas se llevó a cabo seguramente pensando en que sus disposiciones fueran de utilidad para sus propios procesos de sucesión. Sin embargo, para Aust “en la práctica, aunque algunos de los artículos de la Convención de 1983 relativos a los archivos del Estado fueron de cierta utilidad, los demás lo fueron menos, y la cuestión de las deudas del Estado se acordó después de prolongadas y arduas negociaciones”. A pesar de la apelación al *principio de equidad* en el proceso de sucesión, como había sido plasmado en las opiniones 1 y 9 de la comisión Badinter, éste fue, en opinión de Aust, “de escasa ayuda práctica; el tradicional tira y afloja fue la técnica más utilizada (...). Así pues, la Convención de 1983 no fue una guía útil para resolver los complejos problemas que plantea la sucesión resultante del desmembramiento de un Estado”⁸⁰⁹.

El prólogo de los Acuerdos de Sucesión recogió las discusiones y negociaciones llevadas a cabo “bajo los auspicios de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia y el Alto Representante con el fin de identificar y determinar *la distribución equitativa entre ellos de los derechos, obligaciones, activos y pasivos de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia*”. Pero, en concreto, ¿qué derechos y obligaciones, qué activos y pasivos eran los referidos? .

En el artículo 3 de los Acuerdos se hace referencia a los anexos donde se detallan los términos concretos de la distribución. Por los títulos de los anexos podemos saber inmediatamente los objetos de la negociación de sucesión:

- Anexo A: Propiedades muebles e inmuebles;
- Anexo B: Propiedades diplomáticas y consulares;
- Anexo C: Activos y pasivos financieros (aparte de aquellos reflejados en el Apéndice de este Convenio);
- Anexo D: Archivos;
- Anexo E: Pensiones;
- Anexo F: Otros derechos, intereses , y pasivos;
- Anexo G: Propiedad privada y derechos adquiridos;

Los otros derechos a los que se refiere el Anexo F son, según el artículo 1 de dicho anexo, “todos los derechos e intereses que pertenecieron a la RSF de Yugoslavia y que no están cubiertos de otra manera por el presente Acuerdo (incluyendo, pero no limitados a, patentes, marcas, derechos de autor, regalías, y las reclamaciones y deudas debidas a la RSF de Yugoslavia).

Hemos de detenernos asimismo en el Anexo G, que hacía referencia a derechos individuales de los ciudadanos afectados por el proceso de sucesión. La propiedad privada y derechos adquiridos de ciudadanos y otras personas legales a los que se refiere el Anexo, recoge su artículo 1, habían de ser protegido por los estados sucesores.

⁸⁰⁹ Aust, A., “Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado”, *United Nations Audiovisual Library of International Law*, 2010, pp 1–3

El artículo 2.1 preveía que los derechos a la propiedad mueble e inmueble localizadas en el estado sucesor “debían ser reconocidos, y protegidos y restablecidos por el estado de acuerdo con los estándares establecido y normas de Derecho Internacional y con independencia de la nacionalidad, ciudadanía, residencia o domicilio de las personas. (...) Las personas incapaces de satisfacer tales derechos tendrán derecho a ser indemnizados de conformidad con las normas legales civiles e internacionales”.

De manera estrechamente relacionada, se dispuso en el artículo 6, referente al destino del derechos de tenencia o uso de una vivienda, del que gozaban los ciudadanos de Yugoslavia (*"stanarsko pravo"*), que “la legislación nacional de cada Estado sucesor relativa a los derechos de vivienda habrán de aplicarse por igual a las personas que fueron ciudadanos de la RSFY y que gozaban de tales derechos, sin distinción alguna por razones de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política (...)”.

A este respecto debe puntualizarse que este derecho, particular de la Yugoslavia socialista, cuyo contenido era garantizar de manera directa a los ciudadanos el disfrute de una vivienda proporcionada por el estado con la única limitación de la imposibilidad de su venta (por el sistema de propiedad comunista), se enfrentaba a la doble transición de la desintegración estatal como a la transición de un sistema comunista al capitalismo.

Pero, además de una dimensión de derecho individual, su protección específica durante la sucesión de estados tenía especial sentido en un escenario de violencia nacionalista orientada a la limpieza étnica de los territorios. La protección de este derecho sin discriminación significaba proteger a minorías respecto a las políticas de desplazamiento de personas no pertenecientes a la nacionalidad dominante. Por eso mismo, la eliminación del derecho de ocupación socialista en la transición al capitalismo no fue completada sin problemas de discriminación, dada la naturaleza de los conflictos.

Asimismo, se previó (artículo 3) la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, etc. de todas las personas naturales y jurídicas.

Con el fin de proteger estos derechos, el Anexo G previó asimismo la protección del igual derecho de acceso a los tribunales o tutela judicial efectiva, en base al principio de reciprocidad (artículo 7).

No nos vamos a detener en la manera en la que fue prevista la distribución de los distintos activos, pasivos, archivos, derechos y obligaciones entre los estados sucesores. Sabemos de los porcentajes de los activos financieros en el extranjero distribuidos entre los distintos estados sucesores. También sabemos que los archivos fueron distribuidos de acuerdo al “principio de pertinencia funcional” sin importar su localización geográfica. Pero esto no es relevante para nuestra tesis, más allá de contribuir a subrayar la importancia de incorporar las negociaciones y el arbitraje en los procesos de sucesión. Lo que nos interesa no es tanto el *cómo*, es decir, *cuánto* recibió cada república, sino reflexionar sobre *qué* se repartía. Como vimos en los debates previos acerca de la secesión, en las negociaciones de la sucesión de estados no se tuvieron en cuenta que habría de suceder con todos los derechos de los ciudadanos, ni mucho menos el derecho

al desarrollo de los pueblos o de las repúblicas.

Si observamos el contenido de las negociaciones de sucesión y sus resultados, plasmados en los anexos, podemos fácilmente observar que la visión imperante fue fuertemente **patrimonialista y estatista**, obviándose la función garante de derechos de los ciudadanos del estado democrático.

Las negociaciones giraron principalmente en torno a la distribución de bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos financieros, etc. Sólo los derechos de propiedad incluyendo propiedad intelectual, y derechos de ocupación y de tutela judicial efectiva para garantizar estos derechos de los ciudadanos, fueron tomados en consideración, como si la creación de nuevas fronteras no afectara a otros derechos de los ciudadanos o si esta afectación no fuera relevante.

De manera relacionada, incluso, en opinión del profesor canadiense Edward McWhinney, la consideración hecha por la Comisión Badinter de encontrarse ante un caso de desintegración estatal en vez de varias secesiones, tendría que ver no sólo con el porcentaje de territorio y población en que quedó en la República Federal de Yugoslavia, sino con la redistribución esperada de bienes (lo que para mí es cuestión inseparable de la reflexión acerca de la naturaleza de estos bienes): “una explicación parcial de las prisas de la Comisión Badinter de juzgar como desaparición legal la antigua RSFY en vez de considerar su continuación legal en la persona del estado remanente todavía constituido por sus repúblicas constituyentes nucleares, Serbia y Montenegro, así como la decisión final de la Comisión de mantener las fronteras internas, administrativas de RSFY, puede, como se ha sugerido, quizá tener su fundamento en las cuestiones de incidentes y atributos de sucesión de estados, en casos de ruptura de un estado existente, en cuestión de disposición de propiedades y otros bienes y obligaciones, incluyendo deudas”⁸¹⁰.

Los acuerdos sobre las pensiones son un ejemplo de la visión patrimonialista de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Sucesión. Si las pensiones tuvieron un hueco en las negociaciones fue porque el reconocimiento del derecho a tener una pensión, un derecho social, crea activos financieros que habían de ser repartidos entre estados. Es decir, las pensiones fueron objeto de negociación porque había una bolsa de dinero que repartir, pero no se trató detenidamente cómo podían los ciudadanos acceder a su derecho a una pensión. El derecho a la pensión se dejaba por omisión en manos de los nuevos estados sin mayor discusión ni reflexión. El resultado fue, adelantamos, que en los años subsiguientes se tuvieron que hacer esfuerzos importantísimos por parte de instituciones nacionales, internacionales y ONGDs para garantizar el acceso a pensiones denegados por distintas razones a ciudadanos separados por fronteras del lugar donde habían desarrollado sus actividades profesionales. Esto afectó especialmente a refugiados de los conflictos y a quienes tenían dificultades para demostrar sus años de trabajo o no tenían el libreta de registro de trabajo (*radnička knjižica*) consigo. Se repartió entre los estados

⁸¹⁰ McWhinney, E., *Self-Determination of Peoples and Plural-ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-building and the Alternative, Federal Option* Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 58

de manera satisfactoria aunque discutida el dinero acumulado de los fondos de pensiones, pero no se incorporó un enfoque de derechos humanos.

Se entiende que, habiéndose hecho esperar durante tanto tiempo unos Acuerdos de Sucesión, autores como Ana Stanić, que estudió los aspectos financieros de la sucesión⁸¹¹, mostraran cierta esperanza ante la perspectiva de la firma de los acuerdos. Sin embargo, admitiendo que los Acuerdos de Sucesión pueden tomarse como ejemplo en algún sentido, como hemos visto, con la perspectiva histórica que nos da una década desde su entrada en vigor podemos afirmar, sin dudar, que pudieron ser mejorables, como son mejorables en general la práctica y las normas internacionales de sucesión de estados. Entre los ámbitos de mejoría no me refiero sólo a métodos y formas de sucesión de derechos, deudas y responsabilidades ya reconocidos, como muestran las polémicas que se generaron en torno a, por ejemplo, las disputas en torno a los depósitos privados en bancos situados en las diferentes estados sucesores, sino a los derechos sobre los que no se produjo ningún tipo de negociación ni acuerdo.

Hay muchos partidarios, según explica Remiro Brotons, de la existencia actual, entre los estados inmersos en un proceso de sucesión, de “una norma de DI general imponiendo un *pacto de contrahendo* entre los interesados, con vistas a llegar a un reparto equitativo de bienes, archivos y deudas del Estado (...). La Comisión [Opinión n. 12 de la Comisión Badinter de 16 de julio de 1993] llega al punto de declarar expresamente que el sujeto que se niega a cooperar infringe una obligación fundamental y es responsable internacionalmente con todas sus consecuencias, especialmente la posibilidad de los Estados perjudicados de adoptar contramedidas conforme al Derecho Internacional (...)”. Recuerda también Remiro Brotons que la Comisión Badinter, en su Opinión n. 13 de 16 de julio de 1993, subrayó, como hemos apuntado brevemente con anterioridad, que “las cantidades debidas por daños de guerra no han de interferir en el reparto equitativo de los bienes y cargas dentro del proceso sucesorio, pero no excluye la posibilidad de compensación”⁸¹².

Es muy subrayable y un gran avance del Derecho Internacional esta norma que obliga implícitamente, al menos, a *negociar* con vistas a alcanzar acuerdos sobre un reparto equitativo de *bienes* en un proceso sucesorio, porque es difícil concebir tal reparto equitativo sin negociación. Una vez separada la cuestión de las responsabilidades estatales derivadas de la guerra, cuestión controvertida que han tratado pocos autores, Dumberry entre ellos, queda cuestionarse si entre los bienes sucesorios no pueden encontrarse más derechos humanos o, dicho de otra manera, qué impide negociar la mejor realización de los derechos humanos de los ciudadanos individuales afectados por el proceso. A pesar de que la práctica internacional ha dejado de lado el debate sobre este tema, según mi criterio, no existe ninguna norma de Derecho Internacional que se oponga a incluir los derechos humanos entre los bienes sujetos a negociación en un proceso sucesorio. Es más, en mi opinión, todo apunta a lo contrario, y el avance futuro de un Derecho Internacional no puede ser en otra dirección que la de mantener la dignidad del

⁸¹¹ Stanić, A., “Financial Aspects of State Succession: The Case of Yugoslavia”, *European Journal of International Law*, n. 12, 2001, pp. 751–779.

⁸¹² Remiro Brotons, A., et. al., *Derecho Internacional*, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 65.

ser humano y sus derechos humanos en su centro, abandonando el marco de la visión del Derecho Internacional clásico –pre-guerra mundial- que regula solamente las relaciones entre estados y organizaciones internacionales.

La visión patrimonialista de la sucesión clásica a la que hago referencia, también en la sucesión de estados yugoslavos a pesar de los avances reconocidos en ella es, por cierto, perfectamente compatible tanto con una visión puramente *westfaliana* de los estados y de la Comunidad Internacional (pueblo como súbditos o casi como propiedad de un estado, como lo eran en el Antiguo Régimen) como con una visión *nacionalista primordialista* (los ciudadanos son consustanciales al territorio como sus ríos o sus árboles): para ambas doctrinas es legítimo dividir el territorio, los activos y los pasivos financieros, el oro de los bancos y los fondos de pensiones, los hombres y las mujeres que viven en el territorio, las casas, los animales y los campos... el ser humano se torna así mero objeto, receptor de una situación, víctima de su propio pensamiento heterónomo. No es posible mantener esta posición considerando al ser humano activo y autónomo, sujeto de derechos, pues un sujeto digno de derecho no es un objeto a repartir como lo son los animales y los campos, o las casas, o los fondos de pensiones o las reservas de oro del Banco Nacional.

Por ello podemos afirmar que el punto de vista no fue solo patrimonialista sino estatista, consecuencia de la tradicional centralidad de los Estados en el Derecho Internacional clásico, un Derecho de Estados, en el que estos y las OI son los únicos sujetos. Pero la incorporación de los derechos humanos y la progresiva construcción de un Derecho Internacional con la dignidad del ser humano en su centro –al menos en teoría- cambia la perspectiva.

Si los derechos humanos forman parte de la normativa internacional no pueden obviarse en las cuestiones relativas a la sucesión de estados. Podemos decir que la visión patrimonialista de la normativa internacional sobre sucesión de estados tradicional es compatible con la época pre-DUDH en la que nació, pero no tanto con el emergente Derecho Internacional contemporáneo, de desarrollo lento y tortuoso.

Así, bajo el actual sistema internacional -en construcción- de derechos humanos, es más que legítimo preguntarse si los acuerdos de sucesión deben incorporar un enfoque de derechos humanos, esto es, cuál será el mejor destino de todos los derechos humanos –y no sólo de algunos como el derecho a la propiedad o nacionalidad- de los ciudadanos inmersos en un proceso de sucesión, independientemente del resultado al que se llegue con las negociaciones, es decir, aunque el resultado final sea análogo al que se hubiera alcanzado si no se hubieran tenido en cuenta esos derechos, un escenario, por otro lado, más que improbable.

Con esta reflexión queda preguntarse cómo puede articularse la sucesión de estados con las normas internacionales existentes de derechos humanos durante los procesos de negociación de sucesión, y en particular por la la sucesión en materia de tratados de derechos humanos. Respecto a nuestro caso, hemos de considerar si estas reflexiones se plantearon durante el proceso de sucesión de la Yugoslavia socialista, cuestiones que abordaremos seguidamente.

§3.5.4.2 Los Acuerdos de Sucesión de 2001 en relación con la sucesión de Estados en materia de tratados de derechos humanos

Los Acuerdos de Sucesión se basaron en principio, también, en las disposiciones de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados de 23 de agosto de 1978⁸¹³. Aunque el artículo 7.1 establece que “(...) la Convención sólo se aplicará respecto de una sucesión de Estados que se haya producido después de la entrada en vigor de la Convención (...)” y la Convención entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, tras la desintegración de Yugoslavia, la Comisión Badinter hizo referencia a ella en sus diferentes Opiniones.

Es sabido que, aunque la doctrina sobre sucesión de estados en materia de tratados en general ha oscilado entre el principio de *tabula rasa*, incorporando incluso el derecho del estado sucesor a adherirse unilateralmente qué tratados deben continuar (doctrina Nyerere), opción preferida generalmente por estados secedentes y aplicada en particular durante el proceso de descolonización, y el principio de *continuidad* de obligaciones contractuales en una sucesión universal y automática, según Remiro Brotóns “en la práctica las soluciones han sido tan variadas, según la naturaleza de los tratados y supuestos de sucesión que es imposible establecer una regla general”⁸¹⁴. En el caso de Yugoslavia, la cuestión de la sucesión en materia de tratados, y particularmente en materia de tratados de derechos humanos, no ha sido clara en absoluto.

La Convención de 1978 distingue entre los casos en los que se crean "estados de reciente independencia", definidos como aquellos que eran territorios dependientes de cuyas relaciones internacionales eran responsables los estados predecesores, esto es aquellos nacidos del proceso de descolonización, y los demás casos de sucesión de estados, provenientes del desmembramiento de un estado fruto de un proceso no conectado con el proceso de descolonización. El primer grupo no está considerado automáticamente vinculado por los tratados de sus respectivos estado predecesores, mientras que el principio de continuidad parece regir, aunque con matices, para los demás estados sucesores. El Artículo 34.1. de la Convención establece que “cuando una parte o partes del territorio de un Estado se separen para formar uno o varios Estados, continúe o no existiendo el Estado predecesor, a) todo tratado que estuviera en vigor en la fecha de la sucesión de Estados respecto de la totalidad del territorio del Estado predecesor continuará en vigor respecto de cada Estado sucesor así formado (...)” párrafo que no se aplicará en caso de pacto en contrario o “2.b) Si se desprende del tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del Estado sucesor sería incompatible con el objeto y el fin del tratado o cambiaría radicalmente las condiciones de su ejecución”. Por supuesto, esto afecta a los tratados multilaterales y organizaciones internacionales.

La mayoría de los autores que han tratado la cuestión de la sucesión se han preocupado en matizar la sucesión en tratados en materia de derechos humanos respecto del problema de la sucesión en materia de tratados en general. El mismo Andreas Zimmermann, por

⁸¹³ United Nations, *Treaty Series*, Vol. 1946, 2005. p. 3

⁸¹⁴ Remiro Brotóns, A., op. cit., p. 61

ejemplo, considera que “en situaciones de sucesión de estados en general (...) los individuos son frecuentemente sujetos a violaciones de sus derechos humanos, previamente garantizados por tratados de derechos humanos a los que accedió el estado predecesor. Así, la cuestión de si los estados secedentes quedan automáticamente vinculados por estos tratados independientemente de la notificación de sucesión o una posible accesión es de particular importancia”⁸¹⁵.

El caso de Yugoslavia es ciertamente equívoco como ha concluido la mayoría de la doctrina. A diferencia de la desintegración de la Unión Soviética, en la que un estado, Rusia, se declaró estado continuador del predecesor, por ser claramente mayor en superficie y población, la desintegración de Yugoslavia produjo solamente estados sucesores sin ningún estado continuador. Es interesante desde el punto de vista político señalar que una de las razones aducidas para la independencia de las repúblicas era precisamente el excesivo peso relativo de Serbia en la federación. La República Federativa de Yugoslavia (luego Serbia y Montenegro, luego separada en Montenegro y Serbia) por su lado reclamaba su condición de estado continuador, a la manera de Rusia, continuidad que le era negada. Al no reconocerse un solo estado sucesor sino todos los resultantes por igual, todas las nuevas repúblicas debieron solicitar la readmisión en Naciones Unidas como nuevos miembros. En su Resolución 777, aprobada por unanimidad el 19 de septiembre de 1992, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siguiendo las opiniones Badinter, constató que la República Socialista Federal de Yugoslavia había cesado de existir y recomendó a la Asamblea General que la República Federal de Yugoslavia dejara de participar en la misma y volviera a solicitar la admisión. La República de Yugoslavia volvió a solicitarla y *de facto* reconoció finalmente no ser único continuador sino estado sucesor de la Yugoslavia socialista con su incorporación en las Naciones Unidas el primero de noviembre de 2000⁸¹⁶.

Hasta entonces, se dio la circunstancia de que, por un lado, Yugoslavia no formaba parte del sistema y no participaba en el Comité de Derechos Humanos, y se negaba su sucesión como estado continuador, pero sí se consideraba vinculada a los convenios de derechos humanos así como que debía responder por responsabilidades derivadas de la guerra, en cuanto estado sucesor. El caso de *Genocidio*, presentado ante la Corte Internacional de Justicia por el Estado de Bosnia y Herzegovina en 1993 contra la República Federativa, fue admitido en 1996 (la sentencia no fue dictada hasta el 26 de febrero de 2007⁸¹⁷), tras la firma de los Acuerdos de Dayton, cuando la Federación de Yugoslavia no era parte de la Asamblea General, admitiéndose sobre la base del acceso automático y la continuidad de los estados sucesores en materia de tratados, en particular en tratados sobre derechos humanos, y la continuidad de las responsabilidades de los estados sucesores (cuestión que a día de hoy no ha sido totalmente aclarada toda vez que Montenegro, sobre cuya responsabilidad la Corte no se decidió a resolver tras ver consumada su independencia, esquivando la cuestión al no considerar al Estado de Montenegro sucesor como *parte procesal*).

⁸¹⁵ Zimmermann A., “Secession and the law...”, op. cit., p. 217

⁸¹⁶ Resolución de Asamblea General A/RES/55/12

⁸¹⁷ La sentencia de la Corte Internacional de Justicia puede consultarse en <http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf>

Por otro lado, sin embargo, algunos estados sucesores, incluyendo Bosnia y Herzegovina, *notificaron* su propia accesión como nuevos estados a los tratados a los que deberían *automáticamente* acceder conforme al mismo criterio expresado de que a los tratados en materia de derechos humanos se accedía sin necesidad de notificar. Efectivamente, el 29 de diciembre de 1992, Bosnia y Herzegovina transmitió al Secretario General de las Naciones Unidas, como depositario de la Convención sobre Genocidio, una Notificación de Sucesión según la cual “el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina tras considerar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, de la que la ex República Socialista Federal Socialista de Yugoslavia era parte, desea suceder a la misma y se compromete firmemente a cumplir y llevar a cabo todas las estipulaciones en ella contenida con efectos *a partir del 6 de marzo de 1992, fecha en que la República de Bosnia y Herzegovina se hizo independiente*”. El 18 de marzo de 1993, el Secretario General comunicó a las partes de la Convención tal notificación con efectos desde la fecha en que Bosnia y Herzegovina asumió sus responsabilidades internacionales⁸¹⁸.

La práctica de la notificación de sucesión como parte del tratado no sólo se limitó a tratados en materia de derecho internacional humanitario, sino que se extendió a los principales tratados de derechos humanos. Respecto a los Pactos Internacionales, la antigua Yugoslavia los había firmado el 8 de agosto de 1967 y ratificado el 2 de junio de 1971. Hoy en día Bosnia y Herzegovina figura como parte de los Pactos Internacionales de 1966 desde el 1 de septiembre de 1993 y de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación de 1965 desde 16 de julio de 1993. Esta práctica fue seguida por la mayoría de los estados sucesores de Yugoslavia.

Así, los estados sucesores, tal y como hizo como Bosnia y Herzegovina, declaraban la continuidad automática y universal pero, por otro lado, actuaron conforme a los principios de *tabula rasa* propios de la descolonización. Dada esta ambigüedad, se cuestionaba Andreas Zimmermann “si es suficientemente seguro afirmar que la regla contenida en el artículo 34 de la Convención de Viena de 1978 –la cual al menos en el tiempo en el que fue bosquejada podía ser considerada más un desarrollo progresivo que una codificación de derecho internacional- ha realmente cristalizado en una norma positiva de derecho consuetudinario de Derecho”⁸¹⁹.

Sin embargo, la actitud de los Organismos Internacionales ha sido también equívoca, defendiendo la sucesión automática de tratados en materia de derechos humanos y admitiendo las notificaciones. Para Andreas Zimmermann “la cuestión de si los tratados de derechos humanos recaen o no de forma automática en algún Estado sucesor (...) ha sido abordado con frecuencia en la práctica de los diferentes órganos creados en virtud de los diversos tratados de derechos humanos”, añadiendo, de manera no poco controvertida, que esos órganos “han adoptado por unanimidad la posición de que la protección en virtud de dichos tratados se extiende automáticamente a la población de los Estados

⁸¹⁸ Hillier, T., *Sourcebook on Public International Law*. Routledge, 1998. P 167

⁸¹⁹ Zimmermann A., “Secession and the law...”, op. cit., p. 214

sucesores (...)»⁸²⁰, aseveración fundamentada en el Comentario General No. 26 adoptado por el Comité de Derechos Humanos y una declaración conjunta de los presidentes de todos los órganos interesados de derechos humanos de las Naciones Unidas que declararon que: “los estados sucesores están obligados automáticamente por (...) los instrumentos internacionales de derechos humanos a partir de la fecha respectiva de independencia y que la observancia de las obligaciones que no debe depender de la declaración de la confirmación por parte el gobierno del Estado sucesor”. Sin embargo, Zimmermann admite seguidamente que “la práctica estatal es menos homogénea”⁸²¹.

El profesor Mennio Kamminga también consideraba a mediados de los noventa que, dentro del amplio e incierto campo de la sucesión de estados en materia de tratados, “la cuestión de sucesión de estado en materia de tratados sobre derechos humanos es de interés particular. (...) su importancia reside en el hecho de que las violaciones masivas de derechos humanos a menudo ocurren precisamente durante los períodos de inestabilidad política que tienden a acompañar la sucesión de estados”⁸²².

Para Mennio Kamminga, no habría problema en realizar tal distinción si estuviera claro que la sucesión en materia de tratados en general fuera clara a favor de la continuidad, como recoge el mencionado artículo 34 de la Convención de Viena, pero a la vista de las dudas despertadas –parecidas a las que se refería Zimmermann– “se hace necesario subrayar el carácter especial de los tratados de derechos humanos”. Kamminga concluía así, en 1996, que: “la práctica estatal durante los años noventa apoya vehementemente la visión de que *las obligaciones que emanan de los tratados sobre derechos humanos no son afectadas por la sucesión de estados*. Esto aplica a todas las obligaciones asumidas por el estado predecesor, incluyendo todas las reservas, declaraciones y derogaciones hechas por él. La continuidad de todas estas obligaciones ocurre *ipso jure*. El estado sucesor no está bajo la obligación de expresar a nadie su confirmación”⁸²³.

Ya en 2003, Akbar Rasulov revisó el trabajo de Kamminga a la vista de las evoluciones de la cuestión hasta la fecha y se centró en la cuestión de la sucesión de tratados, distinguiendo no sólo entre la sucesión de estados en general y en materia de derechos humanos, sino entre la sucesión en materia de derechos humanos cuyo cumplimiento entiende relacionado con las obligaciones que los estados deben cumplir con sus ciudadanos en contraposición con el Derecho Humanitario Internacional que se inspira en el sentimiento de humanidad y se centra en la protección del individuo en conflictos armados. Rasulov reconoce que, en cuanto a la sucesión en general, en los últimos años la preferencia de los académicos ha tendido a favorecer la continuidad, tal y como también parece indicar la entrada en vigor de la Convención del 78, especialmente continuidad automática en materia de derechos humanos. También reconoce la influencia de lo que él ha denominado el “modelo Kamminga” en la jurisprudencia de la Corte Internacional de

⁸²⁰ Zimmermann A., “Secession and the law...”, op. cit., p. 219

⁸²¹ UN Doc. E/CN.4/1995/80, Informe del Secretario General “Succession of States in respect of International Human Rights Treaties”, 28 de noviembre de 1994, p. 3

⁸²² Kamminga, M.T., “State Succession in Respect of Human Rights Treaties”, *European Journal of International Law*, 1996, pp 469–484

⁸²³ Kamminga, M.T., “State Succession...”, op. cit, pp. 469–484

Justicia o por algunos Organismos Internacionales (haciendo referencia al Comité de Derechos Humanos y el mencionado Comentario N.26 (UN Doc. A/53/40)⁸²⁴.

Sin embargo, Rasulov rechaza que se haya seguido en la práctica o que se haya adoptado totalmente dicho modelo. Así, tras analizar la práctica internacional concluye que: “en Derecho Internacional, los tratados de carácter humanitario no están sujetos a sucesión automática. Aparte de un caso único ningún estado sucesor ha actuado como si la sucesión a un tratado de derecho humanitario pudiera cumplirse a pesar de su voluntad. A pesar del apoyo académico al “modelo Kamminga”, los estados en la práctica guardan celosamente el paradigma del “estado limpio” [*tabula rasa*], incluso cuando los patrones de sucesión revelan una continuidad *de facto*”, asegurando que la tendencia parece ser, más bien, la de elección de tratados por parte del estado sucesor. Así, los estados sucesores *de facto* asumen los tratados de derecho humanitario pero expresando su voluntad y rechazando la sucesión automática en expresión de su soberanía. Además asegura Rasulov, tampoco algunas Organizaciones Internacionales parecen apoyar el modelo Kamminga al requerir a los estados sucesores formalizar o notificar la sucesión a los tratados, “erosionando así cualquier argumento a favor de que la sucesión en estos casos pueda ocurrir *ipso jure*”.

De manera similar se ha expresado, según recoge Rasulov, la *Asociación de Derecho Internacional*. En su Informe Final sobre la sucesión en materia de tratados de abril de 2002, recogía que: “si la doctrina en general tiende a ser favorable a la continuidad en esta área (derecho consuetudinario en *statu nascendi*), la práctica de los Estados no es uniforme. Muchos estados han optado por la adhesión a estos acuerdos y no por sucesión automática. De hecho, se trata de mantener un cierto grado de libertad de decisión en estas materias”⁸²⁵. En resumen, aunque la sucesión automática de tratados en materia de derechos humanos, particularmente en Derecho Internacional Humanitario, es defendida por la mayoría de la doctrina, todavía es un tema controvertido y no apoyada consistentemente por la práctica continuada de los estados.

Sin embargo, la sucesión automática en materia de tratados de derechos humanos puede ser distinguida de la sucesión automática de la responsabilidad misma derivada de los actos ilícitos cometidos en los conflictos armados en violación del Derecho Humanitario. Esta cuestión ha sido estudiada recientemente en detalle por Patrick Dumberry, quien denuncia que “parece que entre los autores que no han hecho un estudio extensivo de la cuestión de la sucesión de estados de responsabilidad internacional, la posición casi unánimemente adoptada es en favor de la no-transferencia al estado o estados sucesores de la obligación de reparación”⁸²⁶, es decir, que si los actos ilícitos los cometió el estado predecesor, se argumenta que éste era un estado diferente y que, por tanto, los actos ilícitos los cometió otro estado diferente y no hay posibilidad de reclamar responsabilidad alguna. Argumenta Dumberry que: “es innegable que el principio de sucesión de estados a derechos y obligaciones emanadas de actos ilícitos cometidos antes de la fecha de sucesión debería ser adoptado desde la perspectiva del respeto al orden y estabilidad de las situaciones jurídicas existentes en las

⁸²⁴ Rasulov, A., “Revisiting State Succession to Humanitarian Treaties: Is There a Case for Automaticity?”, *European Journal of International Law*, n. 14, 2003, p.143

⁸²⁵ International Law Association, *Rapport final sur la succession en matière de traits*, London, 2002. Citado por Rasulov en Rasulov, A., “Revisiting State Succession to Humanitarian Treaties: Is There a Case for Automaticity?”, *European Journal of International Law*, n. 14, 2003, pp. 141–170

⁸²⁶ Dumberry, P., *State Succession to International Responsibility*, Graduate Institute of International Studies Geneva. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2007, p. 37

relaciones internacionales. La estabilidad del orden legal internacional requiere que los intereses de los Estados dañados sean protegidos en el contexto de una sucesión de estados. (...) Es concebible (y debería esperarse) que con el requerimiento de la continuidad legal y la estabilidad de una sociedad internacional de Estados cada vez más globalizada se desarrollen más normas de derecho internacional consuetudinario”⁸²⁷. Por ello, Dumberry defiende que “la práctica de los Estados modernos y la jurisprudencia apoyan claramente el principio de la sucesión de Estados a la responsabilidad internacional. Uno no puede dejar de notar una tendencia moderna hacia el principio de la continuidad de las obligaciones de reparar y del derecho a la reparación. (...) Ejemplos recientes de sucesión de Estados en la década de 1990 están claramente en apoyo del principio de sucesión. En el contexto de sucesión de las obligaciones derivadas de los actos internacionalmente ilícitos cometidos antes de la fecha de la sucesión, (...) no se ha encontrado ni un solo caso reciente en el que Estado sucesor se negara a ser considerado responsable de las obligaciones generadas antes de la sucesión. (...)”, recordando asimismo que el principio de sucesión es afirmado por los estados sucesores en los Acuerdos de 2001, aunque sabemos que no formaron parte sustancial de dichos acuerdos⁸²⁸.

El debate sobre la automaticidad de la sucesión de estados en materia de tratados de derechos humanos y de derecho humanitario internacional adquirió viveza en relación con los actos ilícitos y con la responsabilidad internacional de estos actos cometidos durante la guerra, con miras a que los crímenes de guerra y contra la humanidad no quedaran impunes por el cambio de sujeto estatal. Se distinguió la obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, distinción necesaria también por las diferentes responsabilidades que se derivan de respetarlo y respetar los derechos humanos, toda vez que es punible la responsabilidad de las personas individuales por crímenes de guerra y contra la Humanidad, como de las responsabilidades estatales. El indudable interés por la responsabilidad de las terribles violaciones de Derecho Humanitario arrinconó el debate académico en relación con las violaciones de derechos humanos que pudieran producirse por el trazado mismo de nuevas fronteras.

Ahora bien, para lo que interesa a la cuestión que nos planteábamos acerca de si deben respetarse, y cómo, las normas internacionales vigentes de derechos humanos durante el proceso sucesorio, y si aplica en el caso de sucesión de Yugoslavia, el debate sobre la automaticidad supone sólo una parte de la cuestión, que podemos concluir con la siguiente reflexión:

En primer lugar, el hecho de que los estados sucesores notificaran la sucesión a las demás partes de tratados de derechos humanos, como los Pactos Internacionales, puede interpretarse como una notificación o aviso de quién se hace cargo a partir de ese momento de implementar y proteger los derechos contenidos en esos tratados, no de que no exista una obligación. Sabemos que en la actual sociedad internacional rige, como diría Jack Donnelly, un sistema estatal de protección de derechos humanos, pero los derechos humanos no emanan de la ciudadanía de un estado (por eso en nuestra tradición jurídica diferenciamos los derechos fundamentales), sino que emanan de la dignidad humana. Bajo este punto de vista, los estados tienen a su cargo cumplir y hacer cumplir unos derechos humanos, obligaciones que preexisten al acto de notificación. Así, es perfectamente posible notificar el cambio de responsable de hacer cumplir los derechos

⁸²⁷ Dumberry, P., *State Succession...*, op. cit., pp. 434 y 435.

⁸²⁸ Dumberry, P., *State Succession...*, op. cit., p. 430

contenidos en los tratados, pero es discutible que los derechos mismos no existan sólo porque no quede claro quien o cuándo han de hacerse cumplir. Esto es más obvio si pensamos que en su forma más básica, no admitiríamos la violación de derechos humanos –no tanto el cumplimiento o protección– sólo porque no se haya mandado una notificación de sucesión.

De manera relacionada, aducir esta falta de claridad sobre el sujeto obligado sólo puede ser en detrimento del mejor cumplimiento de los derechos humanos, y no en favor de su cumplimiento. Si no es concebible una laguna de soberanía en el proceso sucesorio –no hay momento sin estado aunque la soberanía sea disputada–, sí es concebible la violación continuada de derechos humanos por distintos poderes estatales, estatales en *statu nascendi* o paraestatales, que deben hacer, en todo caso, lo que esté en su mano para prevenir cualquier vulneración de derechos humanos.

Esta reflexión, cercana al modelo Kamminga, que rechaza igualmente la admisión de esos peligrosos “agujeros de responsabilidad” (*accountability gaps*) creados “tanto en el período entre el momento de independencia y la entrada en vigor del tratado para el estado sucesor como también respecto a cualquier violación ocurrida bajo el previo régimen”⁸²⁹, se refuerza si se considera, (como hace una mayoría de la doctrina, aunque no pacíficamente), que el respeto de los derechos humanos es norma derecho consuetudinario o de *jus cogens*, al menos en su forma más básica, esto es, que existe una *opinio juris* de que existe al menos una obligación de respetar, como diría Henry Shue, unos derechos, que según esa misma *opinio juris* la DUDH es un estándar (aunque en términos formales es sólo una resolución de la AGNU), y que existe una abundante práctica consecuente orientada al respecto y protección de esos estándares y a la condena de la desviación de esos estándares.

Pero además, el que la sucesión sea o no automática tiene una importancia relativa si las partes obligadas notifican, como hicieron los estados sucesores de Yugoslavia, su obligación con las disposiciones de los tratados retrospectivamente *desde* la fecha de su independencia. En este caso, es difícil argumentar que existió un “agujero de responsabilidad”, si los estados sucesores reconocieron las obligaciones derivadas de los tratados desde la fecha de independencia y, por tanto, haciendo posible un marco de negociación comprehensivo en materia de derechos humanos para los Acuerdos de Sucesión de 2001, que no se produjo.

Por último, aunque se quisiera argumentar un agujero de responsabilidad durante el proceso de sucesión efectiva, hemos de recordar que la notificación de sucesión de los estados sucesores de Yugoslavia a los principales tratados de derechos humanos fueron en todo caso posteriores a la declaración independencia pero muy *anteriores* a la firma de los Acuerdos de Sucesión de 2001.

Los Acuerdos de Sucesión de 2001 dejaron fuera expresamente las negociaciones relacionadas con las responsabilidades derivadas de los actos ilícitos durante la guerra,

⁸²⁹ Kamminga, M.T., “State Succession...”, op. cit, p. 484

que serían abordadas de otra manera, más adelante, entre ellos en cuanto estados sucesores. Los Acuerdos recogieron además, como hemos visto, los resultados de las negociaciones sobre *ciertos* derechos y obligaciones. Pero guardaron silencio sobre las obligaciones generales contraídas de respeto de todos los derechos humanos y sobre la mejor manera de cumplir con ellos, más allá de los derechos contenidos en los Acuerdos mismos, aquellos cuyo respeto exigía la necesaria cooperación interestatal, aunque se planteara -en un mínimo- desde la obligación principal de los estados de velar por los derechos humanos sólo de sus propios ciudadanos, en su propio territorio, por no hablar de desde una visión que velara por los ciudadanos involucrados en cuanto seres humanos y no ciudadanos.

Las razones para no incluir todos los derechos pero sí (y sólo) algunos derechos en las negociaciones de los Acuerdos parecen sencillas cuando se defiende desde un punto de vista del DI clásico, pero una vez rascada la superficie de la argumentación, una vez incluido el respeto de todos los derechos humanos en la ecuación, se presentan múltiples dudas, pues no queda claro que no sean menoscabados en toda circunstancia con el silencio, dejándolos dependientes de las normas de nacionalidad.

La cuestión quedó así: unos derechos fueron incluidos sobre la base de la repartición de bienes, deudas y archivos –como hemos visto con las pensiones, propiedad o acceso a la justicia-, la responsabilidad por la violación y la prevención de otros en base al Derecho Internacional Humanitario. El silencio sobre el resto de derechos, no mencionados en los Acuerdos, derivó tácitamente a cada nuevo estado la responsabilidad única de la realización de los derechos humanos de sus propios nacionales, dejando para un futuro incierto los acuerdos para su mejor realización.

§3.5.4.3 Sucesión de Estados y nacionalidad

La sucesión de la nacionalidad de la población se presenta, por tanto, como una cuestión de vital importancia para la realización de los derechos humanos.

Dado que tenemos un sistema nacional de distribución y cumplimiento de derechos humanos, cuestionar la sucesión de la nacionalidad es tanto como cuestionar la decisión sobre la distribución de bienes y derechos. Al fin y al cabo, las normas internacionales de sucesión de nacionalidad condicionan todo ese conjunto de derechos cuyo mejor cumplimiento no se trata expresamente durante un proceso de sucesión.

Obviamente, la cuestión no es tan relevante en casos de unión o fusión voluntaria de estados (si el estado resultante es democrático y respeta los derechos de igualdad) como lo es en casos de desintegración o secesión, pues la adquisición de distintas nacionalidades marcará la distinta realización de esos derechos humanos acerca de los cuales, como hemos visto, no se llegó un acuerdo durante el proceso de sucesión de Yugoslavia.

Explica Remiro Brotons, en relación con la nacionalidad en los procesos de sucesión, que

cuando el Estado es de reciente independencia, la práctica no es uniforme, viéndose: 1) en unos casos condicionada por las normas que dicte el Estado metropolitano (...) 2) resuelta en otros en los acuerdos de sucesión (...) 3) dejada, como ha acontecido en la mayoría de lo supuestos, al Derecho interno del nuevo Estado”⁸³⁰. En los casos de estados que no son de reciente independencia queda, en general, en manos del derecho interno del Estado sucesor decidir quiénes son sus nacionales, es decir, quién accede a lo derechos y recursos que ese estado garantiza.

Si bien la práctica de la sucesión de estados en cuestión de nacionalidad no es uniforme y la normativa no está muy desarrollada en Derecho Internacional, podemos mencionar dos documentos que ofrecen unas guías de actuación en relación con la nacionalidad en la sucesión de estados en los casos de desintegración (cuando el estado predecesor deja de existir) y secesión ficticia.

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano asesor del Consejo de Europa, más conocida por el nombre de la Comisión de Venecia, aprobó en 1996 en Viena la “*Declaración sobre las consecuencias de la sucesión de estados para la nacionalidad de las personas naturales*”⁸³¹, que defiende que las cuestiones relativas a la nacionalidad caigan en la jurisdicción interna de los Estados “dentro de los límites establecidos por el Derecho Internacional”, sin realizar una lista exhaustiva de esos límites.

La Comisión de Venecia establece expresamente el límite de la protección legal: “las condiciones de la adquisición y pérdida de nacionalidad serán provistas por la ley”, seguida de una protección general “cualquier privación, retirada o negación de conferir la nacionalidad estará sujeta a un remedio efectivo”. Este refuerzo de la soberanía de los estados para decidir quiénes son sus nacionales se topa con un límite adicional que quiero subrayar. El art. 4 de la Declaración dicta que:

“4. En el evento de una sucesión de Estado, los Estados involucrados podrán, mediante acuerdo, solucionar la cuestión de la nacionalidad. **Deberán respetar los derechos humanos de las personas involucradas**, tal y como se garantiza por los instrumentos internacionales”

Además se aboga por un “derecho de opción” de las personas involucradas, con el fin de evitar los casos de apatridia y discriminación, derecho que analizaremos con más detalle en la siguiente subsección.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó su posición en la Resolución 55/153 de 12 de diciembre de 2000 sobre la “*Nacionalidad de las personas en relación con la sucesión de Estados*”⁸³². En general, se sigue el principio de dar la ciudadanía a quienes tengan la residencia habitual en el territorio del estado sucesor. El

⁸³⁰ Remiro Brotons, A., et. al., *Derecho Internacional*, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 71

⁸³¹ <http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7960>

⁸³² Disponible en:

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/568/60/PDF/N0056860.pdf?OpenElement>

© Isidro García Mingo

artículo 8 concreta que: “el Estado sucesor no estará obligado a atribuir su nacionalidad a las personas afectadas que tengan su residencia habitual en otro Estado y tengan también la nacionalidad de éste o de cualquier otro Estado”, y que “2. El Estado sucesor no atribuirá su nacionalidad a las personas afectadas que tengan su residencia habitual en otro Estado en contra de la voluntad de esas personas, salvo para evitar que se conviertan en apátridas”.

El art. 22 referente a la atribución de la nacionalidad de los Estados sucesores en el supuesto de “disolución de un Estado” establece que “cuando un Estado se disuelva y deje de existir y las diversas partes del territorio del Estado predecesor formen dos o más Estados sucesores”, esto es, en casos análogos al de Yugoslavia, cada uno de estos Estados sucesores atribuirá su nacionalidad, salvo que se indique otra cosa mediante el ejercicio de un derecho de opción, en general a las personas afectadas que tengan su residencia habitual en su territorio. Además se prevé igualmente “salvo que se indique otra cosa mediante el ejercicio de un derecho de opción”, y con sujeción al mencionado artículo 8, la atribución de nacionalidad para personas que tengan su residencia en otro territorio pero que tengan un “vínculo jurídico apropiado con una unidad constitutiva del Estado predecesor que haya pasado a formar parte de ese Estado sucesor” o que “no tengan derecho a la nacionalidad de ninguno de los Estados involucrados (...), que tengan su residencia habitual en un tercer Estado y que hayan nacido en lo que haya pasado a ser el territorio de ese Estado sucesor o que, antes de abandonar el Estado predecesor, hayan tenido su última residencia habitual en dicho territorio, o que tengan cualquier otro vínculo apropiado con ese Estado sucesor”. Parecidas normas se prevén en los casos de secesión (cuando el Estado predecesor sigue existiendo), igualmente a salvo del derecho de opción. Cabe resaltar que para evitar casos de apatridia, en los casos en los que el Estado predecesor siga existiendo, éste no podrá retirar la nacionalidad de las personas naturales antes de que esas personas adquieran la nacionalidad del Estado sucesor. Con esta regulación se prevé eliminar el riesgo de apatridia y contemplar los casos de vinculación especial entre persona y territorio que se traduzca en poder ejercer el derecho de opción.

En el caso de los estados sucesores de Yugoslavia, un supuesto de sucesión ocurrido fuera del contexto de descolonización, Remiro Brotóns explica que la tendencia fue a asumir este “principio de conservación de la nacionalidad por quienes ya la poseían y no adquirieran la nacionalidad de otros estados (...) esta directiva evita situaciones de apatridia a cambio de crear otras de múltiple nacionalidad”⁸³³.

Hemos de saber que la característica fundamental del régimen jurídico de la ciudadanía en la antigua Yugoslavia era su dualidad. Como explica Svetislava Bulajić, “los ciudadanos de la antigua Yugoslavia tenían dos ciudadanía: la federal y la de una de las seis repúblicas. Una vez garantizada la ciudadanía de una de las repúblicas, uno adquiría automáticamente la ciudadanía federal. (...) En los certificados de nacimiento y certificados de ciudadanía, la ciudadanía republicana normalmente no se especificaba,

⁸³³ Remiro Brotóns, A, op. cit., p. 71

aunque la ley lo requería⁸³⁴.

Así pues, cuando la desintegración del Estado se consumó existía una base importante sobre la cual fundamentar la sucesión de la nacionalidad. La misma Yugoslavia socialista había pasado por procesos jurídicos de sucesión en su historia reciente, destacándose la experiencia de la incorporación del territorio libre de Trieste en 1954 a Italia y Yugoslavia, en la que se trató de evitar la apatridia. Los italianos con residencia permanente en el territorio adquirieron la nacionalidad yugoslava y las personas que no obtuvieron la nacionalidad yugoslava continuaron con la nacionalidad anterior, excluyéndose, eso sí, la doble nacionalidad. Se previó así un cierto derecho de opción a los miembros de esa minoría italiana, lo que tuvo como consecuencia que un número de éstos, bajo ciertas condiciones, se mudaran a Italia perdiendo la posibilidad de tener al mismo tiempo la ciudadanía yugoslava⁸³⁵.

En el caso de los estados sucesores de la antigua Yugoslavia se siguió, en principio, tanto el criterio de la ciudadanía de una de las seis repúblicas que se gozara en el momento de la independencia como el criterio de la residencia permanente. Estos fueron los criterios pero cada república los aplicó de manera diferente. Mencionaré en este punto los ejemplos de Eslovenia y ERYD Macedonia porque me volveré a referir a estos casos en la tercera parte de esta disertación.

En Eslovenia, por ejemplo, la Ley sobre la Ciudadanía de 1991, promulgada tras la independencia, preveía respecto a la nacionalidad eslovena su adquisición automática para todas las personas que tuvieran la ciudadanía de la antigua república yugoslava de Eslovenia y de la República Socialista Federal de Yugoslavia, así como para todas las personas que tuvieran la residencia permanente a fecha de 23 de diciembre de 1990 y posteriores, y que hubieran adquirido la ciudadanía sobre la base de las regulaciones de la Antigua Yugoslavia entre 1945 y 1950, que no hubieran hecho una declaración en favor de la ciudadanía eslovena. Asimismo, se preveía otorgar la ciudadanía eslovena no de manera automática, sino bajo solicitud de los ciudadanos de otras repúblicas yugoslavas de la antigua Yugoslavia que hubieran tenido residencia permanente en Eslovenia a fecha de 23 de diciembre⁸³⁶.

En la ERYD Macedonia la Ley de Ciudadanía 1992 preveía también la adquisición de la nueva ciudadanía macedonia automáticamente para todas las personas que tuvieran la ciudadanía de la República de Macedonia y del RSF Yugoslavia. Asimismo se preveía otorgar la ciudadanía, no de manera automática sino bajo solicitud, a aquellos ciudadanos de otras repúblicas de SFRY quienes en la fecha de envío de la solicitud de ciudadanía tuvieran además residencia permanente y legal por al menos 15 años, tuvieran al menos 18 años de edad y demostraran un ingreso pecuniario personal permanente. Como en el caso de Eslovenia, se procedió, en teoría, según lo opinado por la Comisión Badinter,

⁸³⁴ Bulajić, S., "Law of Nationality and the Dissolution of Yugoslavia", *Prilozi Projektu*, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Belgrado, 2005.

⁸³⁵ European Commission for Democracy through Law, *Consequences of state succession for nationality*, col. Science and technique of democracy, n. 23, Council of Europe Publishing, Germany, 1998, p. 110

⁸³⁶ European Commission for Democracy through Law, op. cit., p. 104

esto es, bajo el principio de no discriminación y respetando las minorías. Respecto a la múltiple nacionalidad, no se tomaron medidas para prohibir o limitar los casos de doble nacionalidad resultado de la disolución de Yugoslavia. La nacionalidad de las personas jurídicas se determinó por el lugar de sede y lugar de constitución⁸³⁷.

La aplicación de la autodeterminación de los pueblos resultó así también en diferentes ciudadanía civiles en los distintos territorios. Ahora bien, el motor primordialista no se detuvo. Permaneció la ideología de coherencia entre territorio y realidad etnocultural de las personas que los habitaban. Como bien explica Remiro Brotóns “(...) el principio étnico subyacente a los procesos separatistas y el afán de consolidar sobre estas bases el nuevo Estado han animado también planteamientos restrictivos que pueden llegar a ser incompatibles por discriminatorios con los derechos humanos (...)”⁸³⁸.

La aplicación de los criterios de ciudadanía anterior y residencia permanente, en conjunción con el principio de acuerdo con los criterios de la Comisión Badinter de respeto de minorías preexistentes en los territorios, así como de derechos individuales, no estuvo en la práctica exenta de problemas de violación de derechos humanos, la mayoría nacidos de las políticas de la aspiración de identificación total entre territorio y grupo etnocultural propio de las doctrinas nacionalistas primordialistas.

Un paradigmático caso es el de los *izbrisani*, esos 30.000 “residentes borrados” el febrero de 1992 de los registros civiles eslovenos, por no declararse “extranjeros”, pertenecientes a las “nuevas minorías” (personas de etnicidad albanesa, bosníaca o musulmana, croata, romaní y serbia), nuevas minorías creadas en oposición de las minorías tradicionales italianas y húngaras que se protegían en la Constitución de 1991. En 1999, la Corte Constitucional de Eslovenia declaró ilegal e inconstitucional el borrado de los *izbrisani*, descrito a menudo en medios críticos como un genocidio administrativo, fue declarado ilegal e inconstitucional por la Corte Constitucional de Eslovenia en 1999. El Parlamento de Eslovenia ofreció seguidamente, mediante la aprobación de una nueva ley, la residencia legal a los *izbrisani* que demostraran vivir de manera permanente en el territorio, ley que fue declarada también inconstitucional.

A pesar de que los textos internacionales invocan el derecho humano a la nacionalidad, debemos tener claro que la discriminación por razón de identidad étnica o nacional a la hora de otorgar la residencia y la ciudadanía a esas nuevas minorías no sólo atenta contra el derecho a tener una nacionalidad, etc., sino que afecta necesariamente a todos los derechos humanos en su conjunto, pues es la nacionalidad civil, cómo hemos defendido, la que marca los derechos que serán garantizados por un estado a un determinado individuo.

La Comisión Badinter se preocupó, con razón, del destino de las minorías en los territorios asolados por conflictos etnonacionalistas, exigiendo que los derechos de las minorías fueran respetados en los nuevos estados y que sus miembros fueran tratados en

⁸³⁷ European Commission for Democracy through Law, op. cit., p. 106

⁸³⁸ Remiro Brotóns, A., op. cit., p. 71

igualdad en cuanto ciudadanos. Esta protección de minorías está fundamentada en la prevención de la desigualdad política, económica y cultural entre personas que son ciudadanos de un mismo estado frente a la nueva mayoría que se forma en el estado sucesor. Pero no previene la desigualdad de derechos a nivel supranacional, la desigualdad humana.

La protección de las nuevas minorías que se crean en un Estado sucesor queda sin efecto si esos miembros se hacen “extranjeros” o no llegan a ser ciudadanos. Existe el peligro de que al hacer depender la realización de derechos de la nacionalidad, baste garantizar la igualdad *entre ciudadanos*, que un grupo de personas no alcancen a ser ciudadanos durante un proceso de sucesión, convertirlos en *extranjeros* para con la excusa de *garantizar los derechos propios de los extranjeros* se provoque vulneraciones de sus derechos humanos⁸³⁹.

En conclusión, la importancia de la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados viene dada no solo por la prevención de la apatridia y la protección del derecho humano a tener una nacionalidad, sino por el nivel de protección de todos los derechos humanos en su conjunto asociado a tener una determinada nacionalidad.

§3.5.4.4 El derecho de opción de nacionalidad en relación con la nacionalidad como criterio de distribución de recursos y derechos

De los textos analizados y de la práctica reciente en materia de nacionalidad de las personas afectadas por un proceso de sucesión, y defendido por la doctrina, se desprende, como hemos visto, el reconocimiento progresivo de un cierto “derecho de opción”. La preocupación de evitar los casos de apatridia ha creado modelos de sucesión en los que hay más posibilidades de suceder distintas nacionalidades, con una tendencia a la multiplicidad de criterios de adquirir la nacionalidad. Esto tiene como uno de sus efectos el incremento de la posibilidad de acceder a múltiples nacionalidades o diferentes ciudadanías. Pero también en los casos en los que los estados cesan de existir o en casos de secesión, se crea la situación de que las personas afectadas no tengan opción de mantener la nacionalidad anterior (porque el estado cesa de existir) o pierdan la posibilidad de tener residencia en una parte del territorio en el antes podían tener (aplicable también en casos de secesión o secesiones). El reconocimiento de la voluntad individual de autodeterminación de las personas afectadas por un proceso de sucesión hace reconocer, a su vez, ese cierto pero sin duda limitado “derecho de opción”.

⁸³⁹ Algunos de los casos más graves de opresión y violación masiva de derechos humanos en la Historia reciente se basan precisamente en la “extranjerización” jurídica y no en la declaración de una desigualdad ciudadana. El Apartheid sudafricano justificaba la discriminación racial no tanto en que las personas de raza negra eran inferiores sino en que eran ciudadanos extranjeros, de otros estados, los denominados *batustanes*. Esta fue la estrategia también del régimen nacionalsocialista alemán, proclamando la autodeterminación de todos los pueblos, también de los alemanes, y declarando a los judíos, gitanos y otros, no ciudadanos con menos derechos, sino extranjeros y por tanto con los derechos de los extranjeros, esto es, menos derechos.

La Declaración de la Comisión de Venecia sobre las “*Consecuencias de las Sucesión de Estados para la nacionalidad de las personas naturales*” de 1996 prevé (Art.13) que en todos los casos de sucesión, cuando el estado predecesor continua su existencia, esto es en casos de secesión o secesiones, los estados sucesores garantizarán el derecho de opción a favor de la nacionalidad del estado predecesor. El estado predecesor por continuidad garantiza la nacionalidad y su retirada no puede darse si causa casos de apatridia.

En los casos de desintegración del estado, cuando el estado predecesor cesa de existir dejando paso a dos o más estados sucesores, como fue el caso de Yugoslavia, “cada Estado sucesor deberá garantizar el derecho de opción en favor de la nacionalidad de otro Estado sucesor”. El ejercicio de este “derecho de opción” (art.14) puede basarse en la existencia de “vínculos efectivos, en particular étnicos, lingüísticos o religiosos con el estado predecesor” (abriendo así la puerta a la legitimación de un discutible primordialismo), pero también se prevé que dicho ejercicio se base en la condición más civil y voluntarista, de que “las personas previamente tuvieran la ciudadanía de una subdivisión del Estado predecesor”. Prevé también la Comisión de Venecia (art.15) que este derecho de opción sea ejercitado por “todos los adultos dentro de un tiempo razonable desde la fecha de sucesión”. Además, este derecho (art. 16) “no tendrá consecuencias perjudiciales para aquellos hacienda tal elección, en particular con respecto a su derecho de residencia en el Estados sucesor y sus propiedades muebles o inmuebles situados en el mismo”.

Por otro lado, la Resolución 55/153 de 12 de diciembre de 2000 sobre la “*Nacionalidad de las personas en relación con la sucesión de Estados*”⁸⁴⁰ también propugna (art.11) el respeto de la voluntad de las personas afectadas para adquirir la nacionalidad, siempre que éstas “reúnan las condiciones requeridas para adquirir la nacionalidad de dos o más Estados involucrados”.

El derecho de opción es concedido por los Estados involucrados en el proceso de sucesión a las personas afectadas “que tengan un vínculo apropiado con ese Estado cuando, de no ser así, esas personas se convertirían en apátridas como consecuencia de la sucesión de Estados”. Para reforzar esta prevención de apatridia los estados que retiren la nacionalidad lo harán sólo si la otra persona efectivamente ha adquirido otra nacionalidad en base a su derecho de opción. Los Estados involucrados, por último, “concederán un plazo razonable para el ejercicio del derecho de opción”. Vemos, pues, que el derecho de opción está basado en dos fundamentos volitivos:

(i) Por un lado, la apertura de la posibilidad del reconocimiento del derecho de opción depende de la voluntad de los Estados sucesores. Del mismo modo que en la sucesión de bienes, deudas y archivos, por ejemplo, se prevén unas normas generales pero sujetas al (preferido) pacto entre estados, en la sucesión de nacionalidades se prevén unas normas generales “salvo que se indique otra cosa mediante el ejercicio de un

⁸⁴⁰ Disponible en:

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/568/60/PDF/N0056860.pdf?OpenElement>

© Isidro García Mingo

derecho de opción”. Esto es, el ejercicio del derecho de opción depende de la voluntad de los estados de reconocerlo y garantizarlo, quedando a su arbitrio a quién ofrecer las posibilidades de elección, con el límite de la apatridia.

(ii) El segundo elemento volitivo es la posibilidad de libre elección de nacionalidad de la persona afectada por el proceso de sucesión al ejercer libremente su derecho de opción en los límites y las opciones marcadas por los estados sucesores. Así pues, la voluntad de la persona afectada de elegir su nacionalidad está supeditada a la voluntad de los estados, que es a su vez limitada con el objeto de evitar la apatridia.

Si consideramos, por un lado, la posibilidad de ejercer el derecho de opción por parte de las personas afectadas y, por otro, que la nacionalidad es la puerta a ejercer de diversas maneras ciertos derechos y participar de determinados recursos, es razonable preguntarse acerca del papel de la libre opción en relación con la expresión de la voluntad de adquirir obligaciones y participar en derechos y recursos ofrecidos por obtener una nacionalidad y no por otra y, por tanto, sobre la *disponibilidad* de esos derechos.

Desde este punto de vista, si ponemos en relación las dos voluntades de sucesión de la nacionalidad con la nacionalidad como derecho definidor de los derechos humanos (fundamentales) que los estados han de garantizar y los ciudadanos pueden disfrutar, (i) el hecho de que los estados ofrezcan o no el derecho de opción conforme a su voluntad y (ii) la libre opción de una nacionalidad u otra sería, con matices, prácticamente equivalente a que (i’) los estados sucesores son libres de elegir a quién y a quién no habrán de garantizar derechos y recursos, con el límite de la apatridia y que (ii’) cuando se garantiza y los individuos ejercen efectivamente su derecho de opción eligen en realidad qué estado habrá de garantizar sus derechos, qué obligaciones ciudadanas adquirirán, y de qué recursos materiales habrán de participar y aportar.

La reflexión sobre el “derecho de opción” nos pone así en un interesante pero complicado escenario en el que el individuo afectado por la sucesión, al ejercer este derecho se enfrenta a una decisión racional y no meramente emocional. También ante un escenario voluntarista y no de identidad primordial. El individuo se enfrenta, en fin, a una situación *contractual*, una posibilidad de adhesión a un pacto social u otro.

La expresión de la voluntad individual de a qué estado se quiere pertenecer y someter como ciudadano que supone el ejercicio del derecho de opción está muy relacionada con la dimensión individual del derecho de autodeterminación. La expresión de la libertad individual al ejercer el derecho de opción puede parecer más clara y tangible que en otros procesos de ejercicio de autodeterminación colectiva.

Podría parecer que, dada esta situación contractual jurídica y moral, bastaría distinguir que la voluntad del individuo es verdaderamente libre, (que es un adulto, que no ha mediado coacción ni violencia, que no se encuentra en una situación de extrema pobreza que limita gravemente sus capacidades, etc.), para zanjar la cuestión de la distribución de derechos y bienes implicados en el proceso de sucesión. Podría argumentarse que con el libre ejercicio del derecho de opción acaban todas nuestras tribulaciones y

disquisiciones sobre la distribución y garantía de realización de los derechos humanos asociados a la nacionalidad durante un proceso de sucesión. Podría argumentarse que unos derechos y recursos son distribuidos entre estados sucesores tal y como se hizo en los Acuerdos de 2001, otros derechos conforme a acuerdos específicos y el resto (inespecífico) conforme a la nacionalidad, reforzado por la aceptación tácita que es el ejercer un derecho de opción.

Al fin y al cabo, ejercer el derecho de opción es tanto como elegir unas obligaciones y un cierto nivel de realización concreto de derechos universales (que emanan de una ciudadanía o nacionalidad) y no otras (que emanan de otra ciudadanía). En fin, podría argumentarse que si individuo *elige* libremente su nacionalidad, acepta tácitamente los derechos garantizados por su nueva nacionalidad y el nivel de realización de dichos derechos.

Sin embargo, no podemos aceptar esto sin réplica, sin cuestionarnos si podemos tomar el ejercicio de un derecho de opción de nacionalidad como un acuerdo tácito e indiscutible acerca de los niveles de derechos humanos que la persona afectada por el proceso de sucesión y si el ejercicio de este derecho puede sustituir a la negociación para la plena realización de todos los derechos. Nos encontramos con algunas dificultades, especialmente en relación con la expresión de la voluntad y con la disponibilidad de los derechos.

Por un lado, la primera dificultad está relacionada con la identidad como base para definir el derecho de opción. Es discutible que el derecho de opción pueda entenderse como una adhesión libre y voluntaria a una comunidad civil si los criterios para adquirir la nueva nacionalidad son identitarios etnoculturales. Podríamos preguntarnos si es completamente libre la voluntad de un derecho de opción que no depende de la razón y el interés individual, que no es autónoma, sino que depende de identidades primordialistas con las que el individuo nació y respecto a las cuales no cabe elección.

De manera relacionada, es discutible afirmar que podemos distinguir una expresión de la voluntad totalmente libre si ésta es dependiente de la voluntad de los estados sucesores de ofrecer el derecho de opción, así como es discutible distinguir una voluntad completa en casos de desaparición del estado predecesor si para el individuo no es posible optar por mantener el *statu quo*.

Además, aún existiendo una perfecta libertad de opción entre todos los estados sucesores basado en la pura voluntad, escenario improbable, y aún obviando la imposibilidad de optar por un estado anterior inexistente, cabe también cuestionar una identificación perfecta entre la aceptación de la nacionalidad y la aceptación del nivel de derechos que ésta comporta.

Es difícil aceptar sin discusión que el derecho de opción supone una aceptación del nivel de realización de derechos cuando coincidimos en que los derechos humanos son indisponibles, irrenunciables e inalienables. Nadie puede aceptar libre y voluntariamente una disminución de derechos. Sabemos, sin embargo, que en la práctica las personas

disponen cotidianamente de su ejercicio al tomar decisiones en su vida diaria.

Así es necesario solventar la difícil ecuación entre la libre opción de nacionalidad, los diferentes niveles de cumplimiento de derechos humanos que de facto comporta elegir una nacionalidad u otra, y la indisponibilidad de los derechos humanos.

Pero además, factualmente puede darse que se produzca una inevitable disminución de derechos, es decir, que a la persona afectada se le ponga en la tesitura de elegir forzosamente una nacionalidad que suponga una disminución de derechos, lo que no implica una disposición de derechos; esto no puede solventarse con el derecho de opción como arreglo contractual, pues uno puede verse obligado a elegir un estado para no caer en la apatridia pero no significa que haya dispuesto que sus derechos sean disminuidos.

Esto puede suceder de diversas maneras. Ante la disyuntiva que supone ejercitar el derecho de opción de nacionalidad por parte de una persona afectada por un proceso de sucesión, podría darse el caso de que la persona se vea en la posición de elegir entre dos situaciones peores para el nivel de cumplimiento de sus derechos humanos en comparación con su situación en el estado predecesor, tanto en casos de secesión como (especialmente) en casos de desaparición.

Además, está claro que ciertos derechos no van a poder ser cumplidos de mejor manera con el trazado de una nueva frontera. Por un lado, el individuo puede verse obligado a elegir una situación sub-óptima respecto a su situación anterior, pues puede darse que la mejor realización de sus derechos sea mejor dada parcialmente por una ciudadanía y parcialmente por otra. Es posible, naturalmente, y por eso en parte se dan históricamente secesiones y desapariciones, que unos ciudadanos vean su nivel de derechos mejorado y otros empeorado. Es perfectamente posible que a algunos les compense, vean su nivel de derechos mejorado a nivel global, lo que no significa que ciertos derechos particulares puedan verse o no negativamente afectados.

Sin embargo, podemos argumentar que existen ciertos derechos o aspectos de la realización de ciertos derechos que no están cubiertos por ninguno de los estados sucesores, ya sea en casos de desintegración o secesión, porque existe una imposibilidad manifiesta de cumplirlos si no median acuerdos interestatales específicos. Existe un grupo de derechos que no pueden repartirse entre estados sucesores porque son consustanciales a la situación anterior. El derecho de opción no cubre ni puede cubrir estos derechos que no son garantizados por la nacionalidad que otorga.

En un sencillo y poco elaborado ejemplo, la libertad de movimiento entre dos territorios de la que gozaba una persona afectada por un proceso de sucesión puede empeorar por estar divididos por una nueva frontera, y este derecho ni se mantiene ni mejora por ejercer el derecho de opción en favor de una ciudadanía u otra por separado, ni mejora con una frontera, porque ninguna nacionalidad garantiza por separado la realización completa de este derecho: en realidad, el individuo cede el ejercicio autónomo de su derecho de paso en favor de una autoridad superior que decidirá si ese mismo individuo puede o no traspasar la frontera.

En fin, mientras que la elección de nacionalidad pueda ser *de facto* tanto como elegir el nivel de realización de ciertos derechos a partir de cierto momento, el ejercicio del derecho de opción de nacionalidad no puede tomarse como una renuncia al mejor ejercicio de los derechos humanos, aunque la nueva situación cree escenarios de hecho mejores para la realización de unos que de otros.

Hay derechos que son indisponibles respecto a los cuales el individuo no puede elegir libremente su disminución, pero cuya realización en su conjunto puede ponerse en una balanza en la que el individuo en base a la autonomía de su voluntad elige de acuerdo a sus preferencias y situación personal. Pero tenemos que tener presente que existirán ciertos derechos cuyo ejercicio quedará simplemente mermado o imposibilitado por la nueva situación independientemente del ejercicio del derecho de opción.

Si cada nacionalidad supone un nivel de garantía y realización de derechos humanos diferenciado, el único modo de que optar racionalmente entre ellas no suponga una disminución de los derechos (que son indisponibles) es que el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los estados sucesores sea parecido, lo que en la práctica es extremadamente difícil que se dé, habida cuenta que la secesión y la desaparición de estados son fenómenos en general relacionados, precisamente, con la desigualdad de distribución de recursos y/o derechos y la creciente o decreciente posibilidad de acceso a los mismos y las expectativas creadas.

Para solventar la dificultad de compatibilizar la indisponibilidad de los derechos humanos y la libre elección sobre su cumplimiento (incluyendo la posibilidad de disminución) que supone ejercer el derecho de opción de nacionalidad, podemos distinguir que el derecho de opción de nacionalidad no se corresponde directamente con la posibilidad de elegir un nivel de realización de derechos frente a otro (cuestiones identitarias aparte), sino con la posibilidad de elegir qué estado será el responsable de *garantizar* en lo posible esos derechos de la persona afectada.

Los estados sucesores, en su papel de garantes de derechos deben intentar en lo posible mantener el nivel de ejercicio de los derechos humanos. Es cierto que los derechos son regulados conforme a la legislación nacional en el ámbito de soberanía de cada estado soberano, pero no podemos defender que los estados no hagan lo que esté en su mano para preservar el nivel de derechos humanos durante el proceso sucesorio.

Además, existe todo ese grupo de derechos que ninguno de los estados sucesores puede garantizar por separado. Aunque el derecho de opción se interprete no como la opción entre distintos niveles de realización de derechos, sino entre quiénes habrán de garantizar los derechos, existen ciertos derechos que sólo pueden ser garantizados mediando la cooperación entre estados y no por ninguno por separado, como es el caso del de libre movimiento entre dos territorios, por ejemplo. Para estos casos, se hace necesario el acuerdo y la negociación durante el proceso sucesorio entre los estados sucesores, con el fin de garantizar el mejor ejercicio de los derechos de todas las personas afectadas.

Con este trasfondo, se nos abren así dos vías de reflexión divergentes:

- a) la primera, más cosmopolita, que indicaría la prevalencia de la indisponibilidad de los derechos humanos, por individuos y por estados, que cuestionaría cualquier proceso de sucesión por el cual ciertas personas vieran disminuido forzosamente su nivel de realización de derechos humanos al cambiar de nacionalidad y
- b) una segunda, más acorde con el nivel de desarrollo de la normativa internacional contemporánea, que aceptaría que las personas abrazaran distintos niveles de desarrollo de derechos humanos a través del derecho de opción de nacionalidad, valorizando la autonomía de su voluntad, aunque sea limitada, considerando el derecho de opción de nacionalidad como la elección de un estado sucesor garante de sus derechos humanos y no como la elección entre niveles mismos de desarrollo de esos derechos que son indisponibles.

Es en esta segunda línea de reflexión, en la que defendemos el diálogo y la negociación entre estados sucesores para la mejor realización de los derechos humanos, particularmente de aquellos derechos que no podrían ser materialmente provistos por la ninguno de los estados sucesores por separado sin mediar acuerdo alguno.

No estamos muy alejados en la práctica de este escenario, aunque la distancia que media es fundamental para el mejor ejercicio de los derechos. A día de hoy, durante los procesos de negociación, como hemos visto respecto a los Acuerdos de 2001, se negocian derechos, obligaciones, activos y pasivos, teóricamente en base al criterio del principio de equidad. Hemos visto que se negocian cómo se abordarán los derechos de las minorías. También se negocian la manera de abordar la responsabilidad derivada de las vulneraciones de derecho internacional humanitario. Nada impide que se incluyan nuevos derechos, incluso *todos* los derechos, en la negociación.

Si como afirma Remiro Brotons existe una obligación internacional de *pacto de contrahendo* para los estados sucesores, y si existe un deber general de respeto de derechos humanos, ¿qué se opone a incluir en esos pactos las negociaciones sobre la mejor realización de derechos humanos de todas la personas afectadas por los procesos de sucesión de estados? ¿qué se opone a la mejor distribución conforme al principio de equidad?: ningún argumento de peso, salvo una tradición de Derecho Internacional anterior a la DUDH que empieza a resquebrajarse. Ni siquiera los más beneficiados por un proceso de sucesión habrían de oponerse a la negociación de todos esos derechos que ningún estado sucesor puede garantizar por separado. La extensión del principio de distribución equitativa a negociaciones para la mejor realización de *todos* los derechos, incluidos los que los estados sucesores no podrían garantizar por separado, sería de celebrar y perfectamente compatible con la legislación internacional actual y con la dirección a la que se dirige.

Hemos repasado los ámbitos de negociación entre los estados sucesores de Yugoslavia, plasmados sobre todo en los Acuerdos de 2001 y hemos comprobado que muchos derechos fueron obviados, ignorados, mientras que otros sí fueron objeto de negociación; no debatir sobre la mejor realización futura de los derechos humanos de las personas afectadas por los procesos de sucesión no soluciona los problemas, sino que a lo sumo los

posterga, si no los empeora, especialmente en lo referido a los derechos cuya mejor realización requiere la cooperación entre estados sucesores.

En este particular espacio de reflexión en el que, veremos, se revela especialmente interesante el concepto del derecho humano al desarrollo, en cuanto derecho a un proceso holístico de incremento de derechos y libertades y crecimiento económico. El mejor cumplimiento del derecho al desarrollo requiere la realización de *todos* los derechos humanos y no sólo de aquellos sujetos a la nacionalidad y dependientes del derecho de opción.

El mejor cumplimiento del derecho al desarrollo no puede realizarse sin alcanzar acuerdos sobre una base negociada, pues existen derechos que no pueden realizarse de mejor manera ni teniendo múltiples pasaportes ni garantizando el derecho de opción entre ellos: derechos de tránsito, de educación, derechos familiares y civiles, relacionados con el medio ambiente, etc., pueden verse disminuidos o súbitamente insatisfechos con la adquisición de una nueva nacionalidad aunque sea libremente elegida, eso sí, con las limitaciones propias del ejercicio del derecho de opción. Esta cuestión, relacionada con el derecho humano al desarrollo será tratada en la tercera parte de nuestra disertación.

§3.5.5 Notas adicionales acerca de la interpretación del derecho de autodeterminación tras los Acuerdos de Sucesión de 2001: los casos de Montenegro y Kosovo

En sentido estricto, tanto la aplicación del derecho de autodeterminación en el caso de la República de Montenegro o en el todavía incompleto proceso de independencia de Kosovo, no forman parte de nuestro caso práctico, pues Montenegro no se independizó de Yugoslavia sino de la República de Serbia y Montenegro⁸⁴¹ y Kosovo declaró unilateralmente su independencia de la República de Serbia⁸⁴². Cabe rebatir que desde un punto de vista histórico, político y sociológico sí que forman parte del mismo proceso de desintegración de Yugoslavia como ente político, si seguimos ese patrón de “cadena de secesiones”, como diría Veiga, al que hemos hecho referencia con anterioridad.

Por la primera razón, no incluiré en la presente tesis el estudio pormenorizado de la interpretación y aplicación del derecho de autodeterminación ni en el caso de Montenegro ni en el de Kosovo como parte de nuestro caso de estudio, restringiendo el análisis a la repúblicas ex yugoslavas que sí firmaron los Acuerdos de Sucesión de 2001, como he hecho en las páginas anteriores. Sin embargo, por la segunda razón, quisiera añadir dos notas que ayuden a comprender la evolución de la interpretación del derecho de autodeterminación en la región en su conjunto, y sobre todo, en qué punto nos hallamos respecto a un enfoque global de derechos humanos.

Quiero mostrar con ambas notas, a modo de epílogo de este capítulo, que las

⁸⁴¹ El 3 de junio de 2006. Ingresó en las Naciones Unidas el 28 de junio de ese año.

⁸⁴² El 17 de febrero de 2008. Por su disputado estatus internacional todavía no ha ingresado en las Naciones Unidas.

consecuencias sobre los derechos humanos de los procesos de desintegración o secesión y sucesión de los estados, que fueron tenidas en cuenta solo de manera muy limitada por los estados sucesores de Yugoslavia, fueron algo más consideradas discursivamente en los casos de Montenegro y Kosovo, aunque no podemos afirmar que existiera un completo enfoque de derechos humanos. Nuevamente, no me refiero a la legitimidad o legalidad de los procesos de independencia (desmembramiento y desintegración en un caso, secesión en el segundo) sino simplemente a si se tuvo en cuenta las consecuencias de la estatalidad en los derechos humanos de las personas individuales desde un punto de vista global.

Notemos que a pesar de la fortísima vigencia de la ideología etnonacionalista primordialista presente en ambos procesos, son distinguibles claramente los argumentos esgrimidos relacionados con la vida mejor de los ciudadanos de los estados sucesores.

Es cierto que en los anteriores casos de Croacia o Eslovenia, las repúblicas más ricas de Yugoslavia, resultaba en su momento más evidentes los beneficios de la secesión para sus partidarios. Pero la independencia de Montenegro fue promovida por argumentos basados no en el nivel de desarrollo actual sino en las perspectivas de un futuro mejor desarrollo comparativo. Los partidarios de la independencia de Montenegro preveían que el nuevo estado, tradicionalmente menos desarrollado, podría hacer mejor uso de sus recursos turísticos y quitarse la carga de las responsabilidades internacionales de Serbia (apoyado por la conveniencia de las élites locales). La inmediata aceptación posterior de Serbia estuvo apoyada claramente en la extendida percepción de Montenegro como una carga económica para el resto del estado. La declaración de independencia de Kosovo, según sus partidarios, no sólo se basó en una necesidad de secesión remedial para evitar la violación de derechos humanos por parte de los serbios (siguiendo el pensamiento de Allen Buchanan) sino que se apoyó en el convencimiento de que un estado pequeño independiente podría acceder más fácilmente a ayuda internacional, en forma de créditos y donaciones (argumento muchas veces repetido como tuve ocasión de escuchar en múltiples ocasiones en Pristina), esto es, en el convencimiento de que el menor nivel de justicia redistributiva global les sería más beneficiosa que la justicia distributiva dentro del estado de Serbia. Para sus contrarios, la independencia significa una pérdida identitaria, pero sin desdeñar su parial fundamento en el mito de las riquezas minerales del territorio, la injusticia de la pérdida de territorio, la reducción de posibilidades, capacidades y potencial realización de derechos.

Estos vagos argumentos esgrimidos ideológicamente a favor de una hipotéticamente mejor vida futura promovieron, como en el resto de la ex Yugoslavia, movimientos secesionistas, pero a duras penas se tradujeron en un verdadero discurso de mejora de derechos humanos, para que éstos fueran de mejor manera respetados en todas las personas afectadas.

Sin embargo, podemos encontrar ciertas pinceladas de un enfoque de derechos humanos de las secesión y sucesión de los que no encontramos rastro a principios de los noventa. Creo que tiene que ver con las lecciones aprendidas, con la fuerte presencia de contingentes diplomáticos y militares internacionales, con la reflexión y la atmósfera

posbélica de Yugoslavia que encontramos en los dosmiles. Es más comprensible que encontremos preocupación por los efectos que tendrán las secesiones en los derechos humanos si los afectados han visto cómo sus ex compatriotas habían sufrido por la creación de nuevas fronteras. Puede que no fuera suficiente para contener la doctrina nacionalista de coherencia etnicidad-territorio, y que ideológicamente compensara los beneficios futuros que antes he mencionado someramente, pero ciertamente encontramos algunos análisis crítico-rationales con cierto enfoque de derechos humanos que no encontramos en los procesos de independencia de los estados sucesores de Yugoslavia.

§3.5.5.1 Montenegro: la advertencia de los efectos de su independencia sobre los derechos humanos de grupos sociales vulnerables

La independencia de Montenegro de la República de Serbia y Montenegro, en junio de 2006, terminó con el estado predecesor, el cual cesó de existir. Sin embargo, a diferencia de lo que sucediera con la República Socialista Federal de Yugoslavia, sólo Serbia fue considerado estado sucesor continuador del estado predecesor. Así, no encontramos en este caso acuerdos de sucesión análogos a los suscritos en 2001 por los estados sucesores de Yugoslavia. Es de destacar que, a diferencia del contenido de los debates de los años ochenta y noventa en torno a la desintegración de Yugoslavia, que obviaba los efectos del dibujo de nuevas fronteras en el ejercicio cotidiano y real de los derechos humanos, la desintegración de la República de Serbia y Montenegro provocó discusiones sobre las consecuencias de la misma para la mejor realización los derechos humanos, más allá de la forma de sucesión en materia de deudas, archivos de estado y derechos tradicionalmente objeto de interés en las negociaciones sucesorias.

La experiencia cercana y directa de los efectos de las nuevas fronteras hacían más difícil obviar el debate, y la fuerte presencia de ONGDs internacionales, Organismos Internacionales (las Naciones Unidas y la Unión Europea tenían una fuerte presencia) así como el monitoreo constante de la Sociedad Internacional contribuyeron también a que existiera cierto debate en torno al impacto de la secesión de Montenegro en los derechos humanos en su conjunto.

Muy poco después de la declaración de independencia de Montenegro, en julio de 2006, un artículo académico de Ružica Mrdaković-Cvetković, publicado en la revista *Međunarodni problemi* analizaba la “*Continuidad internacional de Serbia tras la separación de Montenegro*”⁸⁴³. La autora dirige la mayoría de sus esfuerzos a explicar la continuidad jurídica de Serbia y a analizar las cuestiones relativas al proceso sucesorio de tradicional principal interés, incluyendo la necesidad del arreglo de créditos y deudas entre las repúblicas, división de propiedades y activos estatales, incluyendo reservas de divisas archivos, embajadas, propiedades militares, etc. La autora también se preocupa del impacto del proceso sucesorio en los derechos individuales relacionados con propiedad privada y pensiones, derechos considerados, como hemos visto, en los Acuerdos de Sucesión de 2001. Sin embargo, a diferencia de los análisis realizados

⁸⁴³ Mrdaković-Cvetković, R., “Međunarodni kontinuitet Srbije posle odvajanja Crne Gore”, *Međunarodni problemi*, n3, vol LVIII, 2006, pp. 326–346.

comúnmente durante la desintegración de Yugoslavia, la autora reflexiona que aparte de esto, sería necesario resolver las cuestiones relativas al cuidado de la salud, educación, especialmente la situación de los estudiantes montenegrinos en Serbia, doble ciudadanía y otras cuestiones sin identificar, reconociendo expresamente que “los modos en los que se solucionarán estas cuestiones todavía no son conocidos”⁸⁴⁴. Concluía la autora que la experiencia de la sucesión de Yugoslavia podía ser útil y que algunos de los principios del Acuerdos de Sucesión de 2001 podían ser aplicados en el procedimiento sucesorio de Serbia y Montenegro, si bien admitiendo que ciertos problemas particulares hubieran de ser resueltos de una manera específica. Subrayemos de nuevo que algunos de estos problemas estaban descritos en los Acuerdos de 2001 pero no otros, pues no contenían acuerdos sobre salud, educación y otras cuestiones mencionadas con anterioridad.

También en julio de 2006, concretamente el 6 de julio, apenas una semana después del ingreso de Montenegro en las Naciones Unidas, se publicaba en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para la Participación Democrática de Grupos Sensibles en Montenegro” participado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUD), Foundation Open Society Institute y el propio gobierno de la novísima República de Montenegro un muy interesante informe sobre la “*Influencia de la independencia de Montenegro sobre grupos sociales sensibles*”⁸⁴⁵.

Este informe es destacable porque, enfocándose en los derechos de las personas afectadas por el proceso sucesorio, no sólo aborda las cuestiones tradicionales relacionadas con cuestiones económicas (libre circulación de bienes, libre circulación de personas) o sucesión de la nacionalidad. Incluso en relación con la cuestión de la nacionalidad y ciudadanía de las personas afectadas por el proceso sucesorio, no se detuvieron en preguntarse cómo habrá de dirimirse u otorgarse la nacionalidad de cada cual, sino que llamaron la atención sobre el previsible impacto en las relaciones familiares, en el manejo de datos personales, en la cooperación jurídica entre tribunales que ahora sería internacional, el reconocimiento mutuo de documentos oficiales, etc. Para cada posible problema identificado, procuraron analizar la experiencia pasada de los estados sucesores de Yugoslavia, así como el caso de desmembramiento de Checoslovaquia, por sus puntos en común con el proceso de disolución de Serbia y Montenegro, así como proveer alguna posible guía o recomendación para la solución de cada posible problema.

Es destacable que este informe llamaba la atención sobre el impacto de la independencia en las pensiones, empleo, sistema de salud, y educación. Si bien hemos visto que ya existía amplia experiencia sobre pensiones y fondos de empleo en negociaciones sucesorias (por depender de fondos monetarios susceptibles de ser repartidos) este informe se preocupaba en analizar el impacto sobre los derechos a la salud y a la

⁸⁴⁴ Mrdaković-Cvetković, R., “Međunarodni kontinuitet Srbije posle odvajanja Crne Gore”, *Međunarodni problemi*, n3, vol LVIII, 2006, p. 344. En el original: “Pored ovoga potrebno je rešavati pitanja o pokretnoj i nepokretnoj imovini građana, penzijama, zdravstvu, školovanju npr. studenata iz Crne Gore u Srbiji, dvojnem državljanstvu, i nizu drugih pitanja. Načini na koji će se rešavati ova pitanja još nisu poznati”.

⁸⁴⁵ Rakić- Vodinelić, V., Fajtak, L., et.al., *Influence of Independence of Montenegro on Sensitive Social Groups*, Government of the Republic of Montenegro, Foundation Open Society Institute, UNDP, Podgorica, 6 julio 2006.

educación de las personas afectadas por el proceso sucesorio.

Respecto al impacto en la salud, se indicaba que el sistema de salud de Montenegro proveía asistencia sanitaria a niveles primario, secundario y terciario, señalando, sin embargo, que ciertos tratamientos eran disfrutados a la fecha por los montenegrinos en Serbia, autorización mediante conforme a ciertos procedimientos preestablecidos. Los servicios especiales más frecuentemente provistos a montenegrinos por centros sanitarios en Serbia eran: trasplantes de órganos, cirugía infantil radioterapia, neurocirugía específica, ciertos servicios relacionados con cirugía ortopédica de la columna vertebral y otros. Según dicho informe, “la práctica y los principios éticos que existen en la profesión médica muestran que esta categoría de ciudadanos en principio no estarían en peligro”, es decir, que no había previsión de que se produjera una privación de los derechos adquiridos de los ciudadanos montenegrinos en Serbia. No obstante, debemos subrayar el tono de *wishful thinking* del informe en este punto, pues aunque no se hubieran registrado problemas a la fecha, confía en la buena voluntad de un tercero no obligado a cumplir con ese derecho. De hecho, el informe recomienda expresamente “que de acuerdo con los principios y postulados de asistencia sanitaria e igual tratamiento de los ciudadanos de Montenegro y los ciudadanos de Serbia se firme un acuerdo bilateral que confirme la aplicación de la legislación en ambos estados”⁸⁴⁶.

Respecto al derecho a la educación, las competencias ya eran exclusivas de las repúblicas de Montenegro y de Serbia, y tras la independencia, de acuerdo con la legislación en vigor, los estudiantes de ambas repúblicas, independientemente de su nacionalidad o etnicidad, tendrían igual acceso a alojamiento estudiantil, matrículas, seguros, etc. En realidad, muchos más estudiantes montenegrinos iban a estudiar a Serbia, especialmente Belgrado, que al revés. El interés de estudiantes de nacionalidad serbia, no sólo de Montenegro, sino de otras ex repúblicas yugoslavas, y el ideario etnonacionalista, motivó que a pesar de esta base legal, el 21 de marzo de 2006, el Gobierno de Serbia decidiera que a partir del año académico 2006/2007 los miembros de la nacionalidad serbia de otros países (minorías serbias) pudieran matricularse en las universidades serbias bajo las mismas condiciones que los estudiantes locales. Esto causaba una discriminación entre estudiantes montenegrinos de distintas nacionalidades (serbios, montenegrinos, albaneses, bosníacos, etc.), una discriminación realizada antes de la independencia, pero menos discutible tras la desintegración, dada la diferenciación de ámbitos de soberanía internacional.

El informe señala al respecto que “excepto en casos de discriminación positiva, el diferente trato de estudiantes respecto a la ciudadanía sobre la base de la afiliación nacional (étnica) es una violación del artículo 14 de la Convención europea de derechos Humanos y Libertades Fundamentales, artículo 21 de la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, así como de la Directiva del Consejo 2004/43/EC artículos 2 y 8”. Así, esta decisión del Gobierno de Serbia “fue cambiada mediante la reinterpretación del Ministerio de Educación y Deporte, que fue confirmada por el Gobierno de la

⁸⁴⁶ Rakić- Vodinelić, V., Lubomir Fajtak, et.al., *Influence of Independence of Montenegro on Sensitive Social Groups, Government of the Republic of Montenegro*, Foundation Open Society Institute, UNDP, Podgorica, 6 julio 2006, p. 52

República de Serbia de que los estudiantes de Montenegro [no necesariamente de nacionalidad o etnicidad serbia] tienen el derecho de matricularse en las universidades estatales y centros de secundaria con las mismas condiciones que los ciudadanos de Serbia y se concluye, por tanto, que al menos en el próximo año académico no se producirá una discriminación de este tipo (...). En cualquier caso, permanece el riesgo de que una vez consumado el desmembramiento, a falta de acuerdos internacionales, a cada estado establezca precios diferentes de matriculación para nacionales y extranjeros, en el ejercicio normal de su soberanía. Por ello los expertos recomendaban el desarrollo de planes conjuntos y acuerdos bilaterales interestatales. La misma recomendación sería aplicable a los programas de investigación científica que pudieran suspenderse, interrumpirse o de cualquier otra manera verse negativamente afectados por la desmembración con la consecuente pérdida para ambos estados sucesores.

En resumen, para estos y otros problemas sobre los que no nos vamos a extender (como asistencia social, a personas con discapacidad, ancianos, etc.), fue este tipo de solución el generalmente recomendado en el Informe por los expertos. Para todos esos problemas sociales identificados relacionados con el impacto del desmembramiento del estado sobre los derechos humanos respecto de los cuales negociaciones anteriores no daban respuesta, se recomendó generalmente: adaptación de la legislación nacional (con su correspondiente, añadimos, asignación presupuestaria) y suscripción de acuerdo internacionales bilaterales en la materia.

Ciertos problemas de estándares (como reconocimiento de diplomas, etc.) podían ser fácilmente superados aplicando la legislación comunitaria a ambos países, pues ambos iniciaban por vías separadas su andadura a la integración europea.

En conclusión, el impacto sobre los derechos humanos no sólo habría de esperarse de la futura diferente asignación de recursos suficientes para su realización o de la dificultad de coordinación en la implementación cotidiana, sino del cambio de obligaciones de realizar los derechos y la consecuente inseguridad de su reclamación. En un mismo estado era posible exigir ciertos derechos específicos y cierto nivel de cumplimiento que no es posible reclamar de un estado ahora extranjero, por lo que era preciso restaurar las obligaciones de cumplimiento lo antes posible mediante tratados internacionales específicos que garantizaran un mantenimiento de los niveles de ejercicio de derechos humanos alcanzados a la fecha.

§3.5.5.2 Kosovo: nota sobre la incorporación parcial de un enfoque de derechos humanos en un proceso de autodeterminación constitutiva incompleta

Como bien es sabido, tras el bombardeo de Belgrado por la OTAN que supuso el fin de la guerra de Kosovo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la Resolución 1244 de 10 de junio de 1999, dispuso que el territorio coincidente con la provincia o región autónoma de Kosovo fuera administrado por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK), permitiendo la presencia de fuerzas internacionales en Kosovo. Dicha Resolución reafirmaba la integridad territorial

de la República de Yugoslavia y la soberanía de ésta sobre el territorio de Kosovo de acuerdo con la legalidad internacional. Asimismo recogía al decisión de “promover el establecimiento, hasta que se llegue a una solución definitiva, de una autonomía y un autogobierno sustanciales en Kosovo (...) cumplir funciones administrativas civiles básicas donde y mientras sea necesario (...) organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales para el autogobierno democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política (...) En una etapa final, supervisar el traspaso de autoridad de las instituciones provisionales de Kosovo a las instituciones que se establezcan conforme a una solución política”. Respecto a la protección de derechos humanos, la Resolución 1244 daba vía libre a la presencia internacional con el fin de que ésta coadyuvara a “apoyar la reconstrucción de la infraestructura básica y otras tareas de reconstrucción económica; apoyar en coordinación con las organizaciones humanitarias internacionales, la ayuda humanitaria y el socorro en casos de desastre; (...) mantener la ley y el orden público, (...) proteger y promover los derechos humanos (...) asegurar el regreso seguro y libre de todos los refugiados y personas desplazadas a sus hogares en Kosovo”⁸⁴⁷.

Tras apenas diez años de continuada administración internacional, con discutidos resultados en términos de mejora de condiciones de vida para el conjunto de los habitantes y de desarrollo de las mencionadas instituciones de autogobierno, existentes en convivencia con estructuras administrativas paralelas de gobierno de los serbios, el 17 de febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo declaró unilateralmente la independencia de la República de Kosovo de la República de Serbia, esto es, con la frontal oposición de la República de Serbia, así como de una parte de la comunidad internacional (incluyendo Rusia y China, miembros del Consejo de Seguridad). La declaración fue realizada, sin embargo, con el decidido apoyo de otra parte importante de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de miembros de la Unión Europea. La disputa en torno al reconocimiento del nuevo estado ha conllevado que a día de hoy Kosovo no sea estado miembro de las Naciones Unidas.

La Declaración de Independencia de 2008, cuyo contenido veremos seguidamente, se realizó pues con los auspicios de parte de la comunidad internacional en base a la “Propuesta Integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo”⁸⁴⁸, conocida comúnmente como “Plan Ahtisaari,” por haber sido elaborada por el ex-presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, actuando como Enviado Especial de Naciones Unidas.

La propuesta de Ahtisaari proponía en su artículo 1 que Kosovo fuera “una sociedad multiétnica, que se gobernará a sí misma democráticamente y respetando plenamente el principio de la legalidad por conducto de sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales” en la que “el ejercicio de la autoridad pública (...) se basará en la igualdad de todos los ciudadanos y el respeto del más alto grado de derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, así como en la promoción y protección de los derechos y las aportaciones de todas sus comunidades y sus miembros”.

El Plan Ahtisaari no mencionaba en ninguna parte las palabras “independencia” o

⁸⁴⁷ La resolución puede consultarse en la página web del Ministerio de Defensa <http://www.defensa.gob.es/eu/Galerias/misiones/resolucion-ONU-1244.pdf>

⁸⁴⁸ Disponible en la página web de la Oficina del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Kosovo http://www.unosek.org/docref/propuesta_integral-espa%F1ol.pdf

“secesión”. Sin embargo, fue ampliamente interpretado que para poder ejecutarlo en su totalidad no cabía otra opción que completar el proceso de secesión de Kosovo y su acceso a la estatalidad con reconocimiento internacional. Es cierto que algunas de estas controvertidas medidas sí podrían ser compatibles con su permanencia en la República de Serbia como región autónoma, tales como la adopción de una Constitución (art.1.3) pues muchos estados federales, incluyendo la antigua Yugoslavia tenían constituciones de las unidades federadas junto con la federal, la adopción de “sus propios símbolos nacionales, entre ellos una bandera, un sello oficial y un himno, que reflejarán su carácter multiétnico (art.1.7), o un cuerpo de policía propio (art.9.1).

Sin embargo, el Plan Ahtisaari dejaba poco espacio para escenarios que no fueran la independencia total de Kosovo al prever que tuviera “derecho a negociar y concertar acuerdos internacionales y a solicitar su admisión en organizaciones internacionales” (art.1.5), que no tuviera “reivindicaciones territoriales contra ningún Estado o parte de él ni tratará de formar unión alguna con un Estado o parte de él”, (art. 1.8) y que tuviera “autoridad en su territorio a los efectos de la policía, la seguridad, la justicia, la protección pública, la inteligencia, los servicios de emergencia civil y el *control de fronteras*”, (art.9.1), admitiendo en fin, implícitamente, la creación de dos unidades política y jurídicamente totalmente independientes, llamando a “Kosovo y a la República de Serbia a establecer una comisión conjunta para facilitar esa cooperación y para entablar y desarrollar relaciones de *buena vecindad*” (art.1.10).

La “Propuesta Integral de Acuerdo” fue comunicada por carta de fecha 26 de marzo de 2007 al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. Como bien sabemos, tuvo más de “propuesta” que de “acuerdo”, pues fue implementado sin el acuerdo de todas las partes implicadas en el proceso, al servir como base para la Declaración de Independencia unilateral de febrero de 2008.

Sobre la “integridad” del Plan, tal adjetivo es entendible si consideramos todos los estándares manejados históricamente, como hemos visto en la región a la luz de los análisis de documentos como las Opiniones de la Comisión Badinter o los Acuerdos de 2001.

El Plan Ahtisaari recogía siete anexos, que contemplaban, entre otras cuestiones, la protección de los derechos de las minorías, y del patrimonio religioso y cultural, así como estándares de derechos humanos y libertades al interno de Kosovo (siguiendo el principio establecido por la Comisión Badinter) cuestiones relativas al sistema de justicia, deuda externa, propiedades y archivos (como establece el Convenio del 78 y se recogía en los Acuerdos de 2001), así como otras cuestiones relativas al sector de la seguridad y presencia internacional.

Sobre la protección de derechos humanos el Plan Ahtisaari establecía (art.2.1) que “Kosovo promoverá, protegerá y respetará el más alto grado de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Kosovo adoptará todas las medidas necesarias a fin de ratificar el Convenio Europeo para la

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus Protocolos”.

Así pues, debemos destacar que se dejó fuera del Plan la protección de derechos económicos y sociales, tales como la salud y la educación, pero no así los culturales, pues estos quedaban de alguna manera protegidos bajo los anexos de protección de las minorías y del patrimonio religioso y cultural.

Es así distinguible en el Plan Ahtisaari un incremento de la previsión de protección de derechos humanos respecto a documentos análogos suscritos en la región respecto a la sucesión de estados y a su impacto en la población civil, en una línea claramente ascendente desde finales de los ochenta, cuando el lenguaje nacionalista no dejaba apenas resquicio para un enfoque de derechos humanos de la autodeterminación en cualquiera de sus interpretaciones.

A pesar de los indudables avances que refleja el Plan Ahtisaari respecto de los demás documentos análogos descritos anteriormente, el Plan no incluye una reflexión o una propuesta de acuerdo sobre la mejor realización de los derechos a la salud, medio ambiente, educación, o servicios sociales de todas las personas afectadas en el proceso. Estas cuestiones, aclaro, sí que estaban en el debate diario en la calle, (como tuve ocasión de comprobar personalmente sobre el terreno), toda vez que en realidad la existencia de estructuras paralelas implicaba que una parte de la población *de facto* tenía distinto nivel de realización de derechos humanos (por ejemplo, las pensiones otorgadas por nacionalidad, a veces dobladas; los serbios de Kosovo podían ir a Belgrado a tratarse enfermedades raras o a estudiar en diferentes universidades). Es decir, que tal “integridad” no era tal desde un punto de vista de realización total de derechos humanos incluyendo sociales y económicos, ni por tanto, del derecho humano al desarrollo.

El Plan Ahtisaari recogía una disposición, llamativa y discutida, en relación con la pretensión de soberanía. El artículo 11 preveía que la Constitución de Kosovo fuera “compatible con todas sus disposiciones con el presente Acuerdo y será interpretada de conformidad con él; en caso de conflicto entre las disposiciones de la Constitución y las del presente Acuerdo, prevalecerá éste”, de manera que una propuesta de Acuerdo como era el Plan –que en puridad no llegó a ser acordado por todos- adquiría una dimensión supraconstitucional.

En cualquier caso, la Declaración de Independencia de Kosovo de febrero de 2008 se basó en las disposiciones del Plan Ahtisaari, cuyo nombre aparece varias veces en el texto.

La Declaración de Independencia de Kosovo concluía, a su vez, con el total acatamiento de las obligaciones dispuestas en el Plan:

“12. Por la presente afirmamos, de manera clara, específica e irrevocable, que Kosovo se obligará legalmente a acatar las disposiciones contenidas en esta declaración, y entre ellas, especialmente, **las obligaciones que se derivan del plan Ahtisaari**. En todas estas materias, obraremos en coherencia con los principios de la legislación internacional y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas, la resolución 1244 (1999). Declaramos públicamente que todos los estados tienen derecho a confiar en esta declaración y hacemos un llamamiento a todos ellos para que nos presten su

apoyo y su Amistad”⁸⁴⁹.

Dado que el Plan Ahtisaari no preveía acuerdos en materias de derechos sociales y económicos, éstos no se encuentran tampoco en la Declaración de Independencia de Kosovo. Esto no significaba naturalmente, que los impactos no existieran, ni que pudiera ignorarse la necesidad de intentar proveer soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos afectados por el previsible proceso de sucesión, problemas agravados por la situación de unilateralidad de la Declaración, pues es difícil encontrar la mejor solución a éstos sin colaboración y acuerdo verdadero entre todas las partes implicadas.

La Declaración de Independencia fue llevada por la República de Serbia a la Corte Internacional de Justicia, de quien se solicitó su opinión consultiva. La resolución de la CIJ de 22 de julio de 2010 daba respuesta a la cuestión planteada por la República de Serbia y comunicada por la Asamblea General de las Naciones Unidas: “¿está la declaración unilateral de independencia por parte de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo de acuerdo con el Derecho Internacional?”.

De manera ingeniosa pero muy decepcionante para quienes quisiera encontrar en la respuesta de la CIJ un criterio claro para la adquisición de la estatalidad en éste u otros casos, la CIJ esquivó el fondo de la cuestión asegurando que:

“51. En el presente caso, la cuestión planteada por la Asamblea General está claramente formulada. La cuestión es ajustada y específica; pregunta por la opinión de la Corte sobre si la declaración de independencia está de acuerdo con el Derecho Internacional. *No preguntan sobre las consecuencias legales de esa declaración. En particular, no pregunta sobre si Kosovo ha alcanzado o no la estatalidad.* Tampoco pregunta sobre la validez o los efectos legales del reconocimiento de Kosovo por aquellos Estados que lo han reconocido como un Estado independiente”.

Esto la permitió a la Corte concluir que “84. (...) la Corte considera que el Derecho Internacional General no contiene ninguna prohibición aplicable de declaraciones de independencia. De acuerdo con esto, concluye que la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no viola el Derecho Internacional general (...)”⁸⁵⁰.

El dictamen de la CIJ fue interpretado ampliamente, sin embargo, como una legitimación de fondo del asunto, es decir, como que la independencia misma de Kosovo era conforme al DI y, políticamente, como una victoria por el gobierno kosovar y los partidarios del reconocimiento internacional de la estatalidad de Kosovo.

Así las cosas, la República de Serbia y la Unión Europea enviaron seguidamente a la Asamblea General una propuesta para convocar el comienzo de una serie de negociaciones “técnicas” entre Serbia y Kosovo, una denominación que, obviamente, buscaba mantener un ambiente de concordia para unas negociaciones, sin embargo, de alto calado político.

⁸⁴⁹ La Declaración de Independencia puede consultarse en:

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/02/17/independencia_kosovo.pdf

⁸⁵⁰ Disponible en la página de la Corte Internacional de Justicia:

<http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15988.pdf>

La propuesta de Resolución fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en marzo de 2011 dio comienzo la primera de las rondas de este diálogo, en la que actuó de mediadora la Unión Europea, representada por Robert Cooper.

Robert Cooper, tal y como reflejó la nota de prensa del encuentro subrayó los objetivos del diálogo: “*quitar los obstáculos que tienen un impacto negativo en la vida diaria de la gente*, mejorar la cooperación, y alcanzar un progreso en el camino a Europa”⁸⁵¹.

Y es que, según todos los observadores, Kosovo seguía siendo “el país más pobre de la región, con el 45% de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza y 15% en pobreza extrema. El país necesita doblar su crecimiento económico para alcanzar un nivel de ingresos similar al de los países de su entorno”⁸⁵².

Los temas que se trataron en esa primera ronda de negociaciones orientada a mejorar “la vida diaria de la gente” fueron: mejorar la disponibilidad de información verificable de los registros civiles y catastro, el comercio regional y la libre circulación de bienes, la positiva revisión de la participación de ambas partes en el acuerdo CEFTA, y telecomunicaciones y aviación.

Este diálogo técnico continuó a lo largo de los siguientes dos años, en un total de diez rondas de diálogo, con el objetivo común de todas las partes de agilizar sus propios procesos de integración europea, lo que sin duda dio un marco facilitador para el avance de las negociaciones. Los temas tratados en las siguientes rondas de negociación incluyeron el suministro eléctrico (severamente afectado en Kosovo por su dependencia de la red eléctrica serbia), el sello aduanero y control de las fronteras, así como la libertad de circulación de personas entre las fronteras, gestión de matrículas de los coches (que utilizadas de una manera identitaria suponían una amenaza para el control del territorio y la seguridad) tráfico aéreo y formas consensuadas (cómo y bajo qué nombre) de participación de Kosovo en iniciativas regionales, manejo de registros civiles, de nacimiento, fallecimiento y matrimonio, y reconocimiento mutuo de diplomas y títulos de educación. Las negociaciones no fueron sencillas y dependieron en gran medida de la resistencia encontrada en el norte de Kosovo, donde la aplicación de estas medidas “técnicas” mostraban su lado más “político”, entendiendo por tal el reconocimiento progresivo de un cambio de estatus político y de soberanía.

Una iniciativa destacable desde el punto de vista de nuestro estudio es el acuerdo adicional para la creación de un Fondo de Desarrollo para el Norte de Kosovo, de 17 de enero de 2013, que sería financiado con la recaudación aduanera de los dos pasos fronterizos de Jarinje y Bernjak. Dicho fondo estaría destinado a promover el desarrollo socioeconómico y beneficiar a la población del norte de Kosovo.

Las negociaciones culminaron con la firma, el 19 de abril de 2013, del “Primer Acuerdo

⁸⁵¹ Nota de Prensa Unión Europea. 7566/11. PRESSE 55. 9 de marzo de 2011. Bruselas. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/119697.pdf

⁸⁵² Bertelsmann Stiftung, *BTI 2012 — Kosovo Country Report*. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2012.

sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones”, entre Ivica Dačić y Hashim Thaçi, bajo la mediación de Catherine Ashton, acuerdo que fue seguido, el 22 de mayo, de un Plan de Acción para su aplicación y abrió la puerta a las negociaciones para la integración europea de Serbia y la futura firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación para Kosovo.

Dicho Acuerdo está basado en quince puntos, la gran mayoría de ellos enfocados en la resolución del problema política del estatus del Norte de Kosovo, donde se concentra la minoría serbia. Estos puntos incluyen: la creación de una Asociación/Comunidad de municipios de mayoría serbia, así como de otras que así lo deseen y expresen, con un estatus protegido a nivel legal y constitucional, con su propio Presidente, Asamblea y Consejo y su propio cuerpo de policía (el Comandante habrá de ser étnicamente serbio) pero integrado orgánicamente en las fuerzas de seguridad de Kosovo. La elección misma de la doble denominación “Asociación /Comunidad” sirve para contentar a ambas partes negociadoras, pues si para Serbia se acuerda una *zajednica* como entidad política definida, Pristina lo puede interpretar simbólicamente como una mera asociación administrativa. En el Acuerdo se prevé asimismo, la integración orgánica del poder judicial controlado por los serbios en el Poder Judicial de Kosovo, creando un Tribunal de Apelación en Pristina compuesto en su mayoría por magistrados étnicamente serbios para dilucidar los casos que se hubieran registrado en los municipios de mayoría serbia con una división de dicho Tribunal en Mitrovica Norte. Finalmente, en lo que respecta al encaje del Norte de Kosovo, el Acuerdo prevé la celebración de elecciones municipales en 2013 con la facilitación de la OSCE (que finalmente se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 2013, con una participación aproximada de un 40% y disturbios en las calles del norte de Mitrovica).

Adicionalmente, el Acuerdo incluye tres puntos que no tienen que ver exclusivamente con el encaje de la minoría serbia: la intensificación de negociaciones en materia de energía y telecomunicaciones, el compromiso de que ninguna de las dos partes bloqueará a la otra en sus respectivos tránsitos hacia la integración europea, y la creación de un comité de implementación del Acuerdo con la mediación de la Unión Europea.

Las reacciones a este Acuerdo de *power-sharing* han sido variadas. Por un lado, los resultados han sido alabados tanto por las partes que han llegado al acuerdo, como por la Unión Europea en cuanto mediadora y por la comunidad internacional por su carácter resolutivo y negociado. Sin embargo, se han registrado fuertes críticas desde diversos sectores:

i) En primer lugar ha sido criticado por los partidarios de un Kosovo multiétnico y basado en un patriotismo civil por consolidar una división del territorio basado en la identidad étnica. Supone, para estos detractores, el triunfo del ideal nacionalista primordialista donde todos los territorios han de ser necesariamente coincidentes con las características etnoculturales, el entierro del Plan Ahtisaari y el triunfo del nacionalismo serbio orientado a la creación de un estado federal en Kosovo que podría llegar a tener los problemas de gobernabilidad que se encuentran en Bosnia y Herzegovina, o en el peor de los casos, un plan para, sin interrumpir su integración europea salvaguardar la posibilidad

de reincorporar el territorio a Serbia en un futuro indeterminado⁸⁵³. Estos argumentos han sido utilizados también por nacionalistas primordialistas albaneses, no tanto por estar a favor de un Kosovo multiétnico o basado en una identidad civil, sino por servir como instrumentos dialécticos a la construcción de un Kosovo albanés.

ii) Ha sido criticado por contrarios al reconocimiento internacional de un Kosovo independiente, al considerar que los Acuerdos de Bruselas suponen, *de facto*, el desmantelamiento de estructuras paralelas y en fin, el reconocimiento de Kosovo como Estado. Esta posición fue reforzada con el acuerdo adicional, en mayo de 2013, de abrir Oficinas de Enlace (Liaison Offices) entre Pristina y Belgrado, a modo de oficinas consulares o embajadas sin ser reconocidas oficialmente como tales.

iii) Por último, fueron criticados por parte de los representantes y miembros de la minoría serbia del Norte de Kosovo, que no consideraron ni su voluntad tenida en cuenta ni sus intereses protegidos o defendidos ni por Belgrado ni por Pristina ni por la comunidad internacional, pues los acuerdos suponen un cambio de estatus al que se oponen.

Los Acuerdos, defendidos por el Gobierno de Serbia como neutrales respecto al estatus político de Kosovo, han servido según Filip Ejduš, de la Universidad de Belgrado, a los intereses de Serbia de tres maneras: Serbia ha mejorado su posición internacional acelerando su proceso integración europea, provee una solución realista y factible a las preocupaciones de los serbios de Kosovo, y se logra negociar sin reconocer expresamente la independencia de Kosovo, apoyándose en que el Acuerdo recoge referencias a normas constitucionales que no existen en Kosovo (no tiene Constitución) pero sí en Serbia, por lo que, según Ejduš, se legalizaría una suerte de “soberanía dual” sin importar como de virtual sea⁸⁵⁴.

El Gobierno de Kosovo ha expresado su razonable satisfacción con el avance de la implementación de todos los acuerdos –incluyendo la necesidad de trabajar para alcanzar su plena implementación –en un informe que cubre el período comprendido entre el período del 1 de enero de 2013 y el 15 de enero 2014⁸⁵⁵. Dicho informe clasifica los avances en las áreas de negociación objeto de las diferentes rondas de diálogo técnico, del Acuerdo de Bruselas y posteriores: elecciones locales, inauguración y funcionamiento de las nuevas autoridades municipales, seguridad, justicia, ley de amnistía, aduanas, el mencionado Fondo de Desarrollo y gestión integrada de fronteras, Oficinas de Enlace, cooperación regional, energía, telecomunicaciones, registro civil, catastro, y reconocimiento mutuo de diplomas y títulos universitarios.

⁸⁵³ Deda, I., “Kosovo after the Brussels Agreement: from status quo to an internally ethnically divided” *State Policy Briefs*, Konrad-Adenauer-Stiftung, diciembre, 2013

⁸⁵⁴ Ejduš, F., *The Brussels Agreement and Serbia's National Interests: A Positive Balance Sheet*. Konrad-Adenauer-Stiftung, Belgrade Office, abril, 2014.

⁸⁵⁵ “State of play in implementation of the Brussels Agreements. Report submitted to the European Union /European External Action Service by the Government of the Republic of Kosovo”. Prishtina, 16 January 2014. Puede encontrarse en <http://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2014/02/Kosovo-Report-on-implementation-state-of-play-of-the-Brussels-Agreements-160114-signed-2.pdf>

Otras cuestiones que afectan a la vida diaria de la gente no han sido tratados. En este sentido es destacable las necesidades que todavía permanecen en el área de servicios de salud. Así, aunque han sido objeto de negociación múltiples cuestiones que tienen que ver con la mejora de la “vida diaria de la gente”, estas no han sido del todo exhaustivas, es decir, atendiendo primero a cuáles son esas necesidades. Sin embargo, creo que es un avance importantísimo que, en una situación de no reconocimiento se haya llegado tan lejos. En comparación con todos los documentos que hemos analizado, estos diálogos técnicos entre Belgrado y Pristina son los que más lejos han llegado en términos de un enfoque de desarrollo teniendo en cuenta que Serbia no reconoce la estatalidad de Kosovo. Recordemos que los Acuerdos de Sucesión de 2001 de Yugoslavia, suscritos en un ambiente, si cabe la apreciación, más amigable, no se preocupaban siquiera en mencionar tales cuestiones.

Es cierto que el enfoque de desarrollo no es total y que quedan áreas de negociación para mejorar la vida diaria de la gente, como parece ser la voluntad de la UE. Cuestiones como ayudas sociales, medio ambiente, o de manera mucho más relevante la mejora de los servicios sanitarios, no han sido objetos de negociación aunque sí podría obtenerse beneficio de tal diálogo. Así, la Organización Mundial de la Salud en el caso de Kosovo considera “el desarrollo de iniciativas sanitarias como un puente de paz”⁸⁵⁶. El nivel de protección de la salud de los ciudadanos, tal y como describe la misma OMS disminuyó con la confrontación étnica: muchos centros de salud fueron destruidos o gravemente dañados durante la guerra y, desde finales de los años 1980 se desarrollaron dos sistemas de salud paralelos: el hoy abandonado sistema Madre Teresa albanés, y el sistema paralelo serbio, y se afectó gravemente los servicios de las minorías étnicas. Asimismo, se registraron casos de graves discriminaciones contra refugiados y miembros de minorías, como los roma, afectados por una doble discriminación⁸⁵⁷.

Hoy en día, aunque se ha defendido que la situación ha mejorado y Kosovo está construyendo su propio sistema de salud universal completo pero los ciudadanos, los kosovares siguen siendo los principales clientes extranjeros del servicio sanitario de Macedonia⁸⁵⁸, y los kosovares serbios siguen acudiendo a Belgrado para las operaciones más complicadas (asistencia sanitaria terciaria), lo que no ha evitado las críticas basadas en la duda de si la mejor manera de otorgar servicios médicos pasa sola y exclusivamente por dismantlar servicios paralelos, y establecer una soberanía total sobre los ciudadanos y mejorar autónomamente el servicio, o si se trata de que los ciudadanos reciban los cuidados que requieren, para lo cual la negociación entre los distintos gobiernos es un poderoso instrumento.

En conclusión, dejando los debates sobre la legitimidad de la secesión y estatalidad de

⁸⁵⁶ World Health Organization “Access to health care in Kosovo's minority areas” Kosovo, May, 2001. Disponible en: <http://apps.who.int/disasters/repo/13644.pdf>

⁸⁵⁷ <http://www.errc.org/article/romani-refugees-denied-access-to-health-care-in-serbia-and-montenegro/2193>

⁸⁵⁸ Marusic, S. J., “Macedonia Plans Hospitals for Wealthy Foreigners”, *Balkan Insight*, 28/08/2014 <http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-to-boost-medical-tourism>

Kosovo a un lado, su caso nos demuestra que es posible concebir un escenario en el que, por un lado, la soberanía no es completa, ya sea desde el punto de vista de sus detractores que no la reconocen, ya sea para sus partidarios porque reconozcan no tener control completo todavía sobre su territorio y habitantes, o no ser reconocidos por la Comunidad internacional o parte de ella (es decir, un escenario de disputa o de transición hacia un futuro estatus estable sea hacia un lado u otro) pero, en el que, al mismo tiempo, pueda dialogarse sobre la mejor manera de quitar esos obstáculos a la mejora de la vida diaria de la gente afectada por esa disputa, esto es, la mejor realización de los derechos humanos de todos los agentes implicados.

Este escenario requiere por fuerza un “análisis dinámico” y no meramente estático del derecho de autodeterminación, como tradicionalmente se ha contemplado, es decir, concebir la autodeterminación como proceso, un proceso en cuyo centro se encuentra la persona humana y su dignidad proyectada en la protección constante de sus derechos, tal y como hicieran James Anaya y otros. La consideración del desarrollo y la autodeterminación, no como meros eventos, sino como procesos íntimamente interrelacionados, requiere estudiar las diferentes interacciones e interconexiones proyectadas en el tiempo.

§4 La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos

§4.1 Introducción. La relación entre desarrollo y autodeterminación como relación de dos derechos humanos

§4.1.1 Antecedentes (i): de la autarquía eudaimónica de la polis al progreso de las naciones

§4.1.2 Antecedentes (ii): expansión de los significados de autodeterminación y desarrollo en el marco internacional de derechos humanos

§4.2 Fundamentos y premisas para el estudio de la relación entre dos derechos humanos.

§4.2.1 Dos derechos humanos distinguibles relacionados entre sí

§4.2.2 Características básicas de la relación entre los derechos en cuanto derechos humanos: universalidad, indivisibilidad e interdependencia

§4.2.3 Límites y delimitación de dos derechos humanos

§4.2.4 Relación entre dos derechos en cuanto procesos

§4.2.5 Relación entre dos derechos multidimensionales, proyectados en procesos expansivos como fines y causas

§4.2.6 Formulación acorde con la relación en las fuentes normativas

§4.3 Análisis de la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir de las fuentes

§4.4 La relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir del análisis de compatibilidad de la definición de derecho al desarrollo con las diferentes definiciones y contenido esencial del derecho de autodeterminación

§4.4.1 Introducción

§4.4.2 El derecho de autodeterminación como elemento del vector de desarrollo

§4.4.3 El derecho de autodeterminación como definición del conjunto de personas al que se aplica el vector de desarrollo

§4.4.3.1 Aplicación analítica o especulativa del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas

§4.4.3.2 Aplicación material del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas

§4.4.3.3 Criterio esencial de aplicación del vector de desarrollo a diferentes conjuntos de personas: mantener su incremento progresivo o al menos no negativo en todos los casos, conforme al principio de fraternidad humana

§4.4.3.4 Aplicación mínima del criterio esencial en los procesos de autodeterminación constitutiva: desarrollo del marco normativo internacional en materia de sucesión y negociación integrativa con un enfoque de derechos humanos

§4.5 Relación fáctica entre la autodeterminación constitutiva externa y el nivel de realización del derecho al desarrollo. Estudio de caso. El desarrollo humano de Eslovenia y la ex República Yugoslavia de Macedonia: una brecha de desarrollo creciente

§4 La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos

§4.1 Introducción. La relación entre desarrollo y autodeterminación como relación de dos derechos humanos

En la primera parte hemos estudiado el derecho humano al desarrollo y en la segunda el derecho a la autodeterminación de los pueblos como derecho humano. En esta tercera parte estudiaremos la relación existente entre ambos.

Hemos llegado a definir dos elementos de naturaleza similar, dos derechos humanos con una dimensión colectiva –los pueblos– que comparten una dimensión de realización progresiva que los permite percibirse como procesos, los que nos requerirá un cierto análisis dinámico. Por ello, el estudio de la relación entre el derecho humano al desarrollo y el derecho humano de autodeterminación de los pueblos que aquí se estudia no se corresponde con el estudio de la relación entre desarrollo y autodeterminación en general, sino ante todo, en la relación entre ambos en cuanto derechos humanos.

Concebir el desarrollo y la autodeterminación como derechos humanos afecta al significado mismo de los conceptos y a la relación entre ellos. Esto es principalmente porque, tomados aisladamente, ambos procesos se puede hacer referencia, como se ha hecho a menudo, a un fin indeterminado para un pueblo dado, al imperativo hipotético propio de un ideal de la imaginación. Al concebirllos como derechos humanos, se debe tener en cuenta a todos los otros, sea quienes sean los “otros”, por lo que su contenido deja de ser ilimitado, y se somete y limita el cumplimiento de ambos procesos como imperativos *a priori* distinguibles por la razón de su universalidad. El marco de derechos humanos, asimismo, nos proporciona unos límites de aplicación marcados por la dignidad humana, que como bien sabemos no siempre se ha tenido en cuenta históricamente cuando se ha buscado aplicar determinadas definiciones de autodeterminación a grupos concretos fuera de un marco de derechos humanos.

La misma formulación de la cuestión descrita en el título de esta tesis–la relación entre estos dos derechos– incluye prácticamente una de nuestras premisas: si podemos hablar de un derecho humano al desarrollo y de un derecho humano de autodeterminación, por fuerza la relación entre ambos debe ser aquella que existe entre dos derechos humanos. Asumimos que tal relación existe porque si son dos derechos separados, pero tal vez la formulación más adecuada sería que esta relación, si existe, debe tener una forma y unas consecuencias que a su vez dependen de las definiciones dadas y del contenido de cada uno de los dos derechos.

Queda así fuera de nuestro ámbito de estudio otras relaciones entre desarrollo y autodeterminación cuyas definiciones no tengan que ver con su entendimiento como derechos humanos, concediéndonos, sin embargo, las notas y antecedentes necesarios para comprender tal relación en su toda su complejidad. Y es que la relación entre cómo se forman unidades políticas, de acuerdo a qué criterios se juntan unos seres humanos con unos y no con otros y para qué lo hacen, con qué finalidad, forma parte ni más ni menos

que la historia de humanidad y una de las cuestiones fundamentales de la teoría política como disciplina académica. A pesar de ello, para enmarcar nuestra cuestión, repasemos unas breves sobre la concepción histórica de esa relación entre quiénes somos, qué derechos damos a quienes, cómo nos congregamos políticamente y para qué fin.

§4.1.1 Antecedentes (i): de la autarquía eudaimónica de la polis al progreso de las naciones

Hemos mencionado que ya observaba Aristóteles, en su *Política*, cómo los seres humanos se congregan en unidades políticas para la vida mejor, una vida mejor cuyo alcance no sólo supone la práctica de la virtud, sino también los medios materiales para alcanzarla. La vida mejor de los ciudadanos de la polis y, en última instancia, la eudaimonia, esto es, la felicidad como fin último, en la concepción del estagirita está íntimamente relacionada con la felicidad también como fin último deseado por el hombre. Tal y como la virtud es la vía para la felicidad del hombre, la felicidad misma, la buena organización de la polis y la virtud ciudadana son las vías para alcanzar ese fin último social. La felicidad política y la felicidad del hombre coinciden, si bien la virtud ciudadana y la virtud tomada en general no son, para el estagirita, absolutamente idénticas. Una polis perfecta, que cumpla con su fin último es autárquica y no universal, asumiendo que las polis son una multiplicidad. Las diferentes polis (compuestas a su vez de aldeas y familias) se relacionan entre sí por medio de la guerra y el comercio, y proveen de diferente manera felicidad a sus ciudadanos. La multiplicidad de estados implica aceptar que cada una tenga un nivel o estado de cercanía a la perfección eudaimónica diferente, derivado a su vez de sus diversas constituciones o formas de gobierno. La relación entre la autarquía y la eudaimonia de la polis es indisoluble y tienen que ver con el fin social del ser humano. La defensa de la autarquía es la defensa de la felicidad eudaimónica de la polis. Los peligros pueden ser internos –en la incapacidad interna para lograr el fin último derivada de una mala constitución, un mal gobierno o una deficiencia en la virtud ciudadana- o externos, derivados precisamente, de la autarquía de la polis y de la multiplicidad. La polis autárquica y eudaimónica, la polis perfecta, debe tener murallas para defenderse de los enemigos.

La concepción aristotélica del fin último de una sociedad como provisión de una felicidad en la vida *terrenal* mediante la práctica de la virtud ha tenido, como bien sabemos, una enorme influencia posterior, cuyos ecos llegan hasta nuestros días. En Occidente, la influencia del Cristianismo y del Islam introdujeron la felicidad *extraterrenal* en el fin último de la organización política, pero manteniendo en su doctrina la práctica de la virtud como medio para alcanzar ese fin último. La felicidad verdadera sólo habría de hallarse tras la muerte, y tal como la práctica de la virtud general aseguraba al individuo un lugar en el paraíso, el buen gobierno se manifestaba como otro medio para el mismo fin. Del mismo modo que Aristóteles nos cuenta como las polis luchaban por extender su modelo constitutivo de estado para la vida mejor, la Edad Media alumbró un análogo concepto “civilizador”. La civilización en oposición al estado primitivo pagano o bárbarico, era el estado de aquellas sociedades que conocían la religión verdadera y, por tanto, podían alcanzar el fin último verdadero de la vida mejor extraterrena: sólo la

civilización traería la felicidad última. Por ello, la concepción de civilización es muy cercana a la vocación evangelizadora, -piénsese en la *universitas christiana*-. La misión civilizadora y evangelizadora era desconocida, como hemos visto, en las religiones dependientes e identificadas con la definición misma del *ethnos*, como el judaísmo o hinduismo. Así, del mismo modo que el autogobierno propio terrenal podía y debía estar sometido a la voluntad de Dios, también debía someterse al poder divino el gobierno de los otros. Se ha marcado la Paz de Westfalia, sin ánimo de repetirnos, como el primer paso hacia la aceptación occidental de la posibilidad de una multiplicidad de sociedades, de estados, con diferentes prácticas de virtud y diferentes fines últimos que pueden relacionarse entre sí, alumbrando para muchos autores la sociedad internacional moderna.

La naturaleza del fin último de toda sociedad en cuanto fin universal relacionado con la naturaleza misma del ser humano fue tratado profusamente de manera inevitable por los contractualistas, pues se hacía difícil hablar sobre un pacto social sin reflexionar sobre la causa y objeto de ese contrato; la seguridad personal frente al estado natural de la guerra, la vida buena o la vida mejor, el crecimiento virtuoso de cada ciudadano, etc. fueron de nuevo planteados como causas y fines últimos del pacto social.

Aunque desde Heráclito se había conocido y estudiado la naturaleza del cambio, la Modernidad trajo consigo la misma idea de progreso como nuevo concepto relacionado con la Historia, en mayúsculas. Para John Bury, la Modernidad hundía sus raíces en el racionalismo de Descartes, pero son comúnmente citados los discursos en latín de Anne-Robert-Jacques Turgot, pronunciados en la Sorbona en 1750, *Las ventajas que la religión cristiana ha dado al género humano* y *Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano* como inaugurales del concepto de un progreso humano histórico y del debate sobre su dirección. Nicolas de Condorcet, con el mismo optimismo ilustrado pero, a diferencia de Turgot, crítico con el papel de la religión, reflexionaría más tarde en su *Esbozo de un cuadro histórico de progresos del espíritu humano* (1793, publicado en 1795) argumentando a favor el desarrollo del saber y conocimientos del ser humano como base del progreso.

Por aquel entonces se interesaría también Immanuel Kant, como es bien sabido, por la idea de progreso, preguntándose sobre *Si el género humano se halla progreso constante hacia mejor* (1798). Aduciendo que el progreso futuro no se puede descifrar atendiendo a la mera observación, se concentra en la reflexión sobre el progreso moral y político confiando en encontrar la respuesta en la razón y en la naturaleza misma del hombre. Kant rechaza tanto una visión terrorista del progreso humano –vamos de mal en peor– como una visión optimista del género humano –sin duda mejoramos–. Kant, que ve más conforme a la experiencia una visión abderetista, cree que del ser humano cabe esperarse siempre parecida calidad moral, resultado de su universal tendencia a perseguir sus fines propios, es decir, su propia felicidad (“felicidad” entendida como nos explicaba en su *Fundamentación* como “satisfacción total de inclinaciones y necesidades”). Consecuentemente, la respuesta al progreso debemos hallarla no tanto en la mejora de la naturaleza humana sino en la mejora progresiva de las normas que nos regulan, retirando los obstáculos para realizar ese progreso, siendo el principal de ellos la guerra. Así, como hiciera en su estudio sobre la moral, Kant lleva su deontología a la reflexión sobre el

progreso del género humano. La norma anterior, el imperativo categórico, que incorpora sus reflexiones sobre la moral, es trasladada a la organización política como las normas acordadas que la regulan. Como explicaba en *Sobre la Paz Perpetua* (1795), “el problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento), y el problema se formula así: “ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones”. Un problema así debe tener *solución*. Pues **no se trata del perfeccionamiento moral del hombre sino del mecanismo de la naturaleza**; el problema consiste en saber cómo puede utilizarse este mecanismo en el hombre para ordenar la oposición de sus instintos no pacíficos dentro de un pueblo de tal manera que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coactivas, generando así la situación de paz en la que las leyes tienen vigor”.

El progreso del género humano se nos presenta así como un fin universal y no particular de cada estado ni de gentes aisladas. Es un fin universal del conjunto de la humanidad porque los facultades de los hombres, a diferencia de los animales, sólo pueden ser desarrollados en su totalidad con el desarrollo conjunto de la sociable insociabilidad en un número indeterminado de generaciones futuras que necesariamente supera el lapso de una vida humana. Pero ese proceso de auto-perfeccionamiento del conjunto, que en la individualidad está limitado por la muerte, debe necesariamente estar regulado, normas que sólo son posibles de establecer eliminando el estado de guerra, alcanzando una paz que a su vez, es condición necesaria para desarrollar ese marco normativo capaz de limitar los impulsos destructivos.

El progreso moral del género humano, en cuanto fin universal, sólo es alcanzable acabando con la guerra, para lo cual establece a su vez una serie de condiciones que son esos mecanismos que han encontrado su eco en los siglos posteriores hasta inspirar, nada menos, que la conformación de instituciones como la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas o la Unión Europea. Efectivamente, para Kant el progreso del género humano sólo es posible sometiendo los intereses particulares, de los hombres pero también de los estados, a normas establecidas *a priori* y universales; el progreso humano sólo es posible en paz, una paz estable que sólo puede ser garantizada si los estados son de constitución republicana (república entendida en su *forma regiminis*, es decir, como régimen no despótico, no en su *forma imperi*), estados que comercian entre sí, que tienen intereses comunes, que están organizados en una suerte de federación mundial que ayuda a elaborar normas universales a las que se someten los intereses, que modula en fin, la “insociable sociabilidad” de los seres humanos organizados en estados.

Subrayemos que Kant considera asimismo fundamental para la eliminación de la guerra la máxima de que “ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro”, (máxima hoy recogida ampliamente en el Derecho Internacional y fundamental en la construcción de un derecho de autodeterminación) por tanto igualmente indispensable para lograr un progreso del género humano hacia lo mejor.

El progreso y la autonomía del ser humano en cuanto ciudadanos *de los estados* de constitución republicana está relacionado con Kant a través del mencionado concepto de “insociable sociabilidad” que se encuentra en base de nuestra conflictiva naturaleza,

conformada por nuestras apetencias, intereses y la razón que puede y debe modularlas. Si a nivel individual, en base a su concepto de la autonomía de la voluntad, Kant había concluido que la búsqueda de la felicidad –un ideal de la imaginación- ha de estar sometida al deber –ideal de la razón- para hacernos, al menos, dignos de esa felicidad, a nivel de estados, la búsqueda del interés individual del estado ha de estar sometida a normas externas y anteriores. En esta arquitectura encaja la necesidad de garantizar la autonomía volitiva de los estados constituidos legítimamente. Por eso tal y como es rechazable la injerencia ilegítima en la autonomía del ser humano individual, Kant condena vehementemente la ilegítima intromisión de unos estados en el gobierno y constitución de otros. Pero junto a la preservación de la autonomía individual y colectiva, es necesaria la cooperación, pues nos necesitamos. El progreso del género humano sólo puede darse, por tanto, preservando la autonomía una autonomía que a su vez ha de estar sometida, modulada por la autonomía de los otros.

El progreso del género humano, por tanto, si ha de darse, estará marcado por el incremento progresivo de las relaciones comerciales y diplomáticas, el sometimiento al Derecho, el decrecimiento de los ejércitos, la eliminación de la ilegítima interferencia de unos estados en las constituciones y gobiernos de otros y en fin, de la guerra, como instrumento político internacional. En relación con la autonomía de los estados, plasmada en la prohibición de ilegítima interferencia, igualdad y común redacción de las normas que a sí mismos se dan, podríamos concluir que el respeto a la autonomía es causa de progreso y su consecuencia necesaria.

Así pues, podríamos resumir que, a nivel colectivo, la solución al problema de la relación entre autonomía y progreso coincide, en la práctica, con la solución de la relación de insociable sociabilidad del ser humano, que ha de ser modulada conforme a normas jurídicas anteriores y universales, suscritas válidamente por estados y entre estados legítimos, de acuerdo a la razón.

El liberalismo democrático, en sus fundamentos teóricos, quiso volver a hacer de los fines e intereses del estado los intereses de los ciudadanos, a través de su participación democrática del poder. Remozada la idea antigua de que la felicidad del estado y de sus ciudadanos es una sola, se articula de nuevo en el lenguaje de los derechos ciudadanos. Así, tal y como se establece el reconocimiento de derechos a alcanzar fines del ciudadano siempre que no interfiera con los fines de otros conciudadanos, no es de extrañar que se plantee el reconocimiento a los ciudadanos de su derecho a su fin último, al fin al que desde la Antigüedad se había considerado como el fin universal reconocible en todo hombre: la felicidad.

Nació así un nuevo concepto de “derecho a la felicidad”, como un derecho natural de todos los hombres y un derecho ciudadano al que la organización social, el estado, debe dar respuesta. Como ejemplo, podemos encontrar el “derecho a la felicidad”, la felicidad como fin individual definida como un derecho, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El borrador de Thomas Jefferson, “sostenemos que estas verdades son sagradas e innegables; que todos los hombres son creados iguales e independientes, que de esta igual creación se derivan derechos inherentes e inalienables, entre los cuales están la preservación de la vida, y la libertad, y la búsqueda de la felicidad” fue modificada por el Comité de los Cinco, incluyendo la idea de

Dios en la base de la arquitectura argumentativa, “sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, y que entre ellos están la vida, la libertad, y la persecución de la felicidad”.

Ese “derecho a la felicidad” contenida en la Declaración, se apartaba en cierto modo de la idea de predestinación de los “santos”, traída del Calvinismo, tan importante en la tradición de los Puritanos del Mayflower, pues formula la felicidad como derecho inalienable, cierto que de origen divino, pero inteligible por la razón y de necesaria realización en la tierra, su realización sería posible con la elección de un gobierno virtuoso, relacionado con las leyes democráticas, un derecho de todos, los hombres y de los ciudadanos.

Entre nosotros, Gaspar Melchor de Jovellanos en su conocido *Discurso económico sobre los medios de promover la felicidad de Asturias dirigido a su Real Sociedad* pronunciado en Madrid el 22 de abril de 1781, dejaba constancia de esa distinción entre lo que él denomina “verdadero y aparente patriotismo”, y también la distinción entre la felicidad personal o moral y la colectiva, subrayando la profunda relación entre el crecimiento económico y esa felicidad colectiva: “(...) Pero yo no hablo de este amor patrio, que es alguna vez impuesto y por lo común estéril e ineficaz. Hablo, sí, de aquel noble y generoso sentimiento que estimula al hombre a desear con ardor y a buscar con eficacia el bien y la felicidad de su patria tanto como el de su misma familia; que le obliga [a] sacrificar no pocas veces su propio interés al interés común; que uniéndolo estrechamente a sus conciudadanos e interesándolo en su suerte, le aflige y le conturba en los males públicos, y le llena de gozo en la común felicidad. Hablo, finalmente, de aquella virtud que en los buenos tiempos produjo a España tantas glorias, tantos héroes y tantos célebres patriotas.

Cuando digo que la Sociedad debe procurar la felicidad de Asturias, ya se ve que no tomo esta palabra en un sentido moral. **Entiendo aquí por felicidad aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos.** En este sentido la provincia más rica será la más feliz, porque en la riqueza están cifradas las ventajas políticas de un Estado (...)⁸⁵⁹.

El liberalismo democrático trajo consigo la idea de la autonomía de la voluntad del *demos* en oposición a la heteronomía del Antiguo Régimen. Las primeras teorías liberales prerrevolucionarias se habían ocupado de derrocar el despotismo, de acabar con el Antiguo Régimen, habían proclamado el triunfo de la democracia, que la soberanía residía en el pueblo, pero no habían dado respuesta suficiente a la pregunta de quién concretamente debía conformar ese *demos*. En la nueva etapa histórica que se abría tras las revoluciones liberales, la nueva doctrina indicaba a los ciudadanos -hombres libres e iguales sometidos al imperio de la ley que sí mismo se dictaban- que debían debatir entre ellos cómo cumplir esos derechos preexistentes que a sí mismos se reconocían, quiénes conformaban la unidad política, cómo habían de repartirse en fin, el presupuesto, los recursos, los derechos. La democracia liberal proclamaba la autonomía política del pueblo, la soberanía popular— el pueblo entendido también entonces polisémicamente como conjunto de personas sometidas a un mismo poder, como mayoría de gobernados, como *demos*, como tercer estado— pero los límites “externos” definitorios del “pueblo”

⁸⁵⁹ Puede encontrarse online en la base de datos de Cervantes Virtual:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/discurso-economico-sobre-los-medios-de-promover-la-felicidad-de-asturias-dirigido-a-su-real-sociedad-por-don-gaspar-melchor-de-jovellanos/html/f07fc8c9-c125-467f-b28b-4a2f14125958_28.html#I_2_

terminaban donde terminaba el poder soberano derrocado. Allá donde hubiera habido un rey, había un demos. Fue pues solamente tras el triunfo de las revoluciones liberales que comenzaron los debates sobre la naturaleza del pueblo mismo, entendido como la unidad relevante a la que aplicar el concepto de soberanía popular.

Los principales movimientos políticos decimonónicos se concentraron a partir entonces en (re)definir quién era ese pueblo democrático que gozaba de soberanía. Los debates pronto se centraron en los *límites* del pueblo, dónde termina un pueblo y empieza otro, donde termina un grupo en el que cabe esa auto-repartición de recursos y auto-reconocimiento de derechos y dónde empieza el siguiente.

Se conformaron pues dos ejes de discusión acerca de la conformación de los grupos entre los cuales repartir derechos y recursos. Para decirlo gráficamente, se dibujaron, un límite horizontal o interno (basado en el entendimiento de pueblo como clase o estado social, dando origen a los movimientos obreros) y otro vertical o externo (quiénes debían de formar el estado, dando origen a los movimientos nacionalistas), dos parámetros que se han ido conjugando en función de distintos fines (ideales) políticos. Así, la gran parte de las ideologías contemporáneas desarrolladas desde las revoluciones liberales, ideologías entendidas como la visión que una sociedad tiene de sí misma y cómo se proyecta a sí misma en el futuro, se plantean esta fundamental cuestión: cómo nos hemos de repartir qué recursos, qué derechos habremos de reconocernos, entre quiénes y cómo, es decir, con qué *criterios de justicia*. La proyección futura de este reparto de derechos y recursos, horizontal y vertical, entre quiénes y cómo, en cuanto fundamento ideológico fue eventualmente ligada con ese nuevo concepto de progreso que nacía, incorporándose a los debates sobre el pueblo relevante, dando forma a las grandes ideologías dominantes: tanto los movimientos revolucionarios nacionalistas de clase como los nacionalistas evolucionaron tras las revoluciones liberales a partir de la inclusión de distintas nociones de progreso.

En Alemania, tras las especulaciones descritas por Kant, su (alejado) discípulo Fichte consideró el progreso de la humanidad como base ética hacia el fin de la libertad de la humanidad, inabordable en la Tierra desde el ascetismo cristiano, atribuyendo a la sabiduría la cualidad de condición para el progreso (lo que influenciaría a autores como Saint-Simon o Comte). Para Fichte el fin de la libertad humana es un proceso inacabado. Schelling, en su filosofía de la identidad, describe la existencia como un proceso de llegar a ser. Karl F. Krause, profesor de Schopenhauer y colega de Fichte, quien tuvo cierta influencia en la España de la Restauración, fue influido por Schelling y concibió la Historia como el desarrollo progresivo hacia la unión de la Humanidad y Dios y la aceptación de este *panenteísmo*. Por su parte, sin extendernos, como bien se sabe, Hegel introdujo la idea del conflicto en el corazón del concepto de progreso como proceso histórico impulsado por la dialéctica de contrarios ideales. La obra de Hegel sería altamente influyente en concepciones de progreso posteriores como la marxista, aunque para el filósofo alemán quedara poco espacio para el progreso futuro del espíritu pues lo daba por realizado.

Como explicaba Bury, todas estas especulaciones trascendentales del progreso,

pretendían poder deducir su naturaleza de principios metafísicos independientes de la experiencia humana, si bien considera que este desapego a la experiencia es más pretendida que otra cosa, pues construyen el progreso sobre los eventos de la Historia misma, dividiéndola en fases de acuerdo a los criterios conformes a sus particulares sistemas⁸⁶⁰.

En Francia, las obras de Turgot y Condorcet tuvieron una gran influencia en autores posteriores, pero son de destacar Henri de Saint-Simon y su discípulo Auguste Comte como quienes retomaron las reflexiones de Condorcet para tratar de construir una concepción de progreso predecible y futuro basada en principios científicos, desechando la Cristiandad como único impulso de progreso –como también hiciera Fichte- y proponiendo el avance científico y tecnológico como elemento clave del progreso, estableciendo una conexión entre el avance moral y el avance tecnológico y del saber. Condorcet había descrito el progreso histórico humano y había incluido la Edad Media como una época oscura en la que el progreso se había suspendido. Saint-Simon la incluye en una lógica dentro de la ley del progreso, deduciendo que la Historia se compone de épocas alternas de construcción y destrucción. Comte dedicó grandes esfuerzos a la reflexión sobre el progreso, fuertemente influido por Saint-Simon, bajo cuya tutela estudió desde sus diecinueve años. Considerando tres etapas históricas del progreso del ser humano, dibujadas ya por Turgot (etapa mitológica o teológica de creación de deidades imaginarias, etapa metafísica en la que se incluye a Dios como abstracción, etapa positivista de conocimiento científico) Comte establece una línea temporal cuyo fin está marcado por el avance científico y tecnológico. Sobre el progreso mismo, su emplazamiento como objeto de estudio, podría ayudar a desentrañar las normas por las que se rige, de manera que, gracias a la cuidadosa observación de la Historia, podríamos prever y moldear el futuro. Abogaba, partiendo de la asunción de una serie de impulsos históricos de destrucción/construcción de inspiración saint-simoniana, por una reconciliación de ambas, en el periodo histórico postrevolucionario, aunadas en un nuevo sistema de “orden y progreso” en el que ambos conceptos aparentemente contradictorios se reforzarían mutuamente. Su corolario “*L'amour pour principe, et l'ordre pour base, et le progrès pour but*” inspiraría el lema que encontramos en la bandera del Brasil.

El progreso consistiría en el proceso de mejoramiento moral del ser humano –un progreso moral del género moral del género humano- que vendría con la mejora de condiciones de vida, que acabarían con la necesidad como fundamento del egoísmo y los conflictos por los recursos. La mejora de las condiciones de vida habría de venir a su vez con el desarrollo científico e intelectual, mejorando el conocimiento sanitario y productivo, aumentando la producción de bienes y la justicia de su reparto.

Notemos finalmente que la nueva idea de progreso fue desplazando a la felicidad entendida como satisfacción de todas las necesidades del hombre, viniera esa satisfacción o no de la virtud, no sólo por el historicismo propio del nuevo concepto de progreso, sino también por su carácter colectivo. El término felicidad fue gradualmente reservándose para el ámbito individual y subjetivo de los nuevos ciudadanos no súbditos, mientras que el progreso fue utilizado más en referencia al avance colectivo. Asimismo, a medida que

⁸⁶⁰ Bury, J. B., *The idea of progress: an inquiry into its origin and growth*, The Gutenberg Project, 2010.

el progreso fue utilizado más por los materialistas, fue haciéndose etérea en el campo de los espiritualistas, perdiendo el sentido de satisfacción terrena que había tenido en la Antigüedad.

La idea de progreso, en fin, entró a formar parte de las grandes ideologías junto con el debate en torno a la autodeterminación propia del fin de la heteronomía del Antiguo Régimen, -quién es el pueblo relevante para gobernarse así mismo-. Tras definir quién era el pueblo relevante, y los límites internos y externos de ese pueblo (por nacionalidad o por clase, por nación como entidad metafísica o por pueblo-mayoría), era necesario saber el fin teleológico de la repartición de recursos y derechos del pueblo soberano. Se construyen así esos dos pilares fundamentales de toda ideología contemporánea que podemos resumir en “quiénes somos, adónde vamos”, pilares de origen contractualista que tratan de distinguir quiénes suscriben el pacto social y con qué fin.

En resumen, el debate constante y consustancial de las democracias liberales (debate parlamentario pero también de la sociedad civil apoyado en la progresiva implantación del derecho de libre expresión) acerca de cómo nos repartimos los recursos, cuáles, con qué criterios de justicia, entre quiénes y con qué fin, definió las grandes ideologías surgidas inmediatamente después de las revoluciones liberales, unas ideologías en conflicto acerca del reparto autónomo de los recursos y derechos -nosotros nos aprobamos a nosotros mismos el presupuesto y no el rey o un tercero- (democracia) será conforme a criterios de justicia en los marcos condicionales de “entre quiénes” (el pueblo) y el fin teleológico de “para qué”, un fin marcado por la idea de progreso.

Esta es la base sobre la que numerosos autores han intentado clasificar distintos clivajes o escisiones en las sociedades contemporáneas, de manera notable Seymour Lipset y Stein Rokkan⁸⁶¹. Estos debates han estado asimismo marcados por la interacción en conflicto de distintas definiciones de grupos relevantes, con distintos intereses y de unas concepciones de progreso con otras, pudiéndose distinguir entre una vertiente interna de esos debates (quienes somos, cómo nos repartimos recursos y para qué) y la externa (quiénes son los otros y si hemos de interferir en su reparto y bajo qué títulos de legitimidad).

Napoleón, con la excusa de llevar los principios liberales por Europa, hizo exclamar en España ese ¡vivan las cadenas!, que se entiende sólo desde la perspectiva nacionalista. Las más influyentes formulaciones teóricas nacionalistas primordialistas, como las de Fichte y otros en Alemania, como ya hemos discutido, daban una respuesta a la definición del sujeto pueblo (repartición vertical o externa de recursos y derechos) aportando la idea de que el pueblo no era sólo el que coincide con el espacio hasta donde extiende su poder el soberano sino una especie de entidad metafísica con unas características pre políticas concretas que nada entiende de fronteras estatales.

Pero fue el nacionalismo voluntarista posterior, que trataba de incorporar los principios liberales el que dedicó más esfuerzo, incorporando al idea de progreso, a analizar la

⁸⁶¹ Lipset, S.M., Rokkan, S., *Party systems and voter alignments: cross-national perspectives*, Free Press, 1967.

articulación futura entre el sujeto y el fin, entre quiénes nos repartimos y con qué fin nos repartimos derechos y recursos. La idea de progreso se perfila así en uno de los elementos diferenciadores fundamentales entre ambos movimientos: el nacionalismo primordialista anhela/anhelaba un futuro en el que el pasado mitológico es preservado o recuperado, proyectado en la eternidad, mientras que el voluntarista –no basado ya estrictamente en características pre políticas del pueblo- no pone límites a la incorporación de nuevas gentes. El nacionalismo voluntarista, llamado también civil, era desde luego más acorde con los principios de universalismo del liberalismo democrático.

Así, el mencionado Giuseppe Mazzini –que como hemos visto concebía la unificación de Italia como un paso hacia la unificación europea- en *Fe y futuro* (1835) argumentaba que “dos cosas son esenciales para que se cumpla el progreso: la manifestación de un principio y su encarnación en los hechos”. Partiendo de los principios liberales considera que éstos necesitan un fin que proporciona el progreso: “la libertad, la libertad, la igualdad y la fraternidad (...) se convirtieron en el programa del futuro, y los hombres intentaron confinar el progreso en un círculo marcado por esos tres puntos. Pero el progreso rompió el círculo; el eterno *cui bono* reapareció. Porque nosotros, todos nosotros, demandábamos un fin, una meta humana. ¿Qué es la existencia sino una meta, y los medios de un logro? Ahora la fraternidad no provee ninguna meta general social terrenal, ni siquiera implica la necesidad de meta alguna”. Abunda en su ensayo posterior, *De los deberes del hombre* (1860), que el progreso nace del cumplimiento de los deberes de los hombres emancipados y autónomos tienen para consigo mismos. La palabra “progreso”, recuerda, “desconocida a la Antigüedad, será a partir de ahora una palabra sagrada para la Humanidad”. Concluye Mazzini que el progreso es nada menos, que “la ley de la vida”, un progreso que ha de alcanzarse en la vida terrenal cumpliendo con los deberes y las leyes, un concepto en el que “puede contenerse la (...) emancipación”.

La idea de progreso entró a formar parte también de la base ideológica de los movimientos obreros. Como escribía J. B. Bury en 1920 “los ideales de libertad y democracia, que tienen sus propias antiguas e independientes justificaciones, han buscado una nueva fuerza adhiriéndose al Progreso. Las conjunciones “libertad y progreso”, democracia y progreso” salen a nuestro encuentro a cada paso. El Socialismo en una etapa temprana de su desarrollo moderno, buscó la misma ayuda”⁸⁶²

De manera notable Karl Marx, partiendo de una indudable base aristotélica, fue influido por el positivismo de Comte y la dialéctica de Hegel, pero introduciendo su perspectiva materialista, de manera que, si son las condiciones materiales fruto de determinada organización propiedad de medios de producción los que perfilan las ideas, sólo el cambio de las condiciones materiales pueden producir un progreso verdadero. Para Marx, como Comte, el futuro deducible de la Historia era optimista y previsible, la sociedad comunista, deducible gracias a los métodos científicos de análisis histórico. Por otro lado, Marx aplicaría la dialéctica hegeliana a esa dualidad expresada por Aristóteles: como decía el estagirita, en toda sociedad, y en todo tiempo, los ricos son la minoría y los pobres la mayoría. Dando la vuelta a Hegel al introducir la perspectiva materialista, para Marx el conflicto dialéctico entre clases produciría el progreso, que habría de entenderse como un proceso marcado en sus fases finales por la liberación de la clase proletaria de la

⁸⁶² Bury, J. B, *The idea of progress...*, op. cit.

opresión producida por el estado nacional y la propiedad privada de los medios de producción a nivel internacional para desembocar en la sociedad comunista.

Ese avance dialéctico, según Marx y Engels, podía observarse históricamente desde la Antigüedad, por lo que un análisis científico podría no sólo confirmar la pugna dialéctica sino que podría hacer posible prever su resultado futuro. La idea de progreso marxista se fundamentó así en un marcado historicismo que partiendo del análisis de la existencia de una serie de fases o etapas históricas perfectamente distinguibles definidas por distintos modelos de relación material entre clases, los llamados modos de producción, que abarcarían desde los modos esclavistas y feudales como analizó Marx en *Formaciones económicas pre-capitalistas* (1858), hasta el capitalismo, afirmaba prever la eventual inevitable desembocadura en la sociedad comunista como estado final del progreso humano.

Como hemos analizado en la segunda parte de esta tesis, el marxismo clásico, recogiendo la dualidad aristotélica, define al pueblo relevante como la mayoría oprimida por la minoría en la sociedad capitalista, concretamente, la clase trabajadora. Así, la relación entre autodeterminación nacional y el progreso ha de entenderse en el contexto de la revolución para la liberación de la clase proletaria a nivel internacional y su victoria en la lucha de clases.

En la concepción marxista, los movimientos nacionalistas y la misma idea del estado nacional es una producción típica de la burguesía y como tal enmarcable en una fase concreta de la línea de progreso histórico, el capitalismo. El estado nacional es, por tanto, resultado de la lucha de la burguesía capitalista contra el feudalismo del Antiguo Régimen. La conformación de unidades políticas monoculturales –estados nación– era tarea más propia de una época anterior, por la que era necesario pasar por ella para poderla superar. No podía ignorarse pero debía instrumentalizarse. Por ello, frente a Proudhon y otros socialistas, Marx y Engels clamaban no ignorar o menospreciar la importancia de dar una solución a la cuestión nacional, como se denominaba entonces, sino que sometían la solución al progreso histórico y la revolución socialista, proponiendo una acercamiento caso a caso e instrumental. Frente a nacionalistas voluntaristas como Mazzini, coincidían en la progresiva unificación federal como clave de la autodeterminación, pero defendían la liberación de la clase obrera como piedra angular del proyecto.

Recogiendo esta idea más tarde, Lenin, como gran referencia doctrinal en la cuestión del comunismo soviético, propuso, como ya hemos indicado, un derecho de autodeterminación política entendida como derecho de secesión, identificando las nacionalidades etno-culturales con proyección territorial como criterio para la conformación constitutiva de unidades políticas incluyendo estados (tal y como se había propuesto los comunistas yugoslavos en oposición a propuestas de reconocimiento de derechos culturales y lingüísticos sin proyección territorial como las de Otto Bauer).

Es necesario hacer dos puntualizaciones importantes que las lecturas interesadas de Lenin han obviado o directamente tergiversado, especialmente desde algunos nacionalismos

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, Lenin abogaba por un derecho de autodeterminación incluyendo derecho a la secesión, pero no por tener la secesión y la independencia política de todos los grupos etnoculturales como horizonte, en un mosaico de miríadas de miniestados internacionalmente reconocidos y sin obligaciones los unos para con los otros, al modo burgués capitalista, sino como vía para solventar la cuestión nacional, para avanzar hacia la creación de un estado federal soviético, germen del comunismo internacional. Para Lenin, siguiendo a Marx y Engels la solución de la cuestión nacional era una tarea que históricamente debía llevar a cabo la burguesía frente al feudalismo y que algunos estados de Occidente ya habían completado.

En segundo lugar, Lenin distingue explícitamente la autodeterminación de los pueblos de lo que él denomina chauvinismo nacionalista. Aprueba el primero más no el segundo. Es decir, aprueba la secesión como vía de escape frente a la explotación y la persecución. Debemos entender que en el marco teórico de la expansión de capital, el capitalismo requiere siempre de nuevos y más grandes espacios y mercados. El nacionalismo chauvinista de los estados poderosos (especialmente en ese estadio último de capitalismo que Lenin identifica con el imperialismo) tiende a la expansión y opresión de otros. Por eso el escenario que trata es el de gentes oprimidas por razones étnicas y culturales. El escenario de unidades políticas más ricas de la media de un estado aspirando a la secesión –reduciendo obligaciones pero no los mercados en los que operan- sin tener en cuenta, o a pesar de, sus obligaciones de justicia distributiva no formaba parte de sus consideraciones, simplemente porque en el momento histórico de sus estudios éste no era el problema relevante⁸⁶³.

La autodeterminación política y cultural no debía pues interferir ni con el reparto de recursos ni con la propiedad de los medios de producción, por lo que el estado federal retendría la planificación económica necesaria para garantizar el triunfo de la revolución. Lo importante, una vez más, era el interés conjunto de la clase obrera, no de los pueblos etnoculturalmente definidos. La relación entre autodeterminación de los pueblos (nacionalmente definidos) y progreso (del pueblo / proletariado y la Humanidad) se relacionaba en una línea histórica prefijada que podía ser advertida mediante métodos científicos.

Asimismo, mientras los nacionalismos y socialismos revolucionarios incorporaban la idea de progreso por toda Europa, se mantenía con vida la precursora idea de colonización como principio de justificación del imperialismo –si en la Edad Media se llevaba el descubrimiento de Dios, los nuevos imperios francés y británico trataban de justificar su expansión en la extensión de los principios liberales-, la colonización como herramienta de progreso.

Contemporáneamente, el liberalismo utilitarista de J.S. Mill había argumentado, como vimos, a favor del imperialismo sobre la base de los distintos niveles de “civilización”, en *Sobre la libertad* (1859). El liberalismo había traído la idea de la igualdad de hombres desterrando esa desigualdad *natural* que se plasmaba en los privilegios del Antiguo

⁸⁶³ Aunque rechazaba, sin embargo, como es conocido, la oposición de Rosa de Luxemburgo a la autodeterminación como secesión en beneficio a la burguesía local.

Régimen, pero no desterró completamente la idea de la desigualdad entre pueblos⁸⁶⁴. En su *Sobre el trato a las naciones bárbaras* (1874) explica que “suponer que las mismas costumbres internacionales, y las mismas normas de moralidad internacional, pueden obtenerse entre naciones civilizadas y bárbaras, es un grave error”. Se ha argumentado recientemente que J. S. Mill era un “imperialista tolerante: (...) defiende la interferencia en India para promover la protección de derechos legales, el respeto y la tolerancia de puntos de vista en conflicto (...) Él no piensa en la renuncia del principio de libertad para los incivilizados (...). El imperialismo tolerante de Mill refleja la tensión entre libertad y desarrollo moral que emerge cuando piensa en el fin del gobierno de sociedades civilizadas”⁸⁶⁵.

A pesar de los matices que hagamos es fácil darse cuenta de cómo las distintas ideas de progreso fueron instrumentalizadas en la expansión territorial de los estados: en nombre de llevar la antorcha del progreso en la realización ya fuera liberal, nacional o socialista.

Henry Thomas Buckle en su inacabada obra *Historia de la Civilización en Inglaterra* (primer volumen de 1857, segundo de 1861) aducía que el progreso no puede ser un progreso moral (la calidad moral del hombre es siempre la misma, en la tradición abderetista que también suscribieron tantos antes del evolucionismo, como Lotze) y que sólo ha de venir con la actividad intelectual (en el lugar de la razón deber de Kant o de la sabiduría de Compte) pero esa actividad intelectual está condicionada por causas naturales: la alimentación, el clima, la posición geográfica... dando así una razón para las distintas fases de progreso de los distintos pueblos y por lo tanto a distintos niveles de civilización.

Es a este Buckle, por cierto, al que se refiere Fiodor Dostoyevski a finales de siglo, cuando en sus *Memorias del subsuelo* (1864) con la libertad de expresar sus ideas personales a través de una obra de ficción, el autor reflexiona sobre la relación entre el progreso del género humano y su grado de civilización. Lo cito porque condensa breve y magistralmente algunas de las objeciones que se presentaban por entonces al materialismo y al optimismo científico: “esos hermosos sistemas, esas teorías que pretenden explicar a la humanidad en qué consisten sus intereses normales, a fin de que ella decida al punto ser virtuosa y noble para amoldarse a ellos, todo eso es pura palabrería. Creer que la renovación del género humano pueda realizarse dándole a conocer sus verdaderos intereses equivale, en mi opinión, a admitir con Buckle que la civilización aplaca al hombre (...). Buckle llega a este resultado lógicamente, a mi entender. Pero el hombre siente tal pasión por los sistemas, por las deducciones abstractas, que está dispuesto a disfrazar la verdad, a cerrar los ojos y a taparse los oídos ante la verdad, sólo por justificar su lógica (...) ¡Observen nuestro siglo XIX, en el que ha vivido Buckle! ¡Miren a Napoleón, al otro, al grande, y al de hoy! ¡Observen a América del Norte y su unión, fundada para toda la vida! ¡Vean, en fin, a esos caricaturescos Schleswig y Holstein! (...)”.

Oponiéndose en definitiva a las ideas de que si consiguiéramos descifrar racionalmente las leyes de la naturaleza del ser humano podríamos hacerlo progresar y que el ser humano se mueve por intereses racionales y materiales que son los que marcan su

⁸⁶⁴ Sullivan, E.P., “Liberalism and Imperialism: J. S. Mill's Defense of the British Empire”, *Journal of the History of Ideas*, University of Pennsylvania Press, vol. 44, n. 4, 1983, pp. 599-617

⁸⁶⁵ Tunick, M., “Tolerant Imperialism: John Stuart Mill's Defense of British Rule in India”, *The Review of Politics*, University of Notre Dame, Vol. 68, n.4, 2006, pp. 586-611

ideología, concluye que hay intereses superiores al interés final eudaimónico que es el interés de la propia identidad y libertad definidos por la imaginación (recordando esa diferencia entre ideales de la imaginación e ideales de la razón de origen kantiano) un interés que puede llevar a su propia destrucción: “la voluntad de uno puede, y a veces incluso debe (esta idea es de mi propiedad), oponerse a sus intereses. Mi voluntad; mi libre albedrío; mi capricho, por insensato que sea; mi fantasía sobreexcitada hasta la demencia (...) éste es el precioso interés que no tiene espacio en ninguna de esas clasificaciones que componen ustedes y que rompe en mil pedazos todos los sistemas, todas las teorías. ¿De dónde se han sacado nuestros sabios que el hombre necesita voluntad normal y virtuosa? ¿Por qué suponen que el hombre aspira a poseer una voluntad ventajosa y razonable? El hombre sólo aspira a tener una voluntad independiente, cualesquiera que sean el precio y los resultados”.

Así pues, contemporáneamente al trabajo de Darwin y otros evolucionistas que influirían en las ideas de progreso en el Reino Unido, numerosos autores continuaron durante largo tiempo debatiendo la naturaleza de progreso desde distintos ángulos incluyendo la dirección de progreso entendida desde la especulación racional o desde la observación empírica de la Historia. En pleno siglo del imperialismo británico, los debates sobre progreso tenían asimismo el trasfondo de la justificación política de las acciones imperiales. La vieja idea civilizadora mantenía cierta vigencia para algunos en la justificación política.

Del mismo modo que las distintas concepciones de autodeterminación y de pueblo delimitaron –como hoy delimitan- distintas posiciones ideológicas tanto en la vertiente interna del gobierno de los estados como en su expansión exterior, como hemos visto en la segunda parte, éstas no pudieron quedarse ajenas a los diferentes concepciones que vinieron sobre la misma idea del progreso, incluyendo la irrupción del concepto de selección natural y evolución de las especies.

Estas diferentes concepciones que hemos visto hasta ahora de progreso moral e histórico del hombre quedarían indefectiblemente marcadas progresivamente por el evolucionismo científico, que irrumpió al alba del siglo XIX y se instaló definitivamente con el *Origen de las Especies* (1859). Fue cuestión de tiempo que las tesis sobre la evolución del hombre desde el punto de vista natural interaccionaran progresivamente con las reflexiones sobre el progreso de la metafísica alemana y del positivismo histórico francés. Había sido Jean-Baptiste Lamarck (1744 –1829) el primero en introducir la idea de que las especies animales pueden evolucionar, lo que el llamaba la “transmutación”, y no necesariamente por intervención divina, en una serie de trabajos publicados a principios de siglo -en una conferencia de 1800, y en sus trabajos *Investigaciones sobre la organización de los cuerpos vivos* (1802), *Filosofía zoológica*, (1809) e *Historia natural de los animales invertebrados* (1815–1822)-. La evolución progresiva de la vida orgánica no fue aceptada sin una fuerte oposición. El también francés Georges Cuvier, padre de la paleontología, se opuso famosamente a las tesis de Lamarck, aduciendo que las diversas especies desaparecían por media de grandes cataclismos. A su vez, el escocés Charles Lyell, conocido estudioso de la estratigrafía geológica, en sus *Principios de la Geología*, publicados en tres volúmenes entre 1830 y 1833, desmontó las tesis de Cuvier demostrando cómo cambios apenas perceptibles, graduales, del medio terrestre en larguísimos períodos de tiempo pueden lugar a cambios tales que hagan irreconocible el

punto de partida. A su vez, Lyell tuvo una influencia directa en Charles Darwin, a quien el capitán del H.S.M. Beagle regaló la primera edición del primer volumen de *Principios de la Geología*. Otra obra tuvo una fundamental influencia en Darwin, el *Ensayo sobre el principio de población* (1789) de Thomas Malthus, al mostrarle que una gran cantidad de seres vivos desaparecían sin tener oportunidad de dejar descendencia permitiendo la supervivencia de los más aptos al medio.

Con estos antecedentes, Darwin revolucionaría definitivamente la manera de entender los orígenes del hombre y lo que cabe esperar de su proyección futura en *El origen de las especies* (1859), en el que sólo apuntaba cómo su principio evolutivo podría tener impacto en la concepción del ser humano y, más adelante en *La descendencia del hombre* (1871) y *Expresión de las emociones en el hombre y en los animales* (1872).

El impacto de las teorías evolucionistas de Darwin fue gigantesco pero no inmediato. Las ideologías de su tiempo, como hemos visto, estaban fundamentadas en ideas de progreso ajenas al evolucionismo del ser humano como especie, concepciones algunas que han llegado hasta hoy en día, o influenciadas por el transformismo lamarckiano.

De hecho, el primer gran intento de trasladar los principios transformistas biológicos al estudio de la sociedad y la teoría política, Herbert Spencer (1820-1903), fue acusadamente influido por Lamarck. De extensa bibliografía, plasma sus ideas sobre el progreso de manera destacable en *La estática social* (1850) y en un artículo de 1857, “El Progreso: su ley y causa”, traducido en España por primera vez por Miguel de Unamuno⁸⁶⁶.

Spencer plantea la sociedad como un ente orgánico que aprende y que evoluciona para adaptarse al medio, que pasa ese aprendizaje a través de generaciones, mutando y aplicando el principio de Lamarck, hoy desechado en ciencias naturales: “la función hace al órgano”. Para Spencer todo mal proviene de los conflictos y egoísmos derivados de la escasez y otros males provocados en última instancia por la deficiente adaptación de la sociedad humana al medio natural.

La progresiva constatación de las teorías de la evolución en el campo de la biología y la paleontología, con los sucesivos impulsos de proporcionados por los trabajos de Alfred Russel Wallace, August Weismann, del agustino Johann Mendel (que presentó sus famosos estudios genéticos en 1865) y tantos otros, se fue afianzando cierta influencia en la conformación ideológica del progreso.

Así, se puede registrar el impacto del evolucionismo a partir de finales del siglo XIX en muy diferentes corrientes ideológicas, que asumieron sus postulados de distintas maneras, del mismo modo que enfocaban la cuestión del progreso de diverso modo. En este sentido es conocido, del lado de los movimientos obreros, el trabajo del príncipe Piotr Koprotkin, un notable naturalista y geógrafo, quien fundamentó en la evolución los

⁸⁶⁶ Fioraso, N., “Unamuno, traductor de Spencer”, *Pensar la traducción: la filosofía de camino entre las lenguas. Actas del Congreso (Talleres de comunicaciones)*, septiembre de 2012, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014, pp. 221-230

argumentos de su *La ayuda mutua: un factor de evolución* (1902).

Pero, por otro lado, cierta perversión del evolucionismo aplicado fuera de las ciencias naturales dio origen a las teorías biológicas que crecieron a la sombra del progresivo afianzamiento científico del primero influyendo en los totalitarismos fascistas del siglo XX. Un nuevo criterio para la definición de progreso nacía de la diferenciación y por ende de la discriminación de las naciones y pueblo primero por su clasificación respecto a su nivel de adaptación al medio y después, bajo la influencia darwiniana, respecto a la inevitable extinción de los menos adaptados por la selección natural.

Así, si los defensores del imperialismo diferenciaban entre pueblos por su nivel de civilización en cualquiera de sus versiones, respecto a su nivel de conocimiento de piedad religiosa, de su nivel de conocimiento científico o tecnológico, de su nivel de liberación respecto del soberano y de implantación de democracias liberales nacionales, si los marxistas diferenciaban los sistemas políticos por su acercamiento histórico hacia la sociedad comunista, si el historicismo en fin, clasificaba a los pueblos por su posición relativa en una línea absoluta de tiempo prefijada, los nuevos biólogos incorporaron la selección natural a la idea de progreso como justificación de la supremacía de la raza más apta que, como no resulta difícil concluir, coincidía con la suya propia.

Como ya hicieron las distintas doctrinas políticas decimonónicas, que fueron incorporando cada una diferentes ideas de progreso tan dispares como el imperialismo conservador heredero del Antiguo Régimen, el liberalismo expansionista, las unidades políticas crecientes y agregadas del nacionalismo voluntarista, el progreso internacionalista marxista, o la evolución solidaria del anarco-comunismo, etc., cierto nacionalismo primordialista, heredero de Fichte y Herder, precisamente caracterizado por concebir los pueblos y naciones como entidades metafísicas que simplemente existen en la naturaleza a la que los humanos son adscritos de manera involuntaria, por raza, por historia, por lengua, por cultura, encontró su propia concepción de progreso.

El nacionalismo primordialista clásico, basado en el natural espíritu de las naciones, en la clasificación natural/cultural de los hombres en pueblos distintos, era estático porque las naciones como entidades metafísicas que no nacían, no morían, simplemente existían, por lo que la “ilusión del fin” –si se me permite este uso de la expresión de Bury– que proporcionaban las ideas de progreso les eran algo ajenas. Sin embargo, el biologismo nacido del evolucionismo y en especial la idea de adaptación del más fuerte al medio natural sacó el primordialismo del mundo del idealismo y proporcionó a este nacionalismo una última pieza para entablar diálogo con las demás posiciones ideológicas, convirtiéndose en un eje de los movimientos totalitarios fascistas.

Eso explica que desde el período de entreguerras, como bien sabemos, la combinación de un extremo nacionalismo primordialista, biológico e historicista y del organicismo antiliberal dizque socialista, que miraba al pasado mitológico con nostalgia, que entre otras características exaltaba la vida campesina y la tradición, fuera considerada por sus partidarios como una opción revolucionaria de futuro.

Por poner un ejemplo entre tantos, Mihail Manoilescu en *El partido único* (1938) argumentaba que la multiplicidad de partidos y de ideas había cumplido su misión histórica en el siglo XIX y que en los tiempos futuros la división de la nación en partidos era lo menos innecesaria y contraproducente. El estado unido e identificado punto por punto con la nación en la coherencia primordial evolucionaría como un organismo vivo, en un “proceso biológico del Estado nuevo”.

La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión radical tanto en la concepción de la autodeterminación como en las diferentes y contrapuestas ideas de progreso. Supuso entre otras cosas, el conflicto de diferentes conceptos de autodeterminación (recordemos la particular interpretación del mismo hecho por fascistas y nacionalsocialistas o los restos de la doctrina imperialista imperialismo), pero también el conflicto entre diferentes concepciones de progreso como fenómeno distinguible por la razón e manera apriorística (el evolucionismo biológico y la reificación del espíritu de la nación en un momento histórico concreto del fascismo, el progreso historicista comunista, la civilización imperialista, etc.).

El choque entre distintas concepciones y traslaciones políticas de autodeterminación y progreso no se dio sin oposición. Ya antes de la guerra, las ideas de progreso del optimismo totalitario eran criticadas por Walter Benjamin y otros, por no ser más probable que la decadencia. También los personalistas y los personalistas cristianos, como Emmanuel Mounier, se opusieron al individualismo capitalista y al organicismo totalitario de los comunismos y fascismos, abogando por una civilización personalista “una cuya estructura y espíritu esté dirigida hacia el desarrollo como personas de todos los individuos que la constituyen”.

Karl Popper, por ejemplo, que ya había advertido sobre los potenciales efectos devastadores de abogar por unas inexorables normas que regulan un destino histórico en *La miseria del historicismo* (1936), así como de los metodológicamente erróneo de pretender saber de antemano qué ha de acontecer, si ese futuro depende de avances tecnológicos que hoy no conocemos, haciendo en esta obra, junto con *Sociedad abierta y sus enemigos* (1945), un alegato fundamental sobre la necesidad de garantizar espacios abiertos de debate en democracia para ir encontrando las soluciones a los problemas que se vayan planteando mediante la aplicación de una ingeniería social gradual, desterrando la idea de que es posible conocer el conjunto del resultado del progreso y sus leyes *a priori* ante la inmensidad del futuro y la complejidad e impredecibilidad del ser humano, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Para Popper es más importante encontrar los medios y el espacio adecuado para el debate sobre las soluciones que la fórmula mágica de la solución de un futuro que desconocemos. Sin embargo, esto no significa que hayamos de desechar cualquier idea de progreso, pues es ésta la esperanza del mismo. La idea de progreso es la posibilidad misma de mejorar las instituciones sociales, no la forma que éstas adquirirán o una inexorable fuerza histórica. Los miembros de una sociedad abierta pueden tener una idea de progreso, pero esta puede o no darse, debe en fin, someterse al debate racional crítico de sus miembros, que irán progresivamente encontrando mejores soluciones parciales a

las situaciones que vayan enfrentando y mejores instituciones de gobierno.

La importancia de crear esos espacios de discusión, fue destacada también a su manera por los más destacados críticos de Popper, incluyendo Jürgen Habermas, con quien a pesar de sostener diferencias –famoso es el *Positivismusstreit*- comparte la encendida defensa de espacios de libre deliberación y crítica. Aunque ambos autores defiendan la práctica del criticismo y la crítica, en base a la libre expresión “ambos usan estrategias de argumentación significativamente diferentes”⁸⁶⁷.

El fin de la guerra supuso el declive de la autodeterminación entendida como principio absoluto nacionalista primordialista de los pueblos (esa coherencia perfecta entre territorio y características etnoculturales o raciales de los habitantes que se había extendido especialmente durante el período de entreguerras) y el progreso humano empezó a dar paso a una concepción de desarrollo (éste no inevitable sino sólo posible como fruto del tesón humano) que incorpora, como requisito fundamental, la igualdad de los pueblos, la reciprocidad, el sometimiento al Derecho Internacional para la convivencia y la paz.

§4.1.2 Antecedentes (ii): expansión de los significados de autodeterminación y desarrollo en el marco internacional de derechos humanos.

Tras la Segunda Guerra Mundial nacen las concepciones contemporáneas de autodeterminación y desarrollo, pero no adquieren inmediatamente su significado actual, que se ha ido perfilando hasta la actualidad, como hemos visto con cada concepto por separado.

Por un lado, la autodeterminación de los pueblos se consolidó en la Carta de las Naciones Unidas pero dejó de ser equivalente a la doctrina primordialista, conjugándose con la integridad de los estados para evitar el expansionismo agresivo o imperialista o la secesión unilateral de quienes quieran hacer coincidir perfectamente y por la fuerza fronteras políticas y gentes definidas etnocultural o racialmente, en una coherencia racista y nacionalista primordialista contraria a los derechos humanos.

Por otro lado, la doctrina del desarrollo se presentó como una alternativa al evolucionismo biologista de los totalitarismos nacionalistas y el afán civilizador como excusa del bien propio del imperialismo. Además, la inimaginable capacidad devastadora que las nuevas armas habían demostrado, de manera reseñable la bomba atómica, debilitaron la idea de que el progreso tecnológico y científico traerían por sólo mejoras al género humano. Se hacía necesario una nueva concepción de desarrollo en el marco internacional, junto con un Derecho que pusiera coto a la violencia unilateralista, basado

⁸⁶⁷ Stokes, G., “Popper and Habermas: a reappraisal”, *Politics and Policy Studies*, Faculty of Arts, Deakin University, Burwood, Australia, 2004. Trabajo presentado en la conferencia Philosophy: problems, aims, responsibilities en honor a Karl Popper (16-18 septiembre de 2004) disponible en <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/associates/miller/phpar/abstracts/contributed/stokes.pdf>

en la igualdad y reciprocidad de pueblos y la responsabilidad de los estados.

En un principio, como hemos visto, reservándose el “progreso” como concepto amplio de avance de la humanidad que englobaba desde la perspectiva de avance histórico comunista hasta el avance técnico y cultural, hasta las aspiraciones de la sociedad democrática liberal, el término “desarrollo” se empleó mayoritariamente como sinónimo de desarrollo económico.

Pero en el marco internacional de derechos humanos que fijaba la igualdad de todos los seres humanos y los pueblos, ambos conceptos, autodeterminación y desarrollo no permanecieron estáticos, tal y como hemos visto en capítulos anteriores, expandiendo su significado hasta lo que entendemos hoy.

Con la descolonización se fortaleció la idea de que autodeterminación no había de significar necesariamente el autogobierno de todo pueblo definido étnicamente *a priori*, en perfecta coherencia territorio/pueblo, sino la independencia de un pueblo o pueblos oprimidos por una potencia colonial, independientemente de la riqueza cultural del territorio oprimido. Por otro lado, la descolonización aportó la idea de que la autodeterminación no era una aspiración de contornos meramente políticos sino también económicos, la vertiente económica de la autodeterminación o autodeterminación económica, hasta el punto de que se consideraría “un elemento esencial del derecho de los pueblos a la autodeterminación es el derecho a perseguir su desarrollo económico”⁸⁶⁸.

La concepción amplia de autodeterminación política pero también económica favoreció la reflexión de la interdependencia a nivel internacional pero también intraestatal. La justicia distributiva en un marco liberal se configuró como uno de los problemas a resolver. La relación entre una sociedad abstractamente definida y su fin fueron puestos en cuestión, revisándose la felicidad eudaimónica o el progreso como fin único incontestable.

En los años setenta John Rawls, aducía en su *Teoría de la Justicia* que la principal virtud de una sociedad es la justicia, no la felicidad, tampoco el progreso o su capacidad para tal, a diferencia de tantos autores liberales anteriores, de manera notable los utilitaristas. Organizada justamente la sociedad –enfocándose en la justicia como marco, como proceso, manera independiente de la virtud o de los intereses contingentes de cada uno de sus ciudadanos tomados individualmente- no se ofrece la garantía directa de felicidad ni se produce per se un progreso en todos los ámbitos, –puede hacerlo seguramente pero no es el objeto de discusión-. Sin embargo, haciendo un paralelismo con la consideración moral kantiana de que el cumplimiento del deber, de la norma *a priori* nos hace dignos de la felicidad, la sociedad justa es el prerrequisito necesario ya sea para la felicidad individual o el progreso colectivo. Hemos de puntualizar que la felicidad es considerada, en su teoría general, en el contexto de bienes sociales primarios, como la satisfacción de un deseo racional individual que es base de las expectativas, pero admite que si definimos como expectativas el índice de bienes primarios que un hombre representativo puede razonablemente aspirar, al que podemos llegar mediante un acuerdo, no puede llevarse a

⁸⁶⁸ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit. p. 53

cabo “un acuerdo similar sobre cómo estimar la felicidad, definida, digamos, por el éxito de los hombres en ejecutar sus planes racionales, mucho menos en el valor intrínseco de esos planes”⁸⁶⁹.

Por otro lado, tal y como el término “autodeterminación” sufrió una expansión de significado incorporando el elemento o la vertiente económica, el término “desarrollo” pasó gradualmente de concebirse como mero crecimiento económico o industrialización, a adquirir su significado actual como concepto amplio de expansión de libertades junto con el crecimiento económico. Es en el marco del Derecho Internacional en el que nace el concepto actual desarrollo humano.

Es cierto, como hemos explicado en la primera parte, que ha sido un nacimiento gradual en el que durante mucho tiempo convivieron (y conviven todavía hoy) terminológicamente el *progreso social* y el *desarrollo económico*.

Ambos conceptos, sin embargo, han evolucionando. Por un lado abandonándose gradualmente el uso del término “progreso”, por estar ideológicamente cargado, particularmente de historicismo, y restringiéndose su uso generalmente al progreso científico o y tecnológico, y moral, o a su uso como pieza en sistemas teóricos.

Zygmunt Bauman, en su conocida *Modernidad líquida* (2000) reflexiona que: “(...) el “progreso” no es sinónimo de cualquier calidad de historia, sino de autoconfianza del presente. El más profundo, quizá el único significado del progreso, está hecho de dos creencias íntimamente interrelacionadas: - “el tiempo está de nuestra parte, y que somos nosotros los que “hacemos que las cosas ocurran”⁸⁷⁰.

Esta libertad de agencia a la que se refiere Bauman en relación al progreso, extendida en una línea temporal indefinida, por un lado difiere de otras concepciones de progreso – bien porque venga heterónomamente dado como en el Antiguo Régimen, bien porque sea inevitable históricamente frente a la responsabilidad propia-, pero por otro es además piedra angular del concepto de desarrollo, y de ahí la idea de que el desarrollo implique una libertad de agencia identificada con la autodeterminación.

Así pues, simultáneamente con el abandono progresivo del término progreso, hemos asistido a una gradual ampliación conceptual del contenido del “desarrollo humano”, englobando el desarrollo económico, social y cultural, como se describe en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros documentos internacionales. Esta ampliación y profundización del “desarrollo” adquirió una dimensión adicional con los estudios de Amartya Sen y otros respecto a la conexión efectiva entre la ampliación progresiva de libertades y capacidades y el incremento económico, consolidando la concepción del desarrollo como fenómeno complejo inseparable del principio democrático.

La incorporación por un lado de la vertiente económica al derecho de autodeterminación,

⁸⁶⁹ Rawls, J., *A Theory of Justice...*, op cit, p. 95

⁸⁷⁰ Bauman, Z., *Liquid Modernity*, Polity, Oxford, Cambridge, 2000, p. 132

y la vertiente social, cultural y política y la expansión de libertades al concepto de desarrollo, hizo a ambos conceptos empezaron interrelacionarse fuertemente mostrando aspectos en común (hasta el punto de que algunos autores defendieron la identidad entre ambos derechos). El desarrollo, incorporando esa libertad de agencia consustancial a la autodeterminación, se convirtió así en una suerte de noción de progreso en el marco de derechos humanos.

Ya en el art.1 común a ambos Pactos Internacionales se plasmaba la dimensión económica de la autodeterminación, entrando a formar parte del contenido básico del derecho. Joshua Castellino, hemos visto, aseguraba que “la autodeterminación garantizada a los pueblos no se detiene en la mera representación política. Incluye determinar su propia forma de desarrollo, así sea económica, social o cultural”. James Anaya, siguiendo las dos enunciados del art.1, por el aspecto *constitutivo* del derecho de autodeterminación de los pueblos entiende que “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” y por su aspecto *continuado* en cuanto proceso que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. Así considerado, el desarrollo parece una consecuencia del derecho de autodeterminación, y la autodeterminación un requisito de desarrollo.

Sin embargo, cuando a partir de finales de los setenta se empezó a hablar de un *derecho autónomo* al desarrollo de los pueblos, la aparentemente sencilla relación entre ambos conceptos se sometía silenciosamente a una fuerte revisión, tal vez mayor de la que pudieron prever, de la que aquí damos cuenta.

Esta revisión provenía del mismo hecho de la adjetivación como derechos. Mientras que algunos autores defendían el carácter autónomo de estos derechos, otros hablaban de distintos aspectos del mismo derecho y otros incluso de una identidad de derechos.

Así, las primeras críticas planteadas, que fueron incrementándose hasta la Declaración sobre el derecho al desarrollo, que finalmente se firmaría en 1986, era si no eran ambos muy parecidos o en esencia el mismo derecho, lo que fue recibido positivamente por autores como Abi-Saab⁸⁷¹, o muy negativamente por autores como Anthony Carty⁸⁷².

Efectivamente, Abi-Saab, partidario de la formulación legal de un derecho al desarrollo sugería dos maneras de considerar el derecho al desarrollo en relación a la autodeterminación. La primera, “considerar el derecho al desarrollo como un agregado de derechos

⁸⁷¹ Abi-Saab, G., “Technological Development and the Right to Development”, Sicilianos, L-A., Gavouneli, M., (eds.) *Scientific and Technological Developments and Human Rights*, Ant. N. Sakoulas Publishers, Athens, 1990, p- 266. Citado por Alexandra Xanthaki en “The Right to Self-Determination: Meaning and Scope”, op. cit., p. 32.

⁸⁷² Carty, A., “From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory”, *Third World Legal Studies*, vol. 3, article 5, 1984.

sociales, económicos y culturales (...) de todos los individuos que constituyen una colectividad (...)” y la segunda, “como un derecho colectivo (...) enfocarlo directamente desde una perspectiva colectiva (...) considerándolo ya una dimensión económica del derecho de autodeterminación, o alternatively como un derecho paralelo a la autodeterminación”⁸⁷³.

En otro extremo, como ejemplo de quien no ha hecho tal distinción entre los dos derechos para criticar ambos, tenemos el argumento aportado en 1984, por el profesor Anthony Carty: “es el fracaso de un concepto como el del derecho a la autodeterminación económica el que abre camino a la transformación social y económica, ya sea nacional o internacional, que ha llevado a los países en desarrollo como Argelia a deslizarse casi imperceptiblemente de este discurso jurídico al sin duda absolutamente vago lenguaje del derecho al desarrollo”⁸⁷⁴.

Por otro lado, si desde el estudio del derecho al desarrollo se ha entendido la identidad o cercana interacción con el derecho de autodeterminación en general o con la vertiente económica del derecho de autodeterminación, también desde el estudio del derecho de autodeterminación se han llegado a contenidos muy cercanos al derecho al desarrollo.

En este sentido, el mencionado Aurelio Cristescu, al analizar el derecho de autodeterminación en relación con el desarrollo social, al hilo de la Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo (Resolución de la Asamblea General 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de 1969, recordaba que la Declaración recogía que: “el hombre puede lograr la realización completa de sus aspiraciones sólo dentro de un orden social justo y que, consecuentemente, es de cardinal importancia acelerar el progreso social y económico en todas partes, contribuyendo así a la paz internacional y la seguridad; y esa paz internacional y seguridad por un lado, y el progreso social y económico, por otro lado, son estrechamente interdependientes y se influyen mutuamente. Enfatiza la interdependencia del desarrollo económico y social en un proceso más amplio de crecimiento y cambio, así como la importancia de una estrategia de desarrollo integrado que tiene en cuenta a todas las fases de sus aspectos sociales. Hace un llamamiento a los Estados Miembros a promover el desarrollo social en todo el mundo, y en particular a ayudar a los países en desarrollo para acelerar su crecimiento económico, y subraya que la tarea primordial de todos los Estados y organizaciones internacionales es eliminar de la vida de la sociedad todos los males y los obstáculos para el progreso social, en particular males tales como la desigualdad, la explotación, la guerra, el colonialismo y el racismo. La Declaración proclama los principios, objetivos y medios y métodos de progreso social y el desarrollo”⁸⁷⁵.

La distinción entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación, se plasmó finalmente con la adopción de una Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 que *de facto* reconocía la autonomía conceptual del derecho al desarrollo, aunque en su art. 1 recalca la íntima relación con el derecho de autodeterminación.

La relación entre ambos como dos derechos autónomos, especialmente entre el derecho al desarrollo con la vertiente económica del de autodeterminación, ha sido tratado con cierta recurrencia, pero no en demasiada profundidad. Podemos mencionar que la profesora

⁸⁷³ Abi-Saab, G., “The legal formulation of a right to development”, *The Right to Development at the International Level* (ver nota 16), p. 164. En Sengupta, Arjun K. “Conceptualizing the Right to Development for the Twenty-first Century” en *Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development* / United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner United Nations, 2013., pp 76-77

⁸⁷⁵ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 15 y ss

Alexandra Xanthaki, en referencia a la vertiente económica del derecho de autodeterminación, que el contenido del derecho mismo debería ser sometido al principio de subsidiariedad respecto a otros derechos más apropiados, al “reflexionar sobre su significado, es importante recordar que la autodeterminación es a la vez un principio y un derecho en el Derecho Internacional. Como principio, atraviesa varios derechos, en cuanto derecho, gira esencialmente en torno al poder político, la participación y el control (...). La alternativa a la autodeterminación económica, a saber, el derecho al desarrollo, se enfrenta a muchas de las mismas críticas que la autodeterminación. Sin embargo, se sugiere que es más adecuado para dar cabida a las reivindicaciones relacionadas con los recursos naturales”.

Dicha autora, partidaria de un enfoque alternativo flexible entre el enfoque minimalista o restrictivo y el enfoque maximalista del contenido del derecho de autodeterminación, argumenta la distinción entre ambos derechos de la siguiente manera: “contrariamente a la autodeterminación, las reivindicaciones de desarrollo económico y la distribución de beneficios están en el corazón del derecho al desarrollo. En esencia, la validez de las reivindicaciones sigue siendo la misma, o incluso se ve fortalecida; *es su base la que cambia*”⁸⁷⁶.

El ascenso de la concepción del desarrollo humano, económico, social y cultural, en un marco internacional de derechos humanos puso la prosecución de un fin último del ser humano en su dimensión social e individual en relación con la igualdad de pueblos y la igualdad de la dignidad de personas, así como sus derechos y libertades individuales, promoviendo el reconocimiento mutuo de la misma dignidad y del mismo fin universal. En ese sentido se pone en relación también, naturalmente, con el derecho de autodeterminación reconocido en los documentos internacionales ya mencionados.

En fin, en las últimas décadas hemos asistido, en primer lugar a la progresiva doble incorporación conceptual o teórica de la autodeterminación y del desarrollo a un marco de derechos humanos –es decir, que le son aplicables un enfoque de derechos humanos o que encuentra el límite de su aplicación en el cumplimiento de derechos humanos-, para más recientemente llegar a reconocer el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo como dos derechos humanos autónomos dentro de ese marco.

Al mismo tiempo, además, se ha ido produciendo una creciente expansión del estudio de los significados y contenidos de la autodeterminación y de desarrollo, incluyendo, como hemos estudiado anteriormente por separado, las distintas proposiciones que desde la academia y en documentos internacionales se han hecho de reconocer ambos, y sin prejuicio de otras consideraciones, como derechos humanos separados e independientes. Así pues, podemos hablar de una relación entre autodeterminación y desarrollo en un marco de derechos humanos, pero también de una relación entre ellos en cuanto derechos humanos.

En un marco de derechos humanos, cualquier interpretación o realización del desarrollo y la autodeterminación colectiva *proprios* y, por tanto, cualquier relación entre ambos conceptos, no ha de legitimarse ni moral ni jurídicamente, si se ignoran o vulneran los

⁸⁷⁶ Xanthaki, A., “The Right to Self-Determination...”, op. cit.

derechos humanos, a diferencia de marcos históricos anteriores en los que el desarrollo propio o la autodeterminación propia se legitimaba a pesar del desarrollo o la autodeterminación ajena. Lo impide la responsabilidad de los estados derivada del deber de protección de la dignidad humana como bien universal.

La consideración de ambos conceptos como principios de Derecho Internacional y/o derechos humanos, esto es, como dos derechos de igual categoría, independientes pero de realización interdependiente, universales, introduce además, la reciprocidad de su realización y la necesaria consideración del otro, como argumentaré en las próximas páginas, descartando forzosamente la unilateralidad y permitiéndonos aplicar los adjetivos propios de los derechos humanos.

La posibilidad de estudiar la relación de los dos conceptos, desarrollo y autodeterminación, en sus distintas acepciones actuales, y de la relación de ambos en cuanto dos derechos humanos independientes en ese marco de derechos humanos, se comenzó a abrir con los debates y aprobación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, pero ha sido necesario, para poder reflexionar desde el punto de vista que aquí hacemos, sentar fundamentos de relación entre derechos humanos como los indicados en Viena en 1993, así como incorporar el estudio del contenido mismo del desarrollo (como harían Sen y otros) y especialmente del derecho al desarrollo, como los llevados a cabo por Mark Stephens o el mencionado Arjun Sengupta entre los años 2000 y 2010.

La ampliación de los conceptos de desarrollo y autodeterminación, junto con la consideración de ambos como derechos humanos autónomos, el posterior estudio de su contenido y la identificación de las posibles consecuencias de estas evoluciones, ha hecho necesario estudiar la interrelación entre ambos derechos y sus posibles efectos, como veremos a continuación.

§4.2 Fundamentos y premisas para el estudio de la relación entre dos derechos humanos

§4.2.1 Dos derechos humanos distinguibles relacionados entre sí

En los capítulos anteriores he analizado los distintos argumentos presentados por diversos autores para considerar tanto el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación como dos derechos humanos distinguibles y diferenciados entre sí, independientemente de su posible consideración como principios. Sólo así podemos hablar del estudio relevante de tal relación, pues si no habríamos de detenernos aquí, afirmando que no son distinguibles y la relación es de perfecta identidad.

Refuerza nuestra posición de distinguibilidad entre ambos derechos las definiciones que hemos dado de ambos derechos anteriormente (una para el derecho al desarrollo y varias para el derecho de autodeterminación) a pesar de que en el lenguaje político se utilicen a veces de manera intercambiable, especialmente en lo referente a la vertiente económica

del derecho de autodeterminación, como muy agudamente ha apreciado la profesora Alexandra Xanthaki.

Y es que la especial naturaleza de estos dos derechos, debida a que (i) ambos han sido descritos como derechos pero también principios de DI, (ii) ambos han sido descritos como procesos y (iii) ambos han sido descritos como derechos holísticos y primordiales, que contienen en sí o son requisitos de, otros derechos, nos invita a profundizar un poco más en la relación para no entrar en contradicción con las definiciones que hemos dado anteriormente. Cuando considerados como derechos humanos, se ha argumentado mayoritariamente a favor de considerar que (iv) ambos gozan de una doble dimensión colectiva e individual. La relación que analizaremos a continuación es pues, la relación existente entre autodeterminación y desarrollo *en cuanto derechos humanos*, no desde cualquier otro punto de vista.

Si aceptamos este punto de partida, si el derecho a la autodeterminación puede considerarse un derecho humano y lo mismo sucede con el derecho al desarrollo, y ambos tienen las características generales de todos los derechos humanos, hemos de llegar a la pronta conclusión de que la relación entre ambos conceptos debe ser definido como la relación existente entre dos derechos humanos considerados en abstracto. Es decir, la consideración del desarrollo y de la autodeterminación como derechos humanos autónomos tienen como consecuencia lógica que les apliquemos las características adjetivas que aplicamos a todos los derechos humanos cuando considerados en abstracto.

Una vez identificada la forma de relación en abstracto en cuanto relación entre dos derechos, hemos necesariamente de matizar en función del contenido material y específico de ambos derechos, tomando como referencia los contenidos y definiciones que hemos ido desgranando.

Concluyamos pues con una primera premisa: *si son dos derechos humanos, sus características adjetivas son aquellas de los derechos humanos y la relación entre ellos, si existe, habrá de respetar la relación entre dos derechos humanos tomados en abstracto.*

§4.2.2 Características básicas de la relación entre los derechos en cuanto derechos humanos: universalidad, indivisibilidad e interdependencia

Así pues, ¿cómo se describe la relación entre dos derechos humanos? Si nos referimos a la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, el art. 5 de dicha Declaración estipula que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

En buena lógica, la relación entre la autodeterminación y el desarrollo, además de sus

conocidas características de inalienabilidad e inviolabilidad, si los hemos de considerar derechos humanos autónomos, ambos deben, al menos, ser i) universales, ii) indivisibles, iii) interdependientes y deben relacionados entre sí.

Sobre este último inciso, antes de analizar estas características descritas, si defendemos que estamos ante dos derechos humanos separados y respetamos los criterios la Declaración de Viena, podemos concluir con la primera parte de una segunda premisa: éstos “deben estar relacionados entre sí, es decir, *la relación que estudiamos debe existir*, que es tanto como admitir su existencia al menos desde el punto de vista especulativo.

Por lo demás, si ambos son derechos humanos, han de cumplir con las siguientes características:

- Ambos derechos son **universales**, aplicables, por tanto, a todos los sujetos identificados como titulares de él. Si consideramos que ambos son colectivos e individuales, concluimos que se extiende la relación a *todos los pueblos y a todas las personas*, legitimado por ese doble argumento natural –justificación de la igual dignidad universal- y positivo –en virtud de la voluntad expresada en forma de acuerdos internacionales por la gran mayoría de los estados en representación de sus ciudadanos- que comparten con todos los demás derechos humanos. Así pues, no sólo son derechos de quienes los invocan por creer que están siendo negativamente afectados. El reconocimiento de la universalidad, junto con la inviolabilidad e inalienabilidad, tiene como consecuencia que la realización de los derechos por un sujeto no debe conllevar la afectación negativa ni de uno de los derechos ni de los mismos derechos de otros sujetos.

La universalidad alcanza a todos los pueblos y todas personas porque ambos derechos comparten los mismos sujetos universales. La universalidad es geográfica y temporal, por lo que ambos derechos se reconocen a futuros sujetos, lo que tiene importancia cuando consideramos la naturaleza de proceso de los derechos.

La universalidad está reforzada por la doble dimensión colectiva e individual de los sujetos de ambos derechos. Esto tiene diversas consecuencias; por ejemplo, no es necesario estar totalmente de acuerdo en la definición de pueblo (civil, etnocultural, etc.) o a qué pueblo se aplica la definición (podemos diferir en el ideal imaginario que son los contornos de un pueblo) para concluir que la dimensión individual debe realizarse también, es decir, que no se puede aplicar una dimensión estrictamente colectiva de los derechos a pesar de la dimensión individual de la autodeterminación como libertad de agencia individual, ni al contrario, interpretar que la dimensión individual de cualquiera de los dos derechos pueda obscurecer o vulnerar la realización colectiva.

Este punto de vista está siendo progresivamente robustecido también por la dirección tomada en la resolución de conflictos relacionados de alguna manera con ciertas interpretaciones del derecho de autodeterminación, como he demostrado en páginas anteriores para el caso de la desintegración de Yugoslavia: desde una concepción colectivista de autodeterminación externa, la del Plan de Lord Carrington, hasta la toma en consideración de la remoción de “los obstáculos en la vida diaria de la gente” de los

Acuerdos de Bruselas sobre Kosovo, pasando por fases intermedias, como el enfoque que tomaron los Acuerdos de Sucesión de 2001.

Estamos asistiendo, a mi parecer, a un incremento de la interpretación del derecho de autodeterminación en un marco de derechos humanos que tiene en cuenta gradualmente el derecho al desarrollo, aunque no con estas palabras formulado. Es también la dirección que parece estar tomando el desarrollo de la normativa sobre sucesión de estados y la posición de la doctrina mayoritaria favorable a la interpretación dentro del marco internacional de derechos humanos.

La universalidad de ambos derechos repercute en la universalidad de la relación misma, en cuanto que la descripción de la misma ha de poderse aplicar a cualquier caso.

- Asimismo, ambos derechos son **indivisibles**, es decir, que están integrados y la violación de uno de ellos vulnera al otro e **interdependientes**, lo significa que la mejora de la realización de un derecho facilita la realización de otro, y la vulneración de un derecho afecta a los demás, el nivel de realización de un derecho depende del otro, es decir, uno está en función del otro.

Estas dos características han sido proclamadas en numerosas ocasiones, entre las que podemos resaltar aquí el art.6 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 o la Declaración de Viena de 1993.

También considera que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas “Todos los derechos humanos son indivisibles, ya sean derechos civiles o políticos (...); económicos, sociales y culturales, (...) o derechos colectivos, tales como **el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación, son indivisibles, interrelacionados e interdependientes**. La mejora de un derecho facilita el avance de los otros. Igualmente, la privación de un derecho afecta de manera adversa a los otros”⁸⁷⁷.

Aceptar la interdependencia significa que no sólo el derecho al desarrollo depende del cumplimiento del derecho de autodeterminación, tal y como una primera y rápida lectura de los textos internacionales (especialmente art.1 de los Pactos) haría suponer, sino que reconocemos la función recíproca.

Por lo tanto, no sólo reconocemos que el incremento del derecho al desarrollo está en función del incremento del cumplimiento del derecho de autodeterminación sino que el derecho de autodeterminación está en función el incremento del derecho de desarrollo.

Consiguientemente, no sólo reconocemos que $d(Dr) = f d(A)$ siendo $d(Dr)$ el cumplimiento progresivo creciente del derecho al desarrollo basado en derechos \neq cumplimiento del derecho autodeterminación en todas sus facetas $d(A)$, sino que $d(A) = f^{-1} d(D)$.

⁸⁷⁷ Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
<http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>
© Isidro García Mingo

$$d(D) = f d(A) \Leftrightarrow d(A) = f^{-1} d(D)$$

El incremento del derecho al desarrollo está en función del incremento del derecho de autodeterminación, tal y como se defiende cuando se interpreta restrictivamente la autodeterminación como requisito de desarrollo, pero también el incremento del derecho de autodeterminación está en función del incremento del derecho al desarrollo.

Esta idea tan sencilla, que cada derecho está en función del otro, plantea una serie de interrogantes, básicamente porque condiciona los contenidos a que la relación pueda darse. Al definir la autodeterminación y el desarrollo, ambos, como derechos humanos, no se niega la condicionalidad de cumplir con el derecho de autodeterminación para cumplir con el derecho al desarrollo, sino que se subraya que la condicionalidad se presenta también inversamente, descartando, por tanto aquellas interpretaciones de ambos derechos que no pueden cumplir con la relación de reciprocidad.

Aceptar que un derecho está en función del otro implica descartar, en mi opinión, las interpretaciones restrictivas o minimalistas del derecho de autodeterminación como simple acto de definición de un sujeto político sin importar las consecuencias para los derechos de las personas, especialmente en lo que se refiere a la autodeterminación externa: la creación de fronteras internacionales no conlleva necesariamente un mayor desarrollo (aunque pueda darse), máxime si tenemos en cuenta la histórica fuerza constante hacia la expansión de los mercados, como tampoco implica necesariamente un menor desarrollo. También implica descartar concepciones del derecho al desarrollo que no respeten el derecho de autodeterminación.

Abrimos así las posibilidades interpretativas pro-bienestar colectivo e individual. La realización progresiva del derecho de autodeterminación puede interpretarse como incremento de las múltiples capacidades incluida la de crear múltiples sujetos (o como diría Held, *multiple sites of power*) e identidades, transversales, pero también, además, podemos argumentar, a mayor realización del derecho al desarrollo, más capacidad de tomar decisiones autónomas de los sujetos dados, incluyendo colectivos e individuales, pudiéndose generar o no distintos sujetos internacionales. Esto es perfectamente compatible con todas las definiciones dadas de ambos derechos descritas con anterioridad.

En fin, al considerar ambos *derechos* como derechos humanos, bien se ve que no se puede interpretar la autodeterminación con el prisma del nacionalismo clásico ni el desarrollo como concepto dogmático y unívoco típico de concepciones historicistas de progreso: la autodeterminación debe coadyuvar al desarrollo y el desarrollo a la autodeterminación, de todos los sujetos implicados en los procesos.

Así pues, concluyamos, con la reafirmación de la premisa: si ambos son derechos humanos, existe una relación entre sí caracterizada por la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de ambos derechos, en una función recíproca.

Debido a que no hablamos de autodeterminación en general sino de dos derechos humanos, independientemente de su contenido, como tercera premisa relacionada: *si son dos derechos humanos, ambos derechos están relacionados entre sí, y con todo el conjunto de derechos humanos, que deben igualmente respetarse.*

§4.2.3 Límites y delimitación de dos derechos humanos

Si ambos derechos en relación son derechos humanos, podemos plantearnos cuáles son sus límites y, en particular, su límite en cuanto que están dentro de un marco de derechos humanos y si están limitados entre sí.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su art. 29.2 que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Adicionalmente, en el art. 29.3 se prevé que “Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

De manera complementaria, a modo de “límite de los límites”, el art. 30 puntualiza que “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”, fortaleciendo así el concepto de inalienabilidad e inviolabilidad de los derechos humanos, y favoreciendo la interpretación que siempre y en todo caso, debe respetar los “contenidos esenciales” de los derechos.

La doctrina ha distinguido en general entre límites internos y externos de los derechos humanos y fundamentales. Los límites externos, tal y como nos recuerda Ignacio Villaverde Menéndez, refiriéndose a los derechos fundamentales, están definidos por su carácter externo, su proyección sobre el objeto del derecho fundamental y la habilitación constitucional para limitar otorgada al poder público. Por otro lado, junto con estos límites que son externos, contingentes y constitutivos, que se han descrito unos límites internos definidos por la delimitación de los derechos humanos. El establecimiento de límites internos se da cuando se delimita un derecho, esto es, cuando se define, se describe el contenido, tal y como hemos hecho en la primera parte con el derecho al desarrollo y en la segunda parte con el derecho de autodeterminación. Los límites externos se aplican, por tanto, una vez se han delimitado los derechos. Aunque no se establezcan expresamente límites externos o en sentido estricto a un derecho humano, no significa que no tenga límites en absoluto, como contempla la Declaración Universal. De la delimitación de los derechos se derivan los denominados límites internos “lógicos” o “inmanentes”, que nacen precisamente de la coexistencia de normas de igual rango y de sujetos que tienen igual dignidad. El principio de unidad y esa igualdad de rango jurídico de normas y sujetos nos impone una interpretación adecuada de los derechos que permita la realización de todos ellos.

Por ello, autores como el Villaverde Menéndez consideran que cuando nos encontramos ante un posible conflicto entre dos derechos dados, debemos tener en cuenta que “(...) esta forma de expresarse es engañosa ya que hace pensar que una *colisión entre derechos* cuando la colisión es entre el derecho fundamental y sus límites. Y, para ser mas exactos, ni siquiera en puridad se puede hablar de conflictos o colisiones, porque los límites de un derecho fundamental no colisionan con él, sino que justamente sirven para solventar sus posibles colisiones con otros derechos, bienes e intereses”⁸⁷⁸.

Explica nuestro autor que sin bien es cierto que a menudo unas expectativas de conducta amparadas en un derecho sólo pueden ser realizadas a expensas de otra expectativa de conducta incompatible, es sólo falsa apariencia el conflicto de los dos derechos. Recuerda que en dos técnicas se han utilizado para resolver jurídicamente estas conflictivas situaciones: la *ponderación de bienes* –que examina en cada caso concreto qué bien protegido merece una protección preferente- y la *delimitación de derechos en presencia*, técnica a favor de la cual se va inclinando nuestro TC desde finales de los noventa.

Respecto al derecho de autodeterminación, Robert McCorquodale, que defiende el carácter de derecho humano del derecho de autodeterminación, ha estudiado las conclusiones necesarias de incluir este derecho dentro del marco internacional de derechos humanos⁸⁷⁹.

Según McCorquodale las normas generales aplicables en este marco son:

- Los derechos humanos son interpretados en el contexto de los estándares actuales.
- Cualquier limitación en el ejercicio de los derechos humanos son:
 - a) limitaciones derivadas de proteger otros derechos y
 - b) limitaciones de proteger los intereses generales de la sociedad
- Las limitaciones de los derechos humanos son considerados de manera restrictiva y considerando las circunstancias de la sociedad relevante.
- Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben poder reclamar (en sentido amplio).

Según McCorquodale, al incorporar el derecho de autodeterminación en este marco general de derechos humanos no es posible concebir el derecho de autodeterminación de una manera absoluta, como sí lo era en las interpretaciones anteriores a la aceptación del marco de derechos humanos.

Fuera del marco de derechos humanos, tanto con el enfoque “nacional” o “territorial” bastaba definir el sujeto (nación y/o territorio) para aplicar el derecho. La naturaleza del derecho impone limitaciones porque afecta a la configuración radical del estado. Por ejemplo, el estado no puede ser opresivo, no puede imponer la voluntad identitaria de una mayoría pero puede limitar el derecho en beneficio del conjunto de la sociedad en su

⁸⁷⁸ Villaverde Menéndez, I., “Los límites a los derechos fundamentales” en VV.AA., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Tecnos, Madrid, 2004, p. 141

⁸⁷⁹ McCorquodale, R., “Self-determination...”, op. cit., pp. 857–885

territorio. Se trata de intentar “proteger todos los derechos y no sólo el derecho de autodeterminación de manera aislada. Los derechos pueden ser ponderados y se puede encontrar una solución que proteja ambos derechos lo más posible en las circunstancias particulares”.

Las limitaciones de proteger otros derechos y el derecho de autodeterminación de otros se completa con las limitaciones adicionales de proteger los intereses generales de la sociedad, destacando:

- (i) la integridad territorial de los estados,
- (ii) el respeto de las antiguas fronteras administrativas coloniales (principio *uti possidetis juris*) y
- (iii) el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que, por otro lado, funcionaría, además de como limitación, como resultado, pues al aplicar el marco de derechos humanos a las disputas, éstas serían solventadas de manera favorable al mantenimiento de la paz.

Ahora bien, estos tres límites estarían a su vez limitados, para no pervertir su naturaleza. McCorquodale favorece que estos límites sean solamente aplicables cuando: a) el derecho de autodeterminación interna sea respetado y b) exista una necesidad auténtica, justificada y proporcional de limitación en la sociedad implicada.

La aceptación de las obligaciones derivadas del derecho al desarrollo supone un paso más en la delimitación, no de la limitación, del derecho de autodeterminación. Podríamos incluso aventurarnos a distinguir diferentes pasos en la evolución teórica de la delimitación progresiva del derecho de autodeterminación (especialmente en su vertiente externa) a partir del derecho al desarrollo:

- 1) Una concepción de autodeterminación ilimitada (como la de los movimientos totalitarios nacionalistas del período de entreguerras): el derecho de autodeterminación de un pueblo puede realizarse a pesar del derecho de los demás.
- 2) Autodeterminación delimitada por los principios internacionales de Derecho Internacional y propósitos de las Naciones Unidas.
- 3) Autodeterminación delimitada por el respeto de los derechos humanos (como defiende McCorquodale).
- 4) Autodeterminación delimitada por las obligaciones de respeto del derecho al desarrollo durante todo el proceso, ya sea autodeterminación constitutiva o continuada, de todos los pueblos (variante que proponemos, que es compatible con la posición de McCorquodale).

Sin adelantarnos, en la cuestión que nos ocupa, hemos procedido en primer lugar a *delimitar* los dos derechos en cuestión, definiendo su contorno o contornos aportando las definiciones del contenido esencial de ambos, para después explorar los demás límites.

Concluamos que respecto a la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo está delimitada por los contenidos y definiciones estudiados y que además hemos de contar con los siguientes límites:

- El cumplimiento de cada derecho no puede hacerse a expensas del mismo derecho de los demás, y por tanto,
- el cumplimiento del resultado de la relación entre derechos no puede llevarse a cabo a expensas del resultado de la relación entre derechos de los demás,
- un derecho no puede cumplirse a expensas del otro derecho del mismo sujeto,
- un derecho no puede cumplirse a expensas del otro derecho de otro sujeto, y viceversa, si existe una relación directa entre la realización de uno y la vulneración de otro.

Y por analogía del art.29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

- Se reconocen límites externos establecidos por la ley a los derechos humanos y por tanto, también a los derechos humanos de autodeterminación y desarrollo, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los demás derechos y libertades de todos, siempre y cuando hablemos de una sociedad democrática. Es decir, se reconoce la modulación estatal de ambos derechos a nivel interno y, por tanto, las diversas formas de realizarlos.

- El cumplimiento de ambos derechos están sometidos al DI y no pueden interpretarse de manera contraria a los principios y propósitos de las Naciones Unidas. No puede ser contrarias a:

- i) los *principios* de las Naciones Unidas, desarrollados en la Declaración de Principios de Derecho Internacional de 1970, Resolución 2625 (XXV) de respetar el derecho de autodeterminación y la igualdad de los pueblos, pero también la igualdad soberana de los pueblos, la abstención de uso de las amenazas o la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política, la obligación de cooperación entre estados, la obligación de no intervención ilegítima, el arreglo de controversias por medios pacíficos y la buena fe
- ii) los *propósitos*, establecidos en la Carta, de mantenimiento de la paz y las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones.

No serían aceptables restricciones más allá de los límites expuestos en el marco del Derecho Internacional.

Esta reflexión es aplicable a la formulación que realicemos sobre la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación. Podemos resumir esto en la premisa: *la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo debe ser compatible con la delimitación de cada uno de los derechos dada por su definición o definiciones, pero no más restrictiva, y de manera compatible con los límites derivados de su encuadre en un marco de derechos humanos.*

§4.2.4 Relación entre dos derechos en cuanto procesos

La formulación de la relación entre los derechos humanos de autodeterminación y

desarrollo debe tener en cuenta asimismo, que ambos derechos han sido ampliamente considerados también como procesos.

En el caso del derecho al desarrollo, el experto independiente Sengupta ha explicado que el derecho al desarrollo “es un derecho a un *proceso particular* de desarrollo” un proceso orientado a llevar “el incremento del bienestar de la población entera. El concepto de bienestar en este contexto se extiende mucho más allá de las nociones convencionales de crecimiento económico para incluir la ampliación de las oportunidades y capacidades para disfrutar de esas oportunidades, medidos en los indicadores de desarrollo social y humano, que a su vez se expanden las libertades sustantivas”⁸⁸⁰.

El cumplimiento del derecho al desarrollo en “implica un proceso con equidad y justicia” y, por tanto, “el proceso de desarrollo debe ser participativo. Las decisiones deben ser tomadas con la implicación de los beneficiarios”. Así pues, en cuanto proceso, el derecho al desarrollo no puede ser limitado a un mero crecimiento económico y, por tanto, no puede ser distinguido del proceso de participación democrática en sentido amplio. Para Sengupta la consideración del derecho al desarrollo como un proceso continuado e integrado de realización de todos los derechos humanos tiene un efecto directo en el enfoque de las políticas públicas nacionales e internacionales. Los programas y políticas orientados a incrementar el desarrollo han de ser asimismo integrados y comprehensivos. El incremento de la eficiencia de realización de un derecho puede liberar recursos para cumplir mejor o incrementar la realización de otro derecho. Asimismo, el incremento progresivo del desarrollo requiere de (i) tecnología, (ii) recursos financieros disponibles (iii) e institucionalidad como medios para alcanzar el fin de realizar todos los derechos humanos. Estos tres elementos son también fines de programas y políticas de desarrollo, de manera que fines y medios se integran y refuerzan mutuamente⁸⁸¹.

Así pues la realización del derecho al desarrollo como proceso supone un incremento progresivo de las capacidades y libertades, también individuales, y de los recursos disponibles, de manera que se incrementa progresivamente la capacidad de los individuos de satisfacer sus objetivos vitales conforme a sus propio sentido o fin, enlazando directamente con la autodeterminación individual, en cuanto fijación propia de los límites regulativos que no son sólo materiales sino también jurídicos.

En el caso del derecho de autodeterminación, también se ha resaltado su aspecto de proceso. La distinción de James Anaya entre las vertientes constitutiva –el derecho a establecer libremente su condición política-, y continuada (*ongoing self determination*), de la autodeterminación, que haya su fundamentación en el derecho de los pueblos a y proveer a su desarrollo económico, social y cultural y con ese fin, a disponer libremente de sus recursos y riquezas naturales, recoge esta concepción procesal. Ambos aspectos están íntimamente relacionados, pues para este autor la tendencia integradora de la globalización es innegable. Por eso, incluso aunque se den procesos particulares de autodeterminación constitutiva externa como secesión (no tanto como fusión o integración) esto no puede ser considerado sino un paso más en proceso continuado y progresivo de interconexión global⁸⁸². Para Anaya “en un mundo de esfera de autoridad

⁸⁸⁰ Sengupta Arjun K. “Conceptualizing the right to development...”, op. cit., cap 4.

⁸⁸¹ Sengupta Arjun K. “Conceptualizing the right to development...”, op. cit., cap 4.

⁸⁸² Anaya, J.S., “A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination”,

interconectadas y solapadas la autodeterminación puede ser contemplada como empoderadora de los seres humanos con relación a todos los niveles de gobernanza, desde el más local al más amplio”⁸⁸³. Así, la realización del derecho de autodeterminación respecto a ese proceso global de interconexión que incorpora todos los procesos particulares de realización del aspecto constitutivo requiere que el orden de gobierno institucional sea uno “en el que los individuos y los grupos vivan y se desarrollen libremente de manera continua”⁸⁸⁴.

Por tanto, aunque el derecho de autodeterminación se considere una “condición esencial” para el cumplimiento de todos los demás derechos humanos (pero no exclusivamente como secesión), pues no pueden ser realizados mientras dura la opresión, no debe entenderse como una condición en un momento aislado históricamente, sino una condición dinámica en su dimensión temporal. La condición dinámica no puede ser expresada sino a través de los procesos participativos propios del sistema democrático, interpretado de manera respetuosa con la organización interna y la soberanía de los estados.

Así pues, la relación entre los dos derechos analizados es también la relación entre dos procesos. Por tanto, no es suficiente realizar una suerte de *análisis estático* de niveles de realización en solo momento particular en una línea temporal para una sociedad determinada, herramienta que podríamos utilizar para determinar simplemente una posición o condiciones relativas de justicia comparativa entre niveles de cumplimiento de derechos y disponibilidad y distribución de recursos en un momento determinado, entre distintas unidades políticas o colectivos sociales, sin hacer referencia al proceso de distribución a través del cual se ha alcanzado esa redistribución justa o injusta.

Es necesario que la interpretación de la relación pueda ser compatible con un *análisis dinámico* de la misma extendida en el tiempo. El análisis de la relación tiene que tener en cuenta el impacto en la participación ciudadana y el conjunto de los derechos humanos, cuya realización ha de ser siempre expansiva, y conforme al principio democrático y de manera continuada en el tiempo.

§4.2.5 Relación entre dos derechos multidimensionales, proyectados en procesos expansivos como fines y causas

Finalmente, al analizar la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo como derechos, hemos de contar con la expansión de significado que han experimentado tanto el concepto de autodeterminación como el de desarrollo, junto con la ampliación reciente de significado que ha supuesto además, a mi entender, considerarlos derechos humanos, como hemos subrayado al llamar la atención sobre el carácter recíproco del cumplimiento entre dos derechos humanos, pudiendo considerar uno (el desarrollo) en condición de otro (la autodeterminación) pero éste en su conformación dependiente de la definición del primero.

Transnational Law & Contemporary problems, n. 3, 1993, p. 143

⁸⁸³ Anaya, J.S., “A Contemporary Definition...”, op. cit., p. 156

⁸⁸⁴ Anaya, J.S., “A Contemporary Definition...”, op. cit., p. 157

La multidimensionalidad de ambos derechos se ha manifestado al menos en 1) la multiplicidad de sujetos titulares, 2) la multiplicidad de contenidos (resultando en diferentes definiciones unos excluyentes pero otras perfectamente compatibles) y 3) la doble naturaleza fin-medio de ambos derechos en cuanto procesos:

- *Multiplicidad de sujetos titulares.* Hemos descrito que ambos derechos cuentan entre sus titulares a pueblos, definidos desde distintos punto de vista. Como explica James Anaya “cualquier modelo de autodeterminación que no tiene en cuenta el más amplio contexto de patrones múltiples de asociación e interdependencia humana es en el mejor de los casos incompleta (y muy probablemente distorsionada)”. Por eso, en un marco de derechos humanos la norma internacional de autodeterminación debe responder a múltiples y solapadas esferas de asociación humana y orden político que de hecho existen⁸⁸⁵. De parecida manera, podemos sostener que el derecho al desarrollo de los pueblos, en cuanto que comparte sujeto, ha de aplicarse a esos patrones múltiples de asociación e interdependencia humana.

Asimismo, mientras que en el caso del derecho de autodeterminación se ha subrayado que es un derecho de pueblos, no de gobiernos o que es un derecho de pueblos y no de individuos, en general su fundamento no ha podido ser separado del reconocimiento de una dimensión individual de la autodeterminación, para la libre elección de la condición política. En el caso del derecho al desarrollo el nivel individual, junto con el colectivo, está expresamente reconocido.

- *Multidimensionalidad de contenido.* Ambos derechos han sido definidos como una suerte de “derecho de derechos”. En el caso del derecho al desarrollo, ha sido definido como agregado de derechos individuales y colectivos y expansión económica. En el caso del derecho de autodeterminación, como condición esencial para todos los derechos, de manera que el derecho al desarrollo sería un elemento del derecho de autodeterminación. ¿Es esto contradictorio? Empezamos a vislumbrar la respuesta cuando comprobamos que, en realidad, la autodeterminación como *condición de desarrollo* y como *elemento de desarrollo*, son conceptos bien distintos, pero que de su confusión nacen, en parte, las distintas definiciones, tan dispares, del derecho.

Explicar que ambos son contenido y continente requiere tener en cuenta, como hemos hecho, que por derecho de autodeterminación se ha entendido contenidos y definiciones bien diferentes pero que pueden concebirse como compatibles, en su núcleo esencial, tal y como intentaremos hacer aquí (ya sabemos de la confusión que esta polisemia conceptual de autodeterminación ha causado en la cotidianeidad política).

- *Multi-dimensionalidad fin-medio de derechos en cuanto procesos.* En el caso del derecho al desarrollo, como explica Sengupta, se concibe que el cumplimiento del derecho al desarrollo es un fin continuo, en proceso creciente: las expansiones de libertades produce crecimiento económico, el crecimiento económico permite la expansión de libertades con el objetivo de aumentar esa expansión y ese crecimiento. El desarrollo, en

⁸⁸⁵ Anaya, J.S., “A Contemporary Definition...”, op. cit.

fin, como medio y fin del mismo. La autodeterminación, por su parte, concebida también como proceso dinámico se ha descrito como fin y medio: la autodeterminación como condición esencial para el ejercicio de los derechos (fin de la opresión) pero también ejercicio de los derechos como condicionante para el fin de la autodeterminación entendida como ejercicio del principio democrático.

Podemos reflexionar también sobre esta simultaneidad de medios y fines en los procesos de ambos derechos por separado, pero cruzados de uno con el otro: autodeterminación como fin y medio de desarrollo, y desarrollo como fin y medio de autodeterminación. Ambos puntos de vista requieren las distintas definiciones que hemos dado de los derechos pero manteniendo su núcleo esencial de contenido, el principio democrático y los demás condiciones que hemos ya mencionado. Así, se puede y de hecho, se ha interpretado:

- 1) Autodeterminación como *medio* del desarrollo: por ejemplo, cuando se argumenta que la condición necesaria para el desarrollo es la autodeterminación como eliminación de la opresión, como diría la doctrina mayoritaria, ya en forma de creación de unidad política o en forma de cumplimiento del principio democrático.
- 2) Autodeterminación como *fin* del desarrollo. por ejemplo, cuando se ha interpretando la autodeterminación como libertad desde el punto de vista colectivo o especialmente, individual.
- 3) Desarrollo como *medio* de la autodeterminación: por ejemplo, argumentando que el incremento del desarrollo ofrece más libertades y medios para poder reflejar la voluntad popular en las instituciones de gobierno. Este es el argumento de Cristescu cuando afirma que “la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales contribuyen a la implementación del derecho de los pueblos a la autodeterminación”.
- 4) Desarrollo como *fin* de la autodeterminación: por ejemplo, argumentando que el incremento del conjunto de libertades individuales y expansión económica es el objetivo del ejercicio de la autodeterminación entendido como ejercicio del principio democrático o como establecimiento de una unidad política.

Así, llegamos a la siguiente premisa formal. El resultante de la relación entre ambos derechos debe poder plasmarse idealmente de manera que:

Todos los individuos y grupos humanos, interconectados, independientemente del criterio seguido para definir sus contornos, tengan la posibilidad de alcanzar el mayor número de fines legítimos sin afectar negativamente a los demás con el mayor número de medios legítimo disponibles en un proceso creciente y expansivo de manera continua en el tiempo.

§4.2.6 Formulación acorde con la relación en las fuentes normativas

Finalmente, la relación formulada no puede ser contraria a la literalidad textual de las fuentes normativas.

Esto es especialmente importante de revisar debido al método que hemos seguido de indagación del contenido material de los dos derechos, muy elaborado por la doctrina. Al elaborar por un lado la definición y contenido del derecho al desarrollo y, por otro lado, las distintas definiciones del derecho de autodeterminación, algunas muy dispares, pudiéramos encontrarnos que al ponerlos en relación, ésta no sea compatible con las (pocas) referencias a la relación que encontramos en la normativa internacional. Si este problema se diera, estaríamos ante una sobre elaboración o una interpretación errónea de alguno de los dos derechos o de la formulación misma de la relación.

Así pues, cuando en las próximas líneas construyamos la formulación de la relación entre los dos derechos en cuanto derechos humanos mediante la comparación y puesta en relación de las distintas definiciones, atendiendo pues a sus contenidos materiales, en todo momento debemos respetar la relación lógica de elementos que encontramos en la normativa internacional, que ya adelantamos, hemos respetado en todo momento.

Esto no impide que al poner en relación los contenidos de ambos derechos aparezcan nuevos matices que enriquezcan la formulación teniendo presente el límite de que éstos, nacidos de la relación, no pueden disminuir el contenido de cada uno ni contradecir el texto, sino favorecer una interpretación a favor de la protección de la dignidad humana y la mejor mayor y realización progresiva de los derechos humanos.

Hechas estas puntualizaciones, recordemos cómo definen la relación las fuentes principales mencionadas.

§4.3 Análisis de la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir de las fuentes

Teniendo en cuenta las condiciones y premisas descritas, entremos en el análisis de la relación los dos derechos a partir de las principales fuentes normativas, para después comparar el resultado con el producto de poner en relación las distintas definiciones de ambos derechos y completar así la tentativa formulación final de la relación.

El artículo 1 común a los dos Pactos Internacionales de 1966 establece que:

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia (...).”

Divide James Anaya el contenido del derecho de autodeterminación en una doble vertiente. Él distingue entre el aspecto *constitutivo* (“la norma permite a los individuos y grupos una participación significativa en los procesos episódicos que llevan a la creación de o cambio en el orden institucional de gobierno”) y su aspecto *continuado* (“orden institucional de gobierno en el cual el pueblo puede libremente desarrollarse”).

Inspirado en su enfoque distinguiré la relación entre los elementos:

- AC: Autodeterminación constitutiva, AC (correspondiente con el inciso “los pueblos establecen libremente su condición política”)
- AO: Autodeterminación continua o continuada; (correspondiente con “los pueblos proveen [o persiguen] asimismo a su desarrollo económico, social y cultural)
- LR: los pueblos disponen libremente de sus riquezas y recursos naturales
- D: desarrollo económico, social y cultural (como fin)

Así, la autodeterminación puede entenderse como la conjunción de ambas vertientes⁸⁸⁶.

$$A = AC \wedge AO$$

Es decir, sólo se cumple el derecho de autodeterminación si la conjunción de sus dos elementos es verdadera. Ahora bien, se corresponde con el derecho *a perseguir libremente*, sin interferencias ilegítimas, un fin último, el desarrollo económico, social y cultural, D, no garantizándose necesariamente tal fin. Llamemos la atención que la relación de implicación \Rightarrow refiere a una *condicionalidad* y no a una *consecuencia lógica* tal y como es obvio de la redacción del artículo y de la experiencia empírica.

1) Paso 1. El desarrollo implica autodeterminación, el derecho de autodeterminación no implica necesariamente desarrollo.

En nuestro primer análisis, apegado a la concepción de autodeterminación postnacionalista favorable a la descolonización que inspiró la redacción de los Pactos Internacionales de 1966, el incremento de desarrollo sólo puede ser alcanzado cumpliendo con el derecho de autodeterminación (en virtud de este derecho...). Esto no significa que se alcance necesariamente más desarrollo sólo cumpliendo con la autodeterminación, porque hay otros factores externos a considerar. Así, la realización del derecho de autodeterminación sí implica poder perseguir libremente el fin de desarrollo $A \Rightarrow AO$, una persecución libre que no garantiza efectivamente lograr el fin $AO \Rightarrow D$ y por tanto,

$$D \Rightarrow A \text{ pero } A \not\Rightarrow D ;$$

Por tanto,

⁸⁸⁶ Debo recalcar que para James Anaya el específico caso de secesión es “un remedio apropiado en contextos limitados de manera opuesta a un derecho generalmente disponible”) Vid. Anaya, J., “A contemporary definition...”, 1993, P. 158

$D \Rightarrow AC \wedge AO$ pero $AC \wedge AO \not\Rightarrow D$

de manera que ninguna de las acepciones de autodeterminación por separado implica desarrollo, $AC \not\Rightarrow D$; $AO \not\Rightarrow D$

En esta interpretación, el cumplimiento del derecho de autodeterminación proporciona la libertad de partida para el desarrollo pero no el desarrollo mismo, proceso que puede ser afectado negativamente por otros factores externos de cualquier otro tipo no especificado.

Aclaremos que, en esta interpretación, la $AO \not\Rightarrow D$ porque el desarrollo está entendido de manera amplia, incluyendo el autogobierno político, para evitar también, por ejemplo, el argumento imperialista de que una colonia está desarrollada y su derecho de autodeterminación cumplido sólo por registrarse un crecimiento económico, artístico y “social”, pero evitando la autodeterminación política relacionada con la representatividad democrática.

La libre disposición de riquezas y recursos naturales al que hace referencia el segundo párrafo se distingue en este análisis del desarrollo en cuanto medio (el desarrollo tiene un contenido más amplio) y por supuesto del desarrollo cuanto fin (que puede o no alcanzarse a través de la libre disposición pero del que es condición necesaria).

Así, según la segunda disposición del artículo, la consecución de los fines (que pueden interpretarse como D ó AO ó $D \wedge AO$) están condicionadas por la libre disposición de recursos y riquezas, LR , que a su vez está condicionada por la realización de la autodeterminación constitutiva.

Llamemos la atención sobre el hecho de que aunque son necesarios los recursos para poner en marcha una AC , la LR sólo se entiende *tras* la realización de AC . Así,

$LR \Rightarrow AC$ (la libre disposición de recursos se da en virtud del ejercicio del derecho de autodeterminación constitutiva). Pero $AC \not\Rightarrow LR$ (en el caso por ejemplo de ilegítima injerencia extranjera en yacimientos propios). Ahora, $AO \Rightarrow LR$ (son necesarios los recursos para la autodeterminación continua con el fin de desarrollo). Pero $LR \not\Rightarrow AO$ (la libre disposición de recursos no garantiza autodeterminación continuada si son derivados por el gobierno a fines ilegítimos o contrarios al desarrollo social). Por tanto, la autodeterminación continua requiere libre disposición de recursos, para lo cual es necesario cumplir con la autodeterminación constitutiva. $AO \Rightarrow LR \Rightarrow AC$. Pero $AC \not\Rightarrow LR \not\Rightarrow AO$.

Aunque podría así establecerse una cadena causal de requisitos, $D \Rightarrow AO \Rightarrow LR \Rightarrow AC$, atendiendo a la redacción del artículo, es defendible asegurar simplemente que:

$D \Rightarrow (AO \wedge LR \wedge AC)$

Es decir, el desarrollo (como fin) implica la realización de la autodeterminación

constitutiva o política, la continuada, y la libre disposición de recursos. Este análisis es compatible para quienes consideran que la autodeterminación económica o la vertiente económica de la autodeterminación se corresponde con LR o con AO o con ambas.

Sin embargo, también atendiendo a la literalidad del artículo, se que puede sólidamente defender también que:

$$(AO \wedge LR \wedge AC) \not\Rightarrow D$$

Es decir, que la autodeterminación política, la libertad para perseguir el desarrollo social y económico, y el control de los propios recursos son *condiciones necesarias* para el desarrollo *pero no son condiciones suficientes*.

¿Qué elemento quedaría para lograr el desarrollo cumplidos estos? La respuesta parece ser esos otros elementos controlables pero no descritos (como los procesos participativo veremos por ejemplo o no controlables (a la manera de la fuerza mayor, pensemos en crisis económicas impredecibles, en plagas, en todas esas dificultades que pueden afectar el desarrollo aún poniendo todas las *condiciones* necesarias).

La existencia de este elemento indefinido tiene, como veremos, una consecuencia importante en el régimen de obligaciones, porque *puede cumplirse con el derecho de autodeterminación de dos unidades políticas aunque éstas no cooperen entre sí*.

Efectivamente, la cooperación para el desarrollo puede quedar como una suerte de deber *imperfecto*, algo también compatible con la redacción del inciso del segundo párrafo, “sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional”.

Afirmar que el desarrollo implica la realización de las dos vertientes de la autodeterminación y la libre disposición de recursos $D \Rightarrow (AC \wedge AO \wedge LR)$ está a su vez en línea con la definición del derecho al desarrollo.

2) Paso 2. Precisiones del derecho al desarrollo a la interpretación del derecho de autodeterminación. La posibilidad de la relación recíproca de implicación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación.

La exposición anterior, basada en el art. 1 de los Pactos, está matizada por el art. 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 que establece que:

“1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas

sus riquezas y recursos naturales”.

Como vemos, según el segundo párrafo, el derecho al desarrollo *implica* la realización del derecho de autodeterminación, $D \Rightarrow A$, en línea coherente con lo explicado arriba. Es también compatible con distintas interpretaciones del derecho de autodeterminación realizado por la mayoría de autores, aunque tengan distintos puntos de vista, del mismo modo que autores que conciben el derecho de autodeterminación de manera totalmente diversa ven sus puntos de vista cubiertos por el art.1 de los Pactos.

En vista del análisis anterior y de lo dispuesto en el art.1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, no sorprende en absoluto las posiciones de Abi-Saab (en positivo) o de Anthony Carty (en negativo) que sostienen la identidad entre el derecho al desarrollo y la vertiente económica de la autodeterminación o el aspecto continuo de la autodeterminación.

¿Hay alguna diferencia entre afirmar que “en virtud del derecho de autodeterminación los pueblos persiguen libremente su desarrollo” y afirmar que “en virtud del derecho al desarrollo todos ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo social [etc.]” pero que “el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación”? ¿No es acaso lo mismo, en el fondo, decir que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación para su desarrollo (desarrollo como medio), que afirmar que tienen derecho a su desarrollo, máxime cuanto el desarrollo es un proceso y no un fin acabado determinado *a priori*, sino un proceso? ¿No tendrá razón Jack Donnelly, a fin de cuentas, cuando dice que al investigar el derecho al desarrollo entró en una habitación oscura, encendió una luz y, simplemente, no había nada?

A primera vista puede parecer así. No en vano, la redacción de ambos derechos dejan bien claro que la realización del derecho de autodeterminación es una condición para el desarrollo y para la realización del derecho al desarrollo.

Sin embargo, la aceptación de un derecho humano al desarrollo en 1986 como un derecho autónomo presenta unos matices importantes respecto a la redacción de los Pactos Internacionales de 1966 que afectan al derecho de autodeterminación y que a mi modo de ver justifican la adopción del derecho al desarrollo.

Estos matices no contradicen pero precisan de manera importante el derecho de autodeterminación, unas precisiones tales que afectan a su forma de realización. A modo meramente ejemplificativo, pensemos en la relación entre el derecho a la vida como un derecho distinto al derecho a la salud. Aunque el derecho a la vida se pueda presentar, como a menudo encontramos, como un requisito de la salud, el reconocimiento de un derecho a la salud como derecho autónomo precisa ese derecho a la vida. La adopción del derecho a la salud extiende el contenido del derecho a la vida y lo precisa hasta el concepto de la vida saludable. El derecho a la salud precisa el derecho a la vida de tal manera, que justifica una adopción independiente: no consideramos suficiente defender un derecho a la vida como derecho a mantenerse apenas con vida, a sobrevivir, o un derecho negativo a no ser malheridos, sino un derecho a la vida saludable.

Así, el derecho a la vida no es sólo un punto de partida para el derecho a la salud, sino que está inextricablemente unido con éste, cumpliéndose los requisitos de inviolabilidad, interdependencia e indivisibilidad. Así, podemos decir que obviamente el derecho a la salud está en función del derecho a la vida, pero también la forma del derecho a la vida está en función del derecho a la salud, conformándose esa vida saludable que aspiramos y cuyo derecho nos reconocernos.

Estas precisiones que el derecho al desarrollo ofrece al derecho de autodeterminación son de una importancia tal, en mi opinión, que sólo por ellas se justifica la adopción de un derecho al desarrollo como derecho autónomo.

En general, la Declaración de 1986, al proclamar un derecho que implica autodeterminación, no sólo excluye autodeterminación que sea contraria a un proceso de desarrollo, sino que excluye conceptos de autodeterminación que por sí misma no produzcan o impidan el derecho al desarrollo.

En este sentido voy destacar cuatro precisiones fundamentales del derecho al desarrollo al derecho de autodeterminación: precisiones de sujetos, de contenido, de naturaleza, y de obligaciones.

1) **Sujetos:** La Declaración de 1986 incorpora expresa y definitivamente el sujeto individual en el derecho humano al desarrollo. A diferencia de la redacción del derecho de autodeterminación, recogido como derecho además de principio en los Pactos, el derecho al desarrollo es reconocido a “todo ser humano y todos los pueblos”. A pesar de que había quien defendía un nivel individual necesario de autodeterminación para una realización colectiva, esto no estaba expresamente recogido en los Pactos. La incorporación de la persona individual en el centro del desarrollo afecta a su relación con la autodeterminación, ya que el desarrollo implica la autodeterminación y la persona en el centro del proceso, requiere ambos.

El matiz es fundamental porque no deja ya entender el pueblo simplemente como un ente metafísico desligado de personas con derechos, que puede ser encarnado por ejemplo, por un grupo muy concreto, o por una persona sola, un dictador por ejemplo, dejando además poco margen a los exégetas de la voluntad colectiva que desdeñan los procesos participativos. No cabe concebir en relación al derecho al desarrollo de los pueblos, el concepto pueblo como un ente abstracto no constituido por personas individuales concretas titulares de derechos humanos.

La diferencia entre afirmar que los pueblos tienen un derecho de autodeterminación y en virtud de tal derecho persiguen su desarrollo y su posición respecto a la redacción del derecho al desarrollo es evidente desde este punto de vista, ya que se pone como condición expresa que el desarrollo sólo pueda darse en un proceso en el que participen todas las personas y en el que se respetan todos los derechos y libertades fundamentales. Por eso, esta precisión de los sujetos, elimina zonas grises o interpretaciones alternativas del derecho de autodeterminación y coadyuva asimismo a precisiones de contenido.

2) **Contenido:** El derecho al desarrollo es un derecho a un proceso “*particular*” en el que los sujetos indicados “están facultados para participar”, para lograr un desarrollo “y disfrutar de él”. Así pues, se precisa el fin del mismo de una manera no perfectamente identificable con la simple lectura del derecho de autodeterminación. Del contenido del derecho de autodeterminación se puede extraer la apertura de la posibilidad de desarrollo futuro, o como diría Donnelly, no el derecho a estar desarrollado, sino a poder hacerlo, por lo que tiene poco sentido un derecho al desarrollo que incida en esto, cuando ya está cubierto por el derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, el derecho al desarrollo añade el matiz sobre la forma que este desarrollo ha de tomar. La redacción de los Pactos abre la posibilidad a cualquier interpretación de desarrollo respecto al cual la autodeterminación es requisito, pero el derecho al desarrollo sólo protege una idea de desarrollo concreta aunque amplia: un desarrollo basado en proceso participativo, que permita a los individuos disfrutar de sus derechos durante todo el proceso y participar de los frutos y beneficios del desarrollo.

El derecho al desarrollo no protege solamente el desarrollo como mero crecimiento económico, o el sólo avance tecnológico, o la explotación de recursos para un uso que no incorpore a la población en el reparto de beneficios.

Por esta razón, ciertas concepciones de autodeterminación pueden ser compatibles con distintas realizaciones del derecho al desarrollo y otras no.

Supongamos tres concepciones de desarrollo:

Dx) una que cumple los requisitos mínimos derivados de la norma de autodeterminación pero que no la completa conforme al derecho al desarrollo. Por ejemplo, si se registra asociado al ejercicio del derecho de autodeterminación en su aspecto constitutivo –nace una nueva unidad política- un desarrollo económico (en el sentido de crecimiento económico), tecnológico (desarrollo de tecnología nuclear de uso no civil) y cultural (mediante la financiación de obras culturales o artísticas afines a un régimen o a una clase). Esta concepción de desarrollo todavía implica autodeterminación e incluso se puede argumentar su identidad con autodeterminación continuada. Esta concepción de desarrollo es compatible con la realización progresiva de derechos humanos pero no la *requiere* necesariamente.

Dy) Sin embargo, de esta concepción anterior no es difícil imaginar que se derive cierta perversión: cuando el desarrollo se presenta a pesar de o vulnerando los derechos de la población y, por tanto, en contra del derecho al desarrollo. Pensemos en regímenes totalitarios que registrando un crecimiento económico en ciertas áreas, o desarrollando tecnología militar que es utilizada contra su población. Este tipo de desarrollo ni siquiera implica autodeterminación, pues no se cumpliría la autodeterminación como fin de la opresión.

Dr) un desarrollo *basado en derechos*, que además del crecimiento económico y del

avance tecnológico y cultural es conforme al derecho al desarrollo en sentido amplio, lo que incluye procesos participativos, respecto a todos los derechos humanos, individuales y colectivos, incluyendo el resto de derechos de solidaridad, que incluye a la persona en el proceso de desarrollo y contempla la aspiración de repartición de los beneficios de desarrollo equitativamente entre los miembros de la sociedad.

Descartando D_y (porque $D_y \neq A$), tanto las concepciones D_x como D_r respetan la máxima $D \Rightarrow A$, ya que $D_x \Rightarrow A$ y también $D_r \Rightarrow A$.

A partir de aquí, tendríamos dos vías de interpretación, 1) que considera la concepción de desarrollo un D_x un mínimo, al que añadiendo ciertos requisitos adicionales (n elementos) como la participación ciudadana o el respeto al medio ambiente por poner ejemplos, de manera que $D_r = (D_x \wedge n)$ por lo que $D_r \Rightarrow D_x$ pero obviamente $D_x \not\Rightarrow D_r$, y una segunda vía 2) que consideraría que no faltan requisitos adicionales sino esenciales por lo que $D_r \not\Rightarrow D_x$. Por cualquiera de las dos vías llegaríamos a la conclusión $D_r \neq D_x$

Así pues, la aceptación del derecho al desarrollo nos dice que **sólo hemos de admitir $D_r \Rightarrow A$** como fórmula correcta. En consecuencia, sólo aceptamos D_r en la relación recíproca.

D_r , un desarrollo basado en derechos, se caracteriza por aceptar no sólo lo contenido en la norma de autodeterminación y un crecimiento económico, basado en la libre disposición de recursos y libertad de establecimiento de políticas propias, sino que implica aceptar una serie de requerimientos adicionales que proporciona expresamente del derecho al desarrollo (n), en línea con el art.1 de la Declaración “(...) un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

Que el desarrollo implica autodeterminación, *pero no sólo*, lo recoge expresamente la Declaración de 1986: art.1.2 “el derecho humano al desarrollo implica **también** la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación”, es decir, junto con esos n elementos, los procesos participativos, la incorporación de la persona humana en el centro del proceso de desarrollo, respeto por los derechos humanos, etc. De manera simplificada, el desarrollo bien entendido es un desarrollo basado en derechos que implica autodeterminación constitutiva, libre disposición de recursos para cumplir con los fines de la autodeterminación continua y libre disposición sobre la propia riqueza cultural y los elementos adicionales o precisiones aportadas por la Declaración del derecho al desarrollo:

$$D_r \Rightarrow AO \wedge LR \wedge AC \wedge n$$

Aún así, teniendo en cuenta que el desarrollo es un proceso inacabado e inacabable además de n elementos (participación, derechos humanos, etc.) habrían otros por elementos por definir y elementos no controlables de manera que $AO \wedge LR \wedge AC \wedge n \not\Rightarrow D_r$, pero esto ya está fuera de nuestra disquisición y fuera de nuestro control, como corresponde a los límites de la capacidad humana.

Así pues, la crítica de Jack Donnelly, “un derecho al desarrollo substancialmente más amplio, sin embargo, no puede extraerse de este derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación reconocido en los Pactos no implica un derecho a vivir en una sociedad en desarrollo”⁸⁸⁷, es cierta pero no relevante tras la Declaración de 1986, pues el derecho al desarrollo no es un elemento del derecho de autodeterminación, sino que el derecho al desarrollo, aunque aprobado en un momento histórico posterior, jurídicamente implica el derecho de autodeterminación, lo que implica a su vez tanto la vertiente continuada como la constitutiva, libre disposición de recursos y n elementos, ampliando, profundizando, precisando, en fin, su contenido.

Para quienes consideren que existe una identidad entre la vertiente económica del derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo, pueden considerar redundante nuestra reflexión. Pero hemos de tener en cuenta que para quienes consideran el desarrollo como Dx , las precisiones dadas por la Declaración de 1986 añadiendo n elementos (participación, respeto de derechos humanos, etc.) estos igualmente son fundamentales para conformar una idea de desarrollo diferente de Dx . Es decir, para quienes consideren que el derecho al desarrollo es igual al derecho a disponer libremente de recursos y a establecer las propias políticas de desarrollo, los términos de la Declaración de 1986 nos hacen incorporar esos n elementos:

$$D \Rightarrow [(Wr = AO \wedge LR) \wedge AC \wedge n]$$

Si nos fijamos, ambas vías llevan esencialmente al mismo lugar. Una vez que aceptamos el derecho al desarrollo como derecho humano, aceptamos n elementos que marcan ese proceso “particular” de desarrollo.

Estos n elementos no contradicen en absoluto $D \Rightarrow A$, pero, la precisan y condicionan, pues requiriéndose n , no podemos aceptar una concepción de A que haga imposible la relación. Hemos pues comenzar a aceptar que, tanto como el desarrollo implica autodeterminación, la correcta realización del derecho de autodeterminación implica el respeto a un proceso particular de desarrollo.

En conclusión, aceptar la Declaración de 1986 ya no nos encontramos ante $D \Rightarrow A$ (el desarrollo implica autodeterminación), sino ante: **$Dr \Rightarrow Ar \wedge n$**

Esto, es un desarrollo basado en derechos implica una concepción de la autodeterminación respetuosa con los requisitos de participación ciudadana y respeto de los derechos humanos, incluidas como exigencias las derivadas del derecho al desarrollo.

3) **Naturaleza:** la definición del desarrollo en cuanto derecho humano en el texto de la Declaración de 1986 precisa la relación con el derecho de autodeterminación porque abre la puerta, como he defendido con anterioridad, a interpretar la existencia de una

⁸⁸⁷ Donnelly, J. “In search of the unicorn; the jurisprudence and politics of the right to development” Calif. Western International Law Journal, n 15, 473, 1985

función de relación recíproca entre el cumplimiento progresivo del derecho al desarrollo (basado en derechos) y el cumplimiento del derecho de autodeterminación (autodeterminación basada en derechos) en todas sus facetas, es decir:

$$d(W_R) = f d(A_R) \Leftrightarrow d(A_R) = f^{-1} d(W_R)$$

Esto obliga a ir más allá de la interpretación clásica de autodeterminación como mero requisito o punto de partida para el desarrollo, obligando a eliminar interpretaciones del derecho de autodeterminación que no puedan cumplir con esta función recíproca, sea esta cual sea, independientemente de la posición inicial respecto a su contenido.

Las consecuencias prácticas de esta lógica son importantes, porque nos obliga a considerar que no es igual una aplicación del derecho a la autodeterminación en la que todas las personas salgan ganando en contraposición a una en la que unas salgan ganando y otras perdiendo.

Esto es especialmente importante a la hora de considerar la autodeterminación constitutiva, porque no prevé la aceptación o rechazo necesario de maneras concretas de ejercerla (i.e. secesión, unión, absorción, si las nuevas unidades se forman dentro de un estado o de manera externa creando fronteras internacionales) sino que los efectos sobre el cumplimiento del derecho al desarrollo produzcan necesariamente un vector positivo de desarrollo.

Debemos hacernos eco, sin embargo, de una posible objeción que podría presentarse en contra de la relación recíproca entre autodeterminación y desarrollo. Esta interpretación que sostengo, que supone que el desarrollo implica cumplir con la autodeterminación, pero la autodeterminación implica cumplir con el desarrollo, debe enfrentarse a una concepción errónea anterior, ampliamente defendida todavía a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que la autodeterminación o el desarrollo se conciben en sentidos estrechos (autodeterminación como mera autodeterminación constitutiva, desarrollo como mero crecimiento económico).

Durante el colonialismo, una de las excusas de las potencias coloniales para evitar el ejercicio del derecho de autodeterminación de las colonias era precisamente decir que éstas no tenían el nivel de desarrollo adecuado (refiriéndose al desarrollo como nivel económico, tecnológico, cultural o social), es decir, que las nuevas colonias no tendrían viabilidad como estados independientes.

No hace falta decir que las potencias coloniales no tenían en cuenta el desarrollo en sentido amplio, por lo que las Naciones Unidas hubo de insistir en repetidas ocasiones en que el nivel de desarrollo no podía ser excusa para el cumplimiento del derecho de autodeterminación, es decir, defendiendo aparentemente que $d(W_R) = f d(A_R)$ pero que $d(A_R) \neq f^{-1} d(W_R)$. Pero esta incongruencia es sólo aparente, naturalmente, y pronto se constató que la autodeterminación protegida por las Naciones Unidas no debía llevar a la situación en la que algunos líderes de las ex colonias no contemplaran un concepto de autodeterminación en sentido amplio inclusivo de la participación ciudadana y

democrática o el reparto de los beneficios entre todos los miembros de la sociedad. La autodeterminación nacional o anticolonial, por ejemplo, no puede ser esgrimida para establecer una dictadura. Esta apreciación fue reforzada por las mismas Naciones Unidas con su Declaración de 1986, posterior al fin de los grandes procesos de descolonización.

Así pues, en conclusión, la adopción de un derecho humano al desarrollo, con las características de interdependencia e indivisibilidad, precisa la naturaleza del derecho humana a la autodeterminación al hacerlo recíproco de éste.

Esto crea una relación formal entre ambos independiente de cualquier forma de ejercicio del contenido del derecho de autodeterminación –una relación recíproca- que también afecta al contenido material, de manera que el derecho de autodeterminación puede adquirir formas de realización muy variadas –tanto internas como externas- pero siempre dentro de los límites de respeto del contenido del derecho al desarrollo, que a su vez deja márgenes bastante amplios. El efecto práctico de esta conclusión, es que cualquier interpretación del aspecto continuado o del aspecto constitutivo del derecho a la autodeterminación debe ser compatible con el derecho al desarrollo.

Así, la aceptación de la relación formal no dice cómo tiene que ser la autodeterminación *continuada* sólo que no puede ser contraria al derecho al desarrollo, que no puede no ser participativa o no incluir la realización progresiva de los derechos humanos. De igual forma, el aspecto *constitutivo* no puede ser contrario al derecho al desarrollo, de manera que no se trata tanto de cómo se manifiesta este aspecto constitutivo de la autodeterminación (fusión o unión, secesión, integración, etc.), no asume la conformación de una unidad política particular *a priori*, sino que ésta fomente, o al menos que o sea contraria, en su relación recíproca, al cumplimiento del derecho al desarrollo.

4) **Obligaciones.** La adopción del derecho al desarrollo conlleva la aceptación de la existencia de ciertas obligaciones, siendo los estados los sujetos obligados principales de remover los obstáculos del desarrollo. La construcción de estas obligaciones de desarrollo la hemos realizado, tal y como hacen autores como Arjun Sengupta y Amartya Sen, a partir de la distinción kantiana entre deberes perfectos e imperfectos, frente a quienes han argumentado la no existencia en absoluto de los mismos.

La adopción de este punto de vista tiene sus consecuencias lógicas respecto a la realización del derecho de autodeterminación, pues éste se concibe de manera que tiene que ser compatible teóricamente con la posibilidad de que las obligaciones nacidas del derecho al desarrollo sean cumplidas, sin detrimento de aquellas obligaciones derivadas del derecho mismo de autodeterminación.

Esto significa que siempre que interpretemos la autodeterminación en relación al estado, se ha de mantener teóricamente las obligaciones derivadas del desarrollo y viceversa.

Esto implica que no se puede entender el cumplimiento del derecho al desarrollo como instrumento para la subyugación de pueblos “menos desarrollados”, lo que atentaría

además, contra los fundamentos básicos de la Sociedad Internacional.

Tampoco el derecho a la autodeterminación se puede entender de manera contraria al derecho al desarrollo. No podemos interpretar el derecho de autodeterminación como el derecho ilimitado de un pueblo que puede ejercerse sin tener en cuenta los efectos en el desarrollo de los demás, la autodeterminación de los demás y la red de obligaciones que se establecen en virtud del derecho al desarrollo. En concreto, no es posible interpretar el derecho de autodeterminación como un derecho a la estatalidad en la que los estados son totalmente ajenos a ninguna obligación para con los demás pueblos, entre otras cosas porque la estatalización de un pueblo supone la adquisición de las obligaciones propias de los estados. Y los estados sí tienen obligaciones a nivel internacional para con los pueblos, aunque sean débiles obligaciones imperfectas a no dañar y remover los obstáculos al desarrollo.

Es aquí donde encontramos uno de los grandes problemas clásicos de la interpretación y ejecución del derecho de autodeterminación. Mientras que el nacionalismo clásico nos ofrece una visión absoluta de los derechos de la nación como ente metafísico, el Derecho Internacional insiste en la relación en igualdad de todos los pueblos y su sumisión a las normas que rigen la Sociedad Internacional, lo que supone una limitación de raíz a esa libertad absoluta. El derecho de autodeterminación está recogido en el Derecho Internacional y cualquier sujeto en esa sociedad lo acepta para sí pero también para los demás miembros de la sociedad internacional así como aceptan las demás obligaciones, incluyendo la obligación de eliminar los obstáculos del desarrollo propio y *ajeno*.

Aceptando un derecho humano al desarrollo, la auto-delimitación del sujeto político no puede significar, por tanto, el nacimiento de un sujeto de derecho internacional sin ningún tipo de obligación, esto no es posible en una sociedad internacional sometida al Derecho, aunque sea un Derecho Internacional todavía primitivo.

La adopción y aceptación de un derecho humano al desarrollo precisa consiguientemente la forma de ejercicio del derecho de autodeterminación porque subraya la existencia de esas obligaciones mutuas entre estados, dando, por tanto, una nueva dimensión a la *cooperación* entre los estados.

Mientras que el art. 1.2 común de los Pactos de 1966, en los que se recoge el derecho de autodeterminación, se establece que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, *sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco*, así como del derecho internacional” el art.3.3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 establece que “los estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo”.

La interpretación del derecho a la autodeterminación debe ser pues, una que permita esa remoción de los obstáculos al desarrollo, por ejemplo el imperialismo o el colonialismo, pero no una en la que por el mero hecho de su ejecución unos vean sus derechos vulnerados frente a otros (por ejemplo, mediante las guerras de anexión nacionalistas).

Este punto de vista nos obliga asimismo, cuando consideremos la autodeterminación constitutiva, a considerar los efectos de sus distintas posibles formas de ejercicio (revoluciones, secesiones, fusiones, desintegraciones, etc.) sobre el derecho al desarrollo de todos los actores implicados y no sólo de una parte.

Si bien con estas consideraciones no se resuelve el problema de cuándo (bajo qué circunstancias) por qué y cómo se puede ejercer la vertiente constituyente, especialmente externa, de la autodeterminación, aceptar las obligaciones derivadas del derecho de autodeterminación nos proporciona una premisa adicional para un entendimiento contemporáneo del derecho a la autodeterminación. Esta premisa es una regla de mínimos debido a las características de imperfectibilidad de las obligaciones estatales de cooperar para el desarrollo de los pueblos:

Cualquier interpretación y aplicación del derecho de autodeterminación no debe ser aquella que por sí misma cause un decrecimiento del proceso de desarrollo de alguno de los pueblos implicados en los procesos de desarrollo y de autodeterminación, disponiendo a la persona como sujeto individual titular de derechos y beneficiario de los frutos del desarrollo en el centro de dichos procesos.

§4.4 La relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir del análisis de compatibilidad de la definición de derecho al desarrollo con las diferentes definiciones y contenido esencial del derecho de autodeterminación

§4.4.1 Introducción

En las dos primeras partes del presente trabajo, hemos analizado por separado el contenido y definición de cada uno de los derechos de solidaridad bajo análisis. Ambos derechos gozan de la fortaleza de su gran aceptación y adolecen de cierta indefinición que ha ido, sin embargo, aclarándose en la doctrina, con el tiempo, a partir de ciertos núcleos básicos.

En los próximos párrafos voy a tratar de poner en relación la autodeterminación y desarrollo desde otro punto de vista, y mostrar la compatibilidad de la definición del derecho al desarrollo dada por Arjun Sengupta y los diferentes contenidos y definiciones del derecho de autodeterminación, partiendo de la distinción entre autodeterminación constitutiva y continuada de James Anaya y considerando la distinción clásica autodeterminación externa / interna, respecto al estado, entendiendo por interna tanto una autodeterminación constitutiva pero dentro de un estado (creación de unidades subestatales), como autodeterminación como reflejo de las particularidades de un pueblo en su gobierno, como autodeterminación democrática en el sentido civil.

Teniendo en cuenta la definición contenida en la Declaración de 1986, el relator Especial Arjun Sengupta propuso, como ya hemos indicado, una definición “operativa” del

derecho al desarrollo⁸⁸⁸ como derecho consistente en “la realización progresiva y por fases de todos los derechos humanos reconocidos, como los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales (y otros derechos admitidos en la legislación internacional) así como el proceso de crecimiento económico coherente con los estándares de derechos humanos”.

Veamos con detenimiento el análisis que hace Sengupta de la cuestión para alcanzar la definición operativa del contenido del derecho al desarrollo, con el objeto de facilitar su estudio y realización⁸⁸⁹. Desde un punto de vista analítico, Sengupta, como hemos visto en la primera parte, define el derecho al desarrollo como un vector.

$$\mathbf{D}_R = d(\mathbf{W}_R) = (dR_1, dR_2, \dots, dR_n, g^*)$$

Es decir, el derecho al desarrollo es un desarrollo basado en derechos \mathbf{D}_R o lo que es lo mismo, el incremento \mathbf{d} del bienestar \mathbf{W} basado en derechos \mathbf{W}_R se define como un número indeterminado \mathbf{n} de derechos \mathbf{R} y un incremento económico g^* .

Recordemos asimismo que a partir de esta definición, Sengupta acomoda las tres características de inviolabilidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos consagrados en la Declaración de 1986 y en la Convención de Viena de 1993: inviolabilidad implica que ningún derecho individual puede ser violado en el curso de la realización del derecho al desarrollo, $\mathbf{D}_R > 0 \Rightarrow dR_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, o los incrementos de los indicadores de los derechos deben ser no negativos, interdependencia significa que el nivel de realización de un derecho depende del otro, es decir, uno está en función del otro $R_i = f(R_j)$ $i \neq j$). E indivisibilidad. Dos derechos son indivisibles o integrados, si la violación de un derecho lleva a la violación de otro, es decir, $dR_i / dR_j > 0$, $i \neq j$).

Considerando dicha definición del derecho al desarrollo, queda resolver qué lugar ocupa el derecho de autodeterminación si, tal y como se establece en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, el derecho al desarrollo i) *implica* ii) *también* el derecho al desarrollo, de manera que esta i') implicación puede significar cosas distintas dependiendo de la definición previa que demos al derecho de autodeterminación, y considerando ii') que deben existir otros elementos contenidos conforme a las premisas que hemos visto anteriormente.

En relación con el derecho de autodeterminación, nos encontramos con el problema de que la formulación formal de Sengupta del derecho al desarrollo, no lo tiene en cuenta expresamente: no menciona si el derecho de autodeterminación es uno de los derechos del vector, un derecho anterior, o una aplicación de los parámetros a un conjunto de personas concreto.

Vamos pues a revisar la definición de Sengupta con miras a integrar el derecho de autodeterminación teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las diferentes definiciones y contenidos propuestos.

⁸⁸⁸ Sengupta, A., “The Human Right...”, op. cit., pp.179-203.

⁸⁸⁹ Este análisis puede encontrarse en Sengupta, A., “The Human Right...”, op. cit., p. 182

Esta revisión no puede contradecir las premisas ya dadas. Hemos llegado antes a la conclusión de que un desarrollo basado en derechos implica una concepción de autodeterminación conforme que permita tal desarrollo. Por otro lado, la Declaración afirma expresamente que el derecho al desarrollo implica también la realización del derecho de autodeterminación, es decir, éste y otros requisitos, n elementos. Por tanto, $\mathbf{D}_R \Rightarrow \mathbf{A}_R \wedge n$. Sengupta hace equivalente el desarrollo basado en derechos al incremento del bienestar basado en derechos $\mathbf{D}_R = d(W_R)$. Teniendo en cuenta que el derecho de autodeterminación es un proceso, no es suficiente con concebirlo como un simple punto de partida, i.e sólo en su aspecto constitutivo. Por eso hemos afirmado no sólo que el $d(W_R) \Rightarrow d(A_R)$ sino que $d(W_R) = f d(A_R)$, es decir, que el cumplimiento progresivo del derecho al desarrollo como bienestar basado en derechos está en función de una implementación progresiva de una autodeterminación respetuosa de los derechos humanos, incluidas las exigencias adicionales del derecho al desarrollo. Así hemos llegado a la conclusión, teniendo en cuenta además que ambos son derechos humanos y, por tanto, interdependientes e indivisibles que:

$$d(W_R) = f d(A_R) \Leftrightarrow d(A_R) = f^{-1} d(W_R)$$

Para que esto se cumpla, hemos de tener en cuenta las distintas concepciones del derecho de autodeterminación, pues no todas las acepciones y específicas aplicaciones de autodeterminación cumplen necesariamente con los requisitos de coadyuvar al desarrollo. Veamos, pues, cuáles son las distintas opciones de relación de ambos derechos partiendo de la definición del Relator Especial Arjun Sengupta.

§4.4.2 El derecho de autodeterminación como elemento del vector de desarrollo

Hemos comentado que la Declaración de 1986 afirma directamente que el derecho al desarrollo implica *también* la realización del derecho de autodeterminación, $\mathbf{D}_R \Rightarrow \mathbf{A}_R \wedge n$

Podemos considerar, en primer lugar, ese incremento de la autodeterminación basada en derechos $d(A_R)$ equivalente al cumplimiento progresivo del derecho de autodeterminación como uno más de los elementos del vector de desarrollo junto con los otros derechos indicados por Sengupta como elementos del vector de desarrollo, junto con los demás derechos humanos y el crecimiento económico.

Ajustando la nomenclatura, $d(A_R) = dR_A$, es decir, un incremento de una autodeterminación basada en derechos sería tanto como el incremento del cumplimiento del derecho de autodeterminación en su aspecto continuado como derecho humano, delimitado en su definición y contenido de manera que pueda coexistir con los demás elementos del vector.

$$\mathbf{D}_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, dR_A \dots dR_n, g^*)$$

Esto significaría que el cumplimiento del derecho al desarrollo, el incremento de un bienestar basado en derechos, se conformaría con el cumplimiento progresivo de todos

los derechos humanos *incluido el derecho de autodeterminación* y crecimiento económico en una construcción formal, cumpliendo con el requisito de que el derecho al desarrollo implica el cumplimiento del derecho de autodeterminación.

Esta interpretación sería compatible con las interpretaciones y contenidos del derecho de autodeterminación que he sistematizado en §2.3.3, así como lo que algunos, como Brownlie, han denominado el núcleo de certeza de su contenido, y con la autodeterminación continuada de Anaya, interpretaciones que por comodidad enumeraré a continuación:

dR_{A1} = Derecho de autodeterminación entendido como principio democrático, según el cual ciudadanos iguales dentro de un estado son en su conjunto a la vez súbditos y legisladores, y eligen a sus representantes políticos (derecho a derrocar al tirano, sea o no cultural, étnica o jurídicamente “extranjero”). Sería el derecho de una comunidad a ver su *voluntad* reflejada en las instituciones de gobierno bajo las cuales vive.

Esta interpretación a nivel interno justifica el derrocamiento de la heteronomía característica del Antiguo Régimen a nivel interno, y el fin del colonialismo, a nivel externo. Esta interpretación es la clásica liberal civil o wilsoniana. Tiene de interesante que es formal y no requiere la definición previa material de pueblo, como sucede con la definición de Sengupta.

dR_{A2} = Derecho de autodeterminación como derecho de reflejo de carácter cultural propio en instituciones de gobierno. Contenido mínimo o núcleo de certeza de Brownlie i.e., “el principio [de autodeterminación] parece tener un núcleo de razonable certeza. Este núcleo consiste en el derecho de una comunidad que tiene un carácter diferenciado a ver este carácter reflejado en las instituciones de gobierno bajo las cuales vive”⁸⁹⁰. Las dos siguientes interpretaciones son elaboraciones anteriores de este núcleo.

dR_{A3} = Derecho de autodeterminación entendido simplemente como el derecho de un pueblo –sin entrar en qué es pueblo–, a establecer a establecer sus políticas de desarrollo, culturales, sociales o económicas, controlando sus propios recursos y riquezas naturales, ya sea considerando sin legítima injerencia exterior y/o injerencia ilegítima exterior ni interior. Esta acepción es el equivalente al aspecto continuado (*ongoing*) de la autodeterminación según la clasificación de James Anaya.

Si tomamos la clasificación de Anaya, nos quedaría todavía encontrar lugar a la autodeterminación constitutiva (“derecho a establecer la propia condición política”), que se correspondería, como veremos, con el conjunto de personas a las que se aplica el vector.

dR_{A4} = Derecho de autodeterminación interna entendido desde un punto de vista individual, en el que el pueblo es sólo un número agregado de individuos. Correspondería con un derecho de cada persona a su auto-definición identitaria. En este sentido, se

⁸⁹⁰ Brownlie, I., “The Rights of Peoples in Modern International Law”, en Crawford, J., (Ed.) *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, 1988.

incluye el ideal de que individuos y pueblos pueden definirse y desarrollarse ellos mismos y no es exclusiva e incontestablemente dado por un tercero⁸⁹¹.

Podría incorporarse como elemento del vector los derechos individuales identitarios de manera que el resultado recordaría a la propuesta de Kymlicka, quien aboga por incluir las identidades culturales como bienes primarios objetos de reparto conforme a una justicia distributiva.

Asimismo, de manera más discutible, la autodeterminación como elemento del vector podría entenderse además como:

dR_{A5} = Derecho de autodeterminación interna de un pueblo dentro de un estado, como derecho a participar en instituciones de autogobierno colectivo federado o confederado, y que estos puedan estar histórica o culturalmente construidas, con proyección territorial intraestatal de un estado pero salvaguardando la justa realización de los demás elementos del vector. Al estar dentro de la unidad principal de redistribución de recursos (estado) se puede concebir este derecho junto con otros elementos independientes en el vector. La proyección territorial puede existir de varias maneras y de manera limitada, entendiéndose también autodeterminación interna de derechos indígenas, como en casos como el de los Sami, como derecho a vivir en sus tierras ancestrales conforme a su estilo de vida, explotando recursos tradicionales, pero en lo demás dentro del marco de derechos y deberes estatal. Asimismo, esta interpretación está amparada en el derecho de los ciudadanos de un estado a la organización territorial que todos prefieran, incluyendo aquella que acepte la diferencia cultural y establezca legítimo reconocimiento de diferencias manteniendo la igualdad ciudadana.

Esta concepción del derecho, sin embargo, podría entenderse mejor, no como elemento del vector, sino como aplicación del vector a un grupo material de personas concreto, pero dentro de un estado, como veremos más adelante, de manera que podríamos concebir conjuntos y subconjuntos cada uno con vectores diferenciados de desarrollo de acuerdo a sus características particulares.

dR_{A6} = Derecho de autodeterminación interna sin proyección territorial, es decir, entendido como reconocimiento de derechos de determinados grupos étnicos, culturales, religiosos, dentro de un estado, con variantes en lo referente a derechos indígenas o minorías a ejercer su diferencias. También entendido como derecho de autogobierno de un pueblo en lo referente a sus propios asuntos culturales pero no asuntos que tienen que ver con los demás derechos compartidos con el resto de ciudadanos (como la minoría Frisia en Schleswig-Holstein regula en su Consejo asuntos culturales propios pero no participan en el gobierno del *lander*). Se puede entender tanto como un elemento del vector como criterio para crear un subconjunto de personas que comparten ciertos derechos que aspiran a ver satisfechos que no comparten otros subconjuntos, como en el caso de la autodeterminación interna con proyección territorial.

⁸⁹¹ Aulafia, Mitchell, *Transcendence. On Self-Determination and Cosmopolitanism*, Stanford University Press, Stanford, 2010.

En fin, una vez que tenemos las distintas acepciones, y nos damos cuenta de sus grandes diferencias, es legítimo preguntarse si no es posible integrarlas como elementos diferenciados del mismo vector, como distintos derechos. Haciendo uso de la enumeración que hemos hecho, si quisiéramos integrar todos estos puntos de vista, podríamos defender:

$$\mathbf{D}_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, \mathbf{dR}_{A1}, \mathbf{dR}_{A2}, \mathbf{dR}_{A3} \dots dR_n, g^*)$$

Es decir, que el cumplimiento del derecho al desarrollo requiere la expansión progresiva de todos los derechos incluidas distintas acepciones de autodeterminación interna como el principio democrático, es decir, el derecho a participar en las instituciones de gobierno en igualdad, a ejercer la propia cultura, o verla reflejada en instituciones de gobierno, a organizar el territorio de manera que mejor refleje la diversidad en las instituciones de gobierno, etc. Sin embargo, vemos que algunas de las acepciones se adaptan con mayor facilidad que otras a su posible inclusión como elementos del vector, como completaremos en el siguiente apartado.

En un pequeño inciso, notemos que se puede objetar que la formulación de Senguta parece enumerar una serie de derechos *individuales*, y no todas las definiciones aquí dadas parecen corresponderse con derechos individuales, pero creo que debemos rechazarla rápidamente en este contexto, en primer lugar porque Senguta habla de una expansión de *todos* los derechos humanos, en segundo lugar porque como bien se sabe, podemos reformular cada una de las acepciones colectivas de manera individual también, como derechos que, sin embargo, sólo pueden ejercerse en comunidad.

El punto de vista aquí presentado, *el derecho de autodeterminación como elemento del vector de desarrollo, aunque permite una amplia interpretación o varias interpretaciones simultáneas del derecho de autodeterminación, requiere necesariamente también que sea compatible con el respeto de todos los demás elementos del vector; derechos humanos y crecimiento económico g**.

Así no podemos dejar de señalar la evidente conexión entre ese crecimiento económico como fundamental elemento del vector de desarrollo que forma parte del concepto de desarrollo (anteriormente parecía ser su único elemento cuando se consideraba el desarrollo solamente como mero crecimiento económico) y del de autodeterminación, especialmente en conexión con la vertiente económica de la autodeterminación y libre disposición de recursos (lo que no rompe el orden lógico pues el desarrollo implica la autodeterminación, que contiene este elemento). Así, el desarrollo y la autodeterminación están vinculados por el crecimiento económico que exige el desarrollo, que depende en gran medida de la disponibilidad de recursos y riquezas naturales marcada por la autodeterminación. La inclusión de g^* en el vector general de desarrollo y su relación con la titularidad de la riqueza y los recursos, parece sostener el mismo punto de vista que inspiró, entre nosotros, la redacción del art.128.1 de la CE “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Este interés general, no el sólo interés de la mayoría, requiere la salvaguarda de *todos* los

demás derechos humanos del vector. Estamos hablando, por tanto, de g^* como un crecimiento económico particular, sostenible, basado en derechos, del que deben ser beneficiarios y participar todas las personas afectadas por el vector, compatible en fin con la realización de todos los demás derechos incluidos como elementos del vector.

La forma de realización positiva simultánea de todos los elementos del vector, es decir, lograr un crecimiento, mientras al mismo tiempo se expanden todos los derechos, individuales y colectivos, manteniendo el equilibrio de cada uno, requiere la reflexión y el debate constante propio de las democracias deliberativas. No contamos con soluciones *a priori* generales que serían más propias de ideales imaginarios. Cómo lograrlo de manera completa es algo que no sabemos, aunque contemos con guías y experiencias previas, y es una cuestión de la que distintas ideologías tratan de dar cuenta. Es por ello que su realización práctica en los casos particulares es algo que pertenece a la arena política, algo que escapa al objeto de esta tesis.

Sin embargo, la aceptación de este marco, del cumplimiento del derecho al desarrollo, obliga de manera lógica a excluir del debate legítimo precisamente aquellas posiciones extremas que impliquen necesariamente, en sí mismas, la violación consciente y clara de uno de los elementos del vector de desarrollo, la subyugación, el apartheid, la esclavitud, el totalitarismo, el imperialismo, el colonialismo, la violación de derechos humanos, etc., como coherentemente ha recalcado los criterios de las Naciones Unidas, mientras que se invita a debatir a todas aquellas posiciones que, aunque agrias en sus debates y contrarias entre sí, mantengan como fin común esa expansión constante de todos los derechos y un crecimiento económico basado en derechos, aunque discrepen en cómo lograr el fin último teniendo en cuenta lo limitado de los recursos materiales, de la información con la que contamos y de la misma condición humana.

§4.4.3 El derecho de autodeterminación como definición del conjunto de personas al que se aplica el vector de desarrollo

La definición del derecho al desarrollo de Sengupta es formal y no nos dice en absoluto a qué grupo ha de aplicarse, dejando indefinido de igual manera el término “pueblo”. Tampoco reflexiona sobre las posibles interacciones de su definición con el derecho de autodeterminación.

Por ello, se puede entender que es la aplicación misma de los parámetros a un conjunto de personas definido o la selección de ese grupo en lo que consiste el derecho de autodeterminación.

La aplicación de los parámetros formales del vector puede ser considerado desde dos puntos de vista: *analítico* y *material*.

§4.4.3.1 Aplicación analítica o especulativa del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas

Podemos utilizar los parámetros formales expresados en la definición del derecho al desarrollo como vector como una herramienta para analizar el nivel de desarrollo de diferentes grupos de personas.

Al ser una formulación formal, podemos utilizar el vector de desarrollo para preguntarnos sobre los procesos de expansión de derechos y crecimiento económico de grupos muy diferentes: de un estado y de sus partes, de ciudadanos de territorios subestatales de distintas clases y grupos sociales y económicos, étnicos, culturales, etc.- y podemos compararlos entre sí. Estas comparaciones pueden ser simultáneas o interseccionadas, pues las personas pueden pertenecer a distintos grupos según se les seleccione con distintos criterios, conforme a las identidades múltiples que nos caracterizan.

Esta concreción del vector en un grupo particular o grupos particulares de personas para analizar el nivel de realización de sus derechos no afecta a los mismos en un primer momento, aunque la información recabada puede usarse consecuentemente para establecer políticas orientadas a modificar la situación analizada. Es decir, podríamos utilizar los parámetros del vector para preguntarnos acerca de la situación de realización del derecho al desarrollo como proceso de un grupo de población étnicamente definido y *simultáneamente* otro definido territorialmente, con miembros comunes en conjuntos interseccionados.

Ahora bien, aunque podemos estudiar la expansión de derechos y crecimiento económico de muchos tipos de grupos, la concreción del derecho al desarrollo requiere tener en cuenta un factor adicional, que es: entre quiénes concretamente se redistribuyen los recursos, pues se requiere que el crecimiento económico redunde en las personas que conforman el conjunto y lo promueven. La definición de conjunto o conjuntos de personas sobre las que se observa el estado relativo de la expansión de derechos y crecimiento económico está así en íntima relación con la gestión hasta cierto punto autónoma y con la redistribución de recursos (todo pueblo tiene derecho a la libre disposición de sus recursos, etc.), por lo que no puede ser un conjunto cualquiera de personas, tiene que ser grupos *políticamente relevantes para el concepto de pueblo*, (no puede ser un grupo conformado sólo por hombres o sólo por mujeres por ejemplo, o sólo por ancianos, criterios políticamente relevantes pero que no pueden conformar por sí solos un “pueblo” capaz de proyectarse autónomamente en el tiempo).

Siendo conjuntos diferentes y procesos diferentes, que nacen por el mero hecho de la concreción, no es baladí señalar que los vectores resultantes, cuando positivos, mostrarán que unos grupos tienen mayor nivel de desarrollo que otros y mejores perspectivas potenciales.

Esto tiene una consecuencia clara desde el punto de vista especulativo en relación a las potenciales ganancias y pérdidas marginales de los individuos que podrían conformar diferentes pueblos. La formalidad del vector desarrollo permite por un lado explorar

distintos escenarios de desarrollo posibles cuando aplicado a grupos distintos, pero también el auto-emplazamiento de los individuos pertenecientes o potencialmente pertenecientes a múltiples conjuntos y subconjuntos distinguibles, de entre sus múltiples identidades posibles, en aquellos en los cuáles se les permitiría especulativamente mejorar de forma relativa sus perspectivas de desarrollo. Al igual que un observador externo puede analizar el desarrollo de un grupo lingüístico étnico y/o religiosos y/o nacional con individuos factualmente pertenecientes de manera interseccionada a todos los subconjuntos, esos mismos individuos pueden/deben elegir *idealmente*, dentro de lo posible, entre ambas identidades si una es de mejor conveniencia.

La proyección futura de resultados esperables de aplicar idealmente el derecho de autodeterminación constitutiva abre a los individuos de manera constante distintas posibilidades de acción de acuerdo a maximizar sus beneficios, como sugiere el pensar económico (y de ahí, paradójicamente, los sueños de estabilidad en forma de solución ideológica final). Estos cursos de acción están influidos por la ponderación de los beneficios marginales en relación con los costos marginales.

En el caso de autodeterminación constitutiva –sea integración, secesión, unión, etc.- personas pueden proyectar los beneficios en participaciones de bienes y derechos derivados de pertenecer a un conjunto de personas, de elegir cierta identidad de entre las múltiples, y su situación relativa respecto a otros conjuntos de personas.

Patrick Bolton, Gérard Roland y Enrico Spolaore⁸⁹² han estudiado las teorías económicas en relación con “la ruptura e integración de las naciones” analizando los costes y beneficios de la integración política. Este punto de vista apoyaría las tesis de aquellos que consideran los movimientos nacionalistas como movimientos sociales meramente emocionales/irracionales, sino con una cierta base racional de elecciones entre escenarios posibles de mejora relativa personal y colectiva y factibilidad de los mismos.

Que existan distintos escenarios teóricos de elección no riñe con que en la práctica se registren identidades inelegibles, *ethnos*, que sólo pueden darse en relación con la existencia de la comunidad, aunque sí pueden también conformarse identidades conforme a intereses colectivos, y también puede darse la elección entre múltiples conforme a intereses individuales. Tal y como las distintas presiones sobre las múltiples identidades posibles les da distinta relevancia política relativa, argumento conocido popularmente por ser base del conocido ensayo *Identidades asesinas* de Amin Maaluf, las oportunidades positivas de mejora previsibles también las tienen, pero adquieren especial importancia cuando esos grupos pueden potencialmente constituir una unidad política. Las distintas identidades en peligro pueden ser defendidas de distinta manera, pues sólo algunas se ven potencialmente como unidades políticas.

Si bien la competitividad entre grupos identitarios plausibles en relación con una mejora relativa colectiva y personal se puede encontrar en otro tipo de discursos, incluyendo el nacionalista primordialista, el enfoque que permite el derecho humano al desarrollo, esto

⁸⁹² Bolton, P., et al., “Economic theories of the break-up and integration of nations”, *European Economic Review*, 40. 1996, pp. 697-705.

es, no como mera expansión de algo deseable y de nuestros intereses, cualquiera que sea la definición del “nosotros”, sino de realización de derechos *humanos*, obliga a tener en cuenta a los “otros”, a aquellos que no forman parte del escenario de desarrollo óptimo propio.

En el caso de la desintegración yugoslava, el autoemplazamiento especulativo en escenarios óptimos para los intereses propios se manifestó en un mayor apoyo relativo a la secesión y eventual desintegración del estado por parte de los ciudadanos de las repúblicas con más recursos, Eslovenia y Croacia, y menor en las repúblicas con menos recursos, Macedonia y Bosnia y Herzegovina, aparte de otras consideraciones políticas y sociológicas en las que se enfocan las tesis nacionalistas, que a su vez obvian o menosprecian las tesis materialistas, particularmente las causas económicas de la desintegración. Pero igualmente, el autoemplazamiento en un escenario internacional potencialmente mejor que el actual –no sólo en términos económicos sino de potencial mejor realización de derechos, es decir, desde el punto de vista de desarrollo amplio- fue esgrimido por los ciudadanos partidarios de la independencia de Montenegro o Kosovo, a pesar de su menor PIB global y per cápita y su dependencia de fondos federales.

Siguiendo el hilo del pensar económico, históricamente, sin embargo, los potenciales *efectos* particulares y detallados sobre los derechos humanos de las integraciones y secesiones resultado de la aplicación de la autodeterminación constitutiva no han sido comprensivamente tenidos en cuenta. En el caso de la desintegración de Yugoslavia, pero también en la construcción de los teóricos nacionalistas de la autodeterminación, los efectos negativos sobre los derechos humanos (particularmente de aquellos cuya mejor realización necesita de la cooperación) son tratados como una suerte particulares “externalidades negativas”, si se me permite la comparación, en la que los costes de la ganancia colectiva del *ethnos* propio al hacer uso de sus propios recursos no se responsabiliza de los daños y costes sobre los derechos de los individuos como bienes universales. Estas externalidades pueden ser causadas con las mejores intenciones cuando, en su actuar conforme a la norma, no tienen en cuenta el coste sobre los otros en la toma de decisiones.

La precisión que da el derecho al desarrollo al derecho de autodeterminación, como veremos, no existiendo un sistema global de redistribución de recursos, abre la puerta de manera limitada a modular estos costes, impidiendo al menos ese “no tener en cuenta”, mostrándonos dos vías posibles para modular estos costes: la negociación integrativa y el desarrollo del Derecho Internacional en materia de sucesión de estados bajo un enfoque de derechos humanos.

En definitiva, el vector de desarrollo de Sengupta como herramienta analítica puede referirse a la investigación del nivel de desarrollo relativo de grupos humanos políticamente relevantes existentes y/o también a especulaciones sobre grupos que podrían existir, creando así entidades metafísicas –naciones, pueblos- de las que se puede luego pretender o no su reificación política en distintos niveles, estatal, territorial, pero no sólo, puede ser simplemente el reconocimiento de derechos colectivos. Pero a diferencia de la doctrina nacionalista primordialista –que no tiene en cuenta lo universal del ser

humano-, éstos ideales de la imaginación no pueden escapar de los límites de la realización de todos los derechos humanos, pues fuera también estarían fuera del marco conceptual que discutimos.

Siguiendo la gráfica representación propuesta por Sengupta, que incluye los derechos dentro de la autodeterminación, esto significa que debemos aspirar, para la íntegra realización del derecho al desarrollo, a que toda interpretación y toda ampliación de la relación entre autodeterminación y desarrollo, resulte en vectores crecientes positivos para todos los conjuntos y subconjuntos de personas.

Si entendemos las distintas acepciones de “pueblo” como conjuntos y subconjuntos de personas, que pueden ser simultáneamente existentes y parcialmente interseccionados en sus miembros, con características políticas relevantes para aplicar el derecho de autodeterminación, el resultado es una concepción del derecho que permite la expansión del ser humano en sus múltiples identidades, capaz de pertenecer simultáneamente a distintos conjuntos y subconjuntos, expandiendo potencialmente sus posibilidades, capacidades y derechos.

Cuando llevamos un grupo contemplado analítica o especulativamente a la realidad, cuando reificamos esa entidad metafísica, estamos eligiendo conjuntos de personas concretas, con derechos, que quedan dentro del conjunto –cumplen con los criterios- y otras personas con los mismos derechos que quedan fuera. Asimismo asumimos que es en el seno de cada uno de estos grupos en el que se redistribuyen entre sus miembros autónomamente y recursos que en la realidad son limitados y derechos disponibles no sólo universalmente sino en estricta relación al criterio por el cual se conformó el conjunto y, por tanto, diferentes a otros conjuntos.

§4.4.3.2 Aplicación material del vector de desarrollo a una multiplicidad de conjuntos de personas

La redacción del art. 1 común a los Pactos, aún precisada en los términos de la Declaración de 1986, da cabida a interpretar el derecho de autodeterminación *también* como un derecho que se ejerce en un momento indefinido *anterior* del derecho de desarrollo como una suerte de requisito previo. Esto cumpliría también formalmente con el requisito que hemos formulado de que el derecho al desarrollo implica autodeterminación.

En relación con el vector de desarrollo, bien podríamos interpretar, por tanto, que el derecho de autodeterminación corresponde, ni más ni menos, que con el derecho de auto-selección del grupo concreto al que se refiere y aplica el vector de desarrollo, o lo que es lo mismo, el derecho de autodeterminación sería el derecho a la constitución voluntaria episódica de un grupo de personas que por sí y para sí se aplican un vector particular de desarrollo creciente, que incluye como elementos distintas acepciones de autodeterminación interna.

La definición del conjunto de personas al que aplicamos el vector sería anterior desde un punto de vista lógico-formal, no exactamente temporal, a la aplicación del vector.

Es decir, podríamos interpretar que el derecho de autodeterminación constitutiva como la aplicación de unos parámetros formales D_r a un conjunto concreto y limitado de personas (P), un pueblo. Un conjunto de personas que deciden aplicar en la realidad un ideal de la imaginación o un conjunto históricamente dado P. Es decir, $D_r(P)$. Así pues, podríamos entender el derecho de autodeterminación en relación con el derecho al desarrollo siguiendo la formulación Sengupta como:

$$D_R(P) = (dR_{1P}, dR_{2P}, \dots, dR_{nP}, g^*)$$

La división de James Anaya entre las vertientes *constitutiva* y la *continuada* podrían interpretarse como integrada en la definición del derecho al desarrollo de Arjun Sengupta de la siguiente manera:

$$D_R(P) = (dR_{1P}, dR_{2P}, dR_{AP}, \dots, dR_{nP}, g^*)$$

La vertiente *constitutiva* del derecho de autodeterminación, podría entenderse que corresponde con la aplicación del vector material a un conjunto de personas, y la vertiente *continuada* correspondería al incremento de un elemento del vector, el derecho de autodeterminación dR_{AP} .

La distinción entre autodeterminación *externa* y autodeterminación *interna* se revela muy interesante en este punto y en mi opinión, de manera no contradictoria con la división constitutiva/continuada de Anaya pero complementaria, aportando datos sobre las obligaciones y el nivel de derechos realizable.

Hasta ahora hemos concebido gracias a la distinción entre vertientes constitutiva/continuada distintos conjuntos y subconjuntos de solidaridad, pudiendo concebir diferentes ámbitos de autodistribución de recursos y derechos en el seno de cada uno, lo que redundaría en diferencias en el bienestar de las personas. La distinción externa/interna nos ayuda a entender las obligaciones en el cumplimiento de los derechos humanos en el seno de cada unidad política y las obligaciones que tienen entre sí, pues traza una línea distintiva entre los conjuntos estados (como principales obligados y unidades de soberanía en nuestro sistema internacional) y los demás conjuntos concebidos (territoriales o no territoriales).

Debemos, eso sí, tener en cuenta los distintos significados que a tal división entre autodeterminación externa e interna le han dado distintos autores y que hemos explicado con anterioridad:

Si consideramos autodeterminación externa como creación de un estado e interna principio democrático, por ejemplo, el pueblo P se establece en un estado con un derecho al desarrollo, $D_r(P)$, entre cuyos elementos se encuentra el derecho de autodeterminación interna dR_A , coincidiendo con lo ya formulado $D_R(P) = (dR_{1P}, dR_{2P}, dR_A, \dots, dR_n, g^*)$.

Contendría la distinción de Anaya pero considerando la autodeterminación constitutiva solamente en relación al estado y no a otras unidades políticas o conjuntos de personas. Es decir, cambiaría en el énfasis en las obligaciones adquiridas.

En el caso de que la autodeterminación externa e interna se definan solamente respecto a la conformación de unidades políticas territoriales o no territoriales, es decir, autodeterminación externa entendida como la creación de un estado, e interna entendida como la creación de unidades políticas subestatales de autonomía variable, incluyendo con proyección territorial o con reconocimientos de derechos etnoculturales, podríamos hablar de distintos conjuntos y subconjuntos a los que aplicar a cada uno su vector de desarrollo distintivo. Podríamos distinguir entre el vector de desarrollo de un pueblo como población, *demos* de un estado, de una región, de provincias, de municipios, etc., o pueblos etnoculturalmente definidos con o sin proyección territorial pero protegidos como minorías por el estado, (serían todos pueblos que ejercen *internamente* su derecho de autodeterminación con o sin una proyección territorial), de manera que convivan $D_R(P)$, $D_R(N)$, $D_R(M)$... etc., como conjuntos y subconjuntos relacionados cada uno con su vector distinguible de desarrollo⁸⁹³.

Considerando que pueden existir muchos niveles competenciales, desde unidades políticas supranacionales como la Unión Europea, estados, regiones, provincias, municipios, etc., ¿qué sentido tendría entonces hacer una división dual ente autodeterminación externa/interna? La respuesta está en la naturaleza de las obligaciones que adquieren las personas unas con otras. La división constitutiva/continuada no tiene porqué resultar en un estado mientras que la división externa/interna pone énfasis en las obligaciones que se adquieren y los bienes que se reparten para el cumplimiento de los derechos. El estado sigue siendo hoy por hoy la principal unidad política de redistribución de derechos y recursos a nivel global en virtud de su soberanía. Es, por tanto, el principal espacio de realización de justicia distributiva. A nivel global, sin embargo, las relaciones entre personas agrupadas en conjuntos-estados están caracterizadas por ser obligaciones imperfectas, de redistribución voluntaria hasta que se perfeccionan mediante tratados específicos multilaterales o bilaterales. Sobre los estados solo pesa una obligación genérica e inespecífica de ayuda mientras que, en un sistemas constitucional democrático, tienen un obligación específica de cumplir con los derechos de sus ciudadanos y tienen sistemas específicos de reclamación de justicia distributiva que no existen a nivel internacional, aunque sean siempre mejorables.

⁸⁹³ En un esquema democrático también podemos concebir conjuntos y subconjuntos de autodistribución de recursos. Pongamos por ejemplo que en un conjunto de personas, P encontramos subconjuntos N y M como minorías, una religiosa y otra nacional con distintas características, que administran autónomamente recursos y derechos de manera orientada a mantener sus derechos de libertad religiosa y/o sus características nacionales culturales): $D_R(P) = (dR_1, dR_2, dR_A, dDr(R), dDr(M) \dots dR_n, g^*_P)$. Como el derecho al desarrollo de cada subconjunto implica la realización de todos los derechos, y estos son iguales a los del resto de ciudadanos no pertenecientes al subconjunto, podría entenderse o que estos subconjuntos implican ciertas diferencias por una limitada autodistribución de recursos (Autodeterminación interna institucional, territorial infraestatal) o que sólo se aplican a los derechos relevantes a la definición del subconjunto, es decir, como incorporar los derechos individuales a practicar tal religión o a sustentar tal identidad etnocultural o nacional: $D_R(P) = (dR_1, dR_2, dR_{AP}, dR_R, dR_M \dots dR_{nP}, g^*_P)$.

Por eso la estatalización implica contraer obligaciones adicionales relacionadas con los bienes que se autodistribuyen entre los conformadores de ese particular conjunto de personas y la desestatalización implica que unas personas dejen de tener ciertas obligaciones de redistribución de bienes. Esto es no sólo porque se crean conjuntos diferentes sino porque las obligaciones de *cumplimiento* de los derechos humanos son de distinta intensidad. Existe una comunidad global de personas definidas por su naturaleza, la raza humana, que se reconocen unos derechos, pero las obligaciones de unas con otras para el cumplimiento de los mismos son menos intensas que al interior de un estado. Y dentro de un estado, a pesar de la institucionalización de obligaciones, el obligado a cumplir con los derechos fundamentales es el estado. En conclusión, mientras que en procesos de unión de estados hay se produce una expansión de obligaciones, en procesos de secesión y de desintegración se produce un fenómeno que denominaré *proceso de imperfectibilidad de las obligaciones*. Dicho proceso de imperfectibilidad se caracteriza porque la transición de una obligación directa y concreta de ayudar, y de realizar el derecho del otro, a obligaciones laxas, indefinidas y genéricas.

Estos procesos de perfectibilidad e imperfectibilidad, o de ampliación o reducción de obligaciones adquiridas respecto a la realización de derechos del otro no ha de llevar necesariamente a una reducción de derechos o a un vector negativo de desarrollo, aunque podemos afirmar que quienes promueven un nuevo reparto generalmente buscan mejorar sus situación relativa. La conexión entre realización de derechos y solidaridad entre individuos se completa con el tercer elemento, control sobre riquezas y recursos naturales. En los procesos de perfectibilidad la adquisición de obligaciones viene acompañado de la participación del control de recursos del conjunto más amplio y en los de imperfectibilidad de una renuncia voluntaria o involuntaria sobre una parte de los recursos. Así, que el resultado de ambos procesos no resulte necesariamente en vectores negativos o positivos, no quiere decir que no estén conectados los recursos, los conjuntos de solidaridad que se los redistribuyen, as distintas obligaciones de los miembros entre si y con los miembros de otros conjuntos, y los derechos humanos de todos los implicados.

La distinción entre autodeterminación constitutiva y continuada nos permite *formalizar* la existencia de distintos conjuntos con distintos vectores de desarrollo, que aspiramos sean positivos. La distinción entre autodeterminación externa e interna nos permite *contextualizar* estos conjuntos respecto a las obligaciones entre sus miembros y entre los distintos conjuntos, considerando el estado como el eje sobre el que pivota esta contextualización.

Para un conjunto de personas que además coincide con un estado E y su subconjunto N , podríamos así distinguir entre: autodeterminación constitutiva externa, $\mathbf{D_R(E)} = (dR_{1P}, dR_{2P}, dR_A, \dots dR_n g^*)$, autodeterminación continuada externa, $D_R(E) = (dR_{1P}, dR_{2P}, \mathbf{dR_{AE}}, \dots dR_n g^*)$, autodeterminación constitutiva interna, $\mathbf{D_R(N)} = (dR_{1P}, dR_{2P}, dR_A, \dots dR_n g^*)$, autodeterminación continuada interna, $D_R(P) = (dR_{1P}, dR_{2P}, \mathbf{dR_{AN}}, \dots dR_n g^*)$.

En cualquiera de las situaciones, la definición del conjunto de personas relevante, coincida o no con el estado, no está necesariamente predefinido totalmente *a priori*, ni

por supuesto quien o ha de conformar. Si ya tenemos problemas para definir quienes *son* esos pueblos, más difícil es saber quienes *deben ser*. Solo los nacionalistas primordialistas aducen saber lo que es y lo que debe ser, quien ha de formar parte de un conjunto y quien no, porque parten de ideales *a priori* de la imaginación, aunque existen criterios más comúnmente aceptados que otros.

De hecho, la definición de un conjunto de personas como pueblo ha sido y son múltiples (manteniendo el mínimo de viabilidad para considerar un conjunto de personas “pueblo” que comentamos en §4.4.1), como repasaba magistralmente Renan. El conjunto de personas al que aplicamos el vector puede definirse como un pueblo etnoculturalmente predefinido pero también como el *demos* dentro de una fronteras *dadas* según la tradición liberal. Pero también su condición fírmal nos permite análogamente preguntarnos sobre otros tipos de conjuntos de personas, pueblo en sentido socialista o incluso un conjunto de personas que no coincida con definiciones de pueblo tradicionales. Así pues, la formulación propuesta seguiría estando abierta a las distintas interpretaciones clásicas del derecho de autodeterminación pero con las condicionalidades impuestas en virtud de la aceptación del derecho al desarrollo:

Desde la perspectiva nacionalista primordialista, P sería un ente metafísico preexistente – el pueblo, la nación en el sentido primordial-. Desde su perspectiva, es posible distinguir analíticamente $Dr(P)$, y aspira ontológicamente a que haya una identificación entre la unidad máxima de repartición autónoma (estado), los miembros del conjunto P para maximizar $Dr(P)$. Mediante el derecho de autodeterminación, según su visión, el ente metafísico P, se reifica en un conjunto de derechos $Dr(P)$. Desde este punto de vista nacionalista, cabría dR_{AP} , que sería el incremento del derecho continuado de autodeterminación, o el derecho de autodeterminación interna, siempre creciente, pudiéndose identificar también con el principio democrático. El principio democrático podría identificarse como elemento ordenadores del vector pero no el definidor del conjunto.

En la visión civil liberal, un pueblo P sería ya *dado* (correspondiente con el conjunto de personas que componen, de hecho, un *demos*) y no necesariamente definido por unas determinadas características etnoculturales. Por eso, desde el punto de vista civil la relación entre estado y pueblo es diferente y en $Dr(P)$ puede hacer referencia directamente al conjunto de habitantes de un estado. Aunque se haya insistido en que la autodeterminación es un derecho de pueblos y no de estados, no hablaríamos de pueblos etnoculturalmente definidos, sino a todos los ciudadanos de un estado, por lo que hablar del derecho al desarrollo del *demos* sería en la práctica tanto como hablar del desarrollo del estado, si en estado rige un sistema democrático. Respecto al *demos*, es importante distinguir, sin embargo, el derecho de autodeterminación del pueblo respecto del estado porque incorpora el derechos de derrocar al gobierno ilegítimo y el tomar control democrático del estado. El pueblo ciudadano ejerce su autodeterminación derrocando al tirano, acabando con el reparto heterónomo de bienes y gobernándose autónomamente, constituyendo $Dr(P)$. En este esquema se incorporaría igualmente como elemento del vector el derecho continuado de autodeterminación al que hacía referencia en el caso anterior, incluyendo el derecho de libertad frente a la injerencia ilegítima del exterior,

aunque también cabría entender como elemento del vector el principio democrático como derecho de un pueblo a “elegir su condición política”. El derecho a “elegir la condición política” podría pues interpretarse como la constitución política de un pueblo etnoculturalmente preexistente o como principio democrático. En virtud del segundo, el principio democrático como elemento del vector, durativo y siempre creciente, permitiría, bajo esta perspectiva, que el pueblo P pueda incluso *elegir* dejar de ser Dr(P) para convertirse en Dr(N) –algo que el primordialismo no permite pues considera el pueblo P preexistente en cuanto ente metafísico ideal-. En virtud de este derecho de autodeterminación como elemento del vector, dos conjuntos, digamos el pueblo P el pueblo S, podrían voluntariamente unirse constitutivamente y crear una entidad nueva G, que a su vez tendría que respetar el proceso positivo de desarrollo Dr(G), etc. Así pues la autodeterminación entendida como elemento del vector o como aplicación del vector a un conjunto de personas estarían fuertemente vinculadas a través del principio democrático.

Con el esquema formal propuesto tampoco hace falta establecer el conjunto P en un punto de partida temporal (aunque sí anterior desde un punto de vista lógico-formal), basta con afirmar que existen distintas comunidades, y que el derecho de autodeterminación es la constatación de esa multiplicidad de conjuntos en el plano material, esto es, las distintas concreciones del vector de desarrollo, lo que se conjuga con ambas posturas principales de predefinición del pueblo.

La aplicación del vector a un conjunto de personas no requiere necesariamente trazar unas fronteras estatales o internacionales, podemos aplicar el vector a un conjunto de personas coincidentes con una unidad político administrativa infraestatal, u otro tipo de grupo humano sin proyección territorial (en cuyo caso la libre disposición de riquezas estaría más relacionado con riquezas culturales propias, etc., que con recursos naturales que puedan hallarse en el subsuelo). Sin embargo, es importante no perder la perspectiva de que el estado es la principal unidad política de distribución de recursos y de derechos, por lo que los elementos contenidos en el vector cuando nos referimos a un estado o cuando nos referimos a cualquier otro conjunto de personas ha de ser diferente.

Así pues, el derecho de autodeterminación entendido como el derecho que define el vector de desarrollo ya no sería una abstracción, unos parámetros aplicados a un conjunto indefinido de personas, o a una aplicación potencial a un conjunto, sino la medida de implementación de derechos humanos concretos y crecimiento económico aplicados a un conjunto de personas cierto, titulares de derechos humanos. Si además coincide con un estado, se materializan niveles concretos de realización de derechos y, también, de obligaciones.

Independientemente de las disquisiciones sobre cómo debería definirse el “pueblo” P, el mismo hecho de que exista un conjunto P, implícitamente reconoce la existencia de una *multiplicidad* de pueblos, (lógicamente, de al menos un conjunto $\neg P$), cada uno con su proceso particular de desarrollo, precisamente porque vienen dados.

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_R P &= (dR_1, dR_2, \dots dR_n, g^*) \\ &\neq \mathbf{D}_R Q = (dR_1, dR_2, \dots dR_n, g^*) \end{aligned}$$

$\neq \mathbf{D}_{RS} = (dR_1, dR_2, \dots dR_n, g^*)$
etc.

Esta claro que si en algo están de acuerdo todas las corrientes de pensamiento es en esta multiplicidad fáctica de conjuntos (que para poder aplicar el derecho de autodeterminación han de ser pueblos), independientemente de si los consideramos diferentes demos, o diferentes grupos etnoculturales, etc., es decir, existen de hecho distintos conjuntos de personas con distintos niveles de realización de sus múltiples derechos y crecimiento económico, y que su identificación con el estado o no, afecta a los bienes que se autodistribuyen y los derechos que disfrutan.

Ahora bien, esto requiere aceptar diferencias entre el nivel de desarrollo de personas iguales en derechos. Hemos sugerido que la diferencia fundamental entre la aplicación analítica del vector de desarrollo a pueblos abstractos y la aplicación material a un conjunto de personas reside en que la decisión de distribuir bienes y recursos escasos ciertos entre un grupo concreto de personas titulares de derechos humanos, dejando a otras personas fuera de ese conjunto de beneficiarios, afectando de hecho y no especulativamente a sus derechos humanos. Podemos abstractamente analizar si un conjunto pueblo está viendo expandidos sus derechos, y eso permite analizar conjuntos interseccionados de personas, pero la aplicación *material* del vector requiere que sean esos miembros de ese conjunto, en un esquema democrático, los que van a repartir entre sí y para sí sus propios recursos.

El control sobre los recursos para su redistribución está pues íntimamente ligado tanto con el derecho al desarrollo como el de autodeterminación, algo ya adelantado por Cristescu “el elemento fundamental del derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación es la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Hoy en día, el derecho de los pueblos a la autodeterminación no puede ser visto más desde un punto de vista puramente político, sino que debe ser visto cada vez más desde un punto de vista económico, social y cultural (...)”⁸⁹⁴.

La existencia de numerosos conjuntos con distintos niveles de desarrollo y con distintos bienes para repartirse entre sí, conforme al derecho de autodeterminación, no significa que hayamos encontrado los argumentos definitivos para justificar cómo concretamente se deben conformar o justificar, no voy siquiera a pretenderlo. Al fin y al cabo, ha sido y es uno de los grandes debates históricos y políticos desde la caída del Antiguo Régimen quienes son esos cuantos que se gobiernan a sí mismos. Tradicionalmente, al entender el derecho de autodeterminación como el autogobierno de un conjunto de personas, la mayoría de la doctrina se ha volcado en disquisiciones como las expuestas, especialmente teniendo en cuenta si de pueblo viene acompañada de beneficios y/o pérdidas en términos de recursos y derechos, no sólo etnoculturales. Digamos que los distintos criterios de conformación de conjuntos en abstracto que se materializan en estados y comunidades se superponen análogamente a los diferentes y contingentes criterios de justicia, cada uno de ellos relevante si considerados por separado, al no existir una norma anterior universal

⁸⁹⁴ Cristescu, A., *The Right to Self-determination...*, op. cit., p. 121

que establezca el criterio absoluto de la estatalidad, como muestra la multiplicidad de orígenes de las fronteras⁸⁹⁵.

Y es que definir un conjunto concreto solidario de personas requiere justificar que unas personas estén dentro del conjunto y dejar otras personas fuera, independientemente de qué entendamos por pueblo. Asumir el mismo concepto de autodeterminación es asumir la multiplicidad misma de los sujetos (pueblos). La existencia de distintos conjuntos a los que aplicar el vector del derecho al desarrollo implica aceptar la discriminación entre personas que son fundamentalmente iguales en dignidad. Implica aceptar que unas personas se beneficiarán de procesos de desarrollo mayores que otros. Y precisamente porque hemos de discriminar entre personas iguales en dignidad para conformar los conjuntos relevantes, la discriminación ha de ser legítima.

Por tanto, la *discriminación legítima*, entre personas iguales en dignidad, tal y como nos presenta también el Derecho Internacional actual de acuerdo al derecho de autodeterminación se plasmaría al menos en cuatro niveles:

- a) Aceptación implícita de existencia de *distintos conjuntos legítimos de personas con distinta disponibilidad jurídica* y autodistribución de riquezas y recursos naturales (dependiendo de su nivel competencial, siendo los estados los principales gestores de los recursos, etc.).
- b) Aceptación de conjuntos de personas con *distinta disponibilidad material* de recursos y riquezas (recursos naturales no aparecen naturalmente distribuidas equitativamente en la naturaleza).
- c) Aceptación de múltiples conjuntos y subconjuntos de personas con *distintas obligaciones entre sí* y entre sus miembros, en distintos círculos de solidaridad, en ocasiones interseccionados, con obligaciones perfectas e imperfectas, conjuntos que en su modificación producen imperfectibilidad y perfectibilidad de las obligaciones de cumplimiento de derechos humanos.
- d) Aceptación de *distintos niveles de realización de derechos humanos* como consecuencia de las anteriores asunciones.

Está fuera del objetivo de esta tesis cuáles son los pueblos concretos que han de nacer conforme a criterios legítimos de discriminación, o incluso cuáles son esos criterios. Creo, además, que es inescrutable *a priori* porque depende de la distribución fáctica de recursos y derechos. Sin embargo, existen unos límites.

Existe, al menos, *un criterio mínimo de discriminación legítima*: está ampliamente aceptado que la opresión y la explotación entre personas (que es causada no idealmente,

⁸⁹⁵ Pensemos en el ejemplo de Amartya Sen sobre los tres niños que pelean por una flauta –uno arguye que es el único que sabe tocarla, otro que no tiene juguetes y que los demás tienen muchos, y el tercero, que fue él quien la construyó-. Por separado y sin norma anterior de prelación, cada argumento parece legítimo y responde a un diferente “criterio de justicia”.

sino material e históricamente) causa una discriminación *ilegítima*. La distinción entre conjuntos estaría realizada por la discriminación y la opresión y revertir la situación mostraría conjuntos discriminados legítimamente. La autodeterminación como conformadora de conjuntos de personas con diferentes obligaciones entre sí cumple en estos casos su *función emancipadora*.

Los fundamentos filosóficos y éticos de la función emancipadora de la autodeterminación para conformar una nueva entidad política del conjunto discriminado ilegítimamente (con vector de desarrollo negativo), y que tal unidad política pueda o no, además, conformarse como un estado, son fundamental y radicalmente diferentes a los argumentos de los nacionalistas primordialistas clásicos, como han insistido históricamente, desde distintos puntos de vista teóricos liberales y socialistas. El Derecho Internacional, que reconoce la autodeterminación de los pueblos, se opone claramente al imperialismo y el colonialismo, pero también a la secesión unilateral que no tenga en cuenta la mejor realización de derechos humanos de todos, de manera compatible con el principio de integridad territorial.

Así, el Derecho Internacional parece decantarse progresivamente por la visión *emancipadora* (condicionada) de la autodeterminación y no por la visión nacionalista *primordialista* (incondicionada) étnica de la autodeterminación.

Para los nacionalistas primordialistas la distinción de la preexistencia abstracta de un pueblo como ente metafísico distinto de las personas que lo componen, es suficiente para aspirar a crear conjuntos concretos políticos de personas que coincidan en sus características con esa idea, en una coherencia perfecta entre personas, gobierno y territorio, de manera que los criterios culturales usados para definir abstractamente el conjunto son considerados suficientes para discriminar en otros derechos, salud, educación, y en última instancia –como en los totalitarismos nacionalistas del siglo XX– incluso la vida.

Podría argumentarse, desde el punto de vista primordialista, que los derechos humanos son universales pero hay derechos etnoculturales que son diferentes, que todos los vectores de desarrollo son iguales con la única diferencia de los elementos específicos de derechos etnoculturales particulares diferenciadores, y que esto es lo que define conjuntos diferentes. El problema reside en que esto sólo es posible idealmente, en un mundo de recursos ilimitados y realización máxima de derechos en el que el único criterio diferenciador final entre vectores puede ser derechos definidos por su cualidad y no por su nivel de realización. Sin embargo, la realidad nos dice que los recursos son limitados y que la formación de conjuntos tiene más que ver con la autodistribución de la mayor cantidad de recursos que con la mayor realización de los derechos de todos.

Tanto demócratas con una visión civil, liberales, socialistas y comunistas, que parten de la universalidad del ser humano, han encontrado tradicionalmente la discriminación *a priori* entre personas basada en hechos culturales y no basada en la opresión un criterio muy difícil de argumentar, apostando, como hemos visto, generalmente por distinguir entre los derechos culturales a ejercer por una comunidad definida por esos derechos, de

la global realización de los demás derechos humanos, proponiendo distintas formas de compatibilidad y abordando la conformación de conjuntos diferentes de una manera más pragmática y casuística. Esta conformación casuística e histórica de conjuntos preferida por liberales (conforme a conjuntos dados) y socialistas y comunistas (como instrumentos o medios para concentrarse en el triunfo de la clase trabajadora) tiene la ventaja respecto al nacionalismo étnico primordialista que permite maximizar la eficiencia de la autodistribución de recursos para la mejor realización del conjunto de derechos humanos y no solo etnoculturales. Por otro lado, mientras que la predefinición del conjunto etnoculturalmente no garantiza por sí misma la mejor realización de todos derechos humanos (salvo, quizá, aquellos que sirvieron como definición del conjunto), el criterio nacionalista hace suponer que bajo su óptica se protegerán mejor ciertos (propios) derechos culturales así como intereses materiales. No sorprende pues, que sea la naturaleza de los derechos oprimidos o con mayor potencial de realización, junto con las expectativas materiales futuras propias los que marquen las tendencias ideológicas.

Por eso, normalmente, la invocación de la visión etnocultural o nacionalista frente a la civil (derechos culturales como elemento definitorio del conjunto sin tener en cuenta los demás derechos) se fortifica ante el convencimiento por parte de un conjunto de personas de hallarse ante la posibilidad de una ganancia propia en el resto de los derechos: normalmente o en una situación de opresión y explotación relativa respecto al conjunto (que resultaría en un movimiento emancipador) o porque la definición de derechos culturales lleva a aparejada directamente la explotación de un recurso natural o riqueza propia, desde lo individual hasta su proyección en lo colectivo, o una situación ventajosa en la redistribución de recursos, de manera que los argumentos nacionalistas podrían ayudar a un conjunto de personas con más recursos actuales o potenciales, como diría Pogge, a intentar evitar responsabilidades de justicia distributiva. Como bien sabemos, es difícil encontrar una reivindicación de una redefinición de conjuntos si no lleva aparejada una mejora propia en la distribución de recursos, sea o no sea legítima, cuestión que no entramos a valorar.

Por otro lado, la multiculturalidad posible abrazada por los sistemas democráticos liberales y socialistas nace del convencimiento de que en un conjunto de personas dado, el incremento de los derechos culturales no tiene porqué significar discriminar en los demás derechos humanos,

Así pues, ante el problema fundamental de no poder conocer los criterios definitivos y absolutos de discriminación legítima, más allá del criterio mínimo de discriminación legítima del fin de la opresión y la explotación, o al menos tener múltiples criterios enfrentados para conformar distintos conjuntos de personas, todos ellos adoptados alguna vez históricamente, viviendo además en un mundo de recursos limitados, nos vemos en la obligación de preguntarnos cómo podemos mantener al menos el criterio mínimo de no opresión colectiva e individual en relación con la mejor realización de los derechos humanos.

Podemos intuir que es diferente configurar conjuntos de personas con el criterio de mejorar el total de los derechos humanos de todos que configurarlos con el punto de vista

o con el criterio de que personas determinadas *a priori* se autodistribuyan recursos y derechos para su propia mejora sin tener en cuenta los demás, como es radicalmente diferente tener en cuenta la mejora de conjuntos dados que la mejora de los conjuntos por conformar en un futuro: el fin último de maximizar derechos humanos de todos y el fin último de autodistribución propia de los máximos recursos y bienes, teniendo en cuenta las distintas obligaciones dentro del estado y entre ellos, no requiere necesariamente el mismo resultado político ni conformar el mismo conjunto de personas.

Los diferentes resultados políticos posibles han de ser puestos en relación con un sistema actual internacional de estados, aunque con fronteras cada vez más permeables y evanescentes, en el que todavía se crean situaciones potenciales de poco margen de maximización de todos los elementos de un vector de desarrollo. Un sistema global que tiene muy pocas exigencias de justicia. Y es que, como diría Thomas Nagel, el hecho de que vivimos en un mundo injusto sería la menos controvertida de las afirmaciones en teoría política⁸⁹⁶.

Para autores cosmopolitas como Joseph Carens, que aplica el velo de la ignorancia rawlsiano a la redistribución de recursos, las fronteras estatales tal y como las entendemos hoy, definidoras totales de todos los derechos, son más que cuestionables desde el punto de vista de justicia distributiva, inclinándose por el concepto de fronteras abiertas⁸⁹⁷. Maximizar los derechos de todos requeriría concebir muchos conjuntos y subconjuntos de personas interseccionados conforme a los derechos que se quieren cumplir, creando múltiples conjuntos de distribución de recursos y derechos, y con distintos sistemas de obligaciones incrementados, y múltiples ejercicios de poder, *multiple sites of power* como los ha denominado David Held.

Insisto en que no vamos ni intentar resolver pues aquí (ni creo que nadie puede hacerlo en abstracto) quiénes concretamente deben conformar los distintos conjuntos de personas que deben autodistribuirse recursos y derechos, sobre los cuales describimos o aplicamos el derecho al desarrollo en un plano material. Sin embargo, defendemos que la adopción de la formal igualdad entre los pueblos, aceptando su forzosa multiplicidad, y el requisito adicional de que su vector de desarrollo sea siempre creciente dado por el derecho humano al desarrollo, hemos de aceptar unas implicaciones lógicas de relevancia para la teoría y realización de los derechos humanos.

Concluamos aquí, por tanto, que mientras que el análisis analítico de un vector de desarrollo de un pueblo abstractamente concebido puede realizarse contemplando el incremento del bienestar, derechos y bienes de un conjunto dado, la aplicación material del vector a un conjunto de personas concreto requiere la justificación de dejar a personas de iguales derechos fuera del conjunto e implica la redistribución material autónoma de recursos y derechos (escasos y limitados) entre los miembros del conjunto a los que aplicamos el vector y las distintas obligaciones que adquieren unos con otros. Es por ello

⁸⁹⁶ Nagel, T., "The Problem of Global Justice", *Philosophy & Public Affairs*, n. 33, 2005.

⁸⁹⁷ Carens, J. H., "Aliens and Citizens: The Case for Open Borders", *The Review of Politics*, n. 49, 1987, pp. 251–273.

que, en este punto, la referencia al papel del estado como unidad principal de redistribución de derechos y recursos es obligada. Xanthaki y tantos otros autores han subrayado que la autodeterminación y el desarrollo son derechos de pueblos y no de gobiernos, lo que es perfectamente compatible con distintas tradiciones políticas, pero en todos los casos esta autodeterminación está relacionada con el pueblo como beneficiario y su relación con la existencia del estado como unidad máxima de redistribución de recursos⁸⁹⁸. Los conjuntos de redistribución de recursos infraestatales y supraestatales, sin embargo, siempre están condicionados principalmente por la voluntad soberana de los estados.

El derecho al desarrollo no nos dice pues quiénes deben conformar los conjuntos de personas, ni si han de coincidir con los estados o no, es decir, el nivel de obligaciones que deben tener unos para con los otros, no dice quién, cuándo y cómo concretamente ha de ejercerse la autodeterminación constitutiva, ya sea externa o interna, pero impone como condición la mejora del conjunto todos los derechos humanos de *todos* los conjuntos y, por tanto, *el mínimo lógico del no empeoramiento injustificado y evitable de ninguno*.

§4.4.3.3 Criterio esencial de aplicación del vector de desarrollo a diferentes conjuntos de personas: mantener su incremento progresivo o al menos no negativo en todos los casos, conforme al principio de fraternidad humana

Exploremos a continuación la premisa para toda interpretación y aplicación del derecho de autodeterminación de que, en su resultado final, el vector positivo de desarrollo de los pueblos implicados sea positivo.

La idea principal es que si el derecho al desarrollo exige que los vectores de desarrollo han de ser positivos o al menos no negativos –lo contrario es una vulneración del derecho–, las interpretaciones y aplicaciones del derecho de autodeterminación constitutiva *no deben por sí mismas causar vectores negativos de desarrollo*.

El derecho de autodeterminación, establece el derecho de distintos conjuntos de personas a redistribuir, entre sí y para sí, y de diferente manera, recursos distintos y distintos derechos, estableciéndose además distintos niveles de obligaciones entre los conjuntos.

Estas obligaciones son variables si entendemos la autodeterminación como un proceso extendido en el tiempo. La aceptación de un derecho al desarrollo tal y como se formuló en la Declaración de 1986, exige que se pongan las medidas necesarias para que estos conjuntos, controlando sus recursos y redistribuyendo conforme a equidad, vean progresivamente expandidos sus derechos y su bienestar económico, colocando al

⁸⁹⁸ Incluyendo la tradición nacionalista (pueblo como conjunto preexistente) y la civil, ya sea democrática liberal (pueblo como demos) y/o socialista (pueblo como clase trabajadora). Por ejemplo, para los nacionalistas primordialistas, el conjunto preexistente que conforma el pueblo debe poder distribuir autónomamente todos los recursos y derechos de sí para sí, buscando idealmente la reificación estatal del pueblo, para la tradición liberal, el demos debe controlar el estado y gobernar directamente o mediante representantes de la soberanía popular, etc.

individuo, y no solamente al conjunto en el centro del proceso de desarrollo, como beneficiario de los frutos del mismo.

Nada se nos dice sobre quiénes concretamente tienen que conformar estos conjuntos, ni cuántos conjuntos hay o debe haber, ni su devenir histórico, a pesar de los denodados esfuerzos de tantos autores y políticos, más que nada porque forma parte de la voluble vida política, y la evolución de la disponibilidad de recursos, (por naturaleza o por devenir económico). Es éste, por tanto, un debate intrínseco al esquema democrático de redistribución autónoma de bienes y derechos frente a la heteronomía del Antiguo Régimen.

Pero estudiar la relación entre el derecho de autodeterminación y derecho al desarrollo no exige tal criterio fundamental de composición *material* de los conjuntos, inalcanzable y fundamentalmente no-universal para conformar los grupos y la redistribución de bienes y derechos escasos. Sí que podemos, sin embargo, distinguir un criterio *formal*, que nace directamente de la aceptación de un derecho humano al desarrollo, y de la igualdad radical en dignidad de todos los seres humanos a pesar de sus diferencias etnoculturales circunstanciales, un criterio cuya plasmación en la formulación tradicional del derecho a la autodeterminación de los pueblos es considerada insuficiente en la redacción del derecho al desarrollo.

Este criterio es consistente con nuestra hipótesis de que la total aceptación del derecho al desarrollo tal y como está formulado en la Declaración de 1986 condiciona y precisa el ejercicio del derecho de autodeterminación a un nivel fundamental: *Todos los conjuntos de personas deben ver expandidos sus derechos y los beneficios de un crecimiento económico, de manera que el vector del derecho al desarrollo debe ser positivo en todas las interpretaciones y para todos los resultados de la aplicación del derecho de autodeterminación.*

Este criterio es perfectamente compatible, pero no igual, al único criterio que conocemos a ciencia cierta como de discriminación legítima de conjuntos: el fin de la opresión y explotación de unas personas a otras.

La premisa dada es fácilmente aceptable para derechos tomados solamente en abstracto o, si tenemos en cuenta la redistribución de riquezas, para conjuntos *dados* y entornos positivos, pero los entornos son en ocasiones negativos lo que causa en algunos inestabilidad de conjuntos y su modificación institucional interna o externa: integración, separación, desintegración, etc.

La premisa propuesta es sencilla y aceptable intuitivamente para los conjuntos dados, de manera especialmente relevante para los estados, pero requiere forzosamente cierta reflexión respecto a la creación de *nuevos* conjuntos (no entidades metafísicas sino concretos conjuntos de personas que controlan recursos y se redistribuyen bienes).

Participando de ese “fraude piadoso” que describía Strauss, con el que se trataba de conciliar tras la Segunda Guerra Mundial la aprobación del principio de

autodeterminación con la legitimidad de las múltiples fronteras existentes nacidas de diferentes criterios políticos e históricos -con la salvedad del colonialismo-, es pacífico concluir que todos esos conjuntos que damos por constituidos conforme al principio de autodeterminación han de aumentar progresivamente sus derechos (que los bienes ayudan a cumplir) conforme al derecho al desarrollo y ha de evitarse injerencias ilegítimas que impidan el desarrollo. Asimismo, ha reforzado este punto de vista que las teorías de crecimiento económico han tendido históricamente han estudiar conjuntos de personas y sus proyecciones temporales como conjuntos estables, particularmente estados.

Daron Acemoglu y otros⁸⁹⁹ nos explican que en relación con el crecimiento económico se han distinguido tres grandes grupos de teorías que explican las causas de las diferencias de ingresos y, por tanto, de recursos disponibles para el cumplimiento de derechos: teorías que inciden en las diferencias geográficas (materiales), teorías que defienden como causas las diferencias culturales (como la de Weber), y teorías que consideran las instituciones económicas como causa principal de crecimiento. Él mismo defiende contar con las instituciones adecuadas como causa fundamental del crecimiento a largo plazo y, por tanto, de diferencia entre conjuntos económicos. Así, la redistribución de riquezas, si bien de impacto innegable en la disponibilidad de recursos, no garantiza por sí sola un mayor nivel de desarrollo, no sólo porque las instituciones sean más importantes, sino porque la vulneración puede darse con pocos medios. Por ello, a pesar de que la disponibilidad de bienes sea necesaria para cumplir con derechos, hemos de tener cuidado de no identificar absolutamente la redistribución de bienes y riquezas naturales durante la autodeterminación constitutiva de conjuntos cambiantes con el cumplimiento del derecho al desarrollo.

Las teorías del desarrollo como mero crecimiento económico, por otro lado, otorgaban un gran peso relativo al control de las riquezas naturales, dando las instituciones económicas por sentado, por lo que tampoco se fomentaron teorías de autodeterminación basadas estrictamente en el fortalecimiento de las instituciones sociales y económicas para un desarrollo en sentido amplio, que son más proclives a la cooperación y al intercambio que la explotación de riquezas propias. No es igual, desde el punto de vista de aplicación de la autodeterminación en conjuntos nuevos, concebir el crecimiento a partir del control de recursos naturales que a partir de la construcción de instituciones económicas adecuadas, aunque ambas sean necesarias. El primero abre el debate directo de la justicia distributiva; la segunda asunción requiere expandir el debate más allá del mero el reparto de bienes, estudiar la evolución correcta de las instituciones y qué derechos pueden ser garantizados en la transición institucional y no sólo a partir del reparto legítimo de riquezas naturales: requiere colaboración, un nivel de solidaridad superior que la mera repartición de recursos no exige.

Así por ejemplo, el resultado de la aplicación de autodeterminación externa constitutiva que considera durante el proceso solamente el control sobre los recursos naturales o riquezas propias como fuente principal de recursos para la mejor realización de derechos, y no la institucionalidad económica y social, ha de tener diferentes recursos y resultados.

⁸⁹⁹ Acemoglu D., et al., “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”, Aghion, P., Durlauf, S. N. (eds) *Handbook of Economic Growth, Volume 1 A*. Elsevier, 2005, p. 386 y ss

En el otro lado de la misma moneda, afirmar que el crecimiento económico está fundamentado, como así parece, en la mejor institucionalidad social y económica, y no en la disponibilidad de riquezas, puede utilizarse como argumento para eludir las responsabilidades de redistribución entre conjuntos ya dados. Se puede argumentar que en el caso de los estados, las instituciones económicas que crean riqueza a largo plazo se crean una vez éstos son constituidos y asentados mientras que los recursos naturales son preexistentes a los estados. Esta es una visión estrecha que habremos de desechar, no porque no sea o no sea cierto que las instituciones no sean las responsables principales del crecimiento económico en vez de la disponibilidad de recursos, sino porque las instituciones son también preexistentes y cambiantes junto con los conjuntos a los que se refieren, tanto como lo es la disponibilidad de recursos naturales.

Así pues, nuestra afirmación primera (que todos los pueblos se desarrollen sin injerencias ilegítimas) no debería causar problema alguno para los conjuntos *dados*, como no causa controversia las llamadas genéricas a la libertad o la igualdad, en comparación con la siempre controvertida causa de los conjuntos cambiantes, si no fuera por la limitación real de los recursos, limitación con las que no cuentan las invocaciones abstractas de desarrollo de los conjuntos dados.

Este problema hunde sus raíces en la común asunción acrítica de la disponibilidad constante, estable y creciente de recursos a la hora de enfocar cómo abordar una empresa tal como es la constitución de una nueva unidad política. Es este un problema registrado en las construcciones teóricas contractualistas y protocontractualistas desde Aristóteles a Locke, por citar dos ejemplos clásicos, un punto de partida criticado especialmente desde el s. XIX hasta la actualidad, puntos de vista que parten del pacto para la vida mejor pero que no resuelven el actuar cuando por causas ajenas sufrimos la vida peor, a pesar de estar bien documentada la relación entre el sobrevenir de esa vida peor y las aspiraciones populares al cambio político (independientemente de que no se planteara en los términos democráticos hodiernos), pues como decía Juan de Mariana en *De Rege et Regis Institutione* (1599) “es ciertamente muy peligroso que haya muchos pobres en la república y que carezcan de todos los bienes, porque es forzoso que ocurran continuas turbulencias y movimientos”. Efectivamente, si las personas se constituyen en unidades políticas para la vida mejor, como diría Aristóteles, no ha de sorprendernos que cuando por causas no deseadas e incontrolables la vida sea peor, pongan en cuestión las constituciones mismas de sus unidades, busquen cambiarlas, unirse o desintegrarse.

A esta reflexión hemos de sumar que, aunque hemos avanzado en la provisión absoluta de bienes básicos (alimentos, medicinas, cobijo, etc.) hoy en día, carecemos todavía de la capacidad, tal como en la Antigüedad, de mantener una provisión siembre creciente y estable de bienes para todos. Independientemente del origen de la disponibilidad de recursos (para unos las riquezas naturales, para otros distintas incluso opuestas instituciones económicas, etc.) está claro que no están totalmente bajo nuestro control, hasta el día de hoy, su provisión constante, aunque sea mayor, está fuera de nuestra voluntad y afectada por crisis y dificultades, ya sea por catástrofes naturales, agotamiento de recursos o ciclos económicos consustanciales a los distintos sistemas socioeconómicos etc, que hacen que existan cíclicas reducciones de recursos. Estas

irregularidades garantizan que siempre se pueda dar todavía esa “vida peor” en términos relativos y, por tanto, es previsible la voluntad de cambio constitutivo de unidades políticas, llegado el caso. Si la disponibilidad de recursos fuera siempre creciente y segura, habría cierta posibilidad de pretender conjuntos.

Si los conjuntos fueran estables y eternos, la respuesta nuestro problema sería sencilla de acuerdo con los fundamentos básicos del Derecho Internacional: que cada conjunto, y de manera principal los estados, se reparta la riqueza disponible sobre la que son soberanos, y colaboren entre sí (la redistribuyan) voluntariamente conforme a obligaciones imperfectas a través de cooperación internacional, y dentro de los estados conforme a la legislación nacional. Así los vectores de desarrollo serían siempre positivos. Pero, como sabemos, la experiencia compromete esta aspiración a una estabilidad final.

Partamos pues de la asunción de que *los conjuntos de personas no se mantienen estables o al menos no siempre aspiran a mantenerse estables, los recursos disponibles no son siempre crecientes ni la disponibilidad de recursos naturales es siempre la misma.*

Hay que desechar, por tanto, metodológicamente la existencia de unos conjuntos definitivos ideales a partir de los cuales construir las instituciones sociales y económicas definitivas, (la aspiración de encontrar el fin de la historia,) y poder finalmente crecer indefinidamente. Es ésta, hoy por hoy, la búsqueda de un unicornio en la que se han embarcado, desde sus puntos de vista, representantes de todas las corrientes ideológicas. Mientras la disponibilidad de los recursos no sean indefinidamente estables y creciente, no podemos esperar conjuntos de personas con aspiraciones de estabilidad. Y aún cuando fueran siempre estables y crecientes, sin cierta igualdad, la voluntad de estar relativamente mejor hace dudar de la posibilidad de alcanzar tales aspiraciones de estabilidad definitiva.

Sin embargo, como sabemos, llama la atención la falta de normas internacionales que regulen estas transiciones, que el Derecho Internacional ha intentado solventar básicamente con el llamamiento a la *voluntariedad* como criterio fundamental, un criterio que no tiene en cuenta *necesariamente* la mejor realización de derechos humanos, aunque la involuntariedad suponga, cuando es ilegítima y contraria al DI, una violación de los mismos.

Así pues, podemos encontrar soluciones parciales, evolutivas, como durante la lucha contra el colonialismo se formaron nuevos conjuntos conforme al derecho de autodeterminación. Y es que si supiéramos exactamente

a) quiénes conforman o deben conformar –desde siempre y para siempre- esos conjuntos de personas, y en último caso los estados (como han intentado asegurar los nacionalistas primordialistas respecto de sus propio conjunto), la solución política se simplificaría muchísimo. Es este un ensueño de estabilidad pretendido alguna vez desde todas las filas ideológicas⁹⁰⁰. Si además

⁹⁰⁰ Ciertos liberalismos, basados en conjuntos dados, defienden la inamovilidad de los conjuntos por no existir dar respuesta la teoría clásica liberal a la formación de los mismos, pues se enfocaba en la lucha contra el tirano –allá donde hubiera un rey, había un demos-. Los nacionalismos defienden esa suerte de fin

b) el crecimiento económico fuera siempre creciente y los recursos siempre disponibles de manera estable, no tendríamos tantos problemas respecto a la redistribución de bienes para lograr que los vectores de desarrollo fueran siempre crecientes, incluso para lograr que los vectores de nuevos conjuntos fueran también positivos sin llegar a provocar que los vectores de desarrollo de los conjuntos anteriores llegaran a ser negativos. Pero la experiencia nos dice que desgraciadamente esto no es así, y que el sueño de estabilidad eterna ha producido monstruos.

La experiencia nos dice que estos fenómenos están estrechamente unidos: lo cambiante de los recursos naturales disponibles (se agotan, se descubren nuevos), las oscilaciones del sistema económico, las instituciones económicas que crean crecimiento económico, y la volatilidad de los conjuntos políticos que se crean o aspiran a crearse para controlar de manera diferente los recursos disponibles, en la intención de mejorar su potencial situación. Esta es una observación materialista difícil de refutar. Incluso los nacionalistas primordialistas más espiritualistas pueden observar una conexión entre los bienes materiales, los derechos garantizados y las aspiraciones relativas de autogobierno, incluso la influencia de las condiciones materiales en la percepción misma del *self*, como defendería Anderson.

Así pues, la disponibilidad de riquezas y recursos cambian, pueden crecer, pero pueden también decrecer, y en consecuencia, existe la eterna pretensión de modificar los conjuntos de personas que se autodistribuyen los recursos que incluyen las riquezas naturales⁹⁰¹. En consecuencia, los derechos ven afectados sus niveles de realización. No obstante, es importante distinguir el alcance de la importancia relativa de disposición de riquezas naturales y apuntar que la mayor disponibilidad de recursos potenciales tampoco

de la historia a partir de la aspiración de coherencia definitiva y eterna personas-cultura-territorio. También el historicismo marxista requería acabar con esta volatilidad de los conjuntos, dejarlos estables, lo que se denominaba superar el problema nacional, para enfocarse cuanto antes en la victoria trabajadora en la lucha de clases.

⁹⁰¹ Considero las tesis de los decrecentistas, como las defendidas por Serge Latouche y otros, para el objeto del presente trabajo, como posiciones perfectamente asimilables y compatibles con lo expresado en la formulación general del derecho humano al desarrollo. Los decrecentistas pretenden igualmente un aumento de la realización de los derechos y de los recursos disponibles para realizar los derechos humanos contenidos en el vector de desarrollo, aunque esa disponibilidad no provenga de una mayor industrialización o explotación tradicional de los recursos naturales. Difieren en cómo lograr esos recursos cuya disponibilidad puede aumentarse mediante la mayor producción, o como defienden el mejor uso de los recursos, de manera más respetuosa con el medio ambiente, disminuyendo el consumismo, las necesidades básicas, etc. Me interesa de sus planteamientos la incorporación del concepto de recursos limitados tan falta en otras construcciones teóricas y el énfasis en la relación entre derechos, también colectivos y el elemento económico. Las tesis decrecentistas no resuelven por sí mismas la relación con el derecho de autodeterminación no más que cualquier otro uso ideológico de los recursos o de ejercer los derechos: el derecho de autodeterminación continuado (ongoing) incide precisamente en que los pueblos puedan explotar los recursos sin injerencia exterior ilegítima, siguiendo, o no, las tesis decrecentistas. Desde el punto de vista formal, y para el objeto desde esta tesis, nuestra formulación no cambiaría sustancialmente: un incremento del vector del desarrollo “decrecentista” buscaría igualmente un incremento progresivo de realización de derechos y un incremento de g^* , siendo éste un elemento no basado en mayor explotación de recursos y crecimiento económico cualquiera, sino basado en la liberación de recursos mediante una explotación responsable y sostenible de los recursos, una economía humana, lo que a su vez redundaría en el aumento de los demás elementos del vector de desarrollo.

garantiza por sí sola la mejor realización de derechos: es condición no suficiente, pues son necesarios muchos menos recursos para vulnerar derechos que para cumplirlos satisfactoriamente.

Las aspiraciones a modificar los conjuntos dados son base de toda ideología como proyección futura de un ideal de la imaginación social, así como las asignaciones de los recursos disponibles y los derechos prioritarios en su financiación. Las tesis de pueblos eternos del nacionalismo primordialista no soluciona el problema de redistribución de recursos pero sabe crear *nuevos* entes metafísicos con una ficción de eternidad. Por el contrario, los pueblos y estados como conjuntos dados defendidos por el liberalismo clásico no ha sabido satisfacer a los que aspiran a modificar los conjuntos, coincidan o no con estados. Por ser estos futuros conjuntos ideales de la imaginación y no de la razón, son limitados como objeto de estudio científico. Es común encontrar también en parte de la doctrina partir de la callada asunción acrítica del proceso siempre creciente de expansión de derechos basada en una disponibilidad ilimitada de recursos, una asunción optimista heredera de concepciones clásicas de progreso. El lenguaje optimista del Derecho Internacional, que a primera vista parece apoyar ese punto de vista -distintos pueblos tienen derecho a desarrollarse sin injerencia ilegítima y a cooperar para ese fin- pone, sin embargo, límites a las herramientas que los pueblos y estados pueden usar en escenarios negativos de desarrollo, de recursos naturales decrecientes, crisis económicas, etc.

Las distintas respuestas que podemos encontrar a esas causas de voluntad de cambio, desde el punto de vista de constitución de unidades políticas, integrando, uniendo, secesionando, desintegrando conjuntos, tiene muy distintos efectos en la disponibilidad de recursos, riquezas y derechos sobre las personas, particularmente en sistemas democráticos.

El Derecho Internacional regula de alguna manera estos escenarios sobre la base de la voluntariedad, aunque de una manera no tan exhaustiva como fuera deseable: los estados como conjunto principal de autodistribución de recursos no pueden por la fuerza aumentar esos recursos disponibles a costa de otros, prohibiéndose en todo caso la intervención ilegítima (colonialismo, imperialismo, guerras de conquista), sobre la base del principio de integridad territorial y soberanía de los estados, y se fomenta la cooperación voluntaria entre los estados y la remoción de obstáculos al desarrollo de los pueblos por parte de los estados.

Aún así, cómo afrontar escenarios negativos desde un punto de vista de corresponsabilidad a nivel global es una tarea incompleta. Es necesario todavía superar la perspectiva parcial de una autodeterminación que asume tanto la disponibilidad de recursos naturales y riquezas como si fueran siempre crecientes y disponibles como la posibilidad de crear instituciones económicas de crecimiento totalmente autónomas, con una seria reflexión sobre cómo poder articular conjuntos y vectores de desarrollo cuando los recursos disponibles son decrecientes (si es esto posible y cómo) lo que además, es causa de la inestabilidad de los conjuntos. La precaria situación de la normativa internacional en materia de sucesión de estados es muestra de ello.

La autodeterminación implica, como hemos dicho, la aceptación implícita de la multiplicidad de diferentes conjuntos de personas con distinta disponibilidad *jurídica* y autodistribución de riquezas y recursos naturales, distinta disponibilidad *material* de cantidad de recursos y riquezas, distintas obligaciones entre sí y entre sus miembros, es decir, en distintos *círculos de solidaridad*, usando la terminología de Martha Nussbaum⁹⁰², círculos que en ocasiones interseccionados, con obligaciones perfectas e imperfectas, círculos que en su modificación producen imperfectibilidad y perfectibilidad de dichas obligaciones de cumplimiento de derechos humanos. Por ello, es razonable pensar que en la búsqueda de su autointerés, en entornos negativos, las personas buscarán reorganizarse en nuevos o renovados círculos de solidaridad o conjuntos diferentes de personas para maximizar sus potenciales ganancias respecto a estas posibilidades. Sin embargo, la búsqueda del beneficio propio, que incluye la mayor realización de los derechos humanos como consecuencia de esta reorganización (en beneficio de los nuevos conjuntos) no puede incluir la asunción acrítica de la reducción de derechos humanos.

Esta posición que ha sido defendida por Robert McCorquodale⁹⁰³ y otros –la realización del derecho de autodeterminación en cualquiera de sus interpretaciones con un enfoque de derechos humanos–, puede hacerse también desde la óptica del derecho al desarrollo como derecho humano.

La representación de Sengupta del derecho humano al desarrollo como un vector que se puede aplicar a distintos conjuntos es especialmente útil en este punto como complemento a posiciones como la de MacCorquodale, es decir, como herramienta para representar e investigar la relación entre el desarrollo de conjuntos y la proyección temporal de su desarrollo como proceso, y la relación entre distintos conjuntos, especialmente estados, pues permite distinguir clara y gráficamente no sólo el nivel de desarrollo de un grupo humano respecto de sí en el tiempo (positivo o negativo) sino su situación relativa respecto a otros conjuntos y subconjuntos, distinguir entre situaciones en las que un grupo puede percibir en abstracto la mejora relativa respecto a otros, distinguir situaciones de cese de opresión, la evolución de las obligaciones entre los mismos, etc.

Las precisiones que el derecho al desarrollo da al derecho de autodeterminación se traslada al esquema de Sengupta de la siguiente manera respecto a la vertiente constitutiva: todos los vectores de desarrollo resultantes de cualquier conjuntos, aplicado materialmente, debe ser positivo. Por tanto, *la unión, absorción, secesión, desintegración o mera sucesión de conjuntos, es decir, cualquier cambio de conjuntos, debe resultar en nuevos conjuntos con vectores de desarrollo positivos o al menos no negativos.*

Gracias a la formulación que defendemos, expresable gráficamente en vectores desarrollo positivos o negativos aplicados a conjuntos y a subconjuntos, estados y unidades infraestatales y supraestatales con distintos criterios y recursos de autodistribución,

⁹⁰² Nussbaum, M.C., Cohen, J., (ed) *For love of country? Debating the Limits of Patriotism*, Beacon Press, 1996, ed 2002.

⁹⁰³ McCorquodale, R., “Self-Determination...”, op. cit. pp. 857–885

podemos distinguir claramente distintas situaciones sociopolíticas pero incluyendo los requisitos del derecho al desarrollo, aplicados en un período temporal determinado. Esto es así porque consideramos, además, la inestabilidad intrínseca de los conjuntos, siendo de especial relevancia los estados. Por ello es posible distinguir no sólo los vectores de conjuntos dados sino los nuevos conjuntos que se crean. Independientemente de que sean legítimos o ilegítimos los cambios de conjuntos, podemos distinguir cómo se afectan los derechos, lo que a su vez nos da pistas para su legitimidad anterior.

En general, ante la situación en la que podamos distinguir uno o más vectores *negativos* para uno o más grupos reales de personas, que están siendo perseguidas u oprimidas, la norma del derecho al desarrollo llama a poner todos los esfuerzos en revertir las situaciones para lograr vector positivos.

La responsabilidad de realizar estos esfuerzos para lograr que todos los vectores sean positivos está principalmente en las manos de los estados, como unidades principales de redistribución de recursos, aunque los conjuntos beneficiarios no tengan por qué coincidir con los sujetos obligados (por ejemplo, pueblos sin estado, de extensión supra o infraestatal cuya expansión de derechos depende del estado). Está también en manos de los estados, por ser los sujetos principales soberanos en la Sociedad Internacional.

Lograr y mantener vectores positivos de desarrollo en cualquier interpretación y aplicación del derecho de autodeterminación, depende de distintas variables que informan de los recursos disponibles, de cómo se redistribuyen y de cómo se propone su nueva redistribución, así como de los derechos que se reconocen y de su respeto efectivo, influyendo el potencial aumento o disminución de las personas que forman parte de los conjuntos (lo que puede resultar en unión o desunión de conjuntos) y de la variabilidad de los recursos (escenarios positivos o negativos).

Así podemos tentativamente considerar:

- a) Si los procesos de autodeterminación constitutiva son de integración (unión, absorción) secesión, o desintegración de conjuntos-, pues tienen dinámicas distintas sobre la redistribución de recursos y derechos (los procesos de integración voluntaria por sí mismos ofrecen por ejemplo expansión de mercados y derechos no preexistentes).
- b) Si estos procesos cuentan con un elemento volitivo claro expresado en procesos participativos (siendo los procesos involuntarios prohibidos por el DI, tal y como puede distinguirse los casos de colonialismo e imperialismo de los casos de integración voluntaria), teniendo en cuenta que la voluntariedad está íntimamente ligada con el autointerés y éste con los resultados esperados de una redistribución de recursos y derechos.
- c) Si la constitución de nuevos conjuntos incluye la creación o no de nuevos estados (autodeterminación externa e interna), o si son unidades superestatales o subestatales, por el diferente tipo e intensidad de obligaciones respecto a la realización de derechos humanos que comporta y por la soberanía sobre las riquezas y recursos naturales.

d) Si en la proyección temporal de los procesos de desarrollo nos encontramos en entornos negativos o entornos positivos, es decir, si estamos en un proceso de aumento de recursos y riquezas disponibles o en una situación de contracción. Esto es fundamental, porque afecta directamente las posibilidades de una redistribución equitativa. En entornos de crecimiento, por ejemplo, un conjunto puede desintegrarse formando conjuntos con vectores positivos. Sin embargo, en entornos de decrecimiento, para que un conjunto mantenga su niveles de riquezas naturales disponibles, otro ha de disponer de menos, provocando necesariamente un vector negativo, aunque sepamos que no son las riquezas naturales las mejores ni únicas fuentes de disponibilidad de recursos para cumplir con los derechos a largo plazo.

e) Finalmente, hemos de considerar la naturaleza compuesta de los vectores de desarrollo y los recursos como medios para cumplir con los fines que son los derechos en cuanto elementos del vector.

En general, los recursos son los medios para cumplir con la realización progresiva de derechos y crecimiento económico, y por ello insistimos en cómo la unión o desunión afecta de manera diferente a esta redistribución de recursos. Sin embargo, aunque para ser realizados son necesarios recursos, para ser vulnerados no hace falta el mismo volumen de recursos disponibles. Dicho de otro modo *un vector positivo de desarrollo requiere recursos para realizarlos, no necesariamente derivados de riquezas naturales, y una distribución equitativa de los mismos, pero un vector negativo de desarrollo requiere muchos menos recursos, pues puede realizarse solamente con los recursos necesarios para vulnerar los derechos.*

Creo que estas consideraciones, aunque no expresados en estos términos relacionados con los vectores de desarrollo, serían compatibles con otros intentos que históricamente han tratado de explicar las diferencias conceptuales que han llevado a la simultánea aceptación general por un lado de la lucha contra la opresión y el colonialismo y por otro el rechazo a la secesión unilateral y la protección de la integridad territorial de los estados, incluyendo la diferencia entre chauvinismo nacionalista y autodeterminación de las naciones de Lenin, o la diferencia entre la libertad de los oprimidos y la secesión de los ricos para evitar obligaciones de justicia distributiva de liberales igualitarios como Thomas Pogge, o los criterios para conformar teorías remediales de la secesión como Allen Buchanan, la diferencia que las Naciones Unidas establece entre fin del colonialismo y secesión unilateral en el sistema internacional, etc.).

Con las premisas propuestas, y considerando la naturaleza compuesta de los vectores de desarrollo y los entornos negativos y positivos de disponibilidad de recursos, es más fácil navegar en las interpretaciones del derecho de autodeterminación constitutiva conformes o no conformes al derecho al desarrollo de una manera formal y apriorística.

Así pues, podemos distinguir entre uniones voluntarias (que redistribuyen los recursos disponibles) e involuntarias (coloniales) que produzcan vectores positivos o negativos (porque se produzca vulneración de derechos aunque se registre crecimiento económico),

podemos distinguir secesiones y desintegraciones voluntarias en entornos positivos (porque podemos mantener en nivel de recursos en los conjuntos resultantes) o en entornos negativos (en los que para que un conjunto mantenga su nivel de recursos, otro tiene necesariamente que tener menos), pero también podemos distinguir la situación de secesión de las unidades políticas en entornos económicos negativos con derechos respetados que buscan evitar responsabilidades de justicia distributiva, de aquellas unidades políticas en entornos negativos, que buscan aumentar sus recursos relativos aunque otras pierdan, pero que además ven sus derechos arbitrariamente vulnerados, etc.

Hemos de precisar que, si hemos de descartar una particular aplicación del derecho de autodeterminación que cause un vector negativo de desarrollo, ha de demostrarse una relación directa de causa-efecto entre ellas, es decir, que la particular aplicación del derecho de autodeterminación produzca *por sí misma* un vector negativo de desarrollo. Naturalmente, no podemos saber a ciencia cierta si en el futuro los procesos de desarrollo para aun conjunto serán positivos, o su naturaleza o intensidad –sólo contaremos con meras proyecciones más o menos racionales de expectativas futuras de acuerdo a los datos disponibles presentes-, pero sí sabemos que los estados deben poner todos los medios para que sean positivos, por lo que hemos de descartar aquellos escenarios respecto de los cuales tenemos un convencimiento de que van a causar, inevitablemente, una vulneración del derecho al desarrollo. Está claro que esto abre otro campo de debate, cuándo este convencimiento es absoluto, para el que la respuesta sólo puede ser casuística.

En el proceso de expansión constante del cumplimiento de derechos humanos y crecimiento humano -que puede ser compatible con la tendencia a la expansión de mercados-, la precisión otorgada por la aceptación del derecho al desarrollo sería, si se me permite la metáfora, una suerte de válvula antirretorno o unidireccional en el sistema general de protección de derechos humanos y en el proceso constante de desarrollo creciente basado en derechos: cualquier interpretación que produzca expansión de todos tiene cabida, pero no una que produzca, por sí misma, o como consecuencia directa de su ejercicio, y de manera ilegítima, el subdesarrollo o el vector negativo de desarrollo de alguno de los conjuntos o subconjuntos.

La responsabilidad queda, sin embargo, en manos de los estados, como sujetos obligados a cumplir el derecho al desarrollo de otros sujetos que no son necesariamente coincidentes. Esto, como bien sabemos, causa, en la práctica, una tensión interna de difícil resolución en nuestro actual sistema internacional, en el que los estados son los sujetos últimos de soberanía.

Hoy por hoy, la cooperación internacional al desarrollo sigue respondiendo a esas obligaciones imperfectas de ayuda entre estados, hasta que media un tratado multilateral o bilateral y se perfeccionan las obligaciones. Al interior de los conjuntos de solidaridad, sin embargo, existen unas obligaciones derivadas de la distribución autónoma de recursos, plasmadas en las normas. Esto es especialmente cierto al interior de los estados, donde hay obligaciones perfectas de dar plasmadas en la ley. Por eso, la unión, fusión, secesión

y desintegración de conjuntos puede también verse como *procesos de perfectibilidad e imperfectibilidad de obligaciones generales de ayudar*.

Pero existe ese mínimo lógico distinguible en estos procesos de perfectibilidad e imperfectibilidad de obligaciones de ayuda, que obliga a los estados y beneficia a los conjuntos-pueblo y a los individuos (en esta pantanosa situación en la que obligados se resisten a promover el desarrollo de beneficiarios distintos a ellos, en ocasiones incluso de manera contraria a sus intereses, sin que exista un mecanismo superior de control judicial). Este mínimo lógico existe independientemente de que coincidan los pueblos o no con los estados: si los estados tienen la obligación de remover los obstáculos para el desarrollo, lo mínimo que pueden hacer es no poner esos obstáculos. Esto se extiende a todos los pueblos, aunque no sean estos sujetos pasivos. Defendemos pues *que el potencial beneficio de un pueblo debe ser compatible con la obligación absoluta por parte de los estados de, la menos, no dañar el proceso de desarrollo de un pueblo, coincida o no con un estado*.

Mientras que la obligación de los estados de remover obstáculos para el desarrollo es una obligación imperfecta, durativa y sujeta a interpretación, y la obligación de los pueblos constituidos dentro de los estados estén obligados análogamente de manera imperfecta, la aceptación de este principio de remoción de obstáculos implica de manera lógica el impedimento de llevar a cabo actuaciones que obstaculicen por sí mismas el desarrollo de otros conjuntos de personas en sus distintas manifestaciones.

Esta misma prohibición absoluta de dañar, pudiendo evitarlo, el proceso de desarrollo de los otros está apoyada por el deber general de respeto de todos los derechos humanos, dado que el derecho al desarrollo los incluye como respeto de los derechos de las personas individuales que conforman los conjuntos. Pero añade, al mismo tiempo, el respeto al proceso de crecimiento económico y los recursos materiales necesarios para cumplir con esos derechos universales y aquellos derivados de las particularidades culturales del pueblo en cuestión (núcleo esencial de autodeterminación) y de su expresión de soberanía (principio democrático).

Así pues, a la luz de la realización progresiva de los derechos humanos y del derecho al desarrollo, plasmada en vectores positivos junto con una autodeterminación basada en la voluntad y respeto a derechos culturales, y no en identidades primordiales, podemos distinguir claramente entre (ejemplos sin valorar su viabilidad o su legitimidad):

1.- Unión de conjuntos:

- a) una *integración voluntaria* que produce vectores *positivos*. Por ejemplo, en el caso de integración de estados, basada en procesos participativos respetando los derechos consentida por todas las partes (dos conjuntos y sus subconjuntos pueblos incrementan su desarrollo) y
- b) una *integración forzosa* que causa vectores *positivos y negativos*. Como el caso *imperialismo* o colonización que causa el mejoramiento de una sola parte (un conjunto

incrementa su desarrollo y uno o más sufren vectores negativos de desarrollo)

Desde el punto de vista de recursos disponibles, se entiende que la integración voluntaria avala la modulación de recursos y riquezas disponibles para la realización de derechos de todos, abre mercados y ofrece posibilidades. La involuntaria, aunque para el opresor abra mercados y aumente recursos disponibles, la vulneración de derechos inevitable produce vectores negativos. A su vez estas consideraciones son diferentes si nos encontramos ante autodeterminación externa o interna pues en el caso de la integración de conjuntos involuntaria dentro de un estado (como en una reordenación territorial conforme a la ley) existen otras consideraciones adicionales como el interés general que justifica la unión involuntaria de conjuntos si se respetan los derechos fundamentales individuales de sus componente, el orden constitucional, etc., consideraciones no aplicables a nivel internacional.

2.- División de conjuntos:

c) una *secesión* voluntaria, acordada y legal que produce en lo posible dos o más vectores *positivos*, sea en escenario positivo o negativo.

d) una *independencia en un proceso de descolonización*, (al menos dos conjuntos con derechos diferentes y redistribución de recursos diferentes, uno de ellos con vector positivo y el resto con vectores negativos) que produce dos o más conjuntos de vectores *positivos* revertiendo los vectores negativos.

e) Una *secesión unilateral* de los más privilegiados cuyos demás derechos son respetados (todos los vectores positivos) para evadir responsabilidades de justicia distributiva. En este último caso, nos encontraríamos ante al menos dos resultados posibles: e') un incremento todavía mayor de la pendiente del vector de desarrollo del secedente y uno varios vectores positivos (en escenarios positivos de disponibilidad creciente de recursos) o e'') que el incremento del secedente produzca de por sí mejora de sí, vector *positivo* y vectores *negativos* del resto (especialmente en escenarios negativos de disponibilidad decreciente de recursos).

A su vez, hemos de distinguir si el origen de los vectores negativos están en relación directa con escenarios negativos de disponibilidad de recursos o por violación arbitraria de derechos. Un conjunto aparentemente más privilegiado puede en su autointerés buscar su secesión por incrementar su desarrollo a pesar de los demás, es decir, aumentando su parte de recursos disponibles, o por escapar de una violación arbitraria de otro de los elementos del vector, algo que no requiere de muchos recursos. En este caso, se revela especialmente importante atender a la naturaleza compuesta del vector de desarrollo, que está basado en derechos y no en recursos que son solo medios, y los entornos positivos o negativos de disponibilidad previsible de recursos para cumplir con los derechos.

3.- Desintegración de conjuntos:

La desintegración fáctica de un estado produce estados sucesores con vectores positivos y /o negativos. La producción de vectores positivos y negativos ha de conjugarse con el cambio o evolución de las obligaciones. Podemos distinguir entre conjuntos con subconjuntos dados de vectores positivos o negativos sin que implique ningún cambio externo en las obligaciones. Pueblos con o sin proyección territorial dentro de estados – minorías, pueblos indígenas- que ven sus derechos expandidos o no en relación con los demás ciudadanos del estado pero considerando sus derechos diferenciales.

Así pues, tanto la unión, como la desunión, como el mantenimiento de los conjuntos de personas pueden resultar en vectores positivos y vectores negativos, así como en el seno de un conjunto positivo pueden existir subconjuntos de vectores positivos y/o negativos, aunque no es tan claro que podamos a predecir de antemano tal resultado.

Puede resultar tentador a primera vista utilizar los fines que exige el derecho al desarrollo junto con otras consideraciones de justicia distributiva como criterios para decidir qué grupos concretos de personas deben o más bien, pueden, ejercer el derecho de autodeterminación constitutiva, especialmente respecto a la estatalidad, partiendo de la base de que una teoría de la autodeterminación constitutiva, incluyendo secesión, integración, etc., debería idealmente cumplir con la maximización de derechos y de recursos para su cumplimiento de todos.

Estos condicionantes de justicia distributiva al ejercer el derecho de autodeterminación – y en su caso, el derecho a la secesión-, ha sido estudiado por numerosos autores. Allan Buchanan, por ejemplo, ha tratado el tema exhaustivamente. Recientemente, haciendo referencia a la secesión, Jason Sorens, de Dartmouth College, el autor ha compilado algunas de estas asunciones ideales de diversas fuentes⁹⁰⁴:

- maximizar la integridad física de todos,
- maximizar todas las demás libertades básicas para todos (asumiendo asimismo que no está claro cuáles son esas libertades básicas),
- seguir el criterio de optimalidad de Pareto,
- satisfacer otros principios morales.

Sin embargo, esta aproximación tiene algunos problemas, algunos de ellos ya mencionados. Otro problema, el de seguir el criterio de optimalidad de Pareto, ofrece dificultades adicionales, como veremos más adelante.

Finalmente, las conclusiones de un debate sobre condicionantes de determinadas formas de ejercicio de autodeterminación constitutiva, aunque interesante, no nos aportarían gran cosa gran cosa en los casos en los que se constate la *desintegración fáctica* de estados, como la determinada por la Comisión Badinter.

⁹⁰⁴ Sorens, J., 2014 (forthcoming). “Legal Regimes for Secession: Applying Moral Theory and Empirical Findings.” Public Affairs Quarterly. Disponible por el momento en: https://www.academia.edu/8077983/Legal_Regimes_for_Secession_Applying_Moral_Theory_and_Empirical_Findings

El derecho al desarrollo implica asumir la existencia de diferentes conjuntos-pueblo, y diferentes estados, diferentes niveles de reparto de bienes y derechos, la distinta disponibilidad jurídica y material de bienes también para conjuntos cambiantes, pero exige reflexionar sobre el daño o coste asumible sobre los derechos humanos de los implicados.

Ante la incapacidad de encontrar una solución universal sobre quiénes han de conformar los conjuntos, al menos en coherencia con el nivel de desarrollo del DI actual, –un debate que repito, escapa de nuestro estudio- regresar la mirada a la humanidad inevitable de los componentes de los conjuntos nos otorga una certeza: que sean quienes sean los que compongan los conjuntos habrán de ser humanos con derechos universales.

Si evitamos el debate sobre quiénes han de conformar los conjuntos, particularmente el espinoso debate sobre la secesión, y nos concentramos en el efecto de salvaguardar los derechos, teniendo en cuenta una vez más la importancia del estado, algunos de lo que pudieran parecer problemas de *integración, adhesión, desintegración o secesión* (sobre los que se ha escrito mucho) no son en realidad más que problemas de *sucesión* (sobre los que se ha escrito bastante menos y la normativa internacional es escasa).

Esto es especialmente claro cuando vemos que el derecho al desarrollo como condición no sirve en casos de *desintegración*, aunque puede ser muy útil en el análisis de la menos estudiada pero no por ello menos importante cuestión de la *sucesión* de estados.

Y es que el enfoque sobre las *causas* que han ofrecido predominantemente los debates sobre la autodeterminación constitutiva (por su relación con potenciales beneficios o costos marginales) no han tenido tanto en cuenta las *consecuencias* sobre los derechos de todos como aquellos debates sobre la *sucesión*, quizá porque los primeros debates están marcado por los derechos insatisfechos y los segundos inciden sobre las formas futuras de cumplir con esos derechos.

El debate sobre la sucesión de estados es fundamental pues no se trata ya de definir pueblos o conjuntos de personas, los conjuntos están definidos, sólo queda por definir las obligaciones concretas que asumen los nuevos conjuntos. Esto es especialmente importante en el nacimiento de nuevos estados, pues no es tanto la composición sino las obligaciones y derechos que se asumen y modifican las de mayor relevancia para las personas.

En este sentido, un derecho de autodeterminación precisado, enmarcado por el derecho al desarrollo como proceso, ha de tener en cuenta no sólo la redistribución de recursos sino las obligaciones y los obligados a cumplir con la realización de derechos humanos. Por ello, no es difícil llegar por esta vía a una conclusión parecida a quienes reflexionan sobre la sucesión de estados. En plena conformidad con lo subrayado por la Comisión de Venecia en su Declaración de 1996 (art. 4) “en el evento de una sucesión de Estado, los Estados involucrados podrán, mediante acuerdo, solucionar la cuestión de la nacionalidad. **Deberán respetar los derechos humanos de las personas involucradas, tal y como se garantiza por los instrumentos internacionales**”.

Así pues, en principio, aunque no podemos saber, ni sea este nuestro enfoque, qué conjuntos de personas son legítimos y cuales son ilegítimos, salvo en casos de opresión colonial, quienes son pueblos o cómo tienen que distribuirse los recursos, y en qué grado (cuáles han de ser estado, cuales no), especialmente fuera de los casos extremos contemplados en las teorías remediales de la secesión, ya que nos encontramos con el límite de los ideales de la imaginación, el criterio esencial trazado por el derecho al desarrollo al considerar los conjuntos inestables es guardar el mínimo de no provocar por sí mismo vulneraciones de derechos evitables que deriven en producir un vector negativo de desarrollo, ni a sí mismo ni a los demás, lo que se corresponde, ni más ni menos, con el respeto del principio de fraternidad humana en su nivel más básico.

Desde este punto de vista, los estados son círculos de solidaridad reforzada, en los que se produce la mayor redistribución de recursos, y los principales responsables de cumplir con los derechos humanos. Pero tal y como además nos recuerda el art.1 de la DUDH, la realización de los derechos humanos debe hacer se de manera que nos comportemos “fraternalmente los unos con los otros” a nivel humano.

El principio de fraternidad, como nos explica John Rawls en su *Teoría de la Justicia*, no sólo se corresponde con un vago principio político de ecos revolucionarios⁹⁰⁵ sino que precisa la manera de ganar. El autor norteamericano lo posiciona en su teoría de la justicia como equidad en relación con el principio de la diferencia (mientras que la libertad la relaciona con el primer principio de justicia y la igualdad, con el primer y con el segundo, igualdad de oportunidades). El sentido natural de la fraternidad tiene un significado concreto referido a la “idea de no querer tener mayores ventajas a menos que vayan a beneficiar a los que están peor”.

Haciendo una comparación con los miembros de una familia, que comúnmente no desean ganar a menos que puedan ganar de manera que salvaguarden el interés del resto, Rawls afirma que el principio de la diferencia tiene el mismo efecto: “aquellos en mejores circunstancias están dispuestos a tener sus mayores ventajas sólo bajo un esquema en el cual esto es posible en beneficio de los menos afortunados”⁹⁰⁶.

Notemos que Rawls no trasladó exactamente su teoría de la justicia a nivel internacional en su *El derecho de gentes*, al tratar la cuestión, para decepción de muchos de sus admiradores y discípulos, de manera destacada Thomas Pogge, Brian Barry y Charles Beitz⁹⁰⁷. Aunque sí que apuntó Rawls, sin embargo, como hemos mencionado, que una

⁹⁰⁵ Sabemos que al concepto de fraternidad ha recibido distintas y muy diferentes definiciones, desde una especie de solidaridad que plasma obligaciones imperfectas de ayuda en virtud de pertenecer al mismo género humano, hasta el sentimiento prepolítico que aúna los intereses de un conjunto de personas para gobernarse a sí mismas. Aquí nos referiremos a una acepción, de fraternidad humana más concreta pero más humilde y de alcance más limitado.

⁹⁰⁶ Rawls, J., *A Theory of Justice*, op. cit, p. 105

⁹⁰⁷ Ver por ejemplo, Beitz, Ch., “Rawls's Law of Peoples”, *Ethics*, vol. 110, n. 4, 2000,

Barry, B., *The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines in A Theory of Justice by John Rawls*, Clarendon Press, Oxford University Press, 1973; Pogge, T., *Realizing Rawls*, Ithaca, Cornell University Press, 1989. También Buchanan ha criticado en este aspecto a Rawls en Buchanan, A.,

secesión no puede darse si lleva aparejada la opresión de las minorías de los nuevos estados –doctrina que siguió la Comisión Badinter–.

Partiendo de ese nivel más básico de *fraternidad* como forma especial de solidaridad que exige que un sujeto quiera o pretenda *mejorar su situación sólo si esa mejora no lleva aparejada, por sí misma, el empeoramiento evitable de la situación de otro sujeto miembro de la relación*. Para Rawls, del mismo modo que no es posible una secesión de que cause una opresión a minorías –cuestión que apoya también la mayoría de la doctrina internacional–, hemos de plantearnos su legitimidad respecto otras opresiones menos evidentes.

Véronique Munoz-Dardé ha apoyado la idea de que “la fraternidad no debería ser usada solamente para expresar el énfasis en la comunidad o cuidado más allá o anterior a la libertad e igualdad”⁹⁰⁸ (nótese el paralelismo con la anterioridad lógica de establecimiento de conjuntos conforme a la autodeterminación a los que aplicar el vector de desarrollo, en igualdad y libertad, incluyendo autodeterminación interna). Para Munoz-Dardé, el principio de la diferencia “constituye una interpretación contractualista de la fraternidad, congruente con la prioridad del derecho”, de manera que esta fraternidad contractualista ofrece “condiciones favorables en las que cada uno de nosotros puede desarrollar (...) libremente apegos personales (...). El duro terreno de la fría justicia es también el terreno más fértil para el cuidado y la compasión”⁹⁰⁹.

El principio de fraternidad humana que entendemos está expresado por el art.1 de la DUDH, que a su vez hace referencia a un conjunto global de personas unidas por los lazos de obligaciones imperfectas de cooperar y ayudarse entre sí, más allá de su pertenencia a estados, y sienta solamente una base de justicia distributiva a nivel global. Entre los distintos círculos de solidaridad reforzada, existe obligaciones imperfectas de cooperar entre sí a nivel internacional: pueden no ayudarse, *pero al menos no han de dañarse ni preferir intervenir negativamente en sus procesos de desarrollo*.

Este conjunto global humano no impide subconjuntos particulares con relaciones más estrechas y obligaciones perfectas de cooperación (estados, unidades políticas infraestatales, sociedades, familias, personales, etc.). Sin embargo, nos impone, respecto a la justicia distributiva, un requisito mínimo a nivel global, aunque sea mero desiderátum, respecto a la conformación de nuevos conjuntos: que sea hecha de manera que, o por lo menos provistos todos los medios para que, se resulte en un proceso en el que nadie pierda y al menos alguien gane.

En los casos de procesos de perfectibilidad de obligaciones (como unión o fusión de estados), los mercados se amplían y los círculos de solidaridad se expanden, si se mantienen sistemas democráticos e igualitarios, dando la oportunidad a que se expanda la posibilidad de realización de derechos. En los casos de desintegración o secesión, se dan

“Rawls’s Law of Peoples: Rules for a Vanished Westphalian World”, *Ethics*, vol 110, n. 4, 2000.

⁹⁰⁸ Munoz-Dardé, V., “Fraternity and Justice”, Bayertz, K., (ed), *Solidarity*, Philosophical Studies in Contemporary Culture, vol. 5, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1999, p. 82 y ss

⁹⁰⁹ Munoz-Dardé, V., “Fraternity and...”, op. cit., p. 82 y ss.

procesos de imperfectibilidad de obligaciones. Esa imperfectibilidad de obligaciones puede llevar aparejada, como hemos dicho, un empeoramiento de la situación relativa. Dicho de otro modo, poner fronteras puede hacer que unos estén mejor y otros peor, tanto en relativo como en absoluto, llegando a vulnerar sus derechos y creando lo que hemos denominado vectores negativos.

Considerando la íntima conexión entre la realización de derechos humanos y los recursos económicos durante la creación o destrucción de conjuntos, y el doble papel de los estados como conjunto de redistribución principal de recursos, pero también como principales responsables del cumplimiento de los derechos humanos, nos encontramos ante una difícil disyuntiva: ¿cómo podemos defender por un lado el mantenimiento de un nivel mínimo de fraternidad humana durante un proceso de sucesión y no exigirlo como condición para la aplicación del derecho de autodeterminación constitutiva, en forma de secesión de los ricos, por ejemplo?

Dar respuesta a estas cuestiones requiere reconocer que están emparentadas con los argumentos a favor o en contra de los cambios de conjuntos sobre una base de justicia distributiva –es un clásico en los debates sobre sucesión particularmente no tanto en otros como unión o integración de estados-.

Thomas Pogge, y otros, se posicionan claramente en forma de una autodeterminación constitutiva ilimitada que pueda aplicarse con el solo objetivo de beneficiar a los más ricos, pero no es una posición universal. Allen Buchanan igualmente restringe el derecho moral de secesión a un último recurso contra graves violaciones de derechos humanos. Por el contrario, nacionalistas primordialistas y voluntaristas extremos consideran irrelevante la redistribución de riqueza y consideran innegociable la identidad o la voluntad ilimitada de una parte para cambiar la constitución del todo. Pero estas disquisiciones tienen que ver, una vez más, con los argumentos de justicia distributiva para conformar nuevos conjuntos, particularmente estados.

Estos argumentos, pronto se ve, que sí tienen relevancia en los debates sobre la autodeterminación constitutiva, de manera muy especial en casos de secesión, quedan desactivados en los casos de desintegración fáctica de los estados, como el de Yugoslavia, en el que no se apreció suficientemente la imperfectibilidad de obligaciones entre los ex-conciudadanos, y la ruptura del principio de fraternidad, para el reconocimiento del nacimiento fáctico de nuevos estados.

Al fin y al cabo, el supuesto teórico de desintegración fue precisamente desarrollado por la Comisión Badinter para bordear la cuestión de la legitimidad y validez de la secesión.

La aplicación del criterio de fraternidad al que hacemos referencia tiene que ser válido también en casos de desintegración, por lo que hemos de restringirlo a los límites de la *discriminación legítima* –con el reconocimiento de los estados a nivel internacional- y al momento procesal en el que se da por definido los nuevos conjuntos, particularmente estados, a los que se aplica el vector de desarrollo. Nos referimos, en fin, a la aplicación

del criterio de fraternidad desde el mismo momento en que definimos fácticamente el conjunto al que aplicamos el vector de desarrollo.

Por otro lado, puede inducir a confusión referirnos a un principio genérico “que alguien gane y nadie pierda” sin indagar en la naturaleza de los bienes sociales que estamos refiriendo. El vector del derecho al desarrollo está compuesto por la realización de derechos y crecimiento económico, que necesitan recursos, sólo una parte de los cuales pueden provenir, o no, de la explotación de riquezas naturales, pues éstas además, pueden servir a o no a los fines de realización de derechos.

La distinción es pertinente, pues los derechos humanos, o más bien, su reconocimiento abstracto, son bienes públicos potencialmente no excluyentes y no rivales bajo determinadas condiciones de disfrute. Considerando la igualdad en dignidad fundamental de los seres humanos, los derechos humanos son bienes ilimitados y su reconocimiento a unas personas no priva a otras personas de los mismos.

Sin embargo, los recursos para la mejor realización de estos derechos, sí son bienes escasos y limitados, y por ello su explotación y redistribución responde a una lógica distinta. En nuestro sistema internacional, el reconocimiento de los derechos humanos es universal, pero los encargados de su cumplimiento y los principales gestores de los recursos parte de los cuales pueden ser riquezas naturales, para cumplir estos derechos son los estados. Por último las riquezas naturales también son bienes escasos y pueden ser utilizados como recursos para cumplir con derechos, y por ello se prevé la soberanía de los pueblos sobre las riquezas. Sin embargo, podemos distinguir los recursos necesarios para cumplir los derechos de las riquezas naturales porque éstas pueden servir a otros usos –privativos por ejemplo-.

Precisamente por ello durante la descolonización se insistió en que la soberanía permanente de los pueblos sobre las riquezas, para que contaran con los recursos para poder realizar derechos y no se quedaran en papel mojado, y precisamente por ello, más adelante, en la Declaración de 1986 se aboga por colocar al ser humano en el proceso de autodeterminación, para que estos recursos no sean desviados y sirven a fines distintos que no tengan que ver o vayan incluso en contra la realización de derechos humanos. Así pues, poseer más riquezas naturales no garantiza ni jurídica ni materialmente una mayor realización de derechos aunque potencialmente abra tal posibilidad.

Así, un enfoque de recursos que no tenga en cuenta su fin último, que es la realización de derechos humanos, puede causar cierta confusión. Si nos enfocamos solamente en los recursos, que son contables y limitados, entre los que se encuentran las riquezas naturales, el criterio mínimo de aplicación de la autodeterminación constitutiva (que produzca conjuntos con vectores positivos) podría entenderse a primera vista como el requerimiento de una distribución de recursos y riquezas entre conjuntos conforme al Principio de la Optimalidad de Pareto.

Pero este enfoque, tentador, presenta una serie de problemas. La especial composición de los vectores de desarrollo exige a su vez unas consideraciones adicionales que tal enfoque

no explica por sí solo: los vectores no están conformados exactamente por recursos sino por derechos y una expansión económica, que sí requieren de muchos recursos para su mejor realización, pero no sólo, pues por otro lado, hacen falta muy pocos recursos para su vulneración. No en vano, el mantenimiento de un criterio Pareto óptimo en una redistribución de los mismos, herramienta común por su claridad en negociaciones basadas en teoría de juegos, ha sido cuestionado en repetidas ocasiones. Efectivamente, las diferente naturaleza de los bienes, riquezas o recursos como medios y derechos como fines y elementos del vector, aunque unos sean necesarios para cumplir con los otros, afecta a las consideraciones sobre su redistribución. En fin, una distribución Pareto óptima de bienes económicos y materiales puede no resultar en una distribución de derechos conforme al principio de fraternidad. Es decir, distribuir recursos de manera Pareto eficiente no solo no garantiza que los recursos distribuidos así vayan a destinarse a cumplir con derechos sino que tampoco garantiza una distribución de los derechos en sí.

A esto puede oponerse, con buen criterio, que podríamos considerar seguir una optimalidad de Pareto en la redistribución de recursos no como un criterio erróneo, sino como un mínimo de justicia, pues como diría Rawls: “el principio de eficiencia no puede servir sólo por sí mismo como una concepción de justicia. Por tanto, debe ser completada de alguna manera”⁹¹⁰.

Por su parte, Amartya Sen incidía en 1973, en *On Economic Inequality*, que, mantener la Optimalidad de Pareto no garantiza justicia distributiva, ya que sólo puede lograr “un fin muy limitado”⁹¹¹. Sen subrayaba que “la optimalidad de Pareto sólo garantiza que ningún cambio es posible tal que alguien mejore sus situación sin hacer a nadie estar peor. Si la situación de los pobres no puede mejorarse sin cortar la opulencia de los ricos, la situación sería Pareto óptima a pesar de la disparidad entre ricos y pobres”⁹¹².

Considerarlo un mínimo no suficiente de justicia parece evidente cuando pensamos en aquellas situaciones en las que constatamos que una distribución de bienes que consideramos injusta puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, cumpliendo con el requisito de optimalidad de Pareto, pues nadie empeora sus situación presente. Esta idea es especialmente clara respecto a la distribución de bienes dentro de conjuntos dados, pero también podríamos pensar en situaciones de autodeterminación constitutiva en las que se mantienen esquemas de desigualdad. Es difícil pensar en amplios movimientos sociales orientados a mantener una situación de injusticia tal, pero no es tan complicado imaginar situaciones en las que élites promuevan la integración, unión, fusión o secesión para mantener un *statuo quo* de inequidad en la redistribución de recursos.

Las limitaciones de la Optimalidad de Pareto para conjuntos dados motivaron los intentos de superación teórica de economistas como Abram Bergson y Paul Samuelson (introduciendo la diferenciación de preferencias y gustos de los sujetos) o de autores como de Kenneth Arrow y otros, quienes plantearon la posibilidad de introducir compensaciones de quien pierda en un reparto frente a las externalidades negativas.

⁹¹⁰ Rawls, J., *A Theory of Justice*, op. cit., p. 71

⁹¹¹ Sen, A., *On Economic Inequality*, op. cit., p. 105, nota 4

⁹¹² Sen, A., *On Economic Inequality*, op. cit., pp. 6 y ss.

Estas consideraciones han inspirado a aquellos que han tratado la secesión desde un punto de vista de redistribución de bienes conforme o no a criterios de justicia distributiva.

Allen Buchanan, por ejemplo, al tratar las teorías remediales de la secesión, discute la posibilidad teórica de pactar una *compensación* posterior como manera de equilibrar la secesión conforme a una aspiración de justicia distributiva⁹¹³. Los sistemas de compensación son conocidos en procesos de integración, como hemos visto durante los procesos de reunificación alemana o integración europea. En estos supuestos, considerando que el proceso es voluntario y negociado (único permitido por el DI) la optimalidad de Pareto se da por supuesta, lo que no es tan claro en casos de secesión o desintegración.

El problema en este punto es que de si tomamos sólo como referencia los bienes económicos, recursos y riquezas y no el cumplimiento de los derechos que son los fines para los que han de servir como medios, podemos caer en perversiones aberrantes del derecho de autodeterminación en determinadas situaciones de aplicación de un régimen compensatorio en ciertos casos de autodeterminación constitutiva externa.

Pongamos por caso que una potencia colonial demuestra que pierde recursos ante la independencia inminente de una colonia oprimida jurídica y materialmente. La potencia podría invocar una redistribución conforme al criterio de optimalidad de Pareto de distribución de recursos para solicitar una compensación por abandonar la opresión en base a una compensación. Pero considerar los vectores de desarrollo sólo como vectores de distribución de riquezas y en consecuencia relacionar esta pérdida de recursos con un vector negativo de desarrollo y, por tanto, una violación del derecho al desarrollo no parece razonable. Y es que, como apunta John Rawls, “en justicia como equidad, los principios de justicia son anteriores a las consideraciones de eficiencia”⁹¹⁴.

Otra dificultad adicional de entender el criterio de fraternidad en la aplicación del derecho de autodeterminación constitutiva externa, como simple mantenimiento de Optimalidad de Pareto en la redistribución de recursos, riquezas naturales y no como un criterio de mantenimiento de derechos, es que no da una respuesta adecuada en escenarios negativos de decrecimiento de recursos y riquezas disponibles, no tanto en caso de integraciones y fusiones (siempre que sean voluntarias pues se entiende que se dan para combatir esos escenarios negativos) como en casos de secesión y desintegración, es decir, precisamente en los escenarios en los que a menudo se plantean esas secesiones y desintegraciones.

Esta particular dificultad no se aprecia en escenarios positivos: en casos de crecimiento en los que los bienes son constantemente crecientes en el tiempo, es factible una distribución de bienes económicos con un mínimo de eficiencia, distribuir los recursos de manera Pareto eficiente de manera que al menos alguien gane y nadie pierda. En los

⁹¹³ Buchanan A., *Secession: The Morality of Political Divorc...*, op. cit., p. 122.

⁹¹⁴ Rawls, J. *A Theory of Justice*, op. cit., p. 69

casos en los que, habiendo siempre más recursos disponibles, una parte ve disminuida su porción se aprecia un claro síntoma de que la vulneración está relacionada no con la falta de recursos sino con una discriminación ilegítima.

Pero en los casos de escenarios negativos en los que los bienes económicos disponibles o presupuestables son decrecientes y la proyección racional crítica habida cuenta de las circunstancias hace prever que ese escenario habrá de exenderse todavía algún tiempo, es complicado abogar por la optimalidad de Pareto siquiera como criterio mínimo de justicia.

Pongamos, por ejemplo, una esperada serie decreciente de recursos disponibles (por ej., 20, 18, 14 bienes disponibles..) y contamos como punto de partida, con una distribución entre dos conjuntos cualquiera de 10/10. Redistribuir tales bienes a lo largo del tiempo de manera que alguien no pierda es imposible. Para que alguien no pierda, otro tiene que perder proporcionalmente más (10/10, 10/8, 10/4... etc.). Podríamos considerar que lo justo es que los grupos pierdan proporcionalmente conforme a algún criterio de justicia (por ejemplo, 10/10, 9/9, 7/7...) pero es esperable que los conjuntos predefinidos y las personas que los componen no quieran perder posición relativa y hagan lo posible para que no sea así. La persecución ilimitada de tal fin, sin normas que la regulen, es base para la violencia. Este punto de vista, cierto es, requiere considerar los recursos como de suma cero, particularmente las riquezas naturales, pero aunque esto sea debatible, no es irrazonable considerar su peso indiscutible en cuanto medios en hipotéticos presupuestos en debate, pues quien no considera que dará mejor uso de tales recursos, cree, al menos, tener más oportunidades que si no existen los recursos ahora cumplir con sus derechos.

Una complicación adicional se presenta al intentar discernir, en estos escenarios negativos, si los vectores son negativos por vulneración directa de derechos o por insuficiencia de recursos disponibles, una diferenciación harto difícil pero de distintas implicaciones. Este problema es especialmente aparente en casos de desintegración y secesión, pues es posible clamar causas de desintegración basadas en la violación de derechos que en realidad hallan su causa más en falta de recursos que en la discriminación arbitraria, de igual manera que se puede tratar de ocultar una violación de derechos arbitraria en la falta de recursos, cuando no faltan. Es más complicado discernir en casos de secesiones y desintegraciones que en otras aplicaciones de autodeterminación constitutiva porque es difícil imaginar escenarios de integración o fusión voluntaria en los que un conjunto acepte perder si no es a cuenta de una futura ganancia. Normalmente los casos de fusión en la que una parte pierde sin esperar ganancia en el futuro no es voluntaria, y los casos de integración involuntaria, como el colonialismo, están prohibidos por el Derecho Internacional.

Otro problema de aplicación de autodeterminación externa constitutiva al que no puede dar respuesta satisfactoriamente un enfoque de recursos y riquezas redistribuidos conforme a un criterio de optimalidad de Pareto, sin tener en cuenta los derechos como fines últimos y elementos del vector de desarrollo, es qué sucede con aquellos derechos cuya satisfacción requiere la institucionalidad y que una distribución de recursos materiales sin acuerdos entre las partes no puede salvar por sí solo. Me refiero a ese

conjunto de derechos que potencialmente pueden incrementar o decrecer con la creación o disolución de unidades políticas.

Distingamos aquí, pues, todo ese conjunto de derechos o formas de realización de derechos que pueden ser mejor cumplidos en conjuntos amplios de personas y no solamente mediante un mero incremento de recursos y riquezas. Por ejemplo: el derecho a disfrutar del medio ambiente, por un lado, puede ser en abstracto mejorado con un incremento de recursos, pero la distribución Pareto óptima de los mismos en casos de secesión no garantiza una mejor coordinación interinstitucional y transfronteriza para luchar contra los incendios o combatir la contaminación de un río que no respeta las fronteras humanas. Asimismo, la distribución Pareto óptima de recursos y riquezas naturales no soluciona necesariamente en un primer momento la coordinación para acceder a los mejores especialistas sanitarios, y por tanto, mejorar el derecho a la salud. La sola distribución de recursos y riquezas Pareto óptima no garantiza el mejor intercambio cultural y científico, el incremento del derecho a la seguridad frente amenazas externas, el mejor derecho de libre circulación de las personas o al trabajo y al libre establecimiento de residencia, etc. Distribuir recursos y riquezas de manera Pareto óptima y establecer una frontera internacional no garantiza los derechos que precisan acuerdo entre las partes, por lo que la distribución Pareto óptima de riquezas no se corresponde con una distribución Pareto óptima de derechos.

En definitiva, mantener una distribución de recursos y riquezas siguiendo la optimalidad de Pareto no es suficiente ni satisfactoria por sí sola como criterio para satisfacer el interés amplio de desarrollo de todos los implicados, pues no se alinea con el mantenimiento de todos los derechos humanos que exige el criterio de fraternidad en el sentido que aquí le hemos dado. La optimalidad de Pareto como criterio tendría sentido, por tanto, como un indicador más de causa de injusticia –Buchanan incluye en su teoría remedial de la secesión una injusta distribución de bienes extendida en el tiempo–, pero ni el cumplir con sus exigencias garantiza estar en una situación de justicia, ni evita el requisito de preguntarse las *causas* de esa injusta redistribución, pues tales causas puede tener, o no, que ver con vulneraciones arbitrarias de derechos fundamentales relacionadas, o no, con una disminución objetiva de los recursos disponibles para todos.

Finalmente, concordamos al respecto con Fernando Tesón, quien ha explorado el Derecho Internacional desde el campo de la Teoría de Juegos⁹¹⁵, que “la explicación de teoría de juegos no tiene en cuenta la diferencia del tipo de elección entre mera preferencia y elección moral (...) un agente moral no cumple con su deber porque incrementa sus ganancias. De hecho, a menudo cumple con su deber en exactamente la situación opuesta: el agente ético elige en contra de sus inclinaciones, contra sus preferencias”.

Naturalmente, los estados no son agentes morales en términos exactamente equivalentes a los individuos con una conciencia, pero la adaptación de derechos humanos por encima de los intereses estatales funcionan mecánicamente *como si* así fuera.

⁹¹⁵ Tesón, F.R., “International Law, Game Theory, and Morality”, *A Philosophy of International Law*, Westview Press, 1988, p. 73 y ss.

Esta aproximación supone que el mantenimiento de los derechos humanos, incluyendo el cumplimiento del derecho humano al desarrollo, está desligado del puro interés de los estados, si por interés entendemos una ganancia que no incluya el respeto de esos derechos. Esta aproximación, que Tesón reconoce acertadamente como de inspiración kantiana, se enmarca en el problema general de la incorporación progresiva de los derechos humanos en un Derecho Internacional desarrollado de manera clásica alrededor de un interés y voluntad de los estados diferente o al menos no necesariamente coincidente con el interés de las personas. Tal y como el reconocimiento progresivo de los derechos humanos, incluido el derecho de autodeterminación, no puede explicarse totalmente desde el interés de los estados como predica el realismo iusinteracionalista, pues exige a los estados actuar en ocasiones de manera no totalmente conforme a su interés coyuntural, la progresiva aceptación de la dignidad humana implica aceptar resultados diferentes que aquellos solamente resultantes de la búsqueda del autointerés en una aplicación de la teoría de juegos a la distribución de recursos a nivel internacional.

Esta distinción entre el criterio de fraternidad aplicado al reconocimiento de derechos universales y el principio de optimalidad de Pareto aplicado a la distribución de recursos limitados, a pesar de que sean estos necesarios –pero no suficientes– para el cumplimiento de los primeros, ahonda en las razones de la redistribución, pero no excluye en absoluto, la voluntad de aumentar la eficiencia en la redistribución de bienes si mantenemos la salvaguarda y el incremento de los derechos en el horizonte final, pues como diría Rawls, sabremos que “una distribución de bienes o un esquema de producción es ineficiente cuando hay maneras de llevarla a cabo de manera que sea mejor para algunos individuos sin dañar a otros”⁹¹⁶.

La diferencia que hemos trazado tiene, sin embargo, un alcance limitado, porque el derecho al desarrollo exige que los vectores de desarrollo sean positivos durante el proceso de autodeterminación constitutiva, que todos los derechos sean *realizados* progresivamente, no solamente *reconocidos* progresivamente, lo que necesita un efectivo incremento, mantenimiento o más eficiente uso de los recursos. Aún así, gracias a esta distinción, a la hora de aplicar de aplicar la autodeterminación constitutiva, resultando en la modificación, creación o destrucción de conjuntos de personas como unidades políticas –especialmente externa resultando en creación de estados– podemos distinguir una nueva redistribución que sea justa o injusta porque reconozca o niegue derechos humanos de manera directa, o porque una redistribución que sea injusta en distribución de bienes escasos, o por razones combinadas. La primera, vulneración de derechos mismos como elementos del vector, no sólo no admite excusa alguna sino que es más fácilmente demostrable la intencionalidad de la vulneración, mientras que la reducción de recursos puede darse por diversas causas, siendo unas más relevantes que otras desde el punto de vista de reclamaciones de justicia distributiva.

Exigir que en un proceso de autodeterminación constitutiva *al menos* los *derechos mismos* como elementos de los vectores resultantes no decrezcan es un mínimo aún más exiguo que exigir que se mantengan los niveles de cumplimiento de derechos o que los recursos para cumplirlos no decrezcan y, por ello, más difícilmente rebatible conforme a

⁹¹⁶ Rawls J., *A Theory Of Justice*, op. cit., p. 67

la doctrina de derechos humanos. Optar por esta interpretación es un punto de vista seguro desde el punto de vista de la doctrina general de derechos humanos (que nadie reduzca los derechos de los que son titulares independientemente de su realización) pero poco ambicioso respecto a la consideración general de universalidad de los derechos humanos. Aún así, teniendo en cuenta que los derechos humanos no han sido objeto general de discusión durante los procesos de autodeterminación constitutiva, sería un paso adelante compatible con un enfoque de derechos humanos como el expresado por Robert McCorquodale.

Finalmente, se planteen o no exigencias de justicia distributiva de recursos o derechos, o sean estas exigencias mínimas o exiguas, aún debemos superar la última dificultad, arriba planteada, relacionada con la desintegración fáctica de unidades políticas, particularmente estados, y con el proceso de imperfectibilidad de obligaciones que lleva aparejada.

El criterio mínimo conforme al principio de fraternidad planteado puede utilizarse como parte de los argumentos de justicia distributiva para apoyar o no apoyar particulares interpretaciones y aplicaciones de autodeterminación constitutiva, especialmente externa. Los casos de conformación fáctica de nuevos estados, tal como son los casos de desintegración de estados como la que reconoció la Comisión Badinter, nos obliga a enfrentar la aplicación del criterio esencial una vez que los nuevos estados están definidos y en procesos de conformación en virtud del derecho de autodeterminación constitutiva.

En este punto nos encontramos con un problema. Por un lado, dado un caso de desintegración constatada y finalizada, el proceso de imperfectibilidad de las obligaciones parece consumado y, en principio, nada obligaría a los nuevos estados a cumplir con los derechos de personas cuya realización es obligación de otros estados. Sin embargo, por otro lado, la conformación fáctica de nuevas fronteras afecta de hecho a los derechos de las personas con derechos universales y esta afección, que puede ser positiva, puede ser también negativa y ilegítima. El Derecho Internacional clásico que no tenía en cuenta la personas más que como súbdito de los estados daba respuesta a esta cuestión de una manera que no es satisfactoria desde el punto de vista de la inclusión progresiva de derechos humanos en el Derecho Internacional contemporáneo. ¿Cómo podemos superar esta dificultad?

§4.4.3.4 Aplicación mínima del criterio esencial en los procesos de desintegración como autodeterminación constitutiva: desarrollo del marco normativo internacional en materia de sucesión de estados y negociación integrativa con un enfoque de derechos humanos

Vamos a abordar ahora la difícil cuestión de la aplicación mínima del criterio esencial conforme a la fraternidad humana en casos de conformación fáctica de nuevos estados tal y como resulta en los casos de desintegración estatal, más allá de los argumentos de

justicia distributiva a favor o en contra de conformar nuevas unidades políticas como resultado del ejercicio de autodeterminación constitutiva.

Hasta ahora hemos defendido que la aplicación de un criterio esencial en la aplicación del derecho de autodeterminación constitutiva conforme al principio de fraternidad humana, que acepta la cambiante conformación de nuevos conjuntos de personas requiere, al menos: que tales conjuntos puedan conformarse; requiere también del reconocimiento de un nivel básico de derechos humanos indisponible, incluyendo para los estados y la voluntad creadora de estados en cuanto nuevos conjuntos; así como un reconocimiento de un nivel superior no básico de realización de derechos humanos diferente en los distintos conjuntos, que constituye un margen de mejora que permite concebir la reorganización en distintos conjuntos cambiantes con derechos adaptados a la voluntad de los constituyentes.

Es decir, se ha aceptado la existencia de una *discriminación legítima* de derechos entre seres humanos iguales que permite la creación de conjuntos, y en última instancia de estados. Esta discriminación además está íntimamente vinculada con la *voluntad* de los conformantes de nuevos conjuntos, incluyendo estados.

Sin embargo, la creación de una *nueva* unidad política conforme a la voluntad, independientemente de la delimitación del grupo de personas que expresa tal voluntad, puede tener tanto efectos negativos como positivos sobre el nivel de realización de derechos humanos de quienes queden fuera de esos conjuntos. Esos efectos puede ser en el nivel básico de derechos inaceptable o en ese margen de mejora que consideramos aceptable, a partir del nivel básico y conforme a la discriminación legítima. Sin embargo, aunque exista un nivel básico y un margen de mejora conforme a la discriminación legítima, es discutible, aceptar un *decrecimiento* relativo en la realización de derechos, particularmente en el nivel básico. La aceptación no tiene mucha relevancia si la imperfectibilidad de procesos ha sido consumada, por lo que la paliación de los efectos tienen que estar en consonancia con el nuevo régimen de obligaciones.

Esto requiere a su vez, por un lado, demostrar que el trazar nuevas fronteras puede causar *por sí misma* distinta realización –legítima o ilegítima– de derechos humanos, producida no sólo por distinta redistribución de recursos materiales, sino por otras razones adicionales, incluida distinta institucionalidad que depende de la autodeterminación de los conjuntos⁹¹⁷.

Por otro lado, requiere plantearse qué sucede particularmente en los casos de desintegración en los que la discusión previa sobre los requisitos de conformación tiene una importancia limitada, porque *de facto* se reconocen nuevas fronteras,

⁹¹⁷ Vamos a asumir, por el momento, que efectivamente la desintegración y por tanto la creación fáctica de nuevas fronteras afecta potencialmente por sí misma el nivel de realización de los derechos de las personas involucradas en el proceso de autodeterminación constitutiva, pero intentaremos demostrarlo con un caso de estudio en la última parte de nuestro estudio, comparando los niveles de desarrollo de las Repúblicas de Eslovenia y Macedonia, antes y después de la desintegración de Yugoslavia.

independientemente de que dichas fronteras causen distintos niveles (legítimos o ilegítimos) de realización de derechos pero una simultánea redistribución tanto de recursos y como de obligaciones para hacer frente a las nuevas condiciones de realización.

La cuestión podría plantearse igualmente respecto a integraciones, pero en los casos de integración se requiere una expresión indubitable de la voluntad conforme al Derecho Internacional y se asume un interés de todas las partes en llevar a cabo tal integración, lo que no excluye totalmente nuestras consideraciones de exigir el criterio de incremento de realización de derechos humanos como guía para llevar a cabo tal integración. Sin embargo, la cuestión es más sencilla, porque se produce una perfección de obligaciones de cumplir con los derechos y no un proceso de imperfección como sucede en los casos de desintegración fáctica.

Las complicación principal en los casos de desintegración es que no podemos incluir en nuestras consideraciones el argumento de que una vulneración necesaria del vector de desarrollo impide la creación de un nuevo estado, pues ésta se da como hecho consumado.

Mientras que podría defenderse, por ejemplo, la oposición por parte de la Comunidad Internacional a casos de secesión cuando se produzcan vectores negativos, pero esto no ayuda en casos de desintegración. En estos casos, se ha de poder producir una sucesión de estados o unidad política equivalente, y además se ha de procurar salvaguardar derechos cuando las obligaciones se están imperfeccionando.

No podemos concebir la desintegración fáctica de un estado y que la población exciudadana no forme parte de ninguna nueva unidad política sucesora, así sea no reconocida por el conjunto de la comunidad internacional. Así pues, en casos de desintegración existe la posibilidad de constatar una pérdida de derechos en cuanto bien global y una reducción de obligaciones para paliar esa reducción de derechos y obligaciones. Desde el punto de vista de los derechos humanos individuales podríamos constatar, en determinados casos, daños en su salvaguarda en cuanto bienes globales universalmente reconocidos. Una redistribución que sólo tienen en cuenta la delimitación de la soberanía de recursos y riquezas y que ignora el daño potencial sobre la realización de los derechos, especialmente en casos de desintegración y secesión, tiene como consecuencia una serie de externalidades negativas sobre los bienes globales que son los derechos humanos. Asimismo, hemos de tener en cuenta el nivel de desarrollo del Derecho Internacional contemporáneo y la forma de la sociedad internacional actual, todavía de estados soberanos con una limitada gobernanza global.

En los casos de desintegración estatal, debido al proceso de imperfectibilidad de obligaciones descrito que conlleva la autodeterminación constitutiva externa y la ausencia de un sistema de desarrollado de gobernanza global, encontramos dos vías para superar la dificultad que planteamos y procurar salvaguardar el nivel de realización de derechos humanos, y por tanto, un vector positivo de desarrollo y el cumplimiento del derecho humano al desarrollo: el desarrollo progresivo del Derecho Internacional, particularmente

en materia de sucesión de estados y la negociación integrativa en procesos de sucesión:

1) Desarrollo progresivo del Derecho Internacional en materia de sucesión de estados:

Como hemos tratado pormenorizadamente en §4.5.4, mientras que el contenido y la forma de ejecución del derecho de autodeterminación hasta la conformación de una nueva entidad política ha producido bibliotecas enteras, la sucesión en materia de estados ha recibido, proporcionalmente, mucha menos atención. Esto es porque en las ideologías nacidas en un sistema westfaliano en el que prevalecen sobre todo la voluntad irrestricta estados, alcanzar un cambio respecto a la estatalidad equivalía a consumir un proceso de perfectibilidad o imperfectibilidad total de obligaciones. La progresiva inclusión de los derechos humanos en el Derecho Internacional cuestiona este punto de vista. Como hemos visto, los procesos sucesorios han estado históricamente marcados por un fuerte enfoque en la distribución de bienes y riquezas, que ha ignorado la mejor realización de los derechos humanos de todos los implicados. Esto es evidente en el caso de la desintegración de Yugoslavia, en la que, sin embargo, hemos apreciado una evolución desde el enfoque clásico del Plan Carrington, la inclusión de ciertos derechos de minorías por la Comisión Badinter, y una cierta pero muy limitada preocupación por los derechos de las personas en los Acuerdos de 2001 entre las ex repúblicas yugoslavas, hasta un enfoque de derechos humanos algo más avanzado bajo el Plan Ahtisaari y la preocupación por “los problemas cotidianos de la gente” de los Acuerdos de Bruselas de 2013.

A pesar del enorme impacto que los procesos sucesorios tienen en los derechos humanos, el desarrollo de la normativa internacional es bastante limitado. A la fecha contamos con la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1978, que no está en vigor pero que Yugoslavia había firmado la Convención el 24 de octubre de 1983 y que es de una utilidad limitada, si seguimos el criterio de Anthony Aust respecto a su uso como referencia en los Acuerdos de Sucesión de 2001. Por otro lado, contamos con la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados de 23 de agosto de 1978⁹¹⁸, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, tras la desintegración de Yugoslavia. La importancia de dicha Convención reside en la potencial sucesión automática de tratados de derechos humanos, cuestión objeto de gran debate, como hemos abordado. Los tratados en materia de sucesión de estados tienen así, a día de hoy, un alcance limitado respecto a la potencial protección del conjunto de derechos humanos en procesos de autodeterminación constitutiva externa.

Por otro lado, es todavía demasiado pronto para hablar de una vía asentada de derecho consuetudinario más allá de una invocación genérica a proteger los derechos humanos. La práctica del Derecho Internacional no ha registrado, de manera constante, procedimientos concretos obligatorios para tratar de mantener el nivel de realización de todos derechos humanos de una manera amplia en procesos de sucesión de estados aunque, indudablemente, se han tratado en sucesiones recientes algunas cuestiones –tales

⁹¹⁸ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1946, 2005, p. 3

como pensiones, libertad de circulación, propiedad, minorías- que no se trataban antes del desarrollo de enfoques de derechos humanos.

En los procesos de sucesión de los estados nacidos de la desintegración de Yugoslavia y de Serbia y Montenegro, hemos apreciado un incremento progresivo de la preocupación por el destino de la realización de derechos humanos, un incremento significativo, pero débil e insuficiente para hablar de una práctica internacional. Así pues, a día de hoy es necesario ahondar en el progresivo desarrollo del Derecho Internacional para garantizar un mayor respeto del derecho humano al desarrollo como proceso en los procesos de autodeterminación constitutiva.

2) La negociación integrativa en los procesos de sucesión de estados en materia de derechos humanos.

La segunda vía para mantener el nivel de realización de derechos humanos en procesos de sucesión de estados en casos de constatación fáctica de desintegración, en los que se entiende que se ha atravesado un proceso de imperfectibilidad de las obligaciones de cumplir con tal realización, es a través de la *negociación* entre las partes interesadas. Por negociación entendemos el proceso por el que las partes interesadas asumen que tienen, al mismo tiempo, intereses en conflicto e intereses comunes y, reunidas, discuten soluciones para llegar a un acuerdo sobre la redistribución de recursos, derechos y obligaciones.

Aunque no deje de sorprender, cuando pensamos en el impacto que las fronteras tienen en los derechos de las personas, los procesos negociadores acerca de la sucesión de estados han estado tradicionalmente enfocados casi exclusivamente en la distribución de recursos y riquezas. A pesar de que haya derechos cuya mejor realización no depende de la divisibilidad de las unidades políticas pues requieren la cooperación de partes que comparten frontera, éstos no han formado parte de las negociaciones, dejándose para eventuales acuerdos posteriores entre estados. Se ha dado así una suerte de “tragedia de los comunes” como la que describía Garrett Hardin, en los que la búsqueda del autointerés ha destruido el interés común, manifestado también la capacidad de dar mejor respuesta a la demanda de cumplimiento de todos los derechos humanos.

Esto se ha podido apreciar en las negociaciones sobre la sucesión de estados nacidos de la desintegración de Yugoslavia. Como hemos analizado ya pormenorizadamente, los Acuerdos de 2001, tuvieron un fuerte enfoque patrimonialista. Las negociaciones se enfocaron fundamentalmente en la redistribución de bienes, cuestiones tales como el reparto del oro, pago de pensiones, cuestiones relativas a la propiedad, división e sedes diplomáticas, archivos, deudas de estado, etc., aunque también se trataron cuestiones como derechos de respeto de minorías de acuerdo a los criterios y exigencias de la Comisión Badinter. Tal vez por la experiencia de los limitados resultados en ex Yugoslavia, lo cierto es que la desintegración de Serbia y Montenegro en 2006 desató ciertos debates acerca de los efectos en el conjunto de los derechos humanos de las personas afectadas mucho más amplios que los registrados a principios de los noventa con la desintegración de Yugoslavia, más centrados en la cuestión nacional. El Plan

Ahtisaari, independientemente de los debates sobre su legitimidad y la legalidad de la independencia de Kosovo, incorporó un catálogo un poco más amplio de defensa de derechos humanos de todos en relación a otros documentos internacionales. Los Acuerdos de Bruselas de 2013 se anuncian con la intención de remover obstáculos de la vida diaria de la gente, alejándose algo de la cuestión nacional, siempre presente. Aún es muy pronto, en mi opinión, para afirmar que hemos asistido a una incorporación de un enfoque de derechos humanos comprehensivo al problemas, pero tenemos razones para creer que es ésta, y no otra, la vía apropiada.

Una negociación en materia de sucesión que no solamente tiene en cuenta la redistribución de bienes sino que tiene como objeto encontrar las mejores fórmulas para mantener, dentro de lo posible y respetando la soberanía de los nuevos estados creados tras la desintegración constatada, el nivel global de realización de derechos humanos, se encuentre o no en un escenario negativo de recursos disponibles, es una negociación que asuma que todas las partes tienen intereses comunes y, las personas que las componen disfrutan derechos universales, es decir, una negociación que acepta la posibilidad de un nivel de solidaridad básico, a pesar de haber roto ciertos niveles de solidaridad anteriores plasmados en la reducción de obligaciones de unos con otros al consumarse el proceso de imperfectibilidad de las mismas.

Comentaba Ronald Coase en su clásico artículo *El problema del coste social*⁹¹⁹ que ciertos problemas relacionados con externalidades negativas tienden a formularse como situaciones en las que “A ocasiona daño a B y lo que tiene que decidirse es: ¿Cómo se puede restringir a A?” Para el autor, esta aproximación a las externalidades negativas es errónea cuando en realidad tratamos casos de naturaleza recíproca, ya que “evitar daño a B infligiría un perjuicio a A. La cuestión real que debe decidirse es: ¿debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A? La cuestión es evitar el daño mayor”. El ejercicio del derecho de autodeterminación constitutiva externa no se produce sin costo y es por ello que encontramos diversas aproximaciones antes de su ejercicio, desde la prohibición del mismo hasta la negociación entre unidades intraestatales basada en la transacción de competencias, bienes y recursos para que no compense tal ejercicio. En el momento procesal de la sucesión de estados nacidos de la desintegración, la posibilidad de costes manifestados como daños sobre los derechos humanos sigue existiendo. La doctrina de los derechos humanos exige buscar las vías para reducir estos costos soportados generalmente por los más vulnerables, unos costos que no se han tenido suficientemente en cuenta. La negociación acerca de como afrontar la sucesión de estados, que define la soberanía sobre recursos y riquezas naturales, abre asimismo la puerta a negociaciones sobre los modos alternativos de realizar los derechos de todos y minimizar los costos de una sucesión que recaen en los hombros de los ciudadanos de a pie, normalmente, de la población más vulnerable. Tal vez la obligación de remover los obstáculos para el desarrollo que establece la Declaración de 1986 no alcance a obligar a una particular redistribución de recursos necesarios, pero nada se opone a poner todos los medios para

⁹¹⁹ Coase, R., “The problem of social cost” *The Journal of Law and Economics*, Vol. III, Oct, 1960, pp. 1-44. Original disponible en <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf> Artículo traducido en <http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf>

un entendimiento de manera que no sea necesario esperar a tratados internacionales posteriores. Definiendo adecuadamente la redistribución de la soberanía sobre recursos y riquezas (tal y como en cualquier economía es necesario definir los derechos de propiedad), y desechando la incertidumbre y la información asimétrica, los costes de la negociación se asumen como muy bajos en comparación con los beneficios potenciales de la misma⁹²⁰.

Considerar que los efectos de la sucesión de estados en casos de desintegración no deben resultar simplemente en una división de riquezas y recursos implica que las negociaciones no tienen porqué estar orientadas a la maximización de los recursos y riquezas disponibles a obtener por cada una de las partes. Asumir que existen, sin embargo, problemas comunes a los que se debe dar respuesta y unos derechos individuales que se deben respetar en la medida de lo posible obliga a plantearse superar una negociación distributiva a favor de una negociación integrativa.

La concepción de una negociación integrativa nació partir de los trabajos de Mary Parker Follett (*Creative Experience* 1924), Walton y McKersie (*A Behavioral Theory of Labor Negotiations*, 1965), Fisher y Ury (*Getting to Yes*, 1981). Para explicar la negociación integrativa se ha recurrido a la metáfora de “expandir un pastel” frente a la negociación tradicional distributiva, basada en cómo repartir ese pastel de tamaño invariable, ya dado. La negociación integrativa es especialmente interesante en escenarios negativos de decrecimiento de recursos –tales como crisis económicas– porque da la oportunidad de observar una expansión posible de los bienes en forma de posibilidad de afrontar de mejor manera el cumplimiento de derechos de los ciudadanos inmersos en el proceso.

La aproximación integrativa a la negociación en el caso que planteamos no es simplemente una técnica para sacar adelante un acuerdo, sino el resultado de entender que existen derechos humanos que pueden mantener su nivel de realización sólo a partir de la cooperación entre unidades políticas y no a partir de la mejor maximización de la distribución de riquezas y recursos.

Por ejemplo, en las negociaciones de sucesión que resultaron en los Acuerdos de 2001, no se consideró, por ejemplo, que para la mejor realización de un derecho a un medio ambiente sano no es suficiente obtener los máximos fondos en una redistribución de recursos, pues es necesaria una coordinación interinstitucional para combatir incendios o la contaminación de los ríos, coordinación a la que la sola distribución de riquezas no da respuesta.

Exigir que el cumplimiento del derecho al desarrollo sea observado durante el ejercicio del derecho de autodeterminación constitutiva y externa en una forma mínima –bordeando la cuestión de la secesión y apoyándonos en el Derecho Internacional– implica hacer un llamamiento, *al menos*, a negociar sobre cómo mantener el nivel de desarrollo, tanto a las partes implicadas como a los terceros mediadores.

⁹²⁰ He desechado considerar en este trabajo la guerra como un instrumento en un marco de costo-beneficios.

Efectivamente, la sucesión de estados se da en una sociedad, la sociedad internacional, que se rige por las normas de Derecho Internacional. La participación de terceros es necesaria al menos para el reconocimiento de los estados sucesores. Los terceros estados son los que finalmente reconocen los nuevos estados como unidades políticas soberanas y, por tanto, dan carta de naturaleza al nuevo sistema de obligaciones adquiridas. En consecuencia, la mediación debe invitar a los estados a incluir en sus negociaciones una perspectiva integrativa que tenga en cuenta la mejor realización de los derechos, y no solamente una distribución de riquezas y recursos, especialmente de aquellos derechos humanos cuya mejor realización requeriría la cooperación entre los nuevos estados.

Así pues, considerando el estado de la cuestión en materia de sucesión de estados, es fundamental, hoy en día, no tanto predefinir los resultados del proceso negociador, sino cumplir al menos con este mínimo que es *la inclusión en las negociaciones de sucesión de estados una perspectiva integrativa para la mejor realización de todos los derechos humanos, como un mínimo en la realización de la autodeterminación constitutiva externa conforme al derecho humano al desarrollo*.

§4.5 Relación fáctica entre la autodeterminación constitutiva externa y el nivel de realización del derecho al desarrollo. Estudio de caso. El desarrollo humano de Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia: una brecha de desarrollo creciente

Hemos apuntado en el apartado anterior, que nuestra posición requiere demostrar que el hecho mismo de trazar nuevas fronteras internacionales causa *por sí misma* distintos niveles de realización de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho humano al desarrollo, sin tener en cuenta factores tan distorsionadores como lo es la guerra. Esto requiere adentrarnos en la vertiente *fáctica* de la relación entre el derecho humano al desarrollo y el derecho de autodeterminación, tras haber analizado la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación desde un punto de vista *normativo*, a partir de las fuentes del derecho, y desde un punto de vista *axiológico*, a partir de las definiciones y análisis de la doctrina, dentro de los límites normativos.

Como hemos hecho en las dos partes anteriores, vamos a restringir la exploración de la cuestión que nos ocupa, desde el punto de vista fáctico, al marco yugoslavo. El caso de Yugoslavia se enmarcaría en las situaciones de desintegración en entornos negativos de decrecimiento de recursos disponibles, a las que hemos hecho referencia.

La hipótesis es que el ejercicio de autodeterminación constitutiva externa en casos de desintegración en escenarios negativos puede tener distintos efectos sobre el desarrollo, no necesariamente resultando siempre en vectores positivos o en vectores negativos de desarrollo, ni en la misma proporción, para las unidades políticas resultantes. Indagaremos sobre los efectos prácticos de la creación de nuevas fronteras en el desarrollo, sin considerar los efectos de la guerra, como factor altamente distorsionador del que pocas conclusiones podemos sacar en relación a este punto: ya sea la guerra causa y/o consecuencia de una disminución del desarrollo y una violación del derecho al

mismo, permanece la cuestión del efecto de la sola creación de fronteras sobre el mismo.

Sobre esta base, podríamos más adelante especular que la incorporación de un punto de vista amplio de derecho al desarrollo a la concepción e implementación del derecho de autodeterminación (especialmente en la sucesión de estados), algo que no se hizo en caso yugoslavo, en línea con el enfoque de derechos humanos de la autodeterminación que propone McCorquodale, podría potencialmente rebajar el interés y espacio para el uso de la violencia como herramienta política.

Para ello, vamos a comparar los procesos de desarrollo a largo plazo de dos estados exyugoslavos nacidos de, formalmente, una desintegración de un estado, aunque fuera plasmada, histórica y políticamente en una cadena de secesiones, pero que llevaron igualmente a la desaparición final del estado predecesor. Además, estos dos países comparten que no tuvieron grandes pérdidas directas en sus suelo en actos de guerra, con lo que es más sencillo ver los efectos del dibujo de las fronteras sin tener en cuenta ninguna animadversión política entre ellos: compararemos la evolución de la República de Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia. Creo asimismo que la comparación de solamente dos repúblicas, y no incorporar todas las demás, puede ilustrar mucho mejor la cuestión que nos ocupa.

Si bien el conflicto armado en Eslovenia, de apenas diez días y un número relativamente moderado de bajas militares, causado por la intervención del Ejército Federal de Yugoslavia fue suficiente para provocar el cambio de opinión de la comunidad internacional acerca de la secesión de Eslovenia, este no fue devastador como para por sí mismo afectar el nivel de desarrollo tal y como sí puede argumentarse que sucedió en otras repúblicas de la antigua Yugoslavia, en las que la guerra fue el principal factor disruptivo del desarrollo. Algo parecido podemos decir de la ex República Yugoslava de Macedonia aunque, como veremos, sufrió los efectos indirectamente a través del aislamiento sufrido por los embargos (el embargo a Yugoslavia y el propio, a cuenta de su nombre). En cualquier caso, formalmente ambos estados nacieron de una desintegración por lo que evitaremos las discusiones sobre la legitimidad o no legitimidad de las secesiones, para concentrarnos en los procesos de sucesión y desarrollo en caso de desintegración.

Compararemos, por tanto, la evolución de los procesos de desarrollo de ambas repúblicas tras la desintegración de Yugoslavia. La línea temporal de comparación de ambos procesos debe ser lo suficientemente larga para dar cabida a la conclusión de los conflictos y a la apreciación de tendencias sólidas y en un marco cambiante de los entornos nacional e internacional. Esta línea temporal del marco de comparación no puede ser tan larga que pierda su sentido al abrir la puerta a múltiples factores incontrolables. Por estas razones y por razones de disponibilidad de los datos de mejor calidad, he analizado la evolución de los dos procesos de desarrollo en los siguientes diez años tras la desintegración.

El análisis y la comparación de los dos procesos de desarrollo tratará de mostrar:

1) Si la desintegración y la creación de nuevos estados condujo de hecho en el plazo

delimitado a un aumento o una disminución del nivel de aplicación de los derechos humanos y, especialmente, del derecho al desarrollo.

2) Si estos procesos de desarrollo difirieron en la práctica entre sí después de la desintegración o si, por el contrario, las diferencias entre ambos se mantuvieron proporcionales a los que existían cuando compartían el mismo estado.

3) De una manera relacionada, si las obligaciones y los mecanismos de solidaridad internacionales funcionan de una manera más o menos proporcional a los mecanismos de justicia distributiva dentro de un estado federal.

4) Los efectos del cambio de fronteras sobre los procesos de desarrollo, al integrarse en una sociedad diferente, la sociedad internacional, con diferentes reglas, inconvenientes y oportunidades, incluyendo si los nuevos estados encuentran en este nuevo entorno obstáculos y oportunidades similares a cuando estaban en Yugoslavia para promover su desarrollo.

Estudio de caso.

El desarrollo humano de Eslovenia y la ex República Yugoslavia de Macedonia: una brecha de desarrollo creciente.

Veinte años después de la declaración de independencia de la República de Eslovenia (a partir de ahora, Eslovenia) y de la ex República Yugoslava de Macedonia (en la denominación oficial de las Naciones Unidas⁹²¹, a partir de ahora, por comodidad ERYD Macedonia) de la República Socialista Federal de Yugoslavia, dos países de muy similares dimensiones⁹²² y población⁹²³, ambos países han incrementado sustancialmente la diferencia entre ellos en términos de desarrollo humano.

Eslovenia, la más desarrollada de las repúblicas que fueron parte de la Yugoslavia socialista, ha alcanzado, de acuerdo con el *Informe de Desarrollo Humano 2010*⁹²⁴ del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) un muy alto nivel de desarrollo, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.828, la 29ª posición más alta del mundo. De acuerdo con el mismo informe, ERYD Macedonia, la menos desarrollada de las repúblicas yugoslavas, ha alcanzado la posición 71ª, con un IDH 0.701.

⁹²¹ Vid. <http://www.un.org/es/members/index.shtml#m>

⁹²² Eslovenia tiene 20,273 Km² y Macedonia FYR, 25,713 Km²

Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. <http://www.stat.si/>. / Oficina de Estadística de la República de Macedonia. Macedonia en cifr

as 2010. Fecha de acceso: 28.01.2011 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2010web_eng.pdf

⁹²³ Eslovenia tiene 2,048,951 habitantes y Macedonia FYR 2,052,722.

Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. <http://www.stat.si/>. Los datos de población son de 1.10.2010. Fecha de acceso: 28.01.2011. / Oficina de Estadística de la República de Macedonia. Macedonia en cifras 2010. Los datos de población son de 31.12.2009 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2010web_eng.pdf

⁹²⁴ UNDP. Human Development Report 2010. <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/> Fecha de acceso: 28.01.2011

En las siguientes páginas trataremos de discernir cuáles fueron los eventos, procesos políticos y factores internos y externos claves que impactaron en mayor medida en la construcción de esta diferencia, considerado y admitiendo la multiplicidad y complejidad de factores pero teniendo en cuenta que el HDI es un indicador combinado de indicadores económicos, sanitarios y educativos.

Aunque estos factores y procesos políticos han sido, por separado, profusamente estudiados por muchos autores con anterioridad, el estudio comparativo de la evolución de estos dos países de similar tamaño, población y marco legal y político al comienzo de los años noventa, nos dará la oportunidad de analizar el peso relativo de cada uno de estos factores socioeconómicos y políticos en los diferentes procesos de desarrollo así como una dimensión más aproximada de su verdadero impacto en esa brecha de desarrollo que, como veremos, creció entre los estados de Eslovenia y ERYD Macedonia.

En primer lugar, identificaremos cuales son los indicadores clave que marcaron la diferencia en términos de desarrollo humano; seguidamente, compararemos los diferentes puntos de partida o líneas de base en términos de desarrollo de ambos países. Analizaremos entonces la evolución de los indicadores clave a través de la historia reciente de Eslovenia y ERYD Macedonia desde su independencia hasta fechas recientes. Compararemos entonces la diferente ayuda internacional neta recibida por ambos países y los factores que tuvieron un mayor impacto en la diferencia de niveles de desarrollo humano. Finalmente, trataremos de proveer algunas conclusiones relevantes para nuestro objeto de estudio.

El Índice de Desarrollo Humano fue introducido por UNDP en 1990, basado en los trabajos previos de Amartya Sen y Mahbub ul Haq⁹²⁵ sobre el concepto de desarrollo humano bajo un enfoque de capacidades, dando respuesta a la preocupación general expresada en la Consulta Global sobre el Derecho al Desarrollo celebrada ese año sobre la necesidad de medir el desarrollo con unos indicadores estandarizados. Estos indicadores, sin embargo, habían de ser diseñados intentando superar la clásica medición del desarrollo de un país basada exclusivamente en meros indicadores económicos, ya que estos no pueden dar, por sí mismos, una perspectiva completa de las condiciones de vida, oportunidades y realización de derechos humanos.

La observación de la evolución del IDH, el cual combina los factores de salud (esperanza de vida al nacer), educación (tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, y duración en años de la educación obligatoria) y nivel de vida económico (medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales), no provee el punto de vista más objetivo *disponible* de la evolución de la situación del desarrollo a nivel global.

En su último informe de 2010, ya mencionado, el PNUD ha introducido una nueva

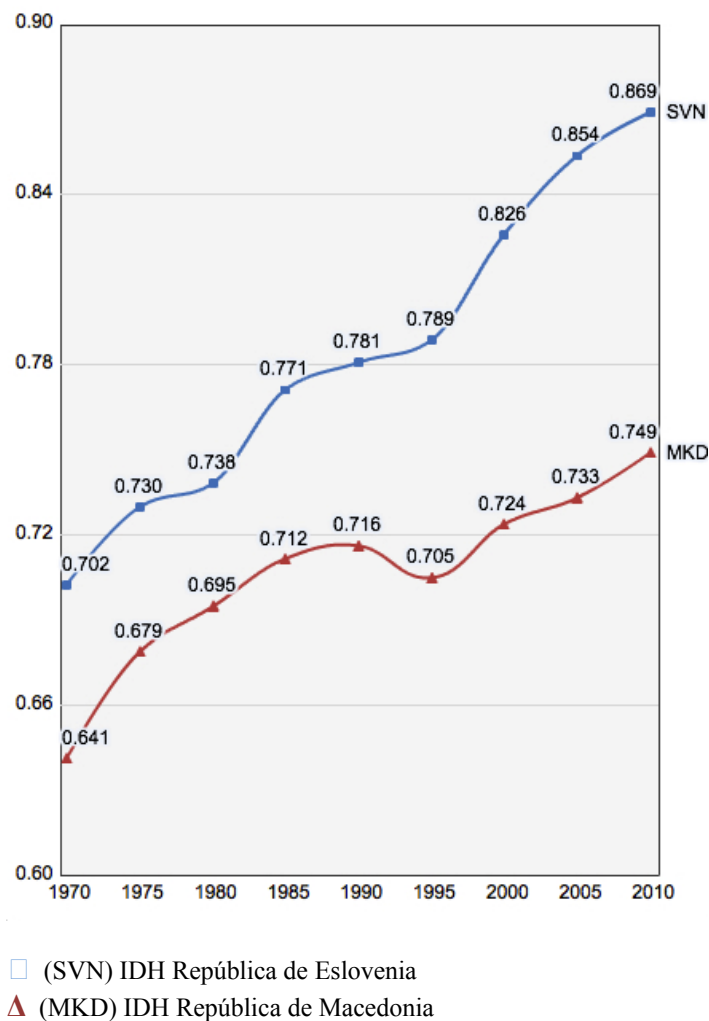
⁹²⁵ Fukuda-Parr, S., "The Human Development paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabilities". *Feminist Economics*, vol 9., ns. 2-3, 2003, pp. 301-317

metodología para calcular el IDH⁹²⁶. Sin embargo, con esta nueva metodología no hay datos disponibles completamente fiables desde 1990 para nuestro caso práctico. Debido a que el alcance del presente trabajo es analizar las causas y la dimensión de la creciente brecha de desarrollo entre Eslovenia y Macedonia ERYD desde sus respectivas declaraciones de independencia hasta fechas recientes, usaremos el modelo de cálculo original del IDH que se diferencia en el Producto Interior Bruto per cápita en lugar del Producto Nacional Bruto per cápita como uno de los principales indicadores.

De acuerdo con la fórmula original, que nos permite hacer una comparación con metodológicamente compatible, en 1990 Eslovenia tenía un IDH 0,781 y ERYD Macedonia 0.716. En 2010, Eslovenia contaba con un IDH 0,869 y ERYD Macedonia IDH 0,749.

El IDH es extremadamente útil para mostrar la referida brecha de desarrollo entre Eslovenia y ERYD Macedonia. El siguiente gráfico, provisto por UNDP, muestra que, de acuerdo con la metodología original para medir el IDH, la diferencia de desarrollo relativo entre Eslovenia y ERYD Macedonia era ya muy notable dentro de la antigua Yugoslavia, pero se ha incrementado mucho proporcionalmente desde 1990, hasta llegar a niveles de desigualdad nunca antes alcanzados cuando eran parte de un mismo país.

He aquí la comparación entre ambas repúblicas, con datos obtenidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD:

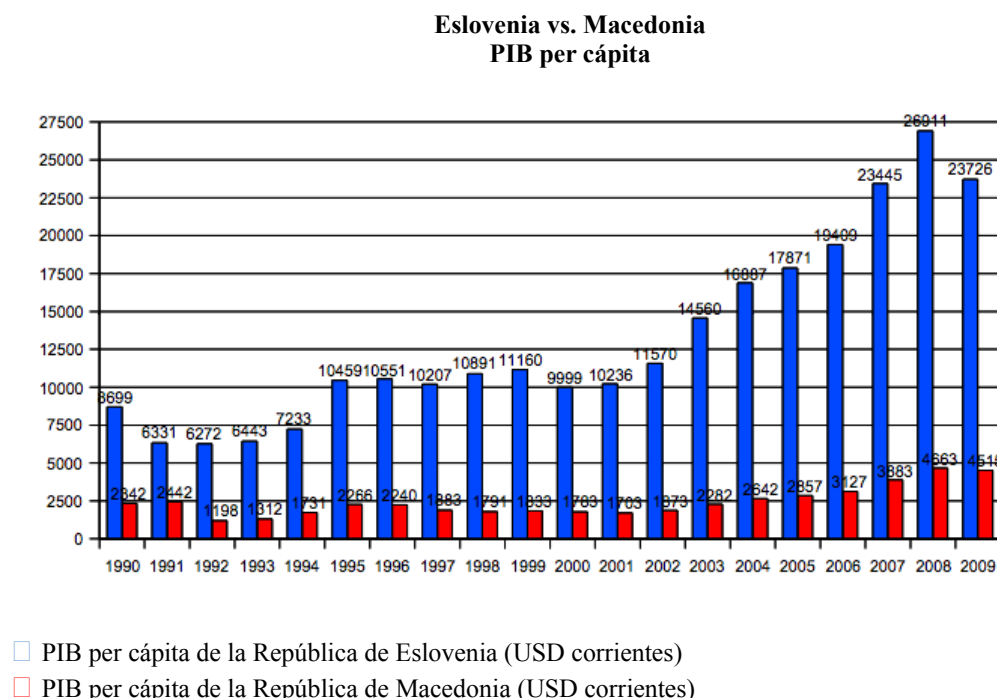


Dado que el IDH es un índice combinado, podemos cometer el error de asumir que todos los factores que construyen el indicador han resultado en la misma diferencia proporcional. Esto no es así. En nuestro caso, la esperanza de vida al nacer en 2010 era de 78.8 años en Eslovenia y de 74.5 años en ERYD Macedonia, y un índice combinado de escolaridad de 9.0 en Eslovenia y de 8.2 en ERYD Macedonia.

Estos indicadores parciales relacionados con la salud y la educación, son indudablemente más altos en Eslovenia que en ERYD Macedonia y verdaderamente afectan a sus respectivos IDH, y son además una parte importante de la brecha de desarrollo, pero la diferencia no es suficiente para explicar la gran diferencia global creciente.

El tercer indicador que construye el IDH, el factor económico, de riqueza o de vida digna, tanto si usamos la metodología de cálculo antigua como la moderna, aumenta significativamente la diferencia entre los dos países. Podemos observar la evolución

comparada de los PIB per cápita en el siguiente gráfico⁹²⁷:



El espectacular incremento proporcional del PIB per cápita de Eslovenia respecto al de ERYD Macedonia ha tenido como resultado que el PIB per cápita de Eslovenia haya pasado de ser *tres veces más alto* (3.06) que el de ERYD Macedonia justo antes de la desintegración de Yugoslavia, a ser *casi seis veces más alto* (5.77 veces en 2008 y 5.25 veces en 2009).

Para entender la dimensión de las diferencias de desarrollo entre estas dos repúblicas cuando todavía eran parte de Yugoslavia podemos tomar como referencia que, hoy en día, la diferencia de PIB per cápita entre las regiones más y menos desarrolladas de Italia, un estado geográficamente cercano y conocido por sus diferencias de desarrollo entre el norte y el sur: el PIB per cápita de Lombardía es “sólamamente” 2.04 veces más que el de Calabria o Sicilia. También podemos considerar, como referencia, que en un estado descentralizado como es España, con también diferencias de desarrollo y nacionalismos regionales, la comunidad autónoma más desarrollada, el País Vasco, tiene un PIB per cápita 1.75 veces más alto que el PIB per cápita de Extremadura⁹²⁸.

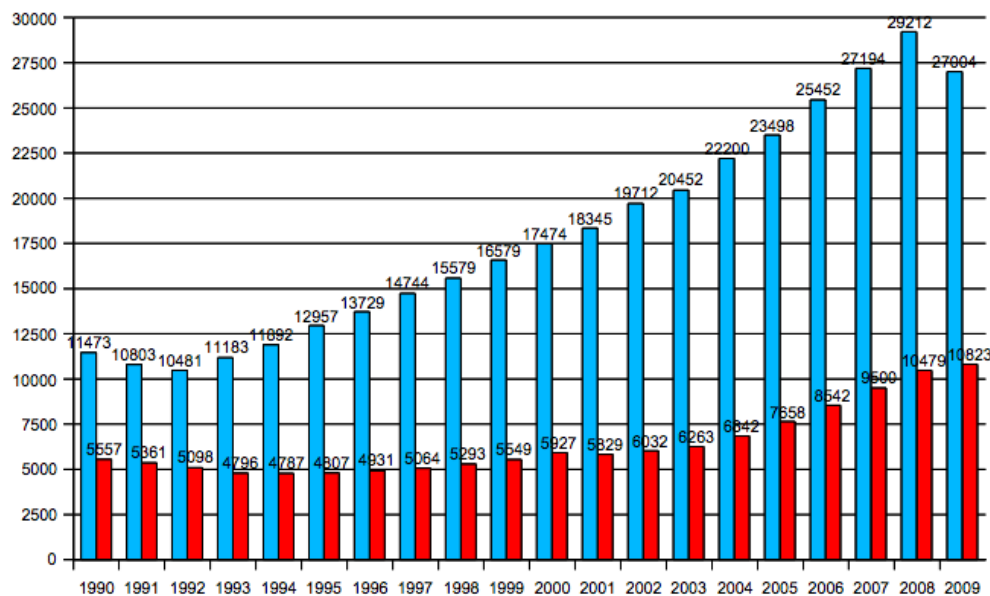
⁹²⁷ He elaborado este gráfico con datos del Banco Mundial. Todos los datos económicos usados, amenos que se indique expresamente, han sido obtenidos de la base de datos del Banco World DataBank. <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do> Acceso: 21.01.2011

⁹²⁸ De acuerdo con Eurostat Newsrelease N. 25/2010 (acceso 18 de febrero de 2010), Lombardía tiene un PIB per cápita anual de 33900 Eur y un PIB (PPP) per cápita de 33600 Eur, mientras que Calabria y Sicilia tienen un PIB per cápita de 16600 Eur y PIB (PPP) per cápita de 16400 Eur. El País Vasco tiene un PIB per cápita de 30600 Eur y un PIB (PPP) per cápita de 34100 Eur. Extremadura tiene un PIB per cápita de 17404 Eur y PIB (PPP) per cápita de 19409 Euros.

Dado que Eslovenia y ERYD Macedonia compartían divisa hasta principios de los noventa, medir y comparar el PIB per cápita es un instrumento válido y sencillo para ese período. A partir de la desintegración del estado y la sustitución del dinar yugoslavo por el *tolar* esloveno y el *denar* macedonio, usaremos el PIB ajustado a su *paridad del poder adquisitivo* (PPP). Consideramos también que el muy parecido trasfondo cultural entre los dos países hace que la cesta de la compra sea, por razones culturales, bastante similar, dando más sentido al uso del indicador PPP.

La evolución comparada del PIB per cápita ajustado a PPP en ambos países es el siguiente:

Eslovenia vs. Macedonia
PIB per cápita (ajustado a su paridad del poder adquisitivo, PPP)



- PIB per cápita de la República de Eslovenia ajustado a PPP (USD corrientes)
- PIB per cápita de la República de Macedonia ajustado a PPP (USD corrientes)

Bajo este cálculo, las diferencias entre Eslovenia y ERYD Macedonia en términos de PIB per cápita (PPP) sería 2.06 veces más alta en Eslovenia en 1990 y 2.78 veces en 2008, justo antes que crisis financiera global golpeará severamente la economía eslovena, y 2.49 veces más alta en 2009.

Las diferencias son todavía muy altas si hiciéramos un cálculo similar con las regiones de referencia mencionadas anteriormente (PIB per cápita 2.048 veces más alto en Lombardía que en Calabria) y 1.75 veces más alto en el País Vasco que en Extremadura). De acuerdo con los cálculos de Eurostat para 2008 respecto al PIB per cápita en términos de PPS

(Estándares de Poder Adquisitivo o Purchasing Power Standards), si consideramos la media de los 27 países de la UE como 100%, Eslovenia se sitúa en el 91% de la media y ERYD Macedonia sólo en el 34%.⁹²⁹

Esta “brecha de desarrollo” se ha incrementado durante los años debido a múltiples causas, de diferente impacto relativo. Mientras que la exitosa evolución económica de Eslovenia tras la desintegración de Yugoslavia y las dificultades de ERYD han sido ya profusamente estudiadas, el *impacto relativo* de estas causas en la formación de esas diferencias de desarrollo no ha sido suficientemente explorado.

Factores *internos*, tales como las distintas reformas democratizadoras y los procesos de privatización o tensiones étnicas internas, factores políticos *transfronterizos* tales como las disputas sobre el nombre de Macedonia con Grecia y el subsiguiente embargo, factores *regionales* tales como los conflictos armados y el embargo a Yugoslavia, factores *globales* como la evolución creciente de los precios de las materias primas, muestra que a todos los niveles se han hallado causas señaladas, de un modo u otro, como responsables de la ralentización del crecimiento económico de ERYD Macedonia y, por tanto, de su menor IDH. Sin embargo, estos diferentes factores no han tenido todos el mismo impacto relativo en la economía ni en el desarrollo global de ERYD Macedonia.

Como hemos mencionado con anterioridad, el 21 de febrero de 1974, el Parlamento Yugoslavo votó la nueva Constitución, descentralizando aún más las competencias políticas y económicas del gobierno federal. Esta reforma que buscaba un mejor acomodo de todos los pueblos de Yugoslavia, sostuvo y dio marco, sin embargo, a un incremento de las diferencias económicas entre las repúblicas.

En 1990, la distribución territorial de la riqueza en la Yugoslavia socialista era muy desequilibrada, y la república más rica (Eslovenia) tenía, como hemos dicho, un PIB per cápita casi tres veces superior a la república más pobre (Macedonia)⁹³⁰.

Eslovenia sólo tenía una decimotercera parte de la población de Yugoslavia, pero era la más productiva de las repúblicas yugoslavas aportando un 20% del PIB total y un tercio de sus exportaciones⁹³¹. La República de Macedonia, con una población muy similar, aportaba solamente el 5% del PIB total de Yugoslavia⁹³².

Los diferentes destinos de ambas repúblicas, una con un futuro de brillante desarrollo por delante y la otra enfrentada a un camino de mayores dificultades de desarrollo, empezó a ser evidente muy pronto.

La República de Eslovenia declaró su independencia el 25 de junio de 1991 y Macedonia

⁹²⁹ Eurostat. Fecha de acceso: 24.01.2011

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb010&plugin=1>

⁹³⁰ El territorio más pobre, sin embargo, era Kosovo, entonces provincial de la República Socialista de Serbia.

⁹³¹ US Department of State. Bureau of European y Eurasian Affairs. “Background Note: Eslovenia”. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3407.htm>

⁹³² CIA World Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html>

unos meses después, el 8 de septiembre 1991. En enero de 1992, la Comisión Badinter recomendó el reconocimiento internacional de ambas repúblicas. Sin embargo, por las fuertes presiones de Alemania, y después, otros miembros de la comunidad internacional, el reconocimiento de Eslovenia fue rápido mientras que la fuerte oposición de Grecia ralentizó el reconocimiento de la independencia de Macedonia⁹³³. Eslovenia entró en las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992 pero Macedonia no se incorporó hasta el 8 de abril de 1993, con el nombre –provisional– de Ex República Yugoslava de Macedonia.

Eslovenia había construido, ya en 1991, una estructura institucional que le podía otorgar la autonomía política y económica para separarse de Yugoslavia. Había establecido ya un control sobre su comercio exterior, gravámenes aduaneros e impuestos sobre valor añadido. Dušan Šešok, el Ministro de Finanzas de Eslovenia en aquel momento, predijo una caída inicial de los estándares de vida del 20% al 30% declarando que: “nuestro mayor problema será cómo sobrevivir los primeros tres a seis meses en buenas condiciones.”⁹³⁴

Por el contrario, ERYD Macedonia, no estaba preparada para la estatalidad, ni económica ni políticamente. Incluso era conocido que los líderes macedonios eran “reacios a separar Macedonia del resto del país porque (...) [temían] que las vecinas Grecia y Bulgaria, ambas con considerables minorías de macedonios, [tenían] designios para su territorio”⁹³⁵.

De hecho, la misma pregunta del referéndum sobre la independencia de Macedonia del 8 de septiembre de 1991, ya mostraba de alguna manera esas dudas y miedos de dejar la protección económica y política que proporcionaba la federación yugoslava: “¿Está Ud. A favor de un estado soberano e independiente de Macedonia, *con el derecho de entrar en una futura unión de estados soberanos de Yugoslavia?*”. Como vemos, esta pregunta era muy diferente a la que se planteó en el referéndum de Eslovenia de 23 de diciembre de 1990: “¿debería la República de Eslovenia convertirse en un estado soberano e independiente?”.

El hecho de que Eslovenia estuviera mejor preparada para afrontar un futuro independiente no significa que no heredaran ambas repúblicas hasta cierto punto similares problemas estructurales, ya que ambas tuvieron que adoptar medidas y reformas económicas e institucionales urgentes. De hecho, de acuerdo, con Mrak y otros,⁹³⁶ Eslovenia heredó desequilibrios sustanciales de la Yugoslavia socialista, tanto internos (hiperinflación) como externos (alta deuda externa), en estrecha relación.

Eslovenia perdió importantes mercados yugoslavos con su independencia, durante las guerras y con el embargo de los noventa. Asimismo, no tenía reservas de divisas

⁹³³ Veiga, F., *La Trampa Balcánica* Ed. Grijalbo Mondadori. Barcelona, 2002, pp 378.

⁹³⁴ Bohlen C., “Eslovenia is moving to independence”, *The New York Times*. 6 de junio de 1991.

⁹³⁵ Tagliabue, J., “Macedonians vote for independence from Yugoslavia”, *The New York Times*, 10 de septiembre de 1991.

⁹³⁶ Mrak, M., et al, “The Transition Process in Eslovenia: Transformation to an EU-Compatible Economy”. *Journal of International Relations & Development*, vol. 5 n 1, marzo, 2002.

extranjeras para sostener su recién introducida moneda y debía desarrollar un concepto de desarrollo económico orientado a la exportación, necesario para la liberación del comercio exterior. Por todas estas razones, de acuerdo con estos autores, “la estabilización macroeconómica y la liberalización era absolutamente necesarios y una alta prioridad durante la temprana transición de Eslovenia”⁹³⁷.

ERYD Macedonia, sin embargo, en el momento de su independencia, no sólo debía afrontar la pérdida de mercados y similares reformas económicas e institucionales, sino que partía de un nivel de desarrollo menor, además de perder los fondos federales de redistribución y una mucho peor localización geográfica para una economía orientada al comercio.

A estos muy diferentes puntos de partida, que no explican por sí mismos el continuo crecimiento de la brecha de desarrollo, debemos añadir las diferentes perspectivas de integración europea de una república frente a la otra, los diferentes shocks externos y embargos, la inestabilidad política, los conflictos internos (con una sociedad mas dividida en Macedonia) y, como veremos, menos apoyo financiero y político internacional, todas ellos factores que afectaron eventualmente a los diferentes procesos de desarrollo y a aumentar esa brecha durante los siguientes veinte años.

Eslovenia, tras su independencia y durante los años noventa, logró un completo conjunto de reformas orientadas a la armonización normativa del nuevo país con el *aquis communautaire* europeo, adaptar su sistema económico al libre mercado y cumplir, en fin, con los criterios de integración de la Unión Europea, que se consumó el 1 de mayo de 2004.

Las reformas económicas internas incluían reformas de los sistemas impositivos y de pensiones. También eran necesarias reformas del sector financiero, incluyendo la apertura del mercado a sucursales de bancos extranjeros, abolición de acuerdos interbancarios sobre tasas máximas de depósitos y depósitos sobre créditos extranjeros, privatización del sector bancario, rehabilitación y privatización de compañías de seguros, ampliación y profundización del mercado de capitales y armonización de la legislación con los estándares europeos.

Otras medidas incluían la liberalización de precios, rehabilitación y privatización de compañías públicas, la sustitución y reducción de subsidios y medidas para estimular la inversión de capital y la reestructuración en los sectores privatizados⁹³⁸. Estas reformas económicas fueron simultáneamente adoptadas con importantes reformas sociales y de la administración de justicia.

Así, el Informe de Progreso de Eslovenia de la Comisión de la Comisión Europea de junio de 2003 finalmente recogió que: “Eslovenia (...) transpuso con éxito varios capítulos del *acquis*, que también tiene la capacidad administrativa para ponerlo en

⁹³⁷ Mrak, M., et al, “The Transition Process..”, op. cit.

⁹³⁸ Mrak, M., et al, “The Transition Process..”, op. cit.

práctica, y que cumple con los criterios de adhesión a la Unión Europea”⁹³⁹.

La estrategia global de Eslovenia persiguió una apertura de su economía hacia la Unión Europea, especialmente en Alemania, Italia, Austria y Francia, pero logró también adecuadamente penetrar en los mercados del Este, incluyendo aquellos de la antigua Unión Soviética. La fuerte internacionalización de sus política exterior, permitió a Eslovenia muy pronto ser parte de un importante número de tratados de libre comercio bilaterales y regionales⁹⁴⁰. Tras la integración en la Unión Europea, Eslovenia se unió al Euro en enero de 2007.

Por su parte, la ERYD Macedonia, tras la declaración de su independencia perdió los fondos federales de redistribución que había recibido durante los años ochenta y heredó una alta inflación de Yugoslavia (115% en 1991), que se aceleró durante 1992. Así, la primera prioridad fue, como en el caso de Eslovenia, poner en marcha reformas para alcanzar una estabilidad macroeconómica.

En los primeros años noventa, las políticas estaban orientadas a ajustar la política fiscal y a bajar el déficit público, seguidas de políticas cambiarias orientadas a la estabilización de precios. Se llevó a cabo un proceso de liberalización de precios, eliminando subsidios presupuestarios. El proceso de privatización fue llevado a cabo con celeridad sobre la base de adquisiciones por los directivos y empleados de las propias compañías. Al final de los años noventa, el porcentaje del sector privado en el PIB alcanzaba cerca del 60%, mientras que en 1990 era sólo de un 15%⁹⁴¹.

En el sector bancario, ERYD Macedonia, afrontó en el momento de su independencia la pérdida de las reservas en divisas extranjeras depositadas en el Banco Nacional de Yugoslavia para establecer su moneda, tal y como le sucedió a Eslovenia. Por tanto, durante los años noventa era necesario confrontar los problemas de liquidez y construir la confianza en el sistema bancario. Al mismo tiempo, todas las demás instituciones estatales, incluyendo el poder judicial y la administración del estado, entraron en un proceso de reforma total orientado también a la incorporación completa en una economía de libre mercado, tratando mientras de reducir una altísima tasa de desempleo (que alcanzó hasta un 35% durante los últimos años noventa), para alcanzar cierta estabilización institucional y gestionar la eventual futura integración en la Unión Europea. La evolución del desarrollo de ERYD Macedonia, sin embargo, fue profundamente afectada también por la difícil situación política y los shocks externos a los que me referiré seguidamente, los cuales impactaron negativamente en el crecimiento de su economía.

⁹³⁹ Pueden encontrarse todos los Informes de Avance en la página web de la Oficina Gubernamental para el Desarrollo y Asuntos Europeos de la República de Eslovenia. [Http://www.svrez.gov.si](http://www.svrez.gov.si)

⁹⁴⁰ Eslovenia fue miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio el 1 de enero de 1995, y se unió al Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio (CEFTA) en 1996, participando asimismo en la Iniciativa de Cooperación del Sudeste Europeo (SECI), la Iniciativa Centro europea, el Proceso Royaumont y el Consejo Económico del Mar Negro.

⁹⁴¹ Falcetti, E. et al. “Bridging the gaps? Private sector development, capital flows and the investment climate in South-eastern Europe”, *European Bank for Reconstruction and Development. Working paper No. 80* Junio, 2003.

Tal y como ha sido ampliamente observado, entre esos shocks externos para ERYD Macedonia se subrayan, por un lado, el embargo comercial avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Yugoslavia, que comenzó en 1992⁹⁴² y duró hasta 1995, y por otro lado, el embargo añadido impuesto por Grecia como medida de presión para evitar el uso del nombre “República de Macedonia” por parte del nuevo estado. Este embargo fue impuesto en febrero de 1994 y duró hasta octubre de 1995⁹⁴³, cuando los ministros de asuntos exteriores de Grecia y ERYD Macedonia firmaron un Acuerdo Provisional sobre las relaciones mutuas. Ambos embargos tuvieron en su conjunto unos efectos devastadores para la economía de ERYD Macedonia que debió asumir la pérdida de su mayor socio comercial (Yugoslavia) y su cuarto (Grecia) siendo, además, un país sin acceso al mar.

Los embargos forzaron a la ERYD Macedonia a buscar la manera de abrir nuevos mercados, y desarrollaron un sistema de transporte terrestre que comunicaba por ferrocarril con Sofía y el Mar Negro búlgaro. El importante desarrollo de las relaciones internacionales con Bulgaria y con Turquía aliviaron algo, pero en modo alguno impidieron, las devastadoras consecuencias de ambos embargos⁹⁴⁴.

Es más, un efecto secundario de la imposición de los embargos y la consecuente urgente e imperiosa necesidad de abrir nuevas vías de comercio internacional fue el consiguiente desarrollo del contrabando y demás actividades delictivas asociadas. A finales de los años noventa, ERYD Macedonia tenía la mayor economía sumergida de todos los países en transición de la Europa Central y Oriental, que alcanzó el 40,4%⁹⁴⁵.

De acuerdo con Laza Kekić, “la predominancia de la economía sumergida ha sido paradójicamente, tanto la mayor fuerza como la mayor debilidad de la economía”⁹⁴⁶, ya que “durante los años de los embargos comerciales, la actividad comercial ilegal en el país le permitió sobrevivir. Sin embargo, una vez que regresaron las oportunidades de establecer un comercio legítimo, fue el interés del crimen organizado, y el de los políticos vinculados a éste, el que emergió como obstáculo a una fuerte recuperación”⁹⁴⁷.

Algunas estimaciones sugieren que la ERYD Macedonia perdió aproximadamente hasta dos billones de dólares en el período 1989-1990 por ambos embargos y tensiones regionales⁹⁴⁸.

⁹⁴² United Nations Security Council Resolution 757 (Implementing Trade Embargo on Yugoslavia), S.C. res. 757, 47 U.N. SCOR at 13, U.N. Doc S/RES/757 (1992).

⁹⁴³ “Macedonia Embargo Is Halted by Grecia”, *New York Times*, 16 de octubre de 1995, p. 3.

⁹⁴⁴ Panagiotou, Ritsa A. “Greece and FYROM: the dynamics of economic relations”, *Journal of Southeast European & Black Sea Studies*; Vol. 8 n. 3, 2008, pp. 227-251.

⁹⁴⁵ Schneider F, Enste, D. “Shadow Economies: Size, Causes, y Consequences”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 38, 2000.

⁹⁴⁶ Kekić, L. “Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)”, *Journal of Southeast European & Black Sea Studies*, vol. 1, n. 1., 2001

⁹⁴⁷ Kekić, L. “Former Yugoslav...”, op. cit.

⁹⁴⁸ Kekić, L. “Former Yugoslav...”, op. cit.

Es importante tener en cuenta que aunque el embargo de Grecia duró oficialmente poco más de año y medio, la disputa no resuelta sobre el nombre oficial de ERYD Macedonia, llevó a Grecia a mantener su boicot contra el normal desarrollo de las relaciones internacionales del país, vetando su integración en organizaciones internacionales como la OTAN (en abril de 2008, en la Cumbre de Bucarest⁹⁴⁹) y cuestionando el proceso de integración del país en la Unión Europea. Cuando ambos embargos finalizaron por fin en 1995, la economía de la ERYD Macedonia comenzó rápidamente a crecer de nuevo⁹⁵⁰.

Sin embargo, no mucho después, la guerra comenzó en Kosovo, y duró desde principios de 1998 hasta 1999 y ERYD Macedonia tuvo que afrontar de nuevo la pérdida de los mercados del norte, a lo que se sumó la recepción de refugiados y la extensión de las tensiones étnicas a su territorio (aproximadamente el 22% de la población de la ERYD Macedonia es étnicamente albanesa). Durante la llamada insurgencia de enero a noviembre de 2001, el Ejército de Liberación Nacional Albanés se enfrentó al ejército de la ERYD de Macedonia hasta que el gobierno aceptó incrementar los derechos de autogobierno de los albaneses, lo que quedó plasmado en el Acuerdo de Ohrid, firmado el 13 de agosto de 2001.

El conflicto, de apenas un año de duración, tuvo un gran efecto directo en la economía de ERYD Macedonia durante ese año, pero como veremos, sus efectos no fueron a primera vista tan duraderos como los otros factores externos descritos.

Finalmente, es importante mencionar que, durante todo este período, al igual que hizo Eslovenia, ERYD Macedonia manifestó claramente su intención de establecer relaciones internacionales normalizadas, a pesar de las dificultades, siendo finalmente admitida como miembro de pleno derecho en la Organización Mundial del Comercio en 2002 y en el Acuerdo Centroeuropeo Libre Comercio (ACELC más conocido por sus siglas en inglés CEFTA) en 2006. El todavía inconcluso camino a la integración en la Unión Europea ha sido más lento que el recorrido por Eslovenia; ERYD Macedonia firmó el Acuerdo de Asociación y Estabilización en abril de 2001, que entró en vigor en abril de 2004, y logró el estatus de país candidato en diciembre de 2005.

En lo que respecta a la ayuda internacional y la cooperación para el desarrollo, aunque las necesidades mostradas por ERYD Macedonia fueron mucho más altas que las de Eslovenia, especialmente durante los turbulentos años noventa, la cantidad de ayuda externa recibida fue mayor pero no fue proporcional a sus necesidades si lo comparamos con lo que recibió Eslovenia y totalmente desproporcionada si tenemos en cuenta el diferente ritmo de crecimiento de ambas repúblicas.

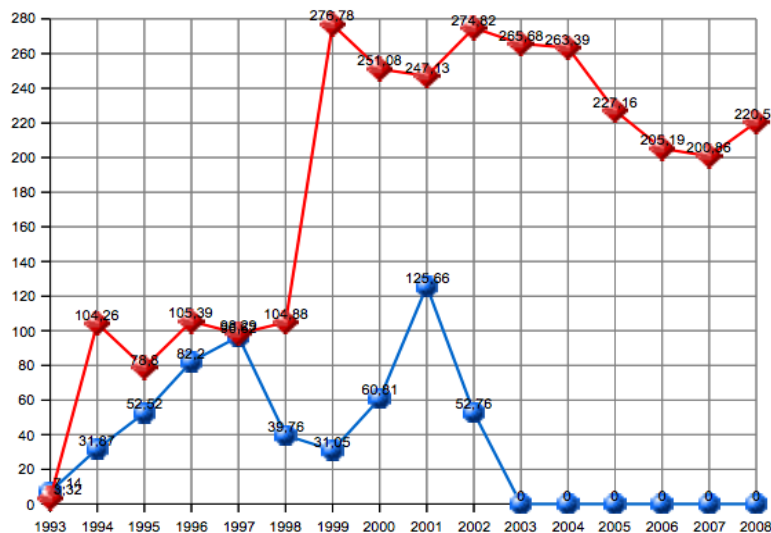
Es cierto que la cooperación internacional para el desarrollo no es medible sólo por cuanto dinero entra en un país pues las diferentes estrategias, enfoques, son también relevantes para obtener buenos resultados y en ocasiones una asistencia técnica adecuada o una apropiada transferencia de tecnología puede tener más impacto que una operación

⁹⁴⁹ Erlanger S., Myers, L., "NATO Endorses Europe Missile Shield", *The New York Times*, 4 de abril de 2008.

⁹⁵⁰ Dion, R.R., "Macedonia: Coming in from the cold". *World Affairs*, Vol.160, no. 2, 1997, p. 96.

de apoyo presupuestario. Sin embargo, es muy significativo analizar la diferente cantidad de ayuda exterior que recibieron Eslovenia y ERYD Macedonia. La evolución de la asistencia neta para el desarrollo recibida por ambos países puede verse comparada en el siguiente gráfico (nótese que Eslovenia entró en la UE en mayo de 2004):

Eslovenia vs. Macedonia
Ayuda internacional neta recibida



- Ayuda neta recibida por la República de Eslovenia (en millones dólares corrientes, USDM)
- Ayuda neta recibida por la República de Macedonia (en millones dólares corrientes, USDM)

Durante los dos embargos, ERYD Macedonia recibió más ayuda neta para su desarrollo que Eslovenia. En 1994, ERYD Macedonia recibió 104,26 USDM (millones de dólares estadounidenses corrientes, en su valor nominal sin ajuste de inflación) y Eslovenia 31,87 USDM, y durante 1995, ERYD Macedonia recibió 78,8 USDM y Eslovenia 52,2 USDM. Sin embargo, no sólo esta diferencia no es proporcional con las necesidades de los países en ese momento, especialmente durante 1995: a pesar de que ERYD Macedonia pasaba sus momentos más difíciles y Eslovenia crecía a una tasa anual de un 4.8% , contando con un PIB per cápita mucho más alto, ERYD Macedonia recibió sólo 26,6 USDM más.

La diferencia prácticamente desapareció en 1997, cuando ambos países recibieron similar cantidad de asistencia neta para su desarrollo: 96,62 USDM (Eslovenia) y 98,29 USDM (ERYD Macedonia). Desde ese año, la diferencia creció significativamente a favor ERYD Macedonia hasta 2004, año en el que Eslovenia dejó de contabilizar la ayuda exterior como ayuda internacional al desarrollo por su integración en la Unión Europea.

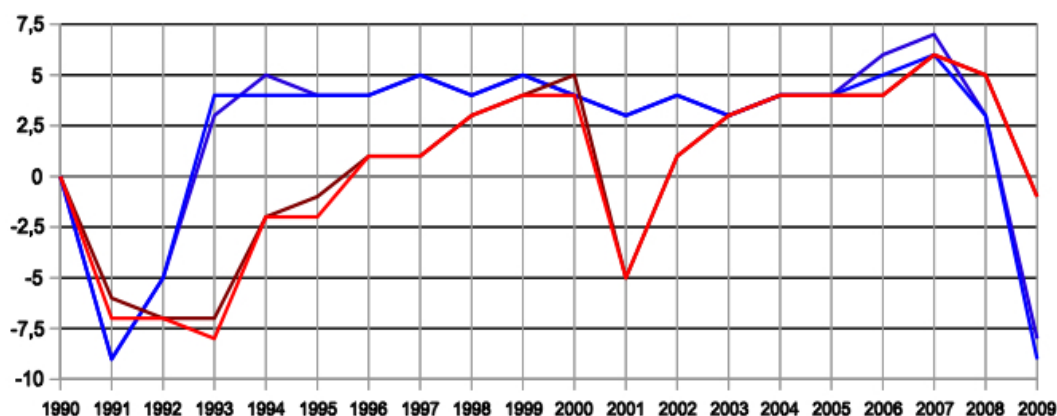
En 2002, Eslovenia recibió 52,76 USDM y ERYD Macedonia cinco veces más, 247,13

USDM, básicamente por el conflicto de 2001.

ERYD Macedonia recibió *proporcionalmente* menos ayuda internacional que Eslovenia. Dados los diferentes factores descritos, especialmente el terrible impacto de los embargos, los conflictos de 2001 ERYD Macedonia, las diferentes situaciones geográficas –Eslovenia cerca de algunas de las zonas más desarrolladas de Europa- la ayuda desigual, etc., además de otros diferentes puntos de partida, los ritmos de crecimiento de Eslovenia y ERYD Macedonia fueron muy diferentes. Como podemos ver en el gráfico siguiente, que muestra la evolución de los PIB per cápita, ésta fue negativa en ERYD Macedonia desde su independencia y no comenzó a tener un crecimiento positivo sino hasta 1996, esto es, hasta un año después de que los embargos fueran levantados y el comercio internacional comenzara a recuperarse.

El impacto de estos factores externos puede apreciarse claramente en la evolución del crecimiento del PIB per cápita en ambos países:

Eslovenia vs. Macedonia
Crecimiento anual del PIB



- ☐ Crecimiento del PIB (anual %) de Eslovenia
- ☐ Crecimiento del PIB per cápita (anual %) de Eslovenia
- ☐ Crecimiento del PIB (anual %) de Macedonia
- ☐ Crecimiento del PIB per cápita (anual %) de Macedonia

El crecimiento porcentual del PIB de Eslovenia fue positivo a partir de 1992, tras su independencia, y permaneció positivo hasta que partir de 2007 empezó a decaer y entró en negativo en 2009 a consecuencia de la crisis financiera global.

Mientras, el crecimiento de ERYD Macedonia se mantuvo negativo hasta 1996. Tras los embargos la economía de ERYD Macedonia creció hasta 2001, cuando cayó dramáticamente durante el breve conflicto étnico, pero se recuperó pronto y en 2003 llegó a crecer al mismo ritmo que Eslovenia. Esto muestra cómo el ritmo de crecimiento fue directamente afectado por principalmente por estos dos factores externos: los embargos y

la crisis de 2001, ya que por lo demás ambos países crecieron a un ritmo más parecido, aunque partieran de posiciones diferentes.

Observemos también como el año 2000 fue el primer año, desde los respectivos procesos de independencia, en el que la diferencia entre ambas economías no creció, en el que la brecha de desarrollo no se amplió.

Los conflictos de 2001 provocaron que el crecimiento de ERYD Macedonia cayera de una manera muy brusca y pronunciada (-5%), pero se recuperó rápidamente, en 2002 era de nuevo positiva y en 2003 ERYD Macedonia ya estaba creciendo al mismo ritmo que Eslovenia, recuperándose el PIB per cápita, por lo que de nuevo se frenó la economía respecto al ritmo esloveno pero por menos tiempo que durante los embargos. Ambas tasas de crecimiento se mantuvieron parejas desde entonces, manteniendo la diferencia de desarrollo económico proporcionales entre los años 2004 y 2009.

Si comparamos los dos momentos principales en los que la tasa de crecimiento de ERYD Macedonia se distanció negativamente más de la de Eslovenia, siempre positiva hasta 2009, apreciaremos claramente que mientras los embargos, más dilatados en el tiempo, afectaron seriamente su PIB per cápita, los conflictos étnicos de 2001, aunque afectaron muy severamente el crecimiento económico de ese año, no tuvieron tantas consecuencias económicas a largo plazo en términos de PIB per cápita. Los embargos continuados en el tiempo, y sus efectos derivados, destruyeron por su duración más tejido productivo y comercial que los conflictos puntuales en el tiempo, y puede argumentarse que fueron los más perjudiciales para el crecimiento económico mientras estuvieron vigentes, notándose su efecto a largo plazo en la economía macedonia y en el PIB per cápita.

Una vez identificados estas dos causas clave del aumento de la diferencia de crecimiento económico que provocó que ERYD Macedonia se rezagase respecto al crecimiento de Eslovenia y comprendiendo la multidimensional del factor principal –embargos que interrumpieron por excesivo tiempo el comercio internacional, destruyendo tejido económico, incrementando la economía sumergida, la corrupción y actividades delictivas relacionadas, con una proporción menor asistencia internacional en un ambiente político inestable y una situación geográfica ya de por sí menos propicia- y asumiendo que la diferencia del indicador económico entre ERYD Macedonia y Eslovenia en esos años es mucho más alto que la diferencia entre los distintos indicadores de salud y educación –aunque también existentes- que también son parte del agregado Índice de Desarrollo Humano, podemos deducir que hay una evidente conexión entre el contexto macropolítico y regional que provocaron los embargos, los embargos y sus consecuencias, y el crecimiento de la brecha de desarrollo entre ambas repúblicas.

Ambos estados partieron de condiciones económicas muy diferentes, de unas perspectivas de desarrollo también diversos por los niveles de industrialización y por la situación geográfica, pero también es cierto que ambos tuvieron que adaptarse a la nueva situación de estatalidad y a un nuevo sistema económico de libre mercado, ambos tuvieron que comenzar reformas para alcanzar una futura integración en la Unión Europea. De entre los factores internos, regionales, y globales, fueron los factores

externos, culminados con la integración europea de uno y la no integración de otro, junto la pérdida de fondos federales provenientes de la aplicación de criterios de justicia distributiva intraestatal, los que ayudaron de manera más importante, a nuestro entender, al crecimiento desproporcionado de esa brecha de desarrollo entre ambas repúblicas.

Así, a la luz del caso analizado, podemos concluir que:

1) Indudablemente los procesos de desarrollo de ambas repúblicas divergieron dramáticamente uno del otro, en la práctica, a partir de las respectivas declaraciones de independencia. No existían ya sistemas de corrección de fondos de redistribución de recursos. Las diferencias sociales entre ex compatriotas crecieron de hecho tras la desintegración.

2) Aunque a largo plazo ambas repúblicas llegaron a tener crecimientos y procesos de desarrollo positivos, ERYD Macedonia sufrió un decrecimiento de sus niveles de desarrollo tras la desintegración. Así pues, se demuestra que la aplicación de la autodeterminación externa y constitutiva no produce desarrollo, por sí misma y en todos los casos, y por tanto, no garantiza necesariamente el cumplimiento del derecho al desarrollo.

Es decir, aún aceptando la legitimidad de la divergencia de dos procesos de desarrollo (esperando que ambos vectores sean positivos) tras el establecimiento de dos estados, es posible en la práctica que los vectores de desarrollo resultantes no sean ambos neutros o positivos, o incluso uno neutro y otro positivo, sino que puede darse que un vector resultante sea positivo y otro, negativo, produciéndose una vulneración del derecho humano al desarrollo.

La aceptación de diferencias legítimas no consideran los efectos decrecientes de los vectores de desarrollo. Los posibles efectos sobre los derechos humanos no fueron paliados de manera comprehensiva por negociaciones integrativas con un enfoque de derechos humanos en los Acuerdos de Sucesión.

3) Convertirse en estados independientes con fronteras internacionales tuvo distintas consecuencias para las dos repúblicas yugoslavas. Mientras que el impacto de convertirse en un sujeto internacional llevó los conflictos internacionales a las fronteras mismas de Macedonia ERYD, Eslovenia encontró nuevas oportunidades, menos cargas derivadas de justicia distributiva –pasó de dar fondos de redistribución yugoslavos a recibir fondos de la UE e internacionales–.

4) De manera relacionada, al convertirse en miembros independientes de la sociedad internacional, los niveles y mecanismos de justicia distributiva y de aplicación de derechos humanos cambiaron. Mientras que durante Yugoslavia, Macedonia recibía más fondos netos –de los fondos federales–, tras la independencia Eslovenia recibió proporcionalmente más fondos internacionales.

5) La desintegración de un estado y la creación de nuevas fronteras afecta los sistemas de justicia distributiva y puede afectar negativamente los derechos individuales, provocando un incremento real de las desigualdades sociales.

La aplicación de una autodeterminación constitutiva externa no trae por sí misma un incremento de los niveles de desarrollo en forma de desintegración, ni mucho menos trae un incremento *proporcional* en unos estados resultantes y otros: puede darse que, tras la desintegración de un estado, las subunidades políticas más desarrolladas se desarrollen proporcionalmente mucho más que las menos desarrolladas.

Entra dentro de lo posible que los nuevos estados menos desarrollados lleguen a tener un desarrollo negativo –es decir, que uno o varios de los componentes del vector de desarrollo sea negativo- por lo que no se fomentaría o bajaría el ritmo de implementación del derecho al desarrollo sino que se vulneraría.

6) Así pues, podemos concluir que si bien en la Sociedad Internacional rigen unas normas que facilitan un nivel muy bajo de redistribución de riqueza, estas normas pueden ser racionalmente convenientes o inconvenientes para las distintas unidades políticas subestatales dependiendo de su situación y expectativas.

Tradicionalmente, han sido las unidades oprimidas bajo los sistemas coloniales –las colonias- las que encontraban en el (injusto) orden internacional más justicia y posibilidades de desarrollo que permaneciendo subyugadas a la metrópoli. Pero ese ambiente injusto internacional, en el que hay menos obligaciones de unos con otros, ofrece también posibilidades de escape de obligaciones de justicia distributiva, posibilidades de reducir la aportación, lo que puede, bajo determinadas circunstancias, beneficiar a entidades proporcionalmente más ricas y no necesariamente subyugadas.

El caso de Eslovenia muestra que también las unidades en mejor situación económica relativa pueden encontrar ventajas en abandonar un sistema de redistribución por otro, el internacional. Sin embargo, esto no implica que los casos de colonialismo y los casos de desintegración/secesión de unidades más desarrolladas sean equiparables, pues pueden distinguirse impactos diferentes en las oportunidades de desarrollo, igualdad y justicia en la distribución de recursos y derechos de los ex compatriotas, ciudadanos del estado predecesor.

7) Se puede argumentar que es posible y pertinente, cuando se considere la importancia de las llamadas causas económicas o materiales en los estudios sobre las aspiraciones políticas relacionadas con la estatalidad o la aplicación de una autodeterminación externa constitutiva, en línea con los materialistas y defensores del racionalismo no emocional como base de los movimientos nacionalistas, que nos planteemos que los factores materiales no están relacionados con el mero mayor crecimiento económico sino con el incremento de un bienestar global y del conjunto de los derechos.

Desde este punto de vista, no son exactamente las expectativas de una mejora económica las que ponen en marcha ciertas aspiraciones políticas de estatalidad, sino la perspectiva de un incremento de desarrollo global (en el sentido de Sen, Sengupta, etc.) es decir, el incremento económico sumado al incremento de derechos colectivos e individuales y capacidades, mediante el incremento en sí o mediante un nuevo esquema de redistribución de recursos y derechos.

Este punto de vista, sustituyendo causas económicas por causas de desarrollo (que incluye causas económicas pero también la realización de derechos) ofrece una nueva dimensión, en mi opinión, más completa, convincente y cercana a las motivaciones reales de los ciudadanos tomados individualmente y en sus diferentes conjuntos. Además, hablar de causas de desarrollo permitiría incorporar al debate el derecho al desarrollo, o el desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos.

§5 Resumen y conclusiones

§5.1 En la primera parte de este trabajo hemos repasado las fuentes y principales características del derecho humano al desarrollo, analizando su contenido, sujetos, fundamentación, validez y eficacia. Con el fin de poner en relación este derecho con otros, en este caso el derecho de autodeterminación, es necesario superar cierta vaguedad en la descripción de su contenido, de la que algunos estudios adolecen, en favor de aceptar una amplitud del mismo. Así, nos hemos inclinado por seguir la definición, amplia pero operativa, de Arjun Sengupta, Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho al desarrollo, basada, a su vez, en la Declaración del derecho al desarrollo de 1986: el derecho humano como incremento de un bienestar basado en derechos, esto es, un proceso de incremento de realización de derechos y crecimiento económico g^* , que puede expresarse como $\mathbf{D}_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, \dots, dR_n, g^*)$. La definición como vector de Sengupta, implica que para el cumplimiento del derecho humano al desarrollo todos los elementos del vector deben ser positivos o al menos no decrecientes, de manera que el conjunto del vector de desarrollo sea, si no creciente, *al menos* no decreciente.

Esta definición es también coherente con la posición de Amartya Sen de desarrollo como libertad, siendo el proceso de expansión de libertades medio y fin del desarrollo. En relación con los sujetos, hemos subrayado que mientras que los obligados a remover los obstáculos al desarrollo son principalmente los estados, los sujetos titulares son los pueblos, en principio indicando en una identidad de sujetos con el derecho de autodeterminación. Sin embargo, la Declaración de 1986 -y la definición de Sengupta- recoge un matiz fundamental, tanto para entender el derecho al desarrollo como para ponerlo en relación con el derecho de autodeterminación, que es el emplazamiento del ser humano, del sujeto individual, en el centro del proceso de desarrollo, como participante en dicho proceso y como beneficiario principal del mismo.

Una vez sentadas las bases teóricas del primer objeto de estudio, hemos repasado sus orígenes históricos, incidiendo en la profunda influencia del Movimiento de los No Alineados en su construcción, delimitación y justificación. Hemos concluido que esta influencia es evidente y no solo alcanza a fijar el contexto y la base discursiva sobre la que M'Baye formula el derecho al desarrollo por primera vez en 1972, sino que la letra misma de la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 estuvo marcada por los preceptos fundamentales del Movimiento de los No Alineados. Para mostrar dicha influencia, en §2.6 he elaborado una tabla comparativa de los contenidos de la Declaración de la Conferencia de Belgrado de 1961, en la que se inaugura el MNA, y la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986.

En este marco, he repasado el aporte fundamental en la conformación y definición del derecho al desarrollo de los representantes de la desaparecida República Socialista Federal de Yugoslavia en el seno de Naciones Unidas desde que comenzaran las primeras propuestas de reconocimiento del derecho en ese organismo a principios de los ochenta. La República Socialista Federal de Yugoslavia fue muy activa en sus relaciones exteriores, tanto en el seno de las Naciones Unidas y del Grupo de los 77 como en el

Movimiento de Países No Alineados, siendo miembro fundador de todos ellos, y destacó su aportación en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Respecto al derecho al desarrollo, los miembros de la plural misión de Yugoslavia promovieron su reconocimiento en sus términos actuales. En 1981, Danilo Türk, el que fuera después Presidente de Eslovenia (de diciembre de 2007 a diciembre de 2012), fue elegido Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, puesto que mantuvo hasta 1984, y el 7 marzo de 1985, el representante de Yugoslavia en la Comisión, Ivan Tosevski, envió una carta a nombre del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, adjuntando en nombre de su delegación un borrador de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que, con muy pocos cambios, sería finalmente aprobada por la Asamblea General, convirtiéndose en la base del derecho al desarrollo.

La disolución de Yugoslavia contribuyó no sólo a acabar con ese impulso que aportaba al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, un impulso que, como ha defendido Milan Šahović, ha ido además cayendo en el olvido, sino a menoscabar también la aportación teórica a la materia concreta del derecho al desarrollo. A partir de los años noventa, el estudio del derecho al desarrollo como derecho humano autónomo ha recibido poca atención relativa en los círculos académicos de los países de la antigua Yugoslavia, a pesar del espectacular incremento material de la cooperación internacional para el desarrollo en la zona desde su disolución, como consecuencia de las múltiples necesidades identificadas en los distintos procesos de transición –políticos, económicos, sociales- así como de los conflictos asociados.

La mejor realización del derecho al desarrollo como derecho humano, muy importante en la agenda internacional yugoslava hasta su participación en la Consulta Global sobre el derecho al desarrollo de 1990, no fue tenido en cuenta de manera amplia. Sin embargo, sí lo fue en los distintos debates políticos y académicos que precedieron a la disolución del estado, debates marcados por el auge de la doctrina nacionalista primordialista en un contexto de grave crisis no sólo política y social, sino económica, en la que los recursos disponibles para la realización de los distintos derechos se veían, de hecho, progresivamente disminuidos.

§5.2 En la segunda parte hemos repasado, en primer lugar, los orígenes históricos y fuentes del derecho de autodeterminación de los pueblos, un derecho que ha sido considerado derecho humano, pero también como principio y prerequisite para la realización de los demás derechos. Al igual que respecto al derecho al desarrollo, se ha distinguido un aspecto procesal en el derecho de autodeterminación. Nos hemos detenido en el análisis del contenido del derecho, por ser ésta una de las cuestiones más controvertidas a nivel doctrinal. Hemos subrayado que la ya clásica distinción entre los aspectos externo e interno de la autodeterminación no ha terminado con los debates, pues no todos los autores entienden lo mismo al hacer referencia a tal clasificación: en concreto, por autodeterminación interna se han entendido conceptos muy diferentes, desde el principio democrático, como libertad frente al tirano, hasta diversas formas de acomodo de minorías nacionales o nacionalidades basadas en características etnoculturales, de manera destacada la autonomía territorial dentro de un estado. Así, hemos repasado las críticas a tal clasificación y hemos tomado como referencia la

aproximación al derecho de autodeterminación de James Anaya, y su distinción entre los aspectos continuado y constitutivo de la autodeterminación, considerando asimismo que no es igual tomar el aspecto constitutivo del derecho a nivel interno o externo respecto del estado, pues éste es, todavía, indudablemente, la unidad política principal de redistribución de recursos y derechos. Así, podríamos distinguir un doble eje: interno y externo, y continuado y consitutivo, del derecho de autodeterminación.

Ante la complejidad del contenido, con el fin de estudiar la relación con el derecho al desarrollo, hemos explorado la posibilidad de encontrar un mínimo núcleo de certeza, tal y como han propuesto autores como Brownlie (para quien tal núcleo consiste en “el derecho de una comunidad que tiene una carácter diferenciado a ver este carácter reflejado en las instituciones de gobierno bajo las cuales vive”). Desplazándonos del contenido material del núcleo de certeza, que también puede ser vista o completada como el derecho a ver reflejada la voluntad y no sólo su carácter identitario en las instituciones de gobierno, hemos fijado el núcleo esencial en un marco formal que parte de la idea de que la autodeterminación (autogobierno o autolimitación) por fuerza crea, independientemente del contenido del derecho o su ejercicio, unos “otros”, que son, a su vez, en todo caso, sujetos también de derechos humanos.

La sujeción a los derechos humanos es pues doble. Por un lado, el derecho a la autodeterminación puede ser considerado él mismo como un derecho humano, además de principio y prerequisite, en cuyo caso ha de cumplir con las características formales de todo derecho humano, (universalidad, interdependencia, inviolabilidad..) en relación con los demás derechos, y por otro lado, independientemente de la definición de su naturaleza, su ejercicio está condicionado por el marco de respeto a los derechos humanos de todos, como ha defendido el profesor Robert McCorquodale, que ha propuesto un enfoque de derechos humanos de la autodeterminación.

Así, nos hemos inclinado por considerar la realización global de los derechos humanos como parte del núcleo de certeza de la delimitación de la naturaleza, contenido y ejercicio del derecho de autodeterminación.

Considerando este núcleo esencial de la autodeterminación en el respeto de los derechos humanos, hemos pasado a repasar la segunda gran dificultad clásica en la concepción del derecho de autodeterminación, en estrecha relación con aquella del contenido: quiénes son los sujetos del derecho. Al igual que sucede con el derecho al desarrollo, los sujetos obligados de manera genérica son los estados y los sujetos titulares, los pueblos, una diferencia de sujetos que causa cierta tensión interna sobre la que han llamado la atención James Summers y otros. Sin embargo, las distintas acepciones que ha tomado el término pueblo en relación con su autodeterminación (desde la concepción etnocultural de pueblo con voluntad y conciencia de sí, al pueblo como clase socioeconómica, pueblo como mayoría, pueblo como conjunto de todos los conformantes del demos, pueblo como conjunto de las personas sujetas al poder político, etc...), ha resultado en una polisemia terminológica y conceptual que, como es sabido, ha afectado, a su vez, a las distintas interpretaciones históricas del contenido mismo del derecho. Considerando además que el derecho al desarrollo está construido en su acepción actual en torno al ser humano

individual proyectado en su dimensión colectiva, hemos considerado relevante indagar si es posible no sólo adoptar ese doble punto de vista colectivo e individual en el derecho de autodeterminación, (ya Mazzini decía al respecto que “la vida es una sola”), sino si se pueden integrar las distintas interpretaciones de lo colectivo plasmado en diferentes acepciones de pueblo y la dimensión individual, con el fin de facilitar el estudio de la relación entre los derechos.

En este sentido, con el fin de dar una visión integrada de los distintos puntos de vista e interpretaciones de los sujetos del derecho de autodeterminación, he considerado cada una de las diferentes interpretaciones de “pueblo” que influyen en el contenido del derecho de autodeterminación como distintas proyecciones en lo colectivo de las diferentes facetas o aspectos del ser humano individual como ser complejo (por ejemplo, siendo yo solo uno, en un estado democrático soy también, al mismo tiempo, un sujeto sometido a un poder, un súbdito, pero también parte del *demos*, cuando ejerzo de ciudadano, y del poder si trabajo para el estado, y también soy pueblo cuando participo de un idetintidad cultural particular, puedo ser simultáneamente mayoría y minoría, etc).

Así, los distintos y múltiples aspectos o facetas políticamente relevantes que conviven simultáneamente en el mismo individuo se proyectan en la colectividad y dan lugar a distintas concepciones o definiciones de “pueblo”, de manera que distintos “pueblos” conviven solapados e interseccionados como expresiones colectivas de las múltiples facetas que componen la complejidad del ser humano individual.

Se resumen los distintos aspectos o facetas políticamente relevantes del individuo que proyectados en la colectividad dan lugar a distintas concepciones o definiciones de “pueblo”, en en una tabla comparativa en §3.4.1.

Se ha acompañado dicha tabla de las variantes principales que resultan de aplicar el concepto de autogobierno como auto-límite a las distintas acepciones de pueblo nacidas de la proyección en el colectivo de distintos aspectos conflictivos del ser humano individual. De esta manera, no solamente no nos inclinamos por una acepción concreta de “pueblo” desechando las demás, (lo que no significa que todas las interpretaciones de autodeterminación sean necesariamente compatibles al mismo tiempo para los mismos individuos), sino que asumimos la complejidad y calibramos así la cuestión de los sujetos de derecho entre ambos derechos en estudio para analizar la relación entre ambos.

Siguiendo el esquema aplicado en la primera parte dedicada al derecho al desarrollo, tras el análisis general teórico del derecho de autodeterminación, se ha procedido al estudio del derecho de autodeterminación en el marco yugoslavo, como un apoyo para seguir la evolución interpretativa del derecho y para explorar su dimensión fáctica. Consecuentemente, hemos repasado la concepción e interpretación del derecho en la República Socialista Federal de Yugoslavia desde su conformación hasta su desintegración, prestando atención a la evolución doctrinal y jurídica de la interpretación del derecho de autodeterminación, así como sus eficacia en la dimensión fáctica. Y es que si podemos argumentar la importancia de Yugoslavia en la conceptualización del derecho al desarrollo, respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos, los Balcanes

Occidentales han sido el caso de estudio por excelencia: desde las referencias expresas respecto a la cuestión nacional de autores liberales clásicos como Mazzini o J.S. Mill, hasta las consideraciones sobre la aplicación del derecho de autodeterminación de Wilson o Lenin con la caída de los imperios Austrohúngaro y Otomano, pasando por la particular evolución constitucional de Yugoslavia impulsada por Tito y Kardelj, como principal ideólogo, caracterizada por aplicar el modelo leninista, en el que por autodeterminación incluye el derecho a la secesión, un modelo de centralismo democrático y acomodo federal de las naciones y minorías, que fue muy estudiado en su momento y presentado ampliamente como ejemplo de éxito de ordenación de las identidades étnicas y civiles en un marco socialista. En tiempos recientes, el caso de la desintegración de Yugoslavia ha pasado a formar parte de la literatura académica clave en cuestiones relacionadas con el estudio de identidad, etnificación política, nacionalismo y conflicto.

Desde el punto de vista iusinternacionalista, el estudio del derecho de autodeterminación no puede obviar la interpretación de la Comisión Badinter y su constatación de la desintegración fáctica del estado yugoslavo, o cómo se articuló el posterior proceso de independencia de Montenegro o la evoluciones de Kosovo hacia una completa soberanía. El debate acerca de cómo interpretar o aplicar el derecho de autodeterminación ha sido, como sabemos, especialmente encendido en relación con la estatalidad, particularmente en relación con la autodeterminación constitutiva externa, debate al que pertenece la autodeterminación entendida (también) como secesión. La constatación de la desintegración fáctica del estado hecha por la Comisión Badinter bordeó el debate sobre la autodeterminación y el derecho de secesión, así como sobre su aplicación en o fuera del marco constitucional yugoslavo.

Sin embargo, constatar una desintegración fáctica nada nos dice tanto de los efectos sobre los procesos de desarrollo y particularmente sobre el ejercicio del derecho al desarrollo, como sobre el cambio del régimen de obligaciones que unos (ex) ciudadanos tienen con otros en relación con la redistribución de derechos y recursos, en un proceso que aquí he denominado *proceso de imperfectibilidad de obligaciones*, haciendo referencia a las obligaciones imperfectas kantianas de cooperación internacional para el desarrollo entre estados, en contraste con un proceso de perfectibilidad de obligaciones, que encontraríamos en procesos de integración democrática.

Hemos puesto entonces el foco de atención en las distintas interpretaciones del derecho de autodeterminación durante el proceso de desintegración de Yugoslavia, que se inició en un contexto de grave crisis económica, indagando al mismo tiempo si se tuvo de alguna manera en cuenta, al considerar la forma de su aplicación, las mejores formas de realizar el conjunto de los derechos humanos de todos y, particularmente, el derecho al desarrollo en los términos expresados en la Declaración de 1986 sobre el derecho al desarrollo.

En este sentido, hemos repasado las propuestas confederativas presentadas por los representantes de Eslovenia y Croacia antes de la desintegración, así como el tipo o alcance de las propuestas aparentemente conciliadoras que encontramos en las Declaraciones de Independencia, (que hacen llamamientos a una cooperación limitada

sobre la base de un crecimiento económico y de seguridad común), los términos del Plan Carrington, en los que se enfoca la autodeterminación fundamentalmente desde un punto de vista político y causal, sin tener en cuenta expresamente los efectos sobre la realidad socioeconómica y el desarrollo como expansión de derechos de todos los implicados.

La Comisión de Arbitraje de la Conferencia sobre Yugoslavia (Comisión Badinter) no consideró necesario abordar expresamente, como hemos apuntado, la cuestión amplia del derecho a la autodeterminación entendida como secesión, y su relación con los efectos socioeconómicos a nivel amplio, pues se limitó a constatar la desintegración de Yugoslavia. Sin embargo, la Comisión Badinter abrió el interesante debate sobre la interpretación de esa segunda parte de la aplicación de la autodeterminación externa que se refiere a la sucesión del estado, una sucesión que debe ser, sin embargo, conforme a tal derecho de autodeterminación. Así, en línea con la idea plasmada por Rawls en *El derecho de gentes*, la Comisión Badinter exigió que en tal sucesión se respetaran los derechos de las minorías en el seno de los nuevos estados, pero no tuvo en cuenta de manera amplia los efectos en el derecho al desarrollo en los términos de la Declaración. Sí hizo referencia, de manera relacionada, a dos tratados en materia de sucesión de estados que no estaban en vigor: la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados, de 23 de agosto de 1978, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, como la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado de 1983, que hasta la fecha no ha entrado en vigor.

En relación a este último, en su Opinión n.13 de 16 de julio de 1993, la Comisión subrayó que “las cantidades debidas por daños de guerra no han de interferir en el reparto equitativo de los bienes y cargas dentro del proceso sucesorio, pero no excluye la posibilidad de compensación”, de manera que se abría la puerta a la interpretación de una cierta obligación de negociación, pues es difícil ser equitativo sin tal negociación, aunque el punto de vista fuera fundamentalmente patrimonialista y estatalista.

Los Acuerdos de Sucesión del estado yugoslavo no fueron firmados finalmente sino hasta el 29 de junio de 2001, por los representantes de los entonces estados sucesores de Yugoslavia: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia y la República Federal de Yugoslavia (a partir de febrero de 2003, Serbia y Montenegro) y entraron en vigor el 2 de junio de 2004. En las negociaciones de los Acuerdos las partes tuvieron en cuenta, pero siguieron de una manera limitada, tanto las opiniones de la Comisión Badinter, como las disposiciones de los dos tratados en materia de sucesión de estados mencionados. Respecto al tratado de 1983, que había sido firmado por Yugoslavia, según el diplomático retirado Anthony Aust, “en la práctica, aunque algunos de los artículos de la Convención de 1983 relativos a los archivos del Estado fueron de cierta utilidad, los demás lo fueron menos, y la cuestión de las deudas del Estado se acordó después de prolongadas y arduas negociaciones”.

Los Acuerdos de Sucesión de 2001 fueron acompañados de siete anexos, correspondientes con los principales objetos de negociación: a) propiedades muebles e inmuebles; b) propiedades diplomáticas y consulares; c) activos y pasivos; d) archivos; e) pensiones; f) otros derechos, intereses y pasivos; g) propiedad privada y derechos

adquiridos. Si observamos el contenido de las negociaciones de sucesión y sus resultados plasmados en los anexos, podemos fácilmente observar que la visión imperante fue fuertemente patrimonialista y estatista, obviándose la función garante de derechos de los ciudadanos del estado democrático: se repartieron bienes pero no se tuvo en cuenta el fin último de los mismos, que es la mayor libertad y desarrollo de todos los afectados, en sentido amplio.

El punto de vista de los Acuerdos fue predominantemente patrimonialista, porque las negociaciones giraron principalmente en torno a la distribución de bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos financieros, etc.,. Sólo fueron tomados en consideración los derechos de propiedad incluyendo propiedad intelectual, y derechos de ocupación y de tutela judicial efectiva para garantizar estos derechos de los ciudadanos, como si la creación de nuevas fronteras no afectara a otros derechos de los ciudadanos o si esta afectación no fuera relevante.

Debemos tener en cuenta que nada se oponía a que, al menos, se negociara la manera de resolver o mantener el nivel de desarrollo de todos los afectados, esto es, de al menos negociar cuestiones relacionadas con derechos económicos y sociales, incluyendo el acceso a educación superior, el derecho a sanidad especializada, el derecho a un medio ambiente sano, etc. Sin embargo, estas cuestiones se dejaron en un futuro indeterminado, para acuerdos para acuerdos internacionales posteriores,

Además, argumentamos, el punto de vista fue estatista, más propio de un Derecho Internacional clásico, un Derecho de Estados, que considera a éstos y a las organizaciones internacionales los únicos sujetos, y que considera a las personas como meros súbditos, un punto de vista que no tienen en cuenta, en fin, la incorporación progresiva de los derechos humanos al Derecho Internacional y su construcción con la dignidad del ser humano en su centro. Por el contrario, si consideramos que los derechos humanos forman parte de la normativa internacional, éstos no pueden obviarse en las cuestiones relativas a la sucesión de estados. La concepción del derecho de autodeterminación fue durante todo el proceso, un derecho de autodeterminación que no tuvo en cuenta las interacciones con el nascente derecho humano al desarrollo.

Los Acuerdos de Sucesión consideraron, en principio, las disposiciones de la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados de 23 de agosto de 1978, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, tras la desintegración de Yugoslavia, aunque el artículo 7.1 establecía que “(...) la Convención sólo se aplicará respecto de una sucesión de Estados que se haya producido después de la entrada en vigor de la Convención (...)”. Sin embargo, el alcance práctico de esta buena disposición fue también muy limitado. Así pues, aunque reconozcamos el avance que han supuesto los Acuerdos de Sucesión de 2001, que han sido valorados positivamente por autores como Andreas Zimmermann en algunos aspectos, fundamentalmente por la buena actitud de los estados sucesores, abiertos y dispuestos a negociar, y aunque podamos incluso distinguir un cierto, pero limitado, enfoque de derechos, restringido prácticamente a aquellos de propiedad, no podemos afirmar que se tuviera en cuenta ni el conjunto de los derechos humanos ni el derecho al desarrollo de manera amplia.

A partir de aquí, nos hemos preguntado sobre el destino de todos esos derechos que no se mencionan en los Acuerdos de Sucesión de 2001. En un sistema internacional en el que el estado es la unidad principal de distribución de recursos y derechos, los derechos que expresamente no se negocian entran tácitamente a depender del marco de soberanía nacional (y por tanto, en su caso, de tratados internacionales posteriores a la sucesión) y, en consecuencia, desde el punto de vista del individuo, de la nacionalidad que adopte en el proceso sucesorio. Dicho de otra manera, será la nacionalidad la que marque el nivel de realización de derechos y la distribución de bienes.

Así, la sucesión de la nacionalidad se presenta indirectamente como una cuestión de vital importancia para el nivel de realización de los derechos humanos y del derecho al desarrollo como derecho humano.

Hemos concluido que de los textos analizados y de la práctica reciente en materia de nacionalidad de las personas afectadas por un proceso de sucesión se desprende actualmente el reconocimiento progresivo de un cierto “derecho de opción” de la nacionalidad, defendido también por la doctrina. Pero este derecho de opción, derecho originalmente previsto y orientado sobre todo a evitar casos de apatridia, si es aceptado de manera general, en los casos de desintegración estatal, pone al individuo ante la decisión *racional* de opción en relación con el mejor cumplimiento de sus derechos y expectativas de bienestar basada en derechos (que coincide con el contenido del derecho al desarrollo), incluidos los derechos identitarios, pero también todos los demás derechos, muy alejada de la visión emocional de la decisión nacional política.

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano asesor del Consejo de Europa, más conocida por el nombre de Comisión de Venecia, aprobó en 1996 en Viena la “Declaración sobre las consecuencias de la sucesión de estados para la nacionalidad de las personas naturales” que defiende en su art. 4 que: “en el evento de una sucesión de Estado, los Estados involucrados podrán, mediante acuerdo, solucionar la cuestión de la nacionalidad. *Deberán respetar los derechos humanos de las personas involucradas*, tal y como se garantiza por los instrumentos internacionales”, abogando por el mencionado “derecho de opción”.

Es difícil entender este llamamiento al respeto de todos los derechos humanos, sin incluir el conjunto de todos los derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo a la doctrina actual que exige el cumplimiento de todos los derechos humanos, y difumina la frontera entre los llamados derechos positivos y derechos negativos. Sin embargo, entender ese respeto al conjunto, incluyendo, por tanto, el derecho al desarrollo, nos pone ante nuevas dificultades. Si cada nacionalidad supone un nivel de garantía y realización de derechos humanos diferenciado, la opción racional entre nacionalidades, en ejercicio de un derecho de opción, es aquella que, al menos, no suponga una disminución del nivel de realización de los derechos propios, incluyendo los de garantía identitaria, pues elegir una disminución nos pone en comprometida situación ante la disponibilidad de los derechos humanos.

Así, en los procesos de sucesión habría que tener en cuenta no sólo la situación relativa

individual de cada individuo, sino tal situación en relación con el racionalmente previsto nivel de cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los estados sucesores, lo que en la práctica es extremadamente difícil, habida cuenta que la secesión y la desaparición de estados son fenómenos en general relacionados con, precisamente, la desigualdad de distribución de recursos y/o derechos y la creciente o decreciente disponibilidad de los mismos y las expectativas creadas ante ellas. Una dificultad añadida es que, en tales procesos, existen derechos a los que no es posible acceder ni por la mejor opción, sencillamente porque cesan de existir. En una suerte de “tragedia de los comunes”, aunque se repartan perfectamente todos los recursos para el cumplimiento de todos los derechos, ciertos derechos son difícilmente distribuibles y realizables siquiera mediante el derecho de opción si no media acuerdo de las partes para su realización (piénsese en el derecho de libre circulación, por ejemplo). Muchos otros derechos humanos requieren la cooperación transfronteriza para incrementar su mejor realización (relacionados con educación superior, sanidad especializada, protección de medio ambiente, cooperación judicial y seguridad, intercambio cultural y científico, telecomunicaciones...)

Aunque los Acuerdos de Sucesión de 2001 pusieron el punto final al proceso de disolución de Yugoslavia desde el punto de vista jurídico, que es nuestro caso de estudio, considerando que desde el punto de vista sociológico y político no fueron el fin del proceso de desintegración del estado, (en realidad una cadena de secesiones según Francisco Veiga), he considerado interesante completar nuestras indagaciones con unos breves análisis adicionales acerca de la interpretación del derecho de autodeterminación tras los Acuerdos, en los casos de Montenegro y Kosovo (en relación con la República de Serbia y Montenegro, el primero, y en relación a la República de Serbia, el segundo), con el fin de saber si discursivamente podemos encontrar una evolución en la interpretación del derecho a la autodeterminación y, particularmente, si podemos encontrar algún tipo de acercamiento hacia un enfoque que considere el derecho al desarrollo.

En el caso de Montenegro, su independencia de la República de Serbia y Montenegro, en junio de 2006, terminó con el estado predecesor, el cual cesó de existir. Sin embargo, a diferencia de lo que sucediera con la República Socialista Federal de Yugoslavia, sólo Serbia fue considerado estado sucesor continuador del estado predecesor. Así, no encontramos en este caso acuerdos de sucesión análogos a los suscritos en 2001 por los estados sucesores de Yugoslavia.

Sin embargo, tal vez por la cercanía en el tiempo de los efectos que la reciente disolución de Yugoslavia había causado sobre la población vulnerable, (por entonces, todavía se registraban problemas importantes de retorno y reasentamiento de refugiados y desplazados internos, y cooperación transfronteriza), tanto académicos locales como organizaciones internacionales y otros actores de cooperación internacional presentes en la zona alertaron de los posibles efectos sobre el desarrollo de la independencia de Montenegro, favoreciendo una manera de entender la autodeterminación más cercana a la autodeterminación con enfoque de derechos humanos, aunque no se plasmara de manera comprehensiva un enfoque de desarrollo en el proceso jurídico de autodeterminación constitutiva.

Hemos destacado en este sentido la labor de PNUD, que presentó un extenso y detallado informe alertando de los efectos de la independencia de Montenegro sobre grupos sociales vulnerables con el fin de aliviar las necesidades emergentes⁹⁵¹. Según su enfoque, el impacto sobre los derechos humanos no sólo habría de esperarse de la futura diferente asignación de recursos suficientes para su realización o de la dificultad de coordinación en la implementación cotidiana, sino del cambio de obligaciones de realizar los derechos y la consecuente inseguridad de su reclamación; en un mismo estado era posible exigir un nivel de cumplimiento que no es posible respecto a un estado extranjero, por lo que se hacía preciso restaurar la obligación de cumplimiento lo antes posible mediante tratados internacionales específicos orientados a garantizar un mantenimiento de los niveles de ejercicio de derechos humanos alcanzados a la fecha.

En el caso de Kosovo, hemos argumentado que se aplicó un enfoque parcial y limitado de derechos humanos en un proceso de autodeterminación constitutiva incompleta, sin entrar a debatir sobre la legitimidad o no del proceso, sino solamente desde el punto de vista del alcance discursivo de la consideración de los potenciales efectos directos de la independencia sobre los derechos humanos. Lo limitado de este enfoque no se opone, sin embargo, a que haya supuesto un avance en relación con procesos anteriores, al menos en su plasmación teórica y documental. En relación con esta cuestión, hemos recordado que la Declaración de Independencia de 17 de febrero de 2008, por el que la Asamblea de Kosovo declaró unilateralmente la independencia de la República de Kosovo de la República de Serbia, de 2008, fue redactada conforme a la “Propuesta Integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo”, comúnmente conocida como “Plan Ahtisaari”. Dicho documento no abogaba expresamente por la secesión o independencia del territorio, pero se interpretó ampliamente que, para poder ejecutarlo en su totalidad, no cabía otra opción que completar el proceso de secesión de Kosovo y su adhesión a la estatalidad con reconocimiento internacional (el art.1.5 del Plan recogía por ejemplo, el “derecho a negociar y concertar acuerdos internacionales y a solicitar su admisión en organizaciones internacionales”). Respecto a otros documentos analizados correspondientes a procesos anteriores en la región, el Plan Ahtisaari, al menos sobre el papel, abre en cierta medida el catálogo de derechos considerados en el proceso de estatalidad. Sobre la protección de derechos humanos, el Plan Ahtisaari establece (art.2.1) que “Kosovo promoverá, protegerá y respetará el más alto grado de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Kosovo adoptará todas las medidas necesarias a fin de ratificar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus Protocolos”. Llama la atención que el Plan, por un lado, apele al respeto del más alto grado de derechos humanos pero que omita expresamente uno de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de manera que se quedan fuera la protección de

⁹⁵¹ Rakić- Vodinelić, V., Lubomir Fajtak, et.al., *Influence of Independence of Montenegro on Sensitive Social Groups, Government of the Republic of Montenegro*, Foundation Open Society Institute, UNDP, Podgorica, 6 julio 2006.

derechos económicos y sociales, (pero no así tanto los culturales, pues estos quedaban de alguna manera protegidos bajo los anexos de protección de las minorías y del patrimonio religioso y cultural). A pesar de los avances que refleja el Plan Ahtisaari respecto a la toma en consideración del conjunto de los derechos humanos en la aplicación de una autodeterminación constitutiva, al igual que todos los demás documentos análogos descritos anteriormente, éste no incluye una reflexión o una propuesta de acuerdo sobre la mejor realización de los derechos a la salud, medio ambiente, educación, o servicios sociales de todas las personas afectadas en el proceso, a pesar de denominarse precisamente, plan “integral”. Estas cuestiones sí que estaban, sin embargo, en el debate diario en la calle y en las preocupaciones de los habitantes de Kosovo, como tuve la oportunidad de comprobar personalmente. Es decir, que tal “integridad” no era tal desde un punto de vista de realización total de derechos humanos incluyendo los sociales y económicos, ni, por tanto, del derecho humano al desarrollo, aunque era de reconocer una avance importante de enfoque respecto a documentos regionales anteriores.

Como es bien conocido, la Declaración de Independencia fue llevada por la República de Serbia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de quien se solicitó su opinión consultiva. La resolución de la CIJ de 22 de julio de 2010, si bien señalaba que Serbia no había preguntado “sobre las consecuencias legales de esa declaración. En particular, (...) sobre si Kosovo ha alcanzado o no la estatalidad (...)” concluyó que “(...) el Derecho Internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable de declaraciones de independencia. De acuerdo con esto, concluye que la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no viola el Derecho Internacional (...)”.

Tras la resolución de la CIJ se abrió una nueva etapa; la República de Serbia y la Unión Europea enviaron seguidamente a la Asamblea General una propuesta para convocar el comienzo de una serie de negociaciones “técnicas” entre Serbia y Kosovo, un nombre que obviamente buscaba mantener un ambiente de concordia para unas negociaciones en sí mismas de alto calado político. Una propuesta de Resolución fue aprobada por a Asamblea General de las Naciones Unidas y en marzo de 2011 dio comienzo la primera de las rondas de este diálogo, en la que actuó de mediadora la Unión Europea, representada por Robert Cooper, quien, tal y como reflejó la nota de prensa del encuentro, subrayó los objetivos del diálogo: “*quitar los obstáculos que tienen un impacto negativo en la vida diaria de la gente*, mejorar la cooperación, y alcanzar un progreso en el camino a Europa”⁹⁵².

Las negociaciones “técnicas” llevaron eventualmente a la firma el 19 de abril de 2013, del “Primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones”, entre Ivica Dačić y Hashim Thaçi, bajo la mediación de Catherine Ashton. Estas negociaciones “técnicas” y la “remoción de obstáculos en la vida diaria de la gente” que incluyen cuestiones variadas relacionadas con seguridad, justicia, ley de amnistía, aduanas, un Fondo de Desarrollo y gestión integrada de fronteras, Oficinas de Enlace, cooperación regional, energía, telecomunicaciones, registro civil, catastro, y reconocimiento mutuo de diplomas y títulos universitarios, en un escenario en el que una

⁹⁵² Nota de Prensa Unión Europea. 7566/11. PRESSE 55. 9 de marzo de 2011. Bruselas. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/119697.pdf

de las partes no reconoce oficialmente la soberanía política de la otra, abre el escenario a considerar la autodeterminación de una manera más amplia, en relación con la expansión de todas las libertades, también aquellas menospreciadas en el ardor nacionalista, como pueden ser la gestión del catastro o el reconocimiento de títulos universitarios, teniendo en cuenta, por tanto, la realización global del derecho al desarrollo de los pueblos en la implementación de la autodeterminación, independientemente de la fijación última y final de su alcance, contenido o sujetos.

En consecuencia, hemos concluido que, por un lado, podría defenderse una evolución positiva hacia un enfoque cada vez más de negociación integradora y de derechos humanos, al menos en los documentos, caracterizada por la incorporación progresiva, desde concepciones de la autodeterminación más estatistas y/o nacionalistas, hasta llamamientos al respeto del conjunto más amplio de derechos y libertades de todos los implicados, hasta la adquisición, en fin, de un progresivamente más amplio enfoque de derechos humanos, aunque todavía incompleto.

El caso de Kosovo nos muestra asimismo que es posible concebir un escenario en el que la soberanía no es completa, más allá de los debates sobre la legitimidad de la secesión y estatalidad, en lo que pueden coincidir sus detractores, que no la reconocen, y sus partidarios, para quienes ésta no es completa por no tener todavía un control total sobre su territorio y habitantes, y/o por no ser reconocidos por la Comunidad Internacional o parte de ella (es decir, un escenario de disputa o de transición hacia un futuro estatus estable sea hacia un lado u otro). En este escenario es concebible, al mismo tiempo, el diálogo sobre la mejor manera de eliminar esos obstáculos a la mejora de la vida diaria de la gente afectada por esa disputa, esto es, la mejor realización de los derechos humanos de todos los agentes implicados, abriendo la puerta a la consideración global del derecho al desarrollo.

§5.3 Una vez analizados por separado el derecho al desarrollo y el derecho a la autodeterminación de los pueblos en cuanto derechos humanos autónomos, cada uno con sus particulares problemas, en un enfoque tridimensional, en la tercera parte se plantea la cuestión de la naturaleza de la relación existente entre ellos, también desde el punto de visto de legitimidad y validez, así como su posible reflejo en el plano fáctico. Con este fin, primero hemos establecido unas consideraciones generales:

Ambos derechos han sido descritos como derechos pero también como principios de Derecho Internacional; ambos han sido descritos como eventos y procesos; y ambos han sido descrito como derechos holísticos o primordiales, que contienen en sí o son requisitos de otros derechos. Asimismo, hemos de tener en cuenta la evolución reciente de los conceptos mismos: mientras que el concepto de “autodeterminación” se ha ido progresivamente ampliando introduciendo una dimensión económica, así como una dimensión individual, “desarrollo” ha ampliado su significado desde un mero crecimiento económico y avance tecnológico hasta un proceso de expansión de derechos y libertades y crecimiento económico interrelacionados.

Además, ambos derechos han sido considerados derechos “humanos” -con distintas

matizaciones, como derechos colectivos, como derechos de la solidaridad, como derechos de tercera generación-, adjetivo que conlleva ciertas consecuencias, que pueden ser resumidas en la idea de que si podemos hablar de un derecho humano al desarrollo y de un derecho humano de autodeterminación, por fuerza la relación entre ambos debe ser aquella que existe entre dos derechos humanos.

En consecuencia, si son dos derechos humanos, podemos defender que sus características adjetivas son aquellas de los derechos humanos y la relación entre ellos, si existe, habrá de respetar la relación entre dos derechos humanos tomados en abstracto. Tal relación es, como se indica en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, (art. 5): “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”.

Así, la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación en cuanto derecho humanos tiene que respetar estas tres características. Si ambos derechos son *universales*, son aplicables, por tanto, a todos los sujetos identificados como titulares de ambos, sujetos que son, a su vez, iguales en dignidad. Asimismo, ambos derechos son *indivisibles*, es decir, que están integrados entre sí y la violación de uno de ellos vulnera al otro, y son *interdependientes*, lo significa que la mejora de la realización de un derecho facilita la realización de otro, y la vulneración de un derecho afecta negativamente a la realización de los demás, es decir, el nivel de realización de un derecho depende del otro, uno está en función del otro.

Esto implicaría, a su vez, que el incremento progresivo de la realización del derecho al desarrollo no sólo dependería de la realización del derecho al autodeterminación, sino que la relación debería funcionar también al revés, en una función recíproca $d(D) = f(d(A)) \Leftrightarrow d(A) = f^{-1}(d(D))$, es decir, que la mejor realización del derecho de autodeterminación dependería también de la mejor realización del derecho al desarrollo, lo que requiere lógicamente consideraciones adicionales sobre el contenido mismo de los derechos, pues sólo un derecho de autodeterminación compatible con el derecho al desarrollo sería admisible. Si son dos derechos humanos, ambos derechos están relacionados entre sí, pero también con el resto de derechos humanos que deben igualmente respetarse.

La consideración de ambos derechos como autónomos pero dependientes entre sí, nos lleva, al reflexionar sobre los límites y delimitación de ambos derechos, a que la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo debe ser compatible con la delimitación de cada uno de los derechos dada por su definición o definiciones, no más restrictiva, y compatible con los límites derivados de su encuadre en un marco de derechos humanos, es decir, delimitado por la capacidad de realización de *todos* los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales.

Asimismo, al comparar dos derechos que son asimismo procesos, su relación ha de ser susceptible de análisis dinámico extendida en el tiempo. Por tanto, el análisis de la relación tiene que tener en cuenta el impacto en la participación ciudadana y el conjunto

de los derechos humanos, cuya realización ha de ser siempre expansiva, conforme al principio democrático y de manera continuada en el tiempo.

Al analizar la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo, hemos de tener en cuenta, por tanto, la evolución de los contenidos y los conceptos asignados a ambos términos, que no sólo han evolucionado con el tiempo, sino que han expandido su significado: tal y como por “desarrollo” entendemos hoy no sólo crecimiento económico o avance tecnológico, sino una expansión progresiva de libertades, “autodeterminación” se ha ido progresivamente entendiendo no simplemente en su vertiente política y colectiva sino también económica e individual. Han adquirido ambos una multidimensionalidad que se ha manifestado al menos en una multiplicidad de sujetos titulares, una multiplicidad de contenidos (resultando en diferentes definiciones unos excluyentes, pero otras perfectamente compatibles) y una doble naturaleza fin-medio de ambos derechos en cuanto procesos (desarrollo como medio y fin, autodeterminación como medio y fin), concluyendo en este sentido con la premisa para encuadrar la relación: que ésta sea compatible con que todos los individuos y grupos humanos interconectados tengan la posibilidad de alcanzar el mayor número de fines legítimos propios sin afectar negativamente a los demás fines disponiendo del mayor número de medios legítimos disponibles en un proceso creciente y expansivo de manera continuada en el tiempo.

Con esta introducción general acerca de las características de la relación, hemos procedido seguidamente a analizar la relación misma entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación, primero a partir de las fuentes, y después a partir de las definiciones doctrinales de cada uno de los dos derechos.

En primer lugar, hemos analizado la relación a partir de las fuentes (§4.3), fundamentalmente a partir de la literalidad de los Pactos Internacionales y de la Declaración sobre el derecho al desarrollo. Del análisis realizado, hemos concluido que la redacción de la Declaración de 1986 matiza de manera fundamental la concepción de la relación entre autodeterminación y desarrollo recogida en los Pactos.

El cumplimiento del derecho al desarrollo, tal y como se describe en la Declaración de 1986, no se opone a las implicaciones marcadas por el derecho de autodeterminación (autodeterminación continua, libre disposición de recursos, autodeterminación constitutiva), pero exige elementos adicionales. Los elementos que implica el cumplimiento del derecho de autodeterminación, son necesarios no suficientes para el derecho al desarrollo, ($D \Rightarrow A$; $A \not\Rightarrow D$), pues, como dice la Declaración de 1986, el “derecho al desarrollo implica *también* el derecho de autodeterminación”, lo que requiere, por tanto, n elementos adicionales (tales como la persona humana como sujeto central de desarrollo, que no estaba presente en la formulación del derecho de autodeterminación de los pueblos), de manera que $D \Rightarrow A \wedge n$. Aceptar esos n elementos es aceptar matizaciones en las múltiples formas de interpretar y aplicar la autodeterminación, que siguen siendo amplias, pero condicionadas a las exigencias del cumplimiento del derecho al desarrollo. De las múltiples maneras que se han planteado de interpretar y aplicar el derecho de autodeterminación sólo podemos aceptar aquellas

que, por sí solas, no puedan oponerse a los elementos adicionales dados por el derecho al desarrollo. La Declaración de 1986 impone así una visión *emancipadora* (condicionada) de la autodeterminación, marcada por el respeto a los derechos humanos y no por la visión nacionalista *primordialista* (incondicionada) étnica de la autodeterminación.

Por tanto, la aceptación de un derecho humano al desarrollo en los términos de la Declaración de 1986 como derecho autónomo introduce unas importantes precisiones del derecho al desarrollo al derecho de autodeterminación (que supone o da por hechas), que justifican por sí solas la adopción de un derecho al desarrollo como un derecho autónomo.

En este sentido he descrito cuatro precisiones fundamentales: precisiones de sujetos, de contenido, de naturaleza, y de obligaciones:

- Las precisiones de *sujeto* están relacionadas con la incorporación expresa en la Declaración de 1986 del sujeto individual en el derecho humano al desarrollo que implica el derecho de autodeterminación. El derecho al desarrollo es reconocido a “todo ser humano y todos los pueblos” por lo que se limita la concepción metafísica de pueblo como ente ajeno al ser humano individual sujeto de *todos* los derechos humanos.

- Las precisiones de *contenido* las encontramos al considerar que el derecho al desarrollo sólo protege un *particular* proceso de desarrollo, aunque pueda adquirir muchas formas precisamente en virtud de la autodeterminación, pero siempre basado en procesos democráticos, que permitan a los individuos disfrutar de sus derechos y participar en los procesos, y en los frutos y beneficios del desarrollo. El derecho al desarrollo no protege solamente el desarrollo como mero crecimiento económico, o el sólo avance tecnológico, o la explotación de recursos para un uso que no incorpore a la población en el reparto de beneficios, sino aquél que incorpore el principio democrático en sus distintas formas. Dado que el derecho al desarrollo implica el derecho de autodeterminación y sus componentes (como la libre disposición de riquezas naturales) así como los demás elementos (como el principio democrático y el respeto a todos los derechos), sólo son admisibles las concepciones de autodeterminación que los respeten, es decir, que sean compatibles con la realización progresiva del derecho al desarrollo de todos.

- Las precisiones de *naturaleza* están relacionadas con la definición del desarrollo en cuanto derecho autónomo en el texto de la Declaración de 1986. Como hemos mencionado con anterioridad, la adopción de un derecho humano al desarrollo, con las características de interdependencia e indivisibilidad, precisa la naturaleza del derecho de autodeterminación, creándose una relación formal entre ambos independiente de cualquier forma que adquiriera el ejercicio del contenido del derecho de autodeterminación, –una recíproca- afectando también al contenido material, de manera que el derecho de autodeterminación puede adquirir formas de realización muy variadas –tanto internas como externas- pero siempre dentro de los límites de respeto del contenido del derecho al desarrollo.

- Las precisiones sobre las *obligaciones* vienen dadas por la aceptación, junto con el

derecho al desarrollo en los términos planteados en la Declaración, de unas ciertas obligaciones (que como Arjun Sengupta y Amartya Sen, hemos considerado como a partir de la distinción kantiana entre deberes perfectos e imperfectos, frente a quienes han argumentado la no existencia en absoluto de los mismos) y la definición de los estados sujetos obligados principales de *remover los obstáculos del desarrollo*. La obligación imperfecta de contribuir al desarrollo de los demás incluye, sin embargo, de manera tácita, una prohibición absoluta de no contribuir a su vulneración, es decir, de no pretender que el vector de desarrollo sea negativo. Así, la realización del derecho de autodeterminación en cualquiera de sus formas debe ser compatible teóricamente con la posibilidad de que las obligaciones nacidas del derecho al desarrollo sean cumplidas, de que los vectores de desarrollo resultantes sean crecientes o, al menos, no decrecientes.

Si bien estas precisiones no resuelven, naturalmente, los problemas de aplicación del derecho de autodeterminación en todas sus dimensiones, nos proveen de un cierto marco que podría formularse así: cualquier interpretación y aplicación del derecho de autodeterminación no debe ser aquella que por sí misma cause un decrecimiento del vector de desarrollo de alguno de los pueblos implicados en los procesos de desarrollo y de autodeterminación, lo que a incluye un decrecimiento en los derechos humanos de las personas que, en cuanto sujetos individuales titulares de derechos, participan y son beneficiarias de los frutos de los procesos de desarrollo.

Esta conclusión, como veremos, es de difícil aplicación en casos de desintegración fáctica del estado, porque se consuma la desintegración sin la condicionalidad de desarrollo.

Hemos abordado seguidamente la relación entre el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo a partir del análisis de compatibilidad de la definición de derecho al desarrollo con las diferentes definiciones y contenido esencial del derecho de autodeterminación, que han dado diferentes autores (§4.4).

Por esta vía, hemos tomado la definición de derecho al desarrollo de Sengupta, compatible con la Declaración de 1986, y hemos intentado distinguir qué lugar ocupa el derecho de autodeterminación respecto a la misma. Considerando además que, como es aceptado, el derecho al desarrollo *implica* el derecho de autodeterminación, hemos explorado dos interpretaciones de la posición que podría tomar el derecho de autodeterminación en el esquema de Sengupta: por un lado, el derecho de autodeterminación como uno de los elementos del vector de desarrollo, es decir, como dR_A en $dD_R = (dR_1, dR_2, dR_A... dR_n, g^*)$ y, por otro lado, como definición del particular y concreto conjunto de personas al que se aplica materialmente el vector de desarrollo creciente basado en derechos, es decir, $dD_R(P)$, interpretaciones ambas que nos llevan a resultados muy diferentes. También hemos considerado la compatibilidad de ambas interpretaciones.

Aunque consideremos el derecho de autodeterminación como uno más de los elementos del vector de desarrollo junto con los demás derechos, todavía caben distintas interpretaciones de contenido, pues este elemento puede hacer referencia a conceptos diversos, habiendo subrayado que el derecho de autodeterminación como elemento

puede entenderse bien como principio democrático, bien como derecho de reflejo de carácter cultural propio en instituciones de gobierno, bien como el derecho a establecer políticas propias de desarrollo, culturales, sociales o económicas, controlando sus propios recursos y riquezas naturales, (es decir, *ongoing self-determination* en terminología de Anaya), bien como derecho de autodeterminación interna de un pueblo dentro de un estado, con proyección territorial, sin proyección territorial, etc., preguntándonos si sería o no posible integrarlas como elementos diferenciados del mismo vector, como distintos derechos: $D_R = d(W_R) = (dR_1, dR_2, dR_{A1}, dR_{A2}, dR_{A3}... dR_n, g^*)$.

Hemos concluido que aunque la cuestión permite distintas interpretaciones del derecho de autodeterminación como elemento del vector de desarrollo, incluso varias interpretaciones simultáneas del derecho de autodeterminación, esta vía interpretativa exige necesariamente también, en cualquier caso, que cualquiera de estas interpretaciones (o todas las que sean incluidas en el vector) sea compatible con el respeto de todos los demás elementos del vector, esto es, con el respeto del conjunto de derechos humanos y un crecimiento económico para mantener el vector de desarrollo positivo o al menos no decreciente.

Arjun Sengupta, al formular el derecho al desarrollo, lo hace de una manera puramente formal, de manera que puede aplicarse el vector de desarrollo a cualquier “pueblo”, pero no llega a aclarar la definición material del mismo. Alternativamente, por tanto, podemos considerar el derecho de autodeterminación, además de cómo elemento del vector, como el derecho que define el conjunto concreto de personas al que se aplica materialmente el particular vector de desarrollo, es decir, la concreción o reificación de la parametrización formal de Sengupta.

El derecho de autodeterminación correspondería así con el derecho de auto-selección del grupo concreto al que se refiere y aplica el vector de desarrollo, o lo que es lo mismo, se correspondería con el aspecto constitutivo de la autodeterminación de James Anaya, con ese derecho a la constitución voluntaria de ejecución episódica de un grupo de personas que por sí y para sí disfrutan un vector particular de desarrollo creciente, y que podría incluir sumultáneamente en sí la autodeterminación como elemento del vector.

Así, también podríamos interpretar –integrando ambas vías– el aspecto constitutivo de la autodeterminación como la definición del grupo al que se aplica el vector y el aspecto continuado como elemento del vector, según la definición de James Anaya. Es decir, que la aplicación sería, desde este punto de vista $D_R(P)$. Al concretar en un grupo particular la aplicación del vector de desarrollo, se abre la puerta a debatir que el resto de los vectores que por fuerza se crean en los conjuntos remanentes deben ser positivos si queremos que se respete el derecho al desarrollo como derecho humano y, por tanto, universal, condicionando así el aspecto cosntitutivo del derecho de autodeterminación.

Desde este punto de vista, que la autodeterminación sea “externa” o “interna” tendría sólo relevancia respecto a la naturaleza e intensidad de las obligaciones existentes entre los implicados y el nivel de realización de derechos, que se plasmaría en un mayor o menor incremento relativo del vector de desarrollo. Así, una autodeterminación constitutiva

externa supondría un *proceso de imperfectibilidad de las obligaciones* (no la desaparición total de las mismas), mientras que lo contrario sucedería en procesos de integración. Esto es porque la sociedad internacional requiere también a sus miembros ciertas obligaciones, que pueden ser más o menos convenientes para los nuevos miembros, dependiendo de su coyuntura particular.

Hemos considerado asimismo que la aplicación de los parámetros formales del vector a un grupo concreto de personas puede ser tratado desde dos puntos de vista: analítico o especulativo y material.

La aplicación analítica o especulativa a grupos potenciales permite el autoemplazamiento de las distintas identidades en competencia en escenarios óptimos para los intereses propios de individuos y colectivos que se manifiestan en distintas ideologías como proyecciones futuras de distintos modos de organización social.

Desde el punto de vista material, es decir, el derecho de autodeterminación como conformación de un grupo de personas concretas (y, por tanto, sujetos titulares de derechos humanos) al que aplicar el vector de desarrollo, podemos distinguir la cuestión de los criterios de conformación ideal de tales conjuntos –correspondientes con las disputas clásicas sobre autodeterminación– de su vinculación con un vector de desarrollo que ha de mantenerse siempre, al menos, no decreciente, si queremos que se respete el derecho humano al desarrollo.

Así, por ejemplo, desde la perspectiva nacionalista primordialista clásica, el pueblo sería un ente metafísico preexistente –el pueblo, la nación en el sentido primordial–, distinguible *a priori* que aspira ontológicamente a su identificación con la unidad máxima de repartición autónoma (estado), mientras que en la visión civil, un pueblo como conjunto al que aplicar el vector sería ya *dado* para la subyugación común y no por sus características externas (correspondiente con el conjunto de personas que compendrían, de hecho, un *demos*), etc. Sin embargo, al considerar estas disputas en el marco del derecho al desarrollo sea cual sea la definición originaria de pueblo como conjunto al que aplicar el vector, siempre habrá de ser matizada con el debate sobre mantenimiento de los niveles de desarrollo cuando aquellos puedan ser modificados.

Por otro lado, la aplicación material a conjuntos concretos de personas de la definición formal del derecho al desarrollo, tal y como corresponde a reconocer el derecho de autodeterminación, lleva a reconocer inevitablemente la existencia de hecho de una *multiplicidad* de pueblos, cada uno con su proceso *particular* de desarrollo, y por tanto con diferentes niveles pero también formas de realización (diferencias cualitativas y cuantitativas). Esto implica aceptar una *discriminación legítima* entre seres humanos fundamentalmente iguales, que se plasma en aceptar distintos conjuntos legítimos de personas con distinta disponibilidad jurídica y material de recursos y riquezas (recursos naturales no aparecen naturalmente distribuidas equitativamente en la naturaleza), distintas obligaciones entre sí y entre sus miembros, en distintos círculos de solidaridad, en ocasiones interseccionados, y como consecuencia, distintos niveles de realización de

derechos humanos. Tal multiplicidad estaría definida también por la autodeterminación como elemento del vector de desarrollo.

Se perfilarían así, por tanto, múltiples diferentes conjuntos solidarios de personas, solidarios cada uno entre sus miembros en el sentido originario de compartir el mismo fin de desarrollo, y entre sí, conjuntos con distinta intensidad de redistribución de recursos y derechos (destacando el estado como principal unidad política de distribución de recursos) pero interconectados e interseccionados, y con distintas obligaciones entre sí (obligaciones imperfectas entre estados, que se perfeccionarían o imperfeccionarían con la integración y la desintegración de los mismos) y con diferentes niveles de desarrollo legítimamente diferenciados. Distintos conjuntos cambiantes de personas, en fin, con distintos derechos y obligaciones a los que aplicamos los parámetros del vector de manera dinámica en el tiempo.

La relación entre autodeterminación y desarrollo regularía la evolución de esta multiplicidad de círculos interseccionados e interconectados en el tiempo, en respeto de la voluntad de los implicados y el conjunto de sus derechos humanos, exigiendo que el vector de desarrollo sea siempre, *al menos*, no decreciente.

La aceptación de una discriminación legítima entre personas iguales en dignidad con iguales derechos humanos, organizados en distintos conjuntos de autodistribución material, derivada del derecho de autodeterminación, permite pensar en *discriminación ilegítima*. Son bien conocidas y forman parte inseparable de la vida política las difíciles discusiones acerca de la legitimidad de creación o destrucción de conjuntos de distribución de recursos y derechos, es decir de su definición *a priori* y que están relacionadas tanto con los intereses particulares de los implicados como a diferentes *criterios de justicia*, legítimos todos cuando no se informan entre sí. El Derecho Internacional recoge, por el contrario, un amplio consenso sobre algunas situaciones de discriminación ilegítimas, plasmadas en la prohibición internacional del uso de la fuerza, del imperialismo y el colonialismo. La autodeterminación como conformadora de conjuntos de personas con diferentes obligaciones entre sí cumpliría en estos casos claramente su función emancipadora, pues aspiraría, entre otras cosas, a revertir el vector negativo de desarrollo de los injustamente subyugados. Naturalmente, estas situaciones serían diferentes, por ejemplo, de la creación de conjuntos que, por sí misma, no haga desaparecer, sino que cree, unidades políticas con vectores negativos de desarrollo. Así, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación externa constitutiva que tiene en cuenta el derecho al desarrollo de todos puede dar cabida a las teorías remediales de la secesión, distinguiendo los casos de independencia de los oprimidos (con vectores negativos, como en casos de imperialismo), de los casos de secesión unilateral de los mejor situados (con vectores de desarrollo positivos), con el fin de evitar obligaciones de justicia distributiva, como defienden Thomas Pogge y otros, además de considerar la voluntad y los procesos participativos como elementos indiscutibles de su conformación.

El vector de desarrollo, proyectado en el tiempo, nos ofrece una visión dinámica del problema de la distribución de bienes en los conjuntos a los que se aplica el vector y entre ellos, particularmente entre estados, de manera que las distintas aplicaciones de

autodeterminación se pueden vincular al vector de desarrollo (con el fin de que se mantenga creciente). Esto nos permite considerar la autodeterminación y el desarrollo desde la perspectiva de conjuntos, incluidos estados, siempre cambiantes.

La importancia de este punto de vista reside en que permite superar algunos problemas irresueltos por la doctrina clásica de la autodeterminación que se ha fundamentado en el mito de la posibilidad de alcanzar conjuntos de personas definitivos siempre estables, es decir, conjuntos de personas ideales o perfectos, entre los que redistribuir recursos y derechos. Este mito, a su vez, hunde sus raíces en la común asunción acrítica de la disponibilidad constante, estable y creciente de recursos a la hora de enfocar cómo abordar una empresa tal como es la constitución de una nueva unidad política, un problema registrado en las construcciones teóricas clásicas, orientadas a explicar cómo las unidades políticas se conforman para la vida mejor pero no cómo solucionan los inevitables problemas de inestabilidad constitucionales cuando la vida sobreviene peor, es decir, con un vector negativo de desarrollo.

Si aceptamos que los conjuntos de personas no se mantienen estables o al menos no siempre aspiran a mantenerse estables y los recursos disponibles no son siempre crecientes ni la disponibilidad de recursos naturales es siempre la misma, sino que puede ser decreciente, el derecho al desarrollo se configura como una especie de válvula unidireccional, que permite los arreglos que coadyuven a desarrollo de todos pero no aquellos que provoquen un ahondamiento ilegítimo del vector negativo sobrevenido.

Hemos explorado, en consecuencia, el mantenimiento del incremento progresivo del vector de desarrollo, o al menos su no decrecimiento, como criterio esencial de su aplicación a diferentes conjuntos inestables de personas, siguiendo la premisa de que todos los conjuntos de personas deben ver expandidos sus derechos y los beneficios de un crecimiento económico, de manera que el vector del derecho al desarrollo debe ser positivo en todas las interpretaciones y para todos los resultados de la aplicación del derecho de autodeterminación. Manteniéndose el vector de desarrollo positivo y, por tanto, el respeto al aspecto continuado del derecho de autodeterminación, el aspecto constitutivo, manifestado en forma de unión, absorción, secesión, desintegración o mera sucesión de conjuntos, debe resultar en nuevos conjuntos con vectores de desarrollo positivo o al menos no negativos, de manera compatible, por tanto, también con la obligación absoluta por parte de los estados de no dañar el proceso de desarrollo de un pueblo, coincida o no con un estado, en la aplicación del aspecto constitutivo.

Este mínimo, el criterio de que al menos nadie pierda en realización de derechos humanos y que al menos uno gane, nos hace distinguir una forma básica de solidaridad. Asimismo, es necesario distinguir los distintos modos de ejercicio de autodeterminación en escenarios *positivos* de los escenarios *negativos*, entendidos como aquellos en los que la disponibilidad de recursos sea creciente o decreciente para que el vector de desarrollo sea positivo. Esto es así porque en escenarios positivos, a diferencia de los negativos, es a primera vista posible mantener una distribución Pareto óptima de recursos. Sin embargo, no hemos de confundir el criterio de solidaridad básico de que nadie pierda con una mera redistribución de recursos conforme al Principio de la Optimalidad de Pareto, por las

razones que explicamos en §4.4.3.3 sino que correspondería más bien con el principio de fraternidad, en el sentido de Rawls.

Este nivel de *fraternidad* humana se refiere a una forma especial o particular de solidaridad que exige que un sujeto quiera o pretenda mejorar su situación sólo si esa mejora no lleva aparejada, por sí misma, el empeoramiento evitable de la situación de otro sujeto miembro de la relación, un concepto que John Rawls utiliza para construir su principio de la diferencia, articulando la libertad y la igualdad en la tríada clásica. La multiplicidad de conjuntos legítimos de personas iguales con el mismo fin de desarrollo se articularía a través de la fraternidad humana como nivel de solidaridad básico que se manifestaría como el principio de que la inestabilidad de conjuntos debe poder producir nuevos conjuntos, con el límite de que éstos permitan que las personas vean progresivamente sus derechos realizados de manera creciente o al menos no decreciente, poniendo, por tanto, un límite en lo humano a la persecución del autointerés, que no es sino el autointerés de todos. Nuestro punto de vista sería así perfectamente compatible con un enfoque de derechos humanos del derecho de la autodeterminación como el planteado por Robert McCorquodale.

En la práctica, podríamos promover o defender así la posición de que el derecho al desarrollo precisa el derecho de autodeterminación en su aspecto constitutivo de manera que, en casos de integración y adhesión, se requiera no sólo la mera voluntad, sino que el resultado del desarrollo en beneficio de todos los participantes del proceso o al menos que se hayan puesto todos los medios necesarios para que ése sea el resultado; en casos de secesión, nos daría herramientas para distinguir o al menos debatir sobre los casos de independencia en situaciones de colonialismo ilegal, de aquellos de pretensiones de secesión de partes en mejor posición relativa sobrevenida o más ricas para evitar los efectos adversos de la justicia distributiva, etc., aportando al debate, en fin, los resultados sobre el crecimiento o decrecimiento relativo de los vectores de desarrollo.

Sin embargo, nos encontraríamos todavía con una última dificultad en los casos particulares de desintegración, como fue el caso de Yugoslavia, según dictaminó la Comisión Badinter. En estos casos, las fronteras se levantan inevitablemente entre los estados sucesores, con los consecuentes efectos sobre los derechos de los excompatriotas, de manera que nuevos conjuntos se crean fácticamente, imperfeccionándose las obligaciones sin que se planteen condiciones previas a los resultados sobre los vectores de desarrollo resultantes. Si el derecho al desarrollo no actúa como condicionante para evitar de una afectación constatable de los derechos, ¿es posible que su aceptación sea aplicable en algún grado? En este escenario, hemos defendido que la aceptación de un derecho humano al desarrollo en casos de desintegración, implica tratar al menos de reducir en el ámbito negociador de la sucesión de estados, único posible, esa suerte de externalidades negativas que se dan sobre el conjunto de los derechos, especialmente manifiestas en aquellos derechos cuya mejor realización requiere necesariamente de la cooperación entre estados: educación superior, reconocimiento de títulos, atención médica especializada, servicios jurídicos y administrativos, libre circulación de personas, conservación de medio ambiente (cuencas hidrográficas transnacionales, seguridad contra incendios...), etc.

Esto correspondería con una aplicación mínima del criterio esencial de desarrollo en los procesos de autodeterminación constitutiva externa, que se plasmaría en la adopción de un enfoque de desarrollo en la sucesión de estados del estado desaparecido predecesor.

En este sentido, concluimos que la adopción del derecho al desarrollo, considerando los casos de desintegración estatal, en los que se constata la creación fáctica de nuevos conjuntos, con diferentes vectores de desarrollo no necesariamente positivos ni negativos, requiere:

- a) El desarrollo del marco normativo internacional en materia de sucesión de estados, aún hoy sorprendentemente primitivo y limitado, para que se incluyan provisiones que redunden en la mejor realización de los derechos humanos de todos los implicados en los procesos.
- b) La inclusión en las negociaciones de sucesión de estados de una perspectiva *integrativa* con un enfoque de derechos humanos sobre el contenido de los temas a tratar.

Estas reflexiones sobre la relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación como derechos humanos, requerían demostrar por último que, fácticamente, el acto de levantar fronteras afecta, por sí mismo, al nivel de realización de todos los derechos humanos, causando diferentes vectores de desarrollo, no siempre en beneficio de todos los implicados, es decir, de manera que se mantengan los vectores positivos. Así, mostraríamos que aunque en la Declaración se asuma que el derecho al desarrollo “implica el derecho a la autodeterminación”, de hecho, la realización del derecho de autodeterminación constitutiva externa no implica, por sí sola y sin matices, la mejor realización del derecho al desarrollo en todos los casos, sino que pueden darse vectores positivos y/o negativos.

Para ello, hemos incluido un estudio de caso, en el que hemos analizado la realización progresiva reciente del desarrollo humano de Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia. Del caso hemos concluido que la desintegración tuvo un efecto directo en el desarrollo de dos repúblicas de tamaño y población parecida, y por tanto, en los derechos humanos de los excompatriotas: la república más desarrollada creció proporcionalmente mucho más que la menos desarrollada, que vio decrecer su vector de desarrollo.

En fin, aceptar la existencia de un derecho al desarrollo como derecho humano, tiene importantes implicaciones en cómo hemos de entender el derecho de autodeterminación. La realización de ambos derechos requiere ser planteada de manera global, teniendo en cuenta cómo el ejercicio de cada uno de los derechos afecta a los demás de manera dinámica y continuada, teniendo en cuenta que, en cuanto derechos humanos, tanto el derecho de autodeterminación como el derecho al desarrollo son universales, indivisibles, interdependientes, y relacionados entre sí.

La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación puede enmarcarse en la relación amplia entre la igualdad y la libertad de los pueblos, entre su

conformación y su fin de desarrollo. Tal y como el desarrollo de los pueblos, como demostró Amartya Sen, no ha de concebirse sin libertad, la autodeterminación hunde sus raíces también en la igualdad de los pueblos. El desarrollo ha sido descrito como proceso siempre inacabado, como medio pero también como fin social: la expansión constante en el tiempo de los derechos y libertades de todos y el crecimiento económico. Tal proceso como medio y fin se engarza con la autodeterminación entendida, tanto en su aspecto continuado como en su aspecto constitutivo, interno o externo, creando distintos modelos legítimos de desarrollo de conjuntos cambiantes que interactúan entre sí.

El derecho de autodeterminación y el desarrollo de los pueblos no pueden entenderse aisladamente, ambos están inextricablemente unidos como lo están los destinos de sus titulares que, desde la adopción del derecho al desarrollo, incluye a los pueblos, pero no como entes abstractos sin conexión con lo humano, sino considerando junto con ellos al individuo como sujeto principal activo y beneficiario del desarrollo. Considerando los pueblos, en fin, como interseccionadas y solapadas proyecciones en la colectividad de las diferentes y múltiples facetas del ser humano, individual y complejo.

En una aspiración de justicia global, la relación entre ambos derechos ha de modularse conforme al principio de fraternidad humana, (análogamente a como el principio de la diferencia rawlsiana articula la igualdad y la libertad), una fraternidad entendida como una especie particular de solidaridad que no prefiere la mejora propia si implica necesariamente, por sí misma, la vulneración de los derechos humanos ajenos. Considerando además que ambos derechos humanos son universales y recíprocos, la realización de uno de los derechos ha de realizarse de manera que se permita la realización del otro, o al menos no impida por sí misma, su realización, lo que incluye el mantenimiento de vectores positivos de desarrollo.

Así como cualquier interpretación del derecho al desarrollo, que implica el derecho de autodeterminación, debe respetar éste en todos sus aspectos, aceptar un derecho humano al desarrollo, en los términos de la Declaración de 1986, implica que el derecho de autodeterminación, debe recíprocamente entenderse, en cualquiera de sus aspectos, de manera que sea posible la mayor realización del derecho al desarrollo de todos.

Esto requiere incorporar un enfoque de desarrollo en las distintas interpretaciones del derecho de autodeterminación, que incluye la progresiva realización de todos los derechos humanos y el aumento sostenible de recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos de todos, considerando a la persona como titular de derechos humanos y como sujeto central de desarrollo, esto es, como participante y beneficiario de los procesos de desarrollo.

§6 Bibliografía

§6.1 Bibliografía. Introducción y Parte I. El derecho humano al desarrollo

Abellán Honrubia, V., “Codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional del Desarrollo”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XXIX, 1976.

Abi-Saab, G., “The legal formulation of a Right to Development (subjects and content)”, en Hague Academy of International Law and the United Nations University: *The Right to Development at the international level*, Workshop, The Hague, 16-18 octubre 1979, editado por René-Jean Dupuy. Sijthoff & Noordhoff, Holanda, 1980.

Alonso, J.A., “Sin respuestas de Monterrey”, *El País*, 22 de marzo de 2002.

Alston, P., (Ed), *People's Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

Alston, P., Robinson, M., (Eds.), *Human Rights and Development. Towards Mutual Reinforcement*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

Alston, P., “Making Space for New Human Rights: the Case of the Right to Development”, *Harvard Human Rights Yearbook*, vol. 1, primavera ,1988.

Alwis, S., “La No-Alineación, un acercamiento evaluativo”, *Nueva Sociedad*, n. 31-32, julio-octubre, 1977.

Andreassen, B., Stephen P. Marks (Eds.), *Development as a Human Right: legal, political, and economic dimensions*. Harvard School of Public Health, François-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights, Cambridge, Massachusetts, 2006.

Angulo Sánchez, N., *El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado*, IEPALA, Madrid, 2005.

Aristóteles, *Ética eudemia*, Editorial Gredos, S. A., Madrid, 2011.

Aristóteles, *Ética Nicomaquea. Política*, Editorial Porrúa, México, 2010.

Aust, A. “La Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado”, *Untreaty.un.org*.

Barsh, R. L., “The Right to Development as a Human Right: Results of the Global Consultation”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 13 No. 3, 1991.

Bastida J., et al, *Teoría general de los derechos fundamentales en la constitución española de 1978*, Tecnos, Madrid, 2004.

Bedjaoui, M.,:

- “Droit au Développement et *Jus Cogens*”, *Annuaire de l'AAA*, Vol. 54/55/56, 1984/85/86.

- “Some Unorthodox Reflections on the Right to Development”, en Snyder, F. & Slinn, P. (Eds.)

International Law of Development: Comparative Perspectives, Professional Books, Abingdon, 1987.

- "The Right to Development", in *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Paris, 1991.

- *Hacia un Nuevo Orden Económico Internacional*, Ed. Sígueme. UNESCO, Salamanca, 1979.

Beetham, D., "The Right to Development and its Corresponding Obligations", en Andreassen, B.A., Marks, S.P., (Eds.), *Development as a Human Right: legal, political, and economic dimensions*, Harvard School of Public Health, François-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights, Cambridge, Massachusetts, 2006.

Beiser, F. C., *Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze*. Oxford University Press, Oxford, 2013.

Bermejo García, R. y Dougan Beaca, J. D., "El derecho al desarrollo: un derecho complejo con contenido variable", *Anuario de Derecho Internacional*, vol. VIII, 1985.

Bobbio, N., "Sul fondamento dei diritti dell' uomo", *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, n. 42, 1965.

Brownlie, I., *The Human Right to Development*, Human Rights in Development series, Commonwealth Secretariat, Londres, noviembre 1989

Budde, K., *Rawls on Kant: Is Rawls a Kantian or Kant a Rawlsian?* European Journal of Political Theory, 2007

Bueno, G., "Proyecto para una trituración de la Idea general de Solidaridad" *El Catoblepas, revista crítica del presente*, N. 26, 2004. Publicado online. Accesible en <http://www.nodulo.org/ec/2004/n026p02.htm>

Buitengeweg, R., "The Right to Development as a Human Right?", *Peace and Change* No. 4, 1993.

Bulajić, M.:

- "Principles of International Development Law: the Right to Development as an inalienable Human Right", en De Waart, Peters (Eds), *International Law and Development*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

- *Pravo na samoopredeljenje*, Naucna Knjiga, Beograd, 1964.

Bunn, I., "The Right to Development: Implications for International Economic Law", *American University International Law Review*, n. 15, 1999.

Camps, V. (Ed.), *Democracia sin ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales*, Editorial Trotta, S. A., Madrid, 2010.

Camps, V., *Virtudes públicas*. Colección Austral. Espasa Calpe. Madrid, 1993.

Carillo Salcedo, J. A., “El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XXV, 1972.

Carrillo Salcedo, JA. *Curso de Derecho Internacional Público*. Ed. Tecnos, Madrid, 1991

Castillo Daudí, M., *Derecho internacional de los derechos humanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

Chandler, D. (Ed.), *Rethinking Human Rights: Critical Approaches to International Politics*, Palgarve Macmillan, New York, 2002.

Chang, H-J., *Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica*, Catarata, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense Madrid, Madrid, 2004.

Chueca Sancho, A. G., “El derecho al desarrollo en el ámbito internacional”, en Pignatelli (Ed), *Desarrollo, Maldesarrollo y Cooperación al Desarrollo*, Seminario de Investigación para la Paz-Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1997.

Coe, P., “The Right to Development must also adress indigenous peoples and economies”, *Global Consultation on the Realization of the Right to Development as a Human Right*, Ginebra, 8-12 de enero de 1990, HR/RD/1990/CONF. 38.

Čok, V. *Pravo čoveka na životnu sredinu i pravo na razvoj* Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 44, n. 1., 1997.

Colliard, C-A., “L’ adoption par l’Assemblée Générale de la Déclaration sur le droit au développement (4 décembre 1986)”, *Annuaire Français de Droit International*, Vol. 33, 1987.

Cox, R. W. “Ideologies and the New International Economic Order: reflections on some recent literature”. *International Organization*, vol. 33, n. 2, 1979.

Crawford, J. (Ed.), *The Rights of Peoples*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

De la Torre Martínez, C., *La recepción de la Filosofía de los Valores en la Filosofía del Derecho* Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D. F. 2005.

De Waart, P.J.I.M., “Implementing the NIEO-principle on the Right to Development: combining human rights with State rights”, *Global Consultation on the Realization of the Right to Development as a Human Right*, Ginebra, 8-12, 1990, HR/RD/1990/CONF. 15.

De Waart, P.P., *International Law and Development*. Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

Dimić, L. en Milošević, M (ed), “Prva konferencija šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja, Beograd 1961” Archivos de Yugoslavia. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia. Belgrado, 2011.

Dion, R. R., “Macedonia: Coming in from the Cold”, *World Affairs* 160, No. 2, 1997.

Doebbler Curtis F. J. "Introduction to International Human Rights Law" CD Publishing, Washington DC, 2006.

Domenach, J-M., "Our moral involvement in development", *The Case for Development: six studies*, United Nations Center for Economic and Social Information, Praeger, Nueva York, 1973

Donnelly, J.:

- "In Search of the Unicorn: the Jurisprudence and Politics of the Right to Development", *California Western International Law Journal*, Vol. 15, 1985.

- *International Human Rights*, Westview Press, Colorado, 2007.

Ezquiaga Ganuzas, F.J., "Soberanía, autodeterminación y derecho al desarrollo", *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, n. 41, 1995

Falcetti, E., et al, "Bridging the Gaps? Private Sector Development, Capital Flows and the Investment Climate in South-Eastern Europe", *European Bank for Reconstruction and Development*, Working paper No. 80, junio 2003.

Falcón y Tella, M. J.:

- *Concepto y fundamento de la validez del Derecho*, Editorial Civitas, Madrid, 1994. Traducción al portugués: *Conceito e Fundamento da Validade do Direito*, (tr. Stefani Borba de Rose Trunfo), Livraria do Advogado, 1998. Traducción al inglés: *The Validity of Law: Concept and Foundation* (tr. Peter Muckley), Livraria do Advogado, 2000.

- *Estudios de Filosofía jurídica y política*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México Serie Doctrina Jurídica, n. 507, México, 2009.

- *La justicia como mérito*, Marcial Pons, Madrid, 2014. Trad inglés: *Justice and Law*, Martinus Nijhoff, 2014.

Fukuda-Parr, S., "The Human Development Paradigm: Operationalising Sen's Ideas on Capabilities", *Feminist Economics* 9 (2-3), 2003.

García Amador, F.V., *El Derecho Internacional del Desarrollo. Una nueva dimensión del Derecho Internacional Económico*, Civitas, Madrid, 1987

Geert-Hinrich, A., *Diplomacy on the Edge: Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working Group of the Conferences on Yugoslavia*, Woodrow Wilson Center Press, 2007.

Gómez Isa, F.:

- *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

- *El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998.

- *Los derechos de la solidaridad: el derecho al desarrollo y el derecho a la paz*, Tiempo de Paz, n. 80, Madrid, 2006

Gready, P., Ensor, J., (eds.), *Reinventing Development? Translating Rights-based Approaches from Theory to Practice*, Zed Books, Londres, 2005.

Gros Espiell, H.:

- “El Derecho al Desarrollo veinte años después”, en Herrero de la Fuente, A. (Coord.): *Reflexiones tras un año de crisis*, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996.

- “El Nuevo Orden Económico Internacional, el Derecho al Desarrollo y los Derechos Humanos”, en *La protección internacional de los Derechos Humanos. Balances y perspectivas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983.

- “El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana” *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, vol. XIII, no. 37, 1980.

Grubel, H.G., “The Case against the New International Economic Order”, *Weltwirtschaftliches*, Vol. 113, n. 2, 1977.

Hillebrand, E., *Poverty, growth, and inequality over the next 50 years* FAO Expert Meeting on How to feed the World in 2050. Food and Agriculture Organization of the United Nations Economic and Social Development Department. Junio, 2009.

Hirschman, A.O., “Obstacles to Development: A Classification and a Quasi-Vanishing Act”, *Economic Development and Cultural Change*, vol. 13, n. 4, part 1, julio, 1965, pp. 385-393

Israël, J-J., *Le droit au développement*, Revue Générale de Droit International Public, Tome 86, n. 1, Paris, 1983.

Janjić-Komar, M. “Pravo na razvoj = right to development,” *Pravni život: list za pravna pitanja i praksu* Vol. 52, n. 9, 2003.

Kant, I.:

- *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*, Cátedra, Madrid, 2009.

- *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Col. Austral, Espasa Calpe, Madrid, 2009.

- *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, 1991.

Kaul, I. et al., (Eds.) *Providing Public Goods. Managing Globalization*, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Kelsen, H., *Derecho y paz en las relaciones internacionales*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

Kenig-Witkowska, M.M.:

- "The UN Declaration on the right to development in the light of its travaux préparatoires" en De Waart, Paul Peters, *International Law and Development*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

- *The Paradigm of Development in International Law*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988.

Köchler, H., "The Principles of Non-Alignment – The Non-Aligned Countries in the Eighties: Results and Perspectives – Baghdad, Iraq, 4-6 May 1982", *Studies in International Relations*. Vol. 1, n.1

Lewis, W. A.:

- *The Theory of Economic Growth*, Taylor and Francis, Londres, 2003.

- "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor", *Manchester School of Economic and Social Studies*, vol. 22, 1954.

Lotze, H., *Microcosmos: an essay concerning man and his relation to the world*. Scribner & Welford, 743-745, Broadway, Nueva York, 1887.

M'Baye, K.:

- "Le Droit au développement comme un droit de l'homme", *Revue des droits de l'homme*, 1972.

- "Le Droit au Développement est-il un droit de l'homme?", en Marcus Helmons, S. (Ed.): *Droits de l'Homme et Droit au Développement*, Colloque de Louvain-de-Neuve, octobre 1985, Brylant, Bruselas, 1989.

Marks, S. P.:

- "Emerging Human Rights: a new generation for 1980s?", *Rutgers Law Review*, vol. 33, 1981.

- "The Politics of Possible: Achievements and Challenges of International Agreement on the Right to Development", *25 Years of the Right to Development, Achievements and Challenges*, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2011.

- *Obstacles to the Right to Development*, Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University, 2003.

- *Implementing the Right to Development, The Role of International Law*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginebra, 2008.

- "The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality", *Harvard Human Rights Journal*, vol. 17, 2004.

McCorquodale, R., "Self-determination: a Human Rights Approach", *International & Comparative Law Quarterly*, 1994.

Milanović, B., "Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: The Story of the

Past Two Centuries”, *Policy Research Working Paper 5044*, World Bank, Washington D.C., 2009.

Naïr, S., *Informe de balance y orientación de la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios*. Misión Interministerial sobre Migración y Codesarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. 1997.

Nowak, M., “The Human Right to Development versus Human-Rights-Based Development Cooperation”, en Tetzlaff, R.: *Human Rights and Development*, Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn, 1993.

NN.UU., *The Millennium Development Goals Report, 2011*, Naciones Unidas, Nueva York, 2011

NN.UU., *The International Dimensions of the Right to Development As a Human Right in Relation with Other Human Rights Based on International Co-Operation, Including the Right to Peace, Taking into Account the Requirements of the New International Economic Order and the Fundamental Human Needs*, Report of the Secretary-General, UN doc. E/CN. 4/1334, 2 de enero de 1979.

O'Neill, O., *Constructions of reason. Explorations of Kant's Practical Philosophy*, University of Cambridge, 1989.

Oliva, D., *El derecho al desarrollo y la cooperación internacional. Especial atención a la práctica española*, CIDEAL, Madrid, 2011.

Orford, A. “Globalization and the Right to Development” in *People's Rights*, Alston, P. (Ed.), Oxford University Press, Oxford, 2001.

Ortiz, I., Cummins, M., *Global Inequality: Beyond the Bottom Billion – A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries*. United Nations Children's Fund (UNICEF), Nueva York, abril, 2011.

Peces-Barba Martínez, G., *Derecho y derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

Pellet, A., “Note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit au développement”, en Flory, M.; Mahiou, A. et Henry, J-R., *La formation des normes en Droit International du Développement*, Table Ronde franco-maghrébine Aix-en-Provence, octubre 1982, Office des Publications Universitaires, Alger et Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1984.

Pellet, S., *Le droit au développement. Genèse et concept*, Mémoire, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Ginebra, 1990.

Pérez González, J, Fanjul, G. et al. *Informe Hacia un Libro Blanco de la Cooperación Española*. Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE), Fundación Salvador Soler Mundo Justo, 2012.

Pérez González, M., “El derecho al desarrollo como derecho humano”, en *El derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos sociales*. Ed. Complutense, Madrid, 1991.

Pogge, T., *World Poverty and Human Rights*, Polity Press, Cambridge, 2004.

Puerto S. and Luis M., (Eds.), *Economía para el desarrollo*. Catarata, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense Madrid, Madrid, 2008.

Radan, P., *The Break-up of Yugoslavia and International Law*, Routledge, Taylor & Francis Group, Nueva York, 2002.

Rakić-Vodinelić, V. R., *Prava treće generacije*. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 39, n. 5-6, 1989.

Rawls, J.:

- *A Theory of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 2005.

- *The Law of Peoples with "The Idea of Public Reason Revisited"*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2002.

Reale, M., *Teoría tridimensional del Derecho: una visión integral del Derecho*, Tecnos, Madrid, 1997.

Rich, R.:

- "The Right to Development as an emerging Human Right", *Virginia Journal of International Law*, vol. 23, 1983 p.327

- "The Right to Development: A Right of Peoples?" en Crawford, J., *The Rights of Peoples*, Oxford University Press, New York, 1988.

Roy Chowdhury, S y Denters E, "The Right to Development in International Law" Martinus Nijhoff Publishers, 1992.

Sachs, J., *The End of Poverty: How We Can Make it Happen in Our Lifetime*, Penguin Books, London, 2005.

Šahović, M., «Bivša jugoslovenska federacija i međunarodno pravo», *Međunarodni problemi*. Vol. 46, N. 3, 1994.

Salama, I., "The Right to Development. Towards a new approach?", *Perceptions: Journal of Internacional Affairs*, verano, 2005.

Sen, A. K.:

- "Democracia y desarrollo. Derechos del hombre y diferencias culturales". Traducción de José Iturmendi Morales, *Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época*, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense de Madrid, vol.1, Madrid, 2000.

- *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2009.

- "Human Rights and Capabilities" *Journal of Human Development* , vol. 6, n. 2, Julio, 2005.

- “Consequential Evaluation and Practical Reason”, *The Journal of Philosophy*, vol. XCVII, n. 9, septiembre, 2000.
- *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- *On Ethics and Economics*, Basil Blackwell, New York, 1987.

Sengupta, A.:

- *Primer Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/1999/WG.18/2
- *Segundo Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/2000/WG.18/CPR.1
- *Tercer Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/2001/WG.18/2
- *Cuarto Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo*, UN Doc. E/CN.4/2002/WG.18/2
- *Quinto Informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo: Marco para la Cooperación al Desarrollo y el Derecho al Desarrollo* UN Doc. E/CN.4/2003/WG.18/6
- *Sexto Informe del Experto Independiente sobre el derecho al desarrollo: implementando el derecho al desarrollo en el actual contexto global*, UN Doc. E/CN.4/2004/WG.18/2
- *Estudio preliminar del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo en el impacto de las cuestiones económicas y financieras en el disfrute de los derechos humanos*. UN Doc. E/CN.4/2003/WG.18/2
- “Realizing the Right to Development”, *Development and Change*, vol.31, n. 3, 2000.
- “The Human Right to Development”, *Oxford Development Studies*, vol.32, n. 2, 2004.
- “Conceptualizing the right to development for the twenty-first century” en VV.AA *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, OHCHR publication, Naciones Unidas, 2013.

Shue, H., *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press, 2nd ed., New Jersey, 1996.

Singer, P.:

- *Famine, Affluence, and Morality*, *Philosophy and Public Affairs*, vol. 1, 1972.
- “Outsiders: Our Obligations to Those Beyond Our Borders”, *The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Smith, R. K. M., *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

Stanković, S., *Tito and Non-Alignment*. Radio Free Europe Research, 1967.

Steiner, H. J., Alston, P., *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals*, 3 ed., Oxford University Press, Oxford, 2005.

Summers, J. "The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law" *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005.

Tomasevski, K., *Development Aid and Human Rights Revisited*, Pinter Publishers, London, 1993.

Tully, J., *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Türk, D.:

- "The Right to Development", *Interights Bulletin*, 43, 1998/1999.

- Türk, D., *The New International Economic Order and the promotion of Human Rights. Realization of Economic, Social and Cultural Rights. Progress Report prepared by Special Rapporteur*: 6 de Julio de 1990. E/CN.4/Sub.2/1990/19

Udombana, N. J., "The Third World and the Right to Development: Agenda for the Next Millennium", *Human Rights Quarterly*, n. 22, 2000.

Uvin, P., "From the Right to Development to the Rights-based Approach: How 'Human Rights' Entered Development", *Development in Practice*, Vol. 17, No.4, 2007.

Vasak, K., "Les différentes catégories des Droits de l'Homme", *Les dimensions universelles des Droits de l'Homme*, UNESCO-Bruylant, Bruxelles, 1990.

Veiga, F., *La trampa balcánica*, Grijalbo, Barcelona, 2001.

Velázquez Elizarrarás, J.C., "Reflexiones generales en torno a la importancia de los principios del derecho internacional", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XII, 2012

Villaroman, N. G., "The Right to Development: Exploring The Legal Basis of a Supernorm", *Florida Journal of International Law* 22, n. 2, 2010.

Virally, M., *El devenir del derecho internacional*, México, FCE, 1998.

§6.2 Bibliografía. El derecho de autodeterminación de los pueblos

Abellán, J., *Nación y nacionalismo en Alemania. La "cuestión alemana" (1815-1990)* Ed. Tecnos, Madrid, 1997.

Alfredsson, G., "Minorities, Indigenous and Tribal Peoples, and Peoples: Definitions of Terms as

a Matter of International Law” en Ghanea, N., y Xanthaki, A., (eds.) *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005.

Alfredsson, G., “Different Forms of and Claims to the Right of Self-Determination” en D. Clark and R. Williamson (eds.) *Self-determination: International Perspectives*, Macmillan Press, London, 1996.

Allcock, J. B., *Explaining Yugoslavia*, Columbia University Press, New York, 2000.

Ambrosius, L. E., *Woodrow Wilson and the American diplomatic tradition. the treaty fight in perspective*. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Anaya, J. S., *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, (ed.), 2000.

Anaya, S. J., “A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination”, *Transnational Law & Contemporary problems*, vol.3, primavera, 1993.

Anderson, B., *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, Colección Popular. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1993.

Anderson, M., *Frontiers, territory and state formation in the modern world*. Polity Press, Cambridge, Oxford, 1996.

Archibugi, D., “Un análisis crítico de la autodeterminación de los pueblos” en Mesa, M., y González Bustelo, M., (eds.). *Anuario CIP 2004: Escenarios de conflicto. Irak y el desorden mundial*. Centro de Investigación para la Paz (CIP), Fundación Hogar del Empleado (FUHEM), Icaria, Barcelona, 2004.

Aristóteles, *Política*, Ediciones Istmo, Madrid, 2005.

Atienza, M., Ruiz Manero, J., “Sobre principios y reglas”, DOXA, *Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 1991.

Aust, A., “Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado”, *United Nations Audiovisual Library of International Law*, 2010.

Banac, I., *The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics*, Cornell University Press, 1984.

Bauböck, R., “Why Stay Together? A Pluralist Approach to Secession and Federation” en Kymlicka W., y Norman W., (eds) *Citizenship in Diverse Societies*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Bauer, O., *The question of nationalities and social democracy*, ed. J. Nimni, E., University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2000.

Barros, J., *The Aland Islands question: its settlement by the League of Nations*, New Haven, Yale University Press, 1968

Benhabib, S., *The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2002.

Berlin, I., "Two concepts of liberty", *Liberty: Incorporating four essays on liberty*, Hardy, H. (ed.), Oxford University Press Oxford, Nueva York, 2002

Bertelsmann Stiftung, *BTI 2012 — Kosovo Country Report*. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2012.

Bhalla, R. S., "The Right of Self-Determination in International Law" en Twining, William., (ed.), *Issues of Self-Determination Aberdeen University Press*, Aberdeen, 1991.

Bianchini, S., "Partitions: categories and destinies", Bianchini, Stefano et al., *Partitions. Reshaping States and Minds*. Frank Cass. Taylor and Francis Group, Oxon, New York, 2006.

Birtek, F., "From affiliation to affinity: citizenship in the transition from empire to the nation-state" en Benhabib, S., Shapiro, I., and Petranovic D., (eds) *Identities, affiliations and allegiances*. Cambridge University Press, 2007.

Bojčić, V., "The Disintegration of Yugoslavia: Causes and Consequences of Dynamic Inefficiency in Semi-Command Economies", en Dyker D., Vejvoda I., (eds) *Yugoslavia and After - A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth*, Longman. London, New York, 1996.

Brilmayer, L., "Secession and Self-determination: A Territorial Interpretation", *Yale Journal of International Law*, vol. 16, n.177, 1991.

Brownlie, I., "The Rights of Peoples in Modern International Law", en Crawford, J., (Ed.), *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, 1988.

Brubaker, R., "Myths and misconceptions in the study of nationalism" en Moore, M., (ed). *National self-determination and secession*. Oxford University Press, 1998.

Brubaker, R., *Ethnicity without groups*. Harvard University Press. Harvard, 2004.

Buchanan, A.:

- *Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York, 2007.

- "Rawls's Law of Peoples: Rules for a Vanished Westphalian World", *Ethics*, vol. 110, no. 4, 2000.

- *Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec*. Westview Press, Boulder, San Francisco, Oxford, 1991.

- "Self-Determination and the Right to Secede". *Journal of International Affairs* 45, no. 2, 1992.

Bulajić, S., "Law of Nationality and the Dissolution of Yugoslavia", *Prilozi Projektu*, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Beograd, 2005.

Canivez, P., "Jean Jacques Rousseau's concept of people", *Philosophy and Social Criticism*, vol. 30, n. Junio. 2004.

Capotorti, F., *Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, United Nations, New York, 1991.

Carens, J., "Aliens and Citizens: The Case for Open Borders", *The Review of Politics*, Vol. 49, n. 2., 1987.

Carty, A., "From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory", *Third World Legal Studies*, Vol. 3, Article 5, 1984.

Cassese, A., *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Castellino, J.:

- "The Secession of Bangladesh in International Law", *Asian Yearbook of International Law*, n.7, 2000.

- *International Law and Self-Determination: The Interplay of the Politics of Territorial Possession with Formulations of Post-Colonial 'National' Identity*, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 38, Dordrecht, 2000.

Chandler, D.:

- "Western Intervention and the Disintegration of Yugoslavia", 1989-99, in Herman, E. and Hammond, P. (eds) *Degraded Capability: The Media and the Kosovo Crisis*, Pluto Press, London. 2000.

- "The Limits of Human Rights and Cosmopolitan Citizenship" en *Rethinking Human Rights. Critical Approaches to International Politics*. Palgrave Macmillan, Nueva York, 2002.

Christiano, T., "Secession, Democracy and Distributive Justice", *Arizona Law Review*, vol. 37, n.1, 1995.

Cicerón, *De Republica*. Akal, Madrid, 2012.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD. *General Recommendation No. 21: Right to Self-Determination*. 23/08/1996.

Consejo Europeo, *Conclusiones de la Presidencia*, Doc. SN 151/2/91 (Ann. V), 1991.

Coppieters, B., Sakwa, R., (eds.) *Contextualizing Secession. Normative Studies in a Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Corni, G., "Volk, Nation, Rasse, in Theory and in Practise in National Socialism" en Henry Huttenbach and Francesco Privitera (eds.), *Self-Determination. From Versailles to Dayton. Its Historical Legacy*, Longo, Ravenna, 1999.

Craven, M., "The European Community Arbitration Commission on Yugoslavia", *British Year Book of International Law*, n 66, 1996.

Crawford, J., "The Right of Self-Determination in International Law: Its Development and Future" en Alston, P. (ed), *People's Rights*, Academy of European Law, European University Institute, Oxford University Press, Oxford, New York, 2001.

Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*. Nueva York, 1981.

Davis, H. B, *Toward a Marxist Theory of Nationalism*, Monthly Review Press, New York, London, 1978.

Decreto nº 21608. *Diário do Governo*, Número 195, 20 de agosto de 1932. Vid. página web del *Diário da República*. <http://dre.pt/pdf1sdip/1932/08/19500/17531756.pdf>

Deda, I., "Kosovo after the Brussels Agreement: from status quo to an internally ethnically divided", *State Policy Briefs*. Konrad-Adenauer-Stiftung, diciembre, 2013

Del Mar, K., "The myth of remedial secession" en French, D., (ed) *Statehood and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity*, Cambridge University Press, 2013.

Detrez, R., "The Right to Self-Determination and Secession in Yugoslavia: A Hornets' Nest of Inconsistencies" en Coppieters B., y Sakwa R., (eds)., *Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective*, Oxford University Press, 2003.

Diderot, D., *Sobre la interpretación de la naturaleza*. Anthropos, Barcelona, 1992.

Djilas, A., *The Contested Country. Yugoslav Unity and Communist Revolution 1919-1953*, Harvard University Press, Cambridge, London, 1991.

Djilas, M., *Tito, the story from the inside*. New York, 1980.

Dugard J., Raič, D., "The role of recognition in the law and practice of secession", en Kohen M.G. (ed), *Secession. International Law Perspectives*, Cambridge University Press, 2006.

Dugard, J., *Recognition and the United Nations*. Hersch Lauterpacht Memorial Lectures Vol.3, Cambridge University Press, 1993.

Dumberry, P., *State Succession to International Responsibility*, Graduate Institute of International Studies Geneva. Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2007.

Eagleton, C., "Excesses of self-determination", *Foreign Affairs*, Vol. 31, No. 4, Julio, 1953.

Ejdus, F., *The Brussels Agreement and Serbia's National Interests: A Positive Balance Sheet*. Konrad-Adenauer-Stiftung, Belgrade Office, 2014.

European Commission for Democracy through Law, *Consequences of state succession for nationality*, Col, Science and technique of democracy, n. 23, Council of Europe Publishing,

Germany, 1998.

Evans, M. D., *International Law*. Oxford University Press, Oxford, New York, 2003.

Falk, R., "Self-Determination Under International Law: The Coherence of Doctrine Versus the Incoherence of Experience" en *The Self-Determination of Peoples: Community, Nation, and State in an Interdependent World*, ed. Wolfgang Danspeckgruber, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2002.

Ferrando Badía, J., "Los principios socio-económicos y socio-políticos del régimen político yugoslavo", *Revista de estudios políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, nº 163, 1969.

Fichte, J. G. *Discursos a la nación alemana*, Ed. María Jesús Varela/Luis Acosta, Editora Nacional, Madrid, 1977.

Franck, T. M., "The Emerging Right to Democratic Governance", *The American Journal of International Law*, Vol. 86, n.1, 1992.

Gallagher, T., *Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989. From the Ottomans to Milosevic*, Taylor & Francis Group, Routledge, London, New York, 2001.

Gellner, E., *Naciones y nacionalismo*, Alianza Editorial, 1983, (ed) 2001.

Gibianskii, L., "Tito and Regional Balkan Arrangements", in Henry Huttenbach and Francesco Privitera (eds.), *Self-Determination from Versailles to Dayton. Its Historical Legacy*, Longo, Ravenna, 1999.

Gilbert, P., "Communities real and imagined: good and bad cases for national secession" en Lehnig B., Percy, (ed.), *Theories of Secession, Philosophy & Public Affairs*, Taylor & Francis Group, Routledge. London, New York, 2005.

Gobierno de Kosovo. "State of play in implementation of the Brussels Agreements. Report submitted to the European Union /European External Action Service by the Government of the Republic of Kosova". Prishtina, 16 de enero de 2014.

Griffiths, M. "Self-determination, international society and world order," *Macquarie Law Journal*, vol. 3, 2003.

Gros Espiell, H.:

- "El derecho a la libre determinación de los pueblos y los derechos humanos," en *Estudios sobre derechos humanos I*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985.

- *The Right to Self Determination: Implementation of United Nations Resolutions. Study Prepared by Hector Gros Espiell, Special Rapporteur of the Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 20 junio de 1978.

- En torno al derecho a la libre determinación de los pueblos", *Anuario Español de Derecho Internacional, III*, Universidad de Navarra, 1976.

Hannum, H., "Self-Determination in the Twenty-First Century" en Hannum, H., Babbitt, E., (eds) *Negotiating Self-determination*, Lexington Books, 2006.

Hannum, H., *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination. The accommodation of conflicting rights*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996.

Hasani, E., *Self-determination, Territorial Integrity and International Stability. The Case of Yugoslavia* Viena National Defence Academy Institute for Peace Support and Conflict Management / PfP-Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes, Viena, 2003.

Hechter, M., "Containing Ethnonationalist Violence" en Wimme Rowman, A (ed). *Facing Ethnic Conflicts: Toward a New Realism*, Littlefield Publishers, Lanham, USA.

Hernández Umaña, B. A., *El derecho al desarrollo: fundamentación ética, biociudadanía y núcleo esencial*. Tesis doctoral dirigida por D. José Iturmendi Morales, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2015.

Henrard, K., *Devising an Adequate System of Minority Protection: Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2000.

Henrich, D., *Between Kant and Hegel: Lectures on German Idealism*, Harvard University Press, 2003.

Henriksen, J. B., "The Continuous Process of Recognition and Implementation of the Sami People's Right to Self-determination", *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 21, no. 1, 2008.

Hess, J. *Antisemitism. An encyclopedia of prejudice and persecution*, Ed. Richard S. Levy, ABC-Clio, Santa Barbara, California, 2005.

Hillier, T., *Sourcebook on Public International Law*. Routledge, 1998.

Hilpold, P., "The Right to Self-determination: Approaching an Elusive Concept Through a Historic Iconography", *Austrian Review of International and European Law*, Vol.11, 2006.

Hobbes, T., *Leviathan*, Ed. Gaskin, J.C.A. Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 1998.

Hobsbawn, E., *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Crítica. Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998.

Holder, C., "Self-Determination as a Universal Human Right," *Human Rights Review*, vol. 7, no. 4, 2006.

Holmes, S, y Sunstein, C. R., *El costo de los derechos. Porqué la libertad depende de nuestros impuestos*. Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2011.

Howard, M., Louis, R., *Historia Oxford del siglo XX*, Ed. Planeta, Barcelona.

Huszka, B., *Secessionist Movements and Ethnic Conflict: Debate-Framing and Rhetoric in Independence Campaigns*, Routledge, 2014.

Iglar, R. F., "The constitutional crisis in Yugoslavia and the international law of self-determination: Slovenia's and Croatia's right to secede" *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 15, N. 1, 1992.

Informe del Secretario General "Succession of States in respect of International Human Rights Treaties", UN Doc. E/CN.4/1995/80, 28 de noviembre de 1994.

International Law Association, *Rapport final sur la succession en matière de traits*, London, 2002.

Jennings, I., *The Approach to Self-Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1956.

Jović, D., *Yugoslavia: A State that Withered Away*. Purdue University Press, 2009.

Kamminga, M. T., "State Succession in Respect of Human Rights Treaties", *European Journal of International Law*, 1996.

Kant, I.:

- *Fundamentacion de la metafísica de las costumbres* (Ed) Luis Martínez de Velasco, Espasa Calpe, Austral. Madrid, 2009.

- "En torno al tópico: "Tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica (1793)" en *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*, colección Teorema, Ed. Cátedra, Madrid, 2009.

- "Sobre la paz perpetua (1795)" en *Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita*, Col.Teorema, Ed. Cátedra Madrid, 2009.

Kapitan, T., "Self-determination and International Order", *The Monist*, n.89, 2006.

Kedourie, E., *Nationalism*, Hutchinson University Library, Hutchinson & Co, Londres. Edición revisada, 1961.

Ker-Lindsay, J., "Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo 'Unique Case' Argument", *Europe-Asia Studies*, vol. 65, n. 5, 2013.

Knop, K., *Diversity and Self-Determination in International Law* Cambridge, University Press, Cambridge, 2004.

Kohn, H., *Nationalism: its meaning and history*. Robert E. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, 1965.

Kurelic, Z., 'What can we learn from Lord Acton's criticism of Mill's concept of nationality?', *Politička misao*, XLIII, 2006.

Kymlicka, W.:

- *Liberalism, Community, and Culture*, Oxford University Press, Oxford, 1989.

- *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, Oxford, New York, 1995.

Lampe, J., *Yugoslavia as History. Twice There Was a Country*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Lenin, V. I. :

- “Los cadetes y el derecho de las naciones a la autodeterminación”, *Proletarskaya Pravda*, n. 4, 11 de diciembre, 1913. *Lenin Collected Works*, vol. 19, Progress Publishers, Moscú, 1977.
- “El derecho de las naciones a la autodeterminación”. *Prosveshcheniye* Nos. 4, 5 y 6. abril-junio, 1914. *Lenin's Collected Works*, Progress Publishers, vol. 20, Moscú, 1972.
- “El nacional-liberalismo y el derecho de las naciones a la autodeterminación”, *Proletarskaya Pravda*, 12, 20 de diciembre de 1913. *Lenin Collected Works*, Progress Publishers, vol. 20, Moscú, 1972.
- “Novoye Vremya y Rech sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación” *Proletarskaya Pravda*, 16, 25 de diciembre de 1913. *Lenin Collected Works*, Progress Publishers, Vol 20, Moscú, 1972.
- “El proletariado revolucionario y el derecho de las naciones a la autodeterminación” publicado en 1927, *Lenin Collected Works*, Progress Publishers, Vol 21, Moscú, 1974.
- “*La Revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación*”, escrito entre enero y febrero de 1916 □ y publicado en 1937, *Lenin Collected Works*, Progress Publishers, Vol. 41, Moscú, 1977

Lijphart, A., *Thinking about democracy: power sharing and majority rule in theory and practice*. Routledge. Taylor & Francis Group, Londres, Nueva York, 2007.

Link, A.S., et al., (eds). *The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 45: November 11, 1917-January 15, 1918*, Princeton University Press, 1984.

Locke, J. *Segundo ensayo sobre el gobierno civil*, Ed. Losada, Buenos Aires, 2002.

M.G., “Archduke Franz Ferdinand shot dead by student”, *Manchester Guardian*, 29 de junio de 1914.

Marks, S., “The Human Right to Development Between Rhetoric and Reality”, *Harvard Human Rights Journal*, Vol.17, 2004.

Marshall, P., *Demanding the impossible: a history of anarchism*, Harper Prensial, London, New York, Toronto, Sydney, 1992.

Marusić, S.J., “Macedonia Plans Hospitals for Wealthy Foreigners” *Balkan Insight*, 28/08/2014
Marx K., Engels F., *Manifiesto comunista*. Alianza Editorial. Trad. Pedro Ribas, Madrid, 2012.

Mazzini, G.:

- *Essays: selected from the writings, literary, political, and religious, of Joseph Mazzini*, ed. by

William Clarke, Walter Scott, Londres 1887 (V. digital. Internet Archive/Microsoft Corp., 2008).

- Mazzini, G., *A cosmopolitanism of nations. Giuseppe Mazzini's Writings on democracy, nation building and international relations*. Recchia S. y Urbinati. N. (eds). Princeton University Press, Oxford, 2009.

McCorquodale, R., "Self-Determination: a Human Rights Approach", *International & Comparative Law Quarterly*, 43, no. 4, 1994.

McVay, K., "Self-determination in New Contexts: the Self-determination of Refugees and Forced Migrants in International Law", *Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law*, Vol. 28 n.75, 2012.

McWhinney, E., *Self-Determination of Peoples and Plural-ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-building and the Alternative, Federal Option* Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

Mill, J.S., "Considerations on representative government (1861)" en *Collected works of John Stuart Mill. Volume XIX. Essays on politics and society*, Ed. JM Robson. Vol. XIX. University of Toronto Press. Routledge & Kegan Paul, 1977.

Moneo Laín, A., "La desintegración del régimen titista (1986-1989)", *Balkania. Revista de estudios balcánicos*, n. 2., Embajada de España en Belgrado. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011.

Mrak, M., Rojec M., Silva-Jáuregui, C., (eds). *Slovenia: From Yugoslavia to the European Union*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2004.

Mrdaković-Cvetković, R., "Međunarodni kontinuitet Srbije posle odvajanja Crne Gore", *Međunarodni problemi*, n3, vol LVIII, 2006.

Mujkić, A., *We, The Citizens of Ethnopolis*, Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina, Human Rights Centre, University of Sarajevo, Sarajevo, 2008.

NN.UU. *Treaty Series*, Vol. 1946, 2005.

Neuberger, B., "National Self-determination: a Theoretical Discussion", *Nationalities Papers*, Vol. 29, n. 3 2001.

Newey, G., *Routledge philosophy guidebook to Hobbes and Leviathan*. Routledge. Taylor & Francis Group, London, New York, 2008.

Oficina Alto Comisionado Derechos Humanos Naciones Unidas, *Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación*. Nueva York y Ginebra, 2010. Doc. HR/PUB/10/3

Orentlicher, Diane F., "Separation Anxiety: International Responses to Ethno-Separatist Claim", *Yale Journal of International Law*, n. 23, 1998.

Pestritto, R.J., *Woodrow Wilson and the roots of modern liberalism*. Rowman & Littlefield Publishers. Lanham, Oxford, 2005

Pogge, T., *World Poverty and Human Rights*, Polity, Cambridge, 2004.

Popper, K.:

- *La sociedad abierta y sus enemigos*, Paidós, Barcelona, (2ª reimpr), 2012.

- *La miseria del historicismo*, Alianza / Taurus, Madrid, (3ª reimpr), 2010.

Privitera, F., "Yugoslav Communists Between the National Question and Self-Determination before World War II" en Huttenbach H, Privitera, F., (eds), *Self-Determination from Versailles to Dayton: its Historical Legacy*. Longo, Ravenna, 1999.

Radan, P.:

- "The Badinter arbitration commission and the partition of Yugoslavia" *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Volume 25, Issue 3, 1997.

- *The Break-up of Yugoslavia and International Law*, Routledge. Taylor & Francis Group, London, New York, 2002.

Raič, D., *Statehood and the Law of Self-Determination*, Developments in International Law, vol. 43., Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002.

Rakić-Vodinelić, V., Fajtak, L., et.al., *Influence of Independence of Montenegro on Sensitive Social Groups, Government of the Republic of Montenegro*, Foundation Open Society Institute, UNDP, Podgorica, 6 julio 2006.

Ramet, P.:

- *The Three Yugoslavias: State-building and Legitimation, 1918-2005*, Indiana University Press, 2006.

- *Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1963-1983*, Bloomington, Indiana University Press, 1984.

Rasulov, A., "Revisiting State Succession to Humanitarian Treaties: Is There a Case for Automaticity ?", *European Journal of International Law*, n. 14, 2003.

Remiro Brotons, A., et. al., *Derecho Internacional*, McGraw-Hill, Madrid, 1997.

Renan, E. *¿Qué es una Nación?* Ed Sequitur, Madrid, 2010.

Roepstorff, K., *The Politics of Self-Determination: Beyond the Decolonisation Process*, Routledge, 2012.

Rosas, A., "Internal Self-Determination" en Tomuschat, C. (ed), *Modern Law of Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993.

Rousseau, J.J., *El contrato social*. Ed Alba, Madrid, 1996.

Rusinow, D., *The National Question in Yugoslavia: Oblique Insights and Observations*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2008.

Sai Myo Win, "Secession as an ethnic conflict resolution: the case of the Shan states", Van Walt van Praag, M., Seroo, O., (eds.) *The Implementation of the Right to SelfDetermination as a Contribution to Conflict Prevention Report of the International Conference of Experts held in Barcelona from 21 to 27 November 1998*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace, Centre UNESCO de Catalunya. 1999.

Sartori, G.:

- *Democrazia. Cosa è*, Rizzoli. Milano, 2007.

- *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1995.

Schaumburg-Müller, S., "In Defense of Soft-Universalism- a Modest, yet Presumptuous Position", *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* n. 62 /63., Universidad de Valencia, 2008.

Schmitt, C., *Theory of the Partisan: a commentary/remark on the concept of the political*, Schmitt, C. Duncker & Humblot, Berlin, 1963. Ed. inglés. Michigan State University Press, 2004.

Seara Vázquez, M., "Los límites del principio de autodeterminación de los pueblos", en *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G. E, Pamplona, 1974.

Secretario General de las Naciones Unidas. *Una Agenda para la Paz* Informe del Secretario General. A/47/277. 17 de junio de 1992.

Selassie, H., *Selected Speeches of His Imperial Majesty Haile Selassie I 1918-1967*. Imperial Ethiopian Ministry of Information, Addis Ababa, Etiopía, 1967.

Senese, S., "External and Internal Self-Determination", *Social Justice*, n. 16, 1989.

Seshagiri, L., "Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at International Law", *Harvard International Law Journal*, Vol. 51, n. 2, 2010.

Shaw, M. N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Shoup, P., "Titoism and the national question in Yugoslavia: a reassessment", van den Heuvel, M., Siccama, J., (eds) *The Disintegration of Yugoslavia*, Rodopi B.V., Amsterdam, Atlanta, 1992.

Singleton, F., *A Short History of the Yugoslav Peoples*, Cambridge University Press, 1989.

Smith, D. M., *Mazzini*. Yale University Press, New Haven, 1994.

Smith, J., "Stalin as Commissar for Nationality Affairs, 1918–1922", Davies, S., Harris, J., (eds).

Stalin: a new history. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Smith, R.K.M, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 2007.

Sohn, L. B., "The New International Law: Protection of the Rights of Individuals rather than States", *The American Univeristy Law Review*, Vol. 32, n.1, 1982.

Stalin, J., "Marxism and the national question". Originalmente publicado en *Prosveshcheniye*, Nos. 3-5, marzo-mayo, 1913. Transcripción de Kavanagh, C. Puede consultarse en "Marxists Internet Archive".

Stanić, A., "Financial Aspects of State Succesion: The Case of Yugoslavia", *European Journal of International Law*, n 12, 2001.

Stojanović, D., "O Kosovu, malinama i gej parade", *Peščanik*, Belgrado, 2011.

Strauss, L., *The City and Man*, The University of Chicago Press, Chicago, London, 1964 (ed. 1978).

Summers, J.:

- "The Right of Self-Determination and Nationalism in International Law", *International Journal on Minority and Group Rights*, no. 12, 2005.

- *Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011.

- *Peoples and International Law: How Nationalism and Self-Determination Shape a Contemporary Law of Nations*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Holanda, 2007.

Supreme Court of Canada, "*Secession of Quebec*" ILM, Vol. 37, 1998.

Suzuki, E., "Self-Determination and World Public Order: Community Response to Territorial Separation", *Virginia Journal of International Law*, Vol. 16, 1976.

Swain, G., *Tito: A Biography*, I.B.Tauris, New York, 2011.

Thornberry, P., "The Democratic or Internal Aspect of Self-Determination with some Remarks on Federalism" en Tomuschat, C. (ed), *Modern Law of Self-Determination*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993.

Tito Livio, *Historia. Los orígenes de Roma*. Ed. Akal, Madrid, 1989 (ed. 2000).

Tito, Broz, J.:

- "Concerning the National Question and Social Patriotism Speech held at the Slovene Academy of Arts and Sciences. November 26, 1948" *Tito: Selected Speeches and Articles, 1941-1961*. Publicado Originalmente en *Collected Works, Book IV*, Naprijed, 1963. Obtenido en Marxists

Internet Archive www.marxists.org.

- "Terror by the Fascist Bandits, September 8, 1941", Tito: Selected Military Works. Fuente original *Vojnoizdavački Zavod*, Belgrade, 1966. Obtenido de Marxists Internet Archive, www.marxists.org.

- "Tito: Selected Speeches and Articles, 1941-1961"; Collected Works, Book I, Naprijed, 1963. Disponible en Marxists Internet Archive. www.marxists.org.

- *Govor na narodnom mitingu u Splitu*, Beograd, 1962, Obtenido en: http://www.znaci.net/00001/138_88.pdf

Trbovich, A. S., *Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration*, Oxford University Press, 2008.

Trencsényi, B., "Patriotism and elect nationhood in early modern Hungarian political discourse" en Trencsényi, B. y Zászkaliczky, M. *Whose love of which country?: composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe*, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2010.

Trifunovska, S., *Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution*, Kluwer Academic, Amsterdam, 1994.

Urbanek, V., "The idea of state and nation in the writings of bohemian exiles after 1620" en Linas / Müller, Leos (eds.), *Statehood before and beyond ethnicity: minor states in Northern and Eastern Europe, 1600-2000*, Europe plurielle / Multiple Europes, vol. 33, Berlin, Frankfurt am Main, Nueva York, Oxford, 2005.

Van Walt van Praag, M., Serroo, O., (eds.) *The Implementation of the Right to Self Determination as a Contribution to Conflict Prevention Report of the International Conference of Experts held in Barcelona from 21 to 27 November 1998*, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace, Centre UNESCO de Catalunya, 1999.

Veiga, F., "A veinte años vista del 25 de junio de 1991", *Balkania. Revista de estudios balcánicos* n. 2. Embajada de España en Belgrado. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011.

Viroli, M., *For love of country: an essay on patriotism and nationalism*. Clarendon Press, Oxford, Nueva York, 1995.

Waldron, J., "Theoretical foundations of liberalism" en *Liberal Rights. Collected Papers (1981-1991)*. Cambridge University Press, Cambridge, Nueva York, Victoria, 1993.

Warbrick, C., "States and recognition in International Law", Evans, M.D. (ed), *International Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2003.

Weller, M., *Escaping the Self-determination Trap*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.

Whaley, J., *Germany and the Holy Roman Empire. Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493-1648*, Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 2012.

World Health Organization, "Access to health care in Kosovo's minority areas" Kosovo, May,

2001.

Xanthaki, A. "The Right to Self-Determination: Meaning and Scope", en Ghanea Nazila y Alexandra Xanthaki, eds., *Minorities, Peoples and Self-Determination. Essays in Honour of Patrick Thornberry*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005.

Zimmermann A., "Secession and the law of State succession" en Marcelo G. Kohen (ed.), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

§6.3 Bibliografía Parte III. La relación entre el derecho al desarrollo y el derecho de autodeterminación de los pueblos

Aboulafia, M., *Transcendence. On Self-Determination and Cosmopolitanism*, Stanford University Press, Stanford, 2010.

Acemoglu D., et al., "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth", Aghion, P., Durlauf, S. N., (eds) *Handbook of Economic Growth, Volume 1 A*. Elsevier, 2005

Anaya, J. S., "A Contemporary Definition of the International Norm of Self-Determination", *Transnational Law & Contemporary problems*, n. 3, 1993.

Bauman, Z., *Liquid Modernity*, Polity, Oxford, Cambridge, 2000

Barry, B., *The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines in A Theory of Justice by John Rawls*, Clarendon Press, Oxford University Press, 1973.

Beitz, C., "Rawls's Law of Peoples", *Ethics*, Vol. 110, No. 4, 2000.

Bohlen Ch., "Eslovenia is moving to independence", *The New York Times*. 6 de junio de 1991

Brownlie, I., "The Rights of Peoples in Modern International Law", en Crawford, J., (Ed.) *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, 1988.

Bury, J. B., *The idea of progress: an inquiry into its origin and growth*. The Gutenberg Project. 2010.

Carens, J. H., "Aliens and Citizens: The Case for Open Borders", *The Review of Politics*, n. 49, 1987.

Carty, A., "From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory", *Third World Legal Studies*, Vol. 3, Article 5, 1984.

Christiano, T. "Secession, Democracy and Distributive Justice", *Arizona Law Review* , n. 37, 1995.

Coase, R., "The problem of social cost", *The Journal of Law and Economics*, Vol. III, Oct, 1960.

Cristescu, A., *The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, Nueva York, 1981. Informe:E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1

- Dion, R.R., "Macedonia: Coming in from the cold". *World Affairs*, vol.160, no. 2, 1997.
- Donelly, J., "In search of the unicorn; the jurisprudence and politics of the right to development" *California Western International Law Journal* , n 15, 473, 1985.
- Eisner, M., "A Procedural Model for the Resolution of Secessionist Disputes", *Harvard International Law Journal*, n 33, 1992.
- Erlanger, S., Myers, L., "NATO Endorses Europe Missile Shield", *The New York Times*, 4 de abril de 2008.
- Falcetti, E., et al. "Bridging the gaps? Private sector development, capital flows and the investment climate in South-eastern Europe". *European Bank for Reconstruction and Development. Working paper No. 80* Junio, 2003.
- Femia, J. V., *Pareto and Political Theory*, Routledge, 2006.
- Fioraso, N., "Unamuno, traductor de Spencer". *Pensar la traducción: la filosofía de camino entre las lenguas. Actas del Congreso (Talleres de comunicaciones)*. Septiembre de 2012. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014.
- Fukuda-Parr, S., "The Human Development paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabilities". *Feminist Economics*, vol 9., ns. 2-3, 2003.
- Ghanea N., y Xanthaki, A., (eds.), *Minorities, Peoples and Self-Determination*. Essays in Honour of Patrick Thornberry, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2005.
- Kekic, L., "Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)", *Journal of Southeast European & Black Sea Studies*, vol. 1, n. 1., 2001.
- Kohen, G., (ed.). *Secession. International Law Perspectives*. Cambridge University Press, 2006.
- Lipset, S.M., Rokkan, S., *Party systems and voter alignments: cross-national perspectives*, Free Press, 1967.
- McCorquodale, R., "Self-determination: a Human Rights Approach", *International & Comparative Law Quarterly*, 1994.
- Mrak, M., et al, "The Transition Process in Eslovenia: Transformation to an EU-Compatible Economy". *Journal of International Relations & Development*, vol. 5, n. 1, Marzo, 2002.
- Munoz-Dardé, V., "Fraternity and Justice", Bayertz, K., (ed), *Solidarity*, Philosophical Studies in Contemporary Culture, vol. 5, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1999
- Bolton, P., et al., "Economic theories of the break-up and integration of nations", *European Economic Review*, n. 40., 1996.
- Nagel, T., "The Problem of Global Justice", *Philosophy & Public Affairs*, n. 33, 2005.

Nussbaum, M.C., Cohen, J., (ed) *For love of country? Debating the Limits of Patriotism*, Beacon Press, 1996, ed 2002.

NYT, "Macedonia Embargo Is Halted by Grecia", *New York Times*, 16 de octubre de 1995, P. 3.

Panagiotou, R. A., "Greece and FYROM: the dynamics of economic relations", *Journal of Southeast European & Black Sea Studies*; Vol. 8 n. 3, 2008.

Pogge, T.:

- *Realizing Rawls*, Ithaca, Cornell University Press, 1989.
- *World Poverty and Human Rights*, Polity, Cambridge, 2004.

Schneckener, U., "The Fall of Leviathan. On Self-Determination and Secession", *Law and State*, n. 5, 1998.

Schneider F, Enste, D. "Shadow Economies: Size, Causes, y Consequences", *Journal of Economic Literature*, Vol. 38, 2000.

Sen, A., *On Economic Inequality*, Oxford University Press, 1973, (ed) 1997.

Sengupta Arjun K. "Conceptualizing the right to development for the twenty-first century" en VV.AA *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development* OHCHR publication, United Nations, 2013.

Sengupta, A., "The Human Right to Development", *Oxford Development Studies* 32, No. 2, 2004.

Sorens, J., 2014 (forthcoming). "Legal Regimes for Secession: Applying Moral Theory and Empirical Findings." *Public Affairs Quarterly*. Disponible por el momento en: https://www.academia.edu/8077983/Legal_Regimes_for_Secession_Applying_Moral_Theory_and_Empirical_Findings

Stokes, G., "Popper and Habermas: a reappraisal", *Politics and Policy Studies* Faculty of Arts, Deakin University, Burwood, Australia, 2004. Trabajo presentado en la conferencia Philosophy: problems, aims, responsibilities en honor a Karl Popper (16-18 septiembre de 2004).

Sullivan, E.P., "Liberalism and Imperialism: J. S. Mill's Defense of the British Empire", *Journal of the History of Ideas*, University of Pennsylvania Press, vol. 44, n. 4, 1983.

Tagliabue, J., "Macedonians vote for independence from Yugoslavia", *The New York Times*. 10 de septiembre de 1991

Tesón, F.R., "International Law, Game Theory, and Morality", *A Philosophy of International Law*, Westview Press, 1988.

Tunick, M., "Tolerant Imperialism: John Stuart Mill's Defense of British Rule in India", *The Review of Politics*, University of Notre Dame, Vol. 68, n.4, 2006.

UNDP. *Human Development Report 2010*. <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/>

US Department of State. Bureau of European y Eurasian Affairs. "Background Note: Eslovenia".

Veiga, F., *La trampa balcánica*, Grijalbo, Barcelona, 2001.

Villaverde Menéndez, I., "Los límites a los derechos fundamentales", en VV.AA., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Tecnos, Madrid, 2004.

Weller, M., "The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", *The American Journal of International Law*, Vol. 86, No. 3, 1992.

§7 Thesis summary

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT TO DEVELOPMENT AND THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION: AN EXPLORATION IN LIGHT OF THE YUGOSLAVIAN CASE

Introduction

This thesis explores the relationship between the right to development and the right to self-determination as human rights. Both rights have been described as principles of International Law, as prerequisites for the realization of all human rights, but they have also been defined as proper human rights, as it is claimed by the United Nations. Both rights have been described as third generation rights or solidarity rights, and also as separate rights with a dynamic dimension as processes. However autonomous both rights may be, an intimate connection between the two has been widely accepted, which finds its roots in the connection between the evolving concepts of self-determination and development. These concepts have also gradually changed in the last decades, opening and widening their meaning: self determination from a political concept to a holistic understanding which includes economic and even personal autonomy, and development from a mere economic growth to a complex and inclusive concept comprising a continuous process of expansion of freedoms. In this sense, article 1 common to both 1966 International Covenants of Human Rights states that: “all peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”. Twenty years later, the Declaration on the Right to Development of 1986 stated in its article 1.2 that the human right to development “implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources”. The formulation of the right to development as a human right, which has been increasingly accepted, opened the door to understanding the relationship between both concepts as the relationship between two human rights, which according to the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action should hold certain characteristics as “all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated”.

While the right to self determination and the right to development have been widely studied, particularly the former, little attention has been paid to the relationship between them as such, and to the potential consequences of accepting the adjective characteristics of universality, indivisibility and interdependency. The content and realization of the right to self-determination has been the topic of considerable discussion and different interpretations, but the acceptance of the right to development as a human right, and therefore, the interplay between both rights as human rights, offers in return a more precise framework in which the right to self-determination should be understood. Under this point of view, the influence on the content is reciprocal, so the right of development should be understood with respect to the right to self-determination, and other human rights, therefore allowing the understanding of both rights to be implemented in the

specific framework of international human rights.

The study of the relationship between both rights has been carried out under a three-dimensional perspective: normative, based on the analysis of International Law, in which we find the description of both the right to self-determination and the right to development; axiological, based on the foundation values of human rights; and factual, considering the actual projection of the relationship in the realms of political implementation. In order to complete this factual dimension, the relationship between the right to development and the right to self-determination is examined in light of the Yugoslavian case.

The case study has been selected because of its special and close relationship with the birth and evolution of both human rights: the right to development, as the Yugoslavian state was one of the most keen advocates of the recognition of the right to development, and the right to self-determination, a right that was specifically recognized in the Yugoslavian Constitution and differently interpreted and applied during the process of disintegration. Considering that the main object of study is the relationship between these two rights as such, the case study is approached methodologically to provide examples of different aspects of the relationship under analysis.

Aim and objectives

The aim of the thesis, therefore, is to explore the relationship between the right to self-determination and the right to development in light of the Yugoslavian case. In order to do so, the objective was set to be the three-dimensional analysis of each right, allowing for an in-depth comparison while shaping the work's structure.

Structure and results

The thesis is structured as follows:

The introduction includes a justification and general approach to the topic of discussion, structure, as well as the methodology of research, which includes a general methodological approach and a description of the methodological research techniques used.

The first part analyses the right to development as a human right. This first part is further divided into two sections: firstly, a general analysis is carried out of the sources of law, foundations, definition, content of the right, right holders, duty bearers and obligations under the law and legal validity. The relevant content delimitation and definition of the right to development is underlined, which will be consequently used in the confrontation with the right to self-determination; secondly, the interpretation and application of the right to development as a human right is analysed in light of the case study. In addition, this section considers the degree of involvement and theoretical commitment of the former Yugoslavia to the recognition of development as a human right.

The second part studies the right to self-determination. As in the previous section, this part is also divided in a general study, which includes a critical examination of definitions, content of the right, right holders, duty bearers, obligations under the law, and an exploration of the interpretation and realization of the right in relation to the case study.

The third part confronts the different aspects of both rights, exploring the relationship between the right to development and the right to self-determination as human rights. The relationship is first analyzed in the letter of the law, as the right to development *implies* the right to self-determination, a right by virtue of which peoples “freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development” which requires the free disposal of natural wealth and resources, a requisite although necessary, still insufficient. Considering this framework the relationship is then explored confronting the definition and contents of both rights given by relevant authors. Particularly, the UN international expert Arjun Sengupta’s operational definition of the right to development, which requires that the development vector $dD_R = (dR_1, dR_2... dR_n, g^*)$ should be at least not negative, is confronted with various definitions of the right to self-determination, including external self-determination and the different definitions of self-determination. It is also confronted with the UN Special Rapporteur James Anaya’s on-going and constitutive aspects of self-determination, considering that both aspects may be combined with the external and internal definitions of self-determination, as the state is, still today, the main political unit in which distributive justice is realized. Because Sengupta’s vector is defined formally, not considering the interplay with different concepts of self-determination, the way the right to self determination may be placed in relation to the vector is explored, both as an element or elements of the vector, and as the criteria to define the group to which the vector is applied. Thus, we can get an integrative concept in which development and different conceptions of self-determination, may be simultaneously understood in the same vector as long as all its remaining elements are respected: $D_R(P) = (dR_1, dR_2, dR_{A1}, dR_{A2}, dR_{A3}... dR_n, g^*)$. This integrative concept opens the door to argue that the result of a positive development vector when applied to a certain group cannot result, per se, in a negative vector for other groups.

The third part is completed with an exploration of the factual effects on development of particular interpretations of the right to self-determination, focusing on the effects on processes of development caused by setting new borders following a process of state disintegration. If the realization of the right to development should modulate the right to self-determination, it needs to be demonstrated that different understandings and particular interpretations of the right to self-determination have different direct effects on development processes. Because internal (on-going and constitutive) self-determination and external on-going self-determination had been considered throughout previous sections, the third part concludes demonstrating that external and constitutive self-determination has direct effects on the levels of realization of the right to development.

Conclusions

The progressive acceptance of a right to development and the right to self-determination as human rights requires considering the relation between the two as the relation between two human rights, and therefore universal, inviolable, indivisible and interdependent. Thus, a reciprocal relation between both rights means that not only the realization of the right to development implies the full realization of the right to self-determination, but that the multiple definitions and contents given to the right to self-determination are limited and bounded by the realization of the right to development. The inviolability and interdependency of both rights implies that the realization of self-determination, whether external or internal, and in its constitutive and on-going aspects, must respect the right to development, in a way that its realization should not cause, by itself, a negative vector of development.

Considering the right to development as a vector, different interpretations of the right to self determination may be understood as various elements of the vector, together with the increasing realization of all human rights and increasing available resources, and can be simultaneously understood as the definition of the human group to which the vector is applied (coinciding with the concept of constitutive self-determination). This point of view allows to integrate the internal/external self-determination with the on-going/constitutive aspects of self-determination in a human rights approach.

While keeping all development vectors positive might be argued as criteria for the realization of self-determination in its different aspects, particularly secession, it is difficult to be applied in particular cases of state disintegration, because the creation of new borders is considered as a completed process and therefore a divergence between vectors is to be expected. Two proposals are explored in cases of external constitutive self-determination which lead to disintegration as minimums in order to respect the realization of the right to development: a) integrative negotiation with a human rights approach and d) development of international law on succession of states.

Regarding the case study, the conclusion is that even though the Yugoslavian state had an important role in the promotion of development as a human right, the implications of its recognitions were not fully acknowledged when considering all interpretations of the right to self-determination, particularly during the process of disintegration. As human rights are still mainly realized inside national borders, variations lead to divergent processes of development. New international borders in ex Yugoslavia are coincidental with an increase in the development differences between the more developed and less developed republics. Moreover, the full realization of the right to development as a human right was not taken into account during the disintegration processes, favouring instead political interpretations of self-determination. However, certain evolution has been observed in key documents in the region, as an increasing human rights and development approach has been progressively adopted, although failing to reach a fully comprehensive development and human rights approach to self-determination.

